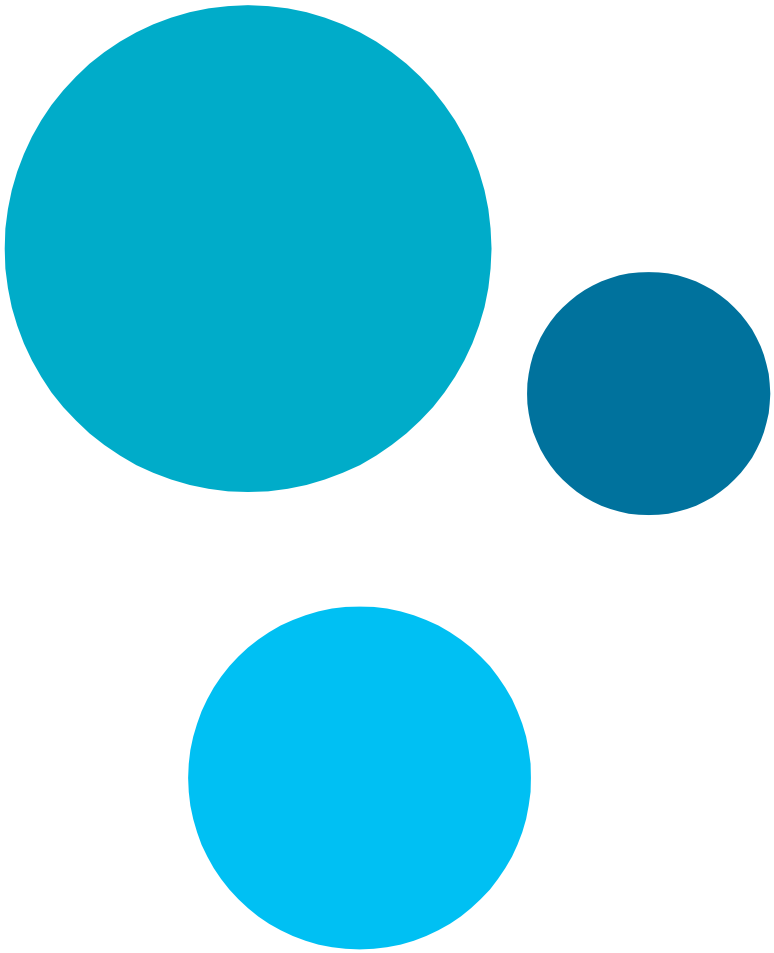
el Justicia de Aragón

INFORME
ESPECIAL 2012

INFORME SOBRE EL ESTADO DE OBSERVANCIA, APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ARAGONÉS



ÍNDICE

RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD, CUESTIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD Y CONFLICTOS DE COMPETENCIA INTERPUESTOS, EN TRAMITACIÓN Y RESUELTOS DURANTE 2012 • 4

1. Recursos de inconstitucionalidad • 6

1.1. Interpuestos por el Gobierno de la Nación o Comunidades Autónomas • 6

1.2. Interpuestos por el Gobierno de Aragón o por las Cortes de Aragón. • 7

2. Cuestiones de inconstitucionalidad • 69

3. Conflictos de competencia • 70

ESTADO DE OBSERVANCIA, APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DEL DERECHO CIVIL ARAGONÉS EN 2012 • 87

1. Observancia y aplicación del Derecho Civil Aragonés • 88

1.1. Resumen por Juzgados y Tribunales - Año 2012 • 88

1.2. Resumen por Juzgados y Tribunales - periodo 1990/2012 • 89

1.3. Listado de la Jurisprudencia Civil aragonesa, por fechas y por materias • 90

2. Interpretación de Derecho Civil Aragonés • 193

2.1. Interpretación judicial • 193

2.2. Interpretación doctrinal • 666

APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DEL DERECHO PÚBLICO ARAGONÉS • 676

1. Sentencias dictadas durante 2012 en las que se declara la nulidad total o parcial de normas de derecho público aragonés • 677

2. Interpretación doctrinal del Derecho Público Aragonés • 686

ACTUACIONES CONDUCENTES A LA DIFUSIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ARAGONÉS • 687

RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD, CUESTIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD Y CONFLICTOS DE COMPETENCIA INTERPUESTOS, EN TRAMITACIÓN Y RESUELTOS DURANTE 2012

1. RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD

1.1. Interpuestos por el Gobierno de la Nación o Comunidades Autónomas

A) RECURSOS INTERPUESTOS EN 2012

Durante el año 2012, no se ha interpuesto recurso alguno de inconstitucionalidad por parte del Gobierno de la Nación o de las Comunidades Autónomas respecto de normativa aragonesa.

B) RECURSOS INTERPUESTOS EN ANTERIORES AÑOS Y QUE ESTÁN AÚN EN TRAMITACIÓN.

- Recurso de inconstitucionalidad nº 6720-2011, en relación con los artículos 6 y 10 de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 20 de diciembre de 2011, admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad indicado, promovido por el Presidente del Gobierno contra los artículos 6 y 10 de la mencionada Ley. La invocación por parte del Presidente del Gobierno del artículo 161.2 de la Constitución conllevó la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados desde la fecha de interposición del recurso -9 de diciembre de 2011- para las partes del proceso, y desde la publicación del edicto en el BOE para terceros. Posteriormente, el Pleno del Tribunal Constitucional, en virtud de auto de 17 de abril de 2012, acordó levantar la suspensión de la vigencia de los preceptos impugnados (BOE nº101, de 27 de abril de 2012).

- Recurso de inconstitucionalidad nº 6868-2011, contra la disposición adicional sexta de la Ley 5/2011, de 10 de marzo, del Patrimonio de Aragón.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 17 de enero de 2012, admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad indicado, promovido por el

Presidente del Gobierno contra la disposición adicional sexta de la mencionada Ley.

- Recurso de inconstitucionalidad nº 2725-2010, en relación con diversos preceptos de la Ley de la Comunidad Autónoma de Aragón 9/2009, de 22 de diciembre, reguladora de Concejos Abiertos de Aragón.

El Tribunal Constitucional, por providencia de 14 de abril de 2011, admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad indicado, promovido por el Presidente del Gobierno, contra los artículos 3.a), 8, 16.2, 17 y las disposiciones adicionales primera y segunda, y la disposición transitoria única de la mencionada Ley. (BOE nº 96, de 21 de abril de 2010). La invocación por parte del Presidente del Gobierno del artículo 161.2 de la Constitución conllevó la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados desde la fecha de interposición del recurso -30 de marzo de 2010- para las partes del proceso, y desde la publicación del edicto en el BOE para terceros. Posteriormente, el Pleno del Tribunal Constitucional, en virtud de auto de 22 de julio de 2010, acordó levantar la suspensión de la vigencia de los preceptos impugnados (BOE nº 187, de 3 de agosto de 2010).

C) SENTENCIAS DICTADAS EN 2012.

Durante el año 2012, el Tribunal Constitucional no ha dictado sentencia alguna en relación con recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Gobierno de la Nación o las Comunidades Autónomas respecto de normativa aragonesa.

1.2. Interpuestos por el Gobierno de Aragón o por las Cortes de Aragón.

A) RECURSOS INTERPUESTOS EN 2012.

Durante el año 2012, no se ha interpuesto recurso alguno de inconstitucionalidad por parte del Gobierno de Aragón o las Cortes de Aragón.

B) RECURSOS INTERPUESTOS EN ANTERIORES AÑOS Y QUE ESTÁN AÚN EN TRAMITACIÓN.

En el año 2012, el Tribunal Constitucional ha continuado la tramitación de los siguientes recursos interpuestos por el Gobierno de Aragón o por las Cortes de Aragón:

- Recurso de inconstitucionalidad nº 1870-2011, en relación con diversos preceptos de la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 12 de abril de 2011, admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad indicado, promovido por el Gobierno de Aragón contra los arts. 1, apartado 3; 5; 8 apartado 6, segundo párrafo; 9, apartados 6 y 7; 10, apartados 4, 6 y 7; 11, apartados 1, 2 y 3; 26, apartados 1, 3, 4 y 5; 27 y disposiciones transitoria primera y final undécima de la mencionada Ley.

- Recurso de inconstitucionalidad número 1.756-2002, promovido por las Cortes de Aragón en relación con varios preceptos de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

El Tribunal Constitucional, por providencia de 23 de abril de 2002, admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad número 1.756-2002 (B.O.E. nº 112, de 10 de mayo de 2002).

El recurso se interpone contra los artículos 4.3; 9.2; 15.2; 20.3; 34.1; 35.6; 37; 38; 42.3; 45 y las disposiciones adicionales primera y cuarta de dicha Ley.

- Recurso de inconstitucionalidad número 596-2004, promovido por el Gobierno de Aragón contra determinados preceptos de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

El Tribunal Constitucional, por providencia de 24 de febrero de 2004, admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad número 596-2004 (B.O.E. nº 59, de 9 de marzo de 2004).

El recurso se interpone contra los artículos 139, 189, 190, 191 y disposición adicional 19ª de dicha Ley.

- Recurso de inconstitucionalidad número 931-2004, promovido por el Gobierno de Aragón contra determinados preceptos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

El Tribunal Constitucional, por providencia de 23 de marzo de 2004, admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad número 931-2004 (B.O.E. nº 83, de 6 de abril de 2004).

El recurso se interpone contra los artículos 3.4; 5.2; 7.2 y 3; 6.2; 8.1 y 2; 12,1; 13.5 y 7; 14.1. e) y h); 15.1.a) y b); 16.1 y 5; 18.4; 19.5; 22.1; 29.3; 29.7. b) y e); 30.5; 31.2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8; 37.1. d) y f); 45.2. c); 56, primer inciso, c) y d), 57. e); 58. d); 67. 2 y 3 y disposición final primera de dicha Ley.

- Recurso de inconstitucionalidad número 1.741-2004, promovido por el Gobierno de Aragón contra la disposición final primera de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del Gobierno Local.

El Tribunal Constitucional, por providencia de 13 de abril de 2004, admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad número 1.741-2004 (B.O.E. nº 102, de 27 de abril de 2004).

El recurso se interpone contra la disposición final primera de la Ley 57/2003, en la medida en que declara básicos los siguientes artículos recogidos en su artículo primero 1 y 3; art. 4.2 en el inciso que reza "*excepto en el supuesto de las mancomunidades, que se rigen por lo dispuesto en el apartado siguiente*"; art. 4.3; art. 13.3; art. 20.1.d); art. 36.1.c) y d); art. 70.1, párrafo segundo que reza "*No son públicas las sesiones de la Junta de Gobierno Local*", art. 85.2. B); art. 70 bis 1; art. 85 bis 1 desde "*... con las siguientes especialidades*" hasta el final; art. 85 bis 2; art. 123.1. c); art. 131 y art. 132.

- Recurso de inconstitucionalidad número 2.144-2004, promovido por el Gobierno de Aragón contra determinados preceptos de la Ley 63/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

El Tribunal Constitucional, por providencia de 27 de abril de 2004, admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad número 2.144-2004 (B.O.E. nº 120, de 18 de mayo de 2004).

El recurso se interpone contra los artículos 126.1, 126.2 y 126.3, que modifican, respectivamente, los arts. 22.3, 23.4 y 23 ter todos ellos de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre; artículo 127.3, que introduce una nueva Disposición Adicional cuarta al Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, sobre evaluación ambiental de los planes y proyectos estatales previstos en el artículo 6 del Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la

biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres; artículo 127, que modifica la disposición final tercera del citado Real Decreto Legislativo 1302/1986; el artículo 128.2, que modifica el artículo 27.4, párrafo segundo, de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos; y el artículo 129, en su totalidad, sobre modificación del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto 1/2001, de 20 de julio, por el que se incorpora al derecho español la Directiva 2000/60/CE por la que se establece un marco comunitario y de actuación en el ámbito de la política de aguas, todos incluidos en el título V, capítulo V, sobre acción administrativa en materia de medio ambiente, de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

C) SENTENCIAS DICTADAS EN 2012 SOBRE RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD.

- Sentencia 184/2012, de 17 de octubre de 2012. Recurso de inconstitucionalidad número 1.601-2003, promovido por el Gobierno de Aragón contra varios preceptos de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación.

El Tribunal Constitucional, por providencia de 8 de abril de 2003, admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad número 1.601-2003 (B.O.E. nº 97, de 23 de abril de 2003).

El recurso se interpone contra los artículos 6; 10, apartados 2 y 4; 11, apartado 2; 13; 26, apartados 2 y 5; 29, apartado 3; 31, apartado 2; 35, apartado 4; 37, apartado 1; 38, apartado 5; 40, apartado 2; 43, apartado 3; 49, apartado 5; 59, apartados 1 y 2; 75, apartado 5; 85, apartado 3; disposición adicional tercera, apartados 1, 3 y 4; disposición adicional quinta, apartados 2 y 3; disposición adicional decimonovena; disposición transitoria sexta, apartado 2; y disposición final décima de dicha Ley.

El Tribunal Constitucional desestima el recurso con los siguientes argumentos:

"*4. (...) De acuerdo con ello procede, en primer lugar, comenzar con la impugnación de las disposiciones adicionales tercera, apartado 3, segundo inciso, y quinta, apartado 3, a las que el recurrente reprocha un grado excesivo de generalidad que resultaría incompatible con su proclamada condición de norma básica.*

a) De la primera de ellas, relativa a los libros de texto y demás materiales curriculares, ha sido impugnado el segundo inciso de su apartado 3, apartado que, en su integridad, establece lo siguiente: «La supervisión de los libros de texto y otros materiales curriculares constituirá parte del proceso ordinario de inspección que ejerce la Administración educativa sobre la totalidad de elementos que integran el proceso de enseñanza y aprendizaje. La vulneración de los principios y valores contenidos en la Constitución dará lugar a la imposición de las sanciones administrativas que, en desarrollo de lo dispuesto en este apartado, las Administraciones educativas establezcan.»

Para el Letrado autonómico el precepto no contiene una intervención normativa del Estado con el grado de intensidad que vendría exigido por el art. 149.1.1 CE a fin de predeterminar la posterior intervención autonómica. La Abogada del Estado ha negado la vulneración denunciada señalando, además de que la impugnación es prematura, que el contenido del inciso cuestionado entra dentro del margen del legislador básico estatal y que ha de interpretarse en relación con la restante regulación de la Ley Orgánica de calidad de la educación sobre los libros de texto y materiales curriculares. Por

su parte, el Letrado del Senado ha señalado que se trata de una norma mínima circunscrita al respeto de los principios y valores constitucionales suficientemente desarrollados en el apartado 2 del precepto legal.

Centrada así la cuestión partiremos para resolverla de nuestra doctrina en torno al art. 149.1.1 CE. Así, como recuerda la STC 188/2001, de 20 de septiembre, FJ 12, «[d]esde una perspectiva de delimitación negativa, hemos manifestado, en lo que aquí interesa, que el art. 149.1.1 CE "no ha atribuido al Estado la fijación de las bases sobre los derechos y libertades constitucionales, sino sólo el establecimiento —eso sí, entero— de aquellas condiciones básicas que tiendan a garantizar la igualdad", de manera que "su regulación no puede suponer una normación completa y acabada del derecho y deber de que se trate y, en consecuencia, es claro que las Comunidades Autónomas, en la medida en que tengan competencia sobre la materia, podrán aprobar normas atinentes al régimen jurídico de ese derecho" [STC 61/1997, de 20 de marzo, FJ 7 a)]. En cuanto a su delimitación positiva, hemos dicho en la misma Sentencia que «las condiciones básicas hacen referencia al contenido primario (STC 154/1988) del derecho, a las posiciones jurídicas fundamentales (facultades elementales, límites esenciales, deberes fundamentales, prestaciones básicas, ciertas premisas o presupuestos previos). En todo caso, las condiciones básicas han de ser las imprescindibles o necesarias para garantizar esa igualdad, que no puede consistir en una igualdad formal absoluta. Como hemos insistido, si por condiciones básicas hubiera de entenderse cualquier condición material, obligado sería concluir que esa interpretación tan amplia habría de conducir a un solapamiento con otras competencias estatales explicitadas en el art. 149.1 CE o, lo que es peor, a una invasión de las competencias autonómicas.» En conclusión, según nuestra doctrina, el art. 149.1.1 CE «constituye un título competencial autónomo, positivo o habilitante, constreñido al ámbito normativo, lo que permite al Estado una regulación, aunque limitada a las condiciones básicas que garanticen la igualdad, que no el diseño completo y acabado de su régimen jurídico», por lo que «el art. 149.1.1 CE no debe ser entendido como una prohibición de divergencia autonómica» [STC 61/1997, FJ 7 b)].

Teniendo en cuenta que las condiciones básicas a las que hace referencia el art. 149.1.1 CE, que habilita al Estado junto con la normativa básica a que se refiere el art. 149.1.30 CE para hacer efectiva la igualdad en el ejercicio del derecho a la educación, deben hacer referencia al contenido primario del derecho y a las posiciones jurídicas fundamentales relativas al mismo, no es posible apreciar la vulneración que se denuncia.

En efecto, la previsión de la norma estatal ha de ser interpretada sistemáticamente y entendida en el contexto en el que la misma se inserta. Así, se relaciona con la proclamada libertad en la edición y adopción de libros y materiales curriculares, que no requerirán la previa autorización de la Administración educativa, conforme establece el apartado primero de la propia disposición adicional tercera, así como con el apartado segundo, relativo a los principios, valores, libertades, derechos y deberes constitucionales a los que ha de ajustarse toda la actividad educativa cuyo respeto ha de reflejarse y fomentarse en los libros de texto y demás materiales curriculares y, por último, en relación con los arts. 1 a 3 de la Ley Orgánica de calidad de la educación que establecen los principios por los que se rige el

sistema educativo así como los derechos y deberes de padres y alumnos. Finalmente, una previsión como la que examinamos puede entenderse igualmente conforme con el reconocimiento de autonomía pedagógica de los centros docentes, en los términos del art. 67 de la Ley Orgánica de calidad de la educación, así como con las competencias autonómicas para el establecimiento del currículo de los distintos niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades del sistema educativo, que deberá incluir las enseñanzas comunes en sus propios términos (art. 8.3 de la Ley Orgánica de calidad de la educación) y, por último, con las competencias autonómicas en materia de inspección del sistema educativo en los términos de nuestra doctrina (STC 6/1982, de 22 de febrero) y a las que alude el inciso inicial del propio apartado 3 de la disposición adicional tercera. Conforme a todo ello, es posible apreciar que, en definitiva, se trata de un mandato de desarrollo normativo dirigido a las Administraciones educativas competentes en materia de inspección que, como es lógico, habrá de respetar los principios que, de conformidad con la doctrina constitucional, informan la potestad sancionadora de las Administraciones públicas (por todas STC 8/2012, de 18 de enero, FJ 11, y doctrina allí citada).

Por tanto no se aprecia la vulneración competencial denunciada, sin que, por lo que ya hemos expuesto en el fundamento jurídico 2, proceda examinar las denunciadas infracciones del art. 25 CE.

b) El segundo de los preceptos impugnados por lo que se considera un excesivo grado de generalidad en el establecimiento de las bases es la disposición adicional quinta, relativa a los criterios de admisión de alumnos en los centros sostenidos con fondos públicos en caso de no existir plazas suficientes. En concreto lo cuestionado es la consideración como criterios prioritarios de la «concurrencia de discapacidad en el alumno o en alguno de sus padres o hermanos y condición legal de familia numerosa» así como «la concurrencia en el alumno de enfermedad crónica que afecte al sistema digestivo, endocrino o metabólico y exija como tratamiento esencial el seguimiento de una dieta compleja y un estricto control alimenticio cuyo cumplimiento condicione de forma determinante el estado de salud física del alumno», criterios ambos establecidos en el apartado 3 de esta disposición adicional quinta.

El Letrado del Gobierno de Aragón estima que se trata de una norma excesivamente indefinida e imprecisa en lo relativo a la ponderación de tales criterios, lo que sería incompatible con su condición de norma básica en materia educativa. El Letrado del Senado rechaza tal imputación pues entiende que se trata de unos criterios que constituyen un mínimo necesario en la regulación de esta materia. Por su parte, la Abogada del Estado ha señalado que tales criterios, en tanto que prioritarios, deben ser incluidos en la regulación que al efecto establezcan las Administraciones educativas, sin que necesariamente hayan de recibir la misma ponderación.

Respecto a los criterios de admisión de alumnos, ya establecimos en la STC 77/1985, FJ 5, la conformidad constitucional de la fijación por el legislador estatal de una serie de criterios objetivos de selección de los alumnos en los casos de insuficiencia de plazas en los centros públicos y concertados, competencia estatal para el establecimiento de criterios prioritarios de selección que no ha sido cuestionada por el recurrente, quien se ha limitado a

discutir la forma en que dos de ellos han sido regulados. Señalado lo anterior, es de apreciar que, al igual que sucede con los restantes criterios previstos en el precepto —renta per cápita de la unidad familiar, proximidad del domicilio, existencia de hermanos matriculados en el centro, y expediente académico en el caso de las enseñanzas no obligatorias—, el legislador estatal se ha limitado a la fijación de unos criterios que, como reza la propia disposición adicional quinta, han de ser concretados por la regulación de la Administración educativa competente. Se cumple así la función de ordenación propia de las bases estatales, por cuanto es su consideración como prioritarios y su carácter objetivo, lo que impide, caso de insuficiencia de plazas, una selección arbitraria de alumnos, correspondiendo la ponderación concreta de los criterios establecidos por el legislador básico a las Administraciones educativas en el ejercicio de sus competencias en la materia, tal y como, por otra parte, dispone el propio art. 73 del Estatuto de Autonomía de Aragón. Por dicha razón, no es posible estimar la vulneración constitucional denunciada.

En mérito de todo lo expuesto debemos desestimar la impugnación de las disposiciones adicionales tercera, apartado 3, segundo inciso, y quinta, apartado 3, de la Ley Orgánica de calidad de la educación.

5. Examinaremos ahora la impugnación de los arts. 10.2 y 4; 11.2; 85.3; disposición adicional tercera, apartados 1 y 4, y disposición transitoria sexta, apartado 2, preceptos a los que la demanda formula el reproche común de que la normativa básica en ellos contenida excedería de lo que ha de entenderse por tal, invadiendo de ese modo competencias propias de la Comunidad Autónoma de Aragón.

a) El primer precepto impugnado es el art. 10.2 de la Ley Orgánica de calidad de la educación, relativo a la educación preescolar, de carácter voluntario y dirigida a los niños de hasta tres años de edad, que dispone:

«Corresponde a las Comunidades Autónomas, de acuerdo con la normativa básica que sobre los aspectos educativos de esta etapa establezca el Gobierno, la organización de la atención dirigida a los niños de esta etapa educativa y el establecimiento de las condiciones que habrán de reunir los centros e instituciones en que se preste. Establecerán, asimismo, los procedimientos de supervisión y control que estimen adecuados.»

Para la representación procesal del Gobierno de Aragón esta disposición contiene una remisión prácticamente en blanco a la potestad reglamentaria del Gobierno en un ámbito en el que, por sus características de voluntariedad, la intervención normativa estatal debería ser de menor intensidad que en la enseñanza obligatoria y, por tanto, el ámbito dispositivo que debería dejarse a las Comunidades Autónomas habría de ser mucho mayor. El Letrado del Senado por su parte ha defendido la posibilidad de desarrollar por vía reglamentaria los aspectos educativos de esta etapa. La Abogada del Estado ha señalado que la remisión al Gobierno obedece a la necesidad de completar la regulación de la Ley Orgánica de calidad de la educación en lo que respecta a los aspectos básicos de este nivel educativo, sin que resulte admisible la diferencia entre enseñanza obligatoria y no obligatoria que, al efecto de modular la intervención básica estatal, se formula en la demanda.

Dado que lo cuestionado es la posibilidad de establecimiento por el Gobierno de normativa básica mediante disposiciones de rango reglamentario hemos de comenzar recordando que, como antes ha quedado expuesto, nuestra doctrina ha admitido dicha posibilidad en el ámbito educativo (así, STC 77/1985, de 27 de junio, FJ 16), de lo que se deduce que el Gobierno puede hacer uso de la potestad reglamentaria, para regular por Decreto alguno de los preceptos básicos de una materia, cuando resulten, por la naturaleza de ésta, complemento necesario para garantizar el fin a que responde la competencia estatal sobre las bases.

Tal es lo que sucede en este caso por cuanto la remisión al Gobierno —limitada a la regulación de los aspectos educativos de esta etapa— responde al hecho de que la Ley Orgánica de calidad de la educación no puede pretender agotar todos los aspectos básicos de cualquier nivel educativo. Así, resulta que el cuestionado art. 10.2 se inserta en la competencia estatal de ordenación del sistema educativo, del que, indudablemente, forma parte esta etapa, y ha de atenerse a los principios pedagógicos que formula el art. 10.5 de la Ley Orgánica, precepto que concreta los aspectos a los que ha de prestarse atención en esta fase de educación. Extremos todos ellos que permiten descartar las alegaciones en las que se funda la tacha de inconstitucionalidad formulada.

Resulta así también que nos hallamos ante una impugnación preventiva, vedada por nuestra doctrina, sin que, por otra parte, nada impidiera que, si el Gobierno, al dictar las correspondientes normas reglamentarias en virtud de esa remisión, extendiera su regulación a aspectos no básicos pudiera plantearse el oportuno conflicto de competencias a fin de examinar si se hubiera producido o no la extralimitación en el ámbito competencial estatal. Ahora bien, la mera remisión en abstracto a las normas reglamentarias para regular materias básicas no tiene por qué suponer necesariamente que esas normas vulnerarían las competencias asumidas por las Comunidades Autónomas, ni puede, por lo que hemos dicho, reputarse, sin más, inconstitucional.

Tampoco el hecho de que se trate de una etapa educativa no obligatoria justifica un planteamiento como el efectuado por el Letrado autonómico, para quien dicho carácter no obligatorio, en cuanto que depende de la previa decisión familiar, determinaría una intervención normativa del Estado de menor intensidad que la prevista en otras etapas educativas. Frente a tal planteamiento es preciso señalar que la educación preescolar forma indudablemente parte del sistema educativo, tal como dispone el no impugnado art. 7 de la Ley Orgánica de calidad de la educación en sus apartados 1 y 2, norma que, por lo demás, deja claramente establecido que la escolarización en esta etapa educativa depende de la decisión de los padres, voluntariedad de la decisión paterna que, como es evidente, en nada afecta a las responsabilidades que las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, han de asumir como consecuencia de la inclusión de la educación preescolar en el sistema educativo y que se concretan, entre otras, en la necesidad de garantizar la existencia de un número de plazas suficientes para asegurar la escolarización de la población que la solicite.

En suma, la impugnación del art. 10.2 de la Ley Orgánica de calidad de la educación ha de ser desestimada.

b) El segundo precepto impugnado en este grupo es el último inciso del art. 10.4 de la Ley Orgánica de calidad de la educación, precepto que, tras establecer que la educación preescolar tiene carácter voluntario para los padres, dispone: «Las Administraciones competentes atenderán a las necesidades que concurran en las familias y coordinarán la oferta de plazas suficientes para satisfacer la demanda.

El Letrado autonómico considera que el precepto impone la obligación de que la Administración autonómica atiendan a las necesidades que concurran en las familias respecto a la educación preescolar, lo que conculcaría las competencias autonómicas exclusivas en materia de asistencia social, vulneración que es negada tanto por el Letrado del Senado como por la Abogada del Estado.

La impugnación no puede ser estimada pues el carácter educacional asistencial de esta fase de la educación en nada obsta a su integración en el sistema educativo nacional, lo que justifica su regulación por el Estado llevada a cabo en la Ley Orgánica de calidad de la educación. Por otra parte, la referencia a la atención a las necesidades de las familias ha de entenderse en relación, tanto con el carácter voluntario de la educación preescolar para las familias, como con la ya aludida necesidad de que existan plazas suficientes para garantizar la escolarización de la población que la solicite, en unos términos que, con carácter muy similar, venían ya establecidos en el art. 7.2 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación general del sistema educativo.

c) Los siguientes preceptos cuestionados son el art. 11.2 y, en conexión con él, la disposición transitoria sexta, apartado 2, así como, en cuanto que guardan una relación de instrumentalidad con aquellos, el art. 75 y la disposición adicional decimonovena de la Ley Orgánica de calidad de la educación. El primero de ellos, relativo a la educación infantil, dispone, como uno de los principios generales que han de regir esta etapa educativa, que «[l]as Administraciones educativas garantizarán la existencia de puestos escolares gratuitos en centros públicos y en centros privados concertados para atender la demanda de las familias». Por su parte, la disposición transitoria sexta, apartado 2, establece, en lo que aquí importa que «[l]os conciertos, convenios o subvenciones aplicables a los centros de segundo ciclo de Educación Infantil se referirán a conciertos de Educación Infantil, una vez se implanten estas enseñanzas.»

El Letrado autonómico cuestiona el último inciso del art. 11.2 y, en consecuencia, también el apartado transcrito de la disposición transitoria sexta, pues considera que lo único que ha de quedar amparado en la norma básica es la decisión sobre la gratuidad de la enseñanza, que podría garantizarse de forma distinta a la del concierto con los centros privados, ya que la manera en que se relacionen los centros privados y la Administración educativa correspondería definirla a la Comunidad Autónoma, conciertos que, además, carecerían de una regulación específica en la Ley Orgánica de calidad de la educación. El Letrado del Senado niega la vulneración competencial

denunciada por entender que se trata de una previsión materialmente básica que responde a lo previsto en el art. 27.9 CE. Por su parte, la Abogada del Estado estima que el precepto legal únicamente establece que la educación infantil pasa a constituir una etapa educativa susceptible de beneficiarse del sistema de conciertos educativos, a los que les serán de aplicación la regulación contenida en el capítulo IV del título V de la Ley Orgánica de calidad de la educación.

Como señala la Abogada del Estado, el precepto únicamente establece que, en cuanto que la Ley Orgánica de calidad de la educación consagra el carácter gratuito de la educación infantil, resulta posible la utilización de la fórmula del concierto para la impartición de estas enseñanzas como forma de garantizar que se imparten en régimen de gratuidad (en el mismo sentido, STC 77/1985, FJ 13). Régimen de concierto que se ajustará a lo dispuesto en los arts. 75 y 76 de la Ley Orgánica de calidad de la educación, tal como se desprende de la referencia que el art. 75.1 hace a «la impartición de las enseñanzas declaradas gratuitas en la presente ley», marco normativo cuya concreción, en los términos en ellos previstos, corresponde determinar a las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias en materia de educación.

En consecuencia, esta impugnación ha de ser desestimada.

Por las mismas razones ha de rechazarse la queja relativa a la carencia de regulación específica en la Ley Orgánica de calidad de la educación para este tipo de conciertos, pues tal queja no resulta fundada ya que, como acabamos de exponer, a estos conciertos les es de aplicación el régimen general establecido en la Ley. Lo anterior conduce igualmente a desechar las tachas que, por conexión a las formuladas de modo principal, se dirigían contra el art. 75 y la disposición adicional decimonovena de la Ley Orgánica de calidad de la educación.

d) Se impugna a continuación el art. 85.3, relativo a la jefatura de los denominados departamentos de coordinación didáctica, órgano de los institutos de educación secundaria constituido por los profesores de las especialidades que impartan las enseñanzas de las asignaturas o módulos asignados al mismo y encargado de la organización y desarrollo de las enseñanzas propias de tales asignaturas o módulos. En concreto, lo cuestionado es la regulación de la jefatura de tales departamentos, que conforme al impugnado art. 85.3 «será desempeñada por un funcionario del Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, titular de alguna de las especialidades integradas en los respectivos departamentos. En ausencia, en los respectivos centros, de funcionarios del cuerpo de Catedráticos mencionado en el párrafo anterior, la Jefatura de los departamentos de Coordinación Didáctica podrá atribuirse a un profesor funcionario perteneciente al cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria.»

Para el Letrado autonómico tal regulación desciende a un grado de detalle incompatible con el carácter básico que se predica de la norma estatal. El Letrado del Senado defiende que se trata de la fijación homogénea para la organización de los centros en todo el territorio nacional. La Abogada del Estado justifica el carácter básico de esta regulación, que entiende mínima, por el carácter necesario de los departamentos de coordinación didáctica, en

atención a la finalidad que tienen encomendada, así como por su vinculación con las funciones atribuidas a los cuerpos de catedráticos, además de entenderlo amparado en la homologación del sistema educativo que exige el art. 27 CE.

Los denominados departamentos de coordinación didáctica de los institutos de educación secundaria, constituidos por los profesores de las especialidades que impartan las enseñanzas de las asignaturas o módulos asignados al mismo, se encargan, en los términos del art. 85.1 de la Ley Orgánica de calidad de la educación, de la organización y desarrollo de las enseñanzas propias de las asignaturas o módulos que se les encomienden. Resulta aquí de aplicación el título competencial estatal del art. 149.1.18 CE, en relación con la definición del régimen estatutario de los funcionarios públicos en la medida en que tanto catedráticos como profesores de enseñanza secundaria tienen la condición de funcionarios de carrera, como el propio precepto impugnado pone de manifiesto. Así, tratándose de funcionarios públicos, las atribuciones de estos órganos justifican el establecimiento de una regla que, en todo caso, garantiza que la jefatura del órgano va ser ocupada por un funcionario docente, mientras que la preferencia por los catedráticos se justifica por la importancia de esta figura, atendiendo a las funciones que a los mismos corresponden en los términos de la propia Ley Orgánica de calidad de la educación (disposición adicional décima). Todo ello determina que no se produzca la vulneración competencial denunciada.

e) De este grupo de preceptos resta por examinar la impugnación de la disposición adicional tercera, de la cual, relativa a los libros de texto y demás materiales curriculares, se cuestionan sus apartados 1 y 4. En cuanto al primero de ellos lo que se discute es la atribución a los órganos de coordinación didáctica de los centros públicos de la función de elegir los libros de texto y demás materiales curriculares, cuya edición y adopción no requerirán la previa autorización de la Administración educativa, pues el Letrado de la Comunidad Autónoma entiende que la mención específica a un órgano concreto excede de lo básico y, por la vía de atribuirles esta función, generaliza para todos los centros públicos la existencia de unos órganos que, conforme al art. 85.3 de la Ley Orgánica de calidad de la educación, solamente están previstos en los institutos de educación secundaria. El Letrado del Senado estima que no procede admitir la interpretación del recurrente y la Abogada del Estado entiende que esta previsión ha de ponerse en relación con la del art. 85.2 de la Ley Orgánica de calidad de la educación que permite a las Administraciones educativas establecer otros órganos de coordinación distintos del previsto en el precepto estatal, relativo a los departamentos de coordinación didáctica de los institutos de educación secundaria.

Así expuestas las posiciones de las partes hemos de concluir que no se conculcan las competencias autonómicas pues el precepto ofrece una interpretación conforme con el orden competencial en la medida en que el mismo únicamente establece que ha de corresponder a un órgano de coordinación didáctica, sin mayores especificaciones, la elección de los libros de texto y demás materiales curriculares. Atribución que está directamente relacionada con las labores a las que dichos órganos habrían de dedicarse y que se formula con el suficiente grado de generalidad a fin de permitir el desarrollo autonómico. En efecto, puesta en relación esta mención con las del

art. 85 de la Ley Orgánica de calidad de la educación, resultan dos conclusiones, la primera es que, salvo en el caso de los departamentos de coordinación didáctica de los institutos de educación secundaria expresamente previstos en el precepto citado, el legislador básico estatal se limita a prever que las Administraciones educativas establezcan otros órganos de coordinación, sin más concreción; la segunda es que son tales órganos, con las características que le atribuya la Administración educativa correspondiente, los que ejercerán la función de elección de los libros de texto. Conclusiones ambas que permiten descartar la vulneración denunciada.

Por su parte, el controvertido apartado 4 dispone: «Con carácter general, los libros de texto y materiales curriculares adoptados no podrán ser sustituidos por otros durante un período mínimo de cuatro años. Excepcionalmente, cuando la programación docente lo requiera, las Administraciones educativas podrán autorizar la modificación del plazo anteriormente establecido.» Para la representación procesal del Gobierno de Aragón el grado de detalle al que desciende la norma estatal, precisando el plazo mínimo de duración de esa decisión, sería incompatible con su condición de básica, extremo que defienden tanto el Letrado del Senado como la Abogada del Estado. Para esta última se trata de un mínimo común denominador normativo que garantiza una continuidad en el proceso de aprendizaje, evitando, además gravar excesivamente a los padres, sin perjuicio de que puedan las Administraciones educativas modificar el plazo cuando así lo requiera la programación docente.

El precepto impugnado establece un plazo general mínimo durante el cual no podrán ser sustituidos los libros de texto, previsión que supone un mínimo normativo que ha de ser considerado básico por cuanto persigue garantizar una cierta estabilidad en una cuestión de gran trascendencia para el aprendizaje de los alumnos como es el del material docente. Por otra parte, esa regla básica va acompañada de una excepción que permite su modulación por las administraciones educativas para adecuarlo a las necesidades de su programación docente, flexibilizando así su aplicación en atención a la finalidad a la que el precepto responde y permitiendo su adaptación a las necesidades concretas que puedan surgir y que han de ser valoradas por la Comunidad Autónoma, lo que determina que no se vulneren las competencias autonómicas.

6. Cumple ahora examinar la impugnación de los arts. 10.2, 26.2 y 5, 29.3, 31.2, 37.1, 38.5 y 43.3, cuestionados todos ellos por cuanto que, a juicio de la representación procesal del Gobierno de Aragón, remiten a una norma reglamentaria el establecimiento de la normativa básica sin previamente establecer suficientemente los criterios legales que serían necesarios para dicha remisión.

a) En cuanto al art. 10.2, primero de los impugnados, procede remitirse a cuanto con respecto a este precepto hemos declarado en el fundamento jurídico 5 a), por cuanto en el mismo ya se ha dado respuesta a la alegación que ahora se formula.

b) El segundo de los preceptos a los que se formula la tacha ya señalada es el art. 26, cuestionado en sus apartados 2 y 5 por entender el Letrado autonómico que suponen un exceso de remisión a la potestad reglamentaria

del Gobierno, exceso que es negado por el Letrado del Senado y por la Abogada del Estado para los cuales la organización de las enseñanzas ha de permitir su rápida adaptación a las nuevas necesidades que puedan surgir.

Ambos apartados establecen: «En tercer curso, los itinerarios serán dos: Itinerario Tecnológico e Itinerario Científico-Humanístico. En cuarto curso serán tres: Itinerario Tecnológico, Itinerario Científico e Itinerario Humanístico. El cuarto curso se denominará Curso para la Orientación Académica y Profesional Postobligatoria. Tendrá carácter preparatorio de los estudios postobligatorios y de la incorporación a la vida laboral. En la determinación de las enseñanzas comunes se establecerán las asignaturas comunes y específicas de los itinerarios.» (apartado 2) así como que «[e]l Gobierno, previo informe de las Comunidades Autónomas, podrá establecer nuevos itinerarios y modificar los establecidos en la presente Ley.» (apartado 5).

El establecimiento de los denominados itinerarios formativos a los que se refiere este precepto responde, conforme a la exposición de motivos de la propia Ley Orgánica de calidad de la educación, a la finalidad de establecer «medidas orientadas a atender las diversas aptitudes, expectativas e intereses de los alumnos, con el fin de promover, de conformidad con el principio de calidad, el máximo desarrollo de las capacidades de cada uno de ellos.» En atención a dicha finalidad es posible apreciar que la posibilidad de que el Gobierno pueda modificar los itinerarios o, con la previa intervención autonómica, establecer otros nuevos se encuentra justificada, pues con ello se permite una más rápida adaptación a las necesidades del sistema educativo y a la atención de los alumnos de este ciclo educativo.

Por otra parte, la norma legal, tanto al fijar la organización de estas enseñanzas en el art. 23 de la Ley Orgánica de calidad de la educación como en el propio art. 26 en relación específicamente a estos itinerarios, proporciona criterios suficientes susceptibles de servir de guía a un eventual desarrollo reglamentario en esta materia. Desarrollo que, en todo caso, también guarda relación tanto con las enseñanzas que la Ley Orgánica de calidad de la educación denomina comunes, cuyo establecimiento, conforme a reiterada doctrina constitucional, corresponde al Estado (por todas, STC 87/1983, de 27 de octubre, FJ 4) como con la competencia estatal relativa a la regulación de las condiciones de obtención de títulos académicos del mismo art. 149.1.30 CE, pues todos los itinerarios formativos conducen al título de graduado en educación secundaria, según dispone el art. 31.1 de la Ley Orgánica de calidad de la educación. Todo ello sin perjuicio de señalar que, en caso de producirse un desarrollo reglamentario de esta cuestión de un modo que pudiera entenderse contrario al orden constitucional de distribución de competencias, siempre estaría abierta la posibilidad de, previo el oportuno requerimiento de incompetencia, plantear el correspondiente conflicto ante este Tribunal Constitucional.

En conclusión, la impugnación de los apartados 2 y 5 del art. 26 de la Ley Orgánica de calidad de la educación ha de ser desestimada.

c) El art. 29.3 Ley Orgánica de calidad de la educación establece que «[c]ada curso podrá repetirse una sola vez. Si, tras la repetición, el alumno no

cumpliera los requisitos para pasar al curso siguiente, el equipo de evaluación, asesorado por el de orientación, y previa consulta a los padres, podrá decidir su promoción al curso siguiente, en las condiciones que el Gobierno establezca en función de las necesidades educativas de los alumnos.» El Letrado autonómico cuestiona su inciso final pues entiende que la remisión al Gobierno no resulta adecuada en esta materia, extremo que es contradicho por las representaciones procesales del Senado y del Estado que consideran que tal previsión, además de relacionada con la competencia estatal en materia de títulos académicos, permite una adaptación a las cambiantes necesidades del sistema educativo.

En el enjuiciamiento de este precepto hemos de partir de que, como admite el propio recurrente, la regulación de las condiciones en las que es posible progresar en el sistema educativo mediante el paso de un curso a otro ha de corresponder al Estado, por poseer una indudable naturaleza básica que se relaciona con el necesario grado de homogeneidad e igualdad que ha de ser predicable del sistema educativo en su conjunto. Señalado lo anterior, también ha quedado ya indicado con anterioridad la posibilidad de que el Estado establezca bases del sistema educativo mediante normas de rango reglamentario; posibilidad que, en el caso concreto que examinamos, viene además justificada por el mandato legal de que tales condiciones se ajusten a las necesidades de los alumnos, así como por la evidente relación que dicha previsión tiene con una de las finalidades perseguidas por la Ley Orgánica de calidad de la educación, como es la de reducir el abandono escolar. Todo ello determina que las condiciones en las que es posible el paso de un curso a otro puedan ser cambiantes y requerir su modificación en atención a las circunstancias de toda índole que concurran y sea preciso atender, siempre con respeto a lo previsto por el legislador en relación con tal posibilidad (decisión del equipo de evaluación, asesorado por el de orientación, y previa consulta a los padres).

d) El art. 31.2 de la Ley Orgánica de calidad de la educación, cuestionado en su último inciso por las mismas razones que el art. 29.3, establece que «[p]ara la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria se requerirá haber superado todas las asignaturas de la etapa. Excepcionalmente se podrá obtener este título sin haber superado todas las asignaturas de la etapa, en las condiciones que el Gobierno establezca». Al igual que en el caso que acabamos de examinar, los propios recurrentes reconocen la competencia estatal para establecer esta regulación al amparo del art. 149.1.30 CE, cuestionando, no obstante, la remisión reglamentaria. Sin embargo, atendiendo a su contenido, es claro que el precepto impugnado se relaciona estrechamente con la competencia estatal en materia de «regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales», ámbito en el que la competencia normativa estatal es plena, como ya hemos señalado con anterioridad. Además, el art. 149.1.30 CE permite también, en los términos que ya hemos tenido ocasión de exponer, el dictado de normas de rango reglamentario en relación con el sistema educativo, como sería el caso aquí examinado. Ello, unido al carácter de regla excepcional para la obtención del título en cuestión, lleva a la desestimación del recurso interpuesto contra este precepto.

e) Del art. 37 de la Ley Orgánica de calidad de la educación se ha impugnado su apartado 1, según el cual «[p]ara obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las asignaturas y la superación de una prueba general de Bachillerato cuyas condiciones básicas serán fijadas por el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas». Como en ocasiones anteriores, se denuncia la falta de condiciones establecidas en la Ley Orgánica de calidad de la educación para que proceda la remisión reglamentaria que se establece. Por el contrario, el Letrado del Senado y la Abogada del Estado niegan tal circunstancia; en particular esta última señala que los arts. 34 y 35 de la Ley Orgánica de calidad de la educación ya proporcionan criterios para la realización de la prueba, de la que afirma su indudable naturaleza básica.

La aludida prueba general de bachillerato se configura en la Ley Orgánica de calidad de la educación como requisito necesario para la obtención del título de bachiller, guardando, por tanto, directa relación con las competencias estatales en materia de obtención de títulos académicos del segundo inciso del art. 149.1.30 CE a cuyo amparo ha de entenderse establecida. En efecto, como señala la exposición de motivos de la Ley Orgánica de calidad de la educación, «responde a la necesidad de homologar nuestro sistema educativo con los de los países de nuestro entorno y, al mismo tiempo, garantizar unos niveles básicos de igualdad en los requisitos exigibles a todos los alumnos, cualquiera que sea su lugar de residencia, para obtener una titulación con efectos académicos y profesionales válidos en todo el territorio español». Esto sentado procede ahora recordar que ya en la STC 26/1987, de 27 de febrero, FJ 10 a), consideramos conforme con el orden competencial la habilitación al Gobierno para el establecimiento de los procedimientos de selección para el ingreso en los centros universitarios y así indicamos que «"los procedimientos de selección" a que se refiere el precepto, de conformidad con las competencias que ejerce el Estado, 1 y 30 del art. 149.1 de la Constitución, habrán de establecer exclusivamente las condiciones o normas básicas de selección para el ingreso en los Centros universitarios, correspondiendo su desarrollo a las Comunidades Autónomas con competencia plena en materia de educación, como es el caso de la Comunidad Autónoma recurrente». Los criterios allí establecidos pueden ahora ser también trasladados al presente caso puesto que, conforme al propio art. 37, apartados 2 y 4, dicha prueba guardaba directa relación con los procedimientos para la admisión de alumnos en los centros universitarios. Finalmente también procede considerar que, como ha señalado la Abogada del Estado, los art. 34 y 35 de la Ley Orgánica de calidad de la educación proporcionan, junto al art. 37.2 de la misma ley, los criterios necesarios, tanto en relación a los aspectos pedagógicos propios de esta etapa educativa como en cuanto a las capacidades a desarrollar y conocimientos a adquirir, para descartar que la remisión a la norma reglamentaria se produzca en los términos que denuncia la Comunidad Autónoma recurrente, sin perjuicio de recordar que la competencia del estado en materia de títulos académicos es plena en el plano normativo.

Por ello, la impugnación del art. 37.1 de la Ley Orgánica de calidad de la educación ha de ser desestimada.

f) Del art. 38, relativo a las condiciones de acceso a la formación profesional, se ha impugnado su apartado 5, según el cual «[e]l Gobierno determinará las

características básicas de las pruebas y la relación entre los títulos de Técnicos y su correspondiente de Técnico superior a los efectos previstos en este artículo», pues el Letrado autonómico argumenta que, si bien es indiscutible su carácter básico, no está justificada una remisión reglamentaria en esta materia. El Letrado del Senado ha rechazado este motivo de impugnación. Por su parte, la Abogada del Estado ha sostenido que el propio art. 38 de la Ley Orgánica de calidad de la educación proporciona los criterios necesarios para el desarrollo reglamentario de una cuestión que, por su carácter técnico y de detalle, es posible que sea regulada por una norma reglamentaria.

El art. 38 de la Ley Orgánica de calidad de la educación regula las condiciones de acceso a la formación profesional en cuanto que parte del sistema educativo. A estos efectos establece que para cursar la formación profesional de grado medio es preciso estar en posesión del título de graduado en educación secundaria obligatoria, mientras que, para el acceso a la formación profesional específica de grado superior, será necesario estar en posesión del título de bachiller. Junto a ello, el art. 38.2 de la Ley Orgánica de calidad de la educación permite acceder a la formación profesional a aquellos aspirantes que, careciendo de los requisitos académicos, superen una prueba de acceso, prueba cuyas características básicas han de ser determinadas por el Gobierno, según dispone el art. 38.5 de la Ley Orgánica, siendo este extremo precisamente el discutido en el recurso.

Cuanto llevamos expuesto en relación al resto de los preceptos impugnados por este mismo motivo ha de conducirnos a desestimar la impugnación. En efecto, ya hemos admitido, conforme a nuestra doctrina, la posibilidad de que normas de rango reglamentario establezcan bases en el ámbito educativo. Por otra parte, siendo la regulación de las condiciones de acceso a la formación profesional una materia indiscutiblemente básica, resulta que, frente a lo que afirma el Letrado autonómico, tampoco ese llamamiento a la norma reglamentaria es incondicionado o indeterminado, pues el propio art. 38 establece, además de los límites de edad que resultan de aplicación, los extremos que, en forma de conocimientos y capacidades, habrán de quedar acreditados en relación a cada una de las pruebas de que se trate. En consecuencia, debemos desestimar la impugnación del art. 38.5 de la Ley Orgánica de calidad de la educación.

g) El último de los artículos impugnados por este motivo es el art. 43.3, el cual, ubicado en el precepto relativo a los principios que han de aplicarse a los alumnos superdotados intelectualmente, dispone que «[e]l Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las normas para flexibilizar la duración de los diversos niveles y etapas del sistema educativo establecidos en la presente Ley, independientemente de la edad de estos alumnos.» El Letrado autonómico considera que se trata de una remisión en blanco, mientras que la representación procesal del Senado entiende que tal previsión se dirige a garantizar la igualdad de oportunidades en el ámbito de la educación y la Abogada del Estado ha señalado que la remisión reglamentaria se justifica por tratarse de una materia esencialmente técnica, sin que, por otra parte, tal remisión suponga novedad alguna en el sistema educativo.

La impugnación ha de ser desestimada pues no se aprecia la vulneración competencial que se denuncia. En este caso, la propia naturaleza de la materia a la que se refiere el precepto es, de por sí excepcional, ya que no son habituales los casos de este tipo que puedan presentarse en la práctica, así como también excepcionales son las necesidades educativas especiales de estos alumnos, sin que, por otra parte, la remisión reglamentaria a esta cuestión resulte extraña en nuestro sistema educativo (así, Real Decreto 696/1995, de 28 de abril, y orden de 24 de abril de 1996, que desarrollaban las previsiones de la Ley Orgánica de ordenación general del sistema educativo en esta materia).

7. Procede ahora examinar las tachas de inconstitucionalidad que se dirigen a los arts. 6.2, 40.2 y 59, apartados 1 y 2, respecto a los cuales la Comunidad Autónoma entiende que permiten la asunción de competencias ejecutivas por el Estado de modo contrario al orden constitucional de distribución de competencias.

a) El art. 6.2, primero de los impugnados por esta razón, dispone que «[l]os programas de cooperación territorial serán desarrollados y gestionados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y por las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivas competencias, mediante los convenios que, a estos efectos, se suscriban.» La queja que se formula se restringe a la posibilidad de que el Estado pudiera gestionar los programas de cooperación territorial a los que hace referencia el precepto, indicando el Letrado autonómico que con esta impugnación se pretende conseguir «una interpretación adecuada del mismo conforme a los presupuestos del reparto competencial en materia de enseñanza.» El Letrado del Senado indica, por el contrario, que el tenor del precepto deja fuera de toda duda el respeto a las competencias autonómicas, en lo que coincide con la Abogada del Estado que considera, además, que se trata de un reproche meramente hipotético.

El precepto impugnado se refiere a los denominados programas de cooperación territorial los cuales, según el art. 6.1 de la Ley Orgánica de calidad de la educación, serán promovidos por el Estado, en colaboración con las Comunidades Autónomas, y estarán orientados a objetivos educativos de interés general, teniendo como finalidad «favorecer el conocimiento y aprecio de la riqueza cultural de España por parte de todos los alumnos, así como contribuir a la solidaridad interterritorial».

A este respecto es preciso destacar que tales programas no son sino expresión de la necesidad de colaboración entre Estado y Comunidades Autónomas en un ámbito, como el educativo, en el que las competencias son compartidas entre ambos. Este carácter de instrumento de colaboración se pone de manifiesto, tanto en su propia denominación como en la referencia a que los mismos han de realizarse mediante la necesaria cooperación entre las instancias estatales y autonómicas, en sus respectivos ámbitos de competencia. Así, conforme a su tenor, el art. 6.2 alude a la actuación de los órganos estatales y autonómicos, que habrá de producirse «de acuerdo con sus respectivas competencias» y especifica que el desarrollo y gestión de tales programas habrá de realizarse «mediante los convenios que, a estos efectos, se suscriban». En este sentido, si bien es cierto que las competencias estatales en la materia son fundamentalmente normativas, ello no significa, sin embargo, que pueda

descartarse a priori, que en atención a las características de los citados programas, éstos pudieran ser gestionados por un órgano estatal en los términos previstos por el propio art. 6.2.

Lo expuesto permite calificar a la impugnación como preventiva, cautelar o hipotética, tal como, por lo demás, pone de manifiesto la propia alegación del Letrado autonómico. Así, debemos rechazarla por tratarse, no de la denuncia de una vulneración actual y efectiva de las competencias autonómicas, sino, como máximo, de un alegato meramente preventivo construido a partir de un determinado entendimiento del tenor literal de dicho artículo, de suerte que aceptar esta tacha conduciría a llevar a cabo un pronunciamiento también preventivo, algo que hemos rechazado de forma reiterada (por todas, STC 204/2011, de 15 de diciembre, FJ 8). Por otra parte, tampoco puede admitirse el planteamiento de la representación procesal de la Comunidad Autónoma de Aragón, pues en la STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 2, recordamos que «es constante la doctrina que insiste en que no será legítima la utilización del recurso de inconstitucionalidad con la finalidad de obtener declaraciones preventivas o previsoras ante eventuales agravios competenciales o interpretativas que pongan a cubierto de aplicaciones contrarias al orden de competencias establecidas en la [Constitución] y, dentro del marco constitucional, en los Estatutos de Autonomía (STC 49/1984, de 5 de abril, FJ 2)». Procede que ahora mantengamos igual criterio y, en consecuencia, desestimemos la impugnación del art. 6.2 de la Ley Orgánica de calidad de la educación.

b) Por su parte, el art. 40.2 de la Ley Orgánica de calidad de la educación, segundo de los impugnados por esta razón, dispone que «[e]l Estado podrá impulsar, mediante convenios con las Comunidades Autónomas, actuaciones preferentes orientadas al logro efectivo de sus metas y objetivos en materia de igualdad de oportunidades y de compensación en educación».

El Letrado autonómico considera que se trata de una previsión relativa a la utilización de fondos públicos estatales para la realización de una determinada política educativa, sin que se establezca expresamente que esos fondos han de ser gestionados por las Comunidades Autónomas. El Letrado del Senado considera que la finalidad de garantía de la igualdad justifica la competencia estatal. La Abogada del Estado ha sostenido de contrario que solamente a la vista del contenido de los convenios a los que el precepto se refiere será posible comprobar si se produce un efectivo menoscabo de la competencia autonómica.

La tacha denunciada, con la generalidad con que se formula, no puede ser apreciada pues los genéricos términos que utiliza el precepto para referirse a la actuación estatal («podrá impulsar»), así como la mención al instrumento para llevar a cabo tales actuaciones («mediante convenios de colaboración») permiten inferir que no se produce la aducida vulneración competencial. Así, el precepto cuestionado habilita al Estado para realizar una determinada actividad de fomento en materia de educación y determina el instrumento a través del que, en su caso, esta actuación va a llevarse a cabo con la necesaria colaboración autonómica, pero nada dice ni prejuzga sobre el contenido concreto de las actuaciones a desarrollar y, en particular, si las mismas van a suponer una disposición de fondos de modo contrario al orden competencial,

aspecto en el que el recurrente centra su queja. Antes al contrario, la referencia a los convenios de colaboración puede ser entendida como el reconocimiento del necesario establecimiento de mecanismos de cooperación en una materia, como la educación, en la que ya hemos señalado que la competencia es compartida entre el Estado y las Comunidades Autónomas, con las consecuencias que ello tiene desde el punto de vista de la gestión de los fondos públicos destinados a esta finalidad de promover la igualdad de oportunidades y la compensación de las desigualdades sociales en el ámbito educativo. Por esa razón, desde ese punto de vista, que es el adoptado por el Letrado autonómico en la demanda, no es posible apreciar la vulneración que se denuncia; denuncia que es, en todo caso, prematura.

c) El art. 59, relativo a la formación permanente del profesorado, se impugna en sus dos primeros apartados. El apartado primero establece: «Sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas en materia de formación del profesorado, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte podrá desarrollar programas de formación permanente del profesorado de los centros sostenidos con fondos públicos, en todos los niveles y modalidades de enseñanza», mientras que el apartado segundo dispone: «El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y las Comunidades Autónomas podrán colaborar en el establecimiento, desarrollo y ejecución de programas de formación del profesorado, mediante los convenios que, a estos efectos, se suscriban».

La representación procesal de la Comunidad Autónoma indica que el apartado primero atribuye directamente al Estado la posibilidad de realizar actuaciones ejecutivas en esta materia sin justificación para ello, mientras que, en cuanto al apartado segundo, estima que solamente es constitucionalmente adecuado si se presupone que la gestión de los convenios a los que se refiere se atribuirá a las Comunidades Autónomas. El Letrado del Senado se ha opuesto a la impugnación argumentando que las competencias autonómicas quedan salvaguardadas por el tenor literal del apartado primero, así como por la subordinación de la intervención del órgano estatal a la firma de un convenio, tal como se deriva del apartado segundo. Para la Abogada del Estado dicho precepto responde a la finalidad de mejorar la calidad de la enseñanza y el funcionamiento de los centros, lo que revela claramente el interés supracomunitario que se persigue, sin que con ello se interfiera en la competencia de formación del profesorado que corresponde a las Comunidades Autónomas.

En el enjuiciamiento de este precepto hemos de partir de nuestra doctrina, según la cual la materia de perfeccionamiento del personal docente, funcionarial y no funcionarial, debe encuadrarse en la competencia sobre enseñanza, de suerte que, situados en dicho ámbito material, también hemos reconocido que «el Estado puede destinar recursos a la financiación de actividades de perfeccionamiento del profesorado, en virtud de su competencia sobre las bases del sistema educativo, a las que va ligada la mejora de la calidad de la enseñanza que estos recursos persiguen» [STC 330/1993, de 12 de noviembre, FJ 3, con cita de la STC 13/1992, de 6 de febrero, fundamento jurídico 13 D h)].

Señalado lo anterior la cuestión controvertida respecto al apartado primero se contrae a determinar si la atribución a un órgano estatal de la potestad de desarrollar programas de formación permanente del profesorado de los centros sostenidos con fondos públicos es, en sí misma, vulneradora de las competencias autonómicas en materia de educación. Para ello resulta procedente trasladar al presente caso las conclusiones que alcanzamos en relación con la formación continua de los profesionales sanitarios en la STC 1/2011, de 14 de febrero, en la que, en un ámbito, como la sanidad, en el que la delimitación competencial también responde al binomio bases-desarrollo, consideramos que las actuaciones referidas al ámbito aplicativo o de ejecución correspondían a la competencia autonómica, si bien ello no impedía al Estado que «discipline normativamente los criterios generales de la formación continua de las profesiones sanitarias, entre ellas las de acreditación de centros, personal o enseñanzas, y cree, además, los mecanismos de coordinación necesarios, de manera que las actuaciones de naturaleza ejecutiva en el ámbito público las realicen, en su correspondiente territorio, las Comunidades Autónomas y ello con eficacia para todo el territorio nacional» (FJ 6).

Así pues, en la medida en que, conforme al propio tenor literal del precepto cuestionado, no es posible inferir que las actuaciones a las que se refiere el mismo hayan de tener necesariamente carácter ejecutivo, pues desarrollar es algo conceptualmente distinto a ejecutar, no es posible apreciar la vulneración competencial que aquí se denuncia. Todo ello sin perjuicio de advertir que las actuaciones estatales para el desarrollo de estos programas de formación habrán de ajustarse, como no puede ser de otro modo y el propio precepto advierte con su referencia expresa a las competencias autonómicas, al orden constitucional de competencias, lo que implica que, como ya se ha advertido, las potestades de ejecución en relación con tales programas han de corresponder a las Comunidades Autónomas, así como que, en el caso de que tales actividades de formación impliquen disposición de fondos públicos, la gestión de las ayudas o subvenciones ha de corresponder por regla general a las Comunidades Autónomas en los términos de nuestra doctrina (por todas, STC 13/1992, FJ 8, y específicamente en relación con el personal docente, STC 330/1993, FFJJ 3 y 4). Procede igualmente señalar que las atribuciones estatales en este ámbito no han de alterar, conforme acabamos de señalar, el sentido que la Constitución da al carácter compartido de las competencias en materia de educación ni, por la misma razón, dar lugar a duplicar actuaciones de modo contrario a nuestra doctrina (STC 79/1992, de 28 de mayo, FJ 4, con cita de las SSTC 187/1988, de 17 de octubre, FJ 12, y 13/1992, de 6 de febrero, FJ 7).

Igualmente, debemos desestimar la impugnación del art. 59.2 de la Ley Orgánica de calidad de la educación pues lo que se pretende es obtener una declaración puramente interpretativa acerca del alcance del precepto, lo que, en los términos que ya hemos expuesto anteriormente, no es una finalidad propia de un proceso como el recurso de inconstitucionalidad. Sin perjuicio, además, de advertir que el precepto nada dice acerca de las actividades de gestión que pudieran derivarse de los convenios a suscribir, sino que se limita a recoger una previsión genérica en relación con la necesaria colaboración que ha de existir entre Estado y Comunidades Autónomas en materia de formación

del profesorado, lo que permite entender que, como ya hemos apreciado, no se asumen por el Estado competencias ejecutivas en esta materia.

En suma, en los términos expuestos, la impugnación del art. 59 de la Ley Orgánica de calidad de la educación ha de ser desestimada.

8. Procede examinar ahora la impugnación de los arts. 26.5, 29.3, 31.2, 35.4, 38.5 y 49.5 de la Ley Orgánica de calidad de la educación, cuestionados todos ellos por estimar insuficiente o inexistente el grado de participación autonómica en la adopción de determinadas decisiones estatales. En este sentido, conforme alega el Letrado autonómico, a los arts. 26.5 y 35.4, se les formula la tacha del insuficiente grado de participación que supone el informe autonómico previo a la adopción de las decisiones estatales a las que hacen referencia ambos preceptos, pues se alega que con ello se modifica sustancialmente el sistema que derivaba de la Ley Orgánica de ordenación general del sistema educativo en el que se aludía al necesario acuerdo previo con las Comunidades Autónomas, en atención a la importancia de las decisiones a adoptar. Al resto de preceptos ahora impugnados se les reprocha que no prevean intervención autonómica, siquiera mediante informes emitidos previamente a la adopción por parte del Gobierno de las decisiones a las que se refieren los arts. 29.3, 31.2, 38.5 y 49.5 de la Ley Orgánica de calidad de la educación. La Abogada del Estado niega que se produzca vulneración competencial alguna ya que entiende que el grado de participación autonómica que prevea el legislador estatal en el ejercicio de una competencia propia no es una cuestión que pueda ser discutida en un recurso de inconstitucionalidad sin que la autonomía constitucionalmente reconocida a las Comunidades Autónomas quede afectada por no preverse, en el grado que la recurrente considera oportuno su intervención en la adopción de determinadas decisiones estatales.

A la vista del planteamiento del Letrado autonómico es posible responder de forma global a la impugnación fundada en este motivo.

Para ello debemos recordar ahora nuestra doctrina sobre la participación autonómica en la adopción de decisiones estatales, en cuya virtud, y tratándose de competencias estatales, es el Estado el único competente para establecer los casos y los modos en que dicha participación haya de verificarse, por proyectarse la participación en ámbitos que corresponden constitucionalmente al Estado y sin perjuicio de su posible incidencia en competencias o intereses de la Comunidad Autónoma. Por ello es al Estado al que corresponde determinar los concretos términos, formas y condiciones de la participación de la Comunidad Autónoma, debiendo en todo caso quedar a salvo la titularidad de las competencias estatales eventualmente implicadas y la perfecta libertad que en su ejercicio corresponde a los organismos e instituciones del Estado (STC 31/2010, FJ 111 in fine).

Como acabamos de exponer, la queja que se formula se refiere a lo que se entiende como un insuficiente grado de participación autonómica en la adopción de decisiones estatales, participación que debería traducirse, según los casos, en la exigencia del previo acuerdo con las Comunidades Autónomas o bien en la intervención autonómica mediante la emisión de un informe previo. Con respecto a tal planteamiento hemos de indicar, en primer lugar,

que es evidente que en el juicio de adecuación al orden constitucional de competencias al que se somete a los preceptos ahora impugnados, en modo alguno puede erigirse en parámetro de constitucionalidad la regulación que la Ley Orgánica de calidad de la educación vino a sustituir, pues dicho parámetro sólo está conformado por las normas del bloque de la constitucionalidad implicadas, esto es, por la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Aragón.

En segundo lugar, es reiterada nuestra doctrina acerca de la importancia del establecimiento de mecanismos de colaboración entre el Estado y las Comunidades Autónomas consustanciales a la estructura compuesta del Estado de las Autonomías (STC 13/1992, de 6 de febrero, FJ 7; y en el mismo sentido SSTC 132/1996, de 22 de julio, FJ 6, y 109/1998, de 21 de mayo, FJ 14). Ahora bien, la innegable importancia de tales mecanismos alcanza su plena virtualidad dentro del respeto al orden constitucional de distribución de competencias, que en ningún caso puede verse alterado como consecuencia del recurso a tales técnicas, pues la colaboración, cualquiera que sea la forma en que se materialice y su resultado, no altera la titularidad de las competencias ni su carácter indisponible.

Señalado todo lo anterior, es preciso constatar que si el Estado resulta ser el competente para la adopción de determinadas decisiones en relación con el sistema educativo conforme al art. 149.1.30 CE, extremo no discutido por el recurrente en la queja que formula, en dichas competencias se integra, evidentemente, la capacidad para modificar las normas anteriormente vigentes tal como hemos dejado sentado en el fundamento jurídico 4, sin que sea posible que, solamente por razón del iter procedimental que el legislador básico ha establecido para dicha modificación, tales normas que concretan las competencias estatales hayan de ser consideradas contrarias al orden competencial. En efecto, cuál haya de ser el grado de participación autonómica en la adopción de decisiones que, en todo caso, no se ha cuestionado que correspondan al Estado es algo que, conforme a nuestra doctrina (por todas STC 31/2010, FJ 111 in fine), solamente al propio Estado corresponde decidir, en cuanto al concreto alcance y específico modo de articulación de esa participación. De esta suerte el que las normas estatales no incluyan el grado de participación en las decisiones estatales que la Comunidad Autónoma considera deseable no convierte a los preceptos en inconstitucionales por dicha razón, pues es claro que, en tanto que se trata de competencias ajenas cuya plenitud de ejercicio no puede verse condicionada, lo relevante para llegar a tal conclusión será su adecuación al orden constitucional y estatutario de distribución de competencias, extremo que no es cuestionado en la demanda, antes al contrario, ya que es el punto de partida de esta concreta alegación.

En consecuencia, la impugnación de los arts. 26.5, 29.3, 31.2, 35.4, 38.5 y 49.5 de la Ley Orgánica de calidad de la educación ha de ser desestimada.

9. Examinadas ya las alegaciones de carácter competencial, resta por resolver la impugnación de la disposición final décima, cuestionada por atribuir carácter orgánico a las referencias a los conciertos en el nivel de educación infantil incluidos en el art. 75 de la Ley Orgánica de calidad de la educación y en la disposición adicional decimonovena así como por no conferírselo a la

disposición adicional tercera, apartado 3, de la Ley Orgánica de calidad de la educación. Así, a los primeros se les reprocha que no estén relacionados con el ejercicio de un derecho fundamental o libertad pública, mientras que, respecto a la segunda, se cuestiona que, dado su contenido, habría de tener carácter orgánico.

Nuestra doctrina en esta materia la recuerda la STC 124/2003, de 19 de junio, FJ 11, aludiendo a la STC 5/1981, de 13 de febrero en los términos siguientes: «Cuando en la Constitución se contiene una reserva de Ley ha de entenderse que tal reserva lo es en favor de la Ley Orgánica —y no una reserva de Ley ordinaria— sólo en los supuestos que de modo expreso se contienen en la Norma fundamental (art. 81.1 y conexos). La reserva de Ley Orgánica no puede interpretarse de forma tal que cualquier materia ajena a dicha reserva por el hecho de estar incluida en una Ley Orgánica haya de gozar definitivamente del efecto de congelación de rango y de la necesidad de una mayoría cualificada para su ulterior modificación (art. 81.2 CE), pues tal efecto puede y aun debe ser excluido por la misma Ley Orgánica o por Sentencia del Tribunal Constitucional que declaren cuáles de los preceptos de aquélla no participan de tal naturaleza. Llevada a su extremo, la concepción formal de la Ley Orgánica podría producir en el ordenamiento jurídico una petrificación abusiva en beneficio de quienes en un momento dado gozasen de la mayoría parlamentaria suficiente y en detrimento del carácter democrático del Estado, ya que nuestra Constitución ha instaurado una democracia basada en el juego de las mayorías, previendo tan sólo para supuestos tasados y excepcionales una democracia de acuerdo basada en mayorías cualificadas o reforzadas.

Por ello hay que afirmar que, si es cierto que existen materias reservadas a Leyes Orgánicas (art. 81.1 CE), también lo es que las Leyes Orgánicas están reservadas a estas materias y que, por tanto, sería disconforme con la Constitución la Ley Orgánica que invadiera materias reservadas a la Ley ordinaria (FJ 21)».

Así, por lo que aquí interesa, es claro que nuestra doctrina ha destacado, en primer lugar y de forma ininterrumpida desde la citada STC 5/1981, la necesidad de aplicar un criterio estricto o «restrictivo» para determinar el alcance de la reserva y ello tanto en lo referente al término «desarrollar», como a «la materia» objeto de reserva e igualmente este Tribunal ha mantenido [STC 76/1983, FJ 51 d), recogiendo lo declarado en la ya citada STC 5/1981, FJ 21 c)] que la ley orgánica puede contener preceptos no orgánicos relativos a materias conexas.

Conforme a lo anterior podemos ya examinar las tachas formuladas a los preceptos aquí impugnados, sin perjuicio de apreciar que, más allá de su mera formulación, se presentan desprovistas de la mínima argumentación, circunstancia que, por sí sola, permitiría su desestimación. Así, por lo que respecta a la indebida atribución de carácter orgánico a la regulación de los conciertos en el nivel de educación infantil baste señalar, para rechazarla, que, como hemos ya expuesto en el fundamento jurídico 6, tales conciertos tienen una evidente relación con la financiación pública dirigida a garantizar la gratuidad de la enseñanza consagrada en el art. 27.4 CE en relación con una etapa educativa que, si bien voluntaria para las familias, es de obligada

prestación por los poderes públicos. Por tanto, ningún obstáculo existe para que los aspectos esenciales de su regulación tengan carácter orgánico.

Por otra parte, el problema que hemos de resolver con respecto a la disposición adicional tercera, apartado 3, de la Ley Orgánica de calidad de la educación consiste en determinar si esa regulación constituye, a los efectos de la reserva de ley orgánica del art. 81 CE, desarrollo del derecho fundamental a la educación del art. 27 CE. Teniendo en cuenta lo que acabamos de afirmar respecto a la necesidad de aplicar un criterio estricto para determinar el alcance de la reserva y ello tanto en lo referente al término «desarrollar», como a «la materia» objeto de reserva, no cabe duda de que las normas en relación a los libros de texto y demás materiales curriculares que contiene la disposición adicional tercera, apartado 3, de la Ley Orgánica de calidad de la educación, en cuanto que se refieren a una actividad ejecutiva directamente relacionada con la administración de la enseñanza, no contienen una regulación directa del derecho a la educación encaminada a la delimitación y definición del mismo. Consecuentemente, dicha regulación no puede considerarse incluida en el ámbito reservado a la ley orgánica, por lo que nada puede reprocharse, desde esa perspectiva, a la disposición adicional décima de la Ley Orgánica de calidad de la educación.

En suma, por las razones expuestas, la disposición adicional décima de la Ley Orgánica de calidad de la educación no vulnera el art. 81.1 CE."

- Sentencia 245/2012, de 18 de diciembre de 2012. Recurso de inconstitucionalidad número 930-2004, promovido por el Gobierno de Aragón en relación con determinados preceptos de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario.

El Tribunal Constitucional, por providencia de 9 de marzo de 2004, admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad número 930-2004 (B.O.E. nº 70, de 22 de marzo de 2004). Este recurso se resolvió de manera acumulada junto con los nº 908-2004, 909-2004, 917-2004, 918-2004 y 933-2004.

El recurso se interpone contra los artículos 4.1, 2 y 3; 9.1; 11; 16.3; 44.1 y 2; 49; 50; 51; 53; 57.4 y 81.1.m) de dicha Ley.

El Tribunal Constitucional resolvió declarando la inconstitucionalidad y nulidad de la disposición adicional novena, apartado 1, con desestimación de los recursos en todo lo demás. Se dictó un voto particular.

La argumentación de la Sentencia 245/2012 fue la siguiente (extractada con los apartados de interés correspondientes al recurso interpuesto por el Gobierno de Aragón):

"1. La Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del sector ferroviario (en adelante, LSF) ha sido objeto de seis recursos de inconstitucionalidad interpuestos por los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas de Extremadura, Cataluña, Principado de Asturias, Aragón y Castilla-La Mancha así como por el Parlamento de Cataluña, todos ellos acumulados en el presente proceso, por entender que, con dicha ley, el Estado ha vulnerado el orden de distribución de competencias resultante de la Constitución y de los respectivos Estatutos de Autonomía. Dicha ley regula las infraestructuras ferroviarias y la prestación de servicios de transporte ferroviario y otros adicionales, complementarios o auxiliares sobre aquellas (art. 1 LSF). La regulación tiene dos ejes principales: por un lado, incorporar al ordenamiento interno un conjunto de directivas europeas, cuya finalidad es convertir el ferrocarril en un modo de transporte competitivo y abrir los mercados ferroviarios nacionales al transporte internacional de mercancías realizado por las empresas ferroviarias establecidas en cualquier Estado miembro de la Unión Europea; por otro lado, «reordenar por completo el sector ferroviario estatal y sentar las bases que permitan la progresiva entrada de nuevos actores en este mercado», pues con la entrada en vigor de la Ley, tal como señala la exposición de motivos, «se abre a la competencia la prestación del servicio de transporte de mercancías por ferrocarril en el ámbito nacional y se permite el acceso de todas las empresas ferroviarias que lleven a cabo transporte internacional de mercancías a las líneas de la Red Ferroviaria de Interés General que formen parte de la denominada Red Transeuropea de Transporte Ferroviario de Mercancías».

La regulación de la Ley 39/2003, que el legislador estatal ha efectuado al amparo de los títulos competenciales reconocidos en los arts. 149.1.1, 149.1.13, 149.1.14, 149.1.21 y 149.1.24 CE, vulnera en opinión de los recurrentes diversas

competencias asumidas por medio de los respectivos Estatutos de Autonomía, tanto en la específica materia de «ferrocarriles» como en otras varias. Sólo muy tangencialmente aparecen invocados preceptos constitucionales no atinentes al orden de distribución de competencias (arts. 9.3; 3.1 y 97 CE).

(…)

4. (…) Así pues, el criterio esencial para resolver las impugnaciones planteadas ha de ser el criterio territorial, en su caso complementado y modulado por el del interés general. Ello impone la necesidad de someter las normas legales cuestionadas por las Comunidades Autónomas a un doble canon sucesivamente, el de territorialidad y el del interés general, en el entendimiento de que el criterio del interés general complementa y modula el puramente territorial pero sin excluirlo de forma sustancial. Una vez sentado este punto de partida, podemos avanzar otras consideraciones adicionales.

(…)

6. (…) En definitiva, el objeto de las competencias autonómicas sobre ferrocarriles debe ser acotado por la concurrencia de una doble condición: se trata de tramos o partes de las vías férreas que, aunque nazcan o mueran fuera de la Comunidad en su itinerario total, discurren dentro de la Comunidad (condición positiva), siempre que el tramo en cuestión no forme parte de una infraestructura ferroviaria considerada de interés general por el Estado (condición negativa).

7. A partir de la delimitación competencial efectuada, debemos abordar el primer grupo de impugnaciones, centrado en los artículos que definen y configuran el sistema común de transporte ferroviario y la red ferroviaria de interés general: en concreto los arts. 2 a), 4, apartados 1, 2 y 3, y 5.1, la disposición adicional novena y la disposición transitoria quinta LSF. El art. 2 a) LSF establece como finalidad de dicha Ley «garantizar un sistema común de transporte ferroviario en el territorio del Estado», para lo cual el art. 4 LSF crea una «red ferroviaria de interés general», integrada por «las infraestructuras ferroviarias que resulten esenciales para garantizar un sistema común de transporte ferroviario en todo el territorio del Estado o cuya administración conjunta resulte necesaria para el correcto funcionamiento de tal sistema común de transporte, como las vinculadas a los itinerarios de tráfico internacional, las que enlacen las distintas comunidades autónomas y sus conexiones y accesos a los principales núcleos de población y de transporte o a instalaciones esenciales para la economía o la defensa nacional». Hemos de advertir que el concepto legal de infraestructuras ferroviarias del que parte la Ley 39/2003 va más allá de las líneas o vías férreas en sentido estricto, y comprende el conjunto de instalaciones, edificaciones, elementos auxiliares, etc., al servicio del ferrocarril como medio de transporte. En efecto, el art. 3 LSF define el concepto de «infraestructuras ferroviarias» en los siguientes términos: «la totalidad de los elementos que formen parte de las vías principales y de las de servicio y los ramales de desviación para particulares, con excepción de las vías situadas dentro de los talleres de reparación de material rodante y de los depósitos o garajes de máquinas de tracción. Entre dichos elementos se encuentran los terrenos, las estaciones, las terminales de carga, las obras civiles, los pasos a nivel, las instalaciones vinculadas a la

seguridad, a las telecomunicaciones, a la electrificación, a la señalización de las líneas, al alumbrado y a la transformación y el transporte de la energía eléctrica, sus edificios anexos y cualesquiera otros que reglamentariamente se determinen.»

Los preceptos impugnados habilitan al Ministro de Fomento para acordar en cualquier momento, y con distintos niveles de participación autonómica, la inclusión o la exclusión de la red ferroviaria de interés general de nuevas infraestructuras ferroviarias (art. 4.2 y 3), para planificar las infraestructuras ferroviarias integrantes de la red ferroviaria de interés general (art. 5.1) y para realizar la determinación concreta de las líneas concretas que integran dicha red, a partir de la constitución inicial que efectúa la propia Ley y que coincide con todas las infraestructuras ferroviarias que, en el momento de entrada de la Ley, estuvieran siendo administradas por RENFE, FEVE, el Gestor de Infraestructuras Ferroviarias o la autoridad portuaria de los puertos de interés general (disposición adicional novena).

Como ha quedado expuesto en los antecedentes, los reproches de inconstitucionalidad que formulan los recurrentes se pueden sintetizar en tres: en primer lugar, varios recurrentes objetan que el Estado pueda por sí solo configurar un sistema común de transporte, porque conforme a la STC 118/1996 dicho sistema común debe ser el resultado de la coordinación e interconexión de redes gestionadas por las respectivas Administraciones competentes, estatal y autonómicas, por lo que, en consecuencia, rechazan la equiparación entre el sistema común de transporte y la red ferroviaria de interés general; en segundo lugar, los recurrentes reprochan de forma unánime a los citados preceptos la indebida extensión de la competencia estatal a todas las infraestructuras ferroviarias esenciales, incluidas las que eventualmente fueran de titularidad autonómica, como sería especialmente el caso de las líneas o tramos que transcurran íntegramente por el territorio de una sola Comunidad Autónoma, así como de las conexiones que sirvan de acceso a los principales núcleos de población y de transporte a las instalaciones esenciales para la economía y la defensa nacional; en tercer lugar, se reprocha la inconstitucionalidad de la utilización, en esta materia, del criterio del interés general, en particular para denominar a la propia red y para, en el futuro, incluir o excluir de la red ferroviaria de interés general determinadas infraestructuras ferroviarias, así como que el consentimiento autonómico respecto a la incorporación de nuevas líneas quede limitado a las que reúnan la doble característica de ser intraautonómicas y no tener conexión con la red ferroviaria de interés general. Por su parte, el Abogado del Estado argumenta que el Estado se limita a regular infraestructuras y transportes ferroviarios en el ámbito de sus competencias y que, con arreglo a la STC 65/1998, de 18 de marzo (FJ 11), el criterio del interés general ex art. 149.1.24 CE debe complementar en este materia el criterio territorial que recoge el art. 149.1.21 CE, pues las infraestructuras ferroviarias pueden calificarse de obras públicas, de forma que la concurrencia de ambos títulos competenciales debe conducir a flexibilizar el rígido criterio de territorialidad presente en los arts. 148.1.5 y 149.1.21 CE.

8. Para abordar las impugnaciones reseñadas en el fundamento jurídico anterior conviene que tomemos como punto de partida la ya citada STC 118/1996, de 27 de junio, puesto que ha sido el soporte argumental de las

impugnaciones contra el art. 2 a) LSF. En efecto, en aquella Sentencia nos pronunciamos sobre un precepto similar, el art. 3 a) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transportes terrestres (LOTT), que disponía entre otros principios del sistema de transportes, aplicables a los transportes tanto intercomunitarios como intracomunitarios, el «establecimiento y mantenimiento de un sistema común de transporte en todo el Estado, mediante la coordinación e interconexión de las redes, servicios o actividades que lo integran, y de las actuaciones de los distintos órganos y Administraciones Públicas competentes». Entonces se declaró la constitucionalidad del precepto en su conjunto, entendiendo que contenía «meros principios generales, esto es... directrices abstractas, que no imponen ningún contenido concreto y, además, que todos ellos se mantienen en el marco del haz de competencias que cabe atribuir al Estado». Este juicio se extendió también al concreto principio incluido en la letra a) del art. 3 LOTT, antes transcrita, respecto al cual se reconoció que planteaba mayores dudas en cuanto que «el Estado carece de competencias para establecer por sí un sistema común de transporte».

Pues bien, como era entonces el caso del art. 3 a) LOTT, tampoco el art. 2 a) LSF impone contenido concreto alguno en relación con el «sistema común de transporte ferroviario». Su legitimidad constitucional puede ser apreciada desde una doble perspectiva. Por un lado, la formulación de una finalidad genérica o abstracta como la enunciada en el art. 2 a) LSF —«garantizar un sistema común de transporte ferroviario en el territorio del Estado»— encuentra fundamento suficiente en la competencia estatal ex art. 149.1.13 CE. En efecto, como señalamos en la STC 118/1996 a propósito del art. 3 a) LOTT, el transporte «es un hecho económico de gran importancia» y «la posibilidad de que el Estado, para ajustarlo al objetivo constitucionalmente legítimo de llevar a cabo una política económica común (STC 96/1984, fundamento jurídico 3) y para adecuarlo a las exigencias de unidad de la economía nacional que requiere un mercado único (STC 64/1990, fundamento jurídico 3), establezca criterios generales a tener en cuenta a la hora de efectuar el desarrollo normativo con tal de que se limiten a asegurar en ese sector específico la unidad de los principios básicos del orden económico, es constitucionalmente legítima» (STC 118/1996, FJ 10). Por otro lado, tampoco se aprecia en qué sentido o de qué forma la mera formulación de una finalidad como la indicada —que parece casi inevitable en Estados como el nuestro, de estructura territorial compleja—, podría afectar, mermar o incidir negativamente en las competencias autonómicas en la materia. Cuando menos las Comunidades Autónomas recurrentes no alcanzan a articular elemento alguno de una incidencia efectiva en el ámbito de sus competencias reveladora de la inconstitucionalidad denunciada.

Con todo, no cabe ignorar que los recurrentes reprochan al art. 2 a) LSF no tanto lo que dice como lo que no dice, esto es, que haya omitido las referencias que incluía su precedente —el art. 3 a) LOTT— a la «coordinación e interconexión de redes, servicios o actividades que lo integran, y de las actuaciones de los distintos órganos y Administraciones Públicas competentes» como medios previstos para garantizar el mencionado sistema común de transporte ferroviario. En opinión de los recurrentes, la omisión de tales referencias en el precepto que es ahora objeto de examen vendría a

presuponer que el Estado pretende tener plena facultad para establecer y mantener dicho sistema común, en detrimento de las fórmulas de coordinación e interconexión entonces mencionadas, puesto que nuestro juicio de compatibilidad habría descansado en la STC 118/1996 en la consideración explícita que realizamos entonces de que «la obtención, como resultado, de un sistema común de transportes queda[ba] librada a la coordinación e interconexión de las redes, servicios o actividades de que se trata, mediante la actuación de las Administraciones competentes» (STC 118/1996, FJ 11). Sin embargo, este argumento no puede compartirse. Como hemos señalado, el legislador estatal puede pretender legítimamente «garantizar un sistema común de transporte ferroviario en el territorio del Estado» como finalidad de la regulación en la presente materia, sin que pueda atribuírsele o anudarse a tal objetivo, por vía inductiva, el significado de que el Estado pretenda atribuirse competencias para establecer, instaurar o mantener dicho sistema común por sí solo, por cuanto que el precepto actual no precisa las formas o instrumentos para alcanzar dicho sistema común, ni por otro lado establece cláusulas de salvaguardia de las competencias autonómicas en la materia. Es evidente que la inconstitucionalidad del precepto no puede fundamentarse en la comparación entre su redacción y la del precepto precedente —que, como es obvio, no es canon de constitucionalidad— sino en una real, efectiva y actual vulneración de competencia. Sólo un examen de todos y cada uno de los restantes preceptos impugnados de la Ley nos puede permitir efectuar el juicio de inconstitucionalidad que se nos propone, esto es, determinar si el Estado ha cometido el exceso competencial que se denuncia. Pero ninguna vulneración competencial se desprende del art. 2 a) LSF en sí mismo, por lo que, sin lugar a dudas, procede declarar la constitucionalidad de dicho precepto.

9. En relación con el art. 4 LSF y la disposición adicional novena, los recurrentes no discuten la posibilidad de que exista una red ferroviaria estatal, sino los criterios que para su delimitación se utilizan; en conexión con los concretos criterios de delimitación utilizados se discute también por parte de algún recurrente la denominación escogida para la red estatal, en concreto el sintagma «de interés general» que sigue a «red ferroviaria». Cabe notar que, aunque los recursos del Parlamento de Cataluña, del Gobierno del Principado de Asturias y del Gobierno de Castilla-La Mancha se refieren a la disposición adicional novena sin más precisión, es claro a la luz de sus argumentaciones que su impugnación se dirige al apartado 1 de dicha disposición, y no al apartado 2, que se limita a puntualizar que determinadas líneas efectivamente cerradas al tráfico como consecuencia de un acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de septiembre de 1984 no forman parte de la red ferroviaria de interés general.

Debemos comenzar señalando que ya en la STC 118/1996 abordamos la impugnación de un precepto similar, el art. 155 LOTT que regulaba la red nacional integrada de transporte ferroviario. Entonces señalamos que «no hay nada que objetar, desde el punto de vista del reparto de competencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma, al hecho de que el Estado establezca y regule una Red Nacional integrada por líneas y servicios ferroviarios de transporte público. Para tal cometido le habilita el art. 149.1.21 CE, por cuanto le reserva la competencia exclusiva sobre los ferrocarriles que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma como, por

definición, ocurre con una Red Nacional ferroviaria». No obstante, al mismo tiempo afirmamos que «resulta contrario al sistema de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, en materia de ferrocarriles, imponer unilateralmente, sin contar con el acuerdo previo de la Comunidad Autónoma afectada, la integración a la red nacional integrada de transporte ferroviario de líneas y servicios que transcurran íntegra y exclusivamente por el territorio de la Comunidad Autónoma, ya que, de acuerdo con el art. 148.1.5 CE y 9.15 del EAC, estos ferrocarriles son de la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma» y declaramos «que el art. 155.2, párrafo primero, no respeta el orden de competencias constitucional y estatutario, por cuanto exige solo un informe previo de la Comunidad Autónoma y no el acuerdo favorable de esta en lo referente a líneas y servicios que discurren íntegramente por su territorio, siendo, por consiguiente, inaplicable a los transportes competencia de la Comunidad recurrente» (FJ 44).

Por otra parte, respecto a un precepto que supeditaba la potestad del Gobierno de incluir en la red nacional integrada de transporte ferroviario nuevos recorridos íntegramente comprendidos en el territorio de una Comunidad Autónoma al acuerdo favorable de la Comunidad Autónoma correspondiente, «salvo que la incorporación se justifique en intereses superiores constitucionalmente garantizados», llegamos a la misma conclusión, «por cuanto tratándose de una cláusula genérica, que no concreta a qué tipo de intereses superiores se refiere, no resulta posible determinar si la excepción al necesario acuerdo previo de la Comunidad Autónoma titular de la línea de ferrocarril de cuya incorporación a la red nacional integrada de transporte ferroviario se trata es o no contraria a las competencias de la Comunidad Autónoma recurrente. Por lo demás, tratándose de intereses constitucionalmente garantizados, su vigencia viene determinada por la propia Constitución sin que resulte necesario, ni procedente, por lo superfluo de su contenido, que una Ley estatal lo reitere» (STC 118/1996, FJ 44).

Con todo, conviene precisar que los preceptos impugnados en este proceso constitucional se diferencian del precepto declarado inconstitucional en la STC 118/1996 en que la red nacional integrada de transporte ferroviario definida en el apartado 1 del art. 155 LOTT incluía tanto infraestructuras («líneas») como servicios ferroviarios de transporte público; y si bien en el apartado 2 del mismo precepto solo se atendía a la determinación concreta de las líneas férreas, en la disposición transitoria octava, apartado 2, se delimitaban los servicios ferroviarios integrantes de la red nacional integrada de transporte ferroviario por referencia a los explotados por RENFE en el momento de entrada en vigor de la LOTT. En cambio, el concepto de la red ferroviaria de interés general plasmado en el art. 4 LSF sólo incluye infraestructuras y deja fuera a los servicios de transporte.

10. Entrando ya en el examen del precepto impugnado, procede comenzar señalando que el art. 4.1 recurre a una doble técnica para deslindar las infraestructuras que se integran en la red ferroviaria de interés general. Por un lado, se establecen dos criterios de configuración de la red: «[infraestructuras] esenciales para garantizar un sistema común de transporte ferroviario en todo el territorio del Estado» o «cuya administración conjunta resulte necesaria para el correcto funcionamiento de tal sistema

común de transporte»; por otro lado, se enumeran a título de ejemplo determinados tipos o modalidades de infraestructuras («las vinculadas a los itinerarios de tráfico internacional, las que enlacen las distintas comunidades autónomas y sus conexiones y accesos a los principales núcleos de población y de transporte o a instalaciones esenciales para la economía o la defensa nacional»).

Las técnicas utilizadas por el art. 4.1 para delimitar la red ferroviaria de interés general se complementan, además, con un criterio subjetivo, previsto en la disposición adicional novena, que despliega un efecto inmediato. En efecto, el apartado 1 de la disposición adicional novena regula la configuración inicial de la red ferroviaria de interés general en el momento de la entrada en vigor de la Ley 39/2003 por referencia a las infraestructuras ferroviarias que administran una serie de entidades públicas dependientes del Estado. Dicho de forma sintética, todas las infraestructuras que, en el momento de la entrada en vigor de la Ley, estuvieran siendo administradas por RENFE, FEVE, Gestor de Infraestructuras Ferroviarias o las autoridades portuarias de los puertos de interés general se consideran integradas en la red ferroviaria de interés general. No obstante, se reitera que, con arreglo al art. 4.2 LSF, el Ministro de Fomento «podrá realizar la determinación concreta» de las líneas que integran la red, potestad que debe entenderse inclusiva de la posibilidad de corregir «al alza» la adscripción inicial que efectúa el párrafo primero de la disposición adicional novena, apartado 1. Esta previsión normativa incluida en la disposición adicional novena pone de manifiesto la intención de dejar abierta la posibilidad de integrar en el futuro en la red ferroviaria de interés general infraestructuras ferroviarias que, en el momento de la entrada en vigor de la Ley 39/2003, no estuvieran siendo administradas por entidades dependientes de la Administración General del Estado.

A continuación examinaremos si los criterios funcionales y subjetivo y la ejemplificación utilizados para delimitar las infraestructuras ferroviarias que se integran en la red ferroviaria de interés general se ajustan a los criterios de distribución de competencias que reclaman los arts. 149.1.21 y 24 CE y los correspondientes preceptos estatutarios. Metodológicamente debemos exponer por separado las conclusiones que se extraen de cada título competencial para luego integrarlas en un análisis conjunto sobre la conformidad constitucional de los criterios legales de delimitación de las infraestructuras ferroviarias que se integran en la red ferroviaria de interés general. Con todo, si la conclusión de ese examen fuera negativa, deberemos todavía continuar indagando en el posible encaje constitucional de los conceptos utilizados en otros títulos competenciales estatales alternativos, alegados por el Abogado del Estado.

Comenzando en primer lugar por los criterios utilizados para configurar desde un punto de vista abstracto la red ferroviaria de interés general, debemos declarar que tales criterios no se ajustan necesariamente al criterio territorial, que, como ya hemos indicado, constituye el criterio esencial, aunque no único, en el sistema de distribución de competencias en materia de infraestructuras ferroviarias. En efecto, la Ley adopta dos criterios funcionales sobre las infraestructuras ferroviarias que quedan integradas ipso iure en la red ferroviaria de interés general que no coinciden necesariamente con lo que resulta de la aplicación del criterio territorial que reclaman el art. 149.1.21 CE y los preceptos correspondientes de los Estatutos de Autonomía.

Por un lado, los criterios de esencialidad de una infraestructura ferroviaria para garantizar un sistema común de transporte ferroviario o de necesidad de la administración conjunta de cierta infraestructura ferroviaria para el correcto funcionamiento del sistema común de transporte incluyen la posibilidad de que determinadas infraestructuras a considerar como «esenciales» o «necesarias» discurran íntegramente por el territorio de una sola Comunidad Autónoma. Sin duda, como aduce el Abogado del Estado, el art. 4.1 LSF no integra en la red ferroviaria de interés general todas las infraestructuras ferroviarias sitas en el territorio del Estado, sino solo las esenciales. Lo relevante para nuestro enjuiciamiento es que los criterios funcionales de adscripción de infraestructuras ferroviarias a la red ferroviaria de interés general previsto en el art. 4.1 se separan del criterio territorial considerado por el constituyente a la hora de delimitar las competencias estatales y autonómicas en la materia. Como hemos señalado anteriormente, el legislador estatal puede formular el «garantizar un sistema común de transporte ferroviario en el territorio del Estado» como finalidad legítima de la regulación en la presente materia [art. 2 a)], pero a ello no puede atribuírsele el significado de que el Estado ostente competencias para establecer, instaurar o mantener dicho sistema común por sí solo, atrayendo hacia su competencia —como prevé el precepto impugnado— el conjunto de «las infraestructuras ferroviarias que resulten esenciales para garantizar un sistema común de transporte ferroviario en todo el territorio del Estado o cuya administración conjunta resulte necesaria para el correcto funcionamiento de tal sistema común de transporte».

En segundo lugar, tal como denuncian los recurrentes, algunas de las modalidades concretas de infraestructuras ferroviarias que se mencionan de forma ejemplificativa en el apartado 1 del art. 4 tampoco respetan el criterio territorial que reclaman el art. 149.1.21 CE y los correspondientes preceptos estatutarios. Tal es el caso de las «conexiones y accesos... a instalaciones esenciales para la economía o la defensa nacional». En cambio, el criterio de las «conexiones y accesos [ferroviarios] a los principales núcleos de población y de transporte» puede ser entendido como especificación del criterio más amplio relativo a las infraestructuras ferroviarias «que enlacen las distintas Comunidades Autónomas», pues se trataría de «itinerarios supracomunitarios, selectivamente escogidos o cualificados en virtud de determinadas circunstancias que los hacen merecedores de la consideración de interés general» (STC 65/1998, FJ 12). Por tanto, por lo que respecta a los supuestos concretos de adscripción a la red ferroviaria de interés general enumerados en el apartado 1 del art. 4, debemos concluir que el referido a las «conexiones y accesos... a instalaciones esenciales para la economía o la defensa nacional» se separa del criterio territorial que resulta fundamental en la materia.

En tercer lugar, el criterio subjetivo para delimitar el alcance de la red ferroviaria de interés general que subyace a la disposición adicional novena viene a perpetuar en el tiempo, veinticinco años después de la aprobación de la Constitución, la competencia estatal sobre las infraestructuras ferroviarias realizadas con anterioridad a la aprobación de la Constitución, y que son, en principio, salvo los traspasos que se hayan efectuado hasta la fecha actual, todas las administradas por RENFE y por FEVE en 1978. La disposición

adicional novena LSF se puede contemplar como trasunto de la disposición transitoria octava, apartado 2, LOTT, la cual determinaba que «en tanto se produce la determinación expresa por el Gobierno de los servicios que componen la Red Nacional Integrada de Transporte Ferroviario, se considerarán comprendidos en la misma la totalidad de los servicios ferroviarios que en el momento de entrada en vigor de esta Ley explota RENFE». En efecto, dicha disposición, formalmente transitoria, vino a perpetuarse en el tiempo de manera indefinida, pues en dieciséis años el Gobierno no llevó a cabo la necesaria determinación expresa de cuáles eran los servicios ferroviarios que componían la red nacional integrada de transporte ferroviario. Y la vigente Ley 39/2003 no contiene ya mandato alguno de determinación expresa por el Gobierno de las infraestructuras que integran la red ferroviaria de interés general. En suma, en el momento presente se sigue careciendo de una relación o catálogo de las líneas ferroviarias que el Estado considera que pertenecen a su esfera de competencias, con la inseguridad jurídica resultante tanto para las distintas Administraciones públicas concernidas como para quienes intervienen en la actividad ferroviaria. La titularidad de las infraestructuras ferroviarias debe ajustarse a los criterios constitucionales de distribución de competencias, y si bien no puede pretenderse la acomodación del conjunto de las infraestructuras ferroviarias existentes en el momento de la entrada en vigor de la Constitución a la estructura del Estado autonómico de un día para otro pues ello exige tomar decisiones complejas a través de los cauces correspondientes, no se puede aceptar como buenos criterios, ideas o prácticas normativas que perpetúan indefinidamente una situación de claro desajuste con el bloque de constitucionalidad.

La representación del Gobierno ha argumentado en sus alegaciones que el art. 149.1.24 CE constituye un título competencial concurrente por lo que respecta a la generalidad de las infraestructuras ferroviarias integradas o integrables en la red ferroviaria de interés general, de forma que el criterio del interés general plasmado en el art. 149.1.24 CE en relación con las obras públicas de interés general vendría a atenuar la rigidez del criterio territorial que acoge el art. 149.1.21 CE en relación con los ferrocarriles y transportes.

Según nuestra doctrina, no existe obstáculo para que, en el ejercicio de las competencias atribuidas por la Constitución, el legislador estatal pueda proceder «a interpretar el alcance y los límites de su propia competencia» cuando la ejercita al aprobar las leyes que les corresponden (SSTC 227/1988, de 29 de noviembre, FJ 3; 40/1998, de 19 de febrero, FJ 6; 132/1998, de 18 de junio, FJ 12; y 18/2011, de 3 de marzo, FJ 7). En este caso la Constitución reserva al Estado las competencias sobre «ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma» (art. 149.1.21 CE), así como sobre «obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una Comunidad Autónoma» (art. 149.1.24 CE), ambas de indudable relación con las infraestructuras ferroviarias. Lo relevante para nuestro enjuiciamiento ha de ser examinar si los preceptos de la Ley 39/2003 que han sido impugnados atribuyen al Estado las actuaciones que la Constitución le reconoce, de manera que al llevarlas a cabo no realice ninguna interpretación ni alteración indebidas del sistema constitucional de distribución de competencias (STC 18/2011, FJ 7). Como

venimos reiterando, el criterio del interés general puede complementar y modular el criterio territorial, pero sin excluirlo esencialmente.

A fin de analizar las pretensiones esgrimidas por las partes, conviene que recordemos un caso similar abordado por nuestra jurisprudencia. En el fundamento jurídico 12 de la STC 65/1998, de 18 de marzo, examinamos la constitucionalidad de los criterios utilizados por el legislador estatal para la definición de las carreteras estatales en los apartados 1, 2 y 3 del art. 4 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de carreteras. Entonces señalamos que el criterio de integración de una carretera en un itinerario de interés general no podía «considerarse inconstitucional simplemente por apelar al concepto de "interés general", ya que, como hemos indicado, tal criterio no es ajeno a la distribución de competencias trazada en este materia por la Constitución y los Estatutos de Autonomía, y no excluye la consideración simultánea del criterio territorial». También rechazamos que la especificación legal de las circunstancias previstas en el art. 4.3 de la Ley de carreteras y que permiten calificar un «itinerario de interés general» fuera contraria al orden constitucional de competencias, aunque sobre la base de argumentos específicos para cada circunstancia legalmente prevista impugnada en aquel proceso constitucional. Así, destacamos que en las circunstancias «formar parte de los principales itinerarios de tráfico internacional, incluidos en los correspondientes Convenios» (supuesto 3.1.) y «enlazar las Comunidades Autónomas, conectando los principales núcleos de población del territorio del Estado de manera que formen una red continua que soporte regularmente un tráfico de largo recorrido» (supuesto 3.2.) «se produce una combinación adecuada de los dos criterios que, según se ha indicado, presiden el reparto de competencias en la materia. En efecto, en ambos casos se trata de itinerarios supracomunitarios, selectivamente escogidos o cualificados en virtud de determinadas circunstancias que los hacen merecedores de la consideración de interés general». Con respecto a las dos otras circunstancias —«constituir el acceso a un puerto o aeropuerto de interés general» (supuesto 3.3.) y «servir de acceso a los principales pasos fronterizos» (supuesto 3.4.)— recordamos que el criterio del interés general puede permitir la consideración como carretera estatal de una carretera de itinerario íntegramente comunitario, sin que a este Tribunal le corresponda determinar a priori cuáles puedan ser esas razones de interés general y que, en consecuencia, no cabía entender que el margen de libertad de que goza el legislador a este respecto había sido sobrepasado en relación con ninguna de dichas circunstancias. Las razones fueron estas:

«Considerando, de este modo, como principal circunstancia delimitadora de la Red de carreteras del Estado la indicada en el apartado 3.4, nada cabe objetar a las recogidas en los apartados 3.2 y 3.3, dado el propio sentido limitativo con el que están expuestas y la presencia de otras competencias que corresponden en exclusiva al Estado.

En efecto, nada cabe oponer a que otra de las funciones de interés general de la Red de Carreteras del Estado sea la de asegurar el acceso a los "principales" pasos fronterizos (apartado 3.3), completando así los "principales itinerarios de tráfico internacional, incluidos en los correspondientes Convenios" (apartado 3.1). El interés general puede justificarse, además, en razón de la competencia exclusiva del Estado en materia de "relaciones internacionales"

(art. 149.1.3 C.E.), como se evidencia, en el caso que nos ocupa, en las responsabilidades que en virtud de la misma corresponden al Estado en garantía de la libre circulación de personas y mercancías en el seno de la Unión Europea (art. 93 C.E.), y muy particularmente en relación con el transporte internacional de mercancías y viajeros, de lo que es reflejo la Ley 52/1984, de 26 de diciembre, sobre protección de medios de transporte extranjeros que se hallen en territorio español realizando viajes de carácter internacional.

Tampoco cabe oponer ningún reparo a la otra de las circunstancias definitorias de lo que constituye un itinerario de interés general, esto es, "constituir el acceso a un puerto o aeropuerto de interés general" (apartado 3.2), pues refleja otra de las funciones que pueden legítimamente corresponder, en principio, a la Red de Carreteras del Estado, cual es la de asegurar la conexión o salida a las vías de comunicación terrestre de esas otras grandes infraestructuras de transporte de titularidad estatal, como son los puertos y aeropuertos de interés general (art. 149.1.20 C.E.), desde una perspectiva combinada de los transportes sobre los que el Estado ostenta competencia exclusiva. Hay que tener presente, además, que este tipo de accesos, por el propio emplazamiento de tales infraestructuras portuarias y aeroportuarias, normalmente formarán parte de tramos urbanos o redes arteriales, sometidos a un régimen específico de acuerdo con el Capítulo Cuarto de la Ley 25/1988.»

Con arreglo a nuestra doctrina hemos de rechazar con carácter general la comprensión de los títulos competenciales que parece proponernos la representación del Gobierno, pues en una materia en la que el constituyente ha establecido con meridiana claridad el territorio como criterio delimitador fundamental de competencias se pretende ahora, no ya una utilización «combinada» y equilibrada del criterio territorial (art. 149.1.21 CE) y del criterio del interés general (art. 149.1.24 CE) que asumió nuestra Sentencia 65/1998, según la cual el segundo complementa y modula el primero, sino más bien la sustitución pura y simple del criterio territorial por el del interés general.

Dicho lo anterior, debemos dar respuesta a la pregunta de si el art. 149.1.24 CE puede amparar los criterios de adscripción de infraestructuras ferroviarias utilizados en el art. 4.1 LSF y en la disposición adicional novena y que son distintos al territorial del art. 149.1.21 CE. Nuestra jurisprudencia ha rechazado que el interés general que sustraiga determinadas infraestructuras de transporte radicadas en el territorio de una Comunidad Autónoma de la competencia exclusiva de las instituciones de esa Comunidad tenga que formalizarse a través de ley (SSTC 65/1998, FJ 12; y 31/2010, de 28 de junio, FJ 85). En la STC 65/1998, a propósito de la conformidad del criterio según el cual se puede modificar la red estatal en virtud de la construcción por el Estado de una nueva carretera «cuya función en el sistema de transporte afecte a más de una Comunidad Autónoma», señalamos lo siguiente:

«Lo primero que hay que hacer notar es que este criterio, a diferencia del anterior, no recibe concreción ulterior por parte de la Ley, a pesar de que en sí mismo se vale de conceptos con cierto grado de indeterminación como los de "sistema de transporte" y "afección", ni tampoco resulta evidente a priori qué

otras circunstancias distintas de las ya incluidas en el primer criterio podría cobijar.

No obstante, la simple indeterminación del criterio no es causa de inconstitucionalidad, al no existir reserva de Ley para el ejercicio por el Estado de esta competencia y quedar siempre a salvo la posibilidad de impugnación de su aplicación práctica (en este sentido, STC 40/1998, fundamento jurídico 19); de ahí que lo único que cabe resolver en este momento es si tal criterio se vale en sí mismo y de forma manifiesta de conceptos contrarios al reparto de competencias en la materia. Sin embargo, no es éste el caso. Dado que la existencia de una Red de Carreteras del Estado tiene asiento constitucional en el art. 149.1.24 C.E., nada cabe objetar en principio, desde esta perspectiva, que es a la que principalmente se refiere la parte impugnante, al mencionado criterio para la eventual inclusión de nuevas carreteras en dicha Red.»

Es cierto que los conceptos utilizados por el art. 4.1 LSF («esencialidad», «administración conjunta necesaria») no tienen límites precisos y no trazan una línea clara sobre la realidad a la que se refieren. Esos conceptos no reciben concreción ulterior por parte de la Ley. Pero, como hemos declarado en la Sentencia que se acaba de reproducir, la simple indeterminación de un criterio no es causa de inconstitucionalidad, al no existir reserva de ley para el ejercicio por el Estado de esta competencia y quedar siempre a salvo la posibilidad de impugnación de su aplicación práctica. Lo único que cabe resolver en este momento es si los criterios utilizados por el art. 4.1 LSF se valen en sí mismos y de forma manifiesta de conceptos contrarios al reparto de competencias en la materia. Pues bien, no es éste el caso. Dado que la existencia de una red ferroviaria de interés general tiene asiento constitucional en los arts. 149.1.21 y 24 CE, nada cabe objetar, en principio, a que el legislador estatal recurra a los mencionados criterios para la configuración de dicha red.

El mismo razonamiento puede aplicarse al apartado 3 del mismo precepto, que prevé la facultad del Ministro de Fomento de acordar la exclusión de la red ferroviaria de interés general de determinadas infraestructuras «siempre que hayan desaparecido los motivos de interés general que justificaron su inclusión en aquella».

Asimismo, desde la perspectiva de la competencia estatal ex art. 149.1.24 CE debemos rechazar la impugnación contra la inclusión ope legis en la red ferroviaria de interés general de las «conexiones y accesos... a instalaciones esenciales para la economía o la defensa nacional» (art. 4.1), pues de una interpretación sistemática del precepto cabe deducir que se trata de instalaciones esenciales para la economía o la defensa nacional que constituyan obras públicas de interés general cuyas infraestructuras ferroviarias estén conectadas con la red ferroviaria de interés general. Esta interpretación se apoya en el régimen previsto en el art. 36 LSF —precepto que no ha sido impugnado por las Comunidades Autónomas recurrentes— en relación con las infraestructuras ferroviarias que existan en el ámbito de los puertos y aeropuertos de interés general. En efecto, los apartados 1 y 5 del art. 36 LSF establecen que las infraestructuras ferroviarias que, en cada momento, existan en el ámbito de los puertos de interés general o en las zonas de servicio de los aeropuertos de interés general y estén conectadas con la red ferroviaria

de interés general formarán parte de esta, si bien, con respecto a las infraestructuras que se hallen en el ámbito de los puertos de interés general, se requiere a tal fin una orden del Ministerio de Fomento.

En cuanto al apartado 2 del art. 4, que prevé la facultad del Ministro de Fomento de acordar la inclusión en la red ferroviaria de interés general de nuevas infraestructuras «cuando razones de interés general así lo justifiquen», debemos comenzar con una referencia al alcance del propio precepto antes de examinar su constitucionalidad. Del art. 4.2 se desprende con claridad que la facultad de inclusión de nuevas infraestructuras ferroviarias se extiende también a las infraestructuras que discurran íntegramente por el territorio de una sola Comunidad Autónoma, pues dicho apartado distingue nítidamente dos supuestos a los efectos de determinar el alcance de la participación autonómica con respecto a la decisión ministerial de inclusión: por un lado, el supuesto de que las infraestructuras ferroviarias que se pretenda incluir en la red ferroviaria de interés general discurrieran íntegramente por el territorio de una sola Comunidad Autónoma y sin conexión con el resto de la red (párrafo segundo); por otro lado, los demás casos (párrafo primero). Sólo en el primer supuesto se exige el previo consentimiento de la Comunidad Autónoma correspondiente para efectuar la inclusión de la infraestructura ferroviaria de que se trate. En efecto, se contempla que una parte de las infraestructuras ferroviarias que discurran íntegramente por el territorio de una Comunidad Autónoma —las que tengan conexión con el resto de la red— pueda quedar integrada en la red ferroviaria de interés general por decisión del Ministerio de Fomento, exigiéndose únicamente el informe previo de la Comunidad Autónoma afectada, por lo cual esta no podrá oponerse eficazmente a dicha inclusión.

Pues bien, en este punto debemos dar la razón al Abogado del Estado cuando implícitamente interpreta que el precepto impugnado no se refiere a cualquier tipo de conexión con la red ferroviaria de interés general sino solo a una conexión física y no meramente funcional, así como cuando afirma que el simple hecho de la conexión física es condición necesaria pero no suficiente para eliminar la necesidad de consentimiento autonómico. En efecto, el precepto exige para la integración de una infraestructura ferroviaria en la red ferroviaria de interés general un requisito adicional, esto es, que existan razones de interés general que así lo justifiquen, y ya hemos declarado que este criterio puede permitir la consideración como obra pública de interés general de una infraestructura de itinerario íntegramente comunitario (STC 65/1998, FJ 12). Por lo demás, como a este Tribunal no le corresponde determinar a priori cuáles puedan ser esas razones de interés general, debemos señalar que será en el momento en que se produzca la integración en la red ferroviaria de interés general de una determinada infraestructura ferroviaria cuando, si así lo insta la Comunidad Autónoma afectada, se tendrá que enjuiciar si la concreta decisión de integración resulta o no conforme con el orden constitucional de competencias. Así interpretado, el apartado 2 del art. 4 no resulta inconstitucional.

En cambio, debe considerarse inconstitucional la definición de la red ferroviaria de interés general por relación a las infraestructuras ferroviarias explotadas actualmente por organismos dependientes de la Administración General del Estado que se contiene en la disposición adicional novena. Este

precepto se vale de forma manifiesta de conceptos contrarios al reparto de competencias en la materia. El criterio subjetivo de la delimitación de las infraestructuras que integran la red ferroviaria de interés general establecido en la disposición adicional novena no respeta los criterios de delimitación competencial en materia de ferrocarriles plasmados en los arts. 149.1.21 y 149.1.24 CE y en los correspondientes preceptos estatutarios. En efecto, una vez que el legislador estatal ha definido unos criterios para la integración de infraestructuras ferroviarias en la red ferroviaria de interés general, no resulta lógico ni tampoco constitucional que la definición del interés general que la red ferroviaria de interés general expresa se singularice simplemente por remisión a las infraestructuras que, en el momento de la entrada en vigor de la ley, venían siendo gestionadas por el Estado.

En cuanto a la impugnación de la denominación de la red estatal ferroviaria como «red ferroviaria de interés general» no puede prosperar. Si bien la denominación puede parecer más o menos adecuada, esa denominación no supone invasión u obstaculización competencial alguna y por sí sola no puede determinar la inconstitucionalidad del precepto que recoge esa denominación.

En definitiva, y tras examinar el conjunto de títulos competenciales estatales que podrían incidir en la materia, procede declarar la inconstitucionalidad de la disposición adicional novena, en cuanto que utilizan criterios que no tienen amparo en el art. 149.1 CE para delimitar las infraestructuras que se integran en la red ferroviaria de interés general o que pueden integrarse posteriormente mediante decisión del Ministro de Fomento.

(…)

13. El art. 11 LSF, relativo a la clausura de líneas, es impugnado en los seis recursos de inconstitucionalidad presentados, si bien un recurrente limita su impugnación al apartado 2 (Gobierno de Extremadura), dos la extienden también al apartado 1 (Parlamento de Cataluña y Gobierno del Principado de Asturias) y los demás se refieren a los tres apartados (Gobierno de Cataluña) o al precepto en su conjunto (Ejecutivos aragonés y castellano-manchego). En síntesis, los recurrentes dirigen varios reproches al precepto: su carácter «economicista»; que permita cerrar líneas intraautonómicas apelando al criterio del interés general; que opte por repercutir a las Comunidades Autónomas la financiación de una línea estatal que no es de interés general, en lugar de proceder a su transferencia inmediata a la Comunidad Autónoma correspondiente, a quien debe corresponder decidir si la línea se cierra o no; y que implique una imposición unilateral de condiciones gravosas para las Comunidades Autónomas, que de esta forma financian líneas deficitarias que no les han sido transferidas. Por su parte, el Abogado del Estado rechaza la tacha de economicismo y arguye que el precepto permite en todo momento traspasar el servicio a la Comunidad Autónoma, que ya puede mostrar su interés al respecto al informar en el proceso de exclusión (art. 4.3 LSF); que el traspaso será siempre con la voluntad conforme de la Comunidad Autónoma correspondiente y con sujeción a las condiciones fijadas por la normativa, y que la asunción de la financiación es necesaria para su administración y compromiso de mantenimiento del servicio, pues no tendría sentido pretender un traspaso automático y forzoso para que la Comunidad Autónoma decida si

clausura o no la línea, tras unos meses o años de pérdidas a cargo de la hacienda autonómica.

El apartado 1 del citado precepto es constitucional en cuanto que se limita a facultar al Consejo de Ministros a clausurar líneas ferroviarias cuyo resultado económico de la explotación sea altamente deficitario, pues debe interpretarse en consonancia con lo previsto en el art. 4.3 LSF, al que el propio apartado se remite. Según el art. 4.3, una vez constatado que han desaparecido los motivos de interés general que justificaron la inclusión de una determinada infraestructura en la red ferroviaria de interés general, «dicha infraestructura ferroviaria podrá ser traspasada a la comunidad autónoma correspondiente. El expediente de traspaso se promoverá a instancia de la comunidad autónoma o del Ministerio de Fomento, y será resuelto por el Consejo de Ministros».

El apartado 2, sobre clausura por el Estado de líneas ferroviarias o tramos de la misma altamente deficitarios, es igualmente constitucional siempre que se interprete que la opción autonómica de financiarlos no excluye el derecho de la Comunidad Autónoma de que se trate a recibir el traspaso de la infraestructura correspondiente, una vez que por decisión del Estado dicha infraestructura haya sido excluida de la red ferroviaria de interés general por desaparición de los motivos de interés general que justificaron previamente su inclusión. Así interpretado, el apartado 2 del art. 11 no es inconstitucional.

Una vez declarada la constitucionalidad del apartado 2 del art. 11, es posible interpretar el apartado 3 del mismo precepto en un sentido conforme con el orden competencial, pues la clausura de elementos distintos de las líneas y tramos solo podrá efectuarse de la forma que se ha mencionado anteriormente, esto es, una vez que la Comunidad Autónoma que resultara competente hubiera declinado la oferta de traspaso de tales elementos. Así interpretado, el apartado 3 del art. 11 no es inconstitucional.

(…).

II. Impugnaciones basadas en las competencias autonómicas sobre transporte.

15. Un segundo bloque de impugnaciones de preceptos de la Ley 39/2003, ubicados en el título IV, «El transporte ferroviario», tiene como finalidad la defensa de las competencias que en materia de transporte ostentan las Comunidades Autónomas recurrentes. Como ya hicimos anteriormente en relación con la materia de ferrocarriles, debemos comenzar precisando el alcance de las competencias estatales y autonómicas en materia de transporte ferroviario. En cuanto a las competencias estatales, cabe recordar que el inciso primero del art. 149.1.21 CE reserva al Estado, como es sabido, la competencia exclusiva sobre la materia de «ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma». Por otro lado, el art. 148.1.5 CE establece que las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las materias de «los ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma y, en los mismos términos, el transporte por estos medios o por cable». Como ya afirmamos en la STC 118/1996 (FJ 7), «todas las Comunidades Autónomas han asumido competencia exclusiva en materia de

transportes intracomunitarios... Lo cual forma parte de la lógica institucional del modelo de Estado diseñado por el Título VIII de la Constitución, ya que esta competencia se encuentra expresamente recogida en su art. 148.1, que enumera las competencias que forman con naturalidad el núcleo del ámbito de autonomía reconocido constitucionalmente a todas las Comunidades Autónomas».

Por lo que respecta en concreto a las Comunidades Autónomas recurrentes, el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias atribuye a esta Comunidad Autónoma la competencia exclusiva sobre «los ferrocarriles, carreteras y caminos cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma, y en los mismos términos el transporte terrestre, fluvial, por cable o tubería» (art. 10.1.5 EAAst), así como la competencia de ejecución de la legislación estatal sobre «transporte de mercancías y viajeros que tengan su origen y destino en el territorio del Principado de Asturias, sin perjuicio de la ejecución directa que se reserve el Estado» (art. 12.15 EAAst). De forma similar, el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha atribuye a esa Comunidad Autónoma la competencia exclusiva sobre «ferrocarriles, carreteras y caminos cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la Región» (art. 31.1.4 EACM), así como la función ejecutiva sobre «transporte de mercancías y viajeros que tengan su origen y destino en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, sin perjuicio de la ejecución directa que se reserve el Estado» (art. 33.15 EACM).

En el caso de las otras tres Comunidades Autónomas recurrentes, como ya se ha señalado, se ha producido una modificación de sus competencias en esta materia respecto al momento en que se interpuso el presente recurso de inconstitucionalidad. En la actualidad, y a partir de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma de su Estatuto de Autonomía, la Comunidad Autónoma de Cataluña tiene las competencias en materia de transportes ferroviarios previstas en el art. 169 de su Estatuto, que ya reprodujimos en el fundamento jurídico 3 de esta Sentencia y que deberán ser interpretadas de acuerdo con lo señalado en el fundamento jurídico 105 de la STC 31/2010, de 28 de junio.

Asimismo, a partir de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, dicha Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva sobre «transporte terrestre de viajeros y mercancías por carretera, por ferrocarril y por cable, así como el transporte fluvial, que transcurran íntegramente por el territorio de la Comunidad Autónoma, con independencia de la titularidad de la infraestructura. Centros y operadores de las actividades vinculadas a la organización del transporte, logística y distribución situadas en Aragón» (art. 71.15 EAAr). Además, se establece que «la Comunidad Autónoma de Aragón participará en el establecimiento de los servicios ferroviarios que garanticen la comunicación con otras Comunidades Autónomas o el tránsito internacional, de acuerdo con la normativa estatal» (art. 88.5 EAAr).

Por su parte, a partir de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, dicha Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva sobre «ferrocarriles, carreteras y caminos cuyo itinerario se desarrolle

íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma y en el mismo ámbito los transportes terrestres y fluviales con independencia de la titularidad de la infraestructura. Centros de transporte, logística y distribución situados en Extremadura...» (art. 9.39 EAE 2011).

Tal como ya se ha señalado, con arreglo a nuestra doctrina del ius superveniens los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por las Comunidades Autónomas de Cataluña, Aragón y Extremadura deberán ser resueltos a partir de los preceptos estatutarios vigentes en el momento presente.

De todo ello resulta una sustancial identidad en el canon de constitucionalidad aplicable a las impugnaciones de los recursos de inconstitucionalidad basadas en las competencias autonómicas sobre transportes ferroviarios, si bien a los recursos de Asturias y Castilla-La Mancha les es de aplicación, además del indicado canon general, un canon específico como consecuencia de las competencias de ejecución de la legislación estatal que dichas Comunidades Autónomas ostentan en relación con los transportes con origen y destino en la Comunidad Autónoma.

16. Este Tribunal ha precisado en diversas Sentencias tanto la delimitación del ámbito material que engloba el concepto de transporte como el deslinde competencial en esta materia. En cuanto al primer aspecto indicado, la delimitación del ámbito material que engloba el concepto de transporte utilizado en los arts. 148.1.5 y 149.1.21 CE, este Tribunal ha manifestado que «el núcleo fundamental de la materia del transporte lo constituyen las actividades públicas relativas a la ordenación de las condiciones en las que se presta el servicio de traslado o desplazamiento de personas o mercancías. El objeto fundamental de esta materia es la acción de traslado de personas u cosas de un lugar a otro» (SSTC 203/1992, FJ 2; y 118/1996, de 27 de junio FJ 1). Por otra parte, como ya hemos señalado en esta misma Sentencia, debe partirse de la diferenciación entre la infraestructura ferroviaria y el transporte que se desarrolla sobre ella, pues el transporte ha sido considerado por este Tribunal como una materia con entidad propia y, por tanto, diferenciable de la infraestructura o de la vía natural sobre la que ha de realizarse, de acuerdo con lo señalado en las ya mencionadas SSTC 40/1998, FJ 45, y 138/2010, FJ 5. Con arreglo a nuestra jurisprudencia [STC 65/1998, FJ 7 b)], en esta misma Sentencia hemos declarado ya que la competencia para la ordenación del transporte ferroviario debe diferenciarse de la relativa a la infraestructura ferroviaria.

Por lo que respecta a la distribución de competencias en materia de transportes, debemos reiterar la doctrina que ya recapitulamos en la STC 118/1996, de 27 de junio (FJ 1), que resolvió varios recursos de inconstitucionalidad contra tres leyes relativas al transporte (entre ellas, la Ley de ordenación de los transportes terrestres):

«[E]l criterio territorial se configura como elemento esencial en sistema de distribución de transportes terrestres, ya que los preceptos citados toman como punto de referencia central el que los itinerarios se desarrollen o no íntegramente en el territorio de las Comunidades Autónomas (SSTC 86/1986, fundamento jurídico 3 y 180/1992, fundamento jurídico 3). Así, pues, el

criterio territorial del radio de acción del transporte resulta decisivo, de modo que la competencia exclusiva a la que se refieren el art. 148.1.5 C.E. y los correspondientes preceptos de los Estatutos de Autonomía que la han asumido "es para los transportes cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad, pues la atribución de competencia exclusiva... sólo cabe en la medida en que ese transporte no transcurra, además de sobre el territorio de la Comunidad Autónoma de que se trate, sobre el de otra u otras Comunidades Autónomas, pues en este caso su ordenación es competencia exclusiva del Estado (art. 149.1.21 C.E.)" (SSTC 53/1984, fundamento jurídico 7 y STC 180/1992, fundamento jurídico 3, que reiteran la doctrina de las SSTC 37/1981, fundamento jurídico 1 y 97/1983, fundamento jurídico 4). Si bien, se ha precisado, desde la STC 37/1981, en relación con la Ley del Parlamento Vasco 3/1981, sobre Centros de Contratación de cargas en transporte terrestre de mercancías, que la limitación territorial de las competencias de las Comunidades Autónomas no puede significar, en modo alguno, que sus actos no puedan producir consecuencias de hecho en otros lugares del territorio nacional. De ello se desprende, como consecuencia inmediata, especialmente trascendente en el presente caso, que el Estado no puede incidir sobre la ordenación de los transportes intracomunitarios, excepto cuando se halle habilitado para hacerlo por títulos distintos del transporte (v. g., SSTC 179/1985, fundamento jurídico 2 y 203/1992, fundamentos jurídicos 2 y 3) Finalmente, el Tribunal ha subrayado la diferencia existente, en el sistema de distribución competencial diseñado por la Constitución, entre las competencias normativas y las competencias de ejecución de la legislación estatal, en materia de transportes por carretera; ya que, ha dicho el Tribunal, si desde el punto de vista de las competencias normativas el criterio del territorio debe aplicarse con rigidez ("desarrollo íntegro" del transporte en el territorio), las competencias de ejecución de la legislación estatal en la materia quedan, sin embargo, en cierto sentido, desconectadas de dicho criterio, para permitir su efectiva titularidad autonómica, aun cuando el transporte de mercancías o viajeros no discurra íntegramente por el territorio de la Comunidad Autónoma, bastando con que tenga su origen y término en el territorio de esta (STC 86/1988, fundamento jurídico 3).»

Dicha doctrina fue sintetizada aún más en la misma Sentencia, indicando que «hemos de partir del carácter fundamental y de la rigidez del territorio, en el ámbito del transporte, lo que implica la atribución del desarrollo íntegro, por las Comunidades Autónomas, de la competencia sobre transportes intraterritoriales, desarrollo íntegro que comprende la facultad de dictar todas las normas relativas a la materia de su competencia» (STC 118/1996, FJ 10). En la misma Sentencia nos referimos al criterio de territorialidad como «el único criterio constitucionalmente legítimo para ordenar la atribución de competencias en la materia» (STC 118/1996, FJ 64). Del carácter fundamental (único) del criterio territorial y de la diferenciación entre transporte e infraestructura se infiere que la atribución a las Comunidades Autónomas de la competencia plena sobre los transportes que transcurran íntegramente por su territorio es independiente de la titularidad de la infraestructura sobre la que se realicen tales transportes. Así se ha plasmado también en los Estatutos de Autonomía de tres de las Comunidades Autónomas recurrentes, las cuales han asumido explícitamente la competencia autonómica sobre transporte ferroviario «con independencia de la titularidad de la infraestructura» (arts.

169.1 EAC, 71.15 EAAr y 9.39 EAE). Y de la rigidez del criterio territorial se desprende que la competencia autonómica es plena respecto a los transportes ferroviarios que transcurran íntegramente dentro del territorio de la Comunidad Autónoma, en tanto que al Estado le corresponde la competencia sobre los transportes ferroviarios que discurran por más de una Comunidad Autónoma.

Ahora bien, nuestra doctrina sobre el carácter fundamental y rígido del criterio territorial que subyace a la distribución de competencias en materia de transportes ha sido acompañada de dos precisiones importantes. La primera es que el carácter fundamental del criterio territorial tiene como consecuencia inmediata que el Estado no puede incidir sobre la ordenación de los transportes intracomunitarios «excepto cuando se halle habilitado para hacerlo por títulos distintos del transporte (v.g., SSTC 179/1985, fundamento jurídico 2.º y 203/1992, fundamentos jurídicos 2 y 3)» (STC 118/1996, FJ 1). En efecto, en la reiterada STC 118/1996 señalamos que «si [el transporte] es un hecho económico de gran importancia, la posibilidad de que el Estado, para ajustarlo al objetivo constitucionalmente legítimo de llevar a cabo una política económica común (STC 96/1984, fundamento jurídico 3) y para adecuarlo a las exigencias de unidad de la economía nacional que requiere un mercado único (STC 64/1990, fundamento jurídico 3), establezca criterios generales a tener en cuenta a la hora de efectuar el desarrollo normativo con tal de que se limiten a asegurar en ese sector específico la unidad de los principios básicos del orden económico, es constitucionalmente legítima» (FJ 10).

La segunda precisión que se extrae de nuestra doctrina se refiere específicamente a los servicios parciales que constituyen fragmentos de una línea regular supracomunitaria o a los recorridos intracomunitarios de los servicios de transporte discrecional que se hallan integrados en redes de alcance nacional (SSTC 53/1984, de 3 de mayo, FJ 8; y 118/1996, FFJJ 34 y 56). En efecto, respecto a los transportes discrecionales hemos declarado lo siguiente (STC 118/1996, FJ 34):

«La singularidad de los transportes puramente discrecionales, en el caso de que se hallen integrados en redes nacionales, hace que no se sepa con antelación el recorrido a realizar por cada unidad que, en cualquier momento, podría, de hecho, rebasar los límites territoriales de una Comunidad Autónoma. Por lo tanto, la competencia no puede atribuirse con base a recorridos concretos que se ignoran sino al carácter supracomunitario de la red en que se insertan y a la potencialidad supracomunitaria de los eventuales recorridos.

Esta forma de distribución competencial supone, pues, que el Estado tendrá competencia exclusiva sobre las actividades de los transportes que actúen integrados en una red de alcance nacional, independientemente del lugar de carga y descarga de las mercancías y viajeros que transporten, siempre que se trate de recorridos discrecionales. Por el contrario, las competencias de las Comunidades Autónomas se refieren a transportes que se integren en redes que operen dentro del respectivo territorio o a itinerarios fijos que discurran por el mismo, porque así lo impone el criterio de distribución de competencias establecido por la Constitución.»

Igualmente hemos declarado que el Estado tiene competencia exclusiva sobre los servicios parciales comprendidos en líneas regulares de viajeros cuyo itinerario discurre por el territorio de más de una Comunidad Autónoma (STC 118/1996, FJ 56).

Por último, por lo que respecta a la competencia autonómica de ejecución de la legislación estatal en materia de transportes, este Tribunal ha subrayado «la diferencia existente, en el sistema de distribución competencial diseñado por la Constitución, entre las competencias normativas y las competencias de ejecución de la legislación estatal, en materia de transportes por carretera; ya que, ha dicho el Tribunal, si desde el punto de vista de las competencias normativas el criterio del territorio debe aplicarse con rigidez ("desarrollo íntegro" del transporte en el territorio), las competencias de ejecución de la legislación estatal en la materia quedan, sin embargo, en cierto sentido, desconectadas de dicho criterio, para permitir su efectiva titularidad autonómica, aun cuando el transporte de mercancías o viajeros no discurra íntegramente por el territorio de la Comunidad Autónoma, bastando con que tenga su origen y término en el territorio de esta (STC 86/1988, fundamento jurídico 3)» (STC 118/1996, FJ 1). En suma, el objeto de la competencia autonómica de ejecución de la legislación estatal de transportes es en principio algo más amplio que el de la competencia autonómica exclusiva sobre transportes intracomunitarios pues mientras la primera se refiere a los transportes ferroviarios cuyo origen y destino se hallen dentro de la Comunidad Autónoma, con independencia de que en su recorrido rebase en algún momento el territorio autonómico, la segunda se circunscribe a los transportes que discurran íntegramente por el territorio de la Comunidad Autónoma.

17. A partir de la delimitación competencial efectuada debemos abordar la impugnación que los seis recursos de inconstitucionalidad dirigen de forma coincidente contra la regulación de la licencia de empresa ferroviaria contenida en el art. 44, en particular los apartados 1 y 2, los cuales confieren al Ministerio de Fomento la competencia para su otorgamiento y establecen que dicha licencia será única para toda la red ferroviaria de interés general, así como en los arts. 49; 50 y 51, que atribuyen al Ministerio de Fomento determinadas competencias para la verificación del cumplimiento de los requisitos de la licencia, para su suspensión y su revocación. Las Comunidades Autónomas recurrentes aducen a este respecto tanto sus competencias exclusivas en materia de transportes intraautonómicos como su competencia de ejecución de la legislación estatal en relación con los transportes con origen y destino en la Comunidad Autónoma. Para el Abogado del Estado, la licencia de empresa ferroviaria se limita a permitir el acceso de una empresa a la actividad de transporte con vehículos que circulen por la red ferroviaria de interés general, por lo que no se afecta a la competencia autonómica exclusiva sobre transportes ferroviarios intraautonómicos, pues el art. 44 LSF no impide que las Comunidades Autónomas regulen a la actividad de transporte que se desarrolle en su propia red ferroviaria, en la que podrán otorgar, en su caso, las correspondientes licencias de empresas ferroviarias; y, por otra parte, cabe entender que el Estado ha decidido reservarse en materia de licencias de empresas ferroviarias la ejecución directa, esto es, su otorgamiento, por lo que tampoco se vulnera la competencia autonómica de ejecución de la legislación

estatal en relación con los transportes con origen y destino en la Comunidad Autónoma que «sin perjuicio de la ejecución directa que se reserve el Estado» ostentan las Comunidades Autónomas del Principado de Asturias y de Castilla-La Mancha (arts. 12.15 EAAst y 33.15 EACM).

Los propios recurrentes admiten implícitamente que nada hay que objetar desde el punto de vista del sistema de distribución de competencias a la previsión de una licencia administrativa para la realización de transportes ferroviarios supracomunitarios. La impugnación del art. 44 y, por conexión, de los arts. 49; 50 y 51, se fundamenta exclusivamente en el carácter único de la licencia de empresa ferroviaria que establece la Ley y cuyo otorgamiento se atribuye al Ministerio de Fomento. En este concreto punto debemos acoger los argumentos del Abogado del Estado y proceder a desestimar la impugnación de los arts. 44; 49; 50 y 51, siempre que se interprete que la licencia de empresa ferroviaria que con carácter único para la red ferroviaria de interés general se regula en el art. 44 LSF solo se refiere a los transportes ferroviarios que sean competencia del Estado, que según nuestra doctrina son tanto los que discurren por más de una Comunidad Autónoma como los servicios parciales que constituyen fragmentos de una línea regular de transporte supracomunitario, con independencia de que los puntos de carga y descarga de las mercancías se ubiquen dentro de la misma Comunidad Autónoma. Así interpretado el art. 44, los arts. 49; 50 y 51 no vulneran las competencias sobre transporte ferroviario de las Comunidades Autónomas recurrentes.

Como refuerzo de la anterior interpretación cabe traer a colación lo que expresamente establece el art. 4 del Real Decreto-ley 22/2012, de 20 de julio, por el que se adoptan medidas en materia de infraestructuras y servicios ferroviarios. El art. 4 dispone que «aquellas Comunidades Autónomas que, a la fecha de entrada en vigor del presente real decreto-ley, tuvieran traspasadas las funciones de la Administración General del Estado correspondientes a los servicios de transporte de viajeros por ferrocarril de cercanías y regionales sobre la red de ancho ibérico de la red ferroviaria de interés general, podrán disponer la prestación de los servicios de transporte de viajeros por ferrocarril de cercanías y regionales sobre la red de ancho ibérico de la red ferroviaria de interés general, de conformidad con lo establecido en la normativa de aplicación al respecto y en el Reglamento (CE) 1370/2007, de 23 de octubre, del Parlamento Europeo y del Consejo.» Así pues, el precepto legal reproducido corrobora nuestra conclusión anterior de que la regulación de la licencia de empresa ferroviaria prevista en el art. 44 LSF, interpretada en el sentido anteriormente indicado, no se opone a que las Comunidades Autónomas que hayan recibido los correspondientes traspasos pueden disponer la prestación de servicios de transporte ferroviario intraautonómico sobre la red ferroviaria de interés general.

A la misma conclusión desestimatoria debemos llegar desde la perspectiva del canon específico aplicable a los recursos interpuestos por las Comunidades Autónomas del Principado de Asturias y de Castilla-La Mancha. En el momento presente solo estas dos Comunidades Autónomas ostentan la competencia de ejecución de la legislación estatal en relación con los transportes que tengan origen y destino dentro de la propia Comunidad Autónoma pues las demás Comunidades Autónomas recurrentes han visto desaparecer esa competencia como consecuencia de las modificaciones

introducidas en sus respectivos Estatutos de Autonomía. Pues bien, la competencia autonómica de ejecución de la legislación estatal de transportes, como hemos recordado anteriormente, se reconoce en los correspondientes preceptos estatutarios «sin perjuicio de la ejecución directa que se reserve el Estado» (arts. 12.15 EAAst y 33.15 EACM). Desde esta perspectiva cabe apreciar que una regulación como la contenida en los arts. 44; 49; 50 y 51 de la Ley 39/2003, que establece una licencia única de empresa ferroviaria y atribuye a la Administración estatal las potestades para su otorgamiento, verificación, suspensión y revocación, representa un supuesto de constitución legal de una reserva estatal de la ejecución directa en la materia, por lo que la referida regulación debe entenderse enteramente conforme al bloque de constitucionalidad.

18. Un segundo grupo de impugnaciones basadas en las competencias autonómicas sobre transportes ferroviarios se dirigen contra el art. 53, si bien un recurrente limita su impugnación al apartado 2 (Parlamento de Cataluña), dos la extienden también al apartado 1 (Gobiernos de Extremadura y del Principado de Asturias), otro combina el apartado 2 con el apartado 4 (Gobierno de Cataluña) y, finalmente, los demás se refieren al precepto en su conjunto, sin mayor especificación (ejecutivos aragonés y castellano-manchego).

El art. 53 faculta al Consejo de Ministros a declarar de interés público la prestación de determinados servicios de transporte ferroviario sobre las líneas o los tramos que integran la red ferroviaria de interés general, momento a partir del cual tales servicios se prestarán en régimen de exclusividad por las empresas ferroviarias previa obtención de una autorización que deberá otorgar el Ministro de Fomento. Cuando la declaración de interés público del servicio de transporte ferroviario se realice a instancia de las Comunidades Autónomas o de las corporaciones locales, estas serán responsables de su financiación, para lo cual el Ministro de Fomento podrá celebrar los oportunos convenios. En esencia, los recurrentes cuestionan, por un lado, que a través de los citados convenios el Ministro de Fomento actúe de intermediario financiero entre la empresa ferroviaria que haya de prestar el servicio declarado de interés público y la Comunidad Autónoma responsable de su financiación; y que, por otro, el Ministro de Fomento sea el órgano competente para el otorgamiento de la correspondiente autorización a la empresa ferroviaria. A juicio de los recurrentes, si el servicio de transporte ferroviario que se declare de interés público se tiene que prestar sobre infraestructuras de titularidad estatal pero en un tramo de la red que transcurra íntegramente dentro del territorio de una Comunidad Autónoma que tenga competencia de ordenación del transporte, a la declaración de interés público, unida a la responsabilidad de la financiación del servicio, ha de acompañar también la potestad autonómica de otorgamiento de la autorización para poder prestarlo. Por otro lado, la regulación prevista en el precepto impugnado no deja libertad a las Comunidades Autónomas para establecer el procedimiento que crean conveniente respecto a la gestión y financiación del servicio de transporte ferroviario (creación de empresa pública, convenios con otros organismos o entidades, etc.).

A la impugnación del art. 53 algunos recurrentes añaden también la del art. 54, bien de forma íntegra como es el caso de Castilla-La Mancha, bien de

forma parcial, en relación con su apartado 2, como es el caso del Parlamento de Cataluña. El art. 54 habilita en su apartado 1 al Gobierno, con carácter excepcional y transitorio, a acordar la asunción estatal de la gestión directa de determinados servicios de transporte por ferrocarril o la explotación de ciertas infraestructuras ferroviarias para garantizar la seguridad pública y la defensa nacional; y en su apartado 2 prevé que, en caso de declararse desierto el procedimiento de licitación para el otorgamiento de una autorización para la prestación de servicios de interés público, el Ministro de Fomento podrá imponer tales servicios como obligación de servicio público a una empresa ferroviaria que tenga medios adecuados y suficientes y que explote otros servicios ferroviarios en el área geográfica en cuestión. El Parlamento de Cataluña aduce en su recurso que la norma no tiene en cuenta la posibilidad de que la empresa ferroviaria a la que se pretende imponer la prestación obligatoria del servicio público esté actuando en virtud de autorización concedida por la Administración autonómica, por tratarse de actividades que se desarrollan dentro del territorio de una determinada Comunidad Autónoma: en tal caso la actuación ministerial así como la forma y cuantía del resarcimiento que perciba la empresa ferroviaria tendrían que estar condicionadas al acuerdo previo con la respectiva Comunidad Autónoma. Por su parte, el Gobierno de Castilla-La Mancha considera que la imposición directa a una empresa por el Ministro de Fomento de la obligación de prestar el servicio de interés público solo será constitucional en la medida en que se ciña a las líneas o tramos de su competencia.

Por su parte, el Abogado del Estado, contestando conjuntamente a la impugnación de los arts. 53 y 54 LSF, señala que la declaración de interés público regulada en el art. 53.1 LSF se ciñe a servicios de transporte sobre líneas o líneas de la red ferroviaria de interés general y que la prestación deficitaria o que no reúna las adecuadas condiciones de calidad y frecuencia que contempla el precepto legal es la ofrecida por una empresa con licencia otorgada por el Ministerio de Fomento. A su juicio, la impugnación de los citadas disposiciones debe ser desestimada con arreglo a los siguientes argumentos: a) las competencias autonómicas en la ordenación del transporte —materia a la que corresponden la declaración de interés público y la consiguiente selección de la empresa ferroviaria para prestar el servicio de interés público— están condicionadas a que el Estado no se reserve su ejecución directa, que es lo que ha hecho en los apartado 1 y 2 del art. 53 LSF en relación con las líneas y tramos integrados en la red ferroviaria de interés general que puedan discurrir exclusivamente por una Comunidad Autónoma; b) la simple previsión de un convenio interadministrativo como instrumento de cooperación para la financiación de un servicio deficitario no puede ser contraria al orden de competencias, pues la suscripción será siempre voluntaria; c) basta que las Comunidades Autónomas no insten la declaración de interés público del servicio de transporte ferroviario deficitario para que no tengan que asumir el coste de su financiación; y d) en todo caso, la financiación autonómica del servicio deficitario no lleva consigo la competencia para organizar el servicio, como se desprende de la STC 13/1992, de 6 de febrero, FFJJ 4 y 7.

Pues bien, debemos declarar que, interpretados conforme al bloque de constitucionalidad, los arts. 53 y 54 LSF no vulneran las competencias

autonómicas sobre transportes ferroviarios de las Comunidades Autónomas recurrentes. En efecto, las citadas disposiciones legales solo son constitucionales si se interpreta que cuando atribuyen al Estado funciones públicas como son la declaración de interés público de servicios de transporte ferroviario (art. 53.1), la adjudicación del servicio de transporte ferroviario de interés público a una empresa ferroviaria (art. 53.2) o la imposición a una determinada empresa ferroviaria de la obligación de prestar el servicio público de transporte ferroviario (art. 54.2), dichas funciones se circunscriben a servicios de transporte ferroviario que discurran por más de una Comunidad Autónoma (ello, como ya hemos señalado, con independencia de la titularidad de las vías por las que circulen) y que, consiguientemente, requieren la licencia de empresa ferroviaria que establece el art. 44 LSF. Si, por el contrario, los servicios de transporte ferroviario discurren íntegramente por una Comunidad Autónoma, la entera ordenación de esos transportes ferroviarios debe corresponder a dicha Comunidad Autónoma, la cual tiene plena libertad para organizar la gestión y la financiación de los servicios de transporte ferroviario de interés público.

Así interpretadas las disposiciones legales impugnadas, nada cabe objetar a la previsión contenida en el art. 53 de que aquellos servicios de transporte ferroviario de interés público que discurran por más de una Comunidad Autónoma sean cofinanciados por las Comunidades Autónomas y las corporaciones locales interesadas, siempre que medie el oportuno acuerdo de esas entidades públicas, lo cual viene implícitamente reconocido por el texto de la disposición impugnada, al contemplar que a tal efecto se celebren los oportunos convenios entre el titular de la competencia sobre el transporte supracomunitario y las entidades territoriales interesadas en la financiación del concreto servicio de transporte ferroviario. Tampoco puede acogerse la objeción que nos plantea el Parlamento de Cataluña de que la norma impugnada no tiene en cuenta la posibilidad de que la empresa ferroviaria a la que se pretende imponer la prestación obligatoria del servicio público esté actuando ya en virtud de autorización concedida por la Administración autonómica: la existencia de una autorización autonómica previa, de la naturaleza que sea, no resulta obstáculo desde la perspectiva de la distribución constitucional de competencias para que la empresa en cuestión pueda ser titular así mismo de una autorización estatal para prestar un servicio de transporte ferroviario supracomunitario de interés público o para ser el sujeto pasivo de una obligación de servicio público de transporte ferroviario supracomunitario impuesta por el órgano estatal competente.

La impugnación debe ser desestimada también desde la perspectiva de las competencias autonómicas de ejecución de la legislación estatal sobre transportes en relación con los transportes que tengan origen y destino en la Comunidad Autónoma. Como hemos recordado anteriormente, la competencia autonómica de ejecución de la legislación estatal de transportes se reconoce en los correspondientes preceptos estatutarios «sin perjuicio de la ejecución directa que se reserve el Estado» (arts. 12.15 EAAst y 33.15 EACM). En consecuencia, las competencias autonómicas para la ejecución de la legislación estatal de transportes están condicionadas a que el Estado no se reserve su ejecución directa. A la vista de lo dispuesto en los arts. 53 y 54 LSF, por tanto, se puede afirmar que el Estado, a través de dichos preceptos, se ha reservado

las facultades de ejecución relativas a la declaración de interés público del servicio deficitario, de selección y autorización de la empresa que debe prestar dicho servicio público en exclusiva así como de imposición, en su caso, de una obligación de servicio público a la empresa ferroviaria que se considere oportuno.

Por todo ello, los arts. 53 y 54 LSF no vulneran las competencias autonómicas si se interpreta que no se aplican a los servicios de transporte ferroviario que discurran íntegramente por una Comunidad Autónoma. Por la misma razón, debemos desestimar la impugnación del art. 81.1 f) que, por conexión con el art. 53, efectúan los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Parlamento y el Gobierno de Cataluña y el Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, pues el precepto se limita a reiterar la atribución al Ministerio de Fomento de la competencia sobre «el otorgamiento de las autorizaciones de servicios ferroviarios declarados de interés público» cuya impugnación ya sido analizada y descartada anteriormente.

III. Impugnaciones basadas en las competencias autonómicas sobre urbanismo.

19. Un tercer bloque de impugnaciones de preceptos de la Ley 39/2003 relacionados con las infraestructuras ferroviarias tienen como finalidad la defensa de las competencias urbanísticas que ostentan las Comunidades Autónomas recurrentes. Por tanto debemos abordar ahora los problemas que se suscitan como consecuencia de la compleja articulación de las competencias sobre ferrocarriles con las de ordenación del territorio y urbanismo. Este Tribunal se ha tenido que pronunciar de forma reiterada sobre la concurrencia en un mismo espacio físico situado en el territorio de una Comunidad Autónoma de competencias del Estado y de la Comunidad Autónoma derivadas de títulos jurídicos distintos (SSTC 77/1984, de 3 de julio, puertos; 56/1986, de 13 de mayo, defensa; 227/1988, de 29 de noviembre, plan hidrológico; 36/1994, de 10 febrero, Mar Menor; 61/1997, de 20 de marzo, Ley del suelo; 141/1991, de 4 de julio, costas; 40/1998, de 19 de febrero, puertos de interés general; 65/1998, de 18 de marzo, carreteras; 164/2001, de 11 de julio, régimen del suelo y valoraciones).

Especialmente relevante para el caso actual es la STC 40/1998, que resolvió diversos recursos de inconstitucionalidad acumulados contra la Ley de puertos del Estado y de la marina mercante (Ley 27/1992, de 24 de noviembre), y también, aunque en menor medida, las SSTC 149/1991 y 65/1998, que resolvieron respectivamente diversos recursos de inconstitucionalidad acumulados contra la Ley 22/1988, de 28 de julio, de costas y un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 25/1988, de 29 de julio, de carreteras.

En la Sentencia 40/1998 señalamos que la competencia autonómica en materia de urbanismo ha de coexistir con aquellas que el Estado ostenta en virtud del art. 149.1 CE, y cuyo ejercicio puede condicionar, lícitamente, la competencia de las Comunidades Autónomas sobre el correspondiente sector material (STC 40/1998, FJ 29). En estos casos, entre los cuales mencionamos expresamente que se encuentra la competencia estatal sobre ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma (art. 149.1.21 CE), «el constituyente ha previsto la

coexistencia de títulos competenciales con incidencia sobre un mismo espacio físico; de aquí que este Tribunal venga reiterando que la atribución de una competencia sobre un ámbito físico determinado no impide necesariamente que se ejerzan otras competencias en ese espacio, siendo esta convergencia posible cuando, incidiendo sobre el mismo espacio físico, dichas competencias tienen distinto objeto jurídico (SSTC 113/1983 y 77/1984)» (STC 40/1998, FJ 29).

En la misma STC 40/1998 señalamos algunos principios generales sobre la articulación de los títulos competenciales que concurren sobre el mismo espacio. En primer lugar, debe tenerse en cuenta que «la competencia sobre ordenación del territorio tiene, precisamente, la finalidad de que su titular pueda formular una política global para su territorio, con la que se trata de coordinar las actuaciones públicas y privadas que inciden en el mismo y que, por ello, no pueden ser obviadas por las distintas Administraciones, incluida la estatal», y que es «un título competencial específico que tampoco puede ser ignorado, reduciéndolo a la simple capacidad de planificar, desde el punto de vista de su incidencia en el territorio, las actuaciones que por otros títulos ha de llevar a cabo el ente titular de aquella competencia». En segundo lugar, «este tipo de competencias de las que es titular el Estado, si bien no persiguen de forma directa la ordenación del territorio, sí implican una disposición sobre determinadas porciones del mismo que viene a condicionar la capacidad de decisión de las Comunidades Autónomas». En tercer lugar, «al objeto de integrar ambas competencias, se debe acudir, en primer lugar, a fórmulas de cooperación», «pudiéndose elegir, en cada caso, las técnicas que resulten más adecuadas: El mutuo intercambio de información, la emisión de informes previos en los ámbitos de la propia competencia, la creación de órganos de composición mixta, etc.». En cuarto y último lugar, cuando «estos cauces resulten en algún caso concreto insuficientes para resolver los conflictos que puedan surgir», este Tribunal ha señalado que «en última instancia... cuando la Constitución atribuye al Estado una competencia exclusiva lo hace porque bajo la misma subyace —o, al menos, así lo entiende el constituyente— un interés general, interés que debe prevalecer sobre los intereses que puedan tener otras entidades territoriales afectadas, aunque, evidentemente, esto sólo será así cuando la competencia se ejerza de manera legítima: es decir, cuando la concreta medida que se adopte encaje, efectivamente, en el correspondiente título competencial, cuando se haya acudido previamente a cauces cooperativos para escuchar a las entidades afectadas, cuando la competencia autonómica no se limite más de lo necesario, etc.» (STC 40/1998, FJ 30).

Después de exponer los principios anteriores descendimos al caso concreto de la competencia estatal sobre puertos de interés general y señalamos que «la existencia de un puerto estatal implica, necesariamente, una modulación del ejercicio de las competencias autonómicas y municipales sobre la ordenación del territorio y urbanismo, y que no puede quedar al arbitrio de los entes con competencia sobre dichas materias la decisión sobre la concreta ubicación del puerto, su tamaño, los usos de los distintos espacios, etc. Al mismo tiempo, es también claro que la existencia de un puerto estatal no supone la desaparición de cualesquiera otras competencias sobre su espacio físico, ya que mientras que "la competencia exclusiva del Estado sobre puertos de interés general tiene por objeto la propia realidad del puerto y la actividad relativa al mismo, pero

no cualquier tipo de actividad que afecte al espacio físico que abarca un puerto... la competencia de ordenación del territorio y urbanismo... tiene por objeto la actividad consistente en la delimitación de los diversos usos a que pueda destinarse el suelo o espacio físico territorial" (STC 77/1984, fundamento jurídico 2)» (STC 40/1998, FJ 30).

(…)

21. El apartado 1 del art. 9 LSF, que determina los terrenos y las actividades que podrán incluirse en las zonas de servicio ferroviario, es impugnado por la Diputación General de Aragón, por cuanto que, bajo la cobertura de la competencia estatal sobre ferrocarriles y transportes ferroviarios, se pretenden ordenar los usos urbanísticos más allá de los límites propios de dicha competencia sectorial, posibilitando la extensión de la zona de servicio ferroviario controlada por la Administración estatal en detrimento de las competencias autonómicas. Por su parte, el Abogado del Estado rechaza dicha interpretación con base en la doctrina de los fundamentos jurídicos 32, 33 y 38 de la STC 40/1998.

Cabe notar que la Comunidad Autónoma recurrente solo razona la inconstitucionalidad de su segundo párrafo, aunque dada la conexión de sentido con el párrafo primero del mismo precepto debemos aclarar previamente el significado de aquel para resolver la duda de inconstitucionalidad sobre el párrafo segundo del precepto que nos plantea la entidad recurrente. Aquí de nuevo el punto de partida ha de ser la STC 40/1998, pues como alega el Abogado del Estado entonces resolvimos sobre unos preceptos (los arts. 3.6 y 15.1 de la Ley de puertos del Estado y de la marina mercante) con una redacción similar a la del art. 9.1 LSF. En efecto, en dicha Sentencia señalamos que «la competencia sobre puertos se extiende a la realidad física de éstos y a las actividades portuarias (STC 77/1984), pero no a cualesquiera otras actividades que puedan desarrollarse en el recinto portuario y, en consecuencia, no se entiende por qué deben considerarse excluidas las competencias que sobre las distintas actividades (pesca, organización de ferias, etc.) pueden corresponder a las Comunidades Autónomas afectadas. En cualquier caso... la posibilidad de que se desarrollen actividades complementarias o equipamientos quedará siempre supeditada a las determinaciones del plan especial del puerto que tramita y aprueba la Administración urbanística competente» (STC 40/1998, FJ 33). Pues bien, aplicando el mismo criterio debemos concluir que la competencia estatal sobre ferrocarriles se extiende a la realidad física de estos y a las actividades ferroviarias, pero no a cualesquiera otras actividades que puedan desarrollarse en las zonas de servicio ferroviario, por lo que no deben considerarse excluidas las competencias que sobre las distintas actividades (industriales, comerciales, de servicios, etc.) puedan corresponder a las Comunidades Autónomas afectadas. En consecuencia, la posibilidad de que se desarrollen actividades complementarias quedará siempre supeditada a las determinaciones del plan especial de ordenación de la zona de servicio ferroviario que tramita y aprueba la Administración urbanística competente.

En la STC 40/1998 también rechazamos la pretendida inconstitucionalidad de la inclusión en la zona de servicio portuario de espacios de reserva para el futuro crecimiento del puerto, señalando que «la competencia exclusiva del

Estado sobre un determinado puerto justifica la adscripción al mismo de aquellos espacios que, previsiblemente, serán necesarios para garantizar en el futuro el correcto desenvolvimiento de la actividad portuaria; con esta regulación, el ejercicio de la competencia estatal se mantiene dentro de sus límites propios —pues la medida adoptada se justifica plenamente desde la perspectiva de la competencia sobre puertos, que abarca tanto la realidad física como la actividad portuaria— y no puede afirmarse que la misma se utilice para proceder, bajo su cobertura, a la ordenación del territorio en el que la competencia ha de ejercerse» (STC 40/1998, FJ 33). No obstante, advertimos a continuación que «la reserva de terrenos sí afecta directamente a la planificación territorial (y en este caso, más específicamente a la competencia de ordenación del litoral) y, por ello, debe limitarse a lo estrictamente necesario, siendo preciso dilucidar en su momento si una determinada reserva menoscaba o no competencias autonómicas (STC 227/1988, fundamento jurídico 20). Por otra parte, ese condicionamiento de una competencia autonómica hace especialmente necesario el respeto del deber constitucional de lealtad que debe presidir la actuación del Estado y de las Comunidades Autónomas, así como la búsqueda de soluciones cooperativas, pero, a priori, no puede afirmarse que la simple previsión de que en la zona de servicio portuario se incluyan espacios de reserva suponga un ilegítimo menoscabo de las competencias autonómicas.» (STC 40/1998, FJ 33).

Refiriéndonos ya en concreto a la impugnación del párrafo segundo del art. 9.1 LSF, debe advertirse que reproche casi idéntico al que ahora es objeto de nuestro enjuiciamiento se dedicó a precepto en todo similar de la Ley de puertos del Estado y de la marina mercante, el del art. 3.6 (se dice en él: «Los puertos comerciales que dependan de la Administración del Estado integrarán en la unidad de su gestión los espacios y dársenas pesqueras, así como los espacios destinados a usos náutico-deportivos situados dentro de su zona de servicio. Asimismo podrán incluir en su ámbito espacios destinados a otras actividades no comerciales cuando estas tengan carácter complementario de la actividad esencial, o a equipamientos culturales o recreativos, certámenes feriales y exposiciones, siempre que no se perjudique globalmente el desarrollo de las operaciones de tráfico portuario»), y tuvo su contestación en el fundamento jurídico 32 de la STC 40/1998, de 19 de febrero. Los términos de aquella contestación pueden trasladarse en su literalidad al actual enjuiciamiento, para responder, rechazándola, a la impugnación que ahora analizamos, mediante la sustitución de la alusión a los puertos de interés general, a los que se refería la Sentencia anterior, por la de zonas de servicio ferroviario. Dice así, en lo aquí pertinente, el referido fundamento jurídico:

«La mera previsión de espacios para el desarrollo de las actividades mencionadas, no tiene por qué traducirse necesariamente en una invasión de las competencias urbanísticas. Debemos, más bien, coincidir con el Abogado del Estado en que «el inciso impugnado se limita a prever la posibilidad de que el ámbito portuario acoja actividades complementarias o equipamientos; es decir, autoriza la existencia de esas actividades y equipamientos en el espacio portuario, pero no las impone. La posibilidad de que existan o no dependerá en definitiva, de las determinaciones del plan especial del puerto, que se tramita y aprueba por la administración urbanística competente.»

Podría, sin embargo, alegarse que, al corresponder al Estado la delimitación de la zona de servicio del puerto (art. 15.1 de la Ley de puertos del Estado y de la marina mercante), resultaría esta zona artificialmente aumentada mediante la inclusión en ella de amplios espacios destinados a este tipo de actividades. Ahora bien, con independencia de que, como se ha dicho, los concretos espacios que se dedicarán a las actividades de carácter complementario de la actividad esencial o a equipamientos culturales o recreativos, certámenes feriales y exposiciones, deberán ser definitivamente delimitados por la Administración con competencia urbanística y no por la autoridad portuaria, el citado precepto establece de forma clara que la zona de servicio incluirá las superficies necesarias para la ejecución de las actividades portuarias y las destinadas a tareas complementarias de éstas más los espacios de reserva, y el apartado segundo del mismo artículo dispone que la delimitación se hará mediante un plan de utilización que incluirá los usos previstos para las diferentes zonas del puerto y «la justificación de la necesidad o conveniencia de dichos usos», por lo que, si en un caso concreto el Estado realizara dicha delimitación extendiendo de manera injustificada la zona de servicio portuario, podrán las autoridades con competencia urbanística oponerse e impugnar jurisdiccionalmente esa concreta delimitación. Ya en la STC 149/1991 señalamos que para que el condicionamiento legítimo por parte del Estado de las competencias autonómicas sobre urbanismo y ordenación del territorio «no se transforme en usurpación ilegítima, es indispensable... que el ejercicio de esas otras competencias se mantenga dentro de sus límites propios, sin utilizarlas para proceder, bajo su cobertura, a la ordenación del territorio en el que han de ejercerse». Ello obliga a atender «en cada caso a cuál es la competencia ejercida por el Estado, y sobre qué parte del territorio de la Comunidad Autónoma opera, para resolver sobre la legitimidad, o ilegitimidad de los preceptos impugnados» [FJ 1 b), in fine].

22. El apartado 3 del art. 16, según el cual el Ministro de Fomento «podrá, por razones geográficas o socioeconómicas, fijar una línea límite de edificación diferente a la establecida con carácter general, aplicable a determinadas líneas ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés General, en zonas o áreas delimitadas», es impugnado por los ejecutivos extremeño, asturiano, aragonés y castellano-manchego (aunque el recurso de este se refiere al art. 16), además de por el Parlamento de Cataluña. Sintéticamente, los recurrentes alegan que el precepto vulnera las competencias de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales en materia de ordenación del territorio y urbanismo, en la medida en que la línea límite que en su virtud se defina impedirá de forma absoluta cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación; e invocan el precedente del art. 23.2 de la Ley 22/1988, de 28 julio, de costas, abordado por la STC 149/1991, de 4 de julio, FJ 2. Por su parte, el Abogado del Estado defiende la constitucionalidad del precepto, alegando que prevé suficientes garantías (solo «en zonas o áreas determinadas» e informe preceptivo de las Comunidades Autónomas y entidades locales concernidas) y que la STC 149/1991, FJ 3 b), salvó los títulos especiales de competencia estatal en ejercicio de los cuales se pueden imponer limitaciones o restricciones al dominio de los terrenos colindantes.

Antes de abordar la impugnación conviene que precisemos el significado y alcance de la norma impugnada. Como señala el Abogado del Estado, la línea límite de edificación implica una restricción en el régimen de usos de los terrenos afectados y, por ende, de las facultades dominicales de los titulares de esos terrenos en aras a la protección de la obra pública e, indirectamente, en defensa de la seguridad de quienes sean usuarios de esa obra pública. La figura existe asimismo en el marco de la legislación de carreteras (con arreglo al art. 25 de la Ley de carreteras de 1998). Por lo que respecta al ámbito ferroviario, la línea límite de edificación supone la prohibición de cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación, en el espacio comprendido entre la línea ferroviaria y la línea límite de edificación, incluido el establecimiento de nuevas líneas eléctricas de alta tensión, con la única excepción de las obras que resultaren imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las edificaciones existentes en el momento de la entrada en vigor de la ley (art. 16.1 LSF). La Ley sitúa la línea límite de edificación, con carácter general, a 50 metros de la arista exterior más próxima de la plataforma, medidos horizontalmente a partir de la mencionada arista (art. 16.2 LSF). No obstante, se prevén diversas excepciones o derogaciones que deberán ser establecidas siempre por vía reglamentaria: por un lado, la posibilidad de distancias inferiores, bien para zonas urbanas aunque de forma compatible con el planteamiento urbanístico correspondiente (art. 16.4 LSF) bien en función de las características de las líneas (art. 16.2, párrafo segundo, LSF); por otro, la posibilidad —cuya constitucionalidad debemos analizar— de establecer, en atención a «razones geográficas o socioeconómicas», una línea límite de edificación «diferente a la establecida con carácter general» —y por ende, a una distancia tanto superior como inferior— «aplicable a determinas líneas... en zonas o áreas delimitadas».

Los recurrentes no discuten la competencia del Estado para establecer límites de edificación en toda la longitud de las líneas ferroviarias, ni para establecer incluso límites inferiores en atención al carácter urbano o a las características de las líneas: sólo atacan la potestad de modificar dicho límite y, de forma implícita, de incrementar eventualmente la distancia mínima de edificabilidad por encima de los 50 metros, para las líneas ferroviarias de determinadas zonas, en atención a «razones geográficas o socioeconómicas». Conviene destacar que el supuesto y los reproches planteados son distintos de los que analizamos en la STC 65/1998, de 18 de marzo (FFJJ 15 y 16). Entonces se impugnaba el establecimiento por ley de una línea límite de edificación aplicable a las variantes o carreteras de circunvalación, por cuanto el órgano ejecutivo autonómico recurrente aducía que la distancia fijada como límite era excesiva y que en ese concreto supuesto la concurrencia de competencias en el espacio físico imponía la necesidad de arbitrar mecanismos de coordinación. Ambos reproches fueron descartados.

Igualmente cabe recordar que en la STC 149/1991, FJ 3 b), señalamos que las servidumbres y limitaciones del dominio que regula la Ley de costas traía razón de ser de «la propia naturaleza, características y función social de los bienes que integran el dominio público marítimo-terrestre, lo que obliga a limitar el uso que pueda hacerse de tales terrenos colindantes al amparo, genéricamente, del título resultante del art. 149.1.23 C.E.», aunque ello no excluía «la posibilidad de que el Estado pueda utilizar otras competencias

sectoriales» para dar cobertura a servidumbres y limitaciones sobre terrenos que no forman parte del dominio público, y específicamente aludimos a la competencia ex art. 149.1.4 CE.

El Abogado del Estado considera que los títulos estatales relativos a los ferrocarriles y obras públicas permiten al Estado, en concurrencia con el art. 149.1.1 CE, establecer un régimen especial de restricciones a la propiedad como el del art. 16.3 LSF, fundado en la protección de la obra pública y de sus usuarios cuando se den especiales circunstancias geográficas o socioeconómicas en los terrenos colindantes a la infraestructura estatal. Desde la perspectiva del canon aplicable en esta materia, esto es, las competencias autonómicas sobre ordenación del territorio y urbanismo, debe rechazarse la impugnación del art. 16.3 LSF siempre que se interprete que la facultad de fijar, en atención a razones geográficas o socioeconómicas, una línea límite de edificación diferente a la establecida con carácter general que dicho precepto legal atribuye al Ministerio de Fomento sirve exclusivamente a la protección de la obra pública y de sus usuarios en zonas o áreas delimitadas.

IV. Impugnaciones basadas en las competencias autonómicas sobre seguridad industrial.

23. Un cuarto bloque de impugnaciones de preceptos de la Ley 39/2003 relacionados con el transporte ferroviario tiene como finalidad la defensa de las competencias autonómicas en materia de seguridad industrial. Todos los recurrentes defienden que el otorgamiento del certificado de seguridad, que el art. 57.4 LSF atribuye el Ministerio de Fomento o, en su caso, el administrador de infraestructuras ferroviarias u otro ente facultado por aquel, es un acto de ejecución en materia de seguridad industrial que corresponde a las Comunidades Autónomas en virtud de sus competencias sobre industria. Si bien el recurso interpuesto por el Gobierno de Castilla-La Mancha dirige su impugnación al art. 57 sin especificar un apartado en concreto, sus alegaciones se centran exclusivamente en el apartado 4 del precepto, por lo que nos limitaremos a examinar la constitucionalidad de dicho apartado. Los recurrentes, por tanto, no cuestionan la posibilidad de que, en lugar del Ministerio de Fomento, un organismo estatal distinto otorgue el certificado de seguridad, sino que no sean las Comunidades Autónomas las competentes para otorgarlo. Frente a las alegaciones de los recurrentes, el Abogado del Estado sostiene que el otorgamiento del certificado de seguridad se inserta dentro de la competencia estatal sobre tráfico y ordenación de vehículos de motor, partiendo de la premisa de que los ferrocarriles constituyen «vehículos de motor»; aunque sugiere que, de no aceptarse dicha premisa, habría que considerar que, a semejanza de lo que ocurre con la seguridad en la navegación y el título «marina mercante» y la seguridad aérea y el título «tránsito y transporte aéreo», la competencia estatal sobre ferrocarriles incluye todo lo relativo a la circulación por vía férrea, al menos cuando esta es estatal. Cabe destacar que la disposición final segunda de la Ley 39/2003 no excluye ninguna de las dos posibilidades de encuadre material, pues entre los títulos competenciales que la amparan a dicha ley menciona el art. 149.1.21 CE, precepto que, como es sabido, menciona tanto el título competencial «ferrocarriles» como el de «tráfico y circulación de vehículos a motor».

Comenzaremos delimitando el ámbito material de los conceptos «seguridad industrial» y «tráfico y circulación de vehículos a motor», según nuestra jurisprudencia, para poder encuadrar materialmente la función pública de otorgamiento del certificado de seguridad que se controvierte en este proceso constitucional, lo cual, finalmente, nos permitirá determinar si existe un título estatal que proporcione cobertura competencial a la norma impugnada o si, por el contrario, esta vulnera competencias autonómicas.

Especialmente relevante para el caso actual es la STC 332/2005, de 15 de diciembre, que resolvió diversos recursos de inconstitucionalidad contra varios preceptos legales relativos a la prestación de servicios de inspección técnica de vehículos, y que recapitula nuestra doctrina sobre la distribución competencial en materia de inspección técnica de vehículos. En el fundamento jurídico 10 de la STC 332/2005 señalamos lo siguiente:

«[E]ste Tribunal ya se ha pronunciado en ocasiones anteriores respecto a la dimensión competencial de materias relacionadas con vehículos de transporte (SSTC 59/1985, de 6 de mayo; 181/1992, de 16 de noviembre; 203/1992, de 26 de noviembre; 14/1994, de 20 de enero; 118/1996, de 27 de junio; y 183/1996, de 14 de noviembre). En todos estos pronunciamientos hemos reconocido que en este ámbito concurren dos títulos competenciales distintos: el relativo al tráfico y a la circulación de vehículos a motor (art. 149.1.21 CE), y el relativo a la seguridad industrial, materia esta que estatutariamente se atribuye a las Comunidades Autónomas. Por lo que se refiere a la delimitación de ambos títulos la jurisprudencia constitucional ha ido desarrollando un cuerpo doctrinal del que, como se ha encargado de recordar la STC 183/1996, de 14 de noviembre (FJ 2), «resulta una clara diferenciación entre la competencia para determinar los requisitos técnicos que deben cumplir los vehículos para garantizar la seguridad vial y la de las personas implicadas en los diversos transportes, que pertenece a la materia de tráfico, competencia exclusiva del Estado... y... la actividad ejecutiva de verificación del cumplimiento de aquellos requisitos técnicos exigidos en la legislación estatal para la homologación de determinados productos industriales destinados al transporte, que pertenece a la materia de industria y, por lo tanto, corresponde a las Comunidades Autónomas en la medida en que esté contemplada tal competencia en sus respectivos Estatutos de Autonomía.»

En aplicación de esta doctrina hemos considerado integrados en el título relativo al tráfico y a la circulación de vehículos a motor, no solo lo que el fundamento jurídico 2 de la STC 203/1992, de 26 de noviembre, ha calificado como su «núcleo fundamental» (esto es, «las actividades públicas relativas a la ordenación del desplazamiento o circulación por las vías públicas de vehículos, peatones y animales»), sino también aquellas otras «actividades conexas» que, «por razones de finalidad con las primeras, tienden a garantizar de forma directa e inmediata la seguridad vial». Este sería el caso, como reconoce a continuación esta misma Sentencia, «de las actuaciones relativas al establecimiento de las condiciones técnicas que deben cumplir los vehículos al objeto de garantizar la seguridad del tráfico y de los requisitos técnicos que deben incorporar para proteger a los usuarios de los diversos transportes». En este sentido, a partir de su relación con lo que la STC 181/1992, de 16 de noviembre, ha denominado «seguridad vial activa y pasiva» (FJ 3), hemos considerado integrados dentro del art. 149.1.21 CE la regulación del tacógrafo

(SSTC 59/1985, de 6 de mayo, y 118/1996, de 27 de junio, FJ 67), así como la de las puertas automáticas, ventanas, seguridad de los asientos y pantallas de protección en vehículos de transporte escolar (STC 181/1992, de 16 de noviembre, FJ 4). Paralelamente, sin embargo, también hemos advertido (STC 203/1992, de 26 de noviembre, FJ 2) que las conexiones finalistas que han llevado a incluir en el ámbito del tráfico las actividades directamente relacionadas con la seguridad vial «no permiten incluir en este título cualquier medida que tenga una incidencia más o menos remota sobre la circulación». En términos generales, pues, ha sido la incidencia directa en la seguridad vial el criterio empleado para delimitar el alcance material del art. 149.1.21 CE más allá del ya mencionado núcleo fundamental de esta competencia. De forma complementaria, sin embargo, también hemos aludido desde un principio a la necesidad de que estas garantías de seguridad sean uniformes en todo el territorio nacional para poder considerarlas integradas en este título competencial (SSTC 59/1985, de 6 de mayo, FJ 3; 181/1992, de 16 de noviembre, FJ 3; y 118/1996, de 27 de junio, FJ 67). Frente a esta interpretación del art. 149.1.21 CE, este Tribunal Constitucional ha considerado tradicionalmente, en cambio, que la verificación del cumplimiento de los requisitos técnicos que deben cumplir los vehículos, es decir, la ejecución material de las inspecciones técnicas de vehículos, así como la verificación del cumplimiento de las homologaciones tipo [STC 14/1994, de 20 de enero, FJ 4 b)], forman parte de las competencias autonómicas.

En síntesis, nuestra doctrina sostiene que «la regulación de los requisitos técnicos destinados a la protección y seguridad de conductores y viajeros debe entenderse incluida en la reserva a la competencia estatal exclusiva del art. 149.1.21 C.E.» (STC 183/1996, de 14 de noviembre, FJ 2), y que el criterio para delimitar el alcance material del art. 149.1.21 CE es la incidencia directa e inmediata de la actividad que se trate en la seguridad vial (STC 332/2005, FJ 10). Así, por ejemplo, en la STC 332/2005 (FJ 12), descartamos que el título administrativo que permite la participación de los particulares en la prestación del servicio de inspección técnica de vehículos se vinculara con la garantía de la seguridad vial y, por tanto, encontrara cobertura competencial en el art. 149.1.21 CE. Y un criterio similar aplicamos en la ya citada STC 40/1998, que resolvió diversos recursos de inconstitucionalidad acumulados contra la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de puertos del Estado y de la marina mercante, en la que afirmamos que «la determinación de las condiciones técnicas y de seguridad que deban reunir los buques, el establecimiento de normas de navegación, la concreción del número de miembros de la dotación de los buques y sus condiciones de capacitación profesional... son aspectos que afectan a la seguridad en el mar, que no pueden considerarse ajenos al título de marina mercante» (FJ 46). En esa misma Sentencia señalamos que «la seguridad en la navegación exige, al igual que ocurre en el caso de la seguridad en la circulación por carretera (SSTC 59/1985, fundamento jurídico 3 y 181/1992, fundamento jurídico 3), una serie de garantías uniformes en todo el territorio nacional» (STC 40/1998, 46).

24. Como hemos indicado, antes de proceder al encuadramiento material de la función pública regulada en la norma impugnada bien en la materia de «tráfico y circulación de vehículos de motor» o, alternativamente, en la de ferrocarriles, como defiende el Abogado del Estado, bien en la de seguridad

industrial, como alegan los recurrentes, debemos examinar los concretos términos en los que la norma legal regula la finalidad, el contenido y la forma de obtención del certificado de seguridad así como otros instrumentos o mecanismos al servicio de la seguridad en el transporte ferroviario previstos en la misma ley que, por contraste, nos pueden ayudar a discernir las características del certificado de seguridad. Del examen de las disposiciones que la Ley 39/2003 dedica al certificado de seguridad se extraen las siguientes características relevantes: en primer lugar, el servicio ferroviario no puede ser prestado sobre una determinada línea sin la previa obtención del correspondiente certificado de seguridad (art. 57.1); en segundo lugar, quien debe solicitar el certificado, acreditar de forma suficiente que se prestará adecuadamente el servicio correspondiente y, una vez obtenido el certificado, cumplir las condiciones de seguridad que se establezcan en él es la empresa ferroviaria interesada en prestar el servicio (art. 57.2 y 3); en tercer lugar, el incumplimiento de las condiciones de seguridad que se establezcan en el certificado de seguridad habilita al órgano competente a revocarlo (art. 57.2); en cuarto lugar, el certificado se circunscribe a servicios sobre la red ferroviaria de interés general (art. 57.4); en quinto lugar, el contenido mínimo legal previsto para el certificado incluye tanto aspectos de seguridad vial activa y pasiva («sistema de control, de circulación y de seguridad ferroviaria», «conocimientos y requisitos exigidos al personal de conducción y acompañamiento») como aspectos atinentes a los vehículos («características técnicas del material rodante y... su mantenimiento»: art. 57.5); y en sexto y último lugar, el certificado de seguridad es independiente de la homologación del material rodante que vaya a utilizar la empresa ferroviaria (art. 58).

En suma, la finalidad prevalente del certificado de seguridad es, de acuerdo con su configuración legal, la seguridad vial activa y pasiva en la prestación del servicio ferroviario en una línea determinada. A tal fin, el órgano competente debe evaluar de forma integral un conjunto de condiciones que la empresa ferroviaria debe satisfacer para reducir los potenciales peligros de la circulación ferroviaria para las personas y los bienes, y para poder pronosticar que la actividad de transporte de la empresa en una determinada línea será segura. El certificado de seguridad se otorgará a la empresa ferroviaria «respecto del conjunto de los servicios que vaya a prestar y de las líneas ferroviarias sobre las que pretenda realizar su actividad» (art. 16.3 del Real Decreto 810/2007, de 22 de junio, por el que se aprueba el reglamento sobre seguridad en la circulación de la red ferroviaria de interés general). El certificado de seguridad que deben obtener las empresas ferroviarias no concierne pues directa ni indirectamente a la ordenación de un sector industrial o de un proceso industrial o de fabricación, ni más precisamente a «la seguridad de las instalaciones y establecimientos industriales y la de los procesos industriales y los productos elaborados en las mismas». A pesar de su denominación (que trae causa de la normativa europea, la Directiva 2001/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2001), el certificado no es un mero acto informativo o de conocimiento ni tampoco encaja en la categoría de las homologaciones, sino que se corresponde más bien con la figura de la autorización operativa. En efecto, el certificado no se limita a una mera comprobación del cumplimiento de los requisitos de aptitud o idoneidad de un producto o proceso industrial, sino que, por el contrario, incluye consideraciones amplias y complejas sobre la adecuación al interés

público —desde la perspectiva de la seguridad— del candidato a prestar el servicio de transporte ferroviario, como expresa el art. 16.2 del Real Decreto 810/2007 (en la redacción dada por el Real Decreto 641/2011, de 9 de mayo): «El certificado de seguridad acredita que la empresa ferroviaria ha establecido un sistema propio de gestión de la seguridad y está en condiciones de cumplir los requisitos fijados en las especificaciones técnicas que le afectan así como por otras disposiciones pertinentes de la legislación comunitaria y de las normas nacionales de seguridad, con objeto de controlar los riesgos y prestar servicios de transporte en la red de forma segura». Y, por otro lado, el certificado es susceptible de actualización permanente, «siempre que se produzcan modificaciones sustanciales en las condiciones iniciales que la empresa ferroviaria acreditó para su otorgamiento» (art. 19.3 del Real Decreto 810/2007).

Esta comprensión de la naturaleza del certificado de seguridad extraída de su configuración legal resulta coherente también desde una perspectiva sistemática. El certificado de seguridad es un instrumento imprescindible para la ordenación de la circulación de vehículos por las infraestructuras ferroviarias de la red ferroviaria de interés general y, como tal, no es más que un eslabón más, aunque decisivo, dentro de una cadena escalonada de instrumentos y técnicas de intervención pública que condicionan la prestación efectiva del servicio ferroviario en una línea y franja horaria determinadas y cuyos momentos centrales son la licencia de empresa ferroviaria (art. 44), el certificado de seguridad en relación con una determinada línea (art. 57) y la adjudicación de capacidad de infraestructura en una determinada franja horaria (art. 30 y sigs.). Entre dichos instrumentos de control se establecen conexiones lógicas y funcionales. De un lado, sin la previa obtención del certificado de seguridad una empresa no puede prestar el servicio ferroviario sobre una determinada línea y, por regla general, sin la licencia de empresa ferroviaria no se puede obtener capacidad de infraestructura. De otro lado, el requisito de la competencia profesional necesario para la obtención de la licencia de empresa ferroviaria atiende a la disposición efectiva o, alternativamente, al compromiso de disposición, «en el momento de inicio de sus actividades», de medios personales y materiales adecuados y suficientes, en particular «personal, material rodante y organización aptos para garantizar el suficiente grado de seguridad en los servicios prestados» [art. 47.1 c)].

De todo ello cabe concluir que la función pública contemplada por la norma legal impugnada, el otorgamiento del certificado de seguridad, no se engloba dentro de la materia «seguridad industrial» esgrimida por los recurrentes. De la misma forma que hemos encuadrado aspectos de la seguridad en la navegación marítima en el título estatal relativo a la «marina mercante» (STC 40/1998, FJ 46), debemos concluir que los aspectos de la seguridad relativos a la circulación de los ferrocarriles por la red ferroviaria de interés general se deben englobar en la materia de «ferrocarriles» y no en la de «tráfico y circulación de vehículos de motor», pues en esta última materia sólo se incardinan las normas de seguridad relativas a la circulación por carretera.

Llegados a este punto, podemos proceder al encuadramiento competencial del otorgamiento del certificado de seguridad. En la materia de «ferrocarriles... que transcurran por más de una Comunidad Autónoma» en la que se engloba

el certificado de seguridad contemplado en la Ley 39/2003, el Estado tiene competencia exclusiva de acuerdo con el art. 149.1.21 CE, por lo que tanto la regulación del certificado de seguridad como la atribución a órganos estatales de la función pública de su otorgamiento se encuentran amparados por dicho título estatal. En consecuencia, debemos desestimar la impugnación del art. 57.4 LSF.

Por la misma razón antes indicada, debemos desestimar la impugnación que, por conexión con lo dispuesto en el art. 57.4 y sobre la base de los motivos ya descartados, efectúan los recursos del Gobierno de Extremadura, del Parlamento y del Gobierno de Cataluña y del Gobierno de Castilla-La Mancha respecto al art. 81.1 g) LSF, y del último recurrente mencionado respecto al art. 83.1 d) LSF, los cuales se limitan, respectivamente, a reiterar la atribución al Ministerio de Fomento de la competencia sobre «el otorgamiento de los certificados de seguridad, salvo que se la atribuya al administrador de infraestructuras ferroviarias o a otro ente distinto» y a atribuir al Comité de Regulación Ferroviaria la función de «resolver los conflictos que puedan plantearse entre el administrador de infraestructuras ferroviarias y las empresas ferroviarias» en relación con el «otorgamiento y uso del certificado de seguridad y el cumplimiento de las obligaciones que este comporte».

Asimismo debemos desestimar la impugnación del art. 81.1 m) LSF, que efectúan los recursos del Gobierno de Extremadura, del Parlamento de Cataluña, del Gobierno de Aragón y del Gobierno de Castilla-La Mancha. Si bien la letra m) del art. 81.1, que recoge la competencia del Ministerio de Fomento sobre la «homologación de los centros habilitados para certificar la idoneidad del material rodante y la formación del personal», se corresponde con lo dispuesto en los arts. 58 y 60.2 LSF, los recurrentes lo impugnan como consecuencia o por conexión de la impugnación del art. 57.4 LSF, cuyo correlato es más bien la letra g) del art. 81.1. Sin razones específicas que sustenten tal impugnación, y al haber respondido ya negativamente a los argumentos aducidos contra la constitucionalidad de aquel precepto, basta ahora que reiteremos las consideraciones ya realizadas sobre la inclusión de la seguridad ferroviaria en la competencia estatal sobre ferrocarriles.

(…)

26. Dados los términos en que en el fundamento jurídico 10, por un lado, se declara la constitucionalidad de los criterios de delimitación de la red ferroviaria de interés general basados en el interés general que utiliza el apartado 1 del art. 4 y, por otro, se declara la inconstitucionalidad y nulidad del apartado 1 de la disposición adicional novena, resulta existir una situación anómala que requiere que el Estado concrete los criterios generales de adscripción definidos en la Ley y determine de forma expresa las infraestructuras ferroviarias que pertenecen a la red ferroviaria de interés general utilizando para ello, por ejemplo, los instrumentos típicos de sectores del ordenamiento español que guardan afinidad con el que se analiza aquí —como son los catálogos de carreteras de la red de interés general del Estado—; pues, de lo contrario, persistiría en esta materia una situación no conforme con la Constitución. Una vez determinadas de forma expresa e individualizada las infraestructuras ferroviarias que integran la red ferroviaria de interés general, procederá efectuar en su caso el traspaso a las Comunidades

Autónomas correspondientes de las infraestructuras ferroviarias que no se integren en la red ferroviaria de interés general.

Tal como afirmamos en la STC 208/1999, de 11 de noviembre, FJ 8, «El Estado de las Autonomías configurado por nuestra Constitución no alcanzará, en esta materia, su diseño acabado en tanto el orden de competencias que se desprende de la Constitución y los Estatutos no alcance plena realización». Así pues, la situación de indeterminación de las infraestructuras que pertenecen a la red ferroviaria de interés general con arreglo a los criterios definidos en la Ley 39/2003 es provisional y, por supuesto, debe acabar cuanto antes. Como concluimos en la misma Sentencia antes mencionada, «"La lealtad constitucional obliga a todos" (STC 209/1990, fundamento jurídico 4), y en este caso especialmente al Estado, a ponerle fin en el plazo más breve posible».

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,

Ha decidido

Estimar parcialmente los recursos de inconstitucionalidad acumulados 908-2004, 909-2004, 917-2004, 918-2004, 930-2004 y 933-2004, interpuestos contra la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del sector ferroviario y, en su virtud:

1.º Declarar la inconstitucionalidad y nulidad de la disposición adicional novena, apartado 1.

2.º Desestimar los recursos en todo lo demás."

2. CUESTIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD

A) CUESTIONES PLANTEADAS EN 2012.

No se han planteado cuestiones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional en el año 2012 sobre normativa aragonesa.

B) CUESTIONES PLANTEADAS EN ANTERIORES AÑOS Y QUE ESTÁN AÚN EN TRAMITACIÓN.

- Cuestión de inconstitucionalidad número 1819-2010, en relación con el artículo 68 de la Ley de las Cortes de Aragón 5/2005, de 14 de junio, de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón.

El Tribunal Constitucional, por providencia de 5 de octubre de 20010, admitió a trámite la cuestión de inconstitucionalidad número 1819-2010 (B.O.E. nº 254, de 20 de octubre de 2010).

La cuestión fue planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Zaragoza, en el procedimiento abreviado nº 275/2009, en relación con el artículo 68 de la Ley indicada por posible vulneración del artículo 149.1.18ª de la Constitución.

C) SENTENCIAS Y AUTOS DICTADOS EN 2012.

Durante el año 2012, no se ha dictado por parte del Tribunal Constitucional sentencia o auto alguna resolviendo cuestiones de inconstitucionalidad sobre normativa aragonesa.

3. CONFLICTOS DE COMPETENCIA

A) CONFLICTOS PLANTEADOS EN 2012.

Durante el año 2012, no se ha planteado conflicto positivo o negativo alguno de competencia en el que haya intervenido el Gobierno de Aragón frente al Estado o las Comunidades Autónomas.

B) CONFLICTOS PLANTEADOS EN ANTERIORES AÑOS Y QUE ESTÁN AÚN EN TRAMITACIÓN.

En el año 2012, el Tribunal Constitucional ha continuado la tramitación de los siguientes conflictos de competencia:

- Conflicto positivo de competencia número 7781-2009 planteado por el Gobierno de Aragón en relación con la Orden del Ministerio de Sanidad y Política Social núm. 1352/2009, de 26 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones para la realización de programas de cooperación y voluntariado sociales con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y la Orden del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio rural y Marino núm. 1593/2009, de 5 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a asociaciones declaradas de utilidad pública y fundaciones adscritas al protectorado del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, para fines de interés social de carácter medioambiental.

El Tribunal Constitucional, por providencia de 13 de octubre de 2009, admitió a trámite este conflicto positivo de competencia número 7.781-2009 (B.O.E. nº 258 de 26 de octubre de 2009)

- Conflicto positivo de competencia número 1618-2003, promovido por el Gobierno de Aragón en relación con una certificación de 9 de noviembre de 2002, de la Dirección General de Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente.

El Tribunal Constitucional, por providencia de 8 de abril de 2003, admitió a trámite este conflicto positivo de competencia número 1.618-2003, en relación con una certificación de 9 de noviembre de 2002, sobre la afección de los proyectos y actuaciones a la conservación de la diversidad en Zonas de Especial Conservación y en Zonas de Especial Protección de Aves, expedida por la Dirección General de Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente del proyecto de "Construcción del abastecimiento de agua a Lérida y núcleo urbano a la zona regable del canal de Piñana, fase II"

- Conflicto positivo de competencia número 198-2004, promovido por el Gobierno de Aragón en relación con determinados preceptos del Real Decreto 1046/2003, de 1 de agosto, por el que se regula el Subsistema de Formación Profesional Continua.

El Tribunal Constitucional, por providencia de 10 de febrero de 2004, admitió a trámite este conflicto positivo de competencia número 198-2004, en relación con los artículos 12, 14, 18, 19, 20 y 21 del Real Decreto 1046/2003, de 1 de agosto, por el que se regula el Subsistema de Formación Profesional Continua.

C) SENTENCIAS Y OTRAS RESOLUCIONES DE CONCLUSIÓN DICTADAS A LO LARGO DE 2012.

- Sentencia nº 6/2012, de 18 de enero de 2012. Conflicto positivo de competencia número 2.799-1998, planteado por el Gobierno de la Generalidad de Cataluña frente al Gobierno de Aragón en relación con el ejercicio del derecho de retracto que se inició mediante la Orden del Consejero de Educación y Cultura de la Diputación General de Aragón de 8 de agosto de 1997 y que posteriormente se concretó mediante la Orden del mismo Consejero de 10 de febrero de 1998, respecto de los bienes que se relacionan en el anexo de esta última procedentes del Monasterio de Sigena y adquiridos por la Generalidad de Cataluña.

El Tribunal Constitucional, por providencia de 21 de julio de 1998, admitió a trámite este conflicto positivo de competencia número 2.799/1998.

El Tribunal Constitucional, finalmente, resolvió estimando el conflicto de competencia planteado, declarando inconstitucionales las disposiciones objeto de estudio. La decisión no fue unánime, y así, se formularon dos votos particulares asumidos por cuatro miembros del Tribunal.

Los argumentos jurídicos en los que se apoya la sentencia 6/2012 son los siguientes:

"1. En el presente proceso constitucional, el Gobierno de la Generalitat de Cataluña plantea conflicto positivo de competencia frente al Gobierno de la Diputación General de Aragón en relación con el ejercicio del derecho de retracto que se inició por Orden del Consejero de Educación y Cultura de la Diputación General de Aragón, de 8 de agosto de 1997, y que, posteriormente, se concretó mediante Orden del mismo Consejero de 10 de febrero de 1998, respecto de los bienes que se relacionan en el anexo de esta última procedentes del Monasterio de Sigena, adquiridos en su día por la Generalitat de Cataluña según se relata en los antecedentes de esta Sentencia.

La representación del Gobierno de la Generalitat de Cataluña sostiene que adquirió los citados bienes en ejercicio de las competencias asumidas en el Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC) aprobado por la Ley Orgánica 4/1979, de 18 de diciembre, en materia de patrimonio histórico y museos (arts. 9.5, 9.6 y 11.7 EAC), y en cumplimiento de la legislación vigente (art. 8 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del patrimonio histórico español), que le impone la obligación de actuar cuando observe peligro de destrucción o deterioro en un bien integrante del patrimonio histórico español.

En su demanda argumenta, en primer lugar, que dichos bienes no tienen la condición de bien de interés cultural y, en consecuencia, no cumplen las condiciones legales para que la Diputación General de Aragón pueda ejercer el retracto previsto en al art. 38 de la Ley del patrimonio histórico español. En segundo lugar, expone que, al pretender ejercer el derecho de retracto sobre ellos, la Comunidad Autónoma de Aragón habría excedido los límites de sus competencias con menoscabo de las que corresponden al Gobierno de la Generalitat. Esta actuación comportaría una extralimitación temporal en el ejercicio de sus competencias en materia de patrimonio histórico y cultural, que no tenía transferidas cuando se efectuó la compra de los bienes procedentes del Monasterio de Sigena, en 1983. En segundo lugar, supondría una extralimitación territorial al extender la capacidad de retracto a bienes, como los adquiridos en 1992, que no quedaron incluidos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón al haber salido de su territorio con anterioridad a la aprobación de su Estatuto. En tercer lugar, se habría producido una extralimitación material en el ejercicio de su competencia puesto que, de acuerdo con la legislación vigente (art. 28 de la Ley del patrimonio histórico español), el retracto de bienes histórico-artísticos no puede ser utilizado entre Comunidades Autónomas respecto de bienes adquiridos a instituciones eclesiásticas. Finalmente, la Letrada de la Generalitat de Cataluña señala que la competencia de las Comunidades Autónomas en materia de protección del patrimonio histórico se ejerce sobre una realidad material resultado de las decisiones adoptadas a lo largo del tiempo por las Administraciones respecto de determinados bienes que no queda alterada por la constitución de las Comunidades Autónomas, de tal modo que la ubicación del bien, y no su procedencia en origen, es el criterio para determinar a qué Administración autonómica corresponde la competencia en materia de protección artística y cultural.

Por su parte, el Letrado de la Comunidad Autónoma de Aragón sostiene que el conflicto planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña carece de relevancia constitucional ya que versa sobre cuestiones fácticas y de legalidad ordinaria relativas al ejercicio del derecho de retracto que deben ser resueltas por los Tribunales ordinarios, señalando que la Generalitat ha recurrido también en la vía contencioso-administrativa las órdenes impugnadas en el presente conflicto. En consecuencia, dado que la controversia planteada en este proceso no discute las competencias de la Comunidad Autónoma de Aragón, sino el concreto ejercicio de las mismas, propone que el Tribunal declare su falta de jurisdicción [art. 4.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)]. En todo caso, la representación de la Comunidad Autónoma de Aragón afirma que el ejercicio del derecho de retracto sobre los bienes objeto de litigio, que a su juicio sí constituyen bienes de interés cultural, forma parte de las competencias de ejecución en materia de patrimonio histórico asumidas por la Comunidad Autónoma [art. 36.1 g) del Estatuto de

Autonomía de Aragón (EAAr)], que después de la reforma llevada a cabo por la Ley Orgánica 5/1996, de 30 de diciembre, ostenta con carácter exclusivo (art. 35.1.33 EAAr), y por ello interesa subsidiariamente que se declare a dicha Comunidad titular de la competencia controvertida.

2. La resolución de este conflicto debe partir de la consideración de la jurisdicción del Tribunal Constitucional para resolverlo (art. 4.2 LOTC), pues la representación de la Comunidad Autónoma de Aragón ha alegado la falta de dicha jurisdicción argumentando al efecto la carencia de relevancia constitucional de la controversia planteada por la Generalitat de Cataluña, que a su juicio versa sobre cuestiones fácticas y de legalidad ordinaria relativas al ejercicio del derecho de retracto. De ahí que aquella representación solicite del Tribunal un pronunciamiento que así lo declare.

Es muy cierto que, como señala el Gobierno de Aragón, en el presente caso subyace un conflicto de legalidad ordinaria que se refiere, en primer lugar, a la naturaleza de los bienes procedentes del Monasterio de Sigena que fueron adquiridos por la Generalitat. Así, la Diputación General de Aragón defiende que los bienes adquiridos por la Generalitat de Cataluña son bienes de interés público, ya que la declaración del Monasterio de Sigena como monumento nacional abarca no sólo al inmueble sino a todas sus partes integrantes. Del mismo modo, la Diputación General de Aragón considera que la enajenación de estos bienes muebles no se ha realizado de acuerdo con lo establecido en el art. 38.1 de la Ley del patrimonio histórico español, ya que la comunidad de religiosas de Sigena no la notificó ni a la Administración del Estado ni a la Diputación de Aragón a fin de que pudieran ejercer el derecho de tanteo, ni fue tampoco publicada en el «Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña». Y de lo anterior concluye que, siendo los bienes parte integrante del Monasterio de Sigena, el ejercicio del derecho de retracto corresponde a la Diputación General de Aragón. Frente a lo anterior la Generalitat opone que la declaración del Monasterio de Sigena como bien de interés cultural se refería únicamente a diversas partes de la edificación y no aludía a otros elementos, por lo que los bienes enajenados no son bienes de interés cultural, sin que resulte necesario que la Diputación General de Aragón pueda ejercer el retracto previsto en la Ley del patrimonio histórico español. Por lo demás, la Generalitat recuerda que los bienes en cuestión se encontraban en Cataluña desde antes del año 1970 depositados en museos y que su adquisición por la Generalitat se hizo a instancias de las religiosas de la Orden de San Juan de Jerusalén.

Del mismo modo, el presente asunto contiene una controversia sobre la naturaleza del derecho de retracto en tanto que instrumento reconocido a la Administración pública para la protección del patrimonio cultural y sobre los límites a su ejercicio.

En efecto, la Generalitat de Cataluña impugna las referidas órdenes del Consejero de Educación y Cultura de la Diputación General de Aragón recurriendo a diversos argumentos, algunos sin duda de mera legalidad o basados en apreciaciones fácticas. En primer lugar, se niega a los bienes objeto de litigio la condición de bienes de interés cultural, de acuerdo con la legislación anterior (Real Orden de 28 de marzo de 1923, que declaró monumento nacional el Real Monasterio de Sigena) y vigente (art. 26 y disposición adicional primera de la Ley del patrimonio histórico español). En segundo lugar, y derivado de lo anterior, se rechaza que tales bienes puedan ser objeto del derecho de retracto por parte de la Comunidad Autónoma de Aragón por no concurrir los presupuestos objetivos exigidos por la legislación en materia de patrimonio histórico (art. 38.4 de la Ley del patrimonio histórico español y art. 40 Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la misma). Y en tercer lugar, se señala la imposibilidad de retracto de bienes histórico-artísticos entre Comunidades Autónomas sobre bienes adquiridos a instituciones eclesiásticas (art. 28 y disposición transitoria quinta de la Ley del patrimonio histórico español).

Todas estas cuestiones deben excluirse del objeto del conflicto constitucional, dado su carácter fáctico o de legalidad ordinaria, pues ciertamente atienden a la calificación de los bienes y a eventuales vicios de legalidad en el proceso de enajenación. La verificación de dichos requisitos corresponde en exclusiva a los Tribunales ordinarios, a los que ya ha acudido la entidad promotora del conflicto.

3. Ahora bien, en el escrito de demanda se puntualiza que la petición formulada al Tribunal no es la determinación de la titularidad de dichos bienes sino la declaración de que la potestad administrativa de tutela sobre patrimonio histórico corresponde a la Generalitat, como efectivamente se hace en el petitum de la demanda («en mérito de todo lo expuesto, previo los trámites legales oportunos, dicte Sentencia por la que declare que la competencia controvertida corresponde a la Generalitat de Cataluña y la consiguiente nulidad de las referidas Órdenes»). Desde este punto de vista, procede considerar si el presente asunto que enjuiciamos plantea un conflicto competencial que merezca de nuestra consideración.

Como es sabido, nuestra jurisprudencia ha ido configurando un concepto amplio de conflicto positivo de competencia a partir de su regulación en los arts. 62 a 67 LOTC, afirmando que en este tipo de procesos no resulta indispensable que el ente que los formaliza recabe para sí la competencia ejercida por otro; basta que entienda que una disposición, resolución o acto emanados de ese otro ente no respeta el orden de competencias establecido en el bloque de la constitucionalidad y, en el caso de las Comunidades Autónomas, además, que tal disposición, resolución o acto afecte a su ámbito de autonomía

condicionando o configurando sus competencias de una forma que juzga contraria a este orden competencial. Así, en el ámbito procesal propio de los conflictos constitucionales de competencia cabe, tanto la reivindicación de la titularidad del acto controvertido, como la denuncia de los excesos en el ejercicio de una competencia ajena siempre que ese exceso vulnere el sistema de distribución de competencias diseñado en el bloque de la constitucionalidad (SSTC 243/1993, de 15 de julio, FJ 2, y 87/1997, de 24 de abril, FJ 2).

En coherencia con esta doctrina, el objeto y los límites del conflicto positivo de competencia se han interpretado con un criterio amplio, comprensivo no sólo de los supuestos que cabría calificar como normales, en los que el ente que plantea el conflicto ejerce una verdadera vindicatio potestatis por considerarse despojado de una competencia que le corresponde, sino también de aquellos otros supuestos en los que no se reivindica stricto sensu una competencia como propia, sino que se pretende la anulación del acto o disposición objeto del conflicto porque no ha respetado el orden de competencias establecido, en menoscabo de las que corresponden al ente que promueve el conflicto (ATC 886/1988, de 5 de julio, FJ 1).

No obstante, hemos advertido que no cualquier pretensión que afecte a la titularidad o al ejercicio de una competencia puede incluirse, sin más, en el proceso relativo a los conflictos constitucionales de competencia, ya que para ello se requiere, entre otras condiciones, que la controversia afecte a la definición o delimitación de los títulos competenciales en litigio y, más exactamente, a la delimitación de los títulos contenida en la Constitución, los Estatutos de Autonomía o las leyes del bloque de la constitucionalidad que delimitan las competencias estatales y autonómicas (STC 243/1993, FJ 2).

Más recientemente, la STC 44/2007, de 1 de marzo, FJ 3, tras realizar la síntesis de nuestra jurisprudencia, ha señalado que «el conflicto positivo de competencia es un proceso configurado no sólo al servicio de la reivindicación competencial y, consiguientemente, de la declaración de la titularidad de la competencia ejercitada y manifestada en el acto o disposición objeto de la controversia, sino que también posibilita la defensa de las competencias propias frente a aquellos actos y disposiciones de otros entes que menoscaban o interfieren el legítimo ejercicio de dichas competencias, entendiendo por tal tanto lo que atañe a la titularidad de las mismas como lo que afecta o incide en su legítimo y pacífico ejercicio. Dicho de otro modo, existirá el vicio de incompetencia que constituye el objeto propio del conflicto positivo de competencia bien si la parte actora reclama para sí la competencia ejercida por otro o bien si, en su caso, discrepa de la forma en que el titular de una competencia la ha ejercido, extralimitándose y lesionando, perturbando o desconociendo al ejercitarla el ámbito de atribuciones constitucionales de quien plantea el conflicto».

La demanda tiene cuidado de especificar que en el conflicto se plantea únicamente que corresponde a la Generalitat la competencia para proteger los bienes controvertidos y que Aragón ha excedido los límites de sus competencias en materia de patrimonio histórico y cultural [art. 36.1 g) EAAr, posteriormente art. 35.1.33 EAAr], con invasión de sus propias competencias en esa materia, asumidas en el Estatuto de Autonomía (arts. 9.5 y 9.6 EAC).

4. Delimitado el enfoque constitucional de la demanda que rige el asunto y expuesta nuestra jurisprudencia sobre el concepto de conflicto positivo de competencia, procede aplicar nuestra doctrina al presente caso, lo que nos lleva a rechazar la pretendida falta de jurisdicción opuesta por la representación del Gobierno de Aragón, dado que el conflicto promovido por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña sí plantea una controversia competencial.

En efecto, contrariamente a lo alegado por la representación del Gobierno aragonés, la parte promotora del conflicto discute en su demanda las competencias de la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de patrimonio histórico y cultural [art. 36.1 g) EAAr, posteriormente art. 35.1.33 EAAr] pues denuncia que su titular las ha ejercido extralimitadamente con invasión de sus propias competencias en esta materia, asumidas en el Estatuto de Autonomía (arts. 9.5 y 9.6). A juicio de la entidad demandante, el exceso de los límites competenciales se habría producido al pretender ejercitar el Gobierno de Aragón, mediante las citadas órdenes del Consejero de Educación y Cultura de la Diputación General de Aragón, el derecho de retracto sobre unos bienes eclesiásticos procedentes del Monasterio de Sigena que fueron adquiridos en 1983 y 1992 por la Generalitat de Cataluña, y en los que no concurrían los requisitos legales y fácticos que permiten ejercer tal derecho. En el escrito de demanda se puntualiza que la petición formulada a este Tribunal no es la determinación de la titularidad de dichos bienes, sino la declaración de que la potestad administrativa de tutela sobre patrimonio histórico corresponde a la Generalitat en virtud de su Estatuto de Autonomía, como efectivamente se hace en el petitum de la demanda, en el que se solicita la consiguiente nulidad de las órdenes impugnadas por estimar que vulneran el orden competencial.

Dichas órdenes deben considerarse «disposiciones» emanadas de la autoridad de otra Comunidad (art. 63.1 LOTC en relación con los arts. 61.2 y 62 LOTC) impugnables en vía de conflicto constitucional pues según una consolidada jurisprudencia «lo importante a estos efectos no es tanto la naturaleza o la forma del acto como la real existencia de una controversia o disputa ante un evidente ejercicio de competencias supuestamente lesivo del orden constitucional» (por todas, STC 101/1995, de 20 de junio, FJ 6). Y ello porque lo esencial para utilizar la vía del conflicto positivo de competencia «no es la

naturaleza del acto que se discuta en el mismo, sino ... la afirmación por un ente de poseer una competencia ... frente a otro ente al que se le niega poseerla» (SSTC 143/1985, de 24 de octubre, FJ 3; 137/1989, de 20 de junio, FJ 2).

Por otra parte, también hemos declarado que la existencia o inexistencia de la supuesta vulneración del orden de competencias «no se halla subordinada a la eficacia real del acto que la ocasione, sino a la conexión necesaria entre el acto y el ejercicio de una competencia, cuya titularidad reclama para sí el promotor del proceso constitucional» (STC 137/1989, de 20 de julio, FJ 2). En este sentido, las órdenes impugnadas por las que se acuerda ejercitar el derecho de retracto legal sobre los mencionados bienes constituyen efectivamente un ejercicio de la competencia de ejecución en materia de patrimonio histórico asumida por la Comunidad Autónoma de Aragón [art. 36.1 g) EAAr, posteriormente art. 35.1.33 EAAr], tal como admite el Letrado de dicha Comunidad en sus alegaciones. Ello es así porque la decisión de ejercitar tal derecho es un acto formal de la Comunidad Autónoma, que realiza como tal de conformidad con el art. 38 de la Ley del patrimonio histórico español y los arts. 40, 41 y 42 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, según reza el fundamento jurídico segundo de la Orden de 8 de agosto de 1997. Los preceptos citados contemplan la posibilidad de retracto de determinados bienes culturales por parte de «los demás organismos competentes para la ejecución de esta Ley» (art. 38.4 de la Ley del patrimonio histórico español), entre los que figuran aquellos que «en cada Comunidad Autónoma tengan a su cargo la protección del Patrimonio Histórico» [art. 6 a) de la misma ley], en este caso el Consejero de Educación y Cultura de la Diputación General de Aragón. La Generalitat de Cataluña también entiende que mediante las órdenes impugnadas el Gobierno de Aragón habría ejercido las potestades inherentes a la tutela administrativa sobre el patrimonio artístico, si bien fuera de los límites competenciales y legales fijados en el bloque de la constitucionalidad.

Por las razones que se acaban de exponer, debemos también rechazar que la compraventa de los controvertidos bienes por parte de la Generalitat no supusiera actuación de potestad alguna, como sostiene la representación del Gobierno de Aragón. De la misma forma que el ejercicio del derecho de retracto sobre aquellos bienes constituye un ejercicio de la competencia de ejecución en materia de patrimonio histórico por parte del Gobierno de Aragón, su previa adquisición por parte de la Generalitat se realizó, como sostiene su escrito de requerimiento de 16 de abril de 1998, en ejercicio de las competencias en materia de patrimonio cultural y de museos asumidas estatutariamente (arts. 9.5 y 9.6 EAC), y en cumplimiento de lo dispuesto en la legislación sobre patrimonio histórico (arts. 6 y 8 de la Ley del patrimonio histórico español y art. 40.3 del Real Decreto 111/1986).

El conflicto promovido por la Generalitat de Cataluña se plantea precisamente por entender que con la decisión de ejercitar ese derecho de retracto legal, la Comunidad Autónoma de Aragón se habría extralimitado en el ejercicio de sus competencias sobre patrimonio histórico y cultural, menoscabando las que le corresponden al Gobierno de la Generalitat. La pretensión de incompetencia se funda pues en un ejercicio de las competencias por parte de la Comunidad Autónoma de Aragón que condicionaría el ejercicio de las que corresponden a la Generalitat de Cataluña de forma contraria al orden competencial establecido en el bloque de la constitucionalidad, y por ello revelaría un entendimiento del alcance de las competencias implícitas opuesto a ese sistema de distribución de competencias (STC 243/1993, FJ 2). La Generalitat de Cataluña interesa de este Tribunal que declare que la competencia controvertida corresponde a la Generalitat.

De todo lo anterior, debemos concluir que, en el presente caso, la pretensión competencial de la actora tiene indudable relieve constitucional y de ahí que el conflicto positivo de competencia promovido por la Generalitat de Cataluña encaja en las previsiones de la LOTC (arts. 59, 61 y 63.1), sin que pueda ser atendida la objeción procesal opuesta por la representación de la Comunidad Autónoma de Aragón.

5. Descartado el óbice procesal planteado, procede resolver el conflicto positivo de competencia que nos ha sido planteado. Para hacerlo debemos examinar el sistema constitucional de distribución de competencias en materia de patrimonio histórico, pues como señalamos en la temprana Sentencia 143/1985, de 24 de octubre, FJ 6, y en otras muchas posteriores, «el conflicto positivo de competencias es un proceso constitucional singular y específico del que debe conocer este Tribunal en exclusiva, para dirimir la titularidad de las competencias que dos entes pretenden poseer uno frente a otro».

Nuestro estudio, pues, ha de partir de la consideración del sistema constitucional de distribución de competencias en materia de patrimonio histórico, incluso el vigente en este momento, pues «la normativa estatal a tener en cuenta como elemento de referencia para el enjuiciamiento de las normas autonómicas en procesos constitucionales en los que se controla la eventual existencia de excesos competenciales ha de ser la vigente en el momento de adoptarse la decisión por parte de este Tribunal sobre la regularidad constitucional de los preceptos recurridos (SSTC 28/1997, de 13 de febrero, FJ 2; 170/1989, de 19 de octubre, FJ 3, y todas las reseñadas en esta última resolución). Resulta por ello evidente que ha de servir de marco de enjuiciamiento en este proceso el ius superveniens representado por la legislación básica del Estado vigente en este momento» (STC 1/2003, de 16 de enero, FJ 9).

La Constitución Española, además de imponer a los poderes públicos la obligación de conservar y promover «el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad» (art. 46 CE), estableció el régimen de distribución competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de patrimonio histórico y cultural. Según éste el Estado, tiene competencia exclusiva sobre: a) la «defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación» y b) «los museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades Autónomas» (art. 149.1.28 CE). El núcleo de competencias en materia de patrimonio histórico y cultural corresponde, por consiguiente, a las Comunidades Autónomas (art. 148.1.16 CE).

En la STC 17/1991, de 31 de enero, que resolvió los recursos de inconstitucionalidad interpuestos frente a la Ley 16/1985, de 25 de junio, del patrimonio histórico español, deducidos por el Consejo Ejecutivo de la Generalitat de Cataluña, la Junta de Galicia, el Gobierno Vasco y el Parlamento de Cataluña, nos referimos a este régimen. Allí, en fundamentos que ahora resumimos, dijimos que los distintos Estatutos de Autonomía de las Comunidades recurrentes asumen competencias exclusivas en materia de patrimonio histórico, artístico, monumental y arqueológico y en archivos, bibliotecas y museos que no sean de titularidad estatal, y destacamos que esa atribución de competencia en la materia «se extiende a todo el patrimonio histórico, artístico, monumental, arqueológico y científico, puesto que sólo se atribuye expresamente al Estado en cuanto a la defensa contra la exportación y la expoliación o a los museos, bibliotecas, y archivos de su titularidad (art. 149.1.28)» (FJ 2). Lo anterior no ha de implicar, sin embargo, que «la eventual afectación de intereses generales o la concurrencia de otros títulos competenciales del Estado en materia determinada no deban también tenerse presentes como límites que habrá que ponderar en cada caso concreto (así los títulos que resultan, v. gr. de los números 6 y 8 del art. 149.1)» (FJ 3).

De acuerdo con este esquema desde la aprobación del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1979 la Generalitat de Cataluña asumió la competencia exclusiva en materia de cultura (art. 9.4), patrimonio histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico y científico (art. 9.5) y en materia de archivos, bibliotecas, museos y otros centros de depósito cultural que no sean de titularidad estatal (art. 9.6).

Este marco normativo ha sido refrendado por el art. 127.1 del vigente Estatuto de 2006 (Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña), el cual añade que, «en todo caso», esta competencia comprende «el patrimonio cultural», que, a su vez, incluye «en todo caso:

Primero. La regulación y la ejecución de medidas destinadas a garantizar el enriquecimiento y la difusión del patrimonio cultural de Cataluña y a facilitar su acceso. Segundo. La inspección, inventario y restauración del patrimonio arquitectónico, arqueológico, científico, técnico, histórico, artístico, etnológico y cultural en general. Tercero. El establecimiento del régimen jurídico de las actuaciones sobre bienes muebles e inmuebles integrantes del patrimonio cultural de Cataluña y la determinación del régimen jurídico de los bienes inmuebles, así como la declaración y la gestión de estos bienes con la excepción de aquéllos que sean de la titularidad del Estado. Cuarto. La protección del patrimonio cultural de Cataluña, que incluye la conservación, la reparación, el régimen de vigilancia y el control de los bienes, sin perjuicio de la competencia estatal para la defensa de los bienes integrantes de este patrimonio contra la exportación y la expoliación».

Por lo que se refiere a la competencia en materia de cultura asumida por la Comunidad Autónoma de Aragón, debemos indicar que en el artículo 36 de la redacción original de su Estatuto (Ley Orgánica 8/1982, de 10 de agosto) la Comunidad Autónoma de Aragón asume, en el marco de la legislación básica del Estado, la función de ejecución y desarrollo legislativo en materia de: patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental, arqueológico, arquitectónico de interés para la Comunidad Autónoma» [art. 36.1 g)]. La reforma estatutaria efectuada por la Ley Orgánica 6/1994, de 24 de marzo, no alteró esta caracterización de la competencia estatutaria en la materia (art. 36.Uno.3). Sí lo hizo, en cambio, la reforma operada por la Ley Orgánica 5/1996, de 30 de diciembre, que incorporó el art. 35.1.33 EAAr que atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva sobre «patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental, arqueológico, arquitectónico y científico de interés para la Comunidad Autónoma».

Finalmente, la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, establece en su artículo 71.45 que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en la materia «patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental, arqueológico, arquitectónico, científico y cualquier otro de interés para la Comunidad Autónoma, en especial las políticas necesarias encaminadas a recuperar el patrimonio aragonés que se encuentre ubicado fuera del territorio de Aragón». Su art. 22, por otra parte, recoge entre los principios rectores de las políticas públicas, el principio de patrimonio cultural, según el cual «1. Los poderes públicos aragoneses promoverán la conservación, conocimiento y difusión del patrimonio cultural, histórico y artístico de Aragón, su recuperación y enriquecimiento. 2. En particular, los poderes públicos aragoneses desarrollarán las actuaciones necesarias para hacer realidad el regreso a Aragón de todos los bienes integrantes de su patrimonio cultural, histórico y artístico que se encuentran fuera de su territorio».

En ejercicio de la señalada competencia exclusiva, las Comunidades Autónomas han aprobado leyes sobre el patrimonio cultural. Así, la Ley 9/1993 del patrimonio cultural catalán («Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña» de 11 de octubre) y la Ley 3/1999 del patrimonio cultural aragonés («Boletín Oficial de Aragón» de 29 de marzo), junto a las que debe mencionarse la Ley 16/1985, del Patrimonio histórico español («Boletín Oficial del Estado» de 29 de junio).

6. En el presente caso, por tanto, nos hallamos ante dos Comunidades Autónomas que poseen competencia exclusiva en materia de protección de patrimonio histórico y cultural. Ambas Comunidades Autónomas ejercen dicha competencia respecto de unos determinados bienes procedentes del Monasterio de Sigena que habían sido trasladados a Cataluña por su propietaria (Orden de San Juan de Jerusalén), de tal modo que, mientras que el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, estando éstos ya en su territorio procedió en 1983 y 1992 a su adquisición, y ha actuado desde entonces a favor de su protección; el Gobierno de Aragón ejerció respecto de ellos el derecho de retracto como un modo para procurar el retorno de los mismos a su territorio. Por tanto aquí el elemento determinante del presente conflicto positivo de competencia radica en que cada parte actúa con la legitimidad constitucional que les confiere la norma estatutaria propia a tenor de los títulos competenciales que cada una de ellas tiene atribuidos. Así, mientras el Gobierno de la Generalitat de Cataluña ha actuado respecto de unos bienes que estaban ya en su territorio procediendo a su adquisición y actuando a favor de su protección ex art. 127 EAC, el Gobierno de Aragón ejerció respecto de ellos el derecho de retracto como un modo para procurar el retorno de los mismos a su territorio. Así lo hizo en el ejercicio de su competencia exclusiva sobre «patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental, arqueológico, arquitectónico, científico y cualquier otro de interés para la Comunidad Autónoma», que comporta la adopción de «las políticas necesarias encaminadas a recuperar el patrimonio aragonés que se encuentre ubicado fuera del territorio de Aragón» (arts. 71.45 y 22.2 EAAr).

Ante la confluencia material que surge de la aplicación de ambas normas, puesto que las mismas suponen la actuación sobre idénticos bienes integrantes del patrimonio histórico, la Generalitat de Cataluña sostiene que las competencias de Aragón carecen de virtualidad en razón de la extraterritorialidad de su ejercicio, es decir, por proyectarse en unos límites físicos que no forman parte de su territorio.

En reiteradas ocasiones nos hemos referido al principio según el cual el territorio es elemento delimitador de los poderes públicos territoriales en el ejercicio de las competencias que les corresponden y, más en concreto, es elemento delimitador de las competencias de las Comunidades Autónomas en

su relación con las demás Comunidades y con el Estado (con cita de las SSTC 44/1984, de 27 de marzo; 180/1992, de 16 de noviembre; 118/1996, de 27 de junio; y 132/1996, de 22 de julio), pues hemos indicado también que este principio no puede ser interpretado «en unos términos que impidan a las instancias autonómicas, en el ejercicio de sus propias competencias, adoptar decisiones cuyas consecuencias puedan proyectarse sobre otros lugares del territorio nacional» [SSTC 37/1981, de 16 de noviembre, FJ 1; 150/1990, de 4 de octubre, FJ 5; y 126/2002, de 23 de mayo, FJ 9 a); y 168/2004, de 6 de octubre, FJ 4].

7. Tal sería el caso del ejercicio por la Diputación General de Aragón del derecho de retracto como expresión de «las políticas necesarias encaminadas a recuperar el patrimonio aragonés que se encuentre ubicado fuera del territorio de Aragón» (art. 71.45 EAAr).

En el asunto que dio lugar a la STC 17/1991, ya citada, las entidades demandantes cuestionaban que la Ley del patrimonio histórico español reconociera estos derechos de tanteo y retracto, alegando, entre otros extremos, que de este modo se concede a la Administración del Estado una preferencia respecto de las Comunidades Autónomas para el ejercicio efectivo de aquéllos.

Para el Tribunal, es claro que la competencia para ejercer los derechos de tanteo y retracto en los casos de expoliación de bienes muebles integrantes del patrimonio histórico español (art. 33 de la Ley del patrimonio histórico español) así como en los casos en los que «se trate de adquirir bienes muebles para un museo, archivo o biblioteca de titularidad estatal» pertenece al Estado (art. 149.1.28 CE). Por lo demás, el Tribunal recordó que «los derechos de tanteo y retracto pueden ser ejercidos en idénticos términos por los demás organismos competentes para la ejecución de esta Ley (los de cada Comunidad Autónoma según el art. 6)», según lo establecido en el art. 38.4 de la Ley del patrimonio histórico español, por lo que no pueden entenderse establecidos única o preferentemente a favor del Estado (STC 17/1991 FJ 18).

La posible instauración de los derechos de tanteo y retracto a favor de las Administraciones autonómicas en el marco de una materia sobre la que ejercen competencia exclusiva ha sido refrendada en diversas ocasiones por este Tribunal que ha establecido que nada impide que los derechos de tanteo y retracto «puedan constituirse en favor de las Administraciones públicas para servir finalidades públicas con adecuado respaldo constitucional, siendo en tal caso regulados por la correspondiente legislación administrativa, e insertándose en las competencias de titularidad autonómica cuando las Comunidades Autónomas hayan asumido en sus Estatutos competencias normativas sobre la materia en que dichos derechos reales se incardinan» (SSTC 170/1989 y 102/1995, de 26 de junio). Así, en materia de medio

ambiente con finalidad protectora de determinados espacios naturales (SSTC 170/1989 y 156/1995, de 26 de octubre) o en materia de urbanismo y vivienda como un mecanismo o técnica jurídica establecida con la finalidad de combatir el fenómeno de la especulación del suelo.

Ahora bien, la función que cumple el retracto en la legislación del patrimonio histórico es garantizar la protección de los bienes de esta naturaleza desde el entendimiento de que en determinadas ocasiones esta protección se va a realizar mejor en manos de la Administración. He aquí la finalidad de la atribución a las Comunidades Autónomas de la facultad de retracto; facultad que, de darse las circunstancias que precisaran de la actuación de preservación y protección del patrimonio, podrán, sin duda, ejercitarla frente a los particulares y frente a otras Administraciones públicas.

8. Resulta pues evidente que una de las políticas a emprender por los poderes públicos aragoneses es el procurar «el regreso a Aragón de todos los bienes integrantes de su patrimonio cultural, histórico y artístico que se encuentran fuera de su territorio» como expresamente establecen los artículos 22.2 (donde se enuncia como un principio rector de la política de patrimonio cultural de la Comunidad de Aragón) y 71.45 EEAr (donde la recuperación «del patrimonio aragonés que se encuentre ubicado fuera del territorio de Aragón» se menciona como expresión de la materia «patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental, arqueológico, arquitectónico, científico y cualquier otro de interés para la Comunidad Autónoma las políticas necesarias encaminadas a recuperar el patrimonio aragonés que se encuentre ubicado fuera del territorio de Aragón», competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Aragón). Es claro igualmente que, en el desempeño de tales políticas de recuperación de bienes, el Gobierno autonómico podría recurrir al ejercicio de potestades públicas como el retracto u otras que pudieran servir al fin de recuperación del patrimonio.

Ahora bien, el ejercicio de las potestades públicas ha de hacerse, en todo caso, en términos conformes con el orden competencial y atendiendo los contornos posibles de las mismas. En relación al primero de estos aspectos debemos recordar que en el presente caso el recurso al derecho de retracto como instrumento de la política de recuperación del patrimonio cultural ubicado fuera del territorio de Aragón —que se realiza en ejercicio de la competencia exclusiva sobre patrimonio histórico y cultural— choca con la competencia autonómica catalana en materia de preservación del patrimonio que ha de entenderse que se extiende a aquel que está en su territorio, independientemente de su origen (art. 127 EAC).

Presentándose, como se ha expuesto, el conflicto, y descartada su solución por la vía de los instrumentos de cooperación entre Comunidades Autónomas, este

Tribunal no puede por más que dirimir, en el caso concreto, qué competencia ha de prevalecer y en razón de qué causa.

Así, desde la consideración de que el objetivo de las competencias de las Comunidades Autónomas en materia de protección del patrimonio histórico es la preservación de los bienes de esta naturaleza y tomando en cuenta no sólo la señalada funcionalidad general del territorio en el entramado de distribución de competencias operado por la Constitución, los Estatutos de Autonomía y demás leyes integradas en el bloque de la constitucionalidad, sino también que nos encontramos ante la concurrencia de competencias en un mismo espacio físico y ante la falta de recurso a las técnicas de colaboración entre Comunidades Autónomas, debemos concluir que en el presente caso prevalece la competencia que corresponde a Cataluña, a cuyo cuidado —y como resultado de las más diversas circunstancias— se hallan los bienes relacionados en las órdenes dictadas por el Consejero de Educación y Cultura de la Diputación General de Aragón. Ciertamente, al ejercer su competencia sobre patrimonio histórico sobre los bienes que se hallan en su territorio —con independencia de cuál sea el origen de los mismos—, Cataluña viene cumpliendo la señalada función de preservación del patrimonio histórico y artístico de España, y resulta constitucionalmente congruente desde esta perspectiva, toda vez que los bienes sobre los que versa la controversia están en adecuadas condiciones de conservación en Cataluña, que los mismos permanezcan en la Comunidad Autónoma en la que se encuentran."

- Auto de 17 de abril de 2012. Conflicto positivo de competencia número 81-2008, promovido por el Gobierno de Aragón en relación con diversos artículos del Real Decreto 1069/2007, de 27 de julio, por el que se regula el procedimiento para la tramitación de las solicitudes de inscripción en el registro comunitario de las denominaciones de origen protegidas y de las indicaciones geográficas protegidas y la oposición a ellas

El Tribunal Constitucional, admitió a trámite este conflicto positivo de competencia que se tramita bajo el número 81-2008, en relación con diversos artículos del Real Decreto 1069/2007, de 27 de julio, por el que se regula el procedimiento para la tramitación de las solicitudes de inscripción en el registro comunitario de las denominaciones de origen protegidas y de las indicaciones geográficas protegidas y la oposición a ellas.

Por auto de 17 de abril de 2012, el Pleno del Tribunal Constitucional acordó tener por desistida a la Comunidad Autónoma de Aragón del conflicto de competencia aquí reseñado.

ESTADO DE OBSERVANCIA, APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DEL DERECHO CIVIL ARAGONÉS EN 2012

1. OBSERVANCIA Y APLICACIÓN DEL DERECHO CIVIL ARAGONÉS

Iniciamos este apartado dando cuenta de las resoluciones, 101-sentencias (S) y 22 autos (A)-, que se han podido recabar en esta Institución durante el año 2012, bien remitidas de forma directa por los Jueces y Tribunales del territorio aragonés, bien localizadas por otros distintos medios.

Agradecemos el interés y atención con que vienen acogiendo nuestras peticiones los jueces aragoneses. Ello nos permite ofrecer una visión más amplia, si bien todavía no completa, de la aplicación del Derecho civil aragonés por Jueces y Tribunales.

Continuamos la vía seguida en anteriores informes ofreciendo listados acumulados de modo cronológico y sistemático de las sentencias reseñadas en los Informes Anuales del Justicia de Aragón a partir de 1990. Confiamos en que la utilización de los índices acumulados de más de veinte años de aplicación judicial del Derecho civil aragonés facilitará el trabajo de todos los profesionales y estudiosos de nuestro Derecho.

1.1. Resumen por Juzgados y Tribunales - Año 2012

El número total de resoluciones judiciales relacionadas con el Derecho Civil aragonés de cuya existencia hemos tenido conocimiento a lo largo de 2012 asciende a 123. De ellas, 101 son Sentencias (S) y 22 son Autos (A). Distinguiendo entre sentencias y autos, el número de las resoluciones aquí analizadas, por cada Tribunal o Juzgado es el siguiente:

Núm. total de Sentencias (S):

TSJ de Aragón	31
Audiencias Provinciales:	
Huesca	10
Teruel	0
Zaragoza	38
Juzgados de Primera Instancia	22

Núm. total de Autos (A):

TSJ de Aragón	14
Audiencia Provincial Huesca	0
Audiencia Provincial de Teruel	0
Audiencia Provincial de Zaragoza	7
Juzgados de Primera Instancia	1

1.2. Resumen por Juzgados y Tribunales - periodo 1990/2012

El número total de resoluciones judiciales relacionadas con el Derecho Civil Aragonés de cuya existencia hemos tenido conocimiento a lo largo del periodo 1990-2012 asciende a 2.364. De ellas, 1.758 son Sentencias (S) y 606 son Autos (A).

Distinguiendo entre sentencias y autos, el número de las sentencias aquí analizadas, por cada Tribunal o Juzgado es el siguiente:

Núm. total de Sentencias (S): 1.758

Tribunal Supremo	12
TSJ de Aragón	155
TSJ de Madrid	1
Audiencias Provinciales:	
Barcelona	2
Lleida	1
Huesca	329
Teruel	199
Zaragoza	585
Juzgados de Primera Instancia:	
Alcañiz (1)	6
Alcañiz (2)	12
Barbastro	9
Boltaña	8
Calamocha	7
Calatayud (1)	3
Calatayud (2)	20

Caspe	4
Daroca	6
Ejea (1)	50
Ejea (2)	19
Fraga	5
Huesca (1)	4
Huesca (2)	27
Huesca (3)	4
Huesca (4)	
Jaca (1)	2
Jaca (2)	5
La Almunia (1)	19
La Almunia (2)	1
Monzón	14
Monzón (2)	5
Tarazona (1)	1
Tarazona (2)	2
Tarazona	13
Teruel (1)	21
Teruel (2)	20
Zaragoza (1)	2
Zaragoza (2)	17
Zaragoza (3)	12
Zaragoza (4)	4
Zaragoza (6)	40
Zaragoza (7)	1
Zaragoza (9)	2
Zaragoza (10)	3
Zaragoza (12)	12
Zaragoza (13)	12
Zaragoza (14)	53
Zaragoza (15)	2
Zaragoza (16)	2
Zaragoza (17)	24
Zaragoza (19)	1

Y el número total de Autos ha ascendido a 606.

1.3. Listado de la Jurisprudencia Civil aragonesa, por fechas y por materias

En los listados que siguen se ha utilizado como clave de clasificación la diseñada originariamente para la bibliografía de Derecho aragonés en el repertorio publicado en “Primeras Jornadas sobre el Estado de los Estudios sobre Aragón”

(Teruel, 1978). Se ha tendido a clasificar cada resolución en un solo apartado (aunque con excepciones).

Se transcribe a continuación la parte de la aludida clasificación que interesa para estos listados:

5. FUENTES. COSTUMBRE. STANDUM EST CHARTAE. CÓDIGO CIVIL.

6. PERSONA Y FAMILIA.
- 61. En general.
- 62. Persona. Edad.
- 63. Ausencia.
- 64. Relaciones entre ascendientes y descendientes.
- 65. Tutela, adopción y Junta de Parientes.
- 66. Régimen económico conyugal.
  - 661. En general.
  - 662. Régimen paccionado.
  - 663. Régimen legal.
- 67. Comunidad conyugal continuada.
- 68. Viudedad.

7. DERECHO DE SUCESIONES POR CAUSA DE MUERTE.
- 71. En general. Normas comunes.
- 72. Sucesión testamentaria.
- 73. Sucesión paccionada.
- 74. Fiducia sucesoria.
- 75. Legítimas.
- 76. Sucesión intestada.

8. DERECHO DE BIENES.

9. DERECHO DE OBLIGACIONES.

10. DERECHO TRANSITORIO

0. OTRAS MATERIAS

a') Listado por fechas

Fecha	Res.	Trib.	Localidad	Clave	Artículo
21/01/1988	S	JD	Teruel	8	144,147
26/06/1989	S	TS	Madrid	68	51,76
03/10/1989	S	TSJ	Zaragoza	74	
08/01/1990	A	JPI	Huesca (2)	76	127,128
12/01/1990	S	AP	Zaragoza (3)	8	144,145,147
15/01/1990	S	AP	Zaragoza (4)	663	68, 52,73,80
22/01/1990	S	TSJ	Zaragoza	9	149,15
06/02/1990	S	AP	Zaragoza (4)	661,663	24,37,48
06/02/1990	S	AP	Zaragoza (4)	9	149,15
06/02/1990	S	TS	Madrid	663	37,4
07/02/1990	S	JPI	Teruel (2)	8	144,145
20/02/1990	S	JPI	Ejea (1)	8	144,145
20/02/1990	S	JPI	Huesca (2)	9	149
21/02/1990	S	AP	Zaragoza (4)	663	48
22/02/1990	A	JPI	Huesca (2)	76	127,128
28/02/1990	S	TS	Madrid	68	76,78
12/03/1990	A	JPI	Zaragoza (6)	64	10
17/03/1990	S	AP	Zaragoza (4)	663	48
31/03/1990	S	JPI	Teruel (2)	8	144
05/04/1990	A	AP	Zaragoza (1)	64	9,1
05/04/1990	S	AP	Zaragoza (4)	9	149,151
10/04/1990	S	TS	Madrid	68,76	3,86
14/04/1990	S	AP	Teruel	8	145,147,148
16/04/1990	S	AP	Zaragoza (4)	68,72	
08/05/1990	S	JPI	Tarazona (2)	8	147
08/05/1990	S	AP	Zaragoza (4)	8	147
08/05/1990	S	AP	Zaragoza (4)	8	147
15/05/1990	S	JPI	Tarazona (2)	8	144,145
25/05/1990	S	JPI	Ejea (1)	8	144
25/05/1990	S	AP	Zaragoza (4)	663	
28/05/1990	S	JPI	Ejea (1)	8	
30/05/1990	S	AP	Teruel	8	144,145
01/06/1990	S	AP	Zaragoza (4)	663	
06/06/1990	S	AP	Zaragoza (4)	663	48
20/06/1990	S	AP	Teruel	5	1,3
27/06/1990	S	AP	Zaragoza (3)	8	144,145
27/06/1990	S	AP	Zaragoza (4)	663	37,38,40
17/07/1990	S	AP	Zaragoza (4)	8	144,145
20/07/1990	S	AP	Zaragoza (4)	663	52
23/07/1990	S	JPI	Ejea (1)	8	144
26/07/1990	S	AP	Teruel	8	147,148
27/07/1990	A	AP	Teruel	8	DT 10
03/09/1990	S	AP	Zaragoza (4)	663	
04/09/1990	S	AP	Zaragoza (4)	663	
06/09/1990	S	AP	Zaragoza (4)	663	46
11/09/1990	S	AP	Zaragoza (4)	663	48
03/10/1990	S	AP	Teruel	663	3,51
10/10/1990	S	JPI	Tarazona (1)	71	142
15/10/1990	S	JPI	Ejea (1)	64	9,1
24/10/1990	S	JPI	Ejea (2)	8	144
25/10/1990	S	JPI	Calamocha	9	149

Fecha	Res.	Trib.	Localidad	Clave	Artículo
31/10/1990	S	AP	Teruel	8	144
12/11/1990	S	TS	Madrid	71	142,76
14/11/1990	S	AP	Zaragoza (4)	73	DT 6,97
24/11/1990	S	AP	Teruel	76	38,132
27/11/1990	S	AP	Zaragoza (4)	68	80,82
27/11/1990	S	AP	Zaragoza (4)	8	147,148
01/12/1990	S	JPI	Zaragoza (6)	64,65	10,20,21
06/12/1990	S	AP	Zaragoza(3)	8	144
14/12/1990	S	AP	Huesca	68	76
18/12/1990	S	TSJ	Zaragoza	5	1,2,3
19/12/1990	S	JPI	Ejea (1)	9	64
20/12/1990	S	AP	Zaragoza (3)	663,8	38,51
21/12/1990	S	TS	Madrid		75,71, 120,121,141
28/12/1990	S	JM	Teruel	64	
08/01/1991	A	JPI	Fraga	76	79,86,127,128
10/01/1991	A	JPI	Daroca	76	79,127,128,135
12/01/1991	S	AP	Zaragoza (4)	663	40
12/01/1991	S	JPI	La Almunia	72	94
14/01/1991	S	AP	Huesca	9	149,15
17/01/1991	S	AP	Zaragoza (4)	663	42
18/01/1991	S	AP	Zaragoza (4)	5, 76	9,14 y 16 C.C., 132
23/01/1991	A	JPI	Monzón	76,68	72,79,127,128
25/01/1991	A	JPI	Fraga	76	79,86,127,128
01/02/1991	A	JPI	Fraga	76	79,86,127,128
01/02/1991	S	AP	Zaragoza (4)	663	40,48
01/02/1991	S	AP	Zaragoza (4)	663	53
04/02/1991	A	JPI	Fraga	76	79,86,127,128
06/02/1991	A	JPI	Fraga	76	79,86,127,128
07/02/1991	S	AP	Teruel	8	147
12/02/1991	A	JPI	Fraga	76	132,135
12/02/1991	A	JPI	Fraga	76	79,86,127,128
14/02/1991	A	JPI	Fraga	76	79,86,127,128
16/02/1991	S	TSJ	Zaragoza	76	79
15/02/1991	A	JPI	Fraga	76	135
15/02/1991	A	JPI	Fraga	76	79,86,127,128
15/02/1991	A	JPI	Fraga	76	79,86,127,128
21/02/1991	S	JPI	Caspe	8	144
22/02/1991	A	JPI	Fraga	76	132
22/02/1991	A	JPI	Fraga	76,68	78,127,128
26/02/1991	A	JPI	Fraga	76	79,86,127,128
26/02/1991	S	AP	Zaragoza (4)	663	68, 48,76
26/02/1991	S	JPI	Fraga	68	73
28/02/1991	A	JPI	Fraga	76,68	86,127,128
01/03/1991	A	JPI	Fraga	76	79,86,127,128
01/03/1991	A	JPI	Fraga	76	79,86,127,128
07/03/1991	S	AP	Zaragoza (4)	73	103.3
13/03/1991	A	JPI	Fraga	76	79,86,127,128
15/03/1991	S	JPI	Alcañiz (1)	8	144,145
21/03/1991	A	JPI	Fraga	76	79,86,127,128
10/04/1991	A	JPI	Fraga	76	127.128
17/04/1991	A	JPI	Fraga	76	79,86,127,128
17/04/1991	A	JPI	Monzón	76	127,132
18/04/1991	A	JPI	Monzón	68	86
19/04/1991	S	AP	Zaragoza (4)	663	37,38
02/05/1991	A	JPI	Fraga	76	135

Fecha	Res.	Trib.	Localidad	Clave	Artículo
05/05/1991	S	AP	Zaragoza (4)	68	76
08/05/1991	A	JPI	Monzón	76	127,135
16/05/1991	A	JPI	Fraga	76	135
17/05/1991	A	JPI	Fraga	76	79,86,127,128
18/05/1991	S	AP	Teruel	8	144
18/05/1991	S	JPI	Teruel (2)	9	149
22/05/1991	A	JPI	Fraga	76	79,86,127,128
22/05/1991	A	JPI	Monzón	76	108,127,135
24/05/1991	A	AP	Huesca	74	118
29/05/1991	S	TSJ	Zaragoza	72,73	A19,95,108,DT12
08/06/1991	S	JPI	La Almunia	8	147
12/06/1991	A	JPI	Fraga	76	79,86,127,128
14/06/1991	S	AP	Zaragoza (4)	68	72
15/06/1991	S	AP	Teruel	71	138
18/06/1991	S	AP	Teruel	5	3
19/06/1991	A	JPI	Fraga	76	132
19/06/1991	A	JPI	Fraga	76	79,86,127,128
19/06/1991	A	JPI	Fraga	76,68	86,127,128
20/06/1991	S	JPI	Alcañiz (1)	8	147,148
27/06/1991	A	JPI	Fraga	76	127,128
01/07/1991	A	JPI	Zaragoza (6)	64	10
01/07/1991	S	JPI	Huesca (2)	8	148
01/07/1991	S	JPI	La Almunia	663	40,43
08/07/1991	A	JPI	Daroca	76	79,127,128,135
16/07/1991	A	JPI	Daroca	76	79,127,128,135
16/07/1991	S	AP	Huesca	68,75	73,125
17/07/1991	A	JPI	Fraga	76	79,86,127,128
17/07/1991	A	JPI	Monzón	76	127,128,135
17/07/1991	S	JPI	La Almunia	8	144
22/07/1991	S	AP	Teruel	8	147,148
23/07/1991	A	JPI	Fraga	76	127,128
23/07/1991	A	JPI	Monzón	76	127,128
23/07/1991	S	AP	Zaragoza (4)	73,74	89
31/07/1991	A	JPI	Fraga	76	127,128
31/07/1991	S	JPI	Jaca (1)	662,74	33,114,115
02/09/1991	S	JPI	Zaragoza (7)	75	123
04/09/1991	A	JPI	Daroca	76	79,127,129,135
05/09/1991	A	JPI	Daroca	76	79,127,128,135
05/09/1991	A	JPI	Daroca	76	79,127,128,135
07/09/1991	A	JPI	Barbastro	72	93
09/09/1991	A	JPI	Fraga	76	132,135
11/09/1991	A	JPI	Fraga	76,68	79,86,127,128
13/09/1991	A	JPI	Fraga	76,68	79,86,127,128
16/09/1991	A	JPI	Daroca	76	79,127,128,135
16/09/1991	A	JPI	Daroca	76	79,127,128,135
17/09/1991	A	JPI	Fraga	76	127,128
17/09/1991	S	AP	Zaragoza (4)	663	38,39,40
18/09/1991	A	JPI	Fraga	76	127,128
19/09/1991	A	JPI	Fraga	76	132
19/09/1991	A	JPI	Fraga	76,68	79,86,127,128
23/09/1991	A	JPI	Fraga	76,68	79,86,127,128
23/09/1991	A	JPI	Fraga	76,68	79,86,127,128
26/09/1991	S	JPI	Daroca	75	119,123,140
27/09/1991	A	JPI	Daroca	76	79,127,128,135
27/09/1991	A	JPI	Fraga	76	127,128

Fecha	Res.	Trib.	Localidad	Clave	Artículo
30/09/1991	A	JPI	Daroca	76	79,127,128,135
01/10/1991	A	JPI	Daroca	76	79,127,128,135
01/10/1991	A	JPI	Fraga	76	127,128
07/10/1991	S	JPI	Teruel (1)	8	147,148
08/10/1991	A	JPI	Monzón	76	72,127,135
09/10/1991	S	AP	Zaragoza (2)	8	144,145,147
10/10/1991	A	JPI	Monzón	76	127,135
16/10/1991	A	JPI	Fraga	76,68	79,86,127,128
16/10/1991	A	JPI	Fraga	76,68	79,86,127,128
17/10/1991	A	JPI	Monzón	76	127,128
18/10/1991	S	AP	Teruel	8	147
18/10/1991	S	JPI	La Almunia	663	41,43
19/10/1991	S	AP	Zaragoza(2)	663	42
21/10/1991	A	JPI	Fraga	76	127,128
24/10/1991	A	JPI	Fraga	76,68	79,86,127,128
18/10/1991	S	JPI	La Almunia	663	41,43
19/10/1991	S	AP	Zaragoza(2)	663	42
21/10/1991	A	JPI	Fraga	76	127,128
24/10/1991	A	JPI	Fraga	76,68	79,86,127,128
26/10/1991	S	AP	Zaragoza (2)	8	144,147
26/10/1991	S	JPI	Huesca (1)	9	149
29/10/1991	A	JPI	Fraga	76,68	79,86,127,128
29/10/1991	A	JPI	Fraga	76,68	79,86,127,128
30/10/1991	A	JPI	Fraga	76,68	79,86,127,128
30/10/1991	A	JPI	Monzón	76	127,135
30/10/1991	A	JPI	Monzón	76	127,135
31/10/1991	A	JPI	Fraga	76,68	79,86,127,128
04/11/1991	S	JPI	Teruel (1)	5	3
05/11/1991	S	AP	Huesca	8	144,145
06/11/1991	A	JPI	Fraga	76	130,135
06/11/1991	A	JPI	Fraga	76,68	79,86,127,128
09/11/1991	S	TSJ	Zaragoza	74	3,99,100,104,107
12/11/1991	S	JPI	Barbastro	8	144,147
13/11/1991	A	JPI	Fraga	76,68	79,86,127,128
13/11/1991	A	JPI	Monzón	76	127,132
21/11/1991	A	JPI	Zaragoza (6)	68	76
21/11/1991	S	AP	Teruel	663	55
26/11/1991	S	AP	Zaragoza (4)	663	41,42,43
27/11/1991	A	JPI	Fraga	76,68	79,86,127,128
02/12/1991	A	JPI	Daroca	76	79,127,128,135
02/12/1991	A	JPI	Daroca	76	79,127,128,135
05/12/1991	A	JPI	Daroca	76	79,127,128,135
07/12/1991	S	AP	Zaragoza (2)	663	37
10/12/1991	S	AP	Zaragoza (2)	663	26,41,43
11/12/1991	S	AP	Zaragoza(4)		
18/12/1991	A	JPI	Daroca	76	79,127,128,135
20/12/1991	A	JPI	Fraga	76	127,128
20/12/1991	S	AP	Teruel	8	147
20/12/1991	S	AP	Zaragoza (4)	663	37,4
20/12/1991	A	JPI	Fraga	76	127,128
20/12/1991	A	JPI	Fraga	76,68	79,86,127,128
23/12/1991	S	AP	Zaragoza (4)	64	10
28/12/1991	S	AP	Teruel	64	9
30/12/1991	A	JPI	Daroca	76	79,127,128,135
31/12/1991	S	AP	Teruel	5	3

Fecha	Res.	Trib.	Localidad	Clave	Artículo
22/01/1992	S	AP	Teruel	8	147
22/01/1992	S	AP	Teruel	8	147,1.2
05/02/1992	S	AP	Zaragoza (2)	8	144,145
10/02/1992	S	AP	Teruel	5	3,1.2
13/02/1992	S	AP	Teruel	8	147,1.2
13/02/1992	S	TSJ	Zaragoza	663,68	48,51,76
21/02/1992	S	AP	Teruel	5	3
21-02-92	S	AP	Zaragoza (2)	71,75	14cc, 122,140
22-02-92	S	AP	Zaragoza (2)	64	156cc,9 ss
29-02-92	S	AP	Zaragoza (2)	5,7	8,14,16Cc,123
2-03-92	S	AP	Zaragoza	68	
02/03/1992	S	AP	Huesca	663	37,48,49
05/03/1992	S	AP	Huesca	663	41,42
09/03/1992	S	AP	Teruel	76,68,5	3,72,79,127,128
10/03/1992	S	AP	Zaragoza	8	144
10/03/1992	S	AP	Huesca	5	2,3
11/03/1992	S	AP	Teruel	72	94
16/03/1992	S	AP	Huesca	74	33
18/03/1992	S	AP	Teruel	662,663,5	25,43,3
24/03/1992	S	AP	Zaragoza (4)	68	79,84
24/03/1992	S	TS	Madrid	5	
25/03/1992	S	TSJ	Zaragoza	663	1,48
04/04/1992	S	AP	Huesca	9	149,15
04/04/1992	S	AP	Zaragoza (2)	663	58
18/04/1992	S	TS	Madrid	663	26,24,56
21/04/1992	S	AP	Zaragoza (4)	663	26,41,42,56
05/05/1992	S	AP	Teruel	5	3
09/05/1992	S	AP	Zaragoza (2)	76	135
15/05/1992	S	AP	Zaragoza (4)	5	2
27/05/1992	S	AP	Zaragoza (2)	71	141
01/06/1992	S	JPI	Daroca	9	149,15
08/06/1992	S	JPI	Ejea (1)	68	76
11/06/1992	S	AP	Teruel	5	1.2
18/06/1992	S	TSJ	Zaragoza	5,663	3,48.1
24/06/1992	S	AP	Zaragoza (2)	8	145
24/06/1992	S	AP	Zaragoza (2)	68	76
26/06/1992	S	AP	Huesca	8	144
03/07/1992	A	TSJ	Zaragoza	5	3
11/07/1992	S	AP	Huesca	5	1,2,3
11/07/1992	S	AP	Zaragoza (2)	8	144
13/07/1992	S	AP	Zaragoza (4)	7	
27/07/1992	S	AP	Zaragoza (2)	5,663	3,48,51
28/07/1992	S	AP	Huesca	8	144,145
12/09/1992	S	AP	Teruel	5	1.2
25/09/1992	S	AP	Zaragoza (2)	5,73,76	108,132
29/09/1992	S	TSJ	Zaragoza	5,74,662	3,25,33,114,DT7y8
30/09/1992	S	AP	Zaragoza (5)	67,74,663	94,112,60-65,DT1
26/10/1992	S	AP	Zaragoza (4)	8	144,145
30/10/1992	S	AP	Teruel	8	144,145
04/11/1992	S	TSJ	Zaragoza	9	149,15
09/11/1992	S	AP	Zaragoza (2)	663	48
10/11/1992	S	AP	Zaragoza (4)	6	51
11/11/1992	S	AP	Zaragoza (4)	5,661	29,36,52,DT1
11/11/1992	S	AP	Zaragoza (2)	663	37
01/12/1992	S	AP	Zaragoza	663	56,58

Fecha	Res.	Trib.	Localidad	Clave	Artículo
03/12/1992	S	AP	Zaragoza (5)	8	144
10/12/1992	A	AP	Zaragoza (2)	663	54
16/12/1992	S	AP	Zaragoza (4)	663	56
22/12/1992	S	AP	Teruel	663	37 a 40
23/12/1992	S	AP	Zaragoza (2)	8	144
28/12/1992	S	AP	Zaragoza (2)	73	108
12/01/1993	S	AP	Zaragoza (4)	8	144
20/01/1993	S	JPI	Caspe	8	144
21/01/1993	S	AP	Huesca	8	144,145,147
21/01/1993	S	AP	Teruel	5	2
19/02/1993	S	AP	Huesca	73	103
15/03/1993	S	JPI	La Almunia	8	145,147
17/03/1993	A	TSJ	Zaragoza	65	1,271
22/03/1993	S	AP	Zaragoza (4)	8	147
23/03/1993	S	TSJ	Zaragoza	663	41,48,55
07/04/1993	S	AP	Zaragoza (2)	8	144
29/04/1993	S	AP	Huesca	8	144
21/05/1993	S	TSJ	Zaragoza	74	110,113
25/05/1993	S	AP	Huesca	663	40,48
31/05/1993	S	AP	Teruel	8	144
02/06/1993	S	AP	Huesca	5	3
03/06/1993	S	JPI	Huesca (2)	64,65	177
03/06/1993	S	JPI	La Almunia	8	144
07/06/1993	S	AP	Huesca	9	149,15
22/06/1993	S	AP	Teruel	5	1
25/06/1993	S	AP	Huesca	75	121
15/07/1993	S	AP	Teruel	8	144
20/07/1993	S	AP	Huesca	64	11
21/07/1993	S	JPI	Zaragoza (13)	8	144
22/07/1993	S	AP	Teruel	8	144,145
28/07/1993	S	JPI	La Almunia	8	144
30/07/1993	S	JPI	Boltaña	5,65,73,74	1,2,20,99,114
30/07/1993	S	JPI	Ejea (2)	73	103
01/09/1993	S	JPI	Boltaña	9	149
01/09/1993	S	AP	Huesca	5	2,3
03/09/1993	S	AP	Teruel	5	1
08/09/1993	S	AP	Zaragoza (4)	72	90
11/09/1993	S	AP	Teruel	5	1
14/09/1993	S	AP	Huesca	64	14
29/09/1993	S	AP	Huesca	8	144
30/09/1993	S	TSJ	Zaragoza	72,75	120,122
09/10/1993	S	TSJ	Zaragoza	71,73	142, 99
11/10/1993	S	AP	Huesca	65	9, 177 C.Civ.
13/10/1993	S	AP	Zaragoza (5)	663	48,49
13/11/1993	S	JPI	La Almunia	68,71,663	37,4
30/11/1993	S	JPI	Huesca (2)	68,72	38,51,76
16/12/1993	S	JPI	Huesca (2)	663	55,56,57,58
22/12/1993	A	TSJ	Zaragoza	662	29,DT1,48Ap
31/12/1993	S	TSJ	Zaragoza	663	38
10/01/1994	S	AP	Teruel	8	147
14/01/1994	S	JPI	Zaragoza (14)	74	110.3
20/01/1994	S	AP	Huesca	663	DT 2ª y 12ª, 49 A
26/01/1994	S	AP	Teruel	8	147
28/01/1994	S	JPI	Zaragoza (13)	8	144.3
21/02/1994	A	AP	Zaragoza	663	46
21/02/1994	S	JPI	Huesca (2)		5, 73, 74

Fecha	Res.	Trib.	Localidad	Clave	Artículo
01/03/1994	S	JPI	Calatayud (2)	8	146, 148
02/03/1994	S	AP	Zaragoza (5)	75	120, 123
02/03/1994	S	JPI	Caspe	8	147,148
07/03/1994	S	AP	Zaragoza (2)	68, 75	73
07/03/1994	S	AP	Huesca	8	144, 145
09/03/1994	S	JPI	Zaragoza (13)	8	144,145
14/03/1994	S	JPI	Teruel (1)	8	148
23/03/1994	S	AP	Barcelona	68, 74	86
04/04/1994	S	JPI	Huesca (2)	64	
08/04/1994	S	AP	Teruel	8	147
08/04/1994	S	JPI	Zaragoza (14)	8	144,145
15/04/1994	S	JPI	Zaragoza (13)	68	86
20/04/1994	S	AP	Zaragoza (2)	8	144,145
25/04/1994	S	AP	Zaragoza (5)	663	41.5, 42
25/04/1994	S	AP	Huesca	8	147
04/05/1994	S	JPI	Fraga	5	33
06/05/1994	S	AP	Huesca	8	144
09/05/1994	S B27(	JPI	Ejea (2)	8	144,147
16/05/1994	S	AP	Teruel	8	144.3
18/05/1994	S	JPI	Zaragoza (2)	663, 72	37, 40, 108
30/05/1994	S	AP	Huesca	8	144
03/06/1994	S	AP	Huesca	9	149
03/06/1994	S	JPI	Ejea (1)	64	10
16/06/1994	S	JPI	Teruel	8	147
28/06/1994	S	AP	Zaragoza (5)	663	46
28/06/1994	S	JPI	Ejea (2)	5, 73	3
09/07/1994	S	AP	Zaragoza (2)	8	145, 541 C.Civ.
11/07/1994	S	AP	Zaragoza (2)	68	76
11/07/1994	S	TSJ	Zaragoza	5, 68	1, 72, 73, 75
12/07/1994	S	JPI	Ejea (1)	8	144, 145
18/07/1994	S	AP	Zaragoza (5)	71	138
23/07/1994	S	AP	Zaragoza (5)	8	147
26/07/1994	S	JPI	Teruel (1)	8	147
26/07/1994	S	AP	Huesca	663	52
30/07/1994	S	AP	Huesca	73, 74, 76	114, 127
01/09/1994	S	JPI	Jaca (2)	663	51
07/09/1994	S	AP	Teruel	8	147
13/09/1994	S	JPI	Teruel (1)	663	41.5
24/09/1994	S	AP	Zaragoza (2)	663	52,2
26/09/1994	S	JPI	Fraga	663	55, 38, 41, 47
05/10/1994	S	JPI	Almunia	8	144, 145
10/10/1994	S	JPI	Zaragoza (14)	8	147
17/10/1994	S	AP	Teruel	8	147
17/10/1994	S	AP	Zaragoza (5)	8	144, 145, 147
18/10/1994	S	AP	Zaragoza (5)	8	144.3
25/10/1994	S	AP	Teruel	8	144
26/10/1994	S	AP	Zaragoza (5)	663, 68	55, 76.4
07/11/1994	S	AP	Teruel	8	147
12/11/1994	S	AP	Huesca	9	149
14/11/1994	S	AP	Zaragoza (2)	663	52,2
14/11/1994	S	JPI	Calatayud (1)	9	149
15/11/1994	S	JPI	Jaca (2)	71	140
23/11/1994	S	JPI	Tarazona (2)	76	128 y ss
07/12/1994	S	JPI	Boltaña	663	38, 53
09/12/1994	S	JPI	Tarazona (2)	76	128 y ss
13/12/1994	S	AP	Huesca	663	38, 47
15/12/1994	S	AP	Huesca	62, 663	36

Fecha	Res.	Trib.	Localidad	Clave	Artículo
15/12/1994	S	JPI	Teruel (1)	8	144
19/12/1994	S	AP	Zaragoza (5)	663, 72	40, 96
27/12/1994	S	AP	Zaragoza (5)	8	144
27/12/1994	S	AP	Zaragoza (2)	8	144, 147
27/12/1994	S	TSJ	Zaragoza	8	147, 148
31/12/1994	S	JPI	Teruel (2)	5	3
10/01/1995	A	JPI	Teruel (1)	76	127, 128, 13
12/01/1995	S	AP	Huesca	8	144.2, 145
17/01/1995	S	AP	Lleida (2)	62, 68	72, 86.2
19/01/1995	S	JPI	Zaragoza (13)	5	1.2
31/01/1995	S	JPI	Zaragoza (14)	663	41.1
03/02/1995	A	JPI	Monzón	76	
04/02/1995	S	AP	Zaragoza (2)	663	46, 52
04/02/1995	S	JPI	La Almunia	8	144
09/02/1995	S	JPI	Teruel (1)	5	3
13/02/1995	S	AP	Huesca	73, 74, 75	123
15/02/1995	S	JPI	Monzón	663	56
17/02/1995	S	JPI	Zaragoza (13)	8	144
18/02/1995	S	TS	Madrid	5, 663	1.2, 51
20/02/1995	S	AP	Huesca	5, 8	1.2, 147
21/02/1995	S	JPI	Zaragoza (6)	663	38
22/02/1995	S	AP	Huesca	5, 61	33, 34
24/02/1995	A	JPI	Huesca (2)	64	11, 13, 14
27/02/1995	S	AP	Huesca	5, 71	1.2, DT 12ª
27/02/1995	S	AP	Teruel	64	9
08/03/1995	S	AP	Huesca	8	144
09/03/1995	S	AP	Huesca	5	
10/03/1995	S	JPI	Zaragoza (3)	5, 663	1.2, 51 Comp. 1967
15/03/1995	S	JPI	Daroca	75	119, 120
21/03/1995	A	TS	Madrid		0
22/03/1995	S	AP	Zaragoza (5)	663	42, 66
28/03/1995	S	JPI	Huesca (2)	9	149
04/04/1995	S	TSJ	Zaragoza	68	76
08/04/1995	S	AP	Zaragoza (2)	64	9.3, 14
10/04/1995	S	TSJ	Zaragoza	663	48
12/04/1995	S	AP	Zaragoza (5)	663	37.2, 38.4
15/04/1995	S	JPI	La Almunia	8	144
19/04/1995	S	AP	Zaragoza (2)	663	57
20/04/1995	S	AP	Barcelona (16)	68	86.2
24/04/1995	S	AP	Huesca	663	46, 47
27/04/1995	S	JPI	Teruel(1)	8	147
27/04/1995	S	JPI	Teruel (1)	65	
03/05/1995	A	JPI	Monzón	76	
07/05/1995	A	JPI	Monzón	76	
10/05/1995	S	JPI	Zaragoza (13)	663	38.1
15/05/1995	A	JPI	Daroca	76	127, 128, 135
17/05/1995	S	AP	Huesca	8	144, 147
18/05/1995	S	JPI	Teruel (1)	5	3
23/05/1995	A	AP	Huesca	76	132
24/05/1995	S	TS	Madrid	663	37, 38, 51
25/05/1995	S	AP	Huesca	663	51
30/05/1995	A	JPI	Zaragoza (13)	73, 76	89, 108.3
30/05/1995	A	JPI	Monzón	76	
31/05/1995	A	JPI	Daroca	76	127, 128, 135
13/06/1995	S	TSJ	Zaragoza	5, 663, 74	72.6 Ap
14/06/1995	S	JPI	Teruel (1)	75	120, 123
15/06/1995	S	AP	Teruel	5, 8	1.2, 147, 148

Fecha	Res.	Trib.	Localidad	Clave	Artículo
23/06/1995	S	AP	Teruel	5, 8	1.2, 147, 148
27/06/1995	A	JPI	Zaragoza (13)	73, 76	108
05/07/1995	S	TSJ	Zaragoza	5, 61	33, 34
05/07/1995	A	JPI	Monzón	76	
10/07/1995	S	AP	Huesca	663, 68	38.1, 40, 41.5, 84
10/07/1995	S	AP	Huesca	5, 8	1.2, 147
14/07/1995	S	AP	Zaragoza (5)	663	42, 66
19/07/1995	S	JPI	Zaragoza (13)	663	47, 48
20/07/1995	A	JPI	Zaragoza (13)	76	128, 132
26/07/1995	A	JPI	Monzón	76	
13/09/1995	A	JPI	Daroca	76	127, 128, 135
13/09/1995	S	JPI	Huesca (2)	8	143, 144, 145
20/09/1995	A	JPI	Zaragoza (13)	76	128, 132
27/09/1995	A	JPI	Monzón	76	
27/09/1995	A	JPI	Monzón	76	
02/10/1995	A	JPI	Zaragoza (14)	76	127, 128, 132
03/10/1995	S	JPI	Daroca	8	144, 145
05/10/1995	S	AP	Huesca	663, 68	38.1
05/10/1995	A	JPI	Monzón	76	
16/10/1995	S	AP	Teruel	5, 8	1.2, 564 Cc.
17/10/1995	S	JPI	Monzón	71	142
17/10/1995	A	JPI	Zaragoza (13)	73, 76	108.3
17/10/1995	A	JPI	Daroca	76	132
30/10/1995	S	AP	Teruel	73, 76	108.3, 132
03/11/1995	A	JPI	Daroca	76	127, 128, 135
04/11/1995	S	AP	Teruel	8	147, 148
08/11/1995	S	JPI	Teruel (1)	8	147
09/11/1995	A	JPI	Huesca (2)	8	
16/11/1995	A	JPI	Monzón	76	
22/11/1995	S	AP	Teruel	8	147, 148
23/11/1995	S	AP	Teruel	5, 8	1.2, 586 a 588 Cc
24/11/1995	S	JPI	Zaragoza (2)	62, 71, 75	119, 140
01/12/1995	S	JPI	Monzón	76	
02/12/1995	S	AP	Teruel	71	142
05/12/1995	S	AP	Teruel	67	52, 60
14/12/1995	S	AP	Teruel	8	144.2
15/12/1995	A	JPI	Daroca	76	127, 128, 135
15/12/1995	A	JPI	Monzón	76	
16/12/1995	A	AP	Zaragoza (2)	72, 73, 76	95, 108.3
08/01/1996	S	JPI	Zaragoza (14)	663	41, 42
09/01/1996	S	AP	Teruel	8	144, 147
18/01/1996	S	JPI	Zaragoza (13)	5, 663	3, 52.1
19/01/1996	S	AP	Huesca	8	7.2 Cc
24/01/1996	A	AP	Huesca	76	108
25/01/1996	S	AP	Huesca	8	144
07/02/1996	S	AP	Zaragoza (5)	5, 68	3, 76.2
12/02/1996	S	TSJ	Zaragoza	663, 68	DT 1ª y 4ª
16/02/1996	S	TS	Madrid		72
21/02/1996	S	AP	Zaragoza (5)	662	56, 58
26/02/1996	S	JPI	Barbastro	8	144
27/02/1996	S	JPI	Barbastro	8	147
28/02/1996	S	JPI	Huesca (2)	5, 73, 74	3
05/03/1996	S	AP	Huesca	5, 73	99.1
08/03/1996	S	JPI	Zaragoza (13)	663	48.2
14/03/1996	S	JPI	Huesca (3)	74	111
15/03/1996	S	AP	Huesca	663	38.1
21/03/1996	A	JPI	Huesca (2)	663	37, 38

Fecha	Res.	Trib.	Localidad	Clave	Artículo
27/03/1996	S	AP	Huesca	8	147
28/03/1996	S	JPI	Huesca (2)	71	
10/04/1996	S	AP	Zaragoza (4)	663	37
16/04/1996	S	JPI	Barbastro	9	150
19/04/1996	S	JPI	Huesca (2)	72	
02/05/1996	S	AP	Zaragoza (5)	663	97 Cc
08/05/1996	S	AP	Teruel	8	144
13/05/1996	S	AP	Huesca	71	142
14/05/1996	S	JPI	Huesca (2)	68	82
23/05/1997	A	AP	Zaragoza (2)	0	
29/05/1996	S	AP	Zaragoza (5)	76	132
03/06/1996	S	JPI	Zaragoza (2)	662	25.2, 29
05/06/1996	S	AP	Zaragoza (5)	8	147, 148
06/06/1996	S	JPI	Zaragoza (2)	9	149
25/06/1996	A	JPI	Zaragoza (13)	76	128
28/06/1996	S	AP	Huesca	76	132
01/07/1996	S	TS	Madrid	0	
08/07/1996	S	AP	Zaragoza (5)	8	144
12/07/1996	S	JPI	Teruel (1)	663	52
15/07/1996	S	AP	Zaragoza (2)	8	145
25/07/1996	S	AP	Huesca	8	147
31/07/1996	S	JPI	Teruel (1)	663	52
14/09/1996	S	JPI	Zaragoza (2)	75	122
16/09/1996	S	AP	Zaragoza (4)	68, 75	73, 125
20/09/1996	S	AP	Zaragoza (5)	72	122, 620 Cc
02/10/1996	A	AP	Huesca	61	34
07/10/1996	S	JPI	La Almunia	8	147
08/10/1996	S	AP	Teruel	8	144
17/10/1996	S	AP	Huesca	9	149
25/10/1996	S	JPI	Zaragoza (4)	9	149
29/10/1996	S	AP	Huesca	663, 68	38, 51, 76
30/10/1996	S	TSJ	Zaragoza	68	76
30/10/1996	S	AP	Zaragoza (5)	8	144
04/11/1996	S	AP	Huesca	8	147
06/11/1996	S	AP	Zaragoza (5)	8	144
06/11/1996	S	JPI	Barbastro	9	149
12/11/1996	S	JPI	Jaca (2)	8	144, 145
18/11/1996	S	JPI	Zaragoza (14)	663	48.2.1º
18/11/1996	A	JPI	Zaragoza (13)	76	132
25/11/1996	A	JPI	Huesca (2)	76	127
28/11/1996	S	AP	Huesca	663	55, 56
29/11/1996	S	TSJ	Zaragoza	663	38.1, 55
02/12/1996	A	AP	Huesca	73	95, 108
05/12/1996	A	JPI	Huesca (2)	76	127
05/12/1996	A	JPI	Huesca (2)	76	127
05/12/1996	S	JPI	Teruel	8	147
12/12/1996	S	AP	Huesca	8	146
20/12/1996	S	TSJ	Zaragoza	663	42, 46
27/01/1997	S	AP	Zaragoza (5)	8	147
27/01/1997	S	AP	Zaragoza (5)	8	144, 145
30/01/1997	S	AP	Zaragoza (5)	8	145
05/02/1997	S	JPI	Calamocha	71	140
07/02/1997	A	JPI	Zaragoza (13)	73, 76	108, 135
14/02/1997	S	AP	Huesca	72, 74	17 y 29 Ap.
14/02/1997	S	AP	Huesca	65	DT 1ª Ley 3/85
15/02/1997	S	JPI	Tarazona	76	127, 132
19/02/1997	S	AP	Zaragoza (5)	8	144

Fecha	Res.	Trib.	Localidad	Clave	Artículo
28/02/1997	A	AP	Zaragoza (4)	0	
04/03/1997	A	JPI	Zaragoza (2)	0	
17/03/1997	S	AP	Zaragoza (5)	9	149
17/03/1997	S	AP	Zaragoza (5)	8	144
20/03/1997	A	AP	Huesca	71, 76	141
21/03/1997	S	AP	Teruel	75	120
02/04/1997	S	AP	Zaragoza (5)	8	143.2
08/04/1997	S	AP	Teruel	5	1.2
12/04/1997	S	AP	Zaragoza (2)	662, 663	37.3
14/04/1997	A	TSJ	Zaragoza	0	
14/04/1997	S	JPI	Huesca (2)	663	37 y ss.
17/04/1997	S	AP	Huesca	663	40
17/04/1997	S	JPI	Zaragoza (14)	662	40.1
21/04/1997	S	AP	Zaragoza (5)	8	144.3
24/04/1997	S	AP	Huesca	8	148
26/04/1997	S	AP	Huesca	64	5
07/05/1997	S	AP	Huesca	663	37, 38, 40
08/05/1997	S	JPI	Zaragoza (13)	8	148
09/05/1997	A	JPI	Tarazona	76	128
12/05/1997	A	AP	Zaragoza (5)	663	41, 42
15/05/1997	S	AP	Huesca	8	147
16/05/1997	S	AP	Teruel	64	
16/05/1997	S	JPI	Tarazona	71	142, DT 12ª
20/05/1997	A	JPI	Tarazona	76	128
21/05/1997	S	AP	Zaragoza (2)	68	85
21/05/1997	S	AP	Zaragoza (5)	8	144
26/05/1997	S	AP	Huesca	9	72 Ley arag. Caza
26/05/1997	S	AP	Teruel	663	36, 40
28/05/1997	S	AP	Teruel	8	147
04/06/1997	S	AP	Zaragoza (2)	71	138
06/06/1997	S	JPI	Tarazona	8	147, 148
10/06/1997	S	AP	Huesca	663	51
13/06/1997	S	AP	Teruel	8	144, 147
13/06/1997	S	JPI	Zaragoza (14)	663, 68	53.1, 72
14/06/1997	S	AP	Teruel	5, 71	1.2, 140
16/06/1997	S	AP	Huesca	5, 8	1.2, 147
17/06/1997	S	JPI	Tarazona	8	144
18/06/1997	S	JPI	Tarazona	663, 68	52.2, 78
25/06/1997	S	AP	Zaragoza (5)	663	41.1, 43
27/06/1997	A	AP	Zaragoza (5)	76	
30/06/1997	S	AP	Zaragoza (5)	8	144
30/06/1997	A	AP	Zaragoza (5)	8	144
02/07/1997	S	AP	Teruel	62, 75	122, 848 Cc
11/07/1997	S	AP	Huesca	9	72 Ley arag. Caza
16/07/1997	A	AP	Zaragoza (5)	67	61, 65
17/07/1997	S	AP	Zaragoza (5)	8	147
21/07/1997	S	AP	Teruel	8	144
28/07/1997	S	AP	Teruel	8	144
30/07/1997	S	AP	Huesca	9	72 Ley arag. Caza
31/07/1997	S	AP	Zaragoza (5)	62, 72	
12/09/1997	S	JPI	Calamocha	68	86.5
18/09/1997	S	AP	Huesca	663	41.5
20/09/1997	S	AP	Zaragoza (5)	8	148
20/09/1997	S	AP	Zaragoza (5)	68, 76	79, 128
24/09/1997	S	AP	Zaragoza (5)	0	15.2 Ley Justicia
29/09/1997	A	JPI	Tarazona	71, 76	132, 141
02/10/1997	A	JPI	Tarazona	76	128

Fecha	Res.	Trib.	Localidad	Clave	Artículo
02/10/1997	A	JPI	Tarazona	76	128
04/10/1997	A	JPI	Tarazona	71, 76	132, 141
06/10/1997	S	AP	Huesca	8	147
07/10/1997	A	JPI	Tarazona	76	128
08/10/1997	A	JPI	Zaragoza (14)	71, 76	141
27/10/1997	S	AP	Teruel	8	147,148
04/11/1997	A	JPI	Zaragoza (14)	76	127, 135
06/11/1997	S	JPI	Caspe	8	147
07/11/1997	S	AP	Teruel	8	147
10/11/1997	S	AP	Huesca	9	72 Ley arag. Caza
17/11/1997	A	AP	Huesca	73, 76	108.3
18/11/1997	S	JPI	Tarazona	71	142
19/11/1997	A	TSJ	Zaragoza	5, 74, 0	1, 3, 115
01/12/1997	S	AP	Zaragoza (5)	8	144.3
03/12/1997	S	AP	Teruel	8	145, 147
03/12/1997	A	AP	Zaragoza (5)	663	55, 56
05/12/1997	S	JPI	Tarazona	662, 663	29, 43
10/12/1997	S	JPI	Calamocha	8	144
10/12/1997	S	JPI	Calamocha	8	144, 145
10/12/1997	S	JPI	Huesca (2)	663	37 y ss.
12/12/1997	S	AP	Huesca	9	149.2
16/12/1997	A	JPI	Zaragoza (14)	72, 76	95, 108.3, 135
26/12/1997	A	JPI	Ejea (1)	663	52
26/12/1997	S	JPI	Ejea (1)	8	144
12/01/1998	S	AP	Zaragoza (5)	68, 72, 74	110
13/01/1998	S	AP	Zaragoza (5)	663	37
19/01/1998	S	AP	Zaragoza (5)	68	76
19/01/1998	S	AP	Zaragoza (5)	8	147, 148
21/01/1998	S	AP	Zaragoza (5)	72	94
28/01/1998	S	AP	Huesca	68	74, 83
02/02/1998	S	AP	Zaragoza (5)	68	72
07/02/1998	S	JPI	Monzón	663	38.1
07/02/1998	A	JPI	Zaragoza (13)	73, 76	108
10/02/1998	S	JPI	Zaragoza (13)	663	55
10/02/1998	A	TS	Madrid		0
11/02/1998	S	AP	Teruel	663	37
11/02/1998	S	AP	Zaragoza (5)	76	128
12/02/1998	S	AP	Huesca	663	37
12/02/1998	A	JPI	Zaragoza (2)	72, 73, 76	95, 108
16/02/1998	S	AP	Zaragoza (5)	68	72
19/02/1998	S	AP	Zaragoza (5)	663	52
19/02/1998	A	JPI	Boltaña	65, 74	20, 117
20/02/1998	S	TS	Madrid	68, 74	74, 110 a 112
24/02/1998	A	TS	Madrid		0
24/02/1998	S	JPI	Zaragoza (14)	663	41.5
25/02/1998	A	AP	Huesca	68, 76	72, 73, 132
25/02/1998	A	AP	Zaragoza (5)	662	26
07/04/1998	S	AP	Zaragoza (4)	663	46
20/04/1998	S	AP	Huesca	5, 73, 74	110, 114, 116
20/04/1998	A	TSJ	Zaragoza	0	
22/04/1998	S	AP	Huesca	9	33 Ley Caza
27/04/1998	A	AP	Zaragoza (5)	76	108
28/04/1998	S	JPI	Huesca (1)	663,71	55.2
29/04/1998	S	AP	Huesca	9	33 Ley Caza
30/04/1998	S	AP	Huesca	9	33, 72 Ley Caza
04/05/1998	A	AP	Huesca	65, 74	21.3
04/05/1998	A	JPI	Boltaña	76	127, 135

Fecha	Res.	Trib.	Localidad	Clave	Artículo
08/05/1998	A	JPI	Boltaña	72	96
11/05/1998	S	AP	Teruel	8	148
11/05/1998	S	AP	Zaragoza (5)	8	148
12/05/1998	S	AP	Huesca	8	147
13/05/1998	S	AP	Huesca	8	144
18/05/1998	A	JPI	Zaragoza (14)	64	10
19/05/1998	A	TS	Madrid	0	
25/05/1998	A	TSJ	Zaragoza	0	
26/05/1998	S	AP	Huesca	663	52
26/05/1998	A	JPI	Zaragoza (14)	68	63.2, 86.1
29/05/1998	S	JPI	Zaragoza (14)	663	41.5, 43.2
01/06/1998	S	AP	Zaragoza (4)	8	144, 145, 147
05/06/1998	A	JPI	Zaragoza (13)	64	9
05/06/1998	A	JPI	Boltaña	76	127, 132
05/06/1998	A	JPI	Boltaña	76	127, 132
09/06/1998	S	JPI	Zaragoza (14)	8	144
10/06/1998	S	AP	Huesca	661	32, 33
17/06/1998	S	AP	Zaragoza (5)	8	144, 145
22/06/1998	S	AP	Zaragoza (5)	8	147
22/06/1998	S	JPI	Zaragoza (14)	71	138.1
25/06/1998	S	JPI	Zaragoza (14)	663	41.5, 46.1
26/06/1998	S	AP	Huesca	8	147, 148
29/06/1998	S	AP	Huesca	8	144
01/07/1998	A	JPI	Zaragoza (13)	64	9
06/07/1998	A	JPI	Boltaña	76	127, 135
14/07/1998	A	TSJ	Zaragoza	0	
17/07/1998	A	JPI	Boltaña	76	127, 135
18/07/1998	A	AP	Huesca	72, 73, 76	108, 132, 133
20/07/1998	S	AP	Teruel	8	147, 148
27/07/1998	S	JPI	La Almunia	663	42
30/07/1998	S	AP	Huesca	68	72, 76, 86
30/07/1998	A	AP	Zaragoza (5)	71, 76	141
08/09/1998	S	JPI	Jaca (1)	8	147
08/09/1998	S	AP	Huesca	9	33 Ley Caza
21/09/1998	S	AP	Zaragoza (2)	8	144
22/09/1998	S	AP	Huesca	9	33 Ley Caza
23/09/1998	A	AP	Zaragoza (3)	71	
24/09/1998	S	AP	Zaragoza (5)	8	144
28/09/1998	S	TS	Madrid	663, 72	1380 Cc
29/09/1998	S	JPI	Huesca (2)	8	144, 145.3
05/10/1998	S	TSJ	Zaragoza	5	3
14/10/1998	A	AP	Huesca	663	55 ss.
14/10/1998	S	AP	Huesca	8	144.2, 148
22/10/1998	S	AP	Zaragoza (4)	71	142, DT 2ª
24/10/1998	S	AP	Zaragoza (1)	661	
27/10/1998	S	AP	Huesca	5, 662	1.2
27/10/1998	S	AP	Teruel	663	39.1, 55.2
27/10/1998	S	AP	Zaragoza (5)	8	144
27/10/1998	S	JPI	Zaragoza (14)	68, 71	140
28/10/1998	S	AP	Zaragoza (5)	8	148
04/11/1998	S	JPI	Zaragoza (12)	68	79, 88
09/11/1998	S	AP	Zaragoza (4)	61, 663	34, 38, 39
11/11/1998	S	TSJ	Zaragoza	75	119, 120
16/11/1998	S	AP	Huesca	663	52.2
16/11/1998	S	JPI	La Almunia	663	48
19/11/1998	S	AP	Huesca	8	147
23/11/1998	S	AP	Teruel	663	40

Fecha	Res.	Trib.	Localidad	Clave	Artículo
25/11/1998	S	TSJ	Zaragoza	663	37, 40, 46, 47
25/11/1998	A	AP	Huesca	65, 74	21, 22, 117, 118
02/12/1998	S	AP	Zaragoza (2)	663	39, 40
11/12/1998	S	JPI	Zaragoza (2)	5,62,663, 68	76
14/12/1998	S	AP	Zaragoza (4)	72	97
19/12/1998	S	JPI	Monzón	73	100
22/12/1998	S	AP	Zaragoza (2)	8	144,3
22/12/1998	S	JPI	Jaca (2)	5,662,663	1.2, 23, 25, 54, 55
26/12/1998	S	AP	Teruel	8	145 a 148
28/12/1998	S	JPI	Jaca (2)	5	1.2
28/12/1998	S	AP	Teruel	5, 72, 75	119 y ss.: 1.2
31/12/1998	S	AP	Teruel	8	144
05/01/1999	A	JPI	Boltaña	76	89, 137, 132
07/01/1999	S	JPI	Zaragoza (14)	68	72, 76, 79
13/01/1999	S	AP	Teruel	5	3
26/01/1999	S	JPI	Zaragoza (2)	9	150.1
28/01/1999	S	AP	Huesca	5	3
29/01/1999	S	AP	Huesca	663	41, 42, 43, 52
19/02/1999	A	JPI	Boltaña	76	82, 127, 135
26/02/1999	S	TSJ	ARAGÓN	663	1, 36, 37, 38
26/02/1999	A	JPI	Boltaña	76	82, 127, 135
26/02/1999	S	AP	Huesca	8	15 Apéndice
26/02/1999	S	AP	Huesca	663	55
02/03/1999	A	TS	Madrid		0
04/03/1999	S	AP	Zaragoza (5ª)	72	95, 97, 98, 108
10/03/1999	S	TSJ	ARAGÓN	663	47
10/03/1999	S	JPI	Huesca(1)	9	149
12/03/1999	A	JPI	Boltaña	76	82, 127, 135
16/03/1999	S	AP	Huesca	8	1.2, 143
17/03/1999	S	AP	Huesca	74	142 LS; 110, 112
22/03/1999	A	JPI	Boltaña	76	89, 132, 135
22/03/1999	S	AP	Teruel	663	76
22/03/1999	S	AP	Teruel	8	147
24/03/1999	A	JPI	Huesca(2)	76	95,108,127,128,135
20/04/1999	S	AP	Zaragoza (5ª)	663	42, 46
21/04/1999	A	AP	Huesca	76	108, 132, 133
30/04/1999	S	AP	Teruel	76	132, 133
30/04/1999	S	AP	Zaragoza (5ª)	71	138
05/05/1999	A	JPI	Huesca(2)	76	DTILS;127,128,132,135
07/05/1999	S	AP	Zaragoza (5ª)	663,68	37,40,55,57,59,73
11/05/1999	S	AP	Zaragoza (5ª)	71	138
12/05/1999	A	AP	Zaragoza (5ª)	76	135, 136
20/05/1999	S	AP	Zaragoza (5ª)	663	48
24/05/1999	S	TSJ	ARAGÓN	663	37
31/05/1999	S	AP	Teruel	663	41.3
03/06/1999	S	JPI	Zaragoza (2)	5, 663	3, 37.1, 39.2
14/06/1999	S	AP	Zaragoza (5ª)	663	48
16/06/1999	A	AP	Zaragoza (5ª)	76	128 a 133,135,141
16/06/1999	A	AP	Zaragoza (5ª)	76	135
28/06/1999	S	AP	Zaragoza (4ª)	663	12, 38, 47, 55
05/07/1999	A	TSJ	Zaragoza	0	
06/07/1999	S	AP	Zaragoza (4ª)	68, 71	140
07/07/1999	A	JPI	Huesca(2)	76	5, DT1ªLS;128,135
07/07/1999	A	JPI	Boltaña	76	201, 202, 217 LS
15/07/1999	A	AP	Huesca	663	37, 55
20/07/1999	S	AP	Zaragoza (2ª)	663	41.1

Fecha	Res.	Trib.	Localidad	Clave	Artículo
31/07/1999	S	JPI	Huesca(2)	76	132, 133, 135
03/09/1999	S	JPI	Ejea(2)	64	9.1
10/09/1999	S	JPI	Zaragoza (14)	663	43, 55
10/09/1999	S	JPI	Zaragoza (14)	5, 663	37
13/09/1999	S	TSJ	ARAGÓN	5	3
16/09/1999	S	AP	Huesca	8	147
27/09/1999	S	AP	Zaragoza (4ª)	663	38, 39, 47, 55
29/09/1999	A	JPI	Boltaña	76	2,DT1ª LS; 127,132
30/09/1999	A	JPI	Boltaña	76	2LS;89,127,132,135
06/10/1999	S	TSJ	ARAGÓN	663	1, 37, 41, 47
16/10/1999	S	AP	Huesca	9	149 y ss
25/10/1999	S	AP	Zaragoza (5ª)	8	147, 148
26/10/1999	S	JPI	Zaragoza (2)	68	
27/10/1999	S	AP	Zaragoza (5ª)	663	42.1
02/11/1999	S	JPI	Zaragoza (14)	663	38, 39
05/11/1999	S	AP	Teruel	8	147
06/11/1999	S	AP	Teruel	68	1.2,72,75,79,85,86.4
16/11/1999	S	AP	Zaragoza (5ª)	663	48
24/11/1999	S	JPI	Ejea(2)	64	9.1
07/12/1999	S	AP	Huesca	663	55.3
09/12/1999	S	AP	Teruel	663,68	1.3,37,50,79,84,86,88
09/12/1999	S	AP	Zaragoza (5ª)	663	29
11/12/1999	S	JPI	Huesca(2)	663	38, 51
13/12/1999	S	AP	Huesca	73	141
13/12/1999	S	AP	Teruel	5	41.3
22/12/1999	S	AP	Huesca	8	144.1
18/01/2000	S	AP	Huesca	663	55.2
29/01/2000	S	AP	Zaragoza (5ª)	663	37 a 40
21/01/2000	S	AP	Teruel	68	39,53,76,79
07/02/2000	S	AP	Teruel	5	
08/02/2000	S	JPI	Zaragoza (14)	663	52, 55
08/02/2000	S	AP	Huesca	67	60 y ss.
14/02/2000	A	JPI	Zaragoza (14)	72	104,108,201-203,217LS
18/02/2000	S	JPI	Fraga	8	145
29-02-00	A	AP	Huesca	71	40 y ss,54,DT5ª.LS
02/03/2000	S	AP	Zaragoza (4ª)	64	41
06/03/2000	S	AP	Zaragoza (4ª)	8	144.1
07/03/2000	S	AP	Huesca	9	Ley Caza
13/03/2000	S	AP	Zaragoza (4ª)	8	144.2
16/03/2000	A	AP	Zaragoza (5ª)	71	138
17/03/2000	S	JPI	Ejea (2)	65,73	99,1
21/03/2000	S	AP	Huesca	68	85,87
22/03/2000	A	AP	Zaragoza	71	138
30/03/2000	S	AP	Zaragoza (5ª)	663	48
31/03/2000	S	AP	Zaragoza (5ª)	8	145
03/04/2000	S	JPI	Huesca (1)	74	111,114 a 118
10/04/2000	S	AP	Zaragoza (4ª)	8	147
11/04/2000	S	AP	Zaragoza (2ª)	5	L 6/1999
12/04/2000	S	JPI	Zaragoza (1)	8	147
12/04/2000	A	AP	Huesca	65	
14/04/2000	S	JPI	Huesca (3)	68	111,114 a 118
19/04/2000	S	AP	Zaragoza (4ª)	68	79
24/04/2000	S	AP	Teruel	5	3
28/04/2000	S	AP	Huesca	8	147
04/05/2000	S	AP	Zaragoza (5ª)	8	144.3
09/05/2000	S	TSJ	Aragón	663	37 y ss.
11/05/2000	S	JPI	Zaragoza (14)	71	40 y 41 LS

Fecha	Res.	Trib.	Localidad	Clave	Artículo
19/05/2000	S	JPI	Huesca (3)	8	148
25/05/2000	S	JPI	Huesca (2)	74	109 LS
29/05/2000	S	TSJ	Aragón	5	1,2,3
29/05/2000	S	AP	Huesca	8	147
07/06/2000	S	AP	Teruel	71,76	141
12/06/2000	S	AP	Zaragoza (4ª)	663	37,39,40,47
13/06/2000	S	AP	Teruel	8	144
19/06/2000	S	AP	Zaragoza (5ª)	8	145,147
22/06/2000	S	JPI	Ejea (2)	8	147,148
30/06/2000	S	AP	Teruel	8	147,148
03/07/2000	S	AP	Teruel	663	23 y ss.
07/07/2000	S	AP	Zaragoza (2ª)	663	46
10/07/2000	S	AP	Zaragoza (2ª)	68	16.2 CC
11/07/2000	S	AP	Zaragoza (4ª)	8	144.3,145
13/07/2000	S	AP	Zaragoza (5ª)	73	108
14/07/2000	S	JPI	Zaragoza (1)	663	37,56
17/07/2000	S	AP	Zaragoza (5ª)	68	72
24/07/2000	S	AP	Teruel	64	
24/07/2000	S	AP	Zaragoza (4ª)	663	26 y 41 y ss.
25/07/2000	S	AP	Zaragoza (4ª)	8	147
26/07/2000	S	AP	Zaragoza (5ª)	663	42
14/09/2000	S	AP	Huesca	8	147
15/09/2000	A	JPI	Zaragoza (14)	65	L 6/1999
22/09/2000	A	TSJ	Aragón	0	29 EAA
02/10/2000	S	AP	Zaragoza (4ª)	663	41.3
04/10/2000	S	AP	Huesca	8	145
06/10/2000	A	JPI	Zaragoza (10)	76	20,23 LS
06/10/2000	S	TSJ	Aragón	663	36-40
11/10/2000	S	JPI	Huesca (3)	76	40
11/10/2000	A	AP	Huesca	76	141
18/10/2000	S	AP	Zaragoza (4ª)	8	144,145
18/10/2000	S	AP	Zaragoza (5ª)	76	135,141
18/10/2000	S	AP	Teruel	62	
25/10/2000	S	AP	Huesca	663	
25/10/2000	S	AP	Teruel	64	
27/10/2000	S	JPI	Zaragoza (14)	8	147
30/10/2000	S	AP	Teruel	5	3
15/11/2000	S	JPI	Zaragoza (10)	74	120
20/11/2000	S	AP	Huesca	8	146
21/11/2000	S	AP	Huesca	68	76,79
30/11/2000	S	AP	Huesca	9	Ley Caza
04/12/2000	S	AP	Zaragoza (5ª)	663	37,48
04/12/2000	S	AP	Huesca	8	144.1
11/12/2000	A	AP	Zaragoza	68	83.2
12/12/2000	S	AP	Zaragoza (4ª)	64	5
14/12/2000	S	JPI	Zaragoza (1)	8	144,147
15/12/2000	A	AP	Zaragoza	76	132 y ss.
19/12/2000	S	AP	Huesca	9	Ley Caza
21/12/2000	S	AP	Huesca	8	144
22/12/2000	S	AP	Huesca	9	Ley Caza
28/12/2000	S	JPI	Huesca (2)	9	149
18/01/2001	S	AP	Huesca	74	134.1.2º Lsuc
25/01/2001	S	AP	Huesca	74	
25/01/2001	S	AP	Zaragoza (5ª)	8	143,147,148
25/01/2001	S	JPI	Teruel (2)	8	143.2
29/01/2001	S	JPI	Teruel (2)	62	5,14
05/02/2001	S	AP	Zaragoza (4ª)	663	41,43,47,55,56

Fecha	Res.	Trib.	Localidad	Clave	Artículo
06/02/2001	S	AP	Zaragoza (2ª)	663	38,39,40
06/02/2001	A	JPI	Calatayud (2)	76	201,202,217 LS
07/02/2001	A	JPI	Calatayud (2)	76	127,135
14/02/2001	A	AP	Zaragoza (5ª)	663	46,53
17/02/2001	S	AP	Huesca	74	110.2
19/02/2001	S	AP	Huesca	9	Ley Caza
20/02/2001	S	AP	Huesca	9	Ley Caza
26/02/2001	S	AP	Zaragoza (2ª)	5	3
26/02/2001	S	AP	Zaragoza (4ª)	663	37.2, 38.2, 38.5
27/02/2001	A	AP	Huesca	64	12
28/02/2001	S	AP	Huesca	663	47
02/03/2001	S	AP	Zaragoza (5ª)	8	147
07/03/2001	A	AP	Zaragoza (5ª)	76	
07/03/2001	S	AP	Zaragoza (2ª)	0	Ley Parejas
07/03/2001	S	JPI	Calatayud (2)	8	144
08/03/2001	S	JPI	Calatayud (2)	68	72 y ss
09/03/2001	S	JPI	Zaragoza (14)	663	37.4, 40.1
07/03/2001	S	JPI	Calatayud (2)	8	144
23/03/2001	A	JPI	Calatayud (2)	76	201,202,217 LS
28/03/2001	S	AP	Zaragoza (5ª)	662,663	26, 58
29/03/2001	S	JPI	Calatayud (2)	8	147,148
31/03/2001	S	AP	Huesca	8	145,147
31/03/2001	S	AP	Zaragoza (4ª)	8	147
02/04/2001	S	AP	Teruel	8	143-145, 148
09/04/2001	S	AP	Zaragoza (2ª)	8	144
09/04/2001	A	JPI	Zaragoza (14)	663	41.1, 43
18/04/2001	S	AP	Zaragoza (4ª)	663	37.2, 55
24/04/2001	S	AP	Zaragoza (5ª)	8	145
27/04/2001	S	AP	Zaragoza (5ª)	663	26
30/04/2001	S	AP	Teruel	8	144
30/04/2001	S	AP	Teruel	8	147
08/05/2001	S	AP	Zaragoza (2ª)	663	37.1, 52
09/05/2001	S	AP	Zaragoza (5ª)	663	
11/05/2001	A	JPI	Calatayud (2)	76	201,222,217 LS
11/05/2001	A	JPI	Calatayud (2)	76	127,132,135
12/05/2001	A	JPI	Ejea (2)	8	144
18/05/2001	S	AP	Zaragoza (4ª)	8	147
21/05/2001	S	AP	Zaragoza (2ª)	663	38-40
21/05/2001	S	AP	Zaragoza (4ª)	663	37
28/05/2001	A	JPI	Calatayud (2)	76	201,202,217 LS
05/06/2001	S	AP	Zaragoza (2ª)	75	171,172,189 LS
07/06/2001	S	AP	Teruel	9	148, 150
15/06/2001	S	AP	Huesca	71	140,99,101;47,68 LS
18/06/2001	S	AP	Zaragoza (5ª)	68,71	73,86
19/06/2001	S	AP	Teruel	5	3
22/06/2001	S	AP	Huesca	663	53
22/06/2001	S	AP	Huesca	68	83,86
22/06/2001	S	AP	Teruel	8	143 a 148
22/06/2001	S	AP	Zaragoza (5ª)	663	56.1
22/06/2001	S	AP	Zaragoza (5ª)	8	147,148
27/06/2001	A	JPI	Calatayud (2)	76	201,202,217 LS
27/06/2001	A	JPI	Calatayud (2)	76	127,132,135
05/07/2001	S	JPI	Teruel (2)	663	52 y ss.
06/07/2001	A	JPI	Calatayud (2)	76	201,202,217 LS
11/07/2001	S	AP	Huesca	8	144,145
14/07/2001	S	AP	Teruel	5	3
16/07/2001	S	JPI	Calatayud (2)	662	23,52

Fecha	Res.	Trib.	Localidad	Clave	Artículo
18/07/2001	S	JPI	Calatayud (2)	8	147,148
19/07/2001	S	AP	Teruel	5	3
20/07/2001	S	AP	Zaragoza (5ª)	8	147
24/07/2001	S	AP	Teruel	68	72
30/07/2001	S	AP	Zaragoza (5ª)	663	41
30/07/2001	S	JPI	Calatayud (2)	8	147
31/07/2001	S	AP	Zaragoza (5ª)	67,74	60,61,86
31/07/2001	S	JPI	Calatayud (2)	663	36 y ss,55 y ss
31/07/2001	S	JPI	Zaragoza (3)	8	144,145,147,148
01/09/2001	A	JPI	Calatayud (2)	76	201,202,217 LS
01/09/2001	A	JPI	Calatayud (2)	76	201,202,219 LS
01/09/2001	A	JPI	Calatayud (2)	76	201,202,217 LS
06/09/2001	S	AP	Teruel	8	144
06/09/2001	S	AP	Teruel	9	Ley Caza
11/09/2001	S	JPI	Zaragoza (14)	68	40.1LS; 53 y 79ss
14/09/2001	S	AP	Zaragoza (4ª)	9	149,15
17/09/2001	S	AP	Huesca	8	144
24/09/2001	S	AP	Huesca	8	147
29/09/2001	S	TSJ	Aragón	74	111,117,115,143
05/10/2001	S	AP	Teruel	5	3
08/10/2001	S	AP	Zaragoza (2ª)	663	36,40,23,90
09/10/2001	S	AP	Huesca	663	38.3
24/10/2001	S	JPI	Huesca (2)	663	46,56,58
25/10/2001	S	JPI	Zaragoza (14)	663	41.1
27/10/2001	S	AP	Teruel	5	3
30/10/2001	S	AP	Teruel	8	144
30/10/2001	S	AP	Zaragoza (4ª)	663	40,47
02/11/2001	S	JPI	Tarazona	8	144,145
05/11/2001	S	TSJ	Aragón	68	72 y ss.,83 y 86
07/11/2001	S	TSJ	Aragón	5,8,0	3, 143
07/11/2001	S	AP	Zaragoza (5ª)	62	48.1, 51
09/11/2001	A	JInstr.	Zaragoza (4)	663	48
12/11/2001	S	JPI	Tarazona	8	144,145,147
13/11/2001	S	AP	Zaragoza (4ª)	663	
13/11/2001	A	AP	Zaragoza (4ª)	663	67
13/11/2001	S	JPI	Tarazona	8	147,148
13/11/2001	S	JPI	Zaragoza (3)	8	144
15/11/2001	S	JPI	Zaragoza (14)	663,68	72,76,57
16/11/2001	S	AP	Zaragoza (5ª)	9	149, 212.2 LS
21/11/2001	A	JPI	Zaragoza (14)	68	80
26/11/2001	S	AP	Zaragoza (4ª)	663	38,47
27/11/2001	S	AP	Teruel	9	Ley Caza
27/11/2001	S	AP	Teruel	8	147
28/11/2001	S	AP	Huesca	72	97.3
10/12/2001	S	AP	Zaragoza (4ª)	8	147
20/12/2001	A	JPI	Calatayud (2)	76	201,202,217LS
28/12/2001	S	AP	Huesca	8	144.2,145
03/01/2002	S	JPI	Teruel (2)	8	144,145
04/01/2002	S	JPI	Teruel (2)	8	
15/01/2002	S	AP	Zaragoza (2ª)	8	144.3, 145
17/01/2002	A	AP	Huesca	663	41.5, 42
18/01/2002	S	JPI	Teruel (2)	8	144
28/01/2002	A	TSJ	Aragón	0	
30/01/2002	S	AP	Huesca	5,662	
14/02/2002	S	AP	Teruel		
18/02/2002	S	AP	Huesca	9	Ley Caza
20/02/2002	S	AP	Teruel	663	43

Fecha	Res.	Trib.	Localidad	Clave	Artículo
21/02/2002	S	AP	Zaragoza (5ª)	8	144
25/02/2002	S	AP	Zaragoza (5ª)	65,72,73	119, 171 LS
26/02/2002	S	TSJ	Aragón	663	23,38,39
28/02/2002	S	AP	Huesca	8	LPatrimonio
04/03/2002	S	AP	Zaragoza (2ª)	663	48
05/03/2002	S	AP	Huesca	8	145
07/03/2002	S	AP	Huesca	9	
08/03/2002	S	AP	Huesca	72,661	38.1, 51
18/03/2002	S	AP	Zaragoza (2ª)	663	37,38,47
18/03/2002	S	AP	Zaragoza (5ª)	8	147,148
21/03/2002	S	AP	Huesca	72	142
27/03/2002	S	AP	Zaragoza (5ª)	662,663	10, 41 a 43
08/04/2002	S	AP	Zaragoza (2ª)	8	143
08/04/2002	S	AP	Zaragoza (2ª)	663	40,41,43
08/04/2002	S	AP	Zaragoza (2ª)	661	43
13/04/2002	S	AP	Teruel	8	1.2,147,148
16/04/2002	S	AP	Teruel	8	147
26/04/2002	S	TSJ	Aragón	9	149
26/04/2002	S	AP	Huesca	9	Ley Caza
26/04/2002	S	JPI	Teruel (2)	68,71	76,142,58LS,61LS
29/04/2002	S	JPI	Calatayud (1)	663	40
30/04/2002	S	AP	Teruel	68	72 a 75
02/05/2002	S	AP	Zaragoza (5ª)	663	37,41
06/05/2002	S	AP	Huesca	8	147
07/05/2002	S	AP	Teruel	8	143 a 148
07/05/2002	S	AP	Zaragoza (2ª)	663	37.1
15/05/2002	A	TSJ	Aragón	0	
16/05/2002	S	AP	Huesca	8	144
17/05/2002	S	AP	Huesca	8	147, 1.2
20/05/2002	S	JPI	Ejea (1)	8	147
24/05/2002	S	TSJ	Aragón	67,74	60,61,110,1.2
27/05/2002	S	JPI	Teruel (2)	8	144
28/05/2002	S	AP	Zaragoza (2ª)	663	36, 37.1
03/06/2002	S	AP	Zaragoza (5ª)	663	63
04/06/2002	S	AP	Teruel	8	147,148
05/06/2002	A	TSJ	Aragón	0	
08/06/2002	S	AP	Teruel	663	52,53,55,67,140
17/06/2002	S	AP	Zaragoza (2ª)	663	37.2, 40, 41
09/07/2002	S	AP	Huesca	8	144
09/07/2002	A	JPI	Zaragoza (14)	663	42
11/07/2002	S	JPI	Ejea (1)	8	147, 1.2
31/07/2002	S	AP	Zaragoza (5ª)	663	36,38,39,47,55, 56,58
10/09/2002	S	AP	Teruel	68,71	142, 58LS, 61LS
10/09/2002	S	AP	Zaragoza (2ª)	8	147
16/09/2002	S	AP	Zaragoza (2ª)	663	37.1, 38
25/09/2002	S	JPI	Ejea (1)	8	144
26/09/2002	S	JPI	Zaragoza (14)	71	33.2
30/09/2002	S	AP	Zaragoza (2ª)	8	147
02/10/2002	S	AP	Teruel	8	144
03/10/2002	S	JPI	Zaragoza (14)	663	48
04/10/2002	S	AP	Teruel	5	3
04/10/2002	S	JPI	Zaragoza (14)	663	37.4
21/10/2002	S	AP	Teruel	8	143,144
21/10/2002	S	AP	Zaragoza (2ª)	5	3
23/10/2002	S	AP	Teruel	8	144.2,145
28/10/2002	S	AP	Zaragoza (2ª)	8	144
29/10/2002	S	AP	Huesca	663	40.1

Fecha	Res.	Trib.	Localidad	Clave	Artículo
30/10/2002	S	AP	Huesca	8	144, 145
14/11/2002	S	JPI	Ejea (2)	8	144
18/11/2002	A	AP	Zaragoza (2ª)	8	145,147
21/11/2002	S	AP	Teruel	8	144
26/11/2002	S	AP	Teruel	8	147
28/11/2002	S	AP	Huesca	72	6 LS, 162 LS
29/11/2002	S	AP	Teruel	5, 8	1.2, 145 y ss
29/11/2002	S	JPI	Calatayud (1)	8	144,145
04/12/2002	S	AP	Teruel	663	38.1
05/12/2002	S	AP	Huesca	8	144
08/12/2002	S	AP	Zaragoza (2ª)	8	144,145,147
12/12/2002	S	JPI	Teruel (2)	8	144,147
23/12/2002	S	AP	Zaragoza (2ª)	5	663
21/01/2003	A	AP	Zaragoza (5ª)	76	58 LS, 142 CDCA
23/01/2003	S	AP	Teruel	8	147
30/01/2003	S	AP	Huesca	8	147
30/01/2003	A	AP	Huesca	663	42
17/02/2003	A	AP	Zaragoza (2ª)	76	127 y ss
17/02/2003	S	AP	Zaragoza (2ª)	663	37.2
19/02/2003	S	AP	Zaragoza (5ª)	8	147
27/02/2003	S	AP	Huesca	66	
11/03/2003	S	AP	Zaragoza (2ª)	663	47.1, 56.1
18/03/2003	S	AP	Teruel	8	148
19/03/2003	S	AP	Zaragoza (5ª)	8	144.2
24/03/2003	S	AP	Zaragoza (2ª)	663	38
25/03/2003	S	AP	Teruel	8	144.3
27/03/2003	S	AP	Teruel	8	147
28/03/2003	S	JPI	Zaragoza (14)	663	41 a 47
31/03/2003	A	AP	Zaragoza (5ª)	71	141.1
07/04/2003	S	AP	Zaragoza (4ª)	9	LeyCaza
10/04/2003	S	TSJ	Aragón	72	
10/04/2003	S	JPI	Zaragoza (17)	62,5	1.2, 9, 14
14/04/2003	S	AP	Zaragoza (2ª)	8	147
30/04/2003	S	JPI	Zaragoza (14)	65	20 CDCA, 202 LS
02/05/2003	A	TSJ	Aragón	0	
15/05/2003	S	AP	Huesca	74	134 LS
15/05/2003	S	AP	Teruel	8	144
16/04/2003	S	AP	Huesca	8	147
16/04/2003	A	AP	Zaragoza (2ª)	64, 65	20.5, 5.2
21/04/2003	A	AP	Zaragoza (4ª)	76	217,218,219 LS
21/04/2003	S	JPI	Tarazona	8	144.3
24/04/2003	S	AP	Huesca	8	147
15/05/2003	S	AP	Huesca	74	134 LS
19/05/2003	S	AP	Zaragoza (4ª)	662	23, 41, 43 CDCA, 24 LS
21/05/2003	S	AP	Huesca	8	144
23/05/2003	S	JPI	Teruel (1)	8	144.1
23/05/2003	S	JPI	Zaragoza (17)	72	
05/06/2003	S	JPI	Zaragoza (17)	8	144
09/06/2003	A	AP	Zaragoza (4ª)	663	42,47,56,57,58
09/06/2003	S	AP	Zaragoza (5ª)	8	144
10/06/2003	S	AP	Huesca	663	37
11/06/2003	S	AP	Teruel	8	144
12/06/2003	S	AP	Huesca	61	LPENC
12/06/2003	S	AP	Huesca	663	41.1
17/06/2003	A	AP	Zaragoza (5ª)	8	144
18/06/2003	S	AP	Teruel	8	147,148
19/06/2003	S	AP	Huesca	8	147

Fecha	Res.	Trib.	Localidad	Clave	Artículo
20/06/2003	S	AP	Zaragoza (4ª)	663	29, 38, 47
25/06/2003	S	JPI	Ejea (2)	8	144.1
28/06/2003	S	AP	Teruel	8	
07/07/2003	S	TSJ	Aragón	663	42
08/07/2003	A	AP	Teruel	5	3
14/07/2003	S	AP	Zaragoza (5ª)	663	38,39,41,43,45
15/07/2003	S	JPI	Zaragoza (17)	71	7, 171 LS
16/07/2003	S	AP	Zaragoza (5ª)	8	147
17/07/2003	S	JPI	Zaragoza (17)	663	37.3
22/07/2003	S	JPI	Zaragoza (2)	74	133
28/07/2003	S	AP	Zaragoza (4ª)	9	LeyCaza
30/07/2003	S	AP	Zaragoza (4ª)	663	38.4, 40, 57
01/09/2003	S	JPI	Teruel (2)	8	144.2
08/09/2003	S	AP	Zaragoza (4ª)	663	47
19/09/2003	A	TSJ	Aragón	0	
22/09/2003	A	AP	Huesca	61	LPENC
23/09/2003	S	AP	Teruel	5	3
24/09/2003	A	TSJ	Aragón	0	
24/09/2003	S	TSJ	Aragón	68	76.78.79,79,83, 86
24/09/2003	S	AP	Zaragoza (5ª)	663	8 LREMV
09/10/2003	S	JPI	Zaragoza (17)	663	48.2
18/10/2003	S	AP	Teruel	8	144
22/10/2003	S	JPI	Zaragoza (12)	663	36, 48.2
23/10/2003	S	AP	Zaragoza (5ª)	663	39.6,40,67,68
24/10/2003	S	AP	Huesca	661	
28/10/2003	S	AP	Huesca	663	37.3, 40,41M53
28/10/2003	S	AP	Zaragoza (5ª)	71	40
28/10/2003	S	AP	Zaragoza (5ª)	8	144, 179 LS
31/10/2003	S	JPI	Alcañiz (1)	8	147
04/11/2003	S	JPI	Alcañiz (1)	76	212, 213 LS
04/11/2003	S	JPI	Zaragoza (4)	72,68,74	84,85,86
06/11/2003	S	JPI	Calamocha	663	76 y ss LREMV
14/11/2003	S	AP	Zaragoza (5ª)	75	40 CDCA, 171 y
17/11/2003	S	AP	Huesca	8	147
18/11/2003	S	JPI	Zaragoza (2)	663	36 y ss
28/11/2003	S	TSJ	Aragón	68	
28/11/2003	S	AP	Huesca	8	147
05/12/2003	S	JPI	Tarazona	71,5	142 CDCA,DTI58 LS
09/12/2003	S	AP	Zaragoza (5ª)	68	53 y ss,85,86,87
10/12/2003	S	AP	Teruel	5	2.1
12/12/2003	A	TSJ	Aragón	0	
12/12/2003	S	JPI	Ejea (2)	76	38,40,132,149,150
17/12/2003	S	AP	Zaragoza (5ª)	8	148
26/12/2003	S	AP	Huesca	8	144
26/12/2003	S	AP	Zaragoza (5ª)	663	
26/12/2003	S	JPI	Ejea (2)	8	144
09/01/2004	S	JPI	Zaragoza(17)	9	30.2
14/01/2004	S	AP	Teruel	5	1.2
21/01/2004	S	AP	Zaragoza	663	55.2,80 LR
26/01/2004	A	AP	Zaragoza	663	37.2,41
02/02/2004	S	JPI	Zaragoza(6)	663	
02/02/2004	S	AP	Teruel	8	144,145,147
02/02/2004	S	AP	Zaragoza	8	144,145,
04/02/2004	S	TSJ	Aragón	8	144,145,
04/02/2004	S	AP	Zaragoza	663	38.7,29.4LS
06/02/2004	A	AP	Zaragoza	663	52 y ss, 58 LS
11/02/2004	S	AP	Zaragoza	663	40,56.1,38

Fecha	Res.	Trib.	Localidad	Clave	Artículo
12/02/2004	S	JPI	Zaragoza (17)	75	171 y ss LS
16/02/2004	S	JPI	Ejea (1)	8	144
16/02/2004	S	JPI	Ejea (1)	8	144
18/02/2004	S	JPI	Zaragoza (6)	663	
18/02/2004	S	AP	Zaragoza	71	79
19/02/2004	S	AP	Zaragoza	663	68 y ss LR
25/02/2004	S	AP	Zaragoza	72	108
10/03/2004	S	AP	Huesca	663	
24/03/2004	S	JPI	Zaragoza(6)	663	37, 57 C, 84LR
25/03/2004	S	AP	Zaragoza	663	62.d LR
31/03/2004	S	TSJ	Aragón	8	144
12/04/2004	S	AP	Zaragoza	663	38.5,
22/04/2004	S	JPI	Jaca (1)	9	149,150 C
26/04/2004	S	JPI	Zaragoza (6)	663	
27/04/2004	S	AP	Zaragoza	8	147,148
28/04/2004	A	JPI	Zaragoza (14)	68	52C,62,76,LR
05/05/2004	S	JPI	Zaragoza (6)	663	
17/05/2004	S	JPI	Zaragoza(6)	663	
17/05/2004	S	JPI	Ejea (1)	8	144, 145
18/05/2004	S	AP	Teruel	5	1.2
19/05/2004	S	JPI	Zaragoza(6)	663	37-40 C,24LR,
31/05/2004	S	AP	Zaragoza	8	144
01/06/2004	S	JPI	Jaca (1)	663	28LR
01/06/2004	S	JPI	Jaca (1)	8	143
04/06/2004	S	AP	Huesca	8	144
17/06/2004	S	JPI	Teruel(1)	8	143
18/06/2004	S	JPI	Zaragoza(6)	663	
18/06/2004	S	JPI	Zaragoza(6)	663	
22/06/2004	S	AP	Teruel	5	3
23/06/2004	S	TSJ	Aragón	662	38,39,72 LS
26/06/2004	S	AP	Huesca	8	147
29/06/2004	S	JPI	Zaragoza(6)	663	37,38,57,58
28/06/2004	S	JPI	Calamocha(1)	8	147
29/06/2004	S	JPI	Teruel(2)	8	145
01/07/2004	S	AP	Huesca	68	78,79,84 LR
01/07/2004	S	AP	Zaragoza	74	5,133,10,177LS
06/07/2004	S	JPI	Alcañiz (2)	68	101 LR
06/07/2004	S	AP	Zaragoza	8	144
08/07/2004	S	JPI	Zaragoza(12)	72	102,123,105LS
09/07/2004	S	JPI	Zaragoza(6)	663	37 y ss, DT2ª
13/07/2004	s	JPI	Zaragoza(17)	75	171,188,190, LS
14/07/2004	S	AP	Teruel	8	144
19/07/2004	S	JPI	Zaragoza(6)	663	
01/09/2004	S	JPI	Alcañiz (1)	8	144
03/09/2004	S	JPI	Calamocha(1)	5	1.2,3
13/09/2004	S	JPI	Jaca (1)	8	143,144
13/09/2004	S	AP	Zaragoza	663	80,87 LR,55,59 C
20/09/2004	S	JPI	Calamocha(1)	663	40,35LR
20/09/2004	S	AP	Zaragoza	663	41.5
20/09/2004	S	JPI	Zaragoza (14)	72	93.1 LS
30/09/2004	S	AP	Zaragoza	663	41.5
04/10/2004	S	AP	Zaragoza	74	
06/10/2004	S	AP	Zaragoza	8	147
07/10/2004	S	JPI	Zaragoza(12)	72	6,7,9,20,141LS
07/10/2004	S	JPI	Alcañiz (2)	8	147
08/10/2004	S	AP	Huesca	71	6,7 LS
08/10/2004	S	JPI	Zaragoza(6)	663	

Fecha	Res.	Trib.	Localidad	Clave	Artículo
11/10/2004	S	JPI	Zaragoza(6)	663	37,38,40 C, 35 LR
15/10/2004	S	JPI	Zaragoza(6)	663	
18/10/2004	S	JPI	Zaragoza(6)	663	
19/10/2004	S	JPI	Zaragoza (14)	8	144.3
22/10/2004	S	JPI	Zaragoza(12)	663	36,48.2 C
22/10/2004	S	JPI	Zaragoza(17)	663	68 y ss LR
26/10/2004	S	AP	Zaragoza	663	65 LR,52.2 C
26/10/2004	S	AP	Zaragoza	663	28.2, 35 LR
28/10/2004	S	JPI	Calamocha(1)	663	62,63,65,79;28LR
02/11/2004	S	AP	Zaragoza	663	52
03/11-2004	S	JPI	Zaragoza(6)	663	
04/11/2004	A	AP	Zaragoza	663	
04/11/2004	S	JPI	Calamocha(1)	68	89,101,107 LR
09/11/2004	S	JPI	Barbastro	663	
09/11/2004	S	AP	Zaragoza	663	79,DT"º
10/11/2004	S	AP	Huesca	663	58 C, 85 y 88 LR
10/11/2004	S	AP	Zaragoza	71	142,1LS
15/11/2004	S	AP	Zaragoza	663	40,41,58,55 C
16/11/2004	S	AP	Huesca	74	143 LS
19/11/2004	S	AP	Zaragoza	8	144
22/11/2004	S	JPI	Zaragoza(6)	663	35,65.2,DTª LR
25/11/2004	S	AP	Zaragoza	663	
30/11/2004	S	AP	Zaragoza	8	47
30/11/2004	S	AP	Zaragoza	8	143 LS
07/12/2004	S	JPI	Zaragoza (17)	8	144, DT ªgª
10/12/2004	S	JPI	Zaragoza(6)	663	35LR,40C,37 y ss
10/12/2004	S	AP	Zaragoza	663	37,38,40,52
13/12/2004	S	JPI	Monzón(2)	663	52,53 LR
13/12/2004	S	AP	Zaragoza	72	78,97C,40,123LS
14/12/2004	S	JPI	Jaca (1)	9	149,150 C
15/12/2004	S	AP	Huesca	8	148
15/12/2004	S	AP	Zaragoza	8	147
15/12/2004	A	AP	Zaragoza	663	
20/12/2004	S	TSJ	Aragón	663	52,58,48
21/12/2004	S	AP	Huesca	8	144
22/12/2004	A	AP	Zaragoza	663	62,68C, 69 LR
22/12/2004	S	JPI	Zaragoza(6)	663	
27/12/2004	S	AP	Zaragoza	663	37,39 C
27/12/2004	S	JPI	Zaragoza (6)	663	
10/01/2005	S	AP	Zaragoza (2ª)	8	144 C
10/01/2005	S	AP	Zaragoza (2ª)	663	81,85 y 86 LR
18/01/2005	S	AP	Huesca	662	88 LR
19/01/2005	S	AP	Huesca	67	68 LR
24/01/2005	S	TSJ	C-A Secc. 2ª	663	28,47 y 56 C
24/01/2005	S	AP	Zaragoza (5ª)	5,661,662	21 LR
25/01/2005	A	AP	Zaragoza (2ª)	72,76	5 y DTIª LS
01/02/2005	S	AP	Zaragoza (2ª)	663	35.2 LR
07/02/2005	S	TSJ	C-A Secc. 2ª	663	47 y 56 C
07/02/2005	S	AP	Zaragoza (4ª)	63	48 C
07/02/2005	S	AP	Teruel	5	1.2 C
08/02/2005	S	AP	Teruel	5	1.2 C
08/02/2005	S	JPI	Zaragoza (2)	9	149 C
14/02/2005	S	AP	Zaragoza (5ª)	5,661,662	3 C,28.2.8 y 33 LR
15/02/2005	S	AP	Teruel	8	144 y 145 C
16/02/2005	S	AP	Huesca	73	78 y 86 LS
17/02/2005	S	AP	Zaragoza (5ª)	5,72	3 C y 28 LS
17/02/2005	S	AP	Zaragoza (5ª)	64	59 y 65 L.12/01

Fecha	Res.	Trib.	Localidad	Clave	Artículo
17/02/2005	S	AP	Zaragoza (5ª)	661	5 y 11 LR
18/02/2005	S	JPI	Zaragoza (14)	0	14Ley Parej.Estables
22/02/2005	S	JPI	Zaragoza (14)	71	34 y 35 LS
23/02/2005	S	TSJ	Aragón (S. Civil)	8	144 C
01/03/2005	S	AP	Zaragoza (2ª)	64	L.9/99 de 26.3
01/03/2005	S	AP	Teruel	8	144 C
03/03/2005	S	AP	Zaragoza (5ª)	8	147 C
04/03/2005	S	AP	Huesca	9	149 C
07/03/2005	S	AP	Zaragoza (5ª)	663	37.4 y 40 C
07/03/2005	S	AP	Zaragoza(5ª)	68,71,663	85,87 C y 119LR
08/03/2005	S	TSJ	Aragón (S. Civil)	68	73, 75 y 79 C
15/03/2005	S	AP	Huesca	8	147C
17/03/2005	S	AP	Zaragoza(5ª)	66,663	62 y 65 LR
18/03/2005	S	AP	Zaragoza (5ª)	663	15 y 35 LR
22/03/2005	S	AP	Zaragoza(5ª)	663	15 y 35 LR
05/04/2005	S	AP	Zaragoza (2ª)	64	Ley 9/99 de 26.3
05/04/2005	S	AP	Teruel	663	80 y 88 LR
13/04/2005	S	AP	Teruel	8	1.3 C y 7.2 Cód.Cv.
15/04/2005	S	AP	Huesca	8	147 C
15/04/2005	S	JPI	Ejea (1)	8	147 C
18/04/2005	S	AP	Huesca	0	31 L.Parej.Estables
04/05/2005	S	AP	Zaragoza (5ª)	72	108 C y 104 LS
11/05/2005	S	TSJ	Aragón (S. Civil)	663	28.2,29.b,29.c,39 LR
12/05/2005	S	AP	Zaragoza(5ª)	8	147 C
16/05/2005	A	JPI	Zaragoza (14)	663	48.3 LR
19/05/2005	S	AP	Huesca	5,663	1.2 C
19/05/2005	A	AP	Zaragoza (4ª)	663	76 y ss LR
20/05/2005	S	AP	Zaragoza (4ª)	5,10, 662	DTIILR y 1.2 C
24/05/2005	S	AP	Huesca	74	144,145,147,148LS
25/05/2005	S	AP	Zaragoza (4ª)	663	38.2 y 38.5 C
27/05/2005	S	JPI	Ejea (2)	8	144 C
01/06/2005	S	TSJ	Aragón (S. Civil)	663	52.2 C y DTII LR
01/06/2005	S	JPI	Zaragoza (14)	8	147C
06/06/2005	S	AP	Zaragoza (4ª)	663	62 LR
08/06/2005	S	AP	Zaragoza (5ª)	8	Dº374/2002 de 17.12
08/06/2005	S	AP	Huesca	10,68	78 C y DT XII
17/06/2005	S	AP	Teruel	8	144 C
20/06/2005	S	TSJ	Aragón (S. Civil)	72	28.2,30.1 y 123 LS
21/06/2005	S	TSJ	Aragón (S. Civil)	73	38, 96, 97 y 99 C
21/06/2005	S	AP	Huesca	8	143 C
28/06/2005	S	AP	Huesca	72	102 LS
01/07/2005	S	AP	Zaragoza (2ª)	663	36.1.c, 36.2 LR
01/07/2005	S	AP	Huesca	67, 663	76 y ss y 68 y ss C
04/07/2005	S	AP	Zaragoza (5ª)	8	147 y 148 C
05/07/2005	S	TSJ	Aragón (S. Civil)	71	142 C
06/07/2005	S	TSJ	Aragón (S. Civil)	8	1.2 y 143 C
08/07/2005	S	TSJ	Aragón (S. Civil)	663	28, 35, DTI, DTII LR
08/07/2005	S	AP	Teruel	5	1 C
19/07/2005	S	JPI	Teruel (2)	8	147 y 148 C
22/07/2005	S	AP	Zaragoza (5ª)	663	5,41 y 42 C
05/09/2005	S	AP	Huesca	8	147 C
15/09/2005	S	AP	Zaragoza (5ª)	8	147 C
21/09/2005	S	AP	Zaragoza (5ª)	663	37.2 C
21/09/2005	S	AP	Huesca	74	124 LS
27/09/2005	S	JPI	Zaragoza (4)	68,71,75	89,92,94 LR 216 LS
30/09/2005	S	TSJ	Aragón (S. Civil)	73	108 y 135 C
10/10/2005	A	AP	Zaragoza (5ª)	75	171,172,175 LS

Fecha	Res.	Trib.	Localidad	Clave	Artículo
11/10/2005	S	AP	Teruel	5	1 C
17/10/2005	S	AP	Huesca	8	144 C
20/10/2005	S	AP	Zaragoza (4ª)	663	37.2, 38.2 y 38.5 C
25/10/2005	S	AP	Teruel	5	3 C
25/10/2005	S	AP	Teruel	5	3 C
26/10/2005	S	AP	Huesca	8	147 C
02/11/2005	S	AP	Teruel	8	144 C
09/11/2005	S	TSJ	Aragón (S. Civil)	663	38.4 C y 5 LS
14/11/2005	S	TSJ	Aragón (S. Civil)	9	149 C
17/11/2005	S	AP	Zaragoza (5ª)	663	28.2.k, 28.2.f , 36 LR
18/11/2005	S	JPI	Alcañiz (2)	8	147 C
18/11/2005	S	JPI	Zaragoza (2)	68	98.3 LR
21/11/2005	S	AP	Zaragoza (5ª)	8	147 C
28/11/2005	S	AP	Huesca	74	141 LS
01/12/2005	S	AP	Teruel	71	48, 58 Apend. 1925
02/12/2005	S	TSJ	Aragón (S. Civil)	68	74 y 76 C
16/12/2005	S	TSJ	Aragón (S. Civil)	8	144 y 145 C
21/12/2005	S	TSJ	Aragón (S. Civil)	68	119.1.f LS
22/12/2005	S	JPI	Zaragoza (17)	10, 71	35, 37 DT IV LS
23/12/2005	S	AP	Huesca	8	147 y 148 C
30/12/2005	S	AP	Zaragoza (5ª)	663	35 y ss LR
11/01/2006	S	AP	Huesca	8	148 C
12/01/2006	S	AP	Huesca	0	22,47 y 80 Ley 9/1998
13/01/2006	S	AP	Zaragoza (5ª)	663	41 C
13/01/2006	S	AP	Huesca	8	14 Apéndice 1925
16/01/2006	S	AP	Zaragoza (4ª)	663	48 Apéndice 1925
18/01/2006	S	AP	Zaragoza (4ª)	64	9 C
23/01/2006	S	AP	Zaragoza (4ª)	71	142 y DT XII C
24/01/2006	A	AP	Zaragoza (2ª)	76	108 C
26/01/2006	S	AP	Huesca	8	145 C
27/01/2006	S	AP	Huesca	72	101 LS
31/01/2006	S	AP	Zaragoza (5ª)	663	30 LR
31/01/2006	S	AP	Huesca	0	22.b Ley 9/1998
01/02/2006	A	AP	Zaragoza (2ª)	71	142 C y 58 LS
01/02/2006	S	AP	Zaragoza (2ª)	663	79 a 81 LR
01/02/2006	A	AP	Zaragoza (2ª)	663	36 LR
02/02/2006	S	AP	Huesca	9	150 C
07/02/2006	S	JPI	Monzón 1	64	9 C
09/02/2006	S	AP	Zaragoza (5ª)	663	38 y 39 C
09/02/2006	S	JPI	Zaragoza 17	75	179 y 194 LS
13/02/2006	S	TSJ	Aragón (S. Civil)	74	125,144.2 y 145 LS
14/02/2006	S	AP	Zaragoza (2ª)	68	84 C, 112 y DT II LR
21/02/2006	A	AP	Zaragoza (2ª)	71	40 a 46 y DTV LS
23/02/2006	S	JPI	Ejea (1)	8	144 y 145 C
27/02/2006	S	TSJ	Aragón (S. Civil)	663	38,40,47 C DTII LR
27/02/2006	S	AP	Teruel	663	52 C
03/03/2006	S	AP	Zaragoza (5ª)	0	7 Ley 6/1999 de 26-03
08/03/2006	S	TSJ	Aragón (S. Civil)	8	147 C
10/03/2006	S	TSJ	Aragón (S. Civil)	71 y 74	136 a 140 y 28 y 30 LS
13/03/2006	S	JPI	Zaragoza (3)	71	40 LS
20/03/2006	S	AP	Zaragoza (5ª)	663	39 C
20/03/2006	S	AP	Huesca	8	144 C
24/03/2006	S	AP	Teruel	8	147 y 148 C
27/03/2006	S	AP	Zaragoza (5ª)	663 y 5	35 y 80 LR
28/03/2006	A	AP	Zaragoza (2ª)	663	41 a 43 LR
29/03/2006	S	AP	Teruel	5	3 C
30/03/2006	S	JPI	Zaragoza 2	72	53 y 141 C

Fecha	Res.	Trib.	Localidad	Clave	Artículo
31/03/2006	S	JPI	Monzón 1	64	15 C
03/04/2006	S	AP	Zaragoza (5ª)	663	80 y 81 LR
05/04/2006	S	AP	Zaragoza (5ª)	663	30,63,80 y 81 LR
05/04/2006	S	AP	Teruel	5	3 C
10/04/2006	S	AP	Teruel	8	147 C
10/04/2006	A	JPI	Monzón (2)	76	201 y 202 LS
21/04/2006	S	AP	Teruel	663	40 y 55 C
25/04/2006	S	AP	Zaragoza (5ª)	0	
25/04/2006	S	AP	Huesca	74	129,144,147 y 148 LS
03/05/2006	S	JPI	Monzón 1	64	9 C
12/05/2006	S	JPI	Zaragoza 14	0	7 Ley Parejas Estables
18/05/2006	S	JPI	Zaragoza 17	72	93,103,105,109 y115 LS
19/05/2006	A	JPI	Zaragoza 14	663	36.1.e y 37.2 LR
19/05/2006	S	JPI	Monzón 1	64	9 C
23/05/2006	S	AP	Huesca	9	149 y 150 C
25/05/2006	S	AP	Zaragoza (5ª)	0	36 y 67 Ley 9/1998
25/05/2006	S	AP	Huesca	8	147 C
25/05/2006	A	JPI	Monzón (2)	76	201 y 202 LS
26/05/2006	S	AP	Zaragoza (5ª)	0	Ley 4/1993 y Dº23/95
31/05/2006	S	AP	Zaragoza (5ª)	663	76 LR
01/06/2006	S	JPI	Zaragoza 14	71	40 LS
06/06/2006	S	JPI	Zaragoza 3	9	149 C
08/06/2006	S	JPI	Monzón 1	64 y 663	9 C y 62.b LR
09/06/2006	S	JPI	Ejea 2	8	147 C
16/06/2006	S	AP	Huesca	663 y 72	56 LS y 44 y 85 LR
23/06/2006	S	JPI	Zaragoza	663	79 LR
27/06/2006	S	AP	Huesca	0	23 Ley Coop. Aragón
30/06/2006	S	AP	Huesca	8	144,145 y 147 C
30/06/2006	S	JPI	Teruel (2)	76	201 y 201 LS
03/07/2006	S	AP	Huesca	8	144 C
03/07/2006	S	AP	Huesca	8	147 y 148 C
04/07/2006	S	JPI	Zaragoza	663	24 y ss LR
10/07/2006	S	JPI	Monzón 1	64	9 C
13/07/2006	S	JPI	Ejea 2	663	76 LR
14/07/2006	S	AP	Zaragoza (4ª)	68	76.2 C y 92 LR
15/07/2006	S	JPI	Barbastro	8	144 C
19/07/2006	S	AP	Teruel	663	53 y 54 LR
25/07/2006	S	JPI	Zaragoza 14	71	128 C
01/09/2006	A	JPI	Monzón (2)	76	201 y 202 LS
05/09/2006	S	AP	Huesca	72	101 LS
08/09/2006	S	AP	Huesca	0	5.3 Ley Parejas Estables
18/09/2006	S	JPI	Barbastro	8	144.3 C
20/09/2006	A	JPI	Monzón (2)	76	201 y 202 LS
20/09/2006	A	JPI	Monzón (2)	76	201 y 202 LS
22/09/2006	S	JPI	Monzón 1	64,663 y 68	9 C, 62 LR y 94 LR
27/09/2006	A	JPI	Zaragoza 16	71	33 LS
27/09/2006	A	JPI	Monzón (2)	76	201 y 202 LS
28/09/2006	A	JPI	Monzón (2)	76	201 y 202 LS
05/10/2006	S	AP	Huesca	68	94 LR
06/10/2006	S	JPI	Zaragoza (2)	72	93,108.2,116 y 164 LS
13/10/2006	S	AP	Huesca	73	108.3 C
20/10/2006	S	TSJ	Aragón (S. Civil)	663	37 y 40 C
23/10/2006	A	AP	Huesca	71	5,216.2 y DTI LS
23/10/2006	S	JPI	Ejea 2	663	76 y ss LR
24/10/2006	S	AP	Teruel	663	38 C
31/10/2006	S	JPI	Monzón 1	72 y 76	123 y 216 LS

Fecha	Res.	Trib.	Localidad	Clave	Artículo
06/11/2006	S	JPI	Zaragoza 17	75	101,113 y 183 LS
08/11/2006	S	TSJ	Aragón (S. Civil)	72	90,101 y 159 LS
08/11/2006	S	AP	Huesca	663	38 y 39 C y DTII LR
08/11/2006	S	JPI	Monzón 2	8	147 y 148 C
16/11/2006	S	AP	Teruel	8	147 C
28/11/2006	S	JPI	Zaragoza 17	71	9 LS
30/11/2006	A	AP	Huesca	663	52 LR
30/11/2006	S	JPI	Zaragoza 17	76	202 y 205 LS
11/12/2006	S	TSJ	Aragón (S. Civil)	663	41.5 C
19/12/2006	S	AP	Huesca	663	56.2 y 73 LR
20/12/2006	S	JPI	Monzón 1	8	145 a 148 C
21/12/2006	S	AP	Huesca	0	36 y 42Ley Coop.Aragón
28/12/2006	S	AP	Huesca	8	147 C
29/12/2006	S	AP	Huesca	8	147 y 148 C
29/12/2006	S	AP	Huesca	8	145 C
29/12/2006	S	JPI	Barbastro	5	2.2 C
9/01/2007	S	TSJA	Aragón (S. Civil)	663	48 Apéndice, 28.4 C
9/01/2007	S	AP	Huesca	0	53.d Ley Coop. Aragón
10/01/2007	S	AP	Teruel	72	101 LS
18/01/2007	A	AP	Huesca	76	217.4 y 218.1 LS
23/01/2007	S	AP	Huesca	663	37.2, 38.1, 39, 44, 83 DTII LREMV
25/01/2007	S	JPI	Zaragoza 3	661	13 y ss LREMV
31/01/2007	S	JPI	Zaragoza 2	9	149 y 150 C
2/02/2007	S	JPI	Zaragoza 17	661	5,7,y 27 LREMV
9/02/2007	S	AP	Huesca	73	162 y 164 LS
13/02/2007	S	AP	Huesca	8	144, 145 y 147 C
19/02/2007	A	AP	Huesca	71	33 LS
19/02/2007	S	JPI	Zaragoza 2	75	179.2, 195 b y c, 194.2 y 198 LS
21/02/2007	S	AP (5ª)	Zaragoza	72	98.2, 100.1 y 108 LS
21/02/2007	S	AP	Huesca	0	3.4 Orden de 15 de noviembre de 1984. Reglamento Accidentes de esquí.
28/02/2007	S	AP	Huesca	8	144.2 y 147 C
9/03/2007	S	AP	Huesca	0	22.a y 32.1 Ley Coop. Aragón
12/03/2007	S	JPI	Teruel 2	663	37 C
13/03/2007	A	AP	Huesca	0	18.3 y 24 Ley Coop. Aragón
13/03/2007	S	AP	Teruel	5	3 C
15/03/2007	S	TSJA	Aragón (S. Civil)	663	1 C y 61.2 LREMV
19/03/2007	S	AP	Huesca	663	13.2 y 62 LREMV
20/03/2007	S	AP	Zaragoza (Sección 2ª)	76	212 LS
20/03/2007	A	JPI	Zaragoza 14	71	36 LS
23/03/2007	S	JPI	Teruel 2	8	1 y 145 C
27/03/2007	A	AP	Zaragoza (Sección 2ª)	68	98.3 LREMV
27/03/2007	S	AP	Zaragoza (Sección 2ª)	663	38.1 , 39.4 y DT II LREMV
27/03/2007	S	AP	Teruel	8	147 y 148 C
27/03/2007	S	JPI	Zaragoza 17	0	Dº 58/2004 de 9 de marzo. Ley Aragonesa de Montes 15/2006
29/03/2007	A	AP	Huesca	76	127 y ss C
30/03/2007	S	AP	Huesca	8	144 C
30/03/2007	S	AP	Huesca	72	93 y 108.2 LS
2/04/2007	A	JPI	Zaragoza 14	663	48.c LREMV
10/04/2007	S	JPI	Zaragoza 17	68	108.2 y 119.1.a LREMV
13/04/2007	S	AP	Zaragoza (Sección 2ª)	663	30 LREMV

Fecha	Res.	Trib.	Localidad	Clave	Artículo
19/04/2007	S	AP	Huesca	71	33 LS
20/04/2007	S	AP	Huesca	661	5 LREMV
2/05/2007	S	AP	Zaragoza (Sección 2ª)	663	47 C
3/05/2007	S	JPI	Ejea 2	8	144 C
8/05/207	S	AP	Teruel	8	147 C
8/05/2007	S	JPI	Zaragoza 14	663	48 LREMV
10/05/2007	S	TSJA	Aragón (S. Civil)	74	DT IV, 36 y 37 LS, 141 C
11/05/2007	S	TSJA	Aragón (S. Civil)	8	147 C
11/05/2007	S	AP	Zaragoza (Sección Cuarta)	71	59 LS
11/05/2007	S	AP	Huesca	64	66.2 Ley Derecho de la Persona
14/05/2007	S	JPI	Zaragoza 14	68	101.1 LREMV y 202.2 LS
15/05/2007	S	AP	Huesca	8	147 C
17/05/2007	S	JPI	Zaragoza 3	68	117 LREMV
21/05/2007	S	AP	Zaragoza (Sección Quinta)	663	48 LREMV
22/05/2007	S	JPI	Zaragoza 14	663	36.1 y 48 LREMV
23/05/2007	S	TSJA	Aragón Sala Civil)	71	141 y 142 C , 5, DT I, II, III, IV, V y VI LS
24 /05/2007	S	JPI	Zaragoza 12	5	1.2 C
25/05/2007	S	JPI	Teruel 2	8	144 C
29/05/2007	S	JPI	Zaragoza 14	68	108.2 LREMV
5/06/2007	S	AP	Zaragoza (Sección Segunda)	0	
5/06/2007	S	JPI	Zaragoza 12	0	14.1 y 15.2 Ley 24/2003 de 26 de diciembre y Dº 80/2004 de 13 de abril
8/06/2007	S	AP	Huesca	8	144 C
19/06/2007	S	AP	Zaragoza (Sección Segunda)	64	Ley 12/2001 de 2 de julio de Infancia y Adolescencia en Aragón
19/06/2007	A	AP	Zaragoza (Sección Segunda)	72	201 LS
25/06/2007	S	TSJA	Aragón (S. Civil)	76	216.1 LS y 3 C
26/06/2007	S	AP	Zaragoza (Sección 2ª)	663	28.2.c y 80 LREMV
2/07/2007	S	AP	Zaragoza (Sección 5ª)	663	29 y 44 LREMV
11/07/2007	S	AP	Huesca	8	147 C
19/97/2007	S	JPI	Zaragoza 12	72	1.2 C y 108 LS
27/07/2007	S	JPI	Monzón 2	64	9 C
30/07/2007	S	AP	Huesca	9	150 C
31/07/2007	S	AP	Huesca	0	5 LREMV y 7 Ley 39/1999 Reguladora de Parejas Estables
31/07/2007	S	JPI	Alcañiz 2	8	144 C
6/09/2007	S	AP	Huesca	663	68.a LREMV
11/09/2007	S	JPI	Monzón 2	8	147 C
12/09/2007	S	JPI	Zaragoza 17	663	38 C y 29.1 LREMV
19/09/2007	S	AP	Teruel	8	144 C
24/09/2007	S	JPI	Calamocha	8	148 C
26/09/2007	S	TSJA	Aragón (S. Civil)	661	37.1 C
28/09/2007	A	TSJA	Aragón (S. Civil)	661	37.1 C
27/09/2007	S	TSJA	Aragón (S. Civil)	8	145 C
28/09/2007	S	TSJA	Aragón (S. Civil)	663	47, 55, 56.1, 38.1, 38.2, 39.6, 83 y

Fecha	Res.	Trib.	Localidad	Clave	Artículo
					DTI LREMV
28/09/2007	S	JPI	Zaragoza 12	72	41,44 LS. 38.7 y 67 C
1/10/2007	S	TSJA	Aragón (S. Civil)	76	212 LS
4/010/2007	S	JPI	Monzón	64	Ley Derecho de la Persona
10/10/207	S	JPI	Teruel 2	71	108.3 C, 202.2, 216.2 y 39 LS
11/10/2007	S	AP	Huesca	0	22.4 Ley 21/1998 de 12 de marzo Colegios Profesionales de Aragón
19/10/2007	S	JPI	Zaragoza 4	9	149 C
23/10/2007	S	AP	Teruel	8	144.2, 144.3 y 147 C
24/10/2007	S	AP	Huesca	8	145 C
25/10/2007	S	AP	Huesca	64	55.2 Ley Derecho de la Persona
29/10/2007	S	AP	Huesca	663	62.b, 68, 28, 35 LREMV
15/11/2007	S	AP	Teruel	76	DTI y 5.1 LS , 133 C
20/11/2007	S	AP	Zaragoza (Sección 5ª)	0	14.1, 3º, 15 y 44 Ley 24/2003 de 26 de diciembre de Medidas Urgentes de Política de Vivienda protegida
26/11/2007	S	TSJA	Aragón (S. Civil)	663	DT II LREMV y 1380 Código Civil
26/11/2007	S	JPI	Calatayud 2	663	65 C, 80 y 81 LREMV
27/11/07	S	JPI	Daroca	8	147 C
27/11/2007	S	JPI	Monzón 2	8	144 C
28/11/2007	S	JPI	Zaragoza 12	72	101 LS
28/11/2007	S	JPI	Zaragoza 17	72	109, 161 y 206 LS
30/11/2007	S	AP	Zaragoza (Sección 5ª)	8	147 C
10/12/20007	S	AP	Zaragoza (Sección 4ª)	8	145 C
10/12/2007	A	JPI	Zaragoza 14	6	120, 122 y 128 Ley Derecho de la Persona
10/12/2007	S	JPI	Ejea 2	8	144 C
13/12/2007	S	AP	Teruel	8	144 C
18/12/2007	S	AP	Teruel	661	28.2 y 28.2 c LREMV
26/12/2007	S	AP	Huesca	8	145, 144 y 147 C
28/12/2007	S	AP	Huesca		30 y 4 Ley 8 /1997 del Estatuto del Consumidor y el Usuario
8/01/2008	S	JPI	Zaragoza (14)	9	149 y 150 C
9/01/2008	S	AP	Huesca	0	Dº141/1989 Gob. Aragón
10/01/2008	S	AP	Zaragoza (5)	64	66 LDP
14/01/2008	S	AP	Huesca	8	147 C
14/01/2008	S	AP	Huesca	8	144 y 145 C
16/01/2008	S	JPI	Zaragoza (6)	663	35,40 C 65 y 64 LREMVL
21/01/2008	S	AP	Zaragoza(5)	72	109 y 139 LS
21/01/2008	S	JPI	Zaragoza (5)	663	35, 40 C, 64 y 65 LREMV
23/01/2008	S	TSJ	Aragón	8	144 y 145 C
25/01/2008	S	AP	Zaragoza (4)	71	58, 59 y 208 LS
28/01/2008	S	JPI	Zaragoza (6)	663	35,40 C 65 y 64 LREMVL
28/01/2008	S	JPI	Zaragoza (6)	72	97 C
29/01/2008	S	AP	Teruel	76	135 C y 34,35 y 39 LS
30/01/2008	S	TSJ	Aragón	75	171,174,184,183 y113 LS
30/01/2008	S	AP	Zaragoza (4)	8	144 C
31/01/2008	S	AP	Huesca	663	53 LREMV
6/02/2008	S	AP	Zaragoza (2)	62	
6/02/2008	A	AP	Zaragoza (2)	62	33 LDP
6/02/2008	A	AP	Huesca	661	3 LERMV
19/02/2008	A	AP	Huesca	73	80.3, 104 y 216.2 LS
20/02/2008	S	JPI	Zaragoza (6)	663	35,64,65 LREMV
22/07/2008	S	AP	Teruel	8	144.3 C

Fecha	Res.	Trib.	Localidad	Clave	Artículo
25/02/2008	S	JPI	Zaragoza (6)	72	90,98 y 99 . 108LS.
26/02/2008	S	AP	Zaragoza (2)	64	66 LDP
28/02/2008	S	JPI	Zaragoza (12)	71	142 C
29/02/2008	S	AP	Huesca	663	52.2 y 56 C y 80 LREMV
6/03/2008	S	JPI	Alcañiz (2)	62	35,39 y 41 LDP
10/03/2008	S	AP	Huesca	0	22 Ley 2/1998 de 12-3 Coleg.Profes. Aragón
12/03/2008	A	AP	Huesca	62	33 LDP
13/03/2008	S	AP	Zaragoza (4)	71	108 C y 35 LERMV
13/03/2008	S	AP	Huesca	8	147 C
19/03/2008	S	AP	Zaragoza (2)	62	55 y 56 LDP
26/03/2008	S	AP	Huesca	0	22 Ley 2/1998 de 12-3 Coleg.Profes. Aragón
27/03/2008	S	AP	Huesca	661	12,16,86 LERMV
28/03/2008	S	AP	Huesca	8	144 C
28/03/2008	S	AP	Huesca	76	132,133,137,135 y 141 C
31/03/2008	S	JPI	Zaragoza (6)	663	47 C
31/03/2008	S	JPI	Zaragoza (6)	663	47 C
2/04/2008	S	JPI	La Almunia (1)	76	101, 211 y 213 LS
2/04/2008	S	JPI	Alcañiz (2)	62	35,39 y 41 LDP
7/04/2008	S	AP	Teruel	8	144 C
8/04/2008	S	AP	Zaragoza (2)	75	90 ,180 y 171 LS
9/04/2008	S	JPI	Alcañiz (2)	62	35,39 y 41 LDP
11/04/2008	S	JPI	La Almunia (1)	663	29, 37.2, 37.4 y 40 C
15/04/2008	S	AP	Zaragoza (2)	62	111 y 112 LDP
15/04/2008	S	AP	Zaragoza (2)	62	111 y 112 LDP
18/04/2008	S	AP	Huesca	8	144 C
21/04/2008	S	JPI	Alcañiz (2)	8	144 C
22/04/2008	S	TSJ	Aragón	8	144,145 y 148 C
22/04/2008	S	AP	Zaragoza (2)	64	66 LDP
25/04/2008	S	JPI	Zaragoza (6)	663	
29/04/2008	S	JPI	Zaragoza (6)	663	40, 65.2 LREMV y 47 C
30/04/2008	S	AP	Zaragoza (2)	663	28.2 y 65 LREMV
30/04/2008	S	AP	Zaragoza (2)	64	62 LDP
8/05/2008	S	JPI	Zaragoza (14)	663	36.1, 36.2 ,37.1, 44 LREMV
8/05/2008	S	JPI	Alcañiz (2)	62	35,39 y 41 LDP
12/05/2008	S	TSJ	Aragón	64	5.3 Ley 6/1999 de 26-3
12/05/2008	S	JPI	Zaragoza (6)	663	
13/05/2008	S	AP	Huesca	64	57 y 61 LDP
13/05/2008	S	AP	Zaragoza (2)	64	62 LDP
15/05/2008	S	AP	Huesca	8	147 C
20/05/2008	S	AP	Zaragoza (2)	64	62 LDP
20/05/2008	A	AP	Zaragoza (2)	663	76 LREMV
30/05/2008	S	AP	Zaragoza (5)	72	95, 97, 101 y 108 LS
10/06/2008	S	TSJ	Aragón	0	14,15 y 31 Ley 24/2003
10/06/2008	S	AP	Zaragoza (2)	64	146 LDP
10/06/2008	S	AP	Zaragoza (2)	64	62 LDP
10/06/2008	S	AP	Zaragoza (2)	663	4 LREMV
16/06/2008	A	AP	Huesca	76	135 C
16/06/2008	S	AP	Huesca	75	106 C y 177 y DT III, II y IX LS. 147 y 148 LS
17/06/2008	S	AP	Zaragoza (2)	64	62 LDP
17/06/2008	S	AP	Zaragoza (2)	64	62 y 66 LDP
20/06/2008	S	JPI	ALcañiz (2)	62	35,39 y 41 LDP
24/06/2008	S	AP	Zaragoza (2)	64	62 LDP
24/06/2008	S	AP	Zaragoza (2)	663	
24/06/2008	S	AP	Zaragoza (5)	0	Ley 5/1999 Urbanística de Aragón

Fecha	Res.	Trib.	Localidad	Clave	Artículo
24/06/2008	S	AP	Huesca	8	144 C
24/06/2008	S	AP	Teruel	663	35 LREMV y 48 Apéndice
30/06/2008	S	AP	Huesca	8	147 C
30/06/2008	A	AP	Huesca	661	3 LREMV
1/07/2008	S	AP	Zaragoza (2)	663	28.2, 68, 76 y ss LREMV
3/07/2008	A	JPI	Zaragoza (6)	71	40, 76 LS
8/07/2008	S	AP	Zaragoza (2)	663	80 LREMV
8/07/2008	S	AP	Zaragoza (2)	64	62 LDP
9/07/2008	S	JPI	Zaragoza (6)	663	24 LREMV y 40 C
9/07/2008	S	JPI	Zaragoza (6)	663	38,44 y 83 LREMV
10/07/2008	S	AP	Teruel	8	147 C
10/07/2008	S	JPI	Zaragoza (16)	663	
14/07/2008	S	TSJ	Aragón	8	144,145 y 147 C
14/07/2008	S	JPI	Zaragoza (6)	663	
15/07/2008	S	AP	Zaragoza (5)	8	144 y 145 C
16/07/2008	S	AP	Zaragoza (2)	64	62 LDP
18/07/2008	S	JPI	Zaragoza (6)	663	
22/07/2008	S	AP	Zaragoza (2)	663	80 y 81 LREMV
22/07/2008	S	AP	Zaragoza (2)	64	20, 66,62 y 68 LDP
23/07/2008	S	TSJ	Aragón	75	171 LS y 101 LREMV
25/07/2008	S	AP	Zaragoza (2)	64	62 LDP
25/07/2008	S	JPI	Zaragoza (6)	663	38,41 y 47 C y 30 LREMV
28/07/2008	S	JPI	La Almunia (1)	8	144 C
29/07/2008	S	AP	Zaragoza (2)	62	112 LDP
29/07/2008	S	AP	Zaragoza (2)	64	59 Ley 12/2001 de 2 julio
31/07/2008	S	AP	Huesca	8	144 C
31/07/2008	S	AP	Huesca	0	25 y 26 Ley 7/1999 9 abril
8/09/2008	S	JPI	Zaragoza (14)	72	188, 189 y 190 LS
12/09/2008	S	JPI	Zaragoza (6)	663	44 LREMV y 47 C
18/09/2008	S	TSJ	Aragón	68	202,204,214 LS y 101.4 LREMV
23/09/2008	S	AP	Huesca	5	3 C
23/09/2008	S	JPI	Alcañiz (2)	5	3 C
26/09/2008	S	AP	Huesca	9	150 C
26/09/2008	S	JPI	Zaragoza (6)	663	
30/09/2008	S	AP	Huesca	663	33 y 44 LREMV
2/10/2008	S	AP	Huesca	8	143 C
8/10/2008	S	JPI	Zaragoza (6)	663	29 C y 28.2.b LREMV
9/10/2008	S	AP	Huesca	8	147 C
14/10/2008	S	JPI	Zaragoza (6)	663	40C, 35,64,65 LREMV
14/10/2008	S	JPI	La Almunia (1)	8	144 C
16/10/2008	S	AP	Teruel	8	144 C
20/10/2008	S	AP	Huesca	74	129, 133, 147, 148, 144, DT III y DT IX LS
4/11/2008	A	AP	Zaragoza (2)	64	62 y 68 LDP
4/11/2008	A	JPI	Zaragoza (14)	663	28, 36, 37y 86 LREMV
5/11/2008	S	JPI	Zaragoza (6)	663	45, 64 LREMV
12/11/2008	S	JPI	Alcañiz	62	35, 39 y 41 LDP
17/11/2008	S	AP	Huesca	663	28, 29, 44 LREMV
19/11/2008	S	JPI	Zaragoza (6)	663	
21/11/2008	S	AP	Zaragoza (5)	0	Ley 6/1999 de 26 marzo
25/11/2008	A	AP	Zaragoza (2)	64	61 y 62 LDP
1/12/2008	S	TSJ	Aragón	73	108.3 C DTI LS
3/12/2008	S	JPI	Zaragoza (6)	663	40 C, 64 y 65 LREMV
10/12/2008	S	JPI	Zaragoza (6)	663	40 C, 64 y 65 LREMV
16/12/2008	S	AP	Zaragoza (2)	64	62 LDP
19/12/2008	S	AP	Huesca	663	86 y 88 LREMV
9/01/2009	S	AP	Teruel	71	5.1 y 216 LS

Fecha	Res.	Trib.	Localidad	Clave	Artículo
09/01/2009	S	JPI	Zaragoza (6)	663	40 C
13/01/2009	S	AP	Huesca	64	62 LDP
18/01/2009	S	JPI	La Almunia (2)	62 y 71	24,29,38,39,44,103,DTi, DTII LREMV
22/01/2009	S	AP	Zaragoza (5ª)	73	99C
23/01/2009	S	AP	Zaragoza (4ª)	663	DTII LREMV
27/01/2009	S	AP	Zaragoza (2ª)	662	1396 C.Cv.
28/91/2009	S	AP	Huesca	64	57 LDP
29/01/2009	S	AP	Teruel	663	38 C
03/02/2009	S	JPI	Zaragoza (6)	663	
04/02/2009	S	TSJA	Sala Civil	8	144,145 y 147 C
04/02/2009	S	JPI	Zaragoza (6)	64	62 LDP
05/02/2009	S	JPI	Zaragoza (6)	663	
06/02/2009	S	JPI	Zaragoza (6)	64	68 LDP
13/02/2009	S	AP	Zaragoza (4)	8	147 y 148 C
17/02/2009	S	AP	Huesca	64	56 LDP
20/02/2009	S	AP	Teruel	663	108.3 C y 216 LS
20/02/2009	S	JPI	Ejea (1)	8	144 y 145 C
24/02/2009	S	AP	Teruel	8	144 C
26/02/2009	S	TSJA	Sala Civil	72	3,9, 101 y 103 LS
26/02/2009	A	JPI	Huesca (2)	76	217 LS
27/02/2009	S	JPI	Ejea (1)	8	147 C
03/03/2009	A	AP	Zaragoza (2)	64	7 y 71 LDP
03/03/2009	S	AP	Zaragoza (2)	663	62 LREMV
10/03/2009	S	TSJA	Sala de lo Civil	71	58,59,202 y 213 LS,142 C
10/03/2009	S	AP	Teruel	663	40 C
11/03/2009	S	AP	Zaragoza	64	57 y 62 LDP
13/03/2009	S	JPI	Ejea (1)	62	35 LDP
18/03/2009	S	AP	Huesca	8	147 C
19/03/2009	S	TSJA	Sala de lo Civil	64	69,71,77,78 y 79 LDP
19/03/2009	A	JPI	Huesca (2)	76	216 LS
25/03/2009	S	JPI	Huesca (2)	663	35 LREMV
26/03/2009	S	AP	Huesca	0	18 Ley Col. Profs. Aragón.
31/03/2009	S	AP	Zaragoza (2)	64	57 y 61 LDP
01/04/2009	S	JPI	Zaragoza (6)	64	68 LDP
03/04/2009	S	AP	Huesca	663	36,44,80, 83, 84 LREMV
03/04/2009	S	JPI	Zaragoza (6)	64	68 LDP
08/04/2009	S	JPI	Zaragoza (3)	75	174,182,183,184,186 LS
08/04/2009	S	JPI	Ejea (1)	62	35 LDP
08/04/2009	S	JPI	Ejea (1)	62	35 LDP
13/04/2009	S	JPI	Ejea (1)	62	35 LDP
13/04/2009	S	JPI	Ejea (1)	62	35 LDP
20/04/2009	A	JPI	Huesca (2)	76	217 LS
22/04/2009	A	JPI	Huesca (2)	62	34, 111 LDP y 15 L Salud
24/04/2009	S	AP	Huesca	64	62 LDP
28/04/2009	S	AP	Zaragoza (4)	68	83 C y 108 LS
30/04/2009	S	AP	Teruel	8	144 C
05/05/2009	S	JPI	Zaragoza (6)	64	
06/05/2009	S	AP	Huesca	8	147 C
06/05/2009	S	AP	Huesca (2)	663	62 LREMV
06/05/2009	S	AP	Zaragoza (2)	64	57 y 62 LDP
06/05/2009	S	JPI	Zaragoza (6)	64	
07/05/2009	S	AP	Teruel	8	147 y 148 C
07/05/2009	S	JPI	Zaragoza (6)	661	
12/05/2009	A	AP	Zaragoza (2)	64	57 y 61 LDP
12/05/2009	S	JPI	Ejea (1)	9	71 bis Ley Caza Aragón
13/05/2009	S	JPI	Ejea (1)	9	71 bis Ley Caza Aragón

Fecha	Res.	Trib.	Localidad	Clave	Artículo
14/05/2009	S	AP	Teruel	5	3 C
20/05/2009	A	JPI	Huesca (2)	76	217 C
26/05/2009	S	AP	Huesca	663	76 LREMV
28/05/2009	S	JPI	Ejea (1)	64	60 LDP
08/06/2009	S	AP	Zaragoza (4)	75	47, 49, 71,174,176 LS
09/06/2009	S	AP	Zaragoza (2)	663	28,29,62,77 y 80 LREMV
12/06/2009	S	JPI	Ejea (1)	8	147 C
15/06/2009	S	AP	Zaragoza(5)	663	34 C
22/06/2009	S	TSJA	Sala de lo Civil	76	216,DTI LS, 108, DT XII C
30/06/2009	S	AP	Zaragoza (2)	663	8,44 y 68 LREMV
30/06/2009	S	AP	Huesca	0	71 bis Ley Caza Aragón
03/07/2009	S	AP	Zaragoza (2)	64	68 LDP
06/07/2009	S	JPI	Zaragoza (3)	68	
07/07/2009	S	AP	Zaragoza (2)	663	76 LREMV
09/07/2009	A	JPI	Huesca (2)	76	217 LS
14/07/2009	S	TSJA	Sala de lo Civil	663	37,41,42,48,49,59 LRMV
14/07/2009	S	JPI	Ejea (1)	62	35 LDP
15/07/2009	S	AP	Zaragoza (4)	663	51 C
17/07/2009	S	AP	Huesca	9	149 C
20/07/2009	S	JPI	Ejea (1)	9	71 bis Ley Caza Aragón
20/07/2009	S	JPI	Ejea (1)	9	71 bis Ley Caza Aragón
31/07/2009	S	AP	Huesca	71	
02/09/2009	S	TSJA	Sala de lo Civil	64	66 LDP
03/09/2009	S	JPI	Zaragoza (3)	663	28 LREMV
08/09/2009	S	JPI	Zaragoza (6)	661	
08/09/2009	S	JPI	Zaragoza (6)	663	
09/09/2009	S	JPI	Zaragoza (6)	663	
11/09/2009	S	AP	Huesca	64	
11/09/2009	S	AP	Teruel	8	144 C
14/09/2009	S	AP	Zaragoza (4)	0	71 bis Ley Caza Aragón
15/09/2009	S	AP	Teruel	8	144 C
15/09/2009	S	JPI	Huesca (2)	662	25 a 35 C
18/09/2009	S	AP	Huesca	64	59 y 62 LDP
21/09/2009	S	AP	Zaragoza (4)	68	89 y 94 LREMV
23/09/2009	S	AP	Huesca	8	147 C
24/09/2009	S	JPI	Daroca	663	36 LREMV
29/09/2009	S	AP	Zaragoza (2)	663	76 LREMV
29/09/2009	S	AP	Zaragoza (2)	64	62 LDP
30/09/2009	S	AP	Huesca	8	144 C
05/10/2009	S	TSJA	Sala de lo Civil	72	98 y 108 LS
06/10/2009	A	AP	Zaragoza (2)	64	56 LDP
08/10/2009	S	AP	Zaragoza (4)	8	144 y 145 C
15/10/2009	S	AP	Huesca	663	36 y 37 LREMV
19/10/2009	S	AP	Teruel	8	147 C
20/10/2009	S	JPI	Zaragoza (3)	72	31 LDP, 200,209,213 LS
20/10/2009	S	AP	Zaragoza (5)	663	54,28.102,103.47 LREMV
21/10/2009	S	AP	Huesca	8	147 C
23/10/2009	S	AP	Zaragoza (4)	663	38,47 C,29, 44 LREMV
23/10/2009	S	AP	Huesca	64	62 LDP
28/10/2009	S	AP	Huesca	64	57 LDP
28/10/2009	S	JPI	Huesca (2)	0	31, DAV Ley 2/2009 11-5.
12/11/2009	A	JPI	Huesca (2)	76	217 C
16/11/2009	S	AP	Huesca	8	147 C
17/11/2009	S	AP	Zaragoza (5)	68	83.2 C
18/11/2009	S	TSJA	Sala de lo Civil	68	101,108,117 LREMV
18/11/2009	S	AP	Huesca	8	147 y 148 C
19/11/2009	S	AP	Zaragoza (4)	0	71 bis Ley Caza Aragón

Fecha	Res.	Trib.	Localidad	Clave	Artículo
24/11/2009	S	AP	Zaragoza (2)	64	56 LDP
24/11/2009	S	JPI	Ejea (1)	9	71 bis Ley Caza Aragón
25/11/2009	S	TSJA	Sala de lo Civil	8	147 C
30/11/2009	S	TSJA	Sala de lo Civil	8	144.2 C
01/12/2009	S	TSJA	Sala de lo Civil	8	147 C
01/12/2009	S	AP	Zaragoza (2)	73	102 C,73 LS
04/12/2009	S	AP	Zaragoza (4)	8	147 C
17/12/2009	S	AP	Zaragoza (4)	0	71 bis Ley Caza Aragón
21/12/2009	S	AP	Zaragoza (4)	663	55,47,29 C, 80,33 LREMV
23/12/2009	S	AP	Zaragoza (4)	0	71 bis Ley Caza Aragón
No consta	A	JPI	Huesca (2)	76	217 LS
No consta	A	JPI	Huesca (2)	76	217 LS
No consta	S	JPI	Calatayud (2)	8	144, 145 C
04/01/2010	S	TSJ	Zaragoza	665	104 LDP, 56 y 59 Ley 12/2001, 2 de julio
15/01/2010	S	AP	Zaragoza (5)	73	202 LS
19/01/2010	S	AP	Zaragoza (2)	663	65.2 y 81b) LREMV
26/01/2010	S	AP	Zaragoza (2)	663	41 C y 36 LREMV
29/01/2010	A	JPI	Huesca (2)	61	12 y 14 Ley Salud, 8 y 9 Ley autonomia paciente
02/02/2010	S	AP	Teruel	8	144 C
12/02/2010	S	AP	Huesca	0	43.3 Ley Cooperativas A
15/02/2010	S	JPI	Zaragoza (14)	0	1, 9 y 18 Ley 6/1999, de 26 marzo
19/02/2010	S	AP	Zaragoza (4)	663	38 y 40 C
19/02/2010	S	AP	Zaragoza (5)	0	2, 17 a 21 y 36 Ley 2/1998, Cooperativas
23/02/2010	S	AP	Zaragoza (2)	663	62 y 65 LREMV
26/02/2010	S	AP	Zaragoza (5)	9	33, 43 y 71 Ley 5/2002, de Caza
02/03/2010	S	AP	Zaragoza	663	47 C
02/03/2010	A	AP	Zaragoza (2)	76	217.4 LS
03/03/2010	S	AP	Zaragoza (2)	64	68 LP y 146 CC
10/03/2010	S	AP	Zaragoza (2)	8	147 C
10/03/2010	S	AP	Zaragoza (2)	9	71 bis y 44.4 Ley 5/2002, de Caza
16/03/2010	S	JPI	Zaragoza (14)	663	3 C, 525 CC
17/03/2010	S	AP	Teruel	5	3 C
25/03/2010	S	AP	Huesca	64	7 y 57 LP, 90, 92 a 94 CC, Ley 6/1999, 26 marzo
26/03/2010	S	AP	Huesca	64	7, 57 y 62 LP
26/03/2010	S	JPI	Zaragoza (19)	62	5 y 12 C
30/03/2010	S	AP	Zaragoza (2)	663	LREMV
05/04/2010	S	AP	Zaragoza (5)	8	144 C
06/04/2010	S	AP	Zaragoza (5)	8	144 C, 7 CC
08/04/2010	S	AP	Zaragoza (2)	65	90, 95 y 100 a 102 LP
14/04/2010	S	AP	Huesca	73	70 LS
16/04/2010	A	TSJ	Zaragoza	663	36 LREMV
16/04/2010	A	TSJ	Zaragoza	663	28 d) y f), 30 b) y c) LREMV
21/04/2010	A	AP	Zaragoza (4)	72	80.3 LS
22/04/2010	S	AP	Zaragoza	65	LP, Ley 12/2001 Infancia y Adolescencia, 177.2, 2º CC
22/04/2010	S	AP	Zaragoza (4)	8	144 y 145 C, 594 CC
29/04/2010	S	AP	Zaragoza	663	37.4, 38.1, 40.1 y 47.1 C, Dis. Transitoria 2ª LREMV
30/04/2010	S	JPI	Boltaña	8	147 C, 564 CC
04/05/2010	S	AP	Zaragoza (2)	64	57.1, 61 y 62 C y 146 y 148 CC
04/05/2010	S	AP	Zaragoza (2)	64	68 LP y 146 CC
04/05/2010	S	AP	Zaragoza (2)	64	68 LP y 90 a 93 CC
11/05/2010	S	AP	Zaragoza (2)	65	102 y 120 LP, 236 CC

Fecha	Res.	Trib.	Localidad	Clave	Artículo
11/05/2010	S	AP	Zaragoza (5)	0	7 Ley 6/1999, 26 de marzo
11/05/2010	S	AP	Huesca	663	29 H y 44.5 LREMV
12/05/2010	S	TSJ	Zaragoza	64	66 LP
14/05/2010	S	TSJ	Zaragoza	663	28.2 i) LREMV
14/05/2010	A	TSJ	Zaragoza	663	37 y 38 C y 62, 64 a 66 y 68 LREMV
27/05/2010	S	AP	Zaragoza (2)	64	62.1b) LP, 146 CC
01/06/2010	S	AP	Zaragoza	663	3, 29 y 47 C y 33.2 y 44 LREMV
01/06/2010	A	AP	Zaragoza (2)	65	LP
04/06/2010	S	AP	Zaragoza (2)	64	60 LP, 146 CC
04/06/2010	S	AP	Zaragoza (4)	8	148 C
07/06/2010	S	JPI	Boltaña	8	144 y 147 C, 581, 1902 y 1968.2 CC
08/06/2010	S	AP	Zaragoza (5)	8	348 y 1959 CC
10/06/2010	S	TSJ	Zaragoza	74	28,89,71 y 101 LREMV, 6,133,162 y 163 LS
10/06/2010	A	AP	Zaragoza (4)	663	70 y 72 LREMV, 541 LEC
15/06/2010	A	AP	Zaragoza (2)	64	69 a 78 LP
16/06/2010	S	AP	Teruel	8	144 y 145 C
16/06/2010	A	AP	Zaragoza (2)	65	102 LP, 234 CC
18/06/2010	S	TSJ	Zaragoza	8	147 C, 532 CC
22/06/2010	S	AP	Zaragoza (2)	65	177.2 CC
22/06/2010	S	AP	Zaragoza (2)	64	62 C, 142 CC
22/06/2010	S	AP	Zaragoza (2)	64	93.2 CC
24/06/2010	S	AP	Huesca	663	31.1 y 35.2 LREMV
06/07/2010	A	AP	Zaragoza (2)	64	7 LP
06/07/2010	S	AP	Huesca	73	73 LS, 19 LREMV y 1959 CC
09/07/2010	S	AP	Teruel	8	147 y 148 C
09/07/2010	S	AP	Teruel	8	147 C
09/07/2010	S	JPI	Boltaña	62	35, 101 y ss LP
12/07/2010	A	TSJ	Zaragoza	665	56 y 59 Ley 12/2001, 2 de julio
13/07/2010	S	AP	Zaragoza (2)	64	68 LP
20/07/2010	S	AP	Zaragoza (2)	65	35.2 y 102 LP
23/07/2010	S	AP	Zaragoza (2)	64	LP, 90,91 y 100 CC
23/07/2010	S	AP	Zaragoza (2)	64	LP, Ley 12/2001, 90,91 y 100 y 146 CC
23/07/2010	S	AP	Zaragoza (2)	64	LP, Ley 12/2001, 93, 146 y 154 CC
23/07/2010	S	AP	Huesca	64	56 y 77 LP
30/07/2010	S	AP	Huesca	65	95,96,98,101,102,120 y 121 LP
01/09/2010	S	TSJ	Zaragoza	9	71 LCaza
02/09/2010	S	AP	Huesca	9	47.4 y 71bis LCaza
03/09/2010	S	AP	Huesca	61	35.2 y 3 LP
10/09/2010	S	AP	Huesca	8	144 y 145 C
13/09/2010	S	TSJ	Zaragoza	0	2,17 a 21 y 36 Ley 2/1998, Cooperativas
15/09/2010	S	AP	Zaragoza (2)	663	81 LREMV
21/09/2010	S	JPI	Zaragoza (6)	64	Ley 2/2010, 26 de mayo
23/09/2010	S	TSJ	Zaragoza	8	144, 145, 147 y 148 C
30/09/2010	S	JPI	Boltaña	62	35 y 102 LP
04/10/2010	A	TSJ	Zaragoza	665	55, 56, 60, 77 y 79 LDP, 21,26 y 59 Ley 12/2001, 2 de julio
05/10/2010	A	AP	Zaragoza (2)	64	7.1, 62.1c) y 71 LP, 27 Constitución y 21 L.O. 7/1980, libertad religiosa
11/10/2010	S	AP	Zaragoza (2)	64	66 LP
25/10/2010	S	JPI	Boltaña	64	91 CC, Ley 2/2010, 26 mayo

Fecha	Res.	Trib.	Localidad	Clave	Artículo
26/10/2010	S	JPI	Zaragoza (9)	74	141 C, 1101 CC
03/11/2010	S	AP	Zaragoza (2)	64	LP, Ley 12/2001, 90, 91 y 100 CC
03/11/2010	A	AP	Zaragoza (2)	65	LP y Ley 12/2001
03/11/2010	S	AP	Zaragoza (2)	64	60 LP y 146 CC
03/11/2010	S	AP	Zaragoza (2)	663	41 y D.T 2ª LREMV
12/11/2010	A	TSJ	Zaragoza	61	35.2 LP
16/11/2010	S	AP	Zaragoza (2)	663	47 C, 28 y 30 LREMV
16/11/2010	S	AP	Zaragoza (2)	663	65 LREMV
23/11/2010	S	AP	Zaragoza (2)	64	21, 56 y 59 LP
24/11/2010	A	TSJ	Zaragoza	9	71 LCaza
30/11/2010	S	AP	Zaragoza (2)	64	DT 2ª Ley 2/2010, 62 LP
03/12/2010	S	TSJ	Zaragoza	663	37 C, 6, 7 y 28 LS, 38 y 40 LH
03/12/2010	S	AP	Zaragoza (4)	73	62, 65 c), 69.2, 71 b), 82 y 83 LS, 3 C
09/12/2010	S	AP	Zaragoza	65	139 y ss LP, 158 y 295CC
09/12/2010	S	AP	Zaragoza (2)	64	66 LP
16/12/2010	S	AP	Zaragoza (2)	64	62 y ss LP
21/12/2010	S	AP	Zaragoza (2)	663	38 y 39 C
30/12/2010	S	AP	Zaragoza (4)	62	5 y 12 C
No consta	S	JPI	Huesca (2)	9	71.1 y 4 Ley Caza
No consta	S	JPI	Huesca (2)	9	71 y 71 bis Ley Caza
No consta	S	JPI	Fraga	9	71.1 y 4 Ley Caza
No consta	A	JPI	Huesca (2)	76	217 LS
No consta	A	JPI	Huesca (2)	76	217 LS
No consta	A	JPI	Huesca (2)	76	217 LS
No consta	A	JPI	Huesca (2)	76	217 LS
03/01/2011	S	AP	Zaragoza (2)	64	Ley 12/2001, 2 julio, LP
03/01/2011	A	AP	Zaragoza (2)	8	144 C
10/01/2011	S	AP	Teruel	8	147 C
11/01/2011	S	AP	Teruel	64	6 Ley 2/2010, 26 mayo
12/01/2011	S	AP	Huesca	64	6.4 Ley 2/2010, 26 mayo
19/01/2011	S	AP	Zaragoza (4)	8	1, 9 y 13 Ley 8/2010, 2 diciembre
19/01/2011	S	AP	Huesca	0	7 Ley 6/1999
27/01/2011	S	TSJ	Sala de lo Civil	74	Apéndice 1925, Compilación 1967, 1940 y ss CC
27/01/2011	S	AP	Huesca	0	20 Ley 22/12/98 Cooperativas
31/01/2011	A	TSJ	Zaragoza	65	LP, Ley 12/2001, 2 julio
31/01/2011	S	AP	Huesca	9	47.4 y 71bis Ley 5/2002, Caza
01/02/2011	S	AP	Zaragoza (2)	663	28.2, 65 y 68a) LREMV
01/02/2011	S	AP	Zaragoza (2)	663	84 LREMV
08/02/2011	S	AP	Zaragoza (2)	64	62 y ss. LP
10/02/2011	S	JPI	Ejea (1)	64	Ley 2/2010, 26 mayo
22/02/2011	S	AP	Zaragoza (2)	64	60 y 62 LP
23/02/2011	S	AP	Huesca	73	164 a 166 LP, 86b LS
28/02/2011	S	AP	Huesca	8	16,32,33,41 y 42 Ley 8/2010 Dº Patrimonial
01/03/2011	S	AP	Zaragoza (2)	64	66.1 LP
08/03/2011	S	AP	Zaragoza (2)	64	6 Ley 2/2010, 26 mayo
08/03/2011	S	AP	Zaragoza (2)	663	24 LREMV
09/03/2011	S	AP	Teruel	5	3 C
10/03/2011	S	AP	Teruel	8	1.2 y 147 C
21/03/2011	S	JPI	Ejea (1)	65	DT 3ª, 35, 95, 102, 134 y 136 LP
21/03/2011	S	JPI	Ejea (1)	64	6, 7 y 8 Ley 2/2010, 26 mayo
22/03/2011	S	AP	Zaragoza (2)	8	147 C, 32 Ley 8/2010, 2 diciembre
23/03/2011	S	AP	Huesca	9	47.4 y 71bis Ley 5/2002,Caza
29/03/2011	S	TSJ	Sala de lo Civil	0	3,6,7,1261, 1271 y 1391 CC, 32 y 100 LSRL

Fecha	Res.	Trib.	Localidad	Clave	Artículo
29/03/2011	S	AP	Zaragoza (2)	64	62 LP
29/03/2011	S	AP	Zaragoza (2)	64	2 Ley 2/2010, 26 mayo
05/04/2011	S	TSJ	Sala de lo Civil	65	77 y 104 LP, 59 Ley 12/2001, 2 julio, 177.2.2º CC y 283 LEC
12/04/2011	S	AP	Zaragoza (2)	64	5,6 y 62 LIRF
14/04/2011	A	AP	Teruel	8	144 C
19/04/2011	S	AP	Zaragoza (2)	64	57 y 61 y ss LP, 8 LIRF
26/04/2011	A	TSJ	Sala de lo Civil y Penal	8	75 Ley 15/2006, 28 diciembre, 148 C
27/04/2011	S	AP	Huesca	72	108.3 C
29/04/2011	S	AP	Zaragoza (4)	74	141 y 22 LS
03/05/2011	S	AP	Teruel	64	6 Ley 2/2010, 26 mayo
03/05/2011	S	AP	Zaragoza (2)	64	60 y ss LP
03/05/2011	A	AP	Zaragoza (2)	65	113 y ss LP
03/05/2011	A	AP	Zaragoza (2)	65	LP
05/05/2011	S	AP	Zaragoza (4)	9	550 CDF
10/05/2011	A	AP	Zaragoza (2)	64	3 LP
10/05/2011	S	JPI	Ejea (1)	65	38 y 130 CDF
12/05/2011	S	AP	Teruel	0	34 CDF
17/05/2011	S	AP	Zaragoza (2)	64	80.4 y 81.3 CDF
17/05/2011	A	AP	Zaragoza (2)	64	LEC
20/05/2011	S	TSJ	Sala de lo Civil	8	147 C
24/05/2011	S	AP	Zaragoza (2)	64	7.3 LIRF
24/05/2011	S	AP	Zaragoza (2)	64	68 LP
25/05/2011	S	TSJ	Sala de lo Civil	65	21, 56 y 59 Ley 12/2001, 2 julio, 749.2 LEC
15/06/2011	S	TSJ	Sala de lo Civil	62	5, 9,12 y 13.2 C
21/06/2011	S	AP	Zaragoza (2)	64	5 LIRF
21/06/2011	S	AP	Zaragoza (2)	663	85.2 LREMV
21/06/2011	S	AP	Zaragoza (2)	64	6, 65, 76, 80 y 82 CDF
21/06/2011	S	AP	Zaragoza (2)	64	68 LP
21/06/2011	S	AP	Teruel	64	6 Ley 2/2010, 26 mayo
22/06/2011	S	TSJ	Sala de lo Civil	0	20 Ley 9/1998, 22 diciembre
28/06/2011	A	TSJ	Sala de lo Civil y Penal	72	86.1b) LS
28/06/2011	S	AP	Zaragoza (2)	64	76.2 y 80.2 CDF
28/06/2011	S	AP	Zaragoza (2)	64	6 LIRF y 80.3 CDF
05/07/2011	S	AP	Zaragoza (2)	64	65 y 82 CDF
05/07/2011	S	AP	Zaragoza (2)	65	35.2 LP
05/07/2011	S	JPI	Ejea (1)	65	35 y 116 LP
12/07/2011	A	TSJ	Sala de lo Civil y Penal	64	9.4 Ley 2/2010, 26 mayo
13/07/2011	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	6 y 2.2 Ley 2/2010, 26 mayo. 75.2, 76 y 80.2 CFA
20/07/2011	A	TSJ	Sala de lo Civil	64	LEC
26/07/2011	S	AP	Zaragoza (2)	64	82 CDF
29/07/2011	S	AP	Huesca	663	58 C
29/07/2011	S	AP	Huesca	64	60, 76.2 y 79.2 CFA
22/09/2011	S	TSJ	Sala de lo Civil	72	19, 24, 25,179,195 y 198 LS
27/09/2011	S	AP	Zaragoza (2)	64	65 y 82 CDF
30/09/2011	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	6.2 Ley 2/2010,26 mayo y 76.2 y 80.2 CFA
30/09/2011	S	AP	Zaragoza (2)	8	144 y 145 C, 545 a 550 CDF
30/09/2011	S	AP	Huesca	64	67 CFA
04/10/2011	S	AP	Zaragoza (2)	663	37 y 48 C
05/10/2011	S	AP	Huesca	64	69 CFA
10/10/2011	A	TSJ	Sala de lo Civil y	64	6 y 8 Ley 2/2010, 26 mayo, 80 y

Fecha	Res.	Trib.	Localidad	Clave	Artículo
			Penal		82 CFA
13/10/2011	S	AP	Zaragoza (2)	64	7 LIRF
13/10/2011	S	AP	Zaragoza (2)	64	2.2 y 6 LIRF, 79 y ss. CDF
14/10/2011	S	AP	Zaragoza (4)	8	Compilación y CC
14/10/2011	S	JPI	Ejea (1)	8	552, 556 a 558, 568, 569 y 580 CDF
02/11/2011	S	AP	Zaragoza (2)	64	LIRF, 80 CDF
08/11/2011	A	TSJ	Sala de lo Civil	661	9 Ley 2/2010, 26 mayo
08/11/2011	S	AP	Zaragoza (2)	663	65.2 LREMV, 37.4 Y 247 CDF
08/11/2011	S	AP	Zaragoza (2)	65	121 CDF
11/11/2011	S	JPI	Zaragoza (14)	8	538 CDF
15/11/2011	S	AP	Zaragoza (2)	663	210, 217, 247, 250 CDF, 37 Y 47 C
16/11/2011	S	AP	Zaragoza (5)	74	129,133 y 202 LS
17/11/2011	S	AP	Teruel	8	147 C
22/11/2011	S	JPI	Zaragoza (14)	72	69 y 80 LS (384 y 395.3 CDF)
22/11/2011	S	JPI	Ejea (1)	65	38, 115,116 y 130 CDF
29/11/2011	S	AP	Zaragoza (2)	64	68 LIRF, 82 CDF
29/11/2011	S	AP	Zaragoza (2)	64	79 y ss CDF
30/11/2011	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	66 LP
30/11/2011	S	AP	Teruel	75	171 LS y 486 CDF
02/12/2011	S	AP	Zaragoza (2)	64	76.2 CDF
02/12/2011	S	AP	Zaragoza (2)	64	65, 80, 82 y 83 CDF
07/12/2011	S	AP	Teruel	8	144.3 C y 550 CDF
12/12/2011	A	AP	Zaragoza (2)	64	82 CDF
14/12/2011	S	TSJ	Sala de lo Civil	8	147 C, 577.1 CFA
15/12/2011	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	79.5 y 80.2,3 y 5 CFA
15/12/2011	A	TSJ	Sala de lo Civil y Penal	5	3 C
16/12/2011	A	AP	Zaragoza (4)	663	26 y 36 C
20/12/2011	S	AP	Zaragoza (2)	663	37, 38 y 40 C, 35 LREMV y 217 CDF
20/12/2011	S	AP	Zaragoza (2)	64	69, 77 y 82 CDF
21/12/2011	S	JPI	Ejea (1)	64	CDF
27/12/2011	A	AP	Zaragoza (2)	64	74 CDF
30/12/2011	S	AP	Zaragoza (4)	663	29 C
30/12/2011	S	AP	Zaragoza (5)	8	147 y 148 C
11/01/2012	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	83 CDFA
11/01/2012	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	82 CDFA
17/01/2012	S	AP	Zaragoza	64	80.6 CDFA
17/01/2012	S	JPI	Zaragoza	663	210.2b) CDFA
23/01/2012	S	JPI	Ejea	64	80 Y 82 CDFA
23/01/2012	S	JPI	Ejea	64	80 y 82 CDFA
24/01/2012	S	AP	Huesca	64	6, 80.6, 81.2, 82 y D.A. 4ª CDFA
31/01/2012	S	AP	Huesca	65	759 LEC
01/02/2012	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	80 CDFA
01/02/2012	S	AP	Zaragoza	64	65, 81.2 y 3 y 82 CDFA
01/02/2012	S	AP	Zaragoza	65	38.2 CDFA
07/02/2012	S	AP	Zaragoza	64	83.3 CDFA
07/02/2012	S	AP	Zaragoza	64	76.2 y 80.1a) CDFA
07/02/2012	A	AP	Zaragoza	64	82 CDFA
07/02/2012	S	JPI	Calatayud	64	79.5 y 80.2 CDFA
08/02/2012	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	80 CDFA
09/02/2012	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	80 CDFA
14/02/2012	S	AP	Zaragoza	64	80 CDFA
14/02/2012	S	AP	Zaragoza	64	80.1 a), d) y e) CDFA
20/03/2012	S	AP	Zaragoza	64	65 y 82 CDFA

Fecha	Res.	Trib.	Localidad	Clave	Artículo
21/02/2012	S	AP	Zaragoza	65	116.2 CDFA
21/02/2012	S	AP	Zaragoza	663	262 CDFA
28/02/2012	S	AP	Zaragoza	64	82 CDFA
28/02/2012	S	AP	Zaragoza	64	75.2, 76, 80.2, 82 y 83 CDFA
29/02/2012	S	TSJ	Sala de lo Civil	663	76,79,80 y 87 LREMV
29/02/2012	S	AP	Huesca	64	81.3 y 4 CDFA
06/03/2012	S	AP	Zaragoza	71	7, 28, 39 y 163 LS
06/03/2012	S	JPI	Ejea	65	38, 115, 116 y 130 CDFA
06/03/2012	S	JPI	Ejea	65	38, 42 a 44, 116 y 134 CDFA
07/03/2012	S	AP	Zaragoza	64	82 CDFA
13/03/2012	S	AP	Zaragoza	64	80 y 82 CDFA
13/03/2012	S	AP	Zaragoza	64	80.2 CDFA
13/03/2012	S	AP	Zaragoza	64	80 y 82 CDFA
20/03/2012	S	AP	Zaragoza	64	80 CDFA
20/03/2012	S	AP	Zaragoza	64	82 CDFA
20/03/2012	S	AP	Zaragoza	64	80 CDFA
21/03/2012	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	69 y 82 CDFA
27/03/2012	S	AP	Zaragoza	663	1061 CC
27/03/2012	S	AP	Zaragoza	64	80.6 CDFA
30/03/2012	S	AP	Zaragoza	64	82 CDFA
09/04/2012	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	80 CDFA
11/04/2012	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	83 CDFA
11/04/2012	S	AP	Zaragoza	64	111 CC y 767.4 LEC
11/04/2012	S	AP	Zaragoza	663	81.4 CDFA
12/04/2012	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	80 y 82 CDFA
13/04/2012	S	AP	Zaragoza	0	20, 55, 84.5 y Disp.Final 1ª Ley 9/1998 Coop
16/04/2012	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	69 CDFA
25/04/2012	S	AP	Zaragoza	64	79.5 y 83 CDFA
26/04/2012	S	JPI	Ejea	71	27.2 y 148 y ss CDFA
27/04/2012	S	AP	Huesca	64	69 CDFA
02/05/2012	S	AP	Zaragoza	64	79.5 CDFA
09/05/2012	S	AP	Zaragoza	65	760 LEC
17/05/2012	S	JPI	Calatayud	64	69 CDFA
22/05/2012	S	AP	Zaragoza	64	81.3 CDFA
24/05/2012	S	AP	Huesca	663	247 CDFA
24/05/2012	S	JPI	Ejea	64	6, 64 y 76 CDFA
30/05/2012	S	TSJ	Sala de lo Civil	74	343 y 448 CDFA
31/05/2012	S	AP	Huesca	64	80.2 y 81.3 CDFA
31/05/2012	S	AP	Huesca	65	218 CC
05/06/2012	A	AP	Zaragoza	64	10 d) CDFA
06/06/2012	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	76.2 y 80 CDFA
08/06/2012	S	AP	Huesca	64	81.1 y 82 CDFA
12/06/2012	S	JPI	Calatayud	5	3 y 270 CDFA
15/06/2012	S	JPI	Calatayud	64	76, 80 y 81 CDFA
19/06/2012	S	AP	Zaragoza	663	218.1b) y 223 CDFA
26/06/2012	A	AP	Zaragoza	64	76 CDFA
26/06/2012	S	AP	Huesca	64	82 y 83 CDFA
04/07/2012	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	69 CDFA
04/07/2012	A	TSJ	Sala Civil y Penal	0	82 CDFA y D.F.16ªLEC
05/07/2012	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	80.2 CDFA
10/07/2012	A	AP	Zaragoza	65	165 y 168 CDFA
11/07/2012	S	TSJ	Sala de lo Civil	8	568 CDFA
12/07/2012	A	TSJ	Sala Civil y Penal	0	62 y D.F.16ª LEC
12/07/2012	S	JPI	Ejea	64	82 y 83 CDFA

Fecha	Res.	Trib.	Localidad	Clave	Artículo
13/07/2012	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	77, 79, 81 a 83 CDFA
13/07/2012	A	AP	Zaragoza	76	204.2, 211, 217.4 y 218 LS
19/07/2012	A	TSJ	Sala Civil y Penal	0	80.2 CDFA
20/07/2012	S	AP	Zaragoza	72	5.2, 80, 101, 102 LS
24/07/2012	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	76.2b y 80 CDFA
26/07/2012	A	TSJ	Sala Civil y Penal	0	80.2 y 80.3 CDFA
26/07/2012	A	TSJ	Sala Civil y Penal	0	79.5 y 82 CDFA
27/07/2012	S	AP	Huesca	64	81 CDFA
07/09/2012	A	TSJ	Sala Civil y Penal	0	80.2 y 81.3 CDFA
10/09/2012	S	JPI	Calatayud	8	545, 549, 561, 580 y 1.2, CDFA, 586 CC
18/09/2012	S	AP	Zaragoza	64	65 y 82 CDFA
18/09/2012	S	AP	Zaragoza	65	175 a 180 CC
21/09/2012	S	AP	Zaragoza	8	146 y 147 C
24/09/2012	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	80.2 CDFA
25/09/2012	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	80.2 CDFA
28/09/2012	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	60, 75.2, 79.2a y 80 CDFA
04/10/2012	S	JPI	Zaragoza	663	210, 211, 324, 342 y 517 y ss CDFA
05/10/2012	S	TSJ	Sala de lo Civil	9	149 C, 34 LREMV y 212 LS
11/10/2012	S	AP	Zaragoza	64	83 CDFA
16/10/2012	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	59, 60 y 82.1 y 2 CDFA
19/10/2012	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	6, 20 y 80.2 CDFA
24/10/2012	S	JPI	Zaragoza	72	405, 416 Y 467 CDFA
24/10/2012	A	TSJ	Sala de lo Civil	64	81.1, 82.4 y 83.1 CDFA
26/10/2012	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	80.2 CDFA
29/10/2012	A	TSJ	Sala de lo Civil	5	3 CDFA
07/11/2012	S	AP	Zaragoza	65	170 y 172 CC
08/11/2012	S	JPI	Zaragoza	72	318, 405.2 y 416 CDFA
19/11/2012	A	TSJ	Sala Civil y Penal	0	Ley 4/2005, de 14 junio
20/11/2012	S	JPI	Ejea	64	80 a 83 CDFA
22/11/2012	S	TSJ	Sala de lo Civil	663	267 Y 270 CDFA
22/11/2012	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	80.2, 76.3 y 81 CDFA
22/11/2012	A	TSJ	Sala de lo Civil	64	80 CDFA
27/11/2012	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	80.2 CDFA
27/11/2012	A	TSJ	Sala Civil y Penal	0	Ley 4/2005, de 14 junio
29/11/2012	S	JPI	Calatayud	64	65.1b), 76 y 80.2 CDFA
29/11/2012	S	JPI	Ejea	8	577 y ss. CDFA
03/12/2012	S	JPI	Calatayud	64	79.5 y 80.2 CDFA
04/12/2012	S	TSJ	Sala de lo Civil	65	118.2 CDFA
04/12/2012	S	JPI	Calatayud	65	15, 116 y 136 CDFA, 271 CC
04/12/2012	S	JPI	Ejea	8	538, 550 y 571 CDFA
04/12/2012	A	JPI	Ejea	8	542 CDFA
12/12/2012	A	AP	Zaragoza	64	79.3 CDFA
17/12/2012	A	TSJ	Sala Civil y Penal	64	76 y 80 CDFA
18/12/2012	S	AP	Zaragoza	64	76.2 y 80 CDFA
19/12/2012	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	80 CDFA
19/12/2012	A	TSJ	Sala de lo Civil	65	LEC
20/12/2012	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	79.5 y 82 CDFA
21/12/2012	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	80.2 CDFA

Fecha	Res.	Trib.	Localidad	Clave	Artículo
21/12/2012	A	TSJ	Sala Civil y Penal	64	76.2 y 82 CDFA

b') Listado por materias

5. Fuentes. Costumbre. Standum est chartae. Código Civil.

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	20/06/1990	AP	Teruel	standum est chartae
S	18/12/1990	TSJ	Zaragoza	fuentes.standum est chartae.
S	18/01/1991	AP	Zaragoza (4)	vecindad civil. Dº interregional
S	18/06/1991	AP	Teruel	standum est chartae.
S	04/11/1991	JPI	Teruel (1)	standum est chartae
S	31/12/1991	AP	Teruel	standum est chartae
S	10/02/1992	AP	Teruel	standum est chartae
S	21/01/1992	AP	Teruel	standum est chartae
S	09/03/1992	AP	Teruel	standum est chartae
S	10/03/1992	AP	Huesca	standum est chartae
S	18/03/1992	AP	Teruel	standum est chartae
S	24/03/1992	TS	Madrid	título nobiliario aragonés
S	05/05/1992	AP	Teruel	standum est chartae
S	15/05/1992	AP	Zaragoza (5)	costumbre, medianería
S	11/06/1992	AP	Teruel	fuentes, Código Civil.
S	18/06/1992	TSJ	Zaragoza	standum est chartae
A	03/07/1992	TSJ	Zaragoza	standum est chartae
S	11/07/1992	AP	Huesca	usos locales,aparcería mixta
S	12/09/1992	AP	Teruel	fuentes, Código Civil
S	29/09/1992	TSJ	Zaragoza	standum est chartae
S	21/01/1993	AP	Teruel	standum est chartae
S	02/06/1993	AP	Huesca	standum est chartae
S	22/06/1993	AP	Teruel	fuentes, Código Civil
S	30/07/1993	JPI	Boltaña	costumbre, Junta de Parientes
S	01/09/1993	AP	Huesca	costumbre, standum est chartae
S	03/09/1993	AP	Teruel	fuentes, Código Civil
S	11/09/1993	AP	Teruel	C. Civil, standum est chartae
S	21/02/1994	JPI	Huesca (2)	costumbre
S	04/05/1994	JPI	Fraga	dación personal
S	28/06/1994	JPI	Ejea (2)	standum est chartae
S	11/07/1994	TSJ	Zaragoza	fuentes
S	31/12/1994	JPI	Teruel (2)	standum est chartae
S	18/02/1995	TS	Madrid	fuentes
S	20/02/1995	AP	Huesca	fuentes
S	22/02/1995	AP	Huesca	costumbre
S	27/02/1995	AP	Huesca	fuentes
S	09/03/1995	AP	Huesca	costumbre
S	10/03/1995	JPI	Zaragoza (3)	fuentes
S	18/05/1995	JPI	Teruel (1)	standum est chartae
S	13/06/1995	TSJ	Zaragoza	standum est chartae
S	15/06/1995	AP	Teruel	fuentes

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	23/06/1995	AP	Teruel	fuentes
S	05/07/1995	TSJ	Zaragoza	standum est chartae
S	10/07/1995	AP	Huesca	fuentes
S	16/10/1995	AP	Teruel	fuentes
S	15/11/1995	JPI	Teruel (1)	standum est chartae
S	23/11/1995	AP	Teruel	fuentes
S	18/01/1996	JPI	Zaragoza (13)	standum est chartae
S	07/02/1996	AP	Zaragoza (5)	standum est chartae
S	28/02/1996	JPI	Huesca (2)	standum est chartae
S	05/03/1996	AP	Huesca	libertad de forma, excepciones
S	08/04/1997	AP	Teruel	fuentes, Código Civil
S	14/06/1997	AP	Teruel	fuentes, Código Civil
S	16/06/1997	AP	Huesca	fuentes, Código Civil
A	19/11/1997	TSJ	Zaragoza	fuentes, standum est chartae
S	20/04/1998	AP	Huesca	standum est chartae
S	05/10/1998	TSJ	Zaragoza	standum est chartae
S	27/10/1998	AP	Huesca	fuentes, Código Civil
S	28/12/1998	JPI	Jaca (2)	fuentes, Código Civil
S	22/12/1998	JPI	Jaca (2)	fuentes, Código Civil, standum
S	11/12/1998	JPI	Zaragoza (2)	standum est chartae
S	28/12/1998	AP	Teruel	fuentes, Código Civil
S	13/01/1999	AP	Teruel	standum est chartae
S	28/01/1999	AP	Huesca	standum est chartae
S	13/12/1999	AP	Teruel	standum est chartae
S	13/09/1999	TSJ	Zaragoza	standum est chartae
S	29/05/2000	TSJ	Zaragoza	standum est chartae
S	07/02/2000	AP	Teruel	standum est chartae
S	24/04/2000	AP	Teruel	standum est chartae
S	30/10/2000	AP	Teruel	standum est chartae
S	06/10/2000	TSJ	Zaragoza	fuentes, Código Civil
S	19/06/2001	AP	Teruel	standum est chartae
S	26/02/2001	AP	Zaragoza (2)	standum est chartae
S	14/07/2001	AP	Teruel	standum est chartae
S	19/07/2001	AP	Teruel	standum est chartae
S	05/10/2001	AP	Teruel	standum est chartae
S	27/10/2001	AP	Teruel	standum est chartae
S	07/11/2001	TSJ	Zaragoza	standum est chartae
S	30/01/2002	AP	Huesca	standum est chartae
S	04/10/2002	AP	Teruel	standum est chartae
S	21/10/2002	AP	Zaragoza (2)	standum est chartae
S	29/11/2002	AP	Teruel	standum est chartae
S	23/12/2002	AP	Zaragoza (2)	standum est chartae
S	10/04/2003	JPI	Zaragoza (17)	fuentes, Código Civil
A	08/07/2003	AP	Teruel	standum est chartae
S	23/09/2003	AP	Teruel	standum est chartae
S	05/12/2003	JPI	Tarazona	fuentes, DT 1ª LS

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	10/12/2003	AP	Teruel	standum est chartae
S	14/01/2004	JPI	Teruel (1)	fuentes, Código civil.
S	18/05/2004	JPI	Alcañiz (1)	aplicabilidad Código civil
S	22/06/2004	JPI	Alcañiz (2)	standum est chartae
S	03/09/2004	JPI	Calamocha	standum est chartae.
S	24/01/2005	AP	Zaragoza (5ª)	standum est chartae.
S	07/02/2005	AP	Teruel	fuentes.Código Civil
S	08/02/2005	AP	Teruel	fuentes.Codigo Civil.
S	14/02/2005	AP	Zaragoza (5ª)	standum est chartae.
S	17/02/2005	AP	Zaragoza (5ª)	standum est chartae.
S	19/05/2005	AP	Huesca	fuentes.Código Civil.
S	20/05/2005	AP	Zaragoza (4ª)	fuentes.Código Civil.
S	08/07/2005	AP	Teruel	costumbre.
S	11/10/2005	AP	Teruel	costumbre.
S	25/10/2005	AP	Teruel	standum est chartae.
S	25/10/2005	AP	Teruel	standum est chartae.
S	27/03/2006	AP	Zaragoza (5ª)	vecindad civil
S	20/03/2006	AP	Teruel	standum est chartae
S	05/04/2006	AP	Teruel	standum est chartae
S	29/12/2006	JPI	Barbastro	costumbre
S	13/03/2007	AP	Teruel	Standum esta chartae
S	24/05/2007	JPI	Zaragoza 12	Fuentes
S	23/09/2008	AP	Huesca	Standum est chartae
S	23/09/2008	JPI	Alcañiz (2)	Standum est chartae
S	14/05/2009	AP	Teruel	Standum est chartae
S	17/03/2010	AP	Teruel	standum est chartae
S	09/03/2011	AP	Teruel	Standum est chartae
A	15/12/2011	TSJ	Zaragoza	Standum est chartae
S	12/06/2012	JPI	Calatayud	Standum est chartae
A	29/10/2012	TSJ	Zaragoza	Standum est chartae

61. Persona y familia. En general.

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	22/02/1995	AP	Huesca	inst. fam. consuetud.
S	05/07/1995	TSJ	Zaragoza	inst. fam. consuetud.
A	02/10/1996	AP	Huesca	contrato familiar atípico
S	09/11/1998	AP	Zaragoza (4)	casamiento a sobre bienes
A	10/12/2007	JPI	Zaragoza 14	Supuesto de cotutoría
A	12/11/2010	TSJ	Zaragoza	Modificación capacidad
A	29/01/2010	JPI	Huesca (2)	Consentimiento para intervención quirúrgica.

62. Persona. Edad.

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	15/12/1994	AP	Huesca	vecindad civil
S	17/01/1995	AP	Lleida (2)	vecindad civil
S	24/11/1995	JPI	Zaragoza (2)	vecindad civil
S	02/07/1997	AP	Teruel	vecindad civil
S	31/07/1997	AP	Zaragoza (5)	autoridad marital
S	11/12/1998	JPI	Zaragoza (2)	vecindad civil
S	10/03/1999	TSJ	Zaragoza	vecindad civil
S	24/07/2000	AP	Teruel	vecindad civil
S	18/10/2000	AP	Teruel	vecindad civil
S	29/01/2001	AP	Teruel	capacidad procesal menor
S	6/03/2008	JPI	Alcañiz (2)	Incapacidad
A	12/03/2008	AP	Zaragoza (2)	Internamiento
S	2/04/2008	JPI	Alcañiz (2)	Incapacidad
S	9/04/2008	JPI	Alcañiz (2)	Incapacidad
S	8/05/2008	JPI	Alcañiz (2)	Incapacidad
S	20/06/2008	JPI	Alcañiz (2)	Incapacidad
S	12/11/2008	JPI	Alcañiz (2)	Incapacidad
S	13/03/2009	JPI	Ejea(1)	Incapacidad
S	08/04/2009	JPI	Ejea(1)	Incapacidad
S	08/04/2009	JPI	Ejea(1)	Incapacidad
S	13/04/2009	JPI	Ejea(1)	Incapacidad
A	22/04/2009	JPI	Huesca (2)	Capacidad
S	14/07/2090	JPI	Ejea (1)	Incapacidad
S	26/03/2010	JPI	Zaragoza (19)	Capacidad menor. Actos de disposición
S	09/07/2010	JPI	Boltaña	Incapacitación. Curatela
S	03/09/2010	AP	Huesca	Incapacitación. Curatela
S	30/09/2010	JPI	Boltaña	Incapacitación. Curatela
S	30/12/2010	AP	Zaragoza (4)	Capacidad menor. Actos de disposición
S	15/06/2011	TSJ	Zaragoza	Capacidad de menor mayor de 14 años. Actos de disposición

64. Relaciones entre ascendientes y descendientes.

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
A	12/03/1990	JPI	Zaragoza (6)	autoridad familiar abuelos
A	05/04/1990	AP	Zaragoza (1)	autoridad familiar otras personas
S	15/10/1990	JPI	Ejea (1)	autoridad familiar
S	01/12/1990	JPI	Zaragoza (6)	aut..fam.,J. de Parientes,abuelos
S	19/12/1990	JPI	Ejea (1)	autoridad familiar
A	01/07/1991	JPI	Zaragoza (6)	autoridad familiar abuelos
S	23/12/1991	AP	Zaragoza (4)	autoridad familiar abuelos
S	28/12/1991	AP	Teruel	autoridad familiar
S	03/06/1993	JPI	Huesca (2)	autoridad familiar
S	20/07/1993	AP	Huesca	gastos crianza y educación
S	14/09/1993	AP	Huesca	repr. legal hijo menor 14 años
S	11/10/1993	AP	Huesca	autoridad familiar
S	04/04/1994	JPI	Huesca (2)	autoridad familiar
S	03/06/1994	JPI	Ejea (1)	autoridad familiar abuelos
A	24/02/1995	JPI	Huesca (2)	disposición bienes
S	27/02/1995	AP	Teruel	autoridad familiar
S	08/04/1995	AP	Zaragoza (2)	autoridad familiar
S	26/04/1997	AP	Huesca	autoridad familiar
S	16/05/1997	AP	Teruel	autoridad familiar
A	01/07/1998	JPI	Zaragoza (13)	autoridad familiar rehabilitada
A	05/06/1998	JPI	Zaragoza (13)	autoridad familiar rehabilitada
A	18/05/1998	JPI	Zaragoza (14)	autoridad familiar abuelos
S	03/09/1999	JPI	Ejea (2)	deber de crianza
S	24/11/1999	JPI	Ejea (2)	deber de crianza
S	24/07/2000	AP	Teruel	autoridad familiar
S	25/10/2000	AP	Teruel	autoridad familiar
S	02/03/2000	AP	Zaragoza (4)	alimentos prole extramatrimonial
S	12/12/2000	AP	Zaragoza (4)	Asistencia
A	27/02/2001	AP	Huesca	administración, fianza
S	10/04/2003	JPI	Zaragoza (17)	autoridad familiar
A	16/04/2003	AP	Zaragoza (2)	alimentos, Junta de Parientes
S	17/02/2005	AP	Zaragoza (5ª)	dº de los menores
S	01/03/2005	AP	Zaragoza (2ª)	guarda y custodia
S	18/01/2006	AP	Zaragoza (4ª)	alimentos, deber de crianza
S	07/02/2006	JPI	Monzón 1	deber de crianza
S	31/03/2006	JPI	Monzón 1	relaciones ascend. y descend.
S	03/05/2006	JPI	Monzón 1	relaciones ascend. y descend.
S	19/05/2006	JPI	Monzón 1	relaciones ascend. y descend.
S	08/06/2006	JPI	Monzón 1	relaciones ascend. y descend.
S	10/07/2006	JPI	Monzón 1	relaciones ascend. y descend.
S	22/09/2006	JPI	Monzón 1	deber de crianza
S	11/05/2007	AP	Huesca	Pensión de alimentos

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	5/06/2007	AP	Zaragoza (2ª)	Custodia menor
S	19/06/2007	AP	Zaragoza (2ª)	Guarda y custodia
S	27/07/2007	JPI	Monzón 2	Guarda y custodia y alimentos
S	4/10/2007	JPI	Monzón 2	Guarda y custodia y alimentos
S	25/10/2007	AP	Huesca	Alimentos
S	19/03/2008	AP	Zaragoza (2)	Guarda y custodia
S	10/01/2008	AP	Zaragoza (5)	Alimentos
S	26/02/2008	AP	Zaragoza (2)	Alimentos
S	22/04/2008	AP	Zaragoza (2)	Alimentos
S	30/04/2008	AP	Zaragoza (2)	Alimentos
S	12/05/2008	TSJ	Aragón	Pensión de alimentos
S	13/05/2008	AP	Zaragoza (2)	Dº Visitas
S	13/05/2008	AP	Zaragoza (2)	Alimentos
S	20/05/2008	AP	Zaragoza (2)	Gastos hijos comunes
S	10/06/2008	AP	Zaragoza (2)	Alimentos
S	10/06/2008	AP	Zaragoza (2)	Guarda administrativa
S	17/06/2008	AP	Zaragoza (2)	Alimentos y rég. visitas
S	17/06/2008	AP	Zaragoza (2)	Alimentos y rég. visitas
S	24/06/2008	AP	Zaragoza (2)	Alimentos
S	8/07/2008	AP	Zaragoza (2)	Alimentos y rég. visitas
S	16/07/2008	AP	Zaragoza (2)	Alimentos y rég. visitas
S	22/07/2008	AP	Zaragoza (2)	Alimentos y rég. visitas
S	25/07/2008	AP	Zaragoza (2)	Alimentos y rég. visitas
A	4/11/2008	AP	Zaragoza (2)	Autoridad familiar
A	25/11/2008	AP	Zaragoza (2)	Autoridad familiar
S	16/12/2008	AP	Zaragoza (2)	Alimentos y rég. visitas
S	13/01/2009	AP	Huesca	Alimentos y régimen de visitas
S	28/01/2009	AP	Huesca	Pº favor filii
S	04/02/2009	JPI	Zaragoza (6)	Alimentos
S	06/02/2009	JPI	Zaragoza (6)	Alimentos
S	17/02/2009	AP	Huesca	Guarda y custodia y régimen visitas
A	03/03/2009	AP	Zaragoza (2)	Elección centro escolar hijos
S	11/03/2009	AP	Zaragoza (2)	Guarda y custodia y visitas
S	19/03/2009	TSJA	Sala de lo Civil	Autoridad familiar.Pº favor filii
S	31/03/2009	AP	Zaragoza (2)	Guarda y custodia y visitas
S	01/04/2009	JPI	Zaragoza (6)	Alimentos y guarda y custodia
S	03/04/2009	JPI	Zaragoza (6)	Régimen visitas
S	13/04/2009	JPI	Ejea (1)	Régimen visitas
S	24/04/2009	AP	Huesca	Alimentos
S	05/05/2009	JPI	Zaragoza (6)	Autoridad familiar
S	06/05/2009	AP	Zaragoza (2)	Alimentos y guarda y custodia
S	06/05/2009	JPI	Zaragoza (6)	Autoridad familiar
A	12/05/2009	AP	Zaragoza (2)	Guarda y custodia y visitas
S	28/05/2009	JPI	Ejea (1)	Guarda y custodia y visitas
S	03/07/2009	JPI	Zaragoza (6)	Régimen visitas. Pº favor filii.
S	02/09/2009	TSJA	Sala de lo Civil	Autoridad familiar

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	11/09/2009	AP	Huesca	Alimentos
S	18/09/2009	AP	Huesca	Pº favor filii.
S	29/09/2009	AP	Zaragoza (2)	Alimentos
A	06/10/2009	AP	Zaragoza (2)	Visitas. Pº favor filii.
S	23/10/2009	AP	Huesca	Alimentos
S	28/10/2009	AP	Huesca	Visitas. Pº favor filii.
S	24/11/2009	AP	Zaragoza (2)	Alimentos y régimen de visitas
S	03/02/2010	AP	Zaragoza (2)	Pensión de alimentos y visitas
S	25/03/2010	AP	Huesca	Régimen de visitas
S	26/03/2010	AP	Huesca	Pensión de alimentos y visitas
S	04/05/2010	AP	Zaragoza (2)	Guarda y custodia y alimentos
S	04/05/2010	AP	Zaragoza (2)	Régimen de visitas y alimentos
S	04/05/2010	AP	Zaragoza (2)	Pensión de alimentos
S	12/05/2010	TSJ	Zaragoza	Pensión de alimentos
S	27/05/2010	AP	Zaragoza (2)	Pensión de alimentos
S	04/06/2010	AP	Zaragoza (2)	Pensión de alimentos
A	15/06/2010	AP	Zaragoza (2)	Gastos extraordinarios
S	22/06/2010	AP	Zaragoza (2)	Pensión de alimentos
S	22/06/2010	AP	Zaragoza (2)	Pensión de alimentos
A	06/07/2010	AP	Zaragoza (2)	Tratamiento terapéutico
S	13/07/2010	AP	Zaragoza (2)	Guarda y custodia y visitas
S	23/07/2010	AP	Zaragoza (2)	Régimen de visitas
S	23/07/2010	AP	Zaragoza (2)	Pensión de alimentos y visitas
S	23/07/2010	AP	Zaragoza (2)	Guarda y custodia y alimentos
S	23/07/2010	AP	Huesca	Privación autoridad familiar
S	21/09/2010	JPI	Zaragoza (6)	Guarda y custodia compartida
A	05/10/2010	AP	Zaragoza (2)	Facultad de decisión prácticas religiosas de hijos menores
S	11/10/2010	AP	Zaragoza (2)	Alimentos provisionales para hijo mayor de edad
S	25/10/2010	JPI	Boltaña	Guarda y custodia compartida
S	03/11/2010	AP	Zaragoza (2)	Guarda y custodia. Visitas
S	03/11/2010	AP	Zaragoza (2)	Guarda y custodia. Visitas. Alimentos
S	30/11/2010	AP	Zaragoza (2)	Guarda y custodia compartida. Pensión de alimentos
S	09/12/2010	AP	Zaragoza (2)	Pensión de alimentos
S	16/12/2010	AP	Zaragoza (2)	Pensión de alimentos
S	03/01/2011	AP	Zaragoza (2)	Pensión alimenticia y gastos extraordinarios
S	11/01/2011	AP	Teruel	Custodia compartida
S	12/01/2011	AP	Huesca	Guarda y custodia. Separación de hermanos
S	08/02/2011	AP	Zaragoza (2)	Pensión alimenticia
S	10/02/2011	JPI	Ejea (1)	Pacto relaciones familiares
S	22/02/2011	AP	Zaragoza (2)	Pensión alimenticia y visitas
S	01/03/2011	AP	Zaragoza (2)	Pensión alimenticia para hijos mayores de edad
S	08/03/2011	AP	Zaragoza (2)	Guarda y custodia de hermanos

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	21/03/2011	JPI	Ejea (1)	Pensión alimenticia y régimen de comunicaciones
S	29/03/2011	AP	Zaragoza (2)	Pensión alimenticia
S	29/03/2011	AP	Zaragoza (2)	Custodia compartida
S	12/04/2011	AP	Zaragoza (2)	Guarda y custodia, alimentos y visitas
S	19/04/2011	AP	Zaragoza (2)	Régimen de visitas y alimentos
S	03/05/2011	AP	Zaragoza (2)	Privación de autoridad familiar
S	03/05/2011	AP	Teruel	Custodia compartida
A	10/05/2011	AP	Zaragoza (2)	Audiencia del menor
S	17/05/2011	AP	Zaragoza (2)	Guarda y custodia
S	24/05/2011	AP	Zaragoza (2)	Uso de vivienda familiar
S	24/05/2011	AP	Zaragoza (2)	Pensión alimenticia
S	21/06/2011	AP	Zaragoza (2)	Régimen de visitas
S	21/06/2011	AP	Zaragoza (2)	Guarda y custodia y alimentos
S	21/06/2011	AP	Zaragoza (2)	Pensión de alimentos
S	21/06/2011	AP	Teruel	Custodia compartida
S	28/06/2011	AP	Zaragoza (2)	Custodia compartida
S	28/06/2011	AP	Zaragoza (2)	Custodia compartida
S	05/07/2011	AP	Zaragoza (2)	Guarda y custodia. Alimentos
A	12/07/2011	TSJ	Zaragoza	Relaciones familiares. Inadmisión recurso casación
S	13/07/2011	TSJ	Zaragoza	Sistema de custodia compartida
A	20/07/2011	TSJ	Zaragoza	Legitimación. Inadmisión recurso casación
S	26/07/2011	AP	Zaragoza (2)	Pensión alimenticia
S	29/07/2011	AP	Huesca	Motivación cambio progenitor custodio
S	27/09/2011	AP	Zaragoza (2)	Pensión de alimentos
S	30/09/2011	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida. Superior interés del menor
S	30/09/2011	AP	Huesca	Guarda y custodia y alimentos de menor
S	05/10/2011	AP	Huesca	Pensión alimenticia
A	10/10/2011	TSJ	Zaragoza	Modificación medidas custodia y gastos
S	13/10/2011	AP	Zaragoza (2)	Custodia compartida
S	13/10/2011	AP	Zaragoza (2)	Custodia compartida
S	02/11/2011	AP	Zaragoza (2)	Custodia compartida
S	29/11/2011	AP	Zaragoza (2)	Custodia compartida
S	29/11/2011	AP	Zaragoza (2)	Custodia compartida, pensión alimenticia y compensatoria
S	30/11/2011	TSJ	Zaragoza	Pensión alimenticia a hijos mayores de edad
S	02/12/2011	AP	Zaragoza (2)	Pensión de alimentos y régimen de visitas
S	02/12/2011	AP	Zaragoza (2)	Custodia compartida, pensión alimenticia y compensatoria
A	12/12/2011	AP	Zaragoza (2)	Pensión alimenticia. Gastos necesarios
S	15/12/2011	TSJ	Zaragoza	Preferencia custodia compartida
S	20/12/2011	AP	Zaragoza (2)	Pensión alimenticia y régimen de visitas

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	21/12/2011	JPI	Ejea (1)	Pacto de relaciones familiares
A	27/12/2011	AP	Zaragoza (2)	Discrepancia entre progenitores
S	11/01/2012	TSJ	Zaragoza	Asignación compensatoria
S	11/01/2012	TSJ	Zaragoza	Pensión alimenticia. Gastos extraordinarios
S	17/01/2012	AP	Zaragoza (2)	Custodia, visitas y alimentos
S	23/01/2012	JPI	Ejea (1)	Custodia compartida
S	23/01/2012	JPI	Ejea (1)	Custodia compartida
S	24/01/2012	AP	Huesca	Custodia y alimentos
S	01/02/2012	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
S	01/02/2012	AP	Zaragoza	Uso del domicilio familiar
S	07/02/2012	AP	Zaragoza (2)	Pensión alimenticia y compensatoria
S	07/02/2012	AP	Zaragoza (2)	Custodia compartida
A	07/02/2012	AP	Zaragoza (2)	Gastos extraordinarios
S	07/02/2012	JPI	Calatayud	Guarda y custodia, visitas y alimentos
S	08/02/2012	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
S	09/02/2012	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
S	14/02/2012	AP	Zaragoza (2)	Custodia compartida
S	14/02/2012	AP	Zaragoza (2)	Custodia compartida
S	28/02/2012	AP	Zaragoza (2)	Pensión de alimentos
S	28/02/2012	AP	Zaragoza (2)	Custodia compartida
S	29/02/2012	AP	Huesca	Guarda y alimentos
S	07/03/2012	AP	Zaragoza (2)	Pensión alimenticia
S	13/03/2012	AP	Zaragoza (2)	Custodia y alimentos
S	13/03/2012	AP	Zaragoza (2)	Custodia compartida
S	13/03/2012	AP	Zaragoza (2)	Custodia compartida y pensión de alimentos
S	20/03/2012	AP	Zaragoza (2)	Visitas y alimentos
S	20/03/2012	AP	Zaragoza (2)	Custodia compartida
S	20/03/2012	AP	Zaragoza (2)	Extinción pensión alimenticia para mayor de edad
S	20/03/2012	AP	Zaragoza (2)	Custodia compartida
S	21/03/2012	TSJ	Zaragoza	Extinción pensión alimenticia para hijos mayores de edad
S	27/03/2012	AP	Zaragoza (2)	Guarda y custodia
S	30/03/2012	AP	Zaragoza (2)	Pensión de alimentos
S	09/04/2012	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
S	11/04/2012	TSJ	Zaragoza	Pensión alimenticia para hijo mayor discapacitado
S	11/04/2012	AP	Zaragoza (2)	Reconocimiento de filiación extramatrimonial
S	12/04/2012	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida y gastos extraordinarios
S	16/04/2012	TSJ	Zaragoza	Reclamación de alimentos
S	25/04/2012	AP	Zaragoza (2)	Pensión alimenticia y compensatoria
S	27/04/2012	AP	Huesca	Pensión alimenticia
S	02/05/2012	AP	Zaragoza (2)	Pensión alimenticia
S	17/05/2012	JPI	Calatayud	Pensión alimenticia para hija mayor

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
				de edad. Pensión compensatoria
S	22/05/2012	AP	Zaragoza (2)	Guarda y custodia
S	24/05/2012	JPI	Ejea (1)	Visitas
S	31/05/2012	AP	Huesca	Guarda y alimentos
A	05/06/2012	AP	Zaragoza (2)	Guarda y custodia
S	06/06/2012	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
S	08/06/2012	AP	Huesca	Pensión alimenticia
S	15/06/2012	JPI	Calatayud	Custodia compartida
A	26/06/2012	AP	Zaragoza (2)	Guarda y custodia
S	26/06/2012	AP	Huesca	Pensión de alimentos y compensatoria
S	04/07/2012	TSJ	Zaragoza	Extinción pensión alimenticia
S	05/07/2012	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
S	12/07/2012	JPI	Ejea (1)	Pensión alimenticia y compensatoria
S	13/07/2012	TSJ	Zaragoza	Régimen de comunicaciones y alimentos. Pensión compensatoria
S	24/07/2012	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
S	27/07/2012	AP	Huesca	Visitas y alimentos
S	07/09/2012	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
S	18/09/2012	AP	Zaragoza (2)	Custodia, visitas y alimentos
S	24/09/2012	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
S	25/09/2012	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
S	28/09/2012	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
S	11/10/2012	AP	Zaragoza (2)	Pensión compensatoria
S	16/10/2012	TSJ	Zaragoza	Pensión alimenticia y visitas
S	19/10/2012	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida. Derecho del menor a ser oído
A	24/10/2012	TSJ	Zaragoza	Vivienda, gastos y pensión
S	26/10/2012	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
S	20/11/2012	JPI	Ejea (1)	Atribución domicilio familiar
S	22/11/2012	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
A	22/11/2012	TSJ	Zaragoza	Guarda y custodia
S	27/11/2012	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
S	29/11/2012	JPI	Calatayud	Custodia compartida
S	03/12/2012	JPI	Calatayud	Custodia compartida
A	12/12/2012	AP	Zaragoza (2)	Cambio de guarda
A	17/12/2012	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
S	18/12/2012	AP	Zaragoza (2)	Custodia compartida
S	19/12/2012	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
S	20/12/2012	TSJ	Zaragoza	Pensión de alimentos
S	21/12/2012	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
A	21/12/2012	TSJ	Zaragoza	Guarda y custodia. Alimentos

65. Tutela, adopción y Junta de Parientes.

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	01/12/1990	JPI	Zaragoza (6)	aut..fam.,J.de Parientes,abuelos
A	17/03/1993	TSJ	Zaragoza	Tutela
S	03/06/1993	JPI	Huesca (2)	Adopción
S	30/07/1993	JPI	Boltaña	Junta de Parientes
S	11/10/1993	AP	Huesca	Adopción
S	30/07/1994	AP	Huesca	Junta de Parientes
S	13/06/1995	TSJ	Zaragoza	Junta de parientes
S	14/02/1997	AP	Huesca	Tutela
A	19/02/1998	JPI	Boltaña	Junta de Parientes
A	04/05/1998	AP	Huesca	Junta de Parientes
A	25/11/1998	AP	Huesca	Junta de Parientes
S	17/03/2000	JPI	Ejea (2)	Junta de Parientes
A	12/04/2000	AP	Huesca	tutela, enajenación bienes
A	15/09/2000	JPI	Zaragoza (14)	tutela, pareja de hecho
S	25/02/2002	AP	Zaragoza (2)	Adopción
A	16/04/2003	AP	Zaragoza (2)	Junta de Parientes
S	30/04/2003	JPI	Zaragoza (14)	Junta de Parientes
S	05/04/2005	AP	Zaragoza (2ª)	privación p.potestad.Adopción.
S	6/02/2008	AP	Zaragoza (2)	Curatela
S	15/04/2008	AP	Zaragoza (2)	Nombramiento curador
S	15/04/2008	AP	Zaragoza (2)	Nombramiento curador
S	29/07/2008	AP	Zaragoza (2)	Nombramiento curador
S	29/07/2008	AP	Zaragoza (2)	Acogimiento preadoptivo
S	04/01/2010	TSJ	Zaragoza	Tutela administrativa ex lege
S	08/04/2010	AP	Zaragoza (2)	Autotutela
S	22/04/2010	AP	Zaragoza (2)	Adopción
S	11/05/2010	AP	Zaragoza (2)	Elección de tutor
A	01/06/2010	AP	Zaragoza (2)	Acogimiento preadoptivo
A	16/06/2010	AP	Zaragoza (2)	Tutela
S	22/06/2010	AP	Zaragoza (2)	Adopción
A	12/07/2010	TSJ	Zaragoza	Tutela administrativa ex lege
S	20/07/2010	AP	Zaragoza (2)	Elección de curador
S	30/07/2010	AP	Huesca	Separación de cargos tutelares
A	04/10/2010	TSJ	Zaragoza	Privación autoridad familiar. Adopción
A	03/11/2010	AP	Zaragoza (2)	Acogimiento preadoptivo
S	23/11/2010	AP	Zaragoza (2)	Desamparo. Suspensión autoridad familiar
S	09/12/2010	AP	Zaragoza (2)	Tutela.
A	31/01/2011	TSJ	Zaragoza	Privación autoridad familiar. Tutela ex lege. Requisitos acceso a la casación: Interés del menor.
S	21/03/2011	JPI	Ejea (1)	Curatela
S	05/04/2011	TSJ	Zaragoza	Adopción. Necesidad de asentimiento. Denegación de prueba
A	03/05/2011	AP	Zaragoza (2)	Remoción de tutor

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
A	03/05/2011	AP	Zaragoza (2)	Competencia seguimiento tutela
S	10/05/2011	JPI	Ejea (1)	Incapacidad
S	25/05/2011	TSJ	Zaragoza	Desamparo. Suspensión autoridad familiar. Intervención Mº Fiscal
S	05/07/2011	AP	Zaragoza (2)	Incapacidad parcial
S	05/07/2011	JPI	Ejea (1)	Incapacidad
S	08/11/2011	AP	Zaragoza (2)	Desamparo
S	22/11/2011	JPI	Ejea (1)	Incapacidad
A	31/01/2012	AP	Huesca	Incapacitación y tutela. Prueba en el proceso
S	01/02/2012	AP	Zaragoza (2)	Incapacitación
S	21/02/2012	AP	Zaragoza (2)	Tutela
S	06/03/2012	JPI	Ejea (1)	Incapacitación
S	06/03/2012	JPI	Ejea (1)	Incapacitación parcial
S	09/05/2012	AP	Zaragoza (2)	Incapacitación. Visitas
S	31/05/2012	AP	Huesca	Curatela. Tratamiento farmacológico
A	10/07/2012	AP	Zaragoza (2)	Acogimiento permanente
A	18/09/2012	AP	Zaragoza (2)	Adopción
S	07/11/2012	AP	Zaragoza (2)	Adopción
S	04/12/2012	TSJ	Zaragoza	Situación de desamparo
S	04/12/2012	JPI	Calatayud	Incapacidad
A	19/12/2012	TSJ	Zaragoza	Desamparo de un menor

662. Régimen paccionado.

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	31/07/1991	JPI	Jaca (1)	consorcio univ. o juntar 2 casas
S	16/03/1992	AP	Huesca	consorcio universal
S	18/03/1992	AP	Teruel	Capitulaciones
S	29/09/1992	TSJ	Zaragoza	consorcio universal
A	22/12/1993	TSJ	Zaragoza	conv. reg. sep.,art. 29 Comp.
S	21/02/1996	AP	Zaragoza (5)	Capitulaciones
S	03/06/1996	JPI	Zaragoza (2)	Capitulaciones
S	12/04/1997	AP	Zaragoza (2)	sep. bs., deudas comunes ant.
S	17/04/1997	JPI	Zaragoza (14)	reg. sep. Bienes
S	05/12/1997	JPI	Tarazona	art. 29 Comp.
S	10/06/1998	AP	Huesca	dación personal, acogimiento
S	27/10/1998	AP	Huesca	Capitulaciones
S	22/12/1998	JPI	Jaca (2)	Capitulaciones
A	25/02/1998	AP	Zaragoza (5)	Capitulaciones
S	20/03/2001	AP	Zaragoza (5)	rescisión capitulaciones
S	16/07/2001	JPI	Calatayud	Capitulaciones
S	30/01/2002	AP	Huesca	interpretación capitulaciones
S	27/03/2002	AP	Zaragoza (5ª)	Capitulaciones
S	19/05/2003	AP	Zaragoza (4ª)	Capitulaciones
S	23/06/2004	TSJ	Zaragoza	capitulaciones (+661)
S	18/01/2005	AP	Huesca	rég. supletorio
S	24/01/2005	AP	Zaragoza (5ª)	rég. separación bienes
S	20/05/2005	AP	Zaragoza (4ª)	rég. separación bienes
S	27/01/2009	AP	Zaragoza (2)	Régimen gananciales
S	15/09/2009	JPI	Huesca (2)	Capitulaciones

663. Régimen legal.

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	15/01/1990	AP	Zaragoza (4)	disolución comunidad
S	06/02/1990	AP	Zaragoza (4)	contratación entre cónyuges
S	21/02/1990	AP	Zaragoza (4)	bienes comunes
S	17/03/1990	AP	Zaragoza (4)	bienes privativos
S	16/04/1990	AP	Zaragoza (4)	litisconsorcio pasivo
S	25/05/1990	AP	Zaragoza (4)	arrend. titularidad conjunta
S	01/06/1990	AP	Zaragoza (4)	arrend. titularidad conjunta
S	06/06/1990	AP	Zaragoza (4)	disp. intervivos cuota-parte
S	27/06/1990	AP	Zaragoza (4)	bienes comunes, presunción
S	20/07/1990	AP	Zaragoza (4)	disolución comunidad
S	11/09/1990	AP	Zaragoza (4)	Administración
S	03/10/1990	AP	Teruel	enajenación bienes privativos
S	03/11/1990	AP	Zaragoza (4)	Litisconsorcio
S	04/11/1990	AP	Zaragoza (4)	naturaleza jca.deudas privativas
S	04/11/1990	AP	Zaragoza (4)	litisconsorcio pasivo
S	20/12/1990	AP	Zaragoza (3)	disposición bs privativos
S	12/01/1991	AP	Zaragoza (4)	bienes comunes, presunción
S	17/01/1991	AP	Zaragoza (4)	deudas de gestión
S	01/02/1991	AP	Zaragoza (4)	adm. comunidad disuelta
S	01/02/1991	AP	Zaragoza (4)	bienes comunes,gestión
S	26/02/1991	AP	Zaragoza (4)	bienes comunes,disposición
S	19/04/1991	AP	Zaragoza (4)	bienes privativos
S	01/07/1991	JPI	La Almunia	bienes comunes, presunción
S	17/09/1991	AP	Zaragoza (4)	bienes comunes, presunción
S	18/10/1991	JPI	La Almunia	deudas comunes
S	19/10/1991	AP	Zaragoza (2)	deudas comunes
S	21/11/1991	AP	Teruel	liquidación comunidad conyugal
S	26/11/1991	AP	Zaragoza (4)	deud. comunes anteriores. a capítulos separación de bienes
S	07/12/1991	AP	Zaragoza (2)	bienes comunes
S	10/12/1991	AP	Zaragoza (2)	deudas comunes, capítulos
S	20/12/1991	AP	Zaragoza (4)	presunción de bienes comunes
S	13/02/1992	TSJ	Zaragoza	enaj. bien parcialmente común
S	02/03/1992	AP	Huesca	administración bs. Comunes
S	05/03/1992	AP	Huesca	deudas comunes,comerciante
S	18/03/1992	AP	Teruel	capitulaciones,cargas comunes
S	25/03/1992	TSJ	Zaragoza	disposición bienes comunes
S	04/04/1992	AP	Zaragoza (2)	liq. y división comunidad,divorcio
S	18/04/1992	TS	Madrid	responsab. por deudas comunes
S	21/04/1992	AP	Zaragoza (4)	deudas comunes, liq. Comunidad
S	18/06/1992	TSJ	Zaragoza	disposición de bienes
S	30/09/1992	AP	Zaragoza (5)	bienes comunes
S	09/11/1992	AP	Zaragoza (2)	disposición de bienes comunes
S	11/11/1992	AP	Zaragoza (2)	bs comunes,indemniz. Despido

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	01/12/1992	AP	Zaragoza	liquidación y división comunidad
A	10/12/1992	AP	Zaragoza (2)	disolución comunidad
S	16/12/1992	AP	Zaragoza (4)	liquidación comunidad
S	22/12/1992	AP	Teruel	bienes comunes y privativos
S	23/03/1993	TSJ	Zaragoza	liquidación comunidad
S	25/05/1993	AP	Huesca	presunción bs. comunes, gestión
S	13/10/1993	AP	Zaragoza (5)	gestión comunidad
S	13/11/1993	JPI	La Almunia	presunción bienes comunes
S	16/12/1993	JPI	Huesca (2)	liquidación y división comunidad
S	31/12/1993	TSJ	Zaragoza	bienes privativos
S	20/01/1994	AP	Huesca	Dº. transitorio. Apéndice
A	21/02/1994	AP	Zaragoza	deudas posteriores privativas
S	25/04/1994	AP	Zaragoza (5)	cargas de la comunidad
S	18/05/1994	JPI	Zaragoza (2)	bienes comunes, liquidación
S	28/06/1994	AP	Zaragoza (5)	deudas posteriores privativas
S	26/07/1994	AP	Huesca	disolución comunidad
S	01/09/1994	JPI	Jaca (2)	disposición vivienda habitual
S	13/09/1994	JPI	Teruel (1)	cargas comunes
S	24/09/1994	AP	Zaragoza (2)	disolución comunidad
S	26/09/1994	JPI	Fraga	disolución comunidad
S	13/10/1994	AP	Zaragoza (5)	gestión comunidad
S	26/10/1994	AP	Zaragoza (5)	Renuncia a liquidac. Comunidad
S	14/11/1994	AP	Zaragoza (2)	disolución comunidad
S	07/12/1994	JPI	Boltaña	bienes privativos, deudas
S	13/12/1994	AP	Huesca	bienes privativos, deudas
S	15/12/1994	AP	Huesca	régimen legal
S	19/12/1994	AP	Zaragoza (5)	presunción comunidad
S	04/02/1995	AP	Zaragoza (2)	deudas posteriores privativas
S	18/02/1995	TS	Madrid	gestión comunidad
S	10/03/1995	JPI	Zaragoza (3)	disposición bienes. Comunes
S	31/01/1995	JPI	Zaragoza (14)	cargas de la comunidad
S	21/02/1995	JPI	Zaragoza (6)	bienes privativos
S	22/03/1995	AP	Zaragoza (5)	gestión, deudas
S	10/04/1995	TSJ	Zaragoza	gestión comunidad
S	12/04/1995	AP	Zaragoza (5)	bienes comunes y privativos
S	19/04/1995	AP	Zaragoza (2)	Aventajas
S	24/04/1995	AP	Huesca	deudas posteriores privativas
S	10/05/1995	JPI	Zaragoza (13)	bienes privativos
S	24/05/1995	TS	Madrid	gestión comunidad
S	25/05/1995	AP	Huesca	vivienda familiar
S	13/06/1995	TSJ	Zaragoza	disolución, donaciones
S	10/07/1995	AP	Huesca	bienes privativos
S	14/07/1995	AP	Zaragoza (5)	gestión comunidad
S	19/07/1995	JPI	Zaragoza (13)	gestión comunidad
S	05/10/1995	AP	Huesca	bienes privativos
S	08/01/1996	JPI	Zaragoza (14)	cargas de la comunidad

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	18/01/1996	JPI	Zaragoza (13)	disolución comunidad
S	12/02/1996	TSJ	Zaragoza	disolución, aplicac. Apéndice
S	08/03/1996	JPI	Zaragoza (13)	gestión comunidad
S	15/03/1996	AP	Huesca	bienes privativos
A	21/03/1996	JPI	Huesca (2)	bienes comunes y privativos
S	10/04/1996	AP	Zaragoza (4)	disolución comunidad
S	02/05/1996	AP	Zaragoza (5)	disoluc., pensión compensat.
S	12/07/1996	JPI	Teruel (1)	disolución comunidad
S	31/07/1996	JPI	Teruel (1)	disolución comunidad
S	29/10/1996	AP	Huesca	bs. privativos, disposic.
S	18/11/1996	JPI	Zaragoza (14)	gestión comunidad
S	28/11/1996	AP	Huesca	disolución comunidad
S	29/11/1996	TSJ	Zaragoza	disolución comunidad
S	20/12/1996	TSJ	Zaragoza	cargas de la comunidad
S	12/04/1997	AP	Zaragoza	cargas de la comunidad
S	14/04/1997	JPI	Huesca (2)	liquidación comunidad
S	17/04/1997	AP	Huesca	presunción comunidad
S	07/05/1997	AP	Huesca	bienes comunes y privativos
A	12/05/1997	AP	Zaragoza (5)	cargas comunidad
S	26/05/1997	AP	Teruel	presunción comunidad
S	10/06/1997	AP	Huesca	gestión comunidad
S	13/06/1997	JPI	Zaragoza (14)	disolución comunidad
S	18/06/1997	JPI	Tarazona	disolución comunidad
S	25/06/1997	AP	Zaragoza (5)	cargas comunidad
S	18/09/1997	AP	Huesca	cargas comunidad
A	03/12/1997	AP	Zaragoza (5)	liquidación comunidad
S	05/12/1997	JPI	Tarazona	cargas comunidad
S	10/12/1997	JPI	Huesca (2)	liquidación comunidad
A	26/12/1997	JPI	Ejea (1)	disolución comunidad
S	13/01/1998	AP	Zaragoza (5)	bienes comunes
S	07/02/1998	JPI	Monzón	bienes privativos
S	10/02/1998	JPI	Zaragoza (13)	liquidación comunidad
S	12/02/1998	AP	Huesca	bienes comunes y privativos
S	19/02/1998	AP	Zaragoza (5)	disolución comunidad
S	24/02/1998	JPI	Zaragoza (14)	deudas comunes
S	07/04/1998	AP	Zaragoza (4)	deudas posteriores privativas
S	28/04/1998	JPI	Huesca (2)	bienes comunes
S	20/05/1998	AP	Huesca	disolución comunidad
S	29/05/1998	JPI	Zaragoza (14)	deudas comunes, disoluc. com.
S	25/06/1998	JPI	Zaragoza (14)	deudas y bienes privativos
S	27/07/1998	JPI	La Almunia	cargas comunidad
S	28/09/1998	TS	Madrid	disposición bienes comunes
A	14/10/1998	AP	Huesca	liquidación comunidad
S	27/10/1998	AP	Teruel	liquidación comunidad
S	09/11/1998	AP	Zaragoza (4)	liquidación comunidad
S	16/11/1998	AP	Huesca	bienes y deudas privativas

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	16/11/1998	JPI	La Almunia	disposición bienes comunes
S	25/11/1998	TSJ	Zaragoza	liquidación comunidad
S	11/12/1998	JPI	Zaragoza (2)	liquidación comunidad
S	22/12/1998	JPI	Jaca (2)	disolución comunidad
S	23/11/1998	AP	Teruel	liquidación comunidad
S	02/12/1998	AP	Zaragoza (5)	liquidación comunidad
S	29/01/1999	AP	Huesca	disoluc. com.,deudas comunes
S	26/02/1999	TSJ	Zaragoza	bienes comunes
A	26/02/1999	AP	Huesca	liquidación comunidad
S	22/03/1999	AP	Teruel	disposición bienes comunes
S	20/04/1999	AP	Zaragoza (5ª)	deudas comunes
S	07/05/1999	AP	Zaragoza (5ª)	Ajuar
S	20/05/1999	AP	Zaragoza (5ª)	bienes comunes
S	24/05/1999	TSJ	Zaragoza	bienes comunes
S	31/05/1999	AP	Teruel	bienes comunes
S	03/06/1999	JPI	Zaragoza (2)	bienes comunes
S	14/06/1999	AP	Zaragoza (5ª)	disposición bienes comunes
S	28/06/1999	AP	Zaragoza (4ª)	liquidación comunidad
A	15/07/1999	AP	Huesca	liquidación comunidad
S	20/07/1999	AP	Zaragoza (2ª)	disolución comunidad
S	10/09/1999	JPI	Zaragoza (14)	bienes privativos
S	10/09/1999	JPI	Zaragoza (14)	deudas comunes
S	27/09/1999	AP	Zaragoza (4ª)	liquidación comunidad
S	06/10/1999	TSJ	Zaragoza	deudas comunes
S	27/10/1999	AP	Zaragoza (5ª)	deudas comunes
S	02/11/1999	JPI	Zaragoza (14)	bienes comunes
S	16/11/1999	AP	Zaragoza (5ª)	bienes comunes
S	07/12/1999	AP	Huesca	liquidación comunidad
S	09/12/1999	AP	Teruel	bienes privativos
S	09/12/1999	AP	Zaragoza (5)	bienes comunes
S	11/12/1999	JPI	Huesca (2)	gestión comunidad
S	18/01/2000	AP	Huesca	liquidación comunidad
S	19/01/2000	AP	Zaragoza (5)	liquidación comunidad
S	21/01/2000	AP	Teruel	liquidación comunidad
S	08/02/2000	JPI	Zaragoza (14)	deudas comunes
S	30/03/2000	AP	Zaragoza (5)	gestión comunidad
S	09/05/2000	TSJ	Zaragoza	liquidación comunidad
S	12/06/2000	AP	Zaragoza (4)	liquidación comunidad
S	03/07/2000	AP	Teruel	deudas comunes, disoluc. com.
S	07/07/2000	AP	Zaragoza (2)	deudas posteriores privativas
S	14/07/2000	JPI	Zaragoza (1)	liquidación comunidad
S	24/07/2000	AP	Zaragoza (4)	deudas comunes
S	26/07/2000	AP	Zaragoza (5)	deudas comunes
S	02/10/2000	AP	Zaragoza (4)	deudas comunes
S	06/10/2000	TSJ	Zaragoza	liquidación comunidad
S	25/10/2000	AP	Huesca	liquidación comunidad

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	04/12/2000	AP	Zaragoza (5)	bienes comunes
S	05/02/2001	AP	Zaragoza (4)	impugnación liquidación
S	06/02/2001	AP	Zaragoza (2)	liquidación comunidad
A	14/02/2001	AP	Zaragoza (4)	liquidación y embargo
S	26/02/2001	AP	Zaragoza (4)	bienes privativos
S	28/02/2001	AP	Huesca	liquidación comunidad
S	09/03/2001	JPI	Zaragoza (14)	presunción comunidad
A	09/04/2001	JPI	Zaragoza (14)	deudas comunes
S	18/04/2001	AP	Zaragoza (4)	liquidación comunidad
S	27/04/2001	AP	Zaragoza (5)	deudas comunes
S	08/05/2001	AP	Zaragoza (2)	bienes privativos
S	09/05/2001	AP	Zaragoza (5)	bienes comunes
S	21/05/2001	AP	Zaragoza (2)	liquidación comunidad
S	21/05/2001	AP	Zaragoza (4)	liquidación comunidad
S	22/06/2001	AP	Huesca	liquidación cauce procesal
S	22/06/2001	AP	Zaragoza (5)	Reintegros
S	05/07/2001	JPI	Teruel (2)	liquidación comunidad
S	30/07/2001	AP	Zaragoza (5)	cargas de la comunidad
S	31/07/2001	JPI	Calatayud (2)	liquidación comunidad
S	08/10/2001	AP	Zaragoza (2)	liquidación comunidad
S	09/10/2001	AP	Huesca	liquidación comunidad
S	24/10/2001	JPI	Huesca (2)	liquidación comunidad
S	25/10/2001	JPI	Zaragoza (14)	cargas de la comunidad
S	30/10/2001	AP	Zaragoza (4)	liquidación comunidad
A	13/11/2001	AP	Zaragoza (4)	liquidación cauce procesal
S	13/11/2001	AP	Zaragoza (4)	liquidación comunidad
S	15/11/2001	JPI	Zaragoza (14)	liquidación comunidad
S	26/11/2001	AP	Zaragoza (4)	liquidación comunidad
S	17/01/2002	AP	Huesca	deudas comunes
S	08/03/2002	AP	Huesca	disposición bienes privativos
S	27/03/2002	AP	Zaragoza (5)	deudas comunes
S	20/02/2002	AP	Teruel	deudas comunes
S	22/02/2002	TSJ	Aragón	bienes privativos
S	08/03/2002	AP	Zaragoza (2)	deudas comunes
S	18/03/2002	AP	Zaragoza (2)	bien privativo: vivienda
S	08/04/2002	AP	Zaragoza (2)	pasivo comunidad
S	29/04/2002	JPI	Calatayud (1)	presunción comunidad
S	02/05/2002	AP	Zaragoza (5)	pasivo comunidad
S	07/05/2002	AP	Zaragoza (2)	bienes comunes, privativos
S	28/05/2002	AP	Zaragoza (2)	liquidación comunidad
S	03/06/2002	AP	Zaragoza (2)	bienes privativos
S	08/06/2002	AP	Teruel	liquidación comunidad
S	17/06/2002	AP	Zaragoza (2)	liquidación comunidad
A	09/07/2002	JPI	Zaragoza (14)	deudas comunes
S	31/07/2002	AP	Zaragoza (5)	liquidación comunidad
S	16/09/2002	AP	Zaragoza (2)	liquidación comunidad

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	03/10/2002	JPI	Zaragoza (14)	gestión comunidad
S	04/10/2002	JPI	Zaragoza (14)	gestión comunidad
S	29/10/2002	AP	Huesca	liquidación comunidad
S	04/12/2002	AP	Teruel	bienes privativos
A	30/01/2003	AP	Huesca	liquidación comunidad
S	17/02/2003	AP	Zaragoza (2ª)	liquidación comunidad
S	27/02/2003	AP	Huesca	gestión comunidad
S	11/03/2003	AP	Zaragoza (2ª)	liquidación comunidad
S	24/03/2003	AP	Zaragoza (2ª)	liquidación comunidad
S	28/03/2003	JPI	Zaragoza (14)	pasivo comunidad
A	09/06/2003	AP	Zaragoza (4ª)	liquidación comunidad
S	10/06/2003	AP	Huesca	liquidación comunidad
S	12/06/2003	AP	Huesca	pasivo comunidad
S	20/06/2003	AP	Zaragoza (4ª)	liquidación comunidad
S	07/07/2002	TSJ	Aragón	pasivo comunidad
S	14/07/2003	AP	Zaragoza (5ª)	bienes comunes
S	17/07/2003	JPI	Zaragoza (17)	bienes comunes
S	30/07/2003	AP	Zaragoza (4ª)	liquidación comunidad
S	08/09/2003	AP	Zaragoza (4ª)	liquidación comunidad
S	24/09/2003	AP	Zaragoza (5ª)	bienes comunes
S	09/10/2003	JPI	Zaragoza (17)	gestión comunidad
S	22/10/2003	JPI	Zaragoza (17)	comunidad postconsorcial
S	23/10/2003	AP	Zaragoza (5ª)	liquidación comunidad
S	28/10/2003	AP	Huesca	bienes comunes
S	06/11/2003	JPI	Calamocha	liquidación comunidad
S	18/11/2003	JPI	Zaragoza (2)	bienes comunes
S	26/12/2003	AP	Zaragoza (5ª)	liquidación comunidad
S	21/01/2004	AP	Zaragoza	Liquidación, inventario parcial
A	26/01/2004	JPI	Zaragoza (5)	pasivo comunidad
S	02/02/2004	JPI	Zaragoza (6)	Inventario
S	04/02/2004	JPI	Teruel (1)	bienes privativos
S	06/02/2004	JPI	Teruel (1)	disolución com. Hereditaria
S	11/02/2004	AP	Zaragoza	liquidación inventario
S	18/02/2004	JPI	Zaragoza (6)	liquidación, partición, oposición
S	19/02/2004	AP	Zaragoza	liquidación sociedad
S	10/03/2004	AP	Huesca	Liquidación
S	24/03/2004	JPI	Zaragoza (6)	Inventario
S	25/03/2004	AP	Zaragoza	Liquidación
S	12/04/2004	AP	Zaragoza	liquidación inventario
S	26/04/2004	JPI	Zaragoza (6)	partición oposición
S	05/05/2004	JPI	Zaragoza (6)	Inventario
S	17/05/2004	JPI	Zaragoza (6)	Inventario
S	05/05/2004	JPI	Zaragoza (6)	inventario, liquidación
S	01/06/2004	JPI	Jaca (1)	bienes comunes
S	18/06/2004	JPI	Zaragoza (6)	liquidación, valoración VPO
S	29/06/2004	JPI	Zaragoza (6)	inventario, bienes muebles

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	09/07/2004	JPI	Zaragoza (6)	liquidación, pasivo
S	19/07/2004	JPI	Zaragoza (6)	Inventario
S	13/09/2004	AP	Zaragoza	liquidación dos comunidades
S	20/09/2004	JPI	Calamocha (1)	bienes comunes
S	20/09/2004	AP	Zaragoza	liquidación inventario
S	30/09/2004	AP	Zaragoza	inventario
S	08/10/2004	JPI	Zaragoza (6)	Liquidación
S	10/11/2004	AP	Huesca	Liquidación
S	11/10/2004	JPI	Zaragoza (6)	
S	15/10/2004	JPI	Zaragoza (6)	Liquidación
S	18/10/2004	JPI	Zaragoza (6)	Liquidación
S	22/10/2004	JPI	Zaragoza (12)	comunidad post consorcial
S	26/10/2004	JPI	Zaragoza (17)	comunidad post consorcial
S	26/10/2004	AP	Zaragoza	disolución, retroacción efectos
S	26/10/2004	AP	Zaragoza	Inventario
S	28/10/2004	JPI	Calamocha (1)	Liquidación
S	02/11/2004	AP	Zaragoza	disolución
S	03/11/2004	JPI	Zaragoza (6)	Liquidación
A	04/11/2004	AP	Zaragoza	
S	09/11/2004	JPI	Barbastro	Liquidación
S	09/11/2004	AP	Zaragoza	Inventario
S	15/11/2004	AP	Zaragoza	Liquidación
S	22/11/2004	JPI	Zaragoza (6)	Liquidación
S	25/11/2004	AP	Zaragoza	
S	10/12/2004	JPI	Zaragoza (6)	Liquidación
S	10/12/2004	AP	Zaragoza	Liquidación
S	13/12/2004	JPI	Monzón (2)	disposición bienes comunes
A	15/12/2004	AP	Zaragoza	Liquidación
S	20/12/2004	TSJ	Zaragoza	comunidad post matrimonial
A	22/12/2004	AP	Zaragoza	comunidad pasivo
S	22/12/2004	JPI	Zaragoza (6)	Liquidación
S	27/12/2004	AP	Zaragoza	liquidación inventario
S	28/12/2004	JPI	Zaragoza (6)	Liquidación
S	10/01/2005	AP	Zaragoza (2ª)	deuda común
S	24/01/2005	TSJ	Aragón C-A S2ª	rel. entre patrimonios
S	01/02/2005	AP	Zaragoza (2ª)	Liquidación
S	07/02/2005	TSJ	Aragón C-A S2ª	rel. entre patrimonios
S	07/02/2005	AP	Zaragoza (4ª)	gestión bienes comunes
S	14/02/2005	AP	Zaragoza (5ª)	b. Comunes.ampliac o restricc.cdad
S	07/03/2005	AP	Zaragoza (5ª)	b. comunes y privativos
S	17/03/2005	AP	Zaragoza (5ª)	liquidación. Vivienda familiar
S	18/03/2005	AP	Zaragoza (5ª)	Liquidación
S	22/03/2005	AP	Zaragoza (5ª)	Liquidación
S	05/04/2005	AP	Teruel	Liquidación
S	11/05/2005	TSJ	Aragón (S. Civil)	liquidación. B. comunes y privat.
A	16/05/2005	JPI	Zaragoza (14)	gestión bienes comunes

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
A	19/05/2005	AP	Zaragoza (4ª)	liquidación y división
S	25/05/2005	AP	Zaragoza (4ª)	b. comunes y privativos
S	01/06/2005	TSJ	Aragón (Sala Civil)	b.comunes y privativos
S	06/06/2005	AP	Zaragoza (4ª)	gestión bienes comunes
S	01/07/2005	AP	Zaragoza (2ª)	Liquidación
S	01/07/2005	AP	Huesca	Liquidación
S	08/07/2005	TSJ	Aragón (Sala Civil)	Liquidación
S	22/07/2005	AP	Zaragoza (5ª)	cargas comunidad
S	21/09/2005	AP	Zaragoza (5ª)	Liquidación
S	20/10/2005	AP	Zaragoza (4ª)	b. privativos y comunes
S	09/11/2005	TSJ	Aragón (Sala Civil)	Liquidación
S	17/11/2005	AP	Zaragoza (5ª)	Liquidación
S	30/12/2005	AP	Zaragoza (5ª)	tercería de dominio
S	13/01/2006	AP	Zaragoza (5ª)	pasivo de la comunidad
S	16/01/2006	AP	Zaragoza (4ª)	b. comunes y privativos
S	31/01/2006	AP	Zaragoza (5ª)	inventario y liquidación
S	01/02/2006	AP	Zaragoza (2ª)	Liquidación
A	01/02/2006	AP	Zaragoza (2ª)	pasivo comunidad
S	09/02/2006	AP	Zaragoza (5ª)	Liquidación
S	27/02/2006	TSJ	Aragón (Sala Civil)	presunción consorcialidad
S	27/02/2006	AP	Teruel	disolución soc. conyugal
S	20/03/2006	AP	Zaragoza (5ª)	Liquidación
S	27/03/2006	AP	Zaragoza (5ª)	Liquidación
A	28/03/2006	AP	Zaragoza (2ª)	pasivo comunidad
S	03/03/2006	AP	Zaragoza (5ª)	división y liquidación soc. conyugal
S	05/04/2006	AP	Zaragoza (5ª)	Liquidación
S	21/04/2006	AP	Teruel	liquidación soc. conyugal
A	19/05/2006	JPI	Zaragoza (14)	pasivo de la comunidad
S	31/05/2006	AP	Zaragoza (5ª)	Liquidación
S	08/06/2006	JPI	Monzón (1)	Disolución
S	16/06/2006	AP	Huesca	b. comunes y privativos
S	23/06/2006	JPI	Zaragoza (2)	inventario, liquidación
S	04/07/2006	JPI	Zaragoza (16)	Inventario,liquidación
S	13/07/2006	JPI	Ejea (2)	Liquidación
S	19/07/2006	AP	Teruel	presunción consorcialidad
S	22/09/2006	JPI	Monzón (1)	Disolución
S	20/10/2006	TSJ	Aragón (Sala Civil)	Liquidación
S	23/10/2006	JPI	Ejea (2)	Liquidación
S	24/10/2006	AP	Teruel	b. comunes y privativos
S	08/11/2006	AP	Huesca	b. comunes y privativos
S	30/11/2006	AP	Huesca	gestión b. comunes
S	11/12/2006	TSJ	Aragón (S. Civil)	pasivo de la comunidad
S	19/12/2006	AP	Huesca	división y liquidación

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	22/12/2006	JPI	Teruel (2)	pacto al más viviente
S	18/12/2007	AP	Teruel	Bienes comunes y privativos
S	9/01/2007	TSJA	Aragón	Bienes comunes y privativos
S	23/01/2007	AP	Huesca	Bienes comunes y privativos
S	27/03/2007	AP	Zaragoza (2ª)	Bienes comunes y privativos
S	13/04/2007	AP	Zaragoza (2ª)	Bienes comunes y privativos
S	2/05/2007	AP	Zaragoza (2ª)	Bienes comunes y privativos
S	26/06/2007	AP	Zaragoza (2ª)	Bienes comunes y privativos
S	12/09/2007	JPI	Zaragoza 17	Bienes comunes y privativos
S	26/09/2007	TSJA	Aragón	Bienes comunes y privativos
S	28/09/2007	TSJA	Aragón	Bienes comunes y privativos
S	26/11/2007	JPI	Calatayud 2	Activo y pasivo de la Cdad. consorcial
S	15/03/2007	TSJA	Aragón	Gestión de la comunidad
A	2/04/2007	JPI	Zaragoza 14	Gestión de los bienes comunes
S	8/05/2007	JPI	Zaragoza 14	Gestión de la comunidad
S	21/05/2007	AP	Zaragoza (5ª)	Gestión de los bienes comunes
S	22/05/2007	JPI	Zaragoza 14	Gestión de los bienes comunes
S	26/011/2007	TSJA	Aragón	Gestión de la Comunidad
S	19/03/2007	AP	Huesca	Disolución de la Comunidad
S	6/09/2007	AP	Huesca	Disolución de la Comunidad
S	12/03/2007	JPI	Teruel 2	Liquidación de la comunidad
S	2/07/2007	AP	Zaragoza (5ª)	Liquidación de la Comunidad
S	29/10/2007	AP	Huesca	Liquidación de la Comunidad
S	30/04/2008	AP	Zaragoza (2)	Bienes comunes y privativos
S	24/06/2008	AP	Teruel	Bienes comunes y privativos
S	29/02/2008	AP	Huesca	Pasivo de la comunidad
S	8/05/2008	JPI	Zaragoza (14)	Pasivo de la comunidad
A	4/11/2008	JPI	Zaragoza (14)	Pasivo de la comunidad
S	31/01/2008	AP	Huesca	Gestión bienes comunes
S	16/01/2008	JPI	Zaragoza (6)	Liquidación
S	21/01/2008	JPI	Zaragoza (6)	Liquidación
S	28/01/2008	JPI	Zaragoza (6)	Liquidación
S	20/02/2008	JPI	Zaragoza (6)	Liquidación
S	31/03/2008	JPI	Zaragoza (6)	Liquidación
S	31/03/2008	JPI	Zaragoza (6)	Liquidación
S	11/04/2008	JPI	La Almunia (1)	Inventario
S	25/04/2008	JPI	Zaragoza (6)	Liquidación
S	29/04/2008	JPI	Zaragoza (6)	Liquidación
S	12/05/2008	JPI	Zaragoza (6)	Liquidación
A	20/05/2008	AP	Zaragoza (2)	Liquidación
S	10/06/2008	AP	Zaragoza (2)	Liquidación
S	24/06/2008	AP	Zaragoza (2)	Liquidación
S	1/07/2008	AP	Zaragoza (2)	Liquidación
S	8/07/2008	AP	Zaragoza (2)	Liquidación
S	9/07/2008	JPI	Zaragoza (6)	Liquidación
S	9/07/2008	JPI	Zaragoza (6)	Liquidación

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	10/07/2008	JPI	Zaragoza (16)	Liquidación
S	14/07/2008	JPI	Zaragoza (6)	Liquidación
S	18/07/2008	JPI	Zaragoza (6)	Liquidación
S	22/07/2008	AP	Zaragoza (2)	Liquidación
S	25/07/2008	JPI	Zaragoza (6)	Liquidación
S	9/09/2008	AP	Zaragoza (2)	Liquidación
S	12/09/2008	JPI	Zaragoza (6)	Liquidación
S	26/09/2008	JPI	Zaragoza (6)	Liquidación
S	30/09/2008	AP	Huesca	Liquidación
S	8/10/2008	JPI	Zaragoza (6)	Liquidación
S	14/10/2008	JPI	Zaragoza (6)	Liquidación
S	5/11/2008	JPI	Zaragoza (6)	Liquidación
S	17/11/2008	AP	Huesca	Liquidación
S	19/11/2008	JPI	Zaragoza (6)	Liquidación
S	3/12/2008	JPI	Zaragoza (6)	Liquidación
S	10/12/2008	JPI	Zaragoza (6)	Liquidación
S	19/12/2008	AP	Huesca	Liquidación
S	29/01/2009	AP	Teruel	Bienes comunes y privativos
S	25/03/2009	JPI	Huesca (2)	Bienes comunes y privativos
S	03/04/2009	AP	Huesca	Bienes comunes y privativos
S	15/07/2009	AP	Zaragoza (4)	Bienes comunes y privativos
S	03/09/2009	JPI	Zaragoza (3)	Bienes comunes y privativos
S	24/09/2009	JPI	Daroca	Bienes comunes y privativos
S	23/10/2009	AP	Zaragoza (4)	Bienes comunes y privativos
S	14/07/2009	TSJA	Sala de lo Civil	Pasivo de la comunidad
S	15/10/2009	AP	Huesca	Pasivo de la comunidad
S	20/10/2009	AP	Zaragoza (5)	Gestión de los bienes comunes
S	03/02/2009	JPI	Zaragoza (6)	Disolución de la comunidad
S	05/02/2009	JPI	Zaragoza (6)	Disolución de la comunidad
S	03/03/2009	AP	Zaragoza (2)	Disolución de la comunidad
S	06/05/2009	AP	Zaragoza (2)	Disolución de la comunidad
S	08/09/2009	JPI	Zaragoza (6)	Disolución de la comunidad
S	09/01/2009	JPI	Zaragoza (6)	Liquidación de la comunidad
S	23/01/2009	AP	Zaragoza (4)	Liquidación de la comunidad
S	20/02/2009	AP	Teruel	Liquidación de la comunidad
S	10/03/2009	AP	Teruel	Liquidación de la comunidad
S	26/05/2009	AP	Huesca	Liquidación de la comunidad
S	09/06/2009	AP	Zaragoza (2)	Liquidación de la comunidad
S	15/06/2009	AP	Zaragoza (5)	Liquidación de la comunidad
S	30/06/2009	AP	Zaragoza (2)	Liquidación de la comunidad
S	07/07/2009	AP	Zaragoza (2)	Liquidación de la comunidad
S	09/09/2009	JPI	Zaragoza (6)	Liquidación de la comunidad
S	29/09/2009	AP	Zaragoza (2)	Liquidación de la comunidad
S	21/12/2009	AP	Zaragoza (4)	Liquidación de la comunidad
S	19/01/2010	AP	Zaragoza (2)	Liquidación de la comunidad.
S	26/01/2010	AP	Zaragoza (2)	Liquidación de la comunidad

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
	19/02/2010	AP	Zaragoza (4)	División del patrimonio consorcial
S	23/02/2010	AP	Zaragoza (2)	Liquidación de la comunidad
S	02/03/2010	AP	Zaragoza (2)	Liquidación de la comunidad
S	16/03/2010	JPI	Zaragoza (14)	Liquidación de la comunidad
S	30/03/2010	AP	Zaragoza (2)	Liquidación de la comunidad
A	16/04/2010	TSJ	Zaragoza	Cuestión incidental en procedimiento de liquidación régimen económico matrimonial. Resoluciones recurribles en casación
A	16/04/2010	TSJ	Zaragoza	Formación de inventario. Resoluciones recurribles en casación
S	29/04/2010	AP	Zaragoza (2)	Liquidación de la comunidad
S	11/05/2010	AP	Huesca	Bienes comunes y privativos
S	14/05/2010	TSJ	Zaragoza	Bienes comunes y privativos
A	14/05/2010	TSJ	Zaragoza	Cuestión incidental en procedimiento de liquidación régimen económico matrimonial. Resoluciones recurribles en casación
S	01/06/2010	AP	Zaragoza	Liquidación consorcial. Pasivo del inventario
A	10/06/2010	AP	Zaragoza (4)	Incidente de privaticidad o ganancialidad pasiva
S	24/06/2010	AP	Huesca	Liquidación consorcial. Inventario. Presunción de comunidad
S	15/09/2010	AP	Zaragoza (2)	Liquidación consorcial. Formación de inventario
S	03/11/2010	AP	Zaragoza (2)	Liquidación consorcial. Inventario
S	16/11/2010	AP	Zaragoza (2)	Liquidación consorcial. Inventario
S	16/11/2010	AP	Zaragoza (2)	Disolución sociedad conyugal. Inventario
S	03/12/2010	TSJ	Zaragoza	Bienes comunes y privativos
S	21/12/2010	AP	Zaragoza (2)	Liquidación consorcial. Inventario
S	01/02/2011	AP	Zaragoza (2)	Formación de inventario
S	01/02/2011	AP	Zaragoza (2)	Liquidación de sociedad consorcial
S	08/03/2011	AP	Zaragoza (2)	Liquidación de comunidad
S	21/06/2011	AP	Zaragoza (2)	Liquidación régimen consorcial
S	29/07/2011	AP	Huesca	Inventario judicial de sociedad consorcial
S	04/10/2011	AP	Zaragoza (2)	Liquidación sociedad consorcial
S	08/11/2011	AP	Zaragoza (2)	Liquidación sociedad consorcial. Inventario
S	15/11/2011	AP	Zaragoza (2)	Inventario
S	16/12/2011	AP	Zaragoza (4)	Bienes de la comunidad conyugal
S	20/12/2011	AP	Zaragoza (2)	Inventario
S	30/12/2011	AP	Zaragoza (4)	Pacto extensión de la comunidad
S	17/01/2012	JPI	Zaragoza (14)	Actos de defensa de bien consorcial
S	21/02/2012	AP	Zaragoza (2)	Liquidación sociedad conyugal
S	29/02/2012	TSJ	Zaragoza	Formación y aprobación de inventario
S	27/03/2012	AP	Zaragoza (2)	Liquidación sociedad conyugal
S	11/04/2012	AP	Zaragoza (2)	Liquidación sociedad conyugal
S	24/05/2012	AP	Huesca	Liquidación de sociedad consorcial

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	19/06/2012	AP	Zaragoza (2)	Liquidación de sociedad consorcial
S	04/10/2012	JPI	Zaragoza (14)	Adquisición de inmueble familiar con dinero privativo
S	22/11/2012	TSJ	Zaragoza	Liquidación de sociedad consorcial

67. Comunidad conyugal continuada.

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	30/09/1992	AP	Zaragoza (5)	comunidad conyugal continuada
S	05/12/1995	AP	Teruel	comunidad conyugal continuada
A	16/07/1997	AP	Zaragoza (5)	comunidad conyugal continuada
S	08/02/2000	AP	Huesca	comunidad conyugal continuada
S	31/07/2001	AP	Zaragoza (5)	comunidad conyugal continuada
S	24/05/2002	TSJ	Aragón	comunidad conyugal continuada
S	19/01/2005	AP	Huesca	comunidad post-consorcial
S	01/07/2005	AP	Huesca	comunidad post-consorcial

68. Viudedad.

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	15/01/1990	AP	Zaragoza (4)	Viudedad
S	28/02/1990	TS	Madrid	derecho expectante de viudedad
S	10/04/1990	TS	Madrid	viudedad voluntaria
S	30/04/1990	TS	Madrid	viudedad,transmisión sucesoria
S	27/11/1990	AP	Zaragoza (4)	inventario,fianza,sanc. falta inv.
S	14/12/1990	AP	Huesca	d. expect. de viudedad,renuncia
S	26/02/1991	AP	Zaragoza (4)	derecho expectante de viudedad
S	26/02/1991	JPI	Fraga	viudedad,limitaciones
A	18/04/1991	JPI	Monzón	viudedad,extinción
S	05/05/1991	AP	Zaragoza (4)	expectante,abuso de derecho
S	14/06/1991	AP	Zaragoza (4)	Viudedad
S	16/07/1991	AP	Huesca	viudedad, limitaciones.
A	22/11/1991	JPI	Zaragoza (6)	expectante,extinción judicial
S	13/02/1992	TSJ	Zaragoza	d. expect. de viudedad, renuncia
S	24/03/1992	AP	Zaragoza (4)	viudedad, gastos comunidad
S	08/06/1992	JPI	Ejea (1)	derecho expectante de viudedad
S	24/06/1992	AP	Zaragoza (2)	d. expect. de viudedad, renuncia
S	13/11/1993	JPI	La Almunia	derecho expectante de viudedad
S	30/11/1993	JPI	Huesca (2)	derecho expectante de viudedad
S	07/03/1994	AP	Zaragoza (2)	limitaciones viudedad
S	23/03/1994	AP	Barcelona	renuncia usufructo
S	15/04/1994	JPI	Zaragoza (13)	extinción usufructo vidual
S	11/07/1994	AP	Zaragoza (2)	d. expect. de viudedad, renuncia
S	11/07/1994	TSJ	Zaragoza	viudedad en general
S	26/10/1994	AP	Zaragoza (5)	renuncia viudedad
S	04/04/1995	TSJ	Zaragoza	extinción usufructo vidual
S	20/04/1995	AP	Barcelona (16)	extinción usufructo vidual
S	10/07/1995	AP	Huesca	usufructo vidual
S	05/10/1995	AP	Huesca	bienes excluidos
S	07/02/1996	AP	Zaragoza (5)	renuncia viudedad
S	12/02/1996	TSJ	Zaragoza	viudedad, Apéndice
S	14/05/1996	JPI	Huesca (2)	sanción falta inventario
S	16/09/1996	AP	Zaragoza (4)	limitaciones viudedad
S	29/10/1996	AP	Huesca	derecho expectante de viudedad
S	30/10/1996	TSJ	Zaragoza	d. expect. viudedad, extinción
S	21/05/1997	AP	Zaragoza (2)	intervención nudo-propietarios
S	13/06/1997	JPI	Zaragoza (14)	usufructo vidual
S	18/06/1997	JPI	Tarazona	extinción dº expectante
S	12/09/1997	JPI	Calamocha	extinción usufructo vidual
S	20/09/1997	AP	Zaragoza (5)	usufructo vidual
S	12/01/1998	AP	Zaragoza (5)	usufructo vidual
S	19/12/1998	AP	Zaragoza (5)	derecho expectante de viudedad
S	28/01/1998	AP	Huesca	Inalienabilidad

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	02/02/1998	AP	Zaragoza (5)	usufructo vidual
S	16/02/1998	AP	Zaragoza (5)	usufructo vidual
S	20/02/1998	TS	Madrid	usufructo vidual
A	25/02/1998	AP	Huesca	usufructo vidual
A	26/05/1998	JPI	Zaragoza (14)	usufructo vidual
S	30/07/1998	AP	Huesca	usufructo vidual
S	18/09/1998	TSJ	Aragón	usufructo vidual
S	27/10/1998	JPI	Zaragoza (14)	usufructo vidual
S	11/12/1998	JPI	Zaragoza (2)	extinción expectante
S	04/11/1998	JPI	Zaragoza (12)	usufructo, posesión
S	07/01/1999	JPI	Zaragoza (14)	usufructo vidual
S	07/05/1999	AP	Zaragoza (5ª)	usufructo vidual
S	26/10/1999	JPI	Zaragoza (2)	usufructo vidual
S	06/11/1999	AP	Teruel	extinción usufructo
S	03/01/2000	JPI	Huesca (2)	derecho expectante de viudedad
S	19/04/2000	AP	Zaragoza (5ª)	usufructo vidual
S	21/03/2000	AP	Huesca	usufructo vidual
S	14/04/2000	JPI	Huesca (3)	usufructo vidual
S	10/07/2000	AP	Zaragoza (2ª)	usufructo vidual
S	17/07/2000	AP	Zaragoza (5ª)	usufructo vidual
S	21/11/2000	AP	Huesca	usufructo vidual
S	11/12/2000	AP	Zaragoza (4ª)	usufructo vidual
S	18/06/2001	AP	Zaragoza (5ª)	usufructo vidual
S	22/06/2001	AP	Huesca	usufructo vidual
S	24/07/2001	AP	Teruel	usufructo vidual
S	11/09/2001	JPI	Zaragoza ()	usufructo vidual
A	21/11/2001	JPI	Zaragoza (14)	aval usufructo
S	05/11/2001	TSJ	Aragón	renuncia usufructo
S	26/04/2002	JPI	Teruel (2)	derecho expectante de viudedad
S	30/04/2002	AP	Teruel	extinción usufructo vidual
S	10/09/2002	AP	Teruel	derecho expectante de viudedad
S	24/09/2003	TSJ	Aragón	Extinción
S	04/11/2003	JPI	Zaragoza (4)	extinción usufructo vidual
S	28/11/2003	TSJ	Aragón	usufructo, rec. Revisión
S	09/12/2003	AP	Zaragoza (5)	fianza, extinción
A	28/04/2004	JPI	Zaragoza (14)	Viudedad
S	01/07/2004	AP	Huesca	Viudedad
S	06/07/2004	JPI	Alcañiz (2)	legitimación de usufructuario
S	04/11/2004	JPI	Calamocha (1)	responsabilidad usufructuario
S	07/03/2005	AP	Zaragoza (5ª)	dº expectante de viudedad.extinción
S	08/03/2005	TSJ	Aragón (Sala Civil)	usufructo vidual
S	08/06/2005	AP	Huesca	dº expectante de viudedad
S	27/09/2005	JPI	Zaragoza (4)	dº expectante de viudedad
S	18/11/2005	JPI	Zaragoza (2)	Extinción dº expect. Viudedad
S	02/12/2005	TSJ	Aragón (Sala Civil)	Renuncia dº expectante viudedad

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	21/12/2005	TSJ	Aragón (Sala Civil)	Extinción usufructo viudedad
S	14/02/2006	AP	Zaragoza (2ª)	usufructo vidual
S	14/07/2006	AP	Zaragoza (4ª)	dº expectante de viudedad
S	22/09/2006	JPI	Monzón (1)	dº expectante de viudedad. Extinción
S	05/10/2006	AP	Huesca	dª expectante de viudedad
A	27/03/2007	AP	Zaragoza (2ª)	Dº expectante de viudedad
S	10/04/2007	JPI	Zaragoza 17	Usufructo vidual
S	14/05/2007	JPI	Zaragoza 14	Usufructo vidual
S	17/05/2007	JPI	Zaragoza 3	Usufructo vidual
S	29/05/2007	JPI	Zaragoza 14	Usufructo vidual
S	28/04/2009	AP	Zaragoza (4)	Viudedad
S	06/07/2009	JPI	Zaragoza (3)	Viudedad
S	21/09/2009	AP	Zaragoza (4)	Viudedad
S	17/11/2009	AP	Zaragoza (5)	Usufructo vidual
S	18/11/2009	TSJA	Sala de lo Civil	Usufructo vidual

71. Derecho de Sucesiones. Normas comunes.

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	10/10/1990	JPI	Tarazona	consorcio foral
S	12/11/1990	TS	Madrid	consorcio foral
S	21/12/1990	TS	Madrid	sustitución legal, Dº transit.
S	15/06/1991	AP	Teruel	responsabilidad de heredero
S	27/05/1992	AP	Zaragoza (2)	Renuncia y sustitución legal
S	30/07/1993	JPI	Boltaña	modos delación hereditaria
S	09/10/1993	TSJ	Zaragoza	consorcio foral
S	13/11/1993	JPI	La Almunia	Sucesión en general
S	18/07/1994	AP	Zaragoza (5)	Beneficio de inventario
S	15/11/1994	JPI	Jaca (2)	Colación
S	27/02/1995	AP	Huesca	Dº. transitorio.
S	24/11/1995	JPI	Zaragoza (2)	Colación
S	02/12/1995	AP	Teruel	consorcio foral
S	28/03/1996	JPI	Huesca (2)	consorcio foral
S	13/05/1996	AP	Huesca	consorcio foral
S	05/02/1997	JPI	Calamocha	Colación
A	20/03/1997	AP	Huesca	sustitución legal
S	16/05/1997	JPI	Tarazona	consorcio foral
S	04/06/1997	AP	Zaragoza (2)	Beneficio de inventario
S	14/06/1997	AP	Teruel	Colación
A	29/09/1997	JPI	Tarazona	sustitución legal
A	04/10/1997	JPI	Tarazona	sustitución legal
A	08/10/1997	JPI	Zaragoza (14)	sustitución legal
S	18/11/1997	JPI	Tarazona	consorcio foral
S	28/04/1998	JPI	Huesca (2)	Inventario
S	22/06/1998	JPI	Zaragoza (14)	Beneficio de inventario
A	30/07/1998	AP	Zaragoza (5)	sustitución legal
S	22/10/1998	AP	Zaragoza (4)	consorcio foral
S	27/10/1998	JPI	Zaragoza (14)	Colación
S	30/04/1999	AP	Zaragoza (5ª)	Beneficio de inventario
S	11/05/1999	AP	Zaragoza (5ª)	Beneficio de inventario
S	06/07/1999	AP	Zaragoza (4ª)	Colación
A	29/02/2000	AP	Huesca	deudas del causante
A	22/03/2000	AP	Zaragoza	deudas del causante
S	25/05/2000	JPI	Huesca (2)	Aventajas
S	11/05/2000	JPI	Zaragoza (14)	gastos funeral y entierro
S	07/06/2000	AP	Teruel	sustitución legal
A	16/03/2000	AP	Zaragoza (5ª)	Beneficio de inventario
S	14/06/2001	AP	Huesca	Colación
S	26/04/2002	JPI	Teruel (2)	consorcio foral
S	10/09/2002	AP	Teruel	consorcio foral
A	26/09/2002	JPI	Zaragoza (14)	aceptación herencia
S	21/03/2002	AP	Huesca	administración herencia

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	15/07/2003	JPI	Zaragoza (17)	aceptación herencia
S	05/12/2003	JPI	Tarazona	consorcio foral
A	31/03/2003	AP	Zaragoza (5)	Renuncia
S	28/10/2003	AP	Zaragoza (5)	deudas del causante
S	18/02/2004	AP	Zaragoza	Partición herencia
S	08/10/2004	AP	Huesca	adquisición herencia
S	10/11/2004	AP	Zaragoza	consorcio foral
S	22/02/2005	JPI	Zaragoza (14)	aceptación tácita de la herencia
S	05/07/2005	TSJ	Aragón (Sala Civil)	consorcio foral
S	01/12/2005	AP	Teruel	Sucesión en general
S	22/12/2005	JPI	Zaragoza (17)	aceptación herencia..renuncia.
S	23/01/2006	AP	Zaragoza (4ª)	consorcio foral
A	01/02/2006	AP	Zaragoza (2ª)	consorcio foral
A	21/02/2006	AP	Zaragoza (2ª)	responsabilidad heredero
S	10/03/2006	TSJ	Aragón (Sala Civil)	aceptación herencia
S	01/06/2006	JPI	Zaragoza (14)	responsabilidad del heredero
S	13/03/2006	JPI	Zaragoza (3)	responsabilidad del heredero
S	25/07/2006	JPI	Zaragoza (14)	Sucesión a favor descendientes
A	27/09/2006	JPI	Zaragoza (16)	Interpelación aceptación herencia
S	23/10/2006	AP	Huesca	ley aplicable
S	28/11/2006	JPI	Zaragoza (17)	herencia yacente
A	19/02/2007	AP	Huesca	Plazo para aceptar o repudiar la herencia
A	20/03/2007	JPI	Zaragoza 14	Aceptación herencia
S	19/04/2007	AP	Huesca	Aceptación o repudiación
S	11/05/2007	TSJA	Aragón	Consorcio foral
S	23/05/2007	TSJA	Aragón	Consorcio foral
S	10/10/2007	JPI	Teruel 2	Sucesión en favor descendientes
S	13/03/2008	AP	Zaragoza (4)	División de herencia
A	3/07/2008	JPI	Zaragoza (12)	Excepciones
S	25/01/2008	AP	Zaragoza (4)	Consorcio foral
S	28/02/2008	JPI	Zaragoza (12)	Consorcio foral
S	09/01/2009	AP	Teruel	Sucesión cónyuge viudo
S	18/01/2010	JPI	La Almunia (2)	División de le herencia
S	31/07/2009	AP	Huesca	División de la herencia
S	10/03/2009	TSJA	Sala de lo Civil	Consorcio foral
S	06/03/2012	AP	Zaragoza (5)	Partición de herencia. Inventario
S	26/04/2012	JPI	Ejea (1)	Determinación de masa hereditaria

72. Sucesión testamentaria.

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	14/11/1990	AP	Zaragoza (4)	test. mancom.,irretroactividad
S	12/01/1991	JPI	La Almunia	testamento mancomunado
S	29/05/1991	TSJ	Zaragoza	testamento mancomunado
A	07/09/1991	JPI	Barbastro	test. ante capellán, adveración
S	11/03/1992	AP	Teruel	testamento mancomunado
S	08/09/1993	AP	Zaragoza (4)	testamento notarial
S	30/09/1993	TSJ	Zaragoza	testamento notarial
S	30/11/1993	JPI	Huesca (2)	revocación testamento
S	18/05/1994	JPI	Zaragoza (2)	testamento mancomunado
S	19/12/1994	AP	Zaragoza (5)	revocación test. mancomunado
A	16/12/1995	AP	Zaragoza (2)	testamento mancomunado
S	16/02/1996	TS	Madrid	testamento mancomunado
S	19/04/1996	JPI	Huesca (2)	testamento mancomunado
S	20/09/1996	AP	Zaragoza (5)	revocación testamento
S	14/02/1997	AP	Huesca	testamento mancomunado
S	31/07/1997	AP	Zaragoza (5)	condición testamentaria
A	16/12/1997	JPI	Zaragoza (14)	testamento mancomunado
S	12/01/1998	AP	Zaragoza (5)	testamento mancomunado
S	21/01/1998	AP	Zaragoza (5)	testamento mancomunado
A	12/02/1998	JPI	Zaragoza (2)	testamento mancomunado
A	08/05/1998	JPI	Boltaña	testamento mancomunado
S	28/09/1998	TS	Madrid	disposición testam. bs. comunes
A	18/07/1998	AP	Huesca	testamento mancomunado
S	14/12/1998	AP	Zaragoza (4)	testamento mancomunado
S	28/12/1998	AP	Teruel	nulidad parcial
S	04/03/1999	AP	Zaragoza (5)	testamento mancomunado
S	03/01/1998	JPI	Huesca (2)	testamento mancomunado
S	14/04/2000	JPI	Huesca (3)	nulidad parcial
S	25/05/2000	JPI	Huesca (2)	testamento mancomunado
S	28/11/2001	AP	Huesca	testamento mancomunado
S	25/02/2002	AP	Zaragoza (2)	testamento mancomunado
S	28/11/2002	AP	Huesca	prescripción acción
S	23/05/2003	JPI	Zaragoza (17)	Preterición
S	10/04/2003	TSJ	Aragón	nulidad disposiciones
S	25/02/2004	AP	Zaragoza (2)	comunidad hereditaria
S	08/07/2004	JPI	Zaragoza (12)	disposiciones correspectivas
S	20/09/2004	JPI	Zaragoza (14)	capacidad testador
S	07/10/2004	JPI	Zaragoza (12)	testamento mancomunado
S	13/12/2004	JPI	Zaragoza (12)	legado, parejas de hecho
A	25/01/2005	AP	Zaragoza (2ª)	sucesión pacc.dº de transmisión
S	17/02/2005	AP	Zaragoza (5ª)	efectos aceptación herencia
S	04/05/2005	AP	Zaragoza (5ª)	efectos del pacto al más viviente
S	20/06/2005	TSJ	Aragón (Sala Civil)	ineficacia dispos.testa.Aceptación

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	28/06/2005	AP	Huesca	testamento mancomunado
S	27/01/2006	AP	Huesca	interpreta dispos. Testamentarias
S	30/03/2006	JPI	Zaragoza (2)	Renuncia
S	18/05/2006	JPI	Zaragoza (17)	pº capacidad testador
S	16/06/2006	AP	Huesca	responsab. Cohered. después partición
S	05/09/2006	AP	Huesca	interpretación dispos. Testamentarias
S	06/10/2006	JPI	Zaragoza (2)	test. mancomunado;correspectividad
S	31/10/2006	JPI	Monzón (1)	testamento: efectos separación matrim.
S	08/11/2006	TSJ	Aragón (Sala Civil)	interpretación dispos. Testamentarias
S	10/01/2007	JPI	Teruel 2	Legado
S	21/02/2007	AP	Zaragoza (5ª)	Testamento nulo
S	30/03/2007	AP	Huesca	Incapacidad del testador
A	19/06/2007	AP	Zaragoza (2ª)	Llamamiento a legítimos herederos
S	19/07/2007	JPI	Zaragoza 12	Nulidad del testamento
S	28/09/2007	JPI	Zaragoza 12	Liquidación consorcio y división de herencia
S	28/11/2007	JPI	Zaragoza 12	Interpretación del testamento
S	28/11/2007	JPI	Zaragoza 17	Improcedencia nulidad testamento
S	21/01/2008	AP	Zaragoza (5)	Validez del testamento
S	28/01/2008	JPI	Zaragoza (15)	Testamento mancomunado
S	25/02/2008	JPI	Zaragoza (15)	Testamento de ciego
S	30/05/2008	AP	Zaragoza (5)	Claúsula correspectiva
S	8/09/2008	JPI	Zaragoza (14)	Interpretación testamento
A	29/12/2008	AP	Huesca	Validez testamento
S	26/02/2009	TSJA	Sala de lo Civil	Interpretación testamento
S	05/10/2009	TSJA	Sala de lo Civil	Validez del testamento
S	20/10/2009	JPI	Zaragoza (3)	Nulidad testamentaria
S	15/01/2010	AP	Zaragoza (5)	Nulidad testamento abierto. Legitimación. Capacidad
A	21/04/2010	AP	Zaragoza (4)	Sucesión testamentaria recíproca
A	28/06/2011	TSJ	Zaragoza	Incumplimiento obligaciones del instituido. Inadmisión recurso casación
S	27/04/2011	AP	Huesca	Institución mutua y recíproca.Pacto al más viviente
S	22/09/2011	TSJ	Zaragoza	Derechos descendientes de legitimarios preferentes. Sustitución
S	22/11/2011	JPI	Zaragoza	Interpretación disposición testamentaria en supuesto de conmoriencia
S	20/07/2012	AP	Zaragoza (4)	Interpretación de testamento. Comorencia
A	24/10/2012	JPI	Zaragoza (17)	Interpretación de testamento. Existencia de legado
S	08/11/2012	JPI	Zaragoza (14)	Institución mutua y recíproca.Pacto al más viviente

73. Sucesión paccionada.

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	07/03/1991	AP	Zaragoza (4)	pacto sucesorio, revocación
S	29/05/1991	TSJ	Zaragoza	pacto al más viviente
S	23/07/1991	AP	Zaragoza (4)	pactos sucesorios
S	28/12/1992	AP	Zaragoza (2)	pacto al más viviente
S	19/02/1993	AP	Huesca	inst. contract. heredero.,revocac.
S	30/07/1993	JPI	Boltaña	inst.contractual de.heredero,fiducia colectiva
S	30/07/1993	JPI	Ejea (2)	pacto al más viviente, revoc.
S	09/10/1993	TSJ	Zaragoza	inst. contractual de heredero
S	21/02/1994	JPI	Huesca (2)	pactos sucesorios
S	28/06/1994	JPI	Ejea (2)	pactos sucesorios
S	13/02/1995	AP	Huesca	pactos sucesorios
A	30/05/1995	JPI	Zaragoza (13)	pacto al más viviente
A	27/06/1995	JPI	Zaragoza (13)	pacto al más viviente
A	17/10/1995	JPI	Zaragoza (13)	pacto al más viviente
S	30/10/1995	AP	Teruel	pacto al más viviente
A	16/12/1995	AP	Zaragoza (2)	pacto al más viviente
S	28/02/1996	JPI	Huesca (2)	pactos sucesorios
S	05/03/1996	AP	Huesca	pactos sucesorios
A	02/12/1996	AP	Huesca	pacto al más viviente
A	07/02/1997	JPI	Zaragoza (13)	pacto al más viviente
A	17/11/1997	AP	Huesca	pacto al más viviente
A	07/02/1998	JPI	Zaragoza (13)	pacto al más viviente
A	12/02/1998	JPI	Zaragoza (2)	pacto al más viviente
S	20/05/1998	AP	Huesca	pactos sucesorios
S	18/07/1998	AP	Huesca	pacto al más viviente
S	19/12/1998	JPI	Monzón	pactos sucesorios
S	13/12/1999	AP	Huesca	pactos sucesorios
A	14/02/2000	JPI	Zaragoza (14)	pacto al más viviente
S	17/03/2000	JPI	Ejea (2)	pactos sucesorios
S	14/04/2000	JPI	Huesca (3)	pactos sucesorios
S	13/07/2000	AP	Zaragoza (5)	pacto al más viviente
S	25/02/2002	AP	Zaragoza (2)	pactos sucesorios
S	16/02/2005	AP	Huesca	dispos. de bienes entre vivos.revoc.
S	21/06/2005	TSJ	Aragón (Sala Civil)	incumplim.pacto sucesorio
S	30/09/2005	TSJ	Aragón (Sala Civil)	pacto al más viviente
A	24/01/2006	AP	Zaragoza (2ª)	pacto al más viviente
S	13/10/2006	AP	Huesca	pacto al más viviente
S	22/12/2006	JPI	Teruel (2)	pacto al más viviente
S	9/02/2007	AP	Huesca	Legado
A	19/02/2008	AP	Huesca	Pactos sucesorios
S	1/12/2008	TSJ	Aragón	Pacto al más viviente

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	22/01/2009	AP	Zaragoza (5)	Pacto sucesorio
S	01/12/2009	AP	Zaragoza (2)	Pacto sucesorio
S	14/04/2010	AP	Huesca	Pacto sucesorio
S	06/07/2010	AP	Huesca	Pacto sucesorio. Fiducia. *Usucapio*
S	03/12/2010	AP	Zaragoza (4)	Pacto sucesorio. Constitución dº real
S	23/02/2011	AP	Huesca	Incumplimiento obligaciones instituido heredero

74. Fiducia sucesoria.

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	03/10/1989	TSJ	Zaragoza	ejercicio sobre bs sin previa liq. de la comunidad disuelta
A	24/05/1991	AP	Huesca	Fijación de plazo
S	23/07/1991	AP	Zaragoza	Fiducia
S	31/07/1991	JPI	Jaca (1)	Fiducia colectiva
S	09/11/1991	TSJ	Zaragoza	casa aragonesa
S	16/03/1992	AP	Huesca	Fiducia colectiva
S	29/09/1992	TSJ	Zaragoza	Fiducia colectiva
S	30/09/1992	AP	Zaragoza (5)	Fiducia sucesoria
S	21/05/1993	TSJ	Zaragoza	Fiducia sucesoria
S	30/07/1993	JPI	Boltaña	Fiducia colectiva
S	14/01/1994	JPI	Zaragoza (14)	extinción fiducia
S	21/02/1994	JPI	Huesca (2)	Fiducia en favor cónyuge
S	23/03/1994	AP	Barcelona	Fiducia en favor cónyuge
S	30/07/1994	AP	Huesca	Fiducia colectiva
S	13/02/1995	AP	Huesca	Fiducia en favor cónyuge
S	13/06/1995	TSJ	Zaragoza	Fiducia colectiva
S	28/02/1996	JPI	Huesca (2)	Fiducia en favor cónyuge
S	14/03/1996	JPI	Huesca (3)	Asignación provisional
S	14/02/1997	AP	Huesca	Fiducia en favor cónyuge
A	19/11/1997	TSJ	Zaragoza	Fiducia colectiva
S	12/01/1998	AP	Zaragoza (5)	Fiducia en favor cónyuge
S	20/02/1998	TS	Madrid	Fiducia en favor cónyuge
A	04/05/1998	AP	Huesca	Fiducia sucesoria
S	20/05/1998	AP	Huesca	Fiducia sucesoria
A	25/11/1998	AP	Huesca	Fiducia sucesoria
S	17/03/1999	AP	Huesca	ejecución sin liquidación soc. conyugal
S	25/05/2000	JPI	Huesca (2)	Fiducia sucesoria
S	15/11/2000	JPI	Zaragoza (10)	extinción fiducia
S	03/04/2000	JPI	Huesca (1)	nulidad ejecución fiducia
S	18/01/2001	AP	Huesca	Fiducia sucesoria
S	25/01/2001	AP	Huesca	nulidad ejecución fiducia
S	17/02/2001	AP	Huesca	nulidad ejecución fiducia
S	31/07/2001	AP	Zaragoza (5)	Fiducia sucesoria
S	29/09/2001	TSJ	Aragón	nulidad ejecución fiducia
S	24/05/2002	TSJ	Aragón	extinción fiducia
S	04/11/2003	JPI	Zaragoza (4)	extinción fiducia
A	15/05/2003	AP	Huesca	Fiducia sucesoria
S	22/07/2003	JPI	Zaragoza (2)	Fiducia sucesoria
S	26/12/2003	AP	Huesca	Fiducia sucesoria
S	01/07/2004	AP	Zaragoza	Fiducia
S	04/10/2004	AP	Zaragoza	extinción fiducia y vida marital
S	16/11/2004	AP	Zaragoza	Fiducia irrevocabilidad

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	24/05/2005	AP	Huesca	Fiducia
S	21/09/2005	AP	Huesca	ordenación de la sucesión
S	25/11/2005	AP	Huesca	ejecución de la fiducia
S	13/02/2006	TSJ	Aragón (Sala Civil)	ejecución fiducia colectiva
S	10/03/2006	TSJ	Aragón (Sala Civill	fiducia sucesoria
S	25/04/2006	AP	Huesca	fiducia sucesoria
S	10/05/2007	TSJA	Aragón	Ejercicio fiducia colectiva:Otorgamiento E.P. para su cumplimiento. Efectos
S	20/10/2008	AP	Huesca	Fiducia sucesoria
S	10/06/2010	TSJ	Zaragoza	responsabilidad del poseedor frente al fiduciario copropietario
S	26/10/2010	JPI	Zaragoza (9)	Consentimiento fiduciario
S	26/01/2011	TSJ	Zaragoza	Fiducia sucesoria. Institución de heredero en bienes consorciales. Usucapión.
S	29/04/2011	AP	Zaragoza (4)	Fiducia sucesoria
S	16/11/2011	AP	Zaragoza (5)	Plazo fiducia. Delación.
S	30/05/2012	TSJ	Zaragoza	Delación de la herencia. Ejecución o extinción de la fiducia

75. Legítimas.

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	21/12/1990	TS	Madrid	Legítimas
S	16/07/1991	AP	Huesca	Intangibilidad
S	02/09/1991	JPI	Zaragoza (7)	Preterición
S	26/09/1991	JPI	Daroca	leg.colect,inoficiosidad,colación
S	25/06/1993	AP	Huesca	Alimentos
S	30/09/1993	TSJ	Zaragoza	Preterición
S	02/03/1994	AP	Zaragoza (5)	mención legitimaria
S	07/03/1994	AP	Zaragoza (2)	legítima y viudedad
S	13/02/1995	AP	Huesca	Preterición
S	15/03/1995	JPI	Daroca	Preterición
S	14/06/1995	JPI	Teruel (1)	Preterición
S	24/11/1995	JPI	Zaragoza (2)	legítima colectiva
S	14/09/1996	JPI	Zaragoza (2)	Preterición
S	16/09/1996	AP	Zaragoza (4)	Intangibilidad
S	21/03/1997	AP	Teruel	Preterición
S	02/07/1997	AP	Teruel	Desheredación
S	11/11/1998	TSJ	Zaragoza	Preterición
S	28/12/1998	AP	Teruel	Desheredación
S	05/06/2001	AP	Zaragoza	cambio vecindad civil
S	14/11/2003	AP	Zaragoza (5)	legítima colectiva
S	12/02/2004	JPI	Zaragoza (17)	legítima intangibilidad
S	13/07/2004	JPI	Zaragoza (17)	legítima
A	10/10/2005	AP	Zaragoza (5ª)	cálculo de legítima
S	09/02/2006	JPI	Zaragoza (17)	causas legales desheredación
S	06/11/2006	JPI	Zaragoza (17)	intangibilidad
S	19/02/2007	JPI	Zaragoza 2	Causa de desheredación no acreditada
S	30/01/2008	TSJ	Aragón	Acc. protección intengibilidad cualtitativa legítima
S	8/04/2008	AP	Zaragoza (2)	Cálculo de la legítima
S	16/06/2008	AP	Huesca	Renuncia a la legítima
S	23/07/2008	TSJ	Aragón	Derechos de legitimarios
S	08/04/2009	JPI	Zaragoza (3)	Intangibilidad legítima
S	08/06/2009	AP	Zaragoza (4)	Legítima
S	30/11/2011	AP	Teruel	Extensión y cálculo de legítima

76. Sucesión intestada.

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
A	08/01/1990	JPI	Huesca(2)	sucesión intestada
A	22/02/1990	JPI	Huesca (2)	sucesión intestada
S	10/04/1990	TS	Madrid	Troncalidad
S	24/11/1990	AP	Teruel	sucesión troncal
A	08/01/1991	JPI	Fraga	hijos, viudedad
A	08/01/1991	JPI	Fraga	hijos, viudedad
A	10/01/1991	JPI	Daroca	sucesión intestada, viudedad
A	23/01/1991	JPI	Monzón	Viudedad
A	25/01/1991	JPI	Fraga	hijos, viudedad
A	01/02/1991	JPI	Fraga	hijos, viudedad
A	04/02/1991	JPI	Fraga	hijos, viudedad
A	06/02/1991	JPI	Fraga	hijos, viudedad
A	12/02/1991	JPI	Fraga	hijos, viudedad
A	12/02/1991	JPI	Fraga	Troncalidad
A	14/02/1991	JPI	Fraga	hijos, viudedad
A	15/02/1991	JPI	Fraga	Padres
A	15/02/1991	JPI	Fraga	hijos,viudedad
A	15/02/1991	JPI	Fraga	hijos,viudedad
A	22/02/1991	JPI	Fraga	divorciado,hijos
A	22/02/1991	JPI	Fraga	Troncalidad
A	26/02/1991	JPI	Fraga	hijos,viudedad
A	28/02/1991	JPI	Fraga	hijos,segundas nupcias
A	01/03/1991	JPI	Fraga	hijos,viudedad
A	01/03/1991	JPI	Fraga	hijos,viudedad
A	13/03/1991	JPI	Fraga	hijos,viudedad
A	21/03/1991	JPI	Fraga	hijos,viudedad
A	10/04/1991	JPI	Fraga	Hijos
A	17/04/1991	JPI	Fraga	hijos,viudedad
A	17/04/1991	JPI	Monzón	Troncalidad
A	02/05/1991	JPI	Fraga	Colaterales
A	08/05/1991	JPI	Monzón	
A	16/05/1991	JPI	Fraga	Colaterales
A	17/05/1991	JPI	Fraga	hijos,viudedad
A	22/05/1991	JPI	Fraga	hijos,viudedad
A	22/05/1991	JPI	Monzón	pacto al más viviente
A	12/06/1991	JPI	Fraga	hijos,viudedad
A	19/06/1991	JPI	Fraga	hijos,renuncia a la viudedad
A	19/06/1991	JPI	Fraga	hijos,viudedad
A	19/06/1991	JPI	Fraga	Troncalidad
A	27/06/1991	JPI	Fraga	Hijos
A	08/07/1991	JPI	Daroca	Viudedad
A	16/07/1991	JPI	Daroca	Viudedad
A	17/07/1991	JPI	Fraga	hijos,viudedad

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
A	17/07/1991	JPI	Monzón	sucesión intestada
A	23/07/1991	JPI	Fraga	Hijos
A	23/07/1991	JPI	Monzón	sucesión intestada
A	31/07/1991	JPI	Fraga	Hijos
A	04/09/1991	JPI	Daroca	Viudedad
A	05/09/1991	JPI	Daroca	Viudedad
A	09/09/1991	JPI	Fraga	troncalidad,viudedad
A	11/09/1991	JPI	Fraga	hijos,viudedad
A	13/09/1991	JPI	Fraga	hijos,viudedad
A	16/09/1991	JPI	Daroca	Viudedad
A	16/09/1991	JPI	Daroca	Viudedad
A	17/09/1991	JPI	Fraga	Hijos
A	18/09/1991	JPI	Fraga	Colaterales
A	19/09/1991	JPI	Fraga	hijos,viudedad
A	19/09/1991	JPI	Fraga	Colaterales
A	23/09/1991	JPI	Fraga	hijos,viudedad
A	23/09/1991	JPI	Fraga	hijos,viudedad
A	27/09/1991	JPI	Daroca	Viudedad
A	27/09/1991	JPI	Fraga	Hijos
A	30/09/1991	JPI	Daroca	Viudedad
A	01/10/1991	JPI	Daroca	Viudedad
A	01/10/1991	JPI	Fraga	colaterales,viudedad
A	08/10/1991	JPI	Monzón	Viudedad
A	10/10/1991	JPI	Monzón	sucesión intestada
A	16/10/1991	JPI	Fraga	hijos,viudedad
A	16/10/1991	JPI	Fraga	hijos,viudedad
A	17/10/1991	JPI	Monzón	Viudedad
A	17/10/1991	JPI	Fraga	Hijos
A	24/10/1991	JPI	Fraga	hijos,viudedad
A	29/10/1991	JPI	Fraga	hijos,viudedad
A	29/10/1991	JPI	Fraga	hijos,viudedad
A	30/10/1991	JPI	Fraga	hijos,viudedad
A	30/10/1991	JPI	Monzón	sucesión intestada
A	30/10/1991	JPI	Monzón	Viudedad
A	31/10/1991	JPI	Fraga	hijos,viudedad
A	06/11/1991	JPI	Fraga	hijos,viudedad
A	06/11/1991	JPI	Fraga	Recobros
A	13/11/1991	JPI	Fraga	hijos,viudedad
A	13/11/1991	JPI	Monzón	Troncalidad
A	26/11/1991	JPI	Fraga	hijos,viudedad
A	02/12/1991	JPI	Daroca	Viudedad
A	02/12/1991	JPI	Daroca	Viudedad
A	05/12/1991	JPI	Daroca	Viudedad
A	18/12/1991	JPI	Daroca	Viudedad
A	20/12/1991	JPI	Fraga	hijos,viudedad
A	20/12/1991	JPI	Fraga	Hijos

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
A	20/12/1991	JPI	Fraga	hijos,nietos
A	30/12/1991	JPI	Daroca	Viudedad
S	09/03/1992	AP	Teruel	sucesión intestada,viudedad
A	09/05/1992	AP	Zaragoza	sucesión intestada
S	30/07/1994	AP	Huesca	improcedencia suc. intest.
A	10/01/1995	JPI	Teruel (1)	declaración herederos
A	03/02/1995	JPI	Monzón	declaración herederos
A	03/05/1995	JPI	Monzón	declaración herederos
A	07/05/1995	JPI	Monzón	declaración herederos
A	15/05/1995	JPI	Daroca	declaración herederos
A	23/05/1995	AP	Huesca	sucesión troncal
A	30/05/1995	JPI	Zaragoza (13)	declaración herederos
A	30/05/1995	JPI	Monzón	declaración herederos
A	31/05/1995	JPI	Daroca	declaración herederos
A	27/06/1995	JPI	Zaragoza (13)	declaración herederos
A	05/07/1995	JPI	Monzón	declaración herederos
A	20/07/1995	JPI	Zaragoza (13)	declaración herederos
A	26/07/1995	JPI	Monzón	declaración herederos
A	13/09/1995	JPI	Daroca	declaración herederos
A	20/09/1995	JPI	Zaragoza (13)	declaración herederos
A	27/09/1995	JPI	Monzón	declaración herederos
A	27/09/1995	JPI	Monzón	declaración herederos
A	02/10/1995	JPI	Zaragoza (14)	declaración herederos
A	05/10/1995	JPI	Monzón	declaración herederos
A	17/10/1995	JPI	Zaragoza (13)	declaración herederos
A	17/10/1995	JPI	Daroca	sucesión troncal
S	30/10/1995	AP	Teruel	sucesión troncal
A	03/11/1995	JPI	Daroca	declaración herederos
A	16/11/1995	JPI	Monzón	declaración herederos
A	01/12/1995	JPI	Monzón	declaración herederos
A	15/12/1995	JPI	Daroca	declaración herederos
A	15/12/1995	JPI	Monzón	declaración herederos
A	16/12/1995	AP	Zaragoza (2)	declaración herederos
A	24/01/1996	AP	Huesca	declaración herederos
S	29/05/1996	AP	Zaragoza (5)	sucesión troncal
A	25/06/1996	JPI	Zaragoza (13)	declaración herederos
S	28/06/1996	AP	Huesca	sucesión troncal
A	18/11/1996	JPI	Zaragoza (13)	sucesión troncal
A	25/11/1996	JPI	Huesca (2)	declaración herederos
A	05/12/1996	JPI	Huesca (2)	sucesión troncal
A	05/12/1996	JPI	Huesca (2)	declaración herederos
A	07/02/1997	JPI	Zaragoza (13)	declaración herederos
S	15/02/1997	JPI	Tarazona	sucesión intestada
A	20/03/1997	AP	Huesca	sustitución legal
A	09/05/1997	JPI	Tarazona	declaración herederos
A	20/05/1997	JPI	Tarazona	declaración herederos

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
A	27/06/1997	AP	Zaragoza (5)	declaración herederos
A	20/09/1997	AP	Zaragoza (5)	sucesión intestada, viudedad
A	29/09/1997	JPI	Tarazona	sucesión troncal, sustituc. Legal
A	02/10/1997	JPI	Tarazona	declaración herederos
A	02/10/1997	JPI	Tarazona	declaración herederos
A	04/10/1997	JPI	Tarazona	sucesión troncal, sustituc. Legal
A	07/10/1997	JPI	Tarazona	declaración herederos
A	08/10/1997	JPI	Zaragoza (14)	sustitución legal
A	04/11/1997	JPI	Zaragoza (14)	declaración herederos
A	17/11/1997	AP	Huesca	declaración herederos
A	16/12/1997	JPI	Zaragoza (14)	declaración herederos
S	11/01/1998	AP	Zaragoza (5)	sucesión intestada
A	07/02/1998	JPI	Zaragoza (13)	declaración herederos
A	12/02/1998	JPI	Zaragoza (2)	declaración herederos
A	25/02/1998	AP	Huesca	Troncalidad
A	27/04/1998	AP	Zaragoza (5)	sucesión intestada
A	04/05/1998	JPI	Boltaña	declaración de herederos
A	05/06/1998	JPI	Boltaña	declaración de herederos
A	05/06/1998	JPI	Boltaña	declaración de herederos
A	06/07/1998	JPI	Boltaña	declaración de herederos
A	17/07/1998	JPI	Boltaña	declaración de herederos
A	18/07/1998	AP	Huesca	Troncalidad
A	30/07/1998	AP	Zaragoza (5)	sustitución legal
A	05/01/1999	JPI	Boltaña	declaración de herederos
A	19/02/1999	JPI	Boltaña	declaración de herederos
A	26/02/1999	JPI	Boltaña	declaración de herederos
A	12/03/1999	JPI	Boltaña	declaración de herederos
A	22/03/1999	JPI	Boltaña	declaración de herederos
A	24/03/1999	JPI	Huesca (1)	declaración de herederos
A	21/04/1999	AP	Huesca	Troncalidad
A	30/04/1999	AP	Teruel	Troncalidad
A	05/05/1999	JPI	Huesca (1)	bienes troncales
A	12/05/1999	AP	Zaragoza (5)	decl. a favor del Estado
A	16/06/1999	AP	Zaragoza (5)	sustitución legal
A	16/06/1999	AP	Zaragoza (5)	sucesión intestada
A	07/07/1999	JPI	Boltaña	declaración de herederos
S	31/07/1999	JPI	Huesca (2)	Troncalidad
A	07/09/1999	JPI	Huesca (1)	declaración de herederos
A	29/09/1999	JPI	Boltaña	declaración de herederos
A	30/09/1999	JPI	Boltaña	declaración de herederos
S	07/06/2000	AP	Teruel	sustitución legal
A	06/10/2000	JPI	Zaragoza (10)	sustitución legal
A	11/10/2000	AP	Huesca	sustitución legal
S	11/10/2000	JPI	Huesca (3)	Troncalidad
S	18/10/2000	AP	Zaragoza (5)	sustitución legal
A	18/10/2000	AP	Zaragoza (5)	sucesión intestada

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
A	07/03/2001	AP	Zaragoza (5)	Administración
A	17/02/2003	AP	Zaragoza (2ª)	declaración herederos
A	21/04/2003	AP	Zaragoza (4ª)	declaración herederos
S	04/11/2003	JPI	Alcañiz (1)	bienes troncales
A	25/01/2005	AP	Zaragoza (2ª)	declaración de herederos
A	10/04/2006	JPI	Monzón (2)	declaración de herederos
A	25/05/2006	JPI	Monzón (2)	declaración de herederos
S	30/06/2006	JPI	Teruel (2)	herederos ab intestato
A	01/09/2006	JPI	Monzón (2)	declaración de herederos
A	20/09/2006	JPI	Monzón (2)	declaración de herederos
A	20/09/2006	JPI	Monzón (2)	declaración de herederos
A	27/09/2006	JPI	Monzón (2)	declaración de herederos
A	28/09/2006	JPI	Monzón (2)	declaración de herederos
S	31/10/2006	JPI	Monzón (1)	suces. a favor cónyuge viudo
S	30/11/2006	JPI	Zaragoza (17)	ineficacia del llamamiento
A	18/01/2007	AP	Huesca	Declaración herederos
S	20/03/2007	AP	Zaragoza (2ª)	Sucesión troncal
A	29/03/2007	AP	Huesca	Sucesión intestada
S	25/06/2007	TSJA	Aragón	Sucesión a favor cónyuge viudo
S	1/10/2007	TSJA	Aragón	Bienes troncales. Sucesión.
S	15/11/2007	AP	Teruel	Bienes troncales. Sucesión.
A	18/12/2007	AP	Huesca	Sucesión troncal
S	29(01/2008	AP	Teruel	Bienes troncales. Sucesión
S	28/03/2008	AP	Huesca	Bienes troncales y no troncales
S	2/04/2008	JPI	La Almunia (1)	Bienes troncales
A	16/06/2008	AP	Huesca	Decl. Hered. Ab intestato
A	26/02/2009	JPI	Huesca (2)	Decl.Hered. Ab Intestato
A	12/03/2009	JPI	Huesca (2)	Decl.Hered. Ab Intestato
A	20/04/2009	JPI	Huesca (2)	Decl.Hered. Ab Intestato
A	20/05/2009	JPI	Huesca (2)	Decl.Hered. Ab Intestato
A	22/06/2009	TSJA	Sala de lo Civil	Sucesión intestada
A	09/07/2009	JPI	Huesca (2)	Decl.Hered. Ab Intestato
A	12/11/2009	JPI	Huesca (2)	Decl.Hered. Ab Intestato
A	No consta	JPI	Huesca (2)	Decl.Hered. Ab Intestato
A	No consta	JPI	Huesca (2)	Decl.Hered. Ab Intestato
A	02/03/2010	AP	Zaragoza(2)	Declaración de herederos
A	No consta	JPI	Huesca (2)	Declaración de herederos
A	No consta	JPI	Huesca (2)	Declaración de herederos
A	No consta	JPI	Huesca (2)	Declaración de herederos
A	No consta	JPI	Huesca (2)	Declaración de herederos
A	13/07/2012	AP	Zaragoza (2)	Sustitución. Cuotas

8. Derecho de bienes.

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	12/01/1990	AP	Zaragoza (3)	servidumbre, luces y vistas
S	07/02/1990	JPI	Teruel (2)	serv.,acc. Negat,luces y vistas
S	20/02/1990	JPI	Ejea (1)	serv.,luces y vistas
S	31/03/1990	JPI	Teruel (2)	serv.,luces y vistas,usucapión
S	14/04/1990	AP	Teruel	serv.,acc. Negat,luces y vistas
S	19/04/1990	AP	Teruel	serv. de paso,acción negatoria
S	08/05/1990	JPI	Tarazona	servidumbres,usucapión
S	08/05/1990	AP	Zaragoza (4)	servidumbres,usucapión
S	08/05/1990	AP	Zaragoza (4)	servidumbres,usucapión
S	15/05/1990	JPI	Tarazona	servidumbres,luces y vistas
S	25/05/1990	JPI	Ejea	luces y vistas
S	28/05/1990	JPI	Ejea	derecho de uso
S	30/05/1990	AP	Teruel	servidumbres,luces y vistas
S	27/06/1990	AP	Zaragoza (3)	serv.,luces y vistas,usucapión
S	17/07/1990	AP	Zaragoza (4)	servidumbres,luces y vistas
S	23/07/1990	JPI	Ejea (1)	luces y vistas
S	26/07/1990	AP	Teruel	serv. de paso,usucapión
S	24/10/1990	JPI	Ejea (1)	servidumbres, luces y vistas
S	31/10/1990	AP	Teruel	serv.,acc. Negat.,luces y vistas
S	06/11/1990	AP	Zaragoza (3)	serv.,luces y vistas,usucapión
S	27/11/1990	AP	Zaragoza (4)	servidumbres,usucapión
S	22/12/1990	AP	Zaragoza (3)	Servidumbres
S	07/02/1991	AP	Teruel	servidumbres,usucapión
S	21/02/1991	JPI	Caspe	luces y vistas
S	15/03/1991	JPI	Alcañiz	luces y vistas
S	18/05/1991	AP	Teruel	luces y vistas
S	08/06/1991	JPI	La Almunia	servidumbres,luces y vistas
S	20/06/1991	JPI	Alcañiz (1)	servidumbres,usucapión
S	01/07/1991	JPI	Huesca (2)	servidumbres,usucapión
S	17/07/1991	JPI	La Almunia	luces y vistas
S	22/07/1991	AP	Teruel	servidumbres,usucapión
S	07/10/1991	JPI	Teruel (1)	servidumbres,usucapión
S	09/10/1991	AP	Zaragoza (2)	luces y vistas
S	18/10/1991	AP	Teruel	servidumbres,usucapión
S	26/10/1991	AP	Zaragoza (2)	luces y vistas
S	05/11/1991	AP	Huesca	luces y vistas
S	12/11/1991	JPI	Barbastro	servidumbres,luces y vistas
S	20/12/1991	AP	Teruel	servidumbres,usucapión
S	22/01/1992	AP	Teruel	serv.,usucapión,variación
S	13/02/1992	AP	Teruel	servidumbres,paso,constitución
S	24/06/1992	AP	Zaragoza (2)	servidumbres,luces y vistas
S	26/06/1992	AP	Huesca	luces y vistas
S	28/07/1992	AP	Huesca	luces y vistas

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	30/10/1992	AP	Teruel	luces y vistas
S	03/12/1992	AP	Zaragoza (5)	luces y vistas
S	23/12/1992	AP	Zaragoza (2)	luces y vistas
S	12/01/1993	AP	Zaragoza (4)	luces y vistas
S	20/01/1993	JPI	Caspe	luces y vistas.relación vecindad
S	21/01/1993	AP	Huesca	luces y vistas, inexist. servid.
S	15/03/1993	JPI	La Almunia	servidumbres, usucapión
S	22/03/1993	AP	Zaragoza (4)	servidumbres, usucapión
S	07/04/1993	AP	Zaragoza (2)	luces y vistas, inexist. servid.
S	29/04/1993	AP	Huesca	luces y vistas, medianería
S	31/05/1993	AP	Teruel	luces y vistas, relación vecindad
S	03/06/1993	JPI	La Almunia	luces y vistas, abuso de derecho
S	15/07/1993	AP	Teruel	luces y vistas, abuso de derecho
S	22/07/1993	AP	Teruel	luces y vistas, inexist. servid.
S	28/07/1993	JPI	La Almunia	luces y vistas, inexist. servid.
S	29/09/1993	AP	Huesca	luces y vistas, medianería
S	21/07/1993	JPI	Zaragoza (13)	régimen normal luces y vistas
S	10/01/1994	AP	Teruel	usucap. servidumbres aparent..
S	26/01/1994	AP	Teruel	usucap. servidumbres aparent..
S	28/01/1994	JPI	Zaragoza (13)	régimen normal luces y vistas
S	01/03/1994	JPI	Calatayud (2)	alera foral
S	02/03/1994	JPI	Caspe	usucapión servidumbre de paso
S	07/03/1994	AP	Huesca	régimen normal luces y vistas
S	09/03/1994	JPI	Zaragoza (13)	servidumbre luces y vistas
S	14/03/1994	JPI	Teruel (1)	usucapión no aparentes
S	08/04/1994	AP	Teruel	usucap. servidumbres aparent.
S	08/04/1994	JPI	Zaragoza (14)	régimen normal luces y vistas
S	20/04/1994	AP	Zaragoza (2)	régimen normal luces y vistas
S	25/04/1994	AP	Huesca	usucap. servidumbres aparentes
S	06/05/1994	AP	Huesca	régimen normal luces y vistas
S	09/05/1994	JPI	Ejea (2)	luces y vistas, usucapión
S	16/05/1994	AP	Teruel	régimen normal luces y vistas
S	30/05/1994	AP	Huesca	régimen normal luces y vistas
S	16/06/1994	JPI	Teruel (1)	usucap. servidumbres aparentes
S	09/07/1994	AP	Zaragoza (2)	servidumbre luces y vistas
S	12/07/1994	JPI	Ejea (1)	inexistencia servidumbre luces
S	23/07/1994	AP	Zaragoza (5)	usucap. servidumbres aparentes
S	26/07/1994	JPI	Teruel (1)	usucap. servidumbres aparentes
S	07/09/1994	AP	Teruel	usucap. servidumbres aparentes
S	05/10/1994	JPI	Almunia	régimen normal luces y vistas
S	10/10/1994	JPI	Zaragoza (14)	usucap. servidumbres aparentes
S	17/10/1994	AP	Teruel	usucap. servidumbres aparentes
S	17/10/1994	AP	Zaragoza (5)	luces y vistas. usucapión
S	18/10/1994	AP	Zaragoza (5)	régimen normal luces y vistas
S	25/10/1994	AP	Teruel	régimen normal luces y vistas
S	07/11/1994	AP	Teruel	usucap. servidumbres aparentes

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	15/12/1994	JPI	Teruel (1)	luces y vistas. abuso de derecho
S	27/12/1994	AP	Zaragoza (5)	régimen normal luces y vistas
S	27/12/1994	AP	Zaragoza (2)	usucap. servidumbres aparentes
S	27/12/1994	TSJ	Zaragoza	usucapión servidumbre
S	12/01/1995	AP	Huesca	servidumbre de luces y vistas
S	04/02/1995	JPI	La Almunia	régimen normal luces y vistas
S	17/02/1995	JPI	Zaragoza (13)	régimen normal luces y vistas
S	20/02/1995	AP	Huesca	usucap. servidumbres aparentes
S	08/03/1995	AP	Huesca	régimen normal luces y vistas
S	15/04/1995	JPI	La Almunia	régimen normal luces y vistas
S	27/04/1995	JPI	Teruel (1)	inexist. servidumbre de paso
S	17/05/1995	AP	Huesca	régimen normal luces y vistas
S	15/06/1995	AP	Teruel	usucapión servidumbre
S	23/06/1995	AP	Teruel	usucapión servidumbre
S	10/07/1995	AP	Huesca	usucap. servidumbre aparentes
S	13/09/1995	JPI	Huesca (2)	servidumbre de luces y vistas
S	03/10/1995	JPI	Daroca	régimen normal luces y vistas
S	16/10/1995	AP	Teruel	servidumbre de paso
S	04/11/1995	AP	Teruel	usucapión servidumbre
S	08/11/1995	JPI	Teruel (1)	servidumbre de desagüe
A	09/11/1995	JPI	Huesca (2)	servidumbre luces y vistas
S	22/11/1995	AP	Teruel	usucap. servidumbres aparentes
S	23/11/1995	AP	Teruel	servidumbre de desagüe
S	14/12/1995	AP	Teruel	inexistencia servid. de luces
S	09/01/1996	AP	Teruel	inexistencia servid. de luces
S	19/01/1996	AP	Huesca	abuso de derecho
S	25/01/1996	AP	Huesca	régimen normal luces y vistas
S	26/02/1996	JPI	Barbastro	régimen normal luces y vistas
S	27/02/1996	JPI	Barbastro	usucapión servidumbre
S	27/03/1996	AP	Huesca	usucapión servid. de paso
S	08/05/1996	AP	Teruel	inexistencia servid. de luces
S	05/06/1996	AP	Zaragoza (5)	inexistencia servid. de paso
S	08/07/1996	AP	Zaragoza (5)	régimen normal luces y vistas
S	15/07/1996	AP	Zaragoza (2)	inexistencia servid. de luces
S	25/07/1996	AP	Huesca	inexistencia servid. de paso
S	07/10/1996	JPI	La Almunia	usucapión servid. de paso
S	08/10/1996	AP	Teruel	régimen normal luces y vistas
S	30/10/1996	AP	Zaragoza (5)	régimen normal luces y vistas
S	04/11/1996	AP	Huesca	inexistencia servid. de paso
S	06/11/1996	AP	Zaragoza (5)	régimen normal luces y vistas
S	12/11/1996	JPI	Jaca (2)	inexistencia servid. de luces
S	12/12/1996	AP	Huesca	mancom. pastos y alera foral
S	27/01/1997	AP	Zaragoza (5)	usucapión servid. aparentes
S	27/01/1997	AP	Zaragoza (5)	inexistencia servid. de luces
S	30/01/1997	AP	Zaragoza (5)	servidumbre luces y vistas
S	19/02/1997	AP	Zaragoza (5)	servidumbres desagüe y paso

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	17/03/1997	AP	Zaragoza (5)	inexistencia servid. de luces
S	02/04/1997	AP	Zaragoza (5)	relaciones de vecindad
S	21/04/1997	AP	Zaragoza (5)	régimen normal luces y vistas
S	24/04/1997	AP	Huesca	usucapión servid. no aparentes
S	08/05/1997	JPI	Zaragoza (13)	usucapión serv. no aparentes
S	15/05/1997	AP	Huesca	usucapión servid. aparentes
S	21/05/1997	AP	Zaragoza (5)	régimen normal luces y vistas
S	28/05/1997	AP	Teruel	usucapión servid. aparentes
S	06/06/1997	JPI	Tarazona	usucapión servidumbres
S	13/06/1997	AP	Teruel	régimen normal luces y vistas
S	16/06/1997	AP	Huesca	usucapión servid. aparentes
S	17/06/1997	JPI	Tarazona	régimen normal luces y vistas
S	30/06/1997	AP	Zaragoza (5)	régimen normal luces y vistas
A	30/06/1997	AP	Zaragoza (5)	régimen normal luces y vistas
S	17/07/1997	AP	Zaragoza (5)	usucapión servid. aparentes
S	21/07/1997	AP	Teruel	régimen normal luces y vistas
S	28/07/1997	AP	Teruel	régimen normal luces y vistas
S	20/09/1997	AP	Zaragoza (5)	usucapión servid. no aparentes
S	06/10/1997	AP	Huesca	servid. vertiente de tejado
S	27/10/1997	AP	Teruel	usucapión de servidumbres
S	06/11/1997	JPI	Caspe	usucapión serv. luces y vistas
S	07/11/1997	AP	Teruel	usucapión servid. aparentes
S	01/12/1997	AP	Zaragoza (5)	luces y vistas, mala fe
S	03/12/1997	AP	Teruel	usucapión servid. aparentes
S	10/10/1997	JPI	Calamocha	régimen normal luces y vistas
S	10/12/1997	JPI	Calamocha	luces y vistas, medianería
S	26/12/1997	JPI	Ejea (1)	régimen normal luces y vistas
S	19/01/1998	AP	Zaragoza (5)	usucapión servidumbres
S	11/05/1998	AP	Teruel	usucapión servid. no aparente
S	11/05/1998	AP	Zaragoza (5)	usucapión servid. medianería
S	12/05/1998	AP	Huesca	usucapión servid. no aparentes
S	13/05/1998	AP	Huesca	régimen normal luces y vistas
S	01/06/1998	AP	Zaragoza (4)	luces y vistas, inexist. servid.
S	09/06/1998	JPI	Zaragoza (14)	luces y vistas
S	17/06/1998	AP	Zaragoza (5)	luces y vistas
S	22/06/1998	AP	Zaragoza (5)	usucapión servid. aparentes
S	26/06/1998	AP	Huesca	usucapión servid. no aparentes
S	29/06/1998	AP	Huesca	régimen normal luces y vistas
S	08/09/1998	JPI	Jaca (1)	usucapión serv. aparentes
S	20/07/1998	AP	Teruel	usucapión servid. no aparentes
S	21/09/1998	AP	Zaragoza (2)	régimen normal luces y vistas
S	24/09/1998	AP	Zaragoza (5)	régimen normal luces y vistas
S	29/09/1998	JPI	Huesca (2)	inexistencia serv. luces
S	14/10/1998	AP	Huesca	inexistencia serv. luces
A	27/10/1998	AP	Zaragoza (5)	luces y vistas
S	28/10/1998	AP	Zaragoza (5)	usucapión servid. no aparentes

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	19/11/1998	AP	Huesca	usucapión servid. no aparentes
S	22/12/1998	AP	Zaragoza (2)	régimen normal luces y vistas
S	26/12/1998	AP	Teruel	serv. de saca de agua y paso
S	31/12/1998	AP	Teruel	régimen normal luces y vistas
S	26/02/1999	AP	Huesca	régimen normal luces y vistas
S	16/03/1999	AP	Huesca	inmisión ramas y raíces
S	22/03/1999	AP	Teruel	usucapión serv. de paso
S	16/09/1999	AP	Huesca	usucapión serv. de paso
S	05/11/1999	AP	Teruel	usucapión serv. de paso
S	22/12/1999	AP	Huesca	régimen normal luces y vistas
S	25/10/1999	AP	Zaragoza (5)	usucapión serv. de paso
S	18/02/2000	JPI	Fraga	serv. luces y vistas
S	06/03/2000	AP	Zaragoza (4)	régimen normal luces y vistas
S	13/03/2000	AP	Zaragoza (4)	régimen normal luces y vistas
S	31/03/2000	AP	Zaragoza (5)	inexistencia voladizo
S	10/04/2000	AP	Zaragoza (4)	usucapión serv. de paso
S	12/04/2000	JPI	Zaragoza (1)	usucapión serv. de paso
S	28/04/2000	AP	Huesca	usucapión serv. de paso
S	04/05/2000	AP	Zaragoza (5)	luces y vistas
S	19/05/2000	JPI	Huesca (3)	serv. de desagüe
S	29/05/2000	AP	Huesca	plazo usucapión
S	13/06/2000	AP	Teruel	régimen normal luces y vistas
S	19/06/2000	AP	Zaragoza (5)	régimen normal luces y vistas
S	22/06/2000	JPI	Ejea (2)	usucapión serv. de paso
S	30/06/2000	AP	Teruel	usucapión serv. de paso
S	11/07/2000	AP	Zaragoza (4)	régimen normal luces y vistas
S	25/07/2000	AP	Zaragoza (4)	usucapión serv. de paso
S	14/09/2000	AP	Huesca	usucapión servidumbres
S	04/10/2000	AP	Huesca	serv. luces y vistas
S	18/10/2000	AP	Zaragoza (4)	luces y vistas: azoteas
S	27/10/2000	JPI	Zaragoza (14)	usucapión serv. de paso
S	20/11/2000	AP	Huesca	serv. de pastos, alera foral
S	04/12/2000	AP	Huesca	Medianería
S	14/12/2000	JPI	Zaragoza (1)	régimen normal luces y vistas
S	21/12/2000	AP	Huesca	régimen normal luces y vistas
S	25/01/2001	JPI	Teruel	inmisión ramas
S	25/01/2001	AP	Zaragoza (5)	inmisión raíces
S	02/03/2001	AP	Zaragoza (5)	usucapión serv. de paso
S	07/03/2001	JPI	Calatayud (2)	serv. luces y vistas
S	29/03/2001	JPI	Calatayud (2)	usucapión serv. aparentes
S	31/03/2001	AP	Huesca	régimen normal luces y vistas
S	31/03/2001	AP	Zaragoza	usucapión serv. aparentes
S	02/04/2001	AP	Teruel	usuc. serv. luces y vistas
S	09/04/2001	AP	Zaragoza (2)	régimen normal luces y vistas
S	24/04/2001	AP	Zaragoza (5)	serv. luces y vistas
S	30/04/2001	AP	Teruel	inexistencia serv. luces y vistas

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	30/04/2001	AP	Teruel	usucapión serv. salida humos
S	12/05/2001	JPI	Ejea (2)	rég. normal luces y vistas
S	18/05/2001	AP	Zaragoza (4)	inexistencia serv. de paso
S	22/06/2001	AP	Zaragoza (5)	usucapion serv. de paso
S	11/07/2001	AP	Huesca	rég. normal luces y vistas
S	18/07/2001	JPI	Calatayud (2)	usucapión serv. de paso
S	20/07/2001	AP	Zaragoza (5)	usucapion serv. de paso
S	30/07/2001	JPI	Calatayud (2)	usucapión serv. de paso
S	30/07/2001	JPI	Zaragoza (3)	usucapión serv. de paso
S	06/09/2001	AP	Teruel	serv. luces y vistas
S	17/09/2001	AP	Huesca	rég. normal luces y vistas
S	24/09/2001	AP	Huesca	usucapión serv. de paso
S	30/10/2001	AP	Teruel	rég. normal luces y vistas
S	02/11/2001	JPI	Tarazona	rég. normal luces y vistas
S	07/11/2001	TSJ	Zaragoza	inmisión aerogeneradores
S	12/11/2001	JPI	Tarazona	rég. normal luces y vistas
S	13/11/2001	JPI	Tarazona	inexistencia serv. desagüe
S	13/11/2001	JPI	Zaragoza (3)	serv. luces y vistas
S	27/11/2001	AP	Teruel	usucapión serv. aparentes
S	10/12/2001	AP	Zaragoza (4)	usucapión serv. aparentes
S	28/12/2001	AP	Huesca	inexistencia serv. luces y vistas
S	03/01/2002	AP	Teruel	serv. luces y vistas
S	04/01/2002	AP	Teruel	usucapión serv. aparentes
S	15/01/2002	AP	Zaragoza (2)	rég. normal luces y vistas
S	18/01/2002	AP	Teruel	rég. normal luces y vistas
S	21/02/2002	AP	Zaragoza (2)	serv. luces y vistas
S	28/02/2002	AP	Huesca	usucapión dom. Público
S	05/03/2002	AP	Huesca	serv. luces y vistas
S	18/03/2002	AP	Zaragoza (5)	usucapión serv. aparentes
S	08/04/2002	AP	Zaragoza (2)	inmisión ramas
S	13/04/2002	AP	Teruel	usucapión serv. paso
S	16/02/2002	AP	Teruel	usucapión serv. aparentes
S	06/05/2002	AP	Huesca	usucapión serv. paso
S	07/05/2002	AP	Teruel	rég. normal luces y vistas
S	16/05/2002	AP	Huesca	rég. normal luces y vistas
S	17/05/2002	AP	Huesca	usucapión serv. aparentes
S	20/05/2002	JPI	Ejea (1)	usucapión serv. aparentes
S	27/05/2002	JPI	Teruel (2)	rég. normal luces y vistas
S	04/06/2002	AP	Teruel	usucapión serv. aparentes
S	09/07/2002	AP	Huesca	rég. normal luces y vistas
S	11/07/2002	JPI	Ejea (1)	usucapión serv. paso
S	10/09/2002	AP	Zaragoza (2)	usucapión serv. paso
S	25/09/2002	JPI	Ejea (1)	rég. normal luces y vistas
S	30/09/2002	AP	Zaragoza (2)	usucapión serv. aparentes
S	02/10/2002	AP	Teruel	relaciones de vecindad
S	21/10/2002	AP	Teruel	rég. normal luces y vistas

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	23/10/2002	AP	Teruel	serv. luces y vistas
S	28/10/2002	AP	Zaragoza (2)	rég. normal luces y vistas
S	30/10/2002	AP	Huesca	serv. luces y vistas
S	14/11/2002	JPI	Ejea (2)	rég. normal luces y vistas
A	18/11/2002	AP	Zaragoza (2)	usucapión serv. aparentes
S	21/11/2002	AP	Teruel	rég. normal luces y vistas
S	26/11/2002	AP	Teruel	usucapión serv. aparentes
S	29/11/2002	AP	Teruel	usucapión serv. aparentes
S	29/11/2002	JPI	Calatayud (2)	serv. luces y vistas
S	05/12/2002	AP	Huesca	serv. luces y vistas
S	12/12/2002	AP	Zaragoza (2)	usucapión serv. luces y vistas
S	12/12/2002	JPI	Teruel (2)	usucapión serv. aparentes
S	23/01/2003	AP	Teruel	usucapión serv. aparentes
S	30/01/2003	AP	Huesca	usucapión serv. aparentes
S	19/02/2003	AP	Zaragoza (5ª)	usucapión serv. aparentes
S	18/03/2003	AP	Teruel	usucapión serv. no aparentes
S	19/03/2003	AP	Zaragoza (5ª)	luces y vistas
S	25/03/2003	AP	Teruel	rég. normal luces y vistas
S	27/03/2003	AP	Teruel	usucapión serv. aparentes
S	14/04/2003	AP	Zaragoza (2ª)	usucapión serv. aparentes
S	16/04/2003	AP	Huesca	usucapión serv. aparentes
S	21/04/2003	JPI	Tarazona	rég. normal luces y vistas
S	24/04/2003	AP	Huesca	usucapión serv. aparentes
S	15/05/2003	AP	Teruel	rég. normal luces y vistas
S	21/05/2003	AP	Huesca	rég. normal luces y vistas
S	23/05/2003	JPI	Teruel (1)	rég. normal luces y vistas
S	05/06/2003	JPI	Zaragoza (17)	rég. normal luces y vistas
S	09/06/2003	AP	Zaragoza (5ª)	relaciones vecindad
S	11/06/2003	AP	Teruel	rég. normal luces y vistas
A	17/06/2003	AP	Zaragoza (5ª)	relaciones vecindad
S	18/06/2003	AP	Teruel	serv. acueducto
S	19/06/2003	AP	Huesca	usucapión serv. aparentes
S	25/06/2003	JPI	Ejea (2)	rég. normal luces y vistas
S	28/06/2003	AP	Teruel	usucapión serv. aparentes
S	01/09/2003	JPI	Teruel (2)	rég. normal luces y vistas
S	18/10/2003	AP	Teruel	rég. normal luces y vistas
S	31/10/2003	JPI	Alcañiz (1)	usucapión serv. aparentes
S	17/11/2003	AP	Huesca	usucapión serv. aparentes
S	28/11/2003	AP	Huesca	usucapión serv. aparentes
S	17/12/2003	AP	Zaragoza (5ª)	usucapión serv. no aparentes
S	26/12/2003	AP	Huesca	rég. normal luces y vistas
S	26/12/2003	JPI	Ejea (2)	serv. luces y vistas
S	02/02/2004	JPI	Teruel (2)	rég normal luces y vistas
S	02/02/2004	AP	Zaragoza	luces y vistas, rel. vecindad
S	04/02/2004	TSJ	Zaragoza	serv. luces y vistas
S	16/02/2004	JPI	Ejea (2)	relaciones de vecindad

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	16/02/2004	JPI	Ejea (1)	rég. normal luces y vistas.
S	31/03/2004	TSJ	Zaragoza	rég. normal luces y vistas
S	17/04/2004	AP	Zaragoza	no usucapión, serv. Paso
S	17/05/2004	JPI	Ejea (1)	relaciones de vecindad
S	17/05/2004	JPI	Ejea (1)	rég. normal luces y vistas
S	31/05/2004	AP	Zaragoza	luces y vistas
S	01/06/2004	JPI	Jaca (1)	inmisión ramas
S	04/06/2004	AP	Huesca	rég. normal luces y vistas
S	17/06/2004	JPI	Teruel (2)	relaciones de vecindad
S	28/06/2004	JPI	Calamocha	usucapión, serv de paso
S	29/06/2004	JPI	Teruel (2)	luces y vistas
S	06/07/2004	AP	Zaragoza	luces y vistas
S	14/07/2004	AP	Teruel	rég. normal luces y vistas.
S	26/07/2004	AP	Huesca	usucapión, serv aparente
S	01/09/2004	JPI	Alcañiz (1)	rég. normal luces y vistas.
S	13/09/2004	JPI	Jaca (1)	rel vecindad
S	06/10/2004	AP	Zaragoza	usucapión, serv aparente
S	07/10/2004	JPI	Zaragoza (14)	rég. normal luces y vistas.
S	19/10/2004	JPI	Alcañiz (2)	serv. paso
S	19/11/2004	AP	Zaragoza	rég. normal luces y vistas.
S	30/11/2004	AP	Zaragoza	usucapión serv. aparentes
S	30/11/2004	AP	Zaragoza	rel. vecindad, inmisión ramas
S	07/12/2004	JPI	Zaragoza (17)	rel. vecindad
S	15/12/2004	AP	Zaragoza	usucapión, extinción por no uso
S	15/12/2004	AP	Huesca	serv. no aparente
S	21/12/2004	AP	Huesca	rel. Vecindad
S	10/01/2005	AP	Zaragoza (2ª)	rég.normal luces y vistas
S	15/02/2005	AP	Teruel	serv. luces y vistas
S	23/02/2005	TSJ	Aragón (Sala Civil)	relaciones de vecindad
S	01/03/2005	AP	Teruel	huecos de tolerancia
S	03/03/2005	AP	Zaragoza (5ª)	serv. de paso
S	15/03/2005	AP	Huesca	serv. Aparentes y no apar.
S	13/04/2005	AP	Teruel	Servidumbres
S	15/04/2005	JPI	Ejea (1)	adquis. servid. por usucapión
S	15/04/2005	AP	Huesca	servid. aparentes y no aparentes.
S	12/05/2005	AP	Zaragoza (5ª)	serv. de desagüe
S	25/05/2005	JPI	Ejea (2)	reg. normal luces y vistas
S	01/06/2005	JPI	Zaragoza (14)	serv. aparentes.Usucapión
S	08/06/2005	AP	Zaragoza (5ª)	relaciones de vecindad
S	17/06/2005	AP	Teruel	luces y vistas
S	21/06/2005	AP	Huesca	relaciones de vecindad
S	06/07/2005	TSJ	Aragón (Sala Civil)	relaciones de vecindad
S	14/07/2005	AP	Zaragoza (5ª)	servid. de paso
S	19/07/2005	JPI	Teruel (2)	servid. aparentes y no aparentes
S	05/09/2005	AP	Huesca	Servidumbres

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	15/09/2005	AP	Zaragoza (5ª)	serv. de paso usucapión
S	17/10/2005	AP	Huesca	rég. normal luces y vistas
S	26/10/2005	AP	Huesca	serv. aparentes y no, usucapión
S	02/11/2005	AP	Teruel	luces y vistas
S	16/12/2005	TSJ	Aragón (Sala Civil)	servidumbre luces y vistas
S	18/11/2005	JPI	Alcañiz (2)	serv. aparentes y no. Usucapión
S	21/11/2005	AP	Zaragoza (5ª)	adquis. serv. por prescripción
S	23/12/2005	AP	Huesca	serv. aparentes y no. Usucapión.
S	11/01/2006	AP	Huesca	usucapión servid. no aparentes
S	13/01/2006	AP	Huesca	servidumbres: apariencia
S	26/01/2006	AP	Huesca	Voladizos
S	23/02/2006	JPI	Ejea (1)	Voladizos
S	08/03/2006	TSJ	Aragón (Sala Civil)	usucapión serv. aparentes
S	20/03/2006	AP	Huesca	rég. normal luces y vistas
S	24/03/2006	AP	Teruel	usucap.serv. aparentes y no aparentes
S	10/04/2006	AP	Teruel	usucap. servid. aparentes
S	25/05/2006	AP	Huesca	usucapión serv. aparentes
S	09/06/2006	JPI	Ejea (2)	usucapión serv. aparentes
S	30/06/2006	AP	Huesca	Voladizo
S	03/07/2006	AP	Huesca	rég. normal luces y vistas
S	03/07/2006	AP	Huesca	servidumbres:apariencia
S	15/07/2006	JPI	Barbastro	rég. normal luces y vistas
S	18/09/2006	JPI	Barbastro	rég. normal luces y vistas
S	08/11/2006	JPI	Monzón (2)	usucap.serv. aparentes y no aparentes
S	16/11/2006	AP	Teruel	usucapión serv. aparentes
S	20/12/2006	JPI	Monzón (1)	Servidumbres
S	28/12/2006	AP	Huesca	usucapión serv. aparentes
S	29/12/2006	AP	Huesca	usucap. serv. aparentes y no aparentes
S	29/12/2006	AP	Huesca	Voladizo
S	13/02/2007	AP	Huesca	Régimen normal luces y vistas
S	28/02/2007	AP	Huesca	Régimen normal luces y vistas
S	30/03/2007	AP	Huesca	Régimen normal luces y vistas
S	3/05/2007	JPI	Ejea 2	Régimen normal luces y vistas
S	25/05/2007	JPI	Teruel	Régimen normal luces y vistas
S	8/06/2007	AP	Huesca	Régimen normal luces y vistas
S	31/07/2007	JPI	Alcañiz 2	Régimen normal luces y vistas
S	19/09/2007	AP	Teruel	Régimen normal luces y vistas
S	23/10/2007	AP	Teruel	Régimen normal luces y vistas
S	27/11/2007	JPI	Monzón 1	Régimen normal luces y vistas
S	10/012/2007	JPI	Ejea 2	Régimen normal luces y vistas
S	13/12/2007	AP	Teruel	Régimen normal luces y vistas
S	26/12/2007	AP	Huesca	Concepto de voladizo
S	23/03/2007	JPI	Teruel 2	Servidumbre de luces y vistas

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	27/09/2007	TSJA	Aragón	Servidumbre de luces y vistas
S	24/10/2007	AP	Huesca	Concepto de voladizo
S	10/12/2007	AP	Zaragoza (4ª)	Servidumbre de luces y vistas
S	27/03/2007	AP	Teruel	Paso de herradura
S	8/05/2007	AP	Teruel	Usucapión servidumbre aparente
S	11/05/2007	TSJA	Aragón	Servidumbre de paso
S	15/05/2007	AP	Teruel	Usucapión servidumbre aparente
S	11/07/2007	AP	Huesca	Usucapión servidumbre aparente
S	11/09/2007	JPI	Monzón 2	Usucapión servidumbre de paso
S	30/11/2007	AP	Zaragoza (5ª)	Usucapión servidumbre aparente
S	24/09/2007	JPI	Calamocha	Usucapión servidumbre no aparente
S	14/01/2008	AP	Huesca	Relaciones de vecindad
S	23/01/2008	TSJ	Aragón	Relaciones de vecindad
S	22/02/2008	AP	Teruel	Relaciones de vecindad
S	28/03/2008	AP	Huesca	Relaciones de vecindad
S	7/04/2008	AP	Teruel	Relaciones de vecindad
S	22/04/2008	TSJ	Aragón	Relaciones de vecindad
S	14/07/2008	TSJ	Aragón	Relaciones de vecindad
S	2/10/2008	AP	Huesca	Relaciones de vecindad
S	16/10/2008	AP	Teruel	Relaciones de vecindad
S	30/01/2008	AP	Zaragoza (4)	Rég. normal luces y vistas
S	18/04/2008	AP	Huesca	Rég. normal luces y vistas
S	21/04/2008	JPI	Alcañiz (2)	Rég. normal luces y vistas
S	24/06/2008	AP	Huesca	Rég. normal luces y vistas
S	28/07/2008	JPI	La Almunia (1)	Rég. normal luces y vistas
S	31/07/2008	AP	Huesca	Rég. normal luces y vistas
S	14/10/2008	JPI	La Almunia (1)	Rég. normal luces y vistas
S	15/07/2008	AP	Zaragoza (5)	Servidumbre luces y vistas
S	10/07/2008	AP	Teruel	Usucapión servidumbres aparentes
S	13/03/2008	AP	Huesca	Usucapión servidumbres aparentes
S	15/05/2008	AP	Huesca	Usucapión servidumbres aparentes
S	30/06/2008	AP	Huesca	Usucapión servidumbres aparentes
S	9/10/2008	AP	Huesca	Usucapión servidumbres aparentes
S	14/01/2008	AP	Huesca	Usucapión servid. no aparentes
S	04/02/2009	TSJA	Sala de lo Civil	Rég. normal luces y vistas
S	24/02/2009	AP	Teruel	Rég. normal luces y vistas
S	24/02/2009	JPI	Ejea (1)	Rég. normal luces y vistas
S	27/02/2009	JPI	Ejea (1)	Rég. normal luces y vistas
S	30/04/2009	AP	Teruel	Rég. normal luces y vistas
S	11/09/2009	AP	Teruel	Rég. normal luces y vistas
S	15/09/2009	AP	Teruel	Rég. normal luces y vistas
S	30/09/2009	AP	Huesca	Rég. normal luces y vistas
S	08/10/2009	AP	Zaragoza (4)	Rég. normal luces y vistas
S	30/11/2009	TSJA	Sala de lo Civil	Rég. normal luces y vistas
S	No consta	JPI	Calatayud (2)	Rég. normal luces y vistas
S	18/03/2009	AP	Huesca	Usucapión servidumbres aparentes

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	06/05/2009	AP	Huesca	Usucapión servidumbres aparentes
S	07/05/2009	AP	Teruel	Usucapión servidumbres aparentes
S	12/06/2009	JPI	Ejea (1)	Usucapión servidumbres aparentes
S	23/09/2009	AP	Huesca	Usucapión servidumbres aparentes
S	19/10/2009	AP	Teruel	Usucapión servidumbres aparentes
S	21/10/2009	AP	Huesca	Usucapión servidumbres aparentes
S	16/11/2009	AP	Huesca	Usucapión servidumbres aparentes
S	18/11/2009	AP	Huesca	Usucapión servidumbres aparentes
S	25/11/2009	TSJA	Sala de lo Civil	Usucapión servidumbres aparentes
S	01/12/2009	TSJA	Sala de lo Civil	Usucapión servidumbres aparentes
S	04/12/2009	AP	Zaragoza (4)	Usucapión servidumbres aparentes
S	13/02/2009	AP	Zaragoza (4)	Usucap.servidumbres no aparentes
S	02/02/2010	AP	Teruel	Régimen normal de luces y vistas
S	10/03/2010	AP	Zaragoza (2)	Usucapión servidumbre aparente
S	05/04/2010	AP	Zaragoza (5)	Luces y vistas
S	06/04/2010	AP	Zaragoza (5)	Relaciones de vecindad
S	22/04/2010	AP	Zaragoza (4)	Servidumbre de luces y vistas
S	30/04/2010	JPI	Boltaña	Servidumbre legal de paso. Usucapión
S	04/06/2010	AP	Zaragoza (4)	Acción reivindicatoria. Título
S	07/06/2010	JPI	Boltaña	Acción reivindicatoria. Prescripción adquisitiva de servidumbre aparente
S	08/06/2010	AP	Zaragoza (5)	Acción reivindicatoria. Plazo
S	16/06/2010	AP	Teruel	Usucapión servidumbre aparente
S	18/06/2010	TSJ	Zaragoza	Usucapion servidumbre de paso aparente
S	09/07/2010	AP	Teruel	Usucapión servidumbre de paso aparente
S	09/07/2010	AP	Teruel	Usucapión servidumbre
S	10/09/2010	AP	Huesca	Servidumbre luces y vistas.
S	23/09/2010	TSJ	Zaragoza	Usucapión servidumbres aparentes
A	03/01/2011	AP	Zaragoza (2)	Relaciones de vecindad
S	10/01/2011	AP	Teruel	Servidumbre de paso
S	19/01/2011	AP	Zaragoza (4)	Relaciones de vecindad
S	28/02/2011	AP	Huesca	Servidumbre de paso
S	22/03/2011	AP	Zaragoza (2)	Servidumbre de paso
S	10/03/2011	AP	Teruel	Servidumbre de paso
A	14/04/2011	AP	Teruel	Servidumbre negativa de luces y vistas
A	26/04/2011	TSJ	Zaragoza	Servidumbre en montes privados. Interés casacional
S	20/05/2011	TSJ	Zaragoza	Usucapion de servidumbre
S	30/09/2011	AP	Zaragoza (2)	Relaciones de vecindad
S	14/10/2011	AP	Zaragoza (4)	Aprovechamientos sobre monte público
S	14/10/2011	JPI	Ejea (1)	Usucapion de servidumbre
S	11/11/2011	JPI	Zaragoza	Relaciones de vecindad
S	17/11/2011	AP	Teruel	Servidumbre de paso
S	07/12/2011	AP	Teruel	Relaciones de vecindad

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	14/12/2011	TSJ	Zaragoza	Usucapion de servidumbre de paso
S	30/12/2011	AP	Zaragoza (5)	Usucapión de servidumbre de paso discontinua.
S	11/07/2012	TSJ	Zaragoza	Usucapión de servidumbre aparente
S	10/09/2012	JPI	Calatayud	Acción negatoria servidumbre de paso y obligación de hacer
S	21/09/2012	AP	Zaragoza (5)	Relaciones de vecindad
S	29/11/2012	JPI	Ejea (1)	Servidumbre de paso
S	04/12/2012	JPI	Ejea (1)	Relaciones de vecindad
A	04/12/2012	JPI	Ejea (1)	Relaciones de vecindad

9. Derecho de obligaciones.

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	22/01/1990	TSJ	Zaragoza	retr. de abolorio, consignación precio,caducid.,disponibilidad
S	06/02/1990	AP	Zaragoza (4)	retracto de abolorio,caducidad
S	20/02/1990	JPI	Huesca (2)	retracto de abolorio
S	05/04/1990	AP	Zaragoza (4)	r. de abolorio,caduc.,consignac.
S	25/10/1990	JPI	Calatayud	retracto de abolorio
S	14/01/1991	AP	Huesca	retracto de abolorio
S	18/05/1991	JPI	Teruel (2)	retracto de abolorio
S	26/10/1991	JPI	Huesca (1)	retracto de abolorio
S	04/04/1992	AP	Huesca	retracto de abolorio
S	01/06/1992	JPI	Daroca	retracto de abolorio
S	04/11/1992	TSJ	Zaragoza	retracto de abolorio
S	07/06/1993	AP	Huesca	retracto de abolorio
S	01/09/1993	JPI	Boltaña	retracto de abolorio
S	03/06/1994	AP	Huesca	retracto de abolorio
S	12/11/1994	AP	Huesca	retracto de abolorio
S	14/11/1994	JPI	Calatayud (1)	retracto de abolorio
S	28/03/1995	JPI	Huesca (2)	retracto de abolorio
S	16/04/1996	JPI	Barbastro	retracto de abolorio, precio
S	06/06/1996	JPI	Zaragoza (2)	r. de abolorio, caducidad
S	17/10/1996	AP	Huesca	retracto de abolorio
S	25/10/1996	JPI	Zaragoza (4)	r. de abolorio, fac. moderad.
S	06/11/1996	JPI	Barbastro	retracto de abolorio, precio
S	17/03/1997	AP	Zaragoza (5)	r. de abolorio, caducidad, precio
S	26/05/1997	AP	Huesca	daños y perjuicios caza
S	11/07/1997	AP	Huesca	daños y perjuicios caza
S	30/07/1997	AP	Huesca	daños y perjuicios caza
S	10/11/1997	AP	Huesca	daños y perjuicios caza
S	12/12/1997	AP	Huesca	r. de abolorio, fac. moderad.
S	22/04/1998	AP	Huesca	daños y perjuicios caza
S	29/04/1998	AP	Huesca	daños y perjuicios caza
S	30/04/1998	AP	Huesca	daños y perjuicios caza
S	08/09/1998	AP	Huesca	daños y perjuicios caza
S	22/09/1998	AP	Huesca	daños y perjuicios caza
S	25/01/1999	JPI	Zaragoza (2)	r. de abolorio.
S	10/03/1999	JPI	Huesca (1)	r. de abolorio, fac. moderad.
S	16/10/1999	AP	Huesca	r. de abolorio, fac. moderad.
S	07/03/2000	AP	Huesca	daños y perjuicios caza
S	30/11/2000	AP	Huesca	daños y perjuicios caza
S	19/12/2000	AP	Huesca	daños y perjuicios caza
S	22/12/2000	AP	Huesca	daños y perjuicios caza
S	28/12/2000	JPI	Huesca (2)	r. de abolorio
S	19/02/2001	AP	Huesca	daños y perjuicios caza
S	20/02/2001	AP	Huesca	daños y perjuicios caza

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	07/06/2001	AP	Teruel	r. de abolorio
S	06/09/2001	AP	Teruel	cesión derechos caza
S	14/09/2001	AP	Zaragoza (4)	r. de abolorio
S	27/11/2001	AP	Teruel	daños y perjuicios caza
S	16/11/2001	AP	Zaragoza (5)	r. de abolorio
S	18/02/2002	AP	Huesca	daños y perjuicios caza
S	24/04/2002	TSJ	Aragón	r. de abolorio
S	26/04/2002	AP	Huesca	daños y perjuicios caza
S	07/04/2003	AP	Zaragoza (4)	daños y perjuicios caza
S	28/07/2003	AP	Zaragoza (4)	daños y perjuicios caza
S	12/12/2003	JPI	Ejea (2)	r. de abolorio
S	09/01/2004	JPI	Zaragoza (17)	venta a domicilio
S	22/04/2004	JPI	Huesca (1)	r. de abolorio
S	14/12/2004	JPI	Huesca (1)	r. de abolorio
S	08/02/2005	JPI	Zaragoza (2)	r. de abolorio
S	04/03/2005	AP	Huesca	r. de abolorio
S	14/11/2005	TSJ	Aragón (S. Civil)	r. de abolorio
S	02/02/2006	AP	Huesca	r. de abolorio
S	23/05/2006	AP	Huesca	r. de abolorio
S	06/06/2006	JPI	Zaragoza 3	r. de abolorio
S	31/01/2007	JPI	Zaragoza 2	R. de abolorio
S	30/07/2007	AP	Huesca	R. de abolorio
S	19/10/2007	JPI	Zaragoza 4	R. de abolorio
S	8/01/2008	JPI	Zaragoza (14)	D. de abolorio
S	26/09/2008	AP	Huesca	D. de abolorio
S	17/07/2009	AP	Huesca	D. de abolorio
S	12/05/2009	JPI	Ejea (1)	Daños y perjuicios caza
S	13/05/2009	JPI	Ejea (1)	Daños y perjuicios caza
S	30/06/2009	AP	Huesca	Daños y perjuicios caza
S	20/07/2009	JPI	Ejea (1)	Daños y perjuicios caza
S	20/07/2009	JPI	Ejea (1)	Daños y perjuicios caza
S	14/09/2009	AP	Zaragoza (4)	Daños y perjuicios caza
S	19/11/2009	AP	Zaragoza (4)	Daños y perjuicios caza
S	24/11/2009	JPI	Ejea (1)	Daños y perjuicios caza
S	17/12/2009	AP	Zaragoza (4)	Daños y perjuicios caza
S	23/12/2009	AP	Zaragoza (4)	Daños y perjuicios caza
S	26/02/2010	AP	Zaragoza (5)	Daños y perjuicios caza
S	10/03/2010	AP	Zaragoza (2)	Daños y perjuicios caza
S	01/09/2010	TSJ	Zaragoza	Daños y perjuicios caza
S	02/09/2010	AP	Huesca	Daños y perjuicios caza
A	24/11/2010	TSJ	Zaragoza	Daños y perjuicios caza
S	No consta	JPI	Huesca (2)	Daños y perjuicios caza
S	No consta	JPI	Huesca (2)	Daños y perjuicios caza
S	No consta	JPI	Fraga	Daños y perjuicios caza
S	31/01/2011	AP	Huesca	Responsabilidad coto de caza
S	23/03/2011	AP	Huesca	Responsabilidad coto de caza

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	05/05/2011	AP	Zaragoza (4)	Daños y perjuicios por obras de construcción
S	05/10/2012	TSJ	Zaragoza	Retracto de abolorio

0. Otras materias

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
A	21/03/1995	TS	Madrid	Casación
S	01/07/1996	TS	Madrid	Casación
A	28/02/1997	AP	Zaragoza (4)	Casación foral
A	04/03/1997	JPI	Zaragoza (2)	Casación foral
A	14/04/1997	TSJ	Zaragoza	Casación foral
S	24/09/1997	AP	Zaragoza (5)	Prescripción
A	19/11/1997	TSJ	Zaragoza	Casación foral
A	10/02/1998	TS	Madrid	Casación foral
A	24/02/1998	TS	Madrid	Casación foral
A	10/03/1998	TS	Madrid	Casación foral
A	20/04/1998	TSJ	Zaragoza	Casación foral
A	25/05/1998	TSJ	Zaragoza	Casación foral
A	14/07/1998	TSJ	Zaragoza	Casación foral
A	19/05/1998	TS	Madrid	Casación foral
A	02/03/1999	TS	Madrid	Casación foral
A	05/07/1999	TSJ	Zaragoza	Casación foral
A	22/09/2000	TSJ	Zaragoza	Casación foral
S	07/11/2001	TSJ	Zaragoza	Casación foral
A	28/01/2002	TSJ	Zaragoza	Recurso de revisión
A	15/05/2002	TSJ	Zaragoza	Casación foral
A	05/06/2002	TSJ	Zaragoza	Casación foral
S	12/01/2006	AP	Huesca	pº libertad baja volunt. cooperativista
S	31/01/2006	AP	Huesca	efectos baja voluntaria cooperativista
S	03/03/2006	AP	Zaragoza (5ª)	pareja estable: rég. jco.
S	12/05/2006	JPI	Zaragoza (14)	pareja estable; deseq.económ.
S	25/05/2006	AP	Zaragoza (5ª)	disolución cooperativa
S	26/05/2006	AP	Zaragoza (5ª)	control jud. sanción soc. de cazadores
S	27/06/2006	AP	Huesca	expulsión socio cooperativista
S	08/09/2006	AP	Huesca	rég. jco. parejas de hecho
S	21/12/2006	AP	Huesca	anulab.y nul. Acuerdos cooperativas.
S	9/01/2007	AP	Huesca	Plazo reembolso aportaciones cooperativista
S	21/02/2007	AP	Huesca	Accidente de esquí: Incumplimiento normativa
S	9/03/2007	AP	Huesca	Efectos baja voluntaria cooperativista
S	13/03/2007	AP	Huesca	Impugnación acuerdo sancionador Consejo rector de Cooperativa
S	27/03/2007	JPI	Zaragoza 17	Acción declarativa de dominio. Montes
S	5/06/2007	JPI	Zaragoza 12	Nulidad contrato compraventa vivienda protección oficial
S	31/07/2007	AP	Huesca	Efectos patrimoniales extinción unión paraconyugal
S	11/10/2007	AP	Huesca	Colegiación profesional
S	20/11/2007	AP	Zaragoza (5ª)	Alcance artículo 15 Ley 24/2003 de 26 de diciembre. Vivienda protegida
S	28/12/2007	AP	Huesca	Dº del consumidor a la información

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
				veraz, completa, objetiva y eficaz.
S	9/01/2008	AP	Huesca	Propiedad de una finca
S	10/03/2008	AP	Huesca	Colegiación profesional
S	26/03/2008	AP	Huesca	Colegiación profesional
S	10/06/2008	TSJ	Aragón	Vivienda protección oficial
S	24/06/2008	AP	Zaragoza (5)	Ley Urbanística de Aragón
S	31/07/2008	AP	Huesca	Oblig. Abastecim. agua potable
S	21/11/2008	AP	Zaragoza (5)	Parejas de Hecho
S	26/03/2009	AP	Huesca	Reclam. Honorarios Coleg. Arquitec.
S	28/10/2009	JPI	Huesca (2)	Acuerdos Junta asociación.
S	12/02/2010	AP	Huesca	Contrato de cooperativa. Ineficacia
S	15/02/2010	JPI	Zaragoza (14)	Pareja de hecho
S	19/02/2010	AP	Zaragoza (5)	Derechos socio cooperativista excedente
S	11/05/2010	AP	Zaragoza (5)	Pareja de hecho
S	13/09/2010	TSJ	Zaragoza	Derechos socio cooperativista excedente
S	19/01/2011	AP	Huesca	Pareja estable no casada. Pensión compensatoria
S	27/01/2011	AP	Huesca	Cooperativas. Obligatoriedad para los socios de acuerdos del órgano de gobierno
S	29/03/2011	TSJ	Zaragoza	Levantamiento del velo en contrato societario. Fraude
S	12/05/2011	AP	Teruel	Nulidad convenio regulador
S	22/06/2011	TSJ	Zaragoza	Pérdida de condición de socio cooperativista. Obligaciones contraidas. Adecuación sentencia y pretensión.
S	13/04/2012	JPI	Zaragoza (5)	Baja de socio en sociedad cooperativa
A	04/07/2012	TSJ	Zaragoza	Competencia funcional
A	05/07/2012	TSJ	Zaragoza	Competencia funcional
A	19/07/2012	TSJ	Zaragoza	Admisión recurso casación
A	26/07/2012	TSJ	Zaragoza	Admisión parcial recurso casación
A	26/07/2012	TSJ	Zaragoza	Admisión parcial recurso casación
A	19/11/2012	TSJ	Zaragoza	Incompetencia funcional recurso de casación
A	27/11/2012	TSJ	Zaragoza	Incompetencia funcional recurso de casación

2. INTERPRETACIÓN DE DERECHO CIVIL ARAGONÉS

2.1. Interpretación judicial

A') SELECCIÓN DE FUNDAMENTOS DE DERECHO.

Transcribimos a continuación los fundamentos de derecho que consideramos más interesantes de las resoluciones del año 2012, clasificados por materias, siguiendo el orden tradicional de la Compilación:

5. FUENTES. COSTUMBRE. STANDUM EST CHARTAE. CÓDIGO CIVIL

***** Sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Calatayud de 12 de junio de 2012. Rescisión de liquidación de la sociedad conyugal por lesión. Nulidad por vicio de consentimiento. Error. Dolo. Aplicación de normas de la comunidad hereditaria. Standum est chartae**

"PRIMERO.- La parte actora ejercita contra la parte demandada acción de rescisión de la liquidación de la sociedad conyugal por existir lesión en más de la cuarta parte en la valoración de los bienes, y subsidiariamente acción de nulidad parcial de convenio regulador por vicio del consentimiento.
La parte actora comienza alegando en su demanda que se encontraba a la fecha de la firma del convenio regulador en una grave situación psicológica, por lo que no tenía las mínimas condiciones que ha de tener cualquier persona para dilucidad sobre cuestiones económicas, tales como determinación de activo y pasivo y valoración de bienes.
Manifiesta igualmente que el convenio regulador carecía de un avalúo o valoración de todas las partidas del activo, limitándose a efectuar las adjudicaciones que constan en el mismo y valorándose exclusivamente los importes de los préstamos que se adjudicaron al esposo y las dos adjudicaciones que se hicieron a la esposa.
La parte actora recompone el convenio regulador en cuanto al inventario y el avalúo de las distintas partidas a fecha del otorgamiento del convenio y concluye que a cada esposo le hubiera correspondido percibir 222.936,33 euros, habiendo percibido el demandado 415.619,35 euros, frente a los 30.253,32 percibidos por la parte actora, siendo evidente que se habría producido la lesión en más de la cuarta parte en su perjuicio.

La parte demandada se opone a las pretensiones ejercitadas de contrario, alegando que la liquidación del régimen económico matrimonial no tendría un mero carácter particional, sino que adquiriría una naturaleza transacción que excluiría la posibilidad de reclamaciones posteriores en relación con las valoraciones tenidas en cuenta o con las adjudicaciones concretas realizadas.
Alega la parte demandada que ambas partes estuvieron asesoradas por Letrado y que en todo momento tenían conocimiento de los bienes objeto de liquidación y aceptaron voluntariamente las valoraciones y adjudicaciones realizadas. Además, manifiesta que la acción ejercitada iría en contra de los actos propios.
Finalmente y respecto al vicio del consentimiento alegado, entiende la parte demandada que no existiría ni falta de consentimiento ni vicio del consentimiento. Así, entiende la parte actora que para que existiera falta de consentimiento, la parte actora debería encontrarse en el momento de la firma del convenio regulador en unas condiciones tales de conciencia y voluntad que la hicieran totalmente incapaz para entender y aceptar el convenio y la liquidación en él contenida. Por otro lado, y respecto al pretendido vicio del consentimiento, alega la parte demandada que la parte actora no había indicado en qué consistiría, si en error o en dolo. En cualquier caso, niega la existencia de uno u otro vicio del consentimiento.

SEGUNDO.- La parte actora invoca la regulación del Código Civil en materia de disolución y liquidación del régimen económico matrimonial, concretamente los artículos 1.392 y siguientes del Código Civil, y el artículo 1.410 del Código Civil, que se remite a la normativa sobre partición y liquidación de la herencia en todo lo no previsto en la regulación sobre disolución y liquidación del régimen económico matrimonial. Concretamente, menciona la parte actora el artículo 1.074 del Código Civil que establece que *"podrán también ser rescindidas las particiones por causa de lesión en más de la cuarta parte, atendiendo al valor de las cosas cuando fueron adjudicadas"*.

Debe ser tenida en cuenta la legislación aragonesa en la materia, aplicable con carácter preferente a la legislación del Código Civil.
La disposición transitoria novena del Real Decreto Legislativo 1/2011, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba con el título "Código del Derecho Foral de Aragón", el Texto Refundido de las Leyes civiles aragonesas, establece que *"los hechos, actos o negocios relativos al otorgamiento o modificación de capítulos, adquisición de bienes, contracción de obligaciones, gestión o disposición de bienes y disolución, liquidación o división del consorcio conyugal, así como los relativos al derecho expectante y al usufructo de viudedad, solo se rigen por este Código cuando tengan lugar o hayan sido realizados a partir del 23 de abril de 2003"*.
El artículo 270 del mismo texto legal establece que *"a la liquidación y división del consorcio conyugal les serán de aplicación, en lo no previsto en esta sección*

y en tanto lo permita su naturaleza, las normas de la liquidación y partición de la comunidad hereditaria".
Ninguna norma existe en la legislación aragonesa de contenido igual o similar al artículo 1.074 del Código Civil invocado en la demanda.
No obstante, debemos tener en cuenta el carácter supletorio del Código Civil, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13.2 del mismo texto legal.

TERCERO.- Llegados a este punto, nos planteamos en qué medida resulta aplicable el artículo 1.074 del Código civil al supuesto que ahora nos ocupa.
Como ha establecido la SAP de Zaragoza de 20 de marzo de 2006, haciendo referencia a la STS de 25 de enero de 2005, "*no son aplicables en toda su extensión los principios que rigen la partición hereditaria a la de la masa de la sociedad económico-conyugal (en este caso de la sociedad de gananciales regidora de tal tema entre las hoy parte litigantes), y que derivaría de la remisión legal, en conjunto, que el artículo 1.410 CC hace a los artículos 1074 y siguientes del mismo (en este caso concreto, pues, también lo serían, entre otros, los 1061 y 1062), pues en el sistema hereditario se pueden producir, no una ,sino hasta tres posibilidades de partición (la hecha por el mismo testador, la formalizada por el Contador-Partidor designado por éste, al que se le dan instrucciones por aquél, y la que, a falta de la anteriores, realicen los propios herederos, sin perjuicio de la que pueda ser realizada judicialmente si fracasan, o no están ajustadas legalmente, las anteriores), mientras que la que afecta al haber de la sociedad matrimonial, no puede ser impuesta "desde fuera" de sus partícipes, sino que debe ser hecha por éstos (o por el Juez, en su caso); pero ello no significa que éste y el 3º de los supuestos de la primera no coincidan, pues en ambas, y esto es lo principal, se anuda el resultado a un convenio de los interesados, en el que la voluntad contractual es decisiva*". La misma sentencia, haciendo referencia a la STS mencionada, continúa diciendo "*en definitiva, pues, hay que estar a lo aprobado por las partes voluntariamente sin vicios del consentimiento respectivo, tras la labor del letrado que aunó la voluntad de las mismas (a modo de Contador-Partidor dedicado a lograr el "equilibrio" buscado), pues ello supone una composición de las dispuestas que surgieron durante el periodo negocial entre los cónyuges, y en que en el pleito se han querido suscitar de nuevo, tras ese acuerdo vinculante (aplicación de la doctrina del "venire contra proprium factum, derivada de los artículos 1.058 y 1255 del CC...).*
Por otro lado, la SAP de Zaragoza de 22 de julio de 2008 establece que "*el artículo 1.074 del Código Civil está previsto exclusivamente para las particiones no convencionales (realizadas por un tercero, contador-partidos), como un remedio para quien resulta injustificadamente perjudicado en un reparto en el que no ha intervenido, por ser ajeno al negocio particional (contador-partidor), de ahí que no contravenga lo dispuesto en el artículo 1.293 del Código Civil (la limita a los contratos celebrados por representante*

legal), pues en las convencionales la desproporción entre las prestaciones en los negocios sólo será imputable al contratante lesionado que, voluntariamente, lo ha celebrado". La misma sentencia, continúa diciendo que "*conforme a todo ello, aunque existen teorías contrarias, la jurisprudencia admite este impugnación de las particiones convencionales como la que nos ocupa (efectuada sólo por los dos esposos) en aquellos casos de supuesto vicio del consentimiento, el que habrá de probarse, pues, como ya se ha apuntado, si no lo hubo, el que otorgó el negocio y se siente lesionado, consintió libremente la lesión, y debe cargar con la misma. En el supuesto enjuiciado no se ha declarado acreditada la concurrencia de dolo ni de intimidación en el consentimiento del actor, y el error en el consentimiento no se ha invocado, Por tanto, el acto prestó su consentimiento a la partición efectuada en los capítulos, libre y voluntariamente, sin vicio alguno lo que confiere a éstos plena validez y eficacia, conforme a lo dispuesto en las artículos 13 y 15 de la Ley 2/2003 de 12 de febrero...".*

La jurisprudencia anteriormente indicada parte de que el convenio regulador tienen una clara naturaleza transaccional.
El artículo 3 del mismo texto legal establece que "*conforme al principio standum est chartae, se estará, en juicio y fuera de él, a la voluntad de los otorgantes, expresada en pactos o disposiciones, siempre que no resulte de imposible cumplimiento o se contraria a la Constitución o a las normas imperativas del Derecho Aragonés*".

Todo lo anteriormente expuesto nos conduce a considerar que la parte actora debiera haber alegado con carácter principal los vicios del consentimiento que invoca en la demanda con carácter subsidiario.
Debemos analizar si el convenio alcanzado entre las partes fue resultado de una negociación libre, sin vicios del consentimiento, ya que en caso afirmativo, y en atención a la jurisprudencia alegada y al principio de "libertad de pactos" que rige en el derecho aragonés, la lesión alegada por la parte actora deberá ser soportada por ésta, al haberla consentido libremente..

TERCERO.- La parte actora alega en la demanda que a fecha de la firma del convenio se encontraba en una grave situación psicológica, por lo que no tenía las mínimas condiciones que ha de tener cualquier persona para dilucidad sobre cuestiones económicas, tales como determinación de activo y pasivo y valoración de bienes.
Lo cierto es que en la demanda la parte actora interesa la nulidad parcial del convenio por vicio del consentimiento, si bien no especifica que vicio tendría su consentimiento, si error o dolo, puesto que violencia e intimidación queda claro que no., al no aludirse en la demanda a ningún hecho ni acontecimiento violento protagonizado por la parte demandada.

La SAP de Barcelona de 17 de septiembre de 2008 establece que *"La naturaleza de los convenios reguladores viene representada por constituir un efectivo negocio de naturaleza mixta, al intervenir en su perfección y consolidación la autoridad judicial que no elimina ni desplaza su naturaleza esencial de tipo contractual privada, ya que su elaboración dimana de la voluntad de los otorgantes" (S.T.S. núm. 1187/2003 (Sala de lo Civil, Sección Unica), de 10 diciembre), y que "Como tiene reconocido esta Sala (Sentencias de 25 junio 1987 [RJ 1987\ 4553], 26 enero 1993 [RJ 1993\ 365], 22 abril y 19 diciembre 1997 [RJ 1997\ 3251 y RJ 1997\ 9110]), la Ley 7 julio 1981 ha supuesto un amplio reconocimiento de la autonomía privada de los cónyuges para regular los efectos de la separación y el divorcio, con la limitación que resulta de lo indisponible de algunas de las cuestiones afectadas por la separación o el divorcio, cuestiones entre las que no se encuentran las económicas o patrimoniales entre los cónyuges; los convenios así establecidos tienen un carácter contractualista por lo que en ellos han de concurrir los requisitos que, con carácter general, establece el Código Civil para toda clase de contratos en el artículo 1261..."*

El artículo 1.261 del CC establece que *"no hay contrato sino cuando concurren los requisitos siguientes: 1º Consentimiento de los contratantes; 2º Objeto cierto que sea materia del contrato; 3º Causa de la obligación que se establezca"*.
El artículo 1.265 del CC establece que *"será nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo"*.
Como ya se ha manifestado anteriormente, la parte actora no especifica el vicio del consentimiento que invalidaría éste, quedando, no obstante claro que no se trataría de violencia ni intimidación.

Es necesario analizar pues los dos posibles vicios que podrían concurrir en el presente supuesto, atendiendo a lo alegado por la parte actora en su demanda.

CUARTO.- Respecto del error, el artículo 1.266 del CC establece que *"para que el error invalide el consentimiento, deberá recaer sobre la sustancia de la cosa que fuere objeto del contrato, o sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente hubiesen dado motivo a celebrarlo"*.
La SAP de Madrid de 6 de octubre de 2009 establece que *"Es doctrina jurisprudencial mantenida, entre otras, en las sentencias del Tribunal Supremo de fechas 17 de mayo de 1988, 28 de septiembre de 1996 y 26 de julio de 2000 , que para que el error en el consentimiento invalide el contrato, conforme a lo dispuesto en el artículo 1266 del Código Civil , es indispensable que recaiga sobre la sustancia de la cosa que constituye su objeto o sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente hubieran dado lugar a*

su celebración, que derive de hechos desconocidos por el obligado voluntariamente a contratar, que no sea imputable a quien lo padece, que exista un nexo causal entre el mismo y la finalidad que se pretendía en el negocio jurídico concertado, y que sea excusable, en el sentido de que sea inevitable, no habiendo podido ser evitado por el que lo padeció empleando una diligencia media o regular, excusabilidad que ha de apreciarse valorando las circunstancias de toda índole que concurran en el caso, incluso las personales tanto del que ha padecido el error, como las del otro contratante, pues la función básica del requisito es impedir que el ordenamiento proteja a quien ha padecido el error, cuando éste no merece esa protección por su conducta negligente.".

En el presente supuesto, la parte actora alega que al tiempo de firmar el convenio regulador se encontraba en una grave situación psicológica, aportando, como documento nº2 de la demanda, informe de fecha 4 de noviembre de 2008, emitido por el Médico de Atención Primaria J, donde se informa que C causó baja laboral el 16 de junio de 2008 por enfermedad común, siendo la causa de la baja, trastorno ansioso-depresivo, y habiendo referido la paciente que sus síntomas estaban relacionados con la situación-entorno familiar y laboral, al estar inmersa de un proceso de separación matrimonial.
Igualmente, aporta informe emitido por M, psicóloga y psicoterapeuta, donde se hace constar que en el mes de diciembre de 2007 la situación personal de CRISTINA cambia al iniciar un proceso de separación matrimonial, y a partir del inicio del proceso de separación, CRISTINA le manifiesta sufrir supuestas amenazas y acoso continuo por parte de su esposo, lo que provoca en ella un estado de alteraciones emocionales que interfieren con la actividad social y profesional. En el informe se dice que la aparición y la forma de expresión de las manifestaciones de los trastornos de adaptación están determinadas de un modo importante por la vulnerabilidad de la personas, siendo incapaces de tomar decisiones que defiendan sus derechos y necesidades ante el otro.
Lo cierto es que el primero de los informes aludidos se emite en noviembre de 2008, es decir, casi un año después de la firma del convenio regulador. Dicho informe nada acredita sobre la situación psíquica y/o psicológica de la parte actora en el momento de la negociación de los términos del convenio y de la firma del mismo.
Respecto del segundo informe, poco puede aportar también. Ni siquiera se practicó la declaración de la psicóloga que emite el informe y que podría haber aclarado algunos extremos. En dicho informe no se hace constar si la especialista que lo emite ha seguido el curso de la enfermedad que la parte actora dice sufrir desde el comienzo del proceso de divorcio, o si emite el citado informe en base a las manifestaciones de la parte actora. Es decir, desconocemos si M asistió a la parte actora en el mismo momento de la negociación y firma del convenio.

Igualmente, resulta sorprendente que en el citado informe se aluda a un posible episodio de violencia de género por parte del esposo (amenazas y acoso continuo por parte del esposo), del cual nada se dice en la demanda.
Consecuentemente, no consta acreditado que la situación psicológica de la parte actora fuera tal que determinara la ausencia de consentimiento, o que el mismo pudiera estar viciado por error.
Por el contrario, JESÚS BUENO BERNAL, Letrado que asistió a ambos cónyuges durante el proceso de divorcio, y por tanto conocedor de primera mano de todo lo acaecido en aquel periodo, manifestó que él y su esposa eran amigos de la pareja y que fue él quien les propuso a ambos divorciarse consensuadamente. El citado testigo manifestó que incluso tras la firma del convenio, siguió manteniendo relación de amistad con CRISTINA y que incluso asesoró a ésta en algún tema inmobiliario.
El testigo manifestó que el convenio fue el fruto de largas negociaciones entre ambas partes, y que en un principio se propuso partir la vivienda familiar en dos, pero CRISTINA se negó a ello porque no quería vivir en Morata de Jiloca, sino en Calatayud. Igualmente, manifestó que las fincas agrícolas carecían de valor para CRISTINA y por ello se decidió no hacer una valoración de las fincas, que entonces eran explotadas por el esposo en ejercicio de su profesión.
Por otro lado, refiere el citado testigo que CRISTINA era conocedora de que el padre de la parte demandada les había dado dinero para la construcción de la vivienda.
Finalmente, manifestó que no se había efectuado avalúo de los bienes, ni determinación del activo y pasivo porque ambos cónyuges estuvieron de acuerdo en que así fuera. Concretamente, manifestó que se decidió no tasar los bienes inmuebles para evitar gastos.
A la vista de lo anteriormente expuesto, procede concluir que no hubo error en CRISTINA, quien en todo caso, podía haber exigido un avalúo de los bienes, si realmente entendía que se le estaba causando un perjuicio, y no lo hizo, aceptando que la liquidación del régimen económico matrimonial se hiciera en los términos que constan en el convenio.

QUINTO.- Por otro lado, y respecto del dolo, la SAP de Zaragoza de 20 de marzo de 2006, haciendo referencia a la STS nº607/2003, establece que "*el TS exige para que pueda ser apreciada su concurrencia dos elementos: uno, el empleo de maquinaciones engañosas, o conducta insidiosa del sujeto que lo causa, que tanto pueden consistir en acciones como en omisiones; y otro, la inducción producida por las maniobras dolosas sobre la voluntad de la otra parte, en términos tales que la determina a celebrar el negocio*". Continúa la citada sentencia diciendo que "*los requisitos comúnmente exigidos por la doctrina científica son: Una conducta insidiosa, intencionada o dirigida a provocar la reclamación negocial, utilizando para ello las palabras o maquinaciones adecuadas; Que la voluntad del declarante quede viciada por*

haberse emitido sin la natural libertad y conocimiento a causa del engaño, coacción u otra insidiosa influencia; Que sea grave si se trata de anular el contrato; Que no haya sido causada por un tercero, ni empleado por las dos partes contratantes. Por otro lado, dolo no se presume, sino que debe ser acreditado por quien lo alega, no pudiendo admitirse por meras conjeturas o deducciones".

En la misma sentencia la Ilma. Audiencia Provincial de Zaragoza entiende que la omisión de la valoración de los bienes que componen el inventario, o la falta de inclusión de bienes que serían comunes, no puede servir de base para la apreciación de dolo.

Procede remitirnos a lo expuesto respecto del error. El letrado que asesoró a ambos cónyuges manifestó que el convenio fue el resultado de largas negociaciones y que todo fue producto del consenso entre ambos cónyuges, aceptando la esposa libremente todas las condiciones del convenio y aceptando ambos que no se hiciera una avalúo de los bienes a repartir.

No se acredita ninguna conducta insidiosa por parte del esposo que indujera a la esposa a actuar como lo hizo.

Por todo lo expuesto, se considera emitido el consentimiento válidamente, sin vicio alguno del consentimiento, y por tanto, procede el dictado de una sentencia absolutoria.

SEXTO.- La parte actora formuló tacha del testigo J, por tener interés en el resultado del procedimiento, concretamente en que no prosperase la demanda interpuesta, dada su actuación profesional al ser el letrado director del procedimiento de divorcio y quien redactó el convenio regulador, y dada la relación de amistad con el demandado.

Al respecto procede manifestar que el testigo manifestó en el acto del juicio que en el momento de inicio del proceso de divorcio, tanto él como su esposa eran amigos de ambas partes, y que incluso después del divorcio, mantuvo más relación con CRISTINA que con MIGUEL, llegando incluso a asesorarle en temas inmobiliarios.

Lo cierto es que el hecho de que el convenio se anule parcialmente, poca repercusión puede tener en el ámbito profesional del letrado J, quien actuó gratuitamente, sin cobrar nada por ello, según él mismo reconoció en base a la relación de amistad que le unía a ambos.

Igualmente, el testigo reconoció no ser experto en temas de familia, sino mercantiles y no actuar como letrado en este tipo de procedimientos, circunstancia ésta conocida por esta Juzgadora, en lo que respecta a los Juzgados de Calatayud.

En base a todo lo anterior, el valor probatorio que se otorga a su declaración es pleno."

***** Auto del Tribunal Superior de Justicia de 29 de octubre de 2012. Standum est chartae. Libertad de testar. Fraude de ley. Inadmisión de recurso de casación**

"PRIMERO.- En el trámite de admisión del recurso de casación la Sala debe examinar en primer lugar su competencia, pronunciándose seguidamente, si se considerase competente, sobre la admisibilidad del mismo, según dispone el artículo 484 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Por lo que se refiere al primer extremo, la competencia de este órgano jurisdiccional deriva, a tenor del artículo 478, núm. 1º, párrafo 2º, de la Ley procesal, según el cual corresponde "a las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia conocer de los recursos de casación que procedan contra las resoluciones de los Tribunales Civiles con sede en la Comunidad Autónoma, siempre que el recurso se funde, exclusivamente o junto a otros motivos, en infracción de las normas de Derecho civil, foral o especial propio de la Comunidad".

En el caso de autos la parte recurrente articula, como primer motivo de recurso, la infracción que en la sentencia de la Audiencia Provincial se dice cometida del principio de derecho aragonés *standum est chartae*.

La Sala entiende que este motivo de recurso no puede ser admitido. El recurrente conoce –pues cita en su escrito de recurso la sentencia de esta Sala de 28 de marzo de 2003 que así lo declara- que el invocado principio comporta la expresión de la libertad de pactar pero no cumple una función interpretativa, y sin embargo todo el desarrollo del recurso gira sobre la interpretación que a su juicio debería haberse hecho del contrato. Así, afirma que "...no se ha producido una correcta valoración de la prueba documental aportada en el procedimiento, por cuanto no se ha tenido en cuenta lo que realmente suscribieron las partes en el contrato y sus anexos...". Combate, así, en realidad, la valoración de la prueba, lo que no tiene cabida en el recurso de casación.

SEGUNDO.- Además, el precepto que en el ordenamiento jurídico aragonés sostiene dicho principio no fue invocado en la fundamentación jurídica de la demanda en que se ejercitaba la acción, ni se cita en la sentencia recurrida. No fue objeto de aplicación, ni de debate jurídico, el art. 3 del CDFA que recoge el citado principio.

Se trata de una acción de reclamación de cantidad, derivada del incumplimiento de un contrato concertado entre sociedades mercantiles, fundada en los arts. 1091 y 1544 del CC y art. 7 de la Ley 3/2004, de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. La parte demandada invocó el principio *non rite adimpleti contractus* (excepción de contrato no cumplido correctamente) y la compensación de créditos, sin que el hecho de que en la

vista oral pudiera referirse la dirección letrada al principio de derecho aragonés mencionado cambie la naturaleza jurídica de la materia discutida.

En definitiva, la introducción de un principio de derecho aragonés *ex novo* en la articulación del recurso de casación, como instrumento para determinar la competencia de esta Sala, constituye un fraude de ley para conseguir un propósito no deseado por la norma jurídica. La materia sobre la que versa el proceso es de derecho de obligaciones entre sociedades mercantiles, no regulada por el derecho aragonés, y la inadmisibilidad del motivo señalado supone la incompetencia de este tribunal para el conocimiento del recurso.

TERCERO.- Así**,** el escrito de interposición no cumple los requisitos legalmente establecidos (artículo 483.2, 2º de la ley procesal civil) por lo que, conforme a lo dispuesto en el artículo 483.4º, procede declarar la inadmisión del motivo primero de recurso.

Respecto a los restantes, fundados en la vulneración de la doctrina de los actos propios y del principio *pacta sunt servanda* (los pactos han de ser cumplidos), no puede pronunciarse esta Sala, pues excluido el primero de los motivos deja de ser competente para su conocimiento, al tratarse de cuestiones de derecho estatal.”

6. PERSONA Y FAMILIA

64. RELACIONES ENTRE ASCENDIENTES Y DESCENDIENTES

*** Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 11 de enero de 2012. Asignación compensatoria. Naturaleza y finalidad. Temporalidad. Posibilidad de superar el inicial desequilibrio

"PRIMERO.- El recurso de casación interpuesto por la representación de la esposa tiene por objeto que se declare que la asignación compensatoria fijada a favor de la misma debe ser indefinida, y no por el plazo de trece años señalado por la sentencia de instancia, confirmada en ese punto por la de apelación.

La sentencia del Juzgado de Primera Instancia parte, como datos de hecho, del matrimonio celebrado el 28 de julio de 1.984 del que nacieron dos hijos, M de 1.989 y V de 1.993, siendo el hijo mayor taxista de profesión, independiente económicamente aunque viviendo el domicilio familiar, y la hija estudiante de segundo de Bachiller. Destaca la sentencia la distinta información ofrecida por las partes sobre los rendimientos de la profesión de taxista del esposo, que éste declara en 1.500 euros netos mensuales y la esposa estima entre 3.500 y 4.000 euros mensuales. En cuanto a la esposa, igualmente se hacen constar los datos discrepantes al manifestar ella que no trabaja desde el año 2.002, habiendo cotizado por 5.239 días hasta el 2 de octubre de 2.010, en tanto que la representación del esposo afirma que tiene capacidad para el trabajo según su *curriculum*, estando en situación de renta activa de inserción del 28 de enero al 27 de diciembre de 2.009 y trabajando en empresas de limpieza en el mes de diciembre de 2.010.

La sentencia señaló a cargo del esposo una pensión de alimentos para la hija menor de 400 euros mensuales y para la esposa una asignación compensatoria de 350 euros mensuales durante 13 años como límite máximo. En el fundamento jurídico 3 se justificaban las medidas adoptadas en los siguientes términos:

"*A la vista de los hechos indicados las medidas del fallo se ajustan a las previsiones de la Ley 2/2010 incluso en lo referente a la asignación compensatoria solicitada valorándose que la esposa deberá trabajar en el futuro por mucho que casi tenga 50 años y escasas cotizaciones y un buen currículum tras un matrimonio de 26 años de duración y conviviendo aun con una hija dependiente. La liquidación del consorcio es necesaria en este caso y la venta de la casa programada en el tiempo se hace esencial para equilibrar las posiciones de las partes, ya que asumidas en la vista por el esposo una media de recursos de 2.048 € neto al mes y alegados unos gastos reales*

invocados por el letrado de la esposa en la vista de 3.300€ al mes, pudiendo ganar algo más el esposo y ser algo menos los gastos o ajustables tras la ruptura y valorándose el patrimonio a liquidar, es difícil equilibrar las pretensiones cuando el esposo ahora además se ha de ir a vivir de alquiler con gastos añadidos. Por lo indicado las medidas del fallo intentan dar una salida más o menos posible a todas las partes".

La sentencia dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Zaragoza estimó en parte el recurso de apelación interpuesto por la representación de la esposa elevando la pensión de alimentos para la hija a 500 euros mensuales y la asignación compensatoria a la esposa a la cantidad de 500 euros mensuales, manteniendo para ésta la limitación temporal de trece años que estableció la sentencia del Juzgado. La justificación de estas medidas se contienen en el fundamento segundo:

"SEGUNDO.- Sostiene esencialmente la recurrente que no trabaja, que carece de ingresos, que se ha dedicado durante el matrimonio al cuidado de la familia, y que los ingresos del demandado oscilan entre los 3.500 y 4.000 € mensuales, que el matrimonio soporta gastos de 1.067 € mensuales por cuatro préstamos, gastos ordinarios mensuales de la familia que superan los 500€ y unos gastos medios mensuales por la actividad del taxi que desempeña el Sr. Roche que superan los 600 € al mes. Efectivamente, no existe prueba del trabajo actual e ingresos de la recurrente, constando en el informe de su vida laboral que trabajó desde 1989 hasta junio de 2002 y desde el 23 de noviembre de 2010 hasta diciembre de 2010 (folios 202 a 205 de las actuaciones), habiendo durado el matrimonio cerca de 26 años. El Sr. R ejerce de taxista, es autónomo conduce vehículo propio, y tributa por módulos, sistema de tributación que no refleja sus reales y verdaderos ingresos. La vivienda familiar está sujeta a préstamo hipotecario cuya cuota mensual asciende a 503 €. La hija V, de 1993, cuenta con 18 años de edad, va a iniciar estudios universitarios, cursando en estos momentos 2º de bachillerato. Los extractos de las dos cuentas bancarias del matrimonio aportados a las actuaciones revelan, por ejemplo, en la cuenta de Multicaja nº 5813, unos ingresos en efectivo en diciembre de 2009 de 3.461€, en noviembre de 2009 de 3.925,75€, en la cuenta del Banco de Santander, unos ingresos en efectivo en noviembre de 2009 de 400€ y de 350€ en diciembre, de 2.800€ en marzo de 2010 y de 2.050€ en febrero de 2010, estos últimos en Multicaja. El demandado alega, además, percibir unos 800€ mensuales de media que aplica a pago de gasoil y de comida (folios 30 a 47 y 318 a 350). Todo ello revela unos ingresos medios del demandado cercanos a los 4.000€ mensuales. Solo los gastos de préstamos comunes ascienden a 1.067 € al mes, y los del taxi a unos 700€ mensuales. La Sentencia establece el abono de los préstamos al 50% entre las partes, salvo el referente al vehículo que pagará el esposo, y limita el uso de la vivienda familiar hasta la efectiva liquidación de la sociedad conyugal, siempre que ello ocurra en el plazo de dos años transcurridos desde la sentencia impugnada.

En estas condiciones, dado que ambos cónyuges deberán, en breve, afrontar sus necesidades de vivienda, deben elevarse las pensiones económicas establecidas, para acomodarlas a las reales necesidades de la hija, al efectivo desequilibrio que la separación ha generado en la esposa, y a los gastos que debe asumir, fijando en 500€ mensuales la pensión alimenticia y en otros 500€ la pensión compensatoria, con la limitación para esta última que establece la Sentencia, durante trece años, sentido en que se revoca la Sentencia dictada".

SEGUNDO.- El motivo único del recurso considera que la redacción del artículo 83.2 del Código del Derecho Foral de Aragón (CDFA), al prever la posibilidad de que el juez determine una asignación compensatoria para el progenitor al que la ruptura de la convivencia produzca desequilibrio económico en relación con el otro, "*mediante la ponderación equitativa*" de los criterios que indica a continuación, produce inseguridad jurídica. Propone el recurrente que, en evitación de tal inseguridad jurídica, adopte esta Sala la doctrina sentada por la Sala Primera del Tribunal Supremo en el sentido de que, para fijar una pensión limitada en el tiempo, es preciso que conste una situación de idoneidad o aptitud para superar el desequilibrio económico que haga desaconsejable la prolongación de la pensión, de tal forma que el plazo habrá de estar en consonancia con la previsión de superación de desequilibrio, para lo que habrá de actuarse con prudencia y moderación. Considera que la regulación aragonesa no es clara ni explícita para determinar si la asignación debe ser temporal o indefinida.

Poniendo la anterior doctrina en relación con la sentencia recurrida deduce el recurrente que en ésta no se ha efectuado el juicio prospectivo sobre la posibilidad de superar el inicial desequilibrio, sino que se limita a dar por bueno el plazo de trece años establecido por la sentencia de primera instancia, sin argumentación alguna al respecto. A continuación afirma que se ha producido la infracción del artículo 9.2 de la Ley 2/2010 porque con los hechos que la sentencia declara probados (enumera los de falta de prueba de trabajo y de ingresos de la esposa, los tiempos de trabajo de la misma acreditados, la duración del matrimonio, la edad de la hija y su condición de estudiante, trabajo e ingresos del esposo, obligación de pago del 50% de los préstamos, y el uso de la vivienda familiar limitado a dos años), y otros como la edad de la esposa y su dedicación a la familia, la conclusión es que el desequilibrio no se compensa con sólo trece años de asignación, y que resulta imposible asegurar que podrá acceder al mercado laboral de forma mínimamente estable, por lo que debe establecerse la asignación compensatoria indefinida.

Como ya dijimos en nuestra sentencia de 30 de diciembre de 2.011, recurso 19/2011, "l*a asignación compensatoria prevista en el artículo 9 de la Ley aragonesa 2/2010 (artículo 83 CDFA) no tiene, en lo sustancial, una naturaleza y finalidad diferente a la señalada por el artículo 97 del Código*

civil a la pensión compensatoria, salvo que esta última viene encuadrada entre los efectos comunes a la nulidad, separación y divorcio del matrimonio, en tanto que la asignación aragonesa se aplicará, si se dan los requisitos para ello, en los casos de ruptura de cualquier tipo de convivencia de los padres". Para señalarla con carácter temporal o indefinido el artículo 83 CDFA provee al juez de unos criterios similares a los indicados en el Código civil, y la invitación a la "*ponderación equitativa*" de los mismos no añade un modo de aplicar la norma distinto del que debe seguirse para el artículo 97 Cc. En la jurisprudencia del Tribunal Supremo que recoge el recurrente se afirma que para el señalamiento del plazo de la pensión compensatoria, que estará en consonancia con la previsión de superación del desequilibrio, "*habrá de actuarse con prudencia y ponderación –como en realidad en todas las operaciones a realizar-*", lo que es equivalente a la ponderación equitativa de la norma aragonesa.

Es perfectamente asumible la doctrina del Tribunal Supremo, pero de ello no se sigue que en el caso concreto haya de señalarse la asignación compensatoria a la esposa recurrente con carácter indefinido. En realidad, lo que propone en su recurso es, partiendo de los hechos probados recogidos en la sentencia recurrida, una distinta valoración de los mismos, lo que no es posible porque tal función corresponde a los juzgados y a los tribunales de apelación. Las sentencias del Tribunal Supremo de 9 y 17 de octubre de 2008 (RC 516/2005 y RC 531/2005), de 28 de abril de 2010 (RC 707/2006) y de 4 de noviembre de 2010 (RC 514/2007), afirman que las conclusiones alcanzadas por el tribunal de apelación, ya sea en el sentido de fijar un límite temporal a la pensión, ya en el de justificar su carácter vitalicio, deben ser respetadas en casación siempre que aquellas sean consecuencia de la libre y ponderada valoración de los factores a los que se refiere de manera no exhaustiva el artículo 97 CC y que han de servir tanto para valorar la procedencia de la pensión como para justificar su temporalidad, siendo posible la revisión casacional únicamente cuando el juicio prospectivo sobre la posibilidad de superar el inicial desequilibrio en función de los factores concurrentes se muestra como ilógico o irracional, o cuando se asienta en parámetros distintos de los apuntados por la jurisprudencia.

En el presente supuesto el recurrente recoge de la sentencia recurrida los hechos tenidos en cuenta por la misma, fundamentalmente para aumentar la cuantía de las pensiones, y tales hechos (más la edad de la esposa y su dedicación a la familia) son los mismos que, a su juicio, deberían conducir a la fijación de la asignación con carácter indefinido, por lo que no existe la falta de prospectiva que denuncia sino que la sentencia ha realizado la suya propia, y su valoración, que no convence al recurrente.

Ciertamente no hay una argumentación específica en la sentencia recurrida para la limitación temporal de la asignación compensatoria, pero se deduce que acepta la de la sentencia de primera instancia, que expresamente es

confirmada en ese extremo. En la del Juzgado se valora que "*la esposa deberá trabajar en el futuro por mucho que casi tenga 50 años y escasas cotizaciones y un buen currículum tras un matrimonio de 26 años de duración y conviviendo aun con una hija dependiente. La liquidación del consorcio es necesaria en este caso y la venta de la casa programada en el tiempo se hace esencial para equilibrar las posiciones de las partes, ya que……,y valorándose patrimonio a liquidar, es difícil equilibrar las pretensiones cuando el esposo ahora además se ha de ir a vivir de alquiler con gastos añadidos*". De esta forma se expresan las razones para justificar las medidas que se adoptan y para limitar temporalmente la asignación compensatoria. No se da una concreta razón para los trece años, pero en el recurso no se ha alegado falta de motivación ni se propone cualquier otra duración más ajustada a datos precisos sino que se discrepa de la valoración efectuada sin justificarla en aspectos concretos que sean evidencia de un apartamiento e infracción de los criterios indicados en el artículo 83.2 CDFA. La simple pretensión de una genérica duración indefinida tampoco es adecuadamente justificada a la vista de los datos tenidos en cuenta en ambas sentencias.

El Tribunal Supremo recoge en su sentencia de 3 de octubre de 2.011, recurso 1739/2008, la doctrina sentada en otras como la de 3 de octubre de 2.008, recurso 2727/2004, citada en la de 27 de junio de 2.011, recurso 599/2009, sobre la valoración del desequilibrio que la pensión debe intentar compensar, considerando:

a) que presupuesto básico para la concesión o reconocimiento de la pensión es la existencia de un desequilibrio económico entre los cónyuges provocado por la ruptura conyugal que determine, para el acreedor de la pensión, un empeoramiento con relación a la situación de la que disfrutaba en el matrimonio (y no una situación de necesidad, por lo que compatible su percepción incluso en caso de contar con medios económicos para subsistir), siendo necesariamente al tiempo de producirse la ruptura cuando se han de valorar las circunstancias y resolver tanto lo referente a si procede o no reconocer el derecho y en qué cuantía, como además, sobre su duración indefinida o su fijación con carácter temporal;

b) que partiendo de la concurrencia de desequilibrio, en la medida que la ley no establece de modo imperativo el carácter indefinido o temporal de la pensión, su fijación en uno y otro sentido dependerá de las específicas circunstancias del caso, particularmente, las que permiten valorar la idoneidad o aptitud para superar el desequilibrio económico, siendo única condición para su establecimiento temporal que no se resienta la función de restablecer el equilibrio que constituye su razón de ser;

Así pues, la fijación de la pensión o asignación compensatoria de forma indefinida o temporal depende de las específicas circunstancias de cada caso cuya valoración corresponde a los tribunales de instancia y apelación que, como

hemos dicho, no puede ser revisada en esta vía casacional salvo cuando el juicio prospectivo sobre la posibilidad de superar el inicial desequilibrio en función de los factores concurrentes se muestra como ilógico o irracional, o cuando se asienta en parámetros distintos de los apuntados por la jurisprudencia, lo que no se aprecia en el presente supuesto por lo que debe ser rechazado el motivo y desestimado el recurso."

***** Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 11 de enero de 2012. Pensión alimenticia y gastos extraordinarios. Situación de desempleo. Modificación notoria y relevante de las circunstancias. Principio de proporcionalidad**

"PRIMERO.- La demanda que ha dado origen a la tramitación de los presentes autos insta la modificación de medidas definitivas adoptadas en sentencia de divorcio, recaída en fecha 22 de diciembre de 2005 y parcialmente modificada en la sentencia de apelación, de 8 de noviembre de 2006, en lo concerniente a dos de los pronunciamientos en ellas efectuados: al importe de la pensión por cargas del matrimonio y alimentos de los hijos comunes, Verónica y Julián C. Á., y la exención del pago de los gastos relativos a los estudios que la hija Verónica C. Á. viene cursando en la Universidad Privada "Nebrija" de Madrid. Las razones en que se funda la demanda son, sustancialmente, la modificación de las circunstancias concurrentes en cuanto a los ingresos que obtiene el demandante, por cuanto ha venido prestando sus servicios a la empresa B hasta el día 21 de diciembre de 2009, fecha en que ha sido despedido, expresando en la demanda que en la fecha de su presentación (8 de enero de 2010) se encuentra sin empleo ni ingreso alguno.

Tramitado el proceso en primera instancia, recayó sentencia que estimó en parte la demanda. Declara como hecho acreditado que la relación laboral del demandante se extinguió por despido en fecha 21 de diciembre de 2009, sin que conste la percepción de ingresos con posterioridad. También declara probado que en años precedentes había percibido importantes remuneraciones por su actividad laboral, concretadas en 55.163, 56 euros el año 2008 y 40.000 euros el año 2009. El juez de primera instancia aprecia una variación importante de las circunstancias, lo que justifica también una modificación de la contribución del demandante a las cargas familiares, con base en el art. 775 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por ello acuerda reducir el importe de la pensión de alimentos para los hijos, que fija en 150 euros mensuales, actualizables anualmente, y deja sin efecto la obligación de contribuir al pago de los gastos extraordinarios de matrícula de la hija.

SEGUNDO.- La sentencia del Juzgado fue recurrida en apelación por ambas partes. En la segunda instancia se practicó prueba documental y, como consecuencia de la valoración de su resultado, la Audiencia Provincial dictó sentencia estimatoria del recurso interpuesto por Dª. Mª Pilar y desestimatoria del deducido por D. Julián. En los fundamentos de derecho se declara probado, entre otros extremos: que la hija mayor del matrimonio cursa la triple licenciatura con diploma "Nebrija Lidera", cuyo coste de matricula del curso 2009/2010 ascendió a 8.380 euros; que los dos hijos del matrimonio, de 22 y 17

años de edad, se encuentran en plena etapa formativa y de estudios, careciendo de independencia económica; y que el actor está percibiendo una Renta Activa de Inserción por importe mensual de 426 euros, hasta el día 11 de diciembre de 2011.

En el fundamento tercero se expresa que del resultado de la prueba practicada en el proceso ha de inferirse *la falta de alteración de las circunstancias concurrentes al tiempo de dictarse la sentencia de divorcio, por cuanto, aun tratándose de empleos temporales, ha quedado acreditado el trabajo ininterrumpido del actor desde entonces, y la consiguiente percepción de ingresos por el mismo, manteniéndose incólumes las necesidades de los dos hijos de matrimonio, en plena etapa formativa, sostenidas en exclusiva por los trabajos temporales desarrollados por la madre, Dª. Mª Pilar Á.*

En consecuencia revoca la sentencia de primera instancia, manteniendo las medidas acordadas en sentencia firme de divorcio de 8 de noviembre de 2006.

TERCERO.- La representación de D. Julián C. F. interpuso recurso de casación y de infracción procesal. Ambos han sido admitidos a trámite, procediendo examinar primeramente éste último, de conformidad a lo establecido en la Disposición Final Decimosexta, apartado 1, regla 6ª, de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El recurso extraordinario por infracción procesal se funda en la existencia de error en la valoración de la prueba, por cuanto el recurrente, tras haber sido despedido por la empresa para la que prestaba sus servicios, ha pasado a cobrar un subsidio de desempleo en cantidad de 426 euros mensuales, expresando que solo lo cobró a partir de abril de 2010, y que con anterioridad ni siquiera sabía si lo cobraría; que entre el 8 de junio y 23 de diciembre de 2010 percibió la prestación del Programa temporal de protección por desempleo e inserción (PRODI) por el mismo importe; y que desde el 12 de enero de 2011 resulta perceptor de Renta Activa de Inserción de 406 euros al mes. A partir de ese razonamiento estima que no se le puede imponer obligaciones económicas que se elevan a más de 1000 euros mensuales cuando sus ingresos son de 406 euros, por lo que la cuantía determinada en la sentencia, además de desproporcionada, resulta de imposible cumplimiento.

Termina instando de la Sala acuerde la supresión o suspensión del pago de la pensión de alimentos impuestas en la sentencia recurrida, así como suprima la obligación de contribuir en los gastos de estudios universitarios de la hija o, en otro caso, señale el importe de pensión de alimentos acorde a la situación actual, o confirme la sentencia de primera instancia de estimación parcial de la demanda.

CUARTO.- Dicho recurso extraordinario fue preparado al amparo de lo previsto en el art. 469, 2ª y 3ª, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por error de

hecho y de derecho en la valoración de la prueba, en cuanto a la determinación de la cuantía de la pensión de alimentos y contribución a los gastos, en correspondencia con el principio de proporcionalidad; y el escrito de interposición del recurso se desarrolla conforme a los argumentos que precedentemente han sido expuestos.

Es doctrina reiterada de la Sala Primera del Tribunal Supremo que la invocación de error en la apreciación de la prueba ha de hacerse al amparo del art. 469.1.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que resulte procesalmente correcto hacerlo por la vía del apartado 2º de dicho texto legal, por cuanto este motivo está reservado al examen del cumplimiento de "*las normas procesales reguladoras de la sentencia*". Tampoco la vía del apartado 3º es la adecuada al efecto. Así se expresa en sentencia 429/2011, de 9 de junio, que cita otras precedentes.

Es por esta razón que el Ministerio Fiscal entiende improsperable el recurso extraordinario de infracción procesal, por cuanto se interpone sin cita de los concretos artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil en que se fundamenta, invocando en el escrito de preparación un cauce inadecuado, lo que considera defectos procesales de carácter determinante.

Aun apreciando la Sala la incorrecta técnica del escrito de recurso, estima que procede entrar en su consideración, atendidas las circunstancias del caso. La parte recurrente expresa claramente su voluntad impugnativa e invoca un defecto procesal relevante, cual es el error notorio en la apreciación de la prueba. La existencia, en su caso, de este error fáctico, notorio o patente, determinaría la arbitrariedad o manifiesta irracionalidad de la sentencia, lo que significa la infracción en el proceso civil de los derechos reconocidos por el art. 24 de la Constitución Española. No puede la Sala ignorar el examen de tan relevante cuestión, por el defecto formal antes citado.

QUINTO.- El recurso extraordinario por infracción procesal ha de ser estimado. De la prueba practicada en las instancias resultan los hechos probados que han sido recogidos en los precedentes Fundamentos de Derecho, y de ellos se desprende el notorio error valorativo denunciado por el recurrente.

Consta comprobado que el demandante, cuando instó la modificación de medidas definitivas adoptadas en la sentencia de divorcio, había perdido el empleo que anteriormente tenía, y que le producía elevados ingresos, en los términos que han quedado recogidos. A la fecha de interposición de la demanda no constaban otras percepciones. Aunque la prueba practicada en segunda instancia ha llegado a determinar la percepción de subsidios, devengados a partir de 2 de enero de 2010, y que finalmente se concretan en el derecho a percibir la Renta Activa de Inserción por importe mensual de 426 euros, de ello no puede inferirse la conclusión que saca la sentencia de segunda instancia: *la falta de alteración de las circunstancias concurrentes*.

Se trata, por el contrario, de una notoria y relevante modificación, que ha de tener consecuencias en la contribución del demandante a las cargas del matrimonio, en los apartados a que se refiere su demanda.

SEXTO.- La estimación del recurso extraordinario por infracción procesal determina que la Sala deba entrar a conocer del fondo de la cuestión planteada, y dicte nueva sentencia teniendo en cuenta, en su caso, lo que se hubiese alegado como fundamento del recurso de casación. Así lo establece la regla 7ª de la Disposición Final decimosexta, apartado 1, de la LEC, que regula el régimen transitorio en materia de recursos extraordinarios.

SÉPTIMO.- Las alegaciones expresadas en el recurso de casación se centran en la violación del principio de proporcionalidad de la pensión de alimentos en aplicación del artículo 8 de la Ley 2/2010, de 26 de mayo, (Art. 82 Código Foral de Aragón), en consonancia con el Art. 146 Código Civil. Se denuncia que, habiendo quedado acreditada una notoria disminución de los ingresos del actor, ahora recurrente, el mantenimiento de la pensión de alimentos y de la necesidad de contribuir a otros gastos de los hijos en la misma cuantía que estaba establecida en la sentencia de divorcio vulnera la proporcionalidad establecida en la ley.

El tribunal, retomando la instancia, ha de acoger parcialmente la pretensión del recurrente. La demanda se ha interpuesto al amparo del art. 775 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que permite a los cónyuges solicitar del Tribunal la modificación de las medidas convenidas por ellos o de las adoptadas en defecto de acuerdo, siempre que hayan variado sustancialmente las circunstancias tenidas en cuenta al aprobarlas o acordarlas.

El art. 82 del Código de Derecho Foral de Aragón, que recoge la norma contenida en el artículo 8 de la Ley 2/2010, previene que *1. Tras la ruptura de la convivencia de los padres, ambos contribuirán proporcionalmente con sus recursos económicos a satisfacer los gastos de asistencia de los hijos a su cargo.*

2. La contribución de los progenitores a los gastos ordinarios de asistencia a los hijos se determinarán por el Juez en función de las necesidades de los hijos, de sus recursos y de los recursos económicos disponibles por los padres.

3. El Juez asignará a los padres la realización compartida o separada de los gastos ordinarios de los hijos teniendo en cuenta el régimen de custodia, y si es necesario fijará un pago periódico entre los mismos.

4. Los gastos extraordinarios necesarios de los hijos serán sufragados por los progenitores en proporción a sus recursos económicos disponibles. Los gastos extraordinarios no necesarios se abonarán en función de los acuerdos a los que lleguen los progenitores y, en defecto de acuerdo, los abonará el progenitor que haya decidido la realización del gasto.

La aplicación al caso de la norma determina:

a) que la proporcionalidad en la contribución a los gastos de asistencia a los hijos, atendidas las necesidades de éstos y los recursos económicos disponibles por los progenitores, exige una disminución de la contribución del recurrente, en los términos y la cuantía que habían quedado expresados en la sentencia de primera instancia, es decir, fijando como pensión de alimentos con cargo a D. Julián C. F. para cada uno de los dos hijos, Verónica y Julián, la cuantía de 150 euros mensuales actualizables anualmente; sin que proceda extinguir su obligación, ya que el deber de contribuir a satisfacer las necesidades de los hijos no desaparece por la peor fortuna del progenitor.
b) que ha de quedar sin efecto la obligación de contribuir D. Julián C. F. al pago de los gastos extraordinarios de matrícula de la hija, por aplicación del último párrafo del precepto antes trascrito, ya que los estudios que ésta realiza en la Universidad Privada “Antonio de Nebrija” de Madrid, en la que cursa la triple licenciatura con diploma “Nebrija Lidera”, cuyo coste de matrícula del curso 2009/2010 ascendió a 8.380 euros, ha de ser considerado como un gasto extraordinario no necesario y, en defecto de acuerdo al respecto, que no consta en autos, no puede ser de cargo del padre recurrente.”

***** Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 17 de enero de 2012. Exclusión de la guarda y custodia por proceso penal**

"PRIMERO.- La sentencia recaída en 1ª Instancia en el presente procedimiento sobre guarda y custodia, visitas y alimentos es objeto de recurso por la representación de la actora SRa. que en su escrito de interposición (Art. 458LEC) considera que debe serle atribuida la guarda y custodia de hijo menor teniendo en cuenta la edad de este (2 años y medio), habiendo convivido siempre con su madre todo ello en beneficio del mismo, teniendo en cuenta por otro lago las circunstancias que dieron lugar a la sentencia de 15 de septiembre de 2010 dictada por el Juzgado de lo penal nº 3 de Zaragoza analizándose ésta de manera adecuada y no perjudicar el interés del menor, debiéndose en todo cumplir el régimen de visitas no imponiéndose en ningún caso pensión.

SEGUNDO.- El artº 80. 6 del Código de Derecho Foral de Aragón establece que no procederá la atribución de la guardia y custodia a uno de los progenitores ni individual ni compartida, cuando esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la liberta o indemnidad sexual del otro progenitor o de los hijos o hijas y se haya dictado resolución judicial motivada, en la que se constaten indicios fundados y racionales de criminalidad. Tampoco procederá cuando el Juez advierta de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas la existencia de indicios fundados de violencia doméstica o de género.

El precepto pues asume en Aragón lo establecido en el art. 92.7 del Código Civil pero exigiendo que se haya dictado resolución judicial motivada, que se constate la presencia de indicios racionales de criminalidad, de manera que no es suficiente la simple denuncia par provocar la exclusión de la custodia compartida o de la individual.

En el presente supuesto la recurrente ha sido condenada como autora de un delito de lesiones en el ámbito familiar a la pena de 8 meses de prisión y de prohibición y comunicación con el recurrente de dos años, por sentencia de 15/9/2010 del Juzgado de lo penal nº 3 de Zaragoza confirmada por la sección 3ª de esta Audiencia Provincial en sentencia de 25/1/2011, se trata pues de un proceso penal incluido en el supuesto de exclusión de la guarda y custodia, no encontrándose extinguida la pena, en consecuencia procede confirmar la sentencia en este apartado.

TERCERO.- En cuanto al régimen de visitas, el fijado por la sentencia apelada se considera adecuado teniendo en cuenta la edad del menor y ello por cuanto como tiene declarado el Tribunal Supremo (Sentencia de 21 de noviembre de 2005), aquel debe estar subordinado al interés y beneficio del menor y este sentido proteccionista se manifiesta claramente expresado en la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989, igualmente la Ley Orgánica de 15 de enero de 1996, de Protección Jurídica del Menor, sienta como principio general la primacía del interés como superior de los menores sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir, debiendo ser respetado por todos los poderes públicos, padres, familiares y cuidadores y por los Juzgadores."

***** Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Ejea de los Caballeros de 23 de enero de 2012. Custodia compartida. Valoración. Visitas. Alimentos**

"Primero.- El apartado segundo de la disposición transitoria primera de la Ley 2/2010, de la Comunidad Autónoma de Aragón, de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de los padres, vigente en el momento de interponerse la demanda que dio lugar a este procedimiento, establecía que "*la solicitud de custodia compartida por uno de los progenitores será causa de revisión de los convenios reguladores y de las medidas judiciales adoptadas bajo la legislación anterior durante un año desde la entrada en vigor de la presente Ley*". Lo que viene a coincidir con lo dispuesto en el número 2 de la disposición transitoria sexta del Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba, con el título de "Código del Derecho Foral de Aragón", el Texto Refundido de las Leyes civiles aragonesas, vigente en la actualidad.

La demanda que da origen a estas actuaciones se interpuso el 9 de febrero de 2011, y solicita la adopción de un régimen de custodia compartida, por lo que no es necesario que se alegue ni pruebe la variación de circunstancias a las que se refiere el artículo 775 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Ello no significa que la mera solicitud de custodia compartida en el plazo previsto por la ley suponga la adopción automática de este tipo de régimen.

La ley permite que, dado el importante cambio que supone la nueva legislación, aquellas personas que obtuvieron unas medidas al amparo de la anterior normativa, restrictiva en cuanto a la posibilidad de que se acordase un régimen de custodia compartida, si están realmente interesados en ella, puedan obtenerla ahora, siempre que lo soliciten en un determinado plazo. Pero, por supuesto, no basta la mera solicitud, sino que deberá examinarse si, con arreglo a la normativa ahora vigente, procede o no esta modalidad de custodia.

En la sentencia dictada en este Juzgado el 6 de abril de 2006, teniendo en cuenta las modificaciones operadas por la Sentencia de apelación dictada por la Audiencia Provincial de Zaragoza de 24 de octubre de 2006, se atribuyó a la madre la custodia del hijo común, se atribuyó al padre el uso del domicilio familiar, se estableció un régimen de visitas a favor del padre, una pensión de alimentos a cargo del padre y a favor del hijo, con gastos extraordinarios por mitad, y una pensión compensatoria a favor de la madre.

La petición de custodia compartida afecta también a la pensión de alimentos, cuya extinción se solicita expresamente, y a los gastos extraordinarios, así como al régimen de visitas, pues todas estas cuestiones parten de la base de la atribución de la custodia a la madre.

Segundo.- El artículo 80 del Código de Derecho Foral de Aragón establece la custodia compartida como forma preferente de custodia, salvo que la custodia individual sea más conveniente.

El legislador aragonés parte del establecimiento de una custodia compartida en el caso de ruptura de la convivencia de la pareja, como regla general, salvo que haya motivos que aconsejen una custodia individual. En la exposición de motivos de la Ley 2/2010, que introdujo esta regulación, parece partirse de que este tipo de régimen redunda, en principio, en el interés de los menores, y entronca esta decisión legislativa con la Convención sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989, y la obligación de los Estados a mantener las relaciones personales y contacto directo con ambos progenitores de modo regular; con la igualdad entre ambos progenitores; con el derecho de los hijos a mantener una relación equilibrada y continuada con ambos progenitores y el derecho-deber de éstos de crianza y educación. Asimismo, considera ventajosa la custodia compartida al entender que mantiene los lazos de afectividad entre los hijos y ambos progenitores, facilita la aceptación de la nueva situación por parte de los hijos, promueve la implicación de los progenitores en la educación y el desarrollo de los hijos, reduce la litigiosidad, y favorece una distribución igualitaria de los roles sociales entre hombres y mujeres.

Por lo tanto, salvo que concurran especiales circunstancias que hagan más beneficioso para los hijos la custodia individual, lo que debe acordarse es la custodia compartida.

El artículo 80.2 del Código de Derecho Foral establece los factores que han de tenerse en cuenta. En el caso que nos ocupa, la edad del hijo menor, que ya tiene más de seis años, no parece que sea un obstáculo para la custodia compartida. La opinión del menor no se tiene en cuenta dada su corta edad. La aptitud de los padres es adecuada, según todos los informes que obran en las actuaciones (informe de valoración psicológica, aportado como documento 10 de la demanda; informe social, aportado como documento 11 de la demanda; certificado remitido por la Directora del colegio del menor; y los informes psicológico y social unidos a las actuaciones). En cualquier caso, no se ha probado la falta de aptitud de ninguno de ellos.

Tercero.- La demandada pone de manifiesto varias circunstancias que considera que impedirían la custodia compartida.

Una de ellas es el hecho de que el demandante trabaja, al contrario de lo que ocurre con la demandada. El artículo 80.2 del Código de Derecho Foral de Aragón considera que uno de los factores a tener en cuenta es, precisamente, la posibilidad de conciliación de la vida laboral y familiar de los padres.

Entiendo que sólo supuestos de evidente incompatibilidad del horario laboral de unos progenitores podría suponer alterar la regla general (la excepción, como tal, debe ser apreciada restrictivamente).

En el caso que nos ocupa, el demandante, en la actualidad, se encuentra en paro. Por lo tanto, ambos progenitores tienen plena disponibilidad para ocuparse del menor. El demandante manifestó en la vista que cree que esta circunstancia es coyuntural, y que podrá encontrar trabajo en próximas fechas. Lo cierto es que, en la actualidad, el demandante no trabaja, y que no podemos conocer el horario de un hipotético empleo futuro. En cualquier caso, el demandante tiene una pareja y unos padres que pueden colaborar con él en el cuidado de su hijo. Se trata de un apoyo del que, en circunstancias normales, muchas parejas se valen, por lo que no puede considerarse como algo negativo, simplemente por el hecho de que haya habido una ruptura de la pareja. Por otra parte, parece claro que la demandada también se vale del apoyo familiar, incluso aunque no trabaje, pues vive con sus padres y sus hermanas, y consta en diferentes informes de la Policía Local cómo son sus hermanas las que, en muchas ocasiones, llevan o recogen al niño.

Cuarto.- Otro factor que ha de tenerse en cuenta es el arraigo social y familiar del hijo.

En la contestación se indica que el hijo ha vivido sus seis años de vida en Ejea de los Caballeros, y que la custodia compartida supondría cambiar no sólo de domicilio, sino de población de residencia. La demandada considera que ello no es aconsejable.

Aparte de la valoración de la demandada, no consta que este cambio de localidad pueda suponer un perjuicio para el menor. En la actualidad el menor acude a para cumpir el régimen de visitas con su padre, y allí tiene una hermana. Los informes psico-sociales indican que el menor, además, tiene una adecuada vinculación con la familia del padre.

La localidad de se encuentra a kilómetros de Ejea de los Caballeros. De hecho pertenece al mismo municipio de Ejea de los Caballeros.

Por lo expuesto, considero que la adopción del régimen de custodia compartida no supondría, en este caso, una ruptura del arraigo social y familiar del hijo, porque el domicilio del padre se encuentra cerca del que ha venido teniendo el menor, y porque el menor ha mantenido una relación adecuada con el padre y su familia durante estos años. Se tratará, evidentemente, de una situación nueva para el menor, pero entiendo que no supone una ruptura que pueda ser perjudicial para el menor.

Quinto.- En el procedimiento se han puesto de manifiesto otros factores relevantes. En primer lugar la mala relación entre los progenitores.

La conflictividad de esta pareja en cuanto al cumplimiento del régimen de visitas hasta el momento es evidente. Basta con comprobar el gran número de incidencias reportadas por la Policía Local de Ejea de los Caballeros, cuya comisaría se ha venido empleando como punto de encuentro para el intercambio del menor. Ni siquiera hace falta conocer el contenido de estas

incidencias, su número ya evidencia que existe un problema entre los progenitores (de comunicación o de voluntad).

Algunas posturas en relación con la custodia compartida entienden que, para el establecimiento de la misma, es necesario un mínimo acuerdo entre los progenitores o, al menos, una posibilidad razonable de que éstos puedan comunicarse. No comparto esta postura. Si ello fuera así, bastaría con que una de las partes se cerrase en banda para boicotear lo que la ley considera regla general. Precisamente lo que pretende la ley es promover la corresponsabilidad de los progenitores en la crianza de sus hijos, debiendo aquéllos realizar un esfuerzo en beneficio de los menores en lugar de enrocarse en la cómoda posición de oponerse a la custodia compartida. Si no existe en la actualidad comunicación entre los progenitores, deberá haberla. Ésta es exigible a los progenitores, que tienen el deber de crianza de sus hijos, ya que se trata de algo sencillo (otra cosa es que a los progenitores les pueda suponer un esfuerzo, incluso importante, precisamente por la mala relación con el otro progenitor). Además, la oposición de un progenitor no puede ser suficiente para entender que la custodia compartida no es lo más beneficioso para los menores (artículo 80.5 del Código de Derecho Foral). Por último, la necesidad de comunicación y consenso en una custodia compartida no tiene por qué ser mucho más exigente que la necesaria en un supuesto de custodia individual con un régimen de visitas amplio (piénsese que, en este último caso, puede haber hasta tres entregas y recogidas semanales del menor, por ejemplo, cuando coinciden dos días entre semana y el fin de semana para el progenitor no custodio). Si en el régimen de custodia individual se exige de los progenitores esta comunicación y colaboración, no hay motivo para no hacerlo en relación con una custodia compartida.

Sexto.- Otra cuestión que se pone de manifiesto en la contestación como obstáculo a la custodia compartida es la distancia entre el domicilio del padre y el colegio del menor. Al encontrarse a kilómetros de Ejea, en principio, el menor debería hacer 88 kilómetros diarios, al tener que hacer dos trayectos desde su domicilio al colegio y otros dos desde el colegio al domicilio.

No debe confundirse el superior interés del menor con la comodidad del mismo, o el interés en aspectos parciales o a corto plazo. El interés superior del menor debe entenderse como un objetivo integral y a largo plazo de desarrollo óptimo de la personalidad del menor.

Lo cierto es que el dato puesto de relieve por la parte demandada no es del todo irrelevante, ya que se trata de perder cada día más de una hora en la carretera. Pero, en el fondo, se trata de hacer un trayecto de unos veinte minutos para llevar al niño al colegio. Esto es algo que, diariamente, hacen miles de niños en toda España, con padres separados o no. Incluso en ocasiones, el niño hace un trayecto de veinte minutos (o más) en coche o en autobús para acudir a un centro privado situado en las afueras o en las inmediaciones de las ciudades. En

estos casos nadie diría que hacer ese trayecto sea algo perjudicial para el menor. Desde luego es más incómodo para el menor que acudir al colegio de la esquina, pero en estos casos los progenitores aceptan esa incomodidad sin ningún problema.
Por otra parte, esta incomodidad podría paliarse dejando al menor a comer en el comedor escolar, lo que evitaría un trayecto de ida y otro de vuelta.

Séptimo.- En definitiva, en el caso que nos ocupa, no se observa ningún elemento que justifique la adopción de una custodia individual. Procede, por ello adoptar un régimen de custodia compartida.
En la exposición de motivos de la Ley 2/2010 podía leerse que "*la custodia compartida, tal y como se configura en la Ley, no implica necesariamente una alternancia de la residencia de los hijos con sus progenitores en periodos iguales, pero sí en un tiempo adecuado para el cumplimiento de la finalidad de la custodia compartida*".
Más allá de lo anterior, la ley no define en ningún momento qué se entiende por custodia compartida. Parece que lo importante es establecer un régimen adecuado a las circunstancias de cada familia de modo que ambos progenitores pasen un período de tiempo razonablemente similar con sus hijos, de forma que puedan corresponsabilizarse en el ejercicio de la autoridad familiar y en el desempeño de su deber de crianza.
En este caso existen dos propuestas formuladas por el actor. Considero que debe rechazarse la formulada en segundo lugar. La custodia compartida, como se ha expuesto, no implica la división de la estancia con los progenitores en dos períodos iguales, pero sí que cada uno de ellos disponga de un tiempo adecuado para el cumplimiento de la finalidad de la custodia compartida: la corresponsabilidad en el ejercicio de la autoridad familiar y en el desempeño del deber de crianza. Difícilmente se consigue esta finalidad si a un progenitor se le atribuye principalmente el tiempo de ocio del menor y al otro el tiempo lectivo. Esta solución puede ser la única viable en determinados casos, y podría estar justificada si es más beneficiosa para el menor que la custodia individual, pero entiendo que, en la medida de lo posible, los períodos en los que el menor debe estar con cada progenitor deben tratar de ser equivalentes tanto en la duración como en la naturaleza del período.
El sistema propuesto en la demanda es adecuado, ya que establece siete períodos al año, de modo que un progenitor tiene la custodia durante un período y el otro la tiene en el período siguiente, y así sucesivamente. De esta forma, cada año, cada progenitor disfruta de un grupo de períodos distintos al año anterior y así, cada dos años, cada progenitor ha disfrutado del mismo número de períodos y, prácticamente, del mismo número de días. Los siete períodos serán los siguientes:
1. º Desde el 31 de diciembre a las 20:00 horas hasta el primer día lectivo de marzo.

2. º Desde el primer día lectivo de marzo hasta el primer día lectivo de mayo.
3. º Desde el primer día lectivo de mayo hasta el 30 de junio a las 20:00 horas.
4. º Desde el 30 de junio a las 20:00 horas hasta el 31 de julio a las 20:00 horas.
5. º Desde el 31 de julio a las 20:00 horas hasta el 31 de agosto a las 20:00 horas.
6. º Desde el 31 de agosto a las 20:00 horas hasta el primer día lectivo de noviembre.
7. º Desde el primer día lectivo de noviembre hasta el 31 de diciembre a las 20:00 horas.

En todos los supuestos en los que se fija día y hora como inicio o fin de un período de custodia, la entrega y recogida del menor se realizará en la Policía Local de Ejea de los Caballeros, como punto de encuentro. Cuando se indica como inicio o fin de un período un día lectivo, el progenitor saliente deberá llevar a su hijo al colegio por la mañana, y el entrante recogerlo de allí a la salida.

Considero que, para que el menor mantenga mejor el contacto con ambos progenitores, además de un régimen de visitas a favor del progenitor no custodio de fines de semana alternos, es adecuado añadir una tarde entre semana. Así, el progenitor que, en cada período, no tenga la custodia, tendrá derecho a estar con su hijo los fines de semana alternos desde la salida del colegio del viernes, debiéndolo recoger allí, hasta el domingo a las 20:00 horas, momento en que reintegrará al menor en el punto de encuentro. El primer fin de semana de cada período ordinario el menor estará con el progenitor custodio, el segundo, con el progenitor no custodio, y así sucesivamente (corresponden al progenitor no custodio los fines de semana pares de cada período ordinario de custodia).

Asimismo, el progenitor no custodio tendrá derecho a estar con su hijo todos los miércoles lectivos desde la salida del colegio, debiéndolo recoger allí, hasta las 20:00 horas, momento en que lo reintegrará en el punto de encuentro.

Las vacaciones de Semana Santa las pasará el menor en compañía del progenitor al que le corresponda la custodia ordinaria en esa época. Los fines de semana anterior y posterior a la Semana Santa se unirán a la misma si no hay ningún día lectivo entre medio. Es decir, se considera período de semana santa al conjunto de días no lectivos que van desde la salida del colegio el último día lectivo hasta el primer día lectivo posterior, abarcando los fines de semana que se incluyan en ese período. El disfrute del siguiente fin de semana posterior a la semana santa, si todavía no se ha producido el cambio de período de custodia, corresponderá al progenitor no custodio, y el siguiente al progenitor custodio, y así sucesivamente hasta que finalice el período.

Los períodos consistentes en los meses de julio y agosto se consideran períodos vacacionales, y durante los mismos no habrá visitas de fin de semana ni intersemanales (ya que esos miércoles no serán lectivos).

Desde el inicio de las vacaciones escolares de Navidad hasta la reanudación de las clases no se aplicará el régimen de visitas de fines de semana (tampoco el de los miércoles, ya que serán miércoles no lectivos).

Todas las entregas y recogidas podrán llevarse a cabo por el padre y por la madre, así como por sus familiares, parejas o persona de confianza.

Dado el conflicto que ha existido entre los progenitores a lo largo de varios años acerca de los puentes, no se establece régimen de disfrute de los mismos. El progenitor no custodio sólo dispondrá de los fines de semana en los términos que se ha expuesto, sin que se le añadan los puentes. En el caso de que el viernes no sea lectivo y, por lo tanto, no se pueda recoger al menor a la salida del colegio, la entrega se hará en el punto de encuentro a las 17:00 horas. Aunque el lunes siguiente no sea lectivo, el progenitor no custodio deberá reintegrar al menor el domingo a las 20:00 horas en el punto de encuentro.

Corresponde la custodia en el período actual a la madre. El período de custodia siguiente, que comenzará el primer día lectivo de marzo de 2012, corresponderá al padre, y así sucesivamente. En cuanto a las visitas de fin de semana y entre semana, el primer miércoles de visitas que corresponderá al padre será el miércoles 1 de febrero de 2012, y el primer fin de semana será el de los días 3, 4 y 5 de febrero, siguiéndose después la alternancia antes descrita.

Octavo.- La modificación del régimen de custodia debe ir acompañada de una modificación en cuanto a los gastos de mantenimiento del hijo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 82 del Código de Derecho Foral de Aragón. Este precepto establece que la contribución de cada progenitor será proporcional a sus ingresos.

En la actualidad ninguno de los progenitores trabaja. El Sr., no obstante, tiene reconocida una prestación por desempleo, hasta el 11 de abril de 2012, ha venido trabajando y considera que podrá trabajar en un futuro próximo. Dicha prestación parte del 60% de una base reguladora diaria de 59,26 euros, lo que supone una prestación mensual bruta de algo más de mil euros.

La Sra. no trabaja en la actualidad. Se desconoce si tiene derecho a alguna prestación, pero tiene la misma edad que el Sr. , con lo cual tiene posibilidad de trabajar. Más ahora con el cambio de régimen de custodia, ya que va a disponer de más tiempo. Por otra parte, la Sentencia de la Audiencia Provincial de 24 de octubre de 2006 le concedió una pensión compensatoria de 200 euros mensuales por tiempo de un año, que ya ha transcurrido largamente. Ya consideró dicha sentencia (fundamento tercero) su edad y posibilidad de alcanzar un empleo.

Por lo expuesto, entiendo que no es posible de momento distribuir por igual la contribución a los gastos de mantenimiento del hijo. El Sr. deberá contribuir con la cantidad de 180 euros mensuales, y la Sra. con la cantidad de 70 euros mensuales, ya que el Sr. cobra una prestación en estos momentos, y

debe tener una mayor facilidad para encontrar empleo en el futuro, ya que se ha mantenido en el mercado laboral, al contrario que la Sra.

Ambos deberán ingresar estas cantidades en una cuenta que se abrirá a nombre de ambos, pudiendo tener los dos plena disponibilidad de la misma, dentro de los cinco primeros días de cada mes. Esta cantidad, que se pagará por primera vez en febrero de 2012, se actualizará de manera automática conforme a las variaciones del IPC, o índice que lo sustituya, el 1 de febrero de cada año, siendo la primera revisión automática el 1 de febrero de 2013.

Con cargo a esta cuenta se efectuarán los gastos ordinarios del menor (ropa, material escolar, actividades extraescolares, etc.). Asimismo, con cargo a esta cuenta se hará cualquier gasto para el menor en el que estén de acuerdo los progenitores. Cada progenitor deberá comunicar al otro mensualmente una liquidación detallada de las disposiciones que haya efectuado de la cuenta, con justificación de cada disposición. En caso de no justificar cualquier disposición, deberá reintegrar la cantidad correspondiente.

Cada progenitor soportará los gastos de alimentación y habitación del hijo mientras esté en su compañía.

Los gastos extraordinarios necesarios, salvo acuerdo en contrario, serán satisfechos en una proporción del 66% el Sr. y el 34% la Sra. En el caso de que no sean necesarios, los gastos extraordinarios serán sufragados por el progenitor que haya decidido efectuarlos.”

***** Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Ejea de los Caballeros de 23 de enero de 2012. Custodia compartida. Valoración. Visitas. Alimentos**

"Primero.- El número 2 de la disposición transitoria sexta del Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba, con el título de "Código del Derecho Foral de Aragón", el Texto Refundido de las Leyes civiles aragonesas establece que "*la solicitud de custodia compartida por uno de los progenitores es causa de revisión de los convenios reguladores y de las medidas judiciales adoptadas bajo la legislación anterior durante un año a contar desde el 8 de septiembre de 2010*".

La demanda que da origen a estas actuaciones se interpuso el 8 de septiembre de 2011, y solicita la adopción de un régimen de custodia compartida, por lo que no es necesario que se alegue ni pruebe la variación de circunstancias a las que se refiere el artículo 775 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Ello no significa que la mera solicitud de custodia compartida en el plazo previsto por la ley suponga la adopción automática de este tipo de régimen.

La ley permite que, dado el importante cambio que supone la nueva legislación, aquellas personas que obtuvieron unas medidas al amparo de la anterior normativa, restrictiva en cuanto a la posibilidad de que se acordase un régimen de custodia compartida, si están realmente interesados en ella, puedan obtenerla ahora, siempre que lo soliciten en un determinado plazo. Pero, por supuesto, no basta la mera solicitud, sino que deberá examinarse si, con arreglo a la normativa ahora vigente, procede o no esta modalidad de custodia.

En la sentencia dictada el 31 de mayo de 2010 se atribuyó la custodia del menor a la madre, a la cua se atribuía el uso del domicilio familiar al quedar en compañía del menor; se establecía un régimen de visitas a favor del padre; y una pensión de alimentos a cargo de este último, a favor del menor, de 250 euros mensuales.

Todas estas medidas pretenden modificarse (ya que la custodia compartida, en el modo propuesto, supondría una utilización compartida del domicilio, y habría otra forma de repartirse los gastos del menor).

Segundo.- El artículo 80 del Código de Derecho Foral de Aragón establece la custodia compartida como forma preferente de custodia, salvo que la custodia individual sea más conveniente.

El legislador aragonés parte del establecimiento de una custodia compartida en el caso de ruptura de la convivencia de la pareja, como regla general, salvo que haya motivos que aconsejen una custodia individual. En la exposición de motivos de la Ley 2/2010, que introdujo esta regulación, parece partirse de que este tipo de régimen redunda, en principio, en el interés de los menores, y

entronca esta decisión legislativa con la Convención sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989, y la obligación de los Estados a mantener las relaciones personales y contacto directo con ambos progenitores de modo regular; con la igualdad entre ambos progenitores; con el derecho de los hijos a mantener una relación equilibrada y continuada con ambos progenitores y el derecho-deber de éstos de crianza y educación. Asimismo, considera ventajosa la custodia compartida al entender que mantiene los lazos de afectividad entre los hijos y ambos progenitores, facilita la aceptación de la nueva situación por parte de los hijos, promueve la implicación de los progenitores en la educación y el desarrollo de los hijos, reduce la litigiosidad, y favorece una distribución igualitaria de los roles sociales entre hombres y mujeres.

Por lo tanto, salvo que concurran especiales circunstancias que hagan más beneficioso para los hijos la custodia individual, lo que debe acordarse es la custodia compartida.

En el caso que nos ocupa, no se observa ningún elemento que justifique la adopción de una custodia individual. Por una parte, en cuanto a los factores que el artículo 80 exige tener en cuenta, resulta que la edad del hijo no parece ningún obstáculo, ya que L está a punto de cumplir cinco años. Tampoco hay datos de arraigo del menor que desaconsejen la custodia compartida. No se ha oído al hijo de los litigantes, precisamente debido a su edad.

En cuanto a la aptitud de los padres, nada indica que ninguno de ellos sea inhábil para ocuparse de sus hijos. El informe psicológico emitido en el divorcio indicaba que ambos progenitores habían ejercido sus roles parentales de forma adecuada, demostrando preocupación por el bienestar de su hijo. El informe social concluía que ambos progenitores estaban capacitados para ostentar la guarda y custodia. Ambos progenitores tienen aptitud de sobra para encargarse de su hijo.

Por lo que se refiere a las posibilidades de conciliación de la vida laboral y familiar, considero que ambos progenitores cuentan con esta posibilidad. Entiendo que sólo supuestos de evidente incompatibilidad del horario laboral de unos progenitores podría suponer alterar la regla general (la excepción, como tal, debe ser apreciada restrictivamente), salvo que concurran con otras circunstancias que también desaconsejen la custodia compartida. En el caso que nos ocupa, la madre no trabaja, con lo cual, de momento, se evidencia su plena disponibilidad para ocuparse del menor. En cuanto al padre, ciertamente trabaja. No obstante, ello no es un obstáculo para que pueda encargarse del menor si tenemos en cuenta el documento 1 aportado en la vista por la parte actora. La empresa en la que trabaja el demandante certifica que flexibiliza sus horarios de entrada y salida para que el padre pueda ocuparse de su hijo (como consecuencia de una política de empresa de facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar). Por otra parte, ambos progenitores pueden contar con el apoyo de los abuelos, que es un apoyo del que, de forma ordinaria, se valen las

parejas cuando no hay conflicto, por lo que no hay motivo para desdeñarlo tras una ruptura.

En cuanto a otras circunstancias relevantes, considero que debe hacerse una referencia a los informes psicológico y social. Estos informes ya han sido mencionados, puesto que hacían referencia a la capacidad de los progenitores. Los informes consideraban más adecuada la custodia de la madre. Considero que este tipo de informes son importantes para los procedimientos de familia, pero deben ser tenidos en cuenta junto con el resto de pruebas que se practique, y deben valorarse racionalmente, sin que deban aceptarse sus conclusiones sin más. Ambos informes veían como principal problema la relación de conflictividad entre los progenitores. Sin embargo entiendo que, por una parte, esa conflictividad es, al menos en parte, ficticia. En la vista se alegó (aunque no se haya probado) que incluso en verano de 2011, ambos litigantes estuvieron de viaje juntos con su hijo. Desde luego no estamos ante una ruptura conflictiva, como pueden serlo otras, y no constan denuncias relativas al incumplimiento del régimen de visitas o al impago de la pensión de alimentos (aunque la demandada manifestó en la vista tres ocasiones de incidencias en el cumplimiento de las visitas). Por otra parte, la conflictividad tampoco puede ser un elemento que impida el establecimiento de una custodia compartida de forma automática. Si ello fuera así, bastaría con que una de las partes se cerrase en banda para boicotear lo que la ley considera regla general. Precisamente la ley lo que pretende es promover la corresponsabilidad de los progenitores en la crianza de sus hijos, debiendo aquéllos realizar un esfuerzo en beneficio de los menores en lugar de enrocarse en la cómoda posición de oponerse a la custodia compartida. Si hay una adecuada comunicación entre los progenitores, deberá haberla. Ésta es exigible a los progenitores, que tienen el deber de crianza de sus hijos, ya que se trata de algo sencillo (otra cosa es que a los progenitores les pueda suponer un esfuerzo, incluso importante, precisamente por la mala relación con el otro progenitor). Además, la oposición de un progenitor no puede ser suficiente para entender que la custodia compartida no es lo más beneficioso para los menores (artículo 80.5).

Otra cuestión que creo que debe recordarse, es que, antes del primer juicio, los litigantes, por iniciativa propia, establecieron un régimen similar al que ahora (y también en el juicio de divorcio) propone el demandante. Este sistema se prolongó, por acuerdo entre los progenitores, durante más de dos meses, y además en una época en la que el hijo contaba con algo más de dos años. Ello pone de relieve cómo el régimen propuesto es factible. Y no consta que tras esta temporada (entre los meses de junio y agosto de 2009) se produjera algún tipo de efecto negativo en L.

También se alega por la parte demandada que el régimen propuesto por el demandante sería problemático en el caso de que cualquiera de los dos encontrase nueva pareja. Desde luego, ello podría ser así pero, en primer lugar, ello no es así en la actualidad, que es el momento en el que debe tomarse la

decisión, se trata solo de una posibilidad. En segundo lugar, esta posibilidad existe siempre en cualquier ruptura. Si esta posibilidad fuese impeditiva de la custodia compartida, entonces la custodia compartida no podría adoptarse nunca.
En definitiva, entiendo que estamos ante un supuesto claro en el que procede la custodia compartida. Ya se indicó así en la sentencia de 31 de mayo de 2010, aunque en ese momento, vigente en esta materia el Código Civil, no fuese posible su adopción al no haber acuerdo entre las partes ni informe favorable del Ministerio Fiscal.

Tercero.- En la exposición de motivos de la Ley 2/2010 podía leerse que "*la custodia compartida, tal y como se configura en la Ley, no implica necesariamente una alternancia de la residencia de los hijos con sus progenitores en periodos iguales, pero sí en un tiempo adecuado para el cumplimiento de la finalidad de la custodia compartida*".
Más allá de lo anterior, la ley no define en ningún momento qué se entiende por custodia compartida. Parece que lo importante es establecer un régimen adecuado a las circunstancias de cada familia de modo que ambos progenitores pasen un período de tiempo razonablemente similar con sus hijos, de forma que puedan corresponsabilizarse en el ejercicio de la autoridad familiar y en el desempeño de su deber de crianza.
En la demanda se proponen dos períodos, uno inicial hasta el inicio del curso escolar de primaria, en el que el tiempo de estancia del menor con cada progenitor se dividiría por quincenas, y una segunda fase en la que el menor pasaría desde septiembre a enero con la madre y desde febrero a junio con el padre.
El Ministerio Fiscal entendió que los períodos de quince días eran muy cortos, y que podía aplicarse directamente el segundo régimen, pero con algún ajuste para coordinar los períodos con las vacaciones.
Considero que los períodos de quince días pueden ser excesivamente cortos si tenemos en cuenta que conllevan el cambio de uso del domicilio para los progenitores. Por otra parte, el segundo sistema propuesto por el demandante tampoco me parece muy adecuado, ya que siempre corresponden a cada progenitor el mismo grupo de meses (a la madre, de septiembre a enero, y al padre, de febrero a junio), y además, aunque parece que son dos períodos equivalentes, no lo son, debido a las vacaciones navideñas, más extensas que las de Semana Santa. Además, el cumpleaños de L siempre le correspondería estar con el padre.
Por ello, el régimen de custodia compartida se organizará de la siguiente manera. Existirán cinco períodos de custodia ordinaria, por un lado, y los períodos de vacaciones, por otro. Los períodos de custodia ordinaria se disfrutarán de manera alterna por cada progenitor. Al ser cinco, cada año serán distintos para cada progenitor. Estos períodos serán los siguientes:

- 1º. Desde el día en que se reanuden las clases tras las vacaciones de Navidad hasta el primer lunes lectivo de marzo.
- 2º. Desde el primer lunes lectivo de marzo hasta el primer lunes lectivo de mayo.
- 3º. Desde el primer lunes lectivo de mayo hasta el primer día de vacaciones escolares de verano, a las 10:00 horas.
- 4º. Desde el primer día lectivo tras las vacaciones escolares de verano hasta el primer lunes lectivo de noviembre.
- 5º. Desde el primer lunes lectivo de noviembre hasta el primer día de las vacaciones escolares de Navidad, a las 10:00 horas.

Salvo en los casos en los que el progenitor entrante coincida con el que ha disfrutado con el período vacacional inmediatamente anterior, al iniciarse cada uno de estos períodos ordinarios, el progenitor saliente deberá llevar al hijo menor al colegio, y abandonar el domicilio familiar antes de las 10:00 horas. El progenitor entrante, por su parte, deberá recoger al niño del colegio, y no podrá entrar en el domicilio familiar antes de las 11:00 horas.

Durante los períodos de custodia ordinaria, el progenitor no custodio tendrá derecho a estar en compañía del menor todos los martes y todos los jueves lectivos desde que el menor salga del colegio hasta las 20:00 horas, momento en el que lo reintegrará a su domicilio.

Asimismo, durante los periodos de custodia ordinaria, el progenitor no custodio tendrá derecho a estar en compañía del hijo menor los fines de semana alternos desde la salida del colegio del viernes hasta el domingo a las 20:00 horas, momento en que lo reintegrará a su domicilio. El primer fin de semana de cada período ordinario el menor estará con el progenitor custodio, el segundo, con el progenitor no custodio, y así sucesivamente (corresponden al progenitor no custodio los fines de semana pares de cada período ordinario de custodia). Los días no lectivos que sean inmediatamente anteriores o posteriores a un fin de semana se unirán al mismo. En estos casos, la recogida del menor se hará a la salida del colegio el último día lectivo (si no es el viernes), y se reintegrará al menor a su domicilio el día anterior a la reanudación de las clases a las 20:00 horas (si no es el domingo).

En cuanto a las vacaciones, el verano se dividirá en dos grupos de períodos. El primer grupo incluye los períodos desde el primer día de vacaciones escolares de verano, a las 10:00 horas, hasta el 30 de junio a las 20:00 horas; desde el 15 de julio a las 20:00 horas hasta el 31 de julio a las 20:00 horas; y desde el 15 de agosto a las 20:00 horas hasta el 31 de agosto a las 20:00 horas. El segundo grupo incluye los períodos desde el 30 de junio a las 20:00 horas hasta el 15 de julio a las 20:00 horas; desde el 31 de julio a las 20:00 horas hasta el 15 de agosto a las 20:00 horas; y desde el 31 de agosto a las 20:00 horas hasta el primer día lectivo de septiembre, en los términos indicados al regular los períodos de custodia ordinaria.

Los años pares, el padre decidirá cuál de los dos grupos de períodos disfruta. Los años impares elegirá la madre.

Las vacaciones de Navidad se dividirán en dos períodos. El primero, desde el primer día de vacaciones de Navidad a las 10:00 horas hasta el 30 de diciembre a las 20:00 horas. El segundo, desde el 30 de diciembre a las 20:00 horas hasta el primer día lectivo tras las vacaciones de Navidad, en los términos indicados al regular los períodos de custodia ordinaria.

Los años pares, la madre elegirá el período que disfruta. Los años impares elegirá el padre.

Durante las vacaciones, el uso del domicilio familiar corresponderá al progenitor que esté en compañía del menor. Para efectuar los cambios de uso de domicilio de forma ordenada, el progenitor saliente deberá tener todas sus cosas preparadas para salir del domicilio a la hora indicada para el cambio, y el progenitor entrante deberá acudir al domicilio de manera puntual.

Las vacaciones de Semana Santa serán disfrutadas por el progenitor al que le corresponda la custodia ordinaria en ese momento. El progenitor no custodio tendrá derecho a pasar con el menor un día de la Semana Santa, desde las 10:00 a las 20:00 horas, recogiéndolo y restituyéndolo en su domicilio. En caso de falta de acuerdo, ése día será el Viernes Santo.

Durante los períodos en los que el uso del domicilio no le corresponda, ninguno de los progenitores podrá entrar en el mismo, salvo con consentimiento del otro.

Cuarto.- La modificación del régimen de custodia debe ir acompañada de una modificación en cuanto a los gastos de mantenimiento del hijo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 82 del Código de Derecho Foral de Aragón. Este precepto establece que la contribución de cada progenitor será proporcional a sus ingresos.

El Sr, a la vista de las nóminas aportadas, cobra un sueldo neto de algo más de 1.100 euros, mientras que la Sra. cobra una ayuda mensual de 108,18 euros, que seguirá cobrando hasta marzo. También manifestó que tenía derecho a subsidio por desempleo, aunque no consta la cantidad del mismo. La prestación por desempleo que venía percibiendo partía de una base reguladora de 18,74 euros, aplicándose a esta base un porcentaje del 70%, y es notorio que el subsidio a desempleados apenas excede de los 400 euros mensuales. Por lo tanto, la Sra. ha venido teniendo unos ingresos, aproximadamente, de la mitad que el Sr.

Por lo tanto, para el mantenimiento del menor, cada progenitor sufragará los gastos de alimentación de L mientras lo tenga en su compañía.

Para el resto de gastos, los progenitores deberán abrir una cuenta común, en la que ambos tendrán poder de disposición, en la que se domiciliarán los recibos de los suministros de la vivienda (luz, agua y gas), así como los demás recibos derivados de la propiedad de la misma. Con cargo a esta cuenta se efectuarán los

gastos ordinarios en ropa del menor, y demás gastos ordinarios (material escolar, actividades extraescolares, etc.). Asimismo, con cargo a esta cuenta se hará cualquier gasto para el menor en el que estén de acuerdo los progenitores. Cada progenitor deberá comunicar al otro mensualmente una liquidación detallada de las disposiciones que haya efectuado de la cuenta, con justificación de cada disposición. En caso de no justificar cualquier disposición, deberá reintegrar la cantidad correspondiente.

Cada progenitor deberá ingresar la cantidad que se indica dentro de los cinco primeros días de cada mes. Estas cantidades se actualizarán conforme a la variación del IPC o índice que lo sustituya el día 1 de febrero de cada año, de manera automática, siendo la primera revisión el 1 de febrero de 2013.

La cantidad que deberá ingresar inicialmente el Sr. será de 180 euros, y la cantidad que deberá ingresar la Sra. será de 75 euros. El primer ingreso deberán efectuarlo ambos dentro de los primeros cinco días del mes de febrero de 2012.

Los gastos extraordinarios necesarios, salvo acuerdo en contrario, serán satisfechos en una proporción del 66% el Sr. y el 34% la Sra. En el caso de que no sean necesarios, los gastos extraordinarios serán sufragados por el progenitor que haya decidido efectuarlos.”

***** Sentencia de la Audiencia Provincial de Huesca de 24 de enero de 2012. Custodia de un menor. Absolución de progenitor en proceso penal. Relevancia de la opinión del menor de 14 años. Pensión de alimentos**

PRIMERO : Ante la ausencia de súplica en el recurso y conforme a lo interesado en su encabezamiento, ya referido, debemos analizar las variadas pretensiones que se exponen en el cuerpo de dicho escrito, aunque no siempre de manera precisa, como vamos a ver:

A) Alegación primera: Nulidad del acta de exploración del menor y por ende de la sentencia recaída en estas actuaciones por realizarse la misma con intimidación, constituyendo por ello un acto nulo de plano derecho, de conformidad con lo dispuesto en el *artículo 238.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.*
No está acreditada la intimidación al menor por parte del padre alegada en el recurso para justificar la solicitud de nulidad de actuaciones. A tal efecto, no son suficientes los documentos acompañados al recurso: la denuncia escrita presentada ante el mismo Juzgado número 2 de Huesca y el Auto de incoación de diligencias previas de fecha 15 de abril de 2011 (cuatro días después de dictada la sentencia de primer grado). Además, las manifestaciones del menor efectuadas en la exploración judicial coinciden con las que emitió ante la psicóloga del IMLA y ante la trabajadora social Sra. **Loreto** , según los informes unidos a los folios 187 y siguientes y 214 y siguientes, respectivamente. Por todo ello, no procede declarar la nulidad de la exploración del menor ni de las actuaciones posteriores.

B) Alegación segunda: Subsidiariamente, revocación de la sentencia en lo que se refiere a la medida relativa al régimen de guarda y custodia judicialmente acordado.

a) La apelante denuncia inaplicación del *artículo 6.6 de la Ley aragonesa 2/2010, de Igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de la convivencia de los padres, actual artículo 80.6 del Código de Derecho* foral de Aragón(aprobado por Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo), a cuyo tenor "no procederá la atribución de la guarda y custodia a uno de los progenitores, ni individual ni compartida, cuando esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro progenitor o de los hijos, y se haya dictado resolución judicial motivada en la que se constaten indicios fundados y racionales de criminalidad. Tampoco procederá cuando el Juez advierta, de las

alegaciones de las partes y las pruebas practicadas, la existencia de indicios fundados de violencia doméstica o de género". Ahora bien, aunque el Sr. Cesareo tuvo la condición de imputado y luego acusado en el *procedimiento abreviado 19/2009 instruido ante el mismo Juzgado número 2* de Huesca, el *Juzgado de lo penal de Huesca, mediante sentencia de fecha 11 de abril de 2011*(folio 770 y siguientes), le absolvió de los delitos de amenazas en el ámbito familiar y del delito contra la integridad moral de los que se le acusaba, y esta sentencia ha sido confirmada por esta Audiencia provincial en virtud de sentencia de 21 de octubre de 2011, de la que todas las partes han tenido conocimiento en dicho procedimiento penal. En esta situación, es aplicable la *Disposición adicional cuarta del Código de derecho foral de Aragón, conforme a la cual "los casos de atribución de la guarda y custodia previstos en el apartado 6 del artículo 80 del presente Código* serán revisables en los supuestos de sentencia firme absolutoria" (en igual sentido se pronunciaba la disposición adicional correlativa de la *Ley 2/2010). Por tanto, habiendo sido absuelto, no concurre hoy en día el impedimento legal previsto en el citado artículo 80.6* para que el Sr. Cesareo asuma la guarda y custodia del menor.

b) Dentro de esta misma alegación, la apelante aduce, en el subapartado correlativo, "inaplicación de la normativa vigente para el caso de no atribución de custodia compartida". A pesar de lo así indicado, la actora no está pidiendo en realidad la custodia compartida del menor, sino la guarda y custodia "individual" -es la expresión que usa- para ella misma en detrimento del padre, según se desprende de los posteriores argumentos desarrollados en la misma alegación y en todo el recurso, del mismo modo que tampoco solicitó la custodia compartida en su demanda ni a lo largo del proceso. Sin embargo, no procede atribuir la guarda y custodia a la madre por los argumentos que ya constan en la sentencia apelada, los que sobre este particular damos aquí por reproducidos (principalmente, el último párrafo del fundamento de Derecho segundo de la sentencia).
A mayor abundamiento, podemos añadir que el menor, ahora ya de casi catorce años ..., desea claramente vivir con su padre. Como hemos dicho en otras ocasiones, el legislador da relevancia a la opinión de los menores, como se desprende del *artículo 92 delCódigo civil*y del *artículo 6 delCódigo de Derecho*foral de Aragón. Los menores - seguíamos diciendo- tienen sus propios deseos y sentimientos que no pueden ser dejados de lado, sino que deben ser tenidos muy en cuenta cuando lo que se busca es su propio beneficio, también cuando son adolescentes o preadolescentes (como aquí ocurre), con toda la problemática que tal periodo lleva consigo acentuando los roces consustanciales a toda situación de convivencia, que aparecen más raramente cuando la relación es esporádica. Por ello, aunque ciertamente actuar en beneficio e interés de los menores (artículo 76 delCódigo de derecho foral de Aragón) no equivale sin más a la satisfacción de todos sus deseos, en algunos casos hemos dado relevancia a

la propia opinión de los menores a fin de determinar lo más beneficioso para ellos cuando ambos progenitores tienen la capacidad necesaria para llevar a buen puerto su educación (como sucede en este caso) y para tomar decisiones sobre sus hijos. En suma, una cosa es que los menores deban ser solo oídos y otra que debamos sistemáticamente contrariar su voluntad cuando, al fin y al cabo, ellos no tienen ninguna culpa de que no puedan convivir con sus dos progenitores, cuyos deseos, sentimientos, afectos y emociones también cuentan, desde luego, pero menos que los de sus hijos, quienes nada han hecho para crear los riesgos de disgregación familiar, lo que no significa ningún tipo de reproche, ni premiar ni castigar a ninguno de los progenitores, sino hacer que la ruptura matrimonial -cuyos efectos perduran a lo largo del tiempo- sea lo menos traumática posible para los hijos de la pareja que se separa.
Hemos de valorar asimismo el rechazo frontal que el menor siente hacia el compañero sentimental de la madre, Sr. . Ella aduce ahora en su recurso que se ha producido la ruptura sentimental con esa persona y que ya no vive con él en Zaragoza, sino sola en , en la casa que ha constituido el último domicilio familiar y que la sentencia atribuye al padre y al menor; pero este hecho, aun suponiendo hipotéticamente que sea cierto, no puede desvirtuar los argumentos que justifican la atribución de la guarda y custodia al padre.

C) Alegaciones cuarta y sexta: Revocación de la sentencia en lo que se refiere al uso del domicilio familiar y a los gastos y cargas hipotecarias de la vivienda.
Analizaremos tales alegaciones conjuntamente antes que la tercera y la quinta, porque las dos primeras pueden condicionar el resultado de las otras dos.
De las declaraciones de las partes se desprende que la mencionada casa situada en pertenece a la actora o al menos "está a su nombre", como dijo el Sr. **Cesareo** ante la psicóloga del IMLA, y la Sra. **Loreto** es la que paga las dos cuotas hipotecarias que recaen sobre la vivienda, cuyos importes mensuales se elevan conjuntamente a 562 euros en números redondos. La Sra. **Loreto** ... vivía últimamente en Zaragoza en el piso ... y parece que ocupaba la casa de los fines de semana, si bien ahora dice, como hemos anticipado, que se ha trasladado nuevamente a tras la ruptura sentimental con y que acude diariamente a Zaragoza en autobús para desarrollar su trabajo en , dado que carece de permiso de conducir. En 2009, ganaba por su trabajo 939,22 euros netos al mes.
Con relación al demandante Sr. **Cesareo** (nacido en 1942), se marchó a vivir a una localidad cercana, , a raíz de la separación de la pareja de hecho, en donde ha alquilado una vivienda por la que en el año 2010 pagaba una renta de 200 euros al mes (folios 30 y 309). Dispone de vehículo propio. Percibía 1.000,22 euros netos al mes por su pensión de jubilación, aparte de algunos ingresos no exactamente determinados por la venta de oliva.
Sobre la base de tales datos, entendemos que el mejor interés para las relaciones familiares, con arreglo a lo dispuesto en el *artículo 81.2 delCódigo de*

*Derecho*foral de Aragón, no pasa por atribuir la vivienda de al padre, como progenitor custodio, y al menor -como hace la sentencia apelada-, ni, al mismo tiempo, por distribuir las cuotas hipotecarias por mitad entre ambos progenitores, al igual que los demás gastos de la vivienda que gravan la propiedad, sino por mantener la posesión que ahora ostenta la Sra. **Loreto** en virtud de su aparente titularidad dominical y que ella siga pagando las cuotas hipotecarias, según lo interesado en el recurso. Además, ninguna de las partes había planteado en su respectiva demanda tal distribución por mitad de las cuotas de los préstamos hipotecarios ni de los demás gastos de la vivienda que gravan la propiedad, como tampoco la venta de la vivienda solicitada de forma subsidiaria en el recurso. En conclusión, nos parece que lo más oportuno es, como se pide, dejar sin efecto los apartados 3.º y 5.º del fallo de la sentencia. Procede, por tanto, estimar el recurso sobre los extremos ahora analizados.

D) Alegación tercera: Revocación de la sentencia en lo que se refiere al régimen de visitas.
De acuerdo con todas las circunstancias expresadas (principalmente, que ella trabaja en Zaragoza y que no puede disponer de vehículo propio), habida cuenta del conflicto latente entre las partes, aunque el actor haya resultado absuelto en el procedimiento penal, y a fin de facilitar las visitas del menor con la madre, nos parece conveniente el régimen a su favor solicitado en el último párrafo de dicha alegación tercera, es decir, que las entregas y recogidas se hagan en el punto de encuentro de Zaragoza en lugar de en el de Huesca, lo que alcanzará tanto a los fines de semana como a los periodos vacacionales, habida cuenta del conflicto latente entre las partes; y, en cuanto a los fines de semana, que la entrega se haga a las 15:30 horas del viernes siempre que el menor no tenga clase esa tarde. Procede, en consecuencia,**estimar** el recurso con relación a dichos particulares.

E) Alegación quinta: Revocación de la sentencia en lo que se refiere a la pensión de alimentos.
Atendiendo, como señala el *artículo 82 delCódigo de Derecho*foral de Aragón, a las necesidades del hijo y a los recursos económicos disponibles por una y otra parte, entendemos que es excesiva la cantidad de 250 euros mensuales en concepto de contribución proporcional a cargo de la Sra. **Loreto** para los gastos de asistencia del menor. Hemos de valorar el sueldo de la demandante y las cuotas hipotecarias que debe satisfacer, de modo que solo le quedarían para subsistir 127 euros en números redondos valorando a los datos de que disponemos [939 - 562 - 250]. Por el contrario, la otra parte dispondría de unos 1.050 euros netos al mes tras descontar la renta del arrendamiento y computando la cuantía de 250 euros de alimentos establecida en primera instancia a cargo de la adversa [1.000 - 200 + 250]. Además, el progenitor custodio no está excluido de contribuir a los gastos ordinarios de asistencia en

función de sus propios recursos económicos. Por todo ello, debemos**estimar** el recurso sobre este extremo y reconocer la suma de 100 euros al mes ofrecida en el recurso en concepto de gasto de asistencia del hijo a cargo del progenitor no custodio.”

***** Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 1 de febrero de 2012. Institución de la custodia compartida. Preferencia. Criterios exegéticos. Necesidad de razonar la adopción del sistema no preferente**

"PRIMERO.- Contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección Segunda, resolviendo el recurso de apelación interpuesto contra la de primera instancia, la parte demandada y apelada interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación. El primero de ellos, fundado en la vulneración de los arts. 218.2, 348 y 376 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, fue inadmitido por auto de esta Sala de 11 de noviembre de 2011, por las razones que en el mismo se exponen, y que sustancialmente sostienen que la sentencia recurrida está motivada, en cuanto a las cuestiones que han sido objeto del debate procesal, y que no existe vulneración de los preceptos invocados en segundo y tercer lugar, que ordenan la valoración de las pruebas pericial y testifical conforme a la sana crítica, de modo que dicha valoración es facultad de los tribunales de instancia, no revisable a través de los recursos extraordinarios, que no constituyen una tercera instancia.

Queda por examinar el recurso de casación, que se interpone al amparo de lo prevenido en el art. 477.3 de la L.E.C., invocando la existencia de interés casacional, y en el que se denuncia la infracción de los arts. 75 y siguientes del Decreto Legislativo 1/2011 de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, que aprueba el Código de Derecho Foral de Aragón (en adelante, CDFA). En particular, respecto a la interpretación del interés de los menores y a la mayor conveniencia de la custodia compartida para éstos.

SEGUNDO.- Interpuesta la demanda de divorcio contencioso por la representación de Dª S E P M contra D. I B A, el Juzgado de Primera Instancia dictó sentencia declarando la disolución del matrimonio por causa de divorcio y acordando, como medidas complementarias, entre otras, la guarda y custodia de las hijas de forma compartida para ambos progenitores, que compartirán la autoridad familiar, fijando un sistema de alternancia de la convivencia de las hijas con cada progenitor por años alternos, y estableciendo que sean las hijas las que residan en el domicilio familiar, situado en la localidad de , y los progenitores los que se alternen en su uso.

La sentencia declara, como hechos relevantes para la resolución del litigio, que Dª S E P M y D. I B A contrajeron matrimonio canónico en Zaragoza el día 7 de septiembre de 1996, del que constan como descendientes las menores P y S, nacidas en Zaragoza el de 2001 y el de 2005, respectivamente, estando fijado el domicilio familiar en la C/

La decisión adoptada acerca de la custodia de las menores se funda en que, aunque la madre puede haber sido la figura principal respecto de las hijas y la que mayor dedicación les ha prestado, la situación cambia en un momento de ruptura, donde las hijas mantienen buenas relaciones con ambos polos parentales. En esta situación de ruptura hay que dar a ambas partes la oportunidad de establecer un contacto directo y permanente con ambas hijas y el sistema de custodia compartida parece el más adecuado. Por otra parte, considera que en este caso ambos progenitores son perfectamente capaces, tienen recursos económicos suficientes y las menores no presentan problemas añadidos, por lo que debe establecerse dicho sistema.

La sentencia de la Audiencia Provincial revoca el citado pronunciamiento y acuerda otorgar a Dª S E P M, apelante en dicha instancia, la guarda y custodia de las menores, fijando un régimen de visitas a favor de D. I y atribuyendo a la progenitora custodia el uso del domicilio familiar, con duración máxima -salvo acuerdo- hasta cinco años desde la fecha de la sentencia de primera instancia.

En dicha sentencia la Audiencia explica las razones que conducen a la modificación de la decisión adoptada por el Juez de Primera Instancia. En primer lugar, que la madre representa para las menores la principal figura de su mundo afectivo, y en particular P ha desarrollado una especial vinculación afectiva con su madre. Valora el informe psicosocial obrante en autos y el pericial aportado por la parte recurrente, de los que deduce que la permanencia de las niñas con su madre y un amplio régimen de visitas con el padre es el sistema más beneficioso. Además considera la prueba practicada en segunda instancia por exploración de la menor P, de 10 años de edad. De ella deduce que se trata de una niña madura, reflexiva y sensible, que ha mostrado una clara preferencia a la estancia con su madre, opinión que el Tribunal de segunda instancia considera como un dato a tener en cuenta, juntamente con el resto de las pruebas.

TERCERO.- El sistema establecido por el legislador aragonés respecto a la guarda y custodia de los menores en supuestos de separación de sus progenitores, es el de estimar como preferente el de guarda compartida, si bien los Tribunales podrán establecer la guarda individual, cuando sea más favorable para el interés de los menores. Conforme al artículo 80.2 CDFA, *El Juez adoptará de forma preferente la custodia compartida en interés de los hijos menores, salvo que la custodia individual sea más conveniente.*

En sentencias de esta Sala dictadas en aplicación de la Ley 2/2010, cuyos preceptos han sido incorporados al Código de Derecho Foral de Aragón, se han establecido los siguientes criterios exegéticos acerca de dichas normas: a) La custodia compartida por parte de ambos progenitores es el régimen preferente y predeterminado por el legislador, en busca de ese interés del menor, en orden al pleno desarrollo de su personalidad, de modo que se aplicará esta forma de custodia siempre que el padre y la madre estén capacitados para el ejercicio de

las facultades necesarias a tal fin (Sentencia de 30 de septiembre de 2011); b) El sistema no es rígido, salvo en un mandato que dirige al juez: el superior interés del menor (Sentencia de 13 de julio de 2011); c) Podrá establecerse un sistema de custodia individual, cuando éste resulte más conveniente para dicho interés, a cuyo efecto habrá de evaluar los parámetros establecidos en el art. 80.2 del Código (Sentencias citadas y la de 15 de diciembre de 2011); d) La adopción de la custodia individual exigirá una atenta valoración de la prueba que así lo acredite –la conveniencia para el menor- frente al criterio preferente de la custodia compartida, al que el precepto legal otorga tal preferencia en interés de los hijos menores (Sentencia de 15 de diciembre de 2011).

Para adoptar la decisión, en cada caso, será relevante la prueba practicada, especialmente los informes psicosociales –art. 80.3 CDFA- obrantes en autos, y la opinión de los hijos menores, cuando tengan suficiente juicio –art. 80.2 c) CDFA-.

Por último, el Tribunal que acuerde apartarse del sistema preferentemente establecido por el legislador debe razonar suficientemente la decisión adoptada.

CUARTO.- El Tribunal Supremo ha establecido en diversas sentencias parámetros para valorar las circunstancias concurrentes, a la hora de determinar la preferencia entre la custodia individual o la compartida, aplicando lo dispuesto en el art. 92 del Código Civil: *del examen del derecho comparado se desprenden criterios como la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y sus actitudes personales; y los deseos manifestados por los menores competentes; el número de hijos; el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos y el respeto mutuo en sus relaciones personales; el resultado de los informes exigidos legalmente y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada en la convivencia que forzosamente deberá ser más compleja que la que se lleva a cabo cuando los progenitores conviven*. Así se expresa en sentencias de 10 y 11 de marzo de 2010 y 7 de julio de 2011.

Criterios éstos que se traen a colación a efectos de conocimiento de la forma de resolver el conflicto en la comunidad jurídica, y que solo resultan aplicables en derecho aragonés conforme a los parámetros sustantivos y procesales antes expuestos.

QUINTO.- La aplicación de tales criterios al caso de autos, en concatenación con lo razonado en el primer fundamento de derecho, conduce a la desestimación del recurso de casación.

La Audiencia Provincial ha explicado pormenorizadamente las razones por las que revoca, en el punto concerniente a la guarda y custodia de las menores, la decisión del Juez de Primera Instancia. Y lo hace fundada en la valoración de las pruebas periciales practicadas en autos, que son coincidentes en rechazar la custodia compartida aconsejando la individual a favor de la madre. Además

valora pormenorizadamente la prueba practicada en la segunda instancia, por exploración de la menor que ha alcanzado los diez años de edad, y que se muestra favorable a la estancia con su madre. Dichas consideraciones probatorias, ampliamente motivadas, no son revisables en casación, por cuanto el objeto de este recurso extraordinario no es llevar a cabo una nueva valoración de la prueba, que corresponde a las instancias procesales, sino determinar la recta aplicación del derecho sustantivo al caso de autos.

Resulta así que para el interés de las menores P y S, nacidas el de 2001 y el de 2005, resulta más conveniente la custodia de la madre, con un amplio régimen de visitas a favor del padre, lo que permitirá el mantenimiento de la referencia paterna para las niñas. Este sistema ha tenido en cuenta, además, la mayor aptitud de la madre para resolver problemas, que se describen detalladamente en el fundamento de derecho tercero, y la disposición de ayudas para gestionar el cuidado de las menores. Estos datos coadyuvan a la valoración, aunque ciertamente –como pone de relieve el recurrente- la cuestión no ha de resolverse como si se tratase de un concurso, en el que el mejor calificado obtenga como premio la custodia de las hijas. Son factores a atender, comprendidos en los apartados b), d), e) y f) del art. 80.2 del CDFA, que en este caso coadyuvan a los resultados de las pruebas periciales y de audiencia de la menor P.

En definitiva, esta Sala no aprecia infracción de los preceptos denunciados en la sentencia recurrida, sino que la Audiencia ha realizado una ponderación razonable y debidamente motivada de los factores concurrentes, no contraria a la lógica. Como afirma la Sentencia del Tribunal Supremo 744/2011, de 10 de octubre, *la valoración de los distintos medios de prueba, las cuales constituyen premisas de carácter epistemológico o jurídico-institucional a las que debe ajustarse la operación lógica de enjuiciamiento necesaria para la resolución del asunto planteado, cuyo examen solo cabe someterse al tribunal de casación, al amparo del artículo 469.1.4.º LEC , cuando, por ser manifiestamente arbitraria o ilógica la valoración de la prueba, esta no supera el test de la racionabilidad constitucionalmente exigible para respetar el derecho la tutela judicial efectiva consagrado en artículo 24 CE (STS 28 de noviembre de 2008, RC núm. 1789/03, 8 de julio de 2009, RC núm. 693/2005, 10 de septiembre de 2009, RC núm. 1091/2005 y 19 de octubre de 2009, RC núm. 1129/2005).*”

***** Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 1 de febrero de 2012. Uso de domicilio familiar. Temporalidad**

"PRIMERO.- Recurre Dª Mª Pilar la sentencia dictada en la instancia, suplicando su revocación parcial y se deje sin efecto la medida nº 2 de su fallo, acordando en su lugar que el uso del domicilio familiar se prolongue hasta que los hijos tengan independencia económica, o, subsidiariamente, hasta la efectiva liquidación del consorcio conyugal con concreta atribución de bienes a cada participe, alegando, sustancialmente, error en la apreciación de los ingresos que percibe la recurrente, los que cifra, con la prueba practicada, en 68.156,84 € netos anuales, y la necesaria protección del superior interés de los hijos menores que resulta conculcado con la limitación establecida.

SEGUNDO.- La sentencia impugnada establece el cese del uso del domicilio familiar atribuido a los hijos y a la madre en sentencia firme de divorcio de 26/4/07, el último día de agosto de 2012, debiendo decidir los litigantes, desde entonces su destino, fundando tal solución en los muy superiores ingresos de la madre, con los que garantiza holgadamente las necesidades de habitación de los menores, debiendo, por ello, decidir libremente los litigantes el destino de la vivienda.

El Art. 81-2 del Código de Derecho Foral establece que cuando la custodia corresponda individualmente a uno de los progenitores se le atribuirá el uso de la vivienda familiar, uso que tendrá una limitación temporal, que, a falta de acuerdo, fijará el Juez teniendo en cuenta las circunstancias concretas de cada familia (nº 3, Art. 81).

TERCERO.- Sentado lo anterior, el actor solicitó en su demanda la limitación del uso de la vivienda familiar a tres meses desde el dictado de la sentencia en este proceso, o, alternativamente, desde el de la sentencia de instancia, dictada en el proceso de liquidación de la sociedad conyugal, y la venta de la misma tras agotarse el uso.

Los hijos del matrimonio cuentan con 12 y 9 años de edad, hallándose bajo la custodia individual de la madre, medida que se ha estimado más beneficiosa para los mismos y que no se impugna.

La vivienda familiar forma parte del activo de la sociedad conyugal, y esta gravada con una hipoteca que satisfacen ambas partes al 50%.

El actor ha contraído nuevo matrimonio, residiendo con su nueva familia en un piso propiedad de su actual esposa, siendo sus ingresos netos mensuales acreditados de 3.966 €.

Se ha justificado en esta alzada la pendencia del proceso de liquidación de la sociedad conyugal, en el que ya se ha presentado el cuaderno particional en noviembre de 2011, al que ha formulado oposición la Sra. M, estando señalada comparecencia para el 20 de Abril de 2012.

CUARTO.- Conforme a lo expuesto, resulta patente que el actor no presenta necesidad urgente de vivienda, la que tiene satisfecha, sin abonar en la actualidad contraprestación alguna por dicho concepto.

Por otro lado, es claro que ambos progenitores deben contribuir proporcionalmente a los gastos de asistencia de los hijos, entre los que se incluye el de vivienda o alojamiento, en función de las necesidades de éstos y de los recursos económicos de que dispongan, no pudiendo recaer dicha carga, en concreto la de vivienda, sobre uno de ellos por más que sus ingresos superen los del otro progenitor (Arts. 65 y 82 del Código de Derecho Foral de Aragón).

La pensión alimenticia del padre no cubre el coste mensual de los colegios privados a los que asisten los hijos, y la madre asume el gasto de dos cuidadoras de los menores.

En suma, de lo actuado en el proceso se desprende que la madre en este caso, afronta gran parte de las necesidades de los hijos.

La sentencia razona la necesidad de estabilidad personal en los menores, por estar atravesando una etapa complicada.

En estas condiciones, existiendo dos menores de corta edad, y próximo a finalizar el proceso de liquidación de la sociedad conyugal en el que se determinará la adjudicación de los bienes que la conforman entre los litigantes, resulta más adecuado esperar a esa efectiva liquidación para acordar el cese del uso de la vivienda familiar a favor de la madre y los hijos, sentido en que se revoca la sentencia impugnada fijando un plazo máximo que no podrá superarse, para evitar dilaciones, si finalmente se determinase la venta de la finca, atendiendo a la actual crisis del mercado.”

***** Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 7 de febrero de 2012. Pensión alimenticia. Pensión compensatoria**

"PRIMERO.- Recurre D. José la Sentencia dictada en la instancia suplicando se suprima la pensión compensatoria de 5.000€ establecida a favor de Dª Elena, o, subsidiariamente, se cuantifique en 90€ al mes durante 6 meses, se elimine el carácter retroactivo de la pensión alimenticia, fijándose la obligación de su abono desde la fecha de la Sentencia, o, subsidiariamente, si no se estimase esta última petición, se detraigan los gastos acreditados hechos por él a favor de la hija menor, y, finalmente, se amplíe el régimen de visitas en las tardes intersemanales, desde las 13,00 horas o desde la salida de la guardería hasta las 19,30 horas, y los fines de semana alternos desde las 13,00 horas, o desde la salida de la guardería los viernes hasta las 19,00 horas del domingo.

SEGUNDO.- Por lo que respecta al régimen de visitas, no procede la ampliación interesada.

La hija de la pareja, , nacida en 2009, cuenta con dos años y nueve meses de edad, y reside con su madre en casa de los abuelos maternos.

El padre trabaja en una carnicería familiar y regenta ganado y tierras, de lunes a domingo, sosteniendo poder flexibilizar su horario para ajustarlo a las necesidades de la menor.

La edad de la niña y las actividades laborales del padre determinan la adecuación del sistema de visitas instaurado en Sentencia, lo suficientemente amplio para permitir el mantenimiento de una correcta relación con su padre.

En cuanto a la retroactividad de la pensión alimenticia, se trata de una pronunciamiento que no resulta arbitrario, sino plenamente amparado por el Artículo 148 del Código Civil y que ha sido ratificado por el Tribunal Supremo en Sentencia de 14 de junio de 2011.

No procede el descuento de gastos efectuados para la menor, por no caber compensación en materia de alimentos y tratarse, en todo caso, de pagos efectuados libremente por el Sr. V que ninguna suma por alimentos ha satisfecho para la niña desde la separación de la pareja.

TERCERO.- La Sentencia estipula una suma para Dª Olena en concepto de asignación compensatoria, habiendo solicitado la misma 150€ mensuales, durante cinco años, medida que tacha el recurrente de incongruente, y que impugna con fundamento en error valorativo de la prueba practicada.

La Sra. B cuenta con 32 años de edad. Reside en España desde finales de 2006 y su relación con el Sr. V ha durado unos tres años, durante los que estuvo trabajando en el negocio familiar sin cobro de salario ni afiliación a la Seguridad Social, como se reconoció en el acto del juicio, ocupándose del cuidado de la hija desde su nacimiento de forma preferente y habitual.

Actualmente trabaja en una carnicería con un contrato temporal, cobrando unos 800€ mensuales.

Los ingresos del Sr. V superan los 1.000€ al mes, vistos los negocios de ganadería y agricultura a los que se dedica.

La Sra. B abandonó el domicilio familiar, residiendo con sus padres en una vivienda de alquiler.

Las circunstancias expuestas revelan la procedencia de la fijación de la asignación compensatoria estipulada para la Sra. B, no existiendo inconveniente para su fijación en una única entrega, inferior a la solicitada, atendiendo al estricto contenido del artículo 83 nº 3 del Código de Derecho Foral."

***** Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 7 de febrero de 2012. Custodia compartida. Edad del menor**

"PRIMERO.- La sentencia de instancia estima en parte la demanda de modificación de medidas interpuesta por D. Francisco y establece que la guarda y custodia de la hija común, , será compartida por ambos progenitores por semanas alternas, pronunciamiento frente al que se alza la demandada, que alega que el Juez valora erróneamente la prueba e infringe lo dispuesto por los arts. 76.2 y 80 del C.D.F.A., solicitando se mantenga la guarda y custodia individual que la sentencia de divorcio le atribuyó, señalándose en favor del padre el régimen de visitas que la psicóloga del Juzgado informa como aconsejable.

SEGUNDO.- A falta de acuerdo entre los padres, el legislador aragonés establece como preferente el régimen de guarda y custodia compartida, y así, el apartado 2 del citado artículo dispone que "El Juez adoptará de forma preferente la custodia compartida en interés de los hijos menores, salvo que la custodia individual sea más conveniente, teniendo en cuenta el plan de relaciones familiares que deberá presentar cada uno de los progenitores y atendiendo, además, a los siguientes factores: a) La edad de los hijos. b) El arraigo social y familiar de los hijos. c) La opinión de los hijos siempre que tengan suficiente juicio y, en todo caso, si son mayores de doce años, con especial consideración a los mayores de catorce años. d) La aptitud y voluntad de los progenitores para asegurar la estabilidad de los hijos. e) Las posibilidades de conciliación de la vida familiar y laboral de los padres. f) Cualquier otra circunstancia de especial relevancia para el régimen de convivencia". Previniéndose en su apartado 3 que "Antes de adoptar su decisión, el Juez podrá, de oficio o a instancia de parte, recabar informes médicos, sociales o psicológicos de especialistas debidamente cualificados e independientes, relativos a la idoneidad del modo de ejercicio de la autoridad familiar y del régimen de custodia de las personas menores".

El Juez de instancia considera que concurren en el caso las circunstancias necesarias para establecer respecto de la hija común, nacida el 07, un régimen de guarda y custodia compartida, pues –dice- ambos padres reúnen las cualidades y aptitudes necesarias para hacerse cargo de la menor; existe un fuerte vinculo afectivo entre esta y ambos progenitores; no existe en ella conciencia de ruptura de la unidad familiar al hacerse producido esta cuando tenía poco mas de 1 año de edad; y ambos progenitores disponen de apoyo familiar para atender a la menor y de un horario flexible que les permitirá atender sus necesidades, encontrándose las viviendas de ambos progenitores y el colegio de su hija relativamente próximos.

La prueba practicada, sin embargo, evaluada a la luz del citado precepto, muestra como es la custodia individual a favor de la madre la medida que se revela más adecuada para preservar el superior interés de G, designio este al que debe ajustarse toda decisión, resolución o medida que afecte a los menores (art 76 CDFA).

D. Francisco es Jefe de Logística en una empresa –ubicada en - y realiza una jornada laboral flexible, de 8,30 a 18,00 horas de lunes a jueves y los viernes de 8,30 a 14,30 horas. Vive en el Barrio de Santa Isabel con su actual pareja –y la hija de esta, de 11 años, cuando le corresponde estar con ella-. Por su parte, Dña Cristina, que vive con la hija común en la que fuera vivienda familiar, en el barrio de la Jota, trabaja como autónoma, regentando en Tudela, junto a otras socias, una empresa de servicios sociosanitarios. Realiza una jornada flexible, de 9,30 a 15,00 horas de lunes a viernes, y cuenta con la colaboración de su padre, el abuelo materno de la menor, que se ocupa de llevarla por las mañanas al Colegio .

La Psicóloga del Juzgado, en su informe, dice que la Sra. Z ha sido la principal encargada de la organización del cuidado y atención cotidianos de su hija, así como de proporcionarle la estabilidad y seguridad que requiere en su desarrollo, y que reúne buenas condiciones y recursos personales y familiares para afrontar de forma satisfactoria la crianza y educación de su hija, de quien se constituye en un modelo adecuado de referencia. Y que D. Francisco manifiesta su deseo de participar de forma activa en la crianza y educación de su hija y que de su discurso y actitud general se desprende interés y sentimiento afectivos hacia su hija, así como una dinámica de interacción con ella que ha respondido de modo adecuado a las necesidades de la niña durante los periodos de tiempo que ambos han compartido desde que tuvo lugar la separación. Pero analizadas las circunstancias del caso, concluye que lo mas conveniente para la menor es el establecimiento de unas medidas que primen la mayor estabilidad posible en sus condiciones cotidianas de vida, pudiendo encontrarse otras formas de incrementar su relación con cada uno de sus progenitores que no supongan para ella la introducción de grandes cambios en aquellas, señalándose incluso que la solicitud de que la menor permanezca en periodos semanales alternos con cada uno de sus padres responde más a las necesidades, deseos y formas de estructuración del tiempo de los adultos que a la existencia de carencias afectivas que se puedan resolver con esta organización. En el mismo sentido, la Sra. P, firmante del informe de parte acompañado por la demandada con su contestación, no estimó conveniente introducir modificaciones en la situación y rutinas de la menor, desaconsejando el sistema de guarda y custodia por semanas alternas propuesto en la demanda, por considerarlo en ese

momento perjudicial para G, dado su momento evolutivo y las circunstancias de escasa comunicación y tensión entre los padres.

Todo ello atendido, la Psicóloga del Juzgado, como mínimo de obligado cumplimiento que garantice la continuidad de una relación materna y paterno-filial periódica y regular, ampliable en función del acuerdo de los progenitores y los deseos de la menor, recomienda como régimen más adecuado y beneficioso para esta, que permanezca con su madre los períodos lectivos entre semana, a excepción de dos tardes que Gabriela permanecerá con su padre desde la salida del colegio hasta las 20,30 horas, debiendo regresar a su casa con las rutinas diarias realizadas (cena, ducha, deberes escolares etc.), y que compartan el tiempo restante de fines de semana desde el viernes a la salida del colegio hasta el lunes a la entrada del mismo, así como los puentes escolares, festividades y periodos vacacionales de Navidad, Semana Santa y Verano, este ultimo dividido en periodos de quincenas alternas. Y asimismo, en la medida que la disponibilidad laboral paterna lo permita, que el padre pueda recoger a su hija del domicilio materno todos los días por la mañana y la lleve al centro escolar al que asiste.

Insiste la Psicóloga, por lo demás, en la importancia de que ambos progenitores adopten una positiva actitud de flexibilidad, colaboración y cooperación parental, que favorezca de forma activa que la menor mantenga una relación satisfactoria y amplia con los dos y sus respectivos entornos familiares, Y, asimismo, en lo conveniente de que ambos progenitores flexibilicen sus posturas y acudan a la vía del diálogo, sobretodo de cara al buen desarrollo del menor y a su correcta adaptación, debiendo ser conscientes de lo beneficioso que resultaría para su hija que pudieran llegar a establecer de común acuerdo las medidas relativas a él.

Valorada, en suma, la prueba practicada, y como factor muy relevante la edad de la menor, que en el momento de interposición de la demanda tenia tres años recién cumplidos (vd art 80.1 a) CDFA), hay que entender que la custodia individual de la madre es sistema mas conveniente que el interesado por el actor, por lo que el recurso de la primera debe ser estimado y mantenido el sistema de guarda y custodia individual que la sentencia de divorcio le atribuyó, señalándose en favor del padre el régimen de visitas que se dirá en la parte dispositiva. “

***** Auto de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 7 de febrero de 2012. Gastos extraordinarios. Inclusión. Derecho de Familia**

"PRIMERO.- Contra el Auto dictado el 5 de septiembre de 2011 se alza Dª Carmen , suplicando su revocación parcial y se desestime en su integridad la oposición formulada por el ejecutado, acogiendo su petición de abono por mitad de los gastos extraordinarios de los hijos del matrimonio.

SEGUNDO.- La recurrente solicitó en su demanda ejecutiva el abono por el Sr. E de la mitad de los gastos de tratamiento de ortodoncia y de las clases particulares de física y matemáticas de los hijos, además de las pensiones alimenticias que reseñaba, siendo rechazada la primera de dichas pretensiones por la resolución impugnada al no haber previsto las partes al respecto acuerdo alguno en el convenio suscrito y aprobado por la Sentencia de divorcio, la que al no contener pronunciamiento sobre gastos extraordinarios no puede ejecutarse en los términos pretendidos.

Efectivamente el convenio de divorcio de 18 de julio de 2007, sólo contiene en su cláusula tercera la previsión de la pensión alimenticia a cargo del Sr. E, sin mención de contribución a los gastos extraordinarios de los hijos.

El artículo 82 del Código de Derecho Foral regula la forma de afrontar los progenitores los gastos extraordinarios necesarios de los hijos que se asumirán proporcionalmente a sus recursos.

También regula la contribución de los mismos a los gastos ordinarios de asistencia de los hijos.

La falta de mención expresa del abono de los gastos extraordinarios en el convenio de divorcio no es obstáculo para su exigibilidad, dado que la pensión alimenticia en él fijada sólo abarca los gastos ordinarios de asistencia, no pudiendo entenderse tal omisión como determinante de la inclusión de los mismos en la pensión alimenticia o como la liberación de tal carga respecto del progenitor no custodio.

Por otro lado, es claro que los gastos aquí reclamados participan del concepto de extraordinarios necesarios, tanto en el aspecto sanitario como en el educativo, pese a que el ejecutado no consintiese su realización.

Finalmente, y por lo que al procedimiento se refiere, se trata de una pretensión propia del Derecho de Familia, perfectamente deducible en un

proceso de ejecución como el que nos ocupa, dada su naturaleza, y por entenderse implícita en toda resolución recaída en proceso de familia, como reiteradamente ha resuelto ya esta Sala con anterioridad.”

***** Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Calatayud de 7 de febrero de 2012. Guarda y custodia. Visitas. Alimentos**

"PRIMERO.- La parte actora ejercita en su demanda acción de modificación de medidas de divorcio, en concreto el régimen de guarda y custodia que fue establecido en sentencia de divorcio de fecha 8 de marzo de 2004, en la que se atribuyó la guarda y custodia del hijo menor común a la madre, fijando un régimen de visitas a favor del padre.
El padre interesa se le atribuya la guarda y custodia del hijo menor, alegando que la parte demandada estaría impidiéndole ver a su hijo y presentaría actitudes y formas de vida extraña, siendo consumidora habitual de sustancias tóxicas, generando en ésta un comportamiento poco recomendable para la vida del menor, lo cual le estaría perjudicando enormemente. Alega además la parte actora que la parte demandada trabajaría a turnos de mañana, tarde y noche, lo cual generaría un desorden manifiesto en la vida del menor, quien tendría que ser atendido en ocasiones por su abuela materna. Todo lo anterior, conllevaría un escaso control de la madre hacia el hijo, que habría tenido como resultado que el menor tuviera varias faltas de asistencia a clase, amonestaciones y sanciones y hubiera suspendido la mayoría de las asignaturas.
Además, manifiesta la parte actora que tendría una estupenda relación con su hijo, y que éste querría vivir con él.
Subsidiariamente, interesa se fije un régimen de guarda y custodia compartida por periodos de quince días.
Finalmente, para el caso de no atribuir la guarda y custodia de la hija menor al padre, ni fijar un régimen de guarda y custodia compartida, en el acto de la vista, la parte actora interesa se amplíe el régimen de visitas a favor del padre, y se reduzca la pensión alimenticia a la cantidad de 175 euros mensuales.

La parte demandada se opone a las pretensiones ejercitadas de contrario, alegando que no es cierto que ella impida a la parte actora ver a su hijo, ni que éste quiera ir a vivir con su padre. Alega la parte demandada que el padre habría reclamado la guarda y custodia del hijo menor debido a que le habría reclamado judicialmente el pago de las pensiones alimenticias impagadas.
La parte demandada manifiesta que todas las afirmaciones vertidas de contrario serían falsas y que por tanto deben mantenerse las mismas medidas que fueron acordadas en su día por sentencia de divorcio.

El Ministerio Fiscal se opone a que se atribuya al padre la guarda y custodia del hijo menor y a que se fije un régimen de guarda y custodia compartida a favor de ambos progenitores.
Entiende que debe continuar la madre ejerciendo la guarda y custodia del hijo menor, si bien debe fomentarse las relaciones paterno-filiales, fijando además

dos días intersemanales (martes y jueves) en los que el padre podra disfrutar de la compañía de su hijo, desde la salida del instituto hasta las 20 horas.
Interesa, no obstante, se reduzca la pensión alimenticia a la cantidad de 270 euros.

SEGUNDO.- La cuestión litigiosa se centra en determinar si procede modificar el régimen de guarda y custodia que se fijó en sentencia de divorcio, así como la pensión alimenticia, en el caso de no modificar el régimen de guarda y custodia.
El artículo 79.5 del Código del Derecho Foral de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2011 de 22 de marzo del Gobierno de Aragón establece que *"las medidas aprobadas judicialmente podrán ser modificadas cuando concurran causas o circunstancias relevantes"*.
En el presente supuesto, se fijó en sentencia de divorcio un régimen de guarda y custodia individual, a favor de la madre, solicitando el padre en la presente litis se le atribuya la guarda y custodia del hijo menor. Sólo subsidiariamente, para el caso de no estimar dicha petición, se interesa se fije un régimen de guarda y custodia compartida.
En la Exposición de Motivos del Código del Derecho Foral de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2011 de 22 de marzo del Gobierno de Aragón se hace constar que *"esta Ley, respondiendo a una importante demanda social, ha supuesto un cambio de esquema tradicional, al configurar la custodia compartida frente a la individual como norma preferente en los supuestos de ruptura de la convivencia entre los padres y en ausencia de pacto de relaciones familiares. Con este cambio se ha pretendido favorecer el mejor interés de los hijos y promover la igualdad entre los progenitores"*.
El artículo 80.2 del citado texto legal aboga por un régimen de guarda y custodia compartida con carácter preferente al régimen de guarda y custodia individual, si bien exige atender a ciertos factores, concretamente a la opinión del menor mayor de doce años.

En su declaración en el acto de la vista, la parte actora manifestó que el menor la había manifestado que quería irse a vivir con él y que le había manifestado haber visto ciertas conductas de su madre, que evidenciarían que el entorno en el que vive el menor no sería el más adecuado. Aportó en el acto del juicio informe del Instituto , al que asiste el menor, donde puede verse que el rendimiento académico del menor es pésimo, que sus faltas de asistencia son continuas y que ha sido amonestado y sancionado en varias ocasiones.
La madre niega ser consumidora habitual de droga u otras sustancias y reconoce que la situación académica de su hijo es pésima, si bien afirma que se siente sola y no tiene el apoyo del padre de su hijo, a quien le habría pedido ayuda en varias ocasiones, sin que por el padre se hubiera hecho nada. De hecho, manifiesta la madre que la despreocupación del padre ha sido tal que ni siquiera habría

abonado la pensión alimenticia durante el año 2011 (exclusivamente dos pagos de 150 euros).

Resultan claves los informes del Equipo Psicosocial.
La trabajadora social hace constar en su informe que el menor le transmite que "*antes se relacionaba más con su padre, pero ahora se considera más mayor y quiere ir cuando le apetezca*"..."*Además, dice que la relación con la pareja de su padre no es buena. Dice que se relaciona bien con su padre, con sus hermanas y con toda la familia pero adora a su madre y prefiere estar con ella*".
La Psicóloga hace constar en su informe que el menor se encuentra muy unido a su madre, quien habría sido la figura parental fundamentalmente encargada de su cuidado y atención y representaría para él la principal figura de su mundo afectivo. Así mismo, se informa que la relación del menor con su padre estaría muy deteriorada y que de lo manifestado por el menor se desprendería la existencia de una pauta de actuación paterna escasamente activa y poco atenta a sus intereses.
Todo lo anteriormente expuesto, contrasta con lo manifestado por el padre, quien afirmó en el acto del juicio que el menor le había manifestado que quería ir a vivir con él.

Conforme con el informe del Equipo Psicosocial es lo manifestado por el menor en su exploración judicial. El menor, de catorce años de edad, manifestó que quería seguir viviendo con su madre y que la relación con su padre se había deteriorado, debido a que éste le agobiaba e insistía en que se fuera a vivir con él. Igualmente, relata que la relación con la pareja de su padre no es buena y que ésta y su padre le dicen que su madre lo deja solo en casa.
El menor puso de manifiesto que no se sentía a gusto en el domicilio de su padre, puesto que se pasaba todo el fin de semana viendo la tele, sin disfrutar de la compañía de su padre.

NO puede obviarse que la situación del menor es especial. Su rendimiento académico es pésimo, ha faltado a clase en numerosas ocasiones y ha sido amonestado y sancionado en varias ocasiones, según se desprende del informe del instituto al que el menor asiste y que fue aportado en el acto de la vista.
El padre responsabiliza a la madre de ello y lo achaca a la vida desordenada que el menor tendría en compañía de su madre, llegando incluso a afirmar que ésta sería consumidora habitual de sustancias.
Por parte de la Médico Forense se practicó análisis de una muestra de cabello recogida a M, detectándose cocaína en un 1,26 ng/mg y benzoilecgonina.
Las partes no solicitaron que por la Médico Forense se aclarara qué tipo de consumo indicaba dicha cantidad (habitual, esporádico...). Por esta juzgadora no se acordó dicha prueba puesto que por la experiencia de otros supuestos

tiene constancia de que la cantidad detectada en la muestra es indicativa de un consumo esporádico y puntual.
Ello se correspondería con lo que manifestó la parte demandada en el acto de la vista. La parte demandada reconoció que había salido con unos amigos en una ocasión y que había consumido cocaína.
Por lo tanto, no nos encontraríamos ante una consumidora habitual de sustancias, a pesar de lo manifestado por la parte actora.
Resulta además llamativo que la parte actora ponga énfasis en el hecho de que la parte demandada es consumidora de sustancias, y sin embargo, al Equipo Psicosicial nada manifestara al respecto, indicándole, por el contrario, que la madre tendría problemas de alcoholismo. NO obstante, en la demanda nada habla de la posible adicción de la parte demandada con el alcohol.
La Psicóloga, en su informe, hace constar que en el estudio realizado no se han puesto de manifiesto indicios de alteraciones psicopatológicas en la parte demandada ni se han apreciado en ella indicios de consumo de alcohol ni deterioro en su persona derivado de la ingesta de alcohol.

La supuesta vida desordenada que el menor parece llevar, tampoco parece achacable al hecho de que la madre trabaje a turnos y que el menor pase mucho tiempo solo. La madre manifestó que la abuela materna vivía en el mismo edificio que ellos y que además, en el domicilio familiar vivía otra hija de 20 años. El menor manifestó que nunca se quedaba solo, puesto que cuando su madre trabajaba se quedaba con su abuela o su hermana mayor.

Entiende esta juzgadora que el origen del problema que tiene el menor no está en la supuesta vida desordenada de la madre, lo cual no se ha acreditado, sino en el hecho de que entre sus progenitores no existiría comunicación para solucionar juntos los problemas de su hijo y la relación padre-hijo estaría muy deteriorada.
El menor expuso con tristeza en su exploración judicial que la relación con su padre se había deteriorado y que no se sentía bien cuando iba a su casa. Así mismo, manifestó que quería pasar más tiempo con su padre, pero de otro modo al que viene haciéndolo últimamente. Así, el menor manifestó que le gustaría hacer cosas junto con su padre (ir al cine o a tomar algo, pasear, hacer deporte...), sin intervención de terceras personas.

Por todo lo expuesto, se considera que no procede modificar el régimen de guarda y custodia, que deberá seguir ostentándola la madre, si bien sí que procede modificar el régimen de visitas en los términos que informa el Equipo Psicosocial, con la finalidad de fortalecer la relación entre padre e hijo.
Se fijan dos días intersemanales (martes y jueves) en el que el padre, a la salida de su trabajo, a las 17.30 horas, podrá ir a buscar a su hijo, bien sea al domicilio

materno o al lugar donde el menor se encuentre en ese momento, debiendo dejar al menor en el domicilio materno a las 21 horas.
Es importante que durante ese tiempo, el padre esté con el menor, que lo atienda, lo escuche, hagan actividades juntos...
En cuanto a las vacaciones, se deja el mismo régimen de visitas que en su día se fijó en la sentencia de divorcio.

El régimen de visitas se fija sin perjuicio de que los progenitores de mutuo acuerdo, y siempre contando con la opinión de la menor, puedan establecer las modificaciones que estimen oportunas en cuanto a los días y horas.

QUINTO.- Respecto de la pensión de alimentos se considera que sí que se habría producido un cambio de circunstancias en relación con las que fueron tenidas en cuenta a la hora de fijar la pensión alimenticia en la sentencia de divorcio.
En la sentencia de divorcio se acordó fijar una pensión alimenticia de 300 euros a favor del hijo común.
En ese momento, el esposo tenía unos ingresos mensuales medios de 1.600 euros, según consta en sentencia, y la esposa, constaba dada de alta en el Régimen Especial de Autónomos de la Seguridad Social desde el año 2003, sin que se tuviera constancia de sus ingresos mensuales.
Actualmente, se habría producido una reducción de los ingresos mensuales de la parte actora, según se desprende de las nóminas aportadas con la demanda (alrededor de 1.100 euros mensuales), y constaría acreditado que la parte demandada tendría unos ingresos mensuales de 1.100 euros aproximadamente.
Así mismo, constaría acreditado que la parte actora tendría actualmente una hija que no tenía cuando se dictó la sentencia de divorcio, nacida de su unión con otra mujer.
Ello conlleva que debe reducirse la pensión alimenticia, teniendo en cuenta el cambio de circunstancias.
En el año 2004, se fijó una pensión de alimentos por importe de 300 euros, actualizable conforme a los incrementos del IPC. Actualmente, la pensión a satisfacer por el padre, actualizada conforme a los incrementos del IPC, rondaría los 360 euros.
Se considera conveniente fijar la pensión en la cantidad de 270 euros, en los términos que informó el Ministerio Fiscal.
Además, los gastos extraordinarios se seguirán abonando en los términos acordados en la sentencia de divorcio."

***** Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 8 de febrero de 2012. Custodia compartida. Preferencia. Criterios exegéticos.**

"PRIMERO.- Como efecto del divorcio del matrimonio entre actora y demandado, celebrado en Zaragoza el 18 de octubre de 1.997, del que nacieron dos hijas, N el de 2.002, e I, el de 2.005, la sentencia de primera instancia atribuye la custodia de las dos hijas a la esposa argumentando lo siguiente: "*Con relación en primer término al tema de la custodia, como indicó el Ministerio Fiscal, al tiempo de la presente resolución, existiendo procedimiento penal abierto entre las partes, queda vedada cualquier posibilidad de custodia compartida entre ambos progenitores y ello conforme al artículo 92 del Código Civil y artículo 6 de la Ley de Igualdad en las Relaciones Familiares ante la Ruptura de la Convivencia de los padres, ley aragonesa 2/2010. Por ello, analizada la situación de hecho que se ha venido llevando a efecto desde la ruptura de la relación de pareja y, conforme a lo dispuesto por el informe psicosocial unido a autos, procede a atribuir la guarda y custodia de las hijas a Maria Esmeralda A.*".

En materia de alimentos la sentencia fija a cargo del padre una cantidad de 200 euros para cada una de las menores. Desestima la solicitud de pensión compensatoria para la esposa argumentando que la decisión de la madre de optar a una reducción de jornada en su trabajo, tomada en el contexto de una relación matrimonial que no presentaba visos de ruptura, no había provocado una situación de desequilibrio, teniendo en cuenta, además, que puede recuperar las condiciones laborales anteriores, en cuyo caso pasaría a tener unos ingresos brutos de 15.811,86 euros. El uso del domicilio familiar se atribuyó a la madre en su condición de progenitora custodia de las hijas del matrimonio.

Recurrida la sentencia por D. Benito M., fue íntegramente confirmada por la de la Audiencia Provincial de 28 de junio de 2.011. Respecto a la custodia de las hijas el fundamento segundo dice lo siguiente:

"*SEGUNDO.- Alega el recurrente, sustancialmente, que sólo ha sido condenado por una falta de vejaciones a una pena de cuatro días de localización permanente, hechos que no resultan encuadrables en el art. 6 de la Ley de Igualdad en las Relaciones Familiares, no existiendo falta de aptitud en el mismo para ejercer el cuidado de las hijas del matrimonio, señalando, además, que las necesidades de las hijas menores no son superiores a cualquier otra niña de su edad y que el salario actual de la esposa aumentará en el momento en que solicite la jornada completa.*

El recurrente interesa en su recurso, como prueba documental, la admisión de una copia de la Sentencia dictada en grado de apelación en el Juicio de faltas contra él seguido, en el que se le condenaba por una falta de vejación a la pena de cuatro días de localización permanente en su domicilio.

Es claro que la calificación de los hechos, por su escasa gravedad y etiología, no entraña, a la vista de la normalización operada en la relación de los litigantes, el obstáculo legal contemplado en el art. 6-6 de la Ley 2/2010 de Igualdad en las Relaciones Familiares, como así ha declarado recientemente esta Sala en caso similar.

Con independencia de ello, el contenido de los informes pericial psicológico y de valoración social emitidos en las actuaciones (folios 103 y siguientes), pone de manifiesto que siempre ha sido la madre la que se ha ocupado prioritariamente del cuidado y atención cotidianos de las dos hijas del matrimonio, de 6 y 9 años de edad. El padre tiene una jornada de lunes a domingo en turnos de mañana y tarde como conductor, en función de los cuales tendría que delegar el cuidado de sus hijas en terceros, tanto en los de mañana (de 6 horas a 15 horas), como en los de tarde (de 15,15 horas a 0,45 horas), no pudiendo procurar a las niñas una atención personalizada, resultando que la madre tiene concedida, en su puesto laboral, jornada laboral reducida hasta el 12 de octubre de 2013 (folio 99 de las actuaciones). La Ley 2/2010, de 26 de mayo establece en su art. 6 que la guarda y custodia compartida se adoptará en interés de los hijos, salvo que la individual sea más conveniente para los mismos.

En el caso de autos es claro que la petición del padre adolece de consistencia, al ponerse de relieve que éste carece no sólo de la costumbre e iniciativa precisas para afrontar los cuidados básicos de sus hijas (control de tareas escolares, hábitos de higiene y alimentación, etc.), sino, y además, de la disponibilidad horaria necesaria por razones laborales para procurar esos cuidados.

El informe psicológico aconseja mantener en esas condiciones la custodia en la madre y esta es la solución que se revela más acertada para preservar el prioritario interés de las hijas, por encima de cualquier capricho o preferencia gratuita de los progenitores.

En cuanto a la pensión de alimentos para las hijas el fundamento tercero dice:

"*TERCERO.- Por lo que respecta a la pensión alimenticia, y conforme a lo regulado en el art. 8 de la citada Ley, consta acreditado que la madre cobra en P S.A., como auxiliar administrativo, 597,42 euros mensuales de salario, y el padre viene a cobrar, como conductor de R S.L., con antigüedad desde 2002, un salario oscilante entre 1.852,51 euros, en enero de 2010, 1866,17 euros en abril de 2010 y 1.002,95 euros en agosto de 2010 (folio 70 y siguientes).*

Es clara la diferencia de ingresos entre los progenitores y la pensión alimenticia estipulada en 200 euros al mes para cada niña, resulta acorde a los mismos y a las necesidades ordinarias de todo orden (alimentación, vestido, ocio, etc.) que generan unas niñas de la edad reseñada, significando que dichas pensiones se fijan con carácter de futuro, en evitación de modificaciones judiciales posteriores por cambio lógico de circunstancias.

En suma, la Sentencia debe ser confirmada con desestimación del recurso".

El recurso de casación interpuesto por el Sr. M. pretende en su primer motivo, alegando infracción del artículo 80 del Código del Derecho Foral de Aragón (CDFA), que se establezca el régimen de custodia compartida de las hijas por meses alternos, y en el segundo, relativo a la pensión de alimentos de las hijas, que se fije en 150 euros mensuales a cargo del padre cuando éste no tenga la custodia o, en caso de no ser casada la sentencia respecto a la custodia, que se fije en 300 euros mensuales.

SEGUNDO.- El primer motivo del recurso denuncia la infracción del artículo 80.2 del Código del Derecho Foral de Aragón por inaplicación del criterio preferente de custodia compartida como más conveniente para las menores. Afirma que el recurrente cumple los requisitos establecidos en la jurisprudencia para poder ostentar la guarda y custodia de sus hijas, y resalta que los informes realizados a su instancia por la trabajadora social y por el psicólogo adscritos al Instituto de Medicina Legal de Aragón ponen de manifiesto que para sus hijas la figura paterna se encuentra muy presente en su mundo afectivo, y que las niñas mantienen una buena relación de afectividad tanto con la madre como con el padre. En cuanto a la disponibilidad horaria y atención a las hijas, asegura que él se ocupaba de las niñas cuando tenía descanso o trabajaba en turno de tarde y la madre lo hacía por la mañana, teniendo que acudir ambos a ayudas familiares en algunos momentos.

Esta Sala ya ha destacado en las sentencias dictadas hasta la fecha sobre esta materia el criterio preferente de la custodia compartida establecido por el legislador aragonés, tal como dispone el artículo 80.2 CDFA, como expresión del sistema que mejor recoge el interés de los menores salvo, como también expresa con claridad el referido precepto, que la custodia individual sea más conveniente.

La más reciente sentencia de la Sala de 1 de febrero del presente año (recurso 24/2011), resume los criterios que deben seguirse en la exégesis del artículo 80 CDFA:

"*En sentencias de esta Sala dictadas en aplicación de la Ley 2/2010, cuyos preceptos han sido incorporados al Código de Derecho Foral de Aragón, se han establecido los siguientes criterios exegéticos acerca de dichas normas: a) La custodia compartida por parte de ambos progenitores es el régimen preferente y predeterminado por el legislador, en busca de ese interés del menor, en orden al pleno desarrollo de su personalidad, de modo que se aplicará esta forma de custodia siempre que el padre y la madre estén capacitados para el ejercicio de las facultades necesarias a tal fin (Sentencia de 30 de septiembre de 2011); b) El sistema no es rígido, salvo en un mandato que dirige al juez: el superior interés del menor (Sentencia de 13 de julio de 2011); c) Podrá establecerse un sistema de custodia individual, cuando éste resulte más*

conveniente para dicho interés, a cuyo efecto habrá de evaluar los parámetros establecidos en el art. 80.2 del Código (Sentencias citadas y la de 15 de diciembre de 2011); d) La adopción de la custodia individual exigirá una atenta valoración de la prueba que así lo acredite –la conveniencia para el menor- frente al criterio preferente de la custodia compartida, al que el precepto legal otorga tal preferencia en interés de los hijos menores (Sentencia de 15 de diciembre de 2011)".

Aplicando los anteriores criterios al caso concreto, hemos de comprobar si los tribunales de instancia, al apartarse de la regla general de la custodia compartida, han seguido adecuadamente las reglas indicadas razonando suficientemente la decisión adoptada. Y, previendo el artículo 80.3 la posibilidad de que el Juez conozca informes médicos, sociales o psicológicos, relativos a la idoneidad del modo de ejercicio de la autoridad familiar y del régimen de custodia de los menores, habrán de valorarse ponderadamente tales informes.

TERCERO.- La sentencia de apelación hace una valoración de los aspectos más relevantes recogidos de dicho informe psicosocial, como el trabajo a turnos del padre, la jornada laboral reducida de la madre, la falta de costumbre e iniciativa del padre en los cuidados básicos de sus hijas y la menor disponibilidad horaria del mismo. Todo ello hace concluir al tribunal de apelación que, como aconseja el informe psicológico, debe mantenerse la custodia de la madre como situación más acertada para preservar el prioritario interés de las hijas.

Así pues, la sentencia recurrida ha efectuado una valoración suficiente y razonada de la prueba practicada teniendo en cuenta los distintos factores puestos de manifiesto por los informes psicosocial y psicológico, y tal valoración no puede ser revisada en casación salvo si la misma resultara irracional, ilógica o arbitraria (sentencias del Tribunal Supremo de 28 de noviembre de 2.008, 8 de julio de 2.009, 10 de septiembre de 2.009 y 19 de octubre de 2.009), lo que no sucede en el presente caso pues de tal valoración, basada en el conjunto de factores indicados recogidos en los informes técnicos, y en el parecer de éstos, se concluye que la custodia individual de la madre es el régimen más beneficioso para las menores.

Por ello el motivo debe ser rechazado.

CUARTO.- El motivo segundo del recurso contiene una primera petición, para el caso de que se estimara el recurso y se adoptara el régimen de custodia compartida, en el sentido de que se señalara a cargo del recurrente una contribución de 150 euros mensuales a los gastos de las menores durante los meses en que la madre ejerciera su custodia y, para el caso de que no se casara la sentencia en lo relativo a la guarda y custodia, que se fijara la cantidad de 300 euros mensuales como contribución suya a los gastos de asistencia de las hijas.

Rechazado el primer motivo del recurso no cabe pronunciamiento alguno respecto a la pensión, que sólo podría hacerse sobre la hipótesis de su estimación, y en cuanto a la reducción de la pensión alimenticia en la situación de custodia asignada a la madre, el recurrente ya lo pretendió en iguales términos en su recurso de apelación y la sentencia recurrida dio adecuada contestación en su fundamento tercero, mediante la comparación de los ingresos de los progenitores y la ponderación de las necesidades de las hijas. No cabe en el recurso de casación pretender una nueva valoración de la prueba, salvo en los casos específicos y por el cauce del recurso extraordinario de infracción procesal, habiéndose limitado el recurrente a hacer su propia estimación, que no puede prevalecer sobre la realizada por los tribunales de instancia y de apelación.

Por ello también este motivo debe ser rechazado y el recurso desestimado.”

***** Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 9 de febrero de 2012. Custodia compartida. Preferencia en ausencia de pacto de relaciones familiares**

"PRIMERO.- Frente a la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Zaragoza que acordó la custodia compartida estimando en este particular el recurso de apelación interpuesto por el demandante, se interpone el presente recurso de casación basado en la alegada vulneración del artículo 80.2 del Código del Derecho Foral de Aragón.

La recurrente comienza el desarrollo del motivo aludiendo a una sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza relativa a un supuesto de custodia compartida planteado con anterioridad a la vigencia de la Ley 2/2010 de 26 de mayo, de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de la convivencia de los padres. Pero las afirmaciones que en ella se contienen en nada apoyan el recurso. Porque no es la misma la idea que inspira la regulación del Código Civil en la cuestión que nos ocupa y y la que refleja la norma aragonesa. En aquélla, sólo puede adoptarse la medida si hay acuerdo de los progenitores o, excepcionalmente si la pide uno de ellos, si hay informe favorable del Fiscal y si el Juez fundamenta que sólo de esta forma se protege adecuadamente el interés del menor. En cambio, en el precepto del artículo 80.2 del Código Foral, como se ha destacado en ocasiones anteriores (Sentencias de este Tribunal de 8 de febrero de 2011 (recurso de casación 27/2011), 15 de diciembre de 2011 (recurso de casación 17/2011), 13 de julio de 2011 (recurso de casación 8/2011) y 30 de septiembre de 2011 (recurso de casación 13/2011) se plasma una opción legislativa que supone un cambio del esquema tradicional y de la que se da cuenta en el Preámbulo: la custodia compartida se configura frente a la individual como preferente en supuestos de ruptura de la convivencia de los padres y en ausencia de pacto de relaciones familiares. Y así lo recoge también en su Fundamento de Derecho segundo la sentencia objeto de recurso.

SEGUNDO.- Lo anterior no tiene un carácter absoluto sino que, como señala la recurrente, se excepciona la custodia compartida (o repartida, quizá sería más exacto decir) cuando la custodia individual sea más conveniente. La reciente sentencia de la Sala de 1 de febrero del presente año (recurso 24/2011), a la que se remite la de 8 de febrero (recurso 27/2011) resume los criterios que deben seguirse en la exégesis del artículo 80 CDFA:

"En sentencias de esta Sala dictadas en aplicación de la Ley 2/2010, cuyos preceptos han sido incorporados al Código de Derecho Foral de Aragón, se han establecido los siguientes criterios exegéticos acerca de dichas normas: a) La custodia compartida por parte de ambos progenitores es el régimen preferente y predeterminado por el legislador, en busca de ese interés del menor, en

orden al pleno desarrollo de su personalidad, de modo que se aplicará esta forma de custodia siempre que el padre y la madre estén capacitados para el ejercicio de las facultades necesarias a tal fin (Sentencia de 30 de septiembre de 2011); b) El sistema no es rígido, salvo en un mandato que dirige al juez: el superior interés del menor (Sentencia de 13 de julio de 2011); c) Podrá establecerse un sistema de custodia individual, cuando éste resulte más conveniente para dicho interés, a cuyo efecto habrá de evaluar los parámetros establecidos en el art. 80.2 del Código (Sentencias citadas y la de 15 de diciembre de 2011); d) La adopción de la custodia individual exigirá una atenta valoración de la prueba que así lo acredite –la conveniencia para el menor- frente al criterio preferente de la custodia compartida, al que el precepto legal otorga tal preferencia en interés de los hijos menores (Sentencia de 15 de diciembre de 2011)".

TERCERO.- No puede compartirse en modo alguno el parecer de la recurrente cuando afirma que debe optarse por la custodia individual si no existe un alto grado de consenso entre los progenitores, pues lo frecuente en la práctica es el disenso y de hecho se contempla de forma expresa en el apartado quinto del repetido artículo 80 para darle un alcance opuesto al que se pretende en el recurso. Conforme a dicho precepto, *La objeción a la custodia compartida de uno de los progenitores que trate de obtener la custodia individual, no será base suficiente para considerar que la custodia compartida no coincide con el interés del menor.*

CUARTO.- En el caso que nos ocupa, se ha acordado la medida atendiendo a los factores que se relacionan en el precepto examinado, razonando la sentencia así: *...se trata de un menor de casi 11 años de edad, ambos progenitores disponen de domicilios cercanos al centro escolar donde estudia el mismo.*
Éste en exploración judicial manifiesta querer vivir con ambos progenitores, los padres llevan separados más de ocho años y el progenitor no custodio han compartido muchas tardes con su hijo, igualmente, ambos tienen aptitud y voluntad para asegurar la estabilidad del hijo conciliando perfectamente su estancia con el menor con su trabajo...

QUINTO.- El informe técnico no se incluye entre los factores enumerados en el apartado segundo del art. 80, sino que es objeto de regulación en el apartado siguiente, y recabarlo se configura como algo facultativo para el juzgador. En consecuencia, tampoco asiste la razón a la parte cuando viene a aseverar que la custodia compartida no es la mejor forma de velar por el interés del menor si los informes técnicos no lo aconsejan. Estos informes, al igual que las demás pruebas, han de ser valorados por el Juzgador conforme a las reglas de la sana crítica, lo que cabalmente se ha hecho también en el caso y de lo que da cuenta la sentencia impugnada: ...*La psicóloga del Juzgado se inclina por la custodia*

individual a favor de la madre únicamente por la existencia del conflicto entre las partes y su mala relación.

No obstante, debe indicarse que no toda conflictividad puede ser causa de exclusión de la custodia compartida, es cierto que es necesario un cierto grado de entendimiento o consenso entre los progenitores para poder realizar de manera adecuada la corresponsabilidad parental después de una ruptura, mas también lo es, que toda crisis matrimonial o de pareja lleva consigo una cierta falta de entendimiento y desencuentro, deberá en todo caso cuando menos exigirse un cierto grado de conflictividad u hostilidad, para que pueda dejarse sin efectos los beneficios que para el menor pueda conllevar e su caso la implantación de la custodia compartida.

En el presente supuesto la conflictividad proviene únicamente de aspectos sobre las vacaciones y forma de realización de las visitas u otros acontecimientos familiares, sin una entidad suficiente para desechar la custodia compartida...

Está pues, perfectamente justificado, y se razona adecuadamente, que el juzgador de instancia se haya apartado del criterio de los peritos.

En suma, ninguna vulneración del art. 80.2 del Código Foral es de apreciar, por lo que el recurso debe ser desestimado."

***** Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 14 de febrero de 2012. Custodia compartida. Edad. Posibilidad de conciliación de vida familiar y laboral**

"PRIMERO.- Recurre la actora la Sentencia de instancia suplicando su revocación y se establezcan las medidas solicitadas en su escrito de demanda, o, subsidiariamente, las establecidas en el Auto de Medidas Provisionales dictado por el Juzgado de 22 de marzo de 2011, en concreto se le atribuya la guarda y custodia de la hija menor, estableciendo el régimen de visitas que reseña en su demanda para el padre y una pensión alimenticia a cargo del mismo de 500€ mensuales.

El Ministerio Fiscal impugna la Sentencia solicitando se acuerde la custodia establecida por el informe del Gabinete, señalándose una pensión alimenticia de 350€ al mes.

SEGUNDO.- Alega la actora que el padre carece de disponibilidad horaria para ocuparse de la hija menor del matrimonio, , nacida el 2009 (dos años de edad), dado que su trabajo como técnico reparador de máquinas le obliga a permanecer las 24 h. de guardia, no tiene horario fijo, trabaja en jornada partida y algún fin de semana, mientras que ella trabaja en horario reducido en turnos de noche, tres noches una semana y dos la siguiente.

El informe pericial practicado en el proceso aconseja que el padre ejerza el cuidado personal de la hija, sin delegar en terceros, y recomienda quede la menor con la madre durante la semana, con cuatro tardes para el padre en función de su disponibilidad laboral, y el disfrute de los fines de semana de forma alterna entre los progenitores (folio 99 y siguientes).

No se ha efectuado la aportación de un plan detallado y concreto por el padre de adaptación de su horario laboral al cuidado de la hija, ni especifica en qué condiciones lo va a llevar a cabo, ni cómo va a resolver las contingencias que puedan surgir por sus incompatibilidades horarias, no bastando con señalar que ahora reside en el domicilio de sus padres, y que éste radica en el mismo edificio que el conyugal, que es de su propiedad, pues tal circunstancia no revela un real y cierto propósito de hacerse cargo personalmente de la niña en todos los órdenes, sino de reservar su atención a los abuelos paternos.

TERCERO.- La custodia compartida aparece legalmente prevista como sistema legal preferente para mantener los lazos de afectividad y una relación continuada de los hijos con ambos padres, fomentando su corresponsabilidad en el ejercicio de la autoridad familiar.

El artículo 80 del Código Foral establece que el Juez la adoptará de forma preferente en interés siempre de los hijos, salvo que la custodia individual sea más conveniente, atendiendo además de al plan familiar presentado a los factores que enumera, entre los que debe destacarse la edad de los hijos, su opinión y las posibilidades de conciliación de la vida familiar y laboral de los progenitores.

En el caso que nos ocupa, el padre propuso un sistema de custodia de dos meses consecutivos alternos en su contestación, el que no ha acogido la Sentencia, que instaura el sistema de semana alternas.

Esta Sala entiende que, no existiendo un plan de adaptación concreto por el padre de su vida laboral al cuidado de la menor la que presenta requerimientos específicos en torno a su alimentación, descanso, ocio, etc., teniendo en cuenta su corta edad, y la gran disponibilidad de que goza la madre, con todos los días libres para dedicarse a la niña, salvo a lo sumo, tres noches a la semana, resulta más beneficioso para ésta mantenerla bajo su cuidado cotidiano, instaurando el régimen de visitas con el padre que estipula el Auto de Medidas Provisionales, señalando que las vacaciones de verano, de los meses de julio y agosto se disfrutaran por quincenas alternas, debiendo coincidir al menos una con las vacaciones de cada progenitor, eligiendo la madre los períodos en los años pares y el padre en los impares.

Se mantienen las medidas acordadas referentes al uso del domicilio familiar y del vehículo, y a los gastos que dichas propiedades generan. También la referente al abono de los gastos extraordinarios de la menor, en la proporción que señala la Sentencia.

CUARTO.- En cuanto a la pensión alimenticia, los mayores ingresos del padre (2.200€ netos al mes), el que goza de vivienda en propiedad, la familiar, y los menores de la madre (700€ mensuales) que deberá afrontar gastos de vivienda, determinan su fijación en 400€ al mes.”

***** Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 14 de febrero de 2012. Custodia compartida. Criterios exegéticos**

"PRIMERO.- Ambas partes recurren la sentencia de instancia, D. Javier , solicita su revocación, se atribuya la custodia compartida del hijo matrimonial, , por quincenas alternas, y con las medidas que relaciona, subsidiariamente, si no se acordase tal medida se instaure un régimen de visitas entre el padre y el hijo desde el jueves por la tarde hasta el lunes a la entrada del centro escolar, y una tarde intersemanal con pernocta cuando esa semana no le corresponda el fin de semana o hasta las 20,30 horas, y mitad de las vacaciones escolares, considerándose las vacaciones del Pilar como un puente festivo, se reduzca a 200 € la pensión alimenticia, y que la recogida del menor puedan realizarla los abuelos paternos.

La Sra. M solicita que se establezca que la semana en que el padre disfrute del fin de semana con su hijo, sea sólo una tarde la que el padre pueda estar con él hasta las 19,30 horas, siendo ese día, en defecto de acuerdo, el martes.

SEGUNDO.- Reiterando el demandado el establecimiento de la guarda y custodia compartida del hijo matrimonial, debe partirse de la prueba practicada en el proceso, y de los principios normativos contenidos en el Art. 80 del Código de Derecho Foral de Aragón, que determinan la preferencia de dicho sistema en interés de los hijos menores, salvo que la custodia individual sea más conveniente en atención al plan de relaciones familiares presentado y a los factores que dicho precepto enumera entre otros, edad de los hijos, aptitud y voluntad de los progenitores para asegurar la estabilidad de éstos, las posibilidades de conciliación de la vida familiar y laboral de los padres, y otros de especial relevancia para la convivencia.

En el caso de autos el hijo del matrimonio cuenta con dos años y nueve meses de edad.

La madre salió de la vivienda familiar con el hijo en enero de 2011, residiendo en casa de sus padres.

La vivienda familiar pertenece en propiedad al esposo, y sobre ella pesa hipoteca con amortización mensual de 378,62 €.

La esposa trabaja como vendedora para M, en horario de 7 a 15 horas, realizando en el actualidad la suplencia de otra empleada, con ampliación de horario. Sus ingresos en abril de 2011 fueron 999,41 € (folio 255). Su rendimiento neto en el ejercicio de 2009 fue de 17.187,74 €.

El esposo trabaja como Oficial 1ª en un taller de reparación de vehículos, de 8 a 13 horas y de 15 a 18 horas y un sábado al mes.

En abril de 2011 cobró 1.148,31 € líquidos, y declaró en el ejercicio 2009 un rendimiento neto de 17.226,55 € (folio 225).

El informe de la trabajadora social adscrita al Gabinete Judicial revela la tendencia del padre a mostrar la mejor imagen de sí mismo y a cuestionar a la esposa, no concretando las pautas que aplicaría en materia de cuidado, educación y atención cotidiana del hijo, asumiendo que precisaría la necesaria colaboración de sus padres en ese cometido (folio 290 y ss.).

La madre asume la necesidad de que el menor mantenga una estrecha relación con su padre, partiendo de que por la corta edad del niño considera más adecuado que quede bajo su cuidado al carecer el padre del conocimiento de sus más elementales requerimientos, por haberse ocupado ella de su atención desde su nacimiento.

La perito, expresando el alto grado de conflictividad existente entre los progenitores, recomienda que pase el niño la semana con su madre, dos tardes intersemanales, martes y jueves, con el padre y alternancia de fines de semana, desde el sábado al domingo, y de periodos vacacionales.

TERCERO.- El Juzgador de instancia acoge dicho sistema, y esta Sala debe ratificarlo, por entender que resulta el más beneficioso para el hijo menor, atendida su corta edad, la escasa concreción del padre en orden a la determinación de la organización cotidiana del cuidado de hijo, sin delegar en terceras personas (abuelos) y en orden a la compatibilización de su horario laboral (Art. 80 a),d) y e) del Código de Derecho Foral).

Deben mantenerse los pronunciamientos referentes a la pensión alimenticia, dados los ingresos acreditados del padre y la detentación de una vivienda en propiedad, de la que carece la madre.

No procede autorizar a terceros para el ejercicio de determinados cometidos en el régimen de visitas.

Finalmente, debe rechazarse el recurso de la madre, dado que las visitas intersemanales instauradas se consideran beneficiosas par el hijo, siempre y cuando sirvan para fomentar su relación con el padre y efectivamente se disfruten entre ambos. Debe suprimirse la previsión que efectúa el Juzgador sobre la revisión de la custodia en el plazo estipulado, por carecer de operatividad dicho pronunciamiento.”

***** Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 28 de febrero de 2012. Pensión de alimentos para exconyuge e hija menor**

"PRIMERO.- Recurre D. Luis Carlos la Sentencia de instancia, solicitando su revocación parcial y se suprima la medida consistente en el pago a su cargo y a la Sra. M de 250 euros mensuales, fijándose a cargo de la esposa, en concepto de alimentos para la hija menor del matrimonio, la suma de 200 euros mensuales actualizables.

SEGUNDO.- La Sentencia impugnada otorga al padre la guarda y custodia de la hija,, y el uso a ambos de la vivienda familiar, estableciendo entre madre e hija un régimen ordinario de visitas y una pensión de alimentos para la madre de 250 euros al mes, para el desarrollo del régimen de visitas con la hija, en atención a los menores recursos económicos de la Sra. M frente a los del Sr. A.

El proceso que nos ocupa es de divorcio de los litigantes.

La Sra. M no ha impugnado ninguno de los pronunciamientos de la Sentencia.

El Sr, A trabaja en como peón, habiendo cobrado en Junio de 2010 1040,05 euros (folio 279 de las actuaciones). En el IRPF de 2009 declaró un rendimiento neto de 14.790,02 euros, lo que supone unos 1.232,5 euros netos al mes (folio 282 de las actuaciones).

La esposa, nacida en Brasil, percibió prestación por desempleo desde diciembre de 2009 hasta abril de 2011, (folio 51) y hasta noviembre de 2011 subsidio por desempleo de 426,00 euros al mes (folio 166) y reconoce que la vivienda familiar es privativa del esposo.

TERCERO._ Es evidente que mediando el divorcio entre los litigantes, no procede la fijación de alimentos a favor de ninguno de los cónyuges al decretarse la disolución del vínculo conyugal, y , además es al cónyuge al que no se otorga la custodia de los hijos al que corresponde contribuir a su sustento y manutención mediante el pago de una pensión alimenticia.

Es claro que la situación económica del recurrente es mas holgada que la de la Sra. M, en atención a lo expuesto, pero ello no le exime a ésta de contribuir al sostenimiento de su hija en proporción a sus recursos. (art. 82 del Código de Derecho Foral de Aragón)

Dª Mª Luisa es titular única de la cuenta número en Nova-Caixa-Galicia, en la que ha figurado durante 2010 y 2011 un saldo medio positivo superior a los 4.000 euros (folios 324 y siguientes).

Debe suprimirse, en consecuencia, la pensión que asigna la Sentencia de 250 euros al mes a cargo del esposo a favor de la esposa por su improcedencia, y establecerse a cargo de ésta y a favor de la hija del matrimonio, una pensión alimenticia de 90 euros mensuales, actualizable anualmente, debiendo abonar,

asimismo, el 25% de sus gastos extraordinarios, corriendo el resto, 75%, a cargo del padre.”

***** Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 28 de febrero de 2012. Guarda y custodia. Uso vivienda familiar. Alimentos. Visitas. Pensión compensatoria**

"PRIMERO.- Los pronunciamientos objeto de recurso son los relativos a guarda y custodia, uso de la vivienda familiar, alimentos de los hijos, pensión compensatoria y derecho de visitas.

SEGUNDO.- Solicita el Sr M que la guarda y custodia de los hijos, , nacidos , se atribuya a ambos progenitores, con alternancia de curso lectivo.

El legislador aragonés, al promulgar la Ley 2/2010, de 26 de mayo, modificó sustancialmente el régimen legal antes existente para los casos de ruptura de la convivencia de los padres, estableciendo de modo preferente, el sistema de custodia compartida respecto de los menores. Así resulta del propio Preámbulo de la citada Ley, del conjunto de sus normas y, especialmente, de los preceptos hoy contenidos en los arts. 75.2, 76 y 80.2 del Código del Derecho Foral de Aragón (en adelante CDFA). Se pretende, en primer lugar, propiciar un acuerdo entre los progenitores, mediante una regulación que fomenta el "El pacto de relaciones familiares", inspirado en el respeto a la libertad de pacto del Derecho foral aragonés. Y en defecto de una solución de consenso, se establece como preferente el sistema de guarda y custodia compartida, en cuyo sentido dice el art 80.2 del CDFA, que "El Juez adoptará de forma preferente la custodia compartida en interés de los hijos menores, salvo que la custodia individual sea más conveniente, teniendo en cuenta el plan de relaciones familiares que deberá presentar cada uno de los progenitores y atendiendo, además, a los siguientes factores: a) La edad de los hijos. b) El arraigo social y familiar de los hijos. c) La opinión de los hijos siempre que tengan suficiente juicio y, en todo caso, si son mayores de doce años, con especial consideración a los mayores de catorce años. d) La aptitud y voluntad de los progenitores para asegurar la estabilidad de los hijos. e) Las posibilidades de conciliación de la vida familiar y laboral de los padres. f) Cualquier otra circunstancia de especial relevancia para el régimen de convivencia". Y en su apartado 3 se previene que "Antes de adoptar su decisión, el Juez podrá, de oficio o a instancia de parte, recabar informes médicos, sociales o psicológicos de especialistas debidamente cualificados e independientes, relativos a la idoneidad del modo de ejercicio de la autoridad familiar y del régimen de custodia de las personas menores".

La prueba practicada, sin embargo, evaluada a la luz del citado precepto, muestra como es la custodia individual a favor de la madre la medida que se revela más adecuada para preservar el superior interés de los menores, designio

al que debe ajustarse toda decisión, resolución o medida que afecte a los mismos (art 76 CDFA).

Ambos –N tiene 7 años y D cumplirá en septiembre los 18- mantienen una buena relación con cada uno de sus padres, pero están especialmente unidos a la madre, quien representa para ellos la principal figura de su mundo afectivo y la que les ha proporcionado fundamentalmente la seguridad y estabilidad que han requerido en su desarrollo psicoevolutivo. En su exploración, D manifestó con claridad su deseo de permanecer con su madre y hermana. Y lo mismo recoge la psicóloga adscrita al Juzgado de Familia en su informe, en el que con respecto a la conveniencia del establecimiento de un sistema de custodia en periodos alternos de estancia de los hijos con cada uno de los progenitores, dice que del análisis del grupo familiar se desprende la existencia de circunstancias que se consideran desfavorables, como son el rechazo de esa medida por parte de aquellos, la edad del mayor, con el que por su rechazo no se estaban llevando a cabo todas las visitas que el sistema adoptado permitía, la ausencia de acuerdo entre ambos progenitores y, sobre todo, que el planteamiento paterno en las circunstancias actuales supondría diferentes medidas para cada uno de los hermanos, criterios todos ellos que representan variables que contraindican la conveniencia de una medida como la propuesta por el padre.

Tenido en cuenta todo ello, la Psicóloga del Juzgado, como mínimo de obligado cumplimiento que garantice la continuidad de una relación paterna y materno-filial periódica y regular, ampliable en función del acuerdo de los progenitores y los deseos del menor, recomienda el mantenimiento del sistema establecido en medidas provisionales, que fue el que pasó a la resolución recurrida, insistiendo, por lo demás, la Psicóloga, en la importancia de que ambas partes adopten una positiva actitud de flexibilidad, colaboración y cooperación parental, transmitiendo a sus hijos la imagen de que la ruptura de la pareja es un proceso que no afecta a los vínculos y relación que tienen con sus padres, así como un modelo más adecuado de resolución de conflictos.

Valorada la prueba practicada, se mantiene, en suma, la custodia individual de la madre como sistema que se revela más acertado para preservar el superior interés de los menores.

TERCERO.- El art 81.2 del CDFA dispone que “Cuando corresponda a uno de los progenitores de forma individual la custodia de los hijos, se le atribuirá el uso de la vivienda familiar, salvo que el mejor interés para las relaciones familiares aconseje su atribución al otro progenitor” y el nº 3 que “La atribución del uso de la vivienda familiar a uno de los progenitores debe tener una limitación temporal que, a falta de acuerdo, fijará el Juez teniendo en cuenta las circunstancias concretas de cada familia”. Y de acuerdo con ambos preceptos la

sentencia atribuye el uso de la vivienda familiar a la madre e hijos que quedan bajo su guarda durante un periodo de 6 años a contar desde el 11-6-11 –cuando el hijo tendrá 22 años y la hija 12-, pronunciamiento con el que el demandado se manifiesta disconforme, solicitando que, ya se conceda o deniegue la custodia compartida, el plazo de concesión del uso debe ser de tres años o antes si se ha procedido a la liquidación del consorcio.

El caso, la vivienda es privativa del actor, los hijos tienen 17 y 7 años, y la actora, de 43 años, carece actualmente de trabajo, situación en la que parece adecuado que el uso del domicilio se prolongue durante el tiempo por el que se ha concedido en la sentencia de instancia.

CUARTO.- En cuanto a pensión de alimentos, señalada en la instancia en cuantía de 550 € mensuales -275 € para cada hijo-, el recurrente solicita su reducción a 400 €.

El Sr. M trabaja en “, que emitió informe según el cual su salario liquido anual es de 17.989.98 € anuales, esto es, de 1499 € mensuales, realizando el mismo “alguna hora extra, muy puntualmente”. Paga un alquiler de 350 € al mes.

La Sra G negó en la comparecencia de medidas y en el juicio que realizase horas en casa de un invidente, parece ser que amigo de ambas partes, ni que trabajase o hubiese trabajado en el Bar “”, donde admitió que por razones de amistad con los dueños estuvo ayudando algún tiempo, al igual que su ex marido, pero sin percibo de ninguna cantidad. D. Fernando , cuñado del Sr M –marido de su hermana-, en testimonio cuya fiabilidad padece, dijo que la demandada atendía al referido invidente –comida y trabajos domésticos-, lo que nada aclara, y que hasta octubre 2010 trabajó por las tardes en el citado Bar, no habiéndola visto trabajar, pero conociendo ese hecho porque la Sra. G se ausentaba por las tardes y en conversaciones familiares se decía que era para trabajar, habiéndoselo oído a su cuñado y a ella. Esta solicitó alta como demandante de empleo el l 9-4-04, causando baja por no renovación el 28-12-06. Y el 19-4-11 volvió a darse de alta. Recibió ofertas de dos empresas, una en julio de 2005 -moza de almacén y operadora de carretillas- y otra en septiembre 2006 –soldadora, delineante, conductora de camión-, que no aceptó, según dijo, por necesitar de un vehículo del que no disponía.

Los hijos asisten colegio público, donde dijo su madre que solamente pagaban “los libros y cosas que se pagan en el colegio” (r.t. 25.00).

Sobre tales bases, atendido lo dispuesto por los arts 65 y 82.1 y 3 del Código de Derecho Civil de Aragón, la capacidad económica de la actora y la situación económica en que a tenor de la prueba practica se encuentra actualmente, se reduce la pensión, pero únicamente a los 250 € por hijo que el Ministerio Fiscal señaló como pensión mínima para cada uno.

QUINTO.- En lo que se refiere a la asignación compensatoria del art 83 CDFA, la sentencia de instancia la señala en cuantía de 200 € mensuales por tiempo de 8 años a partir del mes siguiente a la notificación de la sentencia, teniendo en cuenta para ello la duración de la convivencia -19 años-, la edad de la Sra. G –el próximo marzo cumplirá 43 años-, y que en marzo de 2004 dejó el empleo a causa de problemas físicos padecidos –contracturas y vértigos- que llevaron a la pareja al acuerdo sobre su exclusiva educación a la familia, siendo demandante de empleo desde el 19-4-11, en tanto que el Sr M goza de estabilidad laboral –trabaja en la misma empresa desde 1990- y de unos ingresos mensuales de 1500 €.

El actor niega la existencia del desequilibrio económico al que la pensión trata de proveer, solicitando se deje sin efecto, y subsidiariamente, para el caso de ser apreciado, se rebaje la pensión a 100 € mensuales por tiempo máximo de un año.

En el caso, como resulta de la confrontación de las condiciones económicas de las partes, antes y después de la ruptura, no cabe duda que esta implicó para la esposa un empeoramiento económico en relación con la situación existente constante matrimonio; y que, por más que no se haya aportado prueba concreta de los padecimientos a los que en la versión de la actora respondió su cese en marzo de 2004 en “”, empresa en la que trabajaba, tal cese, y la dedicación de la misma a los tareas del hogar, en el que en septiembre de 2005 nació N, se produjo por el acuerdo de ambos progenitores, no existiendo constancia de la postura contraria de Sr M, como tampoco prueba fiable de los trabajos remunerados que según este realizó.

Es, pues, de apreciar, el presupuesto básico al que responde la pensión -el efectivo desequilibrio económico causado por la ruptura matrimonial, que implica un empeoramiento económico en relación con la situación existente constante matrimonio-, razón por la que, atendidos los criterios a que se refiere el art 83.2 del CDFA –en particular la edad de la solicitante, sus perspectivas económicas y posibilidades de acceso al mercado de trabajo, edad de los hijos, atribución del uso de la vivienda familiar, funciones familiares desempeñadas por los padres -de los que el informe psicosocial ha dado suficiente noticia- y duración de la convivencia, debe señalarse la pensión reequilibradora cuya

procedencia cuestiona el recurrente, por la misma cuantía señalada, pero por tiempo de cinco años.

SEXTO.- Y en cuanto a visitas, solicita el recurrente se introduzcan las precisiones que detalla en materia de provisión de ropa a los hijos en fines de semana y vacaciones, además de las que se refieren a información mutua de las incidencias sobre estado de salud y visitas al pediatra, médico de familia o especialistas, así como de las prescripciones medicas que deban seguir, urgencias medicas que surjan, cambios de domicilio y, sobre todo, las cuestiones relativas a su escolarización y que sean de importancia para su régimen escolar y de vida.

A excepción de las primeras -provisión de ropa en los momentos que se dicen--, que ya se contemplan en la sentencia, nada obsta a la introducción de las restantes en la parte dispositiva. “

***** Sentencia de la Audiencia Provincial de Huesca de 29 de febrero de 2012. Guarda y alimentos. Imperativo legal en la limitación temporal a la atribución del uso de la vivienda al progenitor custodio**

"PRIMERO: Solicita el demandado ahora apelante la revocación de la Sentencia en cuanto a los puntos tercero y cuarto de su parte dispositiva, que son los relativos a la atribución del uso de la vivienda familiar y a la cuantía de la pensión alimenticia mensual que debe aquél, en tanto progenitor no custodio, abonar en favor de la hija común.

Comenzando por el primero de los referidos extremos, interesa el apelante que se deje sin efecto la atribución del uso y disfrute de la vivienda a la actora a fin de que se autorice la venta y o alquiler de dicho inmueble, de titularidad exclusiva del recurrente según se ha reconocido de contrario. Varias circunstancias hemos de tener en cuenta para decidir sobre este particular. En primer lugar, la Sentencia de instancia otorga a la actora el uso de la vivienda litigiosa sin establecer límite temporal alguno a dicho uso, y ello pese a que el *art. 81.3 del Código de Derecho Foral Aragonés*(Real Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo) impone al Juez o Tribunal el deber de fijar, a falta de acuerdo y teniendo en cuenta las circunstancias concretas de cada familia, una limitación para la concesión del disfrute del inmueble. Por otra parte, en la súplica de la propia demanda formulada en su día por la actora se solicita que se atribuya a ésta el uso y disfrute de la tan referida vivienda en tanto en cuanto no sea liberada del crédito hipotecario que pesa sobre la misma o sea transferida a una tercera persona con asunción de la deuda hipotecaria y consiguiente liberación de la Sra. Blanca del aval o fianza suscrita. La prueba practicada, en tercer lugar, ha puesto de manifiesto que el demandado es el titular del préstamo hipotecario que grava la vivienda y que la actora es avalista, restando pendiente de pago una cantidad algo superior a los 150.000 euros y habiéndose dejado de pagar, al menos, las cuotas correspondientes a septiembre y octubre de 2011, según se certificó en el mes de noviembre. El demandado, por último, no tenía trabajo a la fecha de celebración de la vista, percibiendo en aquel momento una prestación por desempleo de 420 euros, y no se ha probado que dicha situación se haya modificado a fecha de hoy. En consideración a todo lo expuesto, la Sala entiende que la solución más adecuada a las circunstancias familiares es establecer, por imperativo legal, un límite temporal a la atribución del uso de la vivienda a la progenitora custodia de la menor, que fijaremos prudencialmente en un año a contar desde el día siguiente a la fecha de la presente resolución, si bien en las condiciones que la propia actora expuso en su petición inicial, es decir, salvo que con anterioridad haya sido liberada aquélla de su responsabilidad en el pago de las cuotas del préstamo, o bien la vivienda

haya sido enajenada a un tercero que asuma la deuda hipotecaria, de modo que la Sala autoriza en estas condiciones la venta del piso al considerar que se trata de una solución necesaria para una adecuada relación familiar conforme previene el *art. 81.4 del precitado Código Foral*, en el que el demandado basa su pretensión, ya que el mantenimiento de la situación actual presenta una difícil viabilidad teniendo en cuenta que la actora, que actualmente trabaja y percibe alrededor de 550 euros mensuales, tampoco podría atender con comodidad el pago de las cuotas hipotecarias que vayan venciendo y que resulten impagadas por el demandado, el cual, además, ha de hacerse cargo de los gastos de comunidad y de suministros de electricidad y de agua inherentes a la que había sido vivienda familiar, lo que le resultará complicado al no percibir en la actualidad más que una prestación por desempleo. El recurso, en suma, debe ser estimado en los términos que acaban de exponerse.

SEGUNDO: En cuanto a la pensión alimenticia mensual, que en la Sentencia se ha determinado en 250 euros y que el apelante solicita que se rebaje a 90 euros, hay que considerar en primer lugar que, si bien dicha parte ha podido pedir un préstamo hipotecario por importe de 150.000 euros y ha llegado a tener ingresos mensuales de 2.200 euros en el año 2009 -los cuales, según la prueba documental, ya se habían reducido sustancialmente en 2010-, ya se ha dicho que a la fecha de celebración de la vista tan sólo se ha acreditado que percibe 420 euros mensuales por desempleo, sin olvidar las cuotas hipotecarias que debe atender, mientras que la actora ha encontrado un trabajo, bien que temporal y en horario de mañana, por el que ingresa unos 550 euros. En las circunstancias actuales, y especialmente durante el tiempo en que la actora mantenga el uso de la vivienda, entendemos que la pensión fijada en la Sentencia de instancia queda por encima de las posibilidades del apelante, cuya petición de que se rebaje dicha pensión a 90 euros, sin embargo, tampoco es atendible en sus estrictos términos, pues durante el breve lapso que medió entre la vista de las medidas provisionales y la del presente procedimiento estuvo trabajando durante un mes y medio, por lo que de algún modo sigue incorporado al mercado laboral, todo lo cual nos inclina por fijar la pensión alimenticia en la cantidad de 120 euros mensuales, sin perjuicio de que, en función de los ingresos que pudiera obtener aquél si llega a venderse el piso, pueda solicitarse de contrario una modificación de la medida que ahora se adopta si realmente ha existido un cambio sustancial de las circunstancias.”

***** Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 7 de marzo de 2012. Pensión de alimentos. Alteración sustancial de circunstancias. Situación económica**

"PRIMERO.- La sentencia de instancia desestima la demandada de modificación de medidas promovida por el Sr C y mantiene la pensión por alimentos que la sentencia de divorcio –8 septiembre 2010- señaló a favor de los dos hijos del matrimonio -350 € en total-, pronunciamiento frente al que se alza el actor, que solicita se declare que se ha producido variación sustancial en las circunstancias concurrentes en el convenio –el recurrente se refiere seguramente al convenio de la separación, pues el divorcio fue con oposición- y reduzca la pensión a 100 € mensuales.

SEGUNDO.- Señalar ante todo, corrigiendo el error en que incurre el propio actor –hecho tercero de su demanda- y luego la sentencia que inició el procedimiento -párrafo segundo del primer FJ-, que la sentencia de divorcio no aprueba ningún convenio regulador, pues el único suscrito fue el aprobado por la sentencia de separación, que señaló la pensión de los hijos en 400 € mensuales, cantidad que en el divorcio, por haberlo pedido la propia demandante, fue reducida a los 350 € de cuya reducción se trata en este procedimiento.

Fundamentando su petición, alegó el actor en su demanda la desesperada situación económica en que se encuentra, pues si cuando se fijaron las medidas económicas y de relación con sus hijos –no se sabe si se refiere al momento de la separación o al del divorcio- aun podía generar algún que otro ingreso suficiente, tal situación ha cambiado de forma considerable y paulatina, para, dada la evolución de sus padecimientos, pasar radicalmente a la imposibilidad de hacer trabajo alguno, habiendo quedado reducidos sus ingresos a la pensión por incapacidad permanente total que le fue concedida el 11-3-09 por el INSS -527,35 € x 14 pagas-, cantidad -615,24 € mensuales- del todo insuficiente para el cumplimento de sus obligaciones con sus hijos y la cobertura de sus propias necesidades, lo que en el divorcio, dada su situación económica y la distancia de su domicilio habitual –Cártama (Málaga)-, no pudo defender al no haberse personado y ser declarado en rebeldía en el procedimiento seguido.

La modificación judicial de las medidas inherentes a la nulidad, separación y divorcio sólo es posible cuando haya mediado una alteración en las circunstancias, que ha de ser sustancial, permanente, y no buscada de propósito. Por lo que, siendo ello así, y habiéndose declarado la incapacidad permanente total del recurrente el 1-3-09, con anterioridad al divorcio -8-9-10, hay que entender que con tal ocasión ya quedó valorada esta circunstancias,

máxime cuando la reducción que ese procedimiento se efectuó lo fue a petición de la aquí demandada.

En aquel momento, sin embargo, los ingresos del Sr L ascendían a 9382,43 € -781,86 € mes-, en tanto que ahora, cuando ya no se trata de la proporcionalidad entre medios y necesidades en el señalamiento de una pensión, sino de su modificación y, por tanto, de la existencia o no de una alteración en las circunstancias que presidieron su fijación, ascienden a 7382,90 (615,24 € mensuales), por lo que, siendo sin duda sustancial esa alteración cuando se trata de cuantías como las que nos ocupan, se estima que la pensión recurrida debe reducirse a la de 300 € mensuales pedida por el Ministerio Fiscal.

La situación económica de la madre, que no es deudora de la pensión, resulta desde luego irrelevante. “

***** Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 13 de marzo de 2012. Guarda y custodia. Alimentos**

"PRIMERO.- Recurre el actor la Sentencia de instancia, suplicando su revocación parcial y se le atribuya la custodia individual de la hija del matrimonio, o, subsidiariamente, la custodia compartida por quincenas alternas, se fije en 100 € mensuales la pensión alimenticia a su cargo de no estimarse las dos medidas precedentes, y se reconozca en su favor una asignación compensatoria de 300 € mensuales durante dos años.

SEGUNDO.- Funda el recurrente sus peticiones de custodia en el padecimiento de "malos tratos de obra y palabra" infligidos por su mujer, como así se desprende del procedimiento penal seguido en el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer por denuncia de la Sra. P y la querella por él deducida contra ella.

La prueba obrante y practicada en la causa no demuestra, desde ninguna perspectiva, la realidad de los hechos aducidos, constando el sobreseimiento de la querella formulada por el Sr. B, así como la puesta en contacto de la sra. P con el Instituto Aragonés de la Mujer, y la asistencia médica de la misma en 2009 por agresión familiar (documentos aportados con la contestación y en esta alzada).

Carece de fundamento el argumento sostenido, pero más la petición de custodia individual y compartida, cuando el informe psicológico practicado (folio 296 y ss. de las actuaciones) informa de la conveniencia del mantenimiento de la menor bajo el cuidado de la madre, por ser lo más beneficioso para la niña, , de tres años de edad, ante la falta de asunción realista y convincente de las tareas y responsabilidades que supone el cuidado cotidiano de la misma por el Sr. B, el que sigue residiendo con sus padres en Zuera, sin disponer de vivienda dónde ejercer autónomamente tales cometidos, y sin contribuir a la satisfacción de las obligaciones familiares (alimentos e hipoteca).

Deben ratificarse, en consecuencia, las medidas establecidas en Sentencia sobre custodia y régimen de visitas, por entenderlas más beneficiosas para la menor.

TERCERO.- Por lo que respecta a las pensiones económicas, el recurrente sigue cotizando como autónomo. Ha trabajado en una empresa familiar en el ramo de la construcción "", de la que era Administador y socio. Figura como Consejero de " y de "" en el Registro Mercantil en Julio de 2011, según documental aportada en esta alzada.

Abonaba cuota en el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (cuenta de Ibercaja Nº. a los folios 183 y ss.).

Ha figurado de baja por incapacidad temporal desde Abril de 2009 hasta mayo de 2011 (folios 272, 278, 279 y 311). Reside en Zuera en el domicilio de sus padres.

La esposa trabaja como Auxiliar Administrativa con un contrato de trabajo de interinidad de Noviembre de 2010 (folio 195 y ss.), con un salario neto, en marzo de 2011, de 1.128,31 € (folio 315).

La vivienda familiar pertenece por mitad y proindiviso a ambos cónyuges y está gravada con una hipoteca, con una cuota mensual de unos 550 € (folio 215 de las actuaciones).

En estas condiciones, se estiman correctas la pensión alimenticia fijada y la denegación de asignación compensatoria, por no entender, en este último caso, concurrente desequilibrio económico alguno en el Sr. B tras la ruptura conyugal.”

***** Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 13 de marzo de 2012. Custodia compartida**

"PRIMERO.- Frente a la sentencia de instancia, que desestima la demanda de modificación de medidas interpuesta por D. Jesús , se alza el actor, que solicita: A) Se atribuya la autoridad familiar a ambos progenitores, con el detalle que hace en su suplico. B) Se establezca un sistema de guarda y custodia compartida, con un reparto del tiempo según la alternativa que propone: a) fines de semana alternos de viernes a la salida del colegio hasta la entrada en el mismo los lunes, con extensión a los puentes escolares si los hubiere, y dos tardes entre semana, que serán las de los lunes y miércoles el padre y los martes y jueves la madre, en ambos casos desde la salida del colegio hasta la entrada en el mismo al día siguiente, incluyéndose, pues, la pernocta, o b) semanas alternas, con recogida de los menores el viernes a la salida del colegio hasta el viernes siguiente. Y c), en cuanto a alimentos, que se declare que los cónyuges contribuirán al 50% al mantenimiento de los gastos fijos domiciliados, para lo que ingresaran en una única cuenta corriente el 50% de ellos –en el momento de la demanda 260 € mensuales cada progenitor, actualizables-, y de que los gastos extraordinarios serán sufragados al 50 %, debiendo ponerse de acuerdo para ellos ambos progenitores. Y subsidiariamente, caso de mantenerse la custodia individual para la madre, que la pensión de alimentos, en atención a la disminución del gasto habido, se reduzca a 180 € mensuales para cada uno.

SEGUNDO.- El contenido de la autoridad familiar lo relaciona la Ley y no es necesario su detalle en el pronunciamiento que el recurrente pretende, el cual, por lo demás, no supone modificación ninguna en la sentencia del divorcio, en la que se atribuye a ambos progenitores la autoridad familiar.

TERCERO.- A falta de acuerdo entre los padres, el legislador aragonés establece como preferente el régimen de guarda y custodia compartida, y así, el apartado 2 del 80.2 del CDFA dispone que "El Juez adoptará de forma preferente la custodia compartida en interés de los hijos menores, salvo que la custodia individual sea más conveniente, teniendo en cuenta el plan de relaciones familiares que deberá presentar cada uno de los progenitores y atendiendo, además, a los siguientes factores: a) La edad de los hijos. b) El arraigo social y familiar de los hijos. c) La opinión de los hijos siempre que tengan suficiente juicio y, en todo caso, si son mayores de doce años, con especial consideración a los mayores de catorce años. d) La aptitud y voluntad de los progenitores para asegurar la estabilidad de los hijos. e) Las posibilidades de conciliación de la vida familiar y laboral de los padres. f) Cualquier otra circunstancia de especial relevancia para el régimen de convivencia". El TSJA, por su parte, como criterios exegéticos en la interpretación de los preceptos de

la Ley 2/2010, hoy incorporados al CDFA, a) Que la custodia compartida por parte de ambos progenitores es el régimen preferente y predeterminado por el legislador, en busca del interés del menor en orden al mejor desarrollo de la personalidad, de modo que aplicará esta forma de custodia siempre que el padre y la madre estén capacitados para el ejercicio de las facultad necesarias a tal fin (STSJA 30-9-11): b) Que el sistema no es rígido, salvo en un mandato que dirige al Juez: el superior interés de menor (STJA 13-7-11); c) Que podrá establecerse el sistema de custodia individual cuando este resulte más conveniente para dicho interés, a cuyos efectos habrá de evaluar los parámetros establecidos en el art. 80.2 del Código (sentencias citadas y la de 15 diciembre 2011); d) Que la adopción de la custodia individual exigirá una atenta valoración de la prueba que así lo acredite –la conveniencia para el menor- frente al criterio preferente de la custodia compartida, al que el precepto legal otorga tal preferencia en interés de los hijos menores (STSJA 15-12-11). e) Que para adoptar la decisión, en cada caso, será relevante la prueba practicada, especialmente los informes psicosociales –art 80.3 CDFA- obrante en autos, y la opinión de los hijos menores cuando tengan suficiente juicio –art 80.2 c) CDFA)-.

CUARTO.- Como antecedentes del caso, decir que los menores, , nacieron en Rusia, la niña en octubre de 2002 y J en noviembre de 2005, siendo respectivamente adoptados en 2006 y 2008 cuando tenían 4 años y medio y 2 años y medio de edad-. Vivían en el e iban al Colegio , situación que cambió al trasladar Dª Esther su domicilio a , donde cursan sus estudios en el Colegio “”. El Sr O, también domiciliado en el en un principio, lo cambio al , tras la compra de una vivienda en este Barrio. El divorcio de los padres tuvo lugar por sentencia de 23-7-10, que aprobó el convenio regulador que ambos firmaron, en el que acordaron que los menores permaneciesen con su madre, con un régimen de visitas con el padre consistente en fines de semana alternos, desde el viernes a la salida del colegio a la entrada del mismo el lunes, con puentes a unir en su caso; dos tardes entre semana, lunes y miércoles, este último con pernocta; y vacaciones por mitad, las de verano repartidas en su integridad.

La psicóloga del Juzgado, por todas las razones que expone y recoge la sentencia, aconseja en su informe un sistema de guarda y custodia compartida por semestres, con el régimen de visitas que señala.

El Juez, no obstante, valora a) Que cuando D. Jesús interpuso la demanda de divorcio de mutuo acuerdo el 23-6-10, la Ley 2/2010, publicada en el BOA de 8 de junio, iba a entrar en vigor dos meses y medio más tarde, condiciones en las que, siendo él quien interponía la demanda y estando asesorado jurídicamente, hay que entender que conocía la novedad legislativa. b) Que el convenio suscrito por las partes fijaba una amplia relación del padre –progenitor o custodio- con sus hijos, desprendiéndose del régimen de visitas

estipulado que el mismo cumplía las directrices de la nueva Ley, que por lo demás, tal y como indicaba su Exposición de Motivos, no debía suponer un reparto igualitario del tiempo. c) La normalidad y ausencia de incidencias con que se han cumplido las visitas, y las sucesivas adaptaciones a la que los menores se han visto sometidos –vida en España, ruptura matrimonial de sus padres y, luego, durante un año, al régimen que los mismos pactaron-. Todo lo cual le lleva a concluir que el interés de los hijos no demanda el cambio interesado por el padre.

Tal conclusión se ha visto reforzada con la exploración judicial de M, que manifestó que está bien con el sistema por el que actualmente se rigen las visitas con su padre y que no desea ningún cambio. Razón por la que, en coincidencia con lo informado por el Ministerio Fiscal tras la exploración practicada, se estima preferible, por positiva y favorable al interés de los menores, el mantenimiento de la situación en que se encuentran, sin perjuicio de lo que en el futuro proceda a la vista a la evolución del caso

QUINTO.- El cambio de Colegio ha supuesto en el gasto de los hijos una disminución de 160 € mensuales, lo que, atendida la moderación de las pensiones vigentes, los ingresos del padre y la incidencia en los de la madre de las medidas económicas aprobadas por el Gobierno, no justifica la reducción que el recurrente solicita en aquellas. “

***** Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 13 de marzo de 2012. Custodia compartida no implica reparto igualitario del tiempo. Pensión de alimentos. Proporcionalidad**

"PRIMERO.- Los pronunciamientos objeto de recurso son los relativos al régimen de visitas de la hija, en el sistema de custodia compartida establecido, pensión de alimentos e ingresos en la cuenta conjunta.

SEGUNDO.- Las semanas de custodia alternas se armonizan con los turnos de trabajo de la madre, correspondiéndole al padre la custodia en las semanas en que así ex esposa lleve turnos de tarde. Y en cuanto a visitas, tema en el que se plantea el recurso, se dice que la menor comerá con su madre –o familia materna- cuando Dª Gema tenga turno de tardes -15,45 a 22,30 h-, exceptuados los periodos vacacionales escolares y los festivos entre semana, y con su padre cuando la madre tenga turno de mañana -9,15 a 3,15- y él esté libre entre semana -4 días al mes-, régimen este en el que, si tratándose de una guarda y custodia compartida, con alternancia semanal, el tiempo debería ser igual para ambos, ello no sucede, razón por la que el recurrente pide no se fije visita alguna para el progenitor custodio –ni se acuerde, por tanto, que la menor tenga que comer con el progenitor que aquella semana no tenga la custodia-; y, subsidiariamente, para el caso de considerarse necesarias las visitas intersemanales, se acuerde que la semana en que la custodia la ostente la madre la menor coma en el domicilio paterno, exceptuando los periodos vacacionales escolares y los festivos entre semana, y que la semana en que la custodia la ostente el padre la menor comerá en el materno.

El padre tiene un calendario laboral en el que hay dos semanas en que libra dos días entre semana y las dos semanas siguientes lo hace los dos fines de semana. Y con tal régimen -alega el recurrente- las semanas en que la custodia la tenga la madre y él no tenga festivos entre semana, solo podrá ver a su hija las tardes de los miércoles de 17 a 20,45 horas, mientras que en las semanas en que sea a él a quien corresponda la custodia de la hija, aunque tenga festivos intersemanales, no podrá comer con esta al haberse establecido que en esas semanas la niña coma con la madre o familia materna.

El recurrente reclama una estricta igualdad con la parte contraria; sin embargo, la custodia compartida no implica un reparto igualitario del tiempo que deba imponerse por encima de cualquier otra consideración. Y la propuesta de la Psicóloga, a la que con la añadidura compensatoria del miércoles esta el Juez en su sentencia -en las semanas en que la guarda y custodia sea de la madre, el padre solo podrá comer con su hija si tiene festivo intersemanal-, es ajustada y beneficiosa para, a la que proporciona una organización de la que

antes carecía. Por ello, el régimen que el padre recurre debe ser mantenido, con la única modificación de lo que se refiere a los gastos de comedor, partida que en las circunstancias del caso, salvo acuerdo de ambos progenitores, parece adecuado desligar de un pago conjunto, para ponerlo al cargo exclusivo de aquel que decida hacer uso de ese servicio.

TERCERO.- En cuanto a alimentos, solicita el recurrente la supresión de la pensión alimenticia de 100 € mensuales señalada a su cargo en favor de su hija, debiendo hacerse cargo cada progenitor, en atención a la guarda y custodia por semanas que se ha establecido, de los gastos corrientes y ordinarios de la menor durante el tiempo que permanezca con ellos.

Se dice en el recurso que el Juez parte en su señalamiento de la diferencia de ingresos de actora y demandado -900 € la primera y 1500 € el segundo- y de que la Sra. esta amortizando un préstamo que le supone un cargo mensual de 373€, no teniéndose en cuenta, sin embargo, que los de la actora corresponden a una jornada laboral de 35 horas semanales; que la desproporción entre unos y otros ingresos no existiría si la misma ampliase su jornada laboral en vez de preferir permanecer junto a su hija; y que si la actora amortiza el citado préstamo, el paga 1100 € por el préstamo hipotecario que grava su vivienda; además de que, extinguido el condominio sobre la vivienda común, entregó a su ex esposa 110.000€, asumiendo también la hipoteca pendiente.

La referida pensión se estima, sin embargo, adecuada al principio de proporcionalidad que el art 82 del CDFA contempla para gastos ordinarios de los hijos y se mantiene. Los ingresos del recurrente no son l500 € mensuales, sino que en el año 2010 ascendieron a 2062 € mees, doblando sobradamente los obtenidos por su ex esposa; la limitación horaria de los contratos laborales de esta última ha venido influida por su deseo de prestar personalmente a su hija los cuidados que por su edad ha requerido; la comparación de los préstamos hipotecarios respectivamente satisfechos no puede desligarse del montante de las compras efectuadas y, en suma, del alcance y consecuencias de sus respectivas decisiones; lo mismo que los 110.000€ que se dice debió abonarle a Dña. Gema tras decidir el Sr. comprarle su parte en la que fue vivienda familiar.

CUARTO.- En ese único sentido se estima el recurso, manteniéndose el régimen de contribución de ambos progenitores a la cuenta conjunta que se abre, pero según lo dicho también, con exclusión, salvo acuerdo de los padres, de los gastos de comedor que el progenitor que haga uso del mismo deberá abonar de su propio peculio.”

***** Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 20 de marzo de 2012. Régimen de visitas. Desinterés del progenitor. Pensión de alimentos adecuada**

"PRIMERO.- La sentencia recaida en 1ª Instancia en el presente procedimiento sobre divorcio (Artº 770 LEC) es objeto de recurso por la representación del demandado (Sr.) que en apelación (Art. 458 LEC) considera que procede le sea señalada a su favor un régimen de visitas de fines de semana alternos desde el viernes a la salida del colegio hasta el domingo a las 19 horas con entrega en el Punto de Encuentro Familiar igualmente en todo que proceda rebaje la pensión alimenticia a 100 €/mensuales.

SEGUNDO.- En cuanto al derecho de visitas debe tenerse en cuenta que como tiene declarado el Tribunal Supremo (Sentencia de 21 de noviembre de 2005), aquel debe estar subordinado al interés y beneficio del menor y este sentido proteccionista se manifiesta claramente expresado en la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989, igualmente la Ley Orgánica de 15 de enero de 1996, de Protección Jurídica del Menor, sienta como principio general la primacía del interés como superior de los menores sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir, debiendo ser respetado por todos los poderes públicos, padres, familiares y cuidadores y por los Juzgadores.

En el presente supuesto el demandado no compareció al acto de la vista. Tanto del informe obrante al folio 8, como de la inasistencia al Punto de Encuentro Familiar para el cumplimiento de las visitas que se habían pactado en el convenio regulador de 23/11/2009, se vislumbra un desinteres en el recurrente en relación con sus hijos, por lo que no parece adecuado la fijación de visitas, tal como indica el Juzgado de 1ª Instancia sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 775 LEC.

En cuanto a la pensión alimenticia debe indicarse que el art.65 del Código del Derecho Foral de Aragón, establece para quienes ejercen la autoridad familiar la obligación entre otras de proveer a su sustento, habitación, vestido y asistencia médica de acuerdo con sus posibilidades, así como de educarlos y procurarles una formación integral. Igualmente el art. 82.1 del mismo texto legal de Aragón establece que tras la ruptura, ambos progenitores contribuirán proporcionadamente con sus recursos económicos a satisfacer los gastos de asistencia de los hijos/as, a su vez el punto 3 del mencionado artículo 82 indica que el Juez asignará a los padres la realización compartida o separada de los gastos ordinarios de los hijos/as teniendo en cuenta el régimen de custodia y si es necesario fijar un pago periódico de los mismos.

En el presente supuesto, se trata de dos menores de 13 y ocho años de edad, la pensión fijada en la sentencia apelada parece adecuada y no puede afirmarse que no puede ser asumida por el apelante a la vista de su cuantía y la prueba obrante en autos, así como lo pactado en el convenio regulador, sin perjuicio igualmente de su posible revisión si procediera.”

***** Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 20 de marzo de 2012. Custodia compartida. Alternancias**

"PRIMERO.- La Sentencia recaída en primera instancia en el presente procedimiento sobre guarda y custodia y alimentos es objeto de recurso por la representación de la parte demandada Sra., que en su apelación (artículo 458 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) considera que la Sentencia apelada no ha valorado correctamente la prueba obrante en autos, especialmente el informe psico-social, no resultado aconsejable un sistema de estancias alternas, no pudiéndose señalar en el futuro, debiendo permanecer el menor con su madre. Igualmente el sistema de reparto de estancias hasta que el menor cumpla 3 años, no puede denominarse custodia compartida. Finalmente entiende que una vez cumpla el menor tres años, procede mantener el régimen de guarda y custodia favorable a la madre, aumentando los fines de semana y vacaciones de verano para el padre.

SEGUNDO.- Respecto de la guarda y custodia debe indicarse que como ya indicábamos en nuestra sentencia de 3 de mayo de 2011 la Ley de relaciones familiares ante la ruptura de la convivencia de los padres de 26 de mayo de 2010, hoy incluida en la Código de Derecho Foral de Aragón ha establecido la preferencia legal por la custodia compartida, al considerar que esta forma de custodia es más beneficiosa para el interés del menor y más respetuosa con los derechos de los progenitores, lo que implica que al estar configurada como regla general, el juez podrá optar por la individual cuando sea mas conveniente para el menor, justificando adecuadamente esta opción, ello por el contrario no implica que la custodia compartida opere de manera autonómica, sino que en caso de solicitarse la individual por cualquiera de los progenitores deberá realizarse el necesario estudio de las circunstancias concurrentes en el caso debatido, conforme a los factores que señala la propia normativa y con máximo respeto al principio básico y fundamental inspirador de la norma que es el beneficio e interés de los hijos menores de edad en línea igualmente con lo proclamado por el art. 39 C.E. L.O. 1/1996 de 15 de enero sobre protección jurídica del menor, Convención de los Derechos del Niño de 1989, Carta Europea de los Derechos del Niño del Parlamento Europeo, Sentencias del T.C 114/1992, 143/1990 y 141/2000 entre otras y Ley Aragonesa de a Adolescencia e Infancia.

TERCERO.- En el presente supuesto se trata de un hijo común de 2 años y 3 meses de edad. El informe psico-social expresamente indica, que teniendo en cuanta la edad del menor y que este tiene vínculos afectivos con ambos progenitores, sería conveniente una guarda y custodia compartida. Así pues, esta podría ser de forma que cada uno de los progenitores apoye al otro en

el cuidado del menor y puedan conciliar su vida familiar y laboral. Hata el mes de septiembre, el padre podría tener al niño los fines de semana alternos de viernes a domingos con pernocta, 3 días entre semana y la mitad de los periodos vacacionales, Además, también podrá apoyar a la Sra. los días que el Sr. tenga disponibilidad. A partir de septiembre, cuando el niño empiece a ir a la guardería, este podría estar una semana con cada progenitor y 2 visitas intersemanales para el progenitor no custodio en ese momento y la mitad de las vacaciones escolares para cada uno. Siendo muy relevante dicho informe (artículo 80 del Código de Derecho Foral de Aragón). Igualmente, conforme la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 30 de septiembre de 2011 se aplicará la custodia compartida siempre que el padre y la madre estén capacitados para el ejercicio de las facultades necesarias a tal fin. En el presente supuesto ya se ha indicado que la guarda y custodia compartida se revela como el régimen más adecuado para el menor.

Es cierto también que el periodo de estancias establecido hasta que el menor cumpla 3 años si tenemos en cuenta que se traduce en dos noches al mes y 10 horas semanales por las tardes lectivas, sin pernocta, no se compagina bien con una sistema de custodia compartida, supuesto distinto a los periodos establecidos en las Sentencias de esta Sala de 29 de marzo de 2011 y 12 de julio de 2011, no obstante se trata de una cuestión irrelevante, pues independientemente de su denominación, es el sistema que aconseja el informe psico-social, en base precisamente a la edad del menor (hasta que cumpla tres años) fijándose un verdadero sistema alterno o compartido de estancias, a partir de que el menor alcance tres años, cuestión que por otro lado prevee el artículo 79,5 del Código de Derecho Foral de Aragón, procede en conclusión confirmar íntegramente la Sentencia apelada.”

***** Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 20 de marzo de 2012. Custodia compartida. Régimen de visitas**

"PRIMERO.- Frente a la sentencia de instancia, que desestima la demanda de modificación de medidas instada por el padre, se alza este, que pide se revoque la sentencia dictada y se dicte otra por la que se estime la guarda y custodia compartida de la menor y se apruebe el Plan de Relaciones Familiares propuesto con el escrito de demanda, y subsidiariamente, de no estimarse la petición principal, se establezca a) que la menor podrá permanecer y estar con su padre los martes y jueves desde que termine sus obligaciones escolares hasta el siguiente día, en el que será reintegrada al centro escolar donde lleve a cabo sus estudios. B) que asimismo podrá permanecer y estar con su padre los fines de semana alternos, desde que termine sus obligaciones escolares los viernes hasta el lunes por la mañana, que será reintegrada al centro escolar donde curse sus estudios.

SEGUNDO.- A falta de acuerdo entre los padres, el legislador aragonés establece como preferente el régimen de guarda y custodia compartida, y así, el apartado 2 del 80.2 del CDFA dispone que "El Juez adoptará de forma preferente la custodia compartida en interés de los hijos menores, salvo que la custodia individual sea más conveniente, teniendo en cuenta el plan de relaciones familiares que deberá presentar cada uno de los progenitores y atendiendo, además, a los factores que el precepto enumera, habiendo establecido el TSJA como criterios exegéticos en la interpretación de los preceptos de la Ley 2/2010, hoy incorporados al CDFA: a) Que la custodia compartida por parte de ambos progenitores es el régimen preferente y predeterminado por el legislador, en busca del interés del menor en orden al mejor desarrollo de la personalidad, de modo que aplicará esta forma de custodia siempre que el padre y la madre estén capacitados para el ejercicio de las facultad necesarias a tal fin (STSJA 30-9-11): b) Que el sistema no es rígido, salvo en un mandato que dirige al Juez: el superior interés de menor (STJA 13-7-11); c) Que podrá establecerse el sistema de custodia individual cuando este resulte mas conveniente para dicho interés, a cuyos efectos habrá de evaluar los parámetros establecidos en el art 80.2 del Código (sentencias citadas y la de 15 diciembre 2011); d) Que la adopción de la custodia individual exigirá una atenta valoración de la prueba que así lo acredite –la conveniencia para el menor- frente al criterio preferente de la custodia compartida, al que el precepto legal otorga tal preferencia en interés de los hijos menores (STSJA 15-12-11). e) Que para adoptar la decisión, en cada caso, será relevante la prueba practicada, especialmente los informes psicosociales –art 80.3 CDFA- obrante en autos, y la opinión de los hijos menores cuando tengan suficiente juicio –art 80.2 c) CDFA)-.

TERCERO.- Alega el recurrente que el Juez de instancia se aparta del carácter preferente de la custodia compartida, justificando su denegación con base en el informe de la Psicóloga cuando este se circunscribe a periodos anteriores de la relación con la menor que venían recogidos en el Convenio regulador que se trata de modificar, lo que así debe hacerse, en el sentido pretendido por él, al tratarse de dos progenitores que tienen similares características y tener él legitimo derecho a acceder ese sistema en aplicación del principio de igualdad (art 14 de la C.E.). Y se dice también que las posibilidades de conciliación de la vida familiar y laboral de uno y otro son similares, incluso mejor, mas favorables, las suyas –autónomo y con mas familiares disponibles que pueden salvar su eventual falta de disponibilidad horaria- pudiendo atender con preferencia sobre su ex pareja la organización de la vida cotidiana de la menor, evitando que la demandada deba acudir a subterfugios horarios para aparentar una dedicación absoluta a la menor cuando la realidad de su vida laboral se ve impedida para ello por su horario de trabajo –trabaja en C/-- y vive en Casablanca- y debe ser sustituida por los abuelos maternos en algunas rutinas cotidianas.

Actor y demandada tuvieron una relación sentimental que acabó a finales de 2008, habiendo tenido una hija, J, nacida el 29-8-06. Desde la separación de sus padres ha vivido con su madre y abuelos maternos, teniendo con su padre el régimen de visitas señalado en el convenio regulador firmado el 12–11-08. Esta escolarizada en el Colegio , donde cursa 3º de Educación Infantil. Se encuentra bien adaptada a su entorno y circunstancias actuales, y tiene adecuadamente satisfechas sus necesidades, a nivel emocional, educativo y de crianza. Mantiene buenas relaciones con los miembros de su entorno familiar, materno y patero, encontrándose especialmente unida a la madre y entorno familiar materno, quien representa para ella la principal figura de su mundo afectivo y ha sido quien le ha proporcionado la seguridad y estabilidad que ha requerido en su desarrollo psicoevolutivo. Conserva una imagen positiva de ambos progenitores, no habiéndose puesto de manifiesto en la menor deseos de establecer modificaciones en sus condiciones cotidianas de vida, estando contenta con la forma y modo de distribución del tiempo entre ambos.

D. Iñigo vive solo; es socio de una empresa del sector de la construcción y reformas, con un horario que adapta a sus necesidades personales y laborales; y de su discurso y actitud general del Sr. se desprende interés por poder relacionarse con su hija de forma frecuente y ser participe de su desarrollo, crianza y educación. La demandada, por su parte, vive con su hija en el domicilio de sus padres. Trabaja como responsable comercial en una promotora inmobiliario, con una jornada laboral de 9,30 a 14 horas y de 16,30 a 20 horas, de lunes a jueves y los vienes en horario de mañana. Lleva a su hija al colegio

todos los días por la mañana y por la tarde, siendo recogida por la mañana y por la tarde por los abuelos maternos, con los que residen madre e hija, a excepción de los miércoles, que acude el padre, y de los viernes, que acude la madre. Cuenta, como se dice, con la ayuda y colaboración de sus padres, abuelos maternos de la menor, que por las tardes permanecen con la niña mientras la demandada esta trabajando.

La Psicóloga informa haber detectado en los padres un cierto viven de distorsión motivacional, así como una actitud de rigidez en su discurso y solicitudes respectivas. Y destaca como los dos reconocen la falta de comunicación existente y la tensión y conflictividad por la que atraviesan, indicando la conveniencia de una flexibilización de posturas y de que acudieran a la vía del dialogo, sobre todo de cara al buen desarrollo de la menor, debiendo ser conscientes de lo beneficioso que seria para esta que pudieran llegar a establecer de común acuerdo las medidas relativas a la misma, en cuyo sentido dice la psicóloga que la solicitud de que la menor permanezca en periodos semestrales alternos con cada uno de sus progenitores responde mas a las necesidades deseos y formas de estructuración del tiempo de los adultos que a los deseos y necesidades de la propia niña, sin que el sistema pretendido por el padre resulte la mejor opción de reparto y organización del tiempo de la menor "dadas las actuales circunstancias", pudiendo encontrarse otras formas de incrementar la relación cotidiana de J con cada uno de sus progenitores que no supongan para ella la introducción de importantes modificaciones en sus condiciones previas de vida, detectándose en el actor en el ejercicio de sus derechos de igualdad como progenitor que en adoptar medidas tendentes a soluciona necesidades detectadas en la hija. Concluyendo, en base a todo lo expuesto, con la recomendación de que la menor permanezca con su madre los periodos lectivos entre semana, exceptuadas dos tardes, desde la salida del colegio hasta las 20.30 horas, mas aquellas que aconseja desde el momento en que la disponibilidad laboral del padre los permita, compartiendo el tiempo restante de fines de semana desde la salida del colegio los viernes hasta el domingo a las 21 horas, y mitad de los periodos vacacionales, dividido el verano por quincenas.

La prueba practicada, evaluada a la luz del art 80.2. CDFA, muestra, en suma, que es la custodia individual a favor de la madre la medida que se revela más adecuada para preservar el superior interés de la hija común, designio al que debe ajustarse toda decisión, resolución o medida que afecte a los menores (art 76 CDFA). No es cierto, por lo demás, que el informe de la Psicóloga se circunscriba a los periodos anteriores que dice el recurrente, pues es el momento actual el que en el mismo se valora. Y siendo similares en ambos las posibilidades de conciliación de la vida familiar y laboral, lo decisivo es que los medios a disposición son suficientes, al margen de que uno tenga más o menos

que el otro. Lo que debe llevar a confirmar hasta este punto la resolución recurrida, que únicamente se revoca en el sentido de que los fines de semana alternos que se señalan a favor del padre se iniciaran los viernes a la salida del colegio, desestimándose, por el contrario, la extensión hasta el día siguiente, a la entrada del colegio, de las tardes entre semana, y la de los fines de semana alternos hasta el mismo momento los lunes.”

***** Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 20 de marzo de 2012. Extinción de pensión alimenticia a hijo mayor de edad. Situación mental del alimentista**

"PRIMERO.- Recurre la parte demandada la Sentencia dictada en la instancia, suplicando su revocación y se mantenga la pensión alimenticia de Adrián, por entender que el ejercicio inadecuado de la autoridad familiar por parte de su padre y aquí actor ha contribuido a la persistencia de la situación mental del mismo, debiendo mantenerse dicha pensión hasta que por el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, se acredite su mejoría para su acceso a un empleo en igualdad de condiciones respecto de una persona sin sus deficiencias.

SEGUNDO.- El padre de Adrián, nacido éste , de 24 años de edad, solicita en su demanda, presentada en enero de 2011, la extinción de su pensión alimenticia, alegando que, estando ya formado profesionalmente, su mala conducta o falta de aplicación en el trabajo, no pueden obligar al progenitor a pagarle indefinidamente alimentos.

Adrián fue diagnosticado en el año 2004 de Trastorno por Déficit de Atención, trastorno de conducta y depresión (f. 125 y 126 de las actuaciones), por el Servicio de Neurofisiología del Hospital Miguel Servet de Zaragoza, negándose el mismo a acudir a la consulta y a recibir tratamiento farmacológico, hasta marzo de 2010 en que inició tratamiento en dicho Servicio, el que sigue en la actualidad, con administración de Rubifen y Risperdal, destinado a mejorar su capacidad de atención y a reducir los episodios de impulsividad que le aquejan.

El psiquiatra del Centro Municipal de Salud Mental del Ayuntamiento de Zaragoza ha informado en febrero de 2011, haber atendido a Adrián entre Julio de 2004 y mayo de 2006, especialmente a su madre, señalando la concurrencia de un fallo de la función paterna, con falta de implicación y colaboración en sus obligaciones de protección y encauzamiento del hijo, el que ha presentado dificultades psicológicas, familiares y sociales que han retrasado su evolución y autonomía en el desarrollo de sus capacidades en orden a su inserción social y autonomía económica.

En la Sentencia de 10-12-07 dictada en proceso de Modificación de Medidas promovido por el padre, para suprimir su pensión alimenticia, el hijo trabajaba entonces de electricista, cobrando 859,70 euros al mes, en un contrato temporal, teniendo entonces cotizados 95 días.

Consta acreditado en este proceso, que Adrián ha venido trabajando desde Abril de 2007 hasta Mayo de 2008, mediante ocho contratos con carácter temporal (folio 38 y siguientes), desde julio de 2008 a septiembre de 2009, con tres contratos temporales, habiendo causado baja voluntaria en el último

contrato de marzo de 2011, con la empresa N S.L., razón al parecer por la que no cobra prestación por desempleo.

También consta la realización por Adrián de diferentes cursos de promoción y formación laboral durante estos años, el último de Almacenero en 2011, de 100 horas (otro de chapista y pintor de vehículos, de electricidad, etc.).

TERCERO.- Los hechos relatados evidencian una actividad ciertamente diligente por parte de Adrián en la búsqueda de empleo y en la realización de programas de formación laboral, dirigidos a la obtención de su autonomía economica, desde finales de 2007, y ello pese a los antecedentes psicológicos que le fueron diagnosticados.

Es cierto que no se ha revelado una actuación del padre favorecedora de la inserción social y laboral de Adrián, ni de su estabilización personal. Sin embargo, también lo es que dicha actitud no puede estimarse como determinante del retraso en su desarrollo personal, motivado esencialmente por el trastorno que padece.

El doctor que ha depuesto en el plenario ha señalado que dicho trastorno no desaparece pero mejora con el tratamiento, y es de esperar que siguiéndolo ahora Adrián sus problemas disminuyan. Consta en esta alzada petición fechada en Octubre de 2011 ante el I.A.S.S. de reconocimiento de discapacidad psíquica en Adrián, declarada en un 15% en diciembre de 2011, y que carece ahora de trabajo e ingresos.

En sede de proceso matrimonial, debe valorarse la concurrencia de necesidad en los hijos en relación con los medios o recursos del progenitor obligado a prestar alimentos.

En atención a todo lo hasta ahora expuesto, debe concluirse en que Adrián lleva desde finales de 2007 trabajando de forma temporal, y realizando cursos de formación profesional, careciendo desde marzo del pasado año de trabajo y recursos.

La economía de la madre es precaria, 426 euros al mes.

En estas condiciones, no siendo independiente el hijo, pese a su mayoría de edad, atendiendo a que sus dolencias han podido constituir un importante obstáculo para su inserción laboral y valorando su diligente actitud dirigida a la misma, apreciándose la situación de necesidad invocada, procede, conforme a lo dispuesto en el art. 82 del C. de Derecho Foral, mantener la pensión alimenticia estipulada hasta que Adrián cumpla los 26 años de edad, sin perjuicio de la modificación de dicha medida si cambiasen las circunstancias concurrentes.”

***** Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 21 de marzo de 2012. Extinción de pensión alimenticia para hijos mayores de edad convivientes. Autonomía económica y formación profesional necesaria. Ejercicio de pretensión en proceso independiente. Voto particular**

"PRIMERO.- Resulta acreditado en las instancias procesales que D. N S M y Dª. Mª S M R contrajeron matrimonio canónico en el Consulado de España en Düsseldorf (Alemania) el 18 de diciembre de 1976. De dicha unión nacieron y viven dos hijos, D S M, nacido en 1980, y R S M, nacido en 1989.

En fecha 20 de mayo de 1998, el Juzgado de Primera Instancia número Cinco de Zaragoza, con competencia en materia de familia, dictó sentencia en Autos de Divorcio 95/98, por la que declaró la disolución por divorcio del citado matrimonio, manteniendo los efectos fijados en la sentencia de separación de fecha 1 de marzo de 1996. Entre dichos acuerdos se atribuyó a la Sra. M R la guarda y custodia de los hijos y el uso del piso que fue domicilio familiar, fijándose un régimen de visitas a favor del padre. Se estableció que éste deberá entregar a su esposa 75.000 pesetas mensuales en concepto de pensión por alimentos para los hijos. Estas medidas fueron modificadas por sentencia de 6 de septiembre de 2000, recaída en Autos de Modificación de Medidas 190/2000, aumentándose la pensión de alimentos para cada hijo.

La representación de D. N S M ha instado en los presentes autos la modificación de medidas de divorcio, invocando el tiempo transcurrido y la mayoría de edad de los hijos, que han finalizado sus estudios y han tenido acceso al mercado laboral, y solicita se dejen sin efecto las medidas relativas a la guarda y custodia y régimen de visitas de los hijos, la pensión de alimentos fijada en su día a favor de éstos, y la atribución a la esposa e hijos del uso del domicilio familiar.

La sentencia de primera instancia estima parcialmente la demanda de modificación de medidas. Respecto del hijo R, acuerda que el actor seguirá obligado a satisfacer la pensión alimenticia, la cual quedará en suspenso "mientras el hijo continúe realizando actividad laboral que genere unos ingresos líquidos mensuales no inferiores al salario mínimo interprofesional (o prestación por desempleo en las mismas condiciones)". Funda esta decisión en lo siguiente:

Rubén está trabajando con ingresos no desdeñables, si bien con un contrato temporal que vencerá el próximo diciembre. Una interpretación actual y conjunta de los arts. 143, 146 y 152.3 del Código Civil y 66 de la Ley de Derecho de la Persona, que ampare todos los intereses en juego, permite concluir que no concurre causa de extinción de la pensión. El hijo cuenta con 21 años y su trabajo es temporal; está consolidando su incorporación al mercado laboral

en un periodo ciertamente convulso y complicado. Por tanto, se va a fijar un sistema flexible y leal de suspensión del pago de la pensión.
Recurrida dicha sentencia en apelación por ambas partes, la sentencia de la Audiencia Provincial de 26 de julio de 2011 estima parcialmente el recurso interpuesto por los demandados y desestima la impugnación de D. N S M. Respecto a su solicitud de que fuera suprimida la pensión respecto del hijo R, la fundamentación jurídica señala lo siguiente:
*Debe rechazarse la supresión de la pensión de R pretendida por el actor impugnante pretende (*sic*), pues sus contratos han sido temporales, tiene 21 años y su ingreso en el mercado laboral no puede entenderse consolidada, situación en la que resulta más adecuada la suspensión acordada en la instancia.*

SEGUNDO.- El recurso de casación se funda en un único motivo, que invoca la infracción de lo dispuesto en el art. 66 de la Ley aragonesa 2/2010, de 26 de mayo, de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de la convivencia de los padres, actualmente art. 69 del Código del Derecho Foral de Aragón (en lo sucesivo CDFA), y 93, 142 y 152.3 del Código Civil, así como la infracción de la doctrina jurisprudencial relativa a los mismos, citando la sentencia del Tribunal Superior de Justicia núm. 8/2009 de 2 de septiembre. El indicado precepto del CDFA proviene realmente de la Ley 13/2006, de Derecho de la persona, y expresa que *1.- Si al llegar a la mayoría de edad o emancipación el hijo no hubiera completado su formación profesional y no tuviera recursos propios para sufragar los gastos de crianza y educación, se mantendrá el deber de los padres de costearlos, pero solo en la medida en que sea razonable exigirles aún su cumplimiento y por el tiempo normalmente requerido para que aquélla formación se complete. 2.- El deber a que se refiere el apartado anterior se extinguirá al cumplir el hijo los veintiséis años, a no ser que, convencional o judicialmente, se hubiere fijado una edad distinta, sin perjuicio del derecho del hijo a reclamar alimentos.*
En el desarrollo del motivo la parte recurrente expresa que la sentencia de la Audiencia Provincial ha infringido los preceptos legales citados y la doctrina jurisprudencial de este Tribunal sobre el art. 69 antes referenciado. Explica que el hijo R –al que se contrae el objeto del recurso- ha completado su formación, accediendo al mundo laboral, con contratos de trabajo sucesivos, aunque de carácter temporal. Concluye sosteniendo que con el mantenimiento de la pensión se vulneran los preceptos legales referidos y se favorece la pasividad vital del hijo.

TERCERO.- Es de significar que la sentencia impugnada, al rechazar el recurso del demandante respecto a su pretensión de que fuera suprimida la pensión reconocida a favor del hijo R, no expresa la razón jurídica en que apoya el mantenimiento de dicha prestación. La sucinta argumentación que ofrece, y

que ha sido transcrita precedentemente, no cita precepto legal en el que fundar la obligación de que el demandante continúe siendo deudor de la prestación económica. Puede entenderse que, al confirmar la de primera instancia, acoge el apoyo normativo de ésta aunque, según se ha expuesto, la decisión adoptada por el juzgado se funda en la "interpretación actual y conjunta" de varios preceptos del Código Civil y del art. 66 de la Ley aragonesa de Derecho de la persona.

Ante ello, para la decisión del recurso resulta necesario determinar: a) si resulta de aplicación al caso el art. 69 del CDFA; b) caso de que se estime no ser de aplicación, si otros preceptos legales habilitan la obligación de pago de la pensión, que pesa sobre el actor, y c) si el hijo mayor de edad está obligado a ejercitar la pretensión de alimentos frente a su progenitor, en procedimiento judicial independiente del juicio de divorcio en cuya sede nos hallamos.

CUARTO.- El artículo 69 del CDFA procede, según hemos visto, del articulado de la Ley aragonesa 13/2006, de 27 de diciembre, de Derecho de la persona.

Dentro del capítulo destinado a regular el deber de crianza y autoridad familiar respecto de los hijos, el artículo 66 de dicha Ley fijaba los gastos de los hijos mayores o emancipados, en los términos que se han trascrito en el fundamento jurídico segundo de esta sentencia. En aplicación de dicha norma, esta Sala ha tenido ocasión de pronunciarse a través de distintas resoluciones.

La sentencia nº 8/2009, de 2 de septiembre, afirma: *El derecho aragonés no contiene una regulación completa de la obligación de alimentos. No obstante, el referido artículo 66.1, en sede del deber de crianza y autoridad familiar, contempla el supuesto en el que el deber de los padres de sufragar los gastos de crianza y educación pervive a pesar de que el hijo haya alcanzado la mayoría de edad o emancipación y siempre que concurra la circunstancia indicada en el inciso final de la regla: que sea razonable exigirles aún su cumplimiento y por el tiempo normalmente requerido para que aquella formación se complete. Y el supuesto de hecho allí previsto es, en efecto, que dicho hijo no hubiera completado su formación profesional y no tuviera recursos propios para sufragar los gastos. El precepto pretende así, dar respuesta a los problemas que en la práctica plantea la situación de los hijos ya mayores de edad pero que carecen de autonomía económica y de la formación profesional necesaria para conseguirla.*

Por tanto, la obligación de alimentos que la sentencia dictada en el proceso de separación impuso al padre, aun cuando no se extinga automáticamente por el hecho de haber alcanzado la hija la mayoría de edad, no es ni puede ser por tiempo indefinido, sino sólo en tanto concurran las antedichas circunstancias en las que se justifica la prolongación del deber de crianza y educación. Otra cosa sería favorecer una situación vital pasiva que puede devenir -utilizando una expresión del Tribunal Supremo- en un "parasitismo social". Por eso, esa duración hasta los 26 años que menciona el párrafo segundo de la norma cuya

infracción se denuncia (y en el que se apoya la parte recurrida en su escrito de oposición) sólo tendrá lugar cuando el hijo que no ha terminado su formación mantenga una actitud diligente, porque de lo contrario deja de ser razonable exigir a los padres sufragar sus gastos. En el caso allí contemplado se trataba de una joven que optó a los 16 años por dar por completada su formación, con lo que voluntariamente se colocaba en disposición de poder trabajar en aquellas ocupaciones a las que puede accederse desde dicha preparación. Y según apreció la juzgadora de primera instancia, desaprovechó las oportunidades que tuvo de hacerlo. Así las cosas, por un lado no estaba en la situación de tener que completar su formación; por otro lado la falta de recursos le era imputable. En consecuencia, esta Sala estimó el recurso de casación y, anulando la sentencia de la Audiencia, confirmó el fallo recaído en primera instancia, que había estimado la demanda del padre.

La sentencia nº 11/2011, de 30 de noviembre, citando la de 2 de septiembre de 2009, expresó que *aún cuando el derecho aragonés no contiene una regulación completa de la obligación de alimentos, sin embargo sí prevé con concreción el deber de crianza y educación, en sede del deber general de crianza y autoridad familiar respecto de los hijos.* Tras invocar el contenido del Preámbulo de la propia Ley 13/2006, afirmaba que *la excepcionalidad de la previsión contenida en el art. 66... se concreta en la exigencia concurrente de dos circunstancias para que se mantenga el deber de los padres de sufragar gastos de enseñanza y educación de los hijos más allá de la mayoría de edad: Que no haya completado el descendiente su formación, y que no tenga recursos propios.* En el caso allí examinado, dado que las dos hijas mayores de edad habían terminado, con buen resultado académico, las licenciaturas universitarias, se desestimaba la pretensión de exigir a uno de los progenitores el pago de los gastos de preparación de oposiciones o de especialización.

La sentencia 15/2011, de 30 de diciembre, aborda igualmente la problemática de aplicación de este precepto, indicando que *esta Sala ya ha señalado (Sentencias de 2 de septiembre de 2009, 12 de mayo de 2010 y 30 de noviembre de 2011), conforme a lo dispuesto en el art. 66 de la Ley 13/2006 (art. 69 CDFA), el carácter excepcional del deber de los padres de costear los gastos de crianza y educación de los hijos tras su mayoría de edad o emancipación.* En atención a esta excepcionalidad, la realización de unos segundos estudios para una nueva capacitación profesional, diferente de la primera y de mayor nivel, aún iniciada con el consentimiento del padre recurrente, no había de significar una obligación jurídica de éste hasta la independencia económica de la hija, de modo que no se imponía al recurrente más allá del límite de su finalización en el tiempo razonablemente requerido o, como límite final, en la edad de los veintiséis años.

QUINTO.- En el caso de autos es hecho declarado probado en las instancias que el hijo R, nacido en 1989, se incorporó al mercado de trabajo en julio de

2007. En el año 2008 tuvo un contrato de trabajo cuyos efectos se extendieron en un total de 152 días (de abril a septiembre de ese año). Realizó trabajos remunerados durante el año 2009 que le aportaron unos ingresos brutos de 931 €. Durante el año 2010, con siete contratos suscritos con una empresa de trabajo temporal, trabajó 71 días entre los meses de enero y mayo.

No se trata, por lo tanto, de persona que esté completando su formación profesional, ya que ésta se dio por concluida cuando, cumplidos los dieciocho años, se incorporó al mercado laboral. Aunque las normas han de ser aplicadas conforme a la realidad social del momento, ni siquiera una interpretación extensiva del precepto puede llevarnos a considerar que el caso de R se integra en el supuesto de hecho de la norma. Su formación profesional se dio por concluida en el momento de incorporarse al mundo del trabajo, y no aparece -ni se invoca como razón para sustentar la continuidad de las medidas acordadas en la sentencia de divorcio- que el referido joven no hubiera completado su formación profesional.

De los diversos conceptos en que la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 estimaba que podía producirse una infracción legal -por inaplicación, interpretación errónea o aplicación indebida-, y que actualmente deben considerarse implícitamente recogidos en el art. 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en ninguno de ellos puede incluirse la infracción denunciada. Lo cierto es que, como antes hemos expuesto, la Audiencia Provincial no expresa en su fundamentación jurídica relativa a este punto, que se contiene en el segundo párrafo del segundo fundamento de derecho, cuál sea la norma que habilita el mantenimiento de la prestación. Pero no se ha producido una aplicación indebida del citado art. 69 del CDFA, ni tampoco interpretación errónea del mismo. Y, por supuesto, no existe infracción por inaplicación, que sólo se daría si, resultando aplicable al caso, hubiera sido ignorado por el tribunal *a quo*.

SEXTO.- La Sala debe examinar si existe otro título legal, distinto del comprendido en el precepto antes citado, que permita atribuir al progenitor recurrente la obligación de continuar abonando la cantidad en concepto de pensión de alimentos para el hijo R, único al que se contrae el recurso.

Esta obligación fue establecida por la sentencia de separación matrimonial, de 1 de marzo de 1996, posteriormente confirmada en la de divorcio de 20 de mayo de 1998, y modificada por la sentencia de la Audiencia Provincial de 6 de noviembre de 2001, en autos de modificación de medidas. La resolución tiene apoyo legal en el artículo 93 del Código Civil, conforme al cual *El Juez, en todo caso, determinará la contribución de cada progenitor para satisfacer los alimentos y adoptará las medidas convenientes para asegurar la efectividad y acomodación de las prestaciones a las circunstancias económicas y necesidades de los hijos en cada momento.*

Si convivieran en el domicilio familiar hijos mayores de edad o emancipados que carecieran de ingresos propios, el Juez, en la misma resolución, fijará los

alimentos que sean debidos conforme a los arts. 142 y siguientes de este Código.

El artículo 152 del Código Civil, cuando prevé las causas de extinción de la obligación de dar alimentos, establece que este débito se extingue *3º) Cuando el alimentista pueda ejercer un oficio, profesión o industria, o haya adquirido un destino o mejorado de fortuna, de suerte que no le sea necesaria la pensión alimenticia para su subsistencia*.

En el caso de autos no puede sostenerse que la obligación del padre de satisfacer alimentos al hijo R se haya extinguido. La sentencia recurrida, confirmando la de primera instancia, mantiene una obligación de alimentos flexible y atemperada a las circunstancias concurrentes, de modo que Don N sigue estando obligado al pago de la pensión alimenticia a R, pero cuya efectividad se suspende mientras el hijo continúe realizando una actividad laboral que genere unos ingresos líquidos mensuales no inferiores al salario mínimo interprofesional, o prestación por desempleo en las mismas condiciones. Los hechos que se estiman probados no evidencian falta de diligencia en la búsqueda de trabajo por parte del hijo, sino más bien al contrario. Si las cosas fueran de otro modo, siempre podría el padre alimentante pedir que se declarase la extinción de su obligación por ser imputable al alimentista la situación de necesidad.

SÉPTIMO.- La medida de fijación de la pensión alimenticia en favor del hijo tiene cabida procesal en la sentencia de divorcio, conforme al artículo 93, párrafo segundo, del Código Civil.

La STS 411/2000, de 24 de abril, al abordar la interpretación de este precepto, establece que *Por consecuencia de la ruptura matrimonial el núcleo familiar se escinde, surgiendo una o dos familias monoparentales compuestas por cada progenitor y los hijos que con él quedan conviviendo, sean o no mayores de edad; en esas familias monoparentales, las funciones de dirección y organización de la vida familiar en todos sus aspectos corresponde al progenitor, que si ha de contribuir a satisfacer los alimentos de los hijos mayores de edad que con él conviven, tiene un interés legitimo, jurídicamente digno de protección, a demandar del otro progenitor su contribución a esos alimentos de los hijos mayores. No puede olvidarse que la posibilidad que establece el art. 93, párrafo 2 del Código Civil de adoptar en la sentencia que recaiga en estos procedimientos matrimoniales, medidas atinentes a los alimentos de los hijos mayores de edad se fundamenta, no en el indudable derecho de esos hijos a exigirlos de sus padres, sino en la situación de convivencia en que se hallan respecto a uno de los progenitores, convivencia que no puede entenderse como el simple hecho de morar en la misma vivienda, sino que se trata de una convivencia familiar en el más estricto sentido del término con lo que la misma comporta entre las personas que la integran.*

En expresión de la STS 1222/2007, de 28 de noviembre, *esta norma permite al juez fijar o a los cónyuges acordar en el convenio regulador, las cantidades que se deberían a los mayores que convivieran y carezcan de ingresos propios. Esta es una norma que evita litigios posteriores.*

Aunque en este último caso la Sentencia estimó no aplicable dicho precepto, en atención a los hechos de aquellos autos, es lo cierto que de dicha doctrina jurisprudencial puede desprenderse una doctrina, aplicable al caso presente: Cuando se produce el divorcio de los cónyuges, y surge una nueva familia monoparental en la que uno de los progenitores queda en el domicilio antes familiar conviviendo con los hijos, puede el Juez fijar los alimentos que sean debidos para los hijos mayores de edad. Aunque en este caso en la fecha de la disolución del vínculo matrimonial el hijo Rubén todavía era menor, al mantenerse la situación de convivencia con posterioridad y uso del domicilio –que en este caso se ha acordado prolongar hasta el 1 de diciembre de 2014- la norma habilita para decidir, en el propio proceso de divorcio, la citada pensión alimenticia.

Sólo en el caso en que proceda la extinción del derecho de alimentos, en los términos prevenidos en el artículo 152 del Código Civil antes examinado, cesará la efectividad de ese derecho del hijo. A partir de ese momento, si surge *ex novo* una situación de necesidad que da derecho a la prestación alimenticia, el propio hijo podrá reclamarla conforme a los artículos 142 y siguientes del Código Civil.

Pero como ese supuesto no se ha producido en el caso de autos, por las razones ya expresadas en el anterior fundamento jurídico, el recurso de casación ha de ser desestimado."

"**VOTO PARTICULAR** que formula el Magistrado Ilmo. Sr. D. Luis Ignacio Pastor Eixarch.

El Magistrado que suscribe formula el siguiente voto particular, sin perjuicio del pleno respeto a la decisión mayoritaria de la Sala, respecto de la sentencia dictada el día 21 de marzo de 2012 en recurso de casación número 32/2011, y al amparo de lo establecido en los artículos 260 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 205 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. No existe disconformidad alguna con lo recogido en los Antecedentes de Hecho y los Fundamentos de Derecho Primero y Segundo de la citada resolución. Se discrepa, sin embargo del resto, así como del fallo, que se considera debió ser íntegramente estimatorio del recurso interpuesto, por los fundamentos jurídicos que a continuación se exponen.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El recurso de casación presentado por Don N plantea de nuevo ante esta Sala la cuestión jurídica del alcance que, por aplicación de la normativa propia de Aragón, debe atribuirse a la regulación contenida en el artículo 66 de la Ley de Aragón 13/2006, de 27 de diciembre, de Derecho de la Persona, luego traspuesto con idéntica regulación al artículo 69 del Código de Derecho Foral de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo del Gobierno de Aragón 1/2011, de 22 de marzo, sobre obligación de los padres de costear los gastos crianza y educación de los hijos cuanto éstos alcanzan la mayoría de edad o están emancipados por otra causa.

El artículo 69 del Código citado (CDFA en adelante), específicamente respecto de las obligaciones de los titulares de la autoridad familiar de continuar el sostenimiento de sus hijos mayores de edad o emancipados, prevé literalmente:

"Artículo 69.- Gastos de los hijos mayores o emancipados.

1. Si al llegar a la mayoría de edad o emancipación el hijo no hubiera completado su formación profesional o no tuviera recursos propios para sufragar los gastos de crianza y educación, se mantendrá el deber de los padres de costearlos pero solo en la medida en la que sea razonable exigirles aún su cumplimiento y por el tiempo normalmente requerido para que aquella formación se complete.

2. El deber al que se refiere el apartado anterior se extinguirá al cumplir el hijo los veintiséis años, a no ser que, convencional o judicialmente, se hubiera fijado una edad distinta, sin perjuicio del derecho del hijo a reclamar alimentos".

En caso de situaciones de crisis del matrimonio o ruptura de convivencia de los progenitores, el artículo 82 del CDFA (cuyo antecedente de contenido idéntico es el artículo 8 de la Ley de Aragón 2/2010, de 26 de mayo, de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de los padres) no establece especialidad alguna respecto del artículo 69, pues reafirma la obligación de contribución de los padres a satisfacer los gastos de asistencia de los hijos que estén a su cargos. En los siguientes términos:

"Artículo 82 – Gastos de asistencia a los hijos.

1. Tras la ruptura de la convivencia de los padres, ambos contribuirán proporcionalmente con sus recursos económicos a satisfacer los gastos de asistencia de los hijos a su cargo.

2. La contribución de los progenitores a los gastos ordinarios de asistencia a los hijos se determinarán por el Juez en función de las necesidades de los hijos, de sus recursos y de los recursos económicos disponibles por los padres.

3. El Juez asignará a los padres la realización compartida o separada de los gastos ordinarios de los hijos teniendo en cuenta el régimen de custodia, y si es necesario fijará un pago periódico entre los mismos.

4. Los gastos extraordinarios necesarios de los hijos serán sufragados por los progenitores en proporción a sus recursos económicos disponibles. Los gastos extraordinarios no necesarios se abonarán en función de los acuerdos a los que lleguen los progenitores y, en defecto de acuerdo, los abonará el progenitor que haya decidido la realización del gasto".

Estas normas aplicables en Aragón (a las que en adelante se hará referencia por su numeración en el CDFA), difieren de las establecidas para semejantes materias en el Código Civil (CC en lo sucesivo).

SEGUNDO.- En Aragón, en los casos previstos en el artículo 69 CDFA, las obligaciones de contribución a los gastos de crianza y educación derivadas de la autoridad familiar se mantienen plenamente vigentes aunque el hijo alcance la mayoría de edad o esté emancipado, sin necesidad de acudir al régimen general de prestación de alimentos, y sin que cambie tal régimen en el supuesto regulado en el artículo 82, de que exista ruptura de la convivencia de los padres. En consecuencia, bien se mantenga la convivencia entre los padres, bien se produzca su término, cualquier progenitor está directa y legalmente legitimado, para reclamar del otro los gastos propios de sostenimiento de los hijos, en su condición de titular de la autoridad familiar mantenida.

Como sucede en otra instituciones de gran relevancia (mayoría de edad, facultades del menor de edad, resolución de conflictos familiares, usufructo vidual, derecho sucesorio familiar,...etc) también en las previsiones relativas a posible mantenimiento de la autoridad familiar o patria potestad el CDFA y el CC difieren, históricamente y en su regulación actual: no existe norma de contenido semejante al artículo 69 del CDFA en el CC. La prórroga de la patria potestad en el CC sólo se prevé en el artículo 171, y exclusivamente para los casos de declaración de incapacidad de los hijos. Norma muy alejada y no parangonable con el artículo 69 CDFA, que, cuando concurran las circunstancias en él previstas, mantiene los deberes de sostenimiento propios de la autoridad familiar en Aragón respecto de todos los hijos, aun cuando sean capaces y, por tanto, hayan adquirido todos los derechos y deberes propios de haber alcanzado la mayoría de edad o la emancipación.

A salvo de este supuesto de prórroga de la patria potestad del artículo 171, en el CC (artículos 110, 154, 159, 169) la mayoría de edad o emancipación del hijo no declarado incapaz comporta el cese del derecho de alimentos inherente a la patria potestad, lo que supone la necesidad, en tal caso de mayor de edad o emancipado, de acudir para su fijación a la regulación más exigente y rigurosa general de alimentos recogida en los artículos 142 y siguientes del CC. Con la particularidad, para el caso de crisis de la convivencia de los padres, de darse la posibilidad jurisprudencialmente reconocida por el Tribunal Supremo ante la ausencia de previsión legal (así por ejemplo, en la sentencia de 24 de abril de 2000 que se menciona en la sentencia de la que ahora se discrepa) de que al progenitor que debe contribuir a sostener a los hijos y conviva con ellos se le reconozca legitimación, como interesado, para reclamar tales alimentos con base en la previsión del artículo 93 del Código Civil.

De modo que, en coherencia con las diversas regulaciones, es diferente a la del CC la remisión en Aragón a la reclamación por el título de alimentos en general previsto en el artículo 142 del Código Civil. Mientras en el CC la referencia del artículo 93 a este título de reclamación es directa en el caso de hijos mayores convivientes y a cargo del progenitor con el que convivan, en el artículo 69 CDFA la vía de reclamación del artículo 142 del CC pasa a segundo plano, pues, primero, se estará al mantenimiento de las obligaciones derivadas de la autoridad familiar. Y sólo cuando esta prórroga no exista, no proceda, o se extinga, y, por tanto, ya al margen de la relación de autoridad familiar, es cuando deberá acudirse al derecho general de alimentos regulado en el CC. Lo que, en el ámbito procesal conllevará, como literalmente recoge el artículo 69.2 CDFA, que sólo al hijo corresponde la reclamación de alimentos, pues una vez extinguido su derecho como proveniente de la autoridad familiar, y por término de ésta, sus progenitores carecen ya de legitimación como titulares de la autoridad familiar extinta.

TERCERO.- Con independencia de la valoración que pueda recibir la distinta regulación de uno y otro cuerpo legal respecto de las instituciones que tratan, lo que resulta indudable es que, en todo caso, en Aragón, la regulación vigente y de aplicación es la recogida en el CDFA. La cual, debe reseñarse, recoge las obligaciones derivadas de los principios propios de la autoridad familiar de modo coherente y completo, sin lagunas que deban integrarse por aplicación supletoria del CC. Ciertamente, conforme a la previsión general del artículo 13, párrafo primero del CC, el artículo 93 CC es de aplicación directa y general en toda España. Pero ello no es óbice, como resulta del apartado 2 del mismo artículo 13, para que exista pleno respeto a las normas civiles propias de las Comunidades Autónomas que tengan competencia constitucionalmente reconocida en la materia, como ocurre en Aragón en el caso de las leyes antes citadas y en el CDFA, emanados de las instituciones aragonesas, en ejercicio de

su exclusiva competencia en la materia, como recuerda la Exposición de Motivos de la citada Ley 2/2010, de 26 de mayo y la del CDFA, y que son normas vigentes posteriores al artículo 93 CC, y sin tacha de inconstitucionalidad. Por tanto, debe estarse a las previsiones contenidas en los artículos 69 y 82 del CDFA, con exclusión de la posible aplicación del CC, fuera del caso en que la propia normativa de Aragón lo invoca de modo expreso.

CUARTO.- Las anteriores consideraciones y conclusiones sobre legislación aplicable han sido entendidas de igual modo al expuesto en varias ocasiones en sentencia de esta Sala, al resolver sobre reclamaciones de casos de crianza y alimentación por parte de hijos que convivían con uno de los progenitores. En ellas se resolvió la cuestión litigiosa conforme a las previsiones del CDFA, y no del CC.

Y en aplicación del CDFA, se consideró, respecto del fondo de la cuestión, que conforme al art. 69 del vigente Código Aragonés, tanto en situaciones de convivencia de los padres, como en las de su cese a que se refiere el actual artículo 82 CDFA, el referente para entender terminado el mantenimiento de las obligaciones de crianza y educación derivadas de la autoridad familiar es que el hijo haya terminado su formación y, por tanto, esté en condiciones de acceder al puesto de trabajo, y no que el hijo que estuviera a cargo de uno de los progenitores tuviera recursos propios o hubiera obtenido trabajo estable.

Así, desde sentencia de esta Sala de 2 de septiembre de 2009 se ha considerado que el deber de los padres de sufragar los gastos de crianza y educación pervive a pesar de que el hijo haya alcanzado la mayoría de edad o emancipación siempre que "no hubiera completado su formación profesional y no tuviera recursos propios para sufragar los gastos (...) por tanto, la obligación de alimentos (...) no es ni puede ser por tiempo indefinido, sino sólo en tanto concurran las antedichas circunstancias en las que se justifica la prolongación del deber de crianza y educación".

Interpretación que se reafirma en sentencia de 12 de mayo de 2010, en la que, literalmente, se recoge "(...) para que se mantenga la obligación de los padres de costear los gastos de crianza y educación, aun habiendo alcanzado el descendiente la mayoría de edad, es preciso que el hijo no haya completado su formación profesional y, además, que no tenga recursos propios para sufragar, él mismo, tales gastos. El carácter excepcional de esta previsión, respecto de la general de cese de la obligación parental cuando se alcanza la mayoría de edad lo reafirma la propia norma cuando de modo expreso prevé que la carga sobre los padres sólo se mantendrá si es razonable exigir su cumplimiento, y sólo por el tiempo normalmente requerido para que la formación se complete (...)"

En semejante sentido, sentencia de esta Sala de 30 de noviembre de 2011, con referencia a sentencias anteriores, recogió que "(...) la excepcionalidad de la

previsión contenida en el artículo 66 y que luego, ya en el texto de tal precepto, se concreta en la exigencia concurrente de dos circunstancias para que se mantenga el deber de los padres de sufragar gastos de enseñanza y educación de los hijos más allá de la mayoría de edad: que no haya completado el descendiente su formación, y que no tenga recursos propios (...)".

O, en fin, sentencia de 30 de diciembre de 2011: "(...) no resulta ajustado a la previsión de la norma señalar el momento de la independencia económica de los hijos mayores de edad como límite a la obligación de los padres de costear los gastos de crianza y educación, pues dicho límite legal se encuentra en la finalización de la formación profesional en el tiempo normalmente requerido, y no en la independencia económica (...)".

QUINTO.- Por tanto, esta Sala resolvió las cuestiones planteadas similares a la actual conforme al derecho aragonés aplicable y, en cuanto a la cuestión sustantiva, la interpretación hecha reiteradamente del artículo 69 del CDFA se compendia, en lo que ahora interesa, en la consideración de que la extinción de la obligación de los padres de contribución a los gastos de crianza y educación de los hijos mayores de edad o emancipados no tiene como referente el hecho de que éstos tengan independencia económica, sino que la norma fija como momento del término de la obligación el logro por parte de los descendientes de su adecuada formación para el ejercicio de actividad laboral. Mientras la educación se completa, los progenitores deben subvenir al pago de los gastos por la vía de la prórroga de la obligación derivada de la autoridad familiar. Pero una vez que el hijo mayor de edad ha adquirido la necesaria formación cesa esta situación de mantenimiento de las obligaciones de la autoridad familiar, aun cuando no tenga recursos propios.

Y como también resulta de las sentencias citadas, tal interpretación jurisprudencial se ha considerado por esta Sala de aplicación a toda relación entre progenitores e hijos, independientemente de que exista o no ruptura de la convivencia de los padres. De hecho, todas las sentencias referenciadas partían de una situación de crisis matrimonial.

En el caso de autos, sin embargo, la Sala modifica esta doctrina sin explicación específica del cambio de criterio, entendiendo en sus Fundamentos de Derecho Quinto y Sexto que "(...) no existe infracción (del citado artículo 69 CDFA) por inaplicación, que sólo se daría si, resultando aplicable al caso, hubiera sido ignorado por el tribunal a quo". Para luego considerar que "La Sala debe examinar si existe otro título legal distinto del comprendido en el precepto antes citado (el artículo 69 CDFA), que permita atribuir al progenitor recurrente la obligación de continuar abonando la cantidad en concepto de pensión de alimentos (...)". Y termina con la conclusión de ser de aplicación el artículo 93

del Código Civil y, por su referencia, el artículo 142 y 152 del mismo CC, con base en los cuales, finalmente, resuelve la cuestión.

Como cabe deducir de lo considerado hasta ahora, es esta aplicación del CC la que considera incorrecta quien suscribe, porque no debe de excluirse en este caso la aplicación del artículo 69 CDFA, sino que, por el contrario, es esta la norma directamente aplicable al caso presente. Y con los efectos sustantivos derivados de su literalidad.

QUINTO.- Según recoge la resolución de la que se discrepa, la sentencia de divorcio de los cónyuges que son parte en el procedimiento fue dictada el día 20 de mayo de 1998, y mantuvo los efectos de la sentencia de separación dictada el 1 de marzo de 1966. El matrimonio tuvo dos hijos, D, nacido en 1980, y R, nacido en 1989.

Dado que en el presente recurso no se formula petición alguna respecto del hijo D. D, afectado por discapacidad, respecto de la pensión señalada a su favor en la sentencia recurrida queda conformado el recurrente y ningún pronunciamiento procede efectuar.

El segundo hijo, D. R, terminó sus estudios y comenzó a trabajar en julio de 2007, y desde entonces ha tenido varios trabajos remunerados, en 2008, 2009 y 2010. Por tanto, como la propia sentencia indica, no se trata de persona que esté completando su formación profesional, pues ésta se dio por concluida en el momento de incorporarse al mundo del trabajo (año 2007, con 18 años), y no aparece, según recoge la propia sentencia, que el referido joven no hubiera completado su formación profesional.

Partiendo de tales premisas, recogidas en la propia sentencia de que se disiente, la normativa aplicable en Aragón respecto de la posibilidad de continuar las obligaciones derivadas de la autoridad familiar no es el CC, sino, como se expuso, el artículo 69 CDFA y la jurisprudencia sentada en su interpretación por esta Sala de modo reiterado. Y, conforme a ella, como también resulta de lo ya considerado, debe declararse extinguida la obligación de contribución de los padres al sostenimiento del hijo: el hijo, por su propia opción personal, optó por determinada formación profesional, que culminó con éxito y con posibilidades reales de acceder a la actividad laboral, como ha hecho y hace en la actualidad. Por tanto, falta el presupuesto de continuar su formación prevenido en el artículo 69 para mantener la obligación de los progenitores de pago de sus gatos de crianza y educación después de alcanzar la mayoría de edad, y se da sólo parcialmente el de carecer de recursos propios. No está presente así, la concurrencia simultánea de ambos requisitos ni, por tanto, cabe mantener, como hace la sentencia de la Audiencia Provincial recurrida y la

de esta Sala, la prórroga de la obligación del padre de subvenir a su sostenimiento por el título de mantenimiento ininterrumpido de la obligación derivada de la relación que la autoridad familiar establece entre padre e hijos.

No cabe excluir la previsión del artículo 69 CDFA y pasar a considerar de aplicación directa el artículo 93 del CC por el hecho de existir ruptura de la convivencia de los progenitores. Porque, en síntesis de lo ya expuesto, la prórroga de las obligaciones derivadas de la autoridad familiar del artículo 69 CDFA es aplicable en toda relación entre progenitores e hijos, sin distinción alguna derivada del hecho, en el que no intervienen los hijos, de ruptura de convivencia de los padres. Y porque, si se da situación de crisis de convivencia, la regulación de aplicación en Aragón para el supuesto presente, no es el art. 93 CC, sino el artículo 82 del CDFA, en el que la mención "a su cargo" que recoge no cabe dotarla de contenido por referencia a normativa extraña al propio CDFA, sino por la que en él se contiene, y que viene definida por el repetido artículo 69 CDFA.

SEXTO.- Las anteriores conclusiones no cabe considerarlas contrarias a la doctrina sostenida por el Tribunal Supremo en la sentencia de 24 de abril de 2000 recogida, como antes se hizo referencia, en la sentencia de cuyo contenido se discrepa. Porque esta sentencia del TS no trata sobre la cuestión de fondo debatida ahora, sino que limita su pronunciamiento, en el recurso en interés de ley que resuelve, al problema concreto de si el cónyuge que tiene los hijos mayores a su cargo está o no legitimado para accionar en reclamación de alimentos de tales hijos mayores. Cuestión procesal relevante, sin duda, pero no planteada en este procedimiento y que es, en todo caso, accesoria al tema de fondo a resolver, de si procede o no mantener la pensión, con independencia de la cuestión adyacente de quién pueda reclamarla.

Cabe además reseñar, aunque no afecte al tema sustantivo de que se trata ahora, que la cuestión procesal de la legitimación del progenitor custodio para reclamar cuando proceda, no encuentra en el Derecho Aragonés la misma solución que la señalada en tal sentencia del Tribunal Supremo. Porque, si en Aragón se diera la situación recogida en tal sentencia, de que el progenitor que convive con los hijos mayores debe contribuir a satisfacer los alimentos conforme a la legislación aragonesa ya estudiada, la legitimación para reclamar su contribución al otro le correspondería como titular directo de las obligaciones y derechos que para él también derivan de la autoridad familiar mantenida a pesar de la mayoría de edad de los hijos, y no por el título indirecto de tener un interés legítimo reflejo del derecho del que son titulares los hijos.

SÉPTIMO: En consecuencia con lo expuesto, como se adelantó al principio de este Voto Particular, se discrepa con todo respeto de la sentencia de

fecha veintiuno de marzo de 2012 dictada por esta Sala, entendiendo que, en lugar de lo resuelto en ella, por observancia de la normativa aragonesa de aplicación y de la interpretación sostenida por esta misma Sala de modo reiterado, el recurso debió ser estimado, casando la sentencia recurrida en el sentido interesado por el recurrente, de declarar extinguida la pensión de alimentos a favor de D. R S M, derivada de la continuación de los derechos y deberes propios de una autoridad familiar ya extinta, y sin perjuicio del derecho del hijo de poder reclamarlos por otra vía. Todo ello con las consiguientes declaraciones no hacer expresa imposición de costas y devolución al recurrente del depósito constituido.”

***** Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 27 de marzo de 2012. Guarda y custodia. Existencia de proceso penal. Resolución motivada**

"PRIMERO.- La Sentencia recaída en Primera Instancia en el presente procedimiento sobre guarda, custodia y alimentos (art. 770 L.E.C.), es objeto de recurso por la representación de la parte actora (Sra.), que en su apelación (art. 418 L.E.C.) considera que no procede fijar la guarda y custodia compartida al amparo de lo dispuesto en el art. 80.6 del Código de Derecho Foral de Aragón.

SEGUNDO.- El artículo 80.6 del C.D.F.A. establece que no procederá la atribución de la guarda y custodia a uno de los progenitores ni individual ni compartida, cuando esté incurso en un proceso penal iniciado por atender contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro progenitor o de los hijos, y que se haya dictado resolución judicial motivada en que se constaten indicios fundados y razonados de criminalidad. Tampoco procederá cuando el juez advierta de las dejaciones de las partes y las pruebas practicadas la existencia de indicios fundados de violencia doméstica o de género.

La parte apelante en su recurso, alude a sus denuncias penales presentadas en el Juzgado de Guardia contra el recurrido, de cuya suerte procesal ignora, lo que conlleva a rechazar de plano el recurso, pues no consta resolución judicial motivada, ni se deduce de las pruebas practicadas que nos encontremos ante alguno de los supuestos de exclusión legal de la guarda y custodia a uno de los progenitores de la custodia individual o compartida.

Procede la conformación de la Sentencia apelada."

***** Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 30 de marzo de 2012. Reducción de pensión alimenticia. Falta de prueba**

"PRIMERO.- La sentencia de instancia desestima la demanda de modificación de medida interpuesta por el Sr, en la que solicitaba la reducción a 250€ mensuales de la pensión por alimentos que la sentencia que aprobó el convenio regulador del divorcio señaló a favor de su hija en cuantía de 427,70€ mensuales, ascendente a 482,06€ en el momento de interposición del recurso, pronunciamiento frente al que se alza el actor, que reproduce sus alegaciones y pedimentos.

SEGUNDO.- El actor fundó su pretensión en el empeoramiento de la marcha y situación económica de la empresa familiar – -- S.L.", alegando que esta, dedicada a la excavación y demolición de terreno, ha pasado de tener veintidós trabajadores a cinco –tres dijo en el acto del juicio- y que su salario ha descendido de 2200€ a 1400€ mes.

En prueba de sus alegatos presenta unas nominas por ese importe, pero la fiabilidad de los datos que reflejan es escasa por el poder de control que, como se puso de relieve en la separación, tiene demostrado sobre ellos, siendo llamativa la no presentación de una prueba suficiente sobre el descenso de la actividad, resultados y efectiva situación económica de la empresa. Por otro lado, si a primeros de 2009 se registró un impago próximo a los 45.000€, la carencia probatoria que se registra nada permite inferir a favor del recurrente, máxime cuando en el mes de septiembre del mismo año – 2009-l adquirió un inmueble en La Puebla de Alfindén y tres fincas rústicas de regadío en la misma localidad.

El recurso, por tanto, no prospera."

***** Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 9 de abril de 2012. Custodia compartida. Nuevo sistema. Valoración de la prueba. Informes psicosociales**

"PRIMERO.- La demanda que da lugar a la formación de este procedimiento contiene la pretensión de que se modifique la sentencia dictada el día 24 de noviembre de 2009 por la Audiencia Provincial de Teruel, confirmatoria de la sentencia de divorcio dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Teruel el día 21 de julio de 2009, en el extremo relativo a la guarda y custodia de los hijos menores del matrimonio cuya disolución se acordó, pues considera la parte demandante y ahora recurrente que el régimen que al respecto debe establecerse es el de custodia compartida y no, como en tales sentencias se recogió, el de guarda y custodia por parte de la madre.

En la sentencia citada de 21 de julio de 2009 dictada por el Juzgado, en argumentación respecto de la petición del padre demandante de que se instaurara la custodia compartida de los menores, se recogió que procedía mantener la custodia a cargo de la madre, tal y como había hecho el auto de medidas provisionales de 22 de enero de 2009. Previa referencia al informe emitido por el psicólogo del Equipo Técnico del Juzgado, se citaron en apoyo de tal decisión como motivos principales a los que había que atender: "(...) la unidad familiar en torno a la madre y familia de ésta, tíos, primos de los menores, estabilidad emocional, la escolarización de los menores en centro ubicados en Teruel capital (lo que conllevaría que el padre debería desplazarse con ellos para llevarlos al colegio) (...)". Apelada la anterior sentencia, sin que conste oposición del que era apelante y es ahora recurrente sobre la forma en que había tenido lugar la práctica de la prueba pericial psicológica, fue dictada la sentencia también citada, de 24 de noviembre de 2009 por la Audiencia de Teruel, que confirmó la dictada por el Juzgado, y en ella, respecto de la petición de custodia compartida hecha por el padre y debatida se consideró que no sólo no existía justificación para el establecimiento de tal régimen de atención a los menores, sino que tal medida había sido desaconsejada por el "(...) informe pericial psicológico emitido por unos profesionales cualificados e imparciales, cuales son quienes desempeñan su función como tales en el Juzgado de Menores de Teruel que, tras el examen de los progenitores y sus hijos, entienden más oportuno la concesión a la madre de la custodia de los menores".

SEGUNDO.- Una vez que entró en vigor la Ley de Aragón 2/2010, de 26 de mayo, de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de los padres, el padre presentó la demanda inicial de este procedimiento, en solicitud de modificación de las medidas acordadas en las sentencias referidas,

alegando en apoyo de su pretensión la nueva regulación sobre el régimen de custodia de los hijos menores, que ordena la custodia compartida como preferente sobre la individual y que, además, prevé en su Disposición Transitoria Primera que la solicitud de custodia compartida por uno de los progenitores será causa de revisión de las medidas judicialmente adoptadas bajo la legislación anterior.

Dictada sentencia el día 1 de marzo de 2011 por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Teruel, en ella se expone que la nueva normativa no puede invocarse como una alteración sustancial que permita modificar las medidas antes adoptadas, y señala que "(...) El único motivo que podría conducir a la modificación pretendida es el deseo de los hijos mayores del matrimonio, J y P, de convivir semanalmente con su padre, según resulta de la exploración de los mismos (...)" Tras valorar distintas circunstancias a tener en cuenta al tiempo de conceder relevancia a las exploraciones de menores en general, y de adolescentes en particular, termina considerando que, en este caso concreto, las circunstancias concurrentes aconsejan mantener la custodia a cargo de la madre, en lugar de la custodia compartida solicitada por el padre, si bien procede ampliar el régimen de visitas que antes se había previsto.
Apelada la anterior sentencia, la dictada el día 21 de junio de 2011 por la Audiencia Provincial de Teruel, y que es ahora objeto de recurso por infracción procesal y de casación, desestima el recurso de apelación con base, fundamentalmente, en el informe pericial que en el anterior procedimiento de divorcio había sido efectuado el 11 de mayo de 2009 por psicólogo dependiente de los Juzgados de Teruel, y porque considera que no ha habido variación sustancial de las circunstancias tenidas en cuenta en el procedimiento anterior de divorcio cuando se acordaron las medidas cuya modificación se pretende.

TERCERO.- Contra esta última sentencia citada, el primer motivo en que se fundamenta el recurso por infracción procesal parte de considerar infringidos los artículos 209.4 y 218.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por incurrir la sentencia dictada por la Audiencia Provincial, según indica, en vicio de falta de claridad e incongruencia, al no resolver sobre todas las peticiones de las partes y no atender la exigencia de motivación de las sentencias.

Aun a pesar de ser los citados vicios procesales los que enuncia el motivo de recurso, sin embargo, a lo largo de su desarrollo el recurrente no hace mención a cuáles puedan ser las razones que deban dar lugar a entender que exista incongruencia o falta de motivación. Por el contrario, en el cuerpo de este motivo lo que se combate es que la sentencia hubiera tenido en cuenta el informe evacuado en el procedimiento anterior de divorcio, así como la forma de exploración, en lugar de interrogatorio, en que fue hecha la audiencia de los menores en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Teruel.

La única referencia contenida en este punto del recurso a posible falta de congruencia o de motivación se limita a indicar que "(...)no parece de recibo la argumentación escueta y sucinta del Tribunal que, en los debidos términos de defensa no resulta coherente (...)" para, a continuación explicar tal afirmación por razones que no se concretan ya a la motivación o congruencia, sino al desacuerdo con las pruebas tenidas en cuenta por el Tribunal.

La lectura de la sentencia recurrida, lejos de evidenciar posible falta de motivación o incongruencia, muestra con claridad cuáles son las razones que han llevado a desestimar el recurso de apelación y es plenamente congruente con las cuestiones que habían sido planteadas en tal recurso. Sienta así, con claridad, que considera de pleno valor probatorio el mismo informe pericial que se practicó en el anterior procedimiento de divorcio; que no ha existido variación sustancial de las circunstancias tenidas en cuenta entonces; y que, por tanto, no existe motivo que justifique la pretensión de la parte.

No cabe, en consecuencia, entender inmotivada en todo o en parte la sentencia recurrida ni, por tanto, cabe la admisión de este motivo de recurso por infracción procesal.

CUARTO.- El segundo motivo del recurso por infracción procesal parte de entender infringidas las normas que rigen los actos y garantías procesales de modo determinante de nulidad y causante de indefensión, con cita, únicamente, del artículo 24 de la Constitución. Luego, a lo largo del motivo cita la parte como preceptos no observados de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de modo genérico, los artículos 335 y siguientes y, de modo específico, los artículos 338.2, segundo párrafo y 339.5.

De las distintas consideraciones que, confusamente, se citan en el desarrollo del motivo de recurso sobre motivación de sentencias, práctica de pruebas y derecho sustantivo, la referencia a la práctica de prueba pericial que finalmente fundamenta el motivo pretende la incorrección de haber valorado un informe pericial que se practicó el día 11 de mayo de 2009 (aunque el recurrente indique que fue hecho en 2008) que no fue ratificado y sobre el que no se pudo preguntar; y el haber admitido que la demandada, y ahora recurrida, desistiera de la práctica de nuevo informe pericial.
Respecto del informe pericial de 2009 evacuado en procedimiento anterior, no corresponde ahora juzgar si fue hecho o no conforme a las normas procesales, puesto que, como tal informe pericial, fue aportado en otro procedimiento y no en el actual. En este pleito el informe fue aportado como prueba documental. Por tanto, no cabe ahora valoración alguna respecto de si debió ser ratificado o sometido a debate contradictorio el informe pericial en aquel procedimiento,

porque no es en éste prueba pericial, y como documental ha sido correctamente incorporado al expediente.

Y en relación con si fue procedente o no la admisión de la renuncia de la parte demandada a la práctica de la prueba pericial que inicialmente solicitó, no cabe sino estar a la previsión contenida en el artículo 217.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que establece, como es de plena lógica y coherencia procesal, que es carga de cada una de las partes la aportación de los medios de acreditación de sus pretensiones. De modo que, en este caso, la parte demandada podía interesar o no la práctica de prueba pericial y, por tanto, tenía la facultad, derivada de tal potestad, de renunciar a la prueba primeramente interesada. Al igual que el actor pudo interesar la práctica de informe pericial y, si no lo hizo por las razones que fuera, es cuestión que queda en el ámbito de su estrategia de defensa de pretensiones, sin que en tal actuación procesal de una u otra parte pueda la contraria intervenir.

En resumen, por tanto, el actor tuvo a su disposición, como la parte contraria, los medios hábiles para su defensa, sin que quepa reputar que exista la infracción que denuncia el actor del artículo 24 de la Constitución por el hecho de que él mismo, o la otra parte, hicieran el uso de los medios de prueba a su disposición como estimaron conveniente en defensa de sus pretensiones. Y en la admisión del informe técnico de otro procedimiento aportado como prueba documental no cabe apreciar que exista infracción alguna de los preceptos que como motivo de su recurso cita el recurrente. Por lo que este segundo motivo de recurso por infracción procesal debe ser desestimado.

QUINTO.- El único motivo de recurso de casación se fundamenta en que la sentencia recurrida ha infringido los artículos 2.2 y 6 de la mencionada Ley de Aragón 2/2010, de 26 de mayo, con cita referenciada a los artículos 39.2 y 4 de la Constitución y 11.2, apartados a) y b) de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor.

En la exposición conjunta de las razones que argumenta el recurrente para llegar a entender infringidas las normas citadas parte, en todo caso, de considerar que la entrada en vigor de la nueva Ley Aragonesa 2/2010 debe comportar la aplicación del criterio preferente de custodia compartida y, por tanto, el cambio del régimen establecido en su caso.

Como se ha señalado antes en sentencias de esta Sala (sirva como ejemplo la de 9 de febrero de 2012), en materia de guarda y custodia de los hijos en supuestos de crisis de la convivencia de los progenitores, son dispares los principios inspiradores del Código Civil y de la Ley de Aragón 2/2010, de 26 de mayo, “de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de los

padres". El Código Civil (artículo 92) parte de entender como más conveniente, con carácter general, el establecimiento de la guarda y custodia a cargo de uno solo de los progenitores, de modo que la posibilidad de establecer la custodia de manera compartida por ambos progenitores exige el acuerdo de ellos, o la concurrencia de circunstancias excepcionales que evidencien que sólo con el establecimiento de la custodia compartida se protege adecuadamente el interés superior del menor.

En cambio, el artículo 6 de la citada Ley de Aragón 2/2010, luego literalmente transpuesto en el artículo 80 del Código de Derecho Foral de Aragón (CDFA en adelante) ordena que, en interés de los hijos menores, el Juez adoptará de forma preferente la custodia compartida, salvo que la custodia individual sea más conveniente, teniendo en cuenta, aparte de otras circunstancias de especial relevancia que puedan concurrir, los factores de edad, arraigo social y familiar de los hijos, y su opinión; así como la aptitud y voluntad de los progenitores para asegurar la estabilidad de los hijos y sus posibilidades de conciliación de la vida familiar laboral de los padres. Factores para cuya valoración, los mismos artículos 6 de la Ley y 80 del CDFA prevén que, antes de adoptar su decisión, el Juez podrá, de oficio o a instancia de parte, recabar informes médicos, sociales o psicológicos de especialistas relativos a la idoneidad del modo de ejercicio de la autoridad familiar y del régimen de custodia de los menores.

Ante la innovación que introdujo en Aragón la ley citada respecto del régimen preferencial del Código Civil antes aplicable también en Aragón, la propia norma aragonesa, en la Disposición Transitoria Primera, otorgó a la petición de aplicación de su régimen el rango de causa de revisión de las medidas previamente adoptadas respecto de la guarda y custodia, y ordenó que las revisiones que se hicieran de los convenios reguladores o de las medidas judiciales adoptadas con anterioridad a la entrada en vigor de la ley se sujetaran a las disposiciones contenidas en ella.

SEXTO.- Por tanto, tras la entrada en vigor de la Ley 2/2010, cualquier establecimiento o revisión de medidas de guarda y custodia de menores estará a la previsión legal de ser preferente la custodia compartida, entendido en el recto sentido de que, como indica la sentencia de esta Sala de 15 de diciembre de 2011 "(...) la ley parte de que el interés del menor se consigue mejor con la custodia compartida, por lo que la custodia individual sólo se otorgará cuando se comprueba más conveniente. En esto consiste la preferencia, en que la regla sea la custodia compartida y la custodia individual sea la asignada si se demuestra más conveniente para el menor".

En consecuencia, como recoge la misma sentencia y ha sido después recordado en sentencias posteriores, como las de 1 de febrero o 9 de febrero de 2012, la

posible conveniencia de adopción de la custodia individual exigirá una atenta valoración de la prueba que así la acredite, frente al criterio preferente de la custodia compartida. Pruebas entre las que, como indica la misma sentencia de esta Sala de 1 de febrero de 2010 tienen especial relevancia la pericial practicada, especialmente los informes psicosociales, y la opinión de los hijos menores.
De modo que, se concluye, si en el caso concreto a resolver no existe, conforme a los criterios establecidos en la ley, constancia realmente evidenciada de ser mejor para el menor la custodia individual que la compartida, debe estarse a esta última.

SEPTIMO.- La sentencia recurrida, de entre los factores y circunstancias prevenidas en la ley para poder establecer el régimen de custodia individual, acude a la prueba consistente en el informe psicosocial evacuado el día 11 de mayo de 2009 en el previo procedimiento de divorcio. De modo que, indica, la pretensión de custodia compartida fue rechazada en el procedimiento anterior tanto en la primera como en la segunda instancia, al estimar que dicha posibilidad había sido desaconsejada en un informe pericial psicológico, emitido por unos profesionales cualificados e imparciales. Y como estima la Sala que no ha existido una variación sustancial de las circunstancias que justifique el cambio en la custodia determinada en aquel procedimiento, debe estarse a ella, manteniendo así la custodia individual.

Este razonamiento por referencia a otro, hecho antes de la entrada en vigor de la ley 2/2010, no tiene en cuenta la práctica y valoración de prueba efectuada conforme a los factores establecidos en la nueva ley, y, consecuentemente, no razona en la medida en que esta nueva ley lo requiere, el motivo por el que se establece el régimen de custodia individual, en lugar de respetar el preferentemente establecido ahora de custodia compartida.

El hecho de que en el informe de referencia expresamente se hubiera desaconsejado por el psicólogo la custodia compartida no permite, sin más y, especialmente, sin práctica de nuevo estudio de la situación presente, considerarlo válido de modo esencial actualmente. Y no sólo por el tiempo transcurrido desde que se hizo en 2009, sino, sobre todo y especialmente, porque en tal periodo de tiempo ha sido radicalmente modificada la legislación aplicable, al entrar en vigor la ley 2/2010, y, con ella, la preferencia del criterio de custodia compartida sobre la individual. Y, en su concreción, cambiaron también los factores a que necesariamente debe estarse en la valoración de la prueba para poder excepcionar la custodia compartida y sobre los que la sentencia recurrida no efectúa consideración alguna.

Consecuencia de la falta de valoración y consiguiente consideración como probados de los factores por cuya concurrencia y ponderación prevé la Ley 2/2010 que pueda excepcionarse la custodia compartida, es que la sentencia recurrida, desatendió lo ordenado en el artículo 6.2 de la Ley 2/2010 y, por tanto, debe ser estimado el recurso de casación contra ella interpuesto con motivo de tal infracción casándola y dejándola sin efecto.

Estimando el recurso de casación, procede resolver sobre las pretensiones planteadas en la demanda rectora de este procedimiento por el ahora recurrente, conforme a las previsiones contenidas en el artículo 6.2 de la Ley 2/2010 (actual artículo 80.2 del CDFA), para determinar si existen razones que justificarían establecer custodia individual o si debe estarse al criterio referente de custodia compartida.

OCTAVO.- Los tres hijos del matrimonio, J, P y D que tienen hoy, respectivamente, 16, 12 y 7 años, han superado las edades más tempranas que podrían aconsejar que vivieran de modo permanente en un solo domicilio y que fuera uno solo de los progenitores quien los tuviera de modo permanente bajo su custodia. No existe prueba que permita considerar que tengan menor arraigo con la familia del padre que con la de la madre, constando además que es buena su relación con la pareja con quien actualmente convive el padre, y sin que nada permita deducir que el hecho de haber tenido los hijos del matrimonio disuelto hermanos gemelos de vínculo sencillo pueda perjudicar su estancia en la casa del padre pues, antes al contrario, la custodia compartida parece que debe favorecer la relación con los nuevos hermanos.

La opinión de los dos menores que tienen mayor edad, J y P, manifestada libremente en la audiencia que tuvo lugar en este procedimiento, evidencia con claridad que el deseo de ambos hermanos es el de poder vivir tanto con su padre como con su madre, lo que constituye un dato esencial que, debe ser claramente valorado a favor del establecimiento de la custodia compartida.

El inconveniente manifestado por la madre con base en la distancia que separa la casa del padre del casco urbano de Teruel, donde ella vive, no se acredita que constituya una circunstancia especial que condicione el modo en que debe ser establecida la custodia compartida, puesto que, como sí queda probado, son sencillos y rápidos los desplazamientos constantes al puesto de trabajo del padre, centro de formación de los menores, o al núcleo urbano de la capital.

NOVENO.- En consecuencia con los datos expuestos valorando que la demandada no propone un plan de custodia compartida distinto del propuesto por el demandante y que es razonable el solicitado por el actor de establecimiento de un régimen de custodia compartida semanal, procede

acordarlo así, sin perjuicio de que puedan las partes modificarlo en adelante, a medida que puedan cambiar las circunstancias que actualmente se valoran y en adaptación a los turnos de trabajo que corresponda a cada uno de los progenitores.

En concreto, a partir del dictado de esta sentencia:

1.- El régimen de custodia de los menores será el de custodia compartida, con igual ejercicio compartido de la autoridad familiar.

2.- Los tres hijos del matrimonio permanecerán una semana con cada uno de los progenitores, a cargo suyo y bajo su custodia, desde el viernes a la hora de salida del centro donde realicen sus estudios hasta igual momento del siguiente viernes, en que se hará cargo el otro progenitor. Caso de ser festivo el viernes, el momento del cambio de progenitor custodio tendrá lugar a las 18 horas del viernes. No cabe estimar el condicionamiento que pretende el demandante de pernocta en uno u otro domicilio según los turnos de trabajo de la madre, ya que, no siendo fijos tales turnos, hacer tal condicionamiento situaría a los hijos en una situación de incertidumbre inadmisible para la adecuada estabilidad y seguridad de vida diaria.

3.- Dado el periodo semanal de custodia establecido, no se estima preciso fijar un régimen de visitas a favor del progenitor que no conviva con los hijos durante una semana. No obstante, ambos procurarán que los hijos no pierdan ocasión de contacto con el progenitor, o amigos o familiares de su entorno próximo, en el periodo en que no convivan con él, especialmente cuando tengan lugar celebraciones, viajes, reuniones o situaciones análogas que vengan fijadas por las fechas en que deban tener lugar y no por la voluntad del progenitor no custodio.

4.- Las vacaciones escolares de los hijos comunes serán repartidas entre los progenitores por mitad:

Los periodos vacacionales escolares se repartirán, salvo acuerdo en otro sentido, del siguiente modo: en el periodo vacacional de verano, el padre permanecerá con los menores desde la conclusión de clases escolares y el mes de julio en los años pares, y el mes de agosto y hasta las nueva entrada al colegio en septiembre en los impares, y la madre permanecerá con los menores de forma alterna a lo expuesto.

Las vacaciones escolares de Navidad se dividirán en dos mitades. La primera desde el comienzo de las vacaciones hasta el día 31 de diciembre a las 20 horas; la segunda, desde el 31 de diciembre a las 20 horas hasta la reanudación del

periodo escolar. Cada uno de los progenitores estará con los hijos una de esta mitades, alternando cada año, correspondiendo, en los años en que la Navidad recaiga en año par, la primera mitad al padre y la segunda a la madre.

Durante el periodo vacacional de Semana Santa, los hijos permanecerán con uno solo de los progenitores, con el padre los años pares y con la madre los impares.

Una vez finalizadas las vacaciones, el régimen de estancia establecido en el apartado 2 anterior, empezará a regir de nuevo, continuando como quedó.

5.- Los gastos de manutención y ordinarios de los hijos corresponderán al cónyuge que los tenga bajo su custodia en el periodo en que se produzcan, aunque sean pagados con posterioridad al momento de nacimiento de la obligación de su abono.

Los gastos fijos mensuales, anuales o de periodos superiores, serán abonados al 50 por ciento por cada uno de los progenitores, acordando entre ellos la forma de compensación o abono.

Los gastos extraordinarios, referentes a salud, educación, actividades festivas, o derivados de motivos similares que sean necesarios o se estimen convenientes por los padres serán sufragados al 50 por ciento por cada progenitor. Caso de no ser necesario el gasto y no existir conformidad entre los progenitores respecto de su conveniencia, serán abonados por el que decida efectuarlos.

Dado que el pago de gastos queda cifrado en la mitad para cada progenitor y que no consta que los salarios de uno y otro sean sustancialmente desiguales, no se estima procedente fijar asignación económica respecto de ninguno de los progenitores.

6.- Se atribuye a la madre el uso de la que fue vivienda conyugal, sito en la Calle..., de Teruel.”

***** Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 11 de abril de 2012. Pensión alimenticia para hijo mayor discapacitado. Configuración como gasto valorable a efectos de pensión compensatoria**

"PRIMERO.- El demandante instó del Juzgado de Primera Instancia la modificación de las medidas definitivas acordadas en autos de divorcio, concretando su petición en dos puntos: extinguir la pensión compensatoria a favor de la Sra. G, y dejar sin efecto la pensión por alimentos para M, hija de los cónyuges ahora divorciados. Fundaba su pretensión, por una parte, en que sus ingresos se han visto mermados y sus gastos significativamente aumentados como consecuencia de su pase a la reserva; y en cuanto a la pensión compensatoria, teniendo en cuenta que ésta se ha abonado durante un período de diez años, tras el cual la Sra. G ha rehecho su vida con total independencia, demostrando su capacidad para desenvolverse autónomamente.

La sentencia de primera instancia ha desestimado la demanda, al entender que respecto a la pensión compensatoria no se han producido circunstancias relevantes que puedan determinar su extinción, pues la capacidad económica de la Sra. G no ha mejorado, manteniendo su puesto de trabajo y sus retribuciones, mientras que el hecho de pasar el actor a situación de reserva por edad sólo ha significado una reducción de sus ingresos líquidos mensuales, pero mantiene en propiedad una vivienda sita en Jaca, con garaje y trastero, que se le atribuyó libre de cargas en el convenio regulador de separación matrimonial, habiendo además adquirido por título hereditario un patrimonio cuyo valor líquido es de 95.076,78€. Respecto de la pensión alimenticia a favor de la hija común , las circunstancias económicas de ésta no han mejorado, sino que las consecuencias derivadas de su minusvalía se han agravado y con ello los gastos precisos para su asistencia, de forma que no puede valerse por sí misma, precisando de ayuda de terceras personas para la mayoría de las actividades básicas diarias, atención que le presta precisamente su madre con la que convive.

La Audiencia Provincial confirma la sentencia de Primera Instancia, salvo en el pronunciamiento relativo a costas de la instancia, respecto de las que no hace imposición. En su fundamentación jurídica mantiene en lo esencial los razonamientos del juez de primera instancia, y explicita que "la hija , de treinta y tres años, trabajó un mes en 2001, cuatro en 2007 y seis meses en 2008, y como consecuencia de accidente de tráfico sufrido en 1997 presenta paraplejia a nivel D 6, vejiga e intestino neurógenos, síndrome depresivo grave y precisa ayuda de tercera persona para cualquier actividad de la vida diaria y adaptación en su vivienda. Percibe desde abril de 2010 una pensión de invalidez de 509,55€ y vive con su madre". Añade, como razonamientos que avalan el fallo desestimatorio, que la sentencia de divorcio estableció la pensión alimenticia

para T de 156,11€ mensuales sin perjuicio de las ayudas que ésta pueda percibir, concluyendo que "es evidente la disminución de ingresos del actor, pero también el empeoramiento de la situación económica de la madre y la hija".

SEGUNDO.- El demandante recurre en casación invocando dos motivos. El primero denuncia infracción, en concepto de interpretación errónea y aplicación indebida, del art. 83 del Código de Derecho Foral Aragonés (en lo sucesivo CDFA), e infracción, en los mismos conceptos, de las normas de derecho común previstas en los arts. 97, 100, 101 y concordantes del Código Civil. El segundo motivo invoca la vulneración de la jurisprudencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en relación con los requisitos necesarios para el reconocimiento de la asignación compensatoria, su naturaleza temporal o indefinida, su revisión en los casos de variación sustancial de la situación económica de perceptor o pagador, extinción por alteración sustancial de los criterios económicos en función de los cuales se determinó y cese de la causa que la motivó.
El recurso se contrae a la pensión compensatoria a favor de la demandada Dª Mª Pilar G A, por cuanto termina solicitando de esta Sala que, casando y anulando la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Zaragoza, estime la demanda en lo que se refiere a la pensión compensatoria a favor de aquélla.
Acerca de los motivos del recurso, la Sala ha de hacer las siguientes consideraciones: a) el primero de ellos no deslinda, a lo largo de su desarrollo, el concepto de las infracciones denunciadas, dejando en la indeterminación si la parte recurrente considera aplicable o no el art. 83 del CDFA y los preceptos del Código Civil invocados; b) si se entiende producida una aplicación indebida de preceptos legales carece de sentido invocar, a la vez, su interpretación errónea, pues sencillamente no debían de ser objeto de interpretación por la Audiencia, al resultar inaplicables al caso; c) el motivo segundo, en cuanto denuncia la vulneración de doctrina jurisprudencial, no tiene en cuenta en su formulación lo dispuesto en el art. 477.1 de la LEC, que considera como motivos de recurso de casación exclusivamente las infracciones legales; d) en todo caso, habiendo sido admitidos ambos, los dos motivos serán objeto de examen conjunto, en cuanto que el segundo únicamente trata de reforzar con cita jurisprudencial los argumentos expresados para entender infringidas las normas jurídicas.

TERCERO.- El ordenamiento civil aragonés ha regulado la asignación compensatoria en el artículo 9 de la Ley 2/2010, de 26 de mayo, de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de la convivencia de los padres. Dicho texto legal ha sido incorporado al CDFA, integrando hoy el contenido de su artículo 83.
En la sentencia de esta Sala 15/2011, de 30 de diciembre, expresábamos: *La asignación compensatoria prevista en el artículo 9 de la Ley aragonesa*

2/2010 (artículo 83 CDFA) no tiene, en lo sustancial, una naturaleza y finalidad diferente a la señalada por el artículo 97 del Código civil a la pensión compensatoria, salvo que esta última viene encuadrada entre los efectos comunes a la nulidad, separación y divorcio del matrimonio, en tanto que la asignación aragonesa se aplicará, si se dan los requisitos para ello, en los casos de ruptura de cualquier tipo de convivencia de los padres.

Ya el Preámbulo de la ley (párrafo final de su apartado VII, que es ahora el penúltimo párrafo del apartado 10 del Preámbulo del Código de Derecho Foral de Aragón) prevé "la posibilidad de que uno de los padres solicite al otro una asignación económica destinada a compensar la desigualdad económica que le produzca la ruptura de la convivencia". Esta previsión se concreta en el artículo 9.1 del texto normativo: "El progenitor al que la ruptura de la convivencia produzca un desequilibrio económico en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento en su situación anterior a la convivencia, tendrá derecho a percibir del otro una asignación compensatoria".

Existe por tanto norma aragonesa reguladora de la cuestión debatida, cual es la procedencia en derecho de mantener la citada asignación –en los términos en que el derecho civil aragonés se expresa- a favor de la que fue cónyuge del demandante. De ello deriva que no ha existido infracción por aplicación indebida de la ley aragonesa, y que no son de aplicación los preceptos del Código Civil que la parte recurrente cita en el primer motivo.

Fijado así el derecho aplicable, examinaremos seguidamente si la Audiencia Provincial, al confirmar la sentencia de primera instancia, interpretó erróneamente el precepto aragonés indicado.

CUARTO.- La pensión compensatoria de la que aparece como acreedora la Sra. G fue fijada en la sentencia de divorcio por mutuo acuerdo dictada por el juzgado en fecha 7 de marzo de 2003, momento en que era de aplicación la normativa del Código Civil, ante la ausencia de derecho propio de esta Comunidad Autónoma. La sentencia aprobó el convenio regulador de 24 de enero de 2003, la fijó en 624,45 euros mensuales y sin limitación de plazo. Dicha pensión se venía abonando desde la fecha de la separación matrimonial, sucedida en 2001. La cuantía actualizada es de 736,61 euros mensuales.

Como quiera que la pretensión del actor, en su demanda y en el presente recurso, es que se “acuerde extinguir y dejar sin efecto la pensión compensatoria para la Sr. G”, la norma atinente al caso es el art. 83.5 del CDFA, conforme al cual *La asignación compensatoria se extinguirá en los supuestos de nueva convivencia marital del perceptor, alteración sustancial de los criterios económicos en función de los cuales se determinó, la muerte del perceptor, cumplimiento del plazo de duración, así como por el incumplimiento de su finalidad.*

De tales supuestos extintivos, se invocan en la demanda dos, cuales son la convivencia marital de la perceptora con pareja estable, y la alteración sustancial de las circunstancias económicas respecto al momento en que la pensión se acordó.

La convivencia marital no se da por probada en las instancias, y a ello hemos de estar en el recurso de casación. La sentencia del juzgado, ratificada en este punto por la Audiencia, expresa –fundamento jurídico tercero- que "refiere el actor igualmente que la demandada tiene en la actualidad pareja estable, pero ni ha resultado acreditada tal supuesta relación sentimental de la Sra. G ni mucho menos se ha probado una relación de convivencia marital estable que supondría la supresión de dicha pensión compensatoria".

Las circunstancias económicas concurrentes se describen pormenorizadamente en la sentencia de primera instancia. En ella se explica la situación económica del actor recurrente, quien al pasar a situación profesional de "reserva por edad" ha visto reducidos sus ingresos líquidos mensuales de 3.300 euros a 2.282 euros. Pero también se expresa que aunque haya perdido el derecho a su vivienda en el pabellón de la Comandancia de la Guardia Civil mantiene en propiedad la vivienda sita en Jaca, con su garaje y trastero, que se le atribuyó libre de cargas en el convenio regulador de separación matrimonial y que es en el que reside actualmente. Añade que no es hecho acreditado que la demandada haya mejorado su situación económica. Y, respecto a la situación de ésta, que convive y atiende a la hija común, refiere las necesidades derivadas de esos cuidados, en los términos que han sido recogidos en el primer fundamento de derecho.

Es de notar que, aunque la asignación compensatoria al cónyuge y la pensión alimenticia a la hija son instituciones jurídicas de naturaleza y finalidad diferentes, en esta caso están íntimamente relacionadas, pues se pretende la extinción de aquélla con fundamento en la alteración sustancial de las circunstancias económicas de la perceptora, para lo que las instancias han considerado no sólo los ingresos de ésta, sino también sus gastos.

En el examen de estas circunstancias, la sentencia recurrida concluye afirmando que "es evidente la disminución de ingresos del actor, pero también el empeoramiento de la situación económica de la madre y la hija", de modo que "la valoración del Juzgador de instancia resulta ponderada a las circunstancias concurrentes".

Esta ponderación, que compete realizar a los tribunales de instancia, no aparece como ilógica o arbitraria, sino ajustada a los hechos probados que no son revisables en casación.

No estimamos infringida la norma contenida en el 83 del CDFA, por lo que el recurso ha de ser desestimado."

***** Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 11 de abril de 2012. Reclamación de filiación extramatrimonial. Injustificada falta de colaboración a práctica de prueba biológica. Indicio de trascendencia definitiva**

"PRIMERO.- Por Dª Cristina se interpuso demanda de impugnación de paternidad contra don Juan Manuel, actual esposo de su madre, y de reclamación de filiación paterna extramatrimonial contra Dª Santiago, solicitando la declaración de que este último es su padre biológico y su inscripción en el Registro Civil como hija de Don Santiago, con declaración de su derecho a seguir utilizando sus apellidos sin tener que utilizar los de su padre biológico.

El demandado se opuso y, tras la práctica de las pruebas propuestas y admitidas, exceptuada la biológica, por su incomparecencia, se dictó sentencia estimando la demanda.

Recurre D. Santiago, que pide se revoque la sentencia y se desestimen los pedimentos de la demanda, alegando al efecto: 1.- Que no hubo una relación sentimental o de noviazgo, ni convivencia ni relación sexual entre él y la madre de la actora (en adelante Dña Celia), simples estudiantes en Santiago de Compostela que coincidían cuando salían con sus respectivas pandillas de amigos. 2.- Que en el escrito de demanda no hay mención que corresponda al periodo hábil de concepción, siéndolo todas las hechas en momentos imposibles, y así a) en el hecho cuarto de la demanda se situa el embarazo de Dña Celia en un viaje a San Carlos de la Rápita (Tarragona) que se dice realizado antes del segundo campamento de Milicias Universitarias en Los Castillejos (Tarragona), careciendo pues de sentido la relación de ese viaje y ese embarazo si se tiene en cuenta que el campamento se hacía en los meses de junio, julio y agosto 1969 y que el nacimiento de Dª Cristina ocurrió el 29-7-70; y b) se dice que, aprovechando la proximidad geográfica con Los Castillejos, visitó a Dña. Celia, primero en Alcañíz y luego en Zaragoza, con lo que, nuevamente, tales supuestos encuentros, situados en época coincidente con su estancia en Castillejos –junio, julio y agosto 1969-, habrían quedado fuera del periodo hábil de concepción. 3.- Que el Juez de instancia sobrevalora la existencia de las fotos de los folios 29 y 30, a las que Dña Celia pudo acceder de diferentes maneras, sin tener en cuenta la falta de una sola fotografía juntos, además de la de una sola línea manuscrita por él, ni en las fotos ni en una correspondencia también inexistente. 4.- Que la actora incurre en contradicciones en tiempos y lugares que no han merecido ninguna atención en la sentencia, además de en faltas a la verdad; y así, dentro de las primeras, en el hecho quinto de la demanda se dice que la última vez que D. Juan Manuel y Dña. Celia tuvieron relaciones carnales

fue la noche de fin de año del 1969, en el Ferrol, mientras que en el hecho decimo se habla de relaciones intimas en momentos posteriores al nacimiento; y dentro de las segundas, aparte la referida al noviazgo y mantenimiento de relaciones intimas, cita el recurrente las afirmaciones relativas a una reunión de las respectivas familias habida en Zaragoza en 1970 y al regalo de una medalla, además de la relación de su familia con cierta tienda en Zaragoza. 5.- Que la parte actora no ha podido traer al procedimiento a persona no vinculada a su familia y sin interés directo en el pleito que haya podido confirmar mínimamente su versión, y que al margen de la puesta en escena llevada a cabo por tío, tía y abuela de la actora en el juicio, lo único que los mismos dijeron fue creer, vagamente, haber visto a D. Santiago en Alcañíz en el verano de 1969 –periodo que no sería hábil para la concepción-, no habiendo merecido del Juez consideración alguna las contradicciones surgidas en el acto del juicio, en el que la abuela de la actora dice que D. Santiago estaba presente en la reunión familiar mantenida en Zaragoza, y Dña Celia que no, habiendo tenido que ser esta ultima la que cuadrase en el tiempo, en lo necesario, el viaje a San Carlos de la Rápita, llevándolo al mes de noviembre –de 1969-, así como, en el mismo sentido, las visitas en Zaragoza, que en el hecho cuarto de la demanda se sitúan en periodo coincidente con el campamento de milicias en Los Castillejos. 6.- Que fueron las omisiones y contradicciones del escrito de demanda y las contradicciones puestas de manifiesto en el juicio entre ese escrito y lo manifestado por la familia de la actora, las que justificaron su final negativa a someterse a la prueba biológica.

SEGUNDO.- Sobre las razones que el recurrente expone, decir:

1.- Ante todo, en cuanto dato de indudable interés en la valoración de la prueba, que las contestaciones del demandado en su interrogatorio son en ocasiones evasivas a todas luces, además de inverosímiles e increíbles, y así, tras identificar sin ningún problema la fotografía que le fue mostrada –la del sobre del folio 34- como precisamente correspondiente a una entrada de guardia en el primer campamento de Milicias en Los Castillejos –r.t. 33,10-, dijo no recordar si Dña. Celia le dijo en algún momento que estaba embarazada –r.t. 39,09-, “porque hace 40 años” –añadiendo que “la imposibilidad es un término muy rotundo” –r.t. 40,45-, y que “siempre cabria una posibilidad, muy remota, porque si no lo recordaría” -r.t. 40,50-. Como tampoco recordó, entre otras cosas, si en 1969, por aquellas fechas, tuvo un vehículo marca o modelo “Spyder” –r.t. 31.10-, vehículo en que según el interrogatorio del Letrado de la actora realizaba en fines de semana sus desplazamientos a Alcañíz desde el Campamento “Los Castillejos” –desplazamientos que también dijo no recordar –“no, que yo recuerde”-, ni la medalla que le fue exhibida, ni haberla regalado, aunque admitiendo que el grabado en su reverso era un tío suyo –r.t. 34.24-.

2.- En cuanto a la relación de noviazgo que la actora dice mantuvo su madre con D. Santiago –hecho tercero de la demanda-, el Sr S.P, amigo de ambos en su época de estudiantes en Santiago de Compostela, curso 68/69, dice en el acta de manifestaciones aportada que salieron juntos con frecuencia durante algunos meses, manteniendo una relación que podría considerarse como de noviazgo, aunque el tiempo transcurrido no le permitía precisar más la duración o el carácter preciso de la relación. En contra, de los tres testigos propuestos por el demandado –amigos de este en la misma época- el Sr H.M dijo que D. Santiago y Dña Celia coincidieron en la misma pandilla de amigos, pero negó que hubiesen mantenido relación de otro alcance; el Sr G que no recordaba que D. Santiago le hubiese comentado que mantuviese una relación especial con ninguna persona, ni le dijo nada sobre relaciones sexuales con nadie; y lo mismo el Sr V.D.

Tales testimonios, en todo caso, alcanzan únicamente a la época de Santiago de Compostela, habiendo manifestado los tres testigos desconocer todo lo referente un tiempo posterior, en el que la prueba practicada acredita la existencia de una relación sentimental, de noviazgo o no. Dña S, la abuela de Dña Cristina, y Dña M.J, la tía, dijeron haber tenido esa relación como de noviazgo. Y al margen del ajuste de tal apreciación, las propias manifestaciones del demandado –vd apartado 1- indican con seguridad, lógica y racionalmente, que su relación con Dña Celia sobrepasó con seguridad la de meros conocidos.

3.- Que en el hecho cuarto de la demanda se contiene a) un sorprendente relato en el que el viaje a San Carlos de la Rápita –lugar “donde surge por primera vez la posibilidad de haberse quedado encinta”, momento en el que dice seguidamente que Don Santiago “no se muestra reticente, aunque si preocupado, dado que manifiesta no estar en sus planes etc ...”- se sitúa en momento anterior al campamento de Milicias Universitarias realizado en Los Castillejos en el verano de 1969, y por tanto fuera del periodo hábil de concepción de la niña que luego nació el 29 julio 1070; y b) una desafortunada referencia a los viajes a Zaragoza, que aparentemente, en la redacción de la demanda, van ligados a los de Alcañíz, todo ellos durante el periodo de campamente de D. Santiago -caso, pues, en el que todo lo sucedido en esta Ciudad quedaría fuera del periodo hábil de concepción-, y una vacua referencia al Gran Hotel, lugar de las estancias de la pareja en Zaragoza.

En el caso del viaje a San Carlos de la Rápita, la inadvertencia sobre lo que se dice es tan de bulto e incomprensible que solo puede explicarse en el marco de la puesta en conocimiento de los hechos por Dña. Celia a su hija, de esta a su Letrado y en la final redacción por este de la demanda. Y la imprecisión en la ubicación en el tiempo de las visitas a Zaragoza algo únicamente achacable a la misma razón, nuevamente de forma incomprensible

si se tiene en cuenta que la demanda es de 8-11-10, fecha en la que tenía a su disposición y adjuntaba con ella, el acta de manifestaciones de Dña. Celia, su madre, que el 6 octubre anterior relata ante notario con toda claridad que su relación con D. Santiago, iniciada en el curso 68/69, continuó en el 69/70, habiendo venido el demandado varias veces a Zaragoza, en cuya Universidad, tras la vuelta de la familia a Alcañíz, por traslado de su padre, continuaba ella sus estudios.

En la testifical de Dña Celia no cabe, pues, entender una reconducción de estrategias devaluadas, sino la precisión de unos datos que fueron recogidos y expuestos con inadvertencia de lo que se decía o mal relatados a pesar de no haber debido serlo.

4.- Que la cuestión sobre si la noche de fin de año del 1969 fue o no la ultima en la que Dña Celia y D. Santiago tuvieron relaciones sexuales no se considera relevante, menos todavía en el contexto general de la demanda. Y tampoco, al margen de ese contexto, lo que se refiere a la relación del demandado con la tienda de su familia en Zaragoza, C/.

En cuanto a faltas a la verdad, la madre de la actora está en posesión de la medalla que se le exhibió al demandado, sin que este, procediendo aquella de un tío suyo, haya dado una mínima explicación sobre el particular. La inexistencia de cartas fue explicada por Dña S, la abuela, en términos, no de "puesta en escena", sino perceptiblemente veraces y del todo convincentes (vd r.t. 1.00.40 a 1.01.12). Tanto como sus afirmaciones sobre la reunión de familias que en 1970 tuvo lugar en un Hotel de Zaragoza, sin que, oído su interrogatorio, se observe siquiera la contradicción con su hija que refiere el recurrente en cuanto a asistentes a la reunión, que fue también atestiguada por Dña M.J, la tía de la actora (r.t. 1.11.27) , y por D. L, el abuelo (manifestación 3ª). En el acta de manifestaciones de este último también se contiene referencia a la destrucción de las cartas y su causa (manifestación 4ª).

5.- Que la prueba ofrecida por la actora ha sido aquella de la que disponía, creíble y convincente, no siendo cierto que la proporcionada por abuela, tío y tía de Dña. Cristina quedase reducida a creer vagamente haber visto a D. Santiago en Alcañíz en el verano de 1969, por cuanto, como resulta del soporte audiovisual del juicio, todos ellos han dado detalles que excluyen la vaguedad que el recurrente aprecia.

TERCERO.- En cuanto a la justificación que la negativa a la prueba biológica pueda tener con base en las omisiones y contradicciones que el recurrente esgrime, razón por la que dice no compareció a las citas que se le dirigieron en primera y segunda instancia, es cierto que el art 767.4 LEC

dispone que “La negativa injustificada a someterse a la prueba biológica de paternidad o maternidad permitirá al tribunal declarar la filiación reclamada, siempre que existan otros indicios de paternidad o maternidad y la prueba de ésta no se haya obtenido por otros medios”, y que de acuerdo con ello se ha reconocido la legitimidad de la negativa a la práctica de la prueba biológica cuando la resolución en que se acuerde carezca de fundamentación o no existan indicios serios de la pretensión que se deduce (STC 7/1994, de 17 enero); sin embargo, no habiendo recurrido en reposición D. Santiago la admisión a trámite de la demanda y habiéndose al menos puesto de manifiesto, como se ha puesto sobradamente, la razonable posibilidad de la existencia de relaciones íntimas entre las partes al tiempo de la generación, no cabe duda de que en esa situación se imponía la práctica de una pericial biológica, prueba que, como señala la citada STC, donde despliega plenos efectos probatorios es en los supuestos intermedios, donde la pretensión de reconocimiento de la filiación no queda probada por otros medios ni tampoco desprovista de toda verosimilitud, no estimándose licito, desde la perspectiva de los artículos 24-1, 14 y 39 de la Constitución Española, “que la negativa de una persona a que se le extraigan unos centímetros cúbicos de sangre deje sin la prueba más fiable a la decisión judicial que debe declarar la filiación de un hijo no matrimonial, y deje sin una prueba decisiva a quien insta de buena fe el reconocimiento de la filiación”.

Esta Sala, en suma, no puede alcanzar otra conclusión que la de estimar acreditada la paternidad del demandado, cuya injustificada falta de colaboración a la prueba biológica que el Juzgado primero y esta Sección después acordaron, lleva a valorar como indicio de definitiva trascendencia, en relación con los restantes medios probatorios, su negativa a someterse a su práctica, pues como dice la STS 3-11-01 y recoge la STS 24-6-04, “el demandado no puede impedir, con su simple obstrucción, la práctica de la prueba decisiva y, si lo hace, debe cargar con las consecuencias; someterse a la prueba biológica no es un deber pero sí una carga; en otras palabras, el demandado puede practicar la prueba y probar que no es el padre, desestimándose así la demanda, y si se niega a practicarla no puede cargar a la parte demandante las consecuencias de su negativa”.

El recurso, por tanto, debe ser desestimado, con confirmación de sus cuatro pronunciamientos, en el caso de la conservación por la actora de sus actuales apellidos en virtud de lo dispuesto por el art 111 el C.C., que en los dos casos que contempla –uno de ellos el de determinación judicial de la filiación contra la oposición del progenitor- establece que el hijo no ostentará su apellido más que si lo solicita él mismo o su representante legal. “

***** Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 12 de abril de 2012. Custodia compartida. Criterios exegéticos. Gastos extraordinarios**

"PRIMERO.- El primero de los motivos de casación que resultaron admitidos denuncia infracción del artículo 80.2 del Código de Derecho Foral de Aragón (en adelante CDFA). Argumenta el recurrente que, si bien dicho precepto establece de forma preferente el sistema de custodia compartida, esta preferencia no debe ser aplicada sin más, sino teniendo en cuenta todos los criterios previstos en la ley, en aras a conseguir lo que, siendo más favorable para el niño, ponga a los progenitores en situación de igualdad. A la vista de lo expresado en el informe pericial (que recomendó que se mantuviera el reparto de tiempo existente entre los progenitores) concluye que la sentencia recurrida no ha contemplado el interés de los menores. En especial, indica que la custodia compartida ha de ser perjudicial sobre todo para el menor J, dadas sus especiales características (trastorno psíquico que le produce una minusvalía del 65%).

En la fundamentación de la sentencia objeto de recurso se hace referencia a una resultancia fáctica de la que hay que partir en esta sede casacional y que en síntesis es la que sigue: En el informe del gabinete psicosocial se destaca que la organización y el reparto del tiempo actual (régimen de visitas amplio) no ha supuesto alteración en las rutinas y hábitos cotidianos del menor J, quien tiene interiorizada esa dinámica. Se aconseja en dicho informe mantener el actual reparto del tiempo entre los progenitores ampliándose la entrega de los menores hasta las 21 horas. El padre mantiene una actitud general de gran interés y sentimientos afectivos hacia sus hijos, y dispone de los recursos personales y familiares adecuados para atender adecuadamente las necesidades y el desarrollo psicoevolutivo de sus hijos; está facultado por tanto para ejercer la guarda de sus hijos. La hija A tiene una clara predisposición a permanecer con su hermano y aboga por un aumento del tiempo de estancia con su padre.

A la vista de todo ello, y teniendo en cuenta que el propio informe psicosocial aconseja la ampliación del régimen de visitas, razona la sentencia impugnada que *no existe inconveniente en que se amplíen las estancias que vienen realizándose en la actualidad, de tal manera que los dos días intersemanales se completen (con pernocta) y en los fines de semana la entrega se realice los lunes por la mañana, lo que a la postre viene a suponer una custodia compartida*...

SEGUNDO.- Como dijimos en nuestra sentencia de 9 de febrero de 2012 con cita de otras precedentes, *...en el precepto del artículo 80.2 del Código Foral, como se ha destacado en ocasiones anteriores (Sentencias de este*

Tribunal de 8 de febrero de 2011 (recurso de casación 27/2011), 15 de diciembre de 2011 (recurso de casación 17/2011), 13 de julio de 2011 (recurso de casación 8/2011) y 30 de septiembre de 2011 (recurso de casación 13/2011) se plasma una opción legislativa que supone un cambio del esquema tradicional y de la que se da cuenta en el Preámbulo: la custodia compartida se configura frente a la individual como preferente en supuestos de ruptura de la convivencia de los padres y en ausencia de pacto de relaciones familiares (...) Lo anterior no tiene un carácter absoluto sino que, como señala la recurrente, se excepciona la custodia compartida (o repartida, quizá sería más exacto decir) cuando la custodia individual sea más conveniente. La reciente sentencia de la Sala de 1 de febrero del presente año (recurso 24/2011), a la que se remite la de 8 de febrero (recurso 27/2011) resume los criterios que deben seguirse en la exégesis del artículo 80 CDFA:
"En sentencias de esta Sala dictadas en aplicación de la Ley 2/2010, cuyos preceptos han sido incorporados al Código de Derecho Foral de Aragón, se han establecido los siguientes criterios exegéticos acerca de dichas normas: a) La custodia compartida por parte de ambos progenitores es el régimen preferente y predeterminado por el legislador, en busca de ese interés del menor, en orden al pleno desarrollo de su personalidad, de modo que se aplicará esta forma de custodia siempre que el padre y la madre estén capacitados para el ejercicio de las facultades necesarias a tal fin (Sentencia de 30 de septiembre de 2011); b) El sistema no es rígido, salvo en un mandato que dirige al juez: el superior interés del menor (Sentencia de 13 de julio de 2011); c) Podrá establecerse un sistema de custodia individual, cuando éste resulte más conveniente para dicho interés, a cuyo efecto habrá de evaluar los parámetros establecidos en el art. 80.2 del Código (Sentencias citadas y la de 15 de diciembre de 2011); d) La adopción de la custodia individual exigirá una atenta valoración de la prueba que así lo acredite –la conveniencia para el menor- frente al criterio preferente de la custodia compartida, al que el precepto legal otorga tal preferencia en interés de los hijos menores (Sentencia de 15 de diciembre de 2011)".

En la ya reseñada de 15 de diciembre de 2011 precisamos, también con cita de otras anteriores, que se aplicará la custodia compartida *siempre que el padre y la madre estén capacitados para el ejercicio de las facultades necesarias a tal fin, y no concurran otros elementos que hagan más conveniente la custodia individual*, y que por tanto *la prueba habrá de dirigirse, en su caso, a acreditar que ésta última resulta más conveniente o, por lo que acabamos de decir, que en el caso concreto concurren razones que determinan la conveniencia de hacer una excepción a la regla general que presume que lo más conveniente para el menor es la custodia compartida*.

TERCERO.- La aplicación de la expresada doctrina al caso que nos ocupa conduce, forzosamente, a la desestimación de este motivo de casación. El

examen de la sentencia recurrida, y teniendo en cuenta los criterios expuestos en el fundamento segundo, revela que no concurren en el caso razones que justifiquen hacer una excepción al criterio legal. No es razón suficiente la minusvalía del niño J a tenor del resultado de la prueba apreciada por el juzgador de instancia y no hay ningún otro elemento (fuera de la opinión subjetiva de la madre) que permita concluir que, en este concreto supuesto, conviene más al interés del menor la custodia individual o el mantenimiento del régimen anterior, más restringido, de permanencia con el padre. Además, la solución que adopta la sentencia, y si bien es un régimen de custodia compartida *sui generis*, no se aleja sustancialmente de lo aconsejado por el gabinete (prueba valorada conforme a las reglas de la sana crítica) al no acordar un reparto exactamente igual de la custodia, sino por el método de ampliar un poco más todavía el tiempo de permanencia de los niños con el padre que lo que el informe psicosocial sugería: las dos tardes intersemanales se alargan no ya hasta las 21 horas, sino que se completan con pernocta; y el fin de semana alterno que pasan con el padre se extiende al lunes hasta la entrada en el colegio. Así lo ha resuelto la sentencia y a esa decisión hay que estar, pues nada hay que indique que lo acordado en ella es perjudicial para el menor.

En suma, ninguna vulneración del art. 80.2 del CDFA es de apreciar, por lo que este motivo recurso no prospera.

CUARTO.- El segundo de los motivos invoca la infracción del artículo 82.4 CDFA. Este precepto establece que *Los gastos extraordinarios necesarios de los hijos serán sufragados por los progenitores en proporción a sus recursos económicos disponibles.* El criterio no difiere del establecido en el apartado primero donde, en relación con los gastos de asistencia en general, se impone la contribución de ambos padres, con sus recursos económicos, *proporcionalmente*.

La sentencia recurrida dispone una contribución mensual de 300 euros el padre y 100 euros la madre en relación con los gastos ordinarios de los menores (a excepción de los de alimentación). Este pronunciamiento, que no es objeto de recurso, se motiva en el párrafo segundo del fundamento tercero de la sentencia, donde se da cuenta de los parámetros que han sido valorados para determinar este punto del fallo. Sin embargo, la sentencia prevé que los gastos extraordinarios se abonarán por mitad entre ambos.

Ninguna razón hay, y desde luego no se expresa en la sentencia, para apartarse en este punto de la proporción establecida para los gastos ordinarios, con lo que se infringe la norma del art. 82.4 citada. En consecuencia, procede estimar este motivo de casación, declarando, tal como solicita el Ministerio Fiscal en su escrito de oposición al recurso, que la distribución entre los cónyuges de los gastos extraordinarios debe hacerse en la misma proporción, de modo que el padre abonará el 75% y la madre el 25%. Ello referido a los extraordinarios necesarios, puesto que para los no necesarios se seguirá el criterio legal, es decir que se abonarán en función de los acuerdos a los que

lleguen los progenitores y, en defecto de acuerdo, los abonará el progenitor que haya decidido la realización del gasto.

La estimación de este motivo de recurso conduce a la revocación parcial de la sentencia impugnada, en el solo extremo relativo al abono de los gastos extraordinarios de los menores.”

***** Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 16 de abril de 2012. Reclamación de alimentos por hijo mayor de edad. Disfrute ininterrumpido desde la minoría de edad. Requisitos. Falta de acreditación de los presupuestos legales**

"**PRIMERO.-** Los antecedentes de necesaria referencia para resolución de la reclamación de alimentos que es objeto del presente procedimiento derivan inicialmente, según los hechos considerados probados en las sentencias dictadas en el presente procedimiento, del matrimonio formado por el ahora recurrente don Ángel Raimundo D. D. y Dª. Mª Carmen R. V., en el que nacieron dos hijos, Dª. Sara, nacida el día 12 de diciembre de 1991 y D. Jorge, nacido el día 25 de junio de 1987, demandante en este procedimiento, y que es ahora parte recurrida.

Con fecha 27 de noviembre de 2008 se dictó por el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Zaragoza sentencia de disolución por divorcio del matrimonio y se aprobó el convenio regulador presentado por las partes, en el que se incluyó la fijación de pensión de alimentos respecto de la hija Dª. Sara. En cambio, no se señaló pensión alguna respecto del hijo D. Jorge porque éste era independiente económicamente y estaba incorporado al mundo laboral.

A instancia de ambos padres, el día 30 de septiembre de 2009 se dictó por el Juzgado antes citado sentencia de modificación de las medidas definitivas del divorcio que habían sido recogidas en el convenio regulador aceptado por la referida sentencia de 2008. En esta resolución, de nuevo se aprobó, en los términos en que venía redactado, el convenio suscrito por ambas partes, que contenía diversas modificaciones respecto del convenio regulador inicial, pero sostenía la ausencia de pago de pensión alguna respecto del hijo D. Jorge.

Previos los antecedentes citados, el hijo D. Jorge presentó con fecha 8 de octubre de 2010 la demanda rectora de este procedimiento en reclamación a su padre de la cantidad de 300 euros mensuales en concepto de alimentos con base en la regulación prevista en los artículos 68, 142, 143, 146 y 148 del Código Civil (CC en adelante).

Desestimada íntegramente la demanda por sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 13 de Zaragoza el día 6 de abril de 2011, el demandante interpuso contra ella recurso de apelación, que fue resuelto por la Sentencia ahora recurrida dictada el día 13 de octubre de 2011 por la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Zaragoza, que estimó parcialmente el recurso presentado, por aplicación del artículo 69 del Código de Derecho Foral de

Aragón (CDFA en adelante) y condenó al demandado a abonar al demandante la suma de 150 euros mensuales en concepto de alimentos.

SEGUNDO.- El único motivo del recurso de casación planteado por la parte demandada contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial que le condena al pago de pensión por alimentos a su hijo demandante, se fundamenta en la infracción del artículo 69 del CDFA, con base en tres submotivos: 1º, que el demandante no argumentó en su favor en el momento de interponer su demanda con arreglo a la regulación del artículo 69 CDFA observado por la sentencia recurrida, sino a la del artículo 142 y concordantes del CC; 2º, que la previsión del artículo 69 CDFA regula la prórroga o mantenimiento de obligación, pero no la imposición de una obligación que había dejado de existir; y 3º, que en cualquier caso no se cumplen los requisitos previstos en el artículo 69 del CDFA para establecer a favor del hijo y a cargo del padre recurrente la obligación de pago de pensión por alimentos.

TERCERO.- Respecto del primer submotivo, esto es, que no cabe entrar a valorar la aplicación del artículo 69 CDFA cuando el demandante invocó a su favor en la demanda tan solo la previsión del artículo 142 del CC, sin referencia alguna al CDFA, debe considerarse que, dentro de la obligada congruencia que en la jurisdicción civil deben tener, salvo excepciones que no son al caso, las decisiones judiciales con las peticiones de las partes y la causa de sus pretensiones, el Tribunal debe observar, conforme al tradicional principio acuñado bajo la expresión “iura novit curia”, el derecho que sea realmente de aplicación, puesto que así lo ordena el artículo 218, párrafo 2º de la Ley de Enjuiciamiento Civil y resulta del correcto entendimiento de la efectividad de la tutela judicial interesada.

En este caso, no cabe estimar que se modificara la causa de pedir esgrimida por el demandante cuando la sentencia recurrida valoró que la norma aplicable a la reclamación de alimentos era el artículo 69 CDFA y no el artículo 142 CC que servía de base a la demanda, y del que no hace mención alguna la sentencia, porque una y otra norma atienden a igual fundamento de atención de las necesidades alimenticias por parte de familiares, de modo que, aunque se trata de regulaciones distintas, pueden fácilmente solaparse en su aplicación en casos como el presente en que la relación que genera la posible obligación de alimentación es la paterno filial.

En consecuencia, no cabe considerar que la sentencia infringiera uno u otro artículo por el hecho de decidir, de oficio, cuál de ambos preceptos es de aplicación preferente, por lo que el submotivo primero de casación debe ser desestimado.

CUARTO.- El segundo submotivo del recurso de casación se funda en la alegación de que la sentencia recurrida infringió el artículo 69 CDFA, ya que considera el impugnante que no es de aplicación en este caso a la obligación de pago de pensión por alimentos, porque la finalidad perseguida por tal norma es la de prorrogar o mantener una obligación y no la de imponer una obligación nueva.

El artículo 69 CDFA, incluido en la Sección Primera del Capítulo II del Libro I, destinada a la regulación de los principios generales del deber de crianza y autoridad familiar, establece un régimen especial de observancia de la obligación de los padres de costear los gastos de crianza y educación propios de la autoridad familiar, aun cuando los hijos hayan obtenido su emancipación o llegado a la mayoría de edad, en los siguientes términos:

"1. Si al llegar a la mayoría de edad o emancipación el hijo no hubiera completado su formación profesional y no tuviera recursos propios para sufragar los gastos de crianza y educación, se mantendrá el deber de los padres de costearlos, pero solo en la medida en la que sea razonable exigirles aún su cumplimiento y por el tiempo normalmente requerido para que aquella formación se complete.

2. El deber al que se refiere el apartado anterior se extinguirá al cumplir el hijo de veintiséis años, a no ser que, convencional o judicialmente, se hubiera fijado una edad distinta, sin perjuicio del derecho del hijo a reclamar alimentos."

De modo que, aun siendo ya el hijo titular de los derechos y obligaciones que comporta la plena adquisición de capacidad de obrar y libertad de actuación correspondiente a haber alcanzado la emancipación o mayoría de edad, sin embargo se mantiene su derecho, y consiguiente obligación para los padres, de que éstos sufraguen su sostenimiento. Para que esta situación especial llegue a producirse debe darse la concurrencia de los presupuestos previstos en tal norma, esto es, que el hijo no haya terminado su formación y que, además, carezca de recursos propios. Presentes tales presupuestos, la norma aragonesa no exige acudir al régimen general de alimentos, sino que, respecto de los gastos de crianza y educación, ordena literalmente que "se mantendrá el deber de los padres de costearlos".

Tanto del encuadre sistemático del artículo 69 CDFA en el ámbito de las relaciones derivadas de la autoridad familiar, como del empleo específico en el precepto de las expresiones "al llegar" y "se mantendrá", resulta la conclusión de que la obligación de los gastos por parte de los padres no cesa, sino que, sin solución de continuidad, sigue vigente a pesar de haber llegado el hijo a la mayoría de edad o de haber obtenido la emancipación.

Tal regulación es claramente beneficiosa para los hijos que alcanzan la mayoría de edad o la emancipación porque, en lugar de tener que acudir al régimen más exigente general de alimentos, siguen disfrutando de modo ininterrumpido de la obligación de sostenimiento que deriva de la autoridad familiar. Ahora bien, esta situación no es, sin embargo, indefinida, puesto que terminará una vez que falte uno de los presupuestos que justifican la especialidad, o en los demás casos previstos en el propio artículo 69 CDFA (que sea razonable su exigencia por tiempo normalmente requerido para la formación o que alcancen los 26 años).

Bien si se incurre en falta de los presupuestos precisos, bien se den las razones para término del específico régimen de alimentos del artículo 69 CDFA, el efecto es el mismo, de extinción del derecho y correlativa obligación de alimentos, especialmente mantenidos porque, aunque nacieron en el seno de la autoridad familiar, fueron prolongados a pesar que tal autoridad familiar preexistente ya había terminado. En consecuencia, a partir del momento en que deje de ser de aplicación la obligación de sostenimiento vinculada a la autoridad familiar que terminó, no cabe entender ya la prolongación o mantenimiento que prevé el texto legal. En tal caso, quedará a salvo el derecho del hijo a reclamar por otro título, como también prevé de modo específico el mismo artículo 69 CDFA, párrafo segundo, al dejar a salvo la posibilidad del hijo de reclamar por la vía del régimen general de alimentos.

Por tanto, cuando la sentencia recurrida declaró el nacimiento de la obligación prevista en el artículo 69 CDFA en este caso, en el que la prolongación de la autoridad familiar no había tenido lugar al alcanzar el hijo la mayoría de edad, por su independencia económica, hizo una incorrecta aplicación de tal norma, que permite el mantenimiento o prolongación de tal obligación pero no, como se hizo en la sentencia recurrida, su constitución ex novo, después de haberse acabado el último vínculo del mayor de edad con la autoridad familiar.

QUINTO.- Excluida la posible aplicación del artículo 69 CDFA, la resolución de la cuestión litigiosa debe atender a las previsiones contenidas en el artículo 142 y siguientes del CC, reguladores del régimen general de alimentos entre parientes, lo que exige una detenida valoración tanto de la prueba directa aportada por quien pretende los alimentos como de las evidencias que puedan ser reveladas por signos externos o comportamiento social (en términos de la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de febrero de 1982) para entender, primero y principalmente, si está presente en el caso el presupuesto exigido por tales normas de considerarlo en la situación de necesidad exigida para fundamentar su reclamación. Si falta tal acreditación, no procederá el

señalamiento de la deuda alimentaria, tal y como sostiene la sentencia del Tribunal Supremo en sentencia de 23 de febrero de 2000, que denegó pensión de alimentos porque la demandante en aquel procedimiento "(...) no ha probado que su nueva vida esté desasistida del sustento diario, alojamiento, vestido, asistencia médica y, en determinado supuesto, de la instrucción cultural y profesional; y, sobre todo, no ha probado una incapacidad permanente, total y parcial, para realizar trabajos retribuidos, sean de tipo intelectual o manual. Y para que surja con todos sus efectos dicha deuda alimenticia han de darse determinadas circunstancias como son reveses de fortuna, siniestros imprevisibles, enfermedades graves, imposibilidad de trabajar, dado o circunstancias, se vuelve repetir, que no se dan el presente caso, o por lo menos no se han constatado".

Doctrina que, en su aplicación al caso presente, da lugar a considerar como datos de relevancia que el reclamante de alimentos terminó su trabajo por no llegar a un acuerdo económico con el empresario, no porque fuera resuelta unilateralmente la relación laboral por el empleador. No se ha concretado en el procedimiento a qué pudo deberse la falta de acuerdo, para poder valorar si es que no hubo ninguna opción razonable que el demandante hubiera podido aceptar, y este importante dato es cuestión sobre el que el demandante pudo alegar y probar, siendo imposible hacerlo para el demandado, por lo que la falta de acreditación sobre cuál fuera realmente el motivo que determinó el cese de la relación laboral sólo al propio demandante puede perjudicar, por aplicación del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Similar consideración cabe hacer sobre la posibilidad de acreditación no cumplida por parte del demandante, de que no percibe prestación o auxilio en forma de ayudas sociales para desempleados, y para quienes han agotado la protección por desempleo, como de modo específico se tuvo en cuenta en la sentencia del Juzgado de Primera Instancia, y que es dato esencial si se tiene en cuenta que al constituirse la litis, cuando la demanda es presentada el día 8 de octubre de 2010, el demandante percibía el subsidio de desempleo por importe de 426 euros.

Al lado de la anterior falta de acreditación, son hechos probados que el demandante compró y tenía a su disposición desde el año 2008 un ciclomotor. Aun contando con tal medio de locomoción propio, y estando en situación de desempleo desde el día 5 de diciembre de 2009 subsidiada por la prestación hasta el 19 de enero de 2011, decidió adquirir el día 1 de junio de 2010 un vehículo turismo marca y modelo Renault Mégane, matriculado el año 2006. Se desconoce el importe abonado por tal compra, puesto que no ha sido facilitado por el demandante, pero es notorio que con el precio pagado podría ser cubiertas un elevado número de mensualidades de 150 euros cuyo pago reclama

ahora, sin contar, por demás, con los gastos que el uso y mantenimiento de un vehículo turismo conlleva, y que aquí se añaden a los más reducidos, pero también presentes, por el uso del ciclomotor.

Al no constar indicio alguno que permita considerar justificado que la adquisición del turismo fuera necesaria para el trabajo, no cabe sino concluir que ninguna utilidad tuvo tal compra, salvo la del disfrute personal del demandante. El desembolso que la compra del nuevo vehículo supuso, junto con la decisión que conlleva de asunción de los nuevos gastos, se compadece mal con la alegación del demandante de que tenga necesidad real para proveer a su alimentación y sostenimiento diario, como reclamó en la demanda presentada el día 8 de octubre de 2010, tres meses después de adquirir el nuevo vehículo.

Por último, debe destacarse que el propio demandante manifestó en el juicio oral celebrado que la petición de alimentos la efectuaba realmente, no para él, sino para su unidad familiar, esto es, para el sostenimiento del hogar que forma con su madre y su hermana, lo cual no cabe admitir como causa para establecer en su favor pensión de alimentos, por tratarse de cuestión ya resuelta, y por acuerdo de sus progenitores, en el procedimiento que se sigue en el Juzgado de Familia que conoce del divorcio de sus padres.

Las circunstancias acreditadas, contradictorias con que exista realmente una necesidad de alimentos personal del demandante, unidas a la omisión probatoria que correspondía al propio actor practicar sobre extremos tan relevantes como el motivo por el que terminó su relación laboral o si percibe subsidio o auxilio social conducen a considerar, finalmente, que no puede darse por cierto que exista la situación de necesidad que sostiene, no imputable a él o causada por su falta de diligencia, por lo que no procede estimar su reclamación en tal sentido.

SEXTO.- Por tanto, el submotivo segundo de casación es estimado, procediendo casar la sentencia dictada por la Audiencia Provincial que revocó la resolución desestimatoria de la demanda, con los pronunciamientos a ello inherentes.”

***** Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 25 de abril de 2012. Pensión alimenticia y compensatoria. Nueva convivencia marital. Ingresos de la perceptora con entidad suficiente**

"PRIMERO.- La Sentencia recaída en la 1ª. Instancia en el presente procedimiento sobre modificación de medidas (Artº. 775 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), es objeto de recurso de apelación por la parte actora (Sr. S), que en su recurso (Artº. 458 LEC) considera que debe darse lugar a la extinción de la pensión compensatoria y que la extinción de la alimenticia a favor de la hija, debe retrotraerse a la fecha 1 de agosto o de la petición judicial.

SEGUNDO.- La modificación de las medidas (Arts. 90, 91 y 100 del Código Civil) ya fijadas en anteriores procesos matrimoniales requiere de una alteración de circunstancias, que para que sean tenidas en cuenta, han de revestir de una serie de características, como que sean trascendentes y no de escasa o relativa importancia, que se trate de una modificación permanente o duradera y no aleatoria o coyuntural, que no sea imputable a la propia voluntad de quien solicita la modificación ni preconstituida y que sea anterior y no haya sido prevista por los cónyuges o el Juzgador en el momento en que las medidas fueran establecidas. Correspondiendo la carga de la prueba a la parte que propone la revisión de las medidas (Artº. 217 L.E.C.). Igualmente el Artº. 79, nº. 5 del Código de Derecho Foral de Aragón, indica que las medidas aprobadas judicialmente podrán ser modificadas cuando concurran causas o circunstancias relevantes.

TERCERO.- Considera el apelante que la Sentencia apelada infringe el Artº. 83 del Código del Derecho Foral de Aragón, al acreditarse nueva convivencia marital de la perceptora, igualmente considera defectuosa la valoración de la prueba en cuanto a la variación sustancial económica de la perceptora y del pagador.

Debe tenerse en cuenta, en primer lugar, que la cláusula sexta del convenio regulador de 2005 suscrito entre las parte y preveía el desempeño de la demandada de trabajo remunerado propio o ajeno, fijándose una pensión compensatoria de 350 €/mensuales, debiendo ser las condiciones económicas relevantes para que diera lugar a su modificación.

Por otro lado, el apelante introduce una causa nueva de extinción en el recurso cual es la convivencia marital de la demandada que no fue objeto de contienda en 1ª Instancia, rigiéndose en esta materia (pensión compensatoria) el principio rogatorio o de aportación de parte, por lo que no puede ser objeto de debate en esta instancia, desestimándose el primer motivo del recurso.

En cuanto al segundo ya se ha indicado con anterioridad que las condiciones económicas de la demandada han debido mejorar de forma sustancial o empeorar de igual medida los recursos del actor para dar lugar a la extinción solicitada. Sobre esta cuestión la Sentencia apelada realiza un pormenorizado y detallado estudio de las posibilidades económicas de ambos contendientes. Los ingresos de la perceptora no tienen la entidad suficiente como para justificar la supresión de la pensión siendo los rendimientos del bar que actualmente explota con otro socio escasos, según la prueba documental obrante en autos y en cuanto a la situación del recurrente las deudas alegadas, alguna de ellas no están justificadas, ni en cuanto al resto revela una incapacidad de asumir la pensión pactada, ignorándose además el destino de algún préstamo obtenido, dispone de una actividad agrícola sobre una extensión de tierra considerable y obra un informe pericial valorado correctamente en la instancia (Artº. 348 LEC), que fija un rendimiento económico mayor en la actualidad que en el año 2005, todo ello unido a los acertados pronunciamientos de la sentencia apelada conlleva a desestimar el recurso en cuanto al apartado de la pensión compensatoria.

CUARTO.- En cuanto a la retroacción de los alimentos debe tenerse en cuenta que la Sentencia del TS de 03-10-2008 viene a sostener, respecto a esta cuestión, que sería de aplicación lo dispuesto en el Artº. 106 del Código Civil EDL 1889/1, que establece: "los efectos y medidas previstas en este capítulo terminan en todo caso cuando sean sustituidos por los de la sentencia o se ponga fin al procedimiento de otro modo", y en el Artº. 774.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463: "los recursos que conforme a la Ley se interpongan contra la sentencia no suspenderán la eficacia de las medidas que se hubieran adoptado en ésta", por lo que cada resolución desplegará su eficacia desde la fecha en que se dicte y será sólo la primera resolución que fije la pensión de alimentos la que podrá imponer el pago desde la fecha desde la interposición de la demanda, porque hasta esa fecha no estaba determinada la obligación, y las restantes resoluciones serán eficaces desde que se dicta, momento en que sustituyen a las dictadas anteriormente, criterio seguido por la sentencia recurrida en el fundamento de derecho segundo.

Por lo expuesto, la resolución dictada despliega sus efectos desde que se dicta procediendo, en conclusión, a desestimar el recurso en su último alegato."

***** Sentencia de la Audiencia Provincial de Huesca de 27 de abril de 2012. Pensión alimenticia para hijo mayor de veintiséis años. Legislación aplicable. Alteración sustancial de las circunstancias**

"PRIMERO : Ante el inespecíficopetitum[petición] del recurso planteado por el actor, antes transcrito, hemos de estar a su contenido, concretamente, a lo alegado en el motivo tercero y en el párrafo tercero de la página segunda, en donde se solicita la extinción, con efectos de junio de 2009, de la pensión alimenticia establecida en su día a favor de su hijo, o, subsidiariamente, que se establezca la edad máxima hasta la que se puede reclamar la pensión de alimentos, habida cuenta de que el alimentista ha cumplido ya los veintiséis años. Hemos de aclarar que el actor desistió en el juicio de los puntos 2 y 3 de la súplica de la demanda, como ya recoge el antecedente de hecho quinto de la sentencia de primer grado y aduce el propio apelante.

SEGUNDO : Con relación a los extremos planteados, el alimentista nació el 1 de octubre de 1985, por lo que, en efecto, ahora ya cuenta veintiséis años. No obstante todavía vive con su madre en Córdoba, no desarrolla ningún trabajo remunerado y continúa estando matriculado en la titulación deIngeniero técnico en informática de gestiónen la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Córdoba.

Aunque no se discute la legislación aplicable (la sentencia se remite alCódigo civily no hace mención al Derecho aragonés, como tampoco las partes), hemos de tener en cuenta la norma de conflicto prevista en el *apartado 7 del artículo 9 delCódigo civil*(en relación con su artículo 16), el cual determina que "el derecho a la prestación de alimentos entre parientes habrá de regularse por la Ley nacional común del alimentista y del alimentante"; que "no obstante se aplicará la Ley de la residencia habitual de la persona que los reclame cuando ésta no pueda obtenerlos de acuerdo con la Ley nacional común"; y que "en defecto de ambas Leyes, o cuando ninguna de ellas permita la obtención de alimentos, se aplicará la Ley interna de la autoridad que conoce de la reclamación". En el presente supuesto, la sentencia de divorcio, que fue dictada por el Juzgado número 1 de Jaca en julio de 1992, ya expresa que la demandada vivía en Córdoba, a la que se trasladó allí con su hijo, puesto que la anterior sentencia de separación de 1990 le atribuyó su guarda y custodia, según el convenio regulador, mientras que el ahora apelante reside ahora en la provincia de Castellón. Así, todo da a entender que el alimentista, cuyo lugar de nacimiento no consta, tiene en este momento la vecindad civil común, conforme al *artículo 14 delCódigo civil*, por lo, según el citado *artículo 9.7, debemos*

aplicar la Ley de residencia habitual del alimentista -elCódigo civil-, máxime cuando la Ley interna, concretamente, el *artículo 69 delCódigo del Derecho Foral de Aragón*(Texto Refundidode las Leyes civiles aragonesas aprobado porDecreto Legislativo1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón), no reconoce el mantenimiento de la obligación de los padres de costear los gastos de crianza y educación de los hijos mayores de edad cuando no sea razonable exigirles su cumplimiento y, en todo caso, cuando el hijo cumpla los veintiséis años.

TERCERO : Sentado lo anterior, el examen de las actuaciones y el visionado de la grabación del juicio revela que el hijo de los litigantes no ha conseguido su titulación deingeniero técnico en informática de gestiónen un tiempo razonable por falta de aplicación al estudio, a tal punto que su matrícula se remonta al curso 2003/2004 (folio 96) y a veces no se presenta a los exámenes (folio 139).

De este modo, los alimentos debidos no pueden comprender los gastos de educación e instrucción, dado que el alimentista no ha terminado su formación por causa que le es imputable, de acuerdo con el *artículo 142 delCódigo civil*. En consecuencia, debemos reducir a la suma de 120 euros mensuales la pensión por el resto de los alimentos aludidos en el mismo precepto, a partir de la fecha de la presente sentencia, dado su carácter constitutivo. Tal obligación solo durará el plazo de un año, porquela obligación de alimentos cesa cuando la necesidad del alimentista descendiente del alimentante provenga de su mala conducta o de falta de aplicación al trabajo(*artículo 152-5.º delCódigo civil*), como aquí ocurre, y ese lapso es suficiente para que el alimentista encuentre un trabajo remunerado.

Sobre la base de todo ello, se aprecia la alteración sustancial de las circunstancias que condicionan la pensión de alimentos a favor del hijo, por lo que, con **estimación** en parte de la demanda y del recurso, procede la modificación de las medidas definitivas en los términos anticipados, como determina el *artículo 91 delCódigo civil*.”

***** Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 2 de mayo de 2012. Modificación de la cuantía de la pensión alimenticia. Incongruencia omisiva. Alteración sustancial de las circunstancias**

"PRIMERO.- Denuncia el recurrente la incongruencia omisiva de la sentencia dictada al no haberse pronunciado la Juzgadora sobre uno de los pedimentos de la demanda –la reducción a 200 € mensuales de la pensión por alimentos que a favor del hijo común señaló la sentencia de divorcio en cuantía de 250-.

Se omite, pues, toda consideración y pronunciamiento sobre la citada pretensión, lo que supone el incumplimiento de la exigencia de motivación sentada por los artículos 120.3 de la Constitución Española y art 218 LEC, incurriendo con ello en incongruencia omisiva por infracción del art. 359 LEC, en relación con el art. 24.1 de la C.E., además de los arts. 372.3 LEC y 248.3 LOPJ, que imponen al órgano jurisdiccional la ineludible obligación de resolver motivadamente todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.

No obstante, no habiéndose pedido la nulidad de la sentencia y la remisión de los autos al Juzgado a quo para el dictado de otra en que se salve el defecto indicado, sino únicamente su revocación, con inclusión del pronunciamiento omitido en base a los argumentos que expone, es claro que tal defecto no ha causado indefensión material al recurrente, que ha tenido la oportunidad de instar la nulidad y no lo ha hecho. Lo que debe ponerse en relación con el art 225.3 LEC, según el cual los actos procesales serán nulos de pleno derecho cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, haya podido producirse indefensión y con el art. 227.2 LEC, que indica que en ningún caso podrá el tribunal, con ocasión de un recurso, decretar de oficio una nulidad de las actuaciones que no haya sido solicitada en el mismo, salvo que apreciare falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional o se hubiese producido violencia o intimidación que afectare a ese Tribunal.

En suma, que procede entrar en el fondo del recurso, corrigiendo este Tribunal la incongruencia omisiva denunciada.

SEGUNDO.- El art 79.5 CDFA dispone que "Las medidas aprobadas judicialmente podrán ser modificadas cuando concurran causas o circunstancias relevantes".

De las sentencias de primera y segunda instancia dictadas en el divorcio, de 27-3 y 23-12-09 respectivamente (autos 126/08 y rollo de apelación 531/09)

resulta que el actor, Oficial 2ª de la construcción, ingresó el 26-11-08 en una Comunidad Terapéutica en la que causó alta disciplinaria el 26-1-09; que hasta ese momento estuvo percibiendo una prestación de 976,51€; que con anterioridad, en circunstancias normales, su salario mensual ascendía a 1143,90 €, mas extras; y que su nomina en enero de 2009 era de 1295 €. La Sra., por su parte, tenía un contrato de relevo, sin garantía de estabilidad, con un salario mensual en torno a los 900 €, pesando sobre el matrimonio un préstamo hipotecario, cuya cuota mensual ronda los 600 €, que debía ser atendido por ambos, al 50 %, pero que según certificó el 20-6-11 Ibercaja había sido pagado hasta esa fecha íntegramente por ella, como también los seguros asociados y las facturas de Notaria y Registro emitidas con motivo de las modificaciones de sus condiciones, y un préstamo en Cajalón, con una cuota mensual de 513,44 €, al que la recurrente vino atendiendo con la ayuda de su familia. Bases sobre las que esta Sección confirmó la pensión de 250 € mensuales señalada en primera instancia a favor de J, el hijo, ahora de 5 años de edad, revocándose la recurrida en el único sentido de ponerse a cargo del aquí recurrente el pago del crédito de Cajalón, a salvo lo que en su día resulte de la liquidación del consorcio.

De lo actuado en este procedimiento resulta que D. José Daniel trabaja en “” desde el 8 diciembre 2010 con unos ingresos que en el informe de la Trabajadora Social se dice que aquel cifró en torno a los 900 €, pudiendo llegar a los 1100 € si realizaba horas. A los folios 158 al 165 obran nominas de los meses de enero a agosto de 2011 que arrojan una media mensual de 1001 €. Hasta diciembre 2010 estuvo cobrando una prestación de desempleo de 947 €, que consta le fue reconocida del 14-6-2009 a 3-6-11.

Con todo ello, atendido el computo global de las fluctuaciones de los ingresos del Sr y el curso que el cumplimiento de las cargas recayentes sobre el matrimonio ha seguido, no se aprecia una alteración sustancial en las circunstancias que justifique la rebaja de 50 € mensuales que el actor pretende en la pensión a su cargo, por lo que debe desestimarse su recurso, con confirmación de la sentencia dictada. “

***** Sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Calatayud de 17 de mayo de 2012. Pensión alimenticia para hija mayor de edad que sigue formándose. Recursos propios. Pensión compensatoria**

PRIMERO.- Procede decretar la separación del matrimonio formado por ambas partes, teniendo en cuenta que se cumplen todos los presupuestos que establece el artículo 81 del Código Civil, en concreto el transcurso de tres meses desde la celebración del matrimonio.

SEGUNDO.-La parte actora interesa se fije una pensión alimenticia por importe de 500 euros, a satisfacer por la parte demandada, a favor de la hija mayor de edad común.
Alega la parte actora que la hija común sería mayor de edad y habría terminado un Ciclo Formativo de grado superior de "Gestión u Organización de Empresas Agropecuarias", habiendo comenzado otro de "Higiene Bucodental", con más salidas profesionales. Igualmente manifiesta que si bien el deseo de la hija común sería compatibilizar sus estudios con un trabajo remunerado, sin embargo, a pesar de haber echado varios curriculums, debido a la situación actual del mercado laboral, no habría encontrado ningún trabajo.
Así mismo, se manifiesta por la parte actora en la demanda que sería pensionista, y percibiría una pensión de 570 euros mensuales, así como algunos ingresos adicionales de escasa cuantía, mientras que la parte demandada trabajaría y tendría unos ingresos mensuales de aproximados 850 euros mensuales.

La parte demandada se opone al pago de la pensión que se le reclama de contrario, alegando que la situación económica de la parte actora no sería tan precaria como la que refleja en la demanda, en la medida que sería propietario de varios inmuebles. Por el contrario, alega que su situación económica le impediría hacer frente al pago de una pensión alimenticia de la cuantía que se reclama por la parte actora, en la medida que sus ingresos mensuales rondarían los 800 euros mensuales y tendría que hacer frente al pago de un alquiler por importe de 270 euros mensuales.
Además, manifiesta que la hija común sería titular de varios inmuebles.
En el acto de la vista manifestó que su situación laboral había cambiado, al encontrarse en situación desempleo, cobrando una prestación de 705 euros mensuales.

En el procedimiento de medidas provisionales previas a la demanda se fijó por auto de fecha una pensión alimenticia a favor de la hija común de 380 euros

mensuales, a pagar mientras la hija cursara estudios, de modo que tan pronto ésta finalizara sus estudios, la cantidad se fijó en 150 euros hasta que la hija encontrara un trabajo, fijándose un plazo máximo de seis meses desde que finalizara sus estudios.
En junio de 2011, M, hija común de las partes, terminó el Ciclo Formativo de grado superior de "Gestión u Organización de Empresas Agropecuarias", iniciando el curso de "Higiene Bucodental".
A partir de junio de 2011, la parte demandada comienza a abonar la cantidad de 150 euros, entendiendo que es ésta la cantidad que debe satisfacer a la vista del auto de medidas provisionales.
Instado el procedimiento de ejecución por la parte hoy actora, se formuló oposición por la parte demandada. En dicho procedimiento de ejecución, se dictó auto estimando parcialmente la oposición, y en el que se declaraba que la cantidad a satisfacer por la parte demandada eran 380 euros mensuales y no 150 euros mensuales tal como entendía la parte demandada.

Es necesario entrar a valorar las circunstancias concurrentes en este momento, teniendo en cuenta que ha existido un cambio de circunstancias como a continuación se expondrá y que en el procedimiento de medidas provisionales quedaron algunos extremos sin acreditar, en la medida que la parte demandada no compareció al acto de la vista en forma, por lo que no pudo hacer alegaciones ni proponer prueba al respecto.

TERCERO.-El artículo 69 del Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba, con el título de "Código del Derecho Foral de Aragón", el Texto Refundido de las Leyes civiles aragonesas establece en su párrafo primero que "*si al llegar a la mayoría de edad o emancipación el hijo no hubiera completado su formación profesional y no tuviera recursos propios para sufragar los gastos de crianza y educación, se mantendrá el deber de los padres de costearlos, pero solo en la medida en la que sea razonable exigirles aún su cumplimiento y por el tiempo normalmente requerido para que aquella formación se complete*".
El párrafo segundo del citado artículo establece que "*el deber a que se refiere el apartado anterior se extinguirá al cumplir el hijo los veintiséis años, a no ser que, convencional o judicialmente, se hubiera fijado una edad distinta, sin perjuicio del derecho del hijo a reclamar alimentos*".

La hija común tiene actualmente veintidós años y se encontraría estudiando un ciclo formativo de Higiene Bucodental, tras haber finalizado el ciclo formativo de Gestión y Organización de Empresas Agropecuarias.
La hija, por tanto, no habría completado su formación profesional.
Se cumpliría el primero de los presupuestos exigidos por el citado artículo 69.

El artículo 69 exige que el hijo mayor de edad no tenga recursos propios para sufragar los gastos de crianza y educación.
M no trabajaría en la actualidad ni tendría ingresos, tal como ésta manifestó en el acto del juicio y tal como la propia parte demandada reconoció en su interrogatorio.
No obstante, de la prueba practicada se desprende que M sería titular de varios inmuebles y figuraría como titular de algún producto financiero.
Concretamente, según la información registral aportada, M sería la propietaria plena de ocho fincas rústicas, de una finca urbana, sita en la calle de Ateca, y nuda propietaria de la finca urbana sita en de Ateca, siendo usufructuario su padre A.
Por la entidad MULTICAJA se informó a este Juzgado, mediante escrito que tuvo entrada el día 8 de noviembre de 2011, que a nombre de A y M había una cuenta abierta con un saldo de 11.630,03 euros, y un plazo fijo con un saldo de 16.000 euros. Además, a nombre de M, como titular, y de A, como autorizado, aparecía abierta una cuenta con un saldo de 1.300,59 euros, y un plazo fijo con un saldo de 18.000 euros.
Así mismo, efectuada averiguación patrimonial por este Juzgado, en la base de datos de la Dirección General de Tráfico, aparece M como titular del vehículo matrícula 0404-GGX.
M manifestó en el acto del juicio que ella no había comprado ningún inmueble, sino que su padre los había puesto a su nombre. La parte actora aporta incluso la escritura de donación del inmueble sito en , en la que también concurrió la parte demandada.
Igualmente, refirió que el dinero que había en las cuentas de Multicaja y el dinero con el que se habían constituido los plazos, era de su padre íntegramente.
M manifestó que tanto los inmuebles como el dinero, consideraba que pertenecían a su padre, a pesar de estar puestos a su nombre, y que por tanto, no pretendía efectuar ningún acto de disposición sobre ellos por si su padre pudiera necesitarlo.
Así mismo, refirió que el vehículo se lo había comprado su padre ya que estaba estudiando en Zaragoza y el ciclo de Gestión y Organización de Empresas Agropecuarias lo impartía fuera de Zaragoza, lo que hacía necesario su desplazamiento en vehículo.

Lo cierto es que a la vista de lo manifestado, M tendría recursos propios para sufragar los gastos de educación y crianza, al menos, de momento. No obstante, hay que valorar el caso concreto. Los bienes tanto muebles como inmuebles de los que es titular M no han sido generados por ella, es decir, por su trabajo, sino que proceden del patrimonio de su padre. Tampoco se ha acreditado que los bienes inmuebles de los que es titular M puedan generar frutos. Se desconoce el estado de las fincas rústicas, su valor, así como el de la finca urbana de la que es propietaria plena. Además, la propia M considera que a pesar de estar en su

patrimonio, seguirían perteneciendo a su padre, no teniendo intención de disponer de los mismos.
Entiende esta instructora que la situación patrimonial de M no enerva la obligación de satisfacer alimentos por parte de la madre, teniendo en cuenta la situación anteriormente descrita, sin perjuicio de que sí que pueda ser tenida en cuenta a efectos de graduar su cuantía y duración de la obligación de pago.

Por otro lado, aun a pesar de que la hija ya tiene cierta edad y que ya habría cursado un ciclo formativo, sin embargo, puede considerarse razonable que esté cursando otro ciclo, teniendo en cuenta que el acceso al mercado laboral está muy limitado. Además, las notas obtenidas serían satisfactorias, lo que pondría de manifiesto que M no estaría cursando estudios por pasar el tiempo, acomodándose a dicha situación, y que tendría interés por formarse.
Todo lo anterior nos conduce a concluir que la parte demandada está obligada a contribuir al pago de los gastos de crianza y educación de su hija, mientras esté cursando el ciclo de Higiene Bucodental.
Por el contrario, en el caso de que la hija iniciara otro ciclo formativo, cesará la obligación de la madre de satisfacer alimentos, y ello por considerarse que sobrepasaría lo razonable.

La siguiente cuestión que se plantea es la cuantía de la pensión alimenticia. En el auto de medidas provisionales se fijó en 380 euros. No obstante, y como se ha manifestado anteriormente, la prueba practicada fue mínima, porque la parte demandada fue declarada en rebeldía y apenas se aportó prueba sobre su situación patrimonial y sobre la situación de la hija.
Aunque el artículo 69 no lo dice, la cuantía de la pensión deberá ser acorde a las necesidades de la hija, y a los medios económicos de la madre.
La parte actora solicita se fije una pensión de 500 euros mensuales, teniendo en cuenta que M estaría estudiando en Zaragoza, lo que conllevaría gastos de alquiler de la vivienda, gastos de desplazamiento, etc.
La parte demandada se encontraría en situación de desempleo. Dicha situación, según manifestó sería definitiva hasta enlazar con la jubilación.
La prestación de desempleo rondaría los 700 euros mensuales (23,52 euros/día), según la documental aportada por la parte demandada en el acto del juicio.
Por parte de Multicaja se habría informado a este Juzgado, que actualmente la parte demandada sería titular de una cuenta, cuyo saldo rondaría los 3.000 euros, y un plazo fijo con un saldo de 24.000 euros. Además, tendría un Fondo de Pensiones constituido en Rural Vida, S.A. al que contribuiría con 100 euros mensuales, y un “Fondo de Pensiones” que la propia parte demandada habría constituido ella misma y cuyo saldo no constaría en autos.
Además, sería titular de dos inmuebles en la localidad de Ibdes, si bien no se habría acreditado de qué tipo de inmuebles se trata.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que la parte demandada, al abandonar el domicilio familiar, propiedad de la parte actora, habría tenido que alquilar una vivienda, pagando una renta mensual de 270 euros, a lo que habría que unir los gastos derivados del uso de la vivienda.
En lo que respecta a la hija M, si bien es cierto que el hecho de estar impartiendo las clases del ciclo formativo en Zaragoza supondría un importante gasto, también debe tenerse en cuenta que ciertos gastos podrían evitarse, como por ejemplo, el del coche. La parte actora alega que el coche es utilizado por M para desplazarse al lugar donde imparte las clases, sin embargo, perfectamente podría utilizar el transporte público.
Ponderando la situación económica de la parte demandada y las necesidades de la hija, así como la situación patrimonial de ésta, se considera adecuado fijar una pensión alimenticia por importe de doscientos euros.
Dicha cantidad se abonará mientras la hija curse los estudios del ciclo de Higiene Bucodental. Una vez finalizados éstos, no se fija cantidad alguna, atendiendo a la situación patrimonial de ésta.

CUARTO.- La parte demandada formula reconvención contra la parte actora e interesa se fije una pensión compensatoria a su favor de 300 euros.
Tras exponer la situación económica de cada uno de los cónyuges, tal como se hace constar en el fundamento jurídico segundo, alega que habría dedicado veinte años de su vida al matrimonio y cuidado de su hija, realizando además de las domésticas otras actividades laborales, aun sin cobertura legal.
La STS de 10 de marzo de 2009 establece que *"La respuesta casacional a la controversia pasa necesariamente por recordar la configuración legal y doctrinal de la pensión compensatoria. En torno a la misma, deteniéndonos tan sólo en lo que nos interesa (dejando de lado la posibilidad de su fijación temporal) constituye doctrina de esta Sala, plasmada, entre otras, en Sentencia de 10 de febrero de 2005 (LA LEY 855/2005), Recurso de Casación 1876/2002, luego citada por la de 28 de abril de 2005, lo siguiente:*
a) Que del tenor del artículo 97 del Código Civil ("el cónyuge al que la separación o divorcio produzca desequilibrio económico en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio, tiene derecho a una pensión que se fijará en la resolución judicial, teniendo en cuenta, entre otras, las siguientes circunstancias:....") «se deduce que la pensión compensatoria tiene una finalidad reequilibradora. Responde a un presupuesto básico: el efectivo desequilibrio económico, producido con motivo de la separación o el divorcio (no es la nulidad matrimonial), en uno de los cónyuges, que implica un empeoramiento económico en relación con la situación existente constante matrimonio. Como se afirma en la doctrina, el presupuesto esencial estriba en la desigualdad que resulta de la confrontación entre las condiciones económicas de cada uno, antes y después de la ruptura. No hay que probar la existencia de necesidad -el

cónyuge más desfavorecido en la ruptura de la relación puede ser acreedor de la pensión aunque tenga medios suficientes para mantenerse por sí mismo-, pero sí ha de probarse que se ha sufrido un empeoramiento en su situación económica en relación a la que disfrutaba en el matrimonio y respecto a la posición que disfruta el otro cónyuge. Pero tampoco se trata de equiparar económicamente los patrimonios, porque no significa paridad o igualdad absoluta entre dos patrimonios»

b) Que «La regulación del Código Civil, introducida por la Ley 30/1981, de 7 de julio , regula la pensión compensatoria con características propias -"sui generis"-. Se quiere decir que está notoriamente alejada de la prestación alimenticia que atiende al concepto de necesidad, pero ello no supone caer en la órbita puramente indemnizatoria, que podría acaso suponer el vacío de los arts. 100 y 101, ni en la puramente compensatoria que podría conducir a ideas próximas a la "perpetuatio" de un "modus vivendi", o a un derecho de nivelación de patrimonios »,

c) Y finalmente, en cuanto a los factores a tener en cuenta en orden a la posibilidad de establecer una pensión compensatoria, que tales factores son numerosos, y de imposible enumeración, destacándose en el propio precepto y sin ánimo de ser exhaustivo, los siguientes: «la edad, duración efectiva de la convivencia conyugal, dedicación al hogar y a los hijos; cuantos de estos precisan atención futura; estado de salud, y su recuperabilidad; trabajo que el acreedor desempeñe o pueda desempeñar por su cualificación profesional; circunstancias del mercado laboral en relación con la profesión del perceptor; facilidad de acceder a un trabajo remunerado -perspectivas reales y efectivas de incorporación al mercado laboral-; posibilidades de reciclaje o volver -reinserción- al anterior trabajo (que se dejó por el matrimonio); preparación y experiencia laboral o profesional; oportunidades que ofrece la sociedad, etc.».

En el presente supuesto, no concurren los presupuestos necesarios para fijar una pensión compensatoria a favor de la esposa.

Las partes contraen matrimonio el 28 de noviembre de 1989. Cuando contraen matrimonio, la esposa llevaba cuatro años y medio sin trabajar. Según el certificado de vida laboral aportado en autos, la esposa deja de trabajar en abril de 1985. Hasta esa fecha, la esposa había trabajado hasta en cuatro sitios distintos.

Es en noviembre de 2003 cuando la esposa comienza a trabajar. Existen periodos en los que no trabaja, si bien en abril de 2007 comienza a trabajar hasta diciembre de 2011. Actualmente se encuentra en situación de desempleo y se encuentra cobrando una prestación por importe de 700 euros mensuales, aproximadamente, en espera a jubilarse al año que viene.

Ya hemos manifestado en el fundamento jurídico anterior que es titular de una cuenta y de un plazo fijo cuyos importes ya se han hecho constar anteriormente.

El esposo tiene declarada una incapacidad permanente absoluta desde el año 2000 y cobra una prestación mensual de 570 euros. Así mismo cobra una compensación de 2.001,47 euros brutos por retirada agrícola, que se declaran como rentas de actividad agrícola y que supondrían un rendimiento fiscal de 260,19 euros.
Su situación económica no es mala si tenemos en cuenta que es titular de varios inmuebles y tendría una cuenta y un plazo fíjo cuya titularidad compartiría con su hija, siendo el saldo de la primera de 11.630,03 euros, y del segundo de 16.000 euros, a octubre de 2011.
La ruptura matrimonial no ha causado ningún tipo de desequilibrio económico para la esposa, que ha seguido trabajando como ya venía haciendo desde el año 2007, con la única diferencia de que ha tenido que afrontar los gastos de alquiler de una vivienda, al ser la vivienda familiar bien privativo del esposo.

Debe ser tenido en cuenta que la pensión compensatoria no tiene como finalidad equiparar los patrimonios de los cónyuges sino corregir el desequilibrio patrimonial que la ruptura ha podido causar a uno de los cónyuges en relación con la situación anterior a la ruptura.

A la vista de lo anteriormente expuesto, no procede la fijación de pensión compensatoria a favor de la esposa.”

***** Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 22 de mayo de 2012. Régimen de guarda y custodia. Cambio de titular. Circunstancias concurrentes**

"PRIMERO.- Recurre Dª Mª Elena la Sentencia dictada en la instancia suplicando su revocación y se acuerde que la guarda y custodia de la hija menor, I, le sea concedida a ella, manteniéndose el régimen de visitas con su padre decretado con anterioridad al presente pleito, con supresión de la tarde intersemanal, que la pensión alimenticia a cargo del padre se establezca en 650 euros mensuales, con el pago de los gastos extraordinarios al 50%, fijándose en 150 euros al mes la pensión si la custodia se mantuviese a favor del padre, y que se le atribuya a la madre e hija el uso de la vivienda familiar, con fundamento en el error valorativo de la prueba practicada en que ha incurrido el Juzgador de instancia.

D. Fernando impugna, únicamente, el pronunciamiento referente a la cuantía de la pensión alimenticia establecida, solicitando su elevación a 400 euros mensuales y la confirmación del resto de la Sentencia.

SEGUNDO.- La cuestión esencial a debatir en esta alzada la constituye la atribución de la guarda y custodia de la hija menor I, nacida en Junio de 2001 que la Sentencia otorga al padre, tras haberla detentado la madre legalmente desde el divorcio de los progenitores.

Los litigantes se encuentran divorciados por sentencia firme dictada el 12 de abril de 2006, en la que se otorgó a la madre la guarda y custodia de los dos hijos del matrimonio, M e I, desencadenada la ruptura, a decir de las partes, por el proceso penal seguido contra D. Fernando José por denuncia de Dª Elena por presunto delito de abuso sexual a su hija I , del que resultó absuelto por Sentencia de 22 de Enero de 2007 dictada por el Juzgado de lo Penal nº 5 de Zaragoza.

El presente proceso de modificación de medidas se inició por demanda de Dª Mª Elena, presentada el 28 de mayo de 2010, en la que solicitaba la elevación de la pensión alimenticia de la hija menor y variación del lugar de entrega y recogida de la misma en el ejercicio del régimen de visitas, con supresión de la tarde intersemanal establecida; a dicho proceso se acumuló la demanda formulada por D. Fernando en igual fecha en la que se solicitaba la atribución de la custodia de la hija, régimen de visitas para la madre y limitación del uso de la vivienda familiar a tres años, en atención, sucintamente, a que el proceso de normalización del régimen de visitas entre el padre y la hija se ha visto obstaculizado estos años por las trabas e incumplimientos en que ha incurrido la madre, señalando que en ese contexto se produjo el fallecimiento del hijo M (29-12-09), no siendo el entorno en que se desarrollaban las vidas de

sus hijos el más adecuado, resultando, ante la gravedad de tales hechos, más capacitado el padre para ejercer la custodia de la menor.

TERCERO.- Son hechos acreditados en el proceso, que la menor ha vivido bajo la custodia de la madre en Zaragoza desde las fechas del divorcio a primeros de 2006 (el padre residía y trabajaba en Pamplona desde tiempo anterior a la ruptura conyugal), habiendo cursado su escolarización en el Colegio , con un rendimiento académico más que satisfactorio, siendo una niña de sobresalientes con gran interés por aprender y una actitud y relación con compañeras y profesores satisfactoria y cordial, mostrándose contenta y relajada con su grupo de amigas (certificado de la tutora escolar de I emitido el 18 -5-11, al folio 946 de las actuaciones), habiendo formado parte el curso 2010/2011 del grupo escolar de exploradores en cuyas actividades ha participado (certificado de la tutora de 18 de mayo de 2011, al folio 947).

La menor fue remitida a la unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil desde su pediatra de zona el 22 de junio de 2009, fecha desde la que está siendo tratada por Dª Mª C como Doctora Especialista en Psicología Clínica.

El informe de la Dra. de 5 de octubre de 2011, obrante a los folios 115 y siguientes, pone de manifiesto que Inés estaba antes de su traslado a Pamplona con su padre en octubre pasado, muy integrada en su grupo de amigas del colegio y vecinas de su domicilio, que le dan un gran soporte emocional, favoreciendo sus habilidades emocionales y sociales, presentando un alto nivel de adaptación en su entorno mas cercano, señalando en la niña un alto nivel de contención, con dificultad para expresar sus sentimientos, y de acatamiento en las formas y respeto ante los adultos, presentando un conflicto de lealtades con sus padres, verbalizando, finalmente, que no quiere abandonar Zaragoza, ni a sus compañeras ni amigas, ni su domicilio familiar.

La menor ha sido explorada en esta alzada en abril de 2012, llamando la atención la tristeza de su semblante, su continuo llanto y su deseo repetido de permanecer residiendo en Zaragoza, en su casa y asistir a su colegio con sus compañeras, manifestó no gustarle el colegio de Pamplona, dónde no tiene amigos, y desear seguir acudiendo a la consulta de su psicóloga de Zaragoza, con la que alegó tener buen entendimiento. No exteriorizó oposición alguna sobre sus padres, solamente querer mucho a su madre.

CUARTO.- Sentado lo anterior, debe analizarse el resto de la prueba practicada en estas actuaciones para determinar cual sea el sistema de custodia que favorece y protege el prioritario interés de I, único principio al que esta Sala debe someterse para resolver la cuestión planteada en esta alzada (Art. 76 Código Derecho Foral, Art. 39 de la Constitución Española, L.O. 1/96 de Protección del Menor Convención de los Derechos del Niño y Ley Aragonesa de Protección de la Adolescencia e Infancia).

Así, el informe psicológico aportado con su demanda por el Sr. de la Sra. T, sin el examen previo de la menor I ni de la madre, tras el análisis de la documentación facilitada por el mismo realiza una serie de conclusiones, señalando la concurrencia de interferencia parental de la madre contra el padre, y de manipulación de la menor por parte de aquella.

Se trata de un informe cuyo objeto y conclusiones exceden de forma manifiesta del cometido profesional de un Psicólogo, dado que versa esencialmente sobre la interpretación de documentos judiciales, obrantes en los múltiples procesos seguidos entre las partes.

El informe del psicólogo Sr. B practicado a instancia del Sr. carece de relevancia a los efectos aquí debatidos. Emite sus impresiones personales sobre la observancia de la interacción de la menor con su padre en un intervalo, dice, no inferior a ocho horas, (se desconoce la duración de la observación) sin conocer ni examinar a la menor, y, tras el examen de los documentos judiciales precedentes facilitados por el Sr., realiza la valoración de credibilidad de dos testigos, cuya implicación en los hechos y procesos judiciales seguidos entre las partes se ignora (f. 832 y siguientes).

El informe pericial judicial de la Psiquiatra Sra. C, parte de la exploración psicológica de ambos litigantes, sin examen ni análisis de la hija menor, y del examen de documentos judiciales y médico-legales de los mismos. Respecto a Dª Elena concluye en que presenta rasgos de personalidad negativista que pueden influir negativamente en la relación y desarrollo de la menor, precisando abordaje psicoterapéutico, sufriendo un Trastorno Adaptativo Mixto que precisa tratamiento, señalando que la misma nunca creyó que los abusos del padre no existieran, manteniendo un resentimiento permanente contra D. Fernando, “siendo de suponer que ha psicologizado a su hija, transmitiéndole sus miedos e inseguridades”.

Respecto al Sr. señala que su posición es de seguridad en sí mismo, pudiendo aparecer en situaciones relevantes ciertos rasgos obsesivos y de impulsividad teniendo tendencia a mostrar cierta deseabilidad social, y reflejando una personalidad estable y abierta a los cambios, con rasgos de personalidad impulsivos, con poca tolerancia a la frustración, “yo” fuerte, y abiertamente crítico. Sufre Trastorno Adaptativo Mixto sin pérdida de funcionalidad que precisa tratamiento.

Este informe no determina la existencia en ninguno de los litigantes de trastorno psiquiatrico alguno ni tampoco de trastorno de personalidad. Sin embargo, en el acto del Juicio la perito cuestionó la forma en que la madre gestionó el tema de los abusos sexuales de la menor en octubre de 2005, señalando que “lo hizo mal”, incidiendo en que sigue creyendo en su realización, “suponiendo” que ha psicologizado a su hija.

Se trata también de afirmaciones que superan claramente su cometido médico, emitiendo suposiciones, sospechas, sobre una persona no examinada clínicamente como la menor, con individualidad y personalidad propia, cuyo

estado psicológico desconoce, y valoraciones jurídicas sobre el proceso a seguir en asuntos de tanta gravedad como el delito en su día imputado, cuando la perito ha debido ser conocedora de que la denuncia de la madre fue fundada y apoyada en el informe del Psquiatra Infanto-Juvenil del Hospital Clínico, Sr. R (f. 364) que recomendaba, ante la posible existencia de abusos, por el estado de la menor, acudir a los Tribunales, de que el padre fue formalmente acusado por el Ministerio Fiscal en el proceso penal, y de que no existe otro mecanismo o forma de resolver, en protección siempre de los menores, cuestión de tal naturaleza.

Cuestiona también que la madre siga creyendo que el padre abusó de su hija, tildando tal creencia de anormal, cuando la perito debe ser también conocedora de que el Derecho Penal se basa en pruebas incriminatorias y las de los hechos enjuiciados resultan difícilmente concluyentes desde el punto de vista objetivo (nunca se tacharon de falaces los testimonios de la madre e hijo adolescente). Con ello no quiere resaltarse mas que la razonabilidad de la actuación y opinión de una madre ante acontecimientos tan dramáticos detectados médicamente que desencadenaron la ruptura conyugal, y la existencia de una claro clima de enconamiento desde entonces recíproco entre los cónyuges, del que es clara prueba la querella formulada por el Sr. contra la Sra. por delito de inducción al suicidio del hijo común, , delito de lesiones psicológicas, delito de tortura y de denuncia falsa, que ha sido archivada por Auto del Juzgado de Instrucción nº 4 de Zaragoza dictado el 3 de junio de 2011 (f. 862 y siguientes).

En definitiva, la Sra. C no ha detectado en la Sra. ni en el Sr. trastorno psiquiátrico ninguno ni de personalidad que desaconsejen la atribución a uno o a otro de la custodia de la menor.

QUINTO.- El informe psico-social del IMLA, señala rasgos de personalidad pasiva-agresiva en la madre y en el padre de carácter impulsivo, excesivo, de orden y de empatía emocional (f. 774 y siguientes).

Las peritos ya emitieron informe en el proceso penal en 2006 y no detectaron trastornos de personalidad en ninguno de los litigantes.

Señalan ahora que desde hace tiempo las visitas entre padre e hija se desarrollan con normalidad y que la mayor empatía emocional del padre con la menor aconseja atribuirle a él su custodia.

La falta de empatia de la madre la basan en que ésta les refirió que la niña estaba actualmente contenta, se encontraba bien e iba bien en el colegio, cuando ellas han detectado, por el contrario, bloqueo emocional en la menor, rasgos de introversión y que les proporciona poca información de su vida en el ámbito materno.

Sin embargo, la falta de extroversión actual de la menor (en el proceso penal no la constataron) no puede más que enmarcarse en el seno de la prolongada conflictividad reinante entre los padres y en la existencia del

proceso presente del que es conocedora, en que se están ventilando cambios radicales en su vida, obviando su opinión, que le deben inducir a no dar opiniones sobre sus actividades y preferencias dado el conflicto de lealtades detectado respecto de ambos. No puede ignorarse la existencia de empatía de la madre respecto de una niña cuyo desenvolvimiento académico y social es más que notable.

Las peritos informaron en la vista aconsejar la custodia para el padre sólo por el factor de su mayor empatía emocional, aconsejando sin embargo su continuidad en el centro escolar al que asistía, resaltando su buena adaptación a su entorno habitual y la existencia de una buena red de apoyo familiar para la madre.

D ebe ponerse de manifiesto que la Psicóloga y Trabajadora Social del Gabinete adscrito al Juzgado rehusaron emitir el informe encomendado por el Tribunal al haber visto compelida su libertad y cuestionada su labor profesional por el Sr., el que ha formulado contra la Psicologa denuncia, tal y como obra en la pieza separada incoada al efecto, actuación que se ha patentizado en las manifestaciones del Sr. reflejadas por la Dra. C referentes a haber recibido un trato vejatorio por profesionales implicados en el proceso, a los que imputa un trato injusto, y por el Sr. B en su informe con referencia al Doctor R (emisor del informe sobre los supuestos abusos), las que no han sido objeto de calificación alguna por ningún perito.

SEXTO.- el Doctor D, Jefe de Psiquiatría del Hospital Clínico de Zaragoza (f. 813 y siguientes) que trata a la Sra. ha informado que ésta padece un Trastorno de Adaptación derivado de los graves acontecimientos vividos con motivo del fallecimiento del hijo, , que estaba en tratamiento psiquiátrico desde 2006, encontrándose en la actualidad con minoración de los síntomas e incorporada a su trabajo. Descarta rotundamente la existencia de un trastorno de personalidad, señalando que los rasgos de personalidad como forma de diagnóstico, carecen de significación clínica porque cualquier persona puede ser etiquetada de rasgos presentes en alguna categoría de trastorno de personalidad.

Señaló conocerla también por ser su madre paciente suya, no habiendo detectado problemas en la relación con su hija, siendo capaz de asumir con eficiencia y afecto su papel de madre, desarrollando con normalidad su actividad profesional y relacional.

SEPTIMO.- Visto el informe remitido por S.E.F. obrante al folio 316, en el que se señala que desde noviembre de 2008 las visitas entre padre e hija se desarrollan con normalidad, siendo terceras personas y no la madre las que entregaban y recogían a la menor del Centro, que las visitas ya no se desarrollaban en la actualidad en el Centro, acudiendo sin problemas la menor a Pamplona dónde reside el padre, debe concluirse en que la obstaculización que

atribuye el Sr a la Sra y en que funda su demanda, pudo existir en periodos pasados, pero no en el momento en que se planteó el pleito, obedeciendo en mayor medida a las difíciles circunstancias en que se produjo el divorcio con ampliaciones sucesivas del régimen de visitas (inicialmente tutelado), habiéndose logrado desde entonces la normalización en el régimen de estancias entre padre e hija.

No puede otorgarse entidad para fundar la petición de cambio de custodia solicitado al fallecimiento del hijo en las trágicas circunstancias acaecidas; los alegatos del actor carecen de la razonabilidad necesaria teniendo en cuenta que él como padre participaba y debía participar en su sustento en todos los órdenes y mantenía un régimen de comunicación con él estable, habiendo reconocido ante los profesionales intervinientes una relación difícil con su hijo.

Todo ello unido a las consideraciones de la Dtora. D sobre la menor, I, a las llamadas de atención que la niña hace en sus misivas, en los exámenes escolares, al claro y drástico descenso de su rendimiento escolar en Pamplona, habiendo informado en esta alzada el Colegio su preocupación por su actitud, escasa participación y reiteradas expresiones de insatisfacción repetidas en su exploración, y a la ausencia de impedimento alguno en la madre, determina el necesario cambio de custodia a favor de esta última (sentido en que informa el Ministerio Fiscal en esta alzada), en cuyo entorno la menor se encuentra segura y adaptada y cumple sin problemas el sistema de visitas con su padre, con el que nunca ha manifestado llevarse mal, preservándose así su prioritario interés dirigido a su correcto desarrollo.

Los tristes acontecimientos vividos por una niña de tan corta edad, aconsejan favorecer su bienestar, estabilidad y seguridad, quedando en manos de sus progenitores favorecer tales fines evitando inmiscuirla en problemas pasados e irresolubles.

OCTAVO.- La anterior medida determina la necesaria atribución a la madre e hija del uso de la vivienda familiar, imponiendo la Ley un límite temporal (art. 81-3 c del Derecho Foral).

El Sr. tiene satisfechas sus necesidades de alojamiento. Reside en un piso en propiedad en Pamplona fruto de la herencia de sus padres.

La madre e I han vivido siempre en la casa de Montañana, dónde cuentan con buena relación vecinal (Informe de la Psicóloga- Clínica y documental aportada en la vista).

I tiene 11 años, los cumple en días, ha pasado por un proceso penal contra su padre contando cuatro años, por el divorcio conflictivo de sus padres, por el fallecimiento de su hermano, por un régimen de visitas tutelado y luego ampliado, y ahora por un cambio contrario a sus expectativas, circunstancias pese a las que se desenvuelve con serenidad y equilibrio en el ámbito escolar, en el de relación con sus iguales y con cada uno de sus progenitores. Ha

manifestado que le gusta mucho su casa y se lleva bien con las vecinas de su edad. No procede en atención a ello introducirle nuevos cambios con carácter inmediato.

El uso de la vivienda familiar se concede a madre e hija hasta que ésta cumpla los 18 años de edad, siete años.

NOVENO.- Por lo que respecta a la pensión alimenticia se ha acreditado una retribución líquida del Sr. en el I.R.P.F de 2009 de 33.880,31 euros, habiendo percibido en nómina de Abril de 2010 2.195,21 euros.

La Sra. declaró en el I.R.P.F de 2010 un rendimiento neto de 20.657,25 euros, su nómina en Agosto de 2010 fue de 1.133,90 euros.

Es cierto que el Sr. V realiza los desplazamientos desde Pamplona dónde reside a Zaragoza. La menor cursará ESO próximamente y después el Bachillerato. Tiene gastos de comedor escolar.

En estas condiciones y en previsión del futuro aumento de los gastos de la menor se estima más adecuado establecer una pensión alimenticia de 450 euros mensuales a cargo del padre y desde la fecha de la presente resolución ante la vigencia del Auto de Medidas Provisionales dictado el 17-9-2010. Los gastos extraordinarios se satisfarán por mitad como han aceptado los litigantes.

DECIMO.- Finalmente, y por lo que concierne al régimen de visitas entre padre e hija, debe mantenerse el vigente hasta que se dictó la sentencia del presente pleito, establecido en los autos de 17-3-2008 y 11-11-08dictados por el Juzgado de instancia.

La madre pidió la sustitución del S.E.F. por el P.E.F. de C/Blasón Aragonés por su mayor cercanía al Colegio y al domicilio como lugar de entregas y recogidas.

El padre propone recogidas en el colegio y entregas en el domicilio familiar en su contestación y mantener el S.E.F. para los periodos vacacionales, mostrando conformidad con la supresión del abono de los gastos de taxi.

Se accede a la sustitución del S.E.F. por el P.E.F..

Deberán ser las partes, o a través de sus letrados, los que decidan la supresión de dicho servicio en atención a las relaciones existentes entre ellas.

No procede modificar los horarios de entrega y recogida de la menor, por ser adecuados los vigentes.

En cuanto a la tarde intersemanal de visitas entre padre e hija que los citados autos instauraron, el Sr. alude a que no la ha cumplido porque se lo pidió así su hijo por interferirle en sus tareas escolares.

No la ejerció con su hijo, pero con I tampoco.

Se trata de una tarde con horario escaso, desde la salida del colegio hasta las 20 horas en que la menor debe volver al domicilio materno y el padre trasladarse desde Pamplona a Zaragoza, para regresar después. Los inconvenientes que alegó el chico entonces resultan predicables respecto de I, y,

en definitiva, desde noviembre de 2008 no se ha llevado a cabo. Debe suprimirse tal pronunciamiento."

***** Sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Ejea de los Caballeros de 24 de mayo de 2012. Modificación del régimen de visitas. Derechos de la personalidad del menor**

"Primero.- El artículo 775.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que "*el Ministerio Fiscal, habiendo hijos menores o incapacitados y, en todo caso, los cónyuges podrán solicitar del tribunal la modificación de las medidas convenidas por los cónyuges o de las adoptadas en defecto de acuerdo, siempre que hayan variado sustancialmente las circunstancias tenidas en cuenta al aprobarlas o acordarlas*".

El régimen de visitas vigente a favor del padre es el que se deriva de la Sentencia de 4 de noviembre de 2004, dictada en este Juzgado, es decir, fines de semana alternos y la tarde de los sábados en que no le corresponda al padre el fin de semana. Asimismo, mitad de vacaciones de verano, Navidad y Semana Santa.

Los motivos para solicitar la modificación de medidas son el la problemática que ha existido para el efectivo cumplimiento del régimen de visitas referido, así como el hecho de que la madre y el hijo viven ahora en Fraga.

Con posterioridad a la demanda, y dado el tiempo transcurrido desde su interposición, dichas circunstancias han vuelto a cambiar, pues parece que en los últimos meses el régimen de visitas se ha cumplido de una forma mucho más regular, y ya no residen en Fraga sino en Ejea de los Caballeros.

La demanda no propone un régimen alternativo, aunque en la vista sí se concretó la petición, en los términos expuestos en los antecedentes de hecho.

Segundo.- El presupuesto para una modificación de medidas es la alteración de las circunstancias que se tuvieron en cuenta a la hora de acordarlas.

Estas circunstancias han variado, principalmente la residencia habitual del menor. Considero que ello es suficiente para entender inadecuado el anterior régimen de fines de semana alternos más sábados por la tarde, puesto que viviendo ambos progenitores en la misma localidad, parece mucho más lógico que ambos puedan disfrutar en condiciones de igualdad de los fines de semana del menor, es decir, que se establezca un régimen de fines de semana alternos puro, sin añadir los demás sábados por la tarde para el progenitor no custodio.

El informe social propone un régimen de visitas "mínimo" de fines de semana alternos, y el informe psicológico propone un régimen de visitas de fines de semana alternos con un día entre semana. La visita del fin de semana empezaría el sábado por la mañana. Sin embargo, por el motivo de la residencia de ambos progenitores en la misma localidad, y a la vista de la edad del menor,

entiendo que no debe haber ningún problema para que la visita de fin de semana comience el viernes por la tarde, en lugar del sábado por la mañana.

Por otra parte, considero de gran importancia lo manifestado por el menor, , en la exploración efectuada por quien suscribe y por el Ministerio Fiscal. En dicha exploración, de la cual se levantó acta que obra en las actuaciones, se expresó con bastante madurez y razonabilidad, y explicó a preguntas del Ministerio Fiscal cómo su deseo de restringir las visitas con el padre los fines de semana vienen dados, principalmente, por las dificultades que encuentra con él para poder desarrollar ciertas actividades que le gustan. Concretamente manifestó que ensaya con la banda los viernes por la noche y que determinados sábados va a jugar a rugby con el equipo al que pertenece, normalmente fuera de Ejea.

El ejercicio de la autoridad familiar debe hacerse siempre en interés del hijo (artículo 64 del Código de Derecho Foral de Aragón). Por otra parte, cualquier decisión que afecte al hijo menor de edad debe adoptarse en atención a su beneficio e interés (artículo 76.2 del mismo Código). A ello debe añadirse el derecho del menor a ser oído antes de la adopción de este tipo de decisiones (artículos 6 y 76.4 del referido Código), y el reconocimiento expreso de que, dada la edad de , tiene derecho para ejercer los derechos de la personalidad.

Entiendo que permitir a que pueda desarrollar las actividades que mencionó en su exploración (música y rugby) afecta al libre desarrollo de su personalidad. Se trata de dos actividades positivas para su desarrollo físico e intelectual, incluso social, puesto que se trata de actividades que se desarrollan conjuntamente con otras personas. Son, además, dos actividades adecuadas para un menor de la edad de . Y, siendo positivas y adecuadas, se trata de dos actividades a las que el menor da importancia, que le gustan, y que desea desarrollar, sin que exista ni se haya expresado ningún motivo en contra ni ningún elemento negativo de las mismas, por lo que su obstaculización no tiene justificación alguna.

Por ello, considero que el desarrollo del régimen de visitas que se establezca no debe interferir en estas dos actividades de . El menor tiene derecho a que se respete una voluntad razonable, que se encuentra dentro de la esfera en que la propia ley le reconoce cierta capacidad, y que no perjudica el régimen de visitas establecido porque, por una parte, las visitas son, sobre todo, un derecho del menor, y no del padre; y, por otra, porque lo importante del período de tiempo que dura la vista no es tanto la duración temporal, sino el modo en que se desarrolla la visita.

Por lo expuesto, los fines de semana alternos de los que disfrutará el padre comenzarán el viernes al acabar sus clases de música y se prolongarán hasta las 20:00 horas del domingo, no pudiendo impedir el padre que durante el fin de semana acuda a la actividad de rugby, cuando coincida que durante una visita haya un partido o un entrenamiento. El propio padre pareció estar de acuerdo en esto, a la vista de lo que manifestó en la vista.

Asimismo, el padre podrá estar con el menor los jueves desde la salida del colegio hasta las 20:00 horas, a la vista de que todas las partes estuvieron de acuerdo en esto.”

***** Sentencia de la Audiencia Provincial de Huesca de 31 de mayo de 2012. Guarda y custodia en proceso de divorcio. Necesidad de plan de relaciones familiares para custodia compartida. Cuantía de pensión alimenticia**

"PRIMERO : El primero de los pronunciamientos impugnados por el demandado es el relativo a la guarda y custodia de la hija del matrimonio, que en la Sentencia de instancia se ha atribuido a la demandante. Trata aquél de apoyar su tesis en el acta de exploración de la menor, la cualno ha mostrado preferencia por vivir con ninguno de sus progenitores sino por hacerlo en Sarvisé, en donde vive el apelante, lo cual será bueno para ella, siempre según el recurso,dado que en un ámbito rural se pueden fomentar una serie de valores importantes para el desarrollo de su persona que no son factibles en una ciudad. Sin embargo, no puede decirse que la voluntad de la menor, tal y como aparece expresada en el acta de exploración, no haya sido tenida en cuenta por la Sra. Juez, quien ha considerado que la especial vinculación que la joven parece mostrar con la localidad de Sarvisé, en donde pasó los primeros años de su vida, puede seguir manteniéndose con el régimen de visitas que ya se había establecido en sede de medidas provisionales y que ahora se mantiene, pues la menor acude a dicha población no sólo los fines de semana que le corresponden a su padre como progenitor no custodio sino también en vacaciones y en otras fechas, ya que, aunque la niña reside en Huesca con su madre, ésta se desplaza prácticamente a diario a Sarvisé, que es donde tiene su negocio o taller de restauración, por lo que ni la menor ni su madre han perdido por completo los vínculos con dicha localidad. Desde otro punto de vista, la menor reside y cursa estudios en Huesca desde hace unos cinco años, habiéndose consolidado una situación de estabilidad desde el punto de vista escolar que, según ha informado el centro, ha sido beneficiosa para el rendimiento académico de la menor, al menos hasta el momento en que las tensiones entre sus padres se han agudizado con ocasión de su crisis matrimonial. Así las cosas, y no pareciendo razonable establecer el entorno más idóneo para la menor a partir de afirmaciones genéricas sobre la vida en un ambiente rural o urbano, asumimos los argumentos desarrollados en la Sentencia de instancia en cuanto a la conveniencia de que la menor continúe en el momento actual bajo la custodia de su madre.

No desconoce la Sala, por otra parte, que el apelante ha solicitado, bien que subsdiariamente, un régimen de custodia compartida, pero poco tiene que añadir la Sala a lo ya razonado al respecto por la Sra. Juez. Puede observarse, en efecto, que a esta cuestion tan sólo se le dedican seis líneas en la contestación/reconvención y siete en el recurso, en cuyas circunstancias resulta difícil admitir que el progenitor proponente del régimen compartido haya

presentado un auténtico plan de relaciones familiares a los efectos del *art. 80.2 del Código Foral Aragonés*, pues se limita a decir que el reparto se haga por años alternos sin realizar ninguna otra precisión pese a la evidente longitud de cada período de custodia, por lo que tampoco cabe reprocharle a la Sra. Juez que tilde de indefinida esta petición subsidiaria, por no mencionar, como ya se hace en la Sentencia de instancia, la notable distancia existente entre Sarvisé y Huesca, que pudiera repercutir en perjuicio del desarrollo escolar de la menor, la cual, obviamente, no podrá cursar un ciclo de estudios de manera alterna en dos localidades distintas. Por último, el informe psicológico del Instituto de Medicina Legal de Aragón, en el que se recomienda el mantenimiento del régimen de custodia fijado en el Auto de medidas provisionales (con ocasión de las cuales, por cierto, el hoy apelante nada solicitó en cuanto a la custodia compartida) nos inclina por considerar, como también ha hecho la Sra. Juez, que dicho régimen es el adecuado al interés de la menor, lo que permite, conforme al propio *art. 80.2 del Código Foral*, exceptuar el sistema que la propia Ley Aragonesa ha configurado como preferente.

SEGUNDO : Se recurre asimismo la Sentencia, siempre partiendo de la base de que se mantenga la custodia a favor de la madre, por una cuestión relacionada con el régimen de visitas, en concreto por la designación del domicilio de la madre como lugar de entrega y recogida de la menor, tal y como viene delimitado en la Sentencia de instancia y en su Auto aclaratorio. Observamos al respecto que, si bien en la súplica del recurso se pideque el lugar de entrega de la menor sea Sarvisé, en el cuerpo del escrito se especifica mucho más al afirmarse, sobre la base de que, como se dice en la Sentencia,la madre está todos los fines de semana en Sarvisé y en los periodos de vacaciones, queesta parte[apelante]entiende que lo lógico será que la madre suba junto la niña a Sarvisé, sin que sea necesario que mi representado se traslade hasta Huesca, salvo aquellos fines de semana que por el motivo que sea la madre no quiera o no pueda trasladarse a Sarvisé o cuando sea el padre el que entre semana baje a ver a la niña a Huesca. Dado que la petición, formulada en los términos que acabamos de transcribir, resulta razonable y no parece que pueda producir un gran perjuicio a la demandante, sin que tampoco lesione el interés de la menor, procede acceder a lo solicitado con estimación parcial del recurso en este particular

TERCERO : El tercer motivo de apelación se refiere a la cuantía de la pensión alimenticia a favor de la hija menor, que en la Sentencia se ha fijado en 400 euros mensuales y que el recurrente solicita, siempre partiendo de la base de que se mantenga la custodia a favor de la madre, que se reduzca hasta 300 euros. En este sentido, alega el demandado que el importe de los gastos acreditados de la menor asciende a 190 euros en conceptos de comedor y de actividades extraescolares, mientras que él, por efecto de la crisis, ha

experimentado una agravación de la situación patrimonial de su negocio. Sin embargo, esta circunstancia tampoco ha dejado de ser tenida en cuenta por la Sra. Juez, quien ha rebajado en la Sentencia la pensión de 500 euros inicialmente establecida en sede de medidas provisionales al considerar probado que el apelante se ha visto obligado a reducir el número de horas de apertura al público de su restaurante y a prescindir de una parte de sus trabajadores, pero fijando la nueva cuantía en 400 euros, y no en una cantidad inferior, en consideración al conjunto de las actividades que explota aquél o de las que es titular (turismo de aventura, cabezas de ganado y fincas rústicas, amén del restaurante), las que han conducido a deducir que la capacidad económica del apelante puede ser superior a la que resulta de sus declaraciones fiscales, sin que la Sala, una vez examinada la documentación aportada a los autos, encuentre motivos suficientes para discrepar de esta conclusión.

CUARTO : Finalmente, y en cuanto a la atribución del uso del domicilio conyugal de Sarvisé, que ha correspondido a la madre al tener la custodia de la menor, hay que considerar que lo que se acuerda en la Sentencia es que dicho uso queda limitadohasta que se lleven a cabo las obras necesarias para individualizar los dos apartamentos de los que se compone dicha vivienda, previsión que -y esto no es lo menos importante- no deja de ser coherente con el mandato del *art. 81.3 del Código Foral*, según el cualla atribución del uso de la vivienda familiar a uno de los progenitores debe tener una limitación temporal que, a falta de acuerdo, fijará el Juez. Esta solución tampoco deja de ser razonable teniendo en cuenta que, pese a que la madre y la hija viven en Huesca, ya se ha dicho que la primera mantiene su negocio en Sarvisé y que en alguna otra ocasión se desplaza a dicha localidad, pudiendo estar la menor con ella cuando no se trate de fines de semana en los que le corresponde visita a su padre. En cualquier caso, queda constancia de que han comenzado las obras realizadas a fin de que el inmueble se divida dando lugar a dos apartamentos independientes, en cuyo momento cesará la atribución temporal del uso de la vivienda, por lo que no vemos inconveniente en mantener por ahora esa solución.”

***** Auto de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 5 de junio de 2012. Guarda y custodia. Fallecimiento del padre. Enfermedad e inestabilidad de la madre**

"PRIMERO.- Recurre Dª. Elvira el Auto dictado en la instancia el 27 de Diciembre de 2011, suplicando su revocación y se le conceda la guarda y custodia de su hija menor S, y a la abuela paterna un amplio régimen de visitas, todo ello con la supervisión de los Órganos administrativos de protección de menores, y, subsidiariamente, en caso de no otorgarse tales medidas, se le conceda un amplio régimen de visitas de fines de semana alternos con pernocta.

SEGUNDO.- Alega la recurrente que pese a su enfermedad psíquica y su bajo cociente intelectual, está sometida a control farmacológico y cuenta con la ayuda de su hermana y familia extensa para poder cuidar a su hija menor, con supervisión de los Servicios de Protección de menores, que controlen las pautas de escolarización, higiene y demás de la niña, así como la evolución de su enfermedad, debiendo, en cualquier caso, concedérsele amplia libertad para verla y estar con ella.

TERCERO.- El proceso que nos ocupa fue instado por Dª. Concepción, al amparo de los Arts. 10, d) del Código de Derecho Foral y 158-4 del Código Civil, en solicitud de que se le concediese la guarda y tutela provisional de la menor, nacida el 2008, su nieta, hija de su hijo Fernando y de Dª. Elvira, en atención al fallecimiento del citado hijo el 2011, a que desde entonces se ha hecho cargo permanente de su nieta, ante la imposibilidad de la madre para ocuparse de la menor dada su enfermedad psíquica, esquizofrenia, y la vida de marginalidad que desarrolla, sin domicilio fijo, ni trabajo, ni ingresos y sin capacidad para solventar las necesidades vitales básicas de su hija.

Según informe diagnóstico del INSS de 16-06-09, y posteriores de Junio de 2011 y Diciembre de 2011, se acredita que en Marzo de ese año se inició expediente de intervención sobre la pareja de la recurrente y la niña, por una clara situación de riesgo de la menor, presentando a Dª. Elvira, la madre, con diagnóstico de esquizofrenia indiferenciada, minusvalía de un 66%, escaso seguimiento psiquiátrico, escaso control de su enfermedad, bajo cociente intelectual, nula capacidad de comprensión y falta de recursos personales y adaptativos para afrontar las demandas de la vida cotidiana, careciendo de ingresos suficientes para la subsistencia y de toda experiencia laboral. Señala que la abuela y tía paternas han apoyado y supervisado desde su nacimiento las necesidades de su hija menor, tanto a nivel emocional como material.

Se desarrolló un programa de intervención familiar durante dos años, derivándose después el caso al CMSS de Delicias para su seguimiento.

La abuela ha aportado dos denuncias por supuestas agresiones de la madre de la menor tras el fallecimiento del padre.

En definitiva, la situación en que se encuentra la menor tras el fallecimiento de su padre, acogida y bajo el cuidado de la abuela paterna, debe ratificarse, para preservar su integridad y desarrollo, a la vista de la situación de inestabilidad en que se encuentra la madre biológica de la menor.

El recurso debe desestimarse.”

***** Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 6 de junio de 2012. Custodia compartida. Capacitación de los progenitores. Prueba pericial. Reparto de funciones durante la convivencia no es vinculante.**

"PRIMERO.- De las actuaciones practicadas en las instancias resultan los siguientes hechos relevantes:

Dª Gemma S. B. y D. Roberto A. P. contrajeron matrimonio el día 21 de mayo de 2005, de cuya unión nació un hijo, llamado , el día de 2007.

Dª Gemma S. B. interpuso demanda de divorcio contra su cónyuge, solicitando, entre otras medidas, que la guarda y custodia del hijo fuera otorgada a la madre, compartiendo ambos progenitores la autoridad familiar y estableciéndose un régimen de comunicación con el padre. Éste se opuso a la demanda y solicitó, por su parte, que ambos progenitores compartan la autoridad familiar y la guarda y custodia de su hijo menor , instando un régimen de convivencia y un plan de relaciones familiares relativo a visitas, uso de la vivienda familiar y contribución a los gastos del menor.

Tramitado el proceso, el Juzgado de Primera Instancia dictó sentencia en fecha 31 de marzo de 2011 que, tras decretar la disolución del matrimonio por causa de divorcio, estableció que la guarda y custodia del hijo menor se otorga a ambos progenitores de forma compartida, con régimen de visitas para el progenitor no custodio, y otras medidas relativas a la atribución del uso de la vivienda familiar y pago de gastos, en los términos en que se han recogido en los antecedentes fácticos.

Recurrida en apelación la sentencia por Dª Gemma S. B., la Sección nº 2 de la Audiencia Provincial de Zaragoza dictó sentencia en fecha 13 de octubre de 2011, que estimó el recurso de apelación, revocó parcialmente la sentencia de Primera Instancia y estableció que la guarda y custodia del hijo menor se otorga a la madre, estableciendo un régimen de visitas a favor del padre y distribución de vacaciones escolares, además de fijar un nuevo régimen de pensión alimenticia para el hijo y abono de gastos, en los términos expresados en los antecedentes fácticos. Dicha sentencia contaba con voto particular del Presidente de la Sala, que consideraba procedente la desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia de primera instancia.

Frente a dicha sentencia la representación de D. Roberto A. P. interpuso recurso extraordinario por infracción procesal, junto con recurso de casación. En la tramitación del primero de ellos, la Sala decidió dar traslado a las partes al estimar que podía concurrir causa de inadmisión, y en dicho trámite la parte recurrente desistió del recurso extraordinario por infracción procesal, instando la continuación exclusivamente por el recurso de casación. Así fue acordado por la Sala, que admitió a trámite el recurso de casación.

SEGUNDO.- El recurso de casación se interpone fundado en dos motivos: el primero denuncia la infracción, por interpretación errónea, del art. 80 del Código de Derecho Foral de Aragón (en lo sucesivo CDFA), anteriormente art. 6 de la Ley 2/2010, de 26 de mayo, de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de la convivencia de los padres, puesto en relación con el art. 39.2 y 4 de la Constitución Española. En concreto, denuncia que se ha infringido la necesidad de adoptar de modo preferente la custodia compartida en interés de los hijos menores, salvo que la custodia individual sea más conveniente, lo que la parte recurrente entiende que no sucede en este caso. El segundo motivo denuncia la infracción, por inaplicación, del art. 76.2 del CDFA, antes art. 2.2 de la Ley 2/2010, en relación con el art. 11.2, apartados a) y b) de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, en cuanto dispone que toda decisión o resolución que afecte a los hijos menores de edad se adoptará en atención al beneficio o interés de los mismos, y explicando que en el caso de autos la sentencia de la Audiencia Provincial ha conculcado el principio de *bonum filii.*

Dado que ambos motivos concurren en estimar necesario tener en cuenta de modo prioritario el interés del menor, e interesando el recurrente se acuerde en definitiva la revocación de la sentencia de la Audiencia Provincial y la confirmación íntegra de la dictada por el Juzgado de Primera Instancia, los dos motivos van a ser objeto de examen conjunto, por cuanto las argumentaciones que lo sustentan confluyen en solicitar la adopción del régimen de custodia compartida para el hijo menor, que la parte recurrente estima más adecuado para el interés de éste.

TERCERO.- La sentencia de la Audiencia Provincial ha fundado con amplitud la decisión que adopta, estimatoria del recurso de apelación y revocatoria del pronunciamiento del juez de primera instancia sobre guarda y custodia del hijo menor, que la Sala decide otorgar a la madre, tras explicitar, especialmente en el fundamento tercero, los elementos de hecho concurrentes. Expresa allí, como hechos comprobados, que el hijo del matrimonio cuenta con tres años y medio de edad, acude al colegio desde las nueve horas hasta las doce horas y desde las quince horas hasta las diecisiete horas. Desde su nacimiento, ha sido la madre la que se ha encargado personalmente de su atención y cuidado cotidianos, con la ayuda de una cuidadora que la suple en los momentos en que ejerce su horario laboral, en tareas como llevarlo al colegio, recogerlo y reintegrarlos a medio día tras darle la comida. La madre trabaja en una oficina de La Caixa, de ocho horas a quince horas, y además los jueves por la tarde de 16,30 horas a 20 horas, de octubre a abril y ha adaptado siempre sus exigencias laborales a las del cuidado de la familia. El padre es jefe de servicios de Fomento de Construcciones y Contratas S.A., con categoría laboral de titulado superior, teniendo asignado el uso de un vehículo de la empresa debiendo realizar por motivos profesionales y para la empresa diferentes viajes, constando en la realización de 2010 de tres

viajes, dos en septiembre y uno en junio. Tiene asignado horario laboral de 8 horas a 14 horas, de 16 horas a 19 horas en invierno y de 8 horas a 14,30 horas en verano, y desde la separación de hecho, hacia septiembre de 2010, solicitada a la empresa la entrada a las 8,30 horas y permiso la tarde de los jueves a descontar de sus vacaciones. Los rendimientos netos del Sr. A. en la declaración 2009 del IRPF fueron de 55.602,94 €, y los de la Sra. S. de 34.602,74 €.

Tras estas consideraciones fácticas, fundamenta la decisión que adopta en el apartado quinto, al afirmar *en atención a los hechos acreditados, a la escasa edad del menor, especialmente vinculado a su madre, con unos requerimientos (hábitos de comida, sueño) muy concretos, a las exigencias laborales del padre, que hasta ahora le han impedido asumir su cuidado cotidiano, y a la disponibilidad de la madre, cabe concluir en que la petición del demandado carece de la consistencia necesaria en orden a demostrar su plena disponibilidad para asumir una custodia compartida, por basarse en meras previsiones (cambio de horario laboral) y no en realidades acompañadas de una dedicación efectiva y personal a la atención diaria del hijo.*

CUARTO.- La sentencia de la Audiencia parte, para estimar el recurso de apelación, de que la petición del demandado carece de la consistencia necesaria en orden a demostrar su plena disponibilidad para asumir una custodia compartida, por basarse en meras previsiones y no en realidades acompañadas de una dedicación efectiva y personal a la atención del hijo. Tales argumentos olvidan el punto de partida de la norma legal aplicable, art. 80 del CDFA, que establece el sistema de custodia compartida como aquel que satisface en mayor medida el interés del menor, en orden al pleno desarrollo de su personalidad. Esta Sala de casación ha establecido, en sentencias de 30 de septiembre y 15 de diciembre de 2011, que se aplicará esta forma de custodia siempre que el padre y la madre estén capacitados para el ejercicio de las facultades necesarias a tal fin, y no concurran otros elementos que hagan más conveniente la custodia individual.

Acerca del resultado de la prueba practicada en los presentes autos y de su valoración en la sentencia recurrida, hemos de hacer dos consideraciones: a) La única prueba pericial practicada en autos, consistente en informe del equipo psicosocial adscrito al juzgado, tras valorar las circunstancias concurrentes, propone el sistema de custodia compartida del menor por anualidades alternas, y frente a dicho informe no existe en autos otro dictamen experto contradictorio; b) La realidad preexistente relativa al cuidado y atención al menor, constante matrimonio, no debe ser trasladada acríticamente a la situación de divorcio, ya que en aquella situación los cónyuges pueden repartir su tiempo y dedicar mayor o menor intensidad a la atención del menor, sin que ello implique que aquel que se ha dedicado preferentemente a tareas laborales se ha desvinculado de la atención y educación del hijo, o está incapacitado para ello. El reparto de funciones entre los cónyuges durante el tiempo de

convivencia matrimonial no es vinculante para las decisiones a adoptar en supuestos de separación o divorcio, pues a partir de la ruptura de la convivencia ambos pueden asumir las cargas relativas a la custodia de los hijos menores, siempre que tengan capacidad para ello y no conste antecedente de desatención o descuido.

En el caso presente consta comprobado que el padre recurrente, a partir del momento de la separación, adaptó su horario laboral a las necesidades del menor, y que su capacidad para hacerse cargo de la custodia de éste resulta acreditada por prueba pericial, de la que resulta que se ha implicado en los cuidados cotidianos del niño y puede dedicar parte de su tiempo a su atención, no existiendo otros elementos probatorios que desvirtúen esa apreciación.

En tales términos, el recurso debe ser estimado, por cuanto concurren los elementos exigidos en la norma para hacer aplicación del sistema de custodia compartida, que el legislador ha fijado como preferente.

QUINTO.- Así la Sala, retomando la instancia, acuerda la confirmación de la sentencia recaída en la primera instancia, en cuanto aplicó correctamente las normas citadas en los precedentes fundamentos y resolvió conforme a ellas las pretensiones deducidas.”

***** Sentencia de la Audiencia Provincial de Huesca de 8 de junio de 2012. Cuantía de la pensión de alimentos para hijo menor en proceso de divorcio**

"PRIMERO .- 1. El recurso de **Bibiana** se limita a impugnar la cuantía de 150 euros al mes con la que el padre, **Sixto** , ha de contribuir para atender las necesidades del hijo común. La apelante pretende que se mantenga la de 280 euros fijada en las medidas provisionales de común acuerdo, o subsidiariamente la de 250 euros reclamados por el demandado en la contestación a la demanda para el caso de que se le concediera la guarda y custodia del menor.

2. En el *art. 82 delCódigo del Derecho Foral de Aragón*, aprobado por *Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, se regulan losgastos de asistencia a los hijostras la ruptura de la convivencia de los padres. Previene queambos[progenitores]contribuirán proporcionalmente con sus recursos económicos a satisfacer los gastos de asistencia de los hijos a su cargo, art. 81.1. Y que la contribución a los gastos ordinariosse determinará[n] por el Juez en función de las necesidades de los hijos, de sus recursos y de los recursos económicos disponibles por los padres, art. 82.2*.

3. El recurso no puede prosperar por las razones expuestas en la sentencia, que expresamente aceptamos y damos por reproducidas. Por ello consideramos adecuada la cantidad fijada en la sentencia, atendiendo a los ingresos del progenitor no custodio y a la edad del menor, nacido el NUM003 de 2008. La situación económica de ambos progenitores, y en particular la del progenitor no custodio -el padre- no permite una cantidad superior a los 150 euros fijados en la sentencia. Y ello porque, como se destaca en la resolución impugnada, los mayores ingresos de este dependían de un trabajo que había desempeñado y que creía, en la fecha de las medidas provisionales, que iba a conseguir, lo que no ocurrió, sin que haya prueba en contrario. Por consiguiente, los datos a tener en cuenta son los ingresos que percibe como vigilante de seguridad en cuantía de 940 euros, con los que tiene que hacer frente al alquiler de la vivienda y a su propia manutención, así como a los gastos generados por propiedad común, por lo que no puede incrementarse."

***** Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Calatayud de 15 de junio de 2012. Custodia compartida. Ampliación del régimen de visitas. Alimentos**

"PRIMERO.- La parte actora ejercita en su demanda acción de de divorcio, y solicita se modifiquen algunas de las medidas que se acordaron en el convenio regulador que se aportó por las partes en el proceso de divorcio. En concreto, interesa que se fije un régimen de guarda y custodia compartida respecto de los dos hijos menores habidos durante el matrimonio, y que se atribuya el uso y disfrute de la vivienda familiar a la esposa en tanto se produzca la venta de la misma. Subsidiariamente, para el supuesto de no fijar un régimen de guarda y custodia compartida, interesa se fije a su favor un amplio régimen de visitas, así como una pensión de cien euros por cada uno de los hijos menores.

La parte demandada se opone a las pretensiones ejercitadas de contrario, alegando que ella es la persona más idónea para ejercer la guarda y custodia de ambos menores, por ser quien ha ostentado su cuidado. Por el contrario, entiende que la parte actora es la persona menos idónea por no contar con los medios personales para ello. Además, entiende la parte demandada que no puede fijarse un régimen de guarda y custodia compartida toda vez que ello iría en contra del artículo 80.6 del Código de Derecho Foral de Aragón, al encontrarse la parte actora inmersa en un procedimiento penal de violencia de género.

El Ministerio Fiscal se opone a que se fije un régimen de guarda y custodia compartida a favor de ambos progenitores.
Entiende que debe continuar la madre ejerciendo la guarda y custodia del hijo menor, si bien debe fijarse un régimen amplio de visitas consistente en fines de semana alternos desde el viernes a la salida del colegio de los menores hasta las 20 horas del domingo, y dos tardes intersemanales (martes y jueves) desde la salida del colegio hasta las 21 horas, salvo en la semana que al padre le corresponda trabajar en horario de tarde.
Interesa se fije una pensión alimenticia a favor de cada uno de los hijos menores de 210 euros.

SEGUNDO.- Se dan los requisitos establecidos en el artículo 86 CC para decretar el divorcio y la consiguiente disolución del vínculo matrimonial, teniendo en cuenta que han trascurrido más de tres meses desde la celebración del matrimonio.

TERCERO.- La cuestión litigiosa se centra en determinar si procede modificar el régimen de guarda y custodia que se fijó en la sentencia de separación, que aprobó el convenio regulador aportado por las partes de fecha 15 de septiembre de 2009.

La disposición transitoria sexta del Código del Derecho Foral de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2011 de 22 de marzo del Gobierno de Aragón establece en su primer punto que *"las normas de la Sección 3ª del Capítulo II del Titulo II son de aplicación a la revisión judicial de los convenios reguladores y de las medidas judiciales adoptadas con anterioridad al 8 de septiembre de 2010, fecha de entrada en vigor de la Ley 2/2010, de 26 de mayo, de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de los padres"*. El segundo punto continúa diciendo que *"la solicitud de custodia compartida por uno de los progenitores es causa de revisión de los convenios reguladores y de las medidas judiciales adoptadas bajo la legislación anterior durante un año a contar desde el 8 de septiembre de 2010"*.

En el presente supuesto, se fijó en sentencia de separación un régimen de guarda y custodia individual, a favor de la madre, solicitando el padre en la presente litis se le atribuya la guarda y custodia compartida de ambos menores.
En la Exposición de Motivos del Código del Derecho Foral de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2011 de 22 de marzo del Gobierno de Aragón se hace constar que *"esta Ley, respondiendo a una importante demanda social, ha supuesto un cambio de esquema tradicional, al configurar la custodia compartida frente a la individual como norma preferente en los supuestos de ruptura de la convivencia entre los padres y en ausencia de pacto de relaciones familiares. Con este cambio se ha pretendido favorecer el mejor interés de los hijos y promover la igualdad entre los progenitores"*.

El artículo 80.2 del citado texto legal aboga por un régimen de guarda y custodia compartida con carácter preferente al régimen de guarda y custodia individual, si bien exige atender a ciertos factores, concretamente a la opinión del menor mayor de doce años.
El artículo 80.6 establece que *"no procederá la atribución de la guarda y custodia a uno de los progenitores, ni individual ni compartida, cuando esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar con la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro progenitor o de los hijos, y se haya dictado resolución judicial motivada en la que se constaten indicios fundados y reacciónales de criminalidad. Tampoco procederá cuando el Juez advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas, la existencia de indicios fundados de violencia doméstica o de género"*.

En este artículo se ampara la parte demandada para solicitar no se le atribuya la guarda y custodia compartida de ambos menores a ambos progenitores. En la contestación alegaba que la parte demandada estaba incursa en un procedimiento penal por violencia de género, si bien la documental aportada en el acto del juicio corrobora que las Diligencias Urgentes que se incoaron en virtud de la denuncia que interpuso la madre, casualmente, a los pocos días de que el esposo interpusiera demanda de divorcio, se transformaron en juicio de faltas, en el que se dictó sentencia absolutoria que fue confirmada por la Ilma. Audiencia Provincial de Zaragoza en apelación.
Por lo tanto ningún proceso penal existe abierto a día de hoy contra la parte actora por violencia de género o doméstica.
Es entonces cuando la parte demandada alega en el acto del juicio un supuesto nuevo episodio de violencia de género por parte del esposo, e incluso llega a referir que habría maltratado al hijo menor y propone dos testigos de ese supuesto delito de violencia de género que esta juzgadora inadmitió. Igualmente, se inadmitieron todas las preguntas relacionadas con dicha circunstancia.
Esta juzgadora entiende que un proceso civil de divorcio, no es el cauce adecuado para valorar si hay o no indicios racionales de criminalidad por violencia de género, sin que existan otros medios de prueba más allá de las declaraciones de las partes y de unos testigos que la propia parte actora aporta.
Resulta cuando menos desconcertante que la parte demandada no hubiera denunciado antes del acto del juicio, bien en Comisaría de Policía Nacional, bien ante el Juzgado de Guardia, dicho supuesto nuevo episodio de violencia de género y doméstica, si realmente tuvo lugar.
Por lo tanto, no se considera que se den los supuestos del párrafo sexto del artículo 80 del Código de Derecho Foral.

Resultan claves los informes del Equipo Psicosocial.

La trabajadora social informa que ambos menores tienen satisfechas sus necesidades básicas, siendo la adaptación de los niños al entorno escolar buena y su rendimiento académico óptimo, habiéndose creado un fuerte vínculo con ambos progenitores.
La Psicóloga informa que ambos menores se encuentran bien adaptados a su entorno y circunstancias actuales, teniendo adecuadamente satisfechas sus necesidades, tanto de tipo emocional, como de crianza y no apreciándose problemática relevante en ellos, salvo la derivada de la conflictividad parental existente.
Según consta en el informe, S manifiesta su preferencia y deseos de continuar viviendo con su madre de forma cotidiana, a la cual se encuentra muy unida, no poniéndose de manifiesto en la niña deseos de establecer modificaciones en sus condiciones cotidianas de vida, mostrando su oposición a la solicitud de guarda

y custodia compartida paterna, si bien manifestando su deseo de poder ampliar las visitas con su padre. Por su parte, E manifiesta que preferiría pasar más tiempo en compañía de su padre, bien mediante una ampliación del sistema de visitas con su padre o bien mediante un sistema de guarda y custodia compartida, no mostrando oposición a continuar viviendo con su madre.
La trabajadora social y la psicóloga propone que la guarda y custodia la siga ejerciendo la madre, si bien con un régimen de visitas amplio a favor del padre consistente, además de en fines de semanas alternos, en dos días intersemanales.

Conforme con el informe del Equipo Psicosocial es lo manifestado por ambos menores en su exploración judicial. E manifestó que prefería un régimen de guarda y custodia compartida, porque su padre tenía igual derecho que su madre a disfrutar de ellos. No obstante, cuando se le preguntó por esta juzgadora, manifestó que realmente quería un régimen de guarda y custodia compartida, porque quería estar más tiempo con su madre, mostrando su conformidad con que se ampliara el tiempo que pudiera estar con su padre.
S, sin embargo, se mostró partidaria de continuar con el mismo régimen de guarda y custodia existente, si bien sí manifestó que le gustaría estar más tiempo con su padre.

De la exploración judicial se extrae que los menores lo que realmente quieren es estar más tiempo con su padre, no siendo conscientes de lo que un régimen de guarda y custodia compartida implica.
Por otro lado, la situación de conflicto existente entre ambas partes hace inviable un régimen de guarda y custodia compartida.
En el informe emitido por la trabajadora social se hace constar que la relación existente entre las partes sería bastante destructiva y perjudicial para todos los miembros de la familia, sobretodo para los niños.
Así mismo, la psicóloga informa que para que la solicitud paterna de guarda y custodia compartida pueda resultar beneficiosa para sus hijos y no se convierta en un nuevo objeto de litigios, previamente es necesario e imprescindible que no exista una elevada conflictividad entre los padres, que ambos tengan capacidad de resolución de las diferencias y conflictos por sí mismos, utilizando para ello el diálogo y la comunicación, y que adopten una actitud de flexibilidad y de cooperación y colaboración parental.

Por todo lo expuesto, se considera que no procede modificar el régimen de guarda y custodia, que deberá seguir ostentándola la madre, si bien sí que procede modificar el régimen de visitas en los términos que informa el Equipo Psicosocial.

CUARTO.- Se fija un régimen de visitas consistente en fines de semana alternos desde la salida del colegio, o en su defecto, desde las 16.30 horas, hasta el lunes por la mañana, que serán llevados por el padre al colegio, o en su defecto, al domicilio materno a las 11 horas.
Los puentes se unirán al fin de semana y serán disfrutados por el progenitor al que le corresponda el citado fin de semana, quien será el encargado de llevar a sus hijos al colegio el siguiente día lectivo por la mañana.
Se fijan dos días intersemanales (martes y jueves) desde la salida del colegio, o en su defecto, desde las 16.30 horas, hasta las 21 horas, salvo las semanas que el padre trabaje por la tarde.
Las entregas y recogidas de los menores que no tengan lugar en el colegio, tendrán lugar en el domicilio materno.
Las vacaciones se Semana Santa y Navidad se dividirán por mitad, comenzando el última día de clase antes de comenzar las vacaciones y terminarán el última día antes del comienzo de las clases a las 21 horas.
Igualmente, las vacaciones de verano comprenderán los meses de Julio y Agosto y se dividirán por quincenas alternativas.
En caso de discrepancia, corresponderá al padre elegir los años impares y a la madre los años pares.

QUINTO.- La parte actora solicita que en el caso de no fijar un régimen de guarda y custodia compartida se establezca una pensión alimenticia de 100 euros a favor de cada uno de los hijos menores (200 euros en total).
La parte demandada considera adecuada la pensión establecida en la sentencia de separación y solicita se mantenga la misma, actualizada.
Como establece el artículo 76 del Código de Derecho Foral en su apartado primero, *"la ruptura de la convivencia de los progenitores no afectará a los derechos y obligaciones propios de la autoridad familiar"*.
El artículo 65, apartado primero, letra b), establece que la crianza y educación de los hijos comprende para quienes ejercen la autoridad familiar la obligación de proveer a su sustento, habitación, vestido y asistencia médica, de acuerdo con sus posibilidades.
Esta juzgadora entiende que la cantidad de cien euros mensuales por cada uno de los hijos como pensión alimenticia es una cantidad ridícula, teniendo en cuenta que se trata de dos niños en edad escolar y que realizan actividades extraescolares.
Si bien el padre manifiesta tener que pagar un alquiler y el préstamo hipotecario, sin embargo, su situación económica no ha variado en relación con la situación que fue tenida en cuenta en el momento de firmarse el convenio regulador, en el que se fijó una pensión de doscientos euros para cada uno de los hijos. Además, según sus declaraciones, el padre tendría pareja que también trabajaría y podría contribuir a los gastos de alquiler.

Por el contrario, la madre, con los ingresos mensuales que tiene (alrededor de 500 euros) no podría afrontar el pago del préstamo hipotecario y los gastos generados por sus hijos y contar únicamente con una pensión total de 200 euros.
Es por ello, que procede no modificar la cuantía fijada en la sentencia de separación, que se habrá venido actualizando conforme a los incrementos del IPC, y deberá seguir actualizándose igualmente.
Los gastos extraordinarios se abonarán por mitad entre ambos progenitores, en los mismos términos que se estableció en la sentencia de separación.

SEXTO.- La parte actora interesa que la vivienda familiar se ponga a la venta y se atribuya el uso y disfrute de la vivienda conyugal a la madre en tanto la misma es vendida.
La parte demandada se opone a ello, alegando que el uso y disfrute de la vivienda se habría atribuido a los hijos menores, por lo que no procedería la venta de la misma.
El artículo 81 del Código de Derecho Foral establece en su apartado segundo que *"cuando corresponda a uno de los progenitores de forma individual la custodia de los hijos, se le atribuirá el uso de la vivienda familiar, salvo que el mejor interés para las relaciones familiares aconseje su atribución al otro progenitor".*
El apartado tercero establece que *"la atribución del uso de la vivienda familiar a uno de los progenitores debe tener una limitación temporal que, a falta de acuerdo, fijará el Juez teniendo en cuenta las circunstancias concretas de cada familia".*
El apartado cuarto continúa diciendo que *"cuando el uso de la vivienda sea a título de propiedad de los padres, el Juez acordará su venta, si es necesaria para unas adecuadas relaciones familiares"*
La ley es muy clara. Es necesario que la atribución del uso y disfrute de la vivienda conyugal a uno de los progenitores sea temporal, pudiendo incluso acordarse la venta de la vivienda si se estima que es necesaria.
En el presente supuesto, no constan acreditadas unas circunstancias especiales que aconsejen que se lleve a cabo la inmediata venta de la vivienda familiar. La parte actora tiene un trabajo fijo, y si bien es cierto que vive de alquiler, comparte vivienda con su actual pareja, la cual también trabaja y por tanto puede contribuir al pago del alquiler.
No obstante, sí que es necesario fijar una limitación temporal al uso de la vivienda familiar, según dispone el artículo 81.
Para fijar el límite temporal es necesario tener en cuenta las circunstancias concretas.
En el presente supuesto, la parte demandada vive en la vivienda familiar con sus dos hijos menores, de trece y ocho años de edad. La parte demandada tienen unos ingresos mensuales acreditados de 500 euros aproximadamente. No

obstante, puede disponer de la plaza de garaje, de modo que puede alquilarla al no tener vehículo propio. Con dichos ingresos debe afrontar el pago de la mitad de la hipoteca, así como los gastos que le corresponden por alimentos de sus hijos y los suyos propios.

Teniendo en cuenta que los menores se encuentran en plena formación, y que la situación económica de la madre es muy limitada, se considera adecuado que el uso de la vivienda se prolongue hasta que la hija de menor edad alcance los dieciséis años.

En similar sentido se pronuncia la SAP de Zaragoza de 11 de abril de 2012.

El préstamo hipotecario, así como los gastos derivados de la titularidad de la vivienda, se seguirá abonando por mitad por ambos cónyuges."

***** Sentencia de la Audiencia Provincial de Huesca de 26 de junio de 2012. Pensión compensatoria y de alimentos para hijas menores**

"PRIMERO .- La cuestión debatida es la aportación económica del demandado **Joaquín** para el mantenimiento de las hijas y, a petición de la demandada, el señalamiento a su favor de una pensión compensatoria. Sostiene el demandado, **Joaquín** , que su aportación no debe superar los 420 euros que acordaron en las medidas provisionales, bien se repartan 160 euros para cada una de las dos hijas y 100 euros de pensión compensatoria, bien sea en 210 euros por cada hija, sin pensión compensatoria. En ningún caso los 460 euros fijados en la sentencia, a razón de 230 euros por cada una de las dos hijas, sin pensión compensatoria. Por su parte la demandante, **Tatiana** , solicita 300 euros por cada una de las dos hijas y 100 euros al mes durante dos años en concepto de pensión compensatoria.

SEGUNDO .- En el examen de los motivos propuestos por los recurrentes comenzaremos por la pensión compensatoria solicitada por la demandante, en cuantía de 100 euros al mes durante dos años, petición rechazada en la sentencia y a la que se opone el demandado. Para fijar la asignación compensatoria, según se denomina en el *art. 83 delDecreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón*, por el que se aprueba, con el título de «Código del Derecho Foral de Aragón», elTexto Refundido de las Leyes civiles aragonesas(CDFA), hay que atender los criterios que enumera, entre los que cabe destacar, los recursos económicos, la edad del solicitante, sus perspectivas económicas y las posibilidades de acceso al mercado de trabajo, las funciones familiares desempeñadas por los padres y la duración de la convivencia. De contenido similar, el *art. 97 delCódigo Civil(CC*) incide, entre otros aspectos, en la edad y el estado de salud, la cualificación profesional y las probabilidades de acceso a un empleo, la dedicación la familia y la colaboración con su trabajo en las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge, así como en la duración del matrimonio y de la convivencia conyugal y el caudal y los medios económicos y las necesidades de uno y otro cónyuge. El matrimonio que ahora se disuelve ha tenido una duración poco más de dos años, (del 20 de septiembre de 2008 al 20 de enero de 2011, en que se presentó la demanda), aunque la convivencia se rompió en junio del año 2010, cuando la esposa, por motivos que ahora no hacen al caso, se fue del domicilio familiar -una vivienda en alquiler en la localidad de Hecho, por la que se paga 325 euros al mes-, y pasó a vivir con la hija en Zaragoza, en el domicilio de sus padres. Durante la convivencia matrimonial la demandante se ha dedicado preferentemente a la familia, pues la primera de las hijas -**Claudia** - nació el NUM000 de 2009 y la segunda -**Inés Leyre** - el NUM001 de 2011,

iniciado ya el trámite del proceso de divorcio. La solicitante es una persona joven, nació el NUM002 de 1987, que al parecer, según se afirma en el recurso del demandado sin que se haya desmentido, tiene el grado superior de gestión y organización de empresas agropecuarias, y que durante el año académico 2010/2011 cursó el primer año del título oficial de Graduado en Ciencia y Tecnología de loa Alimentos en la Universidad de Zaragoza. Una de las cuestiones más debatidas ha sido la de los ingresos del demandado que, atendiendo a las percepciones salariales acreditadas por la Agencia Tributaria para el año 2010 y los certificados de la empresa, puede estimarse en torno a 1540 euros al mes, incluida la prorrata de pagas extraordinarias, debido a las fluctuaciones y pactos con la empresa a causa de la escasez de trabajo -vid certificado de la empresa-. En estas circunstancias no consideramos desacertada la decisión de no establecer pensión o asignación compensatoria. El motivo se desestima. Con estas premisas de orden fáctico, tampoco pueden prosperar los motivos de apelación dirigidos, uno, a incrementar a 300 euros y, otro, a disminuir a 210 euros al mes para cada una, el importe de los gastos de asistencia a las hijas, *art. 82CDFA, o contribución para alimentos, art. 93CC.* Esta contribución debe adecuarse a lascircunstancias económicas y necesidades de los hijos en cada momento, *art. 93CC, o*como indica en el mismo sentido el art. 82CDFAalas necesidades de los hijos, de sus recursos y de los recursos económicos disponibles por los padres. Atendida la edad de las hijas, uno y tres años, la cantidad señalada en la sentencia es conforme a las necesidades que en este momento puedan tener y acorde a los ingresos del demandado, si tenemos en cuenta, además, los gastos de su propio sustento y los derivados de los desplazamientos desde su localidad de residencia hasta el domicilio de la madre y de los hijos para cumplir con el régimen de visitas establecido.”

***** Auto de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 26 de junio de 2012. Guarda y custodia. Interés del menor**

"PRIMERO.- La parte apelante en su recurso (artículo 458 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) considera que en el presente supuesto no se da ningún motivo de oposición a la ejecución conforme dispone el artículo 556,1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, infringiéndose igualmente lo dispuesto en el artículo 76 de Código de Derecho Foral de Aragón, pues precisamente el interés del menor es que resida con su madre.

SEGUNDO.- La Sentencia de 14 de julio de 2008 del Juzgado otorgaba la guarda y custodia del hijo común a la madre. Si bien desde julio del 2009 el menor vive con su padre, contando entonces con 17 meses de edad, se ha practicado prueba psico-social, la cual recomienda que el menor continúe con su padre. Sin perjuicio de las cuestiones que puedan plantear las partes en el procedimiento de modificación de medidas, debe tenerse en cuenta que en todo este tipo de procedimientos debe estarse al interés superior de los menores como así viene establecido en el artículo 39 C.E., L.O 1/1996 de 15 de Enero sobre protección jurídica del menor, Convención de los derechos del Niño de 1989, Carta Europea de los Derechos del Niño del Parlamento Europeo, artículos 93 y 154 y ss. del C.C, Ley Aragonesa de la Adolescencia e Infancia, así como Ley Aragonesa de los Derechos de la Persona y sentencias del Tribunal Constitucional 141/2000, 143/1990 y 114/1992 entre otras muchas, por lo que procede, tal como indica igualmente Ministerio Fiscal en su informe de 20 de abril de 2012, confirmar el auto recurrido."

***** Sentencia de la Audiencia Provincial de Huesca de 27 de julio de 2012. Régimen de visitas y pensión de alimentos para hijo menor en proceso de divorcio**

“PRIMERO : Coinciden ambos ex-cónyuges en sus respectivos recursos de apelación en apuntar que la Sra. Juez ha dado en la Sentencia algo no pedido o distinto de lo pedido, a lo que la Sala debe replicar que no es así. En la resolución apelada se confirma en su práctica totalidad el régimen de custodia exclusiva a favor de la madre que se había establecido en la Sentencia de divorcio cuya modificación se insta ahora por el esposo, cuya pretensión se ha estimado únicamente en el sentido de ampliar las visitas intersemanales de martes y jueves a favor de dicha parte, cuyo final se extiende desde las 20 horas de esos mismos días hasta la respectiva mañana siguiente con pernocta incluida. Las partes inciden en que en la súplica de la demanda no se pedía una ampliación del régimen de visitas correspondiente a la custodia exclusiva, que es lo que ha hecho la Sra. Juez, sino en todo caso la custodia compartida, de modo que ésta se instrumentara mediante períodos semanales, que era la petición principal, o bien con pernocta de martes y jueves a favor del progenitor no custodio. Sin embargo, observamos que lo que realmente consta en la súplica de la demanda es que el actor solicita la custodia compartida, debiendo ejercitarse ésta mediante períodos semanales, y "alternativamente, en caso de estimarse más beneficioso para el menor, se mantendrá el régimen vigente pero el menor pernoctará con el padre todos los martes y jueves", sin que la expresiónse mantendrá el régimen vigentepueda entenderse referida a un régimen distinto del que se constituyó con la Sentencia de divorcio, que no era otro que la custodia exclusiva, por lo que nos parece sorprendente que en la primera página del recurso del esposo trate de explicarse la expresión que acabamos de transcribir (se mantendrá el régimen vigente) diciendo queesta segunda opción se planteaba como una opción de régimen de estancias para el ejercicio de la custodia compartida, no como una ampliación del régimen de visitas vigente, afirmación que, a nuestro criterio, resulta totalmente incompatible con lo pedido en la súplica de la demanda en los términos en que fue redactada, por todo lo cual en absoluto cabe reprocharle a la Sra. Juez que haya infringido los principios de congruencia o de justicia rogada al dictar el fallo de su resolución.

SEGUNDO : Las dos partes, como ya hemos dicho, han interpuesto sendos recursos de apelación. La esposa pretende con su recurso la íntegra desestimación de la demanda de modificación de medidas, con el consiguiente mantenimiento de lo dispuesto en el convenio regulador asumido por la Sentencia de divorcio, el cual no preveía pernocta de martes y jueves.

Por su parte, el esposo introduce en la súplica de su recurso una

significativa modificación respecto de lo pedido en la demanda en el sentido de continuar pidiendo la custodia compartida pero a fin de que, con relación a los períodos no vacacionales escolares, se establezcacomo régimen de estancias el siguiente: El menor pasará con el padre los fines de semana alternos desde el viernes a la salida del colegio hasta el domingo a las 20 horas, y todos los martes y jueves desde la salida del colegio hasta el día siguiente en que lo llevará al colegio o al domicilio de la madre si fuera festivo.De ello se desprenden las siguientes conclusiones. En primer lugar, dicha parte ya no mantiene ahora el reparto semanal de la custodia que había interesado desde un primer momento en la demanda, por lo que hay que entender que renuncia a dicha pretensión. En segundo lugar, lo que el actor pide ahora en su recurso es sustancialmente lo mismo (con la única salvedad de no fijar la hora de entrega del menor en el domicilio de la madre en día festivo, que en la Sentencia apelada sí se fija en las 10 horas de la mañana) que la Sra. Juez ha decidido para la custodia con relación a períodos no vacacionales escolares, bien que sobre la base de no modificar la custodia exclusiva, mientras que el esposo pretende ahora presentar este régimen como de custodia compartida, y ello pese a que, según hemos explicado, en la súplica de su demanda suponía una ampliación de la custodia exclusiva. Adviértase, en cualquier caso, que el reparto de la custodia que consta en la súplica del recurso no es tan igualitario como quiere hacer ver el esposo, ya que de cada catorce días no vacacionales el menor pernoctaría con su padre durante seis y con su madre durante los ocho restantes, y ello porque, según el régimen que se pretende en dicho recurso, el niño dormiría en casa de su madre todos los domingos con independencia de quién tuviera la custodia ese fin de semana.

TERCERO : Los ex-cónyuges, en cualquier caso, mantienen su controversia sobre la denominación que debe recibir el régimen de custodia, si exclusiva o compartida. Consideramos por nuestra parte que otorgar un determinado nombre al régimen de custodia quizá no resulte lo más trascendente en el presente caso, y prueba de ello es que una de las partes ha pasado a calificar como de custodia compartida el mismo régimen que, según se desprende de la súplica de su demanda, se había considerado como de custodia exclusiva, esto es, el vigente al momento de pedir la modificación. De cualquier modo, y de cara a establecer el régimen que deberá regir a partir de ahora, no consideramos que la Sra. Juez haya valorado inadecuadamente la prueba practicada cuando concluye que el régimen instaurado en la Sentencia inicial de divorcio ha sido beneficioso para el menor y que, en atención a la flexibilidad que ambos progenitores han demostrado en interés de su hijo (quien ha podido marcharse de vacaciones al país natal de su madre para no perder el contacto con su familia materna, de igual modo que ha podido pernoctar con su padre algunos días intersemanales pese a que dicha pernocta no estaba prevista en el convenio regulador), podían ampliarse las visitas a favor del padre durante las

tardes de martes jueves incluyendo una pernocta, y no vamos a insistir ahora en que la Sra. Juez en absoluto ha dado cosa no pedida o distinta de la pedida. Hay que recordar, por otra parte, que ninguna prueba auténticamente pericial se ha practicado en este proceso de cara a evaluar una hipotética inidoneidad de alguno de los progenitores, conclusión esta última que tampoco cabe desprenderse de lo declarado por el testigo propuesto por la demandada, que es el supervisor de la empresa de seguridad en la que trabaja el actor, pues dicho testigo sí que manifestó que el esposo había renunciado voluntariamente a realizar horas extraordinarias, e incluso a desempeñar algunos trabajos especialmente retribuidos, en razón de la pendencia de este proceso, pero resultará arriesgado deducir de dichas circunstancias que el esposo no es una persona adecuada para tener la custodia de su hijo, aparte de que hay que recordar que lo que está pidiendo la esposa no es ni mucho menos la supresión de las visitas del padre sino el mantenimiento de las medidas del convenio regulador del divorcio, el cual ya otorgaba un generoso régimen de visitas para el progenitor no custodio (fines de semana alternos y dos tardes de días intersemanales, bien que en aquel momento sin pernocta) que en absoluto deberá modificarse en perjuicio del padre. Procede por todo lo expuesto ratificar las medidas personales previstas en el convenio regulador con la ampliación de la duración de las visitas de martes y jueves, incluyendo pernocta, tal y como ya había decidido la juzgadora de instancia, pues no ha de suprimirse la mención de las 10 horas, momento hasta el cual podrá entregar el padre al menor en casa de la madre durante los días festivos, por el solo hecho de que ninguna hora se determine en la súplica del recurso, como tampoco apreciamos motivos suficientes para variar la hora de entrega en el domicilio de la madre durante los fines de semana en que el padre tenga al menor en su compañía, que en el recurso del actor se cifra en las 20 horas pese a que en el convenio regulador se fijaba a las 19:30, debiendo por tanto mantenerse esta última hora.

CUARTO : Dicho lo que precede, que ya debe dar lugar a la desestimación del recurso de la esposa, debemos examinar ahora las medidas relativas a la contribución de los ex-cónyuges a los gastos del menor y al uso de la vivienda familiar, en cuya modificación respecto de las previstas en el convenio regulador ha mostrado el actor un particular interés. Comenzando con los gastos de manutención básica del menor, nacido en el año 2006, no parecería justo que nos limitásemos a acordar que sean satisfechos por el progenitor que en cada momento tenga a aquél en su compañía, pues ya hemos dicho que en los períodos no vacacionales la madre estará con el menor más días que el padre (en concreto uno más cada semana, ya que 8 de cada 14 frente a 6 de cada 14 supone 4 de cada 7 frente a 3 de cada 7). En tales circunstancias, procede determinar a modo de compensación, y siempre sobre la base de que los referidos gastos de manutención correrán a cargo del progenitor con quien el menor esté en cada momento, que el esposo satisfaga a la esposa una cantidad

mensual, que no debe coincidir necesariamente con el importe de la pensión alimenticia establecida en el convenio regulador, conforme al cual el padre no podía pernoctar con el menor más allá de los viernes y sábados de fines de semana alternos, por lo que la Sala fijará prudencialmente dicha cantidad en la cantidad de cien euros mensuales, con las mismas previsiones en cuanto a su actualización ya contenidas en la Sentencia cuya modificación se solicita, bien que la primera de dichas actualizaciones habrá de ser, obviamente, el próximo día 1 de enero. Dicha cantidad, en cualquier caso, no deberá ser abonada durante los meses de julio y agosto, durante los cuales se desarrollarán las vacaciones estivales del menor.

Con respecto a los demás gastos, será obligado mantener la contribución por mitades e iguales partes a los que aparecen designados en el convenio regulador como extraordinarios -en el tercer párrafo del acuerdo quinto-, pues en este punto hay acuerdo entre las partes (recordemos que la demandada interesa el mantenimiento del convenio regulador), con la única salvedad, eso sí, de añadir, aunque ello ya se desprenda implícitamente del convenio, que los extraordinarios no necesarios, a falta de acuerdo entre los ex-cónyuges, serán de cargo del que haya decidido la realización del gasto en cuestión. Por otro lado, y en cuanto a los que podrían considerarse como ordinarios distintos de los de manutención básica, en especial los de escolarización, no consideramos aceptable la propuesta que el actor realiza en la súplica de su recurso, que es el reparto igualitario, y ello en atención a la diferencia de ingresos existente entre los ex-cónyuges, que sigue siendo favorable al esposo aún teniendo en cuenta las horas extras que voluntariamente ha dejado de trabajar, de modo que, tratando de asegurar una contribución a dichos gastos que resulte proporcional a los respectivos recursos patrimoniales de los progenitores (*art. 82.2 del Código Foral Aragonés*), acordamos prudencialmente que dichos gastos sean satisfechos por el esposo en dos tercios y por la esposa en el tercio restante.

Por último, y en cuanto al uso de la vivienda familiar, entendemos que no procede la modificación en este aspecto de lo pactado en el convenio regulador, ya que, si bien es cierto que el *art. 81.2 del Código Foral Aragonés*atribuye el uso del domicilio al progenitor al que se le haya otorgado la custodia exclusiva, la solución tampoco habría de variar si se calificara la custodia como compartida, pues el *art. 81.1 de la misma Ley*atribuye prioritariamente el uso del domicilio al progenitorque por razones objetivas tenga más dificultad de acceso a una vivienda, que en este caso habría que entender que es la madre tanto por su inferior nivel de ingresos como porque no consta que ella, nacida en Rusia, tenga un arraigo derivado de familiares por consanguinidad en nuestro país, procediendo asimismo mantener el límite temporal que ya se fijó en el convenio regulador, lo cual por otra parte es plenamente acorde con el *art. 81.3 del precitado Código Foral*."

***** Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 4 de julio de 2012. Extinción de pensión alimenticia para hijos mayores de edad. Excepcionalidad**

"PRIMERO.- Para la resolución del recurso de casación son relevantes los siguientes hechos y actos, que resultan de las instancias:
1) Los cónyuges D. Ignacio B. L. y Dª. Lourdes P. M., que habían contraído matrimonio el día 2 de abril de 1983, se separaron en abril de 2001, obteniendo sentencia de separación de fecha 1 de junio de 2001.
2) De dicho matrimonio nacieron dos hijas llamadas Lucía y Lourdes B. P. La primera, nacida el 23 de agosto de 1985, obtuvo el título de Diplomado en Relaciones Laborales por la Universidad de Zaragoza, y en el curso 2008-2009 realizó un Master en Prevención de Riesgos Laborales. La segunda, que contaba 21 años de edad al tiempo de interposición de la demanda, obtuvo en el año 2009 la titulación de Técnico de Artes Plásticas y Diseño, módulo de Grado Medio, y se incorporó al mercado laboral en el año 2010, realizando trabajo a tiempo parcial por el que percibía 372 euros netos al mes.
3) En fecha 21 de octubre de 2010, D. Ignacio B. L. interpuso ante el juzgado de Primera Instancia num. Uno de Huesca demanda en solicitud de modificación de medidas definitivas que habían sido acordadas en resolución de 1 de junio de 2001, instando la extinción de la pensión por alimentos establecida a favor de sus citadas hijas, además de otros extremos que no interesan en este recurso. Dicha demanda se tuvo por admitida a trámite por Decreto de 13 de diciembre de 2010.
4) El Juez de Primera Instancia dictó sentencia de 13 de junio de 2011 por la que, estimando en parte la demanda, declaró extinguidas las pensiones por alimentos establecidas a favor de las hijas Lucía y Lourdes, manteniendo el uso del domicilio conyugal por la esposa e hijas hasta el día 31 de diciembre de 2012.
5) Interpuesto recurso de apelación por la representación de la demandada Dª. Lourdes P. M., dicho recurso fue resuelto por sentencia de la Audiencia Provincial de Huesca de 31 de enero de 2012, que mantuvo el pronunciamiento de primera instancia respecto a la extinción de las pensiones por alimentos, pero revocó parcialmente la sentencia impugnada y suprimió el apartado tercero del fallo, relativo a la extinción del uso del domicilio conyugal.
6) Contra dicha sentencia se ha interpuesto el presente recurso de casación por la representación de Dª. Lourdes P. M., invocando como único motivo la infracción, por aplicación indebida, del art. 69 del Código de Derecho Foral de Aragón –en lo sucesivo CDFA-, antiguo art. 66.1 de la Ley 13/2006, de 27 de diciembre, de las Cortes de Aragón, sobre derecho de la persona.
No habiendo interpuesto recurso la representación del demandante, el pronunciamiento relativo al uso del domicilio que fue conyugal ha adquirido firmeza, por lo que el objeto del presente recurso de casación se contrae a

examinar si la sentencia dictada por la Audiencia Provincial ha infringido, por aplicación indebida, el precepto legal citado, en lo referente a la extinción de las pensiones alimenticias que habían sido reconocidas a favor de las hijas del matrimonio en la sentencia de separación conyugal.
Siguiendo el orden expositivo enunciado por la parte recurrente, se examinará el motivo distinguiendo la aplicación de la norma a las circunstancias concurrentes en cada una de las hijas del matrimonio.

SEGUNDO.- Consta en autos, según se ha expresado en el razonamiento anterior, que la hija mayor del matrimonio llamada Lucía B. P., había nacido el día 23 de agosto de 1985. Al tiempo de interposición de la demanda y de su admisión a trámite contaba con 25 años de edad.
La sentencia de primera instancia estima la pretensión del actor, que insta se declare extinguida y se suprima la pensión por alimentos señalada para ella, con fundamento en que dicha hija había obtenido una formación académica que "*la capacita sin ninguna duda a ejercer una profesión o encontrar un trabajo*", de forma que el hecho de que posteriormente esté cursando estudios superiores, en concreto la carrera de ciencias empresariales, no es motivo para la continuidad de dicha pensión "*pues no puede continuarse con una obligación cuando el alimentista ya está en disposición de encontrar un empleo de su formación o de otra y de independizarse y emanciparse de sus padres*" (fundamentos de derecho Segundo).
La sentencia de la Audiencia, respecto de dicha hija mayor, confirma el pronunciamiento de primera instancia, y lo hace con la siguiente fundamentación jurídica: En primer lugar, aceptando y dando por reproducidos los fundamentos de derecho que contiene la sentencia apelada, en relación a ella (fundamento de derecho primero); y en segundo lugar, expresando que "*como ya ha cumplido los veintiséis años de edad, ha quedado extinguido el deber del padre de sufragar sus gastos de crianza y educación, sin perjuicio del derecho de la hija a reclamar alimentos, conforme al art. 69 del Código de Derecho Foral de Aragón*" (fundamento de derecho segundo).
La parte recurrente en casación, al desarrollar el motivo en cuanto concierne a la hija mayor, denuncia la infracción de las normas sobre preclusión, aun sin citarlas expresamente, manifestando que la sentencia recurrida no entra en el fondo del asunto, y que Lucía hasta que cumplió los veintiséis años tenía ese derecho a la pensión, por lo que debía revocarse la sentencia de instancia por lo menos con esa limitación en el tiempo. En todo caso sostiene que se ha aplicado indebidamente la norma denunciada y procede el mantenimiento de la pensión alimenticia.

TERCERO.- El recurso de casación, en cuanto referido a la pensión alimenticia para Lucía B.P., no puede ser estimado.

El principio procesal de la "*perpetuatio iurisdictionis" (*perpetuación de la jurisdicción), se refiere no sólo a las circunstancias que determinan la competencia de un órgano jurisdiccional al tiempo de constituirse la relación jurídico procesal, sino también al objeto del proceso, en cuanto ha de negarse eficacia a las variaciones que introduzcan las partes después de iniciado el procedimiento sobre el estado de los hechos, personas o casos contemplados en la demanda y contestación, conforme al principio "*lite pendente nihil innovetur*" (litigio pendiente, nada se innove) y a la prohibición de modificar el "*thema decidendi*" (objeto a decidir). Por ello no cabe modificar los términos de la demanda -prohibición de la "*mutatio libelli*" (cambio de la petición), sentencia del Tribunal Supremo de 26 de diciembre de 1997-, ni cambiar el objeto del pleito en la segunda instancia, pues "*pendente apellatione nihil innovetur"* (pendiente la apelación, nada se innove) –Sentencia del Tribunal Supremo, nº 1181/2006, de 17 de noviembre, y las que en ella se citan-. Y conforme al principio de congruencia y rogación, el fallo ha de adecuarse a las pretensiones y los planteamientos de las partes, de conformidad con la regla "*iudex iudicare debet secundum allegata et probata partium*" (el juez debe juzgar según lo alegado y probado por las partes).

La ley procesal fija el componente fáctico del debate procesal en el momento en que se produce la completa preclusión de los actos de alegación en el proceso –art. 222.2, segundo párrafo, de la Ley de Enjuiciamiento Civil-, lo que acaeció cuando dicha joven tenía 25 años de edad. Pero la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha establecido que en materia de derecho de familia, en la que se ventilan derechos e intereses relativos a hijos, el criterio de la fijación de los hechos a la fecha de apertura del proceso no puede ser contemplado de forma rígida, al producirse modificaciones en la edad y condiciones de los hijos que resultan relevantes para la decisión a adoptar. Así, la sentencia del Tribunal Supremo 565/2009, de 31 de julio, realiza una exégesis del art. 413 de la Ley de Enjuiciamiento Civil a la luz de la jurisprudencia constitucional relativa a los intereses de orden personal y familiar de los menores, indicando que el citado precepto consagra el principio de perpetuación de la acción, el cual "*tiene como finalidad institucional el mantenimiento de la seguridad jurídica como garantía de la contradicción e igualdad de oportunidades de defensa*", indicando que en procesos relativos a menores en que ha de buscarse siempre el interés de éstos, "*es procedente que el juez, al examinar la impugnación de la declaración de desamparo por la Administración interpuesta al amparo del art. 172.6 del Código Civil contemple el cambio de circunstancias producido con posterioridad al momento en que se produjo la declaración con el fin de determinar si los padres se encuentran en condiciones de asumir nuevamente la patria potestad*".

Y la sentencia de dicho tribunal 721/2011, de 26 de octubre, con ocasión de abordar –y desestimar- un recurso extraordinario por infracción procesal, recordaba que *"en los procesos sobre menores, el art 752.1 LEC establece que*

"(...) se decidirán con arreglo a los hechos que hayan sido objeto de debate y resulten probados, con independencia del momento en que hubieren sido alegados o introducidos de otra manera en el procedimiento" (énfasis añadido). Los cambios que se producen en este tipo de litigios a lo largo de las diferentes instancias y la necesidad de ajustarse a la realidad para poder tomar la mejor decisión fueron las razones que introdujeron esta modalidad en este tipo de procedimientos, por lo que no debe aplicarse lo dispuesto en el art. 460 LEC, que se considera violado, sino el art. 752.1 LEC citado".

Dicho criterio jurisprudencial, aun limitado en su aplicación a procesos en los que se ventilan los intereses de menores de edad, puede ser trasladable al de autos, en el que el objeto del proceso radica en determinar la procedencia de mantener una pensión alimenticia a favor de los hijos, después que éstos hayan cumplido la mayoría de edad, para lo cual puede atenderse a la modificación de las circunstancias que se produce como consecuencia de su evolución formativa.

Pero, en todo caso, la sentencia de la Audiencia Provincial no desestimó el recurso de apelación en su momento interpuesto por el mero hecho de que Lucía hubiera cumplido los 26 años de edad, por cuanto comienza su fundamentación aceptando los argumentos jurídicos de la sentencia de primera instancia que, como hemos reseñado, expone las razones por las que dicha hija mayor había perdido el derecho a la pensión antes de cumplir dicha edad, al haber concluido su formación académica, encontrándose en disposición de incorporarse al mercado laboral.

CUARTO.- La sentencia recurrida no infringe el art. 69 del CDFA al confirmar la supresión de la pensión alimenticia establecida a favor de la hija mayor del matrimonio Lucía B. P., sino que aplica correctamente a los hechos comprobados la consecuencia jurídica contemplada en dicha disposición.

En efecto, resultando acreditado que la citada había cursado estudios universitarios hasta obtener una diplomatura y realizar un máster, lo que la capacitaba para el ejercicio de una profesión, a partir de la fecha de conclusión de estos estudios –y, desde luego, en la fecha de interposición de la demanda- dejó de tener derecho a dicha pensión en los términos establecidos en la sentencia de separación conyugal de sus padres. Como ha expresado esta Sala en sentencia de 30 de noviembre de 2011, interpretando el art. 66 de la Ley aragonesa 13/2006, de 27 de diciembre, de Derecho de la Persona, el Preámbulo de dicha ley evidencia la excepcionalidad de la previsión contenida en el art. 66, lo que en el texto del precepto se concreta *"en la exigencia concurrente de dos circunstancias para que se mantenga el deber de los padres de sufragar gastos de enseñanza y educación de los hijos mas allá de la mayoría de edad: que no haya completado el descendiente su formación, y que no tenga recursos propios. Y, aun concurriendo tales circunstancias, existe todavía una doble limitación: que sea razonable mantener la exigencia del*

cumplimiento de la obligación, y que, temporalmente, sea normal el tiempo empleado para llega a obtener la formación".

QUINTO.- Tampoco puede prosperar el recurso relativo a la situación de la hija menor del matrimonio, Lourdes B. P. Según se ha expuesto precedentemente, consta acreditado que ésta, de 21 años de edad al tiempo de interposición de la demanda, había obtenido en el año 2009 una titulación de Técnico de Artes Plásticas y Diseño, módulo de Grado Medio, y que en febrero de 2010 accedió al mercado laboral. Según la parte recurrente, en el curso 2011-2012 se ha matriculado en un módulo de Grado Medio complementario del que ya había realizado.

De todo ello se desprende que al tiempo de la reclamación judicial, por interposición de la demanda rectora del presente proceso, había completado su formación profesional, por lo que no se reúnen los requisitos exigidos por el art. 69.1 del CDFA para mantener la obligación del padre de costear los gastos de crianza y educación. Como dijimos en la sentencia de esta Sala de 30 de diciembre de 2011, citando otras anteriores, manteniendo el criterio de la excepcionalidad de la exigencia de pensión por alimentos respecto de hijos mayores de edad, "*en atención a esta excepcionalidad, la realización de unos segundos estudios para una nueva capacitación profesional, diferente de la primera y de mayor nivel, aun iniciada con el consentimiento del padre recurrente, no había de significar una obligación jurídica de éste hasta la independencia económica de la hija, de modo que no se imponía al recurrente más allá del límite de su finalización en el tiempo razonablemente requerido o, como límite final, la edad de 26 años*".

La concurrencia de otras circunstancias personales que se ponen de relieve en el desarrollo del motivo de recurso, en cuanto a la existencia de un síndrome depresivo y de haber conseguido únicamente un trabajo precario del que obtenía escasa retribución, no determina que renazca el derecho a la pensión como medida derivada del proceso de separación de sus padres. A partir de este momento, si surge *ex novo* una situación de necesidad que da derecho a la prestación alimenticia, la propia hija podrá reclamarla conforme a los artículos 142 y siguientes del Código Civil.

SEXTO.- La desestimación del único motivo de recurso conduce a la confirmación de la sentencia recurrida, si bien la concurrencia de dudas de derecho en el caso enjuiciado determina la no imposición de las costas devengadas en el recurso, conforme al art. 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Según el art. 394, al que remite el anteriormente citado, para apreciar que el caso era jurídicamente dudoso se tendrá en cuenta la jurisprudencia recaída en casos similares, y es de advertir que en la sentencia de esta Sala de 31 de marzo del presente año confirmamos una sentencia en la que, en caso similar, se

había suspendido –no suprimido- el derecho del menor a la pensión alimenticia, solución que fue considerada ajustada al ordenamiento jurídico.”

***** Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 5 de julio de 2012. Preferencia de la custodia compartida. Posibilidad de excepcionarla según circunstancias del caso concreto. Superior interés del menor**

"PRIMERO.- Por sentencia dictada el día 19 de noviembre de 2008 por el Juzgado de Primera Instancia número Seis de Zaragoza se acordó la disolución por divorcio del matrimonio formado por las partes del presente procedimiento, que se celebró el día 1 de septiembre de 1990 y en el que nacieron dos hijos, I nacida el 1999 y M nacido el 2001.

Acordada por sentencia de fecha 14 de enero de 2010, dictada por el mismo Juzgado en procedimiento de modificación de medidas, la reducción del importe señalado como pensión a abonar por el padre para sostenimiento de los hijos, fue presentada el día 8 de marzo de 2011 la demanda rectora de este procedimiento en solicitud por parte del padre de nueva modificación de medidas, en este caso para que se acuerde la custodia compartida respecto de ambos hijos menores, en lugar de la custodia individual que en las sentencias anteriores se mantuvo a favor de la madre.

SEGUNDO.- Por sentencia dictada el día 15 de septiembre de 2011 por el Juzgado mencionado fue desestimada la demanda que solicitaba el establecimiento de custodia compartida, y presentado recurso de apelación contra tal resolución, por la sentencia ahora recurrida, dictada el día 21 de febrero de 2012 por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Zaragoza, se confirmó en su integridad la sentencia apelada, de modo que, finalmente, se mantiene la custodia individual inicialmente acordada, si bien, tal y como acordó el Juzgado, se amplía el régimen de visitas a favor del padre.

Contra la anterior sentencia se formuló el presente recurso de casación, en el que el recurrente expone dos motivos de casación. El primero de ellos, por entender que la sentencia dictada por la Audiencia Provincial infringió el artículo 80.2 del Código de Derecho Civil de Aragón (CDFA) por inaplicación del criterio de adopción preferente de la custodia compartida. El segundo de los motivos se articula bajo la solicitud de necesidad de fijación por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón de la correcta interpretación de la norma que se considera infringida, por no llevar más de cinco años en vigor y no existir doctrina jurisprudencial aplicable relativa a normas anteriores de similar contenido.

De ambos motivos debe considerarse que el segundo no se refiere realmente a infracción de norma sustantiva alguna, pues se limita a formular

alegaciones sobre los presupuestos de recurribilidad. En consecuencia, no procede su admisión como recurso de casación, lo que, en el momento de dictar esta sentencia, conlleva su desestimación.

TERCERO.- La sentencia del Juzgado de Primera Instancia del día 15 de septiembre de 2011 y la dictada por la Audiencia Provincial el día 21 de febrero de 2012, confirmatoria de la anterior, acordaron que en el caso actual el régimen más conveniente al interés del menor no era el de custodia compartida, sino el de custodia individual, que establecieron a favor de la madre, a la vez que ampliaron el régimen de visitas entre hijos y padre. Y, al respecto, la dictada por la Audiencia Provincial, y ahora recurrida, expone que en la actual legislación aragonesa (en concreto, Ley de Aragón, de 26 de mayo de 2010, hoy incluida en el Código de Derecho Foral de Aragón), el criterio de custodia compartida es el ordenado por la ley como preferente. Y expresa también la sentencia recurrida que esta forma de custodia está configurada como regla general, por lo que el juez podrá optar por la individual cuando sea más conveniente para el menor, justificando adecuadamente esta opción, de modo que en caso de solicitarse la individual por cualquiera de los progenitores deberá realizar el necesario estudio de las circunstancias concurrentes en el caso debatido, conforme a los factores que señala la propia normativa.

Tales consideraciones sobre la adecuada articulación de la orden general de preferencia de la custodia compartida, pero con posibilidad de excepcionarla cuando en el caso concreto lo aconsejen las circunstancias concurrentes, evidenciadoras de un superior interés del menor, son totalmente compartidas. Y así lo han señalado varias sentencias dictadas por esta Sala, de las que sirve como compendio de la doctrina contenida en ellas la de fecha 1 de febrero de 2012 que, recogida en sus literales términos en la parte que ahora más interesa, indica: "(...) *En sentencias de esta Sala dictadas en aplicación de la Ley 2/2010, cuyos preceptos han sido incorporados al Código de Derecho Foral de Aragón, se han establecido los siguientes criterios exegéticos acerca de dichas normas: a) La custodia compartida por parte de ambos progenitores es el régimen preferente y predeterminado por el legislador, en busca de ese interés del menor, en orden al pleno desarrollo de su personalidad, de modo que se aplicará esta forma de custodia siempre que el padre y la madre estén capacitados para el ejercicio de las facultades necesarias a tal fin (Sentencia de 30 de septiembre de 2011); b) El sistema no es rígido, salvo en un mandato que dirige al juez: el superior interés del menor (Sentencia de 13 de julio de 2011); c) Podrá establecer un sistema de custodia individual, cuando éste resulte más conveniente para dicho interés, a cuyo efecto habrá de evaluar los parámetros establecidos en el art. 80.2 del Código (Sentencias citadas y la de 15 de diciembre de 2011); d) La adopción de la custodia individual exigirá una atenta valoración de la prueba que así lo acredite –la conveniencia para el*

menor- frente al criterio preferente de la custodia compartida, al que el precepto legal otorga tal preferencia en interés de los hijos menores (Sentencia de 15 de diciembre de 2011) (...)".

CUARTO.- Debe así concluirse que, aunque el sistema establecido parte de la elección del sistema de custodia compartida como preferente, ello no es óbice para excluir tal predeterminación legal siempre y cuando, conforme a los propios criterios previstos en la norma, deba considerarse en un caso concreto que la custodia atribuida a un solo progenitor sea la mejor para el interés del menor. Encuadrada así la cuestión, la adopción de la custodia individual requiere la práctica de la necesaria prueba y su detenida valoración, puesto que sólo en caso de que esté claramente acreditado que la prevalencia del interés general del menor se satisface mejor con la custodia individual que con la prevalente de la custodia compartida, es cuando podrá ordenarse judicialmente la inaplicación de la norma general de preferencia en el supuesto concreto.

Naturalmente, dentro de tal acreditación de circunstancias concurrentes, no ofrece duda que cobran especial relevancia los informes psicosociales emitidos, puesto que en ellos, previa constatación de las circunstancias de hecho concurrentes y necesaria exposición razonada del método y factores tenidos en cuenta se emite dictamen por expertos. Junto a ello, resulta también de gran relevancia la opinión que tengan los hijos, captada por los medios de exploración de su voluntad acordes a su edad y situación, que permitan conocer realmente cuál es su preferencia real.

QUINTO.- En el caso de autos, la sentencia del Juzgado de Primera Instancia valoró tanto el informe psicosocial como la voluntad de los menores recogida por los expertos que lo elaboraron, en el sentido de que querían permanecer bajo custodia de la madre. Y luego, con carácter previo al dictado de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial, como diligencia final, el Magistrado ponente, junto con la representante del Ministerio Fiscal, efectuaron la exploración de los dos hijos matrimonio, . Los dos, de 12 y 10 años de edad, respectivamente, con juicio y madurez suficiente, según percibió el Magistrado, expresaron con claridad que su relación es buena con uno y otro de los progenitores, y que desean seguir en la situación en que se encuentran, esto es, bajo custodia y en convivencia con la madre.

En consecuencia, el representante del Ministerio Fiscal en su informe pidió la confirmación de la sentencia que recogía la custodia individual y, luego, la sentencia dictada excluyó en el presente caso la aplicación de regla general de custodia compartida, ordenando que fuera la madre quien mantuviera la custodia de los menores, si bien con ampliación del régimen de visitas del padre en la forma que lo había acordado el Juzgado de Primera Instancia.

SEXTO.- Tal decisión de la sentencia recurrida atendió, por tanto, a la normativa legal de aplicación: primero, al asegurar la práctica de las pruebas necesarias para llegar a conocer con la mayor exactitud posible lo más beneficioso para los menores y al valorar las practicadas; y, segundo, al acordar, en consecuencia con ellas, la excepción a la regla general de la custodia compartida y establecer la individual.

No existe, por tanto, la infracción del artículo 80.2 del CDFA que el recurrente argumenta como motivo de su recurso. Ni cabe entender, como expone el recurrente, que se haya practicado prueba dirigida a acreditar como más conveniente la custodia individual o que sólo se haya atendido a la voluntad de los menores. Por el contrario, se constata que las pruebas tenidas en cuenta en la sentencia recurrida y, por su admisión en ella, las del Juzgado de Primera Instancia, tendieron a conocer lo que era realmente más beneficioso para los hijos, a la vez que ambas resoluciones razonaron en atención a los factores contenidos en los apartados a) a f) del citado artículo 80.2 y, entre ellos, previa percepción directa de los medios de prueba, concluyeron con la prevalencia de algunos de tales factores sobre los otros, dentro del ámbito que la decisión jurisdiccional de instancia comprende.

Por tanto, procede la desestimación del recurso interpuesto.”

***** Sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Ejea de los Caballeros de 12 de julio de 2012. Custodia compartida. Pensión alimenticia y compensatoria**

"Primero.- La demandante solicita que se decrete el divorcio, con lo que manifiesta su conformidad el demandado.

De la documentación aportada (certificación de la inscripción de matrimonio de los litigantes y del nacimiento del hijo común) se considera acreditado que María y Lorenzo contrajeron matrimonio en Ejea de los Caballeros, el, y que de dicho matrimonio nació un hijo

Cumpliéndose los requisitos establecidos en los artículos 86 y 81 del Código Civil, procede decretar del divorcio de María y Lorenzo.

Segundo.- En cuanto a la autoridad familiar y guarda y custodia, la demandante propone la atribución conjunta de la primera, y un régimen de custodia para cada uno de los progenitores con periodicidad mensual, así como el correspondiente régimen de visitas para el progenitor no custodio y un régimen para las vacaciones.

En la contestación a la demanda se presta conformidad a esta propuesta, que tampoco ha tenido objeción alguna por parte del Ministerio Fiscal, por lo que se aprueba, aunque debe instarse a los progenitores a que sean razonables en el desarrollo de este régimen, ya que las visitas y vacaciones están bastante detallados, pero no así el régimen ordinario de custodia alternativa mensual. No consta que haya habido ningún problema hasta el momento con esta cuestión. Del documento 1 de la contestación a la reconvención se desprende que, hasta el momento, los progenitores han actuado responsablemente en este aspecto. Por ello se confía en que así sigue siendo y se insta a los progenitores a que mantengan esta conducta con independencia de las diferencias que puedan tener en otras cuestiones.

Tercero.- La actora solicita también que se le atribuya el uso del que vino siendo domicilio familiar, en la calle. Constando también aquí acuerdo entre las partes, puesto que ambos litigantes tienen su propia vivienda en propiedad, procede acceder a lo solicitado.

Cuarto.- La demandante solicita que, dado que se establece una custodia compartida al 50%, no se establezca contribución de ningún progenitor a los alimentos del hijo, de manera que cada progenitor satisfaga los que procedan mientras el hijo se encuentre en su compañía. En la vista, se solicitó que se abriera una cuenta conjunta, en la que cada progenitor ingresase 50 euros cada mes para determinados gastos.

El demandado se opone en este punto, y solicita que la demandante deberá abonar en concepto de alimentos para el hijo común la cantidad de 300 euros mensuales los meses en que la custodia corresponda al padre.

El Ministerio Fiscal consideró que, aunque existía cierto desnivel económico entre los litigantes, éste no era suficientemente relevante, que el padre podía trabajar y que el tiempo en el que el menor había estado con el padre éste podía salir adelante, por lo que cada progenitor debería afrontar los gastos del menor mientras lo tuviese en su compañía, y los gastos extraordinarios deberían sufragarse por mitad.

El artículo 82 del Código de Derecho Foral de Aragón se refiere a los gastos de asistencia a los hijos. Esta cuestión no viene determinada por el tipo de custodia que se adopte, aunque sí se tenga en cuenta esta cuestión a la hora de asignar la realización de los gastos. La contribución, según los apartados 1 y 2 de este precepto, se hará por cada progenitor "*proporcionalmente con sus recursos económicos*", y teniendo en cuenta las "*necesidades de los hijos... sus recursos y... los recursos económicos disponibles por los padres*".

En el caso que nos ocupa, la demandante trabaja en la empresa . No ha aportado ninguna nómina al procedimiento, pero del documento 2 de la contestación a la demanda, así como de las propias declaraciones de la demandante, se desprende que cobra un sueldo de algo más de 1.000 euros netos, con las pagas extraordinarias repartidas (es decir, doce pagas). En el documento referido, extracto de la cuenta común desde el 30 de abril de 2011 hasta el 10 de abril de 2012, se observa que la nómina menor es de 1.017,13 euros y la mayor de 1.170,90. Si se hace una media de las once nóminas que aparecen en este documento, el resultado es 1.103,81 euros.

El demandado se encuentra en paro. Habiendo agotado la prestación, cobra ahora un subsidio de 569,77 euros mensuales. Alega la defensa que este subsidio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 216 de la Ley General de la Seguridad Social, tiene una duración de seis meses, transcurridos los cuales el cálculo se hace partiendo del 80% del IPREM, y no del 107%, por lo que estos ingresos pasarán a ser 426 euros al mes.

En cuanto a posibles ingresos del demandado por participar en una charanga, no hay prueba alguna aparte de las manifestaciones de la demandante, por lo que entiendo que esta circunstancia no debe ser tenida en cuenta.

De lo expuesto concluyo que el Sr. tiene unos ingresos bastante limitados. Ciertamente, no tiene que hacer frente a pago de alquiler o hipoteca, pero no puede pretenderse que contribuya al sostenimiento del hijo común en los mismos términos que la Sra., que cobra prácticamente el doble (más del doble si, en lugar de 569,77 euros, se parte de 426 euros al mes).

Por ello considero que la madre tendrá que abonar, en concepto de gastos de asistencia a su hijo, la cantidad de 150 euros al padre, los meses en que éste tenga a su hijo en su compañía, incluyendo el mes que el padre esté con el hijo

durante las vacaciones de verano. Esta cantidad deberá ser abonada cualquiera que sea el número de días que, por cumplimiento del régimen de visitas o vacaciones de Navidad o Semana Santa, pase el hijo con la madre, siempre que se trata de un mes en el que el período de custodia corresponda al padre.

Quinto.- En la reconvención se pide una asignación compensatoria de 200 euros mensuales, a favor del marido, que en caso de tener rentas de trabajo superiores al importe del subsidio de desempleo se reduciría en lo que excediere.

La reconvenida se opone a lo anterior.

El artículo 83.1 del Código de Derecho Foral de Aragón establece que "*el progenitor al que la ruptura de la convivencia produzca un desequilibrio económico en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento en su situación anterior a la convivencia, tendrá derecho a percibir del otro una asignación compensatoria*".

En el caso que nos ocupa entiendo que no procede la asignación compensatoria. La situación actual del reconviniente, en relación con la que tenía durante el matrimonio, puede haber empeorado (aunque no en relación a su situación anterior a la convivencia), y sí que se observa cierto desequilibrio económico en relación con la demandante. Sin embargo, ello no es consecuencia de la ruptura, ni de su dedicación al matrimonio. El reconviniente no ha dejado de trabajar para dedicarse a la familia, ni ha perdido por ello oportunidades laborales o profesionales. Ha perdido el empleo durante el matrimonio, pero esto habría ocurrido estuviera o no casado. Por lo tanto, su empeoramiento no tiene nada que ver con la ruptura.

Por ello, considero que no procede establecer la asignación compensatoria solicitada.

***** Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 13 de julio de 2012. Régimen de comunicaciones y alimentos. Vivienda familiar. Pensión compensatoria**

"PRIMERO.- Recurso de casación de Dª Marcela D E.

Se denuncia, como motivo único, la infracción, por interpretación errónea, de los preceptos contenidos en los apartados 3 y 4 del artículo 81 del CDFA.

En lo concerniente a la atribución del uso de la vivienda familiar que se hizo a la esposa, la sentencia luego confirmada en apelación acordó que *el uso que se concede a la esposa e hijos lo es limitado a la fecha de la liquidación del consorcio y efectivo reparto de los bienes que lo integran y en todo caso se acuerda que transcurridos dos años desde la fecha de esta sentencia sin que se haya repartido el patrimonio consorcial en su caso, sea puesto el indicado bien a la venta de forma inmediata al cumplirse tal plazo.* La sentencia de apelación consideró adecuada la solución del juzgado de instancia, dado lo costoso del mantenimiento de la vivienda familiar, el préstamo que gravaba la misma y la posibilidad de adquisición, con la venta, de otra menos costosa.

El artículo 81 antes citado establece:

Atribución del uso de la vivienda y del ajuar familiar.

1. En los casos de custodia compartida, el uso de la vivienda familiar se atribuirá al progenitor que por razones objetivas tenga más dificultad de acceso a una vivienda y, en su defecto, se decidirá por el Juez el destino de la vivienda en función del mejor interés para las relaciones familiares.

2. Cuando corresponda a uno de los progenitores de forma individual la custodia de los hijos, se le atribuirá el uso de la vivienda familiar, salvo que el mejor interés para las relaciones familiares aconseje su atribución al otro progenitor.

3. La atribución del uso de la vivienda familiar a uno de los progenitores debe tener una limitación temporal que, a falta de acuerdo, fijará el Juez teniendo en cuenta las circunstancias concretas de cada familia.

4. Cuando el uso de la vivienda sea a título de propiedad de los padres, el Juez acordará su venta, si es necesaria para unas adecuadas relaciones familiares.

(…).

SEGUNDO.- En relación con el precepto del art. 81.3, razona la recurrente que en la sentencia atacada no se han tenido en cuenta las circunstancias concretas de la familia, pues aquella ha considerado sólo el

aspecto económico sin tener en cuenta la atribución de la guarda y custodia de los hijos a la madre.
Por lo que hace a la regla del 81.4 la parte –que no articula motivo alguno de infracción procesal- expresa que la sentencia acuerda la venta sin dar un solo argumento de las razones que ha considerado para entenderlo como necesario para las relaciones familiares, cuando precisamente –siempre en tesis de la recurrente- la venta en el plazo de dos años es absolutamente contraria a los intereses familiares. Y refiere que, si bien el art. 81 prevé que la atribución del uso a uno solo de los progenitores tendrá una duración temporal, sólo admite que el Juez acuerde la venta cuando ello fuere necesario para unas relaciones familiares, y en el caso ni la venta es necesaria (es inoportuna, según la parte) ni la sentencia dice que lo sea.

TERCERO.- La regla que consagra el artículo 81.2 es la atribución del uso de la vivienda familiar al progenitor a quien corresponda de forma individual la custodia de los hijos. Atendiendo lo ordenado por dicho precepto, en la sentencia impugnada se ha atribuido dicho uso a la madre, al ser ésta quien ostenta la custodia individual.

Pero el legislador aragonés no ha querido dejar en la indeterminación la necesaria liquidación de los intereses económicos o patrimoniales de los progenitores, ya que no en todos los casos existen razones atendibles para un uso de larga duración, y menos para acordar un uso ilimitado, pues la subsistencia de vínculos de tal naturaleza constituye de ordinario fuente de conflictos, además de que puede lesionar el interés del otro si es propietario o copropietario de la vivienda. Por ello, en el apartado tercero de ese mismo artículo se ordena que tal uso *debe tener una limitación temporal que, a falta de acuerdo, fijará el Juez teniendo en cuenta las circunstancias concretas de cada familia*. Es decir, el precepto deja a la discrecionalidad del Juez la fijación del límite, que es lo que asimismo se ha hecho en el caso presente estableciéndolo en dos años. La parte se queja de que no se han tenido en cuenta las circunstancias concretas de la familia, al haberse considerado sólo el aspecto económico de la cuestión. Pero no concreta cuales son las demás circunstancias que se han obviado; nada indica en orden a las consecuencias de otra índole que de un cambio de domicilio (y eventual cambio de colegio, o de amigos o vecinos) pudieran derivarse para la estabilidad de los niños. Sólo dice que no se ha tenido en cuenta la atribución de la guarda de los hijos a la madre, lo cual no es cierto. Y es indudable que en el caso tienen gran relevancia las circunstancias económicas, como se señala en la sentencia de primera instancia después confirmada (y como la misma recurrente expone –si bien *pro domo sua*- en su escrito). En aquella se ha tenido en cuenta el hecho de que la vivienda familiar, gravada con una hipoteca cuya cuota mensual es de 885 €/mes a abonar por ambos esposos al 50% (además de gastos de seguro, IBI y derramas extraordinarias) resulta inasumible tras la ruptura, así como la inconveniencia

de cargar a la parte adversa costes de un sistema anterior que ya no existe. Lo cual se coordina con la limitación de la asignación compensatoria a un plazo de tres años. Es decir, se ha considerado que en un tiempo razonable la esposa puede subvenir a la necesidad de vivienda, buscando una nueva a la que trasladarse desvinculando la vivienda que fue conyugal, de las relaciones personales entre ambos. Tal planteamiento no es infundado, pues si bien es cierto (como la recurrente pone de relieve) que la situación actual del mercado permite prever que se alcanzará un precio por la actual residencia inferior al que se hubiera logrado en una coyuntura económica favorable, también lo es que podrá adquirirse otra por un precio asimismo inferior.

Y ese pronunciamiento de la sentencia no es sustituible en esta sede casacional al no aparecer como irracional, contrario a las reglas de la lógica o a las máximas de experiencia; esa fijación entra de lleno en el espacio de los pronunciamientos discrecionales, facultativos o de equidad, que constituyen materia reservada a la soberanía del Tribunal de instancia y, por consiguiente, no puede ser objeto de revisión en casación (STS 903/2005, de 21 noviembre y las allí citadas).

Podría plantearse la infracción no del 81.4 sino del 81.2 si el juzgador de instancia hubiera acordado la venta de la vivienda sin más. Pero acordar que se venda **después** de rebasado el límite temporal del uso no infringe el 81.4. En efecto, debe repararse en que, si la sentencia recurrida se hubiese limitado a fijar un plazo de dos años al uso (en atención a las circunstancias concretas de la familia) a lo que nada hay que objetar por lo que acaba de exponerse, nada impediría al esposo, transcurrido ese lapso, solicitar la liquidación o –en su caso- ejercitar su derecho a la división con base en los artículos 400 y siguientes del Código Civil.
Cuestión diferente será el precio, el procedimiento para la venta, y las demás cuestiones atinentes a la medida acordada, que la sentencia (como la norma) no concreta pero en las que en modo alguno puede entrarse en esta sede casacional.

Por cuanto antecede, el recurso se desestima.

CUARTO.- Recurso de D. Luis Ignacio C y Dª María Pilar R C.

Se apoya el primero de los motivos que resultaron admitidos, en la alegada infracción del art. 83 del CDFA. Conforme a lo que ahí se dispone, *El progenitor al que la ruptura de la convivencia produzca un desequilibrio económico en relación con la posición del otro, **que implique un empeoramiento en su situación anterior a la convivencia***, (la parte resalta esta expresión en su escrito de recurso) *tendrá derecho a percibir del otro una asignación compensatoria*.

Pretende la parte que, conforme a la interpretación literal de dicho precepto, no se debe reconocer asignación compensatoria a favor de la esposa. Y

señala que ésta, que antes de casarse o de iniciar la convivencia era estudiante sin ingresos económicos, durante el matrimonio terminó sus estudios y pasó a trabajar por cuenta ajena, por lo que no se cumple el requisito de empeoramiento de la situación económica anterior al matrimonio. Afirma también que no existe desequilibrio económico entre los cónyuges.

En relación con esto último, debe indicarse que en esta sede casacional hay que estar a la resultancia fáctica sentada en la instancia. Y en la sentencia de primera instancia (apartado 5 de los Fundamentos) se expresa que:

En este caso, se ha de fijar una asignación compensatoria muy limitada en el tiempo, valorando que la crisis económica actual afecta sin duda al negocio de la empresa y asumiéndose un desequilibrio económico que existe y debe compensarse(...). La medida del fallo es pues acorde a los hechos indicados y se coordina con el resto de pruebas practicadas y medidas acordadas muy en especial por lo que se refiere a la vivienda cuyo uso y futuro destino se adivina decisivo en coordinación a la asignación compensatoria.

QUINTO.- El problema relativo a la interpretación que haya de darse a la norma en cuestión se abordó por esta Sala en sentencia de 30 de diciembre de 2011 dictada en el recurso de casación 19/2011. En esa ocasión se dijo:

" La asignación compensatoria prevista en el artículo 9 de la Ley aragonesa 2/2010 (artículo 83 CDFA) no tiene, en lo sustancial, una naturaleza y finalidad diferente a la señalada por el artículo 97 del Código civil a la pensión compensatoria, salvo que esta última viene encuadrada entre los efectos comunes a la nulidad, separación y divorcio del matrimonio, en tanto que la asignación aragonesa se aplicará, si se dan los requisitos para ello, en los casos de ruptura de cualquier tipo de convivencia de los padres.

Ya el Preámbulo de la ley (párrafo final de su apartado VII, que es ahora el penúltimo párrafo del apartado 10 del Preámbulo del Código de Derecho Foral de Aragón) prevé "*la posibilidad de que uno de los padres solicite al otro una asignación económica destinada a compensar la desigualdad económica que le produzca la ruptura de la convivencia*". Esta previsión se concreta en el artículo 9.1 del texto normativo: "*El progenitor al que la ruptura de la convivencia produzca un desequilibrio económico en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento en su situación anterior a la convivencia, tendrá derecho a percibir del otro una asignación compensatoria*".

Se trata de compensar la desigualdad que a uno de los padres pueda producir la ruptura de la convivencia, para lo que se han de tener en cuenta, a los efectos de determinar la cuantía y naturaleza temporal o indefinida de la asignación, los criterios señalados en el apartado 2 del mismo artículo. Y estos criterios, a salvo de los dos primeros más genéricos, se refieren a situaciones que tienen que ver con el tiempo de convivencia (edad de los hijos, atribución del uso de la vivienda familiar, funciones familiares desempeñadas por los

padres y duración de la convivencia) y no con situaciones anteriores a la misma.

Por ello no es correcta la interpretación del recurrente de que la norma aragonesa resulta diferente de la contenida en el artículo 97 del Código civil, en el sentido de que aquélla exija, para señalar la asignación compensatoria, un empeoramiento respecto a la situación anterior a la convivencia pues, como se ha dicho, se trata de compensar la desigualdad por razón de la ruptura de la convivencia en relación, fundamentalmente, con la situación en la misma, de la misma forma que en el Código civil al referirse al empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio."

Pues bien, la aplicación de ese mismo criterio al supuesto que ahora se nos somete conduce necesariamente a no acoger la tesis del recurrente, a la que en nada apoyan sus afirmaciones de que la esposa ha extraído dinero de las cuentas corrientes unilateralmente, circunstancia que, en su caso, habría de tenerse en cuenta en la liquidación del régimen económico matrimonial.

En consecuencia, el motivo se desestima.

SEXTO.- En el segundo de los motivos (que resultaron admitidos) del recurso interpuesto por D. Luis Ignacio C y Dª María Pilar R C se denuncia infracción del artículo 77.2.a) en relación con el 79 del CDFA, que se considera producida al no haber fijado la sentencia recurrida un régimen mínimo de comunicaciones telefónicas con los hijos a favor del padre.

El primero de los preceptos referidos, dentro de la regulación del pacto de relaciones familiares, no contiene previsión alguna en relación con las comunicaciones telefónicas sino con el régimen de convivencia o de visitas.

En cuanto al artículo 79, la recurrente no especifica cual de sus apartados considera infringido ni razona el porqué de la infracción que denuncia, sino que tras exponer su situación (el hecho de residir en Dubai y que no le permiten comunicar con sus hijos cuando les llama) solicita *el amparo del Juzgador* para que acuerde que el padre *tendrá derecho como mínimo a comunicar telefónicamente con los hijos sobre las 20,00 horas todos los días*.

Lo único que a este respecto se propuso en el inicial escrito alegatorio del padre, tras indicar que intuía que la madre estaba transmitiendo a los hijos que aquel no les quería y por eso no le cogían el teléfono, fue que el padre podría comunicarse telefónicamente con sus hijos en los días y horas que estimase por conveniente, siempre y cuando tales comunicaciones las realizase en horario normal, no perjudicando las horas de estudio y de descanso de los menores y siempre bajo en principio de la buena fe. A ello añadió que el mismo derecho tendría la madre respecto a los períodos de tiempo que los hijos comunes pasasen en compañía de la familia del padre. Congruentemente, la sentencia de instancia dispuso que *no es necesario que la resolución judicial establezca una forma concreta de comunicación para que ésta pueda exigirse de la parte si se estima razonable y comprendida en el marco propio de las relaciones entre*

progenitor no custodio e hijo/a/os/as menor/es. Fue en el recurso de apelación interpuesto por el padre donde se solicitó que se fijase el régimen de comunicaciones telefónicas todos los días a las 20,00 horas, si bien la sentencia de apelación confirmó en este extremo la de primera instancia.

El pronunciamiento acerca de las comunicaciones contenido en la sentencia recurrida en nada vulnera el citado artículo, pues de su texto no se deriva la necesidad de que el juzgador determine el modo y frecuencia con la que han de verificarse las llamadas. La discrepancia de la parte con la medida en cuestión y su impugnación tan sólo podría referirse pues a la valoración judicial de las circunstancias que en la sentencia recurrida condujo a no aceptar lo que la parte propuso en su recurso de apelación. Pero ha de destacarse que ni la sentencia recurrida recoge como hecho probado la obstaculización de las comunicaciones telefónicas que en el recurso se imputa a la contraparte, ni la parte articula motivo alguno de infracción procesal en la valoración de la prueba, debiendo recordarse que no corresponde al órgano de casación la aplicación de la norma desde una base fáctica diversa a la tenida en consideración por la sentencia de instancia. Lo cual no impide en absoluto que, si se acreditara la referida circunstancia, pueda el padre recabar del Juzgador las medidas oportunas (art. 79.2 a) CDFA).

Por todo lo expuesto, procede la desestimación del segundo motivo y con ello, la del recurso de D. Luis Ignacio C y Dª María Pilar R C”

***** Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 24 de julio de 2012. Custodia compartida. Menores adoptados. Valoración de la prueba pericial psicológica judicial. Motivación. Edad y opinión del menor con capacidad suficiente**

"PRIMERO.- En el proceso seguido sobre modificación de medidas de divorcio a instancia de D. Jesús O. G. contra Dª. Esther C. C., la parte actora ha solicitado que la autoridad familiar respecto de los hijos del matrimonio se otorgue a ambos progenitores y que se acuerde la guarda y custodia compartida, juntamente con otras medidas derivadas de las peticiones principales. Tras el trámite procedente la sentencia de primera instancia ha desestimado la pretensión al entender que el interés de los hijos no demanda el cambio interesado por el padre. A esta decisión llega tras el examen de las alegaciones de las partes y de la prueba practicada en dicha instancia, considerada a la luz de lo dispuesto en el art. 80 del CDFA.

La sentencia de la Audiencia Provincial, ahora recurrida, ha confirmado la del juzgado. Lo hace tras reexaminar la prueba practicada y las alegaciones de la parte recurrente, expresando que las conclusiones obtenidas por el Juez de Primera Instancia se han visto reforzadas con la exploración judicial de la menor M, que manifestó que está bien con el sistema por el que actualmente se rigen las visitas con su padre y que no desea ningún cambio. Concluye la Audiencia afirmando que "*en coincidencia con lo informado por el Ministerio Fiscal tras la exploración practicada, se estima preferible, por positiva y favorable al interés de los menores, el mantenimiento de la situación en que se encuentran, sin perjuicio de lo que en el futuro proceda a la vista de la evolución del caso*" –fundamento de derecho cuarto, in fine-.

SEGUNDO.- La representación del Sr. O. G. recurre en casación en base a las infracciones que quedan recogidas en el antecedente de hecho quinto de esta sentencia. De ellas, la expresada en el Apartado C) denuncia la aplicación indebida del art. 80 del CDFA en relación con los arts. 217 y 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre la prueba, especialmente la pericial psicológica. Este motivo ha de ser considerado como de aquéllos susceptibles de recurso extraordinario por infracción procesal, que pueden ser invocados ante esta Sala cuando se ha interpuesto recurso de casación, al permitirlo así la Disposición final Decimosexta, Apartado 1, regla 1ª, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y será objeto de examen en primer lugar.

En el desarrollo del motivo el recurrente expresa que la única prueba practicada, relativa a la idoneidad de la custodia compartida, ha sido la pericial

psicológica judicial, y entiende que la Audiencia no justifica ni valora con razón el rechazo a la prueba pericial y casi única practicada.

El referido motivo no puede ser estimado. No puede afirmarse que la sentencia de la Audiencia Provincial carezca de motivación sobre la cuestión fáctica ni haya dejado de valorar la prueba practicada, porque en los fundamentos de derecho, especialmente en el tercero y cuarto, expone las razones que conducen a la decisión confirmatoria que adopta, y lo hace aceptando la valoración que realizó el Juez de Primera Instancia y, además, teniendo en cuenta la exploración judicial que se practicó como diligencia final en la segunda instancia, consistente en la exploración de la menor M, en los términos que posteriormente analizaremos.

La prueba pericial que se practica en autos debe ser necesariamente valorada por los Tribunales, conforme al criterio de la sana crítica, fijado por el art. 348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y motivando la sentencia a tenor de lo prevenido en el art. 218, apartado 2. No están obligados a seguir la conclusión de los peritos, pudiendo apartarse de ella, siempre que se expresen las razones que justifican la decisión. Y esto se ha realizado en el caso de autos, en el que tanto el Juez de Primera Instancia al desestimar la demanda –Fundamento de Derecho 2.2- como la Audiencia al confirmar dicho fallo, efectúan consideraciones sobre la práctica de las pruebas y su incidencia en el interés de los menores, que consideran preferente para adoptar la decisión sobre su guarda y custodia.

La referencia hecha en el acto de la vista a la incorrecta valoración de la exploración de la menor tampoco puede ser acogida. Dicha exploración quedó plasmada en el rollo de apelación, mediante acta de 6 de febrero de 2012, y no resulta de su contenido algo distinto de lo considerado por la Audiencia Provincial. No consta que la menor afirmara que no quería cambiar, pero debe entenderse que esa era la conclusión que la Audiencia Provincial extrajo de la anterior afirmación “está bien así”.

Finalmente, la invocación que el recurrente hace del art. 217 de la ley procesal no tiene cabida en el caso de autos, porque dicha norma regula la carga de la prueba, es decir, las consecuencias de la falta de acreditación de unos hechos: “*Cuando, al tiempo de dictar sentencia o resolución semejante, el Tribunal considerase dudosos unos hechos relevantes para la decisión, desestimará las pretensiones del actor o del reconviniente, o las del demandado o reconvenido, según corresponda a unos u otros la carga de probar los hechos que permanezcan inciertos y fundamenten las pretensiones*”. Pero en el caso de autos la Audiencia ha considerado acreditados determinados

hechos, y aplica al resultado de la prueba la consecuencia jurídica prevenida en la ley sustantiva, conforme a su criterio jurídico.

TERCERO.- Los motivos primero y segundo del recurso, que invocan bajo los apartados A) y B) la infracción del art. 80 del CDFA, van a ser objeto de examen conjunto. En el primero de dichos apartados se denuncia la inaplicación del carácter preferente de la custodia compartida y en el segundo la aplicación indebida del carácter excepcional de la custodia individual. En resumen, la parte recurrente entiende que ha sido infringido el precepto antes citado al no ser estimada la demanda en cuanto solicitaba la custodia compartida de los hijos.

El criterio establecido por el legislador aragonés respecto a la guarda y custodia de los hijos es el de otorgar preferencia a la custodia compartida, que el juez adoptará en interés de los hijos menores, salvo que la custodia individual sea más conveniente. Así lo establece el art. 80.2 del CDFA, que ordena atender a los factores referidos en la norma.

El caso de autos debe ser tratado como caso límite. La prueba pericial practicada considera procedente la custodia compartida, aconsejando la psicóloga adscrita al juzgado que los menores compartan el tiempo de permanencia con cada progenitor de manera equitativa, en periodos semestrales alternos. Por otra parte, la prueba practicada en el acto del juicio, a la que el juez de primera instancia otorgó valor de pericial, estima necesario mantener la estabilidad emocional de los menores, relevante especialmente en casos de niños adoptados.

Es de significar que el presente caso afecta a dos menores nacidos en Rusia y que fueron adoptados por los ahora litigantes, cuando éstos mantenían su relación conyugal con normalidad. M, nacida en 2002, fue adoptada en 2006, cuando contaba 4 años y medio de edad. J, nacido en 2005, fue adoptado en 2008, teniendo 2 años y medio de edad. De la prueba pericial practicada resulta que la niña se adaptó bien a la vida en España, aunque con déficit en el aprendizaje del idioma que dificultó su comunicación y relaciones sociales, así como su rendimiento académico. Es una niña de carácter tímido y reservado, muy unida a su madre, por la que siente gran apego. El menor J se adaptó a España de forma positiva, aunque le está resultando difícil la asunción de las circunstancias familiares y está en tratamiento psicológico desde abril de 2011.

Además de la prueba practicada en la primera instancia, la Audiencia Provincial ha llevado a cabo la exploración de M, que manifestó que está bien

con el sistema por el que actualmente se rigen las visitas con el padre. El resultado de esta exploración ha sido considerado especialmente en la sentencia recurrida, para confirmar la decisión del Juez de Primera Instancia.

Esta valoración se ajusta a lo establecido en el art. 80.2 del CDFA, y tiene en cuenta los factores referidos a las edades de los hijos y a la opinión expresada por la mayor de ellos, M, que tenía suficiente juicio al tiempo de ser explorada. La opinión de los menores resulta relevante a la hora de decidir sobre su forma de vida futura, aunque habrá de ser valorada juntamente con los demás factores que expresa el precepto citado. No es la voluntad que decide el litigio, ya que se trata de personas en formación, que conforme al art. 5 del CDFA no tienen plena capacidad de obrar, pero esta expresión es un factor de relieve a la hora de adoptar la decisión. Como afirma la Sentencia del TSJ de Cataluña de 23 de febrero de 2012, "*Sin necesidad de entrar en disquisiciones doctrinales sobre la naturaleza jurídica de la exploración judicial puesto que difícilmente puede considerarse un medio de prueba en el que basar una resolución sino el instrumento por el que el menor afectado por un procedimiento puede dar a conocer al Juez su opinión (de tal modo que según algún sector doctrinal el contenido de la exploración podría quedar fuera del conocimiento de las partes) lo cierto es que en la exploración adquiere el principio de inmediación su mayor relevancia, pues con independencia de lo que se haga constar en el acta, en el caso de que se hubiese documentado como aquí ha ocurrido, la percepción, impresiones, etc. que tuvo el Tribunal en la entrevista con los menores difícilmente pueden ser plasmadas en toda su amplitud en un documento escrito*".

Una vez adoptada una decisión sobre M, es de aplicación el precepto contenido en el art. 80.4 CDFA, a cuyo tenor "*Salvo circunstancias que lo justifiquen específicamente, no se adoptarán soluciones que supongan la separación de los hermanos*".

La Audiencia Provincial motiva las razones que justifican la decisión adoptada, sin que los razonamientos expresados en la sentencia impugnada resulten arbitrarios o contrarios a la lógica. De su examen resulta la razonabilidad de la argumentación, que se inscribe dentro del ámbito de discrecionalidad que corresponde a los tribunales de instancia, conforme al precepto de referencia, que tiene como frontispicio el interés del menor, lo que es acorde con la Convención de 20 de noviembre de 1989 sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y ratificada por España. Especialmente se ha tenido en cuenta en este caso la opinión de la menor que tiene capacidad suficiente, a tenor del art. 12 de la citada Convención.

En consecuencia los motivos de recurso consignados bajo los apartados A) y B) no se estiman.

CUARTO.- En el apartado D) del escrito de interposición del recurso se denuncia la aplicación indebida del art. 76.2 b) del CDFA, en relación con el art. 14 de la Constitución española, en infracción del principio de igualdad.

En el precepto referido, cuya rúbrica es "Derechos y principios", se recoge que en las relaciones familiares derivadas de la ruptura de la convivencia de los padres se respetará el derecho de éstos a la igualdad: "*Los padres, respecto de sus hijos menores de edad, tienen derecho a la igualdad en sus relaciones familiares*". Precepto que traslada al derecho aragonés de la persona el principio general de derecho a la igualdad constitucionalmente reconocido.

Pero de dicha consideración no se desprende la consecuencia pretendida por el recurrente. Una aplicación literal del derecho a la igualdad respecto a los hijos menores implicaría la imposibilidad de establecer un sistema de custodia para uno solo de los progenitores, con o sin régimen de visitas para el otro. Como afirma la STC, en Pleno, 125/2003, de 19 de junio, con cita de otras precedentes, "*el juicio de igualdad ex art. 14 CE exige la identidad de los supuestos fácticos que se pretenden comparar, pues lo que se deriva del citado precepto es el derecho a que supuestos de hecho sustancialmente iguales sean tratados idénticamente en sus consecuencias jurídicas*" (fundamento de derecho cuarto). Lo que pretende el legislador es impedir un trato desigual ante situaciones idénticas, que no sea razonable ni esté razonado, y que resulte contrario a los intereses preferentes.

En el caso de la custodia de menores, los factores a que anteriormente hemos hecho referencia han de ser ponderados por el tribunal sentenciador, quién habrá de explicar las razones que conducen a una decisión, teniendo en cuenta el conjunto de circunstancias y considerando el preferente interés de los hijos menores. Siendo así, la custodia individual es una de las posibilidades legales existentes, que en este caso ha sido contemplada como la que sirve para propiciar el desarrollo y formación de los menores, conforme al art. 5.1 del CDFA, y que responde a la voluntad de la hija mayor, expresada libremente ante el tribunal de segunda instancia.

Como afirmó esta Sala en sentencia de 1 de febrero de 2012, "*En sentencias de esta Sala dictadas en aplicación de la Ley 2/2010, cuyos preceptos han sido incorporados al Código de Derecho Foral de Aragón, se han establecido los siguientes criterios exegéticos acerca de dichas normas: a) La custodia compartida por parte de ambos progenitores es el régimen preferente y predeterminado por el legislador, en busca de ese interés del menor, en*

orden al pleno desarrollo de su personalidad, de modo que se aplicará esta forma de custodia siempre que el padre y la madre estén capacitados para el ejercicio de las facultades necesarias a tal fin (Sentencia de 30 de septiembre de 2011); b) El sistema no es rígido, salvo en un mandato que dirige al juez: el superior interés del menor (Sentencia de 13 de julio de 2011); c) Podrá establecerse un sistema de custodia individual, cuando éste resulte más conveniente para dicho interés, a cuyo efecto habrá de evaluar los parámetros establecidos en el art. 80.2 del Código (Sentencias citadas y la de 15 de diciembre de 2011); d) La adopción de la custodia individual exigirá una atenta valoración de la prueba que así lo acredite -la conveniencia para el menor- frente al criterio preferente de la custodia compartida, al que el precepto legal otorga tal preferencia en interés de los hijos menores (Sentencia de 15 de diciembre de 2011). Para adoptar la decisión, en cada caso, será relevante la prueba practicada, especialmente los informes psicosociales -art. 80.3 CDFA- obrantes en autos, y la opinión de los hijos menores, cuando tengan suficiente juicio -art. 80.2 c) CDFA-. Por último, el Tribunal que acuerde apartarse del sistema preferentemente establecido por el legislador debe razonar suficientemente la decisión adoptada".

En este caso la Audiencia ha motivado con suficiencia la decisión adoptada, que no vulnera el ordenamiento jurídico sino que se acoge a una de las posibilidades que éste otorga, sin merma del derecho a la igualdad.

Por las razones expresadas, el motivo debe ser desestimado.

QUINTO.- Invoca la parte recurrente, por último, la aplicación indebida de la Disposición Transitoria Sexta del CDFA. En el desarrollo del motivo y en cuanto concierne a la citada infracción, expresa que las normas de la Sección Tercera del Capítulo II, Título II, son de aplicación a la revisión judicial de los convenios reguladores y de las medidas adoptadas con anterioridad al 8 de septiembre de 2010, y que el convenio suscrito entre los cónyuges en mayo de 2010 y la presentación de la demanda de divorcio el día 23 de junio de 2010 eran hechos anteriores a la aplicación de dichas normas, no afectados por una regulación que aún no estaba en vigor.

Aun siendo ciertas las alegaciones formuladas por el recurrente, el recurso no puede ser estimado, porque la disposición referida no ha sido aplicada al caso. Ni la sentencia de la Audiencia Provincial ni la del Juzgado han aplicado la Disposición cuya infracción se denuncia. La argumentación expresada en la sentencia de primera instancia, referida al momento en que D. Jesús firmó el convenio inicial y presentó la demanda de divorcio, sirve para poner de manifiesto que el demandante podía conocer la próxima entrada en vigor de la nueva regulación, cuya promulgación tuvo una importante

repercusión social. En ese sentido ha de entenderse la argumentación de que "*la sociedad aragonesa media estaba al tanto de la novedad legislativa. Más el esposo que toma la iniciativa de divorciarse*".

Pero la decisión del Juez de Primera Instancia, confirmada por la Audiencia, no se funda en la aplicación de la Disposición Transitoria, sino en el resultado de la valoración de la prueba y la consideración del interés preferente de los hijos que, en expresión de la primera sentencia, "*no demanda el cambio interesado por el padre*".

Por ello procede la desestimación del motivo y, con él, del recurso de casación interpuesto."

***** Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 18 de septiembre de 2012. Custodia compartida. Régimen de visitas. Progenitor que vive en otra localidad temporalmente. Alimentos**

"PRIMERO.- La Sentencia recaída en primera instancia en el presente procedimiento sobre divorcio (artículo 770 de la Ley de Enjuiciamiento) es objeto de recurso por ambas partes contendientes y de impugnación por el Ministerio Fiscal.

El demandado Sr., considera que se le atribuya la guarda y custodia manteniendo el régimen de visitas acordado, para la actora, se fije pensión alimenticia a cargo de ésta, subsidiariamente se otorgue la guarda y custodia compartida por los periodos propuestos en el juicio. De mantenerse la custodia por la madre se establezca el régimen de visitas que se expone en el recurso (folios 451 y 452) y se fije como pensión alimenticia la de 300 euros mensuales.

La actora en su recurso, (artículo 458 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) considera que debe dejarse sin efecto la multa impuesta en la Sentencia apelada.

El Ministerio Fiscal considera que debe ampliarse el régimen de visitas tal como se solicitó en el acto de la vista.

SEGUNDO.- Respecto a la guarda y custodia debe indicarse que obra en autos informe pericial psicosocial que expresamente indica, que ambos progenitores reúnen condiciones para poder ocuparse adecuadamente de su hijo, observándose una buen a relación de C con ambos progenitores. Se evidencia también que en este momento el menor se encuentra bien vivienda con su madre y con un amplio sistema de visitas con su padre, por lo que consideramos que debiera continuar esta situación. Por otro lado en cuanto a la custodia compartida consideramos que en este momento es lo más adecuado ya que el padre vive en a Coruña y además esta pendiente de destino que podría ser en cualquier punto de España. C, el hijo, tiene en la actualidad 6 años de edad, el recurrente así lo indica la Sentencia apelada, reconoce que el menor se encuentra en la actualidad muy bien adaptado a la actual situación, parece pues evidente que en presente supuesto la custodia individual se revela como el sistema más adecuado para el menor, procediéndose a descartar la custodia individual a favor del recurrente o la compartida que subsidiariamente solicita el apelante.

Se confirma la Sentencia en este apartado.

TERCERO.- En cuanto al régimen de visitas el apelante reside en La Coruña y la recurrente en Pontevedra con su hijo, teniendo en cuenta que entre

ambas capitales hay unos 100Km de distancia, lo adecuado es pues adaptar el régimen de visitas en beneficio del menor, para el caso de que se mantuviera la residencia de ambos en dichas localidades, pudiéndose fijar “ad cautelam” otro para el caso de que ambos progenitores pasen a residir en la misma localidad, así pues, en el primer caso se suprimen las visitas intersemanales disfrutando el demandado de dos fines de semana alternos, desde el viernes a la salida del colegio hasta el lunes por la mañana. En el caso de residir en la misma localidad el régimen de visitas de fines semana e intersemanales será tal como se indica en la Sentencia apelada, ampliándose los fines de semana al jueves.

En cuanto a las vacaciones de Navidad y Semana Santa se mantienen los periodos tal como fija la Sentencia apelada, ampliándose la entrega a las 20 horas en los días anteriores a la reanudación de las clases.

En cuanto a las vacaciones de verano no existe inconveniente alguno para que se amplíen las mismas a todo el periodo vacacional, dividiéndolo en dos periodos desde, el comienzo de las vacaciones hasta el 31 de Julio y de esta fecha, al comienzo de las clases en septiembre, eligiendo el padre en los años pares y la madre en los años impares.

CUARTO.-Respecto a la pensión alimenticia debe indicarse que el artículo 65 del Código del Derecho Foral de Aragón, establece para quienes ejercen la autoridad familiar la obligación entre otras de proveer a su sustento, habitación, vestido y asistencia médica de acuerdo con sus posibilidades, así como de educarlos y procurarles una formación integral. Igualmente el art. 82.1 del mismo texto legal de Aragón establece que tras la ruptura, ambos progenitores contribuirán proporcionadamente con sus recursos económicos a satisfacer los gastos de asistencia de los hijos/as, a su vez el punto 3 del mencionado artículo 82 indica que el Juez asignará a los padres la realización compartida o separada de los gastos ordinarios de los hijos/as teniendo en cuenta el régimen de custodia y si es necesario fijar un pago periódico de los mismos.

En el presente supuesto teniendo en cuenta los ingresos del alimentante (1.900€ mensuales) de manera aproximada, así como la asignación a la demandante del uso del domicilio familiar, procede mantener la cantidad que se fija en la Sentencia apelada (400€ mensuales).

QUINTO.- En cuanto a la multa impuesta por incomparecencia al acto de la vista (artículo 292 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), las razones que expone la recurrente en su apelación, así como las especiales circunstancias del caso, aconsejan no hacer uso de la facultad del artículo 292 de la Ley de

Enjuiciamiento Civil, debiéndose dejar sin efecto la multa fijada en la Sentencia apelada.”

***** Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 24 de septiembre de 2012. Carácter extraordinario del recurso de casación. Custodia compartida. Valoración del informe pericial y exploración del menor. Aptitud de los progenitores. Prioritario interés del niño**

"PRIMERO.- Procede resolver en primer lugar la causa de inadmisibilidad del recurso alegada por la parte recurrida en su escrito de oposición al amparo de lo dispuesto por el artículo 485, párr. 2º de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En fundamento de la misma expone que la parte recurrente ha interpuesto recurso de conformidad con el artículo 477.3.párr. 2º del mismo texto legal, considerando que presentaba interés casacional por tratarse de una norma que lleva menos de cinco años en vigor. En esta situación la parte recurrida sostiene que debe declararse la inadmisibilidad del recurso de casación, porque "cuando se pretenda recurrir una sentencia en base a lo dispuesto en el número 3º del apartado 2 del artículo 477, el escrito de recurso deberá expresar, a tenor de lo prevenido en el artículo 479.4 de la misma Ley procesal civil, *además de la infracción legal que se considere cometida, las sentencias que pongan de manifiesto la doctrina jurisprudencial ...en que se funde el interés casacional que se alegue* como recuerda el Auto del Tribunal Supremo de 25 de mayo de 2004".

La parte recurrida, en suma, sostiene que se ha omitido la cita de las sentencias expresivas de la jurisprudencia o doctrina jurisprudencial en que se funda el interés casacional alegado por la recurrente. Adicionalmente, alega también que no se identifica en el recurso cuál es el problema jurídico sobre el que no existe jurisprudencia "y que ha sido resuelto o debió serlo mediante aplicación de una norma de menos de cinco años de vigencia".

Para desestimar la causa de inadmisibilidad invocada se debe precisar en primer lugar que la parte recurrente, como cauce procesal de acceso a la casación o motivo de apertura, alegó realmente, si bien con cita errónea del párr. 2º del artículo 477.3, el interés casacional por infracción de una norma que lleva menos de cinco años en vigor, en concreto el artículo 80.2 del Código del Derecho Foral de Aragón –artículo 477.3, párr. 1º de la Ley de Enjuiciamiento Civil y artículo 3.3 de la Ley 4/2005, de 14 de junio, sobre la Casación Foral Aragonesa-. No invocó ninguno de los otros dos supuestos de interés casacional previstos en los expresados artículos, especialmente la oposición a doctrina jurisprudencial del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, o del Tribunal Supremo, dictada en aplicación de normas del Derecho civil aragonés, ni tampoco la existencia de jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales.

En esta situación no era necesaria la aportación del texto de las sentencias aducidas en fundamento del interés casacional –artículo 481.2 de la Ley procesal civil que regula en la actualidad las previsiones contenidas anteriormente en el artículo 479.4, que cita la parte recurrida, hasta la reforma introducida por la Ley 37/2011, de 10 de octubre-. Y asimismo procede rechazar la segunda alegación referente a la no identificación de cuál es el problema jurídico sobre el que no existe jurisprudencia y que ha sido resuelto o debió serlo mediante la aplicación de una norma de menos de cinco años de vigencia, porque dado el cauce de acceso a la casación elegido por el recurrente resulta suficiente la sola mención de una norma del Derecho civil aragonés que no lleve cinco años en vigor, en este caso el artículo 80.2 del Código del Derecho Foral de Aragón, por no existir respecto a dicho precepto doctrina jurisprudencial relativa a normas anteriores de igual o similar contenido. Por lo expuesto, procede desestimar la causa de inadmisibilidad opuesta por la parte recurrida y entrar a conocer del fondo del recurso.

SEGUNDO.- El recurrente fundamenta su recurso, en realidad, en un único motivo de casación, la infracción del artículo 80.2 del Código del Derecho Foral de Aragón, por inaplicación del criterio de adopción preferente de la custodia compartida, porque el segundo motivo que invoca en su recurso, la infracción de norma que lleva menos de cinco años en vigor, constituye un requisito o cauce procesal de acceso a la casación, como ya se ha argumentado, y no un motivo de impugnación de la sentencia recurrida en casación.

El matrimonio formado por el ahora recurrente don Antonio T. O. y la parte recurrida, doña María B. V., fue disuelto por sentencia de divorcio dictada el día 21 de septiembre de 2007 por el Juzgado de Primera Instancia nº 16 de Zaragoza, en la que se acordó:

- Otorgar a la madre la guarda y custodia del hijo habido en el matrimonio, David, compartiendo los progenitores la autoridad familiar.
- El padre podrá tener consigo al hijo los fines de semana alternos desde el viernes a la salida del colegio, o desde las 17.30 horas en su caso, hasta el domingo a las 20 horas y la mitad de las vacaciones de Navidad, Semana Santa, Pilar y verano. En el año 2007, el verano será por turnos de 15 días alternos en julio y agosto, y el resto de vacaciones de verano por mitades en junio y septiembre también de forma alterna, eligiendo la madre en años pares. Los fines de semana se extenderán a sus respectivos puentes y podrá alterarse su orden con ocasión de fechas señaladas.

  Además el Sr. T. podrá tener consigo al hijo los martes y jueves de todas las semanas, excepto en vacaciones, desde la salida del colegio a las 20 horas, y en las fechas señaladas los progenitores podrán tener al hijo fuera del régimen normal, entendiéndose que serán las de cumpleaños de aquella, bodas y comuniones familiares, debiéndose solucionar las discrepancias al respecto en vía de ejecución con antelación suficiente.

- Como pensión de alimentos para el hijo común, el Sr. T. entregará a la Sra. B. en los cinco primeros días de cada mes la cantidad de 300 euros que se actualizará anualmente cada 1 de enero en proporción a las variaciones del IPC publicadas en el INE.
- El uso del domicilio familiar sito en calle ..... se otorga a la Sra. B. V., debiendo abandonarlo el marido en el plazo de diez días.

Estas medidas se han mantenido vigentes hasta la incoación de este procedimiento, a excepción de las visitas intersemanales de martes y jueves, cuya realización quedó suspendida mientras el turno laboral del Sr. T. no le permitiera disfrutarlas y pudiendo volver a ejercerlas en caso de nueva modificación de su turno laboral. Así se acordó por sentencia de 23 de diciembre de 2008, dictada en el procedimiento de modificación de medidas 1201/2008. El Sr. T., finalmente, solicitó una disminución de la cuantía de la pensión de alimentos establecida para el hijo común, la cual fue finalmente desestimada por la Audiencia Provincial –sentencia de la Sección Segunda de 1 de junio de 2010-, manteniendo la inicialmente acordada en el procedimiento de divorcio.

Así las cosas, don Antonio T. O. ha interpuesto nueva demanda de modificación de medidas cuyo objeto principal es la solicitud de la guarda y custodia compartida del hijo menor de edad por periodos alternos de dos semanas naturales, con los pronunciamientos complementarios de régimen de visitas, modificación de gastos de asistencia al menor y atribución del uso de la vivienda familiar que se han detallado en el antecedente primero de esta resolución.

En la sentencia dictada en primera instancia, de 5 de septiembre de 2011, se estimó la petición de guarda y custodia compartida del menor por periodos semanales tras valorar, fundamentalmente, la relevancia del cambio al turno de trabajo de mañana del demandante Sr. T., lo que le permite recoger al menor a la salida del colegio, y analizar el resultado del informe emitido en el procedimiento de divorcio por la Sra. psicóloga y la Sra. trabajadora social adscritas al Juzgado, de fecha 3 de agosto de 2007, acompañado por el actor con su escrito de demanda, del que se concluye que “ambos progenitores a nivel psico-social pueden estar capacitados para ostentar la guarda y custodia de su hijo, ambos pueden disponer de los recursos sociales personales y familiares necesarios para poder atender y cuidar del menor, y ambos pueden ser conocedores de las atenciones y cuidados que un niño de esa edad necesita a esos niveles” –en ese momento el menor tenía algo más de cuatro años-. Se argumenta también que el referido informe rechazó la posibilidad de una guarda y custodia compartida por la falta de entendimiento y colaboración entre ambos progenitores. Frente a esa situación, se razona en dicha sentencia, se dan ahora las circunstancias para acordar en el momento actual una guarda y custodia compartida, porque la falta de entendimiento y comunicación entre los progenitores no es de tal entidad que les impida alcanzar acuerdos o

comunicarse circunstancias y hechos relativos al menor, y en todo caso, esta falta de entendimiento no puede constituir el factor decisivo que impida la adopción de un sistema de custodia compartida cuando el resto de los parámetros atinentes a los padres y al menor son favorables a tal sistema.

La sentencia fue recurrida en apelación por la demandada Sra. B. interesando el mantenimiento íntegro de las medidas adoptadas en la sentencia de divorcio de fecha 21 de septiembre de 2007 o, en su caso, la ampliación del régimen de visitas a favor del padre.

La Audiencia Provincial, tras practicar en la alzada la exploración del menor, dictó sentencia de fecha 27 de marzo de 2012 estimando el recurso de apelación referido y revocando la sentencia de primera instancia, acordando mantener vigentes las medidas adoptadas en los anteriores procedimientos seguidos entre las partes, y en concreto la custodia individual del hijo menor a favor de la madre, con las únicas alteraciones de limitar a tres años la atribución del uso de la vivienda familiar a favor de la madre y del hijo desde el dictado de dicha resolución, y de acordar que el padre pueda, si su disponibilidad laboral lo permite, recoger entre semana al hijo del colegio, hasta que la madre finalice su jornada laboral.

La Sala de apelación otorga la guarda y custodia a la madre tras explicitar en el fundamento de derecho segundo los elementos de hecho concurrentes. Así, a diferencia de la valoración realizada en la primera instancia, centrada en el informe emitido en el anterior procedimiento de divorcio, la Sala incide en el resultado del informe pericial psicológico practicado en este último procedimiento, del que resulta que el menor, de nueve años de edad en ese momento, se encuentra bien adaptado a su entorno y circunstancias actuales, manifestando su preferencia y deseos de continuar viviendo con su madre de forma cotidiana y su oposición a la custodia compartida solicitada por el padre. También se destaca la situación ambivalente en que se halla al verse inmiscuido en la conflictividad de sus padres, habiendo desarrollado determinadas estrategias para contentar a los dos, evitando incluso encuentros entre ambos para sustraerlos de conflictos y disputas. Se razona asimismo que esta misma actitud fue la mantenida en la exploración practicada en la alzada, sin dar razones concretas el menor de sus preferencias ni deseos. Se indica también que la perito detecta en el Sr. T. inestabilidad, malestar emocional y una elevada ansiedad, recomendando su asistencia a tratamiento especializado, así como que evite inmiscuir al hijo en los conflictos y diferencias de los progenitores. Al mismo tiempo, su examen evidencia una motivación centrada más en intereses económicos (pensiones y vivienda) que en aspectos parentales referentes especialmente a las necesidades del menor, por lo que la pericial concluye defendiendo el mantenimiento de la custodia a favor de la madre. En atención a las referidas circunstancias, en el fundamento tercero se concluye, con cita del artículo 80.2.c) del Código del Derecho Foral de Aragón, que se estima más

adecuada la custodia individual a favor de la madre a fin de proteger el prioritario interés del menor.

TERCERO.- El único motivo del recurso de casación, la infracción del artículo 80.2 del Código del Derecho Foral de Aragón por inaplicación del criterio de adopción preferente de la custodia compartida, se fundamenta sustancialmente en la discrepancia del recurrente con la valoración que realiza la Sala de Apelación, tanto del informe pericial del gabinete psicosocial adscrito al Juzgado, como del resultado de la exploración del menor practicada en la segunda instancia. Se razona, con cita de nuestra sentencia de 9 de febrero de 2012, que los informes médicos deben ser valorados por el Juzgador conforme a las reglas de la sana crítica, y que está perfectamente justificado, con la adecuada fundamentación, que la sentencia se aparte del criterio de los peritos. Y respecto a la exploración del menor, el recurrente insiste en el contenido del acta de la exploración, de la que resulta en un momento en el que el menor vivía ya en régimen de custodia compartida por semanas, en cumplimiento provisional de la sentencia de primera instancia, que el menor manifiesta que "está contento como está. Que no quiere cambiar nada" y asimismo, "que está bien así, que está igual de bien con su padre que con su madre". Junto a ello, el recurrente dedica un último fundamento a defender las ventajas genéricas que ofrece a su criterio el régimen de custodia compartida.

La representación de la Sra. B. pide la desestimación del motivo por considerar que lo que pretende la parte recurrente es una nueva valoración de la prueba practicada, de modo que el recurso pasaría a convertirse en una tercera instancia, lo que resulta ajeno a la naturaleza de la casación. Por lo demás, destaca los elementos probatorios tomados en consideración por la Audiencia y cómo los mismos, especialmente el resultado del informe pericial practicado en las actuaciones y la valoración que se realiza en sentencia de la exploración del menor, justifican la conclusión de la sentencia recurrida referente a la mayor conveniencia de acordar en este caso la custodia individual a favor de la madre.

Por su parte, el Ministerio Fiscal formula oposición al recurso de casación foral y solicita la confirmación de la sentencia recurrida. En su escrito de oposición destaca la relevancia de los informes psicosociales y de la opinión del menor para la adopción de la medida, concluyendo del examen de las circunstancias concurrentes que la custodia individual a favor de la madre resulta más conveniente para el interés del menor, siendo además el criterio preferido por el menor.

CUARTO.- Para resolver correctamente sobre la impugnación deducida es necesario precisar el alcance del recurso de casación. El Tribunal Supremo ha destacado de forma reiterada "el carácter extraordinario del recurso de casación, en el que prevalece la finalidad de control de la aplicación de la norma y de creación de doctrina jurisprudencial, lo que, se insiste, exige plantear al

Tribunal Supremo cuestiones jurídicas de un modo preciso y razonado, sin apartarse de los hechos, sin someter a la Sala valoraciones particulares a partir de los hechos que interesan al recurrente, pues en tales casos no subyace en puridad el conflicto jurídico que justifica el recurso de casación, en atención a sus funciones y finalidades" –por todas, sentencia de 23 de enero de 2012-.

En igual sentido se ha pronunciado esta misma Sala al expresar: "Hemos advertido en numerosas ocasiones que el Tribunal Supremo, al precisar el ámbito de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal, ha reiterado que una correcta técnica casacional implica plantear cuestiones jurídicas sin apartarse de los hechos, toda vez que el recurso de casación no constituye una tercera instancia, sino que es un recurso extraordinario que tiene una finalidad de control de la aplicación de la norma sustantiva y de creación de doctrina jurisprudencial, lo que impide invocar la infracción de normas sustantivas desde una contemplación de los hechos diferente de la constatada en la instancia, eludiendo así la valoración probatoria contenida en la sentencia impugnada, y si se argumenta al margen de la base fáctica contenida en la misma se incurre en el defecto casacional de hacer "supuesto de la cuestión" (así, SSTS de 29 de diciembre de 1998, 22 de febrero de 2000, 13 de febrero de 2003, 19 de abril de 2007, y 26 de junio de 2008 entre otras muchas). Ha de estarse, pues, a los hechos que se declararon probados en la sentencia impugnada" –STSJA de 14 de diciembre de 2011-.

La aplicación al caso de la expresada doctrina impone la desestimación del recurso de casación foral deducido por el demandante don Antonio T. O. En efecto, el examen de la fundamentación del recurso pone de manifiesto que el recurrente pretende sustituir la valoración de la prueba realizada en la instancia por otra distinta, la que interesa a la parte, lo que escapa del ámbito propio del recurso de casación, que está circunscrito al análisis de las cuestiones jurídicas planteadas, sin apartarse de los hechos declarados probados, de los que no resulta infracción alguna del artículo 80.2 del Código del Derecho Foral de Aragón.

Así, la sentencia de este Tribunal de 1 de febrero de 2012 viene a resumir los criterios exegéticos sentados por la Sala para la aplicación del referido precepto: "a) La custodia compartida por parte de ambos progenitores es el régimen preferente y predeterminado por el legislador, en busca de ese interés del menor, en orden al pleno desarrollo de su personalidad, de modo que se aplicará esta forma de custodia siempre que el padre y la madre estén capacitados para el ejercicio de las facultades necesarias a tal fin (Sentencia de 30 de septiembre de 2011); b) El sistema no es rígido, salvo en un mandato que dirige al juez: el superior interés del menor (Sentencia de 13 de julio de 2011); c) Podrá establecerse un sistema de custodia individual, cuando éste resulte más conveniente para dicho interés, a cuyo efecto habrá de evaluar los parámetros establecidos en el art. 80.2 del Código (Sentencias citadas y la de 15 de diciembre de 2011); d) La adopción de la custodia individual exigirá una atenta

valoración de la prueba que así lo acredite -la conveniencia para el menor- frente al criterio preferente de la custodia compartida, al que el precepto legal otorga tal preferencia en interés de los hijos menores (Sentencia de 15 de diciembre de 2011)".

Como ya se ha expuesto, en la sentencia de segunda instancia se ha realizado una detallada valoración de la prueba practicada al amparo del artículo 80.2 del Código del Derecho Foral de Aragón en sus apartados c), expresamente mencionado en la sentencia recurrida y referente a la opinión de los hijos siempre que tengan suficiente juicio y d), en el extremo que alude a la aptitud de los progenitores para asegurar la estabilidad de los menores. Y a partir de esos hechos declarados probados en la sentencia de apelación, la Audiencia concluye que en el supuesto enjuiciado concurren circunstancias que aconsejan como más conveniente para el interés del menor el mantenimiento de la custodia individual a favor de la madre, de modo que esta Sala no advierte infracción alguna del reiterado artículo 80.2 del Código del Derecho Foral de Aragón.

Por todo ello procede la desestimación del motivo y, con él, del recurso de casación interpuesto."

***** Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 25 de septiembre de 2012. Custodia compartida. Idoneidad del progenitor. Conveniencia para el menor. Edad del niño y adaptación a la escuela. Extensión temporal**

"PRIMERO.- En el único motivo de recurso de casación, con invocación de la sentencia de esta Sala de 15 de diciembre de 2011, se alega infracción de lo dispuesto en el artículo 80.2 del CDFA por inaplicación del criterio legal preferente de custodia compartida. Tras hacer referencia a las ventajas de dicha opción legislativa, el recurrente indica que se equivoca el juzgador de la Audiencia cuando le exige una prueba de su idoneidad, una especie de "plus" en contra de lo establecido en la norma, cuando el criterio debe ser el contrario.

SEGUNDO.- Tal como se señala en el recurso, esta Sala ya ha elaborado una doctrina jurisprudencial relativa al problema que aquí, una vez más, se plantea. Como se expuso en sentencia de 1 de febrero de 2012 entre otras, "*En sentencias de esta Sala dictadas en aplicación de la Ley 2/2010, cuyos preceptos han sido incorporados al Código de Derecho Foral de Aragón, se han establecido los siguientes criterios exegéticos acerca de dichas normas: a) La custodia compartida por parte de ambos progenitores es el régimen preferente y predeterminado por el legislador, en busca de ese interés del menor, en orden al pleno desarrollo de su personalidad, de modo que se aplicará esta forma de custodia siempre que el padre y la madre estén capacitados para el ejercicio de las facultades necesarias a tal fin (Sentencia de 30 de septiembre de 2011); b) El sistema no es rígido, salvo en un mandato que dirige al juez: el superior interés del menor (Sentencia de 13 de julio de 2011); c) Podrá establecerse un sistema de custodia individual, cuando éste resulte más conveniente para dicho interés, a cuyo efecto habrá de evaluar los parámetros establecidos en el art. 80.2 del Código (Sentencias citadas y la de 15 de diciembre de 2011); d) La adopción de la custodia individual exigirá una atenta valoración de la prueba que así lo acredite -la conveniencia para el menor- frente al criterio preferente de la custodia compartida, al que el precepto legal otorga tal preferencia en interés de los hijos menores (Sentencia de 15 de diciembre de 2011). Para adoptar la decisión, en cada caso, será relevante la prueba practicada, especialmente los informes psicosociales -art. 80.3 CDFA- obrantes en autos, y la opinión de los hijos menores, cuando tengan suficiente juicio -art. 80.2 c) CDFA-. Por último, el Tribunal que acuerde apartarse del sistema preferentemente establecido por el legislador debe razonar suficientemente la decisión adoptada*".

TERCERO.- La sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Teruel y que ahora se recurre, expresa que *este Tribunal rechaza toda propuesta de interpretación que establezca la equivalencia entre solicitud de revisión y necesaria concesión de la custodia compartida, si razonablemente no se prueba al menos la superior conveniencia de dicho régimen de custodia*, lo que considera que no se ha producido en el caso. Dado que parte de esa base, no recoge circunstancia alguna, concurrente en el padre, que permita apreciar inidoneidad para acordar el régimen que se pide, o que éste no sea el más conveniente para el menor. Únicamente alude a la corta edad del niño (3 años cuando se dictó la sentencia de primera instancia en 7 de noviembre de 2011). Pero este hecho, por sí solo, no es ni puede ser suficiente para obviar el criterio preferente de la ley, de acuerdo con lo que la Sala ha proclamado en las sentencias citadas. Se expresa también en la sentencia recurrida que el proceso de adaptación a la escuela en el que el niño se encuentra no se vería favorecido por un cambio semanal de domicilio como pretende el padre. Mas esto tampoco es bastante para excluir el régimen preferente, si bien es de compartir la apreciación que se hace en el sentido de que la secuencia semanal podría comportar consecuencias negativas, pareciendo más adecuada la alternancia bisemanal o quincenal como sugiere el Ministerio Fiscal, de los períodos de estancia del menor con los progenitores.

En suma, la sentencia impugnada se aparta de la recta aplicación del art. 80.2 del CDFA y jurisprudencia de esta Sala que lo interpreta. Y frente a ello no puede prevalecer lo que se sostiene por la representación de Dª María M. en su escrito de oposición al recurso, donde expone las dudas e incertidumbres que, de cara al futuro, planteará el régimen referido, postulando la custodia individual como más conveniente para el menor.

CUARTO.- Procede, en consecuencia, la estimación del recurso, lo que determina que debe la Sala dictar sentencia en cuanto al fondo.

El plan de relaciones familiares propuesto por el recurrente, y que apoya el Ministerio Fiscal, no ha sido específicamente combatido por la parte recurrida, de manera que se acepta por la Sala con las salvedades que de oficio se indican a continuación:

1.- En relación con el período de permanencia del niño con cada progenitor, y como se desprende de lo que hemos expuesto, será cada dos semanas por considerarse que tal duración es más conveniente para el interés del menor.

2.- Cuando el menor esté escolarizado, la recogida por el progenitor a quien corresponda se hará a las 17,30 en el domicilio del otro progenitor o bien el viernes a la salida del colegio si así lo acuerdan ambos progenitores.

3.- La distribución de los períodos vacacionales escolares de Navidad Semana Santa y verano, en defecto de acuerdo de ambos progenitores y en aras

a una mayor claridad y a la evitación de posibles conflictos, se establecerá de modo que la elección de los períodos corresponderá a la madre en los años pares y al padre en los impares.

4.- El abono de los gastos extraordinarios, se realizará de acuerdo con lo previsto en el artículo 82.4 del CDFA, norma a la que en todo caso ha de ajustarse la resolución.”

***** Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 28 de septiembre de 2012. Preferencia de la custodia compartida. Igualdad de los padres. Enfrentamiento entre los padres, edad del niño y horarios laborales. Relaciones del menor con sus abuelos**

"PRIMERO.- De las actuaciones practicadas en las instancias resultan los siguientes hechos relevantes:

Doña E M C y don J A S contrajeron matrimonio en Zaragoza, en fecha 19 de noviembre de 2005.

De dicha unión ha nacido un hijo, A A M, el día .

Doña E M C interpuso demanda de divorcio solicitando, entre otras medidas, que le fuera otorgada la guarda y custodia del menor y que se estableciera un régimen de visitas a favor del padre, distinguiendo dos periodos distintos, hasta que el menor cumpliera cuatro años de edad y una vez cumplidos los cuatro años.

Don J A presentó siete días después una demanda de divorcio contra su cónyuge interesando, por su parte, que la guarda y custodia del menor fuese compartida por ambos progenitores, permaneciendo quince días con cada uno de ellos.

Ambos procedimientos fueron acumulados. Tramitado el proceso, el Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Zaragoza dictó sentencia de fecha 20 de junio de 2011 decretando la disolución del matrimonio por causa de divorcio y acordando, entre otras medidas, otorgar la guarda y custodia del hijo a su madre, con un régimen de visitas a favor del padre y la posibilidad de revisar la guarda y custodia cuando el menor cumpliera diez años de edad.

En la sentencia se argumentó que no convenía apartar al niño, de corta edad, de la compañía de su madre. Se expuso que, a tenor de los informes psicológico y de la trabajadora social, no se detectaban en el padre alteraciones que pudiesen afectar a sus capacidades parentales y que ambos progenitores estaban capacitados para hacerse cargo del cuidado del menor. También se analizaron los horarios de trabajo de los cónyuges y se concluyó que no se apreciaba inconveniente en ninguno de ellos para compaginar las vidas laborales y familiares. No obstante, se destacó el escaso nivel de comunicación existente entre los padres, razón por la que se valoró que no había demasiadas probabilidades de que la guarda y custodia compartida resultase en esas circunstancias beneficiosa para el menor, por todo lo cual se decidió otorgar la guarda y custodia a la madre.

La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por las dos partes. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial dictó sentencia de fecha 14 de febrero de 2012 que confirmó la apelada a excepción del pronunciamiento

referente a la revisión del régimen de custodia cuando el hijo cumpliera diez años de edad, que se dejó sin efecto.

En los fundamentos de derecho de dicha resolución se destacó que el hijo del matrimonio contaba dos años y nueve meses de edad, y se puso de manifiesto que el informe de la trabajadora social adscrita al Gabinete Judicial revela que el padre no concreta las pautas que aplicaría en materia de cuidado, educación y atención cotidiana del hijo, asumiendo que precisaría de la colaboración de sus padres para atender este cometido. Además, la perito destaca el alto grado de conflictividad existente entre los progenitores. La Sala, en fin, ratificó la sentencia de primer grado por entender que el régimen de custodia individual a favor de la madre resultaba el más beneficioso para el hijo menor, considerando su corta edad, la escasa concreción del padre para determinar la organización cotidiana del cuidado del hijo, sin delegar en terceras personas (abuelos), y atendiendo a la posibilidad de compatibilizar su horario laboral (art. 80 apartados a), d) y e) del Código del Derecho Foral de Aragón, en adelante CDFA). Finalmente, en el penúltimo párrafo del fundamento de derecho tercero, se argumentó que no procedía autorizar a terceros para el ejercicio de determinados cometidos en el régimen de visitas.

SEGUNDO.- Don JA S ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia dictada en apelación. De los cinco motivos de impugnación inicialmente planteados, la Sala de Casación admitió finalmente a trámite los motivos segundo, tercero y cuarto.

En el motivo segundo se denuncia la infracción del artículo 80 CDFA, conforme al cual el Juez adoptará de forma preferente la custodia compartida en interés de los hijos menores, salvo que la custodia individual sea la más conveniente. Razona que no hay ningún motivo para que Alejandro no se beneficie de forma más equilibrada del cuidado y protección de los dos progenitores. Expone que el menor va a cumplir tres años y que se encuentra acostumbrado a estar con su padre y con su madre, hallándose en una edad en la que posee una capacidad de adaptación muy alta. Considera también que la objeción a la custodia compartida de uno de los progenitores no será base suficiente para considerar que la misma no coincide con el interés del menor –art. 80.5 CDFA-. Finalmente expone que el horario de trabajo de la madre, hasta las 20 horas entre semana, obliga a dejar al menor en compañía de los abuelos maternos cuando el padre lo tiene que entregar en el domicilio de la madre a las 19.30 horas.

El motivo tercero se interpone por vulneración del artículo 76.3. b) CDFA, a cuyo tenor en las relaciones familiares derivadas de la ruptura de la convivencia de los padres se debe respetar, entre otros derechos, el de la igualdad de los padres en sus relaciones familiares respecto de sus hijos menores de edad. El recurrente afirma que reúne todos los requisitos para ejercer la custodia individual o compartida del menor, y pese a ello se le atribuye

la custodia en exclusiva a la madre. Por este motivo considera que no se ha tratado con igualdad al padre, lo que hace extensivo a los abuelos paternos, a los que no se les autoriza a recoger entre semana al menor en la guardería.

Finalmente, el motivo cuarto se deduce por infracción de los artículos 60, 75 y 79 CDFA (en el desarrollo del motivo se aprecia que la impugnación se ciñe a los apartados 60.1, 75.2 y 79.2.a) del CDFA). El artículo 60.1 reconoce el derecho del hijo a relacionarse con ambos padres, aunque vivan separados, así como con sus abuelos y otros parientes y allegados, salvo si, excepcionalmente, el interés del menor lo desaconseja. Por su parte, el artículo 75.2 contempla, entre las finalidades de la Sección que regula los efectos de la ruptura de la convivencia de los padres con hijos a cargo, el que los hijos mantengan la relación con sus hermanos, abuelos y otros parientes y personas allegadas. Y el artículo 79.2. a) dispone que se deben adoptar las medidas judiciales necesarias a fin de garantizar, entre otros vínculos, la relación de los hijos menores con sus abuelos. Y en desarrollo del motivo se expone que la sentencia impide, sin motivo alguno, que los abuelos paternos puedan ir a recoger al menor de la guardería, no autorizándoles para el ejercicio de determinados cometidos en el régimen de visitas. Se argumenta que se exige al padre lo que no se exige a la madre, porque esta puede contar con la ayuda de su madre todos los días, dejándolo a su cargo durante horas, mientras que el padre no puede delegar en sus padres para que recojan a Alejandro de la guardería y lo lleven a su domicilio.

Doña E MM C ha formalizado su oposición al expresado recurso, interesando la íntegra confirmación de la sentencia recurrida. Respecto al motivo segundo, menciona los factores previstos en el artículo 80 del Código que deben ser valorados por el Juez para resolver sobre la custodia del menor, y entre ellos la edad de los hijos –art. 80.2.a)- y las posibilidades de conciliación de la vida familiar y laboral –art. 80.2.e)-, destacando el resultado del informe pericial psicológico que alude al alto grado de conflictividad entre los padres y la recomendación de otorgar a la madre la guarda y custodia del menor. En cuanto a los motivos tercero y cuarto, niega que la sentencia haya vulnerado los preceptos mencionados por el recurrente por el hecho de haberse concedido a la madre la guarda y custodia, y afirma que el régimen de visitas se establece judicialmente para el padre, y no para los abuelos, existiendo obligación paterna de recogerlo, sin que pueda designar a terceras personas, aunque sean familia directa, para que cumplan las obligaciones propias del padre.

El Ministerio Fiscal solicita, asimismo, la desestimación de los tres motivos de casación admitidos a trámite. En su escrito de oposición al recurso comienza exponiendo la doctrina jurisprudencial elaborada por esta Sala en la interpretación del artículo 80.2 CDFA. A su criterio, y en aplicación de la misma, tras la valoración de la prueba existen fundamentos suficientes para entender ajustada a derecho la atribución de la custodia individual a la madre, con un amplio régimen de visitas para el otro progenitor. Como hecho más

relevante se destaca la edad del menor, nacido el , que contaba por tanto dos años de edad al tiempo de dictarse la sentencia de primera instancia. En esta situación, atendido el artículo 80. 2. a) del Código, a su criterio no parece irracional, ni arbitrario el mantenimiento de la custodia individual si se tiene en cuenta la, verdaderamente, escasa edad del niño y el resto de circunstancias que se valoran a continuación, señaladamente la falta de comunicación y colaboración entre los padres, entendida como presupuesto para que la custodia compartida pueda ser beneficiosa para el menor. En lo que atañe a la denegación de autorización para que los abuelos paternos puedan recoger al niño de la guardería, considera correctos los razonamientos de la sentencia recurrida y argumenta que no consta que dichos abuelos se vean privados de su derecho a relacionarse con su nieto menor de edad por el mero hecho de que no se acceda a una custodia compartida. Finalmente, expone que el recurrente está alegando la vulneración de derechos de los que serían titulares terceras personas que no han ejercitado acción alguna, lo que plantea el problema de la posible falta de legitimación procesal del actor recurrente para ejercer una acción reclamando derechos de los que no es titular.

TERCERO.- Para la correcta resolución del recurso se van a examinar conjuntamente los tres motivos de impugnación formulados, porque su invocación y la argumentación que los sustenta se orientan fundamentalmente a defender la custodia compartida solicitada por el actor desde su inicial demanda, y junto a ello, en el régimen de custodia individual acordado en la instancia, a proteger la relación y funciones que pueden desempeñar los abuelos paternos respecto al nieto tras la disolución del matrimonio.

Los criterios de interpretación del artículo 80 CDFA aparecen sintetizados en nuestra sentencia de 1 de febrero de 2012 (recurso 24/2011): "a) La custodia compartida por parte de ambos progenitores es el régimen preferente y predeterminado por el legislador, en busca de ese interés del menor, en orden al pleno desarrollo de su personalidad, de modo que se aplicará esta forma de custodia siempre que el padre y la madre estén capacitados para el ejercicio de las facultades necesarias a tal fin (Sentencia de 30 de septiembre de 2011); b) El sistema no es rígido, salvo en un mandato que dirige al juez: el superior interés del menor (Sentencia de 13 de julio de 2011); c) Podrá establecerse un sistema de custodia individual, cuando éste resulte más conveniente para dicho interés, a cuyo efecto habrá de evaluar los parámetros establecidos en el art. 80.2 del Código (Sentencias citadas y la de 15 de diciembre de 2011); d) La adopción de la custodia individual exigirá una atenta valoración de la prueba que así lo acredite -la conveniencia para el menor- frente al criterio preferente de la custodia compartida, al que el precepto legal otorga tal preferencia en interés de los hijos menores (Sentencia de 15 de diciembre de 2011)".

La aplicación al caso de la anterior doctrina y el examen de los criterios previstos en el artículo 80.2 CDFA evidencian, por lo que enseguida se dirá, que no concurren elementos suficientes para considerar la custodia individual como más conveniente para el interés del menor, por lo que no se justifica el desplazamiento del criterio legal preferente de custodia compartida.

Para fundamentar el mantenimiento de la custodia individual, la sentencia recurrida menciona en primer lugar la conflictividad existente entre los progenitores. Es cierto que esta circunstancia, en absoluto infrecuente en las rupturas de convivencia, puede dificultar el normal desarrollo de las relaciones familiares, pero este inconveniente se puede producir no solo en los casos de custodia compartida, sino también en los de custodia individual a favor de uno de los progenitores con fijación de un régimen accesorio –y preceptivo- de visitas con el progenitor no custodio –art. 80.1, párrafo tercero CDFA-. Por ello el enfrentamiento entre los padres no constituye un argumento que permita rechazar por sí solo la custodia compartida, como ya argumentamos en nuestra sentencia de 9 de febrero de 2012, salvo que se den circunstancias excepcionales que en este caso no concurren, porque dicha dificultad se dará en uno y otro caso, al constituir siempre un obstáculo para el normal desarrollo de las relaciones familiares que la norma pretende promover y regular –art. 75 CDFA-.

Un segundo factor al que aluden las sentencias de instancia es la edad del menor, nacido el . Cuenta por tanto en este momento tres años de edad, y se encuentra en la primera infancia. La edad de los hijos es el primero de los factores mencionados en el artículo 80.2 CDFA. No obstante, la circunstancia de la corta edad del menor no resulta por sí sola determinante para rechazar la custodia compartida por los dos progenitores, sin otros factores adicionales que impongan una especial atención por parte de la madre y que en este caso no concurren. Así lo ha entendido esta Sala en su sentencia de 25 de septiembre de 2012 en un supuesto de un menor de tres años al tiempo de dictarse la sentencia de primera instancia, y así debe ser reiterado en una situación, como la enjuiciada, en la que el niño acude ya a la guardería y tiene por tanto un amplio horario de estancia fuera del domicilio familiar que facilita su cuidado por parte de cualquiera de los progenitores. Los horarios laborales de los padres tampoco resultan concluyentes para descartar la custodia compartida.

Un tercer argumento que contempla la sentencia recurrida es la escasa concreción del padre para determinar la organización cotidiana del cuidado del menor, sin delegar en terceras personas. Tampoco esta circunstancia debe resultar concluyente en una situación de disolución del matrimonio y consiguiente cese de la convivencia, en que ordinariamente quiebra el reparto de funciones de los padres anterior a la ruptura. Tras ella, los dos progenitores deben asumir las responsabilidades que les incumben en la crianza y educación del menor, sin que conste incapacidad alguna del recurrente para afrontar, en un régimen de custodia compartida, las necesidades derivadas de la crianza de su hijo.

En conclusión, conforme al artículo 80.2 CDFA y la jurisprudencia que lo interpreta procede estimar el recurso de casación, lo que determina que la Sala debe dictar sentencia en cuanto al fondo, estimando la petición de custodia compartida que formula el recurrente. Al acogerse la pretensión principal resulta innecesario pronunciarnos expresamente sobre una solicitud de autorización a los abuelos para recoger al menor en la guardería que se planteaba en una situación de custodia individual que se ha dejado sin efecto. En todo caso, conviene precisar: a) Que la adopción de las medidas necesarias para garantizar la relación del menor con sus abuelos la debe realizar el Juez de oficio o a instancia de cualquier persona interesada –artículo 79.2 CDFA-, por lo que no se aprecia falta de legitimación del progenitor para plantear esta solicitud a la Sala; b) Resulta evidente que la responsabilidad de un eventual régimen de visitas la debe asumir el padre, sin perjuicio del régimen de relación que se pueda establecer entre el menor y sus abuelos –artículos 77.2. b) y 79.2. a) CDFA-; y c) Que sin perjuicio de lo anterior, y sin que ello suponga la asunción por los abuelos de obligaciones propias del cumplimiento del régimen de visitas del padre, no cabe tampoco prohibirles la colaboración puntual y voluntaria que decidan prestar a su hijo para facilitar el mejor cumplimiento de las obligaciones parentales que a este le corresponden.

Los únicos pronunciamientos que procede realizar son los referentes a la guarda y custodia compartida, con el régimen de visitas solicitado, y a la modificación que dicha custodia impone en los gastos de asistencia al menor. En lo restante, la sentencia debe ser confirmada. El plan de relaciones familiares presentado por don J contiene, en lo que ahora interesa, las siguientes propuestas:

- La guarda y custodia del hijo menor Alejandro, deberá ser compartida por ambos progenitores, permaneciendo quince días con cada uno de ellos, realizándose los cambios de domicilio los días 1 y 15 de cada mes, cuando será recogido por el progenitor al que le corresponda la estancia siguiente. Durante dicho periodo, el progenitor que no tenga la custodia podrá visitarlo tres tardes a la semana desde la salida de la guardería o colegio y hasta las 20,30 horas en que deberá reintegrarlo al domicilio que le corresponda.

Cada año se cambiará la alternancia del turno, correspondiendo elegir turno al padre en años pares y a la madre en años impares.

La recogida del menor se efectuará por el progenitor al que le corresponda la permanencia del menor; y en el domicilio del otro.

Dicha alternancia se suspenderá durante las vacaciones escolares de Navidad, Semana Santa y verano.

-En cuanto a las vacaciones escolares de verano, los meses de julio y agosto se dividirán en quincenas alternativas, de tal forma que en años pares, el padre pasará con el hijo la primera quincena de julio y agosto y con la madre la segunda quincena de julio y agosto, siendo al contrario en años impares.

-En cuanto a las vacaciones de Navidad, se dividirán en dos periodos, siendo el primero desde el último día de clases y hasta el día 31 de diciembre a las 12 horas y el segundo desde ese momento hasta el último día de vacaciones escolares, garantizándose de esta manera que el hijo cada año esté con cada uno de los progenitores en las fechas señaladas de Navidad. El padre elegirá en años pares y la madre en años impares.

-En cuanto a las vacaciones de Semana Santa, se dividirán en dos periodos de igual duración, debiendo igualmente realizarse las entregas a las 12 horas del día de finalización de cada periodo correspondiente. El padre elegirá en años pares y la madre en años impares.

Caso de que la entrega del hijo corresponda en un día escolar, la recogida del menor se hará en el centro escolar, debiendo recogerse la maleta o enseres del hijo el día anterior a la entrega.

La autoridad familiar también será compartida, debiendo ser adoptadas de común acuerdo todas aquellas decisiones referidas a cuestiones sanitarias, personales, médicas o educativas del hijo, cambios de colegio, etc., que excedan de las decisiones habituales en su cuidado diario.

- Gastos de asistencia al hijo: Ambos progenitores ingresarán mensualmente en una cuenta común la cantidad de 150 euros que irá destinada a atender los gastos del hijo, como guardería, enseñanza, comedor escolar si el hijo lo utilizase, actividades extraescolares, así como los libros y el material escolar.

En cuanto a los gastos extraordinarios (gastos médicos no cubiertos por la seguridad social, ortodoncia, gafas,...) deberán ser asumidos por mitad e iguales partes por cada uno de los progenitores y siempre que exista consentimiento entre ambos progenitores, en caso contrario la parte que haya contratado dichos servicios asumirá el importe total de las mismos.

Asimismo, el progenitor que tenga en cada momento la custodia del hijo, deberá tener en su poder todos los documentos del menor como pasaporte, DNI, libro de familia y tarjeta sanitaria, así como cualquier informe medico o tratamiento prescrito al menor.

La Sala acepta las anteriores propuestas con las salvedades que de oficio se indican a continuación, con las precisiones y en la forma que se detallará en el fallo:

1º.- En relación con el periodo de permanencia del niño con cada progenitor, se considera preferible que sea no quincenal, sino de dos semanas, porque de esta forma se va a lograr una mayor uniformidad en las rutinas cotidianas del menor, siendo más adecuado limitar las visitas entre semana de tres a dos días.

2º.- Se debe mantener la previsión de las Fiestas del Pilar contenida en la sentencia recurrida. Y respetar también la semana de vacaciones de la madre fuera del periodo estival.

3º.- Los gastos de asistencia al hijo se actualizarán anualmente.

4º.- El abono de los gastos extraordinarios del menor se realizará de acuerdo con lo previsto en el artículo 82.4 CDFA, norma a la que en todo caso ha de ajustarse la resolución.”

***** Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 11 de octubre de 2012. Pensión compensatoria. Desequilibrio. Ingresos de los excónyuges**

"PRIMERO.- La Sentencia recaída en primera instancia en el presente procedimiento sobre divorcio (artículo 770 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) es objeto de recurso por la representación de la parte demandada (Sra.) que en su apelación (artículo 458 de la Ley de Enjuiciamiento) considera que procede fijar una asignación compensatoria a su favor (artículo 83 del Código de Derecho Foral de Aragón) dada la contribución de la recurrente al sostenimiento del hijo común y la notable diferencia de ingresos entre ella y el demandante.

SEGUNDO.- En cuanto a la asignación compensatoria debe indicarse que, como declara la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 11-01-2012 "la asignación compensatoria prevista en el articulo 9 de la ley aragonesa 2/2012 (artículo 83 CDFA) no tiene, en lo sustancial, una naturaleza y finalidad diferente a la señalada por el artículo 97 del Código Civil a la pensión compensatoria, que para señalarla con carácter temporal o indefinido el artículo 83 CDFA provee al juez de unos criterios similares a los indicados en el Código Civil, y la invitación a la "ponderación equitativa" de los mismos no añade un modo de aplicar la norma distinto del que debe seguirse para el artículo 97 Cc.". Igualmente la Sentencia del Tribunal Supremo de 22-06-2011 establece que "responde a un presupuesto básico consistente en la constatación de un efectivo desequilibrio económico, producido en uno de los cónyuges con motivo de la separación o el divorcio, siendo su finalidad restablecer el equilibrio y no ser una garantía vitalicia de sostenimiento, perpetuar el nivel de vida que venían disfrutando o lograr equiparar económicamente los patrimonios, porque no significa paridad o igualdad absoluta entre estos, tal desequilibrio implica un empeoramiento económico en relación con la situación existente constante matrimonio; que debe resultar de la confrontación entre las condiciones económicas de cada uno, antes y después de la ruptura, en sintonía con lo anterior, siendo uno de los razonamientos que apoyan su fijación con carácter temporal aquel que destaca, como legítima finalidad de la norma legal, la de colocar al cónyuge perjudicado por la ruptura del vínculo matrimonial en una situación de potencial igualdad de oportunidades laborales y resulta razonable entender que el desequilibrio de debe compensarse debe tener su origen en la pérdida de derechos económicos o legítimas expectativas por parte del cónyuge más desfavorecido por la ruptura, a consecuencia de su mayor dedicación al cuidado de la familia, que la expresada naturaleza y función de la pensión compensatoria obligan al órgano judicial a tonar en cuenta para su fijación, cuantificación y determinación del tiempo de percepción, factores numerosos y de imposible enumeración, entre los más destacados, los que

enumera el artículo 97 del C. Civil. Por último, operan también estos factores para poder fijarla con carácter vitalicio o temporal, pues permiten valorar la idoneidad o aptitud del beneficiario para superar el desequilibrio económico en un tiempo concreto, y, alcanzar la convicción de que no es preciso prolongar más allá su percepción por la certeza de que va a ser factible la superación de desequilibrio. Para este juicio prospectivo el órgano judicial ha de actuar con prudencia y ponderación, con criterios de certidumbre, la existencia de un desequilibrio económico entre los esposos en el momento de la ruptura de la convivencia, constituye un presupuesto de hecho requerido por la norma jurídica.

TERCERO.- Las más recientes sentencias del Tribunal Supremo de 22 de junio de 2011, 10 de octubre de 2011 y 23 de enero de 2012, en cuanto a la naturaleza de la pensión, concepto de desequilibrio y momento en que ésta deba producir, vienen a indicar que por desequilibrio ha de entenderse un empeoramiento económico en relación con la situación existente constante matrimonio que debe resultar de la confrontación entre las condiciones económicas de cada uno, antes y después de la ruptura. Al constituir finalidad legítima de la norma legal colocar al cónyuge perjudicado por la ruptura del vínculo matrimonial en una situación de potencial igualdad de oportunidades laboral y económicas respecto de las que habría tenido de no mediar el vínculo matrimonial, es razonable entender, de una parte, que el desequilibrio que debe compensarse ha de tener su origen en la pérdida de derechos económicos o legítimas expectativas por parte del cónyuge más desfavorecido por la ruptura, a consecuencia de su mayor dedicación al cuidado de la familiar, y, de otra, que dicho desequilibrio que da lugar a la pensión debe existir en el momento de la separación o del divorcio, y no basarse en sucesos posteriores, que no pueden dar lugar al nacimiento de una pensión que no se acreditaba cuando ocurrió la crisis matrimonial.

Partiendo de la concurrencia de desequilibrio, en la medida que la ley no establece de modo imperativo el carácter indefinido o temporal de la pensión, constituye igualmente doctrina consolidada:

Que su fijación en uno y otro sentido dependerá de las específicas circunstancias del caso, particularmente, las que permiten valorar la idoneidad o aptitud para superar el desequilibrio económico, siendo única condición para su establecimiento temporal que no se resienta la función de restablecer el equilibrio que constituye su razón de ser (Sentencias del Tribunal Supremo de 17 de octubre de 2008 [RC nº 531/2005 y RC nº 2650/2003], 21 de noviembre de 2008 [RC nº 411/2004], 29 de septiembre de 2009 [RC nº 1722/2007], 28 de abril de 2010 [RC nº 707/2006], 29 de septiembre de 2010 [RC nº

1722/2007, 4 de noviembre de 2010 [RC nº 514/2007],14 de febrero de 2011 [RC nº 523/2008] y 27 de junio de 2011 [RC nº 599/2009].

Que esta exigencia o condición obliga a tomar en cuenta las específicas circunstancias del caso, particularmente, aquellas de entre las comprendidas entre los factores que enumera el artículo 97 del Código Civil, que según la doctrina de esta Sala, fijada en Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de enero de 2010, de Pleno [RC nº 52/2006], luego reiterada en Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de noviembre de 2010 [RC nº 514/2007], 14 de febrero de 2011 [RC nº 523/2008] y 27 de junio de 2011 [RC nº 599/2009], entre las más recientes, tienen la doble función de actuar como elementos integrantes del desequilibrio y como elementos que permitirán fijar la cuantía de la pensión, las cuales permiten valorar la idoneidad o aptitud de la beneficiaria para superar el desequilibrio económico en un tiempo concreto, y, alcanzar la convicción de que no es preciso prolongar más allá su percepción por la certeza de que va a ser factible la superación del desequilibrio, juicio prospectivo para el cual el órgano judicial ha de actuar con prudencias y ponderación con criterios de certidumbre.

CUARTO.- En el presente supuesto la prueba obrante en autos así como por la practicada en esta instancia consistente en últimas nóminas y declaración de renta del demandado para el ejercicio 2011, no acreditan una diferencia absolutamente dispar de ingresos, es más, si tomamos en consideración las últimas nóminas y por los propios cálculos realizados por la recurrente (1.565€ mensuales) no suponen ni el doble de los percibidos por la recurrente (850€ mensuales).

En este apartado la citada Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de junio de 2011 citada con anterioridad igualmente establece que la duda que a veces se ha planteado es si es posible apreciar el citado desequilibrio, y por tanto, fijar una pensión, cuando cada cónyuge tiene una cualificación profesional determinada y ejerce su profesión. Esta Sala (Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de julio de 2009[RC nº 1369/2004] se ha pronunciado al respecto diciembre que, en principio, la mera independencia económica de los esposos no elimina el derecho de uno de ellos a recibir una pensión, pues a pesar de que cada cónyuge obtenga ingresos, puede haber desequilibrio “cuando los ingresos de uno y otro sean absolutamente dispares”. Por tanto, valorando esta afirmación en sentido contrario, la independencia económica impedirá que nazca el derecho a la pensión cuando se produzca una situación equilibrada, compatible con diferencias salarias, si no son notorias. Si ambos esposos trabajan, y sus ingresos, valorando la situación inmediatamente anterior a la ruptura con la que van a tener que soportar a resultas de ésta, no son absolutamente dispares, la mera desigualdad económica no se va a traducir en la existencia de un desequilibrio para el más desfavorecido susceptible de ser

compensado mediante una pensión a cargo del que lo fue en menor medida, pues lo que la norma impone es una disparidad entre los ingresos de carácter desequilibrante.

Dicha resolución contemplaba un supuesto análogo al presente de una diferencia de ingresos de casi el doble entre los contendientes.

Tampoco puede afirmarse que el origen de ese supuesto desequilibrio radique en la pérdida de derechos económicos o legítimas expectativas de la esposa durante el matrimonio, en primer lugar porque su posible mayor dedicación al hijo no se ha revelado como un obstáculo o impedimento para su actividad laboral (ya era pensionista desde el momento de contraer matrimonio) y tampoco se ha acreditado que el origen de la diferencia salarial sea consecuencia directa del matrimonio, si a eso se añade como acertadamente indica el Juzgado de instancia que el actor asume la custodia del menor, procede confirmar la Sentencia apelada, desestimándose el recurso.”

***** Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 16 de octubre de 2012. Modificación de pensión alimenticia. Requisitos. Régimen de visitas y comunicaciones. Edad y voluntad de las menores**

"PRIMERO.- De las actuaciones practicadas en las instancias resultan los siguientes hechos relevantes:

Don José Ignacio y doña María Pilar contrajeron matrimonio en Zaragoza, en fecha 31 de octubre de 1992.

De dicha unión nacieron dos hijas gemelas, N y C, el día 14 de noviembre de 1996.

El matrimonio fue disuelto por sentencia firme de divorcio de 19 de septiembre de 2005. En dicha resolución se acordó otorgar a la madre la guarda y custodia de las hijas menores de edad y se fijó la suma de 850 euros mensuales a cargo del padre, en concepto de alimentos a favor de las hijas. A favor del padre se acordó el siguiente régimen de visitas:

"Se establece el más amplio y libre, predominando siempre el acuerdo entre los cónyuges y, subsidiariamente, en caso de desacuerdo, se obligan al cumplimiento de lo siguiente:

El padre disfrutará de la compañía de sus hijas los fines de semana alternos, recogiéndolas en el domicilio en que convivan con la madre los sábados a las 10 horas y reintegrándolas a las 20.30 horas del domingo. Sin embargo, durante los meses de junio, julio y agosto, cuando corresponda al padre el derecho de visitas, podrá disfrutar de la compañía de sus hijas los fines de semana alternos desde las 19 horas del viernes a las 21 horas del domingo.

A tal efecto, la madre entregará a las menores con la ropa y efectos necesarios para pasar el fin de semana, siendo éstos devueltos con el padre cuando reintegre a las hijas.

Caso de que el fin de semana correspondiente al padre coincidiera con puente escolar, podrá tener a sus hijas en su compañía los días festivos correspondientes a dicho puente."

Respecto a las vacaciones de las menores, en verano debían permanecer con su padre durante el mes de vacaciones que a este le correspondía, y la Navidad y Semana Santa se dividían en dos periodos de similar duración para que las niñas pudiesen disfrutar de la compañía de ambos progenitores. En las fiestas del Pilar y festivos similares, correspondía a la madre en exclusiva disfrutar de la compañía de las hijas.

Así las cosas, don José Ignacio ha interpuesto nueva demanda, en solicitud de modificación de medidas definitivas de los efectos de divorcio, a fin de que se acuerde que la guarda y custodia de las menores sea ejercida de forma compartida, atendiendo cada progenitor a su costa las necesidades de las hijas

menores durante el periodo que estuvieran bajo su custodia y, por tanto, sin fijación de gastos ordinarios de asistencia a las hijas, costeando ambos progenitores los gastos extraordinarios en proporción a sus recursos económicos. Subsidiariamente, pide una ampliación del régimen de visitas, en los términos que ya se han transcrito, y que se limite su contribución en concepto de alimentos a las menores a la cantidad mensual de 300 euros (a razón de 150 euros por niña), por haber sufrido una importante merma de sus ingresos.

Doña María Pilar contestó a la demanda y se opuso a estas pretensiones.

La sentencia de primera instancia, dictada el 15 de noviembre de 2011, desestimó la demanda salvo en el particular siguiente: El régimen de visitas del padre con sus hijas debe ser el que libremente decidan de común acuerdo entre ellos.

En dicha resolución se valoraron los informes de la trabajadora social y de la psicóloga adscritas al Juzgado, que desaconsejan la custodia compartida. Se destacó que las visitas se habían desarrollado con regularidad hasta febrero de 2011, si bien el cumplimiento había sido, en la práctica, el que las niñas fuesen con su padre cuando quisieran, pero posteriormente se produjeron problemas, y en julio de 2011 se interrumpió definitivamente el contacto de las hijas con su padre. En su exploración, destaca la sentencia, las menores manifiestan que la relación está deteriorada y que no desean mantener un régimen de visitas con su padre, si bien consta en los informes que las menores disfrutaban de las estancias y tenían deseos de mantener relación con él. Se pone también de manifiesto el elevado nivel de conflicto entre los progenitores, y el mal ejercicio de las funciones parentales por parte de la madre al llevar a las hijas ante un notario para que documentara su negativa a visitar al padre. En cuanto al régimen de visitas, se razona que no parece probable que la madre modifique su conducta y tampoco parece adecuado, dada la edad de las menores, la fijación de un régimen obligatorio que solo podría cumplirse a través del recurso a la fuerza, o generaría nuevas denuncias penales entre los padres, lo que no beneficiaría a las menores.

En cuanto a la reducción de los gastos de asistencia a las hijas, en la sentencia se concluye, tras el estudio de los gastos de ambos progenitores, que no existe una situación nueva, ni personal ni económica, que justifique la modificación pretendida, habiendo ocultado el demandante parte de sus ingresos, por lo que no se ha producido una variación sustancial de las circunstancias que motivaron la adopción de las medidas cuya modificación se interesaba.

El actor interpuso recurso de apelación que fue sustanciado dictándose por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Zaragoza la sentencia de 25 de abril de 2012 por la que se revocó parcialmente la de primera instancia en el único sentido de reducir a 550 euros la pensión alimenticia de las hijas a cargo del padre.

La resolución mantuvo la desestimación de la custodia compartida atendiendo al deseo expresado por las menores, y en consideración al resultado de los informes periciales practicados. Tampoco se acogió la modificación del régimen de visitas, por la edad de las menores y la importancia de su opinión. En cuanto a los gastos de asistencia a las hijas, se razona que el padre no ha probado eficazmente los ingresos que percibía en las fechas del divorcio, y valorando las pruebas practicadas se concluye que los ingresos de dicho progenitor suponen la percepción de más de 1.400 euros mensuales. Frente a ello en 2008, antes de su despido de la empresa en la que trabajó hasta febrero de 2009, declaró unas retribuciones de 35.193 euros. Se expone que la situación económica de la madre no es relevante en esta cuestión y se concluye que se ha producido un descenso en los ingresos del padre, acordándose la reducción ya indicada de la pensión de alimentos a 550 euros mensuales, manteniendo el abono por mitad de los gastos extraordinarios de las hijas.

SEGUNDO.-Don José Ignacio ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia dictada en segunda instancia.

En el motivo primero se denuncia la infracción del artículo 82, números 1 y 2 del Código del Derecho Foral de Aragón (en adelante CDFA), por no respetar la sentencia la obligación de los progenitores de contribuir proporcionalmente, con sus recursos económicos, a satisfacer los gastos de asistencia de los hijos a su cargo.

En desarrollo y fundamentación del motivo se analiza la situación económica del Sr., incidiendo en los gastos mensuales que se ve obligado a satisfacer, en las necesidades económicas de las hijas, que no llega a cuantificar pero cifra en una suma inferior a la pensión de 550 euros fijada en sentencia y, finalmente, atendiendo a la situación económica de la madre.

Respecto a la Sra. el recurrente realiza su propio cálculo de los posibles ingresos que la misma puede percibir, y reprocha que la sentencia no considere relevante la situación económica de la madre.

Como razona el Ministerio Fiscal al oponerse a este motivo del recurso de casación, se debe precisar que no cabe entrar a valorar nuevamente los hechos para fijar una cantidad distinta a la señalada en la sentencia de instancia, porque de aceptarse esta posibilidad se llegaría a crear una tercera instancia revisora del importe de las pensiones, lo que es absolutamente ajeno a la naturaleza de este recurso extraordinario.

En este sentido, el Tribunal Supremo ha sostenido: "*La jurisprudencia de esta Sala ha declarado repetidamente que el juicio de proporcionalidad del art. 146 CC "corresponde a los tribunales que resuelven las instancias y no debe entrar en él el Tribunal Supremo a no ser que se haya vulnerado claramente el mismo o no se haya razonado lógicamente con arreglo a la regla del art. 146 ", de modo que la fijación de la entidad económica de la pensión y la integración de los gastos que se incluyen en la misma, "entra de lleno en el espacio de los*

pronunciamientos discrecionales, facultativos o de equidad, que constituye materia reservada al Tribunal de instancia, y por consiguiente, no puede ser objeto del recurso de casación" (STS de 26 de octubre de 2011, con cita de la sentencia 903/2005, de 21 noviembre y las allí mencionadas).

Esta Sala ha considerado aplicable este mismo criterio respecto al principio de proporcionalidad señalado por el legislador aragonés entre los ingresos de ambos padres para contribuir a los gastos de asistencia a los hijos establecido en el artículo 82.1 CDFA, o para la relación entre necesidades de los hijos, sus recursos y los de sus padres, a fin de atender a los gastos ordinarios de aquellos (artículo 82.2 CDFA). Así, expusimos: "*Se debe respetar la valoración de la prueba realizada por el juez, solo impugnable en el recurso extraordinario por infracción procesal por la vía del artículo 469.1.4º LEC en el caso de resultar manifiestamente arbitraria e ilógica y, como señala el Tribunal Supremo, el juicio de proporcionalidad no es susceptible de revisión casacional salvo vulneración clara del mismo o razonamiento ilógico e irracional*." –STSJA de 20 de abril de 2012, y en el mismo sentido, STSJA de 11 de enero de 2012-.

Es cierto, como alega el recurrente, que la alusión en la sentencia a la irrelevancia de la situación económica de la madre en la fijación de los gastos de asistencia de las hijas no se adecua a lo dispuesto en el artículo 82 del CDFA. Ahora bien, pese a esta mención incorrecta, lo cierto es que la resolución de la Audiencia tiene en cuenta en realidad los ingresos de la madre y su contribución efectiva a los gastos de asistencia a las hijas, por ser la progenitora bajo cuya custodia se hallan, concluyendo finalmente que procedía una reducción de la pensión alimenticia de 850 a 550 euros.

En definitiva, procede rechazar la revisión del juicio de proporcionalidad que pretende la parte recurrente, porque se sustenta en su propia valoración de la prueba, intentando reproducir las pretensiones como en una nueva instancia, y sin deducir recurso extraordinario por infracción procesal. Por todo lo expuesto procede desestimar el primer motivo del recurso.

TERCERO.- El motivo segundo del recurso se interpone por vulneración de los artículos 59 y 60 CDFA. En lo que ahora interesa, en el primero de ellos se reconoce el derecho y la obligación de los padres a visitar y relacionarse con el hijo menor –art. 59.c)-, y el segundo dispone que el hijo tiene derecho a relacionarse con ambos padres, aunque vivan separados salvo si, excepcionalmente, el interés del menor lo desaconsejara.

El Sr. solicitó en su demanda que la guarda y custodia de las hijas menores de edad se ejerciera de forma compartida. La pretensión fue rechazada en ambas instancias, y además de ello se estableció que el régimen de visitas del padre con sus hijas sería el que libremente decidieran de común acuerdo entre ellos.

En el recurso no se reitera la solicitud de la custodia compartida, sino que la petición se limita al establecimiento por el Tribunal del mismo régimen de visitas que se había fijado en la inicial sentencia de divorcio. Expone el

recurrente que al no fijar la Audiencia un concreto régimen de visitas para que pueda relacionarse con sus hijas se le está privando del derecho y la obligación de visitarlas y relacionarse con ellas. Considera que dicho régimen nunca debe ser de libre disposición, ni debe deferirse a las veleidades de las menores, o al arbitrio del progenitor custodio. Se razona que el informe psicológico recomendó que no se dejara a la libre decisión de las menores el derecho a relacionarse con el padre ya que eso sería un motivo de distanciamiento entre ellos.

La sentencia, sin embargo, no infringe en modo alguno los expresados preceptos, porque no prohíbe la posibilidad de relación entre padre e hijas. Simplemente constata la dificultad de imponer un régimen concreto en contra de la voluntad de unas menores que cuentan quince años de edad en este momento y que venían desarrollando un sistema de visitas que se sustentaba ya en el deseo de las menores de ir con su padre cuando quisieran. En definitiva, padre e hijas deben decidir conjuntamente un régimen de visitas que permita mantener la necesaria relación personal, sin que deba imponerse en este caso un sistema rígido que no conduciría más que a distanciar y dificultar aún más la ya tensa relación que existe entre ellos. Por estas razones procede la desestimación del motivo y, con él, del recurso de casación interpuesto."

***** Auto del Tribunal Superior de Justicia de 24 de octubre de 2012. Proceso de divorcio. Uso de la vivienda, gastos extraordinarios y pensión compensatoria. Inadmisión de recurso de casación**

"PRIMERO.- El demandante don Alejandro G. L. interpone recurso de casación al amparo de un único motivo de impugnación cuyo primer subapartado se articula por infracción del artículo 81.1 del Código del Derecho Civil de Aragón.

En dicho motivo, que versa sobre la atribución del uso de la vivienda familiar situada en la calle ... de Zaragoza, el recurrente reitera, como ha venido haciendo en las instancias, que los ingresos de ambos cónyuges no son en absoluto similares, porque los rendimientos de trabajo personal del Sr. G. son de 46.331,88 euros, mientras que la Sra. N. percibe por ese mismo concepto la cantidad de 216.965,51 euros, "amén de los alquileres que percibe de inmuebles privativos", motivo por el que, sostiene el recurrente, hay razones objetivas por las que se le debe atribuir a él el uso del domicilio conyugal.

De los expresados razonamientos y de la lectura de la sentencia objeto de recurso se desprende que la parte pretende una valoración distinta de la prueba, la que ella misma sostiene. El Tribunal Supremo considera que la precisa técnica casacional requiere el planteamiento de una cuestión jurídica al margen de los hechos, es decir, exige el examen de la aplicación al caso de la norma sustantiva en sí misma, sin que pueda transformarse el recurso de casación en una suerte de tercera instancia, dada su naturaleza extraordinaria. En consecuencia, y conforme a lo dispuesto en el artículo 483.2.2º en relación con el art. 477.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, procede inadmitir el submotivo primero del recurso de casación.

SEGUNDO.- En los subapartados segundo, referente a la vivienda de la localidad de ... y tercero, en el que se alude a la vivienda situada en ..., ya se advirtió en la providencia del pasado 12 de septiembre que los mismos carecen de la cita del precepto sustantivo que habría sido vulnerado en la interpretación sostenida por el recurrente, y además se fundamentan en una nueva valoración de los hechos.

Se trata de inmuebles distintos a la vivienda familiar, y respecto a ellos se argumenta como en una nueva instancia, pretendiendo sustituir el recurrente el criterio ya sentado por la Audiencia Provincial sin identificar la concreta vulneración que sustentaría este motivo del recurso. Las partes, respecto a dichos inmuebles, deben realizar la correspondiente liquidación del régimen económico matrimonial. En definitiva, concurre la causa de inadmisión prevista en el artículo 483.2.2º, con relación al art. 477.1, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

TERCERO.- La primera impugnación del subapartado tercero versa sobre la omisión que, al parecer de la parte recurrente, existiría en la sentencia recurrida respecto a la reclamación de rentas derivadas de los alquileres de ..., entidad sin personalidad jurídica de la que el recurrente es comunero con un 25% de las participaciones.

Sobre esta petición se advirtió que la parte no había deducido recurso extraordinario por infracción procesal, y que planteaba además una reclamación que era propia de la liquidación del régimen económico matrimonial.

En el escrito de alegaciones presentado por la parte no se desvirtúan las anteriores consideraciones, y en esta situación se advierte la concurrencia de la causa de inadmisión prevista en el artículo 483.2.2º de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La segunda de las impugnaciones del subapartado tercero alude al vehículo automóvil cuya atribución reclama para sí el recurrente. También en este caso se argumenta como en una nueva instancia, sin identificar la concreta infracción de precepto legal cometida en la instancia, y por ello concurre la causa de inadmisión ya citada del artículo 483.2.2º, con relación al art. 477.1, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

CUARTO.- Finalmente, los subapartados cuarto y quinto del recurso de casación se refieren, respectivamente, a los gastos extraordinarios –art. 82.4 del Código del Derecho Foral de Aragón- y a la pensión compensatoria reclamada por el recurrente –art. 83.1 del mismo texto legal-.

En ambos casos la posición de la parte recurrente parte de una valoración de los ingresos económicos de los cónyuges distinta de la que resulta de la sentencia dictada en segunda instancia. Ya se ha razonado que la técnica casacional exige el planteamiento de una cuestión jurídica al margen de los hechos, es decir, requiere el examen de la aplicación al caso de la norma sustantiva en sí misma, sin que pueda transformarse el recurso de casación, de carácter extraordinario, en una suerte de tercera instancia.

Por este motivo, y también en estos dos apartados, concurre la causa de inadmisión prevista en el artículo 483.2.2º de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Por todo lo expuesto, y conforme al art. 483.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, procede declarar la inadmisión del recurso de casación y la firmeza de la sentencia recurrida.”

***** Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 19 de octubre de 2012. Custodia compartida. Tutela judicial efectiva. Derecho del niño a expresar su opinión. Exploración judicial**

"PRIMERO.- El único motivo del recurso de casación interpuesto por la representación de D. B se fundamenta en la infracción del artículo 80.2 del Código del Derecho Foral de Aragón (CDFA), por inaplicación del criterio de adopción preferente de la custodia compartida que el recurrente pretende respecto a las dos hijas de su matrimonio, P, nacida el 2.001, y C, nacida el 2.005.

Tras el procedimiento de divorcio de mutuo acuerdo (número 641/2008 del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Huesca), terminado por sentencia de 28 de noviembre de 2.008 que aprobó el convenio regulador presentado por los cónyuges, el recurrente instó el procedimiento de modificación de medidas del que deriva el presente recurso solicitando que se acordara la guarda y custodia compartida de las hijas del matrimonio. Fue desestimada su demanda por la sentencia del Juzgado de 18 de octubre de 2.011, e igualmente desestimado el recurso de apelación en sentencia de la Audiencia Provincial de Huesca de 16 de marzo de 2.012.

En las sentencias del Juzgado y de la Audiencia se toman en consideración las pruebas periciales practicadas, tanto las aportadas a instancia de las partes (de la psicóloga Sra. L a instancia de la parte actora y del psiquiatra Dr. P a instancia de la parte demandada), como de la psicóloga adscrita al Instituto de Medicina Legal de Huesca y de la trabajadora social adscrita al mismo Instituto. Todos ellos examinaron personalmente a las niñas. Ninguna de las partes, tampoco el Ministerio Fiscal, solicitó la exploración judicial de las dos menores.

Tras la admisión del recurso de casación y el traslado del mismo a las partes, el Ministerio Fiscal instó, en primer lugar, que la Sala declarase la nulidad de la sentencia recurrida para que la Audiencia Provincial de Huesca oyera a la menor P, previamente a resolver el recurso de apelación. Dado el contenido de dicha petición y las consecuencias que comportaría su estimación, resulta obligado resolver la misma en primer lugar.

El representante del Ministerio Fiscal alega la nulidad de la sentencia recurrida al amparo del artículo 238.3º LOPJ, por considerar que se ha producido la infracción del principio de tutela judicial efectiva (artículo 24.1 CE) al no haber sido oído el menor, en este caso la niña P, nacida el 2.001 (de diez años y nueve meses de edad en el momento de ser dictada la sentencia de apelación).

En apoyo de lo anterior cita el artículo 12 de la Convención de derechos del niño, el artículo 9 de la Ley Orgánica 1/1996 y el artículo 6 del Código del

Derecho Foral de Aragón (CDFA). También en el acto de la vista del recurso aludió al artículo 20 CDFA. El primero de los preceptos citados dice:

1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño.

2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional.

Se garantiza, por lo tanto, el derecho del niño a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afecten, teniendo en cuenta sus opiniones en función de su edad y madurez, para lo que se le dará la oportunidad de ser escuchado. No se exige que se practique la exploración judicial del menor mediante audiencia directa por el juez, pues se prevé que exprese su opinión directamente o por medio de representante, conforme a las normas del procedimiento de la ley nacional.

El artículo 9 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor enuncia el derecho del menor "*a ser oído...en cualquier procedimiento administrativo o judicial en que esté directamente implicado y que conduzca a una decisión que afecte a su esfera personal, familiar o social*". Se especifica que "*en los procedimientos judiciales las comparecencias del menor se realizarán de forma adecuada a su situación..., cuidando de preservar su intimidad*". Se expresa, por lo tanto, el derecho del menor a ser oído, pero tampoco se exige que se practique mediante audiencia directa por el juez pues en el apartado 2 se prevé que pueda ejercitar este derecho por sí mismo, o a través de representante u otras personas que por su profesión o especial relación de confianza puedan transmitir su opinión objetivamente. En el apartado 3 se exige que cuando el menor solicite ser oído directamente o por medio de representante, la denegación de la audiencia será motivada. En el presente supuesto la menor no solicitó ser oída, y su opinión fue escuchada en cuatro ocasiones por profesionales que trasladaron al tribunal su opinión, que ha sido expresamente valorada en ambas sentencias.

El artículo 6 del CDFA dice:

Artículo 6. Derecho del menor a ser oído.

Antes de adoptar cualquier decisión, resolución o medida que afecte a su persona o bienes, se debe oír al menor siempre que tenga suficiente juicio y, en todo caso, si es mayor de doce años.

Nuevamente se proclama el derecho del menor a ser oído, sin especificarse que haya de hacerlo directamente el tribunal.

Debe rechazarse la aplicación en este supuesto del artículo 20 del CDFA, igualmente citado por el representante del Ministerio Fiscal, ya que se refiere a las reglas que deben seguirse en los supuestos de intromisión de terceros en los derechos de la personalidad del menor de catorce años.

En resumen, de los preceptos citados se desprende la necesidad de que en los casos que se indican los menores sean oídos y que su opinión sea tenida en cuenta siempre que tengan suficiente juicio, lo que ha sido debidamente cumplido mediante la intervención de los profesionales citados. Por el contrario, no cabe elevar a la categoría de derecho fundamental del niño la necesidad de ser explorado de forma directa por los tribunales en todos los casos, con la consecuencia de entenderse infringido en derecho a la tutela judicial efectiva en el supuesto de no hacerse así, pues no se deduce tal derecho absoluto de los indicados preceptos.

El artículo 238.3º LOPJ, a cuyo amparo solicita el Ministerio Fiscal la nulidad de lo actuado hasta el momento en que, a su juicio, debió ser explorada la menor por la Audiencia Provincial, exige que se haya prescindido de normas esenciales del procedimiento siempre que por esa causa haya podido producirse indefensión. Como se ha indicado, la menor fue oída por los cuatro profesionales que intervinieron en el procedimiento, quienes trasladaron al Juzgado las impresiones percibidas de ella en las entrevistas habidas para la elaboración de sus informes, y ninguna de las partes, ni el Ministerio Fiscal, consideró necesaria la exploración, ni se echó en falta en ninguno de los trámites procesales. Tampoco lo hicieron valer las partes, o el Ministerio Fiscal, mediante la interposición de los recursos legalmente establecidos, como exige el artículo 240 LOPJ, ni se afirma que no hubiera podido denunciarse antes (artículo 241.1 LOPJ). Tampoco argumenta el Ministerio Fiscal, habida cuenta de lo expuesto hasta ahora, cómo se ha producido la indefensión del menor.

Las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo esgrimidas por el Ministerio Fiscal en apoyo de su solicitud no proclaman la exigencia de que el derecho del menor a ser oído se haga en todos los casos mediante la exploración judicial, sino que analizan casos concretos que carecen de la identidad necesaria con el presente en términos tales que su doctrina exigiera la declaración de nulidad pretendida.

Así, la sentencia del Tribunal Constitucional 152/2005, de 6 de junio, resuelve un supuesto en que, atribuida inicialmente la custodia al padre tras oír al menor, resultó modificada la custodia sin nueva exploración. El Tribunal Constitucional otorga el amparo solicitado por el padre y anula la última sentencia porque no fue oído el menor por la Audiencia Provincial, teniendo en cuenta que se modificaba la guarda y custodia. Siendo ésta la razón que, fundamentalmente, es considerada por el TC, resulta claro que se trata de una situación bien distinta que no permite aplicar la misma decisión al caso presente.

La sentencia 610/2005 del Tribunal Supremo, de 15 de julio, anulando la dictada por la Audiencia Provincial , fue dictada en un procedimiento de incapacidad en el que no fue oído el presunto incapaz a pesar de ser un requisito específicamente previsto p estos procedimientos en el artículo 759.3 LEC. Resulta evidente que se trata de una situación bien distinta, en la que el indicado precepto de forma imperativa exige dicho trámite, a diferencia de la forma en que viene indicado en los preceptos antes citados p este caso.

Consecuencia de todo lo anterior es la desestimación de la petición de nulidad instada por el Ministerio Fiscal.

En la misma alegación sobre la nulidad el Ministerio Fiscal se refiere a la relevancia preponderante que, a su juicio, debe darse a la opinión de los menores, a lo que nos referiremos al resolver sobre el motivo del recurso de casación admitido.

SEGUNDO.- El motivo único del recurso denuncia la infracción del artículo 80.2 del Código del Derecho Foral de Aragón por inaplicación del criterio preferente de custodia compartida que, a juicio del recurrente, en la sentencia de primera instancia y en la recurrida se convierte en excepcional en vez de normal o preferente. Afirma sentirse desconcertado porque la sentencia de la Audiencia Provincial, después de rebatir los argumentos por los que la del Juzgado estimó que resultaba más conveniente la custodia en favor de la madre, utiliza otros distintos p rechazar la custodia compartida.

La sentencia del Juzgado pone de relieve, por la prueba practicada, la mala relación existente entre los padres y la diferente manera de ambos de enfrentar la vida cotidiana sin que, según las periciales practicadas, se cuestione la idoneidad de cada uno. La sentencia contrasta los dos informes de parte y las diferentes posturas de ambos, así como el del Área Social que recoge la situación de enfrentamiento existente entre los padres y llega a la conclusión de ser más beneficiosa p las menores la custodia compartida. Sin embargo, por la edad de las menores, la conflictividad entre los progenitores, la judicialización de sus relaciones y esa conflictividad, considera la sentencia que los cambios de *status* de vida con cada progenitor pueden afectar al desarrollo de la personalidad de las hijas, y que es necesario procurar una continuidad en su entorno por lo que no estima procedente la modificación de las medidas.

La sentencia de la Audiencia Provincial afirma en su fundamento jurídico quinto, con cita de la sentencia de esta Sala de 9 de febrero de 2.012, que la mala relación entre los cónyuges no puede ser, por sí misma, un obstáculo p adoptar la custodia compartida, porque también lo sería para el régimen de visitas, y lo más beneficioso p las menores es que se relacionen con ambos progenitores aunque los adultos se lleven mal personalmente; que en el supuesto enjuiciado el mal entendimiento personal y su animadversión, e incluso enemistad, no llega a un grado de conflictividad tal que imposibilite la custodia compartida, como tampoco impide el régimen de visitas; que la judicialización de sus

relaciones se concreta en dos procedimientos alegados por el actor en su recurso de apelación, el primero para ampliar las visitas y el segundo para autorizar al apelante a viajar a Canadá con sus hijas durante quince días; que las distintas costumbres, pensamientos y modo de vida de uno y otro no deben suponer ningún inconveniente para la custodia compartida porque ninguna forma de educar en el ámbito de la familia es preferente por sí misma a otra cuando, como aquí ocurre, no acarrea perjuicio alguno para las menores; y que la actual edad de las niñas (diez años y casi siete) no supone un obstáculo p la concesión de la guarda y custodia compartida.

Pero en el fundamento siguiente reseña la sentencia los cuatro informes periciales practicados, con detalle de los aspectos que le resultan más destacables, esencialmente las manifestaciones de la niña mayor a cada uno de los peritos informantes y concluye que *la hija mayor no ha aceptado hasta ahora la nueva familia creada por su padre con otra pareja y la hija de ésta, aunque intenta adaptarse a la nueva situación*, lo que no es considerado en la sentencia como un capricho de la menor sino una toma de postura personal que responde a sus propios sentimientos, y que parece que las niñas están más unidas sentimentalmente a la madre por lo que se considera que la custodia compartida supondría imponer a la hija mayor, alcanzando el mismo régimen a la menor, un nuevo factor de sufrimiento personal que no le conviene para el desarrollo de su personalidad, por lo que choca con el interés de las menores de acuerdo con los factores señalados al efecto por el artículo 80.2 –la opinión de los hijos, el arraigo familiar y cualquier otra circunstancia de especial relevancia para el régimen de convivencia-.

TERCERO.- El recurrente analiza las anteriores consideraciones de la sentencia y comparte las más generales de su fundamento quinto, pero expresa su disconformidad con las conclusiones que extrae de los informes periciales afirmando que *"...si partimos de los informes periciales...podemos decir que de manera global y objetiva no existe razón o motivo p rechazar la guarda y custodia compartida*". A partir de ahí se extiende en su particular valoración de los informes periciales incurriendo así en el defecto de pretender convertir el recurso de casación en una tercera instancia y que esta Sala valore de nuevo las pruebas, en este caso los citados informes periciales, lo que está vedado pues el objeto de este recurso no es llevar a cabo una nueva valoración de la prueba, que corresponde a las instancias procesales, sino determinar la recta aplicación del derecho sustantivo al caso de autos.

Hemos recordado en otras sentencias (por todas la de 1 de febrero de 2.012, recurso 24/2011) que: "Como afirma la Sentencia del Tribunal Supremo 744/2011, de 10 de octubre, *la valoración de los distintos medios de prueba, las cuales constituyen premisas de carácter epistemológico o jurídico-institucional a las que debe ajustarse la operación lógica de enjuiciamiento necesaria para la resolución del asunto planteado, cuyo examen solo cabe someterse al*

tribunal de casación, al amparo del artículo 469.1.4.º LEC, cuando, por ser manifiestamente arbitraria o ilógica la valoración de la prueba, esta no supera el test de la racionabilidad constitucionalmente exigible p respetar el derecho la tutela judicial efectiva consagrado en artículo 24 CE (STS 28 de noviembre de 2008, RC núm. 1789/03, 8 de julio de 2009, RC núm. 693/2005, 10 de septiembre de 2009, RC núm. 1091/2005 y 19 de octubre de 2009, RC núm. 1129/2005)."

En el presente supuesto la propia parte recurrente admite que la Sala de apelación analiza correctamente algunos de los criterios a tener en cuenta en la aplicación del régimen legal preferente de la custodia compartida establecido en el artículo 80.2 CDFA, pero discrepa de la valoración de la prueba y de la conclusión que de la misma extrae la sentencia recurrida.

Como hemos visto, señala el Tribunal Supremo y ha reiterado esta Sala que la revisión de la prueba solo cabe al amparo del recurso previsto en el artículo 469.1.4º LEC, cuando tal valoración resulte manifiestamente arbitraria o ilógica, pero en el presente supuesto no cabe duda de que en la sentencia de apelación han sido pormenorizadamente analizadas las manifestaciones de las menores ante los peritos que informaron en primera instancia, y las conclusiones, no plenamente coincidentes, de dichos profesionales.

CUARTO.- La sentencia de apelación expone la doctrina ya sentada de forma reiterada por esta Sala (por todas la citada de 9 de febrero de 2.012) en la aplicación del artículo 80.2 del CDFA, y en particular de la posibilidad de que los tribunales puedan establecer el sistema de custodia individual, frente a la regla preferente de la custodia compartida, mediante una atenta valoración de la prueba que acredite que resulta más conveniente para el interés del menor.

El análisis que la sentencia realiza de la prueba practicada, en particular los informes periciales en los que se recogen las manifestaciones de las menores, cumple adecuadamente las reglas indicadas razonando suficientemente la decisión adoptada.

La opinión de las menores, recogida a través de los informes periciales, ha sido valorada en la sentencia de apelación como uno de los factores indicados en el artículo 80.2 del CDFA, que no lo señala como preferente sino como uno más de los que deben ser tenidos en cuenta ponderadamente por los tribunales para la adopción del régimen de custodia.

Así lo ha razonado debidamente la sentencia recurrida, por lo que no se aprecia infracción del artículo 80.2 del CDFA.

En consecuencia, el recurso debe ser rechazado."

***** Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 26 de octubre de 2012. Custodia compartida. Valoración de la prueba. Aptitud de los progenitores**

"PRIMERO.- La sentencia que aquí se impugna confirmó la de Primera Instancia que estimó la demanda del padre en la que pedía -en lo que ahora resulta relevante- la guarda y custodia compartida del hijo menor común.
En el motivo de casación que formula la progenitora se alega infracción del precepto del art. 80.2 del Código de Derecho Foral de Aragón (CDFA), indicando que la novedad de la norma aragonesa implica la inexistencia de jurisprudencia reiterada acerca de en qué supuestos será de aplicación preferente la custodia compartida y qué otros serán excepción a tal criterio.
No es así, sino todo lo contrario. Así, la sentencia de esta Sala de 1 de febrero de 2012, que se cita en otras posteriores, resume los criterios que deben seguirse en la exégesis del artículo 80 CDFA:

En sentencias de esta Sala dictadas en aplicación de la Ley 2/2010, cuyos preceptos han sido incorporados al Código de Derecho Foral de Aragón, se han establecido los siguientes criterios exegéticos acerca de dichas normas: a) La custodia compartida por parte de ambos progenitores es el régimen preferente y predeterminado por el legislador, en busca de ese interés del menor, en orden al pleno desarrollo de su personalidad, de modo que se aplicará esta forma de custodia siempre que el padre y la madre estén capacitados para el ejercicio de las facultades necesarias a tal fin (Sentencia de 30 de septiembre de 2011); b) El sistema no es rígido, salvo en un mandato que dirige al juez: el superior interés del menor (Sentencia de 13 de julio de 2011); c) Podrá establecerse un sistema de custodia individual, cuando éste resulte más conveniente para dicho interés, a cuyo efecto habrá de evaluar los parámetros establecidos en el art. 80.2 del Código (Sentencias citadas y la de 15 de diciembre de 2011); d) La adopción de la custodia individual exigirá una atenta valoración de la prueba que así lo acredite -la conveniencia para el menor- frente al criterio preferente de la custodia compartida, al que el precepto legal otorga tal preferencia en interés de los hijos menores (Sentencia de 15 de diciembre de 2011).

SEGUNDO.- Aduce la parte que la sentencia recurrida infringe lo dispuesto en el precepto que invoca *por indebida aplicación del mismo en cuanto priva de cualquier entidad a los planes de relaciones familiares al omitir cualquier consideración a los mismos.*
Ha de advertirse, en primer lugar, que la sentencia no da por bueno, sin más, el plan propuesto por el padre, sino que pormenoriza en el fallo las medidas cuya adopción acuerda tras adecuada motivación en los fundamentos cuarto y

quinto, estableciendo un régimen a seguir hasta que el niño cumpla tres años, y otro a partir de ese momento.

Lo que se expone en la argumentación que la actora lleva a cabo tras la afirmación que hemos reproducido, es su consideración de que el padre no va a poder hacerse cargo del niño durante los períodos en que lo tenga consigo, pues –siempre en tesis de la recurrente- su carrera musical es incompatible con el régimen de custodia compartida. No es esto lo que concluyó la sentencia de instancia después confirmada en apelación. Aquella expresó (fundamento tercero) entre otras cuestiones, que el menor *muestra vínculos afectivos con sus dos progenitores así como con las respectivas familias*; que *ambos padres muestran aptitudes el interés para cuidar al hijo, estando capacitados para desempeñar las funciones parentales...*; que aunque la comunicación entre ambos progenitores no es muy fluida, *se indica en los informes que sí se relacionan para tratar temas relativos al menor*; que *tampoco parece que la carrera musical del padre* (que, como más adelante se indica, se encuentra en situación de desempleo) *suponga un impedimento en estos momentos para el cuidado del menor, habiendo indicado el padre que los conciertos a los que acuda se programarán en atención a la guarda del menor, y no apreciándose que sean tantos a lo largo del año como para que puedan afectar a la vida familiar*; que *tampoco hay una elevada discrepancia entre los modelos educativos de los padres, que la psicóloga considera beneficiosos e integradores para el desarrollo del menor*; que *de ninguno de los informes se desprende circunstancia objetiva alguna que impida la atribución de la guarda y custodia compartida, con la excepción realizada por la trabajadora social en el caso de que se realicen consumos de marihuana (*que ambos padres reconocieron haber llevado a cabo en el pasado). Y, tras aludir a las recomendaciones de la trabajadora social y la psicóloga, ambas favorables a la custodia compartida, concluye que resulta procedente dicho régimen.

TERCERO.- El desarrollo del motivo de casación evidencia que la parte, bajo esa denuncia de falta de valoración en la sentencia del plan de relaciones familiares del padre combate en realidad la apreciación -positiva- que lleva a cabo la sentencia de instancia acerca de la aptitud del padre para hacerse cargo del niño y la viabilidad del régimen de custodia compartida. De ahí que se llegue a manifestar en el recurso que el juzgador *a todas luces yerra a la hora de valorar la prueba*. En suma, viene a insistir en los argumentos que utilizó para sostener el motivo de infracción procesal (falta de motivación de la sentencia) que resultó inadmitido y que, como dijimos en el auto de fecha 12 de julio reflejaba la discrepancia de la parte con la valoración probatoria.

Pero, como tiene declarado el TS y hemos recordado de forma tan reiterada que hace innecesaria la cita pormenorizada de resoluciones, una correcta técnica casacional implica plantear cuestiones jurídicas sin apartarse de

los hechos, toda vez que el recurso de casación no constituye una tercera instancia, sino que es un recurso extraordinario que tiene una finalidad de control de la aplicación de la norma sustantiva y de creación de doctrina jurisprudencial, lo que impide invocar la infracción de normas sustantivas desde una contemplación de los hechos diferente de la constatada en la instancia, eludiendo así la valoración probatoria contenida en la sentencia impugnada, y si se argumenta al margen de la base fáctica contenida en la misma se incurre en el defecto casacional de hacer "supuesto de la cuestión". Ha de estarse, pues, a los hechos que se declararon probados en la sentencia impugnada.

La aplicación al caso de la expresada doctrina impone la desestimación del recurso, al no apreciarse infracción alguna del artículo 80.2 del Código del Derecho Foral de Aragón, de acuerdo con la interpretación que del mismo ha llevado a cabo esta Sala y que ha quedado expuesta en el fundamento primero.”

***** Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 22 de noviembre de 2012. Inaplicación del criterio preferente de custodia compartida. Derecho del menor al contacto directo con sus padres. Igualdad en las relaciones familiares**

"PRIMERO.- Actora y demandado contrajeron matrimonio en Zaragoza el 8 de julio de 1.995, del que nacieron dos hijos, S el 2.001, y D, el 2.005. La esposa interpuso demanda de divorcio recayendo sentencia de primera instancia de 16 de noviembre de 2.011, que atribuyó la custodia de los dos hijos a la esposa. La sentencia confirmaba el auto recaído en el procedimiento de medidas provisionales coetáneas en el que se afirmaba que el criterio decisivo para tal atribución era la mayor disponibilidad horaria de la esposa, con jornada laboral de 9,30 h. a 14,30 h., en tanto que el esposo comenzaba a trabajar a las 6 h. de la mañana y no podía llevar a sus hijos al colegio.

La sentencia recoge el contenido del informe psicológico emitido por la profesional al servicio del Juzgado, que recomienda que los menores permanezcan con cada uno de los progenitores en fines de semana alternos desde el viernes a la salida del colegio hasta el lunes a la entrada del mismo y dos días entre semana desde la salida del colegio hasta el día siguiente a la entrada del mismo, y mitad de vacaciones, basando su conclusión en que "*ambas figuras parentales reúnen buenas condiciones y recursos personales para afrontar la crianza de sus hijos de forma satisfactoria. No se evidencia falta de capacidades para ejercer su rol parental en ninguno de ellos. En el discurso de los menores se detecta cierto nivel de tensión y malestar por la presión ejercida por ambos progenitores, aunque evitan posicionarse hacia ninguno de ellos*".

La sentencia pone en relación el informe pericial psicológico con el resto de las pruebas y considera más conveniente para el adecuado desarrollo y estabilidad de los menores mantener el régimen de guarda y custodia a favor de la madre establecido en el procedimiento de medidas provisionales, con un amplio régimen de visitas. Valora, como datos relevantes a tener en cuenta, "*primero, la opinión de la hija mayor, S, quien en la exploración judicial practicada manifestó expresamente su deseo de pernoctar entre semana en el domicilio de su madre, sin perjuicio de que pudiera relacionarse con su padre y sus abuelos paternos los fines de semana alternos y entre semana y, segundo, la disponibilidad laboral horaria del padre quien, aun cuando ha aportado una certificación de su nuevo horario laboral, coincidente con el de la madre, no debe obviarse que es trabajador y socio de la cooperativa y vicepresidente de la misma...y que su jornada laboral con anterioridad al inicio del presente procedimiento comenzaba a las 6,00 horas, lo que suscita*

serias dudas sobre la conciliación de su trabajo con la atención que precisan los menores en su vida cotidiana..."

La vivienda familiar de titularidad consorcial es atribuida en la sentencia a la progenitora custodia, al amparo de lo establecido en el artículo 81.2 del CDFA, por un plazo de ocho años a contar desde el siguiente día en que el menor D (en ese momento de seis años y medio de edad) cumpla la edad de catorce años, transcurrido el cual cualquiera de las partes podrá instar demanda de modificación de medidas definitivas para evaluar la posibilidad de su prórroga, cambio o destino a dar a la misma. Como contribución a los gastos de asistencia ordinarios de los dos hijos comunes señala a cargo del padre la cantidad de 200 euros mensuales por cada uno de ellos.

Interpuesto por la representación del padre recurso de apelación, la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de 20 de abril de 2.012 confirmó la del Juzgado en todos sus pronunciamientos, salvo el uso y disfrute de la vivienda familiar a favor de la actora que se fijó por un plazo de seis años desde la fecha de la sentencia de apelación.

SEGUNDO.- Contra la anterior sentencia interpuso la representación de D. Manuel M F recurso de casación con base en tres motivos, el primero por infracción del artículo 80.2 del CDFA, el segundo por infracción del artículo 76.3, apartados a) y b), y el tercero por infracción del artículo 81.3 y 4, también del CDFA.

En el Auto de 19 de julio de 2.012 esta Sala asumió su competencia para el conocimiento del recurso de casación, que en su primer motivo quedó circunscrito a la infracción del artículo 80.2 del CDFA y no a otros preceptos alegados en el mismo. Fueron también admitidos los motivos segundo y tercero, que no habían sido cuestionados.

La parte recurrida plantea en su escrito de oposición, como cuestión previa, que el recurso no debió ser admitido y reitera dicha petición. Conforme a lo dispuesto en el artículo 485, párrafo segundo, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el escrito de oposición se pueden alegar causas de inadmisibilidad que se consideren existentes y no hayan sido ya rechazadas por el Tribunal. Lo ahora alegado por la parte recurrida ya fue objeto del Auto de 19 de julio de 2.012, donde quedó concretado lo que se entendía como motivo del recurso, por lo que no cabe resolver nuevamente sobre ello. No obstante, cabe hacer algunas precisiones al respecto.

El motivo fundamental de la nueva alegación sobre la inadmisión es que el recurso no expresaba con claridad la vía de acceso casacional, si la cuantía del artículo 477.2.2º LEC que se citaba, o la del interés casacional del artículo 477.3 que también se citaba al inicio del recurso, y el artículo 477.2.3º que encabezaba cada uno de los motivos. En las alegaciones tras la providencia de 21 de junio de 2.012 la parte recurrente aclaró que la vía de acceso era la del interés casacional del artículo 477.2.3º en relación con el artículo 477.3 de la LEC. El Ministerio

Fiscal alegó que, aun no siendo modélico el recurso de casación interpuesto, debía ser admitido por interés casacional dado que los preceptos señalados como infringidos, los artículos 80.2, 76.3 y 81.3 y 81.4 del CDFA, requieren que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón se pronuncie sobre los mismos para conseguir la función de unificación de doctrina y nomofiláctica que tiene encomendada. La parte recurrida se opuso a la admisión del recurso.

En el Auto de la Sala de 19 de julio de 2.012 fue admitido el recurso por concurrir interés casacional dado que en sus motivos se alegaba doctrina de la Sala opuesta a la de la sentencia recurrida, en relación con las normas citadas como infringidas (artículo 3.1 de la Ley 4/2005, de 14 de junio, sobre la casación foral aragonesa), y que dichas normas no llevan más de cinco años en vigor (artículo 3.3 de la misma Ley).

Por otra parte, según hemos puesto de manifiesto, la parte recurrente citaba los números 2º y 3º del apartado 2 del artículo 477 de la LEC, y el apartado 3 del mismo artículo, aunque sin concretar inicialmente si era la cuantía o el interés casacional el que amparaba su interposición. En su escrito de alegaciones tras la providencia de 21 de junio de 2.012 lo concretaba en el interés casacional. No alegaba la posibilidad de acogerse a la cuantía como vía de acceso al amparo de lo dispuesto en el artículo 2.1 de la Ley aragonesa 4/2005, que lo permite cuando supere los 3.000 euros o sea imposible de calcular ni siquiera de modo relativo.

El Acuerdo de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 31 de diciembre de 2.011, sobre criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal, al señalar las causas de inadmisión de los recursos de casación por razón de interés casacional, se refiere a la falta de expresión formal de estos requisitos, salvo cuando se deduzcan claramente de su formulación sin necesidad de acudir al estudio de su fundamentación. En definitiva, se trata de impedir la alegación de motivos incorrectamente enunciados que, además, sorprendan a la parte recurrida provocando dudas sobre los mismos e impidiéndole una adecuada réplica. En el presente caso, aunque se produjo cierta confusión en la invocación formal de los preceptos procesales, pudo la parte recurrida conocer la vía de acceso al recurso y los motivos del mismo, como acredita su amplia oposición a cada uno de los motivos, por lo que debe rechazarse en este trámite su petición de inadmisión.

TERCERO.- El primer motivo del recurso denuncia la infracción del artículo 80.2 del Código del Derecho Foral de Aragón, por inaplicación del criterio preferente de custodia compartida como más conveniente para los menores, al haber optado la sentencia recurrida, injustificadamente a su juicio, por la custodia individual que es la excepción en la regulación legal. Afirma que para llegar a tal conclusión las sentencias del Juzgado y de la Audiencia Provincial se han apoyado exclusivamente en uno solo de los seis factores que

prevé el artículo 80.2, en concreto el referido a las posibilidades de conciliación de la vida familiar y laboral, por el más favorable horario laboral de la madre. Argumenta que cabe interpretar que, *a sensu contrario*, ninguno de los otros cinco factores se opone a la concesión de la guarda y custodia compartida.

Esta Sala ya ha destacado en las sentencias dictadas hasta la fecha sobre esta materia el criterio preferente de la custodia compartida establecido por el legislador aragonés, tal como dispone el artículo 80.2 CDFA, como expresión del sistema que mejor recoge el interés de los menores salvo, como también indica con claridad el referido precepto, que la custodia individual sea más conveniente.

La sentencia de la Sala de 1 de febrero del presente año (recurso 24/2011), resume los criterios que deben seguirse en la exégesis del artículo 80 CDFA:

"En sentencias de esta Sala dictadas en aplicación de la Ley 2/2010, cuyos preceptos han sido incorporados al Código de Derecho Foral de Aragón, se han establecido los siguientes criterios exegéticos acerca de dichas normas: a) La custodia compartida por parte de ambos progenitores es el régimen preferente y predeterminado por el legislador, en busca de ese interés del menor, en orden al pleno desarrollo de su personalidad, de modo que se aplicará esta forma de custodia siempre que el padre y la madre estén capacitados para el ejercicio de las facultades necesarias a tal fin (Sentencia de 30 de septiembre de 2011); b) El sistema no es rígido, salvo en un mandato que dirige al juez: el superior interés del menor (Sentencia de 13 de julio de 2011); c) Podrá establecerse un sistema de custodia individual, cuando éste resulte más conveniente para dicho interés, a cuyo efecto habrá de evaluar los parámetros establecidos en el art. 80.2 del Código (Sentencias citadas y la de 15 de diciembre de 2011); d) La adopción de la custodia individual exigirá una atenta valoración de la prueba que así lo acredite –la conveniencia para el menor- frente al criterio preferente de la custodia compartida, al que el precepto legal otorga tal preferencia en interés de los hijos menores (Sentencia de 15 de diciembre de 2011)".

Aplicando los anteriores criterios al caso concreto, hemos de comprobar si los tribunales de instancia, al apartarse de la regla general de la custodia compartida, han seguido adecuadamente las reglas indicadas razonando suficientemente la decisión adoptada.

CUARTO.- La sentencia de apelación asume de forma expresa la fundamentación jurídica de la sentencia del Juzgado, sobre la base de un análisis conjunto de las pruebas practicadas, en particular el informe pericial psicológico y la opinión de la hija mayor, y también que la sentencia apelada valora la posibilidad de la conciliación laboral por parte del padre teniendo en cuenta su disponibilidad horaria, dada su condición de trabajador y socio de una cooperativa. Igualmente recoge que el Juzgado valoró la edad de los hijos y, en

función de la misma, su necesidad de estabilidad física y emocional, manteniendo unos hábitos de estudio para lo que su dinámica habitual de vida no debe verse alterada innecesariamente. Por ello razona la sentencia de apelación que no existen motivos que en este caso justifiquen que la custodia compartida resulte más beneficiosa para los menores.

Para combatir las anteriores consideraciones se esfuerza la parte recurrente en destacar aspectos concretos de la declaración de la hija mayor y de la prueba documental que interpreta de forma más favorable a sus intereses para concluir que se ha valorado la prueba de forma ilógica e incluso absurda. Incurre así en el error de pretender hacer prevalecer su propia valoración de la prueba y que esta Sala avale tal interpretación olvidando que tal función corresponde a los tribunales de instancia y está vedada en el recurso extraordinario de casación.

La sentencia recurrida, asumiendo la valoración de la prueba realizada por el Juzgado, y explicando ampliamente las razones de tal asunción, llega razonadamente a su conclusión de entender más beneficiosa en este caso la custodia individual de la madre. Como hemos visto, no se basa solo en las mejores posibilidades de conciliación de la vida familiar y laboral de la madre (artículo 80.2.e) del CDFA) sino, además, en la edad de los hijos (artículo 80.2.a) del Código) que aconseja mantener determinados hábitos favorecedores de su estabilidad física y emocional y, fundamentalmente, en el informe pericial psicológico (artículo 80.3) del mismo) y en la opinión de la hija mayor (artículo 80.2.c) CDFA). Ciertamente, se dice en la sentencia que no existen motivos que justifiquen que es más beneficiosa la custodia compartida, frente a la dicción de la norma que parte de que, como regla primera, según ha señalado reiteradamente esta Sala, es más beneficiosa, pero la expresión de la sentencia, tras la amplia explicación de las pruebas tenidas en cuenta, debe ser entendida en el correcto sentido de que, a la vista de las mismas, la custodia individual aparece en este caso como más beneficiosa.

Así pues, la sentencia recurrida ha efectuado una valoración suficiente y razonada de la prueba practicada y, como hemos dicho, tal valoración no puede ser revisada en casación salvo si la misma resultara irracional, ilógica o arbitraria (sentencias del Tribunal Supremo de 28 de noviembre de 2.008, 8 de julio de 2.009, 10 de septiembre de 2.009 y 19 de octubre de 2.009), lo que no sucede en el presente caso pues de tal valoración, basada en el conjunto de factores expuestos, se ha concluido que la custodia individual de la madre es el régimen más beneficioso para los menores.

Por ello el motivo debe ser rechazado.

QUINTO.- El motivo segundo del recurso alega infracción de los apartados a) y b) del artículo 76.3 del CDFA, el primero de ellos que afirma el derecho de los menores a un contacto directo con sus padres de modo regular y la participación de éstos en la toma de decisiones que afecten a sus intereses, y

el segundo que recoge el derecho de los padres a la igualdad en sus relaciones familiares respecto a sus hijos menores.

Alega la parte recurrente que la infracción denunciada se evidencia porque el criterio principal utilizado por la sentencia recurrida para atribuir la custodia de los hijos a la madre es el de su mayor disponibilidad horaria para atender a los mismos fuera del horario escolar. También aduce que del resto de las pruebas practicadas, exploración de la hija mayor y prueba pericial psicológica, no se desprende que la custodia individual resulte más beneficiosa. Alude, finalmente, a que, conforme a la sentencia de esta Sala de 15 de diciembre de 2.012, recurso 17/2011, solo la prueba de falta de aptitud, capacidad y disposición de uno de los progenitores podrá determinar la custodia individual para el otro, sin que quepa presumir incapacidad para el futuro.

En realidad, este motivo del recurso insiste nuevamente en combatir la valoración de prueba de las sentencias de instancia obviando, además, que sus conclusiones para atribuir a la madre la custodia de los hijos no han sido extraídas solamente, según se ha expuesto, de su mayor disponibilidad horaria sino del conjunto de la prueba, cuyo resultado vuelve a rechazar.

El derecho de los hijos menores al contacto directo con sus padres y la igualdad de éstos en las relaciones con sus hijos, que son el motivo del recurso formalmente invocado, no se quiebran por la atribución de un régimen de custodia individual en lugar del legalmente preferente de custodia compartida, pues ello impediría la elección de la custodia individual en los supuestos en que la ley lo permite, cuando "*sea más conveniente*" conforme a los parámetros establecidos por la ley y sintetizados por la doctrina de esta Sala (por todas la citada sentencia de 1 de febrero de 2.012, recurso 24/2011). Tales derechos quedan a salvo, en los supuestos de custodia individual, mediante el establecimiento del más adecuado régimen de comunicación y visitas con el progenitor no custodio quien, además, ostenta las facultades inherentes a la autoridad familiar de la que sigue siendo cotitular.

La cita de la sentencia de 15 de diciembre de 2.011, recurso 17/2011, es parcial y no permite establecer similitud con el presente supuesto pues en ella, sin pruebas psicológicas ni opinión en contra del hijo, y reconocida la aptitud y disposición del progenitor que reclamaba la custodia compartida, se acogía este régimen porque ninguno de los factores del artículo 80.2 del CDFA lo desaconsejaba, y no debía servir a tal fin una mera previsión sobre la capacidad del padre y sus disponibilidades horarias según su ocupación laboral.

Por las razones expresadas, el motivo debe ser desestimado.

SEXTO.- El tercer motivo del recurso se funda en infracción de los apartados 3 y 4 del artículo 81 del CDFA, basándose en que en el plan de relaciones familiares solicitó la parte recurrente una atribución del uso del domicilio familiar alterna por semanas a favor de cada progenitor, pero que "*al aquietarnos al consejo del Gabinete al padre no le importa permanecer en el*

domicilio de los abuelos paternos, pero siempre entendiendo esta situación como provisional, y sabiendo que el uso del domicilio familiar es temporal debiendo proceder a la venta del citado inmueble de forma inmediata". Y preconiza que, "*solicitado el derecho de uso por semanas, permaneciendo en la vivienda los hijos, los progenitores podrán utilizar la vivienda de sus respectivos padres para permanecer en la misma en los períodos que no ostentan la custodia compartida*".

En el escueto desarrollo de este motivo no expone la parte recurrente, como es obligado en un recurso de casación, la forma en que, a su juicio, la sentencia recurrida infringe los señalados apartados 3 y 4 del artículo 81, lo que resulta razón suficiente para rechazar el motivo. Y de la redacción recogida en el apartado anterior parece entenderse que su formulación estaba dirigida a que se aceptara tal propuesta para el supuesto de que se hubiera estimado su recurso y quedara establecida la custodia compartida. No siendo así, no cabe plantearse tal posibilidad.

Por el contrario, decidida la custodia individual a favor de uno de los progenitores, la sentencia recurrida hace adecuada aplicación del apartado 2 del precepto, específicamente previsto para tal supuesto, mediante la atribución al mismo, en este caso la madre, de la vivienda familiar. Tan solo se produce una modificación de la sentencia dictada por el Juzgado en lo relativo al tiempo de uso, que queda limitado a un período inferior, por entender la Audiencia Provincial que la anterior limitación temporal daba un tiempo de uso excesivo, contrario a la naturaleza esencialmente temporal de este derecho. Ello resulta más beneficioso para la parte recurrente y adecuado a las facultades que concede al apartado 3 del precepto a los tribunales para ajustar esa duración a las circunstancias concretas de cada familia.

En definitiva, no se ha producido vulneración alguna de los preceptos indicados por lo que procede rechazar igualmente este motivo del recurso."

***** Sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Ejea de los Caballeros de 20 de noviembre de 2012. Atribución del uso del domicilio familiar. Concepto**

"Primero.- La demandante solicita que se decrete el divorcio. De la documentación aportada (certificación de la inscripción de matrimonio de los litigantes y del nacimiento de la hijo común) se considera acreditado que María Eugenia y Agustín contrajeron matrimonio en Ejea de los Caballeros, el y que, con anterioridad a la celebración del matrimonio, estas personas tuvieron una hija, L, el .

Cumpliéndose los requisitos establecidos en los artículos 86 y 81 del Código Civil, procede decretar del divorcio de María Eugenia y Agustín.

Segundo.- En cuanto a la autoridad familiar, debe establecerse que la misma será compartida, tal y como solicitó el Ministerio Fiscal, al no existir ningún elemento que aconseje privar de ella a ninguno de los progenitores.

Por lo que se refiere a la guarda y custodia, a la vista de la declaración de ambos cónyuges y de la menor, parece que estamos en uno de los supuestos en que es más beneficioso para el menor el establecimiento de una guarda y custodia individual. Así lo solicita la madre, sin que el padre se haya opuesto a ello, y también así lo considera conveniente el Ministerio Fiscal. La hija menor, de trece años de edad, también manifestó que quiere vivir con su madre.

Entiendo que la atribución de la custodia para la madre es lo más adecuado para la menor. Su voluntad es importante, habida cuenta de su edad, de tal manera que el establecimiento de un régimen de custodia muy distinto podría ser ilusorio. Por otra parte, si el propio padre carece de la voluntad de una custodia compartida, y la madre quiere tenerla en su compañía, el establecimiento de otro tipo de régimen podría ser contraproducente y causar más problemas que beneficios. La Ley aragonesa establece como preferible el sistema de custodia compartida porque considera que es más igualitario para los cónyuges, y es beneficioso para los menores porque mantienen mejor el contacto con sus progenitores. Pero en el caso que nos ocupa entiendo que es más beneficioso para la menor el sistema de custodia individual, por los motivos expuestos, por lo que se atribuye la custodia de la menor a la madre.

Tercero.- El artículo 80 del Código de Derecho Foral de Aragón establece que, si se acuerda un régimen de custodia individual, deberá fijarse "*régimen de comunicación, estancias o visitas con el otro progenitor que le garantice el ejercicio de las funciones propias de la autoridad familiar*".

En este caso, la menor manifestó que le gustaría mantener el contacto con su padre, y que le parecería bien verlo cada dos fines de semana. La madre propone un régimen de visitas de fines de semana alternos y mitad de

vacaciones de verano, Semana Santa y Navidad. El padre también manifestó su voluntad de estar más tiempo con su hija menor.

Por lo expuesto, parece claro que el régimen más adecuado es el propuesto en la demanda. Que se atribuya al padre un régimen de visitas de fines de semana alternos y mitad de vacaciones. Dado que el padre vive en otra localidad, deberá ser él quien se desplace a recoger y a llevar a la menor a su domicilio.

Cuarto.- El artículo 81 del Código se refiere a la atribución del uso del domicilio familiar.

Con arreglo al referido artículo, el uso de la misma debe atribuirse a la madre, ya que se le ha atribuido la custodia de la hija menor.

En la vista, la Letrada de la demandante solicitó que se le adjudicara el uso de la vivienda sita en la C/ ---, de Ejea de los Caballeros, inmueble que está arrendado a terceras personas, ya que el inmueble que constituye ahora la vivienda familiar es objeto de un procedimiento de ejecución hipotecaria, y está fijada la subasta el 13 de diciembre de 2012.

Entiendo que, salvo acuerdo entre las partes, la atribución del uso del domicilio familiar sólo puede referirse, precisamente, a dicho domicilio familiar, y no a otros inmuebles que pertenezcan a la familia. La ley prevé una norma para esta materia por la especialidad de este bien inmueble, que constituye el domicilio de la familia, por lo que esta norma no puede extenderse a otros inmuebles en los que no se dan las mismas características.

Por otra parte, la presente sentencia, como no puede ser de otra manera, en ningún caso puede producir efectos frente a terceros que no han sido parte del procedimiento (artículo 222 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Por lo tanto, lo que se adjudica a la demandante es el uso del domicilio familiar en C/--- de Ejea de los Caballeros. Debe tenerse en cuenta, además, que tras la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 27/2012, es posible que el lanzamiento de dicha vivienda no sea procedente.

Quinto.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 82 del Código, y dado que la custodia de la menor se ha adjudicado a la madre, entiendo que a ella le corresponde realizar los gastos ordinarios de la menor, para lo cual el padre deberá pagar la correspondiente pensión alimenticia.

La actora reclama que la pensión sea de 300 euros mensuales, y el Ministerio Fiscal solicitó 250 euros al mes.

Lo cierto es que no se disponen de muchos datos para determinar la capacidad económica de los cónyuges. Parece que ninguno trabaja. La demandante manifiesta que recibe una ayuda de 570 euros al mes, que se le acaba en febrero. Que no trabaja y no puede hacerlo por una patología en la rodilla, estando pendiente de ser operada. El demandado manifestó que tampoco trabaja, y que cobra 700 euros de paro desde el mes de junio.

Se manifestó que la vivienda habitual está pendiente de ejecución hipotecaria. También que tienen un piso arrendado, aunque no se sabe cuánto se cobra de alquiler, ni cuál de los cónyuges está recibiendo el pago del alquiler.

Con independencia de que estas cuestiones deberán determinarse cuando se liquide el régimen económico matrimonial, se partirá de los ingresos que manifiestan tener cada uno de los progenitores, aumentado con la mitad del precio del arrendamiento (cuya cuantía se desconoce, pero podría partirse de una cantidad de unos 300 euros mensuales). Debe tenerse en cuenta que el demandado ocupa una vivienda que no es suya (sino de unos sobrinos) pero por la que no paga ninguna cantidad. La actora vive en el domicilio familiar que, como se ha dicho, está pendiente de ejecución hipotecaria, desconociéndose también si podrá acogerse a la moratoria establecida en el Real Decreto-Ley 27/2012.

Partiendo de lo expuesto, y aplicando las tablas estadísticas que existen en esta materia, considero que procede establecer una pensión alimenticia de 220 euros al mes.

Los gastos extraordinarios deberán ser satisfechos por iguales partes, en caso de ser necesarios. Aquellos que no lo sean, si no media acuerdo entre las partes, serán satisfechos por el progenitor que decida efectuarlos. Se regulará esta cuestión en los términos planteados en la demanda.

Sexto.- La actora solicita una asignación compensatoria de 200 euros mensuales durante un tiempo de 3 años.

El artículo 83.1 del Código de Derecho Foral de Aragón establece que "*el progenitor al que la ruptura de la convivencia produzca un desequilibrio económico en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento en su situación anterior a la convivencia, tendrá derecho a percibir del otro una asignación compensatoria*".

En el caso que nos ocupa entiendo que no procede la asignación compensatoria. No consta que exista un desequilibrio económico entre la demandante y el demandado. De sus declaraciones se desprende que ninguno de los dos trabaja, que el demandado cobra una cantidad por paro y la demandante una cantidad, al parecer, por un tema relacionado con la discapacidad.

No consta tampoco si la demandante ha trabajado o no con anterioridad, ni si su dedicación a la familia la ha apartado del mercado laboral.

En relación con las posibilidades de acceso al mercado laboral, de la declaración de la demandante se desprende que no puede trabajar en este momento, debido a que está pendiente de una operación. El demandado tampoco está trabajando y cobra paro, pero su acceso a un puesto de trabajo, teniendo en cuenta la actual situación económica y su edad (54 años) tampoco parece fácil.

La asignación compensatoria se debe establecer en los supuestos en los que el divorcio supone para una de las partes un empeoramiento económico que, además, implique un desequilibrio con el otro cónyuge. En este caso, el divorcio supone para la demandante no poder contar con los ingresos que tenía por el trabajo de su marido. Pero al haber perdido este último su trabajo, resulta que no se da el desequilibrio que exige la ley, puesto que ambos pasan ahora a cobrar unas cantidades entre las que no hay mucha diferencia y, en ambos casos, por determinado tiempo. Por otra parte, la disminución de ingresos que supone la pérdida del trabajo del marido no es consecuencia del divorcio.

Por lo expuesto, entiendo que no procede la asignación compensatoria solicitada.”

***** Auto del Tribunal Superior de Justicia de 22 de noviembre de 2012. Guarda y custodia. Inadmisión de recurso de casación**

"PRIMERO.- En el trámite de admisión del recurso de casación formulado, la Sala debe de examinar en primer lugar su competencia, pronunciándose seguidamente, si se considerase competente, sobre su admisibilidad, según dispone el artículo 484 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por lo que se refiere al primer extremo, no ofrece duda la competencia de este órgano jurisdiccional respecto del recurso de casación, pues a tenor del artículo 478, núm. 1º, párrafo 2º, de la mentada Ley procesal, corresponde "a las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia conocer de los recursos de casación que procedan contra las resoluciones de los Tribunales Civiles con sede en la Comunidad Autónoma, siempre que el recurso se funde, exclusivamente o junto a otros motivos, en infracción de las normas de Derecho civil, foral o especial propio de la Comunidad", y examinado el escrito de interposición vemos que se considera infringido el art. 80 del Código de Derecho Foral de Aragón, además de formular otras consideraciones.

SEGUNDO.- La parte recurrente denuncia en su escrito de interposición diversas cuestiones. En el denominado motivo primero invoca la infracción del artículo 80 del CDFA, vulneración del principio *favor filii* y no separación de los hijos, así como la incorrecta valoración de la prueba. Seguidamente se refiere a la convivencia de la menor con una hermanastra por parte de madre, a las consecuencias que a su juicio tendría el cambio del entorno de la menor, que no existe modificación sustancial de las circunstancias, que la imposibilidad de obtener un nuevo informe le ha producido indefensión, además de denunciar la insuficiente motivación de la sentencia recurrida.

TERCERO.- El recurso, en los términos en que está formulado, no puede ser admitido, de conformidad a lo dispuesto en el art. 483.2, 2º y 483.3, de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En su articulación se mezclan razones relativas a la infracción de precepto sustantivo con otras referidas a la valoración de la prueba, lo que no resulta admisible por tratar de sustituir la valoración de la prueba efectuada por la sentencia recurrida por sus propias consideraciones al respecto. Como tiene declarado la Sala Primera del Tribunal Supremo (Auto de 1 de julio de 2008, en recurso 1938/2005, y los que en el mismo se citan) la falta de ajuste a lo previsto en el art. 483.2.2º de la LEC se produce cuando la parte recurrente "olvidando que no se halla ante una tercera instancia, intenta reproducir, sin más, la controversia ante esta sede desde su particular planteamiento, olvidando así que el recurso de casación no constituye una tercera instancia, sino una modalidad de recurso extraordinario, en el que prevalece la finalidad de control de la aplicación de la norma y de creación de

doctrina jurisprudencial, lo que exige plantear al Tribunal cuestiones jurídicas, de un modo preciso y razonado, pero siempre sin apartarse de los hechos".

CUARTO.- Por otra parte la recurrente introduce razones de orden procesal, como las relativas a la posible indefensión o falta de motivación, que en su caso serían objeto de un recurso extraordinario por infracción procesal no interpuesto.

Por todo ello, a la vista del informe emitido por el Ministerio Fiscal, y conforme al art. 483.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, procede declarar la inadmisión del recurso de casación y la firmeza de la sentencia recurrida."

***** Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 27 de noviembre de 2012. Custodia compartida. Preferencia. Mantenimiento de la vida cotidiana del menor. Convivencia con hermanos nacidos tras la ruptura**

"PRIMERO.- D. Javier M O y Dª Amalia T E, cónyuges, promovieron proceso de divorcio de mutuo acuerdo ante el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Zaragoza, en el que recayó sentencia de 15 de septiembre de 2008 (autos 961/2008), que declaró su divorcio y aprobó el convenio regulador suscrito por ambos de fecha 17 de julio de 2008. En dicho convenio se pactó que el hijo común A, nacido el año 2005, quedaba bajo la custodia de la madre, se fijaba régimen de visitas con el padre, quien se comprometía a abonar mensualmente la cantidad de 300 €, y ambos aceptaban abonar los gastos extraordinarios por mitad.

Por demanda interpuesta ante el mismo juzgado y al amparo de lo preceptuado en la disposición transitoria primera de la Ley 2/2010, de 26 de mayo, de las Cortes de Aragón, la representación procesal de D. Javier M O instó la revisión del convenio regulador postulando la custodia compartida respecto de su hijo A, así como la modificación de medidas adoptadas, acompañando a su demanda Plan de Relaciones Familiares.

Tramitado el proceso, el juzgado de primera instancia dictó sentencia el 19 de diciembre de 2011 en la que estimó esencialmente la demanda y acordó, entre otros pronunciamientos, que el hijo común A quedará bajo la custodia compartida de sus progenitores, los que ostentarán la autoridad familiar sobre el menor en lo que exceda de su ejercicio ordinario. Dicha sentencia consideraba, respecto al fondo de la cuestión planteada, lo prevenido en el art. 6.2 de la Ley 2/2010, actualmente el art. 80.2 del Código de Derecho Foral de Aragón (en lo sucesivo CDFA), y partiendo de la consideración efectuada por la psicóloga del juzgado que "*considera que es perfectamente viable en el caso que nos ocupa un reparto igualitario del tiempo de permanencia con el hijo*", estimó que no hay inconveniente para fijar una custodia compartida, con las consecuencias personales y patrimoniales que de ella derivan.

Apelada la sentencia por la representación de la madre, la Audiencia Provincial, en sentencia de 2 de mayo de 2012, estimó el recurso, revocó la sentencia de primera instancia y, desestimando la demanda, declaró vigentes las medidas acordadas en la sentencia firme de divorcio de 15 de septiembre de 2008.

Frente a dicha sentencia se alza el actor, interponiendo recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación, ambos admitidos a trámite.

SEGUNDO.- El recurso extraordinario por infracción procesal se formula al amparo de lo preceptuado en el art. 469.1.4º de la LEC, invocando la vulneración del art. 218.2 de la misma por falta de valoración adecuada de las pruebas, vulneración del art. 348 por vulneración errónea del dictamen pericial, vulneración del art. 316.1 2 por valoración inadecuada de la prueba de interrogatorio de parte, del art. 137 del mismo texto legal y 24 de la Constitución, por infracción del derecho a la tutela judicial efectiva.

Para el examen de este recurso extraordinario debemos recordar su contenido y alcance. El trámite de recurso extraordinario, tanto de infracción procesal como de casación, no constituye una tercera instancia, por lo que no puede esta Sala realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas en el proceso, que es función de las instancias. La Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de abril de 2012, nº 263/2012, recuerda que "*Los errores en la valoración de la prueba no pueden ser canalizados por la vía del art. 469.1.2.º LEC, ya que este motivo de infracción procesal está reservado, en lo que aquí interesa, al examen del cumplimiento de "las normas procesales reguladoras de la sentencia" que comprenden el procedimiento para dictarla, forma, contenido y requisitos internos de la sentencia, pero no las reglas y principios que deben observarse en la valoración de los distintos medios de prueba, ya que la valoración probatoria solo puede excepcionalmente tener acceso a la casación al amparo del art. 469.1.4.º LEC cuando se funde en un error patente siempre que pueda demostrarse que, siendo manifiestamente arbitraria o ilógica la valoración efectuada, no supere, conforme a la doctrina constitucional, el test de la razonabilidad exigible para respetar el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24 CE, ya que la valoración de la prueba es función de la instancia y estas se agotan en la apelación (en este sentido, sentencias 261/2011, de 20 de abril, y 577/2011, de 20 de julio*)".

Así, la invocación de error en la valoración de las pruebas, tanto de la pericial como del interrogatorio de parte, no puede entenderse incluida en el ámbito y alcance de este recurso extraordinario. Únicamente procede considerar si la valoración de las pruebas practicadas, y especialmente de la pericial, efectuada por el tribunal de segunda instancia, resulta arbitraria, ilógica o contraria a toda razonabilidad, pues en este caso el recurso prosperaría, ya que el ordenamiento jurídico no puede permitir la arbitrariedad de los poderes públicos.

TERCERO.- Limitado así el alcance del recurso extraordinario por infracción procesal, debemos examinar el razonamiento efectuado en la sentencia recurrida, en cuanto valora la prueba pericial que se ha practicado en autos. En su fundamento tercero expresa que *"la Sala aprecia importantes contradicciones en el informe psicológico practicado en el proceso (folio 182 y ss.) en el que se sustenta la custodia compartida que otorga el juzgador en su resolución"*. Explica seguidamente que en dicho informe se atribuye al actor una

actitud retraída, con dificultades en sus habilidades sociales, mientras que en la demanda el propio Sr. M funda su petición en participar activamente en los ámbitos relativos al cuidado del hijo. Señala que concurren déficits asertivos en el actor, pero no especifica qué circunstancia pueda existir en la actualidad para evitar que esa actitud pasiva cambie. Tras exponer otras consideraciones relativas al informe pericial, estima que *"las conclusiones del informe adolecen de una exhaustiva consideración de las reales consecuencias del cambio de custodia, siempre en atención a lo estimado y valorado como más correcto para el bienestar del menor"*.

La valoración efectuada respecto de la prueba pericial entra dentro de las facultades del tribunal de apelación, y no puede estimarse que sea arbitraria o contraria a la lógica. El recurso extraordinario interpuesto tiene un alcance restrictivo en cuanto a sus efectos, y en el caso examinado las consideraciones efectuadas no quedan bajo el nivel del test de razonabilidad que el Tribunal Supremo viene considerando a estos efectos, sino que se trata de un examen y valoración de la prueba pericial, en el que la Audiencia llega a conclusiones distintas de las adoptadas por la perito informante.

En consecuencia, el motivo de recurso por infracción procesal ha de ser desestimado, procediendo seguidamente al examen del recurso de casación interpuesto.

CUARTO.- El primer motivo de este recurso invoca la infracción de lo dispuesto en el art. 80.2 del CDFA, que establece como régimen preferente el de custodia compartida. Apoya el recurso en la cita de doctrina jurisprudencial de esta Sala recogida, entre otras, en las sentencias de: 15 de diciembre de 2011, recaída en recurso de casación 17/2011; 18 de abril de 2012, en recurso de casación 31/2011; y 9 de abril de 2012, en recurso de casación e infracción procesal 29/2011.

En las sentencias que se citan, esta Sala ha establecido su criterio acerca de la aplicación del precepto contenido en el art. 80.2 del CDFA, que establece como criterio legal para casos de separación conyugal en que existen hijos menores, el de custodia compartida por parte de los progenitores. Lo ha hecho considerando que el legislador entiende como más beneficioso para el interés prioritario del menor dicho sistema, en el que padre y madre se involucran en el ejercicio de la autoridad familiar, guarda y educación del menor, de modo que debe adoptarse dicha forma de custodia, salvo que del resultado de la prueba practicada en autos se desprenda como más beneficiosa para el menor la custodia individual. A tal fin, serán de considerar los aspectos que el propio legislador recoge, relativos a la edad del menor, su arraigo social y familiar, la opinión de los menores si tienen suficiente juicio, la aptitud y voluntad de los padres y las posibilidades de conciliación de vida familiar y laboral, y el tribunal, valorando la prueba practicada, entre ella el dictamen de expertos, deberá razonar suficientemente la decisión cuando entienda que la custodia individual

es más beneficiosa para el menor. Como expresamos en nuestra Sentencia de 18 de abril de 2012, nº 17/2012, (recurso 31/2011), "*siempre que el padre y la madre estén capacitados para el ejercicio de las facultades necesarias, la prueba deberá ser dirigida a acreditar que la custodia individual es la más conveniente y sólo entonces se otorgará*".

En el caso de autos, la Audiencia Provincial considera que la argumentación de la primera instancia descansa exclusivamente sobre la prueba pericial psicológica practicada en autos y, al estimar que existen contradicciones en dicho informe y que no es exhaustivo al considerar las consecuencias del cambio de custodia, revoca el fallo de primera instancia y mantiene la custodia individual. Arguye, además, que no se tiene en cuenta las consecuencias que se producirán respecto a la separación del menor A y su hermano de madre, de casi dos años de edad, con el que está especialmente vinculado, expresando que "*no se entiende la causa que pueda motivar su separación en estos momentos, alterando su vida cotidiana, en la que se encuentra plenamente adaptado, y que requiere pautas y rutinas estables*".

Esta argumentación revela que no se ha aplicado correctamente el precepto legal que se invoca en el motivo, y que ha sido efectivamente infringido en la sentencia de instancia. El punto de partida no ha de ser el mantenimiento de la vida cotidiana del menor, aunque se encuentre plenamente adaptado a la situación anterior, sino la facultad que el legislador ha otorgado al progenitor no custodio para incorporarse a la guarda y atención del hijo, mediante la custodia compartida.

La Sala comprende que, en esta situación transitoria en la que se tramitan procesos de modificación de medidas adoptadas en sentencias de separación o divorcio, pueden producirse situaciones de cambio en la vida habitual de los menores para adaptarse a la nueva situación, pero ello resulta de la aplicación de la ley y deberá llevarse a cabo, con las medidas de prudencia y apoyos que en cada caso resulten necesarios, para la plena efectividad de la custodia compartida.

Procede, en consecuencia, la estimación del motivo.

QUINTO.- El segundo motivo del recurso de casación se interpone por infracción de lo dispuesto en el art. 80.4 del CDFA que, tras otras normas referidas a la procedencia de la custodia compartida o individual, establece que "*salvo que las circunstancias lo justifiquen específicamente no se adoptarán soluciones que supongan la separación de los hermanos*".

Habiendo sido estimado el primer motivo del recurso, no es preciso entrar a considerar el segundo. No obstante, la Sala entiende necesario argumentar respecto a los razonamientos efectuados en la sentencia acerca de esta cuestión, en cuanto son razones que condujeron a la Audiencia a revocar la sentencia de primera instancia.

En el caso de autos consta acreditado que Dª Amalia T E, tras el divorcio de su cónyuge, entabló una nueva relación de pareja y ha tenido un hijo, que en la fecha de la sentencia de segunda instancia tenía casi dos años de edad. Este niño convive en el domicilio de su madre con A, y la prueba pericial practicada muestra efectivamente una cordial relación fraternal, en cuanto que A se muestra cariñoso y protector con su hermano, cuya presencia favorece su desarrollo y evolución, pues a través de ese rol fraterno se le fomentan pautas de responsabilidad, protección y autocontrol.

El precepto establecido en el art. 80.4 del CDFA está concebido para evitar la separación de los hermanos de doble vínculo, nacidos del matrimonio o de la relación de pareja de hecho existente entre quienes posteriormente han roto dichos vínculos. Considerarlo de otro modo excedería del propósito del legislador, y resultaría de imposible cumplimiento en el caso en que cada uno de los anteriores consortes hubiera accedido a una nueva relación sentimental y tuviese hijos habidos con sus nuevas parejas.

No obstante, entre las circunstancias a considerar en el momento de tomar la decisión en beneficio del menor también deberán incluirse las referidas a su convivencia con hermanos nacidos tras dicha ruptura. En el caso de autos, el establecimiento de la custodia compartida que se demanda no será obstáculo para que el joven A se relacione con su hermano de madre, tanto en el período en que corresponda a ésta la custodia, como en el que sea el padre el custodio del menor, ya que existe un plan de relaciones que incluyen visitas al progenitor no custodio, y es igualmente posible que el hermano menor pueda relacionarse con A en el domicilio en el que éste viva.

SEXTO.- Consecuencia de lo expuesto en los precedentes fundamentos ha de ser la estimación del recurso de casación, lo que da lugar a casar y anular la sentencia recurrida. Esta Sala, asumiendo la instancia, acuerda confirmar íntegramente el fallo de la sentencia recaída en primera instancia, que estimó en lo sustancial la demanda interpuesta, en cuanto aplicó correctamente las normas citadas en los precedentes fundamentos y resolvió conforme a ellas las pretensiones deducidas.”

***** Sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Calatayud de 29 de noviembre de 2012. Custodia compartida. Superior interés del menor. Ampliación del régimen de visitas. Pensión alimenticia**

"PRIMERO.- La parte actora ejercita en su demanda acción de de divorcio, e interesa que se fije un régimen de guarda y custodia compartida respecto de los dos hijos menores habidos durante el matrimonio, por periodos semanales, no atribuyendo el uso y disfrute de la vivienda familiar a ninguno de los cónyuges, ni fijándose cantidad alguna en concepto de alimentos.

La parte demandada se opone a las pretensiones ejercitadas de contrario, interesando que se otorgue la guarda y custodia de ambos menores a la madre, siendo compartido el ejercicio de la patria potestad, y fijando una pensión alimenticia para cada uno de los hijos de 325 euros mensuales a abonar por el padre. Interesa que se mantenga el mismo régimen de visitas que fue acordado en el auto de medidas provisionales. Igualmente, interesa que se atribuya el uso y disfrute de la vivienda a la madre junto con los hijos menores, así como el uso del monovolumen que actualmente se encontraría en posesión de la parte actora. Respecto de esto último, plantea la esposa que durante las vacaciones, el uso del monovolumen se atribuya al progenitor que en ese momento tenga a los niños en su compañía.

El Ministerio Fiscal se opone a que se fije un régimen de guarda y custodia compartida a favor de ambos progenitores.
Entiende que debe continuar la madre ejerciendo la guarda y custodia de ambos hijos menores, si bien interesa la posibilidad de que la semana que le corresponda al padre disfrutar de sus hijos, la estancia del fin de semana se alargue, desde el jueves a la salida del colegio, hasta el lunes a la entrada al colegio.
Interesa se mantenga la misma pensión alimenticia que se fijó en el auto de medidas provisionales.

SEGUNDO.- Se dan los requisitos establecidos en el artículo 86 CC para decretar el divorcio y la consiguiente disolución del vínculo matrimonial, teniendo en cuenta que han trascurrido más de tres meses desde la celebración del matrimonio.

TERCERO.- La cuestión litigiosa principal se centra en el régimen de guarda y custodia que procede en relación con los dos hijos menores, que contarían actualmente con cinco años de edad.

En la Exposición de Motivos del Código del Derecho Foral de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2011 de 22 de marzo del Gobierno de Aragón se hace constar que *"esta Ley, respondiendo a una importante demanda social, ha supuesto un cambio de esquema tradicional, al configurar la custodia compartida frente a la individual como norma preferente en los supuestos de ruptura de la convivencia entre los padres y en ausencia de pacto de relaciones familiares. Con este cambio se ha pretendido favorecer el mejor interés de los hijos y promover la igualdad entre los progenitores".*

El artículo 80.2 del citado texto legal aboga por un régimen de guarda y custodia compartida con carácter preferente al régimen de guarda y custodia individual, salvo que ésta sea más conveniente, teniendo en cuenta el plan de relaciones familiares que deberá presentar cada uno de los progenitores.
Por lo tanto, si bien la legislación se decanta con carácter general por un régimen de guarda y custodia compartida, sin embargo, el superior interés del menor es el que debe dirigir la decisión judicial a la hora de fijar el régimen de guarda y custodia más conveniente.

En este sentido, la SAP de Zaragoza de 6 de septiembre de 2011, establece que *"en cuanto a la guarda y custodia, debe indicarse que esta Sala tiene declarado que el Código del Derecho Foral de Aragón aprobado por Decreto legislativo 1/2011 de 22 de Marzo (LA LEY 5705/2011) del Gobierno de Aragón en su subsección 4ª (Art. 79 y ss) al regular las relaciones familiares tras la ruptura de la convivencia de los padres, a falta de pacto de relación familiar, establece una serie de normas entre las cuales ha establecido como preferencia legal la custodia compartida, al considerar que esta forma de custodia es más beneficiosa para el interés del menor y más respetuosa con los derechos de los progenitores, lo que implica que al estar configurada como regla general, el juez podrá optar por la individual cuando sea más conveniente para el menor, justificando adecuadamente esta opción, ello no implica que la custodia compartida opere de manera automática, sino que en caso de solicitarse por uno de los progenitores la custodia individual deberá realizarse el necesario estudio de los factores que señala la propia normativa y con máximo respeto al principio básico o fundamental e inspirador de la norma que es el beneficio e interés de los hijos menores de edad, tal como indica el art. 76.2 del Código del Derecho Foral en línea con lo proclamado igualmente por el art. 39 CE (LA LEY 2500/1978). L.O 1/1996 de 15 de enero (LA LEY 1853/1996) sobre protección jurídica del menor, Convención de los Derechos del niño de 1989, Carta Europea de los Derechos del Parlamento de Europa, Ley Aragonesa de la Adolescencia e Infancia y STC 114/1992 (LA LEY 1975-TC/1993), 143/1990 (LA LEY 1550-TC/1990) y 141/2000 (LA LEY 8805/2000) entre otras. Igualmente en la citada Sentencia del T.S.J.A. se indica expresamente que el legislador aragonés, al promulgar la Ley 2/2010, de 26 de mayo (LA LEY*

11829/2010), ha modificado sustancialmente el régimen legal antes existente para los casos de ruptura de la convivencia de los padres, para establecer, de modo preferente, el sistema de custodia compartida respecto de los menores. Así resulta del propio Preámbulo de la Ley 2/2010, del conjunto de sus normas y, especialmente, de los preceptos hoy contenidos en los arts. 75.2 y 76 y 80.2 del Código del Derecho Foral de Aragón (en lo sucesivo, CFA)".

La misma sentencia, continúa diciendo que "p*or otra parte, para la adopción de la custodia compartida el Juez ha de tener en cuenta el plan de relaciones familiares. Conforme al art. 80.2 , el Juez adoptara de forma preferente la custodia compartida en interés de los hijos menores, salvo que la custodia individual sea más conveniente, teniendo en cuenta el plan de relaciones familiares que deberá presentar cada uno de los progenitores. Este plan es trámite necesario, como propuesta del modo de establecer las relaciones familiares a partir del momento de la ruptura, aunque su contenido no es vinculante para el Juez.*

En cuanto a la decisión de adoptar, el Preámbulo de la Ley 2/2010 recuerda que "el juez deberá motivar su decisión teniendo en cuenta el plan de relaciones familiares y los factores a los que se refiere la ley, como a edad de los hijos, el arraigo social y familiar de los hijos, la opinión de los hijos, la aptitud y la voluntad de los progenitores para asegurar la estabilidad de los hijos o las posibilidades de los padres de conciliar su vida familiar y laboral".

En aplicación de la jurisprudencia anteriormente expuesta, procede analizar las circunstancias concurrentes en el presente supuesto a efectos de determinar el régimen de guarda y custodia más conveniente para ambos menores.

CUARTO.- En el momento actual, los menores tendrían cinco años, siendo la madre quien ostenta la guarda y custodia de ellos, y por tanto, quien atiende sus necesidades básicas diarias.

El padre pone de manifiesto que su horario laboral le permitiría hacerse cargo plenamente de sus hijos la semana que tuviera la guarda y custodia de éstos, puesto que trabajaría a turnos de mañana, tarde y noche, a semanas alternas, y con flexibilidad para cambiar turnos con otros compañeros.

Existe cierta controversia entre las partes en cuanto a la conducta del padre en relación con el cuidado de los niños, en tanto la madre alega que ha sido ella la que se ha ocupado en mayor medida del cuidado de ambos menores, siendo ayudada en ocasiones por el padre, quien ha tenido gran parte de su tiempo ocupado en otro tipo de actividades ajenas al hogar familiar. En relación con el momento presente, alega la madre que tendría constancia de que ambos

menores pasarían la mayor parte del tiempo que están con su padre en el domicilio de sus abuelos paternos, con éstos.

NO obstante, no existe constancia de que lo manifestado por la madre sea cierto, puesto que no se ha explorado por esta juzgadora a los menores, por no considerarlo conveniente habida cuenta su corta edad, y a que la Psicóloga del Equipo Psicosocial, que sí que ha examinado a ambos menores, ninguna manifestación hace al respecto. Todo lo contrario, la citada psicóloga apunta que ambos menores mantienen buenas relaciones con los miembros de su entorno familiar, tanto paterno como materno, y que ambos menores conservarían una positiva imagen de cada uno de los padres, teniendo con cada uno de los establecidos satisfactorios procesos de identificación parental.

En relación con esta última cuestión, debe aclararse que el hecho de que los abuelos ayuden a los padres al cuidado y atención de sus hijos, no sólo es una práctica normal y habitual, máxime cuando los padres trabajan, sino que es una práctica beneficiosa para los niños, que mantienen una relación constante con sus abuelos. NO es lo mismo que los abuelos ayuden a los padres al cuidado de sus hijos, que que sean los abuelos quienes asuman la crianza de sus nietos. Si bien esto último sí sería reprochable a los padres, no así lo primero.

Los informes psicológicos elaborados por M y MA, respecto de la esposa y el esposo, respectivamente, ponen de manifiesto que ninguno de los dos presentaría ningún tipo de alteración psicopatológica que les impidiera ejercer la guarda y custodia de ambos menores con normalidad.

Mª, tras entrevistarse con los progenitores y sus abuelos, y tras analizar la situación laboral y social de los progenitores y del entorno familiar, entiende que se considera idónea la guarda y custodia compartida. No obstante, si bien es cierto que entiende dicha trabajadora social que el sistema de guarda y custodia compartida sería adecuado, sin embargo, no se plantea como se materializaría en el caso concreto.

Resultan clave a la hora de valorar el régimen de guarda y custodia más conveniente para los menores, los informes emitidos por la trabajadora social y la psicóloga del Equipo Psicosocial adscrito al Juzgado.

La trabajadora social, A, tras entrevistarse con ambos progenitores por separado, concluye que ambos progenitores pueden estar capacitados para poder ostentar la guarda y custodia de sus hijos. No obstante, entiende que hasta que los menores cumplan seis años, la guarda y custodia debería seguir ostentándola la madre, y a partir de que los menores cumplan seis años, podría empezar a llevarse a cabo un régimen de guarda y custodia compartida por periodos semanales como mínimo.

No obstante, a preguntas de esta juzgadora, la trabajadora social manifestó que entendía que la guarda y custodia compartida por periodos semanales sería adecuada para los menores, tal como propone el padre, si bien, manifestó que al ser periodos tan pequeños, y en atención a la corta edad de los niños, resultaría conveniente que los menores se quedaran en el mismo domicilio, y que fueran los progenitores quienes "entraran y salieran", según a quien le correspondiera ostentar la guarda y custodia. A continuación, la trabajadora social manifestó que esto último no era viable en el supuesto que nos ocupa, puesto que compartir vivienda por ambos cónyuges requeriría como presupuesto una relación cordial y de entendimiento entre ambos, lo cual no se daría en el presente supuesto. Por lo tanto, si bien es cierto que la trabajadora social considera que ambos progenitores están capacitados para ejercer la guarda y custodia de sus hijos, y que podría fijarse un régimen de guarda y custodia compartida, sin embargo, a la hora de aplicarlo al supuesto concreto, surgen problemas que podrían dificultar dicho régimen de guarda y custodia.

La psicóloga, I, por el contrario, aconseja que no se produzca ningún cambio en el régimen de guarda y custodia. A diferencia del resto de profesionales que habrían intervenido en el procedimiento, I sí que se entrevista con los menores, además de con los progenitores.

La psicóloga apunta en su informe (página 3) que no se han puesto de manifiesto en los niños deseos de establecer modificaciones en sus condiciones cotidianas de vida, estando contentos con la forma y modo de distribución del tiempo entre sus progenitores. Así mismo, hace constar que ambos menores habrían manifestado su preferencia y deseo de continuar viviendo de forma cotidiana con su madre, a la cual se encontrarían especialmente unidos.

Por otro lado, la psicóloga hace constar que la solicitud paterna de que los menores permanezcan en periodos semanales alternos con cada uno de sus progenitores, respondería más a los deseos y formas de estructuración del tiempo de el padre en función de sus necesidades y circunstancia laborales, que al planteamiento de una alternativa que permita una mayor estabilidad y bienestar en la vida cotidiana de sus hijos o a un alternativa que permitiera cubrir la existencia de carencias efectivas y de cuidados en los menores que se pueden resolver con esta organización.

Por todo lo expuesto, la psicóloga proponer mantener el mismo régimen de guarda y custodia de los menores, así como el régimen de visitas establecidas en el auto de medidas provisionales, haciendo más partícipe al padre de los cuidados de sus hijos, en atención a sus horarios laborales.

En base a la prueba analizada en el presente fundamento jurídico, esta juzgadora considera conveniente no modificar el régimen de guarda y custodia, al menos, por el momento. Si bien es cierto que tanto la trabajadora social del

Ayuntamiento como la trabajadora social del Equipo Psicosocial se muestran partidarias de establecer un régimen de guarda y custodia compartida, sin embargo, no puede obviarse que a la hora de ponerlo en práctica, ninguna de ellas parece plantearse los inconvenientes que pueden darse, concretamente, el de compartir vivienda ambos progenitores, que sería lo más conveniente atendiendo a la edad de los menores y a los periodos semanales.

Por el contrario, la psicóloga plantea un régimen de guarda y custodia individual a favor de la madre, si bien propone una participación más activa del padre en el cuidado de sus hijos en atención a su trabajo, que fomentaría la relación paterno-filial y proporcionaría a los menores estabilidad en sus condiciones cotidianas de vida. Dicha estabilidad, entiende esta juzgadora que no se daría en el caso de establecer en este momento un régimen de guarda y custodia compartida.

El padre debe ser consciente de que más importante que compartir el mismo techo con sus hijos, es participar activamente en el cuidado, atención y educación de éstos, no siendo necesario para ello fijar un régimen de guarda y custodia en los términos que interesa en su demanda.

Por todo lo expuesto, se considera que no procede modificar el régimen de guarda y custodia, que deberá seguir ostentándola la madre, si bien sí que procede introducir alguna modificación en el régimen de visitas, en el sentido de ampliarlo a favor del padre.

CUARTO.- En base a lo expuesto en el fundamento jurídico anterior, se fija el siguiente régimen de visitas:

-Fines de semana alternos, desde el viernes a la salida de colegio, o desde las 16.30 horas, en el caso de que no sea día escolar, y hasta el lunes a la entrada al colegio, o hasta las 10.00 horas, en el caso de que no sea día escolar.
Los fines de semana que corresponde disfrutar al padre coincidirán siempre con aquellos en los que éste no trabaje.

-Martes y jueves, desde la salida de colegio, o desde las 16.30 horas, en el caso de que no sea día escolar, y hasta las 20.30 horas, siempre que el horario laboral del padre lo permita.
El padre deberá devolver a los niños al domicilio materno con las rutinas cotidianas realizadas (ducha, cena y deberes escolares).

-El padre podrá llevar a sus hijos al colegio por la mañana las semanas que no trabaje, así como las semanas que trabaje en turno de tarde, y por lo tanto no pueda estar con sus hijos los días intersemanales establecidos.

Así mismo, siempre que la madre no pueda encargarse de los niños por motivos laborales, deberá contar con el padre en primer lugar, antes que con cualquier otra persona. En estos casos, siempre que el horario laboral del padre se lo permita, el padre podrá estar con sus hijos. Así, las semanas que la madre trabaje por las tardes, teniendo en cuenta que sale de trabajar a las 18 horas, según informó Z, empresa para la que trabaja, el padre podrá ir a recoger a los niños al colegio y tenerlos en su compañía hasta el regreso de la madre (18.30 horas). En el caso de que el padre no pueda hacerse cargo de sus hijos, lo comunicará a la madre con al menos 48 horas.
Evidentemente, se excepcionan los martes y los jueves, en los que la devolución es a las 20.30 horas, como ya se ha manifestado anteriormente.
Para facilitar lo anterior, cada uno de los progenitores hará entrega al otro de su calendario laboral, con los turnos (mañana, tarde y noche). De este modo, la madre tendrá conocimiento con la antelación suficiente de las semanas que el padre se encargará de llevar a los niños al colegio por la mañana, así como de recogerlos cuando ella trabaje en turno de tarde. Por otro lado, y en relación con el padre, éste tendrá conocimiento de qué semanas podrá ir a buscar a sus hijos al colegio por la tarde y tenerlos hasta la llegada de la madre al domicilio familiar.
Si cualquiera de ellos, realizara un cambio de turno con un compañero, lo avisará con 48 horas de antelación al otro progenitor, salvo situaciones excepcionales.
Debe tenerse en cuenta que el hecho de que ambos progenitores se sirvan de los abuelos para cumplir el régimen de visitas expuesto no debe considerarse como un factor negativo, como se ha manifestado anteriormente. Cada progenitor debe comprender que en ocasiones es necesaria ayuda de terceras personas, y que el diálogo y la comprensión entre ambos, no sólo facilitará la relación entre ambos, sino que redundará en beneficio de ambos menores, los cuales no serán perceptores de una situación constante de conflicto.

-Vacaciones de Navidad y Semana Santa se dividirán en dos periodos iguales, correspondiendo a la madre elegir los años pares y al padre los años impares.

-Vacaciones de Verano se distribuirán en periodos de quince días que los progenitores disfrutarán alternativamente, correspondiendo a la madre elegir los años pares y al padre los años impares.

Las entregas y recogidas de ambos menores que no tengan lugar en el centro escolar, se efectuarán en el domicilio materno.

QUINTO.- La parte demandada interesa se fije una pensión alimenticia de 325 euros para cada uno de los hijos.
El Ministerio Fiscal, interesó se mantuviera la misma pensión alimenticia que se fijó en el auto de medidas provisionales.

Como establece el artículo 76 del Código de Derecho Foral en su apartado primero, *"la ruptura de la convivencia de los progenitores no afectará a los derechos y obligaciones propios de la autoridad familiar"*.
El artículo 65, apartado primero, letra b), establece que la crianza y educación de los hijos comprende para quienes ejercen la autoridad familiar la obligación de proveer a su sustento, habitación, vestido y asistencia médica, de acuerdo con sus posibilidades.
A manifestó en el acto del juicio que los menores tenían unos gastos fijos de 96 euros por comedor y 21 euros de natación, cada uno de ellos. Así mismo, manifestó tener unos ingresos mensuales de 600 euros aproximadamente, lo cual se acredita con las nóminas que aporta.
L, manifestó tener unos ingresos mensuales de aproximadamente 1.500 euros, lo cual se acredita con los extractos de cuenta aportados por la parte demandada en el acto de la vista. Tiene unos gastos fijos por alquiler de vivienda de 250 euros.
Teniendo en cuenta la edad de los niños, y los gastos propios de unos niños de la edad de D e I, así como la situación económica del padre, se considera excesiva la cantidad reclamada por la madre de 325 euros mensuales por cada uno de los menores, considerándose adecuada la cantidad de 250 euros mensuales por menor.
Dicha cantidad deberá actualizarse conforme a los incrementos del IPC anualmente, y se ingresara del mismo modo que ha venido haciéndose hasta ahora.
Los gastos extraordinarios se abonarán por mitad entre ambos progenitores, en los mismos términos que se estableció el auto de medidas provisionales.

SEXTO.- La parte actora interesa que la vivienda familiar se ponga a la venta, no atribuyéndose el uso y disfrute de la misma a ninguna de las partes.
La parte demandada interesa que le sea atribuido a ella y a sus hijos el uso y disfrute de la vivienda.
El artículo 81 del Código de Derecho Foral establece en su apartado segundo que *"cuando corresponda a uno de los progenitores de forma individual la custodia de los hijos, se le atribuirá el uso de la vivienda familiar, salvo que el mejor interés para las relaciones familiares aconseje su atribución al otro progenitor"*.
El apartado tercero establece que *"la atribución del uso de la vivienda familiar a uno de los progenitores debe tener una limitación temporal que, a falta de acuerdo, fijará el Juez teniendo en cuenta las circunstancias concretas de cada familia"*.
El apartado cuarto continúa diciendo que *"cuando el uso de la vivienda sea a título de propiedad de los padres, el Juez acordará su venta, si es necesaria para unas adecuadas relaciones familiares"*

Según reza la ley, la atribución del uso y disfrute de la vivienda conyugal a uno de los progenitores debe de ser temporal, pudiendo incluso acordarse la venta de la vivienda si se estima que es necesaria.
En el presente supuesto, no constan acreditadas unas circunstancias especiales que aconsejen que se lleve a cabo la inmediata venta de la vivienda familiar.
La parte actora tiene un trabajo fijo y tiene unos ingresos suficientes para afrontar el pago de alquiler, así como el pago de las pensiones alimenticias.
La parte demandada vive en la vivienda familiar con sus dos hijos menores, de cinco años de edad y tiene unos ingresos mensuales acreditados de 600 euros aproximadamente.
Teniendo en cuenta que los menores se encuentran en plena niñez, y por tanto, en plena formación, y que la situación económica de la madre es muy limitada, se considera adecuado que el uso de la vivienda se prolongue hasta la mayoría de edad de los menores.
El préstamo hipotecario, así como los gastos derivados de la titularidad de la vivienda, se seguirá abonando por mitad por ambos cónyuges.

En relación con los vehículos, se considera conveniente no modificar la situación de hecho actual, de modo que se atribuye al esposo el uso y disfrute del mono volumen y a la esposa el uso y disfrute del Seat Ibiza.
Si bien la parte demandada alega la necesidad de que se le atribuya el mono volumen para poder transportar a los niños, sin embargo, no debe obviarse que no es necesario un mono volumen para transportar a unos niños, los cuales pueden viajar perfectamente en otro tipo de vehículo.”

***** Sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Calatayud de 3 de diciembre de 2012. Custodia compartida. Plazo de revisión del covenio regulador. Necesidad de cambio de circunstancias. Opinión de los menores**

"PRIMERO.- La parte actora ejercita en su demanda acción de modificación de las medidas que fueron acordadas en sentencia de fecha 6 de julio de 2009, en concreto el régimen de guarda y custodia que fue establecido en la citada sentencia, en la que se atribuyó la guarda y custodia de ambos hijos menores a la madre, fijando un régimen de visitas a favor del padre.
El padre interesa en su demanda de modificación de medidas que se fije un régimen de guarda y custodia compartida por periodos de un mes, alegando que en los domicilios de ambos progenitores contarían con dependencias propias de un hogar familiar, teniendo sus propias habitaciones con todo lo necesario para el desarrollo de un tipo normal y habitual de vida
Invoca la parte actora la normativa del Código del Derecho Foral de Aragón, que prioriza el régimen de guarda y custodia compartida en interés de los hijos menores, salvo que la individual sea más conveniente.

La parte demandada se opone a las pretensiones ejercitadas de contrario, alegando que la acción de revisión del convenio regulador habría caducado, ya que el Código de Derecho Foral de Aragón prevé el plazo de un año para la revisión de los convenios a partir del 8 de septiembre de 2010, habiéndose interpuesto la demanda el 13 de diciembre de 2011. Entiende la parte demandada que el cambio de régimen de guarda y custodia sólo podría venir motivado por el cambio de las circunstancias que fueron tenidas en cuenta para acordar las medidas que fueron aprobadas por sentencia de divorcio, lo cual no habría tenido lugar.
Finalmente, entiende la parte demandada que el régimen de guarda y custodia individual a favor de la madre se fijó en sentencia teniendo en cuenta el interés de ambos menores, que debería prevalecer en todo caso.

El Ministerio Fiscal se opone a que se fije un régimen de guarda y custodia compartida a favor de ambos progenitores.
Entiende que debe continuar la madre ejerciendo la guarda y custodia del hijo menor, si bien debe fomentarse las relaciones paterno-filiales, ampliando el régimen de visitas, en el sentido de fijar dos días intersemanales desde la salida del colegio o de la actividad extraescolar que realicen, y hasta las 20.30 horas, así como los fines de semana que corresponda al padre disfrutar de sus hijos, desde el jueves hasta las 19.30 horas del domingo.
Igualmente, interesa que se mantenga la misma pensión alimenticia.

SEGUNDO.- La cuestión litigiosa se centra en determinar si procede modificar el régimen de guarda y custodia que se fijó en sentencia de divorcio, así como la pensión alimenticia, en el caso de no modificar el régimen de guarda y custodia.
El artículo 79.5 del Código del Derecho Foral de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2011 de 22 de marzo del Gobierno de Aragón establece que *"las medidas aprobadas judicialmente podrán ser modificadas cuando concurran causas o circunstancias relevantes"*.
En el presente supuesto, se fijó en sentencia de divorcio un régimen de guarda y custodia individual, a favor de la madre, solicitando el padre en la presente litis se fije un régimen de guarda y custodia compartida.
En la Exposición de Motivos del Código del Derecho Foral de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2011 de 22 de marzo del Gobierno de Aragón se hace constar que *"esta Ley, respondiendo a una importante demanda social, ha supuesto un cambio de esquema tradicional, al configurar la custodia compartida frente a la individual como norma preferente en los supuestos de ruptura de la convivencia entre los padres y en ausencia de pacto de relaciones familiares. Con este cambio se ha pretendido favorecer el mejor interés de los hijos y promover la igualdad entre los progenitores"*.

El artículo 80.2 del Código de Derecho Foral establece que *"el juez adoptará de forma preferente la custodia compartida en interés de los hijos menores, salvo que la custodia individual sea más conveniente, teniendo en cuenta el plan de relaciones familiares que deberá presentar cada uno de los progenitores y atendiendo, además, a los siguientes factores: a)La edad de los hijos; b)El arraigo social y familiar de los hijos; c) La opinión de los hijos siempre que tengan suficiente juicio y, en todo caso, si son mayores de doce años, con especial consideración a los mayores de catorce años; d)La aptitud y voluntad de los progenitores para asegurar la estabilidad de los hijos; e) Las posibilidades de conciliación de la vida familiar y laboral de los padres; f) Cualquier otra circunstancia de especial relevancia para el régimen de convivencia"*.

La sentencia de divorcio que ahora se pretende modificar es de fecha 6 de julio de 2009.
Lo cierto es que, tal como alega la parte demandada en su contestación a la demanda, desde que se dictó la citada sentencia, en la que se fijó de común acuerdo por ambos cónyuges un régimen de guarda y custodia a favor de la madre, no se habría producido ningún cambio de circunstancias, a excepción de la edad de los hijos.
Ambos progenitores tendrían el mismo trabajo, y por lo tanto su horario laboral no se habría visto modificado.

La madre trabajaría en turnos de mañana (de 8 a 15 horas), a excepción de los jueves, que trabajaría también de tarde (de 17 a 19.45 horas), de noviembre a abril.
El padre trabajaría a turnos de mañana (de 6 a 14 horas), tarde (de 14 a 22 horas) y de noche (de 22 a 6 horas), incluyendo fines de semana y festivos.

J y JA, de doce y trece años de edad, respectivamente, fueron muy claros cuando en la exploración judicial se les preguntó por sus preferencias. Ambos manifestaron su deseo de continuar con el mismo régimen de guarda y custodia, y rechazaron un régimen de guarda y custodia compartida.
Ambos menores manifestaron que se encontraban más cómodos en casa de su madre, y ambos pusieron de manifiesto que la relación de ellos con la pareja de su padre no sería buena.

Los informes del Equipo Psicosocial son coincidentes, al considerar que no procede modificar el régimen de guarda y custodia.
La trabajadora social hace constar en su informe que "*en el momento de la entrevista, los niños han manifestado que está bien con ambos progenitores, pero prefieren estar con su madre, pudiendo relacionarse con su padre a través de un amplio sistema de visitas y de llamadas telefónicas a sus móviles de forma libre. Opinan que ahora ya se han adaptado a la nueva situación pero siguen sin relacionarse con la pareja de su padre*".
La citada trabajadora social concluye que "*con el fin de favorecer la estabilidad de los niños, sería conveniente que la Sra. T pudiera tener su guarda y custodia y para el Sr. O se podría establecer un amplio sistema de visitas consistente en fines de semana alternos de viernes a lunes, una o dos tarde entre semana y la mitad de vacaciones escolares*".

La Psicóloga aplica el régimen de guarda y custodia compartida que propone la parte actora al caso concreto, y manifiesta que "*en las condiciones del presente grupo familiar en las que el progenitor no tiene disponibilidad personal ni recursos para el cuidado de su hijos en los periodos de tiempo de alternancia en que los niños permanecieran bajo su cuidado, y los menores no desean la introducción de un sistema que implique dicha alternancia, la modificación de las condiciones cotidianas de vida de los menores no respondería a necesidades de los propios menores*".
La Psicóloga apunta que las medidas establecidas en sentencia de divorcio estarían funcionando satisfactoriamente para ambos menores, proporcionándoles estabilidad en sus condiciones básicas de pernocta y domicilio, y permitiendo que ambos menores desarrollen un vínculo satisfactorio con cada uno de sus progenitores. Así mismo, se incide en que los menores no demandarían ningún cambio y se encontrarían contentos con su modo de vida actual, por lo que cualquier modificación, al ser rechazada por los

menores, podría suponer un elemento de desestabilización que interferiría negativamente en su estado, pudiendo llegar a condicionar incluso la propia relación paterno-filial.

A la vista de las preferencias de ambos menores, manifestadas, no sólo ante el Equipo Psicosocial, sino ante esta juzgadora, y a las circunstancias de trabajo de ambos progenitores, se considera que lo más beneficioso para ambos menores es no modificar el régimen de guarda y custodia establecido en la sentencia de divorcio.
Así mismo, el interés de los menores exige que ambos progenitores adopten una actitud de colaboración en lo relativo a la crianza de sus hijos, facilitando la relación de los menores con el otro progenitor.

TERCERO.- Procede modificar el régimen de visitas en los términos que informa el Equipo Psicosocial, con la finalidad de fortalecer la relación entre el padre y sus hijos.
Se amplía el régimen de visitas en el sentido de fijar dos días intersemanales (martes y jueves) en el que el padre podrá disfrutar de sus hijos, desde la salida del colegio, hasta las 21 horas, que los devolverá en el domicilio materno.
Además, las visitas de fin de semana se alargarán hasta el lunes, al momento de entrada al colegio.
Se deja en vigor los demás extremos del régimen de visitas que se fijaron en sentencia de divorcio.

El régimen de visitas se fija sin perjuicio de que los progenitores de mutuo acuerdo, y siempre contando con las opiniones de ambos menores, puedan establecer las modificaciones que estimen oportunas en cuanto a los días y horas.

QUINTO.- Respecto de la pensión de alimentos, y habida cuenta la no modificación del régimen de guarda y custodia, y no habiéndose producido ningún cambio de circunstancias desde que se acordó, procede mantener la misma pensión alimenticia que se fijó en su día en la sentencia de divorcio, con las actualizaciones que se hayan aplicado desde entonces.”

***** Auto de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 12 de diciembre de 2012. Cambio de titular de la potestad de guarda. Urgencia**

"PRIMERO.- Recurre D. Victor-Manuel el Auto dictado en la instancia el 12 de Junio de 2012, suplicando su revocación y se estime la demanda de medidas cautelares de carácter urgente por él formulada, "y, subsidiariamente, se fije entre él y su hijo el régimen de visitas propuesto por los informes periciales practicados en estas actuaciones", con fundamento en infracción de los Arts. 79-3 del Código de Derecho Foral de Aragón y 158 del Código Civil.

SEGUNDO.- Pese al enunciado anterior el recurso se basa con carácter implícito en error valorativo de la prueba practicada, por entender el recurrente que el bienestar y correcto desarrollo del hijo menor de los litigantes, requiere un inmediato cambio de custodia del mismo a favor del padre, al estar siendo mediatizado por la madre y negarse a visitar a su padre y resto de familia paterna, lo que está afectando a su estabilidad física y psicológica.

El hijo menor C, nació en Zaragoza el 2001, cuenta ahora con 10 años de edad, próximo a cumplir 11.

La demanda de medidas cautelares se formuló el 14 de Mayo de 2012, tras la adopción de medidas civiles en el curso de proceso penal incoado y seguido en el Juzgado de Violencia Nº. 1 de Zaragoza, con base en las perturbaciones dañosas que la madre causa en el menor y para evitar su manipulación, solicitándose la atribución de la custodia del menor para el padre.

Existe en trámite proceso de divorcio entre los litigantes en el Juzgado de Familia.

La Juzgadora, dado el carácter urgente de las medidas solicitadas y el interés del menor, acordó continuar con su tramitación hasta su resolución (providencia de 28 de Mayo de 2012 al folio 50), sin perjuicio de ventilar la cuestión de competencia en el proceso principal de divorcio en trámite, razones que avalan el rechazo de los argumentos de nulidad vertidos por la parte apelada en su escrito de oposición al recurso.

TERCERO.- La prueba pericial psicosocial practicada viene a refutar la conveniencia y en especial la urgencia de la adopción de las medidas solicitadas por el Sr.

La trabajadora social desaconseja el cambio de custodia pretendido, apreciando poca empatía del Sr. hacia las dolencias o incapacidades del menor y de la Sra., observando que ambos litigantes están polarizados sobre las exigencias educativas del niño.

La Sra. Psicóloga efectúa la misma conclusión señalando la necesidad de que el padre proteja a su hijo y priorice su bienestar.

En un contexto de fuerte enfrentamiento entre los cónyuges tras la ruptura de hecho, con sucesivas y varias denuncias ante los tribunales, el menor presenta ciertos problemas académicos que el padre no acepta y psicológicos (acude al servicio de Psiquiatría del Hospital Clínico) por ansiedad.

No se revela tras lo expuesto ni la conveniencia del cambio de custodia y visitas solicitado, ni la urgencia en la adopción de tales medidas, máxime existiendo en trámite el proceso de divorcio, en el que con carácter firme se resolverán dichas cuestiones, una vez examinadas las pruebas practicadas, y sin la premura y provisionalidad propia de incidentes como el que nos ocupa.

En suma, procede confirmar el Auto impugnado, por sus propios y acertados fundamentos, en todos sus términos.”

***** Auto del Tribunal Superior de Justicia de 17 de diciembre de 2012. Custodia compartida. Exclusión. Motivación**

"PRIMERO.- Fundado el recurso por infracción procesal en la inobservancia de normas legales que rigen los actos y garantías del proceso susceptibles de provocar nulidad de actuaciones o ser causantes de indefensión, y basado el recurso de casación, también presentado, en la infracción de normas de Derecho Civil Aragonés, es competencia de esta Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón el conocimiento de la impugnación que se efectúa, lo que procede declarar así conforme a los artículos 63 del Estatuto de Autonomía de Aragón y 473, 478 y 484 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

SEGUNDO.- La falta de motivación en la que la parte recurrente fundamenta el recurso por infracción procesal se alega con base en la genérica consideración de que "ambas sentencias, la de instancia y la de Apelación, contienen una insuficiente motivación sobre la Custodia compartida, sobre la improcedencia o improcedencia de su aplicación en este caso y, sobre todo, sobre las bases legales que preferentemente obligan a la misma con carácter general". Posteriormente, en el motivo, se argumenta a favor de lo expuesto por reproducción parcial de sentencia del Tribunal Constitucional.

Ante tan genérica impugnación no cabe sino resaltar que el fundamento de Derecho Segundo de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial, que es la aquí recurrida, especifica con claridad qué circunstancias ha valorado para excluir en este caso el posible establecimiento de la custodia compartida. Ante la falta de concreción del recurrente sobre qué extremos entiende que debieron ser tratados y no lo han sido, en la motivación de que se trata, debe estarse, en definitiva a entender que sí existe motivación clara y determinante del sentido del fallo.

Siendo así claramente incorrecta la fundamentación del recurso por infracción procesal interpuesto, la consecuencia no es otra que la de carecer manifiestamente de fundamento, por lo que, en aplicación de lo ordenado en el artículo 473.2.2º de la Ley de Enjuiciamiento Civil debe ser inadmitido.

TERCERO.- Los motivos del recurso de casación interpuesto se fundamentan en la infracción de los artículos 80 y 76 del Código de Derecho Foral de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2011 de Aragón, de 22 de marzo, y en el escrito de recurso son expuestas las razones por las que se considera que tales normas han sido contrariadas por la resolución impugnada, lo que conlleva apreciar que está presente la existencia de interés casacional en la forma

prevista por el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

CUARTO.- En consecuencia con lo expuesto, siendo competente esta Sala, existiendo interés casacional, y no habiendo sido presentado en forma recurso por infracción procesal, procede acordar la admisión del recurso de casación e inadmitir el recurso por infracción procesal”

***** Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 18 de diciembre de 2012. Custodia compartida. Exclusión. Visitas y alimentos**

"PRIMERO.- Solicita el demandado, en primer lugar, se revoque la sentencia dictada y se acuerde que la guarda y custodia de la hija común, nacida el, sea compartida por ambos progenitores.

Alega el recurrente que la sentencia obvia lo dispuesto por el art. 80.2 del Código de Derecho Foral de Aragón (en adelante CDFA) e inaplica el criterio preferente de la custodia compartida, apoyando automáticamente su decisión en las conclusiones del informe de la Psicóloga cuando esta las contradice su propio contenido y se han puesto de relieve varias circunstancias que, siendo en cada caso ignoradas, apuntaban la conveniencia del sistema de guarda y custodia compartida, como son a) la adaptación de la menor a la situación familiar, la inexistencia de carencias de ningún tipo y su buena vinculación afectiva con padre, madre y respectivas familias extensas; b) la disponibilidad horaria que por su escasa ocupación laboral goza el Sr., que comparte su vida con otra persona y sus dos hijos, y han formado una familia en la que está perfectamente integrada y adoptada; c) que el factor que la Psicóloga valora para considerar preferible el sistema de custodia individual –los diferentes estilos educativos de ambos progenitores- no lo ha sido correctamente, pues durante el tiempo transcurrido desde la separación de hecho ha sido más fácil para la madre que para el padre establecer un estilo educativo, no pudiendo ahora culpársele de algo que no ha podido hacer. Y, en definitiva, que no se ha acreditado circunstancia que en la perspectiva de los factores del art. 80.2 CDFA justifique la atribución en exclusiva a la madre de la guarda y custodia de su hija, remarcándose como en el informe de la psicóloga quedó reflejado que la Sra. no tiene la misma disponibilidad que él para cuidar de su hija; que ésta, que vive en y está escolarizada en Zaragoza, en Vía Hispanidad-, siempre tendrá que desplazarse, no pudiendo por tanto penalizarse su residencia en, habiendo pesado más el hecho de que no tenga libre algún fin de semana en verano, que el hecho de que la niña, por el horario liberal de la madre, tenga que levantarse todos los días a las 7 de la mañana, para que aquélla la lleve a casa de los abuelos maternos antes de las 8 –hora en que la madre entra a trabajar- y dejarla allí hasta que a las 9 horas los abuelos la llevan al colegio.

Lo cierto es, sin embargo, por un lado, que la disponibilidad en la que insiste el Sr. no es la que se dice. Relata que su única ocupación y medio de vida son las actuaciones que hace con el grupo musical que montó con uno de los hijos habidos en su anterior matrimonio, insistiendo en que la agenda de actuaciones musicales le permiten tener un horario flexible y conocido con

antelación para atender a la niña, aunque a lo largo de la entrevista son varios pasajes en los que se percibe que compagina esa ocupación con la propia del almacén de material eléctrico en el que trabajó con anterioridad. Por otro, para atender a la menor cuando por motivos de trabajo él no puede hacerlo cuenta de hecho con la ayuda de M, su nueva pareja, así como con sus hijos mayores, padres y hermanos, todos ellos residentes en, desprendiéndose del relato del Sr. la existencia de una pauta de actuación poco participativa y adecuada en los cuidados cotidianos, que se dio ya cuando era pequeña, antes de la separación, evidenciándose en él un estilo educativo indefinido, más tendente a la ausencia de normas, con desconocimiento de las pautas y rutinas cotidianas más acordes con la edad y circunstancias de la hija, sin que el origen de esa diferencia sea el que el Sr. refiere, sino algo más profundo e independiente de las distintas oportunidades que uno y otro progenitor han podido tener para el establecimiento de ese estilo.

La madre, por el contrario, presenta un estilo educativo en el que combina el apoyo emocional con el establecimiento de una normativa adecuada. Muestra una significativa capacidad para establecer vínculos afectivos y/o de apego seguros, fundamentales en el estilo y educación de los hijos. Y goza de disponibilidad y posibilidades de conciliación de la vida personal y familiar. Trabaja desde 2003 como responsable de administración en una empresa del ramo de la construcción, con un horario de 8 a 13 horas por las mañanas y posibilidad de trabajar por las tardes desde casa, lo que le permite atender a su hija, a quien tiene escolarizada en un colegio de Vía Hispanidad, para así poder compaginar su trabajo con una mejor atención a la niña, ya que los abuelos maternos viven muy cerca de ese colegio y son los que se ocupan de llevar y traer a la niña en los horarios en que ella no puede.

Finalizado el estudio de la situación familiar, la psicóloga concluye que el padre no presenta en estos momentos la debida estabilidad en sus condiciones de vida- A nivel laboral los horarios y días de las actuaciones musicales tampoco parece que permitan organizar las rutinas requeridas por una correcta y ordenada crianza de la menor, máxime si se tiene en cuenta que, la pareja del Sr. es la vocalista del grupo. Y, en definitiva, que en estos momentos la Sra. está en mejor disposición de proporcionar a la menor la seguridad y estabilidad que necesita para su mejor desarrollo, aconsejando en esa perspectiva que la menor permanezca con la madre y que el padre disfrute de un sistema de días para poder relacionarse con su hija consistente en fines de semana alternos, desde la salida del colegio los viernes hasta la mañana del lunes en que la llevará al colegio, una tarde entre semana desde la salida del colegio hasta la entrada del colegio al día del colegio, puentes escolares y la mitad de las vacaciones escolares de navidad, Semana santa y Verano.

Esas conclusiones, frente a lo que dice el recurrente, no quedan contradichas por el contenido del informe en el que se sientan. Por lo que, sobre tales bases, siendo los informes psicológicos elemento relevante –art. 80.3 CDFA- a la hora de desplazar el criterio preferente de la custodia compartida por el de custodia individual a favor de uno de los progenitores, es el sistema de custodia individual por la madre el que se revela más adecuado para preservar el superior interés de A, la hija común, como designio al que debe ajustarse toda decisión, resolución o medida que les afecte (art. 76.2 CDFA).

SEGUNDO.- Para el caso de mantenerse la custodia individual a favor de la madre, solicita el Sr. se amplíe el régimen de vacaciones y visitas, de modo que la semana que no le corresponda pasar con la hija el fin de semana, se le conceda la tarde de los martes y jueves, desde la salida del colegio hasta el día siguiente a la entrada al mismo, y que, no existiendo razón alguna para que las vacaciones de verano se limiten a dos quincenas en julio y agosto, se amplíen a la mitad de las vacaciones escolares de la menor, incluyendo la parte de vacaciones de los meses de junio y septiembre. Petición que debe ser desestimada, en lo que se refiere a las vacaciones de verano porque, dada su dedicación profesional, lo que es seguro, no solamente lo presumible, es que la disponibilidad horaria del Sr. padezca en esa época más que en ningún otro momento; y en lo que se refiere a tardes entre semana, porque, dada la distancia entre domicilios -, se estima con el Juez de instancia más adecuada la fijación de una sola tarde, pero con pernocta.

TERCERO.- También para el caso de mantenerse la custodia individual a favor de la actora, solicita el demandado la reducción a 200 € mensuales de la pensión por alimentos que la sentencia señala en cuantía de 350 € mes. La actora, por su parte, impugna la sentencia, pidiendo la elevación de la pensión a 1000 € mensuales. Peticiones que tampoco merecen ser acogidas, pues hay motivos para entender –sus propias manifestaciones ante la Psicóloga- que el Sr. trabaja en el almacén de electricidad que regenta y en la , siendo evidente la capacidad económica que niega cuando es capaz de atender la amortización de los créditos bancarios que afronta, pero, como dice el Juez de instancia, cuya cuantificación se estima prudente y adecuada, no han podido concretarse sus ingresos y, habiéndose puesto de manifiesto deudas a lo largo de toda la convivencia, no existen signos exteriores de riqueza.**”**

***** Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 19 de diciembre de 2012. Custodia compartida. Falta de concreción de los motivos legales que permiten excepcionarla**

"PRIMERO: Por sentencia dictada el día 3 de diciembre de 2008, por el Juzgado de Primera Instancia de Boltaña se acordó la disolución por divorcio del matrimonio formado por las partes de este procedimiento, celebrado el día 19 de mayo de 1990 y en el que el de 2004 había nacido el hijo J.

Acordado en la anterior sentencia el régimen de custodia del menor a cargo de la madre, el día 3 de septiembre de 2010 fue presentada por el padre demanda de modificación de medidas, en solicitud de establecimiento de custodia compartida. Demanda que fue desestimada en tal pretensión por sentencia del día 21 de marzo de 2011 dictada por el Juzgado antes citado.

El día 30 de mayo de 2011 se presentó por el padre, ante el mismo Juzgado, la demanda rectora de este procedimiento, en que solicitaba de nuevo el establecimiento del régimen de custodia compartida del menor, al amparo, en este caso, de la aplicación del artículo 6.2 de la Ley de Aragón 2/2010, de 26 de mayo, de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de los padres, que había entrado en vigor después de presentada la primera demanda de modificación de medidas.

Desestimada esta segunda demanda por sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Boltaña del día 10 de diciembre de 2011 y apelada tal resolución, fue íntegramente desestimado el recurso de apelación por la sentencia ahora recurrida, dictada el día 25 de abril de 2012 por la Audiencia Provincial de Huesca.

SEGUNDO.- Con carácter previo a resolver las cuestiones de fondo recogidas en el recurso de casación presentado, debe ser tratada la causa de inadmisibilidad del recurso que plantea la parte recurrida, con sustento en que lo que se plantea en la impugnación actual "es una nueva valoración de la prueba (interrogatorio de partes pericial y documental), distinta a la efectuada por la Juzgadora a quo e incluso por la Audiencia Provincial, sustituyendo tal valoración por la suya propia".

La generalidad de la afirmación, literalmente expuesta, que pretende fundamentar la posible inadmisibilidad del recurso impide conocer en qué extremos considera realmente la parte recurrida que se introduce nueva valoración de la prueba en este recurso. Además, de la lectura del escrito

impugnatorio resulta que, si bien en él se contienen referencias a la prueba, su base no es esta cuestión, sino las de naturaleza jurídica a las que a continuación se hará referencia.

En consecuencia, procede rechazar la causa de inadmisibilidad propuesta por la parte recurrida.

TERCERO.- La parte recurrente no plantea en su recurso de casación con la suficiente diferenciación los diversos motivos por los que presenta el recurso, pues bajo formulación de un genérico y único motivo de recurso de "Infracción de las normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso" formula luego un total de cinco alegaciones. Tal planteamiento del recurso obliga para su adecuado tratamiento a sistematizar las diversas peticiones ahora, al tiempo de resolverlas en la sentencia, entendiéndose que para mejor resolución debe ser tratada en primer lugar la relativa a cosa juzgada contenida en el extremo 5 del recurso; luego, las enumeradas en los cardinales 1, 3 y 4, conjuntamente por ser todas ellas referidas a posible infracción de la regulación sobre custodia compartida contenida en el artículo 80 del Código de Derecho Foral de Aragón (CDFA en adelante); para luego resolver, si procede, sobre lo propuesto bajo número 2, relativo a las prevenciones de los artículos 76 del CDFA y 11 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

CUARTO.- La sentencia recurrida estimó que se producían los efectos de cosa juzgada respecto de lo ahora enjuiciado, por cuanto, en relación con una previa petición y resolución de modificación de medidas, había sido dictada sentencia el día 21 de Marzo de 2011 por el Juzgado de Boltaña. Así, en su Fundamento de Derecho tercero, se recoge literalmente en la sentencia: "(...) *TERCERO.- 1. Varios son los motivos que nos llevan a confirmar la sentencia. En primer, lugar, que sobre esta cuestión se pronunció el juzgado en fecha anterior y muy reciente, en la sentencia de 21 de marzo de 2011, rechazando la custodia compartida en los términos antes referidos. Aunque declaraba no aplicable la Ley 2/2010, por no estar en vigor al inicio del procedimiento, la realidad es que resolvió de acuerdo a sus previsiones. Y esta decisión no fue recurrida por el demandante, y ahora apelante. En definitiva, se producen los efectos de cosa juzgada, dado que concurre la identidad de personas y de pretensiones, basada en hechos idénticos. No resulta admisible que, por no haber transcurrido el plazo de un año desde la publicación de la Ley cuando se interpuso la segunda demanda, pueda intentarse sucesivamente la revisión del convenio regulador al amparo de la Disposición Transitoria de la tan repetida Ley 2/2010 (...)*"

Ciertamente, si no hubiera sido promulgada la Ley de Aragón 2/2010, de 26 de Mayo, podría estimarse, como hace la sentencia recurrida, que se dieran los requisitos de identidad de sujetos, acción y hechos entre la sentencia dictada el día 21 de Marzo de 2011 y lo que fue luego objeto del enjuiciamiento en la sentencia del día 10 de diciembre de 2011, a raíz de demanda presentada el 30 de marzo de 2011, por lo que habría sido posible la apreciación de existencia de cosa juzgada en los términos establecidos por el artículo 222 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante LEC).

Pero tal conclusión no es admisible ante la publicación de la citada Ley 2/2010 porque, como expresamente ordena en su disposición transitoria primera, la solicitud de custodia compartida por uno de los progenitores es causa de revisión del convenio regulador o de las medidas judiciales adoptadas bajo la legislación anterior, durante un año desde la entrada en vigor de la ley. De modo que, dictada sentencia por el Juzgado de Boltaña el día 21 de marzo de 2011, esto es, antes de entrar en vigor la ley, cualquiera de las partes podía solicitar la revisión de las medidas acordadas en tal sentencia durante un año desde que entró en vigor la ley el día 8 de septiembre de 2010.

Por tanto, fue legítimo que el padre presentara nueva demanda para solicitar el nuevo enjuiciamiento de los mismos hechos y entre las mismas partes pero ahora con arreglo a la nueva legislación.

QUINTO.- Las alegaciones contenidas bajo los epígrafes 1, 3 y 4 del motivo de recurso impugnan los razonamientos contenidos en la sentencia recurrida que se pronunciaron sobre el establecimiento de la custodia compartida o individual en el presente caso. En resumen, entiende la parte recurrente que la decisión judicial infringió la previsión del artículo 80 del CDFA, de ser preferente la adopción de la custodia compartida de los hijos en caso de crisis matrimonial, con desatención al espíritu y finalidad de la Ley 2/2010 y del posterior CDFA.

Como ha sido ya reiterado en diversas sentencias de esta Sala (así, por ejemplo, de 1 de febrero de 2010 o de 15 de diciembre de 2011) el artículo 6 de la Ley de Aragón 2/2010, luego literalmente traspuesto en el artículo 80 del Código de Derecho Foral de Aragón, ordena que el Juez adoptará de forma preferente la custodia compartida, salvo que la custodia individual sea más conveniente al interés del menor. Para valorar la posible conveniencia de la custodia individual deberá el Juez tener en cuenta cuantas circunstancias de relevancia para la convivencia familiar puedan concurrir, y, especialmente, por cita expresa de tal norma, los factores de edad y arraigo social y familiar de los hijos, así como su opinión, y la aptitud y voluntad de los progenitores para

asegurar la estabilidad de los hijos y sus posibilidades de conciliación de la vida familiar laboral de los padres.

En consecuencia, tras la entrada en vigor de la Ley 2/2010, cualquier establecimiento o revisión de medidas de guarda y custodia de menores debe estar a la previsión legal de preferencia del régimen de custodia compartida, puesto que la ley parte de que el interés del menor se consigue mejor con este tipo de custodia, de modo que la individual sólo debe acordarse cuando realmente se considere más conveniente en el caso concreto.

Por tanto, la posibilidad de adopción de la custodia individual exige una cuidadosa valoración de la prueba que la presente, en el supuesto, como más beneficiosa para el menor en lugar de la legalmente preferente custodia compartida. De lo que no cabe sino concluir que si en el caso concreto a resolver no existe, conforme a los criterios establecidos en la ley, la constancia realmente evidenciada de ser mejor para el menor la custodia individual que la compartida, debe estarse a esta última.

SEXTO: En el caso presente, la sentencia recurrida no recoge de modo expreso referencia a los factores indicados como de necesaria valoración conforme al artículo 80 del CDFA. La razón de la decisión se sustenta exclusivamente en la exposición de las afirmaciones contenidas en informe hecho por la asistente social del Instituto de Medicina Legal de Aragón, del que valora especialmente varias circunstancias recogidas por la informante: que el padre tiene un amplio régimen de visitas con flexibilidad al respecto por parte de la madre; que el menor se encuentra más unido a la madre a la que tiene como referencia; o que, siempre en opinión de la asistente social, el menor admite la separación de los padres pero muestra una cierta resistencia en el momento de separación de la madre. Con ello, tras admitir la conclusión del propio informe de que un nuevo cambio puede desestabilizar al menor, concluye que el interés del propio menor, ateniendo a su edad, junto con las circunstancias dichas, acuerda relegar la custodia compartida y mantener la custodia individual de la madre.

Asimismo, y a favor del establecimiento de la custodia individual se invoca el interés del menor de modo genérico en la sentencia recurrida.

Como se desprende de lo antes expuesto, el interés general del menor es el tenido en cuenta por el legislador cuando en el artículo 80 CDFA ordena que su mejor protección tendrá lugar mediante la custodia compartida, por lo que sólo en determinados casos concretos, y por las razones que expone la propia norma, puede excepcionarse. No existe duda alguna que el informe social que sirve de referencia directa e inmediata para la decisión judicial ha sido emitido

por la profesional actuante de modo imparcial y atendiendo el interés del menor, al igual que tal ha sido el único interés que ha dirigido el dictado de la sentencia. Pero no basta con su mera invocación general para posibilitar la fijación de uno u otro sistema de custodia, porque, por lo dicho, salvo concreción en sede jurisdiccional, conforme a las concretas circunstancias ordenadas en la ley, de que por tal interés procede la custodia individual, debe estarse al superior criterio legal de que, con carácter general, es de mejor atención para el menor la custodia compartida, y no la individual.

Pues bien, en este caso, la exposición contenida en la sentencia recurrida no recoge que existan motivos, conforme a los criterios ordenados en el repetido artículo 80 que, de modo claro, concreto, terminante y deducidos de datos contrastables, permitan alterar el establecimiento preferente legalmente previsto de la custodia compartida. Porque se recogen tan sólo las valoraciones de la asistente social, obtenidas mediante meras entrevistas de los progenitores, sin mecanismos de exploración de la voluntad real del niño; y se acepta acríticamente la conclusión del propio informe social de que existe la posibilidad de que un nuevo cambio pueda desestabilizar al menor, concluyendo que esta hipótesis de futuro es muy determinante de la fijación del sistema de custodia individual.

No existe así expresión concreta suficiente sobre los motivos legales que permiten excepcionar el establecimiento de la custodia compartida ordenada por el legislador. Por ello, debe concluirse que la sentencia recurrida tuvo que establecer la custodia compartida y, al no hacerlo y mantener la individual, infringió el artículo 80.2 del CDFA. Por lo que procede casar la sentencia en lo referente a establecimiento del sistema de custodia compartida del menor.”

***** Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 20 de diciembre de 2012. Modificación de pensión alimenticia para hijos menores. Necesidad de concurrencia de circunstancias relevantes. Proporcionalidad de la contribución de los progenitores a sus recursos**

"PRIMERO.- Actora y demandado contrajeron matrimonio el 29 de julio de 2.002, naciendo de esta unión dos hijos, C el de 2.003, e I, el de 2.006. El matrimonio quedó disuelto por sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Zaragoza de 22 de junio de 2.009, que decretó el divorcio y concedió la guarda y custodia de los hijos a la madre y, en concepto de pensión alimenticia para los hijos, señaló al padre la obligación de pago mensual de 1.200 euros (600 euros por cada hijo) más los gastos escolares de los dos.

Interpuesta por el Sr. B. el 3 de noviembre de 2.010 la demanda de modificación de medidas que dio origen a las presentes actuaciones, la sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 5, de 3 de junio de 2.011, la estimó en parte, según se ha reflejado en el antecedente tercero anterior y, asumiendo lo propuesto por el Fiscal en su informe final, redujo la pensión de alimentos de los hijos a 600 euros (300 por cada hijo), más los gastos escolares y de comedor. Para llegar a tal conclusión consideró el Juzgado que se habían producido cambios, por descenso de la capacidad económica del actor, lo que debía llevar consigo la reducción de su contribución en favor de los hijos.

En el apartado 1.2 del fundamento primero se recogía la situación que se había tenido en cuenta en la previa sentencia de divorcio de 22 de junio de 2.009, consignando los hechos probados entonces:

"2.- Dña. ANA BELÉN es cotitular de un negocio (G S.C.), que explota una tienda de ropa en la calle M, desde 1998. Es autónoma desde noviembre de 1997.

G S.C. tributa en régimen de estimación objetiva.

En la declaración de la renta de 2007, constan unos ingresos brutos de 12.780 euros. Hasta enero de este año la esposa percibía 1.100 euros mensuales, en calidad de nómina, de la empresa A.

Sus bases de cotización en 2008 fueron de 817 euros.

3.- D. José es administrador único de la sociedad A S.L. Es titular del 70% de sus participaciones (la esposa posee el 30%). La cifra de negocios de la sociedad ascendió en 2007 a 523.359 euros. El volumen de operaciones en 2008 fue de 491.201 euros.

Se ha fijado una nómina de 4.029 euros líquidos (en enero, febrero y marzo de este año). En 2007 sus ingresos brutos derivados del trabajo ascendieron a 40.000 euros.

Asimismo el esposo controla la entidad O S.L. La cifra neta de negocios en 2007 fue de 91.035 euros; en dicho ejercicio hubo unos resultados negativos de 5.363 euros.

Además, la testifical practicada ha evidenciado que el esposo también ha participado en negocios inmobiliarios (reformas en viviendas)".

Para reflejar los cambios en la posición económica del actor, la sentencia del Juzgado, de 3 de junio de 2.011, en el antecedente tercero, de hechos probados, recoge la situación en ese momento en los siguientes términos:

"1.- La entidad O S.L. fue desahuciada del local que ocupaba y condenada, por sentencia de 5 de febrero de 2.010, al pago de las rentas adeudadas (22.976 euros), según documento 25 de la demanda.

La Agencia Tributaria reclama a la entidad, en julio de 2010, la cantidad de 30.292 euros (documento 28 de la demanda). La entidad BANKINTER, en junio de 2010, dio por vencida la póliza de crédito abierta por O S.L. (documento 29 de la demanda).

2.- A S.L. tuvo en 2009 un importe neto de cifra de negocio que ascendió a 258.332 euros, con unos resultados del ejercicio de -14.355 euros (documento 7 de la demanda).

En 2008 la cifra neta de negocio fue de 546.876 euros, con un resultado del ejercicio de 8.210 euros (documento 4 de la contestación).

BANKINTER y CAJA NAVARRA han decidido no continuar con las pólizas de descuento y crédito abiertas (documentos 18 y 19 de la demanda).

3.- DÑA. ANA BELÉN gestiona la tienda que G S.C. ha abierto en Barcelona (documento 9 de la contestación).

4.- En junio de 2.010 los recibos del colegio de los hijos (comedor incluido) ascendieron a 427 euros (documentos 30 a 32 de la demanda).

5.- Cada uno de los litigantes obtuvo alrededor de 105.000 euros por la venta de la que fuera vivienda familiar (documento 6 de la contestación).

D. JOSÉ el mismo día del otorgamiento de la escritura de venta entregó a CAN 58.983 euros, en pago de deudas de las empresas que administra (documento 20 de la demanda).

6.- La empresa I S.L. carece de datos en la AGENCIA TRIBUTARIA (certificación de 29 de diciembre de 2.010, aportada con escrito de 17 de enero).

7.- El extracto de la cuenta de LA CAIXA (últimos dígitos), aportado con oficio de 2 de mayo, no refleja una situación económica holgada."

SEGUNDO.- Ambas partes interpusieron recurso de apelación, el actor para que se eliminara su obligación de pago de los gastos escolares de los hijos, y la demandada para que se mantuviera la pensión alimenticia de los hijos en los términos de la sentencia de divorcio de 22 de junio de 2.009. La sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 2 de mayo de

2.012 desestimó el recurso del actor y estimó el de la demandada manteniendo la pensión alimenticia establecida en la sentencia de divorcio de 22 de junio de 2.009.

En el fundamento segundo de la sentencia se pone de relieve que el cambio de residencia de la madre con los hijos a Barcelona, y el aumento de gastos del padre por viajes y alojamiento para poder mantener el régimen de visitas con los hijos, ya fue tenido en cuenta por las partes, que suscribieron el 15 de octubre de 2.009 (tres meses después de la sentencia de divorcio) un convenio en el que acomodaban el régimen de visitas a esa circunstancia y asumían por mitad los gastos del traslado. Se hace constar que el convenio fue aprobado por sentencia del Juzgado nº 5 de fecha 23 de diciembre de 2.009.

En cuanto a los ingresos de la madre, cuya mejora era argumentada por el apelante, se dice en el fundamento segundo: *"Por otro lado, la situación económica de la demandada, a los efectos referentes a los alimentos a cargo del padre resulta irrelevante para la determinación de la cuantía de la pensión que aquí se ventila a cargo del padre*".

También considera la sentencia que el Sr. B. ha visto disminuidos sus gastos tras la venta de la vivienda familiar y la consiguiente amortización de la deuda hipotecaria, así como por haber pasado a residir con su madre y, reiterando los datos de los ingresos considerados en la sentencia de primera instancia, no aprecia real descenso de los mismos.

Reproduce la sentencia algunos de los datos sobre los ingresos del Sr. B. en los términos que figuraban consignados en la sentencia de primera instancia, y de los mismos concluye que no se acredita su real descenso desde las fechas del divorcio, pues *"la disminución eficaz debe ser sustancial, y tal extremo no se ha probado, si se añade el hecho cierto de la reducción de sus gastos, anteriormente referida."*

TERCERO.- Contra la anterior sentencia interpuso recurso de casación la representación del Sr. B. por dos motivos, el primero por infracción del artículo 79.5 del CDFA (posibilidad de modificación de las medidas si concurren causas o circunstancias relevantes), y el segundo por infracción del artículo 82 del CDFA (contribución de los padres a los gastos de asistencia de los hijos proporcionalmente a sus recursos). En realidad, el primero de los motivos debe ser entendido como presupuesto del segundo, pues en la medida en que resulten acreditadas causas o circunstancias relevantes podrá acordarse la modificación de las medidas vigentes, en concreto en este caso la relativa a la contribución de los padres a los gastos de asistencia de sus hijos. Por ello se examinarán conjuntamente ambos motivos.

A juicio del recurrente, de los hechos que la sentencia de primera instancia considera probados se deduce un sustancial cambio de la situación económica de ambos progenitores y, sin embargo, no han sido modificadas las medidas judiciales por la sentencia de la Audiencia Provincial. En concreto, se

refiere a la mejor situación económica de la madre después de su traslado a Barcelona y a la disminución de los ingresos de él, circunstancias ambas que, a su juicio, han resultado acreditadas.

Por lo que se refiere a los efectos del traslado de la madre a Barcelona junto con sus hijos (el padre alegaba el aumento de gastos que le suponían los viajes y el alojamiento), la sentencia recurrida argumenta que tales circunstancias eran conocidas por el recurrente y también por el Juzgado puesto que el 15 de octubre de 2.009, tres meses después de la sentencia de divorcio, suscribieron un convenio acomodando a la nueva situación el régimen de visitas y los gastos del traslado. Y, efectivamente, el recurrente no puede ignorar tal circunstancia ni alegar los gastos que se le ocasionarían por tal motivo pues, en lo no previsto expresamente resultaba previsible, y ninguna incidencia debía tener en la pensión asignada, por lo que esta alegación no puede ser acogida.

En cuanto a la situación económica de la madre, hemos reseñado en el fundamento anterior que para la sentencia recurrida resultaba irrelevante a los efectos de determinar la cuantía de la pensión asignada al padre. Conforme a lo dispuesto en el artículo 82.1 del CDFA los padres deben contribuir "*proporcionalmente con sus recursos económicos a satisfacer los gastos de asistencia de los hijos a su cargo*". Y tal contribución es concretada en el apartado 2 del mismo artículo, cuando el Juez haya de determinar los gastos ordinarios de asistencia, "*en función de las necesidades de los hijos, de sus recursos y de los recursos económicos disponibles por los padres*".

Por lo tanto, no es ajustada a la previsión legal una afirmación de carácter general de que no es relevante la situación económica de uno de los progenitores para determinar la contribución del otro a los gastos de asistencia de los hijos, pues si, como expresamente prevé el artículo citado, la contribución ha de ser proporcional a los recursos de ambos, tal proporción solo puede ser concretada atendiendo a los recurso de los dos.

La fijación de la contribución vendrá determinada por las circunstancias de cada caso, y en el que examinamos la sentencia del Juzgado, según ha sido reflejado en el fundamento primero anterior, describió la situación económica de la esposa en la sentencia de divorcio de 22 de junio de 2.009 y, respondiendo a la pretensión del demandante para la modificación de las medidas como consecuencia de la alegada mejor situación de la demandada, argumentó que "*la mejor situación de la madre, de ser así, contribuye a dicha finalidad* (mantener el nivel de vida de los hijos). *Pero es que no hay constancia de ello (artículo 217.2 LEC).*" Por lo tanto, se tuvo en cuenta en la sentencia de primera instancia la nueva situación económica de la madre tras el traslado a Barcelona, pero no se consideró probada una mejora que permitiera una reducción de la contribución del padre a la pensión de los hijos. Tal apreciación acredita que se tuvo en cuenta la real situación económica de ambos progenitores, como exige el artículo 82 del CDFA en sus dos primeros apartados, aunque para el caso concreto no era causa de modificación de la contribución del padre.

CUARTO.- En relación con la disminución de ingresos del Sr. B., antes de entrar en su examen la sentencia recurrida valora un factor adicional, que es la disminución de sus gastos. Dice: "*Por otro lado, y antes de analizar la situación económica del Sr. B., también debe reseñarse que en agosto de 2009 se vendió la vivienda familiar por 558.000 euros, cesando los gastos del préstamo hipotecario que la gravaba. Este reconoce haber pasado a residir con su madre, ahorrándose el alquiler que abonaba de 918 euros mensuales, y los hijos asisten en Barcelona a un colegio concertado, suponiendo unos gastos mensuales de unos 427 euros frente a los 1.000 mensuales que sostiene del Colegio Alemán en Zaragoza. Es decir, el actor ha visto disminuidos sus gastos mensuales en más de 1.500 euros desde la fecha del divorcio*".

Debe examinarse si esta disminución de gastos puede ser así tenida en cuenta a los efectos de la contribución de los progenitores a los gastos de sus hijos en los términos de proporcionalidad que exige el artículo 82.1 CDFA.

Respecto a la venta de la vivienda, la sentencia de primera instancia, según se ha transcrito en el fundamento primero anterior, lo había reflejado así: "*5.- Cada uno de los litigantes obtuvo alrededor de 105.000 euros por la venta de la que fuera vivienda familiar (documento 6 de la contestación).*

D. JOSÉ el mismo día del otorgamiento de la escritura de venta entregó a CAN 58.983 euros, en pago de deudas de las empresas que administra (documento 20 de la demanda)".

Es decir, cada cónyuge obtuvo un líquido de 105.000 euros y el Sr. B. pagó el mismo día deudas de las empresas que administraba por importe de 58.983 euros, por lo que el pago del préstamo hipotecario liberó a ambos de dicha carga, quedando un remanente mayor a la esposa.

En este capítulo de reducción de gastos, que es tenido en cuenta por la sentencia recurrida para no apreciar modificación de las circunstancias, se destaca que el apelante "*reconoce haber pasado a residir con su madre, ahorrándose el alquiler que abonaba, de 918 euros mensuales*". El recurrente alega que esta circunstancia denota su falta de recursos, pero que no se estimó en la sentencia como circunstancia relevante en tal sentido.

Al margen de que la circunstancia anterior se pudiera considerar, o no, como indicio de la peor situación económica del recurrente, lo que no cabe es apreciarla como prueba de su mejor condición económica por el menor gasto que conlleva, pues ello significaría que cualquier medida de ahorro de los progenitores, voluntaria o forzada por su situación, se traduciría en fundamento de buena posición económica, con una relevancia jurídica en orden al mantenimiento de pensiones que no se deduce de los artículos 79.5 y 82 del CDFA. En la concreta cuestión de la vivienda, lo que puede ser considerado en algunos casos como una enojosa pérdida de independencia, por la convivencia, deseada o no, con otro familiar, no puede convertirse, además, en elemento

determinante de una mejor posición económica del obligado a una prestación alimenticia.

En definitiva, las anteriores circunstancias (amortización de la anterior hipoteca y convivencia con la madre con ahorro de alquiler), tal como han sido valoradas por la sentencia recurrida, no pueden constituirse en motivo para considerar que se han mantenido o no han empeorado las circunstancias económicas del recurrente. El artículo 79.5, en relación con el artículo 82.1 del CDFA, permite modificar las medidas si concurren circunstancias relevantes, y a ello no se opone ni la eliminación del gasto del préstamo hipotecario, que afecta por igual a ambos progenitores y equilibra en ese sentido sus recursos disponibles, ni una medida tan circunstancial como el hecho de no pagar alquiler por vivir el recurrente en la vivienda de su madre. Por ello, las anteriores valoraciones de la sentencia recurrida no se ajustan a lo dispuesto en los preceptos citados.

Los gastos de colegio de los hijos, que son aludidos también como un apartado de los gastos del recurrente que han disminuido, reciben un adecuado tratamiento en la sentencia del Juzgado pues, siendo en todo caso de cargo del padre, siguen el criterio de proporcionalidad del artículo 82.2 CDFA al ajustarse por ese concepto a las menores necesidades de los hijos. Pero tal disminución no es argumento sobre los mayores o menores recursos del padre.

QUINTO.- En cuanto a los ingresos del recurrente, reitera la sentencia recurrida los que consignó la de primera instancia que, por comparación, permitieron apreciar su disminución de ingresos. Concretamente, se detallan los ingresos decrecientes desde 2.008, si bien indica la sentencia de apelación que los extractos bancarios de La Caixa no concuerdan por los escasos ingresos que reflejan y que en esa cuenta no aparecen ingresos por nóminas que especificaba el actor en su demanda. Se reseñan ingresos en una cuenta de la CAN desde enero de 2009 por remesas periódicas, con saldos de 18.224 euros en enero de 2.009, de 14.763,20 euros en febrero, de 10.895,45 euros en abril y una transferencia de 5.000 euros en junio. Además, un ingreso de 40.000 euros en agosto de 2009 en un plazo fijo de La Caixa y otro de 36.000 euros en otro plazo en la misma fecha.

Aunque no se afirma expresamente, la sentencia recurrida muestra su recelo sobre los auténticos ingresos del recurrente, pero los últimos datos expuestos, que no contradicen los consignados en la de primera instancia, se refieren a ingresos desde enero de 2.009 a junio de 2.009, salvo los dos últimos de agosto de ese año, y son anteriores a la sentencia de divorcio (junio de 2.009) y a la sentencia aprobatoria del nuevo acuerdo tras el traslado de la madre a Barcelona (diciembre de 2.009), por lo que no pueden servir para juzgar la nueva situación en la que el recurrente pide la modificación de medidas por cambio en su situación económica en demanda de noviembre de 2.010, a la que corresponde la sentencia del Juzgado de 3 de junio de 2.011.

En definitiva, no se basa la sentencia de apelación en datos diferentes de los tenidos en cuenta en la de primera instancia que permitan establecer términos de comparación distintos a los que determinaron la modificación de las medidas por el Juzgado. La proporcionalidad exigida por el artículo 82, apartados 1 y 2, del CDFA, conforme a los recursos de los padres y a las necesidades de los hijos, quedó establecida en la sentencia de primera instancia y no hay datos diferentes de los consignados en ella ni valoración contraria a los mismos, salvo la mera sospecha de que los ingresos bancarios no reflejen la totalidad de los ingresos reales del recurrente. Tampoco sirven, según hemos dicho, las consideraciones sobre la disminución en los gastos del recurrente que, por los razonamientos expuestos, no constituyen razón para estimar que su situación económica no haya variado. Tales apreciaciones de la sentencia recurrida, que no valoraciones de prueba, que llevan a establecer una distinta proporcionalidad que no refleja el cambio de situación económica, no pueden servir para modificar la fijada en la sentencia del Juzgado.

Por ello, consideramos que la sentencia recurrida infringe lo dispuesto en el artículo 79.5, en relación con el artículo 82, apartados 1 y 2, del CDFA y, en consecuencia, debe ser estimado el recurso y casada la sentencia, confirmando íntegramente la dictada por el Juzgado de Primera Instancia.”

***** Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 21 de diciembre de 2012. Guarda y custodia. Custodia compartida. Aplicación del principio general del interés superior del menor con independencia del derecho personal que resulte de las normas de conflicto**

"PRIMERO.- Como antecedentes de interés para la resolución del presente recurso deben citarse:

Doña A. S. y don F. G. L. mantuvieron varios años una convivencia *more uxorio* fruto de la cual nació un hijo, P, el de 2001.

Tras la ruptura de dicha relación de pareja se tramitó un procedimiento para regular las relaciones paterno filiales –autos de juicio verbal nº 40/2007 del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº1 de Zaragoza– en el que se dictó sentencia de 2 de mayo de 2008 resolviendo otorgar a la madre la guarda y custodia del hijo menor, manteniendo ambos progenitores la autoridad familiar, y se fijó una pensión de alimentos a favor del hijo menor, y a cargo de su padre, de 600 euros mensuales.

En fecha 20 de enero de 2011 don F. G. L. ha interpuesto demanda de modificación de las medidas adoptadas en el anterior procedimiento, a fin de que se acuerde el cambio de la guarda y custodia del menor, el cual debe quedar al cuidado del padre, y que se fije una pensión de alimentos a favor del hijo y a cargo de la madre de 200 euros mensuales. En fundamento de dichas pretensiones se argumenta que se ha producido un cambio sustancial de las circunstancias tomadas en consideración en el anterior procedimiento, en concreto la desatención del menor por su madre, hasta el punto de tener que intervenir los servicios sociales de la Administración.

Doña A. S. se ha opuesto a la demanda interesando el mantenimiento de las medidas acordadas en el anterior procedimiento. Sostiene que no existe una situación de riesgo o desamparo del menor, y admite únicamente que ha tenido dificultades puntuales para conciliar su trabajo con las necesidades del hijo.

La sentencia de primera instancia, dictada el 26 de julio de 2011, estima en parte la demanda y acuerda otorgar la custodia del menor a su padre, manteniendo ambos progenitores la autoridad familiar compartida. Fija a favor de la madre un régimen de comunicación centrado, fundamentalmente, en las vacaciones de Navidad y verano, y desestima la solicitud de gastos de asistencia a cargo de la madre.

En esta resolución se argumenta que el menor P tiene un estrecho vínculo con su madre y acepta con normalidad a las actuales parejas de sus progenitores. El menor tiene un comportamiento social desajustado, con agresividad cuando no consigue sus objetivos, y poca tolerancia a la frustración. El padre es funcionario de las Naciones Unidas y está destinado en Cali (Colombia) donde reside con su esposa y los cuatro hijos de esta. La madre vive

en Zaragoza con su actual pareja, en una vivienda que cuenta con una sola habitación, y recibe con frecuencia a compatriotas que pasan temporadas en dicha vivienda. El IASS, en resolución de 19 de noviembre de 2010, declaró al menor en situación de riesgo y acordó iniciar un proyecto de intervención y apoyo familiar. Se advirtió que la madre debía mejorar su papel materno y que adolecía de falta de empatía y comprensión de las necesidades del hijo. El seguimiento escolar del menor había sido escaso. La madre había colaborado en la intervención, y se habían producido avances. No obstante, el informe educativo de 22 de junio de 2011 concluyó que se había producido un retroceso considerable en el cumplimiento de los objetivos fijados, que el menor estaba peor en el colegio, que la madre había reducido su jornada laboral pero no dedicaba más tiempo al menor, y que se habían producido, desde abril, complicaciones en el seguimiento de la familia, habiéndose planteado la madre regresar a su país, Indonesia.

El padre, continúa la argumentación de la sentencia, goza de estabilidad familiar, tiene una holgada posición económica y puede dedicar tiempo al menor. Las carencias del entorno materno son evidentes y no se han corregido, y el menor requiere unas atenciones superiores a las normales, todo lo cual aconseja la estimación de la demanda en el extremo referente a la custodia del menor a favor del padre.

Conviene precisar que en la fundamentación jurídica de la sentencia se mencionan los artículos 77, 79.5 y la D.T. primera del Código del Derecho Foral de Aragón (en adelante CDFA) para justificar la solicitud de modificación del pacto de relaciones familiares. Y en cuanto al fondo de la pretensión deducida, se alude –por dos veces– al interés del menor como clave que sustenta toda nuestra legislación, con cita de los artículos 80, 75, 76, 77 y 89 del CDFA, del art. 39 de la Constitución, y asimismo de los artículos 90, 154, 156 y 159 del Código Civil.

La madre interpuso recurso de apelación en el que reiteró la solicitud de desestimación íntegra de la demanda, y reprochó que la sentencia recurrida aplicara erróneamente norma foral, con vulneración del art. 14 del Código Civil, porque ni demandante, ni demandada ostentaban la vecindad civil aragonesa.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial dictó sentencia de 2 de mayo de 2012 por la que desestimó el recurso de apelación y confirmó la sentencia recurrida. En ella se reiteraron los razonamientos de la dictada en primera instancia, y se destacó la necesidad de intervención del Área de Servicios Sociales del Alto Gállego, por encontrarse el menor en situación de claro riesgo al cuidado de su madre, sucediéndose desde entonces intervenciones periódicas y aplicación de programas de ayuda y educativos en Zaragoza, hasta la declaración de riesgo del menor por resolución de 19 de noviembre de 2010. Por lo demás, se destaca la suscripción, el 14 de noviembre de 2011, de un convenio por los progenitores en el que acuerdan la asunción por el padre, con carácter provisional, de la custodia del hijo que pasará a

convertirse en custodia definitiva si se llega a confirmar la sentencia de instancia. En cuanto a la fundamentación jurídica se menciona, al igual que en la sentencia apelada, la necesidad de atender al prioritario interés del menor.

SEGUNDO.-Doña A. S. ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia dictada en segunda instancia.

De los tres motivos admitidos, en el primero se denuncia la infracción, por aplicación errónea, del Código del Derecho Foral de Aragón y de la Ley aragonesa 2/2010, porque ello vulnera lo dispuesto en el art. 14 del Código Civil, puesto que ni demandante –español de origen, residente desde hace años y originario de Cataluña, afirma el recurrente–, ni demandada –de nacionalidad indonesia– ostentan la vecindad civil aragonesa. Considera, en definitiva, que el litigio ha de resolverse conforme al derecho común al que remite, como norma de conflicto, el art. 16.1, en relación con el 9.1 del CC.

Lo primero que cabe indicar respecto a la fundamentación jurídica de la sentencia recurrida es que la misma trasciende de la concreta cita de los preceptos del CDFA, porque se sustenta en un principio, el interés superior del menor o *favor filii*, que informa todo el ordenamiento, no solo el aragonés, y sobre el que el Tribunal Constitucional ha afirmado que "opera, precisamente, como contrapeso de los derechos de cada progenitor y obliga a la autoridad judicial a ponderar tanto la necesidad como la proporcionalidad de la medida reguladora de la guarda y custodia del menor. Cuando el ejercicio de alguno de los derechos inherentes a los progenitores afecta al desenvolvimiento de sus relaciones filiales, y puede repercutir de un modo negativo en el desarrollo de la personalidad del hijo menor, el interés de los progenitores deberá ceder frente al interés de éste" –STC nº 176/2008, de 22 de diciembre de 2008; y en igual sentido, la reciente STC, Pleno, de 17 de octubre de 2012 que declara inconstitucional el inciso "favorable" contenido en el art. 92.8 del Código Civil -.

Ello es consecuencia de lo dispuesto en el artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989, recomendación 14 de la Carta Europea de los Derechos de la Infancia de 21 de septiembre de 1992 , en el artículo 24.2 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el artículo 11.2 de la Ley Orgánica de Protección del Menor de 15 de enero de 1996 –además de los preceptos del Derecho aragonés mencionados por las sentencias de instancia y de los arts. 3.3.a) y c), 4, 13, 21 y 46.i) de la Ley 12/2001, de 2 de julio, de la infancia y la adolescencia en Aragón–.

En definitiva, se trata de un principio general que tiene carácter de orden público –por todas, STS de 12 de mayo de 2012– y que debe guiar la adopción de cualquier medida en una situación de ruptura de la convivencia de los progenitores, con independencia del derecho personal que resulte de aplicación conforme a las normas de conflicto.

Por otra parte, es significativo que el reproche de la parte recurrente incida únicamente en el criterio de selección de la norma, pero omita totalmente la

concreta cita del precepto que a su juicio resulta aplicable al caso, así como de su análisis y de la subsunción de los hechos en dicha norma sustantiva. Y no lo hace porque, con los hechos declarados probados en la sentencia recurrida, de los que debemos partir, y el necesario respeto al superior interés del menor en la adopción de la medida de custodia, la consecuencia de la aplicación del art. 92 CC sería la misma que la que resulta de los preceptos del CDFA.
En cualquier caso y respecto a la norma aplicable hay que destacar, en contra de lo argumentado por la recurrente, que lo relevante para la adopción de la medida de custodia no es la vecindad civil de los padres, sino la del hijo por tratarse de un efecto propio de las relaciones paterno-filiales –art. 9.4 CC–, y que de los hechos declarados probados no consta debidamente acreditada la vecindad del derecho civil común del hijo o cualquier otra que imponga la aplicación del CC –entre otras cuestiones, el dato de la procedencia del padre que menciona el recurrente es incorrecto, y se desconocen los lugares de residencia que ha tenido esta persona hasta la incoación del procedimiento–. Por tanto, y a los meros efectos de resolver este litigio, debe operar el criterio subsidiario del art. 9.4 CC y atender al lugar de residencia del menor, que ha sido Aragón al menos desde 2007.
Por todo lo expuesto, procede desestimar el primer motivo del recurso.

TERCERO.- El motivo tercero del recurso se interpone, para el supuesto de entender aplicable el Derecho Foral aragonés, por vulneración del artículo 80.2 CDFA, por inaplicación del criterio preferente de custodia compartida; asimismo, el motivo cuarto se fundamenta también en la necesidad de adoptar la custodia compartida, como criterio preferente en Aragón, con cita de los arts. 80.3 CDFA y 217 LEC, y mención de la necesidad de recabar los informes sociales o psicológicos de los especialistas, sin que el Juez de instancia haya valorado al menos uno de dichos informes.

Respecto a estos motivos, que serán analizados conjuntamente, lo primero que debe indicarse es que la recurrente se aparta totalmente de la postura mantenida en las dos instancias, en las que defendió el mantenimiento a su favor de la custodia individual. Por otra parte no razona, más allá de la mera cita de los expresados preceptos, por qué motivo se debe acordar la custodia compartida en lugar de la individual a favor del padre, que ha sido reconocida y correctamente valorada en las sentencias de instancia como la más conveniente para el interés del menor, dadas las relevantes carencias advertidas en el entorno materno, que no han sido corregidas, y la necesidad que tiene el menor de unas atenciones superiores a las normales, que su padre le puede prestar. Con esta conclusión, que resulta de la prueba practicada, la custodia individual a favor del padre no puede quedar desplazada por la custodia compartida, sobre cuya eventual aplicación al menor no razona en modo alguno la parte recurrente.

En definitiva, no se aprecia infracción alguna del art. 80.2 CDFA, ni debe tener tampoco virtualidad la cita de los arts. 80.3 CDFA y 217 LEC, porque a través de estos preceptos se plantea, en apoyo de la custodia compartida, que uno de los informes fue incorporado a las actuaciones después de dictarse sentencia de primera instancia, pero ese dictamen ha podido ser valorado en segunda instancia y la parte no plantea siquiera, como defecto procesal, que exista un error en dicha valoración que resulte notorio o patente, y determinante de arbitrariedad o manifiesta irracionalidad de la sentencia. En definitiva, en el motivo cuarto se entremezclan incorrectamente la misma impugnación sustantiva del motivo tercero, y la simple mención a la incorporación de un informe pericial tras el dictado de la sentencia de primer grado, pero sin articular correctamente la existencia de un defecto procesal relevante para el correcto enjuiciamiento de la causa.

Por lo expuesto, procede la desestimación de los motivos tercero y cuarto del recurso y, con ellos, la del recurso interpuesto."

***** Auto del Tribunal Superior de Justicia de 21 de diciembre de 2012. Guarda y custodia. Pensión de alimentos**

"PRIMERO.- En el trámite de admisión del recurso de casación la Sala debe examinar en primer lugar su competencia pronunciándose seguidamente, si se considerase competente, sobre la admisibilidad del mismo.

La competencia para el conocimiento del presente recurso viene atribuida a esta Sala en virtud de lo dispuesto en el artículo 73.1.a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 478.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por haber sido fundado en infracción de normas del Derecho civil aragonés.

SEGUNDO.- En cuanto a la admisibilidad del primer motivo de infracción procesal, el mismo se fundamenta en la violación de los artículos 209.4 y 218.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, referentes a la vulneración del principio de justicia rogada, por haberse acordado una modificación de medida que no fue solicitada en la demanda por la representación del Sr. Lacarte.

En la providencia de 23 de noviembre pasado se advirtió que con independencia del *nomen iuris* empleado por el demandante, sobre el que la parte discrepaba, lo concedido en sentencia era sustancialmente lo pedido por la parte. Además, se trataba de un pronunciamiento propio de los efectos personales de la ruptura y relacionado con un menor, ámbito en el que el Tribunal Supremo entiende que no rige el principio de rogación –STS de 11 de noviembre de 2011-.

Pues bien, al evacuar el trámite de audiencia la parte recurrente se muestra conforme con el referido análisis, y en esta situación, no habiéndose refutado los anteriores razonamientos, procede inadmitir este primer motivo del recurso, por concurrir la causa de inadmisión prevista en el artículo 473.2.2º de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

TERCERO.- De igual forma, en la citada providencia de 23 de noviembre se acordó dar traslado a las partes para alegaciones en relación con el segundo motivo del recurso, de infracción procesal, que se fundamenta en la vulneración del art. 218.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, referido a la exigencia de motivación de las sentencias, al entender la parte que la resolución recurrida contiene una contradicción interna al resolver sobre la modificación del régimen de visitas a favor del padre.

Al contestar sobre esta posible causa de inadmisión la parte recurrente vuelve a valorar el resultado de la prueba practicada, y muestra su disconformidad con el fundamento de la ampliación de las pernoctas con el padre.

Sin embargo, como señala el Ministerio Fiscal en el mismo trámite, la sentencia recurrida contiene la debida motivación acerca de la medida personal acordada, valorando las circunstancias de edad del menor y buena relación del mismo con su padre y abuelos paternos. La parte, en definitiva, pretende en realidad combatir la valoración de la prueba, situación en la que hay que apreciar, con arreglo a los acuerdos de la Sala Primera del Tribunal Supremo sobre criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinarios por infracción procesal de 30 de diciembre de 2011, que concurre la causa de inadmisión prevista en el artículo 473.2.2º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, porque el contenido del motivo del recurso carece de fundamento.

CUARTO.- El tercer motivo, de casación, se formula por inaplicación o aplicación indebida del art. 76.2 CDFA, en relación con los arts. 11.2.a) y b) de la L.O. 1/1996, de Protección Jurídica del Menor.

La parte recurrente considera infringido el interés superior del menor. En la providencia del pasado 23 de noviembre se razonó que el desarrollo y fundamento del motivo evidenciaba que con el mismo se pretendía combatir en realidad la valoración de hechos probados de la sentencia recurrida, sin acudir al cauce procesal adecuado para ello.

Al dar traslado de la misma a las partes, la recurrente niega tal extremo; sin embargo, la lectura de la fundamentación del motivo nos lleva a concluir en el mismo sentido ya expuesto en la providencia, dado que en él se incide expresamente en la disconformidad de la parte con las conclusiones sentadas en la instancia respecto a la prueba practicada, volviendo a valorar –en su interés– las concretas declaraciones de las partes –con mención expresa del minuto de la grabación en el que se efectúan determinadas manifestaciones– y las motivaciones por las que había pernoctado ya el menor con su padre en alguna ocasión anterior.

En fin, procede apreciar la causa de inadmisión prevista en el artículo 477.1, en relación con el art. 481.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, porque no se respeta en este motivo la valoración de la prueba efectuada en la instancia. El recurso articulado por la parte no se ajusta a la técnica casacional en tanto que la misma exige razonar sobre la infracción legal, prescindiendo de los hechos y de la valoración probatoria, planteando ante esta Sala una cuestión de derecho material en relación con los fundamentos de la Sentencia recurrida determinantes de su fallo –por todos, auto del Tribunal Supremo de 6 de noviembre de 2012–.

QUINTO.- Finalmente, el cuarto motivo, de casación, se fundamenta en la infracción del art. 82 CDFA, por no haberse respetado la regla de contribución proporcional de los padres a la satisfacción de los gastos de asistencia de los hijos a cargo.

En la providencia del 23 de noviembre se razonó que la parte desarrollaba el motivo como en una tercera instancia, sin identificar adecuadamente la vulneración alegada, ni razonar por qué el criterio fijado por el Tribunal de Apelación vulneraba el criterio de proporcionalidad.

El evacuar el traslado la recurrente aduce que el motivo se interpone por infracción del principio de proporcionalidad, exponiendo las circunstancias por las que considera que el mismo ha resultado infringido.

El Ministerio Fiscal, por el contrario, sostiene la inadmisión de este motivo porque en su planteamiento no se respeta la valoración de la prueba realizada en la instancia, de manera que se pretende convertir en una tercera instancia un recurso de casación que tiene naturaleza extraordinaria. Además, alega que el juicio de proporcionalidad corresponde realizarlo a los tribunales que resuelven las instancias, sin que el mismo deba ser objeto de recurso de casación.

En efecto, conforme a la doctrina del Tribunal Supremo contenida, entre otras, en la sentencia de 28 de octubre de 2011, *"La jurisprudencia de esta Sala ha declarado repetidamente que el juicio de proporcionalidad del art. 146 CC "corresponde a los tribunales que resuelven las instancias y no debe entrar en él el Tribunal Supremo a no ser que se haya vulnerado claramente el mismo o no se haya razonado lógicamente con arreglo a la regla del art. 146 ", de modo que la fijación de la entidad económica de la pensión y la integración de los gastos que se incluyen en la misma, "entra de lleno en el espacio de los pronunciamientos discrecionales, facultativos o de equidad, que constituye materia reservada al Tribunal de instancia, y por consiguiente, no puede ser objeto del recurso de casación" (STS 903/2005, de 21 noviembre y las allí citadas)."*

Pues bien, en nuestra sentencia –citada por el Ministerio Público– de 20 de abril de 2012, considerábamos de aplicación esa misma doctrina respecto del criterio de proporcionalidad señalado por el legislador aragonés entre los ingresos de ambos padres para contribuir a los gastos de asistencia a los hijos establecido en el artículo 82.1 CDFA, o para la relación entre necesidades de los hijos, sus recursos y los de sus padres, para atender a los gastos ordinarios de aquellos (artículo 82.2 CDFA). De manera que *Se debe respetar la valoración de la prueba realizada por el juez, solo impugnable en el recurso extraordinario por infracción procesal por la vía del artículo 469.1.4º LEC en el caso de resultar manifiestamente arbitraria e ilógica y, como señala el Tribunal Supremo, el juicio de proporcionalidad no es susceptible de revisión casacional salvo vulneración clara del mismo o razonamiento ilógico e irracional.*

En consecuencia, concurre la causa de inadmisión prevista en el artículo 483.2.2º, en relación con el artículo 477.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Por todo lo expuesto, y conforme al art. 483.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, procede declarar la inadmisión del recurso de casación y la firmeza de la sentencia recurrida.”

65. TUTELA. ADOPCIÓN. JUNTA DE PARIENTES

*** Sentencia de la Audiencia Provincial de Huesca de 31 de enero de 2012. Proceso probatorio en juicio de incapacitación y tutela

"PRIMERO : La parte apelante, Mariana , no recurre la incapacidad declarada de su madre, **Amanda** , sino que concreta su impugnación de la sentencia en la pretensión de declaración de nulidad de actuaciones, con retroacción de las actuaciones al tramite de audiencia, dado que, según su parecer, no pudo contestar la petición de la demandante ni proponer las pruebas. Alega la recurrente que no se han cumplido con los requisitos formales requeridos, en concreto "dar audiencia".

2.- Si bien la apelación permite un nuevo examen de la cuestión litigiosa, el ámbito del recurso de apelación tiene dos límites derivados del principio de la prohibición de lareformatio in peius(prohibición de la reforma peyorativa) y "[d]el principiotantum devolutum quantum apellatum(se transfiere lo que se apela), conforme al cual el tribunal de apelación sólo debe conocer de aquellas cuestiones que le han sido planteadas en el recurso, como se regula en el *artículo 465.4LEC*. Ambos limites de conocimiento son manifestaciones en la segunda instancia del principio de congruencia de las sentencias, con dimensión constitucional por afectar al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en su vertiente de derecho a no sufrir indefensión que se proyecta en el régimen de garantías legales de los recursos", por todas la *sentencia del Tribunal Supremo de 28 de septiembre de 2010*. En este caso, se pretende la nulidad de actuaciones por haberse infringido el *art. 759LEC*, respecto del incumplimiento del trámite de dar audiencia a los parientes más próximos, único motivo sobre el que ha de tratar este recurso.

3.- Recuerda la *sentencia Audiencia Provincial de Ávila de 16 de septiembre de 2011*que "el *art. 759 de laLEC*añade unas exigencias específicas a las del *art. 752, respecto a la actividad probatoria en el proceso de incapacitación que se derivan del papel que el Tribunal representa como garante de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos que le atribuye el art. 24CE*. No solamente insiste en el principio de la inmediación de la prueba que proclaman el *art. 229.2 de laLOPJ*y *arts. 137.1 y 289.2 de laLEC*, sino en el ámbito de la actividad probatoria requiriendo unas audiencias preceptivas que se concretan en tres medios de prueba "ad hoc" para decidir sobre la incapacitación pretendida: 1) Audiencia de los familiares más allegados. 2) El examen directo del demandado por el Juez. 3) El dictamen pericial médico". Y continúa, "también, respecto del problemático tema del nombramiento del tutor, para el ya declarado incapaz, conforme a los *arts. 229 y 287 delCódigo*

Civil, el mismo *art. 759.2 de laLEC*prevé sobre le específica cuestión del nombramiento de la persona o personas que hayan de asistir o representar al incapaz y velar por él, unas pruebas también preceptivas y regidas por idénticos principios que consisten en las audiencias de los parientes más próximos del presunto incapaz y de éste, si tuviera suficiente juicio, y las personas que el Tribunal considere oportuno". La Jurisprudencia del Tribunal Supremo sienta como doctrina que la inobservancia de los trámites esenciales y previos a toda declaración de incapacidad (dictámen médico, audiencia de los parientes más próximos del presunto incapaz y examen de éste por el propio Juez), en cuanto cuestión de orden público e incluso de trascendencia constitucional, puede ser apreciada "ex officio", *sentencia de 4 de marzo de 2000, con cita de las sentencias de 20 de febrero de 1989, 9 de mayo de 1987*

4.- Todas estas prescripciones acerca a las pruebas a practicar en este tipo de procedimientos han sido escrupulosamente observadas por la sentencia que es objeto de impugnación. En la grabación de la vista puede comprobarse la amplia intervención de la ahora apelante y de su hijo, más sobre la custodia y tutoría de la incapaz, que sobre la capacidad de **Amanda** , por lo que entendemos cumplida ampliamente la exigencia de audiencia de los parientes más próximos sobre ambas cuestiones. La recurrente parece confundir varias cuestiones relacionadas con la participación en el proceso. Así una cosa es ser parte legitima para actuar en el proceso, en este caso de incapacitación que viene precisada en el art. 757, y otra diferente "dar audiencia" o ser oída, que es lo que requiere el art. 759, en calidad de testigo cualificado por su conocimiento de la situación personal del presunto incapaz y de las personas que pueden desempeñar el cago de tutor, vid *sentencia de la Audiencia Provincial de La Rioja de 6 junio de 2011*. Cuestión distinta de la examinada en la *sentencia del Tribunal Constitucional de 14 de febrero de 2011*, que se refiere a una demanda de incapacitación presentada por el Ministerio Fiscal, en la que ante la manifiesta e inequívoca voluntad del presunto incapaz de comparecer personalmente en el procedimiento de incapacitación, no se le posibilitó la representación y defensa, y a que en ningún momento fue oído sobre las causas de incapacitación alegadas ni sobre la propuesta de nombramiento de tutor, que no es el presente caso.”

***** Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 1 de febrero de 2012. Incapacitación. Valoración de la prueba. Informe forense**

"PRIMERO.- La sentencia de instancia estima la demanda del Ministerio Fiscal y declara la incapacidad total de Dña. Esther para regir su persona y bienes, privándola del derecho de sufragio activo y pasivo, y nombrando tutora a la Comisión de Tutelas y Defensa Judicial de Adultos de la DGA, pronunciamiento frente al que se alza la demandada, que alega que la valoración realizada por el médico forense es consecuencia de una simple entrevista personal sin ningún tipo de prueba adicional y que el Juez incurre en error al considerarla incapaz, pues se vale por sí misma para todo y goza de plena capacidad de obrar en todos sus ámbitos vitales.

El Fiscal y la Letrada de la Comunidad Autónoma solicitan la confirmación de la sentencia.

SEGUNDO.- Del informe remitido al Juzgado por el Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario "Miguel Servet" resulta que la recurrente, de 53 años, soltera, fue trasladada a ese Hospital el 26-3-10 desde el Hospital General de Valencia por presentar conducta de vagabundeo, abandono de autocuidados y claros síntomas psicóticos. El mismo informe refiere en la ingresada antecedentes clínicos de enfermedad psíquica, con un diagnóstico previo de trastorno delirante paranoide, habiendo precisado en 1998 de ingreso en el Hospital "Royo Villanova" y posteriormente en el Centro Media Estancia "Rey Ardid", con inicio de su trastorno sicótico en forma de fugas de domicilio y abandono de la actividad laboral y de todo vínculo familiar, registrándose un ingreso anterior en Génova (Italia) por clínica similar.

Se dice también en ese informe que la paciente perdió desde hace años el vinculo familiar y vive en pensiones y posterior situación de indigencia, hasta perder residencia y vínculos afectivos y sociales, y que, llevada por sus temores paranoicos, por sus vivencias delirantes, se ve "obligada" a huir de cualquier situación peligrosa, incluido cualquier contacto familiar. Y acerca de su estado mental que la Sra. P negó un delirio productivo y también alucinaciones, pero que, sin embargo, su conducta social y sus vivencias de perjuicio y de sufrir daños, denotan un delirio paranoide, diagnosticándose finalmente un trastorno psicótico crónico, de ese tipo -delirio paranoide-.

El Dr. A, Forense del Instituto de Medicina Legal de Aragón, recoge en su informe todos esos antecedentes, y da cuenta de las dificultades encontradas a la hora de una exploración convencional, dado el estado psíquico de la informada y su nula conciencia de enfermedad, estimando, no obstante, que la

exploración practicada es compatible con la información aportada y con el padecimiento por la misma de una psicosis paranoide con ideación de perjuicio y nula conciencia de enfermedad, que le lleva al aislamiento social y al abandono de su autocuidado, concluyendo que tal padecimiento tiene criterios de cronicidad y permanencia en el tiempo; que como consecuencia de su enfermedad tiene alteradas sus funciones mentales superiores; que la enfermedad diagnosticada restringe su capacidad de obrar y de entender el alcance y consecuencias de sus actos, en mayor o menor medida en función de que la informada se encuentre en fase crónica o de reagudización de la enfermedad, caso este último –brotes- en los que sus capacidades de obrar y entender las consecuencias de sus actos quedarán abolidas, precisando el control y supervisión de terceras personas para todas las actividades de la vida diaria, incluidas las básicas, pudiendo precisar ingreso en una unidad psiquiátrica cerrada aun en contra de su voluntad, mientras que en los periodos de intercrisis su capacidad de obrar se verá parcialmente limitada, dependiendo de la sintomatología que pueda presentar; que en la actualidad, y en los momentos interbrotes, la informada precisa de supervisión de tercera persona para desarrollar las actividades de la vida diaria; y que precisa de forma continuada control y supervisión de tercera persona para todos aquellos actos que estén relacionados con su enfermedad psiquiátrica, su patrimonio personal y su estado civil.

El examen de parientes –Dña. Laura, hermana de la demandada-, ha corroborado las actitudes que los médicos refieren como manifestaciones psicopatológicas de la enfermedad que padece la recurrente.

La incapacitación recurrida no ha sido, pues, simple resultado de un aislada valoración del informe forense, no puesto en relación con la autonomía que la recurrente dice tener demostrada, pues lo que los diversos informes emitidos han puesto de manifiesto, todos ellos coincidentes en el diagnóstico de un trastorno psicótico crónico que colma las previsiones del art. 38.2 del CDFA –“Son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí misma”-, ha sido la gravedad y permanencia de esa enfermedad psíquica, que en combinación con la nula conciencia de enfermedad, sobradamente demostrada por la demandada en el curso del procedimiento, abonan la procedencia de la incapacidad total declarada, tal y como solicitó el Ministerio Fiscal y ha solicitado en esta instancia la DGA, que, por otro lado, una vez acreditada la ausencia de vínculos familiares de Dña. Esther, ha cesado en su inicial oposición a que sea la Comisión de Tutelas y Defensa Judicial de Adultos de la DGA quien asuma la tutela de la incapaz.”

***** Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 21 de febrero de 2012. Nombramiento de tutor de persona incapaz. Alteración del orden legal**

"PRIMERO.- La Sentencia recaida en Primera Instancia en el presente procedimiento sobre nombramiento de tutor, es objeto de recurso por la representación de los Sres. T y Sra. G, que en su apelación consideran que debe ser declarada tutora de doña Mª la recurrente doña Victoria .

SEGUNDO.- Conforme al art. 115 del Código de Derecho Foral de Aragón corresponde a la autoridad judicial en su caso, designar al titular de la institución tutelar. El art. 116 del mismo texto legal establece un orden de preferencia, pero en su apartado segundo indica que el Juez en resolución motivada, podrá alterar del orden del apartado anterior si el interés del incapaz así lo exigiere.

Se discute en el litigio quien debe ejercitar dicha función, si la entidad administrativa designada por el Juzgador de instancia en la resolución recurrida o la recurrente, la Sentencia recurrida razona de manera adecuada cuales son las razones que le impulsan a decantarse por la institución administrativa, las malas relaciones familiares, dificultad de trato y las actuaciones de los sobrinos que se describen en la resolución parecen suficientes y razonables para que en beneficio o interés de la incapacitada, que es el bien que hay que proteger en este tipo de actuaciones, mantener la decisión judicial por sus propios y acertados fundamentos. Se confirma íntegramente la Sentencia apelada."

***** Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Ejea de los Caballeros de 6 de marzo de 2012. Incapacitación. Enfermedad mental. Tutela pública**

"Primero.- Según el dictamen de la Médico Forense, la demandada, Teresa padece esquizofrenia paranoide con ideación delirante.

La conclusión de la Médico Forense coincide por lo expuesto por diversas profesionales en la documentación que obra en las actuaciones. Así, la Trabajadora Social Sra., que depuso en la vista, indica esta circunstancia, así como la necesidad de que se le nombre un tutor, en el escrito de 15 de marzo de 2011 en el que se dirige a Fiscalía para iniciar los trámites para la incapacitación de la demandada. Esta idea es desarrollada en el otro informe de esta trabajadora social que consta en el procedimiento, donde se hace referencia a la situación económica de la demandada, su situación familiar, y donde se valora que la demandada no es capaz para valerse por sí misma.

La psiquiatra Sra. también emite un informe el 1 de marzo de 2011 en el que se indica que la demandada padece esquizofrenia paranoide, que tiene nula conciencia de enfermedad, que basa gran parte de su vida en ideas delirantes y que no es capaz de hacerse cargo de sus necesidades más básicas.

Por último, consta también en autos el informe de la psiquiatra Sra., de 14 de febrero de 2011, en el que se objetiva ideación delirante, con nula conciencia de enfermedad, y necesidad en aquel momento de realizar un ingreso involuntario.

En la actualidad se ha estabilizado algo su situación, pero sigue manteniendo la misma enfermedad, sin conciencia de la misma, así como la ideación paranoide, y la falta de capacidad para hacerse cargo ni de su persona ni de sus bienes, como puso de relieve la Sra. en la vista, donde indicó que la demandada sólo podía hacerse cargo de tareas muy básicas y en un ambiente controlado, y que desde el punto de vista patrimonial no era capaz de gestionar más que cantidades muy pequeñas y para una finalidad concreta (como por ejemplo, gastarse un euro en un café).

La Médico Forense considera que esta situación es difícilmente reversible y que la patología que sufre la demandada le impide gobernar su persona y sus bienes por sí misma.

Segundo.- El artículo 38 del Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, establece que "*nadie puede ser incapacitado sino en virtud de las causas establecidas en la ley y por sentencia judicial, que determinará la extensión y límites de la incapacitación, así como el régimen de protección a que haya de quedar sometido el incapacitado*", y que "*son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí misma*".

En el presente caso se ha puesto de manifiesto como la demandada necesita asistencia para muchas tareas de la vida ordinaria, y que en aquellas en las que tiene cierta autonomía (vestirse, comer, asistir a talleres...), la misma se mantiene siempre que se encuentre en un ambiente controlado. Asimismo, la demandada carece de capacidad para regir sus bienes, ya que apenas es capaz de gestionar pequeñas cantidades de dinero.

La causa de lo anterior es una esquizofrenia paranoide con ideación paranoide que, como indica el dictamen de la Médico Forense, tiene carácter difícilmente reversible.

Es decir, la demandada padece, como exige la ley, una enfermedad persistente que le impide gobernarse por sí misma.

Por ello debe declararse la incapacitación total de la demandada, tanto en el aspecto personal como en el patrimonial.

Tercero.- El artículo 130 del Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, establece que "*estarán sujetos a tutela ordinaria... los incapacitados, cuando la sentencia de incapacitación o la resolución judicial que la modifique lo hayan establecido*". En el caso que nos ocupa, dado el grado de discernimiento de la demandada, debe quedar ésta sometida a tutela, ya que la Sra. puede llevar a cabo ciertas tareas básicas, pero siempre que se encuentre bajo supervisión.

Cuarto.- De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 115 y 116 del Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, se nombra como tutora de Teresa a la Comisión de Tutela y Defensa Judicial de Adultos, de la Comunidad Autónoma de Aragón, puesto que aunque la demandada tiene dos hijos, ambos están incapacitados, e incluso se ha constatado cómo la relación con su hija contribuye a empeorar la sintomática de su enfermedad, ya que alimenta su ideación delirante.

Quinto.- El artículo 3.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General preceptúa que "*los Jueces o Tribunales que entiendan de los procedimientos de incapacitación o internamiento deberán pronunciarse expresamente sobre la incapacidad para el ejercicio del sufragio*". En el presente caso, se constató en el reconocimiento que la demandada tenía cierta idea de en qué consistían las elecciones (que era "lo de votar"), y conocía a los líderes políticos actuales, por lo que no existe motivo para privarle del ejercicio de este derecho fundamental.

Sexto.- El artículo 755 de la Ley de Enjuiciamiento Civil prevé que "*cuando proceda, las sentencias y demás resoluciones dictadas en los procedimientos a que se refiere este Título se comunicarán de oficio a los Registros Civiles para la práctica de los asientos que correspondan*"."

***** Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Ejea de los Caballeros de 6 de marzo de 2012. Incapacitación parcial. Tutela**

"Primero.- Según el dictamen de la Médico Forense, el demandado, Juan Manuel, padece esquizofrenia paranoide, aunque no presenta en la actualidad síntomas positivos (sí negativos) de la enfermedad.

En el procedimiento constan diversos informes de varios profesionales, desde el año 1997, en el que ya se hace referencia a un posible trastorno paranoide agravado por la ingesta de drogas tóxicas. En el año 2006, el mismo psiquiatra confirma el diagnóstico de esquizofrenia paranoide, agravada por la ingesta de las referidas sustancias, conclusión que también se recoge en otro informe de junio de 2006, de otro profesional. Constan también informes de una entidad de rehabilitación, en la que se hace constar la evolución positiva del demandado, así como informes posteriores, de los años 2009, 2010 y 2011, que constatan la realidad de la enfermedad, pero también que el paciente mantiene la misma más o menos estabilizada con la ingesta de la correspondiente medicación. Le ha sido reconocida la incapacidad absoluta para la realización de cualquier trabajo, en el año 2011.

La madre y el padre del demandado manifestaron en la vista que su hijo no es capaz de desenvolverse por sí mismo. Especialmente manifestaron su temor a que pudiera pone en peligro su patrimonio, haciendo referencia a que ya lo ha hecho en alguna ocasión (especialmente se refirieron a la firma de un convenio regulador en el que se reconocía una pensión alimenticia a favor de sus hijas que el demandado era incapaz de pagar). Asimismo, los dos manifestaron que, aunque es capaz de realizar ciertas tareas básicas por sí mismo, incluso conducir un vehículo, es necesario que se le motive constantemente ya que carece de iniciativa.

El demandado Sr manifestó en la vista que sí creía que necesitaba algo de ayuda, sobre todo para no firmar lo que no debía.

La Médico Forense considera que la enfermedad del Sr es controlable mediante la correspondiente medicación, lo que no impide que puedan suceder descompensaciones, y que es capaz de gobernar su persona dentro del ambiente controlado en el que se desenvuelve, aunque no lo es para gestionar sus bienes por sí mismo.

Segundo.- El artículo 38 del Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, establece que "*nadie puede ser incapacitado sino en virtud de las causas establecidas en la ley y por sentencia judicial, que determinará la extensión y límites de la incapacitación, así como el régimen de protección a que haya de quedar sometido el incapacitado*", y que "*son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí misma*".

En el presente caso se ha puesto de manifiesto como el demandado es capaz para realizar las tareas básicas cotidianas por sí mismo. Así, es capaz de vestirse, asearse, comer o prepararse la comida, así como de gestionar pequeñas cantidades de dinero que le entrega su madre. Incluso es capaz de conducir. Eso sí, es necesario que se le motive para realizar estas tareas básicas (su madre manifestó que le tiene que recordar que se duche, que se afeite o que se cambie de ropa).

En el aspecto patrimonial, aparte de la gestión de las pequeñas cantidades que le son entregadas para su uso personal, no es capaz de gestionar de forma adecuada la pensión que cobra. No es consciente del valor de la misma, y reconoce que necesita que le ayuden a controlar su dinero.

El motivo de lo anterior es la esquizofrenia que padece el demandado que, si bien no presenta aspectos positivos, sí presenta aspectos negativos tales como apatía o disminución de la iniciativa.

Según la Médico Forense, esta patología puede controlarse a través de la correspondiente medicación, aunque ello no impide que surjan brotes y descompensaciones.

En definitiva, el demandado padece, como exige la ley, una enfermedad persistente que limita su capacidad para regir su persona y, especialmente, sus bienes.

Por ello debe declararse la incapacitación parcial del demandado.

Tercero.- Los artículos 42, 43 y 44 del Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, establecen la posibilidad de rehabilitar la autoridad familiar de los progenitores respecto del hijo soltero mayor de edad cuando éste sea incapacitado y conviva con aquéllos, aunque prevé también la posibilidad de acordar la constitución de tutela o curatela atendidos el grado de deficiencia del incapacitado y la edad o situación personal y social de las personas a quienes correspondería ejercer la autoridad familiar rehabilitada.

En el caso que nos ocupa considero que es preferible acordar la constitución de tutela. Por una parte, considero que el grado de autonomía personal del demandado hace que no sea conveniente la rehabilitación de la autoridad familiar, para evitar aplicar con carácter supletorio las normas que rigen la misma. Por otra parte, entiendo que no es suficiente el establecimiento de curatela, que supone la mera necesidad de asistencia del curador para la realización de ciertos actos, sino que hace falta establecer la tutela, con el objeto de que los tutores tengan la posible administración y disposición de los bienes del pupilo.

Así, en el aspecto personal, no se establece ningún acto para el que el demandado requiera autorización o asistencia alguna, si bien se fija como contenido de la tutela en este aspecto el deber de los tutores de preparar al demandado su medicación, así como controlar que toma la misma en la forma que se le prescriba.

En cuanto al aspecto patrimonial, se declara la capacidad del demandado para realizar por sí mismo actos de contenido patrimonial que supongan una prestación por su parte no superior a 100 euros. En lo demás, corresponde a los tutores la administración y disposición del patrimonio del demandado en los términos previstos el Código de Derecho Foral de Aragón para el menor de catorce años.

Cuarto.- De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 134 del Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, se nombran tutores de Juan Manuel a sus progenitores, T.L.P y J.R.A.

Quinto.- El artículo 3.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General preceptúa que "*los Jueces o Tribunales que entiendan de los procedimientos de incapacitación o internamiento deberán pronunciarse expresamente sobre la incapacidad para el ejercicio del sufragio*". En el presente caso, se constató en el reconocimiento que el demandado conoce perfectamente lo que son las elecciones, por lo que no existe motivo para privarle del ejercicio de este derecho fundamental.

Sexto.- El artículo 755 de la Ley de Enjuiciamiento Civil prevé que "*cuando proceda, las sentencias y demás resoluciones dictadas en los procedimientos a que se refiere este Título se comunicarán de oficio a los Registros Civiles para la práctica de los asientos que correspondan*"."

***** Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 9 de mayo de 2012. Incapacitación y tutela. Lugar de visitas para el padre**

"PRIMERO.- La Sentencia recaída en 1ª. Instancia en el presente procedimiento sobre incapacidad (Artº. 760 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y ss.), es objeto de recurso por la representación de la tutora (madre de la incapacitada) que, en su apelación (Artº. 458 LEC), considera que las visitas que se fijan en la Sentencia apelada a favor del padre de la incapacitada se realicen en el PEFZ (Punto de Encuentro Familiar de Zaragoza) y bajo su supervisión.

SEGUNDO.- La Sentencia recurrida en el tema objeto del recurso, establece expresamente lo siguiente: "Tercero: Se permite expresamente a su padre, D. José , régimen de visitas respecto a esta hija, , consistente en el derecho de comunicarse con ella, eso sí, gradualmente, el obtener información de su evolución, el lugar donde permanece los días lectivos, el colegio, sito en la calle, de donde podrá recoger todos los viernes que hubiera clase durante este curso escolar 2.011-2.012 y después, según se valore esa estrecha relación de cara a su máximo bienestar personal, se decidirá, desde las 17 a las 20 horas, devolviéndola en el domicilio familiar de su madre, ubicado en la calle de Zaragoza, si bien condicionado siempre todo ello al delicado estado de la incapacitada.".

Se trata pues de un régimen, de momento, temporal y limitado y que permite su progresiva adecuación contando con el estado de salud de la incapacitada, no parece adecuado que en este momento, se cuente con los servicios del PEFZ, sin perjuicio de que esta cuestión pueda ser valorada en su momento dependiendo de cómo evolucione el sistema establecido en la Sentencia apelada y al margen también de lo que puede dilucidarse, en su caso, en la Sentencia de separación o divorcio."

***** Sentencia de la Audiencia Provincial de Huesca de 31 de mayo de 2012. Curatela. Obligación de velar por el cumplimiento del tratamiento psiquiátrico, psicológico y farmacológico del incapaz**

"PRIMERO : El primero de los pronunciamientos impugnados por el demandado es el relativo a la guarda y custodia de la hija del matrimonio, que en la Sentencia de instancia se ha atribuido a la demandante. Trata aquél de apoyar su tesis en el acta de exploración de la menor, la cualno ha mostrado preferencia por vivir con ninguno de sus progenitores sino por hacerlo en Sarvisé, en donde vive el apelante, lo cual será bueno para ella, siempre según el recurso,dado que en un ámbito rural se pueden fomentar una serie de valores importantes para el desarrollo de su persona que no son factibles en una ciudad. Sin embargo, no puede decirse que la voluntad de la menor, tal y como aparece expresada en el acta de exploración, no haya sido tenida en cuenta por la Sra. Juez, quien ha considerado que la especial vinculación que la joven parece mostrar con la localidad de Sarvisé, en donde pasó los primeros años de su vida, puede seguir manteniéndose con el régimen de visitas que ya se había establecido en sede de medidas provisionales y que ahora se mantiene, pues la menor acude a dicha población no sólo los fines de semana que le corresponden a su padre como progenitor no custodio sino también en vacaciones y en otras fechas, ya que, aunque la niña reside en Huesca con su madre, ésta se desplaza prácticamente a diario a Sarvisé, que es donde tiene su negocio o taller de restauración, por lo que ni la menor ni su madre han perdido por completo los vínculos con dicha localidad. Desde otro punto de vista, la menor reside y cursa estudios en Huesca desde hace unos cinco años, habiéndose consolidado una situación de estabilidad desde el punto de vista escolar que, según ha informado el centro, ha sido beneficiosa para el rendimiento académico de la menor, al menos hasta el momento en que las tensiones entre sus padres se han agudizado con ocasión de su crisis matrimonial. Así las cosas, y no pareciendo razonable establecer el entorno más idóneo para la menor a partir de afirmaciones genéricas sobre la vida en un ambiente rural o urbano, asumimos los argumentos desarrollados en la Sentencia de instancia en cuanto a la conveniencia de que la menor continúe en el momento actual bajo la custodia de su madre.

No desconoce la Sala, por otra parte, que el apelante ha solicitado, bien que subsdiariamente, un régimen de custodia compartida, pero poco tiene que añadir la Sala a lo ya razonado al respecto por la Sra. Juez. Puede observarse, en efecto, que a esta cuestion tan sólo se le dedican seis líneas en la contestación/reconvención y siete en el recurso, en cuyas circunstancias resulta difícil admitir que el progenitor proponente del régimen compartido haya presentado un auténtico plan de relaciones familiares a los efectos del *art. 80.2*

del Código Foral Aragonés, pues se limita a decir que el reparto se haga por años alternos sin realizar ninguna otra precisión pese a la evidente longitud de cada período de custodia, por lo que tampoco cabe reprocharle a la Sra. Juez que tilde de indefinida esta petición subsidiaria, por no mencionar, como ya se hace en la Sentencia de instancia, la notable distancia existente entre Sarvisé y Huesca, que pudiera repercutir en perjuicio del desarrollo escolar de la menor, la cual, obviamente, no podrá cursar un ciclo de estudios de manera alterna en dos localidades distintas. Por último, el informe psicológico del Instituto de Medicina Legal de Aragón, en el que se recomienda el mantenimiento del régimen de custodia fijado en el Auto de medidas provisionales (con ocasión de las cuales, por cierto, el hoy apelante nada solicitó en cuanto a la custodia compartida) nos inclina por considerar, como también ha hecho la Sra. Juez, que dicho régimen es el adecuado al interés de la menor, lo que permite, conforme al propio *art. 80.2 del Código Foral*, exceptuar el sistema que la propia Ley Aragonesa ha configurado como preferente.

SEGUNDO : Se recurre asimismo la Sentencia, siempre partiendo de la base de que se mantenga la custodia a favor de la madre, por una cuestión relacionada con el régimen de visitas, en concreto por la designación del domicilio de la madre como lugar de entrega y recogida de la menor, tal y como viene delimitado en la Sentencia de instancia y en su Auto aclaratorio. Observamos al respecto que, si bien en la súplica del recurso se pideque el lugar de entrega de la menor sea Sarvisé, en el cuerpo del escrito se especifica mucho más al afirmarse, sobre la base de que, como se dice en la Sentencia,la madre está todos los fines de semana en Sarvisé y en los periodos de vacaciones, queesta parte[apelante]entiende que lo lógico será que la madre suba junto la niña a Sarvisé, sin que sea necesario que mi representado se traslade hasta Huesca, salvo aquellos fines de semana que por el motivo que sea la madre no quiera o no pueda trasladarse a Sarvisé o cuando sea el padre el que entre semana baje a ver a la niña a Huesca. Dado que la petición, formulada en los términos que acabamos de transcribir, resulta razonable y no parece que pueda producir un gran perjuicio a la demandante, sin que tampoco lesione el interés de la menor, procede acceder a lo solicitado con estimación parcial del recurso en este particular

TERCERO : El tercer motivo de apelación se refiere a la cuantía de la pensión alimenticia a favor de la hija menor, que en la Sentencia se ha fijado en 400 euros mensuales y que el recurrente solicita, siempre partiendo de la base de que se mantenga la custodia a favor de la madre, que se reduzca hasta 300 euros. En este sentido, alega el demandado que el importe de los gastos acreditados de la menor asciende a 190 euros en conceptos de comedor y de actividades extraescolares, mientras que él, por efecto de la crisis, ha experimentado una agravación de la situación patrimonial de su negocio. Sin

embargo, esta circunstancia tampoco ha dejado de ser tenida en cuenta por la Sra. Juez, quien ha rebajado en la Sentencia la pensión de 500 euros inicialmente establecida en sede de medidas provisionales al considerar probado que el apelante se ha visto obligado a reducir el número de horas de apertura al público de su restaurante y a prescindir de una parte de sus trabajadores, pero fijando la nueva cuantía en 400 euros, y no en una cantidad inferior, en consideración al conjunto de las actividades que explota aquél o de las que es titular (turismo de aventura, cabezas de ganado y fincas rústicas, amén del restaurante), las que han conducido a deducir que la capacidad económica del apelante puede ser superior a la que resulta de sus declaraciones fiscales, sin que la Sala, una vez examinada la documentación aportada a los autos, encuentre motivos suficientes para discrepar de esta conclusión.

CUARTO : Finalmente, y en cuanto a la atribución del uso del domicilio conyugal de Sarvisé, que ha correspondido a la madre al tener la custodia de la menor, hay que considerar que lo que se acuerda en la Sentencia es que dicho uso queda limitadohasta que se lleven a cabo las obras necesarias para individualizar los dos apartamentos de los que se compone dicha vivienda, previsión que -y esto no es lo menos importante- no deja de ser coherente con el mandato del *art. 81.3 del Código Foral*, según el cualla atribución del uso de la vivienda familiar a uno de los progenitores debe tener una limitación temporal que, a falta de acuerdo, fijará el Juez. Esta solución tampoco deja de ser razonable teniendo en cuenta que, pese a que la madre y la hija viven en Huesca, ya se ha dicho que la primera mantiene su negocio en Sarvisé y que en alguna otra ocasión se desplaza a dicha localidad, pudiendo estar la menor con ella cuando no se trate de fines de semana en los que le corresponde visita a su padre. En cualquier caso, queda constancia de que han comenzado las obras realizadas a fin de que el inmueble se divida dando lugar a dos apartamentos independientes, en cuyo momento cesará la atribución temporal del uso de la vivienda, por lo que no vemos inconveniente en mantener por ahora esa solución.”

***** Auto de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 10 de julio de 2012. Acogimiento familiar permanente. Eliminación del riesgo. Interés del menor**

"PRIMERO.- El Auto recaído en primera instancia que acuerda el acogimiento familiar del menor (artículo 168 del Código de Derecho Foral de Aragón) es objeto de recurso por el padre biológico de éste, considerando en su apelación (artículo 458 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) que no ha mostrado su aquiescencia al mismo, que lo único que solicita en su momento fue la guarda provisional, que no ha sido oído en el expediente, debiendo cesar las medidas administrativas fijadas.

SEGUNDO.- En todo este tipo de procesos debe estarse al interés superior de los menores como así viene establecido en el artículo 39 de la Constitución Española, ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero sobre Protección Jurídica del Menor, Convención de los Derechos del Niño de 1989, Carta Europea de los Derechos del Niño del Parlamento Europeo, artículo 93 y 154 y siguientes del Código Civil, Ley Aragonesa de la Adolescencia e Infancia, así como Ley Aragonesa de los Derechos de la Persona y Sentencias del Tribunal Constitucional 141/2000, 143/1990 y 114/1992 entre otras muchas.

Es especialmente clarificadora la Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de julio de 2009, que ha establecido como doctrina legal que puede contemplarse la posibilidad de que los padres biológicos puedan asumir nuevamente la patria potestad, que el principio de reinserción en la propia familia está subordinado al interés del menor y que finalmente no basta una evolución positiva de los padres biológicos, siendo necesario que esta evolución sea de tal calibre que suponga la eliminación del riesgo de desamparo del menor y compensen su interés en que se mantenga la situación de acogimiento familiar en que se encuentra, son factores a tener en cuenta tanto el tiempo transcurrido en la familia de acogida si su integración en ella es satisfactoria si se obtienen los medios necesarios para un adecuado desarrollo psico-físico y especialmente si el retorno a la familia biológica comporta riesgo relevante de tipo psíquico.

TERCERO.- La Administración en el presente supuesto inició su actuación con el menor como consecuencia de una solicitud del recurrente en fecha 19 de mayo de 2010, procediéndose el 24 de mayo de 2010, por la Administración a acordar la guarda del menor, declarándose en situación de desamparo, en resolución de 18 de noviembre de 2010.

En el expediente administrativo obra informe social (folio 89 y siguientes) e informe psicológico (folio 94 y siguientes) en relación a la familia de acogida.

Obra acta de audiencia del recurrente en el Juzgado (folio 121).

Igualmente en el informe de 3 de marzo de 2011 en relación al menor, expresamente se indica lo siguiente: se ha mantenido y reafirmado en su sentimientos. No quiere vivir con su padre porque se ha sentido muy maltratado por éste tanto física como psicológicamente. El menor refiere que su madre le abandonó, y no la recuerda apenas. ha cambiado de núcleo familiar en 5 ocasiones. El comportamiento y actitud de desde que fue tutelado ha sido extraordinario en todos los ámbitos. El menor es imaginativo y muy sensible. Está dispuesto a afrontar la vida fuera del contexto familiar. Se considera que respondería muy bien al "buen trato", tiene necesidad de estímulo y confianza. En la actualidad permanece en Residencia. Dado el tiempo que el menor lleva ingresado en la Residencia Medina Albaida se considera que éste ya lleva esperando el tiempo suficiente y necesitaría que se le diese una pronta respuesta", proponiéndose a dicha fecha el acogimiento permanente

De lo actuado parece evidente que la separación del menor de su actual entorno sería perjudicial, teniendo en cuenta que no se garantiza por el apelante que el retorno del hijo sea adecuado para su desarrollo psicológico, no pudiendose asumir el riesgo que ello implica para el menor, por lo que procede mantener la medida de protección acordada (artículo 165,1 y 168,3 del Código de Derecho Foral de Aragón).

Se desestima el recurso confirmando la Sentencia apelada."

***** Auto de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 18 de septiembre de 2012. Adopción. Consentimiento. Interés del menor**

"PRIMERO.- El Auto recaído en primera instancia, aprobatorio de la adopción del menor (artículos 175 a 180 del Código de Comercio) es objeto de recurso por la representación de la madre biológica de aquél, que considera que no se motiva en la resolución, por que no se hace necesario el asentimiento a la adopción, no encontrándose acreditado que las condiciones de desamparo se mantengan en la actualidad respecto al menor.

SEGUNDO.- La recurrente solicitó en su momento demanda sobre necesidad de asentimiento a la adopción que fue desestimada en Sentencia de 29 de junio de 2011, confirmada en Sentencia de 20 de diciembre de 2011, con anterioridad en Sentencia de 2 de octubre de 2009, confirmada por esta Sala el 1 de junio de 2010, se mantuvo la procedencia del acogimiento y con posterioridad se confirmaron en diversas resoluciones el desamparo del menor.

Ciertamente no puede aceptarse la supuesta vulneración de los derechos constitucionales de la recurrente.

TERCERO.- Igualmente debe indicarse en todo este tipo de procesos debe estarse al interés superior de los menores como así viene establecido en el artículo 39 de la Constitución Española, Ley Orgánica 1/1996 de 15 de Enero sobre protección jurídica del menor, Convención de los derechos del Niño de 1989, Carta Europea de los Derechos del Niño del Parlamento Europeo, artículos 93 y 154 y siguientes del Código Civil, Ley Aragonesa de la Adolescencia e Infancia, así como Ley Aragonesa de los Derechos de la Persona y sentencias del Tribunal Constitucional 141/2000, 143/1990 y 114/1992 entre otras muchas.

Es especialmente clarificadora la Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de Julio de 2009, que ha establecido como doctrina legal que puede contemplarse la posibilidad de que los padres biológicos puedan asumir nuevamente la patria potestad, que el principio de reinserción en la propia familia está subordinado al interés del menor y que finalmente no basta una evolución positiva de los padres biológicos, siendo necesario que esta evolución sea de tal calibre que suponga la eliminación del riesgo de desamparo del menor y compensen su interés en que se mantenga la situación de acogimiento familiar en que se encuentra, son factores a tener en cuenta tanto el tiempo transcurrido en la familia de acogida si su integración en ella es satisfactoria si se obtienen los medios necesarios para un adecuado desarrollo psico-fisico y especialmente si el retorno a la familia biológica comporta riesgo relevante de tipo psíquico.

CUARTO.- Por todas las consideraciones anteriormente expuestas es claro que procede mantener la resolución administrativa impugnada, habiendo incumplido los padres biológicos los deberes de protección del hijo menor, por lo que la adopción acordad es beneficiosa para éste, siendo indudable igualmente que cualquier otra decisión podría suponer un riesgo innecesario para la formación integral del menor como así indica igualmente el Ministerio Fiscal.

Se confirma íntegramente la resolución apelada”

***** Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 7 de noviembre de 2012. Adopción. Interés del menor. No necesidad de asentimiento de madre biológica. Declaración de desamparo**

PRIMERO.- La Sentencia de instancia es recurrida por la actora, que suplica su revocación y, se desestime la demanda interpuesta por la D.G.A. (I.A.S.S.) en solicitud de que se proceda a la adopción de la menor S por D. Marcelino y Dña. María del Carmen, alegando, en sustancia, que no obstante la situación que determinó la intervención de la administración, "ha experimentado una más que evidente mejoría en su diagnóstico, lo que le permite atender y cuidar a su hija en las menores condiciones posibles y con plenas garantías".

Hay que sobrentender que por debajo de esos pedimentos está en concreto el de que se declare la necesidad de su consentimiento para la adopción de su hijo.

SEGUNDO.- Del expediente administrativo seguido, como la sentencia objeto de recurso recoge, resulta: que Dña. Azucena, la demandante, sufre un trastorno adaptativo tipo mixto (informe psiquiátrico de 19-6-08); que padece una elevada instabilidad emocional, es impulsiva, poco previsora de las consecuencias de sus actos, y tiene una forma de pensar muy rígida y una baja autoestima; que cambia frecuentemente de pareja, lo que no proporciona estabilidad a la menor, siendo sus relaciones conflictivas; que cambia muy frecuentemente de domicilio, suele compartir la vivienda con terceras personas y sus condiciones higiénicas no son idóneas (vd informe 4-9-09); que no tiene apoyo familiar, ni círculo de amistades; que S, la hija, ha tenido problemas de alimentación, no ha adquirido hábitos de sueño e higiene, tiene retraso en su desarrollo, y la madre llega a reaccionar con ella de forma autoritaria, incluso golpeándola; que la madre carece de habilidades y recursos personales para cubrir las necesidades de la menor, y aunque acepta los objetivos propuestos por la Administración, no tiene capacidad de cambio; que carece de recursos económicos más allá de las ayudas que percibe, y su historial laboral se caracteriza por una gran inestabilidad y contratos de corta duración.

La recurrente, pues, incumplió durante años sus deberes para con su hija, incurriendo así en causal legal de privación de la patria potestad (artículos 170 y 172 C.C.), por lo que no puede condicionar con su consentimiento la adopción de la menor. Y si alega distintos cambios en sus circunstancias que ahora dice la sitúan en condiciones de atender y cuidar a su hija con plenas garantías, hay que señalar:

A) Que esa situación debe quedar acreditada, sin que en el caso lo haya sido, bien entendido que, como declaró la STS 31-7-09 a propósito de una impugnación de desamparo, "para acordar el retorno del menor desamparado a la familia biológica no basta con una evolución positiva de los padres biológicos, ni con su propósito de desempeñar adecuadamente el rol paterno y materno, sino que es menester que esta evolución, en el plano objetivo y con independencia de las deficiencias personales o de otro tipo que puedan haber determinado el desamparo, sea suficiente para restablecer la unidad familiar en condiciones que supongan la eliminación del riesgo de desamparo del menor y compensen su interés en que se mantenga la situación de acogimiento familiar en que se encuentre, teniendo en cuenta, entre otras circunstancias, el tiempo transcurrido en la familia de acogida, si su integración en ella y en el entorno es satisfactoria, si se han desarrollado vínculos afectivos con ella, si obtiene en la familia de acogida los medios necesarios para su desarrollo físico y psíquico, si se mantienen las referencias parentales del menor con la familia biológica y si el retorno al entorno familiar biológico comporta riesgos relevantes de tipo psíquico"; y

B) Que como tienen declarado esta Sala en SAP 20-12-2011, el momento al que hay que referir si los padres biológicos están o no incursos en causa legal de privación de la patria potestad es en principio aquel en el que se decreta el desamparo, perdiendo a partir de entonces interés los cambios que se invocan, que a salvo de que medie la citada prueba no puede prevalecer sobre el hecho objetivo de la dejación anterior de funciones que condujo a la asunción de la tutela de la menor por la Administración y al acogimiento posterior que, en el caso, como resulta del informe de seguimiento de 18-4-11, cumple satisfactoriamente las necesidades de la menor, que se halla perfectamente integrada en su nueva situación familiar, desaconsejando su superior interés la ruptura con la familia de acogida para su reintegración con la biológica. Lo que es razonable y, a tenor de los antecedentes del caso, no cabe desoír en inmerecida consideración a la llamada que la recurrente hace a su condición de madre biológica, en cuanto una constante jurisprudencia concibe la institución de la patria potestad "en beneficio de los hijos", consecuentemente con lo cual –dice la Sentencia del Tribunal Supremo 23.2.199- "si como resulta de la prueba practicada el interés de la menor se satisface de mejor modo en su actual ámbito familiar, debe prevalecer este interés sobre un ejercicio a priori de la patria potestad, dándose, como se dan, los incumplimientos graves de los deberes inherentes a la misma".

Por todo ello, valorada la prueba practicada desde la óptica del interés de la menor y de la prevención de los riesgos de reproducción de anteriores situaciones perjudiciales, se está en el caso de confirmar la sentencia dictada, debiendo ser la demandada simplemente oída en el expediente de adopción,

pues, deviniendo la actual situación del desamparo en que la menor quedó en su día, no se acreditan razones que a la luz de la antedicha doctrina jurisprudencial aconsejen una reconsideración de la situación, no teniendo en suma los recurrentes derecho a condicionar la adopción de su hija con el asentimiento que como regla general exige el artículo 177.2 del Código Civil cuando se trata de los padres biológicos.”

***** Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 4 de diciembre de 2012. Situación de desamparo de un menor. Denegación de prueba testifical. Tutela judicial efectiva. Interés del menor**

"PRIMERO: Dictada por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales Resolución de *5* de julio de 2010, por la que resolvía apreciar la situación de desamparo de la menor S y la asunción de su tutela por la entidad pública, fue presentada demanda de oposición a tal resolución por doña Soraya R P, madre de la menor. Tramitado el oportuno procedimiento por el Juzgado de Primera Instancia número 16 de Zaragoza, fue dictada el día 2 de diciembre de 2011 sentencia desestimatoria de la demanda. Y recurrida tal resolución en apelación, fue desestimado el recurso por la sentencia ahora impugnada ante esta Sala, dictada por la Sección 2ª de la Audiencia Provincial el día 19 de junio de 2012.

La sentencia recurrida considera, resumidamente expuesto, que concurren en el caso circunstancias evidenciadoras de que la evolución positiva del comportamiento de la madre, teniendo en cuenta los antecedentes y altibajos anteriores, no es suficiente para asumir el indudable riesgo que habría para la menor si la recurrente recuperara la atención y cuidados de su hija, y no considera acreditado que, fuera de los periodos positivos, se encuentre la madre en condición de asumir su papel como progenitora.

Frente a la sentencia dictada por la Audiencia Provincial han sido interpuestos recurso por infracción procesal y de casación, por lo que, de conformidad con lo establecido en la disposición final 16ª.1, regla 6ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil procede resolver en primer lugar el de infracción procesal y, caso de su desestimación, el de casación.

SEGUNDO.- El recurso por infracción procesal interpuesto se articula al amparo de la previsión contenida en el artículo 469.1 apartados 3° y 4° de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC en adelante), es decir, por "Infracción de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso cuando la infracción determine la nulidad conforme a la ley o hubiera podido producir indefensión" (apartado 3°) y por "Vulneración, en el proceso civil, de derechos fundamentales reconocidos en el artículo 24 de la Constitución" (apartado 4°). Considera la parte recurrente que la vulneración de normas legales procesales con correlativo efecto de 1a indefensión prohibida por el artículo 24 de la Constitución se produjo cuando, tanto el Juzgado de Primera Instancia como la Audiencia Provincial, denegaron la admisión y práctica de la prueba testifical propuesta por la recurrente.

Según consta en las actuaciones, la demandante interesó en la vista celebrada en el Juzgado de Primera Instancia la práctica de prueba testifical de su madre, abuela de la menor acogida, Dª. Clariver R P y del padre de la menor, D. Manuel O G.

Inadmitida tal prueba, fue de nuevo interesada su práctica en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia finalmente dictada por el Juzgado de Primera Instancia el día 2 de diciembre de 2011. Petición que fue denegada por la Audiencia Provincial al tiempo de admisión de la apelación, en auto de 12 de marzo de 2012, por reputarla innecesaria. Recurrida esta resolución, por auto de 13 de abril de 2012 fue desestimado el recurso y se rechazó la práctica de la mentada prueba, por considerar la Sala que no era trascendente para la resolución del recurso, teniendo en cuenta el posible interés de los testigos en el litigio.

TERCERO.- En coherencia con la fijación del objeto de la prueba a practicar, definido en el artículo 281 de la LEC por relación con los hechos que guarden relación con la tutela judicial que se pretenda obtener en el proceso, luego el artículo 283 de la LEC ordena en su apartado 1 la inadmisión de pruebas impertinentes por no guardar relación con el objeto del proceso. En su apartado 2 prevé igualmente la inadmisión, por su inutilidad en este caso, "de aquellas pruebas que, según reglas y criterios razonables y seguros, en ningún caso puedan contribuir a esclarecer los hechos controvertidos". Finalmente, en su apartado 3, impide la admisión de pruebas de cualquier actividad prohibida por la ley.

Conforme a tales normas el órgano judicial debe primero valorar si, a la vista del concreto fin del litigio, la prueba propuesta por cualquiera de las partes se relaciona con los hechos objeto del proceso con la suficiente relevancia como para entenderla adecuada a la fijación de la realidad de lo sucedido. Luego, deberá considerar igualmente si la prueba de que se trate, aun relacionada con los hechos enjuiciados, puede realmente contribuir a esclarecerlos, conforme a valoración que efectuará por criterios razonables y seguros.

Esta normativa general sobre admisión de prueba encuentra en procedimientos como el actual, en que están implicados menores de edad, importantes especialidades (así, artículo *752* LEC) que tienden, en todo caso, y para mejor salvaguarda de los intereses de los menores, a la búsqueda de la realidad material. Para lo cual se flexibilizan tanto los momentos y formas de aportación de pruebas como la legitimación para su propuesta en el procedimiento. *Y* es que, como ya indicó sentencia 298/1993, de 18 de octubre, del Tribunal Constitucional por referencia a otra (STC 143/1990), en que se anuló una adopción por no oír a la madre biológica: "la importancia de los

derechos e intereses en cuestión obliga a rodear de las mayores garantías y del más escrupuloso celo los actos judiciales que se practiquen en tales procedimientos".

Tesis sostenida después en posteriores sentencias del mismo Tribunal Constitucional, entre las que se considera destacable, por sintetizar la doctrina, la 124/2002, de 20 de mayo, cuando expone:

"En lo que interesa a este recurso de amparo, hemos declarado en relación con el desarrollo de procedimientos de oposición a la declaración de desamparo, de acogimiento y de adopción, que «en este tipo de procesos civiles se encuentran en juego derechos e intereses legítimos de extraordinaria importancia... [tanto] los del menor, como los de sus padres biológicos y los de las restantes personas implicadas en la situación [que], son intereses y derechos de la mayor importancia en el orden personal y familiar, que obligan a rodear de las mayores garantías los actos judiciales que les atañen» (STC 114/1997, de 16 de junio, F. 6; en el mismo sentido STC 298/1993, de 18 de octubre, F. 3). Es lógico, pues, que «dada la extraordinaria importancia que revisten estos intereses y derechos en juego en este tipo de procesos, se ofrezca realmente en ellos una amplia ocasión de alegaciones a quienes ostentan intereses legítimos en la decisión a tomar, así como para aportar documentos y todo tipo de justificaciones atendiendo a un menor rigor formal y a la exclusión de la preclusividad... [pues] lo trascendental en ellos no es tanto su modo como su resultado» (STC 187/1996, de *25* de noviembre, F. 2). En este sentido no puede dejar de traerse a colación la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989 ratificada por España el día 30 de noviembre de 1990, que prevé que en cualquier procedimiento entablado con ocasión de la separación del niño de sus padres «se ofrecerá a todas las partes interesadas la posibilidad de participar en él y de dar a conocer sus opiniones» (art. 9.2)."

Sentencia en la que, como conclusión se recoge: "Los procedimientos de oposición a la declaración de desamparo, de acogimiento y de adopción, como este Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de declarar en relación con el procedimiento de separación matrimonial, dado su carácter instrumental al servicio del Derecho de familia (STC 4/2001, de 15 de enero, F. 4), no se configuran como un simple conflicto entre pretensiones privadas que ha de ser decidido jurisdiccionalmente como si de un conflicto más de Derecho privado se tratara, sino que en relación con tales procedimientos se amplían «ex lege» las facultades del Juez en garantía de los intereses que han de ser tutelados, entre los que ocupa una posición prevalerte, como ya se ha señalado, el interés superior del menor. (cfr. Art. 1826 LECiv)".

CUARTO.- El criterio indicado, de exigencia de interpretación extensa de la posibilidad de acreditación en procedimiento como el presente se completa, incluso, con la posibilidad establecida por la doctrina del Tribunal Supremo, fijada de modo expresamente en sentencia de 31 de julio de 2009, de que puedan valorarse y acreditarse circunstancias posteriores el momento de inicio del procedimiento. Así, en tal resolución, el Alto Tribunal indicó: "La jurisprudencia ha proclamado como principio rector de los procesos sobre medidas de protección de los menores la necesidad de que prevalezca su interés como principio prioritario, evitando que la formalidad de la controversia procesal pueda perjudicarlo (SSTS 21 de diciembre de 2001, 12 de julio de 2004 , 23 de mayo de 2005).

La jurisprudencia constitucional, dada la importancia de los intereses de orden personal y familiar de los menores, de los padres biológicos y de los restantes afectados, ha admitido la existencia de un menor rigor formal en este tipo de procesos; ha declarado que no se configuran como un simple conflicto entre pretensiones privadas, sino que se amplían ex lege [por ley] las facultades del Juez en garantía de los intereses que han de ser tutelados, entre los que ocupa una posición prevalente el interés del menor (STC 58/2008, de 28 de abril, FJ 2); y ha consagrado la legitimidad constitucional de la que llama «la exclusión de la preclusividad» (SSTC 75/2005, de 4 de abril 58/2008, de 28 de abril), es decir, de la exclusión de los efectos del principio de preclusión, según el cual la clausura de una fase o plazo procesal impide replantear lo ya decidido en ella.

El artículo 413 LEC, como una manifestación de este principio, consagra el principio de perpetuación de la acción (...). Este principio tiene como finalidad institucional el mantenimiento de la seguridad jurídica como garantía de la contradicción e igualdad de oportunidades de defensa y admite excepciones, como la posibilidad de formular alegaciones complementarias para la integración del objeto del proceso (artículo 412 LEC), y la posibilidad de tomar en consideración modificaciones posteriores al inicio del juicio cuando lo imponen razones de interés público o general relacionadas con el objeto del proceso que determinan que éste se rija por los principios de oficialidad y verdad material o que deba atenderse de manera prevalente a fines institucionales superiores a los de la seguridad jurídica y garantía de contradicción que presiden su desarrollo.

Esto último sucede en el tipo de proceso que estamos examinando, en el que el CC ordena que «se buscará siempre el interés del menor» (artículo 172.4 CC). Este precepto, como expone el Ministerio Fiscal, atribuye al interés del menor desamparado un carácter prevalente en la adopción y revisión jurisdiccional de las medidas de control en consonancia con los tratados

internacionales ratificados por España y presta suficiente apoyo legal, a juicio de esta Sala, a la exclusión del principio perpetuatio actionis [perpetuación de la acción] que rige en el proceso civil. En consecuencia, esta Sala sienta la doctrina de que es procedente que el juez, al examinar la impugnación de la declaración de desamparo por la Administración interpuesta al amparo del artículo 172.6 CC, contemple el cambio de circunstancias producido con posterioridad al momento en que se produjo la declaración con el fin de determinar si los padres se encuentran en condiciones de asumir nuevamente la patria potestad."

Conclusión de lo expuesto es, por tanto, que la clara prevalencia del interés del menor en casos como el presente exige la búsqueda de la realidad de lo acontecido y enjuiciado de la manera más completa que sea posible, atendiendo con amplitud interpretativa la posible admisión de pruebas, sean propuestas por una u otra parte, o de oficio por el tribunal e, incluso, con atención a lo sucedido con posterioridad al momento de presentación de demanda.

QUINTO: Al tiempo de resolver el actual recurso por infracción procesal, en que se trata de cuestión que afecta de modo muy trascendente a una menor de edad, es necesario tener en cuenta las anteriores consideraciones legales y jurisprudenciales, lo que conduce a la valoración de si, en el caso presente, fue realmente permitida la exposición en el procedimiento de cuantos datos y circunstancias afectantes al menor implicado fueran relevantes para concluir, finalmente, si la situación de desamparo existía con tal intensidad como para dar lugar al acogimiento o si, en cambio, cabía entender que no existía el desamparo, o bien que su importancia no era tan grave como para la decisión de acogimiento tomada.

Las primeras de las dos pruebas cuya práctica fue denegada consistía en toma de declaración a la abuela del menor por línea materna. Según resulta del expediente administrativo tramitado que citan como referencia las sentencias de instancia, la posible situación de desamparo del menor fue observada desde el momento de su nacimiento, el día 17 de junio de 2008, lo que dio lugar a que se acordara su acogimiento el 19 de septiembre de 2008. El cambio de las circunstancias iniciales llevaron, sin embargo, a acordar el reintegro del menor con su familia el día 29 de mayo de 2009, y entre tales circunstancias se tuvo en cuenta que la abuela de la menor, además de su bisabuela, eran la familia extensa con cuyo apoyo podía contar la madre para cuidado de la niña. Se deduce así que la abuela materna, que no consta que esté afectada por toxicomanías o inmersa en ambientes marginales como sucede con la madre, es conocedora de primera mano de la situación y entorno familiar en que ella misma se encuentra, lo que, en definitiva, la configura como un testigo de relevancia máxima para fijar con certeza los hechos a valorar.

La segunda prueba cuya denegación tuvo lugar fue la testifical del padre de la niña acogida. Ciertamente, como consta con claridad en las actuaciones, su atención a la menor dista con mucho de ser mínimamente correcta. Pero es claro también que no ha estado totalmente ausente de la vida familiar. La probada desatención que haya podido tener respecto de su hija no obsta, por tanto, a los efectos que ahora interesa, para que sí sea conocedor directo de aspectos relevantes que afectan a la niña y su entorno, por lo que, al igual que sucede con la abuela de la menor, es testigo de importancia para permitir al tribunal conocer datos de indudable trascendencia para fijar, con la claridad necesaria, si realmente es más conveniente para la niña su permanencia con la madre o su acogimiento por otra familia.

SEXTO.- En consecuencia, respecto de ambas pruebas testifícales se dan las circunstancias legal y jurisprudencialmente sentadas para considerarlas necesarias, por ser de plena relevancia para conocer, a favor de la mejor defensa del interés de la menor, su situación real, incluso lo que pueda haber acontecido después de iniciado el procedimiento. La omisión de su práctica en el procedimiento seguido ante la Audiencia Provincial supuso así la privación injustificada de acceso a la plena tutela judicial, y con efecto de posible indefensión por falta del mayor conocimiento posible de los hechos a enjuiciar.

Se dan, por tanto, los requerimientos exigidos por el artículo 469.1 motivos 3º y 4º de la LEC para la estimación del recurso por infracción procesal que ha sido formulado, incluida la necesaria actividad de la parte afectada interesando la subsanación de la falta cometida que ordena el artículo 460.3 de la LEC, lo que conlleva la reposición de actuaciones desde el momento anterior al dictado del auto de 12 de Marzo de 2012 en el rollo de apelación, que se anula, al igual que todas las actuaciones posteriores y la sentencia recurrida, debiendo la Audiencia Provincial practicar las pruebas que fueron denegadas y continuar con la tramitación del recurso de apelación hasta dictar nueva sentencia con arreglo a derecho.

Estimado el recurso por infracción procesal, deviene improcedente resolver sobre el recurso de casación igualmente presentado. “

***** Sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Calatayud de 4 de diciembre de 2012. Incapacidad. Tutela. Supuestos de necesidad de autorización judicial**

"PRIMERO.- El artículo 200 del Código Civil prevé como causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí misma. Así mismo, el artículo 760.1 LEC prevé que la sentencia que declare la incapacitación determinará la extensión y los límites de ésta.

De las pruebas practicadas en autos, con especial relevancia de la pericial médico forense, ha quedado acreditado que R sufre trastorno mental orgánico compatible con un cuadro de demencia de tipo alzheimer en estadio grave (GDS-7)

El Médico Forense refiere en sus conclusiones que dicha patología es incurable y progresiva en el tiempo y reúne los requisitos de permanencia y afectación de las funciones físicas y psíquicas que determinan la capacidad de conocer y de determinarse libremente, por lo que, como consecuencia del mismo deber considerarse al paciente como física y psíquicamente incapaz de regir su persona y de administrar sus bienes.

Teniendo en cuenta que la capacidad de R está anulada no sólo en la esfera patrimonial, sino personal, corresponde declarar su incapacidad total, con los correlativos efectos de ser privada del derecho de sufragio activo y pasivo, en aplicación de lo establecido en el artículo 3, párrafo primero, letra b) de la Ley Orgánica de 19 de junio de 1985 reguladora del Régimen Electoral General y de librar al Registro donde se encuentra inscrito su nacimiento la correspondiente comunicación a fin de que tomen nota de la declaración de incapacidad, de acuerdo con el artículo 755 LEC.

SEGUNDO.- El artículo 760.1 LEC prevé que la sentencia que declare la incapacitación determinará el régimen de tutela o guarda a que haya de quedar sometido el incapacitado. Así mismo el párrafo 2 del mismo artículo prevé que en la sentencia que se declare la incapacitación se nombrará a la persona o personas que, con arreglo a la Ley, hayan de asistir o representar al incapaz o velar por él, cuando en la demanda se hubiera solicitado su nombramiento.

Atendiendo a la declaración de incapacidad total de la demandada, el régimen al que ha de quedar sujeto es al de tutela.

R tiene esposa y dos hijas mayores de edad. Tanto la esposa como sus dos hijas, manifestaron en el acto del juicio que estaban de acuerdo en que fuera nombrada tutora M.

En atención a que la propia M manifestó su deseo de ser la tutora de su padre, y que su madre y hermana mostraron su conformidad, procede su nombramiento conforme dispone el artículo 116 del Código del Derecho Foral de Aragón.

Así mismo, el organismo tutelar deberá inscribirse en el Registro Civil del domicilio del tutelado (artículo 89 y 90 de la Ley de Registro Civil), siendo este Juzgado quien de oficio acuerde dicha inscripción.

TERCERO.- El ejercicio del cargo tutelar aparece regulado en los artículos 136 y siguientes del Código del Derecho Foral de Aragón.

El artículo 136 establece en su párrafo primero que "*las funciones del tutor del menor dependen de la edad de este y tienen en cada etapa de su evolución el mismo contenido que la autoridad familiar de los padres, con las modificaciones previstas en este Título*".

El párrafo segundo establece que "*las funciones del tutor de incapacitado serán las que señale las sentencia de incapacitación. En su defecto, se considerará que tienen el mismo contenido que la autoridad familiar sobre los hijos menores de catorce años, con la modificaciones previstas en este Título*".

Los artículos 15 y siguientes del Código del Derecho Foral de Aragón regula todos los actos en los que el tutor, actuando en representación del incapaz, deberá recabar autorización judicial.

No obstante, el Código Civil, en su artículo 271 establece igualmente los actos en los que el tutor requiere autorización judicial, siendo dicho artículo más minucioso y recogiendo más supuestos en los que el tutor requiere autorización judicial. Así, a modo de ejemplo, el Código del Derecho Foral de Aragón no prevé como supuesto en el que el tutor requiere autorización judicial, el ingreso de incapaz en estableciendo de salud mental o de educación o formación especial, que sí prevé el artículo 271 del CC.

Por todo ello, se declara expresamente en esta sentencia que el tutor requerirá autorización judicial para realizar los actos que prevé el artículo 271 del CC, y de cuyo contenido se informará al tutor en el momento de tomar posesión de su cargo, haciéndole entrega del acta de toma de posesión con la relación de actos que requieren autorización judicial.

De acuerdo con el artículo 141 del mismo texto legal y del artículo 262 CC el tutor está obligado a hacer inventario de los bienes del tutelado dentro del plazo de sesenta días, a contar de aquél en que hubiese tomado posesión de su cargo.

Si bien el Código del Derecho Foral de Aragón no prevé la obligación del tutor de rendir anualmente cuentas sobre la administración de los bienes, sin embargo, sí que lo prevé el Código Civil en artículo 269.4º.

Ante tal vacío normativo del Código Civil aragonés, procede manifestar, en interés del incapaz que los tutores deben rendir cuentas anualmente, además de realizar inventario de bienes al comienzo del ejercicio de su cargo."

66. RÉGIMEN ECONÓMICO CONYUGAL

663. RÉGIMEN LEGAL

***** Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 14 de Zaragoza de 17 de enero de 2012. Inmueble adquirido para sociedad conyugal. Actos de defensa de bien consorcial**

"PRIMERO. - La actora, copropietaria de una vivienda arrendada a la demandada en fecha 11 de octubre de 2010, reclama en las presentes actuaciones la condena de la misma al pago de la cantidad total de 1.224'50 euros, importe a que ascienden las tres partidas o apartados, siguientes: mensualidad del mes de mayo de 2011 (400 euros), fianza arrendaticia que tenía que abonar la inquilina (400 euros), y mitad del coste de instalación de una nueva caldera en el piso (324'50 euros) . La demandada se opone a dicha pretensión alegando, aparte de la cuestión procesal a la que seguidamente se aludirá, que no adeuda ninguna de las cantidades reclamadas.

SEGUNDO.- Respecto a la citada cuestión (falta de legitimación activa de la demandante por no ser ella la titular del contrato de arrendamiento ni quien ha abonado la factura reclamada ni depositado la fianza en la DGA) hay que rechazar la misma pues según consta acreditado en autos (escritura de compraventa de la vivienda) ésta fue adquirida por el esposo de la actora (sr. C) para su sociedad conyugal, por lo que nos encontramos ante un bien consorcial (art. 210.2 b del Código de Derecho Foral de Aragón), estando legitima o cada cónyuge para realizar por sí solo sobre los bienes que integran el patrimonio común actos de defensa, judicial o extrajudicial (art. 230, c), que es lo que aquí ha ocurrido, por lo que ninguna objeción cabe hacer a la legitimación de la actora para accionar.

TERCERO: Pasando a conocer del fondo del asunto, de las tres partidas en que la actora funda su reclamación, ninguna duda cabe, a la vista de la prueba documental practicada, que la demandada mantuvo en su poder las llaves de La vivienda hasta el 24 de mayo de 2011, fecha en que se procedió a consignar judicialmente las mismas en el Juzgado Decano, no habiéndose acreditado la existencia de ningún ofrecimiento previo por carta o burofax, por lo que procede

estimar esta pretensión viniendo obligada la demandada al pago de la cantidad de 400 euros por este primer concepto.

CUARTO. - En lo que se refiere a la fianza arrendaticia, ninguna referencia se hace a ella en el contrato de arrendamiento, pero esto no es óbice para reconocer que la misma, cuya prestación es obligatoria (art. 36.1 LAU) así como su depósito en la DGA, fue efectivamente entregada en la Sección de fianzas arrendaticias, según documentación acompañada por la actora, entrega que llevó a cabo el esposo de ésta, no constando que la misma haya sido recuperada actualmente. Como quiera que no existe prueba alguna de que la misma hubiese sido entregada por la inquilina también procede condenarla a su abono, si bien recordando a la propiedad que la finalidad de la misma, salvo pacto distinto de los contratantes, es hacer frente a los desperfectos que se puedan ocasionar en el inmueble arrendado, y que caso de que éstos no existan, o sean inferiores a su cuantía, tiene derecho la inquilina a recuperarla en todo o en la parte restante.

QUINTO. - Por último, y en relación al cambio de la caldera, es cierto que en la cláusula undécima del contrato se establece que "los gastos que se produjeran derivados de la avería o rotura de la caldera será a partes iguales entre el inquilino y el propietario", señal inequívoca de que en el momento de iniciarse la relación arrendaticia la misma, de cierta antigüedad, ya daba problemas, asumiendo la inquilina dicha circunstancia y acreditando que ha satisfecho diversas facturas de reparación por este motivo, pero no es menos cierto que habiendo abandonado la vivienda en cuestión en el mes de mayo, como ya se ha indicado, no es sino hasta el mes de noviembre de ese año (seis meses después) cuando se procede por la propiedad a sustituir la misma tras considerar que no merece la pena su arreglo dado el coste; por tanto, y dado el tiempo transcurrido, no es posible asegurar que la demandada abandonase la vivienda con la caldera estropeada y no debe aplicarse, por tanto la mencionada cláusula.”

***** Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 21 de febrero de 2012. Liquidación sociedad consorcial. Activo y pasivo**

"PRIMERO.- Recurre Dª Herminia la Sentencia dictada en la instancia, suplicando su revocación parcial y se excluyan como partidas del activo las dos extracciones de 3.000€ y 4.000€ realizadas por la demandada de la cuenta de ahorro del Banco Pastor nº , o, de no acordarse así se incluyan también todas las extracciones realizadas por el demandante no justificadas de sus cuentas bancarias, y se incluyan en el pasivo las cantidades consignadas en los recibos bancarios obrantes a los folios 328, 329 y 332 de las actuaciones.

SEGUNDO.- Circunscribiéndose el recurso a esas dos cuestiones exclusivamente procede analizar la procedencia de tales pretensiones.

Por lo que respecta a las dos extracciones de 3.000€ y 4.000€ que se imputan a Dª Herminia de la cuenta de su titularidad en Banco Pastor nº , realizadas en junio de 2008, que no en agosto, y en enero de 2009, respectivamente, Banco Pastor informó en mayo de 2010 (folio 89 de las actuaciones) que dicha cuenta aparece abierta en agosto de 2004, figurando ella como única titular.

La Sentencia impugnada fija la disolución de la sociedad conyugal de los litigantes en la fecha de la sentencia firme de divorcio de 6 de marzo de 2009. Se trata por tanto de movimientos realizados con anterioridad a la disolución, y vigente entonces la comunidad conyugal.

El demandante, D. Enrique , realizó también en fechas similares, y anteriores, extracciones de cuentas en las que figura como titular, así en la cuenta nº de BBVA, se reflejan disposiciones en efectivo de 2.200€ en julio y diciembre de 2007, y de 2.900€ en diciembre de 2008 (folios 185 y 187), y en la cuenta de IberCaja nº , aparecen disposiciones en marzo de 2005 de 3.000€, de 9.000€ en octubre de 2006 y de 2.400€ en enero de 2007 (folios 200, 209 y 212).

Estas disposiciones ni se han justificado, ni se han incluido en el activo del inventario, pese a tratarse de cuentas consorciales, y fueron realizadas también antes de la disolución de la sociedad conyugal.

La cuenta de Banco Pastor nº se ha incluido en el activo por el Juzgador, con el saldo existen en la fecha de disolución (apartado b) del activo).

El artículo 262 del Código de Derecho Foral de Aragón establece que en el activo se incluirán los bienes y derechos que se hallen en poder de los cónyuges o partícipes al tiempo de formalizar el inventario, así como aquellos que se pruebe existían al cesar la comunidad matrimonial.

Las sumas dinerarias impugnadas no existían al tiempo de la disolución, deben entenderse aprovechadas en beneficio común o de uno y otro cónyuge, lo mismo que las extraídas por el Sr. V y consignadas anteriormente.

Todo lo razonado conduce a la necesaria exclusión de dichas sumas del activo de la sociedad conyugal y a la anulación del apartado g) del Fundamento Jurídico Segundo.

TERCERO.- En cuanto a la partida del pasivo impugnada, Dª Herminia solicita en su recurso se incluyan en el pasivo de la sociedad conyugal las cantidades abonadas por Dª Cristina, hija de los litigantes, para el pago de las cuotas de la hipoteca de la vivienda consorcial y gastos de Dª Herminia, que figuran a los folios 328 a 329 y 332 de las actuaciones.

El Juzgador excluye estas sumas por desconocer las razones de dichos pagos en el apartado d) del pasivo del Fundamento Jurídico Segundo.

Dª Cristina declaró en el juicio que tuvo que pedir un préstamo de unos 17.000€ para afrontar dichos pagos.

Los documentos obrantes a los folios mencionados constatan transferencias de 13.000€ y 2.000€ el 3 y 4 de diciembre de 2007, realizadas por Dª Cristina en la cuenta de IberCaja nº de Dª Herminia, y un abono de 1.240€ hecho en efectivo el 29 de mayo de 2009, hecho por aquélla en la misma cuenta.

Dichos ingresos aparecen en el extracto bancario aportado (folio 160 y siguientes), también que el 4 de enero de 2007 se destinó el saldo resultante de los dos primeros ingresos al pago de préstamo-crédito, lo mismo que el de 2009, pues en la misma fecha 29 de mayo de 2009 figura un abono para préstamo, quedando la cuenta entonces con un saldo de 29'65€.

Es pues claro el destino dado a esos ingresos acreditados y el origen del dinero.

Debe incluirse la suma total, 16.240€ en el pasivo del inventario, como crédito de la sociedad conyugal a favor de Dª Cristina , hija de los litigantes."

***** Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 29 de febrero de 2012. Formación y aprobación de inventario para liquidar el régimen económico matrimonial. Inclusión de partición de la herencia. Afectación de derechos hereditarios. Criterio de prohibición de ir contra los propios actos**

"PRIMERO.- *Hechos relevantes*

De las actuaciones practicadas en las instancias resultan los siguientes hechos relevantes:

1. D. F C G contrajo matrimonio con Dª T J G, en fecha no determinada pero anterior al año 1923. De dicha unión nacieron dos hijos, llamados A C J y F C J.
2. Dª A C J falleció en estado de soltera y sin descendientes.
3. Dª T J G falleció, antes de 1923, sin que conste que otorgase disposición testamentaria ni que se haya obtenido declaración de herederos abintestato.
4. D. F C G contrajo segundas nupcias, el día 7 de septiembre de 1923, casando con Dª F P A. De dicha unión nacieron dos hijos, llamados D. F C P y D. B C P.
5. D. F C G falleció el 9 de junio de 1937, durante la guerra civil española.
6. Dª F P A falleció el 31 de mayo de 1986. Por acta de notoriedad de 1 de diciembre de 2003 se declaró herederos abintestato a sus hijos D. B y D. F-F C P, por iguales partes entre ellos.
7. D. F C J contrajo matrimonio el 31 de enero de 1948 con Dª C A M, de cuya unión nacieron dos hijos, llamados D. F C A y Dª T C A.
8. D. F C J falleció el 29 de enero de 2000.
9. Dª C A M falleció el 21 de mayo de 1971.

SEGUNDO.- *Actos procesales relevantes*

La representación procesal de D. B C P interpuso demanda en petición de división y adjudicación de la herencia de Dª F P A, su madre, que se tramitó ante el Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de Teruel, bajo el número 229/2003. En dicho proceso recayó sentencia de fecha 2 de noviembre de 2004, desestimatoria de la pretensión ejercitada. Dicha sentencia fue confirmada por otra de la Audiencia Provincial de Teruel de 3 de marzo de 2005, fundando la desestimación de la demanda y, por tanto, la confirmación de la sentencia de primera instancia, en que ha de determinarse el haber de la fallecida Dª F liquidando su sociedad conyugal, previamente a la división y adjudicación de su herencia.

Posteriormente D. B C P interpuso nueva demanda en solicitud de inventario para la liquidación del régimen económico conyugal de D. F C G y Dª F P A, sus padres. La parte actora proponía un inventario, en el que no incluía los bienes inmuebles urbanos y rústicos sitos en , por considerarlos privativos de Doña F P A. En dichos autos recayó sentencia de primera instancia el 12 de noviembre de 2007, por la que se aprobó el inventario realizado, no incluyendo la adición de bienes solicitada por la parte demandada. Recurrida en apelación, la sentencia de la Audiencia Provincial de Teruel de 24 de junio de 2008 estimó parcialmente el recurso y acordó la inclusión en el activo de la sociedad conyugal de D. F C y Dª F P A las tres cuartas partes de los bienes consistentes en: Casa situada en ; solar situado en ; y bancal en paraje denominado ...".

Finalmente, el demandante D. B C P, por escrito presentado en fecha 19 de septiembre de 2009, insta del juzgado que una vez determinado el inventario de bienes correspondientes al consorcio conyugal, procede la prosecución del expediente judicial al objeto de llevar a término la liquidación del régimen económico matrimonial de D. C G y Dª F P A, sus padres, frente a los demandados D. F C P, D. F C A y Dª T C A, hermano y sobrinos de vínculo sencillo del actor. Seguidos los autos por sus trámites, y al existir desacuerdo entre las partes, se designó contador-partidor, que elaboró su cuaderno particional, estableciendo el inventario y avalúo de los bienes, procediendo a la liquidación, división y adjudicación de los mismos, con las compensaciones necesarias por defectos o excesos de adjudicación. Formulada oposición, se celebró la oportuna vista, tras lo cual recayó la sentencia de primera instancia, de fecha 27 de julio de 2010, aprobatoria de las operaciones realizadas por el contador-partidor para la división del patrimonio. Concretamente, la sentencia desestima la oposición formulada respecto a la adjudicación de la casa sita en , oposición que se fundaba en la indivisibilidad de dicho inmueble, y la relativa a la inclusión en el inventario de una cuarta parte de los bienes, que la parte demandada consideraba privativos de Dª F P A.

Dicha resolución ha sido confirmada por la Audiencia Provincial de Teruel, en sentencia nº 96, de 28 de junio de 2011, que es ahora objeto de recurso.

TERCERO.- *Motivos del recurso*

El recurso de casación se interpone al amparo del artículo primero de la Ley 4/2005, de 14 de junio, sobre casación aragonesa, e invoca como infringidos los siguientes preceptos: artículo 15 de la Ley 3/1985, de 21 de mayo, sobre Compilación del derecho civil de Aragón; art. 57 del Apéndice del Código Civil correspondiente al derecho foral de Aragón, aprobado por Decreto de 7 de diciembre de 1925; disposición transitoria segunda de la Ley 2/2003, de 12 de febrero, sobre régimen económico matrimonial y viudedad; art. 77 y 80 del mismo texto legal; y arts. 806 a 810 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El artículo 15 de la Ley 3/1985, dictada para adaptar la Compilación del Derecho Civil de Aragón a la Constitución de 1978, modificó entre otros el artículo 59 de la Compilación, estableciendo que *Cuando, extinguida la comunidad, contrae uno de los anteriores cónyuges ulteriores nupcias sin previa división, se hará separadamente liquidación de cada comunidad, incluso de la continuada, si la hubiere. Entre ellas se verificarán los reintegros y reembolsos que procedan.*

El artículo 57 del Apéndice del Código Civil correspondiente al derecho foral de Aragón establecía las reglas para dividir el neto haber remanente de la "sociedad conyugal tácita", siendo este precepto el que regía al tiempo de la disolución del régimen económico conyugal del matrimonio concertado entre D. F C G y Doña F P A , lo que acaeció por fallecimiento del marido el día 9 de junio de 1937. No obstante, para la liquidación no es de aplicación dicho precepto.

Según la Disposición Transitoria Primera de la Ley aragonesa 2/2003, *Aplicación inmediata: Las normas de esta Ley serán aplicables de inmediato, cualquiera que fuere la fecha de celebración del matrimonio o de inicio del usufructo vidual, con las excepciones señaladas en las disposiciones siguientes.*

No existiendo excepción aplicable al caso, las normas de la Ley 2/2003, especialmente los artículos 79 y 80, vigentes al tiempo de interposición de la demanda y hoy incorporados al Código de Derecho Foral de Aragón, son las aplicables al caso, en cuanto a la realización del inventario del patrimonio consorcial que se disuelve y a los bienes y derechos que integran el activo.

Los artículos 806 a 810 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se integran en el Capítulo II, *Del procedimiento para la liquidación del régimen económico matrimonial,* y establecen la forma de proceder para llevar a efecto esa liquidación, especialmente en lo relativo a la formación del inventario y ulterior liquidación.

Todos estos preceptos se refieren, sustantiva o procesalmente, a la liquidación de la comunidad consorcial y a la inclusión de bienes en su activo, y por ello serán objeto de examen conjunto. No obstante, la Sala no va a entrar en el examen de la cuestión procesal, puesto que en el motivo de recurso no se invoca vulneración de las garantías procesales, previstas en dichos preceptos.

Por otra parte, el recurso invoca la infracción de los arts. 401 y 404 del Código Civil, relativos a la indivisibilidad de los bienes comunes, en relación con los arts. 1061 y 1062 del Código Civil, sobre el modo de realizar la partición que ha de guardar la posible igualdad en los lotes y la indivisibilidad de la cosa.

CUARTO.- *Determinación del alcance del debate procesal*

La Audiencia Provincial tiene presente la complejidad de las cuestiones debatidas en el proceso y examina las pretensiones formuladas en el mismo. En el fundamento jurídico segundo de la sentencia recurrida expresa, tras valorar la situación planteada en los escritos de formalización de recurso y su

impugnación, que "*el tribunal no alberga duda alguna de cuál es el objeto de la impugnación, que no es otro que la desaprobación del cuaderno particional elaborado por el contador-partidor con fundamento en el indivisibilidad de la vivienda de la C/ y la inclusión en la partición de la parte correspondiente a los bienes privativos de Dª F*".
En los siguientes apartados, expone las razones que conducen a la desestimación de los dos motivos de impugnación, para concluir rechazando el recurso de apelación deducido contra la sentencia de primera instancia.

QUINTO.- *Inventario de los bienes objeto de liquidación*
Se trata de la liquidación del régimen económico matrimonial correspondiente a los cónyuges D. F C G y Doña F P A, disuelto por fallecimiento del marido.

El inventario quedó fijado en sentencia de la Audiencia Provincial de Teruel de fecha 24 de junio de 2008, conforme se ha expuesto *supra*. Por tanto, las tres cuartas partes de los bienes consistentes en casa situada en C/ ; solar situado en ; y bancal en paraje denominado ", integran el haber de la sociedad conyugal. Este pronunciamiento produce, en esta fase del proceso, efecto de cosa juzgada material, en su función positiva o prejudicial.

Realmente el alcance de las operaciones realizadas por el contador-partidor para la división del patrimonio, y su aprobación judicial en este proceso, debía extenderse solamente a tales bienes. Así se desprende del contenido de los artículos 76 y siguientes de la Ley aragonesa 2/2003. Expresamente, el artículo 87 prevé la división de varias comunidades, y ordena que se lleven a cabo separadamente.

En el caso de autos el matrimonio contraído entre D. F C G y Dª F P A, el día 7 de septiembre de 1923, se disolvió por muerte del marido, acaecida el 9 de junio de 1937. Quedó entonces constituida la comunidad conyugal continuada conforme al artículo 53 del Apéndice foral, entonces vigente. El contador-partidor ha tenido en cuenta las circunstancias acaecidas respecto del consorcio cuya liquidación se insta, especialmente la muerte posterior de la viuda, y ha realizado la propuesta de partición y adjudicación de bienes incluyendo el total de los bienes, no sólo las tres cuartas partes. Pero lo hace teniendo en consideración que dos de los litigantes son herederos de Doña F, como hijos únicos de ella. Así, establece una hijuela para Don B C P, *en pago de sus haberes de las herencias de sus padres D. F y Dª F,* y lo mismo hace para D. F C P. De este modo liquida el consorcio conyugal y la herencia de la madre, que comprendía, como haber partible, una cuarta parte de dichos bienes, como privativos de ella, además de su participación en el consorcio.

La forma de llevar a efecto esta liquidación y adjudicación no afecta a los derechos de los restantes litigantes, ni perjudica las pretensiones de los recurrentes.

Resulta así la innecesaridad de liquidaciones separadas en supuestos en que no existe complejidad respecto a los bienes y derechos que determinan el

haber partible, ni deudas que puedan afectar a su fijación. Aunque varias sentencias del Tribunal Supremo han mantenido que *la nulidad de la partición de herencia por falta de la previa liquidación de la comunidad de gananciales es incuestionable* -STS de 2 de noviembre de 2005, 14 de diciembre de 2005, 15 de junio de 2006 y 7 de noviembre de 2006-, esa doctrina no es aplicable al caso, pues aquí se incluye la partición de la herencia en la liquidación del consorcio, sin que queden afectados los derechos hereditarios. Como expresa la Sentencia de la Audiencia Provincial, *el contador partidor ha tenido en cuenta dicha circunstancia al elaborar el cuaderno particional adjudicando esa porción de bienes privativos entre sus dos hijos declarados herederos abintestato de la misma, no teniendo sentido abocar a las partes a un nuevo procedimiento de división para llevar a efecto la adjudicación de aquellos bienes.*

Por todo lo expuesto, el motivo de recurso respecto a esta cuestión ha de ser desestimado.

SEXTO.- *Indivisibilidad de la casa*

El motivo relativo a la indivisibilidad de la casa, sita en calle , tampoco ha de gozar de favorable acogida. Esta pretensión fue desestimada en la primera instancia porque *la representación en el proceso de los demandados expresó en el escrito de oposición de fecha 7 de enero de 2008* (realmente, presentado el 7 de enero de 2009) *que "...resulta que mis representados tienen mayor porcentaje total que el demandante por lo que pare evitar divisiones lo procedente es que a estos se les adjudique la vivienda del número y el solar de la calle ...".* Se remite la sentencia a la doctrina de los actos propios, entiende que existe una contradicción por parte de la representación de los demandados, y concluye aprobando las operaciones de división del patrimonio realizadas por el contador-partidor.

La Audiencia de Teruel confirma este pronunciamiento, entendiendo que si la parte demandada, en ese momento apelante, solicitaba explícitamente la adjudicación de la vivienda proindiviso entre los demandados, *es porque consideraba aquella esencialmente divisible.*

El motivo de recurso de casación se desestima. No por aplicación de la doctrina civil de los actos propios, que requiere un acto de la propia persona "cuya realización vaya encaminada a crear, modificar o extinguir algún derecho... y ha de ser concluyente e indubitado y de carácter inequívoco" –STS 529/2011, de 1 de julio -, y en este caso se trata de escrito de la representación procesal. Pero sí porque el debate en el proceso quedó configurado por las posiciones de las partes respecto de la controversia que era objeto de la litis. Como afirma la STS 691/2011, de 18 de octubre, ese criterio según el cual nadie puede ir contra sus propios actos, aplicado al proceso, *constituye una manifestación del principio de buena fe que, como límite al ejercicio de los derechos subjetivos, impone el artículo 7 del Código Civil, de tal forma que*

protege la confianza creada por la apariencia, que impone un deber de coherencia y limita la libertad de actuar cuando se han creado unas expectativas razonables.

En este caso, al afirmar la representación de los demandados que les fuera adjudicada la casa, juntamente con el solar, fijaron su posición, estimando que la vivienda sita en calle era susceptible de aprovechamiento por ellos. El hecho de que su pretensión contemplase, también, el solar sito en el número 24, no modifica el punto de partida, al que atendió el contador-partidor: la casa se consideraba por la parte como posible objeto de comunidad. Así se realizó la propuesta, aprobada judicialmente, que no vulnera los artículos 401 y 404 del Código Civil, ni los artículos 1601 y 1602 del mismo cuerpo legal.

La desestimación del motivo no obsta, en modo alguno, a la aplicación en el futuro de lo preceptuado en el artículo 400 del Código Civil, respecto a los adjudicatarios de la casa de referencia, que no están obligados a permanecer en la comunidad."

***** Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 27 de marzo de 2012. Liquidación de la comunidad. Cuaderno particional. Igualdad. Modificación de la valoración pericial**

"PRIMERO.- La Sentencia recaída en 1ª. Instancia en el presente procedimiento sobre oposición a la aprobación del cuaderno particional en liquidación consorcial, es objeto de recurso por la representación del Sr.R, que en su apelación (Artº. 458 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), considera que no procede incluirse en el activo el concepto c) ingresos por alquiler valorado en 18.200 € y adjudicados al esposo, tampoco el apartado f) (crédito del consorcio contra Herederos y Miguel por mejoras) al no estar autorizado para ello, igualmente discrepa en este último en cuanto a la valoración pues no puede indicarse el precio del terreno, debiéndose reducir a 76.841,40 €.

SEGUNDO.- La Sentencia de esta Sala dictada en el mismo procedimiento expresamente indicaba: "Es visto, pues, que las obras de reforma y mejora en el chalet ocupado por el matrimonio, que como se decía en el primer párrafo del FJ 4º de la sentencia de inventario eran las realizadas por ambos cónyuges "a lo largo de la vida del matrimonio hasta su disolución", han quedado reducidas en el informe pericial de la Sra. E a las supuestas por la incorporación a la cocina de una parte del porche existente. Lo que evidentemente responde a un erróneo entendimiento de lo que debía valorar, siendo el caso que en la primera y en la segunda instancia del inventario la simple comparación de las fotografías antiguas y modernas aportadas por la Sra. L permitió constatar la existencia de perceptibles modificaciones en la construcción inicial, al menos la sustitución de la antigua balaustrada por la nueva y acaso, entre otras que puedan detectarse, las persianas de las ventanas. Realidad ante la cual, por más que en el juicio nadie solicitase de la perito aclaraciones a su informe –no se trata en el caso exactamente de un error en la valoración, sino en el objeto a valorar-, ha de acordarse una nueva, en la que se tendrán en cuenta las consideraciones de este fundamento, para llegar a un grado de aproximación a la realidad mayor al menos que el hasta el momento alcanzado.

Por lo demás, ni cabe aquí el planteamiento de la compensación que el recurrente opone entre crédito y uso gratuito de la vivienda, ni se ha acreditado en ningún momento que hubiese pacto en ese sentido. Tampoco puede decirse que el edificio destinado a oficinas carezca de valor por las razones de carácter administrativo que el Sr. esgrime, compartiendo en este punto la Sala las consideraciones que sobre el mismo hace el Juez de instancia en el FJ 6º de su sentencia. Y en cuanto a las ocho mensualidades y media del préstamo del pasivo que el Sr. pagó exclusivamente (doc. 3 de su escrito de oposición), el pago de cuya cantidad incumbe a la Sra. , lo que deberá ser tenido en cuenta por el contador en las modificaciones a realizar en el cuaderno particional.-".

En virtud de lo ordenado en la indicada Sentencia se procedió a una nueva peritación y a contabilizar el pago de ocho amortizaciones y media del pago del préstamo hipotecario, realizando un nuevo cuaderno particional (folio 362 y ss.) ahora impugnado.

TERCERO.- El Artº. 1.061 del Código Civil establece que la partición ha de guardar la posible igualdad, haciendo lotes o adjudicando a cada uno cosas de la misma naturaleza, calidad o especie.

La Sentencia de T.S. de 16-01-2008 EDJ 2008/1749 que a su vez cita la de 07-11-2006 EDJ 2006/325624 y 25-11-2004 EDJ 2005/183454 establece que "la jurisprudencia ha declarado, en la interpretación de este precepto, que la partición ha de estar presidida por un criterio de equitativa ponderación (SSTS de 30 de enero de 1951; 14 de diciembre de 1957 y 25 de marzo de 1995) y debe hacerse respetando la posible igualdad determinada por las circunstancias de cada caso (SSTS de 8 de febrero de 1974 EDJ 1974/255, 17 de junio de 1980 EDJ 1980/948, 21 de junio de 1986 EDJ 1986/4316, 28 de mayo de 1992 EDJ 1992/5443, 15 de marzo de 1995 EDJ 1995/790 y 16 de febrero de 1998 EDJ 1998/941. Sin embargo, también se ha precisado que no se trata de una igualdad matemática o absoluta (SSTS de 25 de junio de 1977 1977/197, 17 de junio de 1980 EDJ 1989/948 y 14 de julio de 1990 EDJ 1990/7614), sino de una igualdad cualitativa (STS de 13 de junio de 1992 EDJ 1992/6268); que la norma tiene un carácter orientativo (SSTS de 30 de noviembre de 1974 EDJ 1974/140 y 7 de enero de 1991; está dotada de un grado de imperatividad sólo relativo (SSTS de 30 de noviembre de 1974, 25 de junio de 1977, 17 de junio de 1980, 21 de junio de 1986, 14 de julio de 1990, 28 de mayo de 1992 EDJ 1992/5443, 15 de marzo de 1995 y 2 de noviembre de 2005 EDJ 2005/180350); y no puede aplicarse cuando la infravaloración de los bienes se aplica en proporción semejante a todos los que integran el caudal relicto SSTS de 21 de Abril de 1966 y 7 de enero de 1991 EDJ 1991/93....-".

CUARTO.- En cuanto al primer motivo del recurso, concepto c) ingresos por alquiler, es cuestión que fue resuelta en el anterior procedimiento así se deduce de la Sentencia de esta Sala de 01-03-2011, por lo que procede su desestimación. En cuanto al apartado f) del activo, dicha partida está incluída, en su momento, en el activo, se trata de obras realizadas por el consorcio, no pudiéndose ahora alegar su improcedencia, cuestión también resuelta por la Sentencia anterior, en realidad discute el apelante más propiamente la nueva valoración de la perito (Artº. 348 LEC), en este apartado ésta manifiesta que se valora tanto el valor del suelo como de la construcción, dada la repercusión que ésta tiene en el valor de aquél, de tal manera que ésta sería inferior sin la obra realizada.

Más lo cierto es que la valoración debe comprender exclusivamente el valor de las reformas y mejoras, excluyéndose el del suelo cuya posible repercusión sólo afecta a su propietario no al consorcio como así viene a explicarlo la perito en el acto del Juicio, por lo que distinguiéndose claramente en el informe esta particularidad, la valoración del crédito del consorcio apartado F) debe alcanzar únicamente la partida de 76.841,41 €, excluyéndose el valor del suelo (31.200 €), único punto en que se revoca la Sentencia apelada, procediéndose por el contador-partidor a una nueva distribución teniendo en cuenta la nueva valoración realizada. “

***** Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 11 de abril de 2012. Liquidación de la comunidad. Valoración del domicilio conyugal**

"PRIMERO.- La Sentencia recaída en Primera Instancia en el presente procedimiento sobre solicitud de adjudicación por mitades indivisas de la vivienda que fue vivienda conyugal y que subsidiariamente se tase en la cantidad de 480.00 euros para el caso de que sea adjudicado a la actora, es objeto de recurso por la representación de esta última (Sra.), que en su apelación (art. 458 L.E.C.) considera que la valoración de la vivienda debe hacerse conforme a precios de mercado actual, al no tener la Sentencia dictada en el proceso de liquidación valor de cosa juzgada (art. 787.5 L.E.C.), que se ha producido una alteración de las circunstancias al valorarse la vivienda en su momento en 120.000 euros mas que el valor real, incidiendo la Sentencia apelada en cálculos erróneos, no habiéndose respetado la equivalencia en el valor de los lotes, debiéndose solicitar una mayor cantidad de préstamo dado la imposibilidad de venta actual por el valor fijado a el pleito anterior (600.000 euros), el C.D.F.A. permite la adjudicación por mitad indivisa y la posterior venta.

SEGUNDO.- En Sentencia de 1ª Instancia de 12-5-2008 confirmada por esta Sala en Sentencia de 2-3-2010 en el procedimiento liquidatorio, la vivienda familiar fue valorada en 600.000 euros, ciertamente la Sentencia dictada en dicho proceso carece de autoridad de cosa juzgada (art. 787.5 L.E.C.), lo que permite considerar si la valoración fue correcta o no al momento en que se realizó la liquidación (es decir valor de precio de mercado a mayo de 2008), como acertadamente entiende la Sentencia apelada, pero no remitir la valoración a precio actual de mercado.

Igualmente en cuanto a la cuestión nuevamente planteada en esta vía procesal, la Sentencia de esta Sala en el procedimiento liquidatorio expresamente argumentó:"1.- Vivienda.- el contador-partidor estivo a la valoración del informe emitido por el perito Sr. V -480.000euros-, con la que se manifestó conforme la actora, oponiéndose el demandado, que presentó valoración de "T" en 816.000 euros. La sentencia rechaza ambas y fija un valor de 600.000 euros, en función de la valoración fiscal de la vivienda puesta de manifiesto la vista, pronunciamiento frente al que se alzan actora y demandado, la primera en petición de que el valor de la vivienda se fije en los citados 480.000 euros y, subsidiariamente, de estarse a cualquier otro valor superior, se adjudique en condominio a ambas partes por mitades indivisas, en tanto que el segundo solicita se valore en 816.000 euros y, subsidiariamente, siendo nulo e ineficaz el informe del Sr. V, se remita al Juzgado para practica de una nueva

valoración de la vivienda. El Sr. V dijo en su informe que por la zona de su ubicación el precio m2 de la vivienda se sitúa entre 2000/2500 Euros y el de la superficie destinada a anexos entre 900 y 200 m2, todo ello dependiendo de su situación y estado, su precio es de 480.000 euros. El sótano de la casa tiene unos 100 m2, la planta baja unos71, la primera planta alzada 82 , y la planta bajo cubierta 46, de donde a razón de 2250 euros el m2 de vivienda, se seguirá para sus 153 m2 –planta baja y primera alzada- una valoración de 344.250 euros, y para los 146 euros de los anexos –sótano y bajo cubierta- 153.000 euros, a razón de 1050 m2, esto es, 497.550 m2 en total, que el perito reduce a 480.000 euros, parece ser que en base a una "situación" que de tal modo se computa dos veces y a un "estado" que "T" dijo muy bueno, tal y como se aceptó. Por otro lado, el perito no valora los 130 m2 de superficie no construida –los de los "dos pequeños jardines, anterior y posterior a la fachada y pasos de distribución"-, ello por las erráticas razones dadas en aclaraciones –vd r.t. 12.05.47 a 12.07.08-, desde luego inaceptables; y se insiste en las características de la zona en que se ubica, aislada y fuera de cualquier entorno urbano, y se prescinde, en función de los gastos de comunidad que generan, de las características de la Urbanización, que se acepta cuenta con zonas comunes ajardinadas, dos piscinas, zonas deportivas, pistas de paddle y tenis, y portero, sin que a tal circunstancia se le asigne luego ningún valor correctivo. Así las cosas, el Juez, que no acepta la catalogación de la vivienda como aislada de núcleo urbano y estima más acertado valorarla según criterios de mercado como los tenidos en cuenta por "Tinsa" –"Montecanal", "Realengo", "Floresta", "Britanai", "Abdulas" y "Valdespartera"-, se inclina por más adecuada y fiables, por la valoración de la vivienda en función del valor de referencia asignado por hacienda y de la valoración fiscal puesta de manifiesto en la vista, en la que, a preguntas de la Letrada del demandado, se acreditó un valor para devengo del IBI en torno a 600.000 euros. Decisión que la Sala comparte, según las propias razones de la resolución recurrida, precedentemente examinadas. Sin que proceda la puesta del inmueble en condominio, por mitades indivisas al 50%, porque es una situación a evitar (art. 786 L.E.C.), en relación con el art. 810 de la misma Ley) y porque fue la esposa quien solicitó la adjudicación del bien, bien que con una valoración distinta de la finalmente ejecutada".

Siendo indiscutible que la valoración ha de hacerse conforme a los precios que fija el mercado al tiempo en practicar la liquidación. Se ha practicado en autos informe pericial (art. 348 L.E.C.), éste indica que el valor actual de la vivienda es de 449.159,20 euros, si los precios desde el año 2007 de las viviendas han disminuido en un 23,9%, es obvio que el valor actual es el 76,1% del de 2007, es decir, que en todo caso el valor del mismo sería de 449.159,20 x 100 : 76,6, es decir aproximadamente los 600.000 euros fijados en tasación, por lo que en modo alguno se produjo el error de valoración denunciado en la demanda.

TERCERO.- Es obvio, por lo expuesto que se hace irrelevante las alusiones de la parte recurrente sobre los problemas de financiación, no pudiendo dar lugar a una nueva propuesta de adjudicar por mitades indivisas sin consistencia alguna, igualmente tampoco puede aceptarse la referencia a lo dispuesto en el art. 81,4 C.D.F.A. que no da solución para una cuestión como la de autos, en la que solo se alega una perjuicio económico posterior a la liquidación por la evolución del mercado inmobiliario, ni esto puede justificar la rescisión de las adjudicaciones solicitadas, es por ello que la solución al recurso no puede ser otra que su desestimación."

***** Sentencia de la Audiencia Provincial de Huesca de 24 de mayo de 2012. Liquidación de sociedad matrimonial. Fecha de disolución. Inclusión en el inventario de un crédito por importe determinado**

"PRIMERO : Discrepa el apelante de la sentencia dictada en primera instancia pues entiende que no procede hacer una declaración sobre la fecha de la disolución de la sociedad consorcial ni procede tampoco, según el recurso, incluir el crédito de la sociedad contra el esposo que en la demanda se identificó como partida A.3 del inventario.

En lo que concierne a la primera cuestión, la supresión de la declaración, en la parte dispositiva, de la fecha de la disolución de la sociedad consorcial, debe estimarse el recurso pues ese es un pronunciamiento que nadie había solicitado por lo que es incongruente, aparte de cuanto ya dijimos en nuestra *sentencia de 6 de julio de 2006*, poniendo de manifiesto que este procedimiento sólo tiene por objeto decidir la inclusión o exclusión de determinadas partidas del inventario propuesto por una u otra parte o sobre su importe, conforme al *artículo 809.2 de la LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL*.

En definitiva, conforme a los términos del debate fijados por las partes únicamente hay que determinar si se incluye o no en el activo el crédito de la partida A.3, que la parte cuantifica en 150.000 euros, cifra que parece que ha sido acogida en la sentencia apelada sin explicación alguna, ni de la sentencia ni de la propia parte actora, pese a que no vemos qué relación puede guardar esa cifra con los ingresos consorciales que el hoy apelante retuvo, no siendo ésta una cuestión que pueda zanjarse en la ulterior fase de avalúo pues los créditos, como los depósitos, no se tasan, como ocurre con los bienes muebles o inmuebles, sino que se identifican por su importe.

Como hemos dicho en otras ocasiones (*sentencias de 29-II-2008*, *30-IX-2008*y *3-IV-2009*), el inventario tiene como finalidad la determinación o identificación de los bienes que integran un patrimonio, con la peculiaridad de que, cuando se trata de dinero o partidas dinerarias -tales como créditos, cuentas corrientes o depósitos bancarios-, su importe o cuantía no forma parte de la valoración, sino de la identificación misma de la partida inventariada. A estos importes entendemos que quiere referirse el *artículo 809.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil*cuando encauza en el trámite del artículo 809 la discusión sobre el importe de cualquiera de las partidas que integran el inventario. Por tanto, si no se expresa la cuantía de la que se está hablando, es tanto como no decir nada pues, como decíamos en aquellas resoluciones, el dinero no se valora ni es susceptible de tasación pericial, sino que simplemente se cuenta. Otra cosa distinta es la valoración de bienes corporales -muebles o inmuebles-, que a

efectos de formación de inventario son identificables sin necesidad de que se establezca su valor, lo que debe plantearse en una fase posterior a la de inventario, que no es otra que la de avalúo.

Pues bien, tal requisito de identificación sí que viene cumplido por la demandante pues, precisa que el crédito lo es por un importe de 150.000 euros, pero no desglosa en modo alguno cómo llega a esa cantidad, que no acertamos a encontrar qué relación guarda con los ingresos del hoy apelante durante dicho periodo. Desde luego tenemos que por el periodo reclamado (enero de 2006 a abril de 2008) estaba vigente la sociedad consorcial, pues fue con posterioridad cuando se declaró la disolución del matrimonio, con la subsiguiente disolución de pleno derecho del consorcio, y no existe ninguna resolución judicial que declarara la disolución de la sociedad consorcial en un momento anterior, ni declarando la nulidad del matrimonio, ni concediendo la separación, al tiempo que tampoco se declaró la retroacción de los efectos de la disolución en los términos hoy permitidos por el artículo 247 del Código de derecho foral de Aragón.

SEGUNDO : Así tenemos que los ingresos que el recurrente retuvo para sí, salvo, en la parte que destinó a contribuir a las cargas matrimoniales, sí que son susceptibles de inventariarse como crédito de la sociedad consorcial contra él. Ahora bien, como dijimos en la *sentencia de 22 de junio de 2001*debe tenerse en cuenta que tales rendimientos no son ahorros del matrimonio, es decir, procede computar dichos ingresos pero los mismos, como el dinero procedente cualquier otra fuente de ingresos no puede asimilarse a dinero ahorrado, es decir, no pueden dividirse sin más por mitad, sino que antes es preciso descontar los gastos que tuvo la familia constante la sociedad conyugal pues, como dijimos en nuestra *sentencia de 8 de noviembre de 2006*, no se puede confundir lo ahorrado por la sociedad consorcial, que es lo que finalmente se liquida, con lo ingresado y gastado día a día por la misma, mientras duró su existencia. Esto hace que en no pocas ocasiones, con carácter general en familias de economía media o baja, presumamos que los ingresos bajo el control individual de cualquiera de los cónyuges constante la sociedad se han consumido, precisamente, en la atención de las cargas y gastos que son a cargo del patrimonio común, mientras no se demuestre lo contrario, pero en el caso la capacidad económica del recurrente certificada al folio 46 de los autos, que llega en el último periodo (enero-abril 2008) a rozar los cinco mil euros mensuales limpios, pasando por los cuatro mil trescientos también mensuales y limpios del año 2007 y los algo más de tres mil seiscientos del año 2006, siempre limpios y mensuales, hacen que debamos presumir, a falta de otra prueba, que el recurrente pudo ahorrar con el dinero que mantuvo bajo su exclusivo control durante todos esos meses al menos una media de mil quinientos euros mensuales, después de computar no sólo las cantidades que sí que entregó para

contribuir al sustento de la familia sino que también el recurrente tuvo que vivir durante dicho periodo y atender sus necesidades vitales, incluida una vivienda, pues como se viene a defender en el recurso, no pueden computarse sólo los ingresos sino que también deben tenerse en cuenta los gastos que son a cargo del patrimonio común, entre los que también están las necesidades del propio apelante. Hecha esta estimación, tenemos que no se ha demostrado que el recurrente dejara de ingresar el producto de su trabajo en la cuenta común con anterioridad al momento admitido en su declaración en el acto del juicio (finales de enero de 2006, al interponerse las primeras medidas previas) por lo que, teniendo en cuenta que tales medidas se interpusieron el 31 de enero de 2006 (folio 49), no debemos computar dicho mes de enero. Por ello, partiendo de una capacidad de ahorro estimada de mil quinientos euros mensuales, desde febrero de 2006 a abril de 2008, ambos incluidos, son veintisiete meses, lo que supone un total de 40.500 euros, por lo que procede acordar como se verá en la parte dispositiva.”

***** Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 19 de junio de 2012. Liquidación de sociedad matrimonial. Inclusión en el activo del inventario. Presunción de consorcialidad si no se acredita el destino privativo**

"PRIMERO.- Recurre Dª. Raquel tres pronunciamientos concretos de la Sentencia dictada en la instancia, suplicando su revocación parcial y se incluya en el inventario un crédito a favor de la sociedad conyugal a cargo del Sr. por importe de 1.340,23 €, con su actualización, por pago de las deudas contraídas por el mismo con CITIBANK, y otro a favor de la sociedad conyugal contra el Sr. por importe de 1.222,10 €, con su actualización, por pago de diversas deudas del mismo, y, finalmente, se reconozca contra el Sr. una deuda a favor de Dª. Raquel por importe de 7.073,71 € con su actualización, por utilización de la tarjeta VISA de la Sra. M para pago de deudas privativas.

SEGUNDO.- La inclusión de la primera de las partidas citada no puede prosperar.

Sostiene, esencialmente, la recurrente que los pagos del Sr. con su tarjeta de CITIBANK se cargaron en la cuenta común de CAJA entre el 7 de enero y el 5 de noviembre de 2008, siendo dichos cargos por deuda anterior e intereses derivados de la disposición de la tarjeta, salvo las facturas fechadas en febrero, marzo y abril de 2008.

Según contestación de CITIBANK fechada el 04-08-11 (folio 120 y ss. de las actuaciones), el Sr., titular de la tarjeta realizó en esas fechas diferentes operaciones que se cargaron en la cuenta común, según se observa en el extracto de esta última aportado como doc. Nº. de la demanda, y no en la cuenta del demandado Nº como dicho oficio señala.

Sin embargo, el examen de las facturas cargadas en esa cuenta común, obrantes a los folios 132 a 141 de las actuaciones, revela que los cargos se refieren a un período de facturación de CITIBANK que se inicia el 20-11-07, es decir, más de un mes después de haber contraído matrimonio los litigantes (folio 132). Por lo tanto, al tratarse de facturaciones por desembolsos realizados durante el matrimonio, y de intereses devengados en ese periodo (Artº. 218-1-b) del Código de Derecho Foral de Aragón), no acreditado su destino privativo debe presumirse se consumieron en intereses comunes del matrimonio.

TERCERO.- Reclama la recurrente 1.222,10 €, por traspasos de la cuenta común de Caja 500,- € a la cuenta de del Sr. y de 722,10 € a la de Banco también del demandado.

La contestación remitida por Caja el 29 de Julio de 2011 recoge que ambos traspasos se realizaron por el Sr., el de 500,- € el día 18 de Diciembre de 2007 a su cuenta de BBVA (folio 150 y ss.)

El oficio del Banco de 2 de Agosto de 2011 (folio 109 y ss.) señala que el Sr. tenía dos préstamos formalizados con dicha Entidad en fechas 24-04-98 y 23-05-07, con anterioridad pues a la celebración del matrimonio y que ambos se cargaban en la cuenta de cargo Nº.. En esas fechas esa cuenta presentaba un saldo negativo de -89,09 €.

Se trata, por tanto, de una deuda privativa abonada con dinero común durante la vigencia del matrimonio, conforme a los dispuesto en el Artº. 223 del Código de Derecho Foral, debe incluirse pues en el activo.

Con respecto al traspaso a la cuenta del Banco de 722,10 €, se desconoce el destino dado a ese dinero, a diferencia del traspaso anterior, así como el origen y carácter de la deuda a la que se aplicó. Tal falta de prueba impide estimar la partida interesada.

CUARTO.- Solicita la recurrente el reintegro por el Sr. de 7.073,71 € por disposiciones realizadas por éste mediante la tarjeta VISA propiedad de aquella y asociada a la cuenta Caja ....

Caja ... ha informado que esas disposiciones se efectuaron con la tarjeta Nº. emitida a nombre de Dª. Raquel, y aplicadas en la cuenta préstamo tarjeta soporte Nº. y cuenta contable soporte Nº., de Caja ... y los movimientos fueron realizados por Internet con las claves del titular (folios 150 y ss.).

Se trata de disposiciones realizadas entre enero y marzo de 2009,producida la ruptura de hecho del matrimonio pero antes de decretarse el divorcio por Sentencia firme de 23 de Julio de 2009, y tales débitos fueron abonados por la recurrente a Caja ... entre octubre de 2009 y enero de 2010 (folio 73 de las actuaciones).

Es clara la deuda y la procedencia del reintegro reclamado por la recurrente.”

***** Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 14 de Zaragoza de 4 de octubre de 2012. Adquisición de vivienda familiar con anterioridad al matrimonio. Dinero privativo. Herencia yacente**

"PRIMERO.- El actor, esposo que fue de la finada Doña Mª , con quien contrajo matrimonio en fecha 14 de agosto de 2009, reclama en las presentes actuaciones la condena de .la herencia yacente de la misma y de su hijo único (fruto de un anterior matrimonio)' al pago de la cantidad de 59.409'48 euros, importe satisfecho, con dinero privativo, para la compra de una vivienda que tuvo lugar el 20 de febrero de 2007 (con anterioridad, por tanto, a celebrarse el matrimonio), compra que fue efectuada por mitad y proindiviso por ambas personas, como así consta en la escritura pública, que ya en ese momento convivían y constituían una pareja de hecho. Los demandados, por su parte, se oponen a dicha pretensión alegando, además de la cuestión previa antes indicada, que no se ha acreditado que el dinero satisfecho por el actor tuviese carácter privativo pues el hecho de que apareciese el mismo como titular único de la cuenta corriente de donde se hicieron los pagos no supone que las cantidades fuesen exclusivamente suyas.

SEGUNDO. - Debe rechazarse la objeción que plantea la defensa de los demandados respecto a una posible falta de legitimación pasiva de la herencia yacente, y ello por cuanto se hace supuesto de la cuestión ya que siendo el objeto del pleito determinar si dicha herencia·viene o no obligada a restituir al actor la mencionada cantidad, no se puede partir del hecho de que dicha herencia no está facultada para reconocer la condición de privativo o ganancial del dinero pues ello es precisamente lo que aquí se discute. Por otra parte, y siendo cierto que la herencia de la difunta Doña M todavía no ha sido aceptada por sus herederos (con independencia de que el actor sea o no uno de ellos) la demanda necesariamente debe ser dirigida contra la misma, actuando como representante de ella su único hijo que, ante la ausencia de testamento, será quien herede, si la acepta, de acuerdo con las normas de los arts 517 y siguientes del Código de Derecho Foral de Aragón (en adelante CDF) .

TERCERO.- El único argumento esgrimido por el actor en defensa de su pretensión, y sobre el que radica toda su argumentación, es el de que la cuenta corriente de Caja Duero desde la que se hicieron todos los pagos para la adquisición de la vivienda, y de la cual fue único y exclusivo titular hasta el 15 de febrero de 2007, únicamente se nutría de ingresos procedentes de su nómina sin que su compañera sentimental en aquellos momentos efectuase aportación alguna. Pues bien, del estudio de la documentación aportada se aprecia, de entrada, que estamos hablando de dos cuentas corrientes distintas en Caja Duero: la número 2104/3233/83/9134745119 y la número

2104/0729/05/9143431998. Esta última se aperturó en fecha 15 de febrero de 2007, según certifica la propia entidad bancaria, apareciendo desde el primer momento como titulares de la misma tanto el actor como Doña M, y fue a través de ella como se hicieron los pagos mensuales del préstamo hipotecario, según se aprecia en la cuenta de movimientos presentada. La otra, de la que se desconocen mas datos pues nada se ha indicado al respecto, fue la que se utilizó en fecha 28 de agosto de 2006 para abonar la cantidad de 6.420 euros en concepto de arras (documento número 7 de la demanda), así como 8.209'67 euros el 8 de septiembre de 2006 (documento 8) y 30.775'20 euros el 14 de febrero de 2007 (documento 9) Por tanto, y como quiera que los citados no iniciaron su relación de pareja de hecho hasta el mes de diciembre de 2006, según ha quedado acreditado en autos por los testigos que han depuesto, hay que entender, ante la ausencia de cualquier prueba en contra, que las mencionadas cantidades, que ascienden a un total de 14.629'67 euros, fueron satisfechas con dinero privativo del actor. Por lo que se refiere al último de los pagos, al hacerse el mismo la pareja ya convivía en un chalet propiedad en exclusiva de doña M, la cual se lo había adjudicado en la liquidación de los bienes acordada en el procedimiento de divorcio de su anterior matrimonio junto con la carga hipotecaria que arrastraba y a la que ella hacia frente en solitario con su nómina (trabajaba en una empresa con unos ingresos de unos mil euros mensuales), habiendo tenido que reajustar (reducir) la cuota mensual para poder asumirla; ello supone que, iniciada la convivencia de pareja, existió un pacto o acuerdo tácito de hacer frente uno de los miembros (ella) a los gastos de vivienda y el otro (él) a los gastos de adquisición del nuevo inmueble, por lo que debe rechazarse la condición de dinero privativo que el actor atribuye a la citada suma.

CUARTO.- En lógica coherencia con lo anterior hay que rechazar asimismo cualquier pretensión del actor de calificar como privativo el dinero satisfecho mensualmente como pagos del crédito hipotecario concedido para la adquisición del piso, esta vez desde la cuenta 9134745119, puesto que, para empezar, no todos los ingresos que aparecen en la misma proceden de la nómina de aquél sino que se observan devoluciones de IRPF el 17 de agosto de 2007 (902'19 euros) y el 31 de mayo de 2008 (245'32 euros), lo cual hay que poner en relación con la certificación emitida por la Agencia Tributaria señalando que fue esa cuenta la indicada por la sra. A para el ingreso de dichas devoluciones; asimismo se aprecian también ingresos procedentes de las rentas mensuales del inquilino sr. C desde el mes de agosto de 2008 y, por último, y ya en fechas próximas e incluso posteriores a la boda, se observan di versos ingresos de terceras personas. Respecto al alquiler de la vivienda en cuestión, es cierto que en el contrato de arrendamiento suscrito con el inquilino únicamente aparece como propietario y arrendador el demandante, y solo él lo firma (se

comprueba fácilmente que la otra firma que aparece como "el arrendador" no es la de la sra. A pues basta con cotejarla con la que aparece al final de la escritura notarial de compraventa), pero ello no es óbice para considerar que los ingresos derivados del citado alquiler servían para acrecentar el saldo de la cuenta corriente aperturada por ambos en Caja Duero a la que antes se ha hecho referencia.

QUINTO. - En definitiva, y pese a que nada se hiciese constar en la escritura de compraventa (donde ambos compradores adquirieron por mitad y proindiviso la propiedad de la finca) ni tampoco en el momento de contraer matrimonio (arts. 210 Y 211 CDF) , el actor ha acreditado que una parte del precio de la vivienda abonado con anterioridad a contraer matrimonio, en concreto 14.629'67 euros, fue satisfecha con dinero privativo suyo de forma exclusiva, por lo que tiene derecho a que se le reintegre dicha suma por la herencia yacente a falta de heredero por el momento (art. 324 CDF). Este derecho se le reconoce exclusivamente respecto a la mencionada herencia y no respecto al codemandado sr. Ll quien únicamente resultará deudor cuando acepte la misma (art.342).”

***** Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 22 de noviembre de 2012. Liquidación de sociedad consorcial. Adjudicación de inmueble por el precio de tasación. Reglas de la comunidad de bienes**

"Primero.- Hechos relevantes

De las actuaciones practicadas en las instancias resultan los siguientes hechos relevantes:

1. Los ahora litigantes, Don Julián Oscar G A y Doña María José FC, contrajeron matrimonio el día 6 de agosto de 1988, de cuya unión nacieron dos hijos. El matrimonio se separó, habiéndose dictado en el proceso correspondiente sentencia de separación de fecha 26 de abril de 2000, y de divorcio de 28 de de febrero de 2002.
2. Como consecuencia de la disolución del matrimonio se produjo la del consorcio conyugal, o sociedad conyugal tácita aragonesa. Al existir discrepancias entre ellos, se interpuso demanda en juicio verbal sobre formación de inventario, que concluyó por sentencia del juzgado de primera instancia de 29 de junio de 2004, y recurrida ésta, sentencia definitiva en ese proceso dictada por la Audiencia Provincial de 1 de septiembre de 2005. En el inventario definitivo se incluyó, como activo, lo siguiente: Vivienda unifamiliar rotulada con el nº, con la descripción que consta en autos, y que se da por reproducida; además de plaza de garaje en el inmueble sito en, y mobiliario y ajuar doméstico.
3. Posteriormente se siguió juicio de liquidación de la sociedad conyugal, y no habiendo acuerdo entre ellos se nombró contador partidor, que en fecha 28 de enero de 2008 emitió el cuaderno particional, con formación de lotes, valoración de bienes y propuesta de adjudicación. En lo que aquí interesa, el cuaderno particional otorgaba un valor a la vivienda unifamiliar de 480.000 euros, y proponía su adjudicación a la Sra. F, juntamente con otros bienes y derechos, y al Sr. G la plaza de garaje expresada. Como consecuencia de estas atribuciones patrimoniales, y ante la diferencia de sus respectivos valores, la Sra. F habría de compensar en metálico a su anterior consorte en la suma de 143.127,71 euros.
4. Impugnado el citado cuaderno por ambas partes, se siguió juicio verbal en el que recayó sentencia de 12 de mayo de 2008, que falló: valorar la vivienda unifamiliar en 600.000 euros, y como consecuencia el total activo quedó fijado en 649.696,19 euros, el pasivo en 180.161,58 euros, el total adjudicado a la Sra. F en 437.725,54 euros y el total adjudicado a su ex cónyuge en 31.809,07 euros. Recurrida dicha sentencia, fue

confirmada en lo sustancial por la Audiencia Provincial en sentencia de 2 de marzo de 2010.

5. La representación de la Sra. F interpuso demanda de juicio ordinario, que ha dado lugar a los presentes autos. En ella, tras efectuar alegaciones sobre el valor atribuido a la vivienda familiar, que a su entender era desproporcionado a la realidad del mercado, instaba del juzgado que la mencionada vivienda se adjudicase a las partes por mitades indivisas; subsidiariamente, y de considerar que debía ser íntegramente adjudicada a la actora, lo fuera por el valor de 480.000 euros, o por aquel otro resultante de prueba pericial. El demandado se opuso a la demanda, formuló a su vez otra relativa a las actualizaciones que a su criterio procedían, siendo acumulados los dos procesos, y recayó sentencia de 28 de diciembre de 2011, en la que fueron desestimadas ambas demandas y se mantuvieron las adjudicaciones y valoraciones efectuadas en las sentencias anteriormente citadas. Interpuesto recurso de apelación por la actora, fue desestimado por la sentencia de la Audiencia Provincial de 11 de abril de 2012, que es ahora objeto del presente recurso de casación.

Segundo. Motivos del recurso

El recurso de casación se ha fundado en tres motivos: el primero denuncia infracción del artículo 267.1 del Código de Derecho Foral Aragonés (en lo sucesivo, CDFA), en cuanto a la adjudicación de la vivienda a la recurrente, por el valor expresado; el segundo entiende infringido el artículo 81.4 del CDFA, relativo a la atribución del uso de la vivienda y del ajuar familiar; y el tercero se funda en la infracción del artículo 398.1, en relación con el 394.1, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, (en lo sucesivo, LEC), sobre costas.

La Sala, tras el trámite prevenido en el artículo 483 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, decidió la admisión de los dos primeros motivos, y la inadmisión del tercero.

Tercero. Admisibilidad del recurso

La parte recurrida, en el trámite de oposición al recurso, ha efectuado alegaciones tendentes a mostrar las razones que concurren para la inadmisibilidad del recurso deducido de contrario, en cuanto a los motivos admitidos. Esta pretensión de inadmisibilidad tiene cobertura procesal en el artículo 485 Ley de Enjuiciamiento Civil, conforme al cual "*en el escrito de oposición también se podrán alegar las causas de inadmisibilidad del recurso que se consideren existentes y que no hayan sido ya rechazadas por el Tribunal*". Ahora bien, se va a examinar únicamente respecto del motivo

primero, pues las causas relativas al segundo motivo ya fueron rechazadas por esta Sala.

A criterio de esa parte el primer motivo del recurso no debió ser admitido, por cuanto la recurrente impugna realmente la valoración dada a la vivienda consorcial, tal como fue efectuada en la sentencia recaída en el proceso de liquidación, en el que se impugnó el cuaderno particional, y no resulta posible impugnar en un recurso de casación la valoración de la prueba, lo que solamente cabe mediante el recurso extraordinario por infracción procesal y en sus propios límites, ya que los recursos extraordinarios no constituyen una tercera instancia.

Pese a los reproches de la parte recurrida, la causa de inadmisibilidad no procede. Aun siendo cierto que las alegaciones de la recurrente dedican buena parte de la argumentación a considerar el valor del bien, el motivo de recurso viene claramente fijado en su exposición y en el *petitum*, y se contrae a estimar infringido el precepto sustantivo denunciado, en cuanto a los efectos para la adjudicación de los bienes que fueron consorciales.

Cuarto.- Examen del primer motivo.

El proceso de liquidación del régimen económico conyugal se regula en el artículo 810 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que en caso de no lograr acuerdo, remite al trámite de los arts. 785 y siguientes. El 787, a su vez, previene en su apartado 5 que *"Si no hubiere conformidad, el Tribunal oirá a las partes y admitirá las pruebas que propongan y que no sean impertinentes o inútiles, continuando la sustanciación del procedimiento con arreglo a lo dispuesto para el juicio verbal. La sentencia que recaiga se llevará a efecto con arreglo a lo dispuesto en el artículo siguiente, pero no tendrá eficacia de cosa juzgada, pudiendo los interesados hacer valer los derechos que crean corresponderles sobre los bienes adjudicados en el juicio ordinario que corresponda"*.

Aunque doctrinalmente ha sido objeto de debate el alcance de la disposición, en cuanto no atribuye a la sentencia el efecto de cosa juzgada, en el caso de autos las partes y la sentencia de la Audiencia Provincial parten de esa consideración, lo que permite debatir en este juicio ordinario la cuestión en los términos en que la actora la ha planteado.

De modo que la cuestión que es objeto de la decisión jurisdiccional no es, realmente, el valor de la finca, sino la forma en que se ha de llevar a cabo, con arreglo a lo establecido en el artículo 267.1 del CDFA, la partición del haber.

La parte actora suscita dos alternativas: que el bien principal del consorcio, vivienda unifamiliar sita en el complejo residencial, sea adjudicado a los dos que fueron cónyuges, pro indiviso; o que se mantenga la adjudicación a la actora, siempre que el precio de valoración del bien sea de 480.000 euros, tal como se planteó inicialmente por dicha parte. La valoración de la vivienda unifamiliar no es, directamente, objeto del proceso, ni motivo del recurso; pero incide en la decisión a adoptar, como presupuesto de la acción que se ejercita condicionalmente. Partiendo de la valoración efectuada, que es cuestión de hecho no susceptible de casación, y de que el valor de la vivienda ha de hacerse a la fecha de la liquidación, la cuestión jurídica radica en determinar si es posible obligar a una de las partes a adjudicarse el bien inmueble por el precio de tasación contra su voluntad, indemnizando a la otra por la diferencia.

El artículo 267.1 del CDFA previene que "*Liquidado el patrimonio y detraídas las aventajas, el caudal remanente se dividirá y adjudicará entre los cónyuges o sus respectivos herederos por mitad o en la proporción y forma pactadas*". La división, a falta de acuerdo, ha de hacerse teniendo en cuenta el artículo 270, a cuyo tenor "*A la liquidación y división del consorcio conyugal les serán de aplicación, en lo no previsto en esta sección y en tanto lo permita su naturaleza, las normas de la liquidación y partición de la comunidad hereditaria*".

Los artículos a que remite no resuelven la cuestión planteada. Por ello es necesario acudir supletoriamente a las normas que en el Código Civil regulan la división de la comunidad de bienes (art. 1º.2 CDFA).

Al respecto, resultan de aplicación las siguientes: Artículo 401: *Sin embargo de lo dispuesto en el artículo anterior, los copropietarios no podrán exigir la división de la cosa común, cuando de hacerla resulte inservible para el uso a que se destina*.

Artículo 404: *Cuando la cosa fuere esencialmente indivisible, y los condueños no convinieren en que se adjudique a uno de ellos indemnizando a los demás, se venderá y repartirá su precio.*

Artículo 406: *Serán aplicables a la división entre los partícipes en la comunidad las reglas concernientes a la división de la herencia*.

De las que, a su vez, resultan de aplicación las siguientes:

Artículo 1051: *Ningún coheredero podrá ser obligado a permanecer en la indivisión de la herencia, a menos que el testador prohíba expresamente la división*.

Artículo 1061: *En la partición de la herencia se ha de guardar la posible igualdad, haciendo lotes o adjudicando a cada uno de los coherederos cosas de la misma naturaleza, calidad o especie.*

Artículo 1062: *Cuando una cosa sea indivisible o desmerezca mucho por su división, podrá adjudicarse a uno, a calidad de abonar a los otros el exceso en dinero. Pero bastará que uno sólo de los herederos pida su venta en pública subasta, y con admisión de licitadores extraños, para que así se haga.*

En cuanto a la aplicación de este último precepto, la sentencia del TS de 10 de febrero de 1997 ha apreciado que "*El párrafo primero del art.1062 del Código Civil no contiene sino una norma que permite la atribución de un bien hereditario que resulte indivisible a uno de los coherederos abonando a los otros su exceso en dinero, pero tal precepto no obsta a la exigencia que puede hacer cualquiera de aquéllos de que el bien sea vendido en pública subasta como se establece en el párrafo segundo de este art.1062, aparte de la inaplicabilidad de aquél párrafo primero en el caso de que en la herencia no exista otro bien que la cosa considerada indivisible habida cuenta que el dinero con el que ha de pagarse el exceso ha de ser el existente en la herencia; en otro caso, nos encontraríamos ante una venta de la porción hereditaria supuesto que no es el contemplado en el art.1062 citado*".

De la aplicación al caso de las normas expresadas se extraen las siguientes consecuencias:

A) Cualquiera de las partes tiene acción para pedir la división del haber, y ha de hacerse la partición mediante reparto de los bienes, evitando en lo posible la indivisión;

B) ciertamente, y como afirma la parte recurrida, de modo general no es ajustado a derecho llevar a efecto la liquidación de un patrimonio consorcial, considerado como comunidad en mano común, convirtiéndolo en una comunidad romana o proindiviso; pero si la comunidad consorcial está constituida por un único bien, o uno de ellos tiene un valor muy superior a los restantes que integran el activo, esa forma de hacerlo no solo resulta correcta, sino que es la única posible, salvo la de la enajenación del bien común;

C) la STS de 14 de diciembre de 2007 ha establecido que resulta "*plenamente aplicable al supuesto de división de cosa común la norma contenida en el artículo 1.062 del Código Civil , por la remisión que a las reglas propias de la división de la herencia realiza el artículo 406, de modo que basta que uno solo de los partícipes solicite la venta en pública subasta con admisión de licitadores extraños para que así haya de acordarse, pues en tal caso resulta claro que falta el acuerdo de adjudicación a uno de ellos a calidad de abonar a los otros el exceso en dinero. Dicha solución es además la más beneficiosa para*

los propios intereses de la comunidad en orden a obtener un precio superior por el bien de propiedad común, permitiendo que en la subasta a celebrar participen, junto con los propios comuneros, licitadores extraños; sin que pueda obligarse a ningún partícipe a aceptar la adjudicación a uno del bien por una cantidad determinada, percibiendo su parte, cuando su voluntad es la de que se subaste para obtener el mayor precio posible".
Criterio que, traído al caso de autos, trae como consecuencia que no es ajustado a derecho obligar a ningún partícipe a aceptar la adjudicación del bien por una cantidad que no asume voluntariamente abonar, por no tener bienes o no poder obtener crédito suficiente. No existiendo dinero metálico en el haber partible para satisfacer el derecho del copartícipe, nos encontraríamos ante una venta de la porción consorcial, que no puede decidirse sin la aquiescencia de comprador y vendedor.

En este caso la solución adoptada en la instancia vulnera el artículo 267 del CDFA por cuanto atribuye a la recurrente la propiedad de la vivienda unifamiliar por un precio de 600.000 euros, que no fue nunca aceptado por ella como valor del inmueble, y se la obliga así a satisfacer a su ex cónyuge una compensación en metálico que manifiesta ser desproporcionada a sus posibilidades económicas y al valor real de la finca.

Ciertamente, bastaría que se hubiera pedido la venta en pública subasta, pero las partes no han optado por esta solución, que en todo caso no está cerrada, a tenor de los arts. 404 y 1062 del Código Civil.

Por todo ello se estima el motivo. Al hacerlo, la Sala asume la instancia y estima la petición inicial de la parte actora, en cuanto a la adjudicación de la vivienda pro indiviso a ambas partes, decisión que afectará al resto de las que fueron adoptadas en la partición, que habrán de ajustarse para lograr que el conjunto del haber se reparta igualitariamente.

Quinto.- Al ser estimado el primer motivo del recurso no resulta necesario entrar a considerar el segundo. Procede así casar la sentencia recurrida y la Sala, asumiendo la instancia, acuerda estimar la pretensión primeramente articulada por la demandante."

7. DERECHO DE SUCESIONES POR CAUSA DE MUERTE

71. EN GENERAL. NORMAS COMUNES

***** Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 6 de marzo de 2012. Partición de herencia. Inclusión de bienes en el inventario. Interpretación de documento de aceptación de herencia. Diferencia entre herencia y legado**

"PRIMERO.- En el contexto de una partición de herencia y en el trámite de formación de inventario (art.794) se plantea entre los herederos la discusión sobre determinados bienes respecto al "Activo" del caudal relicto y el contenido de determinadas partidas del "Pasivo".
Concretamente, respecto al "Activo", se plantea la pertenencia de una serie de bienes (7-13 del inventario presentado por la parte promotora de la división patrimonial) al caudal relicto del causante, D. Pedro . Los iniciadores del proceso entienden que sí forma parte del mismo y los opositores, niegan dicha inclusión.

SEGUNDO.- Fallecido el causante el 4 de mayo de 2008, la madre común de todos los litigantes, hermanos entre sí y también del causante, otorgó testamento el 2 de enero de 2008, falleciendo 8 días después, el 10 de enero. Por lo tanto, la madre, Doña Victoria , falleció 4 meses antes que su hijo Pedro, cuya herencia es objeto de la presente litis.

La Sra. A había otorgado testamento mancomunado junto con su esposo el 22 de marzo de 1973. Sobreviviendo a éste y haciendo uso de su condición de fiduciaria, dispuso su última voluntad mencionando a sus hijos Manuel, Carmen e Inmaculada y legando bienes a sus hijos Pedro, Anselmo y Victoria, dejando como herederos en el remanente tanto de sus bienes como de los de su premuerto esposo a los prelegatarios. Es decir, Anselmo y Victoria.

Fallecido Pedro después de su madre, pero sin haber aceptado ni repudiado la disposición de última voluntad de aquélla, se plantea la cuestión eminentemente jurídica de si los bienes legados por aquélla habían entrado ya o no en el patrimonio de Pedro y si, en su consecuencia, debían de repartirse entre los herederos de éste. Es decir los cinco hermanos sobrevivientes. O sí, por el contrario, en aplicación de la cláusula quinta del testamento materno, tales bienes legados por la madre, sólo podían acrecer el derecho sucesorio de los hermanos Anselmo y Victoria.

TERCERO.- La sentencia de primera instancia aplica el Art. 163 de Ley de sucesión aragonesa 1/1999, de 24 de febrero y concluye que Pedro "no quiso" heredar pues nunca llegó a aceptar los legados y en ausencia de descendientes le suceden sus hermanos Anselmo y Victoria.

Recurren los promotores del proceso de partición hereditaria. Consideran que la falta de aceptación de los legados por parte de Pedro deja los bienes a que se refieren los mismos en situación de interinidad, con delación a favor de quienes resultaren herederos del fallecido Pedro. Así lo hace constar la escritura de aceptación de herencia hecha por Anselmo y Victoria en su estipulación VI: al haber fallecido D. Pedro después de su madre, sin aceptar ni repudiar la herencia de sus padres, ésta pasa a sus herederos por derecho de transmisión y no estando éstos determinados por el momento, se pospone para un momento posterior la entrega del legado ordenado a su favor. En el mismo sentido la pag. 18 de dicha escritura: Los bienes del legado de Pedro quedan en poder de los herederos de la madre, Victoria y Anselmo, para entregarlos a quienes resultaren herederos de aquél.

Según estos textos, dice la parte recurrente, se infringirían los arts. 7 y 28 Ley Sucesiones de Aragón si se entregaban los bienes del legado de Pedro a personas distintas de sus herederos legales. Y ello por el carácter "Irrevocable" de la aceptación de la herencia. Por lo que la manifestación de la citada estipulación VI y el otorgando segundo vinculan a Victoria y Anselmo y les obliga a aceptar la transmisión de dicho legado a los herederos abintestato de Pedro; es decir, a los cinco hermanos. La firma de la escritura notarial de 26 de junio de 2008, también constituiría un "Acto propio" de Anselmo y Victoria.

CUATRO.- Entiende esta Sala que el tenor de la cláusulas de la citada escritura no suponen un rechazo a los posibles derechos que los herederos de la madre común tuvieran sobre el legado del hermano fallecido sin haber hecho manifestación respecto a la herencia materna. La seguridad jurídica exige la "irrevocabilidad" de la aceptación o repudiación de la herencia, pero cuando la una o la otra existen de forma clara y determinante. Este no es el caso que nos ocupa. Aquí lo que se pretende es la interpretación de un documento de aceptación de herencia. Y utilizando las claves de los arts. 1281 y siguientes C.civil, no puede deducirse --ni siquiera acudiendo a la literalidad-- que Anselmo y Victoria hayan renunciado a los derechos que la situación de su hermano Pedro (fallecido sin aceptar ni repudiar el legado) les pudiera conferir. Simplemente se defiere la situación sobre los bienes del legado de Pedro al momento en que se determinen los herederos de aquél. Empleando el término "herederos" como referido a quienes ostenten los derechos sucesorios correspondientes respecto al fallecido Pedro.

Así se hacen compatibles la estipulación cuarta, la cláusula VI (que hable del "derecho de transmisión") y el otorgando segundo. Pues éste no deroga ni expresa ni tácitamente el precedente clausulado.

QUINTO.- Pero esto último da pie al segundo argumento de los recurrentes. La violación de los arts. 39 y 163 ley de sucesiones de Aragón. Es decir, "la transmisión del derecho de aceptar o repudiar". Tanto el art. 39 como el 163, regulan lo mismo, pero respecto a diferentes instituciones. El primero se refiere a la herencia y el segundo a los legados. Aunque se trate de la misma figura (la transmisión del derecho a aceptar o repudiar) las consecuencias son distintas, pues diferentes son la herencia y el legado. En el primer caso se transmite el derecho a aceptarla o repudiarla, mientras que en el legado el de confirmar la adquisición ya producida o bien "deshacerse" de ella, puesto que el legatario ya ha incorporado a su patrimonio los bienes legados, como se desprende del art. 162 Ley de Sucesiones de Aragón.

Por lo tanto, en principio, aunque D. Pedro no hubiera aceptado ni repudiado el legado hecho por su madre, esos bienes pasan a su propiedad una vez fallecido el causante (la madre) por el mero hecho de la "delación" (art.7-3 y 162 Ley Sucesiones).

Bien es cierto que esa adquisición ha de confirmarse o rechazarse por sus herederos, si no lo hubiera hecho el legatario. Pero, añade el art. 163, "salvo voluntad contraria del disponente" (lo mismo pone el art. 39).

Y esta es la situación que nos ocupa. En todo caso hay que estar a la "voluntad del disponente". Así se desprende de todo el conjunto normativo de la ley de sucesiones (arts. 8,29 y 19, entre otros). Pero como principio programático, del art. 3, según el cual "*el disponente goza de la más amplia libertad para ordenar su sucesión. . . sin más límites que el respeto a la legítima y los generales del principio standum est chartae*".

Y a tal efecto, la madre común de los ahora litigantes dispuso que si alguno de sus hijos Pedro, Anselmo y Victoria la premuriesen o no pudieran o quisieren heredarla, serían sustituidos por sus respectivos descendientes y, a falta de éstos (que es el caso de Pedro), por los otros dos hijos citados, tanto en la herencia como en los legados o prelegados.

Es decir, la voluntad de la testadora fue clara. Si los bienes que lega o prelega no acceden definitivamente a los destinatarios queridos por ella, pasarán a sus descendientes o --en su defecto- a los otros dos hermanos. En este caso, Anselmo y Victoria.

Por lo que aquellos bienes del legado de Pedro no forman parte del haber hereditario y han de quedar fuera del Inventario. Confirmándose así la sentencia apelada en este punto.

SEXTO.- Por lo que respecta al "pasivo" la sentencia apelada reconoce 7500 euros a favor de D. Anselmo por la participación en la adquisición de un coche para el fallecido D. Pedro. Incluye las minutas de letrado y procurador para la obtención de la declaración de herederos, así como los gastos que D. Anselmo y Dª Victoria sufragaron para el pago del préstamo que el causante

tenía con la C.A.I. y demás gastos e impuestos sobre bienes relictos. Pues se trataría de gastos últimos a la herencia y --por ende-- deuda de la misma.

Recurren los iniciadores del expediente, pues al haberse realizado con posterioridad al fallecimiento del causante, no son propiamente deudas de la herencia sino de la comunidad post-hereditaria, ya que no serían gastos de conservación de la herencia realizados en interés común.

El pago de deudas del causante y el abono de los trámites legales para partir la herencia son cargas hereditarias. Así lo reconoce explícitamente el art. 1064 C.civil y así ha de interpretarse el art. 41 ley de sucesiones; cuando en su último inciso habla de "cualesquiera otros de naturaleza análoga".

SEPTIMO.- En cuanto a la inclusión en el "pasivo" de 3.600 euros satisfechos por Carmen e Inmaculada a la cuenta del fallecido, no se niega por los apelados el derecho sustantivo a la inclusión de ese cargo en el pasivo de la masa hereditaria. Pero consideran que su derecho precluyó al no solicitarlo así en el escrito que presentaron solicitando la formación de inventario.

En este sentido es preciso tener en cuenta que la partición de herencia es un proceso dinámico como se deduce de los Art. 795 y siguientes de la L.E.Civil. Por tal razón y por el principio del "favor partitionis" se estructura dicho procedimiento de forma flexible, facilitando el "complemento" de la misma (entre otras, Sent. T.S. de 7 de noviembre de 2011).

Por ello, no se entiende suficiente la razón temporal esgrimida por la parte apelada, pues la inclusión de la partida del pasivo planteada por los promotores del expediente se hizo en el juicio verbal del art. 794 L.E.civil, sin que --por tanto--- pudiera alegar indefensión la parte opositora, quien pudo plantearlo así, y no consta que lo hiciera.

Este conjunto de razones permite estimar el recurso en este punto"

***** Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Ejea de los Caballeros de 26 de abril de 2012. Determinación de cantidades pertenecientes al caudal hereditario. Utilidad del petitum. Curatela**

"Primero.- La parte demandada, en sus alegaciones posteriores a la práctica de las diligencias finales, solicita la declaración de la nulidad de las actuaciones (aunque no indica cuál es la causa de nulidad que concurre).

No ha lugar a lo solicitado. La primera vez que se puso de manifiesto de forma expresa la incapacidad de la demandante fue en la vista, reconociendo ésta que, efectivamente, estaba incapacitada. A la vista de ello, se le requirió para que aportase la documentación que justificase que tenía capacidad para interponer la demanda.

De la documentación aportada se desprende que la actora está incapacitada parcialmente y sometida a curatela. La sentencia de incapacitación, en su fallo, no hace ninguna mención especial, por lo que es de aplicación el régimen general de la curatela. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 148 y siguientes del Código de Derecho Foral de Aragón, el sujeto a curatela requiere la asistencia del curador para la realización de ciertos actos. El artículo 151 se remite a lo previsto para el menor mayor de catorce años. Por su parte, el artículo 27.2 del Código dispone que "*la asistencia puede ser expresa o tácita y previa o simultánea al acto; en esta puede bastar con la mera presencia sin oposición*". El informe remitido por la Directora Provincial del I. A. S. S. no deja lugar a dudas de que el curador de la demandante no sólo conocía sino que promovió que la Sra. interpusiese la demanda que dio lugar a estas actuaciones, por lo que no hay ningún defecto de capacidad ni ninguna nulidad que declarar, sin que sea necesaria la solicitud del expediente de asistencia jurídica gratuita que no aportaría nada útil a este procedimiento.

Segundo.- Se considera acreditado que la actora es hija de Pedro y de María, a la vista del certificado del Registro Civil de Liétor obrante en las actuaciones.

Se considera también acreditado que Pedro falleció el 28 de octubre de 1998, dejando como bienes de su herencia el piso referido en la demanda, una libreta de ahorro en la entidad BBVA con un saldo de 1.062.069 pesetas (16.343 euros), un plazo en la entidad BBVA con un saldo de once millones de pesetas (66.111,33 euros), y un fondo en la entidad BCH con un valor de 14.513 euros, correspondiendo la mitad de todos estos bienes a su esposa María. Así se desprende de los documentos dos a seis aportados junto con la demanda.

Del testamento del Sr. se desprende que legó el usufructo vidual universal a su esposa, la cantidad de un millón de pesetas (6.010,12 euros) a su hija, y que designó heredera universal a su nieta.

Fallecido el Sr. su esposa María, traspasó todo el dinero existente en la libreta de ahorro de BBVA y en el plazo de esa misma entidad a una nueva libreta de ahorro, nº, y a un fondo de inversión, nº ambos en la entidad BBVA. Así se desprende de la documentación aportada con la demanda y de la certificación remitida por la entidad BBVA. De esta documentación se desprende, además, que en esta nueva libreta y en este nuevo fondo de inversión, se nombró como cotitular a Julio, que nunca ha ingresado ninguna cantidad ni en la libreta ni en el fondo.

Asimismo, la Sra. traspasó las cantidades existentes en el fondo de la entidad BCH a otro fondo del BCH denominado Rentas 4E FIM (en la actualidad Santander 100 por 100), y nombró como cotitular de este nuevo fondo a su sobrino Julio, que nunca ha ingresado ninguna cantidad en el fondo. Así se desprende de la documentación aportada junto con la demanda y de la documentación remitida por la entidad Banco Santander S. A.

María falleció el 17 de julio de 2003, bajo testamento otorgado el 25 de octubre de 2001, en el que legaba a su hija Encarnación la cantidad de 6.010,12 euros; a su nieta Aranzazu la cantidad de 6.010,12 euros y la mitad indivisa del piso; a la Asociación Nuestra Señora Virgen de la Oliva la cantidad de 18.030,36 euros y el saldo existente en el fondo de inversión del BCH; y nombraba como heredero a su sobrino Julio. Así se desprende del testamento de la Sra. (documento 7 de la demanda).

Tercero.- Fijados los hechos probados, y en cuanto al fondo del asunto, el demandado Sr. se opone alegando falta de legitimación activa. En su contestación a la demanda viene a estar de acuerdo con todos los hechos expuestos por la demandante, salvo con la afirmación de haber prestado conformidad al borrador que se aporta como documento 14 de la demanda.

La actora es legataria en la herencia de su padre, Pedro, y en la herencia de su madre, María. En cuanto a su legitimación para solicitar las declaraciones formuladas en el suplico de la demanda, la misma vendrá dada por la existencia de una norma jurídica o por la utilidad legítima de la declaración que se solicita.

Realmente no existe una norma concreta que otorgue a la actora una acción para solicitar las declaraciones que se incluyen en el suplico de la demanda. La actora, como legataria de una cantidad de dinero en la herencia de su padre, Pedro, y de su madre, María, es acreedora de las personas que fueron nombradas herederas, respectivamente, en cada una de esas herencias. Y, tratándose de un legado de dinero que, además, existe en cuantía suficiente en la masa hereditaria, tiene derecho a reclamar el pago de su legado al correspondiente heredero. Pero no es esto lo que se solicita en la demanda.

Sin embargo, considero que sí tiene utilidad legítima para la actora determinar qué cantidades pertenecen a cada masa hereditaria. Hay que tener en cuenta que las cantidades de dinero que dejaron a su fallecimiento el Sr y la Sra. están mezcladas, y que, al haber puesto esta última como cotitular de las

diversas cuentas a su sobrino Julio, la posesión de estas cantidades la ostenta una persona que, si bien es heredero de la Sra., no lo es del Sr.. Por lo tanto, y a los efectos de garantizar que no se pueda oponer a la demandante que alguna de las masas hereditarias no era suficiente para hacer efectivo su legado; o que a través de cualquier mecanismo se pueda pretender que las cantidades pertenecientes a las referidas masas hereditarias corresponden a quien aparece como titular del producto bancario; o, en definitiva, para permitirle que pueda accionar contra quien aparece como titular de estos productos en caso de que disponga indebidamente de su contenido, entiendo que sí tiene la actora derecho a que se declare lo siguiente:

"Que de las cantidades existentes a fecha de interposición de la demanda en el fondo de inversión del BBVA; en la libreta de ahorro nº del BBVA; y en el fondo de inversión Santander 100 por 100, antiguo BCH Rentas 2B FIM; en los cuales aparece como titular Julio, la cuantía de 43.525,38 euros corresponden a la herencia de Pedro, y el resto a la herencia de María".

Entiendo que la declaración se tiene que hacer de esta manera, es decir, de forma conjunta, y no tal y como se solicita, distinguiendo los distintos productos bancarios, puesto que se trata de dinero, que es un bien genérico.

Por los motivos expuestos, procede también declarar que el Sr. es tan solo titular de los referidos productos bancarios, pero no tiene sobre su contenido ningún derecho más allá del que le pueda corresponder como heredero de la Sra..

Lo que no puede declararse es que las cantidades incluidas en estos productos bancarios son propiedad de Pedro o de María, ya que estas personas fallecieron y no pueden, por lo tanto, ser titulares de derechos. Y tampoco, en sentido estricto, a sus herederos y legatarios, de forma genérica, sin perjuicio del derecho que cada uno de ellos pueda tener sobre cantidades determinadas una vez aceptadas las herencias y adquiridos los legados.

Tampoco pueden estimarse las peticiones de condena contra Julio, salvo la de estar y pasar por las anteriores declaraciones, dada la generalidad con la que se formulan, y todo ello sin perjuicio de las acciones que puedan corresponder a la actora contra el demandado al ser aquélla legataria en una herencia (la de la Sra.) en la que el Sr. es heredero, y sin perjuicio de las acciones que puedan corresponder a Aranzazu contra el Sr. al ser aquélla heredera de bienes que posee este último. Aparte de que se pide que se condene al Sr. a realizar los actos necesarios para cumplir y llevar a cabo las declaraciones, cuando las declaraciones no se llevan a cabo ni se cumplen (son meras declaraciones), otra cosa es que deba estar y pasar por las mismas, a lo cual sí se accede. Aparte, aunque se ha dicho en varias ocasiones que el Sr. es heredero de la Sra., tampoco es ello exacto: está llamado a la herencia, pero no consta su aceptación.

En cuanto a la demanda dirigida contra Aranzazu, se hacen las mismas declaraciones, por los motivos expuestos, aunque se estima la totalidad de la pretensión de condena al haberse allanado la demandada.

Por todo lo anterior, procede estimar parcialmente la demanda, y hacer las declaraciones que han sido consideradas procedentes.”

72. SUCESIÓN TESTAMENTARIA

*** Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 20 de julio de 2012. Interpretación de testamento mancomunado. Comorencia

"PRIMERO.- Son hechos no debatidos:

1-En fecha 20 de abril de 2.005 los cónyuges Don Leoncio y Doña Maria otorgaron testamento, instituyéndose mutua y recíprocamente herederos universales en pleno dominio y libre disposición, disponiendo en segundo lugar lo siguiente:

"La institución que antecede surtirá los efectos característicos del llamado "pacto al más viviente", por virtud del cual en caso de comoriencia de los testadores, o fallecimiento del sobreviviente sin haber dispuesto por cualquier título de todos los bienes, los que queden serán heredados, como herederos sustitutos, por quienes entonces sean más próximos parientes de ambos testadores, sucediendo cada rama familiar en los que hubieren pertenecido en su origen al respectivo testador".

2-Los cónyuges fallecieron en accidente de tráfico el día 10 de enero de 2.009 de forma simultánea. No tenían descendientes.

3-En fecha 18 de mayo de 2.009 se otorgó escritura de manifestación y aceptación de herencia por Don Angel, Don José, Doña Josefina y Doña Rafaela (hermanos de Don Leoncio) y por Doña Hilaria, Doña Matilde y Doña Sara (hermanos de Doña Maria) en la que se disolvió la sociedad conyugal de Don Leoncio y Doña María, y manifestaron y aceptaron la herencia, como únicos herederos, cada grupo de hermanos, respecto a su respectivo hermano causante.

4-El causante, Don Leoncio, tuvo una hermana, Doña Soledad, fallecida el día 2 de noviembre de 1.983. Los demandantes son hijos de Dola Soledad.

5-El día 6 de octubre de 2.009 los actores otorgaron escritura de aceptación de la herencia de su tío, Don Leoncio, y como sustitutos de su premuerta madre, Doña Soledad (doc n° 5)

SEGUNDO.- Los actores, sobrinos del causante Don Leoncio, solicitan en la demanda como petición principal que se declare su derecho a la herencia de

aquel, en relación a los arts 19, 23, 80, 69, 101 de 'la Ley 1/1999 de Sucesiones por causa de muerte en Aragón, vigente al momento del fallecimiento.

La sentencia desestima la demanda por considerar que fue voluntad de los testadores ordenar el destino de sus bienes, para el caso de comoriencia, a favor de sus más próximos parientes, al momento de fallecer, siendo aquellos los hermanos de Don Leoncio.

La parte actora interpone recurso de apelación. Muestra su disconformidad con la valoración de la prueba, así como con la interpretación que se ha efectuado de la expresión "más próximos parientes" en relación a los arts 69, 19, 23 y 101 Ley 1/1999, de Sucesiones por causa de muerte en Aragón.

TERCERO.- Se trata de un testamento mancomunado, al que se refiere el art 102 de la Ley 1/1.999 de sucesiones por causa de muerte en Aragón, aplicable según la disposición decimotercera del CDFA.

Los testadores se instituyeron mutua y recíprocamente herederos. A continuación se incluyó una exposición jurídica de las consecuencias del pacto al más viviente (art 80 LS) . Los efectos de dicho pacto, en el caso de no haber descendientes, son que el sobreviviente hereda los bienes del premuerto. La sucesión se abre con el fallecimiento del primer causante, produciéndose un primer llamamiento al cónyuge, y fallecido este, y respecto a los bienes que quedaren, un segundo llamamiento a los terceros designados herederos, y si no hubiera esa designación de terceros, a los parientes llamados a la sucesión legal.

En el testamento, dentro de la exposición de las consecuencias del pacto al más viviente, consta la previsión del supuesto de comoriencia, donde no hay transmisión de derechos de uno a otro (art 5 p 2 LS)

Fallecidos los dos testadores, se produjo la apertura de la sucesión (art 5 pl, art 6 LS), a favor de las personas llamadas a suceder por cada uno de ellos. La cuestión es si hubo designación de sucesor en la siguiente expresión ":los que queden serán heredados, como herederos sustitutos, por quienes entonces sean más próximos parientes de ambos testadores, sucediendo cada rama familiar en los que hubieren pertenecido en su origen al respectivo testador". La interpretación de este párrafo ha surgido en el supuesto de fallecimientos simultáneos pero se hubiera planteado en el supuesto de muertes sucesivas.

El art 101 LS regula la interpretación del testamento, precepto a considerar al tratarse de un testamento mancomunado (art 102 LS, dentro. del Titulo III, de la sucesión testamentaria) antes que el art 69 LS mencionado en el recurso,

pues este último se refiere a la interpretación de los pactos sucesorios (titulo II, sucesión paccionada).

Según el art 101 LS ha de estarse a la literalidad de las palabras, a no ser que claramente sea otra la voluntad común de ambos testadores. En. caso de duda, se atenderá a lo que aparezca más conforme a la intención de los testadores según el tenor del mismo testamento.

Hubo unas personas llamadas a suceder (art 151 LS), que fueron los parientes, con certeza en la designación (art 155 LS). El art 159 establece que la disposición a favor de parientes sin determinación de quienes sean, se considerará hecha a favor de los que serían llamados por Ley a suceder en. el momento de la delación y en la proporción resultante de las reglas de la sucesión legal, pero sin limitación de grado y excluyendo al cónyuge. Pero lo dispuesto en el precepto lo es si no resulta otra cosa en el testamento.

Y en el caso resulta otra cosa porque se llamó a quienes, para en el futuro, fueran más próximos parientes. Es decir, a los parientes más cercanos a cada uno de los testadores, de modo que no se llamó a todos ellos, pues se excluyó a parientes menos cercanos. Si, como sostiene la parte apelante, el llamamiento lo fue a la rama familiar de cada uno de los causantes, carece de razón que se incluyera la expresión "más próximos" , pues conlleva el no llamamiento de parientes más lejanos. La expresión "sucediendo cada rama familiar" complementa la anterior expresión, pues, en definitiva, los bienes se mantendrían en el ámbito de la familia de cada uno de los testadores y dentro de cada rama, en quienes, en el futuro, fueran más próximos parientes, con independencia de los motivos que llevaron a esa designación. No parece que fuera otra la intención del testador si se considera que esa situación, familiar ya concurría en la fecha del otorgamiento del testamento, el 20 de abril de 2.005, pues Don Leoncio tenía en ese momento parientes más próximos que otros porque una hermana había fallecido muchos años antes, habiendo dejado descendientes.

En definitiva, del conjunto del testamento se desprende que su finalidad fue que un cónyuge heredase al otro, con facultad de disponer de los bienes heredados. Pero respecto a los no dispuestos, o en el caso de que uno no heredase al otro (comoriencia), consta una designación para los bienes que queden ("los que queden serán heredados"). Hubo designación de sucesores y no hay causa para la entrada de la sucesión legal, pues esta procede en defecto de sucesión testamentaria (art 201 LS)

CUARTO.- En el recurso, con fundamento en errónea valoración de la prueba, se hace una remisión al acta de requerimiento de fecha 18 de mayo de 2.009 otorgada por el mismo Notario que autorizó el testamento, entendiendo la parte apelante que es la personas más adecuada para informar de la voluntad de los testadores y que la sentencia se ha apartado de la interpretación del Notario.

El acta notarial, según el art .144 Rto Notarial, tiene como contenido la constatación de hechos o la percepción que de los mismos tenga el notario, siempre que por su índole no puedan calificarse de actos y contratos, así como sus juicios o calificaciones. Según el art 202 Rto Notarial las actas de notificación tienen por objeto transmitir a una persona una información o una decisión del que solicita la intervención notarial, y las de requerimiento, además, intimar al requerido para que adopte una determinada conducta. El acta de fecha 18. de mayo de 2.009 es un documento público que refleja las manifestaciones de los sujetos requirentes, los actores, y su solicitud de intimación a sus tíos a fin se abstuvieran de formalizar la herencia sin contar con ellos. Pero, en cuanto documento público, solo hace prueba de las circunstancias del art 319 LEC (hechos o estado de cosas, fecha eidentidad de las personas).

En cualquier caso, esa prueba documental también se puede poner en relación con la escritura de manifestación y aceptación de herencia, en la que otro Notario efectué un acta de notoriedad para determinar los más próximos parientes y concluyó con el otorgamiento de la escritura de manifestación y aceptación de herencia por los hermanos de ambos causantes. El otorgamiento de dos escrituras de aceptación de herencia pone de manifiesto dos interpretaciones notariales distintas, y lo que se pretende en el recurso es que se asuma la del Notario que otorgó el testamento porque, según se alega, es quien conocía la verdadera voluntad. Pero la interpretación se ha de efectuar según las reglas del art 101 LS en función del contenido del testamento. Por tanto, la sentencia ha ser confirmada.”

***** Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 17 de Zaragoza de 24 de octubre de 2012. Interpretación de testamento. Institución de heredero de cosa cierta. Legado**

"PRIMERO.- En la demanda rectora del presente procedimiento se ejercita una acción principal, la declarativa de existencia de legado en lugar de la designa hecha en el testamento de heredero de cosa cierta, y otras subordinadas o derivadas de aquellas, de declaración de ciertos efectos propios de aquella primaria petición de institución a título de legatario y de asunción de deudas de quienes son realmente herederos.

Los hechos sobre los que descansa la pretensión actora son, en esencia, los siguientes:

1. Don Manuel , abuelo del demandante, y padre de los demandados, nacido en 1943, sin estudios superiores, pero con experiencia sobrada en el tráfico jurídico mercantil por haber ejercido el cargo de administrador y consejero de diversas sociedades mercantiles, la mayor parte de ellas, de carácter inmobiliario, falleció en 4 de junio de 2011.

2. Su sucesión fue ordenada por instrumento testamentario otorgado ante el Notario José Luis Merino, en fecha 22 de octubre de 2001.

3. En tal testamento instituía heredero de cosa cierta a su hija P en usufructo, y a su nieto demandante (e hijo de la anterior) en nuda propiedad, sobre ciertos bienes de la herencia, en esencia, dieciséis viviendas en una casa de la calle Viriato, diecinueve viviendas en una casa de la calle Julián Sanz Ibáñez, seis viviendas en una casa de la calle San Joaquín, participación indivisa en dos viviendas y un local de la anterior casa, participaciones en diversas compañías mercantiles, una vivienda en la casa nº de la calle Madre Vedruna, y un local comercial en la Plaza Santa Engracia, todas ellas en esta capital.

4. También instituía herederos en otros bienes concretos a los otros dos demandados, y en el remanente de todos sus bienes, derechos y acciones instituía herederos universales, y por iguales terceras partes indivisas a sus tres hijos, aquí demandados.

En la demanda se sostiene que han surgido divergencias irreductibles entre los implicados en el testamento en orden a la interpretación de si fue voluntad de Don Manuel que fuese heredero su nieto y tiene que responder de las deudas y cargas de la herencia, promoviéndose la interpretación de que una lectura integral del testamento indica que realmente quienes quiso el testador que fuesen sus herederos eran sus tres hijos y no el demandante. Se aducen a

continuación ciertos elementos fácticos que se califican como extrínsecos relativos a la afinidad del abuelo para con su nieto, su falta de preparación y capacidad para entender el alcance y consecuencias de una institución de heredero “ex re certa” por tener estudios elementales, su distanciamiento con sus hijos menores A y Ma; se sigue argumentando sobre la falta de uso de esta concreta institución en otras voluntades expresadas con anterioridad por el causante y, por último, se hace referencia a ciertas circunstancias posteriores al fallecimiento, y, entre otras, a los actos del Notario ante el que se otorgó el señalado instrumento, cuyo contenido ha devenido litigioso, que evidenciaría, a criterio del demandante, la calificación de legado de la institución verificada sobre los concretos bienes a que se ha hecho referencia.

Los demandados han adoptado posiciones procesales dispares. La madre del demandante se ha allanado a la demanda, lo que, obviamente, al afectar a derechos de terceros no supone la estimación de la demanda con arreglo a lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Enjuiciamiento civil.

A su vez, los tíos demandados se oponen a la demanda alegando que la cláusula de institución de heredero en cosas ciertas es clara y precisa y no necesita de interpretación alguna. Se arguye también que el Notario autorizante, al que el actor le imputa una conducta profesional desacertada e, incluso, le atribuye el haber obrado a sabiendas de la falta de conocimientos jurídicos del causante para, al parecer, experimentar con diversas figuras sucesorias de reciente implantación en el ordenamiento aragonés, que necesariamente tuvo que ser cuidadoso en la expresión de la voluntad del causante con arreglo a lo que el mismo tiene escrito en ciertos manuales de Derecho sucesorio aragonés (página 121 del manual reseñado). Además, rechaza que por los elementos extrínsecos y circunstancias posteriores pueda extraerse la conclusión de que el causante quisiera establecer legados con el fin de evitar que su nieto no quedara afectado por las deudas.

SEGUNDO.- Conforme al artículo 405.1 del Código de Derecho Foral de Aragón, la sucesión testamentaria se rige por la voluntad del disponente o disponentes manifestada consciente y libremente en testamento otorgado conforme a la Ley. Y el artículo 416.1 previene, regulando la interpretación del testamento, que toda disposición testamentaria deberá entenderse en el sentido literal de sus palabras, a no ser que aparezca claramente que fue otra la voluntad del testador o, si el testamento fuera mancomunado, la común de ambos testadores. En caso de duda, se observará lo que aparezca más conforme a la intención del testador o testadores según el tenor del mismo testamento".

Como dice la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 28 de noviembre de 2006, el sentido de unas y otras normas es el mismo: la voluntad del testador es ley de la sucesión. Pero también se ha dicho en la sentencia del mismo tribunal aragonés de 26 de enero de 2011, que en caso de

duda y pugna entre la letra y espíritu del testamento ha de prevalecer la intención sobre las palabras, dando así a entender que sólo en caso de duda o de cláusula oscura debe indagarse sobre la voluntad del causante siguiendo así el principio de “in claris non fit interpretatio”.

Abundando en esta cuestión, la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de julio de 2012 declara que la interpretación viene presidida por la regla de la preponderancia de la voluntad real del testador de modo que la interpretación literal es punto de partida y llegada del discurso interpretativo si los términos de la declaración formal testamentaria son claros y no dejan lugar a duda, es decir, cuestión interpretable, acerca de la voluntad realmente querida. En el mismo sentido la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de marzo de 2011 declara que la verdadera voluntad del testador debe deducirse del sentido literal de las palabras utilizadas, lo que no excluye la posibilidad, según el artículo 675 del Código civil, que se pruebe claramente que fue otra distinta. De aquí la jurisprudencia de esta Sala ha dicho que si las palabras están claras, se han de interpretar de forma literal, a no ser que claramente aparezca que fue otra la voluntad del testador, "sin que sea lícito al intérprete la búsqueda de otros medios probatorios más allá de la literalidad" (sentencias del Tribunal supremo de 18 de junio 1979, 24 marzo y 8 junio 1982, 26 marzo 1983). La sentencia de 22 noviembre 2010 se plantea de nuevo el problema de la interpretación de las cláusulas testamentarias y recuerda que "La declaración de voluntad del testador es el objeto de la interpretación y al ser expresada siempre con palabras, requiere determinar si el sentido aparente coincide con el real y si bien el intérprete no puede suplir la voluntad testamentaria, lo que sí puede y debe hacer es aclarar, con criterios objetivos, lo que aparece oscuro en una disposición. Pero ello debe hacerse después de examinar la disposición debatida y calibrar si la cláusula o la disposición que se cuestiona resultan verdaderamente oscuras". Asimismo, la sentencia de 2 noviembre 2010, que declara la preferencia de la voluntad del causante sobre la literalidad de los términos empleados.

Por tanto, sigue señalando la sentencia de 18 de marzo de 2011, la primera regla interpretativa es la literalidad, de modo que a la hora de atribuir un sentido a la voluntad testamentaria, debe analizarse el texto de la disposición discutida. Así, si alguien pretende que el sentido literal del testamento no concuerda con la verdadera voluntad del testador debe acreditarlo plenamente, porque la ley parte de una idea básica, que algunos califican de presunción, de que el testador tradujo su voluntad en las palabras que utilizó. Los otros medios, que han sido calificados como extrínsecos, no pueden rechazarse, pero jugarán un papel accesorio en la interpretación y sobre todo, debe evitarse que se atribuyan al testador soluciones que no quiso.

TERCERO.- Trasladadas las anteriores consideraciones relativas a la hermenéutica de los testamentos al caso enjuiciado, se anticipa ya, que la demanda interpuesta no puede prosperar por la sencilla razón de que no concurre la prueba plena e indubitada ni aparece claramente, en los términos del artículo 416 del Código aragonés, que el testador hubiera querido al estatuir sus últimas voluntades establecer un legado en lugar de la institución de heredero de cosa cierta que recogió el fedatario autorizante con las consecuencias legales en orden al pago de las deudas que se derivan del artículo 467 del Código de Derecho Foral de Aragón.

En el testamento de referencia, documento nº 2 de la demanda, bien a las claras se instituye "heredero" de cosas ciertas al demandante. No se dice que se instituya "ex re certa" como se señala en la demanda y se afirmó en conclusiones, sugiriendo así que con tal expresión latina, combinada con los estudios primarios y formación elemental del testador, éste no habría tenido conocimiento cabal de la institución. No es así. Se habla de heredero de cosa cierta y el testador no era la persona primaria que describe su nieto en la demanda: era un hombre inteligente y administraba diversas empresas inmobiliarias y participaba de la gestión de otras sociedades mercantiles (testimonio de su amigo y albacea renunciante J), de lo que cabe inferir cierta asiduidad y experiencia en la suscripción de escritura notariales, con plena conciencia del alcance de sus cláusulas. Y al respecto consta cómo en el último testamento que hizo con anterioridad al hoy litigioso, datado en 2 de noviembre de 1994, y otorgado ante el mismo Notario, en lugar de tal institución realizó legados, de modo que la nueva fórmula empleada en 2001, que sustituyó a los legados, necesariamente debió ser consentida por el testador y necesariamente hubo de ser informado sobre su alcance por el Notario autorizante. En este sentido, se lee al final de la escritura, que el testador manifiesta que lo encuentra conforme con su voluntad declarada y procede a su otorgamiento firmando y rubricando.

No es que exista aquí la presunción derivada de los artículos 145.1 y 147 del Reglamento Notarial, de que el referido Notario redactó el instrumento público conforme a la voluntad del otorgante, una vez que indagó, interpretó y adecuó al ordenamiento jurídico tal voluntad e informó a aquél del valor y alcance de su redacción, salvaguardando así su deber de dar fe, entre otros extremos, de la voluntad debidamente informada del testador, ni que en la página 121 del Manual de Derecho sucesorio que escribió tal Notario se refiera a la conveniencia de que por los notarios aragoneses se consulte con el disponente si su voluntad es que los instituidos como herederos de cosa cierta participen, con el resto de herederos, en el pago de las deudas y cargas de la herencia, o no, sino que en el caso enjuiciado concurre una prueba directa de que tal Notario es especialmente meticuloso en orden a reflejar con la fidelidad debida lo querido

por el testador según expresa declaración testifical de la albacea y abogada, Sra. A.

En la realidad de las cosas, la pretensión actora descansa en una premisa y presupuesto que aquí se halla por completo huérfano de prueba: que el Notario no explicó esta concreta institución al testador, y, más allá, que a sabiendas, habría redactado esta cláusula para colmar, al parecer, sus inquietas aspiraciones doctrinales como profundo conocedor del Derecho aragonés, creando así una situación compleja y problemática donde no la había. Y es verdad que al cabo de los años, casi diez desde que se otorgó el testamento, se ha producido una situación compleja, pero tal complejidad lo es más por causa del notorio derrumbe del valor de los pisos e inmuebles, que por la redacción de esta cláusula.

CUARTO.- Por lo demás, los elementos extrínsecos de que habla la demanda y las voluntades expresas previas no son en absoluto elementos probatorios que permitan desvirtuar la terminante y clara disposición testamentaria. Ya se dijo que el testador no era la ignorante y primaria persona que es presentada por el demandante y tampoco las voluntades expresas previas revelan la falta de conocimiento alegada, pues los testamentos de 30 de noviembre de 1992 y los sendos de 1994, se limitaban a instituir herederos universales y legados, pero que posteriormente, en 2001, instituyera heredero en bienes concretos no significa que no supiera de su alcance y consecuencias. Por lo demás, la voluntad del testador, manifestada poco tiempo después del otorgamiento ante su amigo J, de que dejaba a su nieto bastante bien para que no tuviera problemas, nada prueba, antes bien, puede afirmarse que en aquel momento es algo que se cumplió con tal instrumento de voluntad sucesoria ya que: a) no consta, y era carga probatoria de la parte demandante, que en el momento del otorgamiento, que es el referente temporal que debe valorarse al escudriñar la voluntad del testador (así lo declara la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de diciembre de 2006, que cita sobre este particular las de 29 de diciembre de 1997 y de 23 de enero de 2001), existieran las deudas con garantía hipotecaria que se reflejan en el documento nº 3 de la contestación, en el que se descubren hasta 27 préstamos con vencimiento, todos ellos, en 2032, de lo que no se infiere o deduce precisamente que ya en aquel momento existieran tales cargas y deudas, repercutibles al instituido heredero; y b) se le dejó la nuda propiedad de un importante caudal de bienes inmuebles, con el usufructo atribuido a la madre, con la que actúa consensuadamente como se deriva del allanamiento de ésta, y si bien las deudas de que debe responder, existentes en el momento del fallecimiento, ascendían a una importante cantidad de dinero e incidirían en al menos el tercio del valor de lo recibido, según se deduce del documento nº 4 de la contestación, resultaría un activo final de más de un millón de euros.

Tampoco el hecho de que en el testamento se instituyera herederos universales en el remanente de los bienes a los tres hijos demandados tiene la implicación presuntiva que se preconiza en la demanda, ya que es una solución perfectamente posible y cubriría la sucesión en los bienes que no fueron objeto de adjudicación directa, de igual modo que si no se hubiera hecho la designa ya que entonces hubiera operado la sucesión legal con la misma solución que la prevista testamentariamente.

Y en cuanto a la fallida operación de inscripción en el Registro de la Propiedad de los bienes de que fue instituido el demandante, y la eventual conceptuación como legado que se hizo desde la Notaría, se trata de un suceso impreciso y que no ha sido exactamente probado por el demandante, ya que la intervención del albacea en la entrega de los bienes que fueron directamente adjudicados por el testador era patentemente innecesaria, pero con todo y con ello sólo revelaría la facultad que el demandante tendría de proceder a la autoposesión en los bienes de que fue instituido, pero no más, lo que es predicable tanto al legatario como al heredero en cosa cierta.

QUINTO.- La demanda debe ser así necesariamente desestimada al no ser posible con el material probatorio existente la declaración judicial impetrada de transmutar una institución de heredero de cosa cierta en legado, con las consecuencias legales expresadas, ni, por ende, cabe el acogimiento de los secundarios y subordinados pedimentos instados en la demanda, relativos a la falta de responsabilidad en el pago de las deudas y cargas de la herencia a cargo del instituido heredero, ni que fueran los tres demandados los únicos llamados al pago de las deudas y cargas de la herencia, sin que tampoco resulte procedente, por contravenir el principio de congruencia que se estatuye en los artículos 216 y 218 de la Ley de Enjuiciamiento civil, la declaración de “soslayo” que se pidió por la parte actora en el acto del juicio, atinente a la calificación jurídica de las deudas hipotecarias, en esencia, si siguen al bien o son parte de la masa pasiva de la herencia, pues no fue pretensión debidamente articulada en el suplico de la demanda.”

***** Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 14 de Zaragoza de 8 de noviembre de 2012. Interpretación de cláusula testamentaria. Sentido literal**

"PRIMERO.- A la luz de la prueba practicada en el acto del juicio resulta innecesaria la práctica de la testifical solicitada como diligencia final por la defensa de la parte demandada pues con independencia de que la declaración de los citados profesionaIes (médico y trabajadora social) se solicita (únicamente para que ratifiquen las declaraciones prestadas ante el notario, que no han sido puestas en tela de juicio por la parte contraria, de la mencionada prueba resultan elementos mas que suficientes para dar cumplida respuesta a la cuestión litigiosa.

SEGUNDO. - La demandante, Doña L, hermana de la fallecida Doña S, ejercita en las presentes actuaciones un acción declarativa en solicitud de un pronunciamiento que indique no haber lugar a la declaración de herederos de la citada finada obtenida por sus dos sobrinas aquí demandadas, Doña R y Doña H, en virtud de acta notarial de fecha 11 de marzo de 2011 del notario. Sr. H y la correspondiente aceptación, manifestación y adjudicación de herencia (documento 3 de la contestación).

Esta solicitud la fundamentan, en síntesis, en la no concurrencia en dichas personas de los requisitos exigidos en la cláusula segunda del testamento mancomunado abierto otorgado por la difunta y su entonces esposo en fecha 22 de febrero de 1999 y en la cual se establecía, literalmente, lo siguiente: "y si el sobreviviente no dispusiere o ambos fallecieren simultáneamente, instituyen heredero a la persona física o jurídica que les estuviese cuidando a su fallecimiento, en su propio domicilio o en el de la persona cuidadora". Como quiera que en el momento del fallecimiento de Doña S, viuda y sin hijos, no había nadie que cumpliese tal requisito entiende la actora que no concurre el supuesto previsto y debe dejarse sin efecto la declaración notarial de herederas obtenida por las demandantes procediéndose a la apertura de la sucesión intestada.

Estas últimas, por su parte, se oponen a la pretensión actora sosteniendo que fueron ellas, junto con sus maridos e hijos, quienes cuidaron de la finada durante los últimos meses de su vida, dado el importante deterioro de salud padecido por la misma, siendo ellas, asimismo quienes estuvieron a su lado durante su último internamiento hospitalario y la acompañaron hasta su fallecimiento, ocurrido el 24 de diciembre de 2010.

TERCERO.- La amplia libertad que el Código de Derecho Foral de Aragón (en adelante CDFA) otorga con carácter general al testador para disponer del

destino de sus bienes en su art. 318 se concreta en el art. 405.2 cuando establece que "El testamento podrá contener cualesquiera disposiciones relativas a la ordenación de la sucesión del testador o testadores", y se completa con la forma en que debe interpretarse el contenido del mismo según indica el art. 416: "Toda disposición testamentaria deberá entenderse en el sentido literal de sus palabras, a no ser que aparezca claramente que fue otra la voluntad del testador o, si el testamento fuera mancomunado, la común de ambos testadores. En caso de duda, se observará lo que aparezca más conforme a la intención del testador o testadores según el tenor del mismo testamento", y añadiendo a continuación que "Las cláusulas ambiguas u oscuras se interpretarán en sentido favorable a su eficacia, comparando unas con otras, y de existir contradicción irreductible no será válida ninguna de las que pugnen sustancialmente entre ellas. Las disposiciones ininteligibles se considerarán no formuladas." ·Es en este contexto como debe interpretarse la mencionada disposición testamentaria, poniéndose en relación la misma con las diversas pruebas practicadas en las presentes actuaciones.

CUARTO. - Según se desprende del tenor literal de la citada cláusula, la voluntad de los testadores fue la de rechazar la sucesión legal optando por beneficiar a quien o a quienes estuviesen cuidándolos y encargándose de ellos, o de uno de ellos como fue el caso, y satisfaciendo sus necesidades en el momento del fallecimiento, bien fuese persona física o jurídica. Nótese que el mencionado texto no habla de quien los cuidase durante su enfermedad, ni durante sus últimos años de vida, ni incluso durante el año anterior" que bien podía haberlo dicho, sino únicamente de quien los estuviese cuidando "a su fallecimiento" por lo que para la resolución de la cuestión controvertida habrá que determinar si durante la época inmediatamente anterior al óbito la citada Doña S estuvo o no auxiliada o cuidada por alguna persona o por el contrario, como sostiene la actora, la misma fue autosuficiente hasta prácticamente la fecha de su último internamiento en el mes de diciembre no necesitando asistencia con anterioridad.

QUINTO. - La prueba testifical practicada por la parte actora pretende refutar las alegaciones realizadas por los testigos en el acta notarial, negando que las demandadas estuviesen cuidando o auxiliando a Doña S durante los últimos meses de su vida y sosteniendo que su única actividad fue la de preconstituir prueba en tal sentido, habida cuenta que conocían el contenido del testamento y la mencionada cláusula en particular, puesto que aquélla fue hasta prácticamente el mes de noviembre autosuficiente para cubrir sus necesidades (compraba, hacía la comida, lavaba, se aseaba ella sola, etc.) estando ayudada únicamente por una mandadera algunos meses; subsidiariamente, y aunque no

se diga así de forma expresa, se pretende por su defensa acreditar que, en todo caso, no eran las demandas las únicas personas que auxiliaron y se encargaron de Doña S sino que otros parientes también estuvieron pendientes de la misma.

SEXTO.- La pretendida autosuficiencia de la causante sostenida por la parte actora resulta refutada no solo por la documentación médica aportada (ya en el mes de septiembre se le diagnostica una probable demencia y se indica que no puede vivir sola, documento 1 de 15, apareciendo otro ingreso en urgencias el 29 de ese mismo mes. documento 9 de 15) sino por las declaraciones de diversas vecinas, sra. R y Sra. G, personas totalmente imparciales que confirman que siempre la veían acompañada por alguna de las demandadas y que estas eran quienes le hacían la compra, iban a la farmacia, etc. , e incluso por la de testigo sr. F, esposo de otra de las sobrinas, Doña M, quien también reconoce que de la compra se encargaban las hoy demandadas; las declaraciones de estos testigos, valoradas en la forma establecida en el arto 376 de la LEC, se consideran de mayor fuerza probatoria que las prestadas por otros, incluso con vínculos familiares, y permiten concluir que la causante, anciana de 89 años con severos problemas cardiacos, no se encontraba en un estado físico tal que le permitiese valerse por sí misma para las tareas habituales, entendiendo como tales las que el sentido común atribuye a personas de esa edad, necesitando de la ayuda de terceros para llevarlas a cabo.

SEPTIMO.- Determinada, pues, esa necesidad de ayuda, la siguiente cuestión a dilucidar es la de si fueron o no las demandadas quienes llevaron a cabo esa tarea, y en este sentido, las declaraciones de las testigos antes citadas así como las de la Sra. Ch (empleada de hogar que atendió a la causante durante el mes de diciembre hasta su último internamiento), vienen a confirmar que, efectivamente, dichas atenciones fueron prestadas en el último periodo de la vida de Doña S por las citadas sobrinas, Doña H y Doña R. Hay al respecto un dato esencial que da plena virtualidad a lo anterior y es el hecho reconocido por todas las partes, de que tanto la demandante como su hija Doña I, residen en la provincia de Tarragona, e igual ocurre con otra de las sobrinas, Doña Ma, que ha declarado como testigo, y si bien este dato por sí solo no significa que se despreocuparan por completo de su tía (de hecho tanto la citada Doña Ma como su esposo D. F la visitaban con frecuencia cuando venían a Zaragoza e incluso tuvieron que llamar a una ambulancia una vez al sufrir la misma una crisis), no es lo mismo una preocupación y un interés por su parte por la salud de su tía, que se reconoce sin duda, que una atención continuada y constante pues es evidente que el hecho de residir en otra provincia limitaba, lógicamente, la posibilidad de prestar las debidas atenciones. Las manifestaciones de la testigo antes citada, Sra. Ch, que como ya se ha indicado realizó tareas domésticas en la vivienda de Doña S en el mes de diciembre, son suficientemente esclarecedoras cuando señala que durante el tiempo es que estuvo trabajando solo visitaban a

la señora sus dos sobrinas y los hijos de éstas, permaneciendo las mismas en la casa cuando ella se marchaba tras acabar sus labores, y que no le consta ni que fuesen otros familiares ni que llamasen por teléfono. Por último, también queda acreditado que las personas que estuvieron presentes en los últimos días de vida de Doña S en el hospital fueron las dos sobrinas citadas y el esposo de una de ellas por lo que, en concusión, hay que entender que se han cumplido los requisitos establecidos en la cláusula testamentaria y no hay motivo, por tanto, para dejar sin efecto el acta de notoriedad verificada a favor de las demandadas ni, consecuentemente, la aceptación de herencia efectuada por las mismas.”

74. FIDUCIA SUCESORIA

***** Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 30 de mayo de 2012. Momento en que se produce la delación de la herencia. Ejecución o extinción de la fiducia**

"PRIMERO.- D. Luis L. A. y su esposa Dª María C. O. otorgaron en fecha 15 de marzo de 1993 testamento en cuya cláusula tercera se establecía: "se nombran igualmente fiduciarios para que el sobreviviente de ellos, mientras se conserve viudo, pueda disponer libremente de sus propios bienes, de los del premuerto y de los consorciales de ambos, entre sus descendientes comunes, en una o más veces, ya sea por actos inter vivos o mortis causa". Y en su cláusula cuarta: "para el caso de que el sobreviviente de los testadores no hiciere uso de la facultad fiduciaria contenida en la cláusula precedente, instituyen heredero a su hijo José Luis L. C., sustituyéndole en caso de premoriencia sus descendientes".

D. Luis L. A. falleció el día 7 de enero de 2008. Unos meses después, el 25 de octubre de 2008, falleció su hijo, habiendo instituido heredera testamentaria a su esposa María Aurelia B. L. (ahora actora) y sin haber dejado descendencia. En el momento del fallecimiento de D. José Luis la fiducia no había sido ejecutada.

Se postuló en la demanda que se declarase heredera de D. Luis L. A. a Dª María Aurelia B. L., y asimismo que se declarase nula la escritura de declaración por notoriedad de herederos abintestato otorgada ante la notario de Pina de Ebro el 12 de abril de 2010 bajo el nº 150 de su protocolo. La pretensión, como ha quedado expuesto en los antecedentes de esta sentencia, fue desestimada.

SEGUNDO.- En el presente recurso, aunque con no muy depurada técnica casacional, se invoca infracción de los artículos 28 y 133 de la Ley 1/1999 de 24 de febrero de sucesiones por causa de muerte (en adelante, Lsuc.) actualmente artículos 343 y 448 del Código del Derecho Foral de Aragón (en adelante CDFA) y del artículo 1.006 del Código civil.

Es el citado artículo 133 de la Lsuc. el que se ha aplicado en la sentencia impugnada. Allí se dispone que *a todos los efectos legales, la delación de la herencia no se entenderá producida hasta el momento de la ejecución de la fiducia o de su extinción*. Para la fiducia, pues, se introduce una salvedad a la regla general que consagra el artículo 6.1 Lsuc. (actual 321.1 CDFA) y su razón se encuentra, como pone de relieve la doctrina científica, en el hecho de que el nombramiento de fiduciario es un negocio que no basta, por sí solo, para la

producción de su efecto propio (señalar la dirección del fenómeno sucesorio) sino que necesita un elemento integrativo, cual es la ejecución de la fiducia.
La aplicación de dicho precepto ha sido errónea en tesis del recurrente, quien aduce que el precepto *es para el supuesto de extinción y de ejecución de la fiducia y en este caso ni se da lo uno ni lo otro.*
Así es, en efecto. Pero lo relevante es que si no se da ni una ni otra circunstancia, no hay delación, y eso es precisamente lo que ha llevado a la desestimación de la demanda, de modo que el aserto referido resulta inconducente.
Se arguye por la representación de Dª María Aurelia que al fallecer el único descendiente común, la fiducia no existió y quedó ineficaz, alegación esta última en la que ya se insistió en el recurso de apelación, reprochando a la sentencia que diera a la fiducia por válida y eficaz, aun cuando era de imposible cumplimiento. En otros pasajes del recurso se alude también a la ineficacia del testamento, afirmando que su contenido era perfectamente eficaz y válido *en tanto en cuanto sobreviviera* el único hijo común. No es así. Si la fiducia no llegó a ejecutarse por haber fallecido el único descendiente común, ciertamente aquella no alcanzó el fin para el que se constituyó, no produjo efectos definitivos, pero aquella circunstancia extrínseca y sobrevenida no transformó en inválido un encargo fiduciario originariamente válido y que desplegó efectos hasta que devino ineficaz. De ningún modo podrían reputarse inválidos los actos de administración o de disposición que la viuda hubiera podido realizar de conformidad con lo previsto en los arts. 449 y ss. del CDFA.
La fiducia, es decir, la atribución que D. Luis hizo a su esposa de la facultad de ordenar su sucesión, existió y en el momento en el que se produjo el fallecimiento de D. José Luis continuaba viva, ya que el encargo hecho por el comitente -que como se ha indicado no adolecía de vicio o irregularidad alguno- estaba vigente al ser la única fiduciaria la esposa -que no había perdido tal condición- y, por tanto, con posibilidad de ser ejecutado. Puesto que en ese estado de cosas murió el único posible beneficiario, a la determinación del heredero de D. Luis L. A. hubo de llegarse de conformidad con las normas reguladoras de la sucesión legal. La previsión de la cláusula cuarta del testamento, y dado que el nombramiento de la fiduciaria era de por vida dada su condición de cónyuge (art. 444.2 CDFA) sólo podía operar para el caso de que aquella falleciera (o no se conservase viuda, conforme a lo allí previsto) sin haber hecho uso de la facultad que se le confirió.

TERCERO.- La sentencia recurrida, tras señalar que resulta de aplicación al caso el artículo 133 de la Lsuc. razona que... *al tiempo de fallecer el hijo, no se había agotado la fiducia otorgada a favor de su madre (...) no se había ejecutado ni extinguido la fiducia y por tanto la herencia del fallecido esposo no se había deferido a favor del hijo. La fiducia todavía estaba dentro de plazo para poder ser ejecutada y por tanto no se había producido la delación de la*

herencia, abriéndose en tal caso la sucesión legal respecto de los bienes del fallecido hijo...
Con independencia del lapsus que da lugar a esta última expresión, pues es evidente que no se ha planteado en el pleito cuestión alguna en torno a los bienes del hijo (de hecho, en el recurso no se hace mención alguna a este error) resulta forzoso reconocer que la primera parte del razonamiento, que conduce por sí a la confirmación de la sentencia de instancia, es impecable y se ajusta por completo a la norma citada.

CUARTO.- El artículo 28 Lsuc. no se menciona en la sentencia y no resulta de aplicación a la situación de hecho, puesto que regula los efectos de la aceptación y la repudiación de la herencia, actos que no pueden llevarse a cabo sino una vez que ha tenido lugar la delación. Ninguno de los dos actos se realizaron en el caso, ni ello hubiera sido posible ya que, ha de reiterarse, no hubo delación a favor de D. José Luis. De ello es consciente la recurrente y, quizá por eso alude en el recurso a la *retroacción de la herencia*, expresión con la que parece sostener que en el caso la sucesión se defirió a la muerte del padre, pues razona así: ... *una vez cumplido el encargo y aceptada la asignación que fuere por el llamado a la sucesión, los efectos de esta aceptación deben ser asumidos por el beneficiario desde el instante del fallecimiento del causante, aunque la delación se entiende hecha en el momento del encargo fiduciario o desde su extinción, y entretanto la herencia se considera en situación de herencia yacente* (...). *Debe retrotraerse la herencia al momento del fallecimiento de D. Luis L. A., ya que el testamento devino ineficaz al no poderse cumplir la fiducia por fallecimiento del único descendiente, y hasta el óbito de éste, la fiduciaria no había ejercitado el encargo del testamento*... Pero no tiene razón. La situación en la que se encontraba la herencia –pendiente de asignación- no era exactamente la de la herencia yacente, ya que en ella hay unos llamados determinados, lo cual no sucede en el caso de la fiducia. Repetiremos que en el caso no se cumplió el encargo, ni por tanto tuvo lugar la aceptación de la asignación. La fiduciaria no había ejecutado el encargo, pero –habremos de insistir en ello- podía aún hacerlo en virtud del testamento, que era válido y eficaz, y puesto que no había perdido su condición de fiduciaria.

QUINTO.- Es consecuencia de todo lo anterior que el artículo 1.006 del Cc cuya infracción asimismo se denuncia no resulta de aplicación. No sólo porque el supuesto de hecho que contempla (la transmisión del derecho a aceptar o repudiar) es objeto de regulación en el CDFA (artículo 354) sino porque se refiere al *heredero*. Pero como ha quedado expuesto, en la fiducia nadie es llamado a la herencia hasta que la misma no se ejecuta, a diferencia de lo que ocurre con el fideicomiso del Cc (art. 784) donde el fideicomisario adquiere derecho a la sucesión desde la muerte del testador aunque muera antes que el fiduciario.

En definitiva, puesto que ningún derecho hereditario llegó a adquirir D. Luis L. C., nada pudo transmitir a su esposa y heredera.”

76. SUCESIÓN INTESTADA

***** Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 13 de julio de 2012. Sucesión intestada en bienes no troncales. Sustitución. No aplicación de la doble cuota en favor de sobrinos de doble vínculo**

"PRIMERO.- Son datos de hecho de interés:

I.- Dña. L falleció en Zaragoza el día 5-7-10, soltera, sin descendencia y sin haber otorgado testamento.

Dña. L era hija de D. F.D.M y Dña. T.L.S, fallecidos respectivamente los días 12-11-90 y 31-2-38, habiendo tenido una hermana de doble vínculo, G.D.L, fallecida el 3-3-88.

Dña. G casó con D. J.A.G.R, con quien tuvo un único hijo, D. Isidro, quien solicita la declaración de herederos objeto de este procedimiento.

Tanto Dña. G como D. J.A premurieron a la causante de la sucesión, la primera el 3-3-88 y el segundo el 27-12-82.

II.- Dña. L tenía también un hermano de vínculo sencillo, D. F, hijo del segundo matrimonio de su padre, que el 22-2-41 casó con Dña. A.B.

D. F.D.B falleció el 26-12-05, antes que Dña. L, viudo, y dejó dos hijos, A.D.C y D. Francisco.

III.- En consecuencia, a) D. Isidro es el único descendiente de la única hermana de doble vínculo de Dña. L, y Dña. A y D. Francisco, los únicos descendientes de su medio hermano.

IV.- En cuanto a los bienes de la herencia, hay dos clases de bienes:

I.- Bienes troncales maternos, heredados por Dña. L de su madre, Dña. T, y ésta, a su vez, de su madre, Dña. P.

II.- Bienes no troncales, a los cuales se limita el recurso interpuesto.

SEGUNDO.- El 15-9-11, promovida por D. Isidro la declaración de herederos abintestato, recayó auto en el que se declaran universales herederos de Dña. L:

- En lo referente a los bienes no troncales y a los troncales de la rama paterna, a sus sobrinos D. Isidro, Dña. A.D.C y D. Francisco por iguales e indivisas partes.

- En lo que respecta a los bienes troncales de la rama materna, a su sobrino D. Isidro".

Se dice en la fundamentación del auto que "en relación a la no aplicabilidad de la doble cuota a favor del sobrino de doble vínculo, el legislador aragonés da relevancia al doble vínculo únicamente en la sucesión de hermanos (art. 218.1)" -Ley de Sucesiones de 1999-; que el párrafo 3º de este precepto es coherente con el reiterado criterio legal de distribuir en partes iguales los bienes a los colaterales del causante que son del mismo grado de parentesco (arts. 204.2, 211.1º y 217.4º)"; y que "por ello debe prescindirse de la aplicación de la regla de la doble cuota al doble vínculo cuando concurren sólo hijos o sólo nietos de hermanos".

Recurre D. Isidro que solicita se revoque el auto dictado y se declare que en los bienes no troncales de Dña. L heredarán él en 2/4 partes y D. Francisco y Dña. A.D.C en ¼ parte cada uno, manteniéndose el pronunciamiento en cuanto a los bienes troncales.

Alega el recurrente que la interpretación del auto recurrido, cerrada a lo establecido en los arts. 218 y 204 de la Ley de Sucesiones, es errónea, y que lo procedente hubiera sido acudir al art. 218 de la Ley, en relación con el art. 25, que es el que habla de sustitución, y no con el art. 204, que habla del principio de proximidad de grado. El art. 25 de la Ley de Sucesiones dispone que "Por la sustitución legal, la delación en favor del sustituido o su condición de legitimario de grado preferente corresponde a su estirpe de descendientes, de modo que el sustituto o sustitutos legales ocupan el lugar que habría correspondido al sustituto si no hubiera concurrido causa de sustitución". Y así, puesto que la Ley concede a favor de los hermanos de doble vínculo doble cuota que a los medio hermanos, lo lógico es que se mantenga esa distinción en cuanto a los descendientes de éstos.

TERCERO.- La Ley de Sucesiones de Aragón, aplicable en el caso de conformidad con su Disposición Transitoria Primera, pues el fallecimiento de Dña. L, la causante, y la apertura de su sucesión tuvo lugar cuando tal norma estaba vigente (art. 5.1 de la Ley), no contempla expresamente el régimen de atribución de los bienes de la herencia cuando concurren descendientes de hermanos de doble vínculo y de medio hermanos. El art. 218.1 sólo se refiere al caso de concurrencia de hermanos de doble vínculo y medio hermanos, el art.

218.2 al de concurrencia de medio hermanos, y el art. 217.2 al de hermanos de doble vínculo.

El recurrente, con el citado apoyo en el art. 25 de la Ley de Sucesiones, defiende la aplicabilidad al caso de la regla del duplo –llamamiento a doble cuota que los hijos de medio hermanos de los hijos de hermanos de doble vínculo- ; sin embargo, el juego de ese artículo, y la sustitución legal a que se refiere, parece que queda excluido por el art. 217.4 de la Ley, a cuyo tenor “Si concurren hijos y nietos de hermanos, la herencia se defiere por sustitución legal, pero si concurren sólo hijos” –como es el caso- “o sólo nietos de hermanos, la herencia se defiere por cabezas”.

Ello supuesto, no siendo pacífico el tema en la doctrina, son argumentos ante los que debe ceder la aplicabilidad en el caso de la regla del duplo, no sólo el citado art. 217.4 L.S. -“... si concurren sólo hijos... de hermanos, la herencia se defiere por cabezas”-, sino el art. 204.2, conforme al cual “los parientes de la misma línea y grado heredan por cabezas o a partes iguales, salvo previsión legal en contrario”. Por lo que, no existiendo esta previsión, procede concluir, como declaraba el auto de 21-4-03 de la Sección 4ª de esa Audiencia, “que fuera del supuesto de concurrencia de hermanos de doble vínculo y de vínculo sencillo, que expresamente contempla el artículo 218.1 de la referida Ley” –la Ley de Sucesiones- “todos los hijos de hermanos, cuando concurren solos, heredan por partes iguales, aún cuando sean hijos de hermanos de doble vínculo y de vínculo sencillo” Sin que nada en contra se desprenda del art. 219.2 –“La delación en favor de estos colaterales se verifica sin distinción de líneas ni preferencia entre ellos por razón del doble vínculo”-, porque se refiere a los que no pertenecen a la parentela de los hermanos del causante, y porque, como también decía el citado auto de la Sección 4ª, lo que en él se regula es la delación y no la distribución de bienes.”

8. DERECHO DE BIENES

*** Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 11 de julio de 2012. Usucapión de servidumbre de paso aparente

"PRIMERO.- Antes de entrar en el examen de los motivos del recurso de casación debe ser resuelta la causa de inadmisibilidad alegada por la parte recurrida en su escrito de oposición pues, en caso de ser estimada, llevaría a la desestimación del recurso, por su inadmisión, sin necesidad de resolver sus motivos.

Tal causa de inadmisibilidad la basa la parte recurrida en que el recurso fue interpuesto al amparo de lo dispuesto en el artículo 477.2.3 y 477.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, acompañando copia de dos sentencias de la Sala, la de 11 de mayo de 2.007 (recurso 5/2007) y la de 1 de diciembre de 2.009 (recurso 9/2009), por presunto interés casacional (artículo 2.2 de la Ley 4/2005, de 14 de junio, sobre la casación foral aragonesa), sin argumentar en qué se basa el interés casacional mencionado ni cuál es la doctrina legal que de dichas sentencias emana. Solicita que, por ello, se inadmita en este trámite el recurso de casación sin entrar a conocer del fondo del asunto.

El recurso fue admitido en virtud del Auto de la Sala de 26 de marzo de 2.012 en el que, reconociéndose la defectuosa argumentación del interés casacional utilizado como vía de acceso, la cuantía superior a los 3.000 euros señalada en el artículo 2.1 de la Ley 4/2005, de 14 de junio, sobre la casación foral aragonesa, permitía su acceso sin necesidad de otra argumentación. La misma conclusión ha sido autorizada por la Sala Primera del Tribunal Supremo en autos como los de 16 de enero de 2.007 y 25 de noviembre de 2.008, admitiendo este último un recurso por razón de la cuantía aun habiendo sido interpuesto por interés casacional.

El legislador aragonés ha querido expresamente que se utilice el recurso de casación en el mayor número posible de litigios sobre Derecho civil aragonés (Preámbulo de la Ley 4/2005), para propiciar la creación de la jurisprudencia que complemente nuestro ordenamiento civil, estableciendo para ello una cuantía solo superior a tres mil euros, o imposible de calcular ni siquiera de modo relativo, dejando para los demás casos la vía del interés casacional (artículo 2.2), razón que permite la admisión del recurso cuando la cuantía resulte superior a la cantidad indicada, aun no acreditado suficientemente el interés casacional. Por ello procede rechazar la causa de inadmisión alegada por la parte recurrida y entrar a conocer el fondo del recurso.

SEGUNDO.- Los dos motivos del recurso se articulan por infracción del artículo 568 del Código del Derecho Foral de Aragón (CDFA), el primero en

relación con el artículo 532 del Código civil, y el segundo en relación con los artículos 444 y 1942 del Código civil. En sus alegaciones de oposición a los motivos del recurso argumenta la parte recurrida que no cabe alegar infracción del artículo 568 del Código del Derecho Foral de Aragón (CDFA) porque este cuerpo legal no estaba vigente en la fecha de presentación de la demanda, noviembre de 2.010

Ciertamente, la disposición transitoria vigésimo tercera del CDFA dispone que las normas contenidas en el Libro Cuarto son aplicables desde el 1 de enero de 2.011, fecha de entrada en vigor de la Ley 8/2010, de 2 de diciembre, de Derecho civil patrimonial, que es una de las que ha sido objeto de refundición por el Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, que aprobó el CDFA. Pero, dice el Preámbulo del Código al Libro Cuarto, apartado 40, antepenúltimo párrafo, que reproduce literalmente el mismo párrafo del ordinal IV del Preámbulo de la Ley 8/2010, de Derecho civil patrimonial: *"A la usucapión de servidumbres se dedica una sección independiente, en atención a su importancia, que acoge el texto literal de los artículos147 y 148 de la Compilación"*.

En definitiva, el texto del artículo 147 de la Compilación, que era el vigente en el momento de la interposición de la demanda, es el mismo que ahora ha sido incorporado en el artículo 568 CDFA, y la cita de éste como precepto infringido debe ser referida al artículo 147 de la Compilación, permitiendo con tal salvedad el estudio del motivo del recurso. La sentencia recurrida, al igual que la de primera instancia, resolvió la cuestión planteada a la luz del artículo 147 de la Compilación y en los mismos términos puede ser ahora examinada la denunciada infracción de dicho precepto.

TERCERO.- El primer motivo del recurso es articulado por infracción del artículo 568 CDFA (147 de la Compilación) en relación con el artículo 532 del Código civil, sobre la base de considerar que la sentencia recurrida no modifica los hechos que resultan probados de la sentencia de primera instancia, relativos a la existencia de un signo aparente de servidumbre, sino que no da relevancia suficiente al uso de tal signo (una puerta) porque el uso de la misma derivaría de actos de mera tolerancia. Sobre tal premisa entiende el recurrente que la puerta de acceso a su vivienda a través de un patio de la propiedad vecina, utilizado inicialmente como único acceso posible por no tener otro, aunque posteriormente fuera abierta otra puerta a una calle de nueva creación, constituía un signo revelador de un paso obligatorio y no consentido.

El segundo de los motivos denuncia la infracción del artículo 568 CDFA en relación con los artículos 444 y 1942 del Código civil, por considerar que los actos de posesión para el ejercicio del derecho de paso a la vivienda de los actores por una puerta que inicialmente era el único acceso a la vivienda no eran de mera tolerancia.

La sentencia de primera instancia resolvió las dos pretensiones formuladas por la parte actora. Por la primera de ellas ejercitaba una acción declarativa de dominio para que se declarara *"que el patio al que se accede desde la calle por el acceso ubicado en el edificio de la calle A de la localidad de Aguaviva pertenece al edificio sito en la C/ C* (de los demandantes) *de la localidad de Aguaviva y al edificio sito en la C/ A de Aguaviva propiedad de los demandados, pro indiviso y por mitades partes, patio que han venido usando desde tiempo inmemorial los propietarios del edificio sito en la C/ C de Aguaviva y por el que se tiene acceso a la vivienda sita en la C/ C de esta localidad colindante con la de los demandados."* Se completaba la petición anterior con la de que los demandados retiraran del patio los obstáculos y enseres que impedían el disfrute de la propiedad de los actores por lo que la sentencia consideraba que se ejercitaba una acción reivindicatoria.

Esta pretensión fue desestimada por los siguientes razonamientos:

"CUARTO.- En el caso de autos, la parte actora justifica su dominio en una adquisición por prescripción de la copropiedad del patio o zaguán sito en Calle A de Aguaviva, señalando que dicho acceso se ha utilizado desde tiempo inmemorial.

No obstante, atendiendo al conjunto de la prueba practicada, no puede estimarse acreditada la adquisición de dicho dominio por prescripción. Así, de la documentación obrante en autos se desprende claramente que el patio al que se accede por la Calle A pertenece a la finca sita en ese número y no a la de la Calle C. Así se desprende tanto de la escritura de propiedad de la vivienda de los demandados, como de los planos que constan en el Catastro y resulta también acreditado por el dictamen pericial del Sr. M, quien señaló sin lugar a dudas que el citado patio o zaguán se encuentra en dentro de los linderos de la vivienda de los demandados y no pertenece al inmueble de la Calle C.

A estos efectos, resultan insuficientes las testificales practicadas en el acto del juicio, Sr. L y Sr. V, que manifestaron que a la casa de la Calle C se accedía por el zaguán de la casa de la Calle A, dado que el hecho de que se utilizara dicho paso no acredita que el zaguán fuera propiedad de ambos edificios, en absoluto. De las testificales practicadas, sí resulta acreditado que la calle C se realizó en los años 40, tras terminar la Guerra Civil, como consecuencia de los destrozos de los bombardeos, no existiendo dicha calle con anterioridad. Tras realizarse la calle, la vivienda de la demandante tuvo su acceso a la misma, si bien parece que, por relaciones de buena vecindad, los propietarios de la vivienda sita en Calle A permitían el acceso desde su zaguán, tal como señaló el Sr. S, sobrino de la última persona que residió en la vivienda de la Calle A antes de los demandados, señalando que su madre le había comentado que había un acuerdo verbal para permitirles el paso, pero nada más y que nunca la demandante ni propietarios anteriores había pagado el IBI o reparaciones correspondientes a ese patio.

Tal como dispone el artículo 444 C.C., los actos meramente tolerados no aprovechan a la posesión, por lo que no puede pretender la parte demandante que, por el hecho de serle permitido el paso por la finca de los demandados desde hace mas de 30 años, haya adquirido por prescripción el dominio pro indiviso de dicho patio.

Por todo ello, no habiéndose acreditado por la demandante título alguno que justifique el condominio del patio sito en C/ A, debe desestimarse la petición principal de la demanda.

CUARTO.- La segunda de las acciones, ejercitada subsidiariamente, pretendía la siguiente declaración: "*Que el bien inmueble sito en la C/ C de Aguaviva es fundo dominante sobre el bien inmueble propiedad de los demandados sito en la C/ A de Aguaviva, que es fundo sirviente en una servidumbre de paso, de tal forma que los propietarios del inmueble sito en la C/ C de Aguaviva tienen acceso a su vivienda desde el patio interior al que se accede desde la C/ A, por medio de la puerta que desde dicho patio da acceso al inmueble sito en la C/ C de Aguaviva.*"

Esta pretensión fue estimada por el Juzgado de Primera Instancia por los razonamientos contenidos en el fundamento quinto:

"*QUINTO.- Subsidiariamente, la parte demandante solicita que se declare la existencia de una servidumbre de paso, siendo predio dominante el de la demandante y predio sirviente el de los demandados, al amparo de lo dispuesto en el artículo 148 de la Compilación de Derecho foral de Aragón.*

En primer lugar, debe señalarse que, de apreciarse la existencia de una servidumbre de paso a favor de la finca de la demandante, la misma sería aparente, dado que, según establece el artículo 532 C.c., son aparentes las servidumbres que se anuncian y están continuamente a la vista por signos exteriores, que revelan el uso o aprovechamiento de las mismas. No aparentes, las que no presentan indicio alguno exterior de su existencia."

En el caso de autos, la servidumbre que se pretende, sí tiene signo exterior, en concreto, una puerta que da acceso al inmueble de la demandada, por lo que se trataría de una servidumbre aparente, no siendo aplicable lo dispuesto en el antiguo artículo 148 de la Compilación, ahora artículo 569 del Código de Derecho Foral de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/11, de 22 de marzo, sino el artículo 147 del mismo texto, ahora artículo 568 del Código, que señala "Todas las servidumbre aparentes pueden ser adquiridas por usucapión de diez años entre presentes y veinte entre ausentes, sin necesidad de justo título ni buena fe", precepto que no coincide con lo dispuesto en el artículo 539 C.C. que, en relación a las servidumbre discontinuas, sean o no aparentes, señala que sólo se podrán adquirir en virtud de título, debiendo prevalecer el precepto del derecho foral sobre el de derecho común.

De las pruebas practicadas, sí ha resultado plenamente acreditado que desde hace más de treinta años, los propietarios de la vivienda sita en Calle C

acceden a la misma por el zaguán de la vivienda sita en Calle A. Así lo han declarado diversos testigos, propuestos por ambas partes y se desprende también de la existencia de una puerta en el zaguán de la vivienda de los demandados que da acceso a la vivienda de los demandantes y que, obviamente fue colocada allí con el consentimiento de quienes fueran propietarios de la vivienda sita en Calle A en su día. Es posible que, como señaló algún testigo, esa fuera la única entrada a la vivienda de la demandante antes de los años 40, pudiendo ser en su día una servidumbre de paso a finca enclavada, dado que no existía la Calle C, que como ya se ha dicho, se abrió mucho después de construirse las viviendas.

Lo cierto es que se ha acreditado que, tras la apertura de la calle se siguió permitiendo el paso por la vivienda de la Calle a a los propietarios de la vivienda de la Calle C, si bien no existía documento que recogiera la servidumbre.

El Sr. S, sobrino del anterior propietario de la vivienda de los demandados, manifestó que les había informado que existía un acuerdo verbal para dejar pasar a los propietarios de la vivienda contigua por ahí, pero que "no había nada escrito".

Los demandados adquirieron la vivienda en el año 2008, sin que hasta entonces se hubiera impedido el acceso a la vivienda por el patio a la demandada por parte de los propietarios anteriores.

Por todo ello, valorando la prueba en su conjunto, resulta acreditada la existencia de una servidumbre de paso a favor del predio sito en Calle C, por el patio o zaguán de la vivienda de los demandados, sita en Calle a, para acceder a su vivienda a través de la puerta que existe en dicho patio, adquirida por prescripción por mucho más tiempo que el exigido legalmente de diez años entre presentes, y veinte entre ausentes.

No se pueden estimar las alegaciones efectuadas por la parte demandada, en cuanto a que no se determina la anchura y dimensiones de la servidumbre ni se ha ofrecido indemnización, como requiere el artículo 564 C.C., por cuanto no se trata de la constitución "ex novo" de una servidumbre de paso para finca enclavada, supuesto contemplado en el artículo, sino que nos encontramos ante el reconocimiento y, por tanto, mera declaración de la existencia de dicha servidumbre de paso a favor de la finca de la demandante, cuyas características y dimensiones resultan perfectamente determinadas por los signos existentes en la finca de los demandados, debiendo permitirse el acceso a la puerta de la Calle A, pasar por el patio y para acceder a su vivienda a través de la puerta existente en la finca de los demandados, debiendo estimarse la petición subsidiaria de la demanda.

QUINTO.- La sentencia de la Audiencia Provincial estima el recurso de apelación de la parte demandada y revoca la pretensión subsidiaria de la demanda por lo siguiente:

"La sentencia a juicio de este Tribunal incurre en incongruencia, pues habiendo negado eficacia a efectos de la prescripción del dominio a la posesión, pues resulta acreditada que es una posesión meramente tolerada y no es apta para usucapir el dominio. Sin embargo a esa misma posesión le reconoce eficacia para usucapir un derecho real limitativo del dominio.
Al respecto conviene decir que el derecho de propiedad es un derecho en principio únicamente limitado por su función social, la existencia de una servidumbre se da por constitución voluntaria, por usucapión o por razón de necesidad.
En nuestro caso el título en que se funda es la posesión, y por tanto la prescripción del derecho que se titula con ella, en la medida que lo que se afirma va en contra del principio del libertad de los fundos, no puede abarcar más que, estrictamente, aquello que se haya poseído durante el tiempo exigido, y en función de para lo que sirva; es decir el cómo se ha poseído determina los límites y extensión del derecho limitativo del dominio. Siendo esencial que la posesión ejercitada ha de ser apta para adquirir el derecho es decir pública, ininterrumpida y en concepto de dueño.
Las anteriores exigencias impiden a este Tribunal considerar por tanto que la existencia de una puerta por aparente que sea el signo externo de servidumbre de paso permita per se considerar la existencia del derecho que aparenta, cuando en casos como el presente y como dice la propia sentencia el paso estaba permitido en virtud de un trato meramente verbal por razones de buena vecindad, siendo calificado como acto de posesión meramente tolerado".

A continuación examina la sentencia los requisitos para la adquisición de las servidumbres aparentes por la vía del artículo 147 de la Compilación, en relación con el artículo 532 del Código civil, y con los artículos 444 y 1942 respecto a los actos de mera tolerancia, concluyendo que *"si la posesión acreditada no es apta para usucapir pues se trata en nuestro caso de una posesión meramente tolerada, dicha posesión no sirve para adquirir derecho real alguno, ni el dominio, ni derecho real limitativo del dominio."*

SEXTO.- Dada la relación establecida para la resolución del caso entre la existencia de signo aparente y los actos de mera tolerancia en el uso del mismo, se estudiarán conjuntamente los dos motivos del recurso.

En la sentencia recurrida, como ha quedado reflejado, no se establecen hechos distintos de los tenidos en cuenta por la de primera instancia sino que, partiendo de la afirmación en ésta de que no podían pretender los actores usucapir la copropiedad del patio de entrada a ambas viviendas por el hecho de serle permitido el paso por la finca de los demandados por relaciones de buena vecindad, tampoco pudieron servir tales actos para usucapir la servidumbre de paso pues -considera la sentencia recurrida- tal razonamiento constituye una incongruencia.

Debe partirse, por lo tanto, de los hechos reflejados en la sentencia de primera instancia, que sirvieron en la misma tanto para desestimar la acción reivindicatoria del patio como para estimar la acción confesoria de servidumbre de paso sobre el mismo.

Como ha recordado con reiteración el Tribunal Supremo al interpretar el artículo 477.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el recurso extraordinario de casación está limitado legalmente a la función revisora del juicio jurídico sobre el alcance y significado de los hechos que han sido declarados probados, lo que excluye la posibilidad de revisión en esta sede jurisdiccional de la probanza o no de determinados hechos.

Al respecto dijimos en nuestra sentencia de 1 de diciembre de 2.009 (recurso 9/2009) aportada por el recurrente: "*En cambio, no cabe considerar admisible la pretensión de la parte recurrida de que también las alegaciones hechas por el recurrente respecto de la existencia o no de adquisición por usucapión sean cuestión probatoria. Porque si revisten tal carácter las posibles apreciaciones referidas a la situación de hecho presente en las fincas, sin embargo es cuestión estrictamente jurídica la determinación de si la subsunción de la resultancia fáctica en la norma que se entienda de aplicación conlleva, o no, la presencia de los presupuestos legalmente prevenidos para concluir que existió adquisición de servidumbre por la posesión concreta de ella.*"

No puede esta Sala poner en duda los hechos declarados probados por la sentencia recurrida, que en este caso son los de la de primera instancia pues resultaron inalterados en aquélla, pero sí puede entrar en la calificación jurídica sobre si estos hechos son o no suficientes para revelar la existencia de un signo aparente de servidumbre, y sobre los requisitos que deben reunir los actos en que se funde la apreciación de su utilización como derecho sobre cosa ajena, y no como actos de mera tolerancia, durante el tiempo requerido en nuestro derecho para su usucapión.

SÉPTIMO.- La sentencia de primera instancia desestima la acción reivindicatoria sobre el patio porque deduce de la documentación aportada (escritura de propiedad de los demandados y planos del Catastro), y del dictamen pericial del Sr. M, que dicho patio se encuentra dentro de los linderos de la vivienda de los demandados (C/ A) y no pertenece al inmueble de la calle C (de los actores). En cuanto a las testificales las declara insuficientes (se entiende para la adquisición del dominio por usucapión) porque "*el hecho de que se utilizara dicho paso no acredita que el zaguán fuera propiedad de ambos edificios*". Siguiendo con la argumentación sobre la propiedad (*a estos efectos*, dice), considera acreditado, de las testificales, que la calle C se realizó en los años 40, tras terminar la Guerra Civil, no existiendo dicha calle con anterioridad, y que, tras realizarse la calle, la vivienda de la demandante tuvo su

acceso a la misma si bien, por relaciones de buena vecindad, los propietarios de la vivienda sita en C/ A permitían el acceso desde su zaguán.

Rechazada la copropiedad del patio (fundamento cuarto), la sentencia entra a resolver sobre la petición subsidiaria (fundamento quinto) y declara que la servidumbre de paso tiene signo exterior, una puerta que da acceso al inmueble. Igualmente estima plenamente acreditado que desde hace más de treinta años los propietarios de la vivienda de C/ C acceden a la misma por el zaguán de la vivienda sita en C/ A, como se desprende de la existencia en dicho zaguán de una puerta de acceso a su vivienda, colocada con consentimiento de los propietarios de la vivienda de C/ A. Señala la posibilidad de que fuera la única entrada a la vivienda de la demandante antes de los años 40, como servidumbre de paso a finca enclavada dado que no existía la calle C, abierta mucho después de construirse las viviendas. Finalmente, da por acreditado que, tras la apertura de la calle, se siguió permitiendo el paso por la vivienda de la C/ A a los propietarios de la vivienda de la C/ C y que hasta el año 2.008, en que los demandados adquirieron la vivienda de C/ A, los anteriores propietarios de la misma no habían impedido el paso por el patio a la otra vivienda.

Contrastando los hechos tenidos en cuenta por la sentencia de primera instancia, y sus razonamientos para la desestimación de la acción reivindicatoria y estimación de la confesoria de servidumbre, no se llega a la conclusión afirmada por la sentencia de apelación de que sea incongruente porque determinados actos no sean eficaces para la adquisición del dominio por prescripción y, sin embargo, puedan serlo para adquirir por usucapión una servidumbre de paso.

La sentencia de primera instancia alcanza una primera convicción sobre la propiedad del patio de la calle A a partir del título de los demandados y de los datos del Catastro, y de un informe pericial que confirmaba que dicho patio pertenecía a ese edificio. Por tal motivo concluye que el patio no era común y, para rechazar la pretensión de los actores de la posible copropiedad adquirida por usucapión, cuya prueba se pretendía mediante declaración de testigos, deduce de esta prueba testifical que el paso era permitido por relaciones de buena vecindad, pero lo afirma en el sentido de que dicha posesión, por el paso, no era apta para usucapir la propiedad (*"el hecho de que se utilizara dicho paso no acredita que el zaguán fuera propiedad de ambos edificios").* De estas afirmaciones se desprende que, para el juzgador de instancia, de la utilización del patio como paso no se podía concluir un *animus* de adquisición de la propiedad, ni que los titulares del patio aceptaran el paso como manifestación de propiedad.

El artículo 447 Cc. señala con claridad que, para adquirir el dominio, sólo puede servir de título la posesión que se adquiere y se disfruta en concepto de dueño (y el artículo 1941 Cc. así lo exige para su adquisición por prescripción). Éste es el *animus* que no aprecia la sentencia de primera instancia. Pero además de esta posesión nuestro derecho protege también otros tipos de posesión, como

se deduce de la interpretación de los artículos 430 y 432 Cc., conforme a la cual se pueden poseer cosas o derechos, tanto en concepto de dueño como de tenedor perteneciendo el dominio a otra persona. Aquí se incluirían los *iura in re aliena*, como las servidumbres, exigiéndose en ambos casos un *animus* o intención distintos: hacer suya la cosa para lo propiedad, o el ejercicio de un derecho con sus características y conforme a su naturaleza para otros derechos.

Es por ello perfectamente posible que determinados actos resulten ineficaces para acreditar posesión apta para la adquisición de la propiedad y, sin embargo, puedan merecer otra consideración a los efectos de adquisición de una servidumbre, pues el *animus* requerido a estos efectos es distinto, dirigido a su utilización como derecho adquirido por cualquiera de los títulos hábiles para ello, en este caso la usucapión. En tal sentido la Sala no comparte la conclusión de que tal razonamiento, que es el determinante para la revocación de la sentencia de primera instancia, resulte incongruente.

OCTAVO.- Descartada por la sentencia de primera instancia la adquisición de la propiedad (copropiedad) pretendida por la parte actora, se centra en la servidumbre declarando tajantemente la existencia de un signo aparente, la puerta que da acceso al inmueble que, en sí mismo considerado, no ha suscitado controversia. Y también declara que desde hace más de treinta años los propietarios de ambas viviendas acceden a ellas a través del zaguán de C/ A (de los demandados), utilizando los antecesores en la propiedad de C/ C una puerta existente en dicho zaguán, que sería inicialmente el único acceso a su vivienda dado que no existía la calle C que se abrió mucho después de construirse las viviendas. Y, finalmente, que tras la apertura de la calle C se siguió permitiendo a los propietarios de la vivienda de esta calle el paso por la vivienda de la calle A.

Son éstos los hechos que sirven en la sentencia de primera instancia para tener por acreditada la existencia de una servidumbre de paso, y en ellos no se menciona el paso por mera tolerancia sino que inicialmente no habría otro acceso posible a la vivienda de los actores, dada la construcción muy posterior de la calle C a la que desde entonces también tienen acceso.

Únicamente se afirma que tras la apertura de la calle se siguió permitiendo el paso por el patio de la otra vivienda, pero un paso que no se podía calificar inicialmente de mera tolerancia, pues no había otro y era obligado, por puerta en el zaguán ajeno que daba acceso a la calle A mediante puerta de uso común. Y la utilización de ambas puertas no podía ser, por lo dicho, por mero permiso precario sino que venía impuesto por la necesidad, mediante puerta abierta en zaguán ajeno que, como expresa la sentencia de primera instancia, *"obviamente fue colocada allí con el consentimiento de quienes fueran propietarios de la vivienda sita en Calle A en su día"*.

No ha sido objeto de debate el sentido de la utilización de esa puerta con posterioridad a la apertura de la calle C, pero debe recordarse que, conforme a

lo dispuesto en el artículo 436 del Código Civil *"se presume que la posesión se sigue disfrutando en el mismo concepto en que se adquirió, mientras no se pruebe lo contrario*", y si bien la posesión iniciada en concepto de titular de un derecho real de servidumbre puede convertirse en un momento posterior en una posesión en precario (inversión posesoria), tal mutación deberá ser acreditada, lo que en este caso no se ha dado por probado, o en su caso solicitar la extinción de la servidumbre ya innecesaria.

En definitiva, descartado el razonamiento de incongruencia que llevó a la sentencia recurrida a revocar la de primera instancia, debemos concluir que ésta declaró correctamente, en función de los hechos que consideró acreditados, la existencia de una servidumbre de paso por la utilización de signo aparente con transcurso del plazo legalmente previsto. Por ello, deben ser estimados ambos motivos del recurso y debe ser casada la sentencia recurrida, con confirmación de la sentencia de primera instancia."

***** Sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Calatayud de 10 de septiembre de 2012. Acción negatoria de servidumbre de paso. Luces y vistas. Servidumbre de vertiente de tejados**

"PRIMERO.- La parte actora ejercita contra la parte demandada acción negatoria de servidumbre de paso, interesando que se declare que la finca registral nº3.818 de Paracuellos de Jiloca (Zaragoza), titularidad de la parte actora, no se encuentra gravada por servidumbre de paso alguna a favor de la finca registral nº4.413 de Paracuellos de Jiloca (Zaragoza), de titularidad de la demandada, interesando, en consecuencia, que se condene a la parte demandada a realizar las obras necesarias para cambiar la ubicación del acceso a su vivienda, el cual se encontraría actualmente dentro de la propiedad de la parte actora, así como la ubicación del contador de agua de su vivienda de tal forma que para acceder al mismo no tuviera que atravesarse la propiedad de la actora.

Alega la parte actora que la ubicación del acceso a la vivienda propiedad de la demandada siempre habría estado fuera de su propiedad, es decir, a través del vial público. Además, mantiene la parte actora que no existiría servidumbre forzosa de paso al no encontrarse la vivienda propiedad de la demandada enclavada entre varias fincas sin salida a camino público.

Así mismo, la parte actora ejercita acción contra la parte demandada, interesando sea condenada a colocar rete en la ventana situada en la planta baja, así como a colocar reja y rete en la ventana situada en la planta primera de su vivienda y que estarían abiertas sobre la propiedad de la actora.

Finalmente, interesa que la parte demandada sea condenada a colocar en el alero que sobrevuela la finca propiedad de la parte actora un canalón de recogida de aguas pluviales, conectado a una bajante que estuviera dispuesta hasta la red de saneamiento del edificio.

La parte demandada se opone a las pretensiones ejercitadas por la parte contraria, alegando, en primer lugar, que la parte actora no acreditaría la titularidad de la replaceta cuyo uso se pretende prohibir a la demandada y por la cual tendría ésta acceso a su vivienda. Alega la parte demandada que existiría un acuerdo firme municipal que habría declarado que el espacio de la replaceta formaría parte del dominio y uso público municipal.

En segundo lugar, alega la parte demandada que la replaceta a través de la que accedería actualmente a su vivienda, se habría utilizado de forma constante, quieta y pacífica para acceder a su vivienda, para ubicar en el subsuelo las instalaciones generales de agua y vertido a las dos viviendas, así como para acceder a los contadores de electricidad.

Finalmente, se opone a la colocación de reja y rete en los términos interesados de contrario, toda vez que las ventanas en las que la parte contraria pretende que se coloque darían a vía pública y no a la propiedad de la parte actora. Respecto a la colocación de canalón para la recogida de aguas pluviales, la parte demandada igualmente se opone a ello por considerar que el tejado evacuaría el agua sobre vía pública y por lo tanto no sería necesario recoger las aguas pluviales mediante canalón.

SEGUNDO.- ACCIÓN NEGATOTORIA DE SERVIDUMBRE.

Como establece la SAP de A Coruña de 3 de octubre de 2008, "Con el fin de delimitar el objeto litigioso debe destacarse que la acción negatoria de servidumbre, que aquí ejercita la parte actora, tiende, en definitiva, a defender la propiedad contra quien sin título trata de ejercitar sobre ella un derecho real de servidumbre. Su finalidad es obtener una sentencia declarativa de la inexistencia de la servidumbre, y aunque ningún artículo del Código Civil EDL 1889/1 (LEG 1889/27) menciona expresamente la acción negatoria, una copiosa Jurisprudencia del Tribunal Supremo proclama su existencia (desde las antiguas de 13 de octubre de 1927, 9 de enero de 1930, 27 de noviembre de 1940, 1 de febrero de 1944, 14 de marzo de 1957 y 17 de junio de 1971 EDJ 1971/379, hasta las recientes de 5 de febrero de 1999 EDJ 1999/559, 23 de abril de 1999 EDJ 1999/8093 y 23 de marzo 2001 EDJ 2001/1717).

En la acción negatoria el demandante no tiene que probar la inexistencia de la servidumbre, no sólo por la imposibilidad de la prueba de un hecho negativo, sino en base a los principios generales sobre carga de la prueba y en virtud de la presunción iuris tantum de libertad de fundos, el actor sólo tiene que probar su derecho de propiedad, y al demandado corresponderá la carga de acreditar la existencia de la servidumbre (Sentencias de 7 de febero de 1975, Audiencia Provincial de Sevilla; 11 de febrero de 1986, Audiencia Territorial de La Palma; 18 de diciembre de 1986, Audiencia Territorial de Barcelona, y 13 de octubre de 1987, Audiencia Provincial de Las Palmas; además, SSTS de 19 de junio de 1978 EDJ 1978/212 y 29 de mayo de 1979 EDJ 1979/810). Precisamente por ello, es requisito inexcusable que quien ejercita la acción negatoria pruebe con título legal que le pertenece la propiedad del inmueble o predio que se pretende sirviente, así lo establece la jurisprudencia de A.P. Illes Balears en sentencia de 8 junio 2000 EDJ 2000/56045 y de otras Audiencias como las de Cuenca 27 julio de 1990 y 31 de enero de 1991; de Palencia 19 de enero y 10 de diciembre de 1987, 20 de septiembre de 1988 y 14 de julio de 1991; de Las Palmas 13 de octubre de 1987, y de Bilbao de 20 de febrero de 1990, entre otras, que se remiten, algunas de las cuales, a otras del Tribunal Supremo, como las de 9 de febrero de 1927, 9 de enero de 1930, 4 de mayo de 1963 y 19 de diciembre de 1977 EDJ 1977/367".

En el presente procedimiento, la parte demandada discute la propiedad de la llamada replaceta existente al frente de la vivienda de la parte actora y a través de la cual accedería la parte demandada a su vivienda, manifestando que sería vial público, y que por lo tanto, tendría derecho a acceder a su vivienda a través de la misma.

Dicha replaceta está formada por dos grandes escalones (folio 96 de las actuaciones) y se encontraría al frente de la vivienda de la actora, lo cual no habría sido discutido por las partes.

La parte demandada defiende su postura, alegando que el Ilmo. Ayuntamiento de Paracuellos de Jiloca, mediante acuerdo del Pleno de fecha 31 de agosto de 2007, resolvió que la denominada replaceta era de titularidad municipal y de uso público, en tanto el Catastro Inmobiliario Urbano del municipio y el Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano contemplaban la porción controvertida como viario y en tanto en dicha replaceta habría instalaciones públicas de abastecimiento y saneamiento de agua que servirían a la finca propiedad de la actora y a la finca propiedad de la demandada.

Alega igualmente, que cuando realizó las obras de reforma de la vivienda, el Ayuntamiento le concedió licencia de fecha 25 de mayo de 2006.

S, Arquitecto que redactó el proyecto de las obras que se ejecutaron en la vivienda de la demandada, manifestó que él mismo consultó el Catastro y los planos urbanísticos y observó que la replaceta era viario público.

La parte actora entiende que la titularidad de la replaceta habría quedado perfectamente determinada en sentencia de fecha 23 de junio de 2008 (folio 71 de las actuaciones), en la que este mismo Juzgado declaró que era propiedad de la hoy actora. Dicho procedimiento vino motivado porque a finales de 2006, la parte actora solicitó licencia para el vallado de la llamada replaceta y el Ayuntamiento le denegó la concesión de la misma alegando que la porción que pretendía vallar era viario público.

Efectivamente, y tal como alega la parte actora, la titularidad de la replaceta habría quedado perfectamente determinada en sentencia de fecha 23 de junio de 2008. Dicha sentencia es firme.

No obstante, la parte demandada parece negar la aplicabilidad de la sentencia, alegando que la demanda que dio origen al juicio verbal en el que se dictó, sólo se dirigió contra el Ayuntamiento de Paracuellos de Jiloca y no contra la parte demandada, a pesar de ser parte afectada por la misma.

Discrepa esta juzgadora de las alegaciones efectuadas por la parte demandada. En el juicio verbal 355/2007, en el que se dictó sentencia que declaró que la replaceta era propiedad de la parte actora, la parte actora, quien se consideraba propietaria de la misma, ejercitó acción declarativa de dominio contra el Ayuntamiento de Paracuellos de Jiloca, quien habría incluido la llamada replaceta dentro del Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano,

considerándola como viario público. Efectivamente, el resultado de dicho procedimiento podía afectar a la parte demandada, quien estaba ejecutando unas obras de reforma de su vivienda, y había abierto una puerta de acceso a su vivienda en la porción objeto de controversia. No obstante, no siempre que un tercero puede verse afectado por el resultado de un procedimiento, significa que exista falta de litisconsorcio pasivo necesario. La acción declarativa de dominio tiene por objeto obtener del Tribunal una declaración de propiedad, y por tanto, ha de ser ejercitada por quien se considera propietario, y contra quien discute ese derecho de propiedad, atribuyéndose la propiedad del bien. En este caso, la acción se ejercitó contra el Ayuntamiento de Paracuellos de Jiloca, quien había incluido la porción de terreno objeto del procedimiento dentro del Proyecto de Delimitación Urbana y por tanto lo consideraba de titularidad municipal. La parte demandada, quien conocía la existencia del procedimiento, podría haber interesado al Tribunal intervenir en el procedimiento, defendiendo la posición del Ayuntamiento de Paracuellos de Jiloca, entonces, parte demandada, al amparo del artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Por todo ello, se considera que la sentencia que se dictó en el citado procedimiento tiene efectos "erga omnes", y por lo tanto afecta a la parte demandada, sin que proceda entrar en este procedimiento a analizar si la denominada replaceta es o no propiedad de la parte actora. Se trata de una cuestión ya resuelta en sentencia firme.

Por otro lado, en fase de conclusiones, la parte demandada sugirió que podía ser que la titularidad que se declaró por sentencia no fuera de la replaceta sino de otra porción de terreno.

Dicha alegación debe ser rechazada. Si leemos detenidamente la sentencia de fecha 23 de junio de 2008, se observa que la citada resolución habla de "parte descubierta" de la finca propiedad de la actora, de 19 m2, que estaría formada por los escalones. De hecho, dicho procedimiento vino motivado porque la parte actora solicitó licencia para el vallado de dicha zona descubierta existente al frente de su vivienda, y el Ayuntamiento la denegó por considerar que era de dominio público mediante acuerdo de fecha 31 de agosto de 2007.

Por lo tanto, acreditada la propiedad de la parte actora de la porción de terreno que la parte demandada utilizaría para acceder a su vivienda, procede entrar a resolver si la parte demandada es titular de un derecho de servidumbre de paso.

TERCERO.- El artículo 561 del Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba con el título de Código del Derecho Foral de Aragón, el Texto refundido de las Leyes civiles aragonesas (en adelante Código del Derecho Foral de Aragón), establece que *"las servidumbres se constituyen: a)Por voluntad de los titulares de las fincas dominante y sirviente; b) Por voluntad del titular de la finca dominante, con carácter*

forzoso para el de la finca sirviente, cuando la ley así lo contempla; c)Por signo aparente; d) Por usucapión".

En el presente supuesto, no constaría la existencia de título constitutivo de la servidumbre ni por las titulares actuales de las fincas, ni por los propietarios anteriores. De hecho, tampoco se ha alegado por ninguna de las partes la posible existencia de servidumbre de paso constituida voluntariamente por las partes.

Por otro lado, tampoco estaríamos ante una servidumbre forzosa de paso. El artículo 577 del Código del Derecho Foral de Aragón establece en su apartado primero que "*el titular de una finca enclavada entre otras ajenas y sin salida o con salida insuficiente a una vía pública tiene derecho a exigir la constitución forzosa de servidumbre de paso por las fincas vecinas, pagando la correspondiente indemnización*".

No es el caso. En el presente supuesto, la finca propiedad de la parte demandada no se encontraría enclavada entre otras fincas, sino que podría accederse a la finca, bien desde la calle El Pino, o bien desde la misma calle El Tubo, pero fuera de la replaceta. De hecho, el mismo Arquitecto que elaboró el proyecto, S, manifestó que de haber conocido que la replaceta era propiedad privada, habría cambiado de lugar el acceso a la vivienda. El mismo, manifestó que antes de efectuar las obras de reforma, la puerta de acceso estaba fuera de los escalones y por lo tanto se accedía a ella a través de la calle.

El perito L, igualmente, manifestó que era posible el acceso a la vivienda por otro punto.

Tampoco hay signo aparente de servidumbre, conforme al artículo 566 del Código de Derecho Foral de Aragón.

No obstante, la parte demandada alega en su escrito de contestación que la replaceta a través de la que accedería actualmente a su vivienda, se habría utilizado de forma constante, quieta y pacífica para acceder a su vivienda, para ubicar en el subsuelo las instalaciones generales de agua y vertido a las dos viviendas, así como para acceder a los contadores de electricidad.

La prueba practicada en el acto del juicio habría puesto de manifiesto que la puerta de acceso a la finca propiedad de la demandada se encontraba fuera de los escalones, y por tanto, fuera de la replaceta propiedad de la actora.

La parte actora aportó con la demandada una fotografía como documento nº9 (folio 44), que fue reconocida por todos los testigos que declararon en el acto del juicio. Todos los testigos reconocieron que la fotografía reflejaba el estado de las fincas previamente a la ejecución por parte de la demandada de las obras de reforma de su vivienda.

En la fotografía claramente puede apreciarse como la puerta de entrada se encontraba fuera de los escalones.

S, Arquitecto que redactó el proyecto de reforma de la vivienda de la demandada, reconoció en el acto del juicio que antes de ejecutarse las obras de reforma la puerta estaba fuera de los escalones.

Por lo tanto, nunca fue necesario atravesar la propiedad de la actora para acceder a la finca de la demandada. Se accedía a través de una puerta existente fuera de los escalones.

Por el contrario, el contador de la luz sí que se encontraba dentro de los escalones. En la fotografía se puede apreciar como estaba dentro. A pesar de que la parte actora manifestó que el contador estaba fuera de los escalones, si se visiona detenidamente la fotografía que obra al folio 44, se observa como se encuentra dentro de los escalones, aunque muy cerca de la línea exterior del último escalón, lo que supone que la lectura del contador, o su reparación, o cualquier otro tipo de actuación, exigía ocupar una parte muy pequeña de la propiedad de la actora.

De la documentación aportada por la parte demandada con su contestación, podemos deducir que el citado contador se encontraba ubicado en dicho lugar desde al menos el año 1986 (folios 253 y 254).

Tras las obras de reforma de la vivienda, se modifica ligeramente la ubicación del contador de la luz (folio 96). Ahora, el contador está prácticamente fuera de los escalones a excepción de unos centímetros. No sería necesario invadir la propiedad de la parte actora ni para la lectura del contador ni para realizar ninguna actuación sobre el citado contador.

Por lo tanto, la necesidad de paso habría desaparecido, resultando aplicable lo dispuesto en el artículo 580 del Código de Derecho Foral de Aragón, que si bien regula un supuesto distinto, podría aplicarse por analogía al presente supuesto.

Finalmente, es necesario hacer referencia al contador del agua. Actualmente se encuentra en la fachada exterior de la vivienda de la parte demandada, dentro de la propiedad de la parte actora, por lo que sería necesario atravesar ésta para acceder al contador.

El citado contador no se encontraba en dicho lugar antes de realizar las obras de reforma, sino que se encontraba en el interior de la finca de la parte demandada. De las declaraciones testificales así se desprende.

M, testigo propuesto por la parte actora, manifestó que el contador del agua no se encontraba en la pared exterior de la finca de la demandada.

Lo mismo manifestó MA, testigo propuesto por la demandada.

MAR, vecina del pueblo, manifestó que el contador del agua estaba en la parte interior de la pared que delimitaba ambas propiedades, ya que antes de las obras de reforma, la parte demandada accedía, primero a una zona descubierta (corral), y luego a la vivienda.

Por lo tanto, no existía paso a través de la finca de la actora para acceder al contador del agua, en la medida que éste se encontraba en el interior de la finca de la demandada.

Por otro lado, tampoco resulta admisible decir que como el contador de la luz sí que se encontraba dentro de la propiedad de la actora, entonces el paso existente hasta dicho contador, permitiría a día de hoy el paso hasta el contador del agua, en la medida que si observamos las fotografías que obran a los folios 44 y 118 puede apreciarse como el contador de la luz, antes de las obras de reforma, se encontraba al final del último escalón (folio 44), y el contador del agua se encuentra más hacia el interior de la propiedad de la actora. Por lo tanto, para acceder al contador del agua es necesario ocupar más metros de la propiedad de la actora que para llegar al antiguo contador de la luz, al cual se podía llegar ocupando un trozo muy pequeño de la propiedad de la actora.

Además, el hecho de que las tuberías de saneamiento y abastecimiento de agua de la vivienda de la demandada discurran por el subsuelo de la replaceta, tal como la parte demandada alegó y acreditó, no tiene trascendencia a los efectos de este procedimiento.

No la tiene a los efectos de determinar la propiedad de la replaceta, en tanto se trata de una cuestión ya resuelta en sentencia firme y sobre la cual no cabe pronunciamiento alguno. Y por otro lado, tampoco la tiene en lo que se refiere a la servidumbre de paso, puesto que el hecho de que las citadas tuberías discurran por el subsuelo de la propiedad de la actora podría dar lugar a una servidumbre de acceso a red general (artículo 581 del Código de Derecho Foral de Aragón), que no es objeto de este procedimiento.

A la vista de todo lo anteriormente expuesto, podemos concluir que no existe servidumbre de paso, ni forzosa, ni voluntaria, ni adquirida por usucapión, por lo que la parte demandada deberá modificar el acceso a su vivienda y la ubicación del contador del agua, en la medida que para acceder a la vivienda y al contador del agua sería necesario atravesar una propiedad privada sobre la que ningún derecho real se ostentaría.

CUARTO.- LUCES Y VISTAS. La parte actora interesa que la parte demandada sea condenada a colocar rete en la ventana situada en la planta baja, así como a colocar reja y rete en la ventana situada en la planta primera de su vivienda y que estarían abiertas sobre la propiedad de la actora.

Constando acreditado que las dos ventanas respecto de las que se solicita la colocación de rete, y de reja y rete, respectivamente, caen sobre la propiedad de la parte actora, y efectivamente, no tienen colocada la protección que se solicita de contrario (así se hace constar en el acta notarial aportada como documento nº17 de la demanda), resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 545 del Código de Derecho Foral de Aragón.

El citado artículo dispone en su apartado primero que "*tanto en pared propia, y a cualquier distancia de predio ajeno, como en pared medianera, pueden abrirse huecos para luces y vistas sin sujeción a dimensiones determinadas*".

El apartado segundo dispone que "*dichos huecos carecerán de balcones y otros voladizos y deberán estar provistos de reja de hierro remetida en la pared y red de alambre, o protección semejante o equivalente, si no hay dos metros de distancia en vistas rectas o sesenta centímetros en vistas de costado u oblicuas*".

El artículo 549 del Código de Derecho Foral de Aragón establece en su apartado primero que "*las protecciones deberán colocarse sin invadir la finca vecina. En pared medianera, no podrán colocarse más allá de su eje*". El apartado segundo establece que "*no prescribe la acción para exigir la colocación de protecciones*".

A la vista de lo anteriormente expuesto, y de que no consta la existencia de servidumbre voluntaria de luces y vistas, la parte demandada viene obligada a colocar rete en la ventana de la planta calle y a colocar reja y rete en la ventana de la primera planta.

QUINTO.- SERVIDUMBRE DE VERTIENTE DE TEJADOS. Finalmente, la parte actora interesa que la parte demandada sea condenada a colocar en el alero que sobrevuela la finca propiedad de la parte actora un canalón de recogida de aguas pluviales, conectado a una bajante que estuviera dispuesta hasta la red de saneamiento del edificio.

No encontramos ningún artículo en el Código de Derecho Foral de Aragón de contenido similar al artículo 586 del Código Civil, y el único artículo del Código de Derecho Foral de Aragón que habla de aguas pluviales es el artículo 644 y no resulta aplicable a este supuesto.

En aplicación del artículo 1.2 del citado Código de Derecho Foral, procede aplicar el artículo 586, que establece que "*el propietario de un edificio está obligado a construir sus tejados o cubierta de manera que las aguas pluviales caigan sobre su propio suelo o sobre la calle o sitio público, y no sobre el suelo del vecino. Aun cayendo sobre el propio suelo, el propietario está obligado a recoger las aguas de modo que no causen perjuicio al predio contiguo*".

Efectivamente, parte del alero de la vivienda de la demandada recaería sobre la finca de la parte actora, tal como se puede observar en las fotografías que obran unidas a la acta notarial acompañada como documento nº17 de la demanda, sin que exista canalón de recogida de aguas, por lo que las aguas pluviales caerían sobre la finca de la actora.

La parte demandada está obligada conforme dispone el artículo 586 CC a recoger las aguas pluviales para que caigan bien a suelo público o sobre su finca. Para ello deberá colocar canalón que recoga el agua pluvial y conectarlo a una bajante que eche el agua a la calle o bien conectar el canalón a una bajante que

estuviera dispuesta hasta la red de saneamiento del edificio, tal como propone la actora. Desconociendo si la normativa municipal permite la primera de las opciones, se apuntan ambas, sin perjuicio de que la parte demandada puede optar por la que considere más conveniente.

SEXTO.- CUANTÍA DEL PROCEDIMIENTO. Ha resultado igualmente cuestión controvertida la cuantía del presente procedimiento.
Inicialmente, la parte actora fijó la cantidad de 4.535,65 euros como cuantía del presente procedimiento, resultado de sumar las siguientes cantidades:
1ª 600,09 euros (vigésima parte del valor catastral de la fina de la actora).
2ª 2.927,75 euros (vigésima parte del valor catastral de la finca de la demandada).
3ª 1.007,81 euros (coste de colocar reja y rete y canalón de recogida de aguas pluviales).

La parte demandada se opuso a la cuantía fijada por la parte actora, entendiendo que el valor catastral tenido en cuenta por la parte actora había sido el valor del suelo, y por tanto, había que añadir el valor de la construcción.
Además, entendía que debía añadirse el coste de las obras a ejecutar en su vivienda en el caso de que se considerara que no había derecho de paso y que ascendían a 14.419,22 euros, según informe pericial.
Ello conllevó que alegara como excepción procesal la inadecuación del procedimiento por razón de la cuantía.
Por esta juzgadora se estimó la excepción, considerando que la cuantía del procedimiento se determinaba no sólo teniendo en cuenta la acción negatoria de servidumbre de paso y la acción de reclamación de colocar reja y rete y canalón, sino la acción de reclamación de ejecutar las obras necesarias para modificar el acceso a la vivienda de la demandada y el contador del agua (artículos 251.5ª y 11ª y artículo 252.2ª LEC).
Por lo tanto, había que tener en cuenta el coste de las obras que era necesario ejecutar para modificar el acceso a la vivienda de la demandada y el contador del agua.
El perito S las valoró en 14.419,22 euros, sin que se haya aportado otro informe que desvirtúe dicha valoración.
Por otro lado, y respecto del valor catastral de la vivienda de la demandada, deberá estarse al valor que tuvo en cuenta la parte actora al calcular la cuantía, puesto que por parte de la Gerencia Regional del Catastro de Aragón, se informó que el valor catastral de la finca de la demandada era 14.638,74 euros, que es el que tuvo en cuenta la parte actora para fijar la cuantía.
Dicho valor incluye el valor del suelo y el de la construcción.
Por lo tanto, a la cuantía indicada por la parte actora en su demanda debe añadirse el coste de las obras, ascendiendo la cuantía total a 19.174,39 euros."

***** Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 21 de septiembre de 2012. Relaciones de vecindad. Retirada de tuberías de ventilación. Usucapión de servidumbre**

"PRIMERO.- La comunidad de propietarios constituida sobre el edificio sito en la c/ B nº 32-34 recurre la sentencia que desestima la demanda que dedujo contra la comunidad de propietarios constituida sobre el edificio sito en la c/ B nº 30, en la que pedía la condena de ésta a retirar a su costa las dos tuberías adosadas a su pared para dar ventilación y salida a los humos a las viviendas de la comunidad demandada y al local instalado en su planta baja, en el que el otro demandado, D. Vicente explota un negocio de hostelería.

La juzgadora de primer grado desestima la demanda por entender que ha sido acreditado que las chimeneas litigiosas fueron instaladas durante la construcción del edificio nº 30 allá por el año 1989, ya sujetas a la pared colindante del nº 32-34, que había sido construido con anterioridad, sin que desde entonces hubiere habido protesta alguna o acto contrario a dicha instalación por parte de la actora, pese a ser perfectamente visibles, sin que tampoco haya sido acreditado que la instalación haya causado daños a la comunidad actora, por lo que, concluye, o existe una servidumbre a favor de los demandados adquirida por prescripción al concurrir los requisitos establecidos en los arts. 532 CC, 552 CC y 561 CC, al tratarse de una servidumbre que se anuncia por signos aparentes y haber transcurrido más de 20 años desde la instalación, o bien un consentimiento tácito por parte de los propietarios actores.

La recurrente sostiene errónea valoración de la prueba practicada, a cuyo efecto sostiene que las chimeneas cuestionadas no tienen la antigüedad que se dice en la sentencia, que no son visibles, y que le producen perjuicio.

SEGUNDO- Examinada la prueba documental y visionado el video que recoge la prueba practicada en el acto de la vista, la sala no pueda compartir la errónea valoración de la prueba, pues de la primera se desprende que durante la construcción fue exigido que la promotora del edificio nº 30 diera solución a la salida de humos mediante chimenea, lo que fue cumplimentado mediante la instalación del sistema de evacuación de humos instalado (expediente que obra a los folios 186 y ss, certificado de fin de obra folio 91, certificación nº 13, final, al folio 98, presupuesto de obras, en el particular obrante al folio 121, así como el informe elaborado por el arquitecto que codirigió las obras, D. Ángel Parejo, al folio 123), sin que por el contrario exista elemento documental alguno que permita entender que la instalación cuestionada hubiera sido instalada con posterioridad.

Tampoco el visionado de las declaraciones prestadas permite entender que se haya producido el error denunciado, pues si bien es cierto que la misma no es totalmente coincidente, extremo éste que ya es valorado por la resolución recurrida, sí existen testimonios que respaldan la conclusión alcanzada, y a tal efecto puede ser señalada la testifical de D. Ignacio, comunero en la demandada, que afirma claramente que desde su entrada en la vivienda en noviembre de 1989 ya estaban las instaladas las chimeneas tal y como existen en la actualidad, sin que la declaración de la arquitecto que codirigió la construcción y actual miembro de la comunidad demandada, Dª Pilar, sea igualmente clara y rotunda, pues la parte actora introdujo durante su interrogatorio una tercera chimenea que vio entonces en el documento nº 8 de la contestación de la comunidad demandada, lo que produjo cierta confusión en dicha testigo.

En consecuencia, ningún error es de apreciar en cuanto a la antigüedad de las chimeneas cuestionadas.

TERCERO.- En cuanto a la visibilidad de las chimeneas, ha sido aportada a los autos una extensa documentación gráfica en las que se aprecia que las chimeneas, por su ubicación y características, son perfectamente visibles incluso para cualquier viandante (es especialmente elocuente al respecto la primera fotografía obrante al folio nº 86 y la unidad al informe aportado por la actora, al folio 18).

Pero además, es el propio autor del informe elaborado por el arquitecto técnico Sr. M para la actora quien, en su informe, sostiene que las chimeneas son fácilmente visibles desde la calle (pag. 2, aunque no están numeradas, folio 19 de los autos), extremo que reitera en sus aclaraciones durante el juicio.

Por ello, tampoco aquí cabe apreciar errónea valoración de la prueba.

CUARTO.- En cuanto a los daños que la instalación de los conductos pudiere ocasionar en la pared de la actora sobre el que se apoyan, tan sólo existe como prueba el informe dado por el técnico acabado de citar, pero en el mismo no se hace alusión alguna a daños actuales ni potenciales serios, sin que en las aclaraciones dadas durante el juicio sirvan tampoco para acreditar los perjuicios que la actora afirma que le causa la colocación de las chimeneas.

En consecuencia con todo lo dicho, procede la desestimación del recurso.

QUINTO. Discrepa asimismo la recurrente con la aplicación de las normas sobre adquisición de servidumbre por prescripción contenidas en el CC que lleva a cabo la juzgadora de primer grado, pues a su parecer debió ser

aplicada la regulación contenida en el Código de Derecho Foral de Aragón aprobado por DLeg. 1/2011 de 22 de marzo del Gobierno de Aragón.

Pues bien, la regulación de las servidumbres reales en la extensión que ahora comprende la legislación aragonesa fue introducida por la ley 8/2010, de 2 de diciembre, que entró en vigor el 1 de enero de 2011, y que conforme a la primera de sus transitorias serían de aplicación a todas las situaciones contempladas en ella.

Antes de ella tan solo existían normas sobre servidumbres de luces y vistas, alera foral, y las particularidades sobre usucapión de servidumbres, con un régimen más amplio que el establecido en el código civil (arts. 147 y 147 de la compilación).

En consecuencia, entendido que las chimeneas fueron instaladas en el año 1989, la usucapión había sido completada bajo la antigua normativa, esto es, la contenida en el CC y en los artículos de la compilación citados, sin que en ningún caso fuera de aplicación la nueva ley, y conforme a aquellas normas el régimen es que la usucapión de la servidumbre en disputa se habría producido por el transcurso de 10 años entre presentes sin necesidad de justo titulo ni buena fe, lo que conduce a entender que la usucapión se había producido ya en el año 1999."

***** Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Ejea de los Caballeros de 29 de noviembre de 2012. Servidumbre de paso forzosa. Necesidad. Enclavamiento. Acceso rodado**

"Primero.- Se considera acreditado que los demandantes son propietarios de un inmueble en la calle de Ejea de los Caballeros, inscrita al Tomo, Libro 54, Folio 21), tal y como se desprende del documento 1 de la demanda.

También está acreditado que el demandado es propietario de la parcela, como se desprende de la documentación aportada junto con la demanda, aparte de no haber discusión entre las partes sobre este extremo.

De la pericial aportada junto con la demanda, además del reconocimiento judicial y del propio reconocimiento de las partes resulta que estas dos fincas son colindantes, coincidiendo esta colindancia con el lindero sur de la finca de los actores y parte del lindero norte de la finca del demandado.

Como se desprende del diverso material gráfico obrante en las actuaciones, y como también pudo observarse en el reconocimiento judicial, la finca de los actores limita por el sur, como ya se ha dicho, con la finca del demandado. Por el norte, limita con una calle en rampa, con varios escalones. Por el lado oeste linda con otra propiedad. Y por el lado este, linda con la calle.

Segundo.- Los actores ejercitan, como principal, una acción de constitución forzosa de servidumbre de paso, basada en el artículo 564 del Código Civil, y demás concordantes.

La parte demandada se opone a lo solicitado por no encontrarse la finca de los actores en la situación que describe el Código Civil, ya que tiene salida a vía pública. Entiende la demandada que el artículo 564 del Código Civil no da derecho a los actores a tener acceso rodado hasta el interior de su finca y que, aunque así fuera, podrían obtenerlo sin necesidad de ocupar la finca de su titularidad.

La parte actora argumenta que debe aplicarse un concepto amplio de enclavamiento, que incluye no sólo los supuestos en los que una finca carece de salida a vía pública, sino también aquellos otros en los que la salida es insuficiente teniendo en cuenta el destino económico del inmueble, y que permite obtener paso a través de una finca ajena si las obras para obtener salida a camino público por la propia finca son desproporcionadas desde el punto de vista económico, u ofrecen dificultades técnicas importantes.

Tercero.- La primera cuestión que debe indicarse es que, tratándose de la constitución de una servidumbre de paso forzosa en territorio aragonés, la norma aplicable no es el artículo 564 del Código Civil, sino el artículo 577 y concordantes del Código de Derecho Foral de Aragón, en vigor desde el 23 de

abril de 2011 (además, desde el 1 de enero de 2011, se encontraba en vigor la Ley 8/2010 de Derecho Civil Patrimonial, de la Comunidad Autónoma de Aragón, que regulaba esta cuestión en sus artículos 41 y siguientes).

Dicho precepto, muy similar al 564 del Código Civil, establece que "*el titular de una finca enclavada entre otras ajenas y sin salida o con salida insuficiente a una vía pública tiene derecho a exigir la constitución forzosa de servidumbre de paso por las fincas vecinas, pagando la correspondiente indemnización*".

En el caso que nos ocupa es evidente que el inmueble de los demandantes tiene salida a camino público. Así se indica en la propia demanda, y así se pudo observar en el reconocimiento judicial efectuado. Así se desprende también de diversa documental: en la certificación registral aportada como documento, en la que se observa un lateral del inmueble, que tiene puerta directa a la calle.

La cuestión es decidir si esta salida, u otra que razonablemente se pudiera efectuar directamente a la vía pública desde la propia finca de los actores, son suficientes o si, en cambio, no lo son, y éstos tienen derecho a constituir una servidumbre de paso forzoso sobre la finca del demandado.

Cuarto.- Considero que el punto de partida debe ser el principio de la libertad de fundos. El dominio se presume libre y, en el caso que nos ocupa, no solo se presume, sino que la Sentencia de la sección 4ª de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 18 de mayo de 2012 declara de forma expresa en su fallo que la finca del demandado "*no se encuentra gravada por servidumbre de paso a favor de la finca registral*", que es la finca de los hoy actores.

Con este punto de partida, la doctrina y la jurisprudencia son restrictivas al interpretar los preceptos reguladores de las servidumbres, precisamente por ser las servidumbres limitaciones al dominio.

No obstante, es también cierto que tanto la jurisprudencia como algún legislador autonómico han suavizado, en algunos casos, el requisito del enclavamiento. Así, la Ley de Derecho Civil de Galicia, de 14 de junio de 2006, en su artículo 83.2, establece que "*se considera enclavado el predio que carece de acceso suficiente a camino público transitable para satisfacer las necesidades permanentes de explotación, uso y disfrute del mismo conforme a su destino económico actual*". También el artículo 577 del Código de Derecho Foral de Aragón habla de "*sin salida o con salida insuficiente*", dando un paso más respecto del Código Civil que, en su artículo 564, sólo se refiere a la finca "*enclavada entre otras ajenas y sin salida a camino público*".

En la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 1989 podemos observar cómo se parte de la referida idea restrictiva, e indica que "*principios básicos en esta materia, que el derecho de servidumbre constituye un gravamen restrictivo de los derechos dominicales de terceros, que al coexistir con el derecho de propiedad, tiene un contenido limitativo aminorador del disfrute y valor del predio sirviente, motivo por el cual es constante la doctrina*

jurisprudencial que aconseja al intérprete, en los casos dudosos, favorecer en lo posible el interés y condición del predio sirviente, por ser de interpretación estricta toda la materia relativa a la imposición de gravámenes, y por la concordancia con la presunción de la libertad de los fundos". Ello no impide que en la de 13 de junio de 1989 atenúe el rigor de la interpretación del enclavamiento, indicando que "*el requisito de la necesidad que justifica la constitución de la servidumbre de paso con carácter forzoso, no implica la total carencia de salida a camino público del fundo a cuyo favor se pretende constituir sino que también se da cuando la salida existente sea insuficiente para atender las necesidades de aquél tenidas en cuenta las circunstancias concurrentes en el caso concreto, requisito que ha sido configurado por reiterada jurisprudencia de esta Sala de la que es exponente la Sentencia de 29 de marzo de 1977 que establece acogiendo la doctrina de las varias sentencias que cita que «se exige que responda no al capricho o simple conveniencia del titular del dominante, sino a la verdadera necesidad según se dice inequívoca y terminantemente en los arts. 564, párrafo 2.º, 566, 569 (donde se habla de «indispensable»)*". Seguidamente, no obstante, esta sentencia indica que debe hacerse "*una interpretación restrictiva en cuanto a la exigencia y consiguientemente a los términos «enclavada entre otras ajenas» «salida a camino público» y sobre todo al concepto específico de éste*".

El Tribunal Supremo, por lo tanto, parte de la interpretación restrictiva de las servidumbres, pero entiende que el enclavamiento no tiene por qué ser absoluto, de modo que cabe el establecimiento de una servidumbre forzosa de paso a favor de una finca que tenga salida a camino público, si la salida es insuficiente, pero habrá que valorar la necesidad de forma restrictiva. Esta idea de necesidad como nota característica de la servidumbre forzosa se remarca en las Sentencias del Tribunal Supremo de 23 de marzo de 2001, de 20 de diciembre de 2005 y de 17 de noviembre de 2011.

Lo anterior se recoge también en sentencias dictadas por diversas Audiencias Provinciales, como la de 23 de junio de 2000, de la Audiencia Provincial de las Islas Baleares; la de 11 de enero de 2001, de la Audiencia Provincial de Murcia; o la de 2 de junio de 1999, de la Audiencia Provincial de Cantabria, que indican que el enclavamiento debe interpretarse "*en sentido integral, esto es, no solamente un mero enclavamiento físico, sino económico y funcional, no mera conveniencia, capricho o artificio, sino verdadera necesidad derivada del enclavamiento económico que aconseja verificar la salida a camino público por un punto que tolere el aprovechamiento racional del fundo, sin obligarle a realizar costosas e impracticables reformas que hagan ilusorio referido aprovechamiento*".

Aunque toda esta jurisprudencia se refiere al Código Civil, parece oportuno citar la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de 14 de diciembre de 2011, dictada en relación con unos hechos con cierta similitud al que hoy nos ocupa, que pone de relieve la semejanza entre el artículo 577 del

Código de Derecho Foral de Aragón y el artículo 564 del Código Civil, y que indica que "*la aplicación de este precepto debe ser estricta; no son atendibles, a los fines de constituir una servidumbre forzosa, razones de comodidad*". Asimismo, esta sentencia remarca la necesidad como nota característica de las servidumbres forzosas, citando jurisprudencia del Supremo que ya ha sido mencionada. E incluso llega a decir, también citando al Supremo, que "*la acción ha de fundarse siempre en la necesidad de establecimiento de la servidumbre como único medio de obtener la salida o comunicación*".

La doctrina expuesta es relativamente sencilla, al menos en teoría: el establecimiento de una servidumbre de paso forzosa que, como todas las servidumbres, ha de ser interpretada restrictivamente, es posible incluso aunque el enclavamiento del predio sirviente no sea absoluto, siempre que la salida a vía pública existente sea insuficiente, pero la necesidad del paso debe valorarse restrictivamente. El problema es aplicar esta doctrina al caso concreto.

Quinto.- Partiendo de lo anterior, en el caso que nos ocupa concurren una serie de circunstancias que, en opinión del que suscribe, hacen que no pueda prosperar la pretensión ejercitada con carácter principal.

En primer lugar, falta una prueba clara de imposibilidad de acceso rodado al interior de la finca de los demandantes. El requisito de la necesidad, que debe valorarse de forma estricta, exige que se acredite suficientemente que el solicitante no puede obtener de forma razonable un acceso suficiente a su inmueble. En este caso, resulta evidente que dos laterales del inmueble de los actores dan a la vía pública (linde este y linde norte). Del reconocimiento efectuado, y de la simple observación de las fotografías que obran en las actuaciones, se desprende claramente que, en la situación actual, no es posible acceder al interior del inmueble con un vehículo. Pero esa no es la cuestión. Lo que realmente debe examinarse es si existe una posibilidad razonable de practicar un acceso para vehículos sin ocupar terreno ajeno. Y ahí es donde falla la prueba. Con la demanda se aporta un dictamen cuyo contenido es una página, de la cual la mitad está dedicada a trascribir y comentar unos preceptos jurídicos, de manera que dedica un único párrafo a explicar por qué no es posible practicar el referido acceso por las zonas en las que el inmueble linda con vía pública.

Frente a lo anterior, la parte demandada aporta un dictamen en el que se barajan varias posibilidades para obtener acceso rodado a la finca de los actores sin necesidad de ocupar terreno ajeno. Ciertamente, este dictamen tampoco da muchas explicaciones, pero nos encontramos con las opiniones contradictorias de dos profesionales (un arquitecto y un arquitecto técnico).

En la vista, el perito Sr., a preguntas de la parte demandada, manifestó que sería posible hacer una rampa de acceso al interior de la finca que transcurriese exclusivamente por la misma, sin necesidad de ocupar la finca del demandado. Esta rampa, en curva, debería comenzar en el la calle, en el punto

de confluencia de ambas fincas (no en el centro de la pared desde la que se hace partir la rampa en el plano aportado por la parte actora como documento 7 en la vista). También manifestó que incluso la rampa podría tener menos pendiente si se preveía un garaje en el interior de la vivienda, en lugar de quedar el vehículo fuera. Finalmente, también manifestó el Sr. que sería posible realizar un garaje subterráneo entrando desde la calle San Felices, por la pared que se indica en el citado documento nº 7, aunque dicho garaje no quedaría "a pie llano".

Es decir, de la prueba practicada se desprende que la finca de los actores tiene salida a vía pública. Y que existen posibilidades de obtener acceso rodado a su interior sin necesidad de ocupar la finca vecina.

No consta que ello suponga obras inviables o irrazonables. En el procedimiento no consta ningún presupuesto de las distintas alternativas que se plantean, y tampoco de la obra que supondría realizar la rampa que los actores pretenden a través de la finca del demandado, por lo que no se puede hacer ninguna comparación. Las dificultades que el perito Sr. apunta acerca de la posible existencia de roca viva bajo la finca de los demandados tampoco pueden tenerse en cuenta. Se trata de manifestaciones vagas, sin que esté comprobada la efectiva existencia de roca viva, ni a qué profundidad. En cambio, lo que sí consta es que, anteriormente a iniciarse las obras, en la finca de los demandantes existía una zona escalonada en la parte descubierta, que ha sido eliminada hasta quedar al mismo rasante que el resto.

Tampoco se conoce el montante total del proyecto de rehabilitación de la vivienda que están desarrollando los actores. Lo que sí se evidencia, a la vista de diversas fotografías obrantes en las actuaciones, y a la vista del reconocimiento judicial efectuado, es que se trata de una obra importante. Considero que un elemento que podría tenerse en cuenta para juzgar la proporcionalidad de las posibles obras que se plantean para acceder con vehículo al interior de la finca es, precisamente, la magnitud de la obra principal, lo cual no se conoce.

En definitiva, entiendo que existe un déficit de prueba para que prospere la principal acción ejercitada en la demanda, porque la finca de los actores linda con vía pública, y no se ha probado que no sea posible acceder al interior de la misma con vehículo sin necesidad de ocupar la finca vecina. Antes al contrario, de la prueba practicada lo que se desprende es que, técnicamente, ello es posible, y no puede afirmarse que las obras para ello sean inviables o irrazonables, desde el punto de vista técnico o económico.

Sexto.- Pero, además, en el presente caso entiendo que existen más razones para desestimar la demanda.

Por una parte, como se ha expuesto, la jurisprudencia es clara al decir que la nota característica de la servidumbre forzosa es la necesidad, y no la mera utilidad o conveniencia. En este caso, las posibilidades de acceso rodado a través de la propia finca de los demandados suponen una pérdida del espacio no construido de la finca. La parte actora considera el jardín como elemento

esencial de la finca, de modo que las soluciones propuestas supondrían una pérdida de un elemento valioso de la misma. Entiendo, que ello no es así. El jardín puede ser un elemento valioso, pero ni es necesario tener jardín, ni todos los inmuebles lo tienen. Aquí creo que puede verse la diferencia entre utilidad y necesidad. El jardín puede ser útil, conveniente o deseable, pero no es necesario. Y no es posible el establecimiento de una servidumbre forzosa de paso para evitar perder parte de la superficie de la finca que no es necesaria, como ocurre con el jardín.

Este requisito de la necesidad, además, falta por otros motivos. El acceso rodado hasta el interior de una finca puede ser considerado útil y conveniente. Pero considero que tampoco es necesario. La realidad es que existen muchas viviendas que no tienen acceso rodado hasta su interior.

En las Ordenanzas de Edificación y Uso del Suelo contenidas en el Plan General de Ordenación Urbana de, el artículo 75, al que se refiere la parte actora, se refiere a edificios de nueva planta, y excluye el "*Casco Antiguo*", desconociéndose si la calle lo integra, aunque a la vista de la documentación obrante en las actuaciones y del reconocimiento practicado da la impresión de que podría formar parte de él.

Por otra parte, determinada normativa urbanística puede incluir determinados deseos o derechos genéricos, pero hay que tener siempre en cuenta las circunstancias del caso concreto y, en el caso que nos ocupa nos encontramos con una casa antigua, en una calle vieja de un pueblo que se encuentra en la ladera de una montaña. Desde luego que sería deseable que todos tuviéramos una vivienda unifamiliar con jardín y garaje, pero la realidad es la que es y, como se ha expuesto, la utilidad o conveniencia no justifica la imposición de una limitación al dominio como es el establecimiento de una servidumbre forzosa de paso.

Séptimo.- Existen también otros datos y elementos que creo que deben tenerse en cuenta y que apoyan la desestimación de la pretensión principal.

Por una parte, los demandantes compran el inmueble a favor del cual piden la servidumbre en mayo de 2007. En ese momento, conocen, o debieron conocer, las circunstancias del inmueble que adquirían, su configuración, y las dificultades que podía haber para obtener acceso rodado hasta su interior. Posteriormente, se elabora un proyecto que, según su propio autor (Sr.) en la vista, no incluye el acceso a través de la finca del demandado. Y después se inician las obras de rehabilitación de la vivienda. Es decir, de alguna manera, los demandantes actúan "*a hechos consumados*". Los actores, siendo, o debiendo ser, conscientes de las dificultades de acceso rodado al interior del inmueble, lo compran, piden la redacción de un proyecto e inician las obras, sin haber obtenido, por acuerdo o resolución judicial, paso a través de la finca del demandado. Y ahora, cuando las obras ya se encuentran relativamente avanzadas, piden la constitución de la servidumbre.

Parece ser que existió cierta confusión a la hora valorar el terreno que pretendían ocupar, y que pudo existir un error acerca de la titularidad pública o privada de dicho terreno. Por lo tanto, no se pretende con lo anterior decir que los actores hayan actuado con mala fe. Pero el demandado no tiene la culpa de la referida confusión, y por ello entiendo que no le es oponible la situación de hecho que se ha creado: una vivienda en vías de rehabilitación con dificultades para obtener acceso rodado a su interior.

Debe tenerse en cuenta que este tipo de actuación ha tenido relevancia práctica. En su informe, el perito Sr. hace varias propuestas. Una de las mismas lo es para antes de que se inicie la obra (así lo indica en el informe, y así lo manifestó en la vista, reconociendo que, dado el avance de las obras, esa posibilidad había pasado a ser desproporcionada). Es decir, los actores adquieren un inmueble que no tiene acceso rodado a su interior, encargan un proyecto de rehabilitación que no lo contempla, inician la ejecución de las obras y, tras ello, piden la constitución forzosa de una servidumbre de paso. Con su conducta han eliminado (o, al menos, han dificultado) una de las posibilidades de obtener acceso rodado al interior de su finca sin necesidad de ocupar la ajena. Entiendo que ello debe abonar la desestimación de su pretensión.

También se da la circunstancia de que no se ha demandado a otros colindantes. Según la demanda, y según la documentación que con ella se aporta (documentos 16 a 19), el acceso por el noroeste no lo es a través vía pública, sino a través un camino de titularidad particular. La parte actora no ha demandado a este particular. Alega que el acceso por este lugar supondría acceder, no a la altura de la planta baja, sino a la planta superior. Asimismo, alega la distancia que puede existir a vía pública accediendo por este camino. Sin embargo, si lo que se pretende es establecer una servidumbre forzosa de paso, deben tenerse en cuenta todas las posibilidades, puesto que además del interés del predio dominante, el primer criterio a tener en cuenta, según el artículo 577.2 del Código de Derecho Foral de Aragón, debe ser el menor perjuicio para la finca gravada. Y lo cierto es que, existiendo ya un camino, es posible que dicho acceso fuese menos perjudicial para su propietario de lo que la pretensión formulada lo es para el demandado. En cualquier caso, al no haberse demandado a esta persona y, por lo tanto, no haberse discutido esta cuestión en el juicio, tampoco se ha podido hacer la correspondiente comparación.

Por todos los motivos expuestos, debe desestimarse la pretensión principal.

Octavo.- La pretensión subsidiaria es que se permita a los demandantes pasar temporalmente hasta que se termine la rehabilitación de la obra por la parcela 303, polígono 10, los materiales y vehículos necesarios para la rehabilitación de la vivienda que se está llevando a cabo, previo pago de la indemnización correspondiente que se cifra en la cantidad de 1,35 euros, o la que resulte de ejecución de sentencia.

La parte demandada se opone alegando que el derecho de paso temporal no autoriza a la modificación de la configuración del predio sirviente, lo que es necesario en este caso dado que para el paso de maquinaria es necesario eliminar el escalón existente.

El artículo 569 del Código Civil dispone que "*si fuere indispensable para construir o reparar algún edificio pasar materiales por predio ajeno, o colocar en él andamios u otros objetos para la obra, el dueño de este predio está obligado a consentirlo, recibiendo la indemnización correspondiente al perjuicio que se le irrogue*".

Lo cierto es que las partes dedicaron la mayor parte de sus esfuerzos argumentativos y probatorios a la pretensión principal de la demanda, de modo que poco se dijo acerca de esta pretensión.

En cualquier caso, lo que parece claro es que en la finca de los demandantes se están efectuando unas obras de rehabilitación, de gran envergadura (en el reconocimiento judicial se pudo incluso transitar por el interior de la vivienda), con intervención de maquinaria, como se observa en diversas fotografías de las aportadas al procedimiento.

Se ha indicado que, en el momento actual, no es posible acceder al interior del inmueble con vehículos. Por lo tanto, considero que es clara la necesidad de los demandantes de obtener el paso que solicitan, tanto para descargar y recoger material como para el paso de maquinaria.

En cuanto a que este derecho de paso no autoriza a alterar la configuración del predio sirviente, entiendo que ello no es argumento para desestimar la pretensión. Por un lado, el artículo 569 del Código Civil nada dice en este sentido. Por otra parte, considerada esta argumentación abstractamente, podría, quizá, compartirse. Pero en el caso concreto, la "*alteración de la configuración*" consiste en la eliminación de un escalón de hormigón, de unos centímetros de altura. En mi opinión, pretender que esto es una alteración de la configuración de la finca del demandado es una exageración, especialmente si se tiene en cuenta la dimensión total de la finca. El artículo referido del Código Civil prevé la obligación de indemnizar los perjuicios que se irroguen. Si ni siquiera, en un supuesto como éste, es posible admitir la rotura de un pequeño escalón de hormigón, la previsión de indemnización no tendría sentido alguno, puesto que se debería hacer uso del predio sirviente de forma absolutamente inocua.

Por lo tanto, entiendo que debe estimarse la pretensión subsidiaria. En cuanto a la obligación indemnizatoria, como no pueden conocerse con carácter previo los perjuicios que se irrogarán al titular del predio sirviente, no pueden tampoco fijarse en esta sentencia, sin perjuicio de su fijación en fase de ejecución si las partes no se ponen de acuerdo. La indemnización, como no puede ser de otra manera, incluirá la restitución del predio sirviente al estado en el que se encontrase, además del abono de cualquier otro perjuicio que acredite su titular.

La autorización de paso se da por el lugar indicado en el plano incorporado al dictamen del perito Sr., aportado junto con la demanda, donde la zona de paso aparece delimitada con líneas negras y el interior con rayas diagonales también negras.”

***** Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Ejea de los Caballeros de 4 de diciembre de 2012. Servidumbre de desagüe. Construcción de chimenea**

"Primero.- Se considera probado que la demandante, junto con su esposo F.T.R, es propietaria de una casa con corral, en la localidad de Erla, en la calle - - -. Así se desprende de la escritura aportada como documento 2 de la demanda que, aunque no está completa, viene a ser corroborada con la fotocopia de certificación catastral aportada como documento 3, siendo, además, que este hecho es aceptado por ambas partes, y es también corroborado por la sentencia aportada como documento 4 de la demanda y los dictámenes periciales obrantes en el procedimiento.

Pedro es propietario de una vivienda en la calle --- de Erla. Este hecho también es aceptado por ambas partes, y también viene a ser corroborado por los diversos documentos e informes que constan en las actuaciones.

Ambos inmuebles son colindantes. La zona de colindancia se encuentra en la zona este y parte de la zona norte de la vivienda del demandado, que coinciden con parte del lado sur y parte del lado oeste del inmueble de la parte actora. En el documento 3 de la demanda y en el plano que aparece en la fotografía de la página 3 del dictamen de la demanda se observa claramente la colindancia. Esto no coincide con la documentación gráfica aportada por la parte demandada, pero en la vista se pudo comprobar, a la vista de la declaración de ambos peritos, como la efectiva ubicación de ambas fincas es la que propone la parte actora.

La vivienda de la parte actora se construyó en 1950, como se desprende de la fotocopia de la certificación registral aportada como documento 3 de la demanda. La vivienda del demandado se construyó entre 1981 y 1982 (de los documentos 2 y 3 de la contestación se desprende que la licencia se otorga el 8 de enero de 1981, y la certificación de final de obra es de 10 de mayo de 1982).

Segundo.- Partiendo de lo anterior, se discuten dos cuestiones. Una primera, relativa a unas filtraciones en la vivienda de la parte actora, que da lugar a dos peticiones: la reparación de los daños sufridos y el cese e las filtraciones. Y otra cuestión, relativa a inmisiones provenientes de una chimenea del demandado.

Con carácter previo se debe hacer referencia a que en la demanda y en el dictamen aportado como documento 6 de la misma, se indica que la vivienda del demandante no se ajustó al proyecto y a la licencia concedida, y que la construcción del demandado está apoyada sobre un muro propiedad de la parte actora.

A la vista de la documentación que obra en las actuaciones, del dictamen aportado como documento 6 de la demanda y de las declaraciones de los dos

peritos, resulta claro que el emplazamiento de la vivienda del demandado no es el que consta en el proyecto, ni el que indica la parte demandada en los documentos 1 y 2 de la contestación. No obstante, ello no es importante para la resolución de este juicio, y tampoco existe en la demanda ninguna pretensión al respecto.

En cuanto al apoyo de la vivienda del demandado en muros del demandante, resulta evidente, a la vista de la documentación, dictamen aportado por la demandante y la declaración de ambos peritos, que el demandado emplea el muro al este de su vivienda como si fuera medianero, ya que cierra con él su vivienda y, aunque la construcción no se apoye en él (así lo manifiesta el perito Sr. B y así lo hace constar en su dictamen), sí que ocupa la mitad del muro y se eleva sobre dicha mitad. En cualquier caso, no es objeto de este procedimiento determinar el carácter medianero o no de este muro, cuya naturaleza tampoco es relevante para la solución de las pretensiones deducidas.

En relación con la zona de colindancia en la parte trasera de ambas viviendas, aunque en el punto 6.5 del dictamen aportado como documento 6 de la demanda se habla de “apropiación de un tramo del solar vecino”, parece que se trata de un error, ya que reitera el nombre del epígrafe anterior y, realmente, este apartado se refiere a las humedades. De lo expuesto en la demanda, lo que parece es que la actora alega que, en esta zona, el demandado construyó pegado a su vivienda, no que ocupó un muro que no era de su propiedad, (hechos segundo y tercero de la demanda). También se desprende así del punto 6.5 del referido dictamen en el que, pese a su título, lo que se indica es que el demandado construyó pegado a la vivienda de la actora. De todos modos, al igual que ocurre con el muro referido en el párrafo anterior, tampoco se hace ninguna petición en relación a esta zona de colindancia, por lo que no procede ahondar en esta cuestión.

Tercero.- En relación a las filtraciones, la actora pide dos cosas: la reparación de los daños causados y el cese de las mismas.

La demandante parte de que, con anterioridad a la construcción de la vivienda de la parte demandada, existía una servidumbre de desagüe, en el que el predio dominante era su inmueble, y el sirviente, el del demandado. Así lo indica en la demanda, con apoyo en el dictamen aportado como documento número 6 (páginas 8 y 9).

El perito Sr. T considera que el demandado, al construir su vivienda, lo hizo pegado a la vivienda de la demandante, cortando el alero que vertía las aguas en el terreno del demandado, y colocando un canalón que recogía las aguas de lluvia. En el juicio manifestó que, a la vista de las edificaciones circundantes, así como del propio examen de la configuración del inmueble de la parte actora, visible en ciertas fotografías (como la de la página 6 de su dictamen), se concluye que el demandado, al construir su vivienda pegada a la de la parte actora, cortó parte del alero para poder elevar su edificio a mayor

altura que el de la demandante. El perito Sr. B manifestó que eso no tenía por qué ser así.

Considero que la explicación del Sr. T es muy razonable y que, con toda probabilidad, las cosas ocurrieron como él explica. No tiene ningún sentido que todo el tejado de la vivienda se construya con un alero y que, precisamente en la zona trasera que ahora colinda con la vivienda del demandado, pero que entonces era un solar o una era, se dejase el alero remetido. Lo lógico es que, en el año 1950, se construyese el tejado con un alero, que en la parte trasera vertía sus aguas a la finca colindante, en la que no existía edificación alguna y que, en 1981, cuando el demandado construyó su vivienda, al hacerlo pegado al edificio de la demandante, tuviese que cortar el alero para darle la altura deseada.

Otra cuestión es la construcción del canalón que da salida a las aguas pluviales de la actora. Puede ser que, al hacer su construcción, el demandado, efectivamente, hiciese dicho canalón (que se encuentra en la propiedad de la demandante). Pero también podría ser que quien entonces era propietario del inmueble de la actual demandante, precisamente como consecuencia de la construcción de una vivienda adyacente y de la eliminación del alero, realizase ese canalón para la salida de las aguas pluviales. Lo cierto es que se desconoce quién efectuó dicho canalón. En cualquier caso, parece razonable pensar que dicha obra no se pudo realizar sin conocimiento del propietario del inmueble que hoy pertenece a la actora y que, si no lo hizo él, se hizo con su conocimiento y con su consentimiento o, al menos, con su no oposición durante más de veinte años.

La demandante, como se ha dicho antes, parte de la existencia de una servidumbre de desagüe con anterioridad a que el demandado construyese su vivienda. El perito Sr. T considera que, efectivamente, existía esta servidumbre en la parte trasera de la vivienda de la demandante. El Sr. T entiende que, hasta la construcción de la vivienda del demandado, la vivienda de la actora, en su parte trasera, vertía las aguas a la finca colindante, escurriendo por la vertiente del tejado, que tenía un alero que sobrevolaba la finca colindante. A juicio del perito, ello supone la existencia de una servidumbre de desagüe, en la que la finca de la actora sería el predio sirviente, y la finca del demandado el predio dominante. Y que, al suprimir esa salida de agua con la nueva construcción, el demandado elimina la servidumbre y le corresponde dar salida al agua de forma adecuada.

La parte demandada niega que exista servidumbre de desagüe y que, en caso de haber existido dicha servidumbre alguna vez, ésta se habría extinguido por no uso, conforme a lo dispuesto en el artículo 571.1a del Código de Derecho Foral.

Lo cierto es que no consta la existencia de servidumbre. En este punto debemos partir de la regla general de que el dominio se presume libre, y no hay ningún documento ni resolución que reconozca o constituya una servidumbre

de desagüe a favor de la demandante. Tampoco en la demanda se pide reconocimiento o constitución de servidumbre alguna.

Por lo tanto, no constando la existencia de ninguna servidumbre que grave el inmueble del demandado, la parte actora tiene el deber de recoger las aguas pluviales en los términos del artículo 586 del Código Civil.

Cuarto.- La parte demandada niega la existencia de las filtraciones. Aunque ninguno de los dos dictámenes aportados junto con la demanda describen las filtraciones de manera minuciosa, se considera acreditado que éstas existen. El dictamen aportado como documento número cinco incluye dos fotografías de las humedades (4 y 5) y también del estado del falso techo (fotos 6, 7 y 8). Además, este informe da por hecho la existencia de las filtraciones en varios puntos, y propone la necesidad de demoler el falso techo, así como soluciones para evitar que las filtraciones continúen. El perito Sr. T no analiza en profundidad las humedades, pero en el punto 5 (antecedentes) indica que se observa que el falso techo de uno de los dormitorios presenta humedades debidas a goteras y filtraciones de la cubierta, y en sus conclusiones habla de reparar las goteras, valorando en el anexo la reparación del falso techo. Parece claro que los dos peritos han comprobado la existencia de humedades o goteras.

Al ejercitarse una acción de responsabilidad extracontractual, no basta con acreditar el daño, sino que es necesario que se den también los requisitos de conducta culposa y relación de causalidad.

La causa de las filtraciones, según el dictamen aportado como documento 5 de la demanda (página 3) es que el agua de lluvia pasa a través de la cubierta de la edificación, al carecer el agua de salida natural desde la vertiente de la cubierta de la demandante, por la construcción adyacente. En la página 2 se indica que, al haber cancelado la construcción del demandado la salida natural de las aguas, el agua pluvial no cae por la vertiente de la cubierta, quedando estancada y produciendo daños en el falso techo. En las páginas 9 a 10 del dictamen aportado como documento 6 de la demanda, también se indica que la situación actual no es adecuada para la evacuación de las aguas pluviales de la vivienda de la demandante. En el dictamen del perito Sr. T (páginas 9 a 11), aunque no se relacionan directamente las deficiencias observadas con las humedades, se indica también que la forma de recoger las aguas pluviales de la cubierta de la actora no es correcta, por varios motivos: único “río” para el agua de todo un tramo de vertiente del tejado, conexión de la canal con la teja al mismo nivel, escasa sección del canalón, ausencia de babero y ausencia de impermeabilización.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, considero que deben desestimarse las dos pretensiones que la parte actora formula en relación con las filtraciones (reparación y cese de filtraciones).

De lo expuesto se deriva que la vivienda de la hoy actora, construida en 1950, vertía inicialmente sus aguas pluviales, por la parte trasera, en un solar o

era, que es el terreno en el que, en 1981, el demandado comenzó a construir su vivienda, acabada en 1982. Al edificar esta vivienda, el demandado lo hizo pegado a la vivienda de la parte actora, lo que es posible de acuerdo con lo establecido en el artículo 550.1 del Código de Derecho Foral (norma que recogía el artículo 144 de la Compilación de Derecho Civil de Aragón). Asimismo, al construirse la vivienda del demandado, para recoger las aguas pluviales que caían sobre la cubierta de la hoy actora, se colocó un canalón de desagüe en su tejado, pegado a la pared de la vivienda del demandado. Se desconoce quién realizó dicho canalón, aunque en todo caso se efectuó con conocimiento del propietario del inmueble que hoy pertenece a la actora, sin que conste oposición a ello durante más de veinte años.

No constando la existencia de una servidumbre de desagüe a favor de la finca de la actora, sobre la finca del demandado, corresponde a la primera recoger las aguas pluviales y darles salida en los términos previstos en el artículo 586 del Código Civil.

En los dos dictámenes aportados por la parte actora se indica como causa de las filtraciones la construcción del demandado, que cerró la salida de las aguas pluviales que tenía la vivienda de la actora con anterioridad. Sin embargo, ya se ha expuesto que el demandado tenía derecho a construir pegado a la casa de la parte actora y que, no existiendo servidumbre de desagüe, es a esta última a la que le corresponde dar salida a las aguas de la lluvia que cae sobre su cubierta. Ello es posible, y así lo indica el dictamen aportado como documento 5 de la demanda, que en su página 3 indica como posibles soluciones la demolición de la construcción del demandado o que el propietario de la finca asegurada (parte actora) construya un desagüe en la pared de su construcción. Como no hay servidumbre de desagüe, ningún derecho tiene la parte actora a exigir al demandado que dé salida por su finca (del demandado) a sus aguas pluviales (las de la demandante), sino que es la parte actora la que deberá darles salida.

En conclusión, como se ejercita una acción de responsabilidad extracontractual, al ser la causa de las filtraciones la insuficiente salida de las aguas pluviales que caen sobre la cubierta de la actora, y siendo responsabilidad suya la evacuación de estas aguas, resulta que no se dan los presupuestos de la conducta culposa o negligente ni la relación de causalidad que deben concurrir para que prospere una reclamación de este tipo.

Se desestiman, por lo tanto, las dos primeras pretensiones planteadas en el suplico de la demanda.

Quinto.- La parte actora reclama también la cesación de las inmisiones por humo, y la condena a ejecutar las obras en la chimenea que se prevén en el dictamen aportado junto con la demanda.

Basa su pretensión en los artículos 590 y 1908 del Código Civil, y en el artículo 538 del Código de Derecho Foral de Aragón.

El primero de estos preceptos establece la prohibición de construir chimeneas sin guardar las distancias prescritas por los reglamentos y usos del lugar, y sin ejecutar las obras de resguardo necesarias. En defecto de reglamento, se prevé la adopción de las precauciones necesarias, previo dictamen pericial, para evitar daño a las heredades o edificios vecinos.

El artículo 1908, en sede de las obligaciones que nacen de la culpa o negligencia, establece que el propietario responderá de los daños causados por los humos excesivos, que sean nocivos a las personas o a las propiedades.

Por último, el artículo 538 del Código de Derecho Foral de Aragón dispone que "*Los propietarios de inmuebles o sitios y los titulares de cualquier otro derecho real o personal de uso y disfrute de los mismos, en el ejercicio de sus derechos, no pueden causar riesgo, ni tampoco más perjuicio o incomodidad que los que resulten del uso razonable de la finca según su naturaleza, destino, condiciones generales del entorno y usos del lugar, todo ello conforme al principio de buena fe*".

Considero que esta pretensión debe desestimarse. En primer lugar, no hay prueba alguna de inmisiones por humo. Lo único que existe a este respecto es la manifestación de la actora. La chimenea existe desde la construcción de la vivienda del demandado, en 1982. El testigo que declaró, si bien hace años que no vive allí, manifestó que nunca tuvo molestias de humo ni nada parecido. Los dos peritos, que visitaron el lugar, manifestaron que no comprobaron si existían inmisiones de humo. Por lo tanto, la única prueba sobre estas inmisiones es la declaración de la demandante, y debe tenerse en cuenta que no existe reclamación previa, pese a que compraron la vivienda en el año 2004. Asimismo, debe tenerse en cuenta que, previamente, las partes ya tuvieron un juicio por otras cuestiones relativas a la colindancia de ambas viviendas, en el que el demandante era el hoy demandado, y que el esposo de la hoy actora fue entonces condenado. A la vista de todo esto, entiendo que la declaración de la demandante no es suficiente para entender acreditada la existencia de las inmisiones provenientes de la chimenea del demandado. Debe recordarse que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, corresponde al demandante la carga de la prueba de los hechos en los que base sus pretensiones. Y también que habría sido relativamente sencillo probar la realidad de los hechos que se manifiestan en la demanda, mediante la aportación de fotografías, vídeos o incluso mediante la declaración de algún testigo.

De la configuración y ubicación de las viviendas se desprende, además, que las ventanas de la vivienda de la demandante dan al lado del edificio opuesto a la chimenea. Y en cuanto a la claraboya que manifiesta que pretende abrir, como indica la defensa, no puede actuarse de forma preventiva ante unas hipotéticas inmisiones que, a día de hoy, no se dan, porque la claraboya no existe.

En cuanto a la infracción de distancias, el Código Técnico de la Edificación no estaba vigente en el momento de construir la vivienda, y tampoco las Normas Tecnológicas de la Edificación que, además, no son vinculantes. Así lo manifestaron ambos peritos. No consta tampoco uso en la localidad de Erla en relación a este supuesto. Por lo tanto, no es de aplicación lo dispuesto en el artículo 590 del Código Civil.

El artículo 1908 tampoco es aplicable. Como ya se ha dicho, no consta la existencia de inmisiones, por lo que falta uno de los presupuestos propios de la responsabilidad extracontractual (el daño), de la cual el artículo 1908 es una manifestación. Este tipo de responsabilidad exige la existencia de un daño, una conducta negligente, y una relación de causalidad. En este caso falta la prueba del daño, ya que no hay ninguna prueba de que se produzcan inmisiones.

Por último, el artículo 538 del Código de Derecho Foral exige que se cause riesgo, perjuicio o incomodidad, y nada de esto se ha probado.

Sexto.- Por último, en cuanto a la tacha del perito Sr. B, la parte demandante no concretó en su escrito de 24 de octubre el motivo concreto de tacha, de entre los previstos en el artículo 343 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por lo que es complicado valorar la concurrencia de dicha causa. De todos modos, está acreditado que el Sr. B fue inicialmente contratado por la parte demandante para elaborar un dictamen relativo a los hechos que son objeto del procedimiento, a la vista de la factura aportada y a la vista del reconocimiento del propio Sr. B en la vista.

Por lo que se refiere a la valoración de la pericial efectuada por el Sr. B (ya que la tacha no implica la anulación de la prueba, sino su valoración al dictar sentencia, según el artículo 344 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), varios de los puntos que trata en su dictamen no han sido tenidos en cuenta o han resultado irrelevantes. Así, la valoración de las obras no se ha tenido en cuenta, puesto que se han desestimado las pretensiones de la actora y no ha sido necesario. En relación con el punto 6.6 del dictamen, las valoraciones que allí hace el perito (relativas a la vigencia y obligatoriedad del Código Técnico de la Edificación y de las Normas Tecnológicas de la Edificación) coinciden con lo dicho por el perito Sr. Torres, por lo que no hay problema en aceptarlas. Lo expuesto en los puntos 6.1, 6.2 y 6.4 tampoco ha tenido relevancia para este procedimiento, como ya se indica en el fundamento jurídico segundo de esta sentencia. El punto 6.3, como puede observarse, tampoco se ha tenido en cuenta.

Finalmente, los puntos 5.1 y 6.5 son los relacionados con las goteras y la posible existencia de una servidumbre de desagüe. En el punto 5.1 se critica el dictamen del Sr. T y se indica que el tejado de la demandante tiene una flecha excesiva, tejas rotas e indica la falta de conservación del canalón de desagüe. Como puede observarse de la lectura de la sentencia, estas cuestiones no han sido relevantes, porque al entenderse que es la actora la que debe dar salida a

sus aguas pluviales, no se ha considerado importante valorar las deficiencias de su cubierta. Y el punto 6.5 tampoco se ha tenido en consideración.

En cuanto a su intervención en juicio, discrepó con el perito Sr. T en varias cuestiones, como la existencia o no de las servidumbres de desagüe o de medianería, así como en la posible rotura del alero al construir el demandado su construcción. En este último punto se aceptó la tesis del Sr. T. En el tema de la medianería, sí se ha tenido en cuenta la explicación del Sr. B de que el edificio del demandado no apoya su peso en el muro de separación, aunque sí lo emplea como cerramiento, cuestión que, no obstante, no ha resultado relevante para la resolución del pleito. Y en cuanto a la servidumbre de desagüe, ya se ha explicado suficientemente en el correspondiente fundamento por qué se parte de la inexistencia de la misma."

9. DERECHO DE OBLIGACIONES

*** Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 5 de octubre de 2012. Retracto de abolorio. Condición de bien troncal. Aportación del bien al consorcio conyugal

"PRIMERO.- Ejercitado por la parte actora, y ahora recurrente, el derecho de retracto de abolorio respecto de finca adquirida por los demandados y recurridos, sita en la localidad de el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Teruel desestimó la demanda, en sentencia dictada el día 19 de julio de 2011 que fue apelada ante la Audiencia Provincial de Teruel.

El recurso fue resuelto por sentencia dictada por la Audiencia Provincial el día 6 de marzo de 2012, en la que lo desestimaba, confirmando en todos sus extremos la sentencia dictada por el Juzgado. El Tribunal consideró que fue correctamente observado el artículo 149 de la Compilación de Derecho Civil de Aragón (CA en adelante) en la sentencia del Juzgado, cuando entendió que la compra para el consorcio conyugal de una cuota de copropiedad de bien troncal de la familia del esposo, y la posterior adjudicación de una parte de tal bien a la esposa viuda, al tiempo de la liquidación el consorcio, comportaron que el bien dejó de pertenecer al tronco familiar del esposo fallecido a los efectos del precepto citado.

Asimismo, la sentencia recurrida desestimó la petición subsidiaria del apelante, de que se acordara el retracto respecto de una quinta parte de la finca, por entender el Tribunal que si bien respecto de tal cuota se cumplieron en todos los requisitos legalmente exigidos para el ejercicio del retracto, sin embargo debía ser denegado, por ser contrario a la finalidad de tal derecho retraer sólo sobre una porción y por ser inconveniente al criterio general del ordenamiento jurídico establecer la comunidad ordinaria que resultaría caso de estimarse tal petición.

SEGUNDO.- Según resulta de los hechos admitidos por las partes, los que constituyen la base fáctica de la sentencia impugnada y, por su referencia, del Juzgado de Primera Instancia, el demandante, D. Miguel Ángel, es pariente colateral de cuarto grado (primo hermano) de los cuatro hermanos que el día 23 de julio de 2010 vendieron la finca objeto de retracto a los demandados, personas ajenas a la familia.

Los vendedores, D. Carlos, Dª Pilar, D. José Mª y Dª Isabel, eran dueños de la totalidad de la finca por acumulación de cuotas indivisas de 7/12 de su padre Carlos y 5/12 de su madre Dª Mª Pilar.

La causa de adquisición de los 5/12 pertenecientes a la madre se remonta al año 1966 tal y como recoge la inscripción registral de la finca. El 12 de diciembre de 1966 el padre de los vendedores adquirió por herencia 1/6 del total de la finca, mientras que fueron comprados 5/6 para el consorcio conyugal. Una vez fallecido el esposo, las desavenencias entre los interesados en la herencia fueron resueltas por transacción judicial aprobada por dos autos de 5 de noviembre de 1998 y de 21 de junio de 1999. En su virtud, en lo que ahora interesa, se adjudicó a la viuda Sra. la mitad indivisa de las 5/6 partes que eran de titularidad del consorcio conyugal, mientras que la otra mitad de las 5/6 partes consorciales más el sexto que pertenecía al padre fue adjudicado a cuatro de los cinco hijos del matrimonio, en ambos casos por cuartas e iguales partes pro indiviso. Por tanto, consecuencia de tal adjudicación acordada entre todos los interesados, 5/12 quedaron de propiedad exclusiva de la viuda, mientras que 7/12 eran copropiedad de cuatro de sus hijos.

Fallecida Dª Pilar el día 5 de noviembre de 2003, y practicadas las correspondientes operaciones particionales en Escritura de 9 de marzo de 2004, finalmente tuvo lugar el día 23 de julio de 2010 la venta antes indicada por parte de los hermanos copropietarios a los ahora demandados, ajenos a la familiar.

TERCERO.- Según resulta de las fechas expuestas, es correcta la afirmación mantenida por la recurrente en su primer motivo de recurso, de no ser de aplicación al caso el artículo 34 de la Ley de Aragón 2/2003, de 12 de febrero, de Régimen Económico Matrimonial y Viudedad, que la sentencia recurrida cita en su Fundamento de Derecho Primero, ya que tal norma no estaba en vigor ni cuando tuvo lugar la compra de 5/6 cuotas de propiedad de la finca para el patrimonio consorcial, ni cuando se adjudicaron 5/12 cuotas indivisas a la esposa al liquidarse el consorcio.

Ahora bien, la no aplicación al supuesto del mencionado artículo 34 no debe dar lugar a la estimación sin más consideraciones de este motivo de recurso, por las dos razones que a continuación se tratan.

En primer lugar, de la lectura íntegra de la sentencia no resulta con claridad si la cita del artículo 34 es como norma por la que se resuelve la cuestión litigiosa o si se trata, como parece deducirse del conjunto de todo el texto, del colofón al devenir histórico doctrinal y jurisprudencial que recoge la resolución sobre si debe entenderse que la aportación de un bien al consorcio conyugal determina o no la pérdida de su permanencia en la familia a que antes venía perteneciendo.

En segundo lugar, aun siendo inaplicable el artículo 34 mencionado, la normativa que debe ser observada conduce en este caso a igual conclusión que la que pudiera haberse obtenido caso de vigencia del repetido artículo 34, esto es, que los dos negocios jurídicos efectuados, -el de aportación de cuotas indivisas del bien al patrimonio de la sociedad conyugal y el de la posterior adjudicación a la esposa como propietaria exclusiva de otras cuotas-, determinan la salida del bien de la línea troncal de que procedía.

CUARTO.- En concreto, y en relación a si debe considerarse que la aportación de un bien a la sociedad conyugal supone la pérdida de su permanencia en la familia a que había venido perteneciendo, no ha sido uniforme la interpretación judicial y doctrinal anterior a la entrada en vigor del mentado artículo 34, tal y como indica la sentencia recurrida. Al respecto debe considerarse, a favor del reconocimiento del abolorio, que en un caso como el presente de procedencia de la troncalidad de la línea del marido, en momentos históricos pasados la administración de la sociedad conyugal e incluso la facultad de disponer de sus bienes correspondía sólo al esposo. Así, en concreto, se recogía en el artículo 49 del Apéndice de Derecho Foral de Aragón de 1925, de aplicación en el momento en que, en este supuesto, tuvo lugar la aportación del bien a la sociedad conyugal mediante compraventa del 5/6 de la titularidad (el día 12 de diciembre de 1966).

Bajo esta óptica, y si consideráramos sólo el hecho de la aportación a la comunidad conyugal, parecería abonarse la doctrina de que, en el momento de que se trata, y con la legislación entonces aplicable, el hecho de que el marido comprara el bien para la sociedad, y no para sí, no afectaba a su carácter troncal, ya que, en cualquier caso, el mismo cónyuge que lo traía a la comunidad mediante compra seguía siendo su gestor, y tenía incluso facultades para disponer de él.

Ahora bien, en contra de tal posible anterior interpretación, debe valorarse que el devenir social y normativo modifican sobremanera el régimen de 1966 expuesto. Especialmente a partir de la entrada en vigor de la Constitución en 1978 y la sanción inviolable de ser el marido y la mujer iguales en derechos y obligaciones. Concreto reflejo normativo de esta orden constitucional fue la inclusión en el artículo 48 de la CA, mediante reforma operada por Ley de 3/1985, de 21 de mayo, de corresponder a ambos cónyuges conjuntamente o a uno de ellos con consentimiento del otro la administración y disposición de los bienes comunes, así como las decisiones que afecten a la economía familiar. Esta atribución a ambos cónyuges, conjuntamente, de la posibilidad de disposición de un bien impide ya dudar sobre si respecto de un bien adquirido para el consorcio tiene dominio directo o cualquier vinculación especial

demanial uno de los cónyuges, pues ambos quedan en régimen de igualdad respecto de la propiedad y posibles expectativas para con el bien. Debe, por tanto, concluirse que la aportación al consorcio conyugal de 5/6 de la propiedad de la finca objeto del litigio, y su mantenimiento en él a partir de la reforma del artículo 48 CA, implicó la extinción de propiedad exclusiva del esposo, y la pérdida para la finca de su condición de troncal.

Pero no sólo afectó a la finca y su posible naturaleza troncal la aportación al consorcio conyugal. Vigente el modificado artículo 48 CA es cuando en el caso presente tiene lugar un acto jurídico decisivo y añadido al previo ya dicho de compra de 5/6 para la comunidad conyugal: la liquidación de la sociedad conyugal, con adjudicación a la esposa, por acuerdo de todos los coherederos y ella misma, como bien de su exclusiva titularidad, de la mitad indivisa de tales 5/6. De manera que la esposa viuda devino finalmente propietaria única de 5/12 de la cotitularidad de la finca, siendo especialmente reseñable al respecto que esta atribución no cabe apreciar que fuera hecha por mera adjudicación automática de cuotas del consorcio que se disolvía, sino que fue expresamente acordada en la formación de una transacción judicial en que intervenían todos los interesados.

QUINTO.- Por tanto, a lo largo de la existencia de la comunidad conyugal hasta su disolución por fallecimiento del esposo, el día 5 de noviembre de 1992, no puede sostenerse el punto de partida de que pudiera parecer irrelevante para la condición de troncalidad de un bien que uno de sus titulares lo aporte a su sociedad conyugal. Por el contrario, desde el momento en que las facultades de administración y de disposición sobre el bien dejaron de ser exclusivas del cónyuge de cuya línea familiar procedía la titularidad del bien, terminó el carácter troncal de la finca.

Y sobre lo anterior se superpone además, en este caso, la adjudicación, ya como bien propio, una vez disuelta y liquidada la sociedad conyugal, de 5/12 partes a la esposa, por avenencia de los implicados en el negocio jurídico liquidatorio, quienes, como descendientes de la línea de procedencia troncal del bien, admitieron de modo expreso y paccionado que 5/12 de su titularidad pasaba a ser propiedad tan sólo de su madre, persona ajena a su familia troncal.

Todo lo cual conlleva que el primer motivo de recurso, que sostenía la naturaleza troncal del bien a pesar de las circunstancias expuestas de aportación a consorcio conyugal y adjudicación de cuotas a la viuda, debe ser desestimado.

SEXTO.- El segundo motivo de recurso de casación se enuncia en los siguientes términos literales: "*SEGUNDO.- Al amparo del artículo 1 Ley 4/2005, de 14 de junio, sobre la Casación Foral Aragonesa, con fundamento en el motivo único*

que dicho precepto autoriza, al infringir la sentencia por interpretación errónea, los artículos 149 de la Compilación y el artículo 212 de la Ley de Sucesiones, sin que exista doctrina del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, se solicita que se fije como jurisprudencia que un bien troncal de abolorio, a efectos del derecho de abolorio, no pierde su condición mientras una parte indivisa del bien pertenezca a un pariente troncal, por considerar que se mantiene el origen familiar".

Con carácter previo a resolver este motivo parece oportuno aclarar que la fijación jurisprudencial que solicita el recurrente, en términos que luego reproducirá en los motivos de casación tercero a quinto, tiene lugar, en lo que ahora interesa y conforme a lo ordenado por el artículo 1.6 del Código Civil, por la doctrina que de modo reiterado establezca el Tribunal Supremo (Tribunal Superior en nuestro caso) al interpretar y aplicar la ley.

Por tanto, carecen las partes de legitimación para interesar la fijación de jurisprudencia, y no está habilitado el Tribunal para establecerla en una sola sentencia, como si dictara una norma general y no una resolución judicial llamada constitucional y legalmente a resolver el caso concreto.

SÉPTIMO.- Respecto del fondo de la cuestión planteada en el segundo motivo, esto es, la pretensión de la parte de que se declare el mantenimiento de la condición de troncal de un bien, siempre y cuando una cuota indivisa de su propiedad corresponda a uno de los parientes, hay que considerar que la referencia del artículo 149 CA a la permanencia del bien en el tronco familiar se hace "al dominio pleno, útil o directo de inmuebles", de donde se colige que no basta con la pertenencia de una cuota indivisa de la propiedad a un familiar del futuro titular del derecho de abolorio para que se mantenga, sobre todo el bien, la expectativa del posible derecho de abolorio.

En consecuencia con tal regulación legal este motivo debe ser desestimado.

OCTAVO.- El tercer motivo de recurso de casación se fundamenta en la infracción de los artículos 37, 38 y 40 de la CA, por entender la parte recurrente que si el bien es adquirido por un cónyuge en parte a título gratuito y en parte a título oneroso, debe considerarse, a los efectos de la relación entre el patrimonio del propio cónyuge y el patrimonio consorcial, que su calificación ha de ser la de bien privativo, sin perjuicio del derecho de reembolso de la sociedad conyugal respecto del precio pagado.

Este motivo de recurso se aparta de la realidad fáctica que es enjuiciada. Como ya se ha expuesto con anterioridad, el bien no fue adquirido por D. Carlos en parte a título gratuito y en parte a título oneroso, sino que él devino titular, por

herencia, de 1/6 del inmueble. Los restantes cinco sextos fueron adquiridos mediante compraventa directamente por la sociedad conyugal. La exposición del motivo omite, además, que tales cinco sextas partes no pertenecieron siempre a la sociedad conyugal, puesto que su mitad, esto es, 5/12 del bien, llegaron a ser de titularidad exclusiva de Dª Pilar, una vez disuelta y liquidada la sociedad conyugal.

Partiendo de tales hechos realmente sucedidos, no existe apoyo legal alguno en los artículo 37, 38 o 40 CA que permita considerar que un bien en su totalidad tenga la condición de privativo de un cónyuge, una vez que han sido adquiridos a título oneroso para la sociedad conyugal 5/6 del bien.

NOVENO.- En el cuarto motivo de casación se entiende infringido por la sentencia recurrida el artículo 149 CA y 212 de la Ley de Aragón 1/1999, de 24 de febrero, de Sucesiones por causa de muerte ya que, según enuncia el motivo: "*CUARTO: Al amparo del artículo 1 de la Ley 4/2005, de 14 de junio, sobre la Casación Foral aragonesa, al infringir la sentencia, por interpretación errónea, los artículos 149 de la Compilación y el artículo 212 de la Ley de Sucesiones por causa de muerte, solicitando que fije como doctrina que en los casos en que se adquiera un bien troncal de abolorio, constante matrimonio y a título oneroso, y a los que no resulte de aplicación el art. 34 de la Ley de Régimen Económico Matrimonial y Viudedad por las normas del Derecho transitorio, se considerará que el mismo no ha salido de la familiar y por tanto, conserva su carácter troncal de abolorio, a efectos del derecho de abolorio.*"

Este motivo reitera lo expuesto en el primer motivo del recurso, resuelto con anterioridad en esta resolución. Como ya se ha tratado en los Fundamentos de Derecho Tercero y Cuarto precedentes, no siendo de aplicación el artículo 34 de la Ley de Aragón 2/2003, sino el artículo 149 CA en relación con el artículo 48 de la propia CA en la redacción dada por Ley 3/1985, las sucesivas transmisiones de que fue objeto el bien litigioso comportaron que sólo un sexto de su propiedad fuera propiedad de D. Carlos. Los restantes 5/6 fueron, primero, de titularidad de la comunidad conyugal formada con su esposa Dª Pilar, y luego 5/12 de propiedad exclusiva de Dª Pilar. En consecuencia con ello, como ya se concluyó al resolver el primer motivo de recurso, el bien salió del tronco familiar, y pasó a manos de extraños a la familia de procedencia, por lo que, independientemente de que fuera adquirido a título oneroso o gratuito, lo determinante es que el bien no permaneció como de titularidad de un familiar troncal. De modo que no se infringe norma alguna cuando se deniega, por tal motivo de no permanencia en la familia, el derecho de abolorio.

DÉCIMO.- El quinto y último motivo del recurso afirma la infracción de los artículos 149 CA y 212 de la Ley de la Ley de Aragón 1/1999, porque, en consideración del recurrente, el bien conserva su carácter troncal cuando pasa a formar parte de una comunidad de bienes formada por descendientes troncales y su progenitor no tronquero, por ser miembros todos la casa o familia, de modo que el bien no ha salido de la familia.

La situación expuesta en este motivo de recurso se aparta de la que realmente ocupa el retrayente dentro de la familia cuando ejercita su derecho de retracto, por lo que no cabe observar que respecto de él pueda darse la infracción normativa que denuncia.

Así, el inmueble salió del tronco familiar común del retrayente y de los familiares que dispusieron de él en 1966 y en 1998 cuando, respectivamente, pasa 1/6 a ser propiedad de D. Carlos, y cuando es adjudicado en sus 5/12 partes en exclusiva propiedad a Dª Pilar. Perdió así la condición de bien de abolorio para el retrayente, pues pasó a ser en parte propiedad de persona extraña a la familia troncal (Dª Pilar).

Si luego, por haber adquirido la titularidad total cuatro de los cinco hijos de D. Carlos y Dª Pilar, el bien puede entenderse o no de renovada troncalidad, es cuestión que podrá interesar, en su caso, a cualquiera de los cinco hijos, pues ellos son los que mantienen parentesco con todos los ascendientes que han sido titulares del bien. Pero no afecta al ahora recurrente, pues respecto de él la línea de troncalidad se perdió definitivamente cuando el bien pasó a ser propiedad de Dª Pilar, ajena a la familia troncal a que pertenecen su fallecido esposo D. Carlos y el propio retrayente.

En consecuencia, este motivo de recurso debe ser desestimado.”

0. OTRAS MATERIAS

*** Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 13 de abril de 2012. Baja voluntaria de socio cooperativista. Notificación. Cantidades debidas

"PRIMERO.- Motivos del recurso.

Entabló la actora acción dirigida a la declaración de su baja voluntaria en la sociedad cooperativa demandada y con referencia a la fecha de remisión de la declaración de baja, así como la exoneración de su obligación de contribuir en la proporción que le corresponde a las pérdidas derivadas de de dicho ejercicio económico. La demandada negó el carácter justificado de la baja y estimó que era injustificada por habérsele negado tal carácter por el Consejo Rector en acuerdo de fecha 28 de julio de 2009, por no llevar el tiempo mínimo de permanencia en la cooperativa y por haber incumplido el plazo de preaviso, igualmente formuló reconvención para exigir el cumplimiento de la adjudicación de la vivienda realizada por la cooperativa a favor de la socia y el pago de su coste por esta. La actora reconvenida negó la notificación en forma del acuerdo de denegación de la baja voluntaria como justificada en el plazo legal y consideró que la misma debía tenerse como justificada. En cuanto a la condena al cumplimento del acuerdo de adjudicación negó la existencia de un acuerdo de estas características.

La sentencia desestimó íntegramente la demanda y estimó íntegramente la reconvención.

Contra esta resolución se alza la actora fundada en la existencia de: a) Error en la valoración de la prueba, por estimar que no consta acreditada la notificación a la actora del acuerdo del Consejo Rector de la demandada notificando la baja. b) Infracción del art. 17.2 de la Ley 27/1999 de Cooperativas, de aplicación supletoria a la Ley de Cooperativas de Aragón, por lo que la baja ha de ser calificada como voluntaria y justificada. c) Considera que, conforme al art. 55. de la Ley de Cooperativas de Aragón, las entregas de los socios para la adquisición de las viviendas no ingresan en el capital social, que el negocio de adjudicación es un negocio traslativo que determina la adquisición del propiedad o los derechos que la cooperativa establezca sobre la vivienda construida por esta y que en el presente caso no existe un negocio de adjudicación por cualquier título y que, por ello, a lo sumo, conforme a la doctrina del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Sala de lo Civil y Penal),

solo podría condenarse a la socia actora al pago de las cantidades a que se hubiera obligado mientras era socia de la cooperativa.

La demandada mantiene que el cese de la condición de socio fue notificado y que, en definitiva, existe un acuerdo de adjudicación de una concreta vivienda, un negocio entre sociedad y socio que ha de ser cumplido, y entregadas las cantidades fijadas en la pericial aportada como coste de la compra del suelo y costes de construcción de la vivienda adjudicada.

SEGUNDO.- Error en la valoración de la prueba.

Mantiene la cooperativa demandada que el Consejo Rector acordó la denegación de la baja justificada a la actora y a otros y que tal acuerdo fue notificado; la demandada lo niega.

Si bien es cierto que la demandada llamó a juicio como testigos a varios miembros del Consejo Rector de la Cooperativa al tiempo de los hechos que mantuvieron que el acuerdo denegatorio de la baja existía, lo cierto es que no consta fehacientemente su notificación a la socia actora, que niega tal hecho. Por tanto, siendo una carga de la prueba que incumbe a la cooperativa la notificación del mismo, la misma no ha levantado tal carga, sin que pueda reputarse transcendente a esos efectos la notificación a la actora el 20 de octubre de 2009 de la imposición de una sanción por impago de cuotas. Por tanto, resulta acreditado el error en la valoración de la prueba denunciado.

TERCERO.- Infracción del art. 17.2 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas.

Sentado la falta de prueba del hecho anterior, es reiterada la jurisprudencia dictada por esta Sala sobre la aplicación, por exigencia de la Disposición Final Primera de la Ley 9/1998 de cooperativa de Aragón, que establece la aplicación supletoria de la Ley General de Cooperativas, del art. 17.2 de la Ley 27/1999 estatal, interpretada en el sentido de estimar que la misma impone a la cooperativa la necesidad de notificar el acuerdo denegatorio de la baja a los socios afectados en el plazo de tres meses so pena o sanción de considerar la baja como justificada (sentencias de esta Sala de 27 de diciembre de 2010 y 17 de mayo de 2011), la primera de las misma dictada en un supuesto sustancialmente igual con la misma cooperativa). Por tanto, este motivo de recurso habrá de ser estimado y, por ello, la baja voluntaria se reputa justificada si bien, ante la falta de preaviso exigido por los estatutos (tres meses, art. 11.1) deberá tenerse como fecha de baja la de 29 de septiembre de 2009 conforme a lo previsto por el art. 22.6 de los estatutos de la cooperativa que remite como fecha de efecto del reembolso de aportaciones “al término del plazo de preaviso”, con estimación parcial del recurso, pues la solicitud se ceñía a la

declaración como fecha de baja la de solicitud de la misma (29 de junio de 2009).

Respecto al hecho de que se solicita la exención de su obligación de contribuir a las pérdidas del ejercicio de 2009, nada se dice de los anteriores, determina que, tanto por haber transcurrido el plazo fijado en el art. 51.2 de la Ley de Cooperativas estatal, que fija un término preclusivo para la reclamación ya superado, tres meses desde la aprobación de las cuentas del ejercicio en que produjo la baja, como ante la falta de pérdidas en dicho periodo y sin entrar en los anteriores en los que parece que sí las hubo, tal pretensión ha de ser estimada.

La estimación del recurso por este motivo, exime a la Sala del examen de la existencia de los demás hechos alegados por las partes sobre la existencia de transcurso del plazo mínimo de permanencia y otros extremos fácticos alegados por las partes.

CUARTO.- Consecuencias de la baja respecto a las aportaciones para la compra de la vivienda.

Planteado el debate en los términos invocados, el art. 55.2 de la Ley de Cooperativa de Aragón considera las aportaciones para la compra de la vivienda como no integrantes del capital social y el art. 84.5 dice que la propiedad o uso de la vivienda construida por la cooperativa "podrán ser adjudicados a los socios mediante cualquier título legal".

Mantiene la actora que no hubo título o, más propiamente, negocio de adjudicación y que, por ello, a lo sumo la actora deberá responder de las cantidades a que se comprometió cuando era socio, pero nunca a aquellas impuestas por la cooperativa cuando dejó de serlo. La demandada mantiene que existió un previo negocio de adjudicación en virtud del cual ya la actora avaló la parte del préstamo correspondiente a la responsabilidad hipotecaria contraída por una determinada vivienda con ocasión del otorgamiento de un crédito hipotecario a la cooperativa en escrituras pública de fecha 6 de agosto de 2007, lo que implicaba un claro reconocimiento de una previa adjudicación.

El examen de las actuaciones muestra que con fecha 14 de abril de 2009 la Asamblea General de la cooperativa adoptó un acuerdo que no consta impugnado para la aportación de determinadas cantidades en concepto de derramas para la financiación de la construcción de las viviendas, el mismo no consta en qué grado fue objeto de cumplimiento, aunque parece que se modificó siquiera parcialmente por el acuerdo de fecha 26 de mayo de 2010 en el que los integrantes de otra promoción venían a financiar parcialmente a los de la

promoción de la actora ante la existencia de numerosas bajas en esta tras la constitución e la misma.

En todo caso, en cuanto negocio traslativo de atribución patrimonial no consta existiese propiamente una adjudicación antes de la baja de la socia actora en la cooperativa, ni siquiera consta la existencia de una adjudicación provisional por la Asamblea General limitada a los meros efectos internos en el ámbito cooperativo. De otra parte, este acuerdo inicial podía ser modificado por otro posterior a la vista de un cambio de las circunstancias (cambios en el proyecto técnico, razones económicas, etc.). Por ello, se estima que conforma a la doctrina del Tribunal Superior de Justicia de Aragón plasmada en la sentencia de fecha 22 de junio de 2011 "-de acuerdo con las disposiciones contenidas en el *artículo 20 de la Ley 9/1998 de 22 de diciembre de Cooperativas de Aragón*, el socio estaba obligado a cumplir los acuerdos adoptados por los órganos de gobierno, a efectuar el desembolso de las aportaciones comprometidas, y a cumplir los demás deberes impuestos por los estatutos. Y por imperativo de lo dispuesto en los *arts. 8. 2 y 32.2*de los Estatutos aportados, como se ha expuesto antes, por el propio demandado, éste estaba obligado a cumplir los acuerdos de la asamblea, estando acreditado que en que se acordaron las derramas correspondientes a la cantidad aquí reclamada es de fecha anterior a la alegada pérdida de la condición de socio. Estaba asimismo obligado *(artículo 8.3* de los estatutos) a participar en las actividades corporativizadas desarrolladas por la cooperativa, en función de los proyectos de construcción promovidos, aportando con esta finalidad las cantidades económicas en la proporción que le correspondía. Y así debió establecerse en la sentencia, con la consiguiente condena al pago de lo reclamado. Y -hemos de insistir en ello- las obligaciones contraídas durante su permanencia como socio en la cooperativa no quedan extinguidas por el hecho de perderse tal condición. Ni siquiera puede obtener el reintegro de lo ya entregado hasta que no entre un nuevo socio ocupando su lugar (como el propio recurrido reconoce en el escrito de oposición al recurso de casación) tal como establece el *art. 22.7* de los Estatutos sociales, en consonancia con la previsión del *art. 89.5 de la Ley 27/1999* antes citada".

En consecuencia el recurso ha de ser parcialmente estimado con la precisión de que la condena al pago de las cantidades se circunscribirá a aquellas cantidades que acordadas cuando la actora era socia de la cooperativa estén vencidas y sean exigibles a la fecha de la demanda.

Parece que, conforme a la escritura pública de 14 de abril de 2009 debería ser la de 18.000 euros, vencida toda ella en diciembre de 2009 (6.000 en junio, 6.000 en octubre y otros 6.000 en diciembre), si bien la escritura de 26 de marzo de 2010 parece matizar dicha suma en cuanto se impone unos

compromisos a cada uno de los socios de la fase “San Juan” de unos 5.100 euros, con la precisión de que “la diferencia entre lo aportado de más por los socios de la fase “Moreras” para este fin y lo que realmente se prevé que haga falta será destinado al coste de su vivienda”. Por ello, parece más realista y práctico la condena a la actora al abono de las cantidades debidas en virtud de acuerdos asamblearios vencidas y exigibles a la fecha de la demanda que se fijen en ejecución de sentencia que no pueden rebasar la suma de 18.000 euros la impuesta por el acuerdo de la Asamblea General de la demandada de 17 de abril de 2009.

Por tanto, el recurso ha de ser parcialmente estimado también en este extremo.”

***** Auto del Tribunal Superior de Justicia de 4 de julio de 2012. Incompetencia funcional del TSJA para conocer de recurso extraordinario por infracción procesal**

"PRIMERO.- El demandante y apelante interpuso recurso extraordinario por infracción procesal al amparo del apartado 4º del número 1 del artículo 469 LEC, contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 11 de abril de 2.012 que había desestimado su recurso de apelación contra la sentencia de 8 de septiembre de 2.011 del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Zaragoza, en procedimiento de modificación de medidas definitivas de divorcio relativas a pensiones de alimentos de los hijos. El recurrente consideraba competente a esta Sala en virtud de lo dispuesto en el artículo 468 LEC y no interponía recurso de casación.

Puestas de manifiesto las posibles causas de inadmisión, ha alegado el recurrente que en la interposición del recurso siguió los criterios sentados por esta Sala en su sentencia de 11 de enero de 2.012 (recurso 23/2011). Tal alegación carece de fundamento pues, con independencia de la incorrecta cita del precepto procesal a cuyo amparo se interponía aquel recurso por infracción procesal, en el mismo habían sido interpuestos simultáneamente recurso de casación por infracción de normas civiles aragonesas y extraordinario por infracción procesal por error en la valoración de la prueba.

Por el contrario, en el presente supuesto únicamente fue interpuesto recurso extraordinario por infracción procesal, y en el motivo único del mismo se alegó infracción del artículo 82 del Código del Derecho Foral de Aragón, por infracción del principio de proporcionalidad en la fijación de la pensión de alimentos, existiendo error patente, arbitrariedad e irracionalidad en la valoración de la prueba.

SEGUNDO.- Conforme a lo dispuesto en la Disposición Final 16ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil: *"1. En tanto no se confiera a los Tribunales Superiores de Justicia la competencia para conocer del recurso extraordinario por infracción procesal, dicho recurso procederá, por los motivos previstos en el art. 469, respecto de las resoluciones que sean susceptibles de recurso de casación conforme a lo dispuesto en el art. 477.*

Para la interposición y resolución del recurso extraordinario por infracción procesal se seguirán las siguientes reglas:

1ª Será competente para conocer del recurso extraordinario por infracción procesal la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, pero en los casos en que la competencia para el recurso de casación corresponde a las Salas de

lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, las resoluciones recurridas podrán también impugnarse por los motivos previstos en el art. 469 de la presente Ley."

La regla 3ª de este apartado exige que, cuando se pretenda recurrir una resolución por infracción procesal y en casación, se interpongan ambos recursos en un mismo escrito.

Como se ha dicho, el recurrente tan solo ha presentado recurso extraordinario por infracción procesal por error patente, arbitrariedad e irracionalidad en la valoración de la prueba, pero con sustento en un precepto sustantivo (artículo 82 CDFA) que, en realidad, pretendía una valoración de la prueba distinta, sin demostración de que la efectuada en la sentencia recurrida hubiera sido efectivamente irracional, arbitraria o absurda.

TERCERO.- Dado que, por el momento, la atribución de esa competencia general a esta Sala para el conocimiento de esta clase de recursos no se ha producido, y no es de aplicación el artículo 468 LEC según lo dispuesto en el apartado 2 de la citada Disposición Final Decimosexta, la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de Aragón carece de competencia funcional para conocer del presente recurso extraordinario por infracción procesal, por lo que procede declararlo así. Y, en atención a esa falta de competencia, no puede este Tribunal decidir sobre la admisibilidad del recurso, pues será cuestión a resolver por el Tribunal competente.

CUARTO.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: *"1. No serán admitidos a trámite los recursos dirigidos a un tribunal que carezca de competencia funcional para conocer de los mismos. No obstante lo anterior, si admitido un recurso, el tribunal al que se haya dirigido entiende que no tiene competencia funcional para conocer del mismo, dictará auto absteniéndose de conocer previa audiencia de las partes personadas por plazo común de diez días. 2. Notificado el auto a que se refiere el apartado anterior, los litigantes dispondrán de un plazo de cinco días para la correcta interposición o anuncio del recurso, que se añadirán al plazo legalmente previsto para dichos trámites. Si sobrepasaren el tiempo resultante sin recurrir en forma, quedará firme la resolución de que se trate*".

Por ello, debe esta Sala abstenerse de conocer el presente recurso, por falta de competencia funcional, al ser competente para ello la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (artículo 56.1º LOPJ). Al haber ya sido interpuesto el recurso procede, conforme a lo dispuesto en el citado artículo 62 LEC, abstenerse de conocer disponiendo la parte recurrente del plazo de cinco días para la correcta interposición del recurso."

***** Auto del Tribunal Superior de Justicia de 12 de julio de 2012. Incompetencia funcional del TSJA para conocer de recurso extraordinario por infracción procesal**

"PRIMERO.- El demandante y apelante interpuso únicamente recurso extraordinario por infracción procesal al amparo del artículo 469 en relación con lo dispuesto en el art. 477.2, ambos de la LEC, contra la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Zaragoza de fecha 15 de noviembre de 2011, dictada en el recurso de apelación 349/2011, la cual desestimó el expresado recurso y confirmó la de primera instancia, de fecha 25 de abril de 2011, recaída en los autos de modificación de medidas nº 1156/2010 del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Zaragoza.

Por providencia de fecha 20 de junio se acordó oír a las partes por diez días sobre la competencia de esta Sala para conocer del recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto, a la vista de lo establecido en la Disposición final decimosexta de la Ley de Enjuiciamiento Civil, conforme a la cual correspondería al Tribunal Supremo, Sala Primera, la competencia para el conocimiento de estos recursos, al no haberse formulado simultáneamente recurso de casación de la competencia de esta Sala.

SEGUNDO.- Conforme a lo dispuesto en la Disposición Final 16ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil: *"1. En tanto no se confiera a los Tribunales Superiores de Justicia la competencia para conocer del recurso extraordinario por infracción procesal, dicho recurso procederá, por los motivos previstos en el art. 469, respecto de las resoluciones que sean susceptibles de recurso de casación conforme a lo dispuesto en el art. 477.*

Para la interposición y resolución del recurso extraordinario por infracción procesal se seguirán las siguientes reglas:

1ª Será competente para conocer del recurso extraordinario por infracción procesal la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, pero en los casos en que la competencia para el recurso de casación corresponde a las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, las resoluciones recurridas podrán también impugnarse por los motivos previstos en el art. 469 de la presente Ley."

La regla 3ª de este apartado exige que cuando se pretenda recurrir una resolución por infracción procesal y en casación, se interpongan ambos recursos en un mismo escrito.

Como ya se ha dicho, el recurrente solo ha presentado recurso extraordinario por infracción procesal fundando el mismo, en primer lugar, en la existencia de una posible causa de nulidad por haber permitido el Juzgado que la demandada no se sometiera a la mediación familiar, lo que habría causado indefensión a la parte, y en segundo término, por no haberse tenido en cuenta ninguna de las pruebas aportadas por el actor, sino únicamente el informe psicosocial que resulta, a juicio del recurrente, insuficiente y erróneo.

TERCERO.- Dado que, por el momento, la atribución de esa competencia general a esta Sala para el conocimiento de esta clase de recursos no se ha producido, y no es de aplicación el artículo 468 LEC según lo dispuesto en el apartado 2 de la citada Disposición Final Decimosexta, la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de Aragón carece de competencia funcional para conocer del presente recurso extraordinario por infracción procesal, por lo que procede declararlo así. Y, en atención a esa falta de competencia, no puede este Tribunal decidir sobre la admisibilidad del recurso, pues será cuestión a resolver por el Tribunal competente.

CUARTO.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: *"1. No serán admitidos a trámite los recursos dirigidos a un tribunal que carezca de competencia funcional para conocer de los mismos. No obstante lo anterior, si admitido un recurso, el tribunal al que se haya dirigido entiende que no tiene competencia funcional para conocer del mismo, dictará auto absteniéndose de conocer previa audiencia de las partes personadas por plazo común de diez días. 2. Notificado el auto a que se refiere el apartado anterior, los litigantes dispondrán de un plazo de cinco días para la correcta interposición o anuncio del recurso, que se añadirán al plazo legalmente previsto para dichos trámites. Si sobrepasaren el tiempo resultante sin recurrir en forma, quedará firme la resolución de que se trate"*.

Por ello, debe esta Sala abstenerse de conocer el presente recurso, por falta de competencia funcional, al ser competente para ello la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (artículo 56.1º LOPJ). Al haber ya sido interpuesto el recurso procede, conforme a lo dispuesto en el citado artículo 62 LEC, abstenerse de conocer disponiendo la parte recurrente del plazo de cinco días para la correcta interposición del recurso.

QUINTO.- Procede acordar la devolución del aval prestado por la parte recurrente en fecha 3 de mayo de 2012, habida cuenta de que por auto de 4 de junio de este año le fue reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, con la extensión prevista en los artículos 6 y 7 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, y la consiguiente exención de pago de depósitos para recurrir –art. 6.5 de la Ley-."

***** Auto del Tribunal Superior de Justicia de 19 de julio de 2012. Admisión de recurso de casación**

"PRIMERO.- En el trámite de admisión del recurso de casación la Sala debe examinar su competencia en primer lugar, pronunciándose seguidamente, si se considerase competente, sobre la admisibilidad del mismo.

Por lo que se refiere al primer extremo, no ofrece duda la competencia de este órgano jurisdiccional para conocer del recurso de casación, según lo dispuesto en el artículo 73.1.a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial y lo establecido en el artículo 478, núm. 1, párrafo segundo, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y en el artículo 1 de la Ley 4/2005 de las Cortes de Aragón, de 14 de junio, sobre la casación foral aragonesa, conforme a los cuales corresponde a esta Sala conocer de los recursos de casación que procedan contra las resoluciones de los tribunales civiles con sede en la Comunidad Autónoma, siempre que el recurso se funde, exclusivamente o junto a otros motivos, en infracción de las normas del Derecho civil aragonés.

Examinado el recurso, la parte recurrente lo interpuso *"al amparo de los artículos 466 y 469 de la LEC...a tenor de lo dispuesto por los artículos 477.2.2º y 3 y 479 de la Ley de Enjuiciamiento Civil"*. Articula los motivos del recurso *"en relación"* con los artículos 80.2, 76.3 apartado a) y b), y artículo 81.3 y 4 del CDFA.

Conforme a lo dispuesto en el apartado 2 de la Disposición Final Decimosexta de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el artículo 466 no es de aplicación en tanto las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores carezcan de competencia para conocer, con carácter general, del recurso extraordinario por infracción procesal, que en este caso no se ha interpuesto. Por lo demás, fundándose el recurso de casación en infracción de normas del Código del Derecho Foral de Aragón (CDFA), es competente esta Sala para su conocimiento.

SEGUNDO.- En cuanto a la admisibilidad del recurso, en la providencia de la Sala de 21 de junio de 2.012 se puso de manifiesto, en primer lugar, que la parte recurrente no concretaba la vía de acceso al recurso, si la cuantía o el interés casacional. Tras el traslado concedido aclara que la vía de acceso es la del interés casacional del artículo 477.2.3º en relación con el artículo 477.3 de la LEC. Alude a que presenta interés casacional porque la sentencia recurrida se opone a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo o resuelve puntos y cuestiones sobre los que pueda existir jurisprudencia contradictoria, cuando se aplican además normas que no llevan más de cinco años en vigor. Hubiera sido deseable

que, atendiendo a lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, previsto para el supuesto específico de los recursos que son competencia de los Tribunales Superiores de Justicia, puesto en relación con el artículo 3 de la Ley 4/2005 sobre la casación foral aragonesa, se señalara cuál de los tres apartados de la última norma ampara el interés casacional alegado.

No obstante, dado que en los motivos del recurso se alega doctrina de la Sala en relación con las normas que se citan del Derecho aragonés, y que se trata de normas con menos de cinco años en vigor, se entiende que concurre interés casacional.

TERCERO.- Se indicaba también en la providencia de 21 de junio de 2.012 que en el primer motivo del recurso se alegaba conjuntamente el artículo 477.2.3º LEC con el artículo 80.2 del CDFA, y se señalaba que el indicado precepto procesal no es motivo del recurso, como el artículo 477.1 LEC exige. A este respecto hemos dicho en otras resoluciones, como en el Auto de 22 de abril de 2.009, recurso de casación 1/2009, lo siguiente:

Dispone el artículo 477.1 de la Ley de Enjuiciamiento civil que el recurso de casación habrá de fundarse, ***como motivo único****, en la infracción de normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso. Por lo tanto, cuando el número 2 del mismo artículo establece que serán recurribles las sentencias dictadas en segunda instancia por las Audiencias Provinciales en los casos que a continuación señala, como las de una determinada cuantía (apartado 2º), o cuando la resolución del recurso presente interés casacional (apartado 3º), está señalando presupuestos del recurso de forma que si se cumple cualquiera de ellos la sentencia será recurrible, pero el recurso siempre deberá fundarse,* ***como motivo único****, en la infracción de normas aplicables para resolver las cuestiones. Basta, por lo tanto, que la cuantía del asunto supere la legalmente establecida, que en la casación foral aragonesa es de 3.000 euros (artículo 2.1 de la Ley 4/2005), o que presente interés casacional, para que el recurso pueda ser admitido si se cumplen los demás requisitos. El interés casacional no es, por lo tanto, el motivo del recurso sino un presupuesto previo para la recurribilidad de la sentencia, y la demostración del interés casacional mediante el contraste de las sentencias no puede pretender asegurar el buen fin del recurso sino garantizar su admisibilidad en el caso de que se acredite tal interés. Pero lo que debe fundar el recurso es la infracción de las normas aplicables.*

Debe entenderse que la parte recurrente alega, como motivo del primero de los indicados en su recurso, la infracción del artículo 80.2 del CDFA, en el que deberá centrarse el examen de la Sala.

CUARTO.- Por último, en la providencia de 21 de junio de 2.012 poníamos de manifiesto que en el motivo primero del escrito de recurso se alegaba infracción del artículo 80.2 CDFA con cita de otros artículos como el 80, 82, 83 y Subsección 5 del Código, sin concreta relación con la infracción que se invocaba.

La parte recurrente indica ahora que no se invocan otros artículos y que en su escrito se refería al Preámbulo de la Ley, para valorar y aplicar el criterio del legislador. Siendo así, el motivo del recurso queda circunscrito a la alegada infracción del artículo 80.2 del CDFA, inadmitiéndose en cuanto al resto de las alegaciones de ese primer motivo.

QUINTO.- Así pues, se declara la competencia de esta Sala para el conocimiento del recurso interpuesto, que se admite en cuanto al primer motivo limitado a la infracción del artículo 80.2 del CDFA, y se inadmite en cuanto al resto del los preceptos que en el mismo se citan, y se admite también respecto a los motivos segundo y tercero, que no habían sido cuestionados, con los efectos a ello inherentes previstos en el artículo 485 de la Ley de Enjuiciamiento Civil."

***** Auto del Tribunal Superior de Justicia de 26 de julio de 2012. Admisión parcial de recurso de casación**

"PRIMERO.- En el trámite de admisión del recurso de casación la Sala debe examinar en primer lugar su competencia pronunciándose seguidamente, si se considerase competente, sobre la admisibilidad del mismo.

La competencia para el conocimiento del presente recurso viene atribuida a esta Sala en virtud de lo dispuesto en el artículo 73.1.a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 478.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por haber sido fundado en infracción de normas del Derecho civil aragonés.

SEGUNDO.- En cuanto a la admisibilidad del segundo de los motivos, alega la parte como infringido el art. 218.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por considerar la recurrente que el razonamiento de la sentencia de la Audiencia Provincial parte de una lectura errónea de la prueba pericial, y que la argumentación se apoya en premisas falsas o erróneas al concluir que existió una continua intervención del menor entre 2006 y 2011.

El Tribunal Supremo ha mantenido en numerosas resoluciones (por todas, auto de 30 de noviembre de 2010), que el deber procesal no exige un razonamiento exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que la parte pueda tener, de forma que no puede identificarse el deber de motivación con motivación satisfactoria para la parte.

En la sentencia recurrida se razonan los distintos pronunciamientos objeto del recurso de apelación, en ocasiones con remisión al relato fáctico de la sentencia de primera instancia, si bien en un sentido distinto al postulado por la parte. En este motivo del recurso lo que la parte reprocha en realidad es la valoración de la prueba hecha en la sentencia recurrida, y del examen de dicha resolución se advierte que la misma no resulta arbitraria, ilógica o absurda, dada la referencia que se contiene a los pormenores detallados en la de primera instancia, en los que constan numerosas alusiones a la intervención y pactos alcanzados por la recurrente con los servicios sociales para la mejora de la atención prestada al menor.

En suma, y por las razones expuestas, procede inadmitir este segundo motivo del recurso, por concurrir la causa de inadmisión prevista en el artículo 473.2.2º de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

TERCERO.- Los motivos primero, tercero y cuarto se refieren, respectivamente, a la interpretación y aplicación errónea del Derecho aragonés (Código del Derecho Foral de Aragón y Ley aragonesa 2/2010) por no ostentar ni demandante, ni demandada la vecindad civil aragonesa, resultando de aplicación el Derecho común; a la infracción del artículo 80.2 del CDFA, caso de entender aplicable el Derecho Foral de Aragón, por inaplicación del criterio preferente de custodia compartida; y finalmente, a la inaplicación del citado criterio preferente de custodia compartida, con infracción del art. 80.3 del CDFA, habiéndose dictado sentencia antes de que se incorporara uno de los informes recabados para el correcto enjuiciamiento de la causa. Dado el fundamento de estos tres motivos, procede admitir los mismos conforme al artículo 484 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con los efectos a ello inherentes previstos en el artículo 485 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Vistos los artículos citados y los demás de general y pertinente aplicación.

La Sala ACUERDA

Primero.- Declarar la competencia de esta Sala de lo civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón para el conocimiento del presente recurso de casación.

Segundo.- No admitir el motivo segundo del recurso de casación formulado por la representación de doña Asri S. y admitir los motivos primero, tercero y cuarto de ese mismo recurso.

Tercero.- Dar el traslado establecido en el art. 485 de la Ley de Enjuiciamiento civil a las partes recurridas, para que formalicen su oposición por escrito, respecto a los tres motivos admitidos, en el plazo de veinte días.

Contra la presente resolución no cabe recurso alguno.”

***** Auto del Tribunal Superior de Justicia de 26 de julio de 2012. Admisión parcial de recurso de casación**

"**PRIMERO.-** En el trámite de admisión del recurso de casación la Sala debe examinar, en primer lugar, su competencia, pronunciándose seguidamente, si se considerase competente, sobre la admisibilidad del mismo.

Por lo que se refiere al primer extremo, no ofrece duda la competencia de este órgano jurisdiccional para conocer del recurso de casación, según lo dispuesto en el artículo 73.1.a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial y lo establecido en el artículo 478, núm. 1, párrafo segundo, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y en el artículo 1 de la Ley 4/2005 de las Cortes de Aragón, de 14 de junio, sobre la casación foral aragonesa, conforme a los cuales corresponde a esta Sala conocer de los recursos de casación que procedan contra las resoluciones de los tribunales civiles con sede en la Comunidad Autónoma, siempre que el recurso se funde, exclusivamente o junto a otros motivos, en infracción de las normas del Derecho civil aragonés.

Examinado el recurso, la parte recurrente lo interpuso alegando en dos motivos infracción de los artículos 79.5 y 82 del Código del Derecho Foral de Aragón (CDFA) por lo que, conforme a lo dispuesto en los preceptos citados en el párrafo anterior, es competente esta Sala para su conocimiento.

SEGUNDO.- En cuanto a la admisibilidad del recurso, en la providencia de la Sala de 28 de junio de 2.012 se puso de manifiesto, en primer lugar, que la parte recurrente no concretaba la vía de acceso al recurso, de las dos previstas en el artículo 2 de la Ley 4/2005, sobre la casación foral aragonesa, si la cuantía o el interés casacional. Tras el traslado concedido aclara que la vía de acceso es la del interés casacional del apartado 2 del artículo 2 citado, al aplicar la sentencia recurrida los preceptos del CDFA señalados como infringidos en los motivos del recurso, con menos de cinco años en vigor. El Ministerio Fiscal entiende en su escrito de alegaciones que el interés casacional es el alegado al referirse al CDFA como normativa infringida con menos de cinco años de vigor, y al artículo 477.3 de la LEC.

Dado que, efectivamente, se trata de normas del Derecho civil aragonés con menos de cinco años en vigor, se entiende que concurre interés casacional.

TERCERO.- Se indicaba también en la providencia de 28 de junio de 2.012 que en el primer motivo del recurso, para fundar el recurrente la infracción del artículo 79.5 del CDFA, que autoriza la modificación de las medidas aprobadas judicialmente, daba por supuesta la concurrencia de las circunstancias fácticas

relevantes para ello, lo que podía no corresponder con los hechos acreditados en la sentencia.

El Ministerio Fiscal estima en su escrito de alegaciones que el motivo debe inadmitirse porque el artículo 79.5 del CDFA tiene naturaleza procesal más que sustantiva, por lo que no es motivo del recurso en los términos que exige el artículo 477.1 LEC. Por el contrario, entiende la Sala que el artículo 79.5, al prever la posibilidad de modificación de medidas judiciales adoptadas judicialmente en el caso de concurrir causas o circunstancias relevantes, es una norma completa de carácter hermenéutico, que establece una consecuencia jurídica (la modificación de las medidas) si se da el presupuesto de hecho (la concurrencia de causas o circunstancias relevantes), lo que exigirá la comprobación de la existencia de tales circunstancias para llegar a la conclusión de modificar, o no, las medidas anteriormente adoptadas, pero no se trata de una norma de procedimiento sino de interpretación, que permite su revisión casacional si efectivamente se produjera una desviación en el razonamiento lógico que exige.

La parte recurrente contesta en sus alegaciones que no pretende una revisión de la prueba sino que se compruebe, con base en la misma, si se ha producido el cambio de circunstancias que exigiría la revisión de la medida. En consecuencia, aceptando que no se puede proceder a una revisión de la prueba, procede la admisión del recurso en cuanto permita la comprobación de la adecuación de la fundamentación de la sentencia a la norma indicada.

CUARTO.- Así pues, se declara la competencia de esta Sala para el conocimiento del recurso interpuesto, que se admite limitado en cuanto al primer motivo a la infracción del artículo 79.5 del CDFA en los términos indicados en el fundamento anterior, y se admite también respecto al motivo segundo, que no había sido cuestionado, con los efectos a ello inherentes previstos en el artículo 485 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

La Sala ACUERDA: Se declara la competencia de esta Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón para el conocimiento del presente recurso de casación, y se admite a trámite en los términos concretados en los fundamentos tercero y cuarto anteriores.

Dése traslado del escrito de interposición a la parte recurrida para que en el plazo de veinte días puedan formalizar escrito de oposición, si lo estimare pertinente.

Contra la presente resolución no cabe recurso alguno.”

***** Auto del Tribunal Superior de Justicia de 7 de septiembre de 2012. Inadmisión de recurso de casación**

"PRIMERO.- En el trámite de admisión del recurso de casación, la Sala debe examinar en primer lugar su competencia, pronunciándose seguidamente, si se considerase competente, sobre la admisibilidad del mismo. Por lo que se refiere al primer extremo, no ofrece duda la competencia de este órgano jurisdiccional, pues a tenor del artículo 478. 1 párrafo 2º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, corresponde a las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia conocer de los recursos de casación que procedan contra las resoluciones de los Tribunales civiles con sede en la Comunidad Autónoma, siempre que el recurso se funde, exclusivamente o junto a otros motivos, en infracción de las normas de Derecho civil, foral o especial propio de la Comunidad. Y, examinados ambos recursos vemos que, en el suscrito por la representación de D. Jesús S. R. se denuncia infracción del art. 80.2 del Código de Derecho Foral de Aragón. Y en el de Dª María del Mar T. G. se denuncia, entre otros, infracción del artículo 69 en relación con el 81.3 del mismo cuerpo legal.

SEGUNDO.- La sentencia, dictada en segunda instancia por la Audiencia Provincial de Zaragoza, es recurrible al ser de cuantía inestimable y de acuerdo con lo dispuesto en el art. 2.1 de la Ley 4/2005 de 14 de junio, sobre la Casación Foral Aragonesa.

TERCERO.- Por lo que hace al motivo invocado como fundamento del recurso de casación interpuesto por la representación de D. Jesús S. R., se observa que, a pesar de la invocación formal de precepto foral que afirma resulta vulnerado, su razonamiento gira en torno a la valoración de las pruebas, señaladamente la pericial, cuestionando asimismo la expresión contenida en la sentencia en el sentido de no entender probado el nacimiento de un nuevo hijo del recurrente con su actual pareja. Por tanto, tal como se apuntó en la providencia de fecha 21 de junio de los corrientes, y tal como ha considerado el Ministerio Fiscal en su escrito de alegaciones correspondiente, el motivo incurre en la causa de inadmisibilidad prevista en el art. 483.2.2º en relación con el 477.1 LEC, es decir, de interposición defectuosa por falta de técnica casacional. Esta, para ser correcta, y como esta Sala ha señalado reiteradamente, requiere plantear cuestiones jurídicas de un modo preciso y razonado, con respeto a los hechos de los que ha partido como probados la sentencia recurrida. Sin embargo, la parte, más bien que denunciar una verdadera infracción sustantiva parte de premisas que hubieran precisado la formulación de uno (o más, pues alude también a falta de motivación) motivos de infracción procesal para desvirtuar la base fáctica sustentadora de la decisión de instancia.

Recordaremos, además, que la jurisprudencia establece que "la valoración probatoria solo puede excepcionalmente tener acceso al recurso extraordinario por infracción procesal cuando por ser manifiestamente arbitraria e ilógica ésta no supera el test de la racionalidad constitucionalmente exigible para respetar el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24 CE y, en tal caso, habrá de plantearse a través del artículo 469.1.4º LEC como vulneración del artículo 24.1 CE por incurrirse en error de hecho manifiesto, irracionalidad y arbitrariedad" (STS de 29-7-2011 entre otras).

En consecuencia, y de acuerdo con lo interesado por el Ministerio Fiscal, debe inadmitirse el motivo.

CUARTO.- Se formula por la representación de Dª María del Mar T. G. recurso de infracción procesal y recurso de casación. Dentro del primero, articula un primer motivo al amparo de lo dispuesto en el artículo 469.4 (habrá que entender 469.1.4º) de la Ley de Enjuiciamiento Civil por infracción –así se dice textualmente en el escrito de recurso- del art. 96 del Código civil. En el desarrollo del motivo no alude a infracción procesal alguna ni a vulneración del art. 24 CE, sino al contenido del precepto sustantivo común indicado y jurisprudencia del Tribunal Supremo que lo interpreta, no llegando siquiera a afirmar que haya sido vulnerado por la Sala de instancia. En consecuencia, concurre la causa de inadmisibilidad prevista en el art. 473.2.1º en relación con el 469.1 de la LEC. Otro tanto cabe decir del motivo tercero, en el que denuncia infracción por inaplicación del art. 69 CDFA en relación con el 81.3 del mismo, y del motivo cuarto, también dentro de los de infracción procesal, y en el que denuncia *infracción por aplicación del art. 90 y 91 del Cc en relación con infracción del art. 217 LEC.*

En consecuencia, y de acuerdo también con lo pedido por el Ministerio Fiscal, deben inadmitirse dichos motivos.

QUINTO.- En el motivo segundo de los que como de infracción procesal se articulan, aduce la recurrente que se ha producido infracción por inaplicación el art. 217 de la LEC en relación con el art. 81.3 del CDFA. Lo que en el desarrollo del motivo viene a argüir es que el actor no ha levantado la carga de probar la necesidad de la limitación temporal fijada al uso de la vivienda, pero ello después de reproducir literalmente el contenido del citado artículo 81.3, que preceptúa que la atribución del uso de la vivienda familiar a uno de los progenitores debe tener una limitación temporal. Es, pues, manifiesta la falta de fundamento del motivo en cuestión, por lo que concurre la causa de inadmisibilidad prevista en el art. 473.2.2º LEC.

Por tanto, y de acuerdo con lo que propugna el Ministerio Fiscal, también se inadmitirá el motivo.

SEXTO.- En fin, el motivo de casación se funda en el interés casacional, cuando ello no es un motivo de recurso sino únicamente un presupuesto de recurribilidad de la sentencia. En todo caso, la lectura del motivo evidencia que su razón de ser está en que la parte entiende más conveniente a su interés la disposición del artículo 96 del Código civil, que no establece límites a la atribución del uso de la vivienda, que la contenida en el art. 81.3 del CDFA, pero ello no significa vulneración alguna de este último aunque –artificiosamente- se exprese que concurre la infracción de uno y otro precepto.

Por lo expuesto, también aquí hay causa de inadmisibilidad, en concreto la prevista en el art. 483.2.2º en relación con el art. 477.1 de la LEC, de conformidad asimismo con lo interesado por el Ministerio Fiscal.

En consecuencia y siendo inadmisibles todos los motivos ha de inadmitirse a trámite el recurso.”

2.2. Interpretación doctrinal

En este apartado damos noticia de los libros y artículos de los que hemos tenido conocimiento a lo largo del año 2012:

1. OBRAS GENERALES, MANUALES, PANORÁMICAS Y REVISTAS

A. MANUALES Y OBRAS GENERALES DE DERECHO ARAGONÉS

DELGADO ECHEVERRÍA, Jesús: *Manual de Derecho Civil Aragonés. Conforme al Código del Derecho Foral de Aragón*, 4ª edición, El Justicia de Aragón, con la colaboración de Ibercaja, Zaragoza, 2012, 735 págs.

PARRA LUCÁN, Mª Ángeles: "La familia en el Derecho civil de Aragón", en *Tratado de Derecho de la Familia*, vol. VII: *La familia en los distintos Derechos forales*, Aranzadi, Thomson Reuters, 2011, págs. 759-989.

SERRANO GARCÍA, José Antonio y BAYOD LÓPEZ, María del Carmen: *Guiones para el estudio del Derecho de Familia y Sucesiones en Aragón*. Ed. Kronos, Zaragoza, 2012, 284 págs.

B. PANORÁMICAS

Derecho civil foral aragonés. Guía didáctica. Edita el Gobierno de Aragón. Departamento de Presidencia y Justicia, 60 págs.

C. REVISTAS

Actas de los XXI Encuentros del Foro de Derecho Aragonés (Zaragoza-Teruel, 2011), El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2012, 319 pp.

2. MONOGRAFÍAS Y ARTÍCULOS

1. TEMAS COMUNES A TODOS LOS DERECHOS FORALES

1.4. LOS DERECHOS FORALES EN LA CONSTITUCIÓN Y LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA

BALLESTER I MUÑOZ, Santiago: "La Comisión de Codificación de Catalunya, una referencia autonómica y europea en materia de Derecho Privado", en *La notaría*, Nº. 3, 2011 , págs. 6-7.

DOMÍNGUEZ CALATAYUD, Vicente: "La competencia legislativa civil de la Generalitat", en *Revista crítica de derecho inmobiliario*, Año nº 87, Nº 727, 2011 , págs. 2505-2537.

1.6. PROBLEMAS DE DERECHO INTERREGIONAL. LA VECINDAD CIVIL

ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Santiago: "El Reglamento 4/2009/CE sobre obligaciones alimenticias: cuestiones escogidas", en *Diario La Ley*, Nº 7891, 2012.

FONT I SEGURA, Albert (ed.): *La aplicación del Derecho civil catalán en el marco plurilegislativo español y europeo*. Ed. Atelier, Barcelona, 2011, 160 págs.

HEREDIA CERVANTES, Iván: "El nuevo reglamento europeo sobre sucesiones", en *Diario La Ley*, Nº 7933, 2012.

PRATS ALBENTOSA, Lorenzo: "Ley aplicable a la sucesión «mortis causa» en la Unión Europea y creación del Certificado sucesorio europeo", en *Diario La Ley*, Nº 7929, 2012.

ZABALO ESCUDERO, María Elena: "Autonomía de la voluntad, vecindad civil y normas para resolver los conflictos de leyes internos", en *Diario La Ley*, Nº 7847, 2012.

4. LA COMPILACIÓN: ANTECEDENTES Y REFORMAS. OTRAS LEYES CIVILES ARAGONESAS

4.2. TEXTOS LEGALES

SERRANO GARCÍA, José Antonio: *Código del Derecho Foral de Aragón*. Editan: Gobierno de Aragón, El Justicia de Aragón y el Consejo de Colegios de Abogados de Aragón, Zaragoza, 2011, 516 págs.

4.3. AUTONOMÍA: CONSERVACIÓN, MODIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL DERECHO CIVIL

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, María: "Conservación, modificación y desarrollo del Derecho civil aragonés: de la Compilación al Código del Derecho foral de

Aragón de 2011", *Derecho Privado y Constitución*, núm. 25, 2011, págs. 175-227.

MOREU BALLONGA, José Luis: "La expansiva reforma legal (1999-2011) del Derecho civil aragonés y la reforma estatutaria aragonesa de 2007", en *Ius Fugit*, 16, 2009-2010, pp. 119-143.

SERRANO GARCÍA, José Antonio: "Derecho civil de Aragón: presente y futuro", en "VV.AA.: *¿Hacia dónde van los Derechos civiles autonómicos? El futuro de los Derechos civiles autonómicos.* Coordinadora: Laura Gázquez Serrano. Difusión Jurídica y Temas de Actualidad S.A., Madrid, 2011, págs. 27 a 90.

SERRANO GARCÍA, José Antonio: "La reforma aragonesa del Derecho civil patrimonial", *ADC*, tomo LXV, 2012, fasc. IV, pp. 1497-1549.

SERRANO GARCÍA, José Antonio: "El Código del Derecho Foral de Aragón", en *Actas de los XXI Encuentros del Foro de Derecho Aragonés* (Zaragoza-Teruel, 2011), El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2012, pp. 69-117.

SERRANO GARCÍA, José Antonio: "Elaboración y significado del Código del Derecho Foral de Aragón", en *Homenaje a Joquín Rams Albesa*, Dykinson, S.L., Madrid, 2012, págs. 277-300 (de las pruebas).

6. PERSONA Y FAMILIA

6.1. EN GENERAL

ARNAU RAVENTÓS, Lídia: "Sentencia TS de 21 de septiembre de 2011. Legitimación del tutor para interponer una acción de divorcio en representación del incapacitado", en *Cuadernos Civitas de jurisprudencia civil*, Nº 89, 2012, págs. 413-436.

CÁMARA LAPUENTE, Sergio: "*Trust* y patrimonios fiduciarios: acerca de sus posibles aplicaciones en el derecho de la persona, familia y sucesiones y su eventual regulación", en *Diario La Ley* núm. 7675, de 18 de julio de 2011, pp. 3-5.

CAPILLA RONCERO, Francisco: "Autonomía de la voluntad y Derecho de la persona; o la autonomía personal en el Derecho privado", en *Diario La Ley* núm. 7675, de 18 de julio de 2011, pp. 5-7.

CASTILLA CARTIEL, Begoña: "La mediación familiar en Aragón", en *Actas de los XXI Encuentros del Foro de Derecho Aragonés* (Zaragoza-Teruel, 2011), El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2012, pp. 45-52.

GUTIÉRREZ SANZ, Rosa: "La Ley de mediación familiar aragonesa", en *Actas de los XXI Encuentros del Foro de Derecho Aragonés* (Zaragoza-Teruel, 2011), El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2012, pp. 7-44.

LAHOZ POMAR, Carmen: "La mediación familiar en Aragón: competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón en la materia", en *Actas de los XXI Encuentros del Foro de Derecho Aragonés* (Zaragoza-Teruel, 2011), El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2012, pp. 53-66.

LÓPEZ SÁNCHEZ, Cristina: "Los derechos de las personas en el nuevo Registro Civil", en *Derecho privado y Constitución*, Nº 25, 2011, págs. 261-310.

MAGRO SERVER, Vicente: "La extinción de la pensión compensatoria por la razón de «vivir maritalmente con otra persona», la receptora de la misma", en *Actualidad Civil*, núm. 10, 2012.

PARRA LUCÁN, Mª Ángeles: "Autonomía de la voluntad y derecho de familia", en *Diario La Ley* núm. 7675, de 18 de julio de 2011, pp. 11-12.

RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, Mª Eugenia: *Las obligaciones de los cónyuges tras el divorcio o la separación. Hipoteca sobre la vivienda familiar, pensión alimenticia y pensión compensatoria*. Ed. Tecnos, Madrid, 2012, 90 págs.

TENA PIAZUELO, Isaac: "Ley aragonesa de mediación familiar..., la que faltaba", *Diario La Ley*, Nº 7626, Sección Doctrina, 10 Mayo, 2011.

6.2. EDAD

SANTOS MORÓN, María José: "Menores y derechos de la personalidad: La autonomía del menor", en *Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid*, Nº. 15, 2011, págs. 63-93

6.4. RELACIONES ENTRE ASCENDIENTES Y DESCENDIENTES

BELTRÁ CABELLO, Carlos: "Problemas surgidos en relación al uso de la vivienda conyugal tras la disolución del matrimonio", en *Diario La Ley*, núm. 7962, 2012

BERROCAL LANZAROT, Ana Isabel: "Los alimentos de los hijos mayores de edad y emancipados: a propósito del artículo 93.2 del Código Civil", en *Revista crítica de derecho inmobiliario*, Año nº 88, Nº 731, 2012 , págs. 1568-1612.

CALLIZO LÓPEZ, María Ángeles: "Breve análisis de los factores legales a ponderar por el/la juez al decidir sobre el régimen de guarda y custodia de los hijos en Aragón", *Revista Aequalitas* núm. 30, enero-junio 2012, págs. 19 a 33.

CAMPO IZQUIERDO, Ángel Luis: "Abuelos, parientes y allegados", en *Actualidad Civil*, núm. 19-20, 2012.

DUPLÁ MARTÍN, Teresa: "Hacia un nuevo modelo de filiación, de hecho, en las familias reconstituidas o ensambladas", en *Civitas et Iustitia. Facoltà di Dirittto Civile*. Atti del XIII Colloquio Giuridico Internazionale *La filiazione nella cultura giuridica europea* (Roma, 23-24 Aprile 2008), 08/VI/2, Alternan University Press, págs. 219-236.

DUPLÁ MARÍN, María Teresa: "La Regulación jurídica de las familias reconstituidas en Cataluña: del proyecto del libro 2º del 2006 a la Ley 25/2010, de 29 de julio, de Libro 2º del Código Civil de Cataluña", en *Revista jurídica de Catalunya*, Vol. 111, Nº 3, 2012, págs. 601-619.

FERNÁNDEZ HORTAL, Alicia: "¿Pueden los tests determinar la idoneidad de los progenitores en el tema de la guarda y custodia de los hijos?", en *Diario La Ley*, Nº 7947, 2012.

LÓPEZ FRÍAS, Ana María: "El derecho de uso "ex" artículo 96 del Código Civil ante la hipoteca y el embargo de la vivienda familiar", en *Revista crítica de derecho inmobiliario*, Año nº 88, Nº 729, 2012 , págs. 111-136.

MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, Nieves: "Sentencia TS de 14 de junio de 2011. Alimentos para hijos menores. Devengo de la prestación cuando se reclaman en proceso judicial por ruptura de relaciones entre progenitories. Aplicación del artículo 148.1 del Código Civil", en *Cuadernos Civitas de jurisprudencia civil*, Nº 89, 2012, págs. 153-172.

MARTOS CALABRÚS, María Angustias: "La no separación de los hermanos en la crisis matrimonial o de pareja y en otras circunstancias", en *Revista de derecho de familia: Doctrina, Jurisprudencia, Legislación*, Nº. 55, 2012, págs. 27-42

MATEO Y VILLA, Iñigo: "Estatuto del cónyuge del progenitor. Legislación europea", en *Revista de derecho de familia: Doctrina, Jurisprudencia, Legislación*, Nº. 52, 2011, págs. 81-94.

MORENO NAVARRETE, Miguel Ángel: "Sentencia TS de 10 de octubre de 2011. Atribución del uso de la vivienda familiar en residencia distinta a la de la convivencia familiar durante el matrimonio", en *Cuadernos Civitas de jurisprudencia civil*, Nº 89, 2012, págs. 463-476.

MORENO VELASCO, Víctor: "La atribución del uso de vivienda distinta de la familiar para garantizar la necesidad de vivienda del menor. La posible

contradicción con la doctrina casacional relativa a la limitación del uso de la vivienda familiar existiendo hijos menores", en *Diario La Ley*, Nº 7843, 2012.

NAVAS NAVARRO, Susana: "Menores, guarda compartida y plan de parentalidad (especial referencia al derecho catalán)", en *Revista de derecho de familia: Doctrina, Jurisprudencia, Legislación*, Nº. 54, 2012 , págs. 23-56.

PINTÓ ANDRADE, Cristóbal: "La atribución judicial de la vivienda familiar y su temporalización existiendo hijos menores de edad. Actuales líneas jurisprudenciales y doctrinales ", en *Actualidad Civil*, núm. 21-22, 2012.

RABADÁN SÁNCHEZ-LAFUENTE, Fuensanta: "Fundamento de la no discriminación entre hijos matrimoniales y no matrimoniales en la recepción de la pensión alimenticia", en *Actualidad civil*, Nº 15, 2011.

ROMERO COLOMA, Aurelia María: "La audiencia y exploración de los hijos menores de edad en los procesos matrimoniales", en *Diario La Ley*, Nº 7956, 2012.

SANTOS MARTÍNEZ, Albert M.: "Efectos de la atribución de la vivienda familiar arrendada en las crisis matrimoniales", en *Actualidad Civil*, núm. 15-16, 2012.

SANZ ACOSTA, Luis: "División material y adjudicación de la vivienda familiar en proceso matrimonial, al amparo del art. 96 del Código Civil. Análisis de la STS de 30 de abril de 2012", en *Actualidad civil*, núm. 15-16, 2012.

STS de 30 de abril de 2012 (Pte. Sra. Roca Trías), SAP Málaga, Sección 6.ª, de 28 de septiembre de 2010 (Pte. Sra. Jurado Rodríguez)

TENA PIAZUELO, Isaac: "Crisis de pareja, mediación familiar y reconciliación. Reseña de una oportunidad perdida", en *Actualidad civil*, núm. 13-14, 2012.

UREÑA MARTÍNEZ, Magdalena: "SENTENCIA TS de 15 de octubre de 2010: Custodia compartida sin acuerdo de los progenitores. Falta de valoración de los dictámenes periciales. Interés superior del menor que aconseja la continuación de la medida de guarda y custodia compartida", en *Cuadernos Civitas de jurisprudencia civil*, Nº 86, 2011, págs. 1207-1224.

6.5. Relaciones tutelares y parentales. Adopción, guarda, acogimiento. Protección de menores

Benavente Moreda, Pilar: "Riesgo, desamparo y acogimiento de menores: Actuación de la Administración e intereses en juego", en *Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid*, Nº. 15, 2011, págs. 15-62

Iglesia Monje, María Isabel de la: "Tutela automática de los menores e incapaces desamparados por entidad pública y doctrina jurisprudencial", en *Revista crítica de derecho inmobiliario*, Año nº 87, Nº 727, 2011 , págs. 2773-2790.

6.6. Régimen económico conyugal

6.6.2. Régimen matrimonial paccionado

Anderson, Miriam: "SENTENCIA TS de 31 de marzo de 2011. Acuerdo en previsión de ruptura matrimonial, que no se hace valer en el pleito matrimonial. Promesa de renta gratuita y donación obligatoria. Validez de la primera y nulidad de la segunda", en *Cuadernos Civitas de jurisprudencia civil*, Nº 88, 2012 , págs. 379-406.

Ginés Castellet, Nuria: "Autonomía de la voluntad y fracaso matrimonial: los pactos prerruptura en el libro II del Código Civil de Cataluña", en *Revista crítica de derecho inmobiliario*, Año nº 87, Nº 727, 2011, págs. 2577-2620.

6.6.3. Consorcio conyugal

Callejo Carrión, Soraya: "Crisis del modelo de sociedad de gananciales: amenaza o afirmación de la igualdad de la mujer", en *Actualidad civil*, Nº 13, 2011.

Ragel Sánchez, Luis Felipe: "SENTENCIA TS de 23 de septiembre de 2010: Anulabilidad de los actos de disposición sobre bienes gananciales efectuados por el marido, que era tutor de su esposa incapacitada, sin contar con la autorización judicial. Caducidad de la acción por transcurso de más de cuatro años desde que se disolvió la sociedad de gananciales por muerte del marido", en *Cuadernos Civitas de jurisprudencia civil*, Nº 86, 2011 , págs. 1139-1158.

REYES GALLUR, Juan José: "Algunas consideraciones prácticas sobre los procesos de división judicial de patrimonios: herencias y gananciales", en *Revista de derecho de familia: Doctrina, Jurisprudencia, Legislación*, Nº. 55, 2012 , págs. 43-62.

RUBIO GIMENO, Gemma: SENTENCIA TS de 28 de marzo de 2011. Efectos del divorcio. Cargas familiares. Pago del préstamo garantizado con hipoteca. Deuda de la sociedad de gananciales", en *Cuadernos Civitas de jurisprudencia civil*, Nº 88, 2012 , págs. 363-378.

6.8. VIUDEDAD

ROMERO COLOMA, Aurelia María: "Usufructo universal del cónyuge viudo: su problemática jurídica", en *Diario La Ley*, Nº 7840, 2012.

7. SUCESIONES POR CAUSA DE MUERTE

7.1. DE LAS SUCESIONES EN GENERAL Y NORMAS COMUNES A LAS SUCESIONES VOLUNTARIAS

DELGADO ECHEVERRÍA, Jesús: "El fundamento constitucional de la facultad de disponer para después de la muerte", en *Diario La Ley* núm. 7675, de 18 de julio de 2011, pp. 7-10.

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ-REGUERAL, María Ángeles: "Objeto y alcance de la sustitución ejemplar en el Código Civil", en *Actualidad Civil*, núm. 11, 2012.

KARRERA EGIALDE, Mikel Mari: "Sentencia TS de 19 de julio de 2011. Legado de parte alícuota con asignación de bien inmueble", en *Cuadernos Civitas de jurisprudencia civil*, Nº 89, 2012, págs. 333-350.

NÚÑEZ MUÑIZ, Carmen: "Revisión crítica y propuesta "lege ferenda" del concepto de legado de parte alícuota: cuestiones controvertidas sobre su posición en el reparto hereditario. La jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina de la Dirección General de los Registros y del Notariado", en *Revista crítica de derecho inmobiliario*, Año nº 88, Nº 731, 2012 , págs. 1660-1686.

7.2.1. DISPOSICIONES GENERALES

ESPEJO LERDO DE TEJADA, Manuel: "Interpretación del testamento y principio constitucional de igualdad. Consideraciones acerca de la STC 9/2010, de 27 de abril", en *Derecho privado y Constitución*, Nº 25, 2011, págs. 229-260.

7.2.2. TESTAMENTO MANCOMUNADO

LÓPEZ SUÁREZ, Marcos A.: "Consideraciones sobre el testamento mancomunado en el derecho alemán y su reflejo en los derechos civiles autonómicos: a propósito de la STS de 8 de octubre de 2010", en *Revista de derecho privado*, Año nº 95, Mes 5-6, 2011 , págs. 41-62.

TORRALBA MENDIOLA, Elisa Carolina: "SENTENCIA TS de 8 de octubre de 2010: Testamento mancomunado. Orden público", en *Cuadernos Civitas de jurisprudencia civil*, Nº 86, 2011 , págs. 1225-1236.

7.2.3. INVALIDEZ E INEFICACIA DE LOS TESTAMENTOS

IMAZ ZUBIAUR, Leire: "Algunas reflexiones en torno a la eficacia de las disposiciones testamentarias ante un cambio sobrevenido de las circunstancias. Incidencia de la crisis de pareja en la atribución sucesoria otorgada con anterioridad", en *Revista de derecho privado*, Año nº 96, Mes 4, 2012, págs. 47-79.

7.3. SUCESIÓN PACCIONADA

ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Santiago y RODRÍGUEZ-URÍA SUÁREZ, Isabel: "La ley aplicable a los pactos sucesorios en la Propuesta de Reglamento sobre sucesiones", en *Diario La Ley*, Nº 7726, 2011.

7.4. FIDUCIA SUCESORIA

SUSÍN JIMÉNEZ, Ignacio: "El tratamiento fiscal de la fiducia aragonesa, a propósito de la Sentencia de 30 de enero de 2012 del Tribunal Supremo", en *Actualidad del Derecho en Aragón*, núm. 14, abril 2012, p.11.

8. DERECHO DE BIENES

8.1. DERECHO DE BIENES EN GENERAL

LACRUZ MANTECÓN, Miguel: *Los bienes mostrencos en Aragón (Estudio histórico y actual)*. El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2012, 319 pp.

8.2. RELACIONES DE VECINDAD

PARRÓN CAMBERO, María Jesús: "Relaciones de vecindad: inmisiones acústicas por el sonido de un piano: comentarios a la STS de 5 de marzo de 2012", en *Revista del poder judicial*, Nº 93, 2012, pp. 68 y ss.

8.3. LUCES Y VISTAS

ARBUÉS AÍSA, David: "Luces y vistas en Aragón: Relaciones de vecindad", en *Actas de los XXI Encuentros del Foro de Derecho Aragonés* (Zaragoza-Teruel, 2011), El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2012, pp. 191-218.

ARGUDO PÉRIZ, José Luis: "Servidumbres de luces y vistas", en *Actas de los XXI Encuentros del Foro de Derecho Aragonés* (Zaragoza-Teruel, 2011), El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2012, pp. 219-244.

MEDRANO SÁNCHEZ, Juan Ignacio: "Panorama general y principios de la institución de luces y vistas en Aragón", en *Actas de los XXI Encuentros del Foro de Derecho Aragonés* (Zaragoza-Teruel, 2011), El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2012, pp. 143-190.

0. DERECHO TRANSITORIO

CALATAYUD SIERRA, Adolfo: "Disposiciones transitorias del Código del Derecho Foral de Aragón", en *Actas de los XXI Encuentros del Foro de Derecho Aragonés* (Zaragoza-Teruel, 2011), El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2012, pp. 119-140.

3. OBRAS AUXILIARES

A. METODOLOGÍA DOCENTE E INVESTIGADORA

SERRANO GARCÍA, José Antonio y BAYOD LÓPEZ, María del Carmen: *Cuadernillo de prácticas de Derecho de Familia y Sucesiones en Aragón*. Ed. Kronos, Zaragoza, 2012, 46 págs.

APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DEL DERECHO PÚBLICO ARAGONÉS

El examen del estado de aplicación e interpretación del ordenamiento jurídico-público aragonés se realiza en este Informe especial a través del examen de la situación de los problemas de constitucionalidad que afectan a normas aragonesas o a normas estatales por relación con las competencias asumidas en el Estatuto de Autonomía (punto 1 del Informe) y del análisis de las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en las que se aborda la adecuación al ordenamiento jurídico de normas de derecho público aragonés, objeto propio de estudio en este apartado.

Finalmente, en un epígrafe específico se da noticia de los libros y artículos sobre Derecho Público aragonés de que hemos tenido conocimiento durante 2012.

1. SENTENCIAS DICTADAS DURANTE 2012 EN LAS QUE SE DECLARA LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE NORMAS DE DERECHO PÚBLICO ARAGONÉS

Se realiza una reseña de resoluciones judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en las que se ha suscitado por vía directa o indirecta el estudio de adecuación a derecho de normas aragonesas y en las que se ha concluido con su anulación.

1.- TSJ Aragón (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª), sentencia núm. 343/2012, de 14 de junio.

Educación-enseñanza. Se anula el Decreto 190/2009, por el que se regulan los Centros Integrados de Formación Profesional.

La anulación de dicho Decreto autonómico se fundamenta por el Tribunal en que, con carácter previo a su aprobación, no fue sometido al dictamen preceptivo de la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón, lo que era inexcusable en su condición de reglamento ejecutivo de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de julio, de las cualificaciones y de la formación profesional.

Así, el Tribunal indica cómo el artículo 56 -del texto entonces vigente- Decreto Legislativo 1/2001, de 3 de julio, texto refundido de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, dispone, en su apartado 1 .b) que en el ámbito de actuación de la Comunidad Autónoma de Aragón y dentro de lo preceptuado en cada caso por el ordenamiento jurídico aplicable, la Comisión Jurídica Asesora emitirá dictamen preceptivo sobre: ... b) Los proyectos de disposiciones de carácter general que se dicten en ejecución de una ley, sea ésta estatal o autonómica, o de una norma comunitaria, así como sus modificaciones.

Dicho precepto sería aplicable al Decreto 190/2009 que se impugna en la medida en que este se configura como un reglamento ejecutivo de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y de la Formación Profesional. Así, el art. 11.6 LO 5/2002 que dice: "*Reglamentariamente el Gobierno y los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias, adaptarán la composición y funciones*

de los Centros Integrados de Formación Profesional a sus características específicas", apareciendo el Decreto 190/2009 en Aragón como desarrollo de dicho precepto.

El previo dictamen de la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón era preceptivo en este caso, por lo que su falta constituye un motivo de nulidad del Decreto 190/2009 ex art. 62 Ley 30/1992.

2.- TSJ Aragón (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª), sentencia núm. 262/2012, de 18 de mayo.

Administración Local. Se declara la nulidad parcial del Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Teruel de fecha 7 de mayo de 2010, por el que se aprobó definitivamente la modificación de la Ordenanza Reguladora de la Ocupación de la Vía Pública con la instalación de barras de bar, con motivo de las Fiestas de la Vaquilla del Ángel de la ciudad de Teruel. En concreto, la nulidad se remite al párrafo sexto del artículo 1 de la indicada Ordenanza que disponía que:

"No se permite el funcionamiento de equipos de imagen y/o sonido cuyo índice de ruido máximo (LAmax) supere los 90 Dba. Para dar cumplimiento a esto se deberá colocar un limitador que permita asegurar de forma fehaciente y permanente que bajo ninguna circunstancia las emisiones del equipo superan el límite antes definido".

Esta modificación de la Ordenanza es consecuencia de una previa sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que anuló la anterior regulación existente.

Entiende el Tribunal, sin embargo, que esta nueva regulación *"lejos de dar cumplimiento a la sentencia, viene a agravar la situación de los vecinos cuyos intereses defiende la Federación recurrente, y a los que vino a darse la razón en aquella anterior sentencia, al posibilitar la nueva regulación el funcionamiento de equipos de imagen y/o sonido con una emisión de niveles sonoros muy superiores a los permitidos en la referida Ordenanza municipal contra ruidos y vibraciones, y ello, aun cuando se admitiera el incremento que en 5 dBA posibilita el artículo 16 para determinadas zonas urbanas y situaciones específicas.*

Y añade: *"Sin que quepa acoger lo que ahora se argumenta por la Administración, para introducir el nuevo precepto, en el sentido de que los valores que resultan de tal aplicación son demasiado bajos para una situación excepcional como la Vaquilla del Ángel y que es posible la determinación de unos límites distintos en la propia Ordenanza aquí impugnada, al regular una*

situación específica, cuando, por un lado, el Ayuntamiento demandado consintió la sentencia de esta Sala, al no interponer contra la misma recurso de casación, y, por otro, sin cuestionar la importancia y especiales características de las fiestas de las que aquí se trata, ello no es obstáculo para establecer unos límites a fin de compatibilizarlas, razonablemente, con el derecho al descanso y tranquilidad de los vecinos de las zonas afectadas, y a garantizar su derecho constitucional a la intimidad personal y familiar en el ámbito domiciliario - art. 18- cuya vulneración se invoca por la recurrente y que con la nueva regulación, efectivamente, se ve afectado. No pudiendo desconocerse la cada vez más creciente sensibilización en esta materia de la que se hace eco la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de abril de 2005 al declarar que "recientemente por nuestra jurisprudencia y por la del Tribunal Constitucional, amen del propio Tribunal Superior de Justicia Europeo, se está procurando cuidadosamente la protección contra las contaminaciones acústicas que no son tolerables y no deben ser padecidas por la población en general o por el vecindario próximo en particular".

3.- TSJ Aragón (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª), sentencia núm.75/2012, de 10 de febrero.

Función Pública. Se declara la nulidad del Decreto 83/2011 de 5 de abril del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2011 y del Decreto 133/2011 de 14 de junio del Gobierno de Aragón que modifica la anterior disposición.

Por Decreto 83/2011 de 5 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2011 se establece la incorporación de personal de nuevo ingreso que corresponde al ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma, al personal docente no universitario, así como al personal estatutario dependiente del Servicio Aragonés de la Salud. El número de plazas incluidas es un total de 989 de acceso libre y 81 de promoción in terna.

En este caso, el recurrente consideraba que se había producido una vulneración del derecho fundamental contenido en el art. 23 CE –acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad- en la medida en que en la Oferta de Empleo Público indicada no se habían incluido las plazas ocupadas por funcionarios interinos. El número de estas plazas, según informó el Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón en periodo probatorio, era de 1589 puestos de trabajo, además de los puestos reservados que ascendían a 679.

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón estimó el recurso y, para fundar su decisión, se remitió a los argumentos contenidos en la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de octubre de 2007, que resolvió sobre un caso semejante. Y lo hizo en los siguientes términos:

"El caso aquí analizado ha sido analizado y resuelto respecto al ejercicio presupuestario correspondientes al año 2007, por el Tribunal Supremo que en sentencia de 29/10/2010 tiene declarado: "Entrando en el análisis del recurso planteado por la Asociación para la Defensa de la Función Pública de Aragón se alega por esta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 88.1 d) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , la vulneración de lo dispuesto en el artículo 23.2 *de la Constitución Española de 1978 .*

Ha de acogerse este motivo de casación por las razones siguientes: En primer lugar, como sostiene la recurrente, el derecho de acceso al empleo público es un derecho fundamental de configuración legal, tal como expresamente dispone el artículo 23.2 de nuestra norma constitucional. Pues bien, ha sido en desarrollo de ese derecho constitucional de acceso a la función pública en condiciones de igualdad, mérito y capacidad, que el Estatuto Básico del Empleado Público dispone en su artículo 10.4 que: "En el supuesto previsto en la Letra a) del apartado 1 de este artículo, las plazas vacantes desempeñadas por funcionarios interinos deberán incluirse en la oferta de empleo correspondiente al ejercicio en que se produce su nombramiento, y si no fuera posible, en la siguiente, salvo que se decida su amortización" y en el apartado 1 de este precepto se dispone que: "Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias: a) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera".

Por su parte, el artículo 7.4 de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón sostiene que "las plazas ocupadas por interinos serán incluidas en la primera oferta de empleo público que se apruebe, salvo los casos de sustitución de funcionarios".

La claridad de estos preceptos no dejan duda de la ilegalidad de acuerdo impugnado, en este punto, al que restringe la recurrente el recurso de casación, y único en el que podemos entrar en consecuencia. Ahora bien, la cuestión es si nos encontramos ante una simple ilegalidad, o por el contrario la misma afecta al derecho fundamental. Y hemos de admitir que así es, pues no hay mayor negación del derecho consagrado en el artículo 23.2 de la

Constitución que la negación de los procesos públicos de selección legalmente establecidos. Frente a dichos preceptos no cabe admitir los argumentos de la Administración recogidos en la sentencia de que el hecho de no sacar todas las plazas de interinos se debía a la razón de mejorar los procesos selectivos futuros, impidiendo que bajara la calidad de los seleccionados y que en el futuro no pudieran haberse ofertas públicas, al no existir vacantes. Pero ello ocurrirá si los Tribunales calificadores no cumplen con el rigor de la exigencia de la capacidad y mérito necesario a la hora de seleccionar, no teniendo porque cubrirse todas las vacantes en el mismo proceso de selección.

Tampoco cabe alegar motivos económicos y de autoorganización, pues, las plazas están presupuestadas y ocupadas por funcionarios interinos. En consecuencia, lo que no puede alegarse es el incumplimiento de la ley, cuando es clara y preciso, en desarrollo precisamente del derecho fundamental alegado por los recurrentes"

4.- TSJ Aragón (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª), sentencia núm. 276/2012, de 25 de mayo.

Administración Local. Se declara la nulidad del Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Farlete de fecha 30 de junio de 2010 por el que se aprobó, con carácter definitivo, el Reglamento para el aprovechamiento y disfrute de las tierras del patrimonio comunal de Farlete.
El Tribunal funda su decisión en la inexistencia, con carácter previo a la aprobación del Reglamento indicado, de dictamen del Consejo Consultivo de Aragón.
En este caso, el Tribunal estima que son de aplicación las siguientes normas:
- Artículo 75.4 Real Decreto-legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, que establece que *"Los Ayuntamientos y Juntas vecinales que, de acuerdo con normas consuetudinarias u ordenanzas locales tradicionalmente observadas, viniesen ordenando el disfrute y aprovechamiento de bienes comunales, mediante concesiones periódicas de suertes o cortas de madera a los vecinos, podrán exigir a éstos, como condición previa para participar en los aprovechamientos forestales indicados, determinadas condiciones de vinculación y arraigo o de permanencia, según costumbre local, siempre que tales condiciones y la cuantía máxima de las suertes o lotes sean fijadas en ordenanzas especiales, aprobadas por el órgano competente de la Comunidad Autónoma, previo dictamen del órgano consultivo superior del Consejo de Gobierno de aquélla, si existiere, o, en otro caso, del Consejo de Estado".*
- Artículo 183 Ley 7/1999, de Administración Local de Aragón, relativo al aprovechamiento de los bienes comunales, que establece en el párrafo segundo

de su apartado tercero que: *"las ordenanzas locales podrán establecer condiciones de residencia habitual y efectiva y de permanencia en el municipio para acceder a su disfrute, así como los requisitos que consideren necesarios para acreditar el hecho del cultivo en forma directa y personal y las modalidades del mismo".* Añadiendo que *"si estas condiciones supusieran la exclusión de determinados vecinos del aprovechamiento, las ordenanzas serán aprobadas por el Gobierno de Aragón, previo dictamen de la Comisión Jurídica Asesora.*

- *Artículo 15 Ley 1/2009, de 30 de marzo, del Consejo Consultivo de Aragón, que dispone que "El Consejo Consultivo será consultado preceptivamente en los asuntos siguientes: ... 15. Cualquier otra materia en la que la ley establezca la obligación de solicitar dictamen del Consejo Consultivo de Aragón".*

A la vista de estos preceptos y en la medida en que, a juicio del Tribunal, en el Reglamento impugnado se establecían determinadas condiciones para el acceso al disfrute de los bienes comunales que excluían a determinados vecinos del aprovechamiento, el informe del Consejo Consultivo de Aragón era preceptivo con carácter previo a la aprobación del Reglamento, motivando su carencia la nulidad de la disposición local impugnada.

5.- TSJ Aragón (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª), sentencia núm.78/2012, de 22 de febrero.

Suelo y Ordenación Urbana. Se declara la nulidad del Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, de fecha 28 de abril de 2006, por el que se aprobó con carácter definitivo el Estudio de Detalle relativo a la parcela lucrativa del área de intervención G-44-1, situada en la Avenida de Navarra junto al complejo Augusta, a instancia de la Junta de Compensación constituida en este ámbito y según proyecto visado el 5 de abril de 2006.

En este caso, la nulidad del Estudio de Detalle impugnado deriva de la existencia de una previa sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que anuló la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza, *"en cuanto al aprovechamiento de la Parcela de la recurrente objeto de estas actuaciones, que debe ser de 2.395,17 metros cuadrados residenciales (viviendas) y 1.935,26 metros cuadrados en otros usos (locales)".* Indica al respecto el Tribunal que: "*Tal anulación en el referido particular determina, así mismo, la anulación del Estudio de Detalle impugnado que en desarrollo de dicho Plan General recoge, como no podía ser de otra manera, una edificabilidad correspondiente a la finca de la recurrente únicamente de 2.395,17 metros de uso residencial. Y es que la nulidad de un instrumento de planeamiento determina la nulidad de los que de él traen causa, desarrollándolo o ejecutándolo y dándole cobertura jurídica.*"

6.- TSJ Aragón (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª), sentencia núm. 85/2012, de 17 de febrero.

Administración Local. Se declara la nulidad parcial del Acuerdo de fecha 29 de junio de 2009 adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se aprobó definitivamente la Ordenanza Municipal de Circulación de Peatones y Ciclistas.
Los preceptos afectados fueron los siguientes:
- Del artículo 17, los apartados encabezados con los epígrafes "Zonas o calles residenciales" y "Zonas peatonales".
- Los artículos 19 y 21, en su totalidad.
- Los párrafos 2º, 3º, 4º y 5º del artículo 24.
- El párrafo 4º del artículo 26.
- El artículo 28, en su totalidad.
- Los párrafos 1º, 3º y 4º del artículo 29.
- El artículo 35, en su totalidad.
- El párrafo 2º del artículo 36.
- El párrafo 3º del artículo 37.
- Del Anexo II, los apartados encabezados como "Acera compartida" y "Acera bici sugerida".

Los argumentos jurídicos en los que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón basó su decisión fueron los siguientes:

"TERCERO
Respecto de la posibilidad de circulación de bicicletas por aceras, y por zonas peatonales en general, debe, en primer lugar, considerarse que por disposición de las normas contenidas en los apartados 4, 5 y 6 del Anexo I de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobada por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, (LSV en adelante) dentro de la categoría de "vehículo" se encuentra la del "ciclo", y dentro de esta última la de "bicicleta", definida legalmente como "Ciclo de dos ruedas". Y también a los efectos legales, conforme al apartado 1 del mismo Anexo, el ciclista tiene la condición de conductor de vehículo. En consecuencia, y dentro de las previsiones de la misma Ley, el artículo 19, regulador de los límites de velocidad, resulta plenamente aplicable a las bicicletas, en cuanto vehículos, y a los ciclistas, como conductores.

Este artículo 19 deriva a la norma reglamentaria la posibilidad de fijar las velocidades máximas y mínimas para los conductores, los vehículos y las vías, así como la fijación del límite máximo con carácter general, para la velocidad autorizada en vía urbana y en poblado. Y sólo en este caso autoriza que

puedan las corporaciones municipales, en caso de vías urbanas, rebajar el límite de velocidad.

Igualmente, el Anexo I, apartado 55, define la acera como la zona destinada al tránsito de peatones, y en su apartado 56 conceptúa la zona peatonal como la reservada a circulación de peatones, en ambos casos sin excepción alguna. De modo que la previsión legal de posibilidad de ocupación de las aceras o zonas peatonales por parte de vehículos particulares la limita en su artículo 23 a los casos en que deban cruzarlas, por los pasos habilitados al efecto, y con obligación, en este caso excepcional, de dejar pasar a los peatones que circulen por ellas.

Por tanto, en resumen de lo expuesto, y conforme a lo ordenado en norma con rango formal de Ley, las limitaciones de velocidad y circulación en vías urbanas que afectan a bicicletas y ciclistas, son fijadas por Reglamento, y las Corporaciones Locales sólo tienen posibilidad de rebajarlas. Junto a ello, las aceras y zonas peatonales son de uso exclusivo de peatones, autorizándose su ocupación con carácter general por vehículos particulares sólo en caso de cruzarlas, por pasos habilitados, y con obligación de dejar pasar a los peatones.

CUARTO
En desarrollo y cumplimiento de las previsiones de la LSV citada, el RGC ordena en el artículo 121.5 que "La circulación de toda clase de vehículos en ningún caso deberá efectuarse por las aceras y demás zonas peatonales". De modo que, en congruencia, sólo permite el empleo de aceras y zonas residenciales a lo que no son vehículos en concepto legal, esto es "monopatines, patines o aparatos similares", y lo hace para ordenar que circulen, siempre, a velocidad de paso de persona.
Tales normas legales y reglamentarias son de obligado cumplimiento, tanto para particulares, como para las administraciones públicas que tengan competencia sobre alguno de los aspectos que afectan al tráfico rodado. Así, y en concreto, en el caso de Corporaciones Locales, como ya se ha dicho antes, y en lo que ahora interesa, pueden rebajar las velocidades en algunos casos en vías urbanas. Y tienen competencia también, en lo que ahora es discutido, y conforme al artículo 7 de la LSV para la ordenación y el control de tráfico, su vigilancia y sanciones que corresponda. Sin posibilidad, por tanto, de ejercer funciones de cambio de la conceptuación legal de qué se entienda por vehículo, de modificar al alza en vía urbana velocidades de los vehículos, o de modificar la definición legal de qué sean aceras o zonas peatonales o las reservas de uso legal y reglamentariamente ordenadas, pues tales cuestiones tienen una regulación general, sin posibilidad de que cada Ayuntamiento pueda modificarla.

QUINTO

Los artículos impugnados números 17, 19, 21, 28, 37 y Anexo II de la OIPC infringen, como indica el recurrente, las normas antes citadas y sus concordantes, puesto que contradicen lo dispuesto en ellas sin que el Ayuntamiento tenga competencia para hacerlo. En concreto:

- El artículo 17, apartados encabezados como "Zonas o calles residenciales" y "Zonas peatonales", al establecer que las zonas y calles residenciales o peatonales son de mera preferencia peatonal, y no, como ordena la LSV y el RGC, de exclusión de vehículos particulares, con la posibilidad general sólo de poder cruzarlas.

- El artículo 19 en su integridad, al autorizar la circulación de vehículos en zona peatonales con carácter general fuera de los casos legal y reglamentariamente previstos.

- El artículo 21 en su integridad, por ser consecuencia de la regulación de los artículos 17 y 19 que antes se han definido como infractores de las normas superiores.

- El artículo 28, porque autoriza con carácter general la circulación de bicicletas por la acera y zonas peatonales, fuera de los casos reglamentariamente previstos.

- El artículo 37 párrafo tercero, al prohibir la circulación por la calzada de bicicletas y obligarlas a ir por zonas peatonales, con contradicción de la norma legal y reglamentaria, que establece lo contrario.

- El Anexo, al definir "Acera compartida" y "Acera-bici sugerida", puesto que ambos casos parten de la ocupación no permitida para las bicicletas de espacios destinados a uso peatonal, y apartándose del concepto de senda ciclable recogido en el apartado 74 del Anexo I de la LSV."

2. INTERPRETACIÓN DOCTRINAL DEL DERECHO PÚBLICO ARAGONÉS

Damos noticia de los libros y artículos de los que hemos tenido conocimiento durante 2012:

- "*Bienes sin dueño: mostrencos y abintestatos en la nueva Ley de Patrimonio de Aragón*". Lacruz, M. Revista Aragonesa de Administración Pública, nº 39-40, Diputación General de Aragón, Zaragoza, 2012.

- "*Algunas cuestiones sobre el régimen jurídico de las sociedades mercantiles autonómicas*". Palá, R. Revista Aragonesa de Administración Pública, nº 39-40, Diputación General de Aragón, Zaragoza, 2012.

-"*Las actuaciones de dotación en la Ley 3/2009, de Urbanismo de Aragón*". Calvo, J.L. Revista Aragonesa de Administración Pública nº 39-40, Diputación General de Aragón, 2012.

-"*La Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado*". Latorre, L. Revista Aragonesa de Administración Pública nº 39-40, Diputación General de Aragón, 2012.

-"*Potestades públicas y prevalencia entre competencias autonómicas en el conflicto de Sijena (Comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional 6/2012, de 18 de enero)*". López Ramón, F. Revista Aragonesa de Administración Pública nº 39-40, Diputación General de Aragón, 2012.

- "*Las competencias de las comarcas en materia de consumo a la luz de la Ley 16/2006, de 28 de diciembre, de Protección y Defensa de los Consumidores de Aragón*". Monge Gil, Ángel Luis. Anuario Aragonés del Gobierno Local 2010, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 2011.

- "*Las elecciones locales de 2011 en Aragón*". Chueca Rodríguez, R. Anuario Aragonés del Gobierno Local 2011, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 2012.

- "*El reto de la gestión urbanística en la Ley 3/2009 Urbanística de Aragón*". Rubio Pérez, F. Anuario Aragonés del Gobierno Local 2011, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 2012.

ACTUACIONES CONDUCENTES A LA DIFUSIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ARAGONÉS

Las actividades realizadas por la Institución a lo largo de 2012 en este apartado han sido las siguientes:

1º.- Programa de ayudas

Continuación del programa de ayudas a la matriculación en el Curso monográfico de Derecho Aragonés, impartido por la Universidad de Zaragoza, Cátedra de Derecho Aragonés José Luis Lacruz Berdejo, a través de la Escuela de Práctica Jurídica.

2º.- Becas para el estudio del ordenamiento jurídico aragonés.

En 2012, se ha dotado una nueva beca para la realización de estudios de Derecho aragonés, de un año de duración. Concluido el proceso de selección (previa convocatoria pública anunciada en el Boletín Oficial de Aragón), se ha adjudicado la misma a:

- D. Isaac Claver Ortigosa

El becario ha comenzado su actividad centrando su estudio en el ámbito de la transparencia y buen gobierno en la Administración aragonesa.

3º.- Publicaciones sobre Derecho Aragonés:

- Actas de los Vigesimoprimeros Encuentros del Foro de Derecho Aragonés, en el que se recoge las ponencias de las sesiones celebradas durante los martes del mes de noviembre del año 2011, sobre los temas siguientes:

- *"La mediación familiar en Aragón"*, siendo ponente, Dª. Mª Rosa Gutiérrez Sanz, y coponentes, Dª. Begoña Castilla Cartiel y Dª. Carmen Lahoz Pomar.

- *"El Código del Derecho Foral de Aragón y sus disposiciones transitorias"*, siendo ponentes D. José Antonio Serrano García y D. Adolfo Calatayud Sierra.

- *"Régimen de luces y vistas en Aragón"*, siendo ponente, D. Juan Ignacio Medrano Sánchez, y coponentes, D. David Arbués Aísa y D. José Luis Argudo Périz.

- *"Régimen jurídico de las sociedades públicas autonómicas"*, siendo ponente Dª. Reyes Palá Laguna, y coponentes, Dª. Elena Marcén Maza y D. Alfonso Peña Ochoa.

- *"Fueros y libertades: el mito de la constitución aragonesa en la Europa moderna"*, de Clizia Magoni, editado por El Justicia de Aragón.

- Informe especial: *"El empleo público en la administración autonómica aragonesa"*.

- Nº 49 de la colección del Justicia, *"16 ensayos sobre democracia, justicia y derechos humanos"*, cuyo autor es José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat.

- Nº 50 de la colección del Justicia, *"Régimen legal y práctica judicial de las inmisiones medioambientales en Aragón"*, cuyo autor es Carlos Bosque Argachal.

- Nº 51 de la Colección del Justicia, *"Los bienes mostrencos en Aragón (Estudio histórico y actual)"*, cuyo autor es Miguel L. Lacruz Mantecón.

- Nº 52 de la Colección del Justicia, *"La mediación familiar y su reflejo en la Ley 9/2011, de 24 de marzo, de mediación familiar de Aragón"*.

4º.- Foro de Derecho Aragonés.

El día 26 de septiembre de 2012 se firmó por la Institución El Justicia de Aragón, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, la Academia Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación, la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, el Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, el Ilustre Colegio de Abogados de Huesca, el Ilustre Colegio de Abogados de Teruel, el Ilustre Colegio Notarial de Zaragoza, los Registradores de la Propiedad y Mercantiles de Aragón y el Ilustre Colegio de Procuradores de Zaragoza, el convenio de colaboración para la celebración de los «Vigesimosegundos Encuentros del Foro de Derecho Aragonés», que tuvo lugar durante el mes de noviembre, con el siguiente programa de ponencias:

- Día 6 de noviembre de 2012 en Zaragoza: *Valoración de bienes inmuebles por y ante la Administración aragonesa*, por D. Rafael Santacruz Blanco, D.

Fernando Villaró Gumpert y Dª. Mª. Ángeles Ruiz Escrivá de Romaní.

- Día 13 de noviembre de 2012 en Zaragoza: *La reforma de la función pública en Aragón,* por D. Juan Carlos Zapata Híjar, D. José Manuel Aspas Aspas y D. Ignacio Murillo García-Atance.

- Día 20 de noviembre de 2012 en Zaragoza: *Custodia compartida en Aragón,* por D. José Antonio Serrano García, D. Emilio Molins García-Atance y D. Manuel Ferrer Andrés.

- Día 27 de noviembre de 2012 en Huesca: *Efectos jurídicos de las parejas estables no casadas en Aragón,* por D. Javier Seoane Prado, D. Pedro Martínez Viamonte y Dª Sol Otto Oliván.

Actualmente se está preparando la edición de las Actas con el contenido de las Ponencias.

5º.- Revista Aragonesa de Derecho Civil

Esta revista, de periodicidad semestral, está editada por la Institución Fernando el Católico dentro de la Cátedra "Miguel del Molino", y comenzó su andadura en 1995. La revista está dirigida por D. Jesús Delgado Echeverría, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Zaragoza y Director de la cátedra "Miguel del Molino". Su Consejo Asesor está integrado por una nutrida representación de todas las profesiones jurídicas aragonesas. La Institución del Justicia de Aragón está también presente en el citado Consejo.

6º.- Revista Aragonesa de Administración Pública.

Esta revista, de periodicidad semestral, está editada por el Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales y dirigida por el Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, D. Fernando López Ramón. El Justicia de Aragón colabora con la misma formando parte de su Consejo de Redacción. Este año se ha publicado el número 39-40.

7º.- Otras actuaciones.

Dentro de este apartado incluimos noticias de otras actuaciones relevantes para la promoción y desarrollo del ordenamiento jurídico aragonés, producidas a lo largo de 2012 y en las que esta Institución ha participado:

X Jornadas de la Constitución 2012: Crisis y Derecho. (Organizadas por la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza y el Justicia de Aragón).

Las jornadas tuvieron lugar los días 11 y 12 de diciembre de 2012.

Las Ponencias fueron las siguientes:

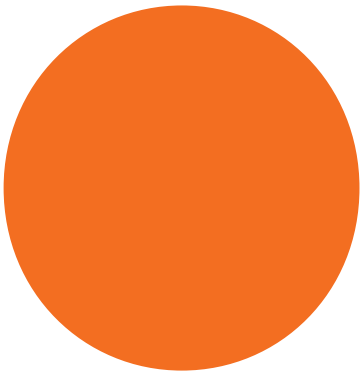
- "Crisis económica y estabilidad presupuestaria". D. Antonio Cayón Galiardo, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid.

- "Crisis económica y Estado de Derecho". D. Manuel Pizarro Moreno, Abogado del Estado.

- "Derecho social y crisis económica", D. Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo Ferrer, Consejero de Estado, ex Presidente del Tribunal Constitucional.

- "Autonomía política versus estrategia económica", D. José Luis Rodríguez García, Catedrático de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza.

- Mesa Redonda: "Crisis socioeconómica y Derecho en Aragón". Intervinientes: D. Vicente Salas Fumas (Catedrático de Organización de Empresas de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza, Consejero del Banco de España), Dª Pilar Palazón Valentín (Decana del Colegio de Registradores), y D. Ángel Dolado Pérez (Magistrado Juez-Decano de Zaragoza). Moderador: D. Juan García Blasco (Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza).



TELÉFONO GRATUITO
DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS:
900 210 210

OFICINAS DE ATENCIÓN:
Zaragoza: c/ Don Juan de Aragón, 7
Huesca: Avda. Santo Grial, 2, 5ª planta (lunes y martes)
Teruel: c/ San Vicente de Paúl, 1 (lunes y martes)

www.eljusticiadearagon.es
informacion@eljusticiadearagon.es